

Belarmino
Elgueta
Becker
EL
SOCIALISMO
EN CHILE
DURANTE EL SIGLO XX
P S

EL SOCIALISMO EN CHILE DURANTE EL SIGLO XX

Experiencias de ayer para la construcción del futuro

EL SOCIALISMO EN CHILE DURANTE EL SIGLO XX

Experiencias de ayer para la construcción del futuro

Belarmino Elgueta B.





Primera edición: 2007

© Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Colección Extensión Universitaria
San Rafael Atlixco núm. 186, C.P. 09340
Col. Vicentina, Iztapalapa 09340, México, D.F.
Tel. 5804-4759, tel. y fax: 5804-4755
Correo electrónico: revi@xanum.uam.mx
© Plaza y Valdés, S.A. de C.V.
Manuel María Contreras, 73. Colonia San Rafael
México, D.F., 06470. Teléfono: 5097 2070
editorial@plazayvaldes.com
Calle de Las Eras, 30, B.
28670, Villaviciosa de Odón,
Madrid, España. Teléfono: 91 665 89 59
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.com

ISBN: 978-970-722-586-2

Impreso en *México/Printed in México*

Dedico este libro a mi hijo Martín,
detenido "desaparecido"por la dictadura dePinochet,
como símbolo de los centenares de miles de chilenos
que fueron víctimas de crímenes contra la humanidad.
A los que perdieron batallas, pero lucharon siempre,
en muchos casos, hasta la muerte.

En memoria también de Raúl Ampuero
y Pedro Vuskovic, dos de mis grandes camaradas
y amigos, que me estimularon
para escribir este libro.

Agradecimientos del autor

El presente libro recoge una reflexión de toda una vida de militancia en el Partido Socialista de Chile: dirigente nacional miembro del Comité Central, que vivió la gloria de los 1 000 días de Salvador Allende durante el gobierno popular; luego la tragedia y la traumática experiencia del PS, en el exilio, la resistencia y lucha ideológica y política denunciando la intervención imperialista, en todos los foros y reuniones de lo que fue la solidaridad del pueblo chileno.

También, reconozco la motivación interna de escribir este libro, al tener un hijo detenido *desaparecido* por la dictadura de Pinochet; es la experiencia amarga y el conocimiento tácito acumulado en el exilio en México y en diferentes reuniones de lo que fue la solidaridad con el pueblo chileno, así como del comportamiento del PS en la resistencia contra la dictadura militar, es decir del partido en el exilio y confrontación ideológica y política con los militares y sectores de derecha fascistas y generales genocidas que masacraron a compañeros y compañeras de la izquierda chilena. Luego el Partido en la Convergencia, una alianza política que permitió ganar el plebiscito y sacar a Pinochet, aunque con un tutelaje militar que aún persiste. En este contexto, me estimularon en este trabajo muchos amigos y camaradas del PS y de otros partidos de izquierda, lamentablemente, unos ausentes y afortunadamente otros presentes.

Por supuesto, este libro habría sido impensable sin el patrocinio de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y su rector Dr. José Lema Labadie, el apoyo de compañeros socialistas, radicados en diferentes países, así como los inolvidables camaradas de México: Adrián Vázquez Cerda, Luis Inostroza Fernández, Jaime Ramírez Faúndez y José Vaccaro, quienes leyeron las versiones preliminares del libro y de ellos recibí valiosas sugerencias y comentarios, los cuales fueron considerados en su versión final. También agradezco la lectura de mi trabajo y la apreciación del politólogo Dr. Roberto Gutierrez López, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Azcapotzalco, así como el invaluable apoyo de la editorial Plaza y Valdés y del Dr. Daniel Toledo Beltrán, historiador y asesor del rector general de la UAM.

Índice

La clase vengadora lleva a término la obra de la liberación en nombre de generaciones de vencidos.

WALTER BENJAMÍN

En 1913, Jean Jaurés expresó en París:

> A medida que una clase social surge y afirma su fuerza, no busca solamente preparar el porvenir, sino que desea comprender el pasado e interpretarlo según las nuevas luces de su conciencia. Ha llegado la hora para el proletariado obrero y campesino de tomar posesión, por su pensamiento, del siglo que ha terminado, así como se apoderará, por la acción de siglo que comienza...

La historia continuó durante el siglo xx, y se proyecta siempre hacia el futuro, porque la historia es la actividad de los seres humanos en persecución de sus propios fines, y para los socialistas, el más grande de éstos es la búsqueda de la igualdad y la libertad, a través de la lucha de clases. No hay otro camino.

Santiago, 2005

Prólogo

El propósito de este libro es contribuir a la configuración de la memoria colectiva sobre la lucha de la clase trabajadora chilena por el socialismo durante el siglo xx, en un escenario histórico conflictivo y polémico, tanto interno como externo. Es un relato y análisis del recuerdo, desde el punto de vista de la vigilia del presente, en busca del conocimiento del pasado en el continuo del tiempo social, que conduce al porvenir. El pasado, como producto de la acción humana, es una base cierta y firme, que contribuye a darle contenido y forma al presente y al futuro. Por eso, los historiadores de los "vencedores" falsifican el pasado, y los políticos oportunistas procuran olvidarlo, recomendando dar vuelta a la hoja para dirigir su mirada y acción sólo al presente, en cuyo escenario son protagonistas. Los revolucionarios, en cambio, rescatan su pasado de "oprimidos", de modo de vincularlo con el futuro, como una esperanza, porque si el pasado no existe ahora, sus efectos sí gravitan en el presente. No se trata de vivir el pasado como nostalgia, sino de recuperarlo para reconstruir el presente y proyectarlo hacia el porvenir. En palabras de Walter Benjamín, "el presente se transforma en futuro por medio del pasado", ya que la fuerza para luchar está dada por los antepasados esclavizados y no por los "nietos liberados". En el caso chileno, es la relación existente entre los aplastados, cuyos huesos no se han encontrado, y los reconciliados que coadministran el sistema de dominación.

Esta no es, en estricto sentido, una historia del siglo xx, en ninguno de sus aspectos, porque la obra de los historiadores se demorará todavía los años necesarios para adquirir la perspectiva del tiempo, que permita comprender e interpretar ese pasado correctamente. Es sólo la visión de quien vivió hechos importantes y desea recordarlos, reflexionando sobre ellos, como parte de la memoria colectiva. Viví las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, las luchas del movimiento obrero y sus avances políticos y sindicales. Poco después, asumí también las repercusiones

de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial, que marcaron profundamente el espíritu de mi generación. Luego de la segunda g-an posguerra Chile experimentó avances y retrocesos: el auge popular de 1970 y la caída de 1973, el gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet, asumiendo el derrumbe del comunismo y el retroceso del socialismo en el mundo; acontecimiertos que golpearon nuestra vida personal y el destino de varias generaciones, vencidas, pero no convencidas.

Las luchas de los trabajadores de Chile por el socialismo se enmarcan en el desarrollo nacional, tanto económico y social como político e ideológico, en cuyas olas a veces se elevan sus crestas y en otras se sumergen en el abismo. Estas mismas luchas no se presentaron en forma aislada, sino que se realizaron en el marco del desarrollo mundial, por lo que recibieron la influencia de los grande» procesos de otros continentes y países, particularmente de Europa, el mundo del que proviene parte de nuestra cultura. El socialismo y el comunismo vinieron de Europa, lo trajeron los inmigrantes y también la literatura y los medios de comunicación de masas. En un campo más amplio, la Revolución rusa, a fines de la Primera Guerra Mundial y la Revolución china, al término de la Segunda Guerra Mundial, condicionaron las luchas revolucionarias en Chile, así como la Revolución mexicana y la Revolución cubana incidieron en estas mismas luchas.

El desarrollo del socialismo en Chile puede dividirse en tres grandes ciclos. El primero comprende los treinta y tres primeros años, durante los cuales surgieron los primeros partidos obreros y sindicatos, se realizaron las grandes luchas sociales, con huelgas y masacres, apareció el imperialismo (principalmente, inglés y norteamericano) y el antiimperialismo. El segundo comprende los treinta y siete años siguientes; se inició con la fundación del Partido Socialista y culminó con los mil días de gobierno de Salvador Allende, en los que el movimiento popular tocó con sus manos los resortes del poder. El tercero comprende los últimos 27 años, en los que, mediante un golpe militar, gobernó una dictadura de derecha, imponiendo el modelo económico neoliberal, acentuando la sobreexplotación y la pobreza, al término de la cual se proyectó una transición a la democracia que todavía no termina. Estos tres ciclos condicionan el contenido de esta obra.

Este libro comprende, de acuerdo al marco señalado, los siguientes aspectos:

a) La cuenta regresiva, a manera de introducción, que muestra en un breve balance las condiciones sociales y políticas centrales que rigen la vida de los trabajadores, al finalizar el siglo xx, como punto de culminación de una larga marcha hacia la tierra prometida. Esta cuenta regresiva constituye, por lo

mismo, el desafío que tienen hacia el futuro los socialistas del presente. Es la cara oscura del desarrollo nacional, por lo general, ocultada por la historia "oficial"; son los contrastes extremos del mundo de los ricos y del mundo de los pobres, con sus múltiples problemas. Entre ellos, la desigualdad y la pobreza, la injusta distribución del ingreso, el desempleo y el subempleo, la urbanización con su cortejo de fenómenos anexos, el deterioro del medio ambiente y la contaminación, la marginación de los pueblos originarios. Por encima de todo eso, la burla de una democracia subordinada al poder económico de la clase dominante, incapaz de imponer la justicia en materia de derechos humanos y sociales.

b) La primera parte se refiere a la larga marcha del pueblo chileno, que comprende las grandes ideas y las luchas dirigidas hacia su liberación, en el marco del desarrollo del socialismo en el mundo, hasta fines de la década de los sesenta. En medio del desarrollo de este país, en poco más de medio siglo, se analiza el movimiento obrero, tanto en su ámbito sindical como político, la difusión de las ideas anarquistas y socialistas, que nutren y dan sentido a las luchas de los sindicatos y partidos populares, a sus conquistas sociales y políticas hasta 1933. En este año se refunda el Partido Socialista de Chile, que ofrece una nueva orientación al movimiento popular hasta 1970, ya no sólo en la crítica social, sino también en la voluntad de lucha por la conquista del poder para realizar el ya viejo sueño revolucionario de transformar la sociedad, sustituyendo el capitalismo por el socialismo.

c) La segunda parte analiza el intento de acceder a la tierra prometida, que comienza con la victoria democrática del 4 de septiembre de 1970, los avances revolucionarios en los cambios de la sociedad, la economía y la posición de Chile en el campo internacional, así como en la democracia y la participación popular. Son los mil días más gloriosos de los trabajadores chilenos, durante los cuales tocaron con sus manos el poder y la revolución, pero al término de los cuales sufrieron también los rigores de la más brutal represión de la burguesía y el capitalismo, levantados en armas, con el apoyo del imperialismo norteamericano. Este profundo retroceso obliga al pueblo de Chile a luchar, de nuevo, durante 17 años, para terminar con la dictadura y abrir paso a una larga transición a la democracia, que todavía no concluye.

d) Como epílogo de esta memoria histórica, desde el presente, mirando al futuro con las enseñanzas del pasado, se plantea la gran pregunta, la cuestión acerca de si hoy cabe formularse la duda acerca de los nuevos desafíos del socialismo, en el marco de un mundo donde se derrumbó la Unión Soviética

—el llamado "socialismo realmente existente", el comunismo— y en que la socialdemocracia se ha convertido en el más firme sostén del capitalismo. Pero este sistema, de enorme poderío, no ha resuelto ni resolverá el problema de la pobreza de la mayoría de los seres humanos, lo que obligará a los trabajadores, empleados y desempleados, a volver a luchar por sus viejas reivindicaciones. En esta lucha habrá que considerar la historia del socialismo en Chile, como una herencia yacente, para rescatar los principios y valores difundidos durante el siglo xx, que aún tienen validez hoy.

Primera parte

Una larga marcha

Umbral del siglo XX

Historia y lucha de clases

El Manifiesto Comunista de 1848, elaborado por Marx y Engels, sostuvo categóricamente: "La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de luchas de clases". A continuación describió las clases que dividieron a las sociedades y las luchas que libraron entre sí, unas veces ocultas y otras veces desembozadas, trayendo consigo transformaciones revolucionarias de las sociedades o, en subsidio, las destrucciones de las clases beligerantes. En la Antigüedad, en Roma, se opusieron patricios y caballeros contra plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales contra vasallos (maestros, oficiales y siervos), y en la Edad Moderna, la burguesía contra el proletariado. Engels, en una nota a la edición inglesa de 1888, formuló una definición de estas últimas clases.

> Por burguesía se entiende la clase de los capitalistas modernos, quienes son poseedores de los medios sociales de producción y explotan el trabajo asalariado. Entiéndase por proletarios a la clase de los trabajadores asalariados modernos quienes, puesto que no poseen medios de producción propios, dependen de la venta de su fuerza de trabajo para poder vivir.

La afirmación precedente continúa, por cierto, teniendo valor hasta hoy. De esta lucha y del nacimiento del socialismo en Chile, a fines del siglo xIx y su desarrollo en el siglo xx, voy a presentar una visión sintética, forjada entre la sangre derramada por la represión y la conciencia surgida en la lucha social.

La introducción de las ideas socialistas en Chile y, en general, en América Latina, está relacionada con el período comprendido entre la disolución de la Primera Internacional hacia 1875 y la Primera Guerra Mundial. En este crucial período histórico se desarrollaron numerosos acontecimientos en el marco de la Segunda In-

ternacional, aunque ésta no se constituyó formalmente hasta 1889. El punto de término de este proceso es la Revolución rusa de 1917, con sus repercusiones en los diversos continentes, pasando el socialismo a ser un fenómeno universal, aunque su unidad teórica no existía. El esfuerzo de sus forjadores se concentraba entonces en la base obrera y la definición de cambiar la sociedad capitalista. No obstante, eran muchas las corrientes ideológicas que se movían entonces en su nterior, particularmente el marxismo y el anarquismo, que se enfrentaron desde el comienzo, y a su vez surgieron tendencias encontradas en cada una de ellas. El anarquismo fue expulsado de la Segunda Internacional en 1896.

Entre 1875 y 1914 se pueden distinguir varias etapas. Desde el primero de estos años y hasta 1895 e, incluso, en algunos aspectos, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial "prevalece entre los socialistas la esperanza milenarista en una revolución inevitable que tal vez no verán ellos mismos, pero a la que asistirán sin ninguna duda sus hijos".[1] Es la "buena nueva", a imagen y semejanza de la redención cristiana, que anuncia la superación del mundo capitalista. Pero, desde 1895, el capitalismo experimentó una fase de prosperidad, que apagó aquellas esperanzas, lo que a su vez trajo consigo la crítica revisionista al pensamiento de Marx. En efecto, Eduardo Bernstein formuló *Las premisas del socialismo,* en 1899, obra en la cual sostuvo que la tarea de los socialistas no consistía en destruir el capitalismo, sino en reformarlo. En medio de la polémica interna en los partidos de la Segunda Internacional y la condenación en sus congresos, el revisionismo influyó en aquéllos, sobre la base de concentrar la atención en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores, en la alianza con los sectores más progresistas de la burguesía y en la participación en los gobiernos. Pero poco después renació la esperanza con la revolución rusa de 1905, una vez que el marxismo se había convertido en la teoría oficial de la Segunda Internacional, en 1896.

La larga discusión entre 1889 y 1914 en aquella institución presentó, en este último año, tres grandes orientaciones principales. La primera, de clara tendencia revisionista, representada por Bernstein, diseminada en los grandes partidos de Alemania, Francia, Italia y Rusia, concentraba en la vía parlamentaria la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera, así como estaba abierta al entendimiento con el nacionalismo y el imperialismo. La segunda, de carácter centrista, estaba personificada especialmente por Kautslky y los austromarxistas, que no pudieron superar la contradicción entre su ortodoxia revolucionaria y

[1] Jacques Droz y otros, *Historia General del Socialismo, de 1875 a 1918,* **España, ediciones** Destino S.A., 1985, pág. 8.

su inmovilismo práctico. La tercera, de orientación izquierdista, dentro de la cual destacaron los seguidores de Rosa Luxemburgo, en Alemania, y los bolcheviques encabezados por Lenin, en Rusia, que se diferenciaban fundamentalmente respecto a la concepción del partido, a las alianzas de clases y a la importancia de los movimientos nacionales.

La Primera Guerra Mundial representó un corte en la lucha por el socialismo en Europa. Los partidos socialdemócratas, que habían conquistado su existencia legal, apoyados por amplias masas asalariadas, no pudieron impedir la guerra y fueron sometidos, con algunas excepciones, a la corriente arrolladora del "patriotismo", impulsada por los gobiernos capitalistas. Era la política de la "unión sagrada", por encima de las clases. Las pequeñas minorías, que luchaban por la paz sin anexiones ni indemnizaciones y por la transformación de la guerra imperialista en revolución social, procuraron reconstruir una nueva organización internacional, a través de las reuniones de Zimmerwald y Kienthal, determinando otra vez nuevas divisiones en los partidos socialdemócratas de los países más importantes del continente europeo, comprometidos en la guerra. Esta situación repercutió principalmente en Rusia, donde estalló en 1917 la Revolución de Octubre dirigida por Lenin y un grupo destacado de líderes bolcheviques. La revolución y la fundación de la Tercera Internacional precipitaron la división en todos los partidos socialdemócratas, generando los nuevos partidos comunistas.

En dicho marco general de la lucha por el socialismo en Europa, puede decirse que este movimiento tuvo escasa significación en América Latina, ya que sólo dos países de la región, Argentina y Uruguay, participaron en la Segunda Internacional, aunque algunos otros, como Brasil y Chile, se hicieron representar ocasionalmente por observadores en sus congresos. El atraso económico y cultural de esta área hasta el término de la Primera Guerra Mundial no era propicio para un movimiento socialista como el que se había desarrollado en Europa, pero los precursores de estas ideas en nuestros países actuaban a imagen y semejanza del socialismo del viejo continente. Los primeros grupos revolucionarios se organizaron como movimientos urbanos, entre los trabajadores industriales, expandiéndose después de aquel conflicto en el campo. México representó, en cierto modo, una excepción, dado que la Revolución de 1909 a 1917 se inició en el campo y se proyectó después a las ciudades, produciéndose una combinación entre las clases campesina y obrera urbana.

En las circunstancias socioeconómicas preexistentes, el socialismo fue animado en general por intelectuales, provenientes de la clase media ilustrada, apoyados por trabajadores calificados, como impresores, carpinteros, panificadores, mecánicos y empleados públicos, a los que se unieron más tarde los mineros. En una primera eta-

pa, estos socialistas aparecieron como el ala izquierda de partidos reformistas de los sectores medios. Luchaban entonces contra el dominio de las oligarquías terratenientes y de la Iglesia, asociadas en los partidos conservadores gobernantes y en los aparatos del Estado. La más brillante elite de intelectuales socialistas en América Latina estuvo representada por el Dr. Juan B. Justo (1865-1925), médico y profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien tradujo al castellano El Capital de Marx. Fue uno de los organizadores del Partido Socialista, fundó el periódico *La Vanguardia,* representó a su partido en el Congreso Nacional y concurrió en diversas oportunidades a los congresos de la Segunda Internacional, donde era una personalidad respetada.

No es mucho lo que se puede decir sobre los primeros años del Partido Socialista de dicho país. G.D.H. Cole señala que

> los socialistas de Argentina —y también los de Uruguay y, en considerable medida, los de otros países latinoamericanos— encontraron parte de la respuesta en una política agraria que debía más a Henry George que a Karl Marx o Bakunin. Demandaban una forma de impuesto sobre la tierra que devolviera las sumas que arrebataron como renta los terratenientes a la sociedad toda y, al mismo tiempo, planteaban que se cobrara un impuesto sobre la tierra no explotada ni mejorada por el valor que rendirían si fueran correctamente trabajadas.[2]

Por medio del "impuesto único", aspiraban a impulsar una apertura forzosa de la tierra para el establecimiento de productores agrícolas en pequeña escala. Contra esta formulación agrarista se levantó una tendencia que la consideró desviación, encabezada por el senador Enrique del Valle (1877-1921).

La otra tendencia de disensión surgida en ese partido fue la del nacionalismo, que se agudizaba por la penetración del capitalismo extranjero. La raíz de su existencia se encontraba en dos corrientes polarizadas. Por un lado, se postulaba la industrialización como medio de fortalecer al proletariado, ofrecer más ocupación y, por el otro, se resistía el enorme poder ejercido por los consorcios capitalistas británicos y estadounidenses, con prácticas monopolistas y de explotación de los trabajadores. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial surgió cierta forma de nacionalismo democrático, que alcanzó un desarrollo mayor durante la conflagración y con posterioridad a ella. En primer lugar, se produjo una pequeña escisión bajo el liderazgo de Manuel Ugarte, pero en 1917 el sector de izquierda fundó el Partido Socialista Internacional, que se convirtió enseguida en el Partido Comunista, con una disputa sobre los problemas de la guerra y la revolución.

[2] G.D.H. Cole, *Historia del pensamiento socialista,* tomo Iv, Fondo de Cultura Económica, 1960, México, págs. 280 y 281.

En el otro extremo del continente cabe mencionar el desarrollo de las ideas socialistas en México. El punto de partida fue 1900. En ese año, los hermanos Flores Magón (Enrique y Ricardo) fundaron el vibrante periódico *Regeneración*, eri el que comenzaron la propaganda socialista, aunque el pensamiento allí difundido era más bien anarcosindicalista. Clausurado el periódico, lo editaron en Texas, Estados Unidos, y lo introdujeron clandestinamente a través de la frontera. Algunos años después, en 1906, dieron a conocer un manifiesto, desde St. Louis, Missouri, fundando un centro de propaganda, que llamaron Partido Liberal, orientado a unir a los grupos de izquierda en torno a un programa común. Se trataba de un proyecto radical .(extremista).

> Este programa era un llamado a la revolución, para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz y acabar con el poder de la Iglesia e instituir un régimen liberal que socializara los vastos dominios eclesiásticos y las tierras sin cultivar pertenecientes a grandes terratenientes, aboliera el trabajo obligatorio y estableciera un salario mínimo para trabajadores urbanos y rurales.[3]

Este es un anticipo de la Revolución mexicana, iniciada en 1910 y culminada en 1917.

Este manifiesto de los hermanos Flores Magón contenía todas las reivindicaciones sociales formuladas entonces por los trabajadores de América Latina. Conjuntamente con las demandas anteriores, exigía jornada de ocho horas, igualdad de salarios entre extranjeros e indígenas, educación universal laica, autonomía municipal y sustitución del ejército regular por una milicia de ciudadanos. Este manifiesto tuvo una profunda repercusión. Fue como la chispa que encendió la pradera, tanto en los campos petroleros como en el este de México, hasta Yucatán. En el mismo año 1906, estalló una huelga en las minas de propiedad estadounidense de Cananea, próxima a la frontera con Estados Unidos, exigiendo la igualdad de salarios entre trabajadores locales y extranjeros. Con un absoluto desprecio por la soberanía territorial, tropas yanquis reprimieron el movimiento, acentuando los sentimientos nacionalistas en México.

No obstante la larga dictadura de Porfirio Díaz, las huelgas se generalizaron en las actividades textiles, las que fueron reprimidas violentamente. Dirigentes opositores trataron de organizar la lucha armada en el campo contra Porfirio Díaz, hasta que Emiliano Zapata (1889-1919) encabezó una rebelión campesina en el sur de

3 *Ibidem,* pág. 289.

México, con la cual los hermanos Flores Magón procuraron relacionarse. Surgieron entonces los programas de reforma agraria y la lucha armada contra la dictadura, que desencadenaría la caída de ésta y la más cruenta guerra civi1, por casi una década. Hasta que en 1917 se promulgó una nueva constitución, que sirvió de base a un sistema político estable, aunque represivo. No puedo dejar de mencionar la figura romántica de Felipe Carrillo Puerto, quien promovió en Yucatán un centro de rebeldía socialista hasta su muerte en 1924.

Conjuntamente con Argentina y México, se desarrollaron movimientos socialistas en otros países, como Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Cuba y Chile, entre los últimos años del siglo xix y los primeros del siglo xx. En Uruguay, después de los prolongados conflictos entre los partidos rivales, blancos y colorados, el presidente de la República José Batlle y Ordóñez realizó una política muy avanzada y progresista, que abrió el paso a la fundación del Partido Socialista en 1919, bajo la dirección de Emilio Frugoni, profesor universitario y poeta, quien fue en el año siguiente su primer representante parlamentario. El Partido Socialista se fundó en Brasil sólo en 1916, aunque durante la Primera Guerra Mundial ales ideales alcanzaron un desarrollo notable, gravitando en rebeliones de negros y en un motín naval en 1910, así como en la generación de un movimiento campesino en 1914. En Bolivia se creó en 1906, un centro social de obreros que realizó una intensa actividad, y en 1912 se formó una federación obrera, con la decisiva participación de los trabajadores del estaño. Por su parte, en el Perú, la clase obrera experimentó un crecimiento en organización y conciencia de clase al término de la Primera Guerra Mundial, bajo la influencia de la Revolución rusa y la reforma universitaria. En ese tiempo, estallaron grandes huelgas por reivindicaciones sociales, en Chicama, Talara y Lima, las que fueron reprimidas por el gobierno. El pensamiento socialista se desarrolló por fin con José C. Mariátegui (1895-1930).

La vigencia de la Revolución cubana, al finalizar el siglo xx, hace necesario un alcance a sus antecedentes históricos, tomando en consideración que Cuba fue la última colonia española en América Latina que conquistó su independencia, en 1898, y la primera revolución socialista, en 1959. La principal figura intelectual del movimiento por la independencia fue José Martí (1853-1895), quien fundó el Partido Revolucionario Cubano y desembarcó en la isla en 1895, pero murió en las primeras escaramuzas, quedando a cargo de Máximo Gómez y Antonio Maceo la lucha militar y revolucionaria. En 1890, el poeta Vicente Tejera (1845-1905) había fundado un club de propaganda socialista y continuado la organización sindical promovida por otros dirigentes. Después del término de la lucha por la independencia de España y a contar de la constitución que reconocía la independencia de Cuba, pe-

ro reservaba a Estados Unidos el derecho de intervención, se precipitaron diversas huelgas de los trabajadores azucareros, que culminaron en un movimiento muy significativo en 1911. En el año siguiente se produjo un levantamiento de negros. En suma, entre los años 1895 y 1914, el país se había conmovido por muchos disturbios sociales, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir en repetidas ocasiones a favor de las clases dominantes.

La Primera Guerra Mundial produjo un debilitamiento del imperialismo inglés al tiempo que el auge del imperialismo estadounidense, se hizo sentir de inmediato en los países latinoamericanos y, particularmente, en Chile, alterándose de este modo el centro del poder capitalista mundial. El gobierno de Estados Unidos convocó, en mayo de 1915, a la primera conferencia económica panamericana con el objeto de agregar a la sujeción diplomática de estos países, el sometimiento a la nueva metrópoli en el ámbito de la economía. A dicha conferencia asistieron representantes de los países americanos, excepto México y Haití. En ella se estableció la Alta Comisión Internacional, llamada posteriormente Alta Comisión Interamericana, destinada a estudiar la adopción de ciertas medidas, como reglamentaciones aduaneras, certificados y facturas consulares, cargos portuarios, marcas registradas, patentes y arbitraje en las disputas comerciales, así como otros asuntos relacionados con la misma materia.

Las labores del mencionado organismo, que perduró hasta 1933, recuerdan que el Sistema Interamericano, manipulado por Estados Unidos, si bien desde el principio se mostró interesado por asuntos comerciales que beneficiaban a ese país, no se preocupó de los problemas económicos más acuciantes para los países latinoamericanos. El poderoso país del norte, convertido de deudor en acreedor de las grandes potencias europeas, a través del abastecimiento de sus necesidades bélicas, aparecía entonces como el único que podría resolver también la grave crisis de los países latinoamericanos. Esta crisis se había derivado de las dificultades generadas por la conflagración mundial de 1914-1918, en la colocación de sus materias primas y alimentos en los mercados europeos, en el propio abastecimiento de productos industriales y en la mantención de sus habituales líneas de crédito internacional. Desde entonces comenzó la historia de las expectativas latinoamericanas frustradas.

En este tiempo, la economía chilena experimentó trastornos muy profundos, precisamente, debido a las dificultades surgidas en el comercio internacional por las hostilidades militares. La paralización de parte importante de las actividades salitreras trajo consigo una considerable desocupación y la consiguiente reducción de los ingresos fiscales. Para enfrentar esta situación crítica, el gobierno incrementó la emisión de papel moneda, disminuyó las remuneraciones de los funcionarios públi-

eos y restringió la asistencia crediticia a las empresas que se encontraban en verdadera falencia. La producción de salitre se normalizó en el curso del conflicto mundial para adquirir de nuevo los caracteres de una crisis al término de éste, mientras las actividades extractivas de cobre pasaron a tener especial relevancia en el comercio de exportación. Ambas explotaciones, como asimismo la del hierro, la electricidad, los teléfonos, el transporte urbano de Santiago y la distribución mayorista estaban controladas principalmente por consorcios estadounidenses.

Como resultado de la larga interrupción del abastecimiento de artículos manufacturados desde los países capitalistas comprometidos en la Guerra Mundial, el proceso de industrialización experimentó un apreciable crecimiento, especialmente en los rubros de consumo, a través de empresas privadas con capitales nacionales y extranjeros. Este proceso y las nuevas funciones que empezó a desempeñar el Estado impulsaron a los gobernantes, a partir de 1920, a abandonar a política de libre cambio y a favorecer el desarrollo de la economía nacional mediante acciones proteccionistas. La agricultura experimentó también un notorio desarrollo a raíz de la incorporación al cultivo de tierras en las provincias del sur, lo que permitió al país continuar como exportador de algunos productos agropecuarios, a pesar de la constante disminución del precio de éstos en el mercado externo.

La penetración del capital estadounidense se acentuó en Chile a partir de 1911, año en que la Braden Copper Co., subsidiaria de la Kenekott Copper Co., inició la explotación del mineral de El Teniente. Dicha penetración se extendió en 1913 cuando la Chile Exploration Co., filial de la Anaconda, puso en actividad a Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo. De esta manera, la actividad extractiva de cobre, que había declinado desde la Guerra del Pacífico, desplazada por la de salitre, adquirió una extraordinaria intensificación. El incesante incremento de las inversiones de Estados Unidos desencadenó una lucha con el imperialismo de Inglaterra, que influirá en el desarrollo político de nuestro país desde 1920 y que concluirá como ya se mencionó con la hegemonía definitiva del primero.

Desde los escombros de la Primera Guerra Mundial surgió la Liga de las Naciones, cuya existencia tuvo importantes implicaciones en el Sistema Interamericano. Los orígenes de la Liga estuvieron vinculados a la llamada Doctrina Monroe y a las preocupaciones de Estados Unidos y de los países latinoamericanos en todo lo concerniente a sus relaciones recíprocas. Su creación pareció ofrecer a estos últimos la esperanza de cierta protección contra dicho país dominante. No obstante, para apaciguar a los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, que rechazaron entonces cualquiera limitación de la Doctrina Monroe, a fin de asegurar su hegemonía en

el hemisferio occidental, se agregó el artículo 21 al convenio de la Liga de las Naciones.

Esta disposición especial expresó cínicamente: "Nada de lo que incluye este convenio se considerará que afecta la validez de los compromisos internacionales, tales como tratados de arbitraje o entendimientos regionales como la Doctrina Monroe, para asegurar el mantenimiento de la paz". Esta referencia a la mencionada doctrina es por demás ambigua, ya que ella no es un entendimiento regional, cualquiera que fuera el significado que se le haya querido dar a esos términos. El artículo 21 le pareció aun poco satisfactorio al Senado estadounidense, en tanto que los países latinoamericanos, con gobiernos políticamente responsables, la consideraron con inquietud. Dos de ellos —Argentina y México— declararon, al adherirse al convenio de la Liga de las Naciones, que no reconocían la Doctrina Monroe como entendimiento regional, por la sencilla razón de que ella era una decisión unilateral de Estados Unidos. No obstante, desde entonces, los países latinoamericanos se desarrollaron bajo la sombra de esta doctrina imperialista.

Las huellas del imperialismo

No se entendería la historia de Chile en el siglo xx si no se consideraran las huellas del imperialismo desde fines del siglo xIx. No retrocedo más por la época que cubre el presente ensayo. El destacado profesor de historia económica y social en la Universidad de Chile, Hernán Ramírez Necochea, publicó un notable libro titulado "Historia del imperialismo en Chile", que comprende todo el siglo xIx y hasta las dos primeras décadas del siglo xx, abarcando desde la presencia tanto de Inglaterra como de Estados Unidos en la independencia de las colonias españolas en América Latina con sus serias rivalidades interimperialistas y hasta las manifestaciones antiimperialistas entre 1891 y 1920. En la introducción de su libro, Ramírez Necochea parte con una afirmación categórica sobre la considerable relevancia de esta temática. Escribe ese autor:

> El imperialismo constituye uno de los fenómenos más significativos y trascendentales de la vida contemporánea. El acontecer histórico de los últimos ochenta o noventa años resulta incomprensible si no se le tiene a la vista. Grandes tensiones, dramáticos conflictos, cruentas guerras, subordinación directa o encubierta de enormes áreas del globo

> y perturbación en la existencia y desarrollo de muchas naciones, son algunas de las proyecciones históricas del imperialismo contemporáneo.[4]

¿Quién lo puede negar? Supuestamente nadie que razone con rigor histórico.

En ese periodo, el imperialismo estaba presente y tenía una influencia clara en la economía y la política de las nuevas naciones de este continente. Pero la idea y la conducta antiimperialista no eran tan claras, sino que constituían simples reacciones ante cada una de las acciones imperialistas. "Por lo general", dice Hernán Ramírez Necochea, "grupos económico-sociales reaccionaban de un modo escueto y directo frente a muy determinados y concretos aspectos de la acción que el imperialismo realizaba en nuestro país, y de las implicaciones de esa acción".[5] El mismo autor señala que esta situación es comprensible, porque entonces no se había formulado todavía una teorización sobre el imperialismo, lo que sucedió hasta 1900, cuando John Hobson publicó su libro, titulado *Imperialism. A Study.* Esta teoría no la inventó, pues, Lenin, quien escribió su obra en 1916, como se verá más adelante.

El dominio del imperialismo inglés era brutal y descarado en las pampas salitreras a fines del siglo xix y comienzos del siglo xx, por lo que los trabajadores del norte del país, inspirados en el socialismo, defendieron, desde entonces, sus intereses esenciales mediante la huelga y la lucha colectiva.

> Tan claro, tan definido carácter poseyeron esos movimientos que el 12 de marzo de 1895, a raíz de las huelgas en la oficina Buena Esperanza y otros lugares, el ministro de Inglaterra en Santiago indicó a nuestro gobierno que medidas inmediatas debían ser tomadas para asegurar la preservación del orden. El imperialismo, como se ve, quería orden para seguir explotando tranquilamente a Chile y, en primer término, a los trabajadores chilenos.[6]

Así actuaban entonces las grandes potencias sobre la "soberanía" chilena, con el apoyo de la derecha, fuerza política representativa de la burguesía interna.

Si grave fue aquella intervención extranjera, más grave era todavía la débil respuesta del gobierno de Chile. "Las autoridades, representativas de las clases explo-

[4] Hernán Ramírez N., *Historia del imperialismo en Chile,* La Habana, Edición Revolucionaria, 1966, pág. 17.

[5] *Ibidem,* pág. 247.

[6] *Public Record Office,* F.O. 132. Vol. 49. Oficio presentado por el ministro de Inglaterra en Chile al ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 12 de marzo de 1895. Citado por Hernán Ramírez N.

tadoras nacionales, sumisa y solícitamente, acogieron la demanda". Atendiendo a aquella petición, informaba el ministro de relaciones exteriores al diplomático inglés: "El gobierno ha dispuesto el envío de más fuerzas de línea a las localidades indicadas, las que ya han salido para el lugar de su destino, como fue manifestado a V.S. por el ministro de Guerra".[7] La matanza de la escuela Santa María, de Iquique, en 1907, nos recuerda a lo que iban los militares. Me es imposible acumular los múltiples antecedentes expuestos por los nuevos investigadores de nuestra historia, pero no puedo resistir el impulso de agregar otra cita relevante de Ramírez Necochea.

> En 1904, el diputado demócrata, Malaquías Concha, denunciaba que el cónsul británico en Iquique participaba personalmente y con el respaldo de las autoridades locales, en la contratación de rompehuelgas, a quienes protegía con su investidura y con la bandera de su país. Señalaba, además, que el gobierno, escuchando las peticiones del ministro inglés, había aumentado la gratificación de que gozan los militares que prestan servicios de Taltal al norte, con el fin, se dijo, de mejorar al personal militar que a esas regiones se envía, porque el ministro inglés había insinuado que no estaba suficientemente garantizado el capital inglés invertido en la explotación de las salitreras.[8]

Históricamente, este sistema de "gratificaciones" se empleó a menudo en Chile, llegando al extremo durante la dictadura de Pinochet. ¡Gratificación para matar!

El antiimperialismo, por eso, surgió primeramente en el proletariado del norte del país, de la minería del salitre, porque este sector de los trabajadores sufrió la explotación y represión de las empresas extranjeras coludidas con los gobiernos reaccionarios de ese tiempo. En efecto, estos brindaban la protección indebida de las Fuerzas Armadas a los dueños de esas empresas foráneas. Los trabajadores, por su parte, contribuyeron a la formación y crecimiento del movimiento antiimperialista, sucediéndose en el tiempo períodos de lucha por sus reivindicaciones sociales, de afirmación de su conciencia de clase y de denuncia pública del imperialismo. Después de la Revolución rusa, los obreros chilenos adquirieron una comprensión más cabal de las fuerzas antagónicas que se movían en el combate por el socialismo. En general, se puede afirmar que toda la historia del mundo, durante el siglo xx, estuvo marcada por la lucha contra el imperialismo, la cual puso término al sistema colonial y promovió la no alineación en la Guerra Fría de las grandes potencias.

[7] *Ibidem* F.O. 132. Vol. 50. Oficio del ministro de Relaciones Exteriores de Chile al ministro de Inglaterra, N° 814, 28 de marzo de 1895.

[8] Citado por Fernando Ortiz, *La cuestión social en Chile. Antecedentes 1891-1929,* pág. 221.

El imperialismo penetró y se consolidó en los países coloniales y semi-coloniales con la complicidad de las clases dominantes. Su presencia en Chile se explica por diversos antecedentes y factores que configuraron el desarrollo de la nueva nación, desde fines del siglo xix y comienzos del siglo xx. Este imperialismo proviene de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, el que se apoderó de las riquezas naturales, subordinando la economía chilena. Para eso depusieron sus rivalidades preliminares y constituyeron una fuerza avasalladora sobre la débil estructura económica interna.

> Los tres imperialismos comprometieron en su favor a una mayor cantidad de elementos nacionales, dispusieron de los servicios de los más amplios núcleos de personalidades descollantes en la vida política, trabaron relaciones con un más vasto contingente de hombres de negocios, pudieron realizar un ablandamiento ideológico más eficaz.[9]

Esta penetración y consolidación del imperialismo se valió, por último, de la corrupción política, como lo han demostrado diversos investigadores de nuestra historia, a partir del término de la Guerra del Pacífico.

Este proceso experimentó su máximo desarrollo, tanto en Chile como en el resto del mundo atrasado, entre 1890 y 1914, arrasando con las débiles resistencias que se manifestaban en cada uno de los países sometidos como colonias y semicolonias.

> En Chile prevalecía un manifiesto retraso económico-social, en el que fundamentaban su superioridad y predominio las clases dirigentes del país, especialmente los terratenientes y los comerciantes. Como se ha señalado en otras páginas, estos elsmentos eran esencialmente proimperialistas, es decir, sus intereses económico-sociales y políticos concordaban natural o espontáneamente con los del imperialismo.[10]

Por el contrario, el antiimperialismo representó cambio y, por lo tanto, progreso, en abierta lucha contra las fuerzas que sostenían el retraso en tocios los ámbitos de la sociedad, la economía y la política. Una confirmación violenta de esta situación fue la guerra civil de 1891, con diez mil muertos, y la matanza en la Escuela Santa María, de Iquique, en 1907, con dos mil aniquilados por la represión militar.

La contradicción esencial entre el proimperialismo y el antiimperialismo descansaba en las clases dominantes y las clases dominadas respec tivamente. Por un

[9] *Ibidem,* pág. 284.
[10] *Ibidem,* pág. 285.

lado, estrechamente asociadas a la penetración y dominio económicos extranjeros, estaban los grandes terratenientes, la burguesía comercial, sectores de la burguesía industrial. Todas estas clases sociales obtenían beneficios de la presencia del imperialismo. De estos mismos sectores surgían políticos, que actuaban como abogados y gestores al servicio de las empresas extranjeras, que llegaron a ocupar cargos decisivos en el Estado, desde donde favorecían a sus "empleadores". Por el otro lado, en el polo opuesto, se ubicaba el proletariado y, en general, la clase trabajadora consciente, que asumió una posición revolucionaria en torno a la guerra civil de 1891, que se manifestó en los mismos años del apogeo del imperialismo (1890-1914). Al término de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la revolución en Rusia, la lucha antiimperialista adquirió un mayor impulso y relieve.

Julio C. Jobet confirmó también el origen de la dominación imperialista en el siglo xIx:

> Durante los gobiernos de Jorge Montt (1891-1896) y de Errázuriz Echaurren (1896-1901) -afirma este autor- se inicia la penetración imperialista en forma intensa. Capta las finanzas nacionales por medio de cuantiosos empréstitos y se apodera del salitre y del cobre. El 1 de enero de 1891 se había creado la segunda combinación salitrera bajo el exclusivo control de los capitales ingleses, los que terminaron por apoderarse de la reserva del Estado.

Esta política suicida de los sectores sociales y políticos dominantes respondía al propósito de no pagar impuestos al Estado, porque el remate de las reservas salitrales que pertenecían a todos los chilenos, después de la Guerra del Pacífico, fue el más cómodo expediente para obtener recursos, llegándose al extremo de casi enajenarlas al capital extranjero.

> Por ley del 29 de noviembre de 1893, se entregaba a la subasta pública 23 destacamentos salitreros fiscales y 38 oficinas que eran de dominio del Estado, lo que significaba una verdadera puñalada al patrimonio nacional.[11]

De esta manera, el imperialismo se apoderó de los recursos naturales de Chile, primero del salitre y después del cobre.

[11] Julio C. Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile,* Centro de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende - Casa de Chile, México, 1982, pág. 116.

Un capitalismo incipiente

Chile se asomó al siglo xx con una economía primaria exportadora, cuya fuente principal era el enclave salitrero que, después de la Guerra del Pacífico, se convirtió en la base más sólida del imperialismo británico. Además, resurgió la explotación de cobre a través de las inversiones estadounidenses, se incrementó la de carbón, así como disminuyó la de plata en relación con el auge del siglo anterior. La actividad agropecuaria, por su parte, tuvo a su vez un lento crecimiento, particularmente en la ganadería ovina de las pampas magallánicas, declinando en la tercera década. El carácter dependiente de la economía nacional, sensible por lo tanto a las fluctuaciones del mercado externo, determinó variaciones en la situación del país, alternándose lapsos de auge y de depresión. Los factores específicos de estos procesos fueron diversos. De una parte, el incremento de la producción salitrera y los precios altos en el exterior y, de otra, las crisis cíclicas del sistema capitalista y la disminución de los precios de dicho producto al término de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo, el 85% del valor de las exportaciones provenía de la minería.

Los inversionistas ingleses, propietarios de los principales yacimientos salitreros, se apropiaban de una parte considerable del excedente económico derivado de las exportaciones de este producto. El resto se distribuía entre la burguesía interna y el Estado, correspondiendo la participación de este último a derechos de exportación. Con sus ingresos, la burguesía promovió otros negocios lucrativos, por lo general de carácter especulativo, en tanto que el Estado destinaba los suyos hacia la construcción de la infraestructura y al pago de los gastos de la nación, civiles y militares. No obstante, este baluarte minero se derrumbó a fines de la década de los años veinte debido a la competencia del salitre sintético. Un proceso similar experimentó la explotación de cobre, ya que después de estar Chile a la cabeza como productor de este recurso natural en el mundo, fue desplazado de dicho lugar de preeminencia debido a la carencia de una tecnología moderna para aumentar la producción y reducir los altos costos de explotación. Posteriormente, las inversiones de capitales norteamericanos posibilitaron el resurgimiento de esta actividad minera, convirtiéndose en el segundo productor en el mundo. En la década de los años treinta, el cobre desplazó definitivamente al salitre como fuente de ingresos fiscales.

En este mismo período, la producción agropecuaria presentó un crecimiento significativo, especialmente en trigo, vino y ganado, aunque su ritmo en general empezó a ser inferior al aumento de la población, fenómeno que se agudizará con posterioridad. Por lo mismo, las exportaciones de estos productos descendieron con relación al siglo anterior, destinándose por eso al mercado interno la mayor parte de

la producción. El crecimiento de las actividades agropecuarias encontró su fundamento, aparte el latifundio de la zona central, en la incorporación de las tierras de la antigua Araucanía a la producción de trigo y maderas. Estas tierras fueron arrebatadas a los mapuche y pequeños agricultores, obligando a muchos de sus primitivos dueños y colonos a radicarse en las pampas del territorio argentino de Neuquen. Las tierras pasaron a manos de sociedades particulares y de altos funcionarios civiles y militares.

Estas explotaciones agrarias se extendieron asimismo hacia el extremo sur del país, esto es, Magallanes y Aysén. En el primer caso, ingleses y chilenos ocuparon en propiedad, arrendamiento y concesión, las fértiles pampas que permitieron la reproducción de ganado ovino, el desarrollo de la industria frigorífica y la exportación de carnes. En el segundo, algo más tarde, se generó un fenómeno de concentración de la tierra similar, ya que poderosas sociedades se apoderaron de superficies fiscales para explotar ganado bovino. Este proceso, particularmente en Magallanes, se realizó por medio de fraude, violencia, despojo y crímenes. La economía rural se desarrolló, desde entonces, a través de contradicciones que perdurarán en el tiempo. Coexistieron entonces empresas capitalistas modernas con formas precapitalistas de producción. Agricultores ausentistas invirtieron utilidades arrancadas a la tierra y a los trabajadores en actividades urbanas o las gastaron en viajes turísticos a Europa y consumos suntuarios. Entre la baja tasa de inversión y la sobreexplotación de los campesinos, esta actividad creció por la lenta expansión del área cultivada, hasta su crisis en 1930.

La industria manufacturera tuvo, por su parte, algún desarrollo, en especial durante la Primera Guerra Mundial, por la necesidad de sustituir importaciones de productos de esta clase dadas las perturbaciones en el comercio internacional derivadas de la conflagración. Por cierto, se trataba todavía de actividades de carácter artesanal combinadas con fábricas de herramientas y repuestos para las labores mineras y agrícolas, así como de artículos de consumo. No obstante, esta producción no llegó a satisfacer la demanda por lo que después de la guerra continuó el flujo de importación de mercancías. En sus orígenes, las inversiones en este sector provinieron, por una parte, de los sectores agrario y financiero nacionales y, por la otra, de residentes extranjeros. Este proceso trajo consigo la estrecha alianza entre la burguesía agraria y la burguesía industrial, y de ambas con los inversionistas foráneos, si bien el capital imperialista todavía sólo se interesaba por canalizar recursos hacia la explotación de materias primas básicas, principalmente minerales. El Estado favoreció este proceso mediante leyes y políticas protectoras de la industria nacional.

La sociedad chilena, tradicional y oligárquica, empezó a experimentar algunos cambios en los años veinte, cuando los trastornos producidos por la conflagración

mundial se hicieron sentir en todos los países, aún en los más pequeños y atrasados, como Chile. Ninguno escapó, en efecto, al doble proceso de industrialización y urbanización, si bien en él no se observaba claramente igual complementariedad que en las economías de las naciones capitalistas avanzadas, sino que revestía características peculiares. En nuestro país, la primera fase de su urbanización fue el resultado del desplazamiento de los trabajadores rurales hacia las ciudades, debido a las alteraciones negativas de la colocación de los productos agrícolas en el mercado mundial por las sucesivas crisis del sistema capitalista. Más adelante, el proceso de industrialización intensificará la urbanización y ésta influirá en aquel. En 1920 era ya considerable la marginalidad generada por los desocupados y la presión de este sector por empleos en la administración del Estado. Esta situación trajo aparejada la lucha política contra la sociedad estática proveniente del siglo anterior.

Como ya se indicó, durante el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925) se inició el desplazamiento del imperialismo inglés por el imperialismo estadounidense, de acuerdo con la readecuación del poder trasnacional derivado de la Primera Guerra Mundial, lo que trajo consigo un cambio político. La caica de la hegemonía inglesa determinó el descenso de la oligarquía agraria y el avance de la burguesía industrial y financiera, que terminará por sustituir a aquélla en la dirección del bloque social dominante. En este sentido, el movimiento social de 1920 representó una ruptura en el desarrollo institucional. Enrique Mac Iver expresó entonces que Alessandri había interrumpido la continuidad de la historia política de Chile. Por cierto, habla de la historia "oficial". Medio siglo después, Eduardo Frei Montalva formuló idéntica afirmación respecto a Allende. En este tiempo, el imperialismo estadounidense consolidó su dominio sobre el cobre, recurso natural que pasó a reemplazar al salitre como fuente proveedora de divisas después de la consolidación de la crisis que experimentara la explotación de este último mineral.

Para enfrentar la crisis del nitrato, en 1930, se creó la Compañía de Salitre de Chile (COSACH), empresa mixta entre el Estado y particulares (nacionales y extranjeros), una especie de "chilenización", como se haría 36 años después con el cobre. La ley que le dio origen establecía un capital de 3 mil millones de pesos en acciones de 100 pesos cada una. La mitad de este capital, es decir, 1 500 millones de pesos, lo aportaba el Estado, y la otra mitad los sectores privados, dentro de los cuales participaba la empresa Guggenheim con 1 050 millones, dejando en manos de los socios particulares chilenos sólo 418 millones. "La Guggenheim, por el mecanismo de las patentes de su procedimiento, dominaba al resto de la compañía y obtenía el derecho a elegir siete de los doce miembros del directorio, donde sólo había

cuatro representantes estatales".[12] Además, esta empresa contrató un empréstito de mil millones de pesos, que tenía que servir. Este negocio de la COSACH fracasó porque las cuentas alegres eran falsas. En efecto, se establecía previamente que "con una producción de 2 500 mil toneladas métricas se obtendría una utilidad de 270 millones de pesos y que con el procedimiento Guggenheim se podría llegar a producir 5 000 mil de toneladas con una utilidad de 718 millones de pesos". La explicación es muy clara. "Se trabajaba en estos cálculos con el falso precio de 310 pesos por tonelada que, como se ha dicho, en 1931 llegó a 202 pesos. Además, no se mencionaba el hecho de que era preciso servir el empréstito de mil millones de pesos que la COSACH había contratado".[13] De acuerdo a este convenio, el Estado percibiría tres quintos de las utilidades, pero al mismo tiempo renunciaba a los derechos de exportación, con lo que experimentaba, al fin de cuentas, graves pérdidas en sus ingresos. Procedimientos tan absurdos como este se aplican hasta hoy en la gran minería privada del cobre para burlar la tributación al país, como la amortización acelerada.

La crisis de los años treinta

La exportación de salitre, que había sufrido una caída en la posguerra, tuvo un repunte en el lapso 1929-1930 para volver a disminuir después. Desde entonces, esa riqueza básica aportó poco a la economía nacional ya que la mayor parte del valor de la exportación quedó en manos de los inversionistas extranjeros. La caída definitiva del nitrato como producto de exportación y la disminución del precio del cobre en el mercado mundial obligaron al gobierno de Chile a suspender el pago de la deuda externa. De inmediato, recibió como respuesta la suspensión de los empréstitos en el exterior, lo que trajo consigo una secuela de efectos económicos y sociales, tales como los despidos masivos y la reducción del poder adquisitivo de todas las remuneraciones, los que perjudicaron gravemente a los trabajadores. La gran depresión experimentada por el sistema capitalista en sus centros metropolitanos, extendida automáticamente en su periferia a contar de 1929, agudizó aun más la precaria situación de la economía chilena.

Esta nueva crisis revistió una profundidad y extensión desconocidas en la historia del capitalismo. El desplome de la economía mundial trajo aparejada la desocu-

[12] Femando Casanueva y Manuel Fernández, *El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile,* Santiago, Empresa Editora Nacional Quimantú Ltda., 1973, pág. 74.

[13] *Ibidem,* pág. 74.

pación, que alcanzó a 25% de la fuerza de trabajo. Tuvo su epicentro en Estados Unidos, pero se proyectó en forma automática a los países europeos y enseguida a todo el orbe. En este marco general, el sistema financiero y comercial de las naciones latinoamericanas fue afectado decisivamente por medio del deterioro de los términos de intercambio y la paralización de las inversiones y préstamos extranjeros, con lo cual se redujo su capacidad de importación y exportación. Las repercusiones de esta crisis del capitalismo fueron asoladoras en Chile. La situación señalada determinó un grave déficit fiscal, a pesar de la reducción del gasto público. Se contrajeron los medios de pago disponibles, bajaron los precios, declinó la actividad productiva y aumentó la desocupación. Esta fase deflatoria de 1930-1931 afectó a todas las áreas de la economía: minería, agricultura, construcción e industria. La corriente de desocupación de las minas del norte desplazó a los trabajadores hacia el sur, reubicándose una parte en el campo y la mayoría en Santiago, donde carecían de todo.

Los gobiernos que se sucedieron en este lapso realizaron diversos intentos para enfrentar la crisis. Sin capacidad financiera para atender el servicio de la deuda externa y evitar el agotamiento de las reservas de oro del Banco Central, se estableció el control de cambios y se restableció el régimen de papel moneda. El gobierno empezó a emitir para financiar sus déficit, en una secuela que incluía cada vez más préstamos del Banco Central al Fisco, el aumento del circulante y de los precios, y que generaba más inflación. Durante el período de "anarquía" política (1931-1933) no se formularon programas orgánicos para abordar la crisis, sino que se adoptaron sólo medidas aisladas. En esta fase inflacionaria de la crisis, continuó el descenso de la producción, excepto en la industria, la que comenzó a expandirse desde 1932 para satisfacer las nuevas demandas del mercado interno, favorecida por el control de cambios, la devaluación monetaria y el aumento de las tasas arancelarias. Reducida la demanda externa de productos primarios, no pudo el país tampoco mantener el flujo de importación de productos manufacturados, lo que hizo necesaria una mayor sustitución de importaciones.

En el curso de la dictadura de Ibáñez, el Estado asumió un papel decisivo en el desarrollo económico, por el impulso de la industrialización mediante la inversión fiscal y construcción de obras públicas, así como con medidas proteccionistas, crédito e inversión extranjera. Se promulgó la ley de colonización agricola en 1928 con el objeto de impulsar la distribución de tierras fiscales. Acentuando la intervención del Estado en la economía, se crearon la Caja de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial, la Línea Aérea Nacional y el Ministerio de Desarrollo, bajo cuya dependencia surgieron además la Dirección de Industrias Fabriles y la Fábrica y

Maestranza del Ejército (FAMAE), que comenzó a producir armas, pero también maquinarias y herramientas para la industria y la agricultura. Para contribuir a este proceso se modernizó la administración pública, reorganizándose el Servicio de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos. El Estatuto Administrativo dictado en 1930 reguló la organización y funcionamiento de una burocracia en expansión. Nacieron nuevos servicios públicos, como la Contraloría General de la República, el Cuerpo de Carabineros, la Fuerza Aérea de Chile y la Tesorería General de la República. El Código del Trabajo reunió la legislación social vigente y el Estatuto de la Universidad de Chile definió el marco orgánico y funcional de la educación superior, así como otras iniciativas impulsaron reformas en los demás niveles de la enseñanza. Fue el primer proceso serio de modernización proveniente del Estado y no de la actividad privada.

Primeros pasos del movimiento obrero

Este desarrollo nacional trajo consigo el nacimiento y los primeros pasos del movimiento obrero, que suele dividirse en dos grandes períodos: el de la llamada "época heroica" y el de la "época de la institucionalización". El primero incluye los años comprendidos entre 1881 y 1924. Fue el período más duro y sangriento de la historia de las luchas sociales en Chile. Las corrientes del anarquismo y socialismo generaron las primeras organizaciones de clase. En sus orígenes constituyeron una combinación del sindicalismo con el sistema de ayuda mutua, presentando sucesivamente tres modalidades distintas: las sociedades mutualistas, con predominio del artesanado y las tendencias democráticas; las sociedades de resistencia, con la participación de trabajadores inspirados en las ideas anarquistas, y las hermandades mancomunales, en las que destacaron los obreros mineros y portuarios, que empezaban a percibir la ideología socialista. De esta manera, el movimiento sindical tuvo una orientación política avanzada desde su nacimiento, que lo vinculó a la lucha revolucionaria durante el siglo xx. El segundo comprende de 1924, año en el que se promulgó el Código del Trabajo, hasta hoy.

Las sociedades mutualistas datan desde fines del siglo xIx, aunque algunas de ellas existieron desde antes, como la Sociedad de Artesanos de Santiago, en 1847, y la del mismo nombre de Valparaíso, en 1858. De estas organizaciones, 13 habían sido reconocidas por el gobierno en 1870, 39 en 1880 y 600 en 1924, contando con 90 mil integrantes o socios. Todas ellas tenían como objetivos la cooperación mutua, el suministro de algunos rudimentos de seguridad social en ausencia de la aten-

ción de los patrones y del Estado. En su comienzo participaban sólo artesanos, pero enseguida también lo hicieron otros trabajadores. Siendo su objetivo principal la cooperación y no el enfrentamiento, en su primer congreso nacional celebrado en 1901, excluyeron a las sociedades de resistencia que se habían generado en su interior. Las sociedades mutualistas estaban vinculadas al Partido Demócrata, participando más tarde en el movimiento populista de 1920, representado por Arturo Alessandri.

Las sociedades de resistencia surgieron durante el mismo período, principalmente entre los obreros industriales y portuarios, las que luchaban por la jornada de trabajo de ocho horas, mejoramientos de salarios y de condiciones de vida. Por el carácter de los trabajadores que formaban parte de ellas, se concentraban en la zona central, particularmente en Santiago y Valparaíso, si bien existían algunas también en el norte del país. En relación con estas sociedades se constituyeron los llamados sindicatos para la protección del trabajador, los cuales totalizaron 30 al finalizar el siglo xix. Diez de ellos se denominaban "sociedades de resistencia". Estas organizaciones y los sindicatos mencionados entraron en decadencia, conjuntamente con el anarquismo, siendo sustituidos por un sindicalismo más moderno, bajo el aliento de las ideas socialistas predominantes, aunque su estabilidad era por demás variable de acuerdo a la situación social, es decir, a la sucesión de tranquilidad y protestas populares.

Las hermandades mancomúnales constituyeron después nuevas formas de sindicalismo, que superaron a las sociedades mutualistas y de resistencia, y se concentraron principalmente en el norte del país. En esta zona, la fuerza de trabajo había crecido notoriamente en las explotaciones salitreras hasta llegar a 48 476 en 1912, lo que representaba diez veces más que la fuerza laborante en 1834. A pesar de las condiciones inhóspitas de vida, las ofertas de trabajo y los salarios relativamente mejores atraían a obreros del centro y sur del país, así como de países vecinos (peruanos, bolivianos) y también chinos. Por encima de sus diferencias étnicas, el movimiento obrero concentraba sus demandas en las condiciones de vida y de trabajo. No existía estabilidad en las actividades laborales tanto por la fluctuación de la oferta de empleo de las empresas capitalistas, debido a diversas razones (variación de la demanda del mercado mundial y limitación de la producción para mejorar los precios, entre otras), como por la búsqueda por los obreros de mejores condiciones de vida y de trabajo. Esto último provocaba un desplazamiento de una mina a otra, lo que dificultaba la formación y subsistencia de las organizaciones sindicales.

En Chile, el capitalismo estableció, a comienzos del siglo xx, condiciones de vida y de trabajo de extrema explotación, las que eran especialmente ostensibles en la

minería, base de la acumulación primitiva, con el agravante de que los excedentes se iban a los centros metropolitanos. Las empresas extranjeras contaban con el apoyo de todas las instituciones del Estado (autoridades políticas y administrativas, tribunales, fuerzas armadas, policía, etcétera), en el control del salitre y del cobre, el que se extendía además al transporte, a los puertos y, en general, a la mayor parte de la estructura económica de la zona. Los trabajadores percibían naturalmente esta situación, según su grado de desarrollo. Los más avanzados, con más clara conciencia de clase, se organizaban para enfrentar a los patrones y al Estado y exigirles la satisfacción de sus reivindicaciones, al mismo tiempo que los más retrasados alternaban la pasividad y el apoyo al movimiento organizado. Eran los comienzos de la lucha contra el imperialismo.

Por lo mismo, en los primeros diez años del siglo xx las mancomunales absorbieron y superaron a las sociedades mutualistas, alcanzando un desarrollo notable. Estas nuevas organizaciones, surgidas en el norte del país, se constituyeron territorialmente y no por tipo de trabajo, y sus objetivos fueron similares a los de las sociedades de resistencia. Su primera creación fue en los centros de producción y puertos de las zonas mineras de Tarapacá y Antofagasta, extendiéndose posteriormente a las áreas del carbón en Concepción. Difundían sus ideas políticas y programáticas en periódicos y revistas, llegando incluso a fundar un partido político en 1903, de breve duración. En 1901 se formó la primera de estas sociedades, conocida como la Mancomunal de Obreros, de Iquique, la que alcanzó en algunos años entre 4 mil y 6 mil integrantes. En los sectores directivos penetraron las ideas socialistas, provenientes de Europa, ya que la Mancomunal de Tocopilla manifestó su solidaridad con los obreros rusos en la Revolución de 1905.

Estas nuevas formaciones sindicales tuvieron una gran importancia en el desarrollo del movimiento obrero.

> Las mancomúnales -dice Alan Angelí- eran la expresión de la cohesión social y la solidaridad de sus miembros, y en este sentido siguieron el ejemplo de las sociedades mutualistas; pero también en sus demandas y acciones se adelantaron anticipándose a las de los sindicatos más modernos.[14]

Como se verá más adelante, durante los primeros años del siglo xx, en el norte del país, las huelgas más importantes fueron promovidas por aquellas organizaciones,

[14] Alan Angell, *Partidos Políticos y movimiento obrero en Chile,* Ediciones ERA, primera edición en español, México, 1974, pág. 32. Julio C. Jobet, *Recabarren y los orígenes del movimiento obrero y el socialismo chileno,* Santiago, PLA, segunda edición, 1973, pág. 152.

que también participaron activamente en la Federación Obrera de Chile y en el Partido Obrero Socialista. No obstante, las contradicciones políticas, emanadas de la influencia ejercida por los partidos Demócrata y Radical, al comienzo y, posteriormente, por los primeros grupos socialistas y por el Partido Obrero Socialista, contribuyeron a su debilitamiento sindical. Pero las mancomunales se revitalizaron en la segunda mitad de la década de los veinte, proyectando un legado valioso al nuevo movimiento sindical en materia de ideología y organización.

La lucha social: fines y medios

La acción sindical desempeñó un papel importante en las transformaciones experimentadas por la sociedad durante el siglo xx, particularmente la actividad huelguística, aunque esta no agota los medios de la lucha social. La huelga representa sólo uno de los recursos utilizados por los trabajadores en la defensa de sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo. La historia del movimiento obrero revela que, en cada conflicto social, los trabajadores recurrieron siempre a la negociación y conciliación antes de promover la huelga. No obstante la importancia de ésta, existen otros medios de presión contra los patrones, como el trabajo lento, el boicot y el simple ausentismo. Pero cabe dejar establecido que los asalariados no limitaron la lucha social en las organizaciones sindicales, sino que la proyectaron también hacia los partidos políticos, representativos de sus intereses de clase.

Por las consideraciones anteriores, la actividad sindical ha contribuido no sólo en el mejoramiento de su situación subordinada y de extrema explotación en la sociedad, sino que también ha influido en las conquistas políticas de mayor democratización de la vida nacional. Las principales demandas dicen relacionarse con el cumplimiento por los empleadores de todas sus obligaciones salariales; el aumento de las remuneraciones y otros beneficios económicos; la reducción de la jornada de trabajo y su reglamentación. Además, exigían condiciones de seguridad e higiene en el trabajo; regulaciones de las relaciones entre empleadores y asalariados, y cumplimiento por los patrones de los convenios laborales. A estas demandas principales se agregan otras, de carácter más general, como atenciones de salud, vivienda, educación, comercialización de productos de primera necesidad y regulación de sus precios. Todas estas reivindicaciones inmediatas estaban, por cierto, relacionadas con una mayor democratización de la sociedad, a partir de la herencia colonial.

El punto de partida de este proceso fue la existencia de las organizaciones sindicales y el ejercicio de su derecho a huelga, de hecho desde 1900 a 1924, y de de-

recho desde este último año hasta ahora, con suspensiones en los lapsos de dictadura. La democratización de la sociedad se condiciona favorablemente, en efecto, con la consolidación de un sistema de relaciones contractuales, que si bien no suprime la arbitrariedad tradicional de los patrones, la limita, a lo menos, y favorece la conquista de nuevos mejoramientos sociales. La conquista gradual, en el largo plazo, de estos beneficios, representa un progreso en la igualdad de oportunidades de los sectores subordinados, así como un resguardo institucional de sus derechos en una sociedad de clases.

Las grandes huelgas y represiones sangrientas, comparables estas últimas a la violencia y crueldad del período de la Conquista, comenzaron a fines del siglo xix, desencadenándose conflictos y paralizaciones de labores en Iquique, que se extendieron a otros puertos y también llegaron a Santiago. De éstas, alcanzaron una gran magnitud las de diciembre de 1901 y enero de 1902 en dicho puerto, dirigidas por la Combinación Mancomunal de Obreros, de Iquique. Señala Julio C. Jobet: "Durante 60 días, se mantuvieron firmes los distintos gremios del puerto, a pesar de la prisión de Abdón Díaz, presidente de la Mancomunal, y de diversas medidas ensayadas para romperla".[15] Las huelgas se repitieron, enseguida, en Santiago (abril de 1902), en la empresa de Tracción Eléctrica, "con mítines, desfiles, sablazos y heridos", en Antofagasta y Lota (mayo de 1902), Valparaíso (agosto de 1902), Tocopilla (diciembre de 1902 y enero de 1903), donde los lancheros permanecieron paralizados más de 30 días. A fines de enero de 1903 se inició una huelga general de 43 días en la región del carbón, que fue reprimida por fuerzas militares y marinería del navio de guerra Zenteno, con numerosos muertos y heridos.

Las huelgas continuaron en ese mismo año y en los siguientes. En efecto, el 15 de abril de 1903 comenzó un nuevo proceso de movilización y protesta en Valparaíso, que comprometió sucesivamente a los estibadores, tripulantes, lancheros y jornaleros de aduana, paralizando el puerto. Este conflicto desencadenó violentos choques con los rompehuelgas, con muertos y heridos. Los huelguistas realizaron además incendios del edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores, del malecón y otros locales. La represión militar produjo más de 50 muertos, 200 heridos y centenares de detenidos. Restablecido el "orden", una comisión arbitral dictaminó a favor de los huelguistas. Nuevos paros laborales se desencadenaron en Antofagasta, Valparaíso (julio y agosto de 1903), Santiago, Coronel, Taltal y Chañaral. En Lota (enero y febrero de 1904), los mineros estuvieron en huelga durante 30 días;

[15] Julio C. Jobet, *Recabarren y los orígenes del movimiento obrero y et socialismo chileno,* Santiago, PLA, segunda edición, 1973, pág. 152.

en Tocopilla (septiembre del mismo año) pararon las oficinas salitreras, cuya represión estuvo a cargo de tropas y barcos de guerra, con varios muertos, bajo el mando del militar genocida Roberto Silva Renard.

Este movimiento de protesta y resistencia alcanzó una extraordinaria intensidad y violencia en Santiago en el año siguiente. Los trabajadores de esta ciudad, capital de Chile, realizaron el 22 de octubre de 1905 un concurrido mitin, con 30 mil personas, convocado por el Comité Pro-abolición del Impuesto al Ganado Argentino, del cual era miembro Luis Emilio Recabarren. Entonces, el ministerio estaba renunciado y el ejército realizaba maniobras en Quechereguas. En esta oportunidad, una muchedumbre trató de ingresar al palacio presidencial conjuntamente con la delegación que llevaba las conclusiones del comicio, produciéndose un choque con la policía. En el curso del día continuaron los incidentes y en el siguiente se declaró una huelga general que fue reprimida con 70 muertos, 300 heridos y 530 detenidos. "Sobrepasada por las multitudes, la policía se retiró de la capital a reunirse con el ejército; el pueblo tomó posesión de las comisarías. El martes (24) llegó el ejército a Santiago, siendo convertido en campo de batalla. No se supo el número exacto de muertos y heridos".[16]

No obstante la brutal represión, nuevos paros se produjeron en Valparaíso, Pisagua, Coquimbo y Punta Arenas en ese mismo año. En 1906 continuó este proceso de lucha. Primero, los operarios del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia se declararon en huelga el 3 de febrero, a la que se unieron los obreros de la Compañía de Salitre y, enseguida, lo hicieron los obreros portuarios y fabriles. El crucero Blanco Encalada desembarcó tropas con ametralladoras, así como se formaron "guardias de orden" para enfrentar el conflicto. En efecto, el 6 de febrero estas fuerzas represivas atacaron al pueblo, concentrado en la plaza Colón, y las masas desesperadas quemaron agencias, almacenes y diarios. La represión dejó, en suma, más de cien muertos. Además, se clausuró el periódico *La Vanguardia* y se detuvo E. SU personal y al del periódico *El Marítimo.* Apresado también Recabarren, candidato a diputado, fue de todas maneras elegido por el voto popular. Las huelgas continuaron, a pesar de la represión, en Santiago, Concepción, Coronel y Valdivia.

Este movimiento reivindicativo de los trabajadores no se detuvo porque la clase dominante, que controlaba el capital y el poder, no ofreció ninguna satisfacción significativa a las demandas sociales. Las huelgas siguieron en el año 1907 en los principales centros de trabajo del país hasta llegar a la masacre más brutal conocida entonces en la escuela Santa María, de Iquique. ¿Qué sucedió en la escuela Santa María? Jobet lo explica:

[Xb]*Ibidem,* pág. 153.

En diciembre de 1907 se desataron numerosas huelgas en el norte. El 13 paralizó la oficina de San Lorenzo y pronto se propagó a las diversas zonas de la pampa. Los obreros abandonaron los campamentos y en columnas ordenadas bajaron a Iquique. Los obreros de Iquique también pararon. Se reunieron más de 20 000 trabajadores en torno a la escuela Santa María, eligieron su comando, redactaron un pliego de peticiones, aseguraron el normal abastecimiento de alimentos y el problema de la habitación, e impidieron la alteración de la tranquilidad. Estos hechos fueron, incluso, reconocidos por la prensa de derecha.[17]

Tales fueron las condiciones objetivas, indesmentibles, de dicho movimiento, inscritas en la historia real de la lucha social.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Montt ejecutó por medio del general Roberto Silva Renard una masacre que manchó de sangre obrera, una vez más, el uniforme de los militares al servicio del imperialismo. Hay muchos testimonios de la época, así como análisis de historiadores, sobre la magnitud de la represión, pero me quedo con el juicio de Julio C. Jobet.

Más de 2 000 muertos, entre ellos varios obreros bolivianos, peruanos y argentinos, quedaron en las calles de acceso a la escuela Santa María. Rendidos los obreros se les trasladó al Club Sport, donde la masacre continuó; luego fueron embarcados en trenes al interior, con nuevos muertos, ante las numerosas negativas de volver al infierno blanco.

Enseguida, agrega Jobet:

La masacre silenció la pampa y significó un retroceso momentáneo del movimiento obrero; pero pronto se desataron nuevas huelgas a lo largo del país y prosiguió la tenaz lucha del proletariado por su emancipación. El gobierno imitaba la actitud del Presidente francés Thiers, quien después de la represión de la Comuna de París y orgulloso de su "victoria", proclamaba: "el suelo está cubierto con sus cadáveres; este espantoso espectáculo servirá de lección". No se conmovía frente a las justas exigencias de las clases populares y trataba de acallarlas con la represión sangrienta, encomendada a las Fuerzas Armadas.[18]

El capitalismo actuaba con la misma violencia en todo el mundo.

En ese lejano tiempo, la clase trabajadora estaba sujeta a sobreexplotación, con salarios de hambre y jornadas de trabajo de 9 a 12 horas diarias.

[17] *Ibidem*, pág. 155.
[18] *Ibidem*, pág. 157.

> La lucha de clases, obreros contra capitalistas, surgió a raíz de esta dolorosa situación económica y social. La explotación capitalista era despiadada, con bajos salarios, malas condiciones de trabajo, alto costo de la vida, traduciéndose en alimentación deficiente, vestuario escaso, habitaciones insalubres, y una desvalorización sistemática de la moneda, agravadora de las penalidades de la clase obrera.[19]

Las reivindicaciones de los trabajadores insistían, por lo mismo, en aumento de salarios, término del sistema de las pulperías, limitación de la jornada de trabajo. Los objetivos programáticos comprendían aspiraciones sociales más vastas todavía, como prohibición del trabajo nocturno y pago de las horas extraordinarias, seguridades en las faenas, limitación del peso del saco de salitre y de los envases agrícolas, seguro por accidentes del trabajo y pensión de vejez, atención médica gratuita y policlinicos, casas higiénicas para los obreros. Ante estas demandas, el gobierno no prestaba ningún interés, sino que respondía con la represión: la violencia capitalista.

A pesar del impacto terrible de la matanza en la escuela Santa María, de Iquique, la lucha obrera continuó durante 1908, registrándose 29 huelgas importantes: tres en Antofagasta, once en Santiago, tres en Concepción, tres en la zona carbonífera y las restantes en diversos centros de trabajo del país. Las experiencias adquiridas por los obreros en estas movilizaciones de la primera década del siglo xx los condujeron a la iniciativa de buscar su unidad en todo el país, en su doble aspecto: sindical y político. Para asegurar el primero de estos objetivos se fundó la gran Federación Obrera de Chile el 18 de septiembre de 1909 sobre bases mutualistas y con fines de asistencia social, de mejoramiento económico (formación de cooperativas de consumo, crédito en dinero a sus asociados, fomento del ahorro, seguros contra enfermedades, seguros de vida, de desocupación forzosa) y de perfeccionamiento moral y cultural (lucha contra el alcoholismo, creación de escuelas, teatros, bibliotecas, periódicos, realización de conferencias). Además, propiciaba objetivos sindicales más modernos y permanentes, como creación de tribunales arbitrales llamados a fallar las discusiones obrero-patronales, de una oficina del trabajo para facilitar la contratación de los obreros y, por último, la demanda de siempre, todavía no alcanzada, de una jornada de ocho horas y de un salario mínimo.

El primer presidente de la FOCH fue Emilio Cambié, desempeñando este cargo de 1909 a 1919, si bien desde su primera convención nacional, celebrada entre los

[19] *Ibidem.*

últimos días de diciembre de 1911 y los primeros de enero de 1912, se destacó Recabarren como su principal dirigente. Él recorrió el territorio del país para despertar la conciencia de clase de los trabajadores, así como planteó la lucha sindical reivindicacionista, inseparable de la acción política.

> La clase trabajadora debía realizar una doble lucha por medio de la organización sindical para obtener conquistas inmediatas, un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, y otra política, a través de un partido popular, orientada a despertar y definir la conciencia de clase de los trabajadores, y a librar un combate a fondo en contra de la clase dominante y el sistema capitalista.[20]

El fin último era la emancipación económica y social de los trabajadores mediante la instauración del socialismo, objetivo político que se analizará más adelante.

De la confrontación a la negociación

A esta época heroica del movimiento obrero sucedió el período de institucionalización de la lucha de clases de 1924 hasta hoy que fue también muy conflictivo para los trabajadores. Desde la Unión Soviética llegaron los resplandores de la Revolución Bolchevique, de un proceso revolucionario triunfante, que por cierto no pudo menos que impactar profundamente el medio social y político chileno, como sucediera en todo el mundo. Por primera vez se conoció en Chile la participación de los trabajadores rusos, obreros y campesinos, en una revolución social que conmovió a la humanidad, así como el papel de los comités de fábrica y las funciones del control obrero de la producción. Estas ideas produjeron una renovación en los objetivos de lucha del movimiento popular y, a la vez, desataron una aguda lucha ideológica en los partidos y sindicatos. El escenario nacional había evolucionado también por la repercusión de los grandes cambios que había experimentado el resto del mundo al término de la Primera Guerra Mundial.

Como ya se indicó, el Estado oligárquico se sustentaba al comienzo del siglo xx en dos soportes socioeconómicos. El primero era una economía basada en el salitre, en torno a la cual se desarrolló principalmente la burguesía interna, y el segundo se refería a la debilidad de las clases subalternas, esto es, el proletariado urbano y campesino, así como la pequeña burguesía. Ambos factores experimentaron una modificación profunda hacia fines de la década de los veinte, con lo que gravitaron

[20] *Ibidem,* pág. 173.

decisivamente en la transformación económica, social y política de Chile entre 1920 y 1938. Los nuevos sectores de clase en que descansará la lucha social y política en este período experimentaron un crecimiento significativo. Conjuntamente con la expansión de los trabajadores del salitre, el proletariado se extendió en las obras de construcción de ferrocarriles, en el carbón, en el cobre, en la industria manufacturera, contingente social diferenciado que acrecentó cada vez más su conciencia de clase. Por su parte, el desarrollo del aparato estatal, del comercio, de la educación y los servicios precipitó el desarrollo de la pequeña burguesía funcionaria y de los profesionales universitarios.

Tales sectores no tenían ninguna participación significativa en las decisiones políticas en el marco del Estado oligárquico, es decir, no sólo sufrían las restricciones electorales, sino que estaban excluidos de toda expresión política, marginados socialmente. La política era una función reservada a las clases propietarias, y la forma del Estado, presidencial o parlamentaria, no tenía relación con la pugna entre clases antagónicas, sino que tocaba a la manera de resolver los conflictos limitados entre las clases dominantes. El Estado era, pues, excluyente y se sustentaba en una estrecha base social, actuación que generó el proceso de su deslegitimación. En los años 20, nuevos grupos sociales se hicieron presentes en la vida pública en virtud de las transformaciones que experimentó la economía. Destacaron entre ellos los agricultores de las provincias del sur, los industriales, los comerciantes, los profesionales universitarios, los funcionarios del Estado y los artesanos. Todos ellos recibieron su inspiración ideológica del positivismo y de las doctriias de solidaridad provenientes de Europa, reconociendo militancia por lo general en el Partido Radical y en el Partido Demócrata.

En el curso de este tiempo, el movimiento de masas experimentó una evolución continua. Desde una orientación de autonomía política, que supone el enfrentamiento del aparato estatal, a través de acciones directas, políticas y sindicales, se pasó hacia la negociación. Los sindicatos surgidos espontáneamente, sin sujeción alguna a la ley, que tampoco existía, se institucionalizaron a través del Código del Trabajo, promulgado en 1924, sometiéndose lentamente a sus disposiciones. A su vez, los partidos obreros, Comunista y Socialista, hicieron otro tanto, evolucionando de posiciones revolucionarias a la simple participación en el juego político de una democracia liberal todavía precaria y deformada. En el caso del primero, por los cambios bruscos de la política soviética, que saltaba de la lucha por el poder de la primera fase de la Internacional Comunista a la de Frente Popular contra el fascismo. En el caso del segundo, se observa una alteración parecida que va desde la República Socialista al Frente Popular.

No obstante, la ofensiva del movimiento obrero prosiguió durante la segunda década del siglo xx sin tregua alguna. Su movilización estuvo a cargo de los obreros portuarios en 1917, de los del carbón, de los de Santiago y de Magallanes en 1919. Entre este año y 1923 se desencadenó un movimiento huelguístico intermitente que coincidió, primero, con la campaña electoral que condujo a Arturo Alessandri al gobierno y, segundo, con la ola de protesta que generó en los sectores populares el incumplimiento de las promesas políticas del nuevo presidente de la República. En la capital, la Asamblea Obrera de la Alimentación realizó mítines de hambre con una enorme participación de masas, cuyo punto culminante fue la huelga general de los días 3 y 4 de diciembre de 1919. La situación social se hizo crítica en Santiago. El derrumbe de la actividad salitrera trajo consigo una gran desocupación, invirtiendo el proceso migratorio interno producido en el lapso de bonanza minera. En este sentido, la afluencia de cesantes hacia la capital precipitó una extraordinaria agitación para obtener trabajo o la atención por parte del Estado a través de subsidios especiales.

A las nuevas luchas obreras, el presidente de la República Arturo Alessandri respondió, como siempre, con la más severa represión. Magallanes en 1920, Santiago en 1921, San Gregorio en el mismo año, La Coruña en 1925 fueron otros tantos actos represivos de una violencia brutal. En el norte se reprimió a los trabajadores despedidos que reclamaban desahucio. Es el caso de la oficina salitrera San Gregorio, de propiedad de capitalistas ingleses, donde el 4 de febrero de 1921 el regimiento Esmeralda mató a casi un centenar de obreros y dejó otros tantos heridos. Más cruenta fue todavía la represión en la oficina de La Coruña, en la cual el ejército atacó a 1 900 obreros mediante bombardeo de artillería. Este fue el más duro golpe recibido por la FOCH que, para entonces, contaba con 200 mil afiliados.

La resistencia obrera era conducida por la Federación Obrera de Chile y el Partido Obrero Socialista, ambas organizaciones orientadas por Recabarren. En el período de gobierno de Alessandri (1920-1925) se constituyeron estructuras de los trabajadores del campo —los consejos federales— así como se realizaron huelgas de este sector bajo el aliento de la FOCH. SUS demandas se referían, en general, al mejoramiento de las remuneraciones y a tierras para producir por su cuenta. Un papel decisivo desempeñaron en este proceso los obreros del salitre, que habían perdido sus empleos a raíz de la crisis de esta explotación y que, por lo tanto, retornaron hacia el centro y sur del país, buscando trabajo nuevamente en el campo, de donde procedían originariamente.

La organización agraria continuó su desarrollo ininterrumpido. En los últimos días de octubre de 1921 se celebró la primera Convención de Campesinos convo-

cada por la junta provincial de Santiago. Esta reunión acordó luchar por la jornada de ocho horas; por un salario mínimo uniforme para todos los trabajadores agrícolas, sin distinción de voluntarios e inquilinos; por la eliminación de las pulperías de los latifundistas, por la abolición de las multas y por el mejoramiento de la vivienda. La Sociedad Nacional de Agricultura, el antiguo bastión de los terratenientes, reclamó ante el gobierno contra la acción de las nuevas organizaciones campesinas. El Presidente Alessandri condenó al movimiento, considerando a los dirigentes como enemigos del progreso del país y exigiendo a los trabajadores rurales que no siguieron las directivas de los obreros urbanos, sino que se sometieran a sus patrones, los dueños de la tierra.

Los sectores medios, que habían apoyado la postulación presidencial de Alessandri, se incorporaron también al movimiento sindical. En 1924 se fundaron la Unión de Empleados de Chile y la Asociación General de Profesores. Bajo el influjo del movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918, la Federación de Estudiantes de Chile impulsó sus luchas en un doble sentido. Consciente de que la reforma educacional sólo será real en el amplio marco de la transformación global de la sociedad, se vinculó estrechamente al movimiento obrero y radicalizó sus demandas. Esta Federación se había fundado en 1906 y, desde entonces, congregaba en sus centros de estudiantes, a intelectuales, profesionales y en general trabajadores, que sustentaban ideas socialistas y anarquistas. Sin una teoría homogénea, esta organización rechazaba el sistema capitalista y difundía propuestas de cambios sociales. Por su solidaridad con los obreros sufrió los rigores de la represión en forma similar a éstos. Como expresión de os sectores medios ilustrados, la FECH participó en el movimiento social iniciado en 1920, apoyando al caudillo de la Alianza Liberal, Alessandri, para romper con él a raíz de la masacre de San Gregorio.

El gobierno se esforzó por institucionalizar la protesta de los asalariados mediante la promulgación del Código del Trabajo, cuyo proyecto fue presentado al Congreso Nacional el 8 de junio de 1921. El movimiento obrero había logrado con anterioridad leyes sociales sobre habitaciones obreras en 1906, descanso dominical en 1907, protección a la infancia en 1912, obligación de colocar asientos para los empleados de comercio en 1914, y accidentes del trabajo, en 1917. El Código del Trabajo sólo fue aprobado el 8 de septiembre de 1924 por el Congreso Nacional, bajo la presión de la juventud militar, liderada por los mayores Marmaduque Grove y Carlos Ibáñez.

El movimiento obrero experimentó un retroceso a raíz de la crisis económica y la represión aplicada por la dictadura del general Ibáñez. Pero se reorganizó, apro-

vechando la vigencia del Código del Trabajo, resurgiendo la Federación Obrera de Chile, que había sido destruida por la dictadura, y constituyéndose la Confederación General del Trabajo, de orientación anarcosindicalista. En este período, el sectarismo comunista impidió la unidad de la clase trabajadora, atacando al sindicalismo legal y dicha Confederación, la que a su vez rechazaba el sindicalismo manipulado por el Partido Comunista. Era el tiempo del ultraizquierdismo de la Internacional Comunista. Estas contradicciones tenían un sustrato ideológico, que llegó a Chile como el eco de resonantes controversias que surgieron en torno a la Revolución rusa, después de la muerte de Lenin. Se trata de la querella entre el estalinismo y el trotskismo, a la cual se sumó el anarquismo, que había sobrevivido políticamente al período heroico de la lucha obrera y cuyas repercusiones en el pensamiento y la acción de los partidos obreros y el movimiento popular todavía no se apagaban.

Entonces se discutieron con pasión concepciones encontradas sobre estrategia y táctica de la revolución socialista, sobre organización y métodos de lucha. En este sentido, chocaron, primero, las visiones del proceso revolucionario de los anarquistas y de los comunistas. Los primeros partían de la necesidad imperiosa de destruir el Estado burgués y proyectaban el papel fundamental de la clase trabajadora, a través de sus organizaciones autónomas, en la estructuración y control de la economía y de las instituciones políticas, para transformar la sociedad. Los segundos excluían, después de la conquista del poder, toda organización paralela al partido, como, entre otras, los comités de fábricas y sindicatos independientes, porque el partido representaba la voluntad de la clase, por lo que todas sus aspiraciones debían canalizarse a través de él. Los trotskistas sostenían a su vez que para evitar el capitalismo de Estado y la burocracia debía asegurarse una forma de participación y control a la clase obrera en el proceso revolucionario. Fue la primera advertencia sobre la degeneración creciente de la Unión Soviética, con su secuela de explotación del trabajo humano y de represión terrorista.

En este nivel ideológico y organizativo, las luchas de los trabajadores se intensificaron de nuevo debido a la política social de la segunda administración de Arturo Alessandri, que favoreció al sector empresarial en desmedro de los asalariados. En 1933, apenas iniciada la restauración oligárquica, se produjo la huelga general de los maestros, que originó la fundación de la Unión de Profesores de Chile y terminó con la destitución de centenares de ellos. Más tarde, en febrero de 1936, estalló la huelga de los ferroviarios, enfrentada por el gobierno con administración militar de la empresa, estado de sitio, arrestos colectivos, relegaciones y también con la eliminación de muchos trabajadores.

Sin embargo, fueron los campesinos quienes irrumpieron con la mayor violencia en el escenario social, continuando el proceso de ascenso comenzado en la dé-

cada anterior. Ellos organizaron sindicatos agrícolas, en los cuales participaron obreros, inquilinos, medieros y minifundistas. En sus plataformas de lucha exigieron término de los desalojos a los arrendatarios e inquilinos, rebaja de las rentas de alquiler, mejoramiento de la vivienda, derecho a la sindicalización, salarios mínimos y, en general, respeto a la legislación laboral. Una secuela de rebeliones campesinas, con participación de sectores mapuches, en las provincias de Cautín, Valdivia y Magallanes, culminó en la región del Alto Biobío, donde se ejecutó la despiadada matanza de Ranquil. El gobierno de Alessandri, a pedido de los terratenientes de la zona, dispuso el lanzamiento o desalojo de un grupo de colonos que recién habían organizado un sindicato. Después de deambular en pleno invierno, incitados por el hambre, asaltaron una pulpería. La brutal represión provocó la insurrección de más de un millar de campesinos, la mayoría de los cuales se rindió al término de una verdadera cacería humana en la que murió un centonar de ellos. Los demás fueron sometidos a proceso por "alzamiento a mano armada", siendo condenados algunos a la pena de muerte, pero finalmente indultados.

La conciencia socialista

La sangre y la letra

Paso a paso, simultáneamente con la lucha sindical, el movimiento obrero impulsó su objetivo político, esto es, la lucha por la transformación de la sociedad, para lo cual tuvo que forjar su pensamiento teórico: la formación de la conciencia socialista. La burguesía desarrolló su pensamiento a partir de la Época Moderna, en un mundo proveniente del feudalismo, en tanto que la clase obrera configuró el suyo posteriormente, en el mundo generado por el capitalismo. Durante el siglo xIx llegaron hasta Chile las repercusiones de la acción y los argumentos esgrimidos en las luchas generalizadas en los países europeos. Los nuevos términos de este combate fueron socialismo contra capitalismo. En páginas anteriores he señalado como se daba la lucha de clases en las primeras décadas del siglo xx, por lo que ahora procuraré exponer cómo la clase obrera revistió con una expresión filosófica —la filosofía del marxismo— sus convicciones adquiridas en la vida cotidiana. Explicar su experiencia social, su forma de pensar, así como de discutir con la clase dominante la contradicción de sus valores con los de sus adversarios sociales, constituye la historia anónima de los trabajadores, que aspira a superar a la revolución capitalista por la revolución socialista.

Por eso, los sin voz, las masas hasta entonces mudas, tomaron la palabra y expusieron sus principios y aspiraciones, sus desafíos y tareas, que suponían no sólo luchar contra sus explotadores sino con ellas mismas, contra su pasado de subordinación, del cual no podían emanciparse exclusivamente con su lucha social. Requerían forjar, poco a poco, una nueva visión del mundo y la sociedad, contraria a la de la burguesía, con valores de vida que le confieren un sentido humano a esa lucha. Se trataba de una concepción propia de su clase, que con el progreso de las co

municaciones llegaba de otras latitudes, de países más desarrollados. Como el burgués moderno, el obrero contemporáneo empezó a superar las fantasías de la Iglesia para enfrentar el mundo real generado por la ciencia. En este rnedio se formó la conciencia de la clase obrera y su autonomía ideológica y política. Es la letra vibrante que emana de la sangre derramada.

En Chile se desarrolló un pensamiento socialista entre fines del siglo xIx y la tercera década del siglo xx, hasta la fundación del actual Partido Socialista en 1933. En este proceso se distinguen diversos pasos de maduración teórica, como se puede percibir en la antología *El pensamiento socialista en Chile,* que cubrio el período 1893-1933.[1] En medio de las luchas reivindicativas del movimiento obrero surgieron uno tras otro numerosos dirigentes populares que difundieron sus críticas al capitalismo y sus propuestas positivas sobre el socialismo. Las fuentes de este: movimiento teórico provenían de Europa, desde donde Santiago Arcos y Francisco Bilbao lo habían recogido y expuesto anteriormente en Chile, en la mitad del siglo xIx. Desde fuera del movimiento obrero, Víctor José Arellano expuso su pensamiento con conocimiento del nuevo concepto del socialismo científico formulado por Marx y Engels.

Es notable la réplica de Arellano a la pastoral del arzobispo de Santiago, Mariano Casanova. Su importancia radicó en el hecho de ser la primera reflexión fundada desde el punto de vista socialista, de la relación entre religión y ciencia, en la que rebate las ideas equivocadas de aquel jerarca de la Iglesia, sobre la naturaleza, el desarrollo histórico, la función de la Iglesia y los fines del socialismo. Sostuvo Arellano: "Vuestra última pastoral contiene errores tan graves que no puede un honrado libre pensador dejarles pasar sin contestación". Comenzó por rechazar el origen divino que el arzobispo atribuye a la religión católica.

> Según Moisés, seis mil años ha que vuestro Dios creó la tierra para colocar en ella a criaturas formadas a su imagen y semejanza; seis mil años que creó asimismo el sol, la luna y los demás planetas —el cielo, en una palabra— para alumbrar la tierra y manifestarnos su poder.

En contraposición a esa cita, señala con ironía que entonces China tenía una civilización de 54 mil años, se desconocía la existencia de América y la extensión de África, Asia y Europa. Con un positivo conocimiento científico, Arellano describió la ignorancia y los crímenes de la Iglesia a través de su historia.[2]

[1] Eduardo Deves-Carlos Díaz, *El Pensamiento socialista en Chile,* Santiago, Ediciones Documentas, 1987.

[2] Víctor José Arellano, *El catolicismo y el socialismo,* folleto, Santiago, 1893.

En otra parte de su opúsculo, defendió al socialismo condenado por el arzobispo. "La doctrina socialista es antisocial, había dicho Casanova, porque tiende a trastrocar las bases en que Dios, autor de la sociedad, la ha establecido." Exclamó este hombre del siglo xIx:

> La doctrina socialista tuvo por cuna a la Grecia. Fue Platón quien la presentó al mundo en sus libros memorables *La República* y *Las* leyes[...]En su libro *Las Leyes*, Platón proclama la igualdad absoluta por el orden, el amor a la justicia y la conciencia del deber.

En seguida, arremetió contra otra de las falsedades del arzobispo. "Dice su reverendísima que 'la desigualdad de condiciones' no es obra del hombre sino de la naturaleza, o sea, de Dios, que reparte desigualmente sus dones". Pero él agregó que los socialistas no culpan a Dios de los males que aquejan al ser humano, sino a la división de la unidad del hombre con sus semejantes (la división de clases).

Arellano prosiguió su razonamiento defensivo. "Su ilustrísima dice que 'el socialismo tiene por consigna la destrucción o despojo de la propiedad particular[...]y el repartimiento igual entre todos los miembros de la sociedad de la riqueza". Negó categóricamente esta afirmación:

> Los socialistas no sólo no admiten sino que rechazan con todas sus fuerzas este repartimiento igual de la propiedad, que constituiría a sus ojos una violencia mayor, una injusticia más indigna y escandalosa que el repartimiento desigual que tuvo lugar por la fuerza de las armas y por la conquista. A lo que los socialistas aspiran, dice es a la abolición de todos los privilegios de nacimiento, sin excepción, y que los instrumentos de trabajo, tierras y capitales sean explotados por asociación, de modo que haya una distribución más justa.

Rechazó la afirmación del jerarca religioso de los poderosos, cuando sostuvo: "Según la voluntad de Dios, lo superfluo de los ricos debe ser herencia de los pobres". Postuló por el contrario que "A los ojos del socialismo, ningún ser necesita de lo superfluo de los demás. Los bienes serán adjudicados 'a cada cual según su capacidad, a cada capacidad según sus obras'. En eso consiste la justicia social".

Dejó para el final de su réplica la más cínica de las afirmaciones religiosas defensoras de la sociedad de clases, expuesta por Casanova: "Nada tienen en este mundo (los pobres), pero pueden tener todos los tesoros del cielo en el otro". Su respuesta fue, en efecto, categórica:

> Ah, sabía yo que habríais de llegar allí. ¡Qué ingenio! Qué consuelo:: los de Su Señoría: os quedáis con todo lo que vale positivamente, disfrutáis de goces y comodidades, rehuís el trabajo, y, en cambio, nos dais a nosotros lo superfluo de vuestra mesa, nos arrojáis de la sociedad, nos encomendáis la carga del trabajo, nos condenáis a la miseria y a las prisiones, y todo, ¿a cambio de qué? ¡de los tesoros del otro mundo!

De ese mundo que, a fines del siglo xx, el Papa Juan Pablo II ha dicho que no existe. Expresa Arellano:

> Que nadie se elimine del trabajo; que las leyes tengan por objeto mejorar la clase indigente y establecer progresivamente la igualdad; nada de impuestos sobre la pobreza ni sobre los objetos de primera necesidad y el trabajo; instrucción obligatoria.¡He ahí lo que necesitamos, lo que pedimos los socialistas!

Arellano fue sin duda un propagandista culto del socialismo.

En un segundo ensayo, titulado *El capital y el trabajo,* publicado en 1898, se apoyó en el pensamiento de Marx y Engels, para sostener que existe un antagonismo entre ambos factores de la producción, a la vista de la situación de Chile entonces. Mencionó además a los más notables economistas y pensadores de ese tiempo, desde Adam Smith a John Stuart Mill, para fundamentar sus observaciones. Citó *El capital* de Marx para demostrar el sometimiento de los trabajadores al sistema de explotación:

> La ley de siempre equilibra el progreso y la acumulación del capital y el exceso relativo de población; sujeta más sólidamente el trabajo al capital que las cadenas de Vulcano que retenían a Prometeo en su roca. Esta ley establece una correlación fatal entre la acumulación del capital y la miseria, de tal suerte que la acumulación de riqueza en un polo, implica igual acumulación de pobreza, de sufrimiento, de ignorancia, de embrutecimiento, de degradación moral, de esclavitud en el polo opuesto, en la clase que produce su propio producto en forma de capital.

La situación de explotación en que viven los trabajadores confirma el pensamiento de Marx, lo que se expresa en bajos salarios, pago de éstos en fichas, excesivas jornadas de trabajo, altos precios de los artículos de primera necesidad, elevado costo de las importaciones de productos que podían fabricarse en el país.[3]

[3] Víctor José Arellano, *El capital y el trabajo* (folleto), Tipografía Nacional de P. M. Pino, Valparaíso, 1886.

El socialismo ácrata

A la soledad de Arellano, le sucede el socialismo ácrata, difundido desde dos agrupaciones socialistas: el Centro Social Obrero y la Agrupación Fraternal Obrera, fundados en 1896. Ambas organizaciones difundieron las ideas generales del socialismo al mismo tiempo que plantearon problemas relacionados con la explotación de los trabajadores, uniendo así la teoría y la práctica. En el año siguiente se fusionaron, constituyendo la Unión Socialista, que a su vez se convirtió en el Partido Socialista en 1898. En esos años, comenzó la generación de la prensa obrera, desde cuyas páginas sus dirigentes difundían su pensamiento político, la denominada "acracia socialista", que planteaba la abierta lucha contra el capitalismo para construir una nueva sociedad. Entre aquellos destacaron Luis Olea, quien diez años después tuvo una participación especial en el movimiento reivindicativo que culminó en la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique, provocada por los militares. También formaron parte de esa generación Alejandro Escobar, Esteban Cavieres y otros, cuyas ideas comentaré en seguida.

Luis Olea fue un continuador de la difusión del socialismo, ya iniciada en folletos y hojas sueltas. Para él "sería una vergüenza que al despuntar la aurora del siglo xx, los pueblos no hayan empezado la conquista de la Nueva Era de emancipación social, en cuyo horizonte, hoy tan sombrío, alumbrará mañana esplendoroso el sol de la libertad". En primer lugar relativizó los valores de Dios, Patria, Ley y Propiedad, que se utilizan para subyugar a los trabajadores en beneficio de sus explotadores, para preguntarse, en seguida, de qué le sirven a los proletarios las "conquistas de las artes y el saber", si ellas sólo han beneficiado a los privilegiados. De nada les sirven, dijo, los pasos que se dan en el progreso material, el avance en el vapor y la electricidad, aplicados a la industria "mientras no haya conquistado primero la emancipación bajo el régimen de la libertad sin trabas y de igualdad absoluta". Hasta que pueda exclamar "con nosotros" en presencia de tanta ignominia: "Filosofía humana, ¿cuál es tu obra? ¡Derechos del hombre! ¿dónde os encontráis?"[4] En este articulo se anticipó además al fenómeno del desplazamiento del hombre (obreros) por la máquina, que explotaría en los países avanzados después de la Primera Guerra Mundial, y que Chaplin inmortalizaría en su film *Tiempos modernos.*

En el campo de la filosofía social, Olea reflexionó en torno a la libertad de pensamiento y la tolerancia, esa gran palabra difundida en la época moderna, impugnando

[4] Luis Olea, "Nuestra propaganda al proletariado", *El Proletario,* N° 2, de 10 de octubre de 1897, Santiago.

"el salvaje aforismo que sostiene 'el que no piensa como pienso yo debe eliminarse de la vida humana' que impregna la política de la burguesía (la derecha chilena) durante todo el siglo xx". Además de la crítica social, formuló una cuestión de principios.

> Nosotros, los socialistas revolucionarios, no queremos contrariar el desenvolvimiento de las leyes de la naturaleza; no queremos la destrucción ni aun la lucha ardiente que suele conducir a fatales extremos, sino la lucha empeñada con los medios pacíficos de la razón contra la imposición[...]queremos que se reconozcan nuestros derechos para pensar libremente y emitir nuestras opiniones con toda libertad, sin trabas que aherrojen la libre discusión[...]Pero, por acaso tenemos algún derecho desde el momento en que los gobiernos nos declaran fuera de la ley como sostenedores de doctrinas estrafalarias.

Olea planteó a fines del siglo xix un conflicto vigente hasta la dictadura de Pinochet, "porque la declaración de dejar 'fuera de la ley' a la oposición se impone como principio de autoridad, allí concluye la libertad". Es la lucha por la tolerancia, que pasó por el rechazo de la ley "maldita" de 1948 y el Artículo 8º de la constitución de 1980, que fuera derogado por la reforma constitucional de 1989.

En el mismo año 1897, otro dirigente obrero, Alejandro Escobar, unió a la crítica social la afirmación de la lucha por el poder. Para llegar a la meta de su proyecto, el Partido Socialista, al que perteneció Escobar, proclamó dicho objetivo, explicando a continuación este proceso:

> La conquista del poder, no se hará por la guerra de cada explotado contra su explotador (atentado) ni por la de todos los explotados contra todos los explotadores (rebelión), sino por la científica aplicación combinada de las leyes naturales de Carlos Darwin, con las leyes económicas de Carlos Marx, o sea, la proximidad de la última fase de la evolución natural, la revolución económica, político-social.[5]

En otros escritos, Escobar analizó los conceptos de patria y guerra, cuando recién había terminado la contienda del Pacífico y explotaban otras conflagraciones en el mundo. Ironizó sobre el patriotismo de los capitalistas, que niegan este valor con su comportamiento social, como "...los banqueros que emplean sus capitales en otros países, donde mayor interés le aporten, sin consultar para riada el adelanto de su patria, y los empresarios o agricultores colocan los productos de su suelo y el trabajo de sus connacionales, en los mercados extranjeros, donde alcancen mayor

[5] Alejandro Escobar, "Nuestra respuesta", *El Proletario,* N° 2, de 10 de oct ubre de 1897.

precio", sin considerar antes las necesidades de sus "compatriotas". Éste es aún un problema actual, del siglo xxi: ¡la fuga de capitales!

La explotación de los trabajadores y la acumulación capitalista es otro tema que ocupó la atención de estos luchadores sociales. Esteban Cavieres lo planteó en 1902, expresando:

> Es admirable observar la facilidad que tienen para enriquecerse los capitalistas o explotadores del trabajo de los obreros, en todas partes del mundo, al mismo tiempo que los productores van arruinándose más y más, hasta llegar al bárbaro extremo de que en diversas partes del globo, miles de trabajadores perecen de hambre.

En este camino, señala la "negra historia" de los Edwards, Gallo, Matte, Besa, Cousiño, Subercaseaux, Vicuña, etcétera. Todos ellos, dice, enriquecidos con la explotación del trabajo de los obreros, "que han dejado su existencia misma en las minas, en la agricultura, en los ferrocarriles, en la industria fabril, etcétera. Para enfrentar esta situación promueve las sociedades de resistencia que "imponen por medio de la unión un salario mínimo y una jornada de trabajo más en armonía con el cuerpo humano..." hasta alcanzar una sociedad en la que cada cual consuma según sus necesidades y trabaje según sus fuerzas. La visión que tuvo de la sociedad de clases, con la brutal explotación del capitalismo, lo llevó a declararse un ácrata. "Sí, por todo esto, soy un libertario. Sí, me llamo rebelde. Sí, por esto, me llamo anarquista".[6]

Desde el punto de vista colectivo, la definición de por qué ser del Partido Socialista de ese tiempo es digna de destacarse, y se publicó bajo el título de *Somos socialistas.* Las razones de esta posición son varias. En primer lugar, "porque luchamos por la implantación de un sistema social en que todos los medios de producción estén socializados, en que la producción y el consumo se organicen libremente, de acuerdo con las necesidades colectivas, por los productores mismos, para asegurar a cada individuo la mayor suma de bienestar, adecuado en cada época al desenvolvimiento progresivo de la humanidad". En segundo lugar, "porque consideramos que la autoridad política representada por el Estado es un fenómeno resultante de la apropiación privada de los medios de producción, cuya transformación en propiedad social implica, necesariamente, la supresión del Estado y la negación de todo principio de autoridad" En tercer lugar, "porque creemos que a la supresión de todo yugo económico y político seguirá necesariamente la de la opresión moral,

[6] Esteban Cavieres, "Las sociedades de resistencia n", *La Luz,* N° 8, 2ª quincena, 1902, Santiago.

caracterizada por la religión, la caridad, la prostitución, la ignorancia, la delincuencia, etcétera". En cuarto lugar, "porque, en resumen, concebimos al individuo libre de toda imposición o restricción económica, política y moral, sin más limite a su libertad que la libertad igual de los demás".[7] Es una definición teórica correcta para su tiempo.

En este mismo sentido, complementariamente se dio a conocer el Programa Mínimo del Partido Socialista, que comprendía las reivindicaciones laborales de los trabajadores, tales como la jornada de ocho horas, prohibición de todo trabajo industrial a menores de 12 años, pago de doble remuneración al trabajo nocturno, igualdad de salarios por un mismo trabajo, atención preferente a los trabajadores agrícolas y mineros, responsabilidad de los patrones en accidentes del trabajo. Además planteaba otras políticas y medidas para mejorar la situación social del país, tales como impuesto directo y progresivo sobre la renta; abolición de los monopolios y privilegios; protección a las industrias y gravámenes a los artículos de lujo, instrucción laica, gratuita y obligatoria hasta los 12 años, creación de escuelas e institutos nocturnos, talleres profesionales y agrícolas, sostenidos por el Estado, mejoramiento de la higiene y salubridad pública, mediante atención médica y medicinas gratuitas para los pobres; protección de niños y ancianos desvalidos, abolición de la pena de muerte y de azotes, así como reforma del sistema pen tenciario, sustituyendo las cárceles por colonias de trabajo, reforma del Estado y separación de éste y la Iglesia, elección del poder judicial por votación popular y por tiempo determinado, sufragio universal y revocabilidad de los representantes en caso de no cumplir el mandato de sus electores, y supresión de los ejércitos permanentes.

Hacia un nuevo camino

En este lejano tiempo, el movimiento obrero dio un nuevo paso, desarrollando el llamado socialismo "científico", a través del Partido Obrero Francisco Bilbao y el Partido Socialista, que se organizó como continuación y perfeccionamiento del anterior. El primero se creó en 1898, generando una declaración ce principios y un programa. El segundo se fundó en 1900, agregando a su lucha contra la oligarquía su oposición al anarquismo. En esta nueva experiencia destacó Alejandro Bustamante como el principal inspirador. El programa del Partido Obrero Francisco Bilbao

[7] Partido Socialista, "Somos socialistas", *El Martillo,* N° 1, de 3 de julio de 1898, Santiago.

comprendió una profesión de fe y en seguida las bases o plataforma programática. En el primer aspecto, parte de la división de clases en la sociedad de su tiempo, destacando las desigualdades existentes. Por un lado, "la aristocracia dominante que, siendo dueña absoluta del suelo y de los elementos de trabajo, dispone de todas las fuerzas coercitivas del Estado para defender sus injustas regalías y privilegios..." y, por el otro, "el proletariado, que no poseyendo más que la fuerza vital de su brazo, es la clase oprimida". Esta división impone la lucha de clases, para la cual el partido se dio un programa democrático en el que "pondrá todos los medios que estén de su parte para obtener la emancipación social, económica, política y religiosa de todos los habitantes del Estado".

El Partido Socialista, en su programa, más amplio que el de su antecesor, incorporó nuevas aspiraciones de los trabajadores. Éstas fueron: reforma de la constitución, que establezca un gobierno central y un congreso unitario; elección popular de intendentes, gobernadores y jueces; autonomía de los poderes del Estado. Elección simultánea de presidente de la República, senadores y diputados, con duración de tres años en sus funciones. Completa libertad de imprenta, de conciencia, de reunión y de palabra. Disolución del ejército permanente, condenación de la guerra como una calamidad pública. Justicia gratuita y jurados para fallar toda clase de delitos. Devolución de los bienes de la Iglesia al Estado. Salario mínimo de acuerdo con los precios de los artículos de primera necesidad. Construcción fiscal y municipal de casas para obreros, pagaderas con el arriendo a largo plazo. Responsabilidad pecuniaria de los patrones en los accidentes del trabajo. Remoción de los representantes populares por el partido que los elige, si no representan el programa aprobado. Establecimiento de un jurado permanente para dirimir los conflictos que se susciten entre los trabajadores y los patrones. Reforma agraria que proteja a los inquilinos y limite la propiedad de la tierra, así como promueva la colonización de terrenos baldíos del Estado. Este programa fue perfeccionado en 1900.

La figura más importante de este partido fue Alejandro Bustamante, quien escribió en periódicos y folletos. El escrito principal fue el *Catecismo Socialista*, publicado en 1900, en el que se realiza un diálogo, sobre la base de preguntas y respuestas en el taller, entre un demócrata y un socialista. De este texto pueden inferirse diversas definiciones, como la de ser socialista en cuanto "ser partidario de la igualdad del hombre y la mujer ante sus semejantes, para disfrutar con idéntico derecho de las leyes naturales, en razón directa de su trabajo o capacidad, pues el socialismo científico no acepta el injusto monopolio del capital...". Distinguía tres tipos de socialismo: el revolucionario o anarquista (que preconiza la propaganda armada), el evolutivo, que "funda su resistencia a los abusos del capitalismo en la organización

de gremios, para que impongan a los patrones sus pretensiones por medio de huelgas y barricadas", y el científico, que sostiene que "cada hombre debe poseer en relación a su trabajo..." Este es conocido también como socialismo democrático, que "no rechaza la organización de los gremios de resistencia, sino que por el contrario los fomenta... y en algunos casos justifica las huelgas como suprema y dolorosa necesidad de defensa contra la explotación".[8] En seguida, en este catecismo se formularon definiciones sobre diversas materias relacionadas con la lucha por el socialismo, destacando la relación con el socialismo de Argentina, representado por Juan B. Justo y José Ingenieros.

Recabarren: un paso adelante

El movimiento obrero experimentó con Recabarren un proceso ce maduración teórica que atravesó la propia vida y acción de este líder revolucionario. En su trayectoria se distinguen diversas fases, en las que va modificándose su propia concepción del socialismo. En sus primeros artículos, que datan de 1905, cuando Recabarren se desempeñaba como dirigente del Partido Demócrata y presidente de la mancomunal de Tocopilla, no diferenciaba con claridad las ideas de democracia, socialismo, acracia y comunismo. Rechazaba la "revolución armada", propiciando la "acción metódica y consciente del pueblo". En una segunda fase, empezó a considerar las diferencias entre democracia y socialismo, lo que lo llevó a separarse del Partido Demócrata para fundar el Partido Obrero Socialista. Su exilio en Argentina lo puso en contacto con el Partido Socialista de ese país, donde conoció una brillante elite de intelectuales que influyó en su maduración teórica. Su apertura a las experiencias internacionales contribuyó, por último, a la formulación del concepto de independencia de clase, de una política de autonomía ideológica, hasta llegar al comunismo, cuya causa victoriosa en la Revolución de Octubre de 1917, en Rusia, él abrazó hasta su muerte ocurrida en 1924.

En su larga e incansable lucha revolucionaria, Recabarren dio a conocer un trabajo de difusión doctrinaria de mayor alcance, bajo el título de *El Socialismo.* Este librito, como él lo llamara, tuvo una clara orientación didáctica, Por lo que parte con la pregunta: ¿Qué es el socialismo? Su respuesta es categórica: La base esencial del socialismo consiste en la abolición o transformación de lo que ahora se llama propiedad privada, planteando en su reemplazo la constitución de la propiedad colectiva

[8] Alejandro Bustamante, *Catecismo Socialista,* 1900, Santiago, Imprenta Franco-Chilena.

o común. El socialismo, en suma, promueve el cambio de la sociedad para hacer posible una vida social más justa que, eliminando el pauperismo o miseria de la inmensa mayoría de la sociedad, de la clase trabajadora, establezca nuevas bases de trabajo y convivencia de los seres humanos. Para explicar históricamente esta transformación radical, Recabarren recurrió, como ejemplo, a los cambios sucedidos en el mundo moderno, a partir de la Revolución francesa, a través de la cual la burguesía abolió el derecho "divino" de los reyes y expropió la propiedad feudal para imponer la propiedad individual. Confirma este fundamento de las revoluciones, señalando igualmente que en América la propiedad privada se constituyó por medio de la violencia y el despojo, por la conquista de los pueblos aborígenes y, después de la independencia de España, por la expropiación de los monarquistas.

En el camino histórico de los cambios constantes en las sociedades humanas, se detiene en su análisis en diversos pasos sucesivos. La acción revolucionaria violenta, que predominó en el mundo en ciertos períodos, tiende a morigerarse, pasando a adquirir una modalidad legal. El socialismo es revolucionario, más que por sus métodos, por sus transformaciones sociales, por su tendencia perenne al cambio, porque la historia del mundo es la historia de las transformaciones y del progreso. Este proceso, según el líder obrero, proyecta una perspectiva en el tiempo, "desde el pasado hasta hoy", en que se habían realizado avances tecnológicos y materiales (la revolución industrial, de los transportes y las comunicaciones) al mismo tiempo que se avanzaba también en los cambios sociales. Para seguir progresando en los comienzos del siglo xx, "desde hoy hacia el futuro" se requieren nuevos medios, más fáciles y favorables. Él los señaló explícitamente: "El libro, la tribuna, el periódico, el diario, el folleto, la conferencia, el teatro, la organización, su representación en congresos y municipios[...]todos esos medios cada día más poderosos, acercan la era de la vida socialista..." Esta era la esperanza de Recabarren. Por cierto, se quedó corto, porque no alcanzó a conocer la radio, la televisión, la computación, internet y en general todo el fantástico mundo de las comunicaciones.

Las razones históricas que justifican la perspectiva del socialismo son complementadas por las razones científicas y económicas, "que están más estrechamente ligadas a la vida presente". La riqueza es producto común del trabajo y la inteligencia de la humanidad, durante miles de años, conjuntamente con el capital y la tecnología. "El capitalismo continúa formándose en el presente, y aumentándose incesantemente con el fruto del trabajo que no se paga a los obreros, puesto que hoy día a un obrero que produce diez le dan como salario dos. El resto pasa a ser capital". Éste se formó en el pasado, expresó, con el trabajo realizado por millones de esclavos a quienes no se pagaba salario. De esta manera, el capitalismo se apropia

de la mayor parte de la riqueza, destinando a los obreros lo estrictamente necesario para conservar su fuerza de trabajo y reproducirse. No sólo la ciencia y la economía justifican el socialismo, sino también la moral, que emana de los sentimientos. "La doctrina socialista y el sentimiento de justicia son una misma cosa".

El Partido Obrero Socialista

Para cumplir más cabalmente con el objetivo político de ese movimiento obrero, se fundó el Partido Obrero Socialista, en 1912. Desde entonces, Recabarren dedicó su tiempo y esfuerzo a la difusión de sus ideas a través del discurso y los escritos publicados en la prensa obrera. De la recopilación de éstos últimos, destacan varios dados a conocer por el periódico *La Aurora,* de Taltal. En el primero, titulado "Qué es el Socialismo", analizó este concepto definiéndolo como el progreso para todos, aunque se persigue primeramente el mejoramiento de los pobres. En esta lucha, el nuevo partido impartió instrucción, ilustración y cultura por todos los medios de comunicación conocidos entonces. La divisa consistió en que el socialismo adopta dos formas de lucha: la económica y la política. La primera persigue el mejoramiento de los salarios y el abaratamiento del costo de la vida, en tanto que la segunda promueve la conquista de todo el poder, a través de las organizaciones sindicales (la FOCH) y el partido (el POS).[9]

En un segundo artículo, continuó este análisis. El propósito era hacer comprender a los obreros lo que significaba el socialismo.

> Si la humanidad ha luchado tantos años por mejorarse y progresar, y no lo ha conseguido...preciso es abrir camino a este nuevo ideal que constituye una nueva estructura económica, industrial y comercial totalmente diferente a lo que ha sido costumbre hasta la fecha, y que suprime la explotación del hombre por el hombre, que es la causa de todas las miserias, de todos los vicios, de todas las ignorancias y de todos los crímenes que sufrimos.

¿Qué es el socialismo? repetía Recabarren. "El socialismo es la realización de todo progreso, tanto en el individuo como en la sociedad." Es la abolición de la miseria, la ignorancia, la explotación, la tiranía, el vicio y todos los defectos humanos que el buen sentimiento y la educación puedan suprimir. Es el progreso, el bienestar,

[9] Luis Emilio Recabarren, "Qué es el Socialismo", *La Aurora,* de 13 de oclubre de 1916, Taltal.

la alegría, el amor, la justicia, la comodidad... ¿Cómo se realizará el socialismo?, se preguntó. La respuesta es "por medio de la organización de los trabajadores para luchar por los objetivos señalados anteriormente, en cada ciudad y faena".[10]

El incansable propagandista volverá a insistir en esta materia en nuevos artículos. En esta campaña de educación política, propuso el cooperativismo como método de transformación socioeconómica.

> El desarrollo de la cooperativa socialista es, a nuestro juicio, el sistema más apropiado para verificar lo que llamamos la "abolición de la propiedad privada", la "socialización de la sociedad", la "expropiación capitalista", el establecimiento del "régimen colectivo", la "verificación del colectivismo".

Este sería el medio más eficaz. Para eso, combina la acción gremial con la acción cooperativa, y ambas las vincula a su vez con la acción política, desarrollando la conciencia revolucionaria en el movimiento popular.

> Gremios, cooperativa y política, dentro de todo organismo socialista, forman una escuela positiva, de experiencia práctica de lo que debe ser la vida, que educa a los afiliados en las verdades necesarias para el presente y para el porvenir y son los planos de la sociedad futura.

Estos elementos son, pues, medios de lucha, instrumentos de creación, escuela en el desarrollo de la sociedad de mañana. Demuestran que la acción gremial y la cooperativa, sin la doctrina socialista, no reportarían beneficios a los obreros organizados, "no nos librarían jamás del régimen de explotación y opresión".

Desde la fundación del Partido Obrero Socialista se perfiló un pensamiento más claro desde el punto de vista de la división de la sociedad en dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado. Así lo planteó el programa de aquel partido, en 1909, un documento anterior a su fundación formal, que sostiene "la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola, de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes". Más importantes fueron todavía el programa y reglamento del Partido Obrero Socialista, publicados como apéndice del folleto *El Socialismo,* de Recabarren.

El programa, dado a conocer en 1909, fue formulado en un clásico marco marxista. Parte, en sus considerandos, sosteniendo que la sociedad de su tiempo "es in-

[10] Luis Emilio Recabarren, de 20 de diciembre de 1916.

justa, porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que poseyendo los instrumentos de trabajo es la clase dominante; otra el proletariado, que no poseyendo más que fuerza vital, es la clase dominada". La sujeción económica de ésta última "es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política". Estos privilegios de la burguesía "están garantizados por el poder político", del cual se vale aquélla para dominar al proletariado. Ante esta situación, "la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan reformando o destruyendo el estado social que los produce[...]transformando la propiedad en común de la sociedad entera". Para producir dichos cambios, el proletariado debe conquistar el poder. Este programa describe a continuación los distintos pasos revolucionarios.[11]

En otro de sus análisis, Recabarren comparaba la situación de la vida de la clase dominante con la de la clase dominada, "repartiendo dádivas y tesoros a los unos, lágrimas y miserias a los otros". Contrastó el lujo de los palacios de la burguesía con el "conventillo" de los proletarios. "Cuando veáis una casa en la que el lujo rebosa hasta salir por los huecos de las paredes, pensad que en ella vive un holgazán esperando que vuestros cuerpos hayan sudado los productos pan. su riqueza y su lujo." La desigualdad no puede ser, dice, más grande y notoria: "¡ Aún hay quien niega la lucha de clases!"[12] Ante esta situación, la clase trabajadora, chilena destacaba, a través de sus voceros, la importancia que tienen en diversos países de Europa, en Estados Unidos e incluso en algunos de América Latina, la promulgación de leyes sociales que aliviaban las condiciones de explotación del capitalismo. Por ejemplo, citaba la indemnización por accidentes o la muerte en el trabajo; la licencia de las mujeres dos meses antes del parto y dos meses después del mismo sin pérdida del empleo; la indemnización para los trabajadores incapacitados o ancianos, financiada por los patrones, y el seguro de cesantía, igualmente pagado por los capitalistas.

Esta legislación, obtenida en los distintos países, no resolvía las desigualdades sociales, pero atenuaba, a lo menos, los problemas más brutales del sistema capitalista.

> ¿Esperáis que los gobiernos dicten leyes que eviten esta desigualdad? Pensáis que ellos puedan ocuparse alguna vez de mejorar vuestra situación? No, eso no depende de ellos. Eso es cosa de los trabajadores. Para eso debemos unirnos y crear potentes asociaciones,

[11] Luis Emilio Recabarren, "Programa del Partido Obrero Socialista", *El Socialista,* de 7 de agosto de 1909, Santiago.

[12] Luis Emilio Recabarren, "Las leyes sociales", *El Socialista,* **de 10 de julio de 1909, Santiago.**

> sostener un partido capaz de llenar todas nuestras aspiraciones y que, mientras llega el día de finalizar nuestro deseo, alcance las mejoras a que haya ocasión[...]En estas condiciones está el Partido Obrero Socialista. El único que reconoce la lucha de clases, el único enemigo de la propiedad privada, el único que aspira a la completa igualdad, el único cuya política es sincera y honrada, el único en fin capaz de alcanzar la emancipación de la humanidad.[13]

Esta es la concepción del Partido Revolucionario, sujeto histórico de la transformación de la sociedad, definido en ese tiempo.

En la exposición de principios del programa y reglamento del Partido Socialista Obrero, continuó desarrollando los fundamentos teóricos del movimiento popular. Definió el socialismo como la "doctrina por la cual se aspira a transformar la constitución de la sociedad actual por otra más justa e igualitaria". La sociedad de su tiempo es injusta porque "está dividida en dos clases: una, capitalista, que posee las tierras, las minas, las fábricas, las máquinas, las herramientas de labor, la moneda y, en fin, posee todos los medios de producción; otra, la clase trabajadora que no posee otra cosa más que su fuerza muscular y cerebral, la cual se ve obligada a poner al servicio de la clase capitalista para asegurar su vida, mediante el pago de una cantidad denominada salario. Los privilegios de la burguesía, agregó, están garantizados por el poder político, el que tiene en sus manos, y con el cual dispone de las fuerzas opresoras: ejército, policías, legislaturas, etcétera. El Partido Obrero Socialista reitera el fin contenido en su anterior programa en cuanto a propiciar la emancipación total de la humanidad, culminando su planteamiento con un programa mínimo de mejoramiento social y medidas de orden político y económico.

En suma, siguiendo la tendencia de la socialdemocracia europea, el nuevo partido adoptó un programa mínimo y un programa máximo, desconectados por lo general entre sí. No fue capaz, en efecto, de superar las limitaciones del reformismo del viejo continente, pero al contrario de sus congéneres europeos, no olvidó fácilmente su programa máximo. Por eso, condenó a la Primera Guerra Mundial y llamó a la unidad de los socialistas "por encima de la contienda". En 1919, cuando confluyeron las luchas del movimiento obrero y maduró la teoría del nuevo partido, la Federación Obrera de Chile dio a su vez un salto cualitativo al adoptar un programa socialista en su tercera convención. Este programa tenía una orientación sindicalista, que no planteó la conquista del poder por el Partido Obrero Socialista —el órgano político de la clase— sino directamente por la central sindical. Esta re-

13 *Idem.*

solución marcó, con todo, un corte en la historia del movimiento obrero chileno, en la medida en que significó un avance decisivo en el orden ideológico.

Dos años más tarde, la Federación Obrera de Chile acordó en el Congreso de Rancagua, de 1921, adherir a la Internacional Sindical Roja. Como corolario de esta definición se resolvió que ella sólo tendría relaciones, en lo sucesivo, con el Partido Comunista, nombre que adoptó el Partido Obrero Socialista una semana después, al incorporarse a la Tercera Internacional, aceptando las 21 condiciones de afiliación. ¡Qué lejos estaba el movimiento obrero de su pasado inmediato! Entre los fundamentos de la ruptura de aquella Federación con el Partido Demócrata, cabe recordar algunos que tienen validez hoy respecto de las relaciones de sectores del movimiento obrero con la política de grupos reformistas:

> ...porque el Partido Demócrata en su acción, durante toda su existencia, se ha unido a los partidos de la clase capitalista y enemigos del progreso de los trabajadores[...]Porque mediante pactos comerciales con aquellos partidos, en cada campaña electoral, el Partido Demócrata ha contribuido a consolidar el poder de la burguesía capitalista en perjuicio de la naciente organización de los trabajadores (puntos 1 y 2 de dichos fundamentos).[14]

Dos líneas que se cruzan

En sus años de formación, Luis Emilio Recabarren recibió la influencia del anarquismo, pensamiento que en el período que va de 1896 a 1931 adquirió una significativa presencia en el movimiento obrero chileno. Esta corriente ideológica participó, bajo su forma de anarcosindicalismo, en el desarrollo de las organizaciones sociales. En 1902 propició la formación de la Combinación Mancomunal de Tocopilla y otras que se constituyeron en el norte del país, particularmente en las oficinas salitreras y los puertos de la región. En los grandes centros urbanos, como Santiago y Valparaíso, los anarquistas crearon centros de estudios sociales, desde los cuales difundieron sus ideas, formaron sus cuadros y editaron periódicos y revistas. La prensa obrera, hoy desaparecida. Pero no se redujeron a estas tareas ideológicas sino que promovieron, además, la organización de sociedades de resistencia. Estas formas primarias de los sindicatos que surgirán más tarde formularon sus reivindicaciones económicas a través de pliegos de peticiones a los patrones, así como denunciaron los abusos y la explotación de que eran víctimas los trabajadores.

[14] Jorge Barría, *El movimiento obrero en Chile,* Santiago, Editorial Universidad Técnica del Estado, 1971, pág. 44.

Los anarquistas fueron precursores de ciertas formas de participación y autogestión, que difundió más tarde el Partido Socialista, en los años 1970-1973. Ellos concebían estos conceptos dentro del esquema de una democracia de trabajadores. Esta podía imponerse por la lucha de las masas contra el poder de la burguesía. Sólo por este medio sería posible transformar las relaciones sociales de producción y el establecimiento de una sociedad sin clases. De acuerdo a esta concepción, ampliamente difundida en ese tiempo, la organización y el control de la producción debían estar en manos de la clase trabajadora. Su posición de principios era contraria a la colaboración de clases antagónicas, ya que su objetivo central estaba orientado a destruir el Estado burgués y, con ello, el poder de la clase dominante. Rechazaban, por lo tanto, la concepción que sostenía que primero había que pasar por la revolución democrático-burguesa para llegar después a la revolución socialista. Preconizaban, en cambio, que la conquista del poder y la edificación de la nueva sociedad dependía sobre todo de la voluntad revolucionaria de los trabajadores.

Las formas de autogestión de aquellos años consistían en administrar los fondos de las sociedades de resistencia y las organizaciones mancomunales, esto es: decidir respecto a sus inversiones, fijar las cuotas de ayuda social para los obreros enfermos y accidentados, determinar los seguros para los socios damnificados por incendios y otras calamidades, hacer la contratación de servicios jurídicos para la defensa de sus miembros y otras manifestaciones.

Las inversiones se referían a la instalación de imprentas para imprimir diarios y revistas, en los cuales plantear sus demandas e informar de sus actividades, a la mantención de escuelas nocturnas para alfabetizar, educar y dar formación a sus socios y a la creación de cooperativas de consumo, entre otras. Estas formas primarias de autogestión practicadas por la clase obrera chilena se proyectaron posteriormente a los sindicatos y federaciones, así como en las leyes del trabajo. En la confrontación política y la lucha sindical de aquellos años, el concepto de participación y autogestión no tuvo un desarrollo teórico. Sólo después de la Revolución de Octubre de 1917 se difundió el papel desempeñado por los *sóviets* (consejos) en la lucha por el poder, en las fábricas, sindicatos y gobierno. Entonces se desarrolló una discusión y lucha ideológica en torno a los problemas del control obrero y la gestión de las empresas, que se prolongó durante mucho tiempo.

Como en otros países de América Latina, los anarquistas jugaron un papel importante en los primeros años del siglo xx en Chile, aunque no siempre había claridad en las distinciones entre estas ideas y las socialistas. No obstante, los anarquistas estaban mejor organizados que los socialistas en sus primeros diez años, destacando sus sociedades de resistencia, a través de las cuales luchaban contra los patrones

y el gobierno. Algunos de sus principales dirigentes provenían de la emigración europea, particularmente de España, Italia y Alemania. Por el carácter intrínseco de sus ideas, impugnaban a las organizaciones políticas, negándose a incorporarse por lo tanto en los partidos obreros. Esta posición se acentuó después de la Revolución rusa, atacando al Partido Comunista con la divisa absoluta de "abajo todos los gobiernos, proletarios o burgueses".[15] La trascendencia de la acción de los anarquistas en las luchas obreras de ese tiempo no puede dejarse de remarcar.

Su acción estuvo presente en los movimientos de protesta y de huelgas en 1903, 1905 y los años siguientes, como en 1917 y 1918. Destacaron en las sociedades de resistencia, en el Comité para Abolir los Impuestos sobre la Carne Argentina, en la Federación de Zapateros y en los comienzos de la Federación Obrera de Chile. Fundaron en 1913 el periódico La Batalla, que se publicó hasta 1925. Este movimiento culminó su desarrollo con la creación de la filial chilena de la Internacional Workers of the World (iww), cuyo primer congreso se celebró en 1919, donde se adoptaron nuevas tácticas de lucha, como, además de la huelga, el boicot y el sabotaje, y se definió al capitalismo, al gobierno y a la Iglesia como sus principales enemigos. El autor Alan Angelí expresa:

> La iww chilena permaneció unida hasta 1925 y era fuerte entre los obreros portuarios de Iquique, Valparaíso y Antofagasta. Estaba compuesta de siete asociaciones, organizadas por ramas industriales, con un número de miembros que se calcula en 9 000. Suspendió todos los puestos pagados, con la única excepción del cargo de secretario general, cuya función era convocar a junta a los miembros del ejecutivo.[16]

Los anarquistas influyeron en los profesores y estudiantes, así como en los obreros de diversas categorías, constituyendo sindicatos y federaciones, hasta culminar en la Confederación General de Trabajadores en 1931. Ellos se opusieron a los sindicatos legales después de promulgado el Código del Trabajo en 1924, así como rechazaban también la conciliación y el arbitraje.

La controversia europea entre Marx y Bakunin repercutió *en* América Latina y particularmente en Chile durante muchos años. El anarquismo influyó en el movimiento socialista, pero éste terminó superándolo. Entre los años 1890 y 1910, conjuntamente con el anarquismo, surgieron diversos grupos y partidos socialistas, cuyos antecedentes eran aún más lejanos. Su nacimiento provenía de un proceso

[15] Osvaldo Arias, *La prensa obrera en Chile, tesis de prueba,* Santiago, Universidad de Chile, 1953, pág. 49.

[16] Alan Angelí, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile,* México, Ediciones Era, 1974, pág. 36.

histórico que tuvo sus orígenes en el desarrollo social y político en la mitad del siglo xIx: en la Sociedad de la Igualdad de 1856, pero por cierto también encontraba su antecedente en las luchas de las sociedades mutualistas y de resistencia, de las mancomunales y de las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero. En 1881, inmigrantes europeos fundaron en Santiago y Valparaíso secciones de la Primera Internacional.

Los aguafiestas del centenario

En la primera década del siglo xx empezó a germinar una verdadera revolución en los espíritus de la clase media ilustrada que, primero en el campo de las ideas, y después en el de la acción contingente, entraron a disputar a la oligarquía el derecho a gobernar. Como en 1856 —año en que floreció la Sociedad de la Igualdad, un movimiento intelectual que tuvo una profunda influencia en el desplazamiento político de los conservadores por los liberales— , en los días del Centenario de nuestra independencia de España resonó la voz de los pensadores políticos que reclamaban la democratización del país. Son nuestros profetas olvidados.

Entre éstos se destacan en el campo de las ideas, dos hombres eminentes: Valentín Letelier y Alejandro Venegas, ambos maestros. El primero, rector de la Universidad de Chile y promotor de la fundación del Instituto Pedagógico, y, el segundo, integrante del primer curso egresado de este plantel que tanto prestigio daría a Chile en el futuro. Letelier se distinguió como jurista, profesor, filósofo del derecho y de la educación y también como hombre de acción en la política nacional; Venegas, como educador, sociólogo y severo analista de la sociedad chilena. El profundo espíritu crítico y las avanzadas ideas de ambos enriquecieron el pensamiento social de Chile y prepararon el clima colectivo para las reformas sociales que se abrieron paso con el movimiento político de 1920. Ellos fueron precursores de las luchas populares que conmoverían al país durante el siglo xx, levantándose como profetas de un nuevo evangelio que empezó a recorrer también a Chile: el evangelio del socialismo.

Valentín Letelier (1852-1919) poseía una personalidad multifacética en la que se combinaban armoniosamente las condiciones del hombre de pensamiento y de acción. En ella no hay fisura alguna. Armado de una sólida formación cultural e inspirado en los principios filosóficos del positivismo, Letelier examinó la realidad nacional y formuló conclusiones orientadoras principalmente en el campo de la educación y la política, las que expuso en numerosos escritos. Entre sus obras más destacadas, no pueden olvidarse *Filosofía de la educación,* en la que desarrolló la

teoría general de la enseñanza pública, que sirviera de guía a los profesores durante largos años; *La lucha por la Cultura,* en la que desarrolló la doctrina del Estado docente, dispersa en artículos periodísticos, conferencias y discursos, ahora recopilados; *Génesis del Estado y sus instituciones fundamentales*, en la que exhibió el sentido social del derecho, así como *Génesis del Derecho y de las instituciones civiles fundamentales,* en la que perseveró en este mismo esfuerzo en la aludida rama de la ciencia jurídica; en *Evaluación de la Historia,* atacó el dogmatismo y señaló una nueva orientación hacia la investigación del pasado.

La educación fue su tema favorito. En sus escritos reiteró el lema alberdiano —"gobernar es educar"— que más tarde se convertiría en la divisa del presidente Pedro Aguirre Cerda, maestro como él. Para Letelier, la educación es un proceso social que tiene por misión renovar la vida colectiva mediante la transmisión de valores culturales, cuya dirección superior debe estar en manos del Estado. Por esta circunstancia, un buen sistema de gobierno requiere de un buen sistema educacional y, a la vez, éste debe fundarse en un verdadero sistema democrático. La interrelación de uno y otro obliga al Estado a ejercer el control de la enseñanza, no pudiendo transferirlo a ningún otro poder de la sociedad. He ahí planteados el laicismo y el Estado docente, principios que serán sostenidos invariablemente por las nuevas generaciones de maestros chilenos, en denodada lucha contra la dominación de la Iglesia en el sistema educacional.

Este maestro precisó el concepto histórico de la *libertad.* Así expresaba:

> Consideramos anticientífica la escuela que en nuestros tiempos enseña que la libertad personal, la libertad de pensamiento, el derecho a trabajar y la igualdad, son derechos naturales, inalienables e inherentes a la naturaleza humana.

Según él, las libertades y derechos se conquistan en la sociedad, y su ejercicio depende de las circunstancias históricas, ya que las instituciones sirven los fines de cada época. Agrega Letelier:

> Seamos hombres de ciencia y como tales, tengamos siempre presente que el fin de la política no es la libertad, ni aún la autoridad, ni es principio alguno de carácter abstracto, sino es satisfacer las necesidades sociales para procurar el perfección amiento del hombre y el desarrolló de la sociedad.[17]

[17] Valentín Letelier, *La lucha por la cultura,* Santiago, Imprenta y Encuademación Barcelona, 1895, págs. 24 y 30.

Medio siglo más tarde, Eugenio González, quien fuera rector de la Universidad de Chile y connotado intelectual socialista, expondrá, a la luz del marxismo, este mismo concepto. La burguesía interna representada por los militares demostrará en los hechos cuán poco valen los derechos naturales, con un reguero de crímenes contra la humanidad durante el siglo xx.

Eugenio González destacó la personalidad pública de Letelier en discurso pronunciado en el Senado con ocasión del centenario del nacimiento del gran maestro.

> Hay en lo político algunas actuaciones de Letelier que, para nosotros los socialistas, revisten calificada importancia. Letelier no fue político en el mezquino contenido que a este concepto suele dársele. Parlamentario, no tuvo actitudes de especial relieve en los círculos del Congreso, donde prima, a menudo, la incompetencia audaz, que se disimula bajo ostentosa garrulería, sobre la severa conciencia responsable del hombre de estudio. Letelier fue ante todo y por sobre todo, un maestro y, como tal, concibió la actividad política como una forma superior de la función docente; pero él prefería ejercer esta última por los medios regulares de la cátedra, la conferencia y el ensayo, antes que por el discurso de circunstancias, en que las palabras prevalecen sobre las ideas y el efecto en las conciencias es tan volandero como el eco de aquéllas.[18]

Él es una de las figuras más brillantes en la historia de Chile.

En 1896, Valentín Letelier sostuvo la importancia que revestía en Chile la constitución de partidos obreros, bajo el nombre de socialistas o democráticos, en un tiempo que la política nacional estaba dominada sólo por la "aristocracia" y la clase media, contradiciendo la historia de la humanidad. En efecto, el pueblo, la clase explotada, estuvo siempre presente en la lucha contra sus explotadores en el mundo, contra los eupátridas en Grecia, contra los patricios en Roma, contra los barones en la Edad Media, contra los nobles y los grandes en la Época Moderna. En todas partes, dice Letelier, los partidos "históricos" de las clases dominantes los enfrentaron como enemigo común e irreconciliable y "para combatirle, vencerle y exterminarle", unieron sus fuerzas celebrando pactos de alianza sin lograr tales objetivos.

> En Chile este partido apareció por primera vez como órgano de las clases obreras hacia 1887. Aquí como en Europa, se hizo presente lanzando a los oligarcas una alarmante declaración de guerra, y aun cuando los partidos históricos la recibieron o con desdén o

is Eugenio González, *Discurso pronunciado en homenaje al centenario del nacimiento de Valentín Letelier,* en la sesión quinta del Senado, el 16 de diciembre de 1952.

con hostilidad, su desarrollo ha sido tan rápido cuanto las causas de descontento popular y la restringida difusión de la instrucción pública lo han consentido.[19]

El pensador progresista destacó la significación histórica de dicho proceso que considera a los pobres como una categoría social. En tal sentido, Letelier señaló que donde quiera que se había formado "el partido de los pobres', los partidos reaccionarios se sintieron heridos, los gobiernos comenzaron a poner su atención en los problemas sociales hasta entonces inadvertidos, la política reorientó su preocupación por estos problemas, y un nuevo derecho se ocupó de los intereses de los trabajadores frente a sus patrones capitalistas. "En Chile mismo, la constitución del nuevo partido ha empezado a surtir efectos que, desarrollándose de día en día, están llamados a alterar las fuerzas respectivas de los partidos históricos, a imponer modificaciones sustanciales en los programas y a expulsar de la Moneda y del Congreso la política esencialmente negativa del libre cambio." Producto de su acción, agregó, es que muchos obreros "se hayan alejado de las cofradías de la reacción, donde se explota su sentimiento religioso en interés de la misma clase que los mantiene humillados[...]porque en muchos pobres se va sobreponiendo el interés de clase al interés personal".[20] Es la noción de justicia en vez de caridad. Además, señaló, "el advenimiento al desempeño de las funciones electorales de numerosos ciudadanos que antes se abstenían porque se sentían impotentes para cambiar e1 rumbo de la política". Asumían la opción del sufragio, con todas sus limitaciones, en vez de la abstención, como sucede hoy en Chile.

La burguesía defendía entonces, igual que ahora, las doctrinas del libre cambio y el individualismo.

¿Qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos los ricos a los pobres? Sólo una cosa: libertad, y nada más que libertad, o sea, la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre cambio da a los burgueses.

En contraposición a esta relación injusta entre las clases antagónicas, el maestro Letelier agrega:

[19] Valentín Letelier, "Los Pobres", publicado en *La Ley*, N°433, órgano del Partido Radical, de 1 de enero de 1896.

20 *ídem.*

¿Y qué es lo que necesitan los desvalidos para no sucumbir en esta contienda despiadada, donde el egoísmo prevalece contra la caridad, la inteligencia contra el corazón, la fuerza contra el derecho? Sólo protección, o sea, la garantía de que el Estado igualará las condiciones de los combatientes dando armas a los débiles para luchar con los fuertes. Esto es lo que el individualismo niega a los desvalidos.[21]

En estos términos se planteaba entonces la lucha de clases, los que poco han cambiado después de más de un siglo.

Los resultados de esta situación eran, por cierto, deplorables.

Todo lo que el liberalismo de nuestros días ha hecho por los pobres se reduce substancialmente a la instrucción y al sufragio; esto es, a ilustrarle para que conozca su miseria y armarle para que pueda exigir por sí mismo el remedio de sus males. Sorprenderse del aparecimiento del socialismo es sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto más genuino, el de dar capacidad al pueblo para estudiar sus propias necesidades.[22]

Letelier tuvo la inteligencia de comprender la causa de los pobres de su tiempo. "La causa de los pobres, dijo, debe ser la causa de los corazones generosos." En tal posición se preocupó por defender las demandas más justas de la clase trabajadora, desde el Partido Radical, donde él militaba.

En esos años, la realidad social de Chile era lastimosa. La oligarquía se consideraba dueña del país y despreciaba a los trabajadores, verdaderos esclavos de su propiedad. Eduardo Matte decía en 1892: "Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio".[23] Cuarenta años antes, Santiago Arcos, en carta a Francisco Bilbao había sostenido: "En todas partes hay pobres y ricos. Pero no en todas partes hay pobres como en Chile".[24] La misma situación social la expuso Héctor Rodríguez de la Sota, presidente del Partido Conservador, en 1933, el año en que se fundó el Partido Socialista, con el decidido propósito de cambiar aquélla realidad, que exhibía la división profunda de la sociedad en dos clases contrapuestas —la burguesía y el proletariado— que los dirigentes obreros venían denunciando desde fines del siglo xIx.

Héctor Rodríguez de la Sota, en la misma línea de pensamiento que el arzobispo Casanova, basada en la Iglesia católica, sostuvo:

> Para que los hombres puedan vivir sobre la tierra, es necesario, como dice León XIII, la diversidad de fortunas, que da lugar a la diversidad de oficios, es dec:r, es necesario que haya ricos y que haya pobres. Así, unos trabajarán atraídos por el incentivo de la riqueza y otros empujados por el aguijón de la pobreza.

Agregó que el pobre no debe preocuparse, porque es el más querido por su dios, el dios del capitalismo, en contraste con el rico.

> La pobreza, en nuestro concepto de cristianos, es el estado más rico en medios para que el hombre alcance sus destinos eternos, y, en cambio, la riqueza está perpetuamente amargada por aquella terrible sentencia bíblica que dijo: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos.[25]

Este procer de la derecha nos induce a compadecer a los ricos por su aciago destino en ese otro mundo de la mitología cristiana.

Después de esta definición, suprime las diferencias de clase y la lucha que esta realidad imprime entre ellas, y proclama la unidad de todos, de "ricos y pobres, los que 'no han sido hechos por la naturaleza, como dijo León XIII, para estar peleando los unos contra los otros en perpetua guerra, lo cual es opuesto a la razón y a la verdad' sino para marchar 'juntos y concordes' porque 'la concordia engendra en las cosas hermosura y orden' y de una perpetua lucha sólo resultan la confusión y una salvaje ferocidad". Este oligarca, portaestandarte de la derecha, extrae una conclusión de justicia muy caritativa para su tiempo: "Es muy justo y muy humano tratar de reducir las horas de trabajo, pero siempre que ello no implique ana reducción de la producción, porque en tal caso sólo se obtendría un beneficio particular y un perjuicio social". En otras palabras, trabajar ocho horas diarias, como lo exigían los obreros, pero rendir por diez, propósito que sigue vigente hasta hoy en este país que mantiene una de las jornadas laborales más largas en el mundo.

Retornando a Letelier, cabe decir que su acción política se realizó en el seno del Partido Radical, en cuyo sector de avanzada se mantuvo invariablemente. Diputado al Congreso Nacional en dos períodos, polemizó con Enrique Mac-Iver, líder del sector manchesteriano de ese partido. Su posición renovadora se afianzó al finalizar el siglo xix. En la Revolución de 1891 se equivocó, como lo reconoció noblemente más tarde. Adversario declarado del gobierno de Balmaceda, se opuso al régimen parlamentario instaurado por los vencedores en la guerra civil, al percatarse de la preeminencia alcanzada por los intereses oligárquicos.

[25] Héctor Rodríguez de la Sota, discurso pronunciado en la convención del Partido Conservador, celebrada en 1933.

La convención del Partido Radical de 1899 se convirtió por primera vez, en un torneo en que se batieron sus dos más grandes adalides ideológicos: Enrique Mac-Iver y Valentín Letelier. Al frío individualismo liberal del primero, se opuso el cálido espíritu social del segundo, pero la controversia no terminó allí sino que continuará durante varios años, como lo señala Julio César Jobet:

> Mac-Iver, en 1903, expresó que el socialismo en Chile no tenía razón de ser, por no vislumbrarse en la cuestión social, porque los obreros no tienen ideas, sino que sienten necesidades, y de existir algún sector de proletariado sería únicamente el de los peones campesinos que "constituyen una verdadera raza de ilotas". Esta afirmación tuvo un trágico desmentido con la iniciación de los grandes movimientos obreros en 1903, 1905, 1906 y 1907 en Valparaíso, Santiago, Antofagasta e Iquique.[26]

Además revela el desconocimiento de Mac-Iver del pensamiento obrero, expuesto en la prensa de clase, dado a conocer en el capítulo anterior de este libro.

Pero además de este desmentido por los hechos sociales, Letelier lo refutó, iniciándose una nueva controversia que alcanzó su más dramática expresión en la Convención Radical de 1906. A la cabeza de la corriente más avanzada de este partido, trató él, en efecto, de obtener una ampliación del programa con el planteamiento de la necesidad de una legislación social. No obstante la ardua lucha de Letelier, la declaración aprobada fue débil. Si bien reclamó habitaciones para los obreros, no se refirió al alza del costo de la vida, a la desvalorización monetaria y a los bajos salarios, cuestiones planteadas entonces por la clase trabajadora. Está lejos del programa del Partido Demócrata y de las demandas formuladas por Recabarren en su folleto *Ricos y Pobres*, publicado en ese mismo tiempo. La cristalización política del pensamiento social de Letelier se producirá en 1920, es decir, un año después de su muerte.

Contemporáneo de Letelier, aunque más joven, Alejandro Venegas (1870-1922) fue otro de los más destacados precursores del pensamiento social en Chile. De este hombre extraordinario, Enrique Molina, eminente educador y fundador de la Universidad de Concepción, dice:

> Venegas, aunque de ideología avanzada, no militó en ningún partido político e hizo siempre del magisterio una función con finalidades específicamente propias y libre de la influencia de logias, sectas y banderías. Pero sentía vivo el interés por los problemas de

[26] Julio C. Jobet, *Precursores del pensamiento social de Chile n, Valentín* ***Letelier,*** **Santiago,** Editorial Universitaria, 1956, pág. 63.

> la vida pública que, particularmente en su raíz económica, miraba con honda inquietud. Frutos de esta patriótica preocupación fueron los libros Cartas a don Pedro Montt y Sinceridad, y no de otra cosa porque los dictó la más profunda honradez;. Venegas no escribió para medrar ni para alcanzar el poder. La pureza y el valor de su actitud para decir lo que estima la verdad, son únicos. Convivió con el pueblo y compartió sus miserias, no para pedirle su voto y encumbrarse sobre sus espaldas, sino para servirlo incógnitamente, generosamente, como una invisible sombra del Evangelio.[27]

Este pensador singular publicó su obra fundamental, *Sinceridad.* Chile íntimo en 1910, con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia del país. Compuesto en forma de cartas, analiza diversos temas relacionados con el desarrollo nacional, y propone un conjunto de reformas sociales. Estas cartas las dirigió a Ramón Barros Luco, a quien empezó por exponer su juicio lapidario sobre la elección en la que éste fuera designado presidente de la República, agregando:

> Los políticos especuladores y corrompidos vencieron; pero, naturalmente, no deseaban tener que luchar otra vez y por eso pensaron llevar a la Moneda a un hombre que no fuera una amenaza para nadie (ni para los más rapaces), y volvieron los ojos hacia el Presidente Riesco, que los había dejado ampliamente satisfechos en su pasada administración, pero éste no podía ser reelegido ahora por prohibirlo un precepto constitucional.[28]

Por lo mismo, optaron por otra alternativa, que lo favorecieran igualmente.

Como siempre, buscaron la mejor solución en la decrepitud *del* gobernante, como lo señaló el mismo Venegas en su carta.

> Pensaron, entonces, en vos, señor, confiando quizás en que los ochenta inviernos que gravitan sobre vuestras espaldas os impidieran fiscalizar y proceder :on energía. Así deben de creerlo, a juzgar por el júbilo con que ha sido recibida vuestra designación para candidato a la Presidencia de la República por los traficantes políticos, los gestores administrativos y la parte más inescrupulosa y venal de la prensa.[29]

Este retrato anticipado del gobernante que cubriría un nuevo período presidencial se corresponde exactamente con su gestión, caracterizada por la incapacidad y la abulia propias de la senectud.

[27] *Ibidem,* pág. 62, Cita de Jobet.
[28] *Ibidem,* pág. 66
[29] Idem.

Su análisis se extiende a toda la vida de la nación y de su crudo diagnóstico extrae las soluciones patrióticas que sugería. Receloso por el egoísmo, espíritu de lucro y afán de poder que domina a los gobernantes de entonces, les señaló previamente cuál es su filosofía política. La obligación de los estadistas, expresó Venegas:

> No es hacer poderoso al país, como tampoco lo es el hacerlo agrícola, o minero, o comercial, o fabril, porque todas esas cosas son medios y no fínes[...]El ideal del gobernante debe ser conseguir la felicidad de su pueblo y ésta no se alcanza sino libertando a todos los ciudadanos de la esclavitud económica en la que los tienen las leyes que hoy rigen la sociedad y de la esclavitud moral a que les tienen condenados por la ignorancia.[30]

Esta es una concepción moderna de la política, en la que asomaban las ideas revolucionarias que remecieron al universo en el curso del siglo xx, poniendo el énfasis en la satisfacción de las necesidades de los pueblos y no en el enriquecimiento de las oligarquías.

Para lograr estos objetivos, le preocupaba de sobre manera el desarrollo de la economía nacional. Algunas de las soluciones propuestas por él todavía son metas no alcanzadas por el movimiento popular. Ante una agricultura latifundaria, atrasada y sobreprotegida, plantea una verdadera reforma agraria. Ante una minería que sólo explotaba el salitre, exige el aprovechamiento de las inmensas riquezas minerales del subsuelo del país, base segura del desarrollo industrial. Ante el proceso incipiente de industrialización, preconizó el incremento del consumo popular para desarrollar el mercado, señala a la pesca como una industria esencial para alimentar al pueblo, vincula la industrialización al incremento de la minería. Ante el atraso general, sugiere la reforma de la enseñanza para darle una mayor orientación técnica y económica. Este diagnóstico, con las soluciones indicadas, representa un anticipo del camino recorrido por Chile durante el siglo xx, con avances y retrocesos.

Con palabras de fuego se refirió a la situación social de las masas populares, explotadas por "capitalistas sin corazón". El gobierno, como representante de esta clase ávida de riqueza, no se preocupaba de ese pueblo que, después de un siglo de haber conquistado la independencia, continuaba dominado por la pobreza, la ignorancia y los vicios, triste herencia de la sociedad colonial.

> La impresión más viva que recibe el viajero observador al estudiar nuestra organización social, dice Venegas, es la que le produce el contraste entre la clase adinerada y la clase

[30] *Ibidem,* pág. 74.

trabajadora, porque en Chile sólo hay dos clases sociales, ricos y pobres, esto es, explotadores y explotados; no existe la clase media: los que no somos reos ni menesterosos y aparentemente formamos el estado llano, somos gentes de tránsito, salida del campo de los explotados, y en camino para el de los opulentos.[31]

Esta afirmación es, por cierto, justa sólo en parte, es decir, relativa, por que ese sector en transito no siempre obtiene sus metas.

Venegas se indigna por la represión de que son víctimas los trabajadores, particularmente los de la pampa salitrera, cuna del movimiento obrero chileno. La severidad de su crítica penetra profundamente en la desigualdad social y los métodos brutales empleados por las clases dominantes para defender su riqueza y poder. Agregó entonces:

Aquellos desgraciados no tienen idea de lo que vale en nuestro país la voz del pueblo y, creyéndose tal vez en una República Democrática de verdad, por tres veces han pedido seguridades por su vida, respeto al fruto de su ímprobo trabajo y educación para sus hijos, y por tres veces se les ha respondido fusilándolos del modo más salvaje: las matanzas de Taltal, Antofagasta e Iquique han demostrado a los 60 mil obreros que producen la principal riqueza del país, que no deben esperar nada del gobierno, porque está formado de explotadores del pueblo que hacen causa común con sus duros señores, los dueños del salitre.[33]

Pero ni las luchas obreras de ese tiempo carecían de valor histórico, ni su sangre se derramó en vano. Por el contrario, de estos conflictos, que se multiplicaron a partir de los primeros años del siglo xx, surgió la conciencia de clase, primero, y la lucha de clases después, como reconoce lúcidamente y con indisimulado regocijo el mismo Alejandro Venegas.

En las vibrantes páginas de su libro *Sinceridad. Chile íntimo en 1910,* trazó un cuadro impresionante de la masacre en la escuela Santa María de Iquique, donde fueron asesinados más de dos mil obreros por las fuerzas represivas del ejército. En su descripción se refirió a los muros destruidos por los disparos de ametralladoras y a los alumnos hacinados en salas todavía cubiertas con las costras de la sangre derramada, que secó las plantas y endureció la tierra. Su alma de maestro se condolió por la dolorosa obligación impuesta a los niños de remover esa sangre petrificada de los obreros cobardemente masacrados, algunos de los cuales eran sus propios familiares.

[31] *Idem.*

[32] *Idem.*

[33] *Ibidem,* pág. 73.

No excusó tampoco a la Iglesia católica por su incomprensión de los derechos del pueblo, así como por su espíritu mezquino, orientado a obtener ventaja proselitista del dolor humano. Por eso expresó:

> Cuando los trabajadores de Tarapacá, exasperados por los abusos de los salitreros, dejaron las oficinas y bajaron a Iquique a pedir respeto para su trabajo y educación para sus hijos, audaz atentado que fue reprimido con el fusilamiento de dos mil de ellos en la escuela Santa María, ¿sabéis señor, a qué atribuyó la causa de tan nefanda desgracia el Vicario Eclesiástico de Tarapacá? A falta de fe religiosa entre los trabajadores de la pampa, y naturalmente propuso, como único remedio, que el Estado dedicase algunos miles anualmente a aumentar el pago de los misioneros que llevasen a aquellos corazones empedernidos el benéfico consuelo de la religión.[34]

He aquí la complicidad de la Iglesia con la represión gubernativa.

El severo estudio de la cuestión social lo llevó a formular un programa de reformas sociales, que van desde la modificación de las relaciones económicas hasta la dictación de una legislación social y una drástica extirpación de los vicios que aquejaban al pueblo. Sus generosas inquietudes se incorporarán, en lo sucesivo, en los programas del movimiento obrero, y fructificarán en leyes y medidas protectoras a partir de la década siguiente. En defensa de los trabajadores, plantea reformas que hasta entonces ningún partido político había formulado de manera tan completa y orgánica: limitación de la jornada de trabajo, reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños, responsabilidad de los patrones en los accidentes del trabajo; obligación de los empleadores de prestar asistencia a los obreros enfermos y de velar por la educación de sus hijos, fondo de cesantía, enfermedad y vejez, supresión de las pulperías y fichas, construcción de viviendas para obreros. Su programa contenía, en suma, la futura legislación social chilena.

Por lo mismo, él comprende que un programa como éste no puede ser realizado por un sistema político como el que existía entonces en el país. Por eso, ante los partidos en decadencia, el espíritu de lucro de las clases dominantes, la manipulación del régimen electoral, el fracaso del parlamentarismo, la corrupción de la justicia y la insuficiencia de la enseñanza, considera indispensable resolver algunas definiciones básicas. Entre éstas, plantea el término del hibridismo político (régimen presidencial o parlamentario), la reforma electoral, haciendo extensivo el sufragio universal a las mujeres; la purificación de la democracia eliminando los vicios

[34] Martín Pino B., *Alejandro Venegas y su legado de Sinceridad para Chile,* Santiago, COOPECULTURA, 1985, pág. 382.

electorales y la dignificación del régimen municipal, excluyendo de su seno la politiquería. Venegas exige, en suma, un nuevo sistema político que garantice el carácter representativo del gobierno y la participación de todos los chilenos en el proceso de transmisión y ejercicio del poder democrático.

En esta misma época, desde la banda oriental del Río de La Plata, una voz prestigiosa trazó un retrato exagerado de las bondades institucionales de nuestro país, que parece desmentir las lacras sociales denunciadas por espíritus más críticos que el de nuestro visitante. "Chile es una nación maestra de naciones", afirmó en un recordado discurso pronunciado el 18 de septiembre de 1910, José Enrique Rodó, representando a Uruguay en la conmemoración del centenario de la independencia de nuestro país. Con esta exaltación retórica, el orador quiso destacar el desenvolvimiento político más ordenado que lo había singularizado en el conjunto de las naciones latinoamericanas. Al ilustre autor de *Ariel,* que no percibió en su propia patria los problemas sociales, no se le podía exigir que penetrara con su fino espíritu literario en el corazón de la sociedad chilena que, precisamente, estallaba en esos mismos años, en violentos conflictos internos.

Como una réplica impensada a la caracterización de ese Chile ideal hecha por Rodó, el notable maestro Alejandro Venegas dio a la publicidad en el mismo año del centenario, su libro ya citado, *Sinceridad. Chile íntimo en 1910,* que produjo un profundo impacto en la conciencia nacional. No obstante, esta voz acusadora y patriótica no fue escuchada por los usufructuarios del poder, perdiendo su legítima resonancia entre la persecución y el olvido, si bien el movimiento popular contemporáneo la rescata.

El profesor Martín Pino publicó en 1985 una biografía de Alejandro Venegas, de cuyas páginas cito una opinión que resume muy bien su pensamiento:

> Después de don Valentín Letelier, fue Venegas uno de los educadores que vio con más claridad la función del Estado en la construcción incesante de la democracia chilena, por medio de un sistema de educación pública, y uno de los que trabajó con mayor abnegación y valentía en esa patriótica causa. Las proposiciones que estanpó en las páginas de Sinceridad, referentes a las reformas que estimaba necesarias en las distintas ramas de la enseñanza, sirvieron en muchos aspectos de inspiración al magisterio organizado gremialmente. Se puede observar que muchas de las medidas que los educadores chilenos examinaron en sus congresos y sus convenciones, que dieron a conocer en revistas y boletines, y las proposiciones que defendieron ante el gobierno para mejorar la educación, son ideas congruentes y algunas coincidentes con las expresadas en *Sinceridad*. Muchas de aquellas iniciativas motivaron ampliaciones y proyectos reformistas que, enriquecidos con otras experiencias, se hicieron realidad en las décadas siguientes.

En medio del jolgorio de la burguesía, Valentín Letelier y Alejandro Venegas fueron verdaderos aguafiestas en los días del Centenario, esclareciendo las ideas de la clase obrera, expresadas por Luis Emilio Recabarren.

El mito del cielito lindo

Durante las primeras décadas del siglo xx se realizó en Chile un proceso de democratización, en el cual el Estado, hegemonizado por la oligarquía tradicional desde la independencia de España, experimentó cambios que, aunque precarios, configuraron una nueva modalidad de aquel. Este período de transición exhibió diversas características que le confirieron una notoria inestabilidad tanto en el ámbito socioeconómico como en el político, lo que tenía su origen en la estrecha base social en que se asentaba el viejo Estado. En efecto, éste excluía a los nuevos sectores de clase que había traído consigo la evolución de la sociedad y la economía, como eran la pequeña burguesía y los trabajadores (urbanos y rurales), que entonces no tenían ninguna participación significativa en el proceso político.

Los factores que le confirieron esta inestabilidad al período fueron, por una parte, el ascenso de estos últimos grupos sociales, lo que significó un cambio en la dirección del movimiento de masas. Éste evolucionó del enfrentamiento al Estado oligárquico hacia la negociación dentro de los marcos de la nueva forma adoptada por aquel. Por otra parte, se produjo el agotamiento del sistema de partidos tradicionales y el quiebre de las alianzas políticas. Este proceso trajo los movimientos socioeconómicos y políticos que buscaron una representación más apropiada de las diversas clases y nuevas bases para asentar los compromisos entre aquéllas, en los que habrán de sustentarse las modificaciones del Estado. En este movimiento jugaron un papel importante las Fuerzas Armadas, compitiendo sus caudillos con los civiles en la conducción del país.

Las clases dominantes tomaron conciencia de que debían afrontar un proceso de cambios y adecuaciones de su poder, aunque lo resistieron, por los medios a que estaban acostumbradas. Este proceso pasó por diversas alteraciones. De una parte, por la transformación de la base material de dicho poder, debido a que la actividad salitrera había experimentado su agotamiento, a partir de la Primera Guerra Mundial, y por la crisis capitalista de comienzos de la década de los treinta, que demostró la debilidad y años de la dependencia de la economía nacional. De otra parte, por la modificación del Estado oligárquico, de modo que éste, sobre una base social más amplia, pudiera abordar y resolver las aspiraciones sociales y políticas de los nuevos sectores de clase surgidos en el país.

Este doble proceso de cambios determinó contradicciones y desequilibrios tanto en el ámbito económico como en el político, por lo que puede considerarse el lapso transcurrido entre 1920 y 1938 como un período de transición. Entre la superación del Estado oligárquico y la constitución del Estado burgués de compromiso, que se prolongará hasta 1973, cuando la propia burguesía interna, asociada con el imperialismo, decidió prescindir de él. Los dueños de la riqueza y del poder optaron entonces por la dictadura. En este período se sucederán largas y apasionadas luchas sociales y políticas, con un elevado índice de violencia, que comprometerán a todas las clases, a sus organizaciones partidarias y gremiales, así como a las Fuerzas Armadas. Estas luchas provocarán controversias ideológicas, contiendas electorales, huelgas generales y paros por objetivos específicos, como también golpes militares, represiones obreras e insurrecciones revolucionarias.

El proceso de cambio político se presentó en general en América Latina, con matices diferenciados en cada país. En la década de los años veinte se sucedieron, en efecto, diversos movimientos populistas, determinados por las consecuencias económicas, sociales y políticas de la Primera Guerra Mundial, en los cuales se hizo sentir también la influencia de la Revolución mexicana (1909) y de la Revolución rusa (1917). De todos ellos, uno de los más característicos es el movimiento de masas generado en Chile a partir de 1920, que luchó por la democratización de las instituciones, el ascenso de los sectores medios a las funciones de gobierno y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

La base social de este movimiento descansó en el desarrollo de las nuevas fracciones de clase que disputaron a la oligarquía el derecho a gobernar. Se trató de una revolución en las aspiraciones de sectores medios que crecieron y formaron su conciencia ideológica, y una clase obrera que se organizó y educó en el ejercicio de la lucha social. Ambos sectores tropezaron contra el régimen sociopolítico oligárquico, circunstancia que los unirá en la contienda común por derrumbar los muros de la sociedad del siglo xix, herencia a su vez del sistema colonial que se había abatido un siglo antes. Los sectores medios de la sociedad, representados políticamente por la Alianza Liberal y con su candidato Arturo Alessandri, enfrentaron a la Unión Nacional, coalición de ultraderecha, y con su candidato Luis Barros Borgoño, en la elección presidencial de 1920, arrastrando tras sus banderas reformistas a la mayoría de los trabajadores. Este fenómeno político fue posible debido a que ellos todavía no tenían, por lo general, una clara conciencia de sus intereses reales y la consiguiente unidad y organización. Fue el temprano populismo que abrirá las compuertas a la primera crisis de la sociedad burguesa en el siglo xx.

Las postulaciones programáticas de los candidatos no presentaban marcadas diferencias objetivas, como quiera que ambos recogían en general algunas aspiracio-

nes comunes de las clases dominantes. Libertades de conciencia y electoral, fomento industrial, construcción de obras públicas, estabilidad de la moneda, educación primaria obligatoria y legislación laboral. Las diferencias decían relación más bien con el diagnóstico de la realidad nacional y el pronóstico de su evolución, así como el estilo de hacer política. Ante Barros Borgoño, hombre de negocios, defensor del orden establecido y contrario a la renovación proveniente de la posguerra, Alessandri perseguía la canalización de ésta en una nueva institucionalidad que permitiera dar satisfacción a las demandas populares. Para ello llevó la agitación política a las calles, fábricas y cuarteles, derrumbando los círculos estrechos en los que se movía la oligarquía. Entonces, la política presentaba además dos grandes polos, determinados desde el siglo anterior por la controversia laico-religiosa: a la derecha, el Partido Conservador y a la izquierda el Partido Radical. El centro estaba representado por las diferentes fracciones liberales y el Partido Nacional, que oscilaba entre uno y otro extremo.

El movimiento obrero luchó durante este mismo período bajo la conducción de Recabarren, por organizarse en torno a una política clasista y autónoma. Sus componentes ideológicos —anarquistas y socialistas— no le conferían ningún crédito al caudillo de la Alianza Liberal, considerando sus promesas electorales pura demagogia. Sin embargo, reconocían en este proceso las perspectivas de un cambio favorable para la organización y lucha de los trabajadores, así como de conquistas de mayores espacios de libertad. Conscientes de la virtualidad de este proceso, optaron por ocupar esos espacios a partir de la misma campaña presidencial. El Partido Obrero Socialista, con una nítida posición de clase, no se sometió a la disyuntiva de hierro que se presentaba para la sucesión presidencial y por ello proclamó la candidatura de Recabarren, definiendo su autonomía en términos inequívocos.

> Es conveniente, expresó, que la clase trabajadora sepa que la candidatura de la Alianza Libera] representa la ascensión al poder de una nueva oligarquía que, alucinando al pueblo con falsas promesas de un falso evolucionismo, pretende por este camino conseguir el apoyo de las clases trabajadoras.

Es el mito de los años veinte, conocido como el "cielito lindo", por el nombre de la canción popularizada entonces por la campaña de Alessandri.

La Alianza Liberal representaba, con todo, algunas aspiraciones comunes a los nuevos sectores sociales que la dinamizaban, como el rechazo al régimen parlamentario (que se practicaba de hecho desde el término de la guerra civil de 1891), la separación de la Iglesia del Estado, la enseñanza laica y la llamada cuestión social. La movilización política desencadenada por la clase obrera agregó sus propias

demandas, que desde fines del siglo xIx pugnaba por hacer efectivas, superando su marginación del proceso nacional. Esta movilización se orientó, en fin, hacia la modificación del viejo Estado oligárquico. No obstante, Alessandri se convirtió en el intérprete de vastos sectores populares —obreros, artesanos, funcionarios públicos, profesionales y estudiantes — y de la burguesía liberal que perseguía abrir paso a un sistema político más estable. En esta convergencia se encontraba gran parte de la base social, derivada de una alianza de clases, en que se sustentaría la nueva modalidad del Estado.

El ascenso de Arturo Alessandri al gobierno significó una división de la burguesía, que a su vez posibilitó la democratización del país y el crecimiento político y sindical del movimiento obrero. La limitación más grave de éste consistía en que no contaba con una política para el campesinado, la más importante reserva revolucionaria. Esta incapacidad para forjar la alianza obrero-campesina será una constante de los partidos populares durante mucho tiempo, hasta lograr un avance significativo en la confluencia de las décadas de los sesenta y los setenta. Alessandri frustró las esperanzas de las masas desposeídas, incorporándose al juego estéril del parlamentarismo, aunque no puede desconocerse que fue el iniciador de las reformas sociales y jurídicas más anheladas por la mayoría del país. No logró la cristalización de las transformaciones fundamentales que agitó como programa, debido a la enconada oposición oligárquica en el Senado, así como a la conspiración constante para deponerlo del ejercicio del gobierno. Este objetivo reaccionario se logró por fin en 1924, con un golpe militar que lo obligó a abandonar la Presidencia de la República y el país, en virtud de un "permiso" constitucional. Fue un golpe blanco, sin derramamiento de sangre.

De este modo, a partir de 1920, se produjo una profunda crisis institucional. La economía se encontraba en franco retroceso, las clases dominantes ya no contaban con ese venero de ingresos que parecía inagotable —la minería *del* salitre— ni tampoco con la demanda incesante de exportaciones agrícolas, cuyo:» precios se habían deteriorado en el mercado mundial. Las condiciones negativas de la situación financiera se expresaban en un fuerte déficit fiscal y una devaluación creciente de la moneda, debido a las emisiones y el endeudamiento siempre en aumento. La mayoría congresista, en abierta oposición, bloqueaba diversas iniciativas impostergables como la creación del Banco Central, la implantación del impuesto progresivo a la renta y la aprobación de una legislación laboral.

La hora de la espada

Desde comienzos del siglo xx se sucedieron conspiraciones en las Fuerzas Armadas para asumir el gobierno, manipulados sus altos mandos por las oligarquías reaccionarias. Al finalizar el siglo, todavía actúan sectores golpistas que ejercen presión sobre el gobierno, en plena transición a la democracia, después de una dictadura de 17 años (1973-1989). Esta es una materia que oculta la historiografía oficial o, cuando la trata, lo hace rodeándola de una aureola de falsa heroicidad, como ocurre con Pinochet, a quien se le rendía honores de "héroe nacional" por la burguesía, en banquetes anuales en el Club de la Unión, bajo el patrocinio del Rotary Club, siendo comandante en jefe del Ejército. La oligarquía se apropió del poder en diversas oportunidades, por la acción de las armas, desde la batalla de Lircay en 1829, hasta el golpe militar de 1973, pasando por la guerra civil de 1891 y el golpe de Estado de 1924.

En el siglo xx, las conspiraciones militares comenzaron en 1907, a raíz de la demora en la aprobación de un proyecto de ley de ascenso en el Congreso Nacional. Oficiales de menor graduación —capitanes y tenientes— se dieron cita en el cerro Santa Lucía, de Santiago, con el pretexto de tomar un trago de cerveza, pero con la intención oculta de presionar al gobierno y al parlamento de esta manera, a fin de obtener la satisfacción de sus demandas. Estas conspiraciones fugaces, con el uso abusivo de las armas que les entrega el conjunto de la sociedad, se repitieron una y otra vez en 1912, 1917, 1919, 1924, 1931, 1935, 1937, 1939, 1964, 1969 y 1973. Las intervenciones militares de 1925 y 1932 presentaron un carácter distinto. La primera tuvo por objeto poner término al golpe reaccionario del año anterior y restaurar a Arturo Alessandri en la Presidencia de la República y la segunda abrir camino al socialismo. En ambas desempeñó un papel decisivo Marmaduque Grove, fundador del Partido Socialista de Chile.

Carlos Charlín, ex oficial de Ejército, expone en su libro *Del avión rojo a la República Socialista,* que los intentos de conspiración desde 1907 a 1919 pueden ser calificados de simples ensayos frente a lo que sucedió durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes:

> Se organizó una sociedad secreta, la liga de salvación nacional, con estatutos, juramentos y todo un aparato para impresionar a los incautos. Desde el nombre hasta sus fines, se identificaba con el sector más reaccionario de la política chilena.[35]

[35] Carlos Charlín, *Del avión rojo a la República Socialista,* Santiago, Editorial Quimantú, 1971, págs. 27 y 28.

Esta numerosa banda de conspiradores, en la cual participaban las más altas jerarquías de la guarnición de Santiago, tenía tanta o más capacidad de fuerza para derrocar al gobierno de Sanfuentes que las posteriores, pero fracasó por la delación de uno de los conspiradores. Los cabecillas eran los generales Guillermo Armstrong y Manuel Moore. Su inspiración consistía en aplastar al movimiento obrero para asegurar el dominio de la oligarquía. La utilización de las Fuerzas Armadas por sectores de distinto signo político de esa misma clase hizo que el propio gobierno de Sanfuentes movilizara parte importante de aquéllas hacia el norte del país, ante una supuesta amenaza peruana, en la comedia de la "guerra de don Ladislao", el ministro de esta rama del gobierno, que aspiraba a la sucesión presidencial: Ladislao Errázuriz Lazcano.

En ese mismo año, el gobierno de Sanfuentes se caracterizó por una serie de actos represivos, dirigidos a apagar algunos resplandores de la Alianza Liberal, que se venía abriendo paso. Los principales de estos actos fueron la destrucción del local de la FECH en Santiago, el empastelamiento de la imprenta Numen, de los obreros e intelectuales anarcosindicalistas, el incendio del local de la Federación Obrera de Punta Arenas y la masacre de trabajadores en esa misma ciudad. Además, cabe agregar la persecución a los "subversivos" y la muerte del poeta Domingo Gómez Rojas, símbolo de una generación heroica. En ese tiempo proliferaron las sociedades secretas conspirativas, como una "moda". ¡Una moda de la derecha!

Durante la siguiente administración, bajo la presidencia de Arturo Alessandri, la oligarquía reanudó su campaña en los cuarteles militares para derrocar al gobierno. Con su vieja táctica, que reanudará en el futuro contra Aguirre Cerda y Allende, utilizó su mayoría en el Congreso Nacional para impedir la aprobac ón de nuevas leyes en beneficio de la comunidad y dificultar políticas y medidas sociales que requerían regulaciones parlamentarias. En las elecciones del 2 de marzo de 1924, el Presidente Alessandri obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados con lo que selló su destino, porque las Fuerzas Armadas conservadoras optaron por derribarlo. Como siempre, la confabulación correspondía a civiles y militares, al servicio del gran capital.

Si bien la conspiración era secreta en sus detalles, se registraba públicamente en sus propósitos generales. Así lo establece el historiador Ricardo Donoso:

> En la empresa de mantener latente el descontento y avivar la llama de la oposición, con propósitos ya abiertamente subversivos, cooperó una institución cuya organización se mantuvo con gran sigilo, que decía responder a la inspiración de Oscar Dávila. Tomó por nombre la tea, cuyo lema era "quema y alumbra", y a cuya existencia aludió abiertamente *El Diario Ilustrado* el 3 de mayo: Detrás de esas enigmáticas iniciales se cobija

> un movimiento de reacción que comienza. Es el emblema de la juventud sana y honrada que se alza a combatir a la inmoralidad, la incompetencia y la dictadura.[36]

La chispa que encendió la mecha fue la aprobación legislativa de la "dieta" parlamentaria (una remuneración para gastos de secretaría), el 2 de septiembre de 1924. En la sesión del Senado en que se aprobó esta ley, un numeroso grupo de oficiales generó una manifestación de rechazo. Este episodio se conoció como el ruido de sables. Los provocadores se trasladaron enseguida al Club Militar, donde se celebró una asamblea política.

Como ya había sucedido en otras conspiraciones, los peones de la "hazaña" castrense fueron, en esta oportunidad, quienes invitaron a un té a los capitanes de la guarnición de Santiago en el club militar. No obstante, el capo de la conspiración, el general Luis Altamirano, inspector general del ejército, fue invitado también, siendo aclamada su presencia. Expresa Charlín:

> El té continuó en comida, y ésta en cena de amanecida. Los militares se declararon en sesión permanente. Pasadas varias horas del desayuno, casi próximo al mediodía del 5 de septiembre, llegó hasta el lugar de reuniones el edecán militar del Presidente de la República, capitán Pedro Álvarez Salamanca, para invitar a una delegación de oficiales a conferenciar con S.E. don Arturo Alessandri. Inmediatamente se designó al capitán Heraclio Valenzuela y a los tenientes Víctor Pimstein y Ricardo Contreras Macaya.[37]

El espíritu de esta entrevista es una pieza de teatro del absurdo, concebida por el ingenio de Alessandri, primer actor de esta tragicomedia.

El encuentro se celebró en la noche del 4 y 5 de septiembre de 1924 y de él se dieron diferentes explicaciones. El astuto presidente sólo habría tratado de conocer directamente los propósitos de los conspiradores o presionar a los jóvenes oficiales para dar un contragolpe. Los acontecimientos producidos en 1925 confirmarían esta última versión.

> El hecho fue que Alessandri insinuó a dichos oficiales que formaran un comité militar para que elaborara los proyectos de carácter "constitucional, económico, social, educacional y militar", y si no lograban que el Congreso los aprobara, éste sería clausurado. En ese caso se convocaría a una asamblea constituyente, que el propio Alessandri dirigiría,

[36] Ricardo Donoso, *Alessandri, agitador y demoledor,* Tomo i, México, Fondo de Cultura Económica, 1952, pág. 377.

[37] Carlos Charlín, *ibidem,* pág. 34.

para crear un Chile Nuevo. Además les habría prometido que no se lomaría ninguna medida de represalia contra los oficiales insurrectos.[38]

De acuerdo al consejo de Alessandri, se formó el comité militar, que posteriormente se denominó Comité Militar Revolucionario, integrado por el general Pedro P. Dartnell, los almirantes Dittborn y Acevedo, el comandante Felix Urcullú, el general Arturo Ahumada y otros oficiales de menor graduación. El ingenio no salvó a Alessandri en 1924, porque tuvo que abandonar el gobierno, pero sí lo salvó un año después, cuando lo recuperó por la acción de la juventud militar, en la cual él confiaba, y que tenía como líderes a Marmaduque Grove y Carlos Ibáñez.

En Chile, la oficialidad de las Fuerzas Armadas provenía en general de sectores medios altos, particularmente de las provincias. El papel jugado por aquéllas durante la guerra por la independencia de España, en las guerras externas (contra la Confederación Perú-boliviana, la guerra con España y la del Pacífico) y civiles (1828, 1830, 1851, 1859 y 1891), así como en-la lucha política misma en el curso del siglo xix, desarrolló tradiciones que pesaban en su conciencia colectiva. Desde 1900, cuando se aprobó la Ley de Servicio Militar Obligatorio, las Fuerzas Armadas tomaron un contacto más estrecho con la realidad social a través de la formación de los reclutas, mirando con mayor interés los problemas relativos al desarrollo socioeconómico del país, sin perder de vista los valores de su formación profesional, como la jerarquía y la disciplina.

No obstante, estos valores empezaron a ceder ante la ineficacia gubernativa, la corrupción política, el debilitamiento de la autoridad, la insuficiencia de sus remuneraciones y las influencias de los partidos políticos en la vida y carrera profesionales. Conforme a estas motivaciones surgieron grupos secretos en los cuerpos armados, preocupados fundamentalmente de sus demandas económicas, los cuales alcanzaron a configurar algunas acciones como el llamado complot de Armstrong en 1919. Estas actividades obligaron a los altos mandos militares a prohibir expresamente esta clase de organizaciones, que generaban una profunda intranquilidad en la sociedad y desestabilizaban al gobierno. El agotamiento de la organización del Estado proveniente del siglo anterior, alcanzaba también a las Fuerzas Armadas, en su carácter de órgano integrante de aquél. Como otros funcionarios públicos, sufrían las estrecheces y carecían de perspectivas con una situación de remuneraciones exiguas, falta de normas serias de ascenso y retiro, retraso en la percepción de ellas.

[38] *Ibidem,* págs. 35 y 36.

Las iniciativas del presidente Alessandri para resolver tales problemas encontraron la indiferencia de la oposición parlamentaria de la oligarquía.

En este período, las Fuerzas Armadas pasaron a desempeñar un papel decisivo en el reordenamiento del sistema político del país, con el requerimiento de diversos sectores sociales. Desde luego, las fracciones burguesas monopólicas utilizaron a los militares como instrumento para resolver no sólo las crisis de dominación, sino también sus discusiones en el interior de las clases que controlaban el poder. Las fracciones burguesas liberales encontraron a su vez principalmente en sectores del ejército y, más tarde, de la aviación, una representación de sus intereses, en medio de la crisis del Estado oligárquico, como asimismo las fracciones burguesas defensoras del sistema dominante. Por otra parte, la pequeña burguesía, que a través de la ampliación de las Fuerzas Armadas había logrado influir en ellas, buscó también el apoyo a sus intereses, lo que hizo que la intervención militar en la política fuera contradictoria y fraccionada, comprometiendo más a grupos y a caudillos que a la institución. En suma, en respuesta a la crisis de representación de la sociedad, sectores de la oficialidad —y también de la tropa en el caso de la insurrección de la marinería y de la República Socialista— se constituyeron en los medios de expresión y de defensa de los intereses de diversos sectores de clase. Esta situación condicionó, en alguna medida, el proceso de desorden y conflicto desencadenado después de la caída del gobierno de Ibáñez en 1931.

La realidad social hacía necesarios entonces cambios sustantivos, que requerían la acción reguladora del Estado, impulsada por una voluntad política que estaba ausente. Como la misma institucionalidad era un obstáculo para modificar aquella realidad negativa, se recurrió a las Fuerzas Armadas. Su acción se hará presente de 1924 a 1933, es decir, durante una década. En ese proceso, Alessandri fue sustituido por un golpe de Estado el 5 de septiembre de 1924, abandonando el país en virtud de un "permiso" constitucional. El Congreso, entre tanto, despachó el mismo día, bajo presión de la juventud militar, diversos proyectos de ley que permanecían sin tramitación desde hacía varios años. Este período, que tuvo características similares en diversos países de América latina, fue llamado la "hora de la espada" por el poeta socialista de Argentina, Leopoldo Lugones.

Una avanzada legislación social

Entre las leyes aprobadas en 1924, se encuentran las que pasarían a constituir el Código del Trabajo. Estas leyes se referían a contratos de trabajo, sindicatos profesio-

nales, tribunales de conciliación y arbitraje, indemnización por accidentes de trabajo, caja de empleados particulares, Caja de Seguro Obrero Obligatorio, derecho a la huelga y a la formación de cooperativas, así como mejoramiento de las remuneraciones de las propias Fuerzas Armadas. En general, estas leyes, junto con ampliar el consenso social, tenían por objeto sentar sobre nuevas bases los conflictos entre la burguesía y el proletariado en cuanto a la distribución del ingreso.

La legislación laboral promulgada en 1924 no fue, por cierto, una simple concesión de la clase dominante, sino el resultado de una larga lucha de los trabajadores. Dicha legislación, al reconocer el derecho a la organización sindical y a la huelga, la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas, el descanso dominical, la indemnización por accidente de trabajo, entre otros beneficios ya citados, respondió a las exigencias de los movimientos huelguísticos producidos entre 1890 y 1924. No sólo a esos antecedentes, sino también a los conflictos desencadenados desde 1920 entre los sectores sociales y sus representaciones políticas. Ellos se agudizaron en los años siguientes, especialmente desde las elecciones parlamentarias de 1924, hasta culminar con el golpe de Estado del mismo año y el contragolpe dt; 1925.

Esta nueva legislación autorizó la creación de sindicatos de obreros y empleados para lo cual se requería a lo menos 25 trabajadores en cada empresa, faena u oficina. La pertenencia a la organización sindical, una vez que su creación era acordada por el 55% de los trabajadores, tenía el carácter de obligatoria para los obreros, y de voluntaria para los empleados. El papel de los sindicatos consistía en representar los intereses de sus miembros o asociados en la discusión del pliego de peticiones y en las instancias de negociación en las juntas de conciliación y arbitraje, hasta acordar la huelga, mediante votación en secreto, con el 75% a lo menos de los asociados. La organización a nivel federativo sólo era permitida cuando provenía de la misma rama de actividades, en el caso de los sindicatos obreros, y del mismo oficio, en el caso de los empleados. Además, en general, las federaciones y confederaciones no tenían derecho a representar a los sindicatos de base en la discusi ón de los pliegos de peticiones y en las distinta fases de la negociación colectiva.

Esta legislación laboral excluyó expresamente de sus disposiciones normativas a las organizaciones de trabajadores del Estado y asimismo no explicitó la situación de los asalariados agrícolas, lo que impidió la constitución de sindicatos campesinos. Por su parte, el personal de las empresas pequeñas y los trabajadores por cuenta propia quedaron muy limitados en sus posibilidades de organizarse en sindicatos. Por último, en los hechos, las empresas mineras del salitre, cobre y carbón fueron las que lograron el más alto grado de afiliación, por su mayor empleo, seguidas por los trabajadores de las empresas de utilidad pública. No obstante estas limitaciones

legales, la afiliación sindical experimentó, en el largo plazo, un desarrollo significativo. Las cifras estadísticas así lo confirman. En los años veinte, el número de afiliados no superaba los 40 mil, pero en 1942 alcanzó a 193 mil; en la década de los 50 llegó a 289 mil y en 1968 a 370 mil. En otras palabras, el porcentaje de afiliación sindical, en relación con la población activa, creció de 2.7% al finalizar la década de los veinte a 32% en la segunda mitad de la década de los años sesenta. No se considera en esta estimación a los empleados domésticos ni trabajadores rurales.

La aprobación de una avanzada legislación social, antes que en la mayoría de los países latinoamericanos, representó la fructificación de la larga cuanto cruenta lucha de la clase trabajadora por tales objetivos, apoyada en el último momento, primero, por la Alianza Liberal y, segundo, por la juventud militar. No obstante, la Junta Militar, presidida por el general Luis Altamirano, pospuso la aplicación de las leyes sociales, disolvió el Congreso, estableció el estado de sitio e intentó la restauración en el poder de los sectores desplazados en 1920. La juventud militar, conducida por los mayores Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove, dio un contragolpe el 23 de enero de 1925, sustituyendo a la Junta Militar por otra, presidida por el político civil Emilio Bello. Este sector estaba animado por un espíritu anti-oligárquico y unido a los grupos que perseguían la restauración del gobierno legítimo. La nueva Junta de Gobierno autorizó, en efecto, el retorno de Alessandri a la Presidencia de la República, sobre la base de un acuerdo para elaborar una nueva constitución política que pusiera término al régimen parlamentario y asegurara el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Esto último no sucedió porque ellas continuaron participando en la vida política del país, como secuela de la ruptura constitucional de 1924, durante 10 años, entre el término del primer gobierno de Arturo Alessandri y el comienzo del segundo.

Civilismo y militarismo

El presidente de la República Arturo Alessandri designó una comisión consultiva, integrada por representantes de distintos sectores sociales y políticos, para preparar la convocatoria de una asamblea constituyente. En vez de cumplir con esta tarea, dicha Comisión elaboró un proyecto constitucional que fue sometido a plebiscito, aprobándose en el mes de agosto de 1925, la nueva constitución fue promulgada el 18 de septiembre del mismo año y la vida política chilena se va a regir durante 48 años por esta carta fundamental. Sin embargo, ella entró en plena vigencia sólo a partir del segundo gobierno de Alessandri (1933-1938), debido al interregno pro-

ducido por la dictadura del ahora general Ibáñez (1927-1931) y al período de anarquía política que siguió a su derrumbe. En 1973, la dictadura castrense de Pinochet hizo escarnio de los principios liberales de esa constitución, por lo que es necesario hacer un breve análisis de sus preceptos generales.

La constitución de 1925 estableció que el Estado era unitario y definió al gobierno como republicano y democrático representativo. Delimitó claramente las atribuciones de los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— para evitar el retorno de los gobiernos autoritarios que predominaron entre 1833 y 1891, del general Prieto, el consolidador del antiguo orden autocratico, a Balmaceda, precursor del nuevo orden democrático-burgués. Asimismo, erradicó el régimen parlamentario, con cuyo objeto se suprimió la atribución del Congreso de aprobar periódicamente las leyes para cobrar contribuciones y mantener en pie las Fuerzas Armadas, confiriéndoles un carácter permanente. Sobre la ley de presupuesto, estableció que de no ser aprobada el 31 de diciembre de cada año, entraría a regir el proyecto presentado por el poder ejecutivo.

El régimen de equilibrio de los poderes del Estado prescrito en dicha carta correspondía a la concepción burguesa de una sociedad estática, cuyos sectores usufructuarios de sus niveles de vida no deseaban su alteración. En este sentido, constituyeron siempre un espejismo político las mayores atribuciones que tenía el poder ejecutivo respecto del legislativo. Estas atribuciones de poco servían a un gobierno que se proponía introducir cambios profundos en las estructuras socioeconómicas del país. Sin mayoría parlamentaria, el poder ejecutivo podía, conforme a sus facultades de órgano colegislador, impedir que se dictaran leyes que alteraran o entrabaran su acción gubernativa, pero no podía imponer una legislación que permitiera transformar la organización económica, social y política del país. Las amplias atribuciones de que estaba dotado el presidente de la República sólo servían para mantener el orden establecido.

Esta constitución liberal, inspirada por el presidente Alessandri y formulada principalmente por su ministro de justicia, José Maza, incorporó algunas modalidades de los derechos sociales que empezaban a reclamar las masas después de la Primera Guerra Mundial. Entre ellas, cabe destacar la función social del derecho de propiedad, la obligación del Estado de velar por la protección al trabajo, la industria y la previsión social, así como el reconocimiento de un mínimo de bienestar en cuanto a vivienda, salud y educación. Ella resolvió, por último, un antiguo problema siempre postergado: la separación oficial de la Iglesia y el Estado, cuya larga discusión diera lugar a tantas encendidas controversias en el siglo xIx. Esta constitución es, por último, el instrumento jurídico que habrá de permitir el tránsito entre el Estado oligárquico y el Estado democrático representativo.

Promulgada la nueva carta fundamental, se agudizaron los conflictos existentes entre el presidente Alessandri y su ministro de guerra, coronel Carlos Ibáñez, precipitando por segunda vez el abandono de las funciones del presidente, por renuncia, tres meses antes del término de su mandato. Convocada una segunda elección, fue designado como primer mandatario Emiliano Figueroa, pero Ibáñez continuó teniendo el poder tras el presidente, en su carácter de ministro de guerra primero y del interior en seguida. Como culminación de un conflicto de Ibáñez con el presidente de la Corte Suprema, Miguel Ángel Figueroa, hermano del presidente de la República, éste renunció a su cargo, asumiendo el ahora general Ibáñez, en su carácter de ministro del interior, las funciones de vicepresidente de la República.

En el breve lapso de la restauración alessandrista de 1925, el imperialismo estadounidense consolidó su predominio en Chile. Así, el caudillo del movimiento social de 1920 cedió a las presiones de sus enemigos que lo acusaban, al comienzo de su gobierno, de ser agente del capital británico. La misión Kenmerer viajó a Chile en 1925 a realizar un inventario de los recursos y la capacidad económica del país. De acuerdo a este estudio, propuso una reorganización del sistema financiero, asegurando el dominio de la oligarquía en indisimulada alianza con el capital estadounidense. Algunas de las más importantes reformas administrativas y financieras mencionadas son fruto tanto de la misión Kenmerer como de la misión Long, ambas contratadas en Estados Unidos, el nuevo poder imperial que adecuaba las reglas de juego para su dominio. Estas reformas constituyeron la primera fase de la "modernización" del país.

Los militares, que habían ingresado a la escena política con el golpe de Estado de 1924, consolidaron su poder ante la crisis del parlamentarismo y los partidos tradicionales, que se habían mostrado incapaces de conducir el proceso de transformación del país. La junta de gobierno surgida del contragolpe de 1925 y el gobierno de Ibáñez continuaron desarrollando el programa de renovación política iniciado por Alessandri. Asimismo abrieron paso a la actualización de las instituciones del Estado, para servir mejor, con mayor eficiencia, la evolución del sistema capitalista en el período de entreguerras. Por otra parte, la inestabilidad política generada a partir del golpe de 1924 y el auge cada vez mayor de la lucha de masas abrió las puertas al intento de militarizar el gobierno. Por eso, el general Ibáñez consolidó su poder en 1927. Bajo la máscara de un sedicente apoliticismo, se estableció un sistema represivo tras el cual se escondía la salvaguarda de los intereses económicos de la burguesía, asociada al capital extranjero. Este sistema adquirió ciertos rasgos corporativistas asimilados de los regímenes dictatoriales establecidos por Mussolini en Italia y Primo de Rivera en España.

El gobierno de Ibáñez constituyó una dictadura legal. Elegido por sufragio popular, este presidente mantuvo formalmente el régimen constitucional, eligiendo un congreso dócil con la complicidad de los partidos tradicionales: el Congreso "termal", cuyo nombre se derivaba del hecho de haberse fraguado en las termas de Chillan. Desestimuló el desarrollo del movimiento obrero a través de la represión de los cuadros de vanguardia y el control de las organizaciones sindicales. Para asegurar este último objetivo, la dictadura creó la Confederación Republicana de Acción Cívica (CRAC), con la cual pretendió también establecer una base de sustentación popular para facilitar su arbitraje en el conflicto entre las clases.

La dictadura se mantuvo en tanto el país experimentó una si tuación económica favorable derivada de la demanda del mercado mundial de salitre y cobre. El aumento de los ingresos fiscales y los nuevos préstamos externos permitieron la estabilización de la moneda, el mejoramiento de la balanza de pagos y el financiamiento de programas de construcción de obras públicas. Sin embfrgo esta situación duró hasta la crisis mundial del sistema capitalista en 1929-1931. La naturaleza represiva del gobierno de Ibáñez provocó como reacción una conspiración permanente por derrocarlo, tanto en el país como en el exilio. El instigador fundamental fue el ex Presidente Arturo Alessandri y algunos militares en retiro, como el General Enrique Bravo y el Coronel Marmaduque Grove. Este último había sido destituido por el dictador, encontrándose en Europa en comisión de servicios. La dictadura, desgastada durante cuatro años, fue por fin abatida el 26 de julio de 1931, por una insurrección general encabezada por los estudiantes universitarios y el movimiento obrero, bajo la inspiración de las ideas socialistas.

El régimen dictatorial se desplomó, en realidad, en medio de la crisis mundial, por la asfixia financiera de la banca estadounidense, cuando aquél ya no servía a sus intereses, y el retiro del apoyo que la burguesía interna había prestado hasta entonces al régimen en decadencia. La clase obrera y los sectores medios, por su parte, intervinieron en forma destacada en esta lucha para liberarse del peso de la crisis económica y social, que había recaído sobre sus hombros, así como de la política represiva. Ante la rebelión popular, Ibáñez solicitó al Congreso autorización parar ausentarse del país y entregó el poder al presidente del Senado, Pedro Opazo, trasladándose por tierra a Argentina el 27 de julio de 1931.

Para superar dicha situación, se convocó a una nueva elección para el 4 de octubre de 1931. La oligarquía, la Iglesia católica y los partidos tradicionales —unidos en un solo frente— burlaron una vez más a las masas trabajadoras, al generar, como réplica al predominio militar, un movimiento "civilista" que eligió como presidente de la República a Juan Esteban Montero, un profesor de derecho romano.

Este gobierno se caracterizó por su absoluta incapacidad para resolver los problemas esenciales y los conflictos cada vez más agudos que conmovían a la sociedad. Su política sólo sirvió los intereses de los terratenientes, banqueros y empresarios nacionales y extranjeros, con absoluto olvido de las legítimas aspiraciones del movimiento popular. El gobierno de Montero, ante la creciente oposición de los trabajadores, hizo uso de la represión en forma tan dura como su antecesor, con la colaboración de los militares. Pero las masas se organizaron en nuevos sindicatos y partidos, o, al menos, en pequeñas vanguardias políticas, con programas propios de orientación socialista, e iniciaron una resuelta lucha contra la clase dominante. El divorcio existente entre las masas y el gobierno se exteriorizó en hechos luctuosos en 1931, como fueron la insurrección de la marinería de guerra, y las matanzas de trabajadores en las ciudades de Copiapó y Vallenar, conocidas como la "Pascua trágica". Éste es el mito del civilismo contra el militarismo.

Las vanguardias políticas

Entre 1920 y 1932 se desarrolló en Chile un movimiento de generación de vanguardias políticas, como en otros países del mundo. No es ésta una temática que haya atraído la atención de los historiadores, no obstante la importancia de los hechos que enfrentaron las vanguardias, en un período entre dos guerras mundiales, en el que el imperialismo estadounidense predominó sobre el inglés, en el que la hegemonía oligárquica tradicional fue desafiada por diversos sectores sociales, en el que el país fue sacudido por dos crisis económicas y el régimen parlamentario fue sustituido por uno presidencial. Todos estos acontecimientos precipitaron un proceso de inestabilidad política y social, dentro del cual las vanguardias políticas jugaron un papel intelectual significativo. No obstante, cabe destacar el interés de Fabio Moraga por investigar esta materia, como tesis de prueba para graduarse de profesor de historia.

El profesor Fabio Moraga señala como objetivos de su investigación la reconstrucción del origen y evolución histórico y etimológico del concepto de vanguardia, el estudio del contexto en que se desarrollaron los grupos de vanguardia política; su definición, tanto en América Latina como en Chile, en particular. Sobre esta base, concentra su estudio en los grupos que se articularon en torno a la FECH: los grupos artísticos y literarios, el grupo universitario Lux, los grupos universitarios Avance y Renovación, y los grupos políticos que darían origen al Partido Socialista.[39] Moraga

[39] Fabio Moraga, *Las vanguardias políticas en Chile (1920-1932),* Santiago, 1998.

distingue dos etapas en el desarrollo de los grupos de vanguardia en Chile durante el período de 1920 a 1932, los que tienen sus orígenes más directos en las crisis internacionales y en las internas de los sectores sociales dominantes.

El período mencionado marcó un quiebre en el sistema político vigente hasta fines de la segunda década del siglo xx:

> Las crisis de la oligarquía liberal-conservadora en el ciclo 1919-1920, y del caudillismo ¡bañista aliado a la oligarquía agrario-conservadora en el ciclo 1920-1932 que, aparte de sus manifestaciones económicas tenían un aspecto político de conducción, permitieron el ascenso de las "vanguardias políticas". Ello se produjo en dos ciclos diferenciados de desarrollo, no sólo por sus características ideológicas, anarquistas en la primera y prepartidista en la segunda, sino por sus reales posibilidades de producir cambios en el oscilante sistema político.[40]

La primera etapa comprende el lapso que va entre 1920 y 1926, durante el cual se produjo la crisis de dominación oligárquica, que se expresó en hechos tan significativos como las "jornadas del hambre", conducidas por la Asamblea Obrera de la Alimentación, y el triunfo de la Alianza Liberal, con Arturo Alessandri.

Las vanguardias que surgieron entonces son de corte anarquista y buscaron por el descrédito de los partidos, la representación directa de la clase obrera (artesana e industrial) o segmentos de ella y de otros estamentos sociales. La presencia anarquista se impuso en la Federación de Estudiantes de Chile:

> Durante esta etapa los vanguardistas chilenos, inspirados en la doctrina de moda, cultivaron un anarquismo "diletante", rechazaron de lleno la política sistémica, por su fuerte carácter oligárquico, en especial a los partidos políticos tradicionales, y volcaron sus esfuerzos a fortalecer las organizaciones sindicales, aunque la mayoría de ellos fueron estudiantes o profesionales de la clase media e incluso algunos tránsfugas de la oligarquía.[41]

Esta forma de anarquismo contenido en las vanguardias fue derrotada con la acción política de los militares, particularmente del gobierno de Ibáñez, de 1927 a 1931.

En esta primera etapa, bajo la influencia anarquista, se destacaron dos grupos con conciencia de vanguardia: el grupo Siempre y el grupo Lux. El primero, formado

[40] *ídem.*
[41] *Ídem.*

por obreros, nació para resistir las políticas represivas del gobierno de Ibáñez y luchar por su término. Después del derrocamiento de la dictadura, los anarquistas abordaron la lucha contra los sindicatos legales y contra el comunismo. El segundo grupo, formado por estudiantes universitarios, donde las ideas anarquistas habían penetrado en los primeros 20 años del siglo xx, particularmente en la Universidad de Chile, se fundó en 1921 por alumnos de la Escuela de Medicina. Su posición partió de la crítica al sistema capitalista, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en una distribución injusta del ingreso nacional. Para eso la clase dominante utiliza la violencia, a través de las Fuerzas Armadas, el Congreso y los tribunales de justicia. El camino de la liberación de los trabajadores, decían, conduce al "comunismo libertario" a través de la acción directa y autónoma de los sindicatos revolucionarios, que rescató la herencia del socialismo "ácrata" de los últimos años del siglo xIx y de los primeros del siglo xx.

En este mismo espíritu, el grupo Lux dio la lucha en el movimiento estudiantil, en torno a la definición de objetivos y métodos de la FECH. Impulsó, desde luego, la unificación de los grupos universitarios en la Confederación de Estudiantes Revolucionarios, que asumió el nombre de Soviet de Estudiantes de Santiago, formado por el grupo Lux, de la Escuela de Medicina, el grupo Espartaco, de la Facultad de Bellas Artes, el grupo Renovación, de la Facultad de Derecho y el grupo Rebelión, de los estudiantes secundarios. Este *soviet,* en oposición a la reaccionaria Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, acusó a la FECH de no haber adoptado posiciones de vanguardia. En 1922 aparecieron en el firmamento del movimiento universitario dos jóvenes que tendrán una larga participación en política hasta su vejez: Osear Schnake, alumno de la Escuela de Medicina, y Eugenio González, alumno del Instituto Pedagógico. El primero fue elegido presidente de la FECH ese año y el segundo lo sucedió en el cargo, por renuncia de aquél. Ambos tenían diferencias de matices dentro de una posición anarquista. En los años posteriores, hacia 1925, se agotó la primera fase de las vanguardias políticas.

La segunda etapa en el desarrollo de estas vanguardias se realizó entre los años 1930 y 1932, entre la lucha contra la dictadura de Ibáñez y por la República Socialista de Grove. Este movimiento es mucho más amplio, como quiera que comprometió a los sectores medios, representados por civiles y militares, a los sindicatos y gremios, así como a los grupos socialistas y cristianos. Por lo mismo, fue capaz de superar el anarquismo. En 1930, el movimiento universitario resurgió de su caída anterior, realizando una actividad entusiasta, en medio de las repercusiones de la crisis capitalista del año anterior. La FECH, bajo la dirección de Julio Barrenechea, estudiante de derecho y poeta, futuro diputado del Partido Socialista, fue reprimida

por la dictadura. No obstante, el movimiento estudiantil se alzaría en 1931 como un actor colectivo formidable en el derrocamiento de la dictadura.

Los grupos de vanguardia forjados en esta segunda etapa tuveron una importancia significativa en la configuración de un nuevo sistema de partidos, como el comunista, el socialista y la democracia cristiana, que entrarán a competir con los partidos históricos provenientes del siglo xIx. Estos grupos asumieron dos líneas de orientación política: el socialismo y el social-cristianismo. Entre los primeros destacaron, en orden cronológico índice, Avance, Renovación y los grupos propiamente socialistas. Entre los segundos, cabe mencionar a la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, los grupos cristianos sociales (Germen, Partido Social Sindicalista). De los grupos mencionados, voy a referirme sólo a algunos, los más significativos, que generaron organizaciones superiores o desde los cuales surgieron dirigentes destacados, pero no voy a analizar a los grupos socialcristianos.

El primero de los grupos de vanguardia que se constituyó —en este caso de carácter cultural— fue índice, en 1930, por un brillante sector de intelectuales con ideas socialistas, que editó una revista con el mismo nombre para difundir su pensamiento. En el comité directivo de esta publicación participaron Mariano Picón Salas, Raúl Silva Castro, Ricardo A. Latcham, Eugenio González y José Manuel Sánchez. Entre los colaboradores de la acción cultural de este grupo participaron figuras intelectuales como Domingo Melfi, Januario Espinoza, Francisco Frías Valenzuela, Juan Gómez Millas, Julio Heise, Mariano Latorre, Eugenio Pereira Salas, Benjamín Subercaseaux, etcétera. La revista alcanzó cierto relieve latinoamericano tanto por el desarrollo de las ideas socialistas en algunos de los países del continente como por la presencia en Chile de exiliados provenientes de los países dominados por dictaduras militares. La existencia de este grupo se prolongó hasta 1933, año en que dejó de aparecer la revista y muchos de sus miembros se incorporaron al Partido Socialista, fundado en ese mismo año.

El grupo universitario Avance tuvo su origen en la lucha política de comienzos de los años treinta. Sus más connotados dirigentes, ante el fracaso de los partidos en poner término a la dictadura, consideraron que había llegado la hora de los estudiantes. Este grupo surgió en torno al Partido Comunista, aunque no todos sus miembros tuvieron dicha militancia. Aún más, desde el principio gravitaron las diferencias entre oficialistas y disidentes (laffertistas e hidalguistas, estalinistas y trotskistas), que en el grupo Avance estaban representadas por Marcos Chamudes y Osear Waiss, respectivamente. La mayoría de sus militantes se concentraban en las facultades de medicina y derecho de la Universidad de Chile, predominando

en la primera los oficialistas (estalinistas) y en la segunda los disidentes (trotskistas). Avance tuvo también una presencia significativa en la Facultad de Ingeniería.

Este grupo confirió un contenido ideológico más claro a la lucha por la reforma universitaria, relacionando ésta con la lucha por el cambio de la sociedad, a partir de la crítica del célebre manifiesto universitario de Córdoba, Argentina, difundido en 1918.

> Para los miembros de Avance, la reforma tenía que tener un fuerte contenido social: puesto que la universidad era un órgano del Estado burgués y reflejaba los intereses de la clase dominante, por lo tanto ningún movimiento limitado a los marcos universitarios, sería un movimiento de cambio social. La reforma para Avance era un 'detalle' dentro del proceso revolucionario mundial, por ende, los estudiantes debían ponerse al servicio de los obreros en la lucha de clases contra la burguesía.[42]

Entonces destacó en este debate el estudiante de derecho Manuel Contreras Moroso, de orientación trotskista, quien militaría después, hasta su muerte, en el Partido Socialista. En general, cabe señalar que este grupo recibió influencia ideológica externa, particularmente de España a través de la revista Comunismo, editada por Andrés Nin, y de Perú a través de la revista Amauta, editada por José Carlos Mariátegui.

El grupo Avance alcanzó una significativa importancia en los primeros años de la década de los treinta, porque fue capaz de enfrentar un momento político crítico, como la caída de la dictadura, la insurrección de la marinería, la república socialista y un lapso de anarquía política, que marcarán la vida y la lucha social por muchos años. Por otra parte, le correspondió actuar en medio de la carencia de una dirección del movimiento popular, tanto del sector obrero como medio, y de un Partido Comunista dominado por las contradicciones provenientes del exterior entre estalinistas y trotskistas. Generó un amplio debate, con un discurso coherente, pero a fines de 1932 entró en declinación. Las contradicciones entre las fracciones del Partido Comunista repercutieron en Avance, dividiéndose en una rama que siguió a dicho partido y otra que daría origen a la Izquierda Comunista, la que posteriormente ingresaría al Partido Socialista. Los más destacados dirigentes, como Oscar Waiss, Manuel Contreras Moroso, Humberto Mendoza, Jorge Mac Guinty, Roberto Alvarado, presidente de la FECH por dos períodos (1932-1934), se incorporaron a dicho partido.

[42] *Ídem.*

El sector estalinista del grupo Avance rede finió sus principios acordes con la línea del Partido Comunista. Por su parte, el sector disidente configuró un Frente de Izquierdas con las fuerzas socialistas emergentes durante el año 1933, proyectando una influencia notoria en las facultades de medicina y derecho de la Universidad de Chile. En 1934, dicho sector constituyó el grupo universitario Vanguardia, que por cierto no logró el nivel del primitivo grupo Avance. Desde el año siguiente, 1935, el sector comunista de este último, impulsado por el cambio de orientación de la Tercera Internacional, se abrió hacia la acción conjunta con los otros grupos de izquierda tras la política de frente popular contra el fascismo, que en el campo universitario se configuró como frente único estudiantil:

> Este acercamiento entre trotskistas y estalinistas fue único en el mundo y extrañamente no se produjo sólo en el movimiento estudiantil sino también en la política nacional, ya que ambos partidos, el comunista y la izquierda comunista, participaban, junto a los socialistas, en el Block de Izquierda, en el que confluían socialistas y trotskistas y que también fue un antecedente para la formación del Frente Popular.[43]

En resumen, el sector comunista terminó en las Juventudes Comunistas, fundadas en 1933 y el sector disidente en otros partidos de izquierda, particularmente el Partido Socialista, fundado en ese mismo año.

A partir de 1931, y antes del nacimiento del Partido Socialista de Chile, surgieron numerosos grupos con esta ideología, como el Partido Social: sta Revolucionario, el Partido Socialista Internacional o Independiente, el Partido Socialista Unificado, el Partido Revolucionario Socialista, la Orden Socialista, el Partido Socialista Marxista, la Nueva Acción Pública y la Acción Revolucionaria Socialista. Esta última organización revistió caracteres especiales, toda vez que ella:

> ...fue una de las organizaciones constituidas por grupos de trabajadores e intelectuales de pasado anarco-sindicalista y un grupo gremial de importancia en la época: los profesores, los que experimentaron la "tendencia hacia la izquierda" dentro de su evolución política en el período.[44]

Destacaron entre sus militantes Oscar Schnake, Eugenio González, Marmaduque Grove y Augusto Pinto, un obrero autodidacta fundador de la iww y de larga trayectoria sindical y política, que confluyó también en el Partido Socialista.

[43] *Ídem.*
[44] *ídem.*

La Orden Socialista, con clara influencia de la masonería, preconizaba una especie de socialismo de Estado. En ella destacaron Arturo Bianchi y Juan Díaz, que tendrían posteriormente participación política en el partido que se fundaría en 1933. Aquella organización entró en alianza con los partidos comunista (trotskista) y socialista unificado en 1932, tanto en la oposición al gobierno de Carlos Dávila como en la lucha general por el poder. El Partido Socialista Marxista, constituido en 1931, tenía una fundamentación teórica basada en el pensamiento revolucionario y había formulado una plataforma programática, en la que exigía reforma agraria, nacionalización de la industria y de los recursos naturales, salario mínimo, igualdad de los derechos civiles y políticos para la mujer, democratización y socialización de la enseñanza pública, etcétera.

De todas estas organizaciones socialistas, la más importante fue la Nueva Acción Pública, fundada por algunas personalidades que habían participado antes en otros grupos de vanguardia. Entre sus miembros destacados se encontraban Eugenio Matte, Natalio Berman, Carlos Alberto Martínez, Enrique Mozo y Luis Mesa Bell, periodista asesinado por la policía en el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Entre sus principios teóricos y demandas programáticas destacaban valores hoy vigentes, como el antiimperialismo y la solidaridad con el mundo subordinado, así como la conquista de la plenitud de la vida humana y la elevación de la cultura. En el orden económico, preconizaba la redistribución de la tierra (reforma agraria), la socialización de los medios de producción y la justa distribución de los ingresos, así como la reestructuración del país en regiones económicas, con administración propia, manteniendo la unidad política. En el orden social, planteaba la protección de la familia como célula básica de la sociedad, exigiendo la igualdad de todos los hijos ante la ley y su defensa biológica contra las enfermedades y los vicios. En el orden político, auspiciaba la libre agrupación de los trabajadores manuales e intelectuales para generar el gobierno democrático. En suma, una democracia plena.

De los integrantes de los grupos de vanguardia generados en los comienzos de la década de los treinta, muchos no perseveraron en la acción política, sino que se dedicaron a sus profesiones, donde algunos alcanzaron éxito, pero otros tuvieron, por el contrario, un gran relieve en las actividades partidistas y de gobierno. Sólo voy a referirme a los socialistas. Del grupo Avance, cabe destacar a Tomás Chadwick (senador), Jorge Mc Ginty (miembro del Comité Central), Oscar Waiss (miembro del Comité Central y subsecretario de minería), Manuel Contreras Moroso (miembro del Comité Central), Luis Ernesto Muñoz (dirigente regional), Luis Herrera (Comité Regional y representante de Chile en la OEA), René Amagada (dirigente regional), Juan Bautista Picasso (dirigente regional), Federico Klein (diri-

gente nacional y embajador), Astolfo Tapia (diputado y profesor universitario) y Enrique Sepúlveda, que participó en el Partido Obrero Revolucionario y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, para ingresar al Partido Socialista después del golpe militar de 1973. Por último, el principal de todos: Salvador Allende, quien fuera Secretario General y miembro del Comité Central, diputado y senador, ministro de Estado y presidente de la República.

Destacaron también, provenientes de la Izquierda Comunista, Carlos Acuña (dirigente sindical), Humilde Figueroa (dirigente sindical), Manuel Hidalgo (dirigente sindical de la FOCH, senador y embajador), Humberto Mendoza (miembro del Comité Central y ministro de Estado), Mario Miño (mártir del partido), Carlos Videla (dirigente sindical). De la Juventud Bolchevique Leninista, Julio Benítez (dirigente del Comité Central y ministro de Estado) y Adonis Sepúlveda (dirigente del Comité Central y senador). De los diversos grupos socialistas que fundaron el Partido Socialista, Oscar Schnake (secretario general, senador, ministro de listado y embajador), Marmaduque Grove (líder, ministro, secretario general y senador), Augusto Pinto (autodidacta brillante), Eugenio Marte (miembro de la junta de gobierno, integrante del Comité Central y senador), Carlos Alberto Martínez (miembro del Comité Central, senador y ministro de Estado), Eduardo Rodríguez (diputado), Arturo Bianchi (ministro de Estado), Juan Díaz (dirigente sindical), Luciano Kulcewsky (cultor de la estética Art Nouveau en la arquitectura), Eugenio González (miembro del comité central, secretario general, senador, ministro de Estado, director del Instituto Pedagógico, decano de la Facultad de Filosofía y Educación y rector de la Universidad de Chile), Eliodoro Domínguez (dirigente sindical y senador), Gerardo López (dirigente sindical y diputado), Eduardo Ugarte (miembro del Comité Central), Jaime Vidal Oltra (ministro de Estado) y Natalio Berman (diputado).

Después del primer centenario de la independencia nacional y concluida la Primera Guerra Mundial, Chile enfrentó, al igual que los demás países latinoamericanos, un proceso de crisis que requería un reacomodo del sistema de vida colectiva, para superar la herencia del siglo xix, mediante una mayor apertura de los espacios de discusión y crítica. Esta era la única forma de cristalizar la quimera de organizar el Estado. Ante el derrumbe del sistema de partidos provenientes del siglo anterior emergieron las vanguardias políticas como un anticipo de un nuevo sistema todavía no bien definido. El viejo debate de los conservadores, liberales y radicales, con todas sus ramificaciones, continuaba centrado en algunos temas valóricos, de carácter religioso: clericalismo versus masonería. Los nuevos tiempos planteaban demandas de carácter socioeconómico y político, impulsadas por nuevos sectores sociales, a través de la lucha de clases y la democracia. En este nuevo conflicto con-

currieron los grupos intelectuales y obreros exigiendo la apertura de los centros culturales, las organizaciones sociales, las calles y plazas para que circularan las nuevas expresiones políticas y artísticas.

En esta lucha crucial, las vanguardias políticas intentaron abordar la crisis global con la crítica analística y formulaciones renovadoras de la sociedad y el Estado. Era el aire fresco de la modernización que promovía la democracia. Dos corrientes socioculturales confluían al unísono: la clase obrera, que desde fines del siglo anterior promovía la satisfacción de sus derechos y aspiraciones, por medio de la organización y movilización, y los intelectuales de los sectores medios, que se nutrían del desarrollo cultural de Europa. Las vanguardias políticas comprendían ambas corrientes y procuraban unirlas en la lucha por mejorar la sociedad.

Las vanguardias políticas tomaron algunas formulaciones programáticas del antiguo sistema político, removido por la Alianza Liberal en los años veinte, y le confirieron un nuevo contenido, más avanzado. En sus idearios estuvieron presentes la educación primaria obligatoria (ley aprobada en 1919), la enseñanza laica (Estado docente), la atención social (pública) de la salud, el derecho a la vivienda, la dignificación del trabajo, la libertad de asociación y la libre expresión de las ideas. Pero su crítica y orientación eran más radicales en principios valóricos sobre la familia, la relación amorosa (la pareja, la sexualidad, el matrimonio, el divorcio, la concepción, la maternidad) la educación sexual, la igualdad de los sexos, el papel de la mujer en la sociedad. En suma, las vanguardias, inspiradas en el socialismo, auspiciaron la transformación de la sociedad y su agotamiento dio paso a los nuevos partidos revolucionarios.

En Chile, el movimiento obrero se había extendido y logrado una notable organización entre la Primera Guerra Mundial y la crisis capitalista de los años treinta. Al final de este período desempeñaron un papel decisivo las ideas comunistas y socialistas, inspirando dos acontecimientos fundamentales sucesivos: la insurrección de la marinería de guerra en 1931 y la República Socialista en 1932. La crisis hizo evidentes las contradicciones del sistema capitalista y proyectó la perspectiva socialista. En este sentido, la insurrección de la marinería fue uno de los efectos de esa crisis, es decir, fue la reacción de las tripulaciones de esta rama de las Fuerzas Armadas en cuanto asalariados, al intento del gobierno de hacer recaer en ellos el costo

de la crisis. Es éste un episodio silenciado o desfigurado por la historiografía tradicional, que conviene recapitular con la brevedad que exige este ensayo.

El 1º de septiembre de 1931, la marinería tomó posesión de os navios de guerra, previo arresto de la oficialidad, justificando este acto políticamente. En su primer comunicado, denunció que los suboficiales y marinos "habían sido siempre juguetes de los mismos (apasionamientos políticos), empleándoseles para levantar y derrocar gobiernos, y han visto que todas esas maniobras no han hecho otra cosa sino que hundir cada día más al país en la desorganización, el descrédito y la insolvencia". Los marineros, usados siempre en los levantamientos militares como "carne de cañón" y para imponer políticas sólo en beneficio de la oligarquía, formularon una crítica muy certera a los mandos de la Armada, la que por cierto era aplicable al conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la misma proclama, los marineros expresaron su solidaridad de clase con los trabajadores y sostuvieron sus propias reivindicaciones. Exigieron la derogación del decreto por el cual se habían rebajado las remuneraciones del sector público, así como la aplicación de un empréstito forzoso a la burguesía. No aceptaban que se les sacrificara "para equilibrar situaciones creadas por malos gobernantes y cubrir déficit producidos por los constantes errores y falta de probidad de las clases gobernantes." Como un anticipo de la revolución socialista del año siguiente, la marinería esbozó un programa para afrontar la crisis. Entre las medidas propuestas, en un segundo comunicado, sobresalían la suspensión del pago de la deuda externa para restablecer el orden financiero interno, la subdivisión de las tierras productivas, el desarrollo de nuevas industrias y un plan de obras públicas para absorber la desocupación.

El programa de la insurrección de la marinería suscitó profundas simpatías en las masas populares, especialmente en la FOCH, que acordó promover una huelga general en apoyo a dicho movimiento. Este paro de actividades alcanzó considerables relieves. El gobierno reprimió a su vez a los trabajadores, disolviendo violentamente una manifestación de comunistas y socialistas en Santiago, la capital del país. La represión a los marineros fue aún más violenta. El ejército atacó el 5 de septiembre a los barcos surtos en el puerto de Talcahuano, con una veintena de muertos en el bombardeo. La escuadra, al mando de los insurrectos, zarpó hacia Coquimbo, en el norte del país, produciéndose un combate aéreo-naval en esta travesía. No obstante que el gobierno no contaba con los medios para aplastar a los 5 mil marineros, éstos se rindieron el 8 de septiembre del mismo año.

¿Por qué se produjo este desenlace? El dirigente comunista Elias Lafferte explica la situación:

> Desde luego, expresa, faltó una dirección segura, una espina dorsal ideológica a ese movimiento, que fue esencialmente emocional, una improvisación que respondía a un clamor que hacía presa en el ánimo de los marineros y suboficiales. Pero ellos no sabían dónde ir ni qué hacer. El movimiento quedó aislado, no hubo tiempo ni condiciones políticas para impulsar un apoyo masivo de las organizaciones obreras, cuya solidaridad alcanzó a expresarse de manera limitada, en Santiago y Valparaíso.

Los dirigentes y principales implicados fueron condenados a penas de muerte o presidio, pero la República Socialista les concedió la amnistía en 1932, en un acto de continuidad de propósitos revolucionarios.

El gobierno reaccionario del presidente Montero justificó la represión ejercida durante el breve lapso en el que ejerció el poder. La explicación dada sobre aquellos hechos así lo corrobora. "El atentado de la marinería, del año último, como los conatos de subversión del orden en Copiapó y Vallenar, productos de una explotación por elementos disolventes de la inquietud política y económica en la que se debatía el país, fueron dominados con energía, dentro de una severa comprensión de los deberes para la comunidad." Esta es la vieja doctrina de las clases dominantes, que les permite reprimir con la mayor violencia a las clases subordinadas, cuando se rebelan contra el orden existente, al tiempo que enaltecerse ellas mismas cuando derrocan gobiernos constitucionales para instaurar dictaduras y saquear el país en su propio beneficio. La historia de Chile está plagada de estos comportamientos represivos. La insurrección de la marinería quedó como un acontecimiento insólito, de coraje no superado en nuestra historia, único en el mundo.

La primera utopía socialista

La ideología burguesa descansa en la interpretación del desarrollo de Chile a través de mitos que de tanto repetirse se han convertido en lugares comunes, como su "pacífica evolución democrática" y la "prescindencia de las Fuerzas Armadas en la vida política". Es la "hermosa" historia escrita por las clases dominantes, dentro de la cual desentonan tanto la República Socialista de 1932 como el Gobierno Popular de 1970, por lo que han sido excluidos de sus páginas o satanizados como acontecimientos demasiado ordinarios. Esta historia oficial destaca, en cambio, las "hazañas" de la burguesía. Será la obra de nuevos investigadores, complementaria de la ya realizada, la que proyectará una visión distinta y, por cierto, más genuina, de nuestra realidad histórica, de la cual surge palpitante el lento y contradictorio proceso de crecimiento nacional. En él chocan dialécticamente las estructuras antiguas con las

modernas y se suceden en el poder las fuerzas conservadoras del orden heredado de la Colonia y las fuerzas liberales que miran con indisimulada curiosidad hacia el nuevo orden emergente de la revolución burguesa en Europa. Es la larga etapa de germinación de una sociedad que estallará periódicamente en profundas convulsiones.

La constitución de 1833, que se mantuvo por casi un siglo, con algunas reformas, consolidó el resultado de las armas y legitimó un sistema político a través del cual la clase dominante pudo decidir periódicamente, entre sus pares, por medio de un régimen electoral restringido y la intervención gubernativa, quiénes gobernarían el país. Las luchas populares, también cruentas, por la represión, obligaron a la burguesía a extender el voto censitario hasta incorporar gradualmente, en el curso de siglo y medio, a quienes supieran leer y escribir, a las mujeres, a los jóvenes y a los analfabetos, así como a suprimir vicios que restaban representatividad a los procesos electorales y a extender la cultura. Educación y sufragio: he ahí dos claves, según Valentín Letelier, del desarrollo político chileno, con todas sus limitaciones.

Es en este marco histórico donde se debe apreciar a la República Socialista como la primera utopía que el movimiento popular intentó cristalizar, incorporándola en las páginas de la historia de Chile. Ella se produjo en el contexto de un período de transición que sacudió a gran parte del continente latinoamericano. Este proceso tiene como expresiones, entre otras, a la rebelión de los tenientes de Brasil en 1923, a la revolución juliana de Ecuador en 1925, a la huelga bananera de Colombia en 1928, a la revolución salvadoreña en 1932, y al movimiento de liberación nacional de Nicaragua de 1927 a 1934. En este punto, la República Socialista tiene antecedentes mediatos e inmediatos. Los primeros se remontan al año 1920, que marcó el inicio de un proceso de modernización y cambio en la sociedad y el Estado, y los segundos se inscriben en la gran depresión del sistema capitalista, que se inició en 1929 y proyectó sus efectos hasta los primeros años de la década siguiente, los cuales se hicieron sentir en los países latinoamericanos de manera crucial.

Respecto a los primeros antecedentes, habría que agregar algo más. El gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925), impulsado por un temprano populismo, abrió las puertas a una profunda crisis institucional. En este proceso, el impetuoso avance de la burguesía industrial terminó por sustituir a la oligarquía agraria en la hegemonía del bloque social dominante. En este sentido, el movimiento de 1920 representó una ruptura social, en virtud de la presión que ejercían las clases trabajadoras para obtener una mayor participación en el ingreso nacional o una disminución de la tasa de explotación, que sólo podía hacerse efectiva a expensas de los sectores capitalistas.

En cuanto a los antecedentes inmediatos, cabe decir que la crisis económica mundial de 1930 trajo consigo la violenta contracción de la demanda de exporta-

ciones de productos primarios, con la aceleración de la caída de los precios y la reducción consiguiente de la capacidad de importación. Las repercusiones de esta crisis en el comercio exterior, el nivel de ingresos, la ocupación y el sistema financiero, fiscal y cambiario, desestabilizaron las economías de estos países, obligándolos a introducir cambios institucionales y políticas proteccionistas. Chile, como país exportador de minerales, es uno de los más afectados, al verse constreñido a disminuir la extracción de sus productos básicos —principalmente cobre y salitre— y sus importaciones, así como a suspender la amortización de su deuda externa. La contracción de la economía y la consiguiente reducción de sus ingresos y gastos fiscales generaron a su vez una gran cesantía, proyectando además un efecto multiplicador sobre las restantes actividades económicas, principalmente las comerciales y de servicios. Esta situación general de crisis originó trastornos violentos en la política.

La crisis precipitó, desde luego, la irrupción de las masas desocupadas en las grandes ciudades, particularmente de los obreros del salitre, desplazando la agitación social y la lucha de clases del norte al centro del país, donde entraron en contacto directo con una variada gama de segmentos medios derivados principalmente de la expansión del aparato del Estado. El creciente descontento social y la incapacidad oligárquica para ofrecer soluciones a los problemas más apremiantes, constituyeron el fundamento del cambio cualitativo de las luchas populares, del paso de la política meramente reivindicativa a la conquista del poder. A través de una lucha común, ambos sectores entraron a disputar a la oligarquía el derecho a gobernar. Esta revolución en las aspiraciones penetró también los muros de los cuarteles, determinando que la oficialidad de las Fuerzas Armadas, proveniente en su mayoría de los sectores medios, se relacionara cada vez más con la política.[45]

Las condiciones económicas y sociales anteriores, así como la insurrección de la marinería de 1931, influyeron poderosamente en el desarrollo del socialismo chileno. Si bien sus raíces se remontan a la segunda mitad del siglo xIx, el socialismo se extendió en los núcleos obreros y en los sectores medios a partir de la caída de Ibáñez, surgiendo de allí los hombres que, vinculados al descontento existente entre los militares nacionalistas más avanzados, impulsaron el movimiento revolucionario que proclamó el 4 de junio de 1932 la República Socialista. Su más destacado dirigente fue Marmaduque Grove. Militar profesional, bajo la inspiración del socialismo, ejerció una influencia similar a la que un siglo antes proyectara el General Ramón Freire, como caudillo del naciente liberalismo. Grove, innato rebelde, había

[45] Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo,* México, Siglo XXI, 9" edición, 1976, págs. 346 y siguientes.

liderado el movimiento de la juventud militar que sustituyó en 1925 a la junta militar reaccionaria presidida por el general Altamirano.

En el movimiento revolucionario que realizó el derrocamiento de Montero confluían tres tendencias. El davilismo, que atraía a fuerzas ibañistas y algunos oficiales del ejército, con definiciones levemente socializantes, que representaban la economía privada, pero con una fuerte intervención estatal. El alessandrismo, que buscaba el retorno de su líder al gobierno, para lo cual se sumaba al derrocamiento de Montero. Por último, el núcleo central y más fuerte, constituido por los socialistas, provenientes de la Nueva Acción Pública (NAP), encabezada por Eugenio Matte y formada por profesionales, estudiantes y trabajadores. Las tres tendencias compartían propósitos de intervención estatal en la economía, aunque el programa de la NAP iba más lejos todavía, ya que preconizaba el control estatal de la economía, el antiimperialismo y la justicia social.

Eugenio Matte y sus compañeros de la Nueva Acción Pública recurrieron a los militares, en cuyos cuarteles germinaban también las ideas socialistas, por la carencia de organizaciones fuertes de los trabajadores, aunque la revolución era "para" ellos. Los militares constituían una fuerza capaz de cumplir con la tarea de derribar el gobierno reaccionario de Montero. En las Fuerzas Armadas existía malestar por las campañas críticas a su participación en el gobierno de Ibáñez y el castigo que aplicaba el gobierno "civilista" en contra de ellas, con la reducción de los gastos de defensa, así como por la rebaja del rango militar de Marmaduque Grove, después de haber sido acusado por Montero de conspiración. En ese momento él no conspiraba. No obstante, los representantes de las tendencias mencionadas se unieron en torno a Grove, tras persuadirlo de la bondad de su objetivo. Él, por segunda vez en su vida, ejerció el liderazgo en un movimiento cívico-militar.

De este modo Grove se convirtió en caudillo del socialismo que desde el ministerio de defensa ejercía liderazgo en una junta de gobierno constituida por Eugenio Matte, Carlos Dávila y el General Arturo Puga. Alessandri, conspirador nato, se hizo célebre con su frase "No afloje, coronel", expresada en su visita a Grove en el campo aéreo de El Bosque, consciente que los acontecimientos que se precipitaban lo beneficiarían en definitiva a él, como sucedió efectivamente. No obstante, las ideas socialistas, como mariposas multicolores, volaban por los cielos de Chile. Expresa el historiador Paul Drake:

> El 4 de junio, los aviones bajaron en picada sobre Santiago, donde llovían panfletos que proclamaban la inauguración de la República Socialista de Chile. Los rebeldes prometían una acción gubernamental que pondría fin a la depresión y calmaría el descontento, la que rechazaba tanto al capitalismo como al comunismo. Su programa abogaba por la

ayuda nacional a la economía, debido a lo cual se manifestaba en contra de los explotadores imperialistas extranjeros y por la ayuda especial a los pobres, por lo que se planteaba en contra de los explotadores oligarcas del país.[46]

Este movimiento tuvo el inmediato y multitudinario apoyo de los trabajadores.

El nuevo gobierno adoptó medidas que configuraban para su tiempo una política revolucionaria. Disolvió el congreso designado en 1929 por la dictadura, por carecer de representatividad genuina, y concedió una amplia amnistía por hechos sociales y políticos, especialmente a los responsables de la insurrección de la marinería de 1931 y de la "Pascua trágica" del mismo año, algunos de los cuales estaban condenados a muerte. Repuso en sus cargos a los maestros expulsados de ellos, restableció la matrícula a los estudiantes universitarios excluidos y promovió la autonomía y el co-gobierno en la Universidad de Chile, declarando inviolables los recintos de esa casa de estudios superiores. Deseosa de incorporar a todo el pueblo en el proceso de reconstrucción social, la República Socialista anunció su propósito de convocar a una asamblea constituyente para aprobar una nueva carta fundamental. En el ámbito internacional, afirmó su voluntad de estrechar los vínculos con los países latinoamericanos, tendencia que se convertirá en una constante del socialismo chileno, así como de reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética, decisión postergada durante tantos años. Declaró también su intención de revisar los contratos monopólicos celebrados con empresas extranjeras en desmedro del interés nacional.

En el orden económico, nacionalizó el Banco Central mediante la expropiación de las acciones particulares y por decreto-ley declaró propiedad del Estado los créditos y depósitos en moneda extranjera de los bancos nacionales y extranjeros, disponiendo que éstos traspasaran a la orden del fisco dichos valores y acreditasen al público las sumas equivalentes al cambio del 3 de junio de 1932. Como compensación, ordenó que el fisco depositara en la Caja Nacional de Ahorros, a favor de los bancos particulares, las cantidades respectivas en moneda corriente. Para afrontar las maniobras especulativas de los bancos, el gobierno ordenó la requisición de la moneda extranjera que se encontraba en la bolsa de comercio, arrestó a los especuladores comprometidos en actividades lesivas para el interés nacional y allanó los lugares donde se adquiría oro con infracción a la facultad exclusiva del Banco Central. Además, dictó normas jurídicas para estudiar, conceder y caducar las pertenencias mineras, con las cuales se proponía afectar la propiedad de las empresas imperialistas de la gran minería.

[46] Paul Drake, *Socialismo y Populismo, Chile 1936-1973,* Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1992, págs. 57 y 58.

En una perspectiva más amplia, la República Socialista expuso su propósito de abordar una política de fondo, de cambios estructurales. Esta política comprendía reforma agraria, nacionalización del salitre, creación del Banco del Estado, control del comercio exterior, impuesto a las grandes fortunas, reforma educativa, generación de fuentes de trabajo, y, en general, reestructuración del Estado, orientada a promover el desarrollo económico y social. Dominada por un espíritu solidario, dispuso la devolución de las prendas de vestuario y herramientas de trabajo depositadas como garantía en la Caja de Crédito Popular, la suspensión de los lanzamientos a los arrendatarios, las limitaciones de la causal de desahucio a los inquilinos por los terratenientes, la creación de una colonia experimental de reforma agraria en el sur del país, el aumento de los cupos para alimentos destinados a los desocupados. Las repercusiones de este proceso —no por efímero menos trascendente— se hicieron sentir en toda la sociedad, remeciéndola hasta sus cimientos.

El fervor popular se extendió al país y el programa de gobierno, aunque difuso, contribuyó al desarrollo de la conciencia revolucionaria que habrá de influir decisivamente en el movimiento popular. Proliferaron nuevos organismos en la base social que, junto con ofrecer su apoyo a la política gubernativa, exigieron soluciones a sus problemas específicos y la nacionalización y control por parte de los trabajadores de algunas empresas industriales y mineras.

En estos gérmenes de poder popular participaron trabajadores, profesionales y estudiantes, todos los cuales vincularon sus luchas por objetivos propios con el proceso político desencadenado. El movimiento obrero adoptó una posición de resuelto apoyo e impulso a esta revolución. Su extraordinaria madurez política se expresó en acuerdos aprobados en masivas reuniones. Esta acción solidaria se extendió y profundizó de manera vertiginosa, constituyéndose la Alianza Socialista Revolucionaria de Trabajadores por diversas organizaciones sindicales y políticas, la que planteó sus propias propuestas programáticas, conjuntamente con el apoyo a la República Socialista. El profundo impacto político de la revolución del 4 de junio de 1932 repercutió también en las Fuerzas Armadas. No sólo en los oficiales que apoyaron a Grove, sino especialmente en el personal de tropa, donde surgió una estructura que aglutinó a los suboficiales y marineros condenados con oportunidad de la insurrección de 1931. Este organismo, con sedes en Valparaíso, Santiago y Talcahuano, formuló objetivos específicos tan avanzados como la reorganización de la marina de guerra y el establecimiento de una escuela naval única con un fundamento socialista.

Conspiración imperialista

Los enemigos de este proceso revolucionario eran demasiado poderosos, tanto en el ámbito interno como en el externo. La derecha política y económica, con sus fuertes relaciones militares, volvió a golpear las puertas de los cuarteles y a conectarse con los gobiernos estadounidense, inglés y francés. Éstos se concertaban a su vez con los consorcios financieros para bloquear la política general del gobierno e impedir nacionalizaciones del cobre, salitre y otras actividades, mediante amenazas de congelamiento de los depósitos del Estado chileno y la suspensión de créditos en el extranjero. Como demostración de estas presiones, en el momento en que se reducían las reservas de petróleo en el país, la Standard Oil retuvo la entrega que estaba comprometida a realizar, con el inocultable propósito de generar problemas de desabastecimiento y paralizar la economía nacional.

La resistencia se hizo sentir desde el interior del país y fuera de él, en medio de la depresión existente por la crisis económica del capitalismo. El propósito de nacionalizar el Banco Central, dominado por las instituciones bancarias chilenas y extranjeras, para controlar el oro, el circulante y el crédito, fue frustrado por la acción del mismo Banco Central. Éste negó préstamos al gobierno para combatir el desempleo, alterando la política aplicada en este sentido durante el gobierno de Montero. La resistencia de esta institución obligó a la República Socialista a ejecutar políticas inflacionarias. No pudo tampoco nacionalizar la COSACH. La clase dominante conspiró desde el primer día, aunque la prensa periodística de *El Mercurio* calmaba los ánimos con una interpretación "bondadosa" del movimiento revolucionario, considerándolo como una expresión del "reformismo". Ante el apoyo de los trabajadores de *El Mercurio* a la revolución, Agustín Edwards anunció la "socialización" de dicho diario, mientras Alessandri hacía gestiones ante Grove en favor del magnate de la prensa. La Corte Suprema también protestó contra la República Socialista, determinación que no adoptaría contra el golpe de estado de 1973, sino que lo apoyaría.

En este breve proceso, la clase dominante experimentaba un miedo social extraordinario por la presencia de la clase trabajadora en el escenario político nacional, al tiempo que expresaba su odio en el marco del sistema semicolonial de sobreexplotación y represión que existía en Chile.

> Ellas expresan —señaló el embajador de Estados Unidos en Chile— su respetabilidad detrás de las seguras puertas del Club de la Unión. En sus conversaciones a menudo expresan el deseo de que Estados Unidos intervenga.[47]

[47] *Ibidem*, pág. 61.

La derecha condenaba a los militares de izquierda, y, por lo mismo, organizó sus propias fuerzas paramilitares, base de las milicias republicanas desarrolladas durante la segunda administración de Arturo Alessandri. La clase media, por supuesto, estaba dividida. El sector más alto, formado por profesionales, promovió sin éxito demostraciones de rechazo, en tanto que otro sector, formado por intelectuales, profesores, empleados y estudiantes, dio su apoyo al movimiento.

Las reacciones en las principales potencias imperialistas fueron también inmediatas: el embajador Culbertson, de Estados Unidos, informó a su gobierno que las declaraciones de la junta de gobierno habían asombrado y atemorizado a las clases propietarias. El señor Thompson, a cargo de la embajada inglesa, hizo otro tanto ante ese imperio, expresando que el triunvirato que se había tomado el poder, se inclinaba muy pronunciadamente hacia la izquierda. Ambos gobiernos prescindieron, en suma, de las relaciones oficiales, para entrar de lleno a la conspiración reaccionaria. Las tácticas empleadas eran las ya conocidas en todos los países latinoamericanos. El Departamento de Estado estadounidense postergó el reconocimiento diplomático de la junta de gobierno, en espera de una definición más clara de sus propósitos. En abierta intervención, y con el pretexto de proteger los intereses de los ciudadanos de su país, el subsecretario Castle declaró que el gobierno socialista sería objeto de protestas por la requisición de los depósitos extranjeros en los bancos de Chile. Algunas instituciones bancarias de Nueva York, tenían, en efecto, depósitos en dólares y oro en el Banco Central.

El gobierno británico actuó de la misma manera. Protestó por motivos similares y supeditó el reconocimiento diplomático de la República Socialista a la exigencia de garantías de protección de las propiedades e intereses de sus subditos. En sus presiones, fue todavía más lejos. Desde Londres se ordenó, a pedido de su representante diplomático en Santiago, que el navio de guerra Durban en ultramar, se pusiera en movimiento hacia Chile. Este acto de intimidación fue puesto en conocimiento de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que participaban en la conspiración. Los sectores oligárquicos y burgueses, unidos a los consorcios extranjeros, promovieron por último un complot dirigido a frustrar el ensayo socialista, el que penetró en los cuarteles. Agudizadas las contradicciones perfiladas desde 1924 entre un sector militar oligárquico y entreguista y otro sector militar de carácter nacionalista y popular, el primero dio un contragolpe el 16 de jun o de 1932. No obtante, la clase trabajadora mantuvo su fidelidad a la República Socialista hasta el final, la que se expresó en una huelga de apoyo durante los días 16 y 17 del mismo mes, que fue dominada por la fuerza.

La perspectiva que proporciona el transcurso del tiempo permite hoy rectificar la caracterización peyorativa que durante años difundieron las clases dominantes sobre la República Socialista. Este movimiento político intentó cubrir el vacío de dirección de las luchas populares, en un período de aguda lucha de clases, y sin tener una concepción teórica madura y, por consiguiente, de la homogeneidad necesaria. Ello, no obstante, no le resta la profunda influencia que ejerció en las luchas del futuro, como quiera que los objetivos de los 12 días que conmovieron a Chile fueron incorporados en los sucesivos programas de la izquierda hasta 1970-73. Después de estos años, hay sectores de izquierda que también los rescatan. Quizás un proceso tan efímero como la República Socialista tenga derecho a ese título por la simple intención de sus líderes, ya que la brevedad del tiempo histórico no les permitió confrontar ésta con los hechos. En tal sentido, puede considerarse como la primera utopía chilena, entendida ésta de acuerdo a la connotación que le confiere a dicha idea Adolfo Sánchez Vásquez, en sus *Once tesis no utópicas sobre la utopía,* particularmente en cuanto fue una representación imaginaria de una sociedad deseada, con la voluntad de realizarla, y que hundía sus raíces en el momento histórico que entonces se vivía.[48]

En suma, la República Socialista contó con el apoyo espontáneo de las masas, tanto por las acciones generosas mencionadas, como por la esperanza de avanzar en la satisfacción de sus aspiraciones largamente postergadas. La tendencia stalinista del Partido Comunista se opuso al movimiento socialista, acusando a Grove de ser una nueva máscara de la burguesía, pero el sector trotskista, en cambio, prestó su apoyo condicional, formulando demandas extremas, imposibles de lograr, como armar de inmediato a las masas. Con todo, ambas tendencias contribuyeron a la discusión en el seno del movimiento obrero sobre las perspectivas revolucionarias. La propaganda infantilista del Partido Comunista en torno a promover *soviets* de obreros, campesinos, soldados, marineros e indígenas asustaba a civiles y militares de derecha, porque sentían el temor que se repitieran acciones similares a la rebelión de la marinería de 1931, con la pérdida de la disciplina militar. Aquellos sectores reaccionarios se oponían a los desórdenes callejeros y se incorporaron a la conspiración contra la República Socialista.

La revolución del 4 de junio de 1932 representó un momento emocionante de la izquierda chilena, más allá de sus ideales, como lo será años después el Frente

[48] Adolfo Sánchez Vásquez, *Del socialismo científico al socialismo utópico,* México, Ediciones ERA, 1975, págs. 16 y siguientes.

Popular, sobrepasando también sus propias realizaciones. Ambos procesos representan el ascenso de los trabajadores bajo el conjuro de una conciencia colectiva de cambio social. Enseguida, el paso de la República Socialista de Grove al Gobierno Popular de Salvador Allende, está jalonado por la lucha ncesante del pueblo chileno durante 48 años. Esta especie de carrera de postas está marcada por el simbolismo. Allende, en su carácter de dirigente estudiantil, recibió en Valparaíso con un discurso a Grove, al regreso de la isla de Pascua donde éste había estado desterrado. A fines de 1932, Grove se ubicó en el segundo lugar en la contienda presidencial de ese año, venciendo al candidato triunfante, Arturo Alessandri, en Santiago, capital del país, y en Valparaíso, su principal puerto, a pesar de encontrarse desterrado.

La República Socialista, por último, unió por primera vez a los trabajadores con núcleos nacionalistas de las Fuerzas Armadas en el común ideal de reconstruir a Chile bajo el soplo vivificante del socialismo. En una línea de continuidad histórica, los propósitos programáticos de los revolucionarios de 1932 cristalizaron en 1970 y la unidad del pueblo y los sectores más conscientes de las Fuerzas Armadas, que encarnaba Grove, se expresaron cuarenta años después en la resistencia en los cuarteles y en la armada al golpe militar de 1973, que Pinochet y sus secuaces se vieron obligados a reducir a cañonazos. La extendida conciencia socialista en Chile, tiene sin duda sus raíces principales en la República Socialista, ya que los protagonistas de ella fundaron, un año más tarde, el Partido Socialista, y muchos militares, oficiales y soldados, desempeñaron un papel decisivo hasta 1973 y aún después, en la lucha revolucionaria.

Derrocada la República Socialista, Chile ingresó en un períoc o de anarquía política, el que se cerró con la restauración oligárquica a fines de 1932, encabezada por el propio Alessandri. Después del 16 de junio, Carlos Dávila asumió el gobierno como presidente de una junta civil, apoyada por los militares de derecha, y aplicó severas medidas represivas, decretando el estado de sitio, la ley marcial, el toque de queda y la censura de prensa y radio. Grove y sus principales colaboradores fueron confinados a la isla de Pascua y otros lugares inhóspitos. El 8 de julio de 1932, Dávila disolvió la junta de gobierno y se proclamó presidente provisional. En los 100 días que duró su administración se sucedieron nuevas conspiraciones, hasta que aquél se vio obligado a renunciar, siendo sustituido por el general Bartolomé Blanche, quien asumió como presidente interino.

No obstante, Blanche no pudo cumplir su "mandato" porque una rebelión en el norte del país lo obligó a renunciar. Este nuevo movimiento estaba compuesto por militares y civiles, incluyendo a casi todos los sectores políticos, con la participa-

ción de socialistas y comunistas, los cuales pedían un gobierno civil estable y exigían que las Fuerzas Armadas pusieran término a su intervención política. A la posición de la guarnición del norte, al mando del general Vignola, se unió la de Concepción, y sectores militares de Santiago. Ante esta realidad, Blanche se sometió. Así finalizó una década de predominio militar en el gobierno, de 1924 a 1932. El presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanedel constituyó un gobierno interino, que preparó las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios, realizadas el 25 de octubre de 1932.

En estos comicios, Alessandri fue elegido primer mandatario, con la sorpresiva ubicación de Grove en el segundo lugar, con el 17,7% de los sufragios, a pesar que no hizo campaña porque llegó de su relegación el mismo día de las elecciones. Con razón, la embajada de Estados Unidos afirmó: "Sin duda, los partidarios de Grove son más numerosos de lo que se refleja en las urnas."[49] Los candidatos de la derecha obtuvieron una pobre votación y Lafferte, en representación del Partido Comunista, sólo recibió el 1.2% de la votación nacional. El apoyo que recogiera la candidatura de Marmaduque Grove sirvió de base a la voluntad de fundar el Partido Socialista. El sostuvo que "su triunfo moral" representaba la decisión de los socialistas de continuar luchando por los medios electorales. "No hablo, dijo, de tomar el poder por asalto, sino de prepararnos para conquistarlo como lo han hecho los partidos burgueses[...]trabajaremos a la luz del día y venceremos".[50] El vaticinio se cumplió 38 años después, con la victoria de Allende en 1970.

Entre tanto, los militares, completamente desprestigiados, fueron objeto del repudio ciudadano generalizado, permaneciendo al margen de la política a partir de 1933, durante 40 años. De este modo, el país superó, después de un siglo, un nuevo período de anarquía política. El primero se había iniciado con la caída de Bernardo O'Higgins en 1823 cerrándose con la victoria del general Prieto en la batalla de Lircay, y su ascenso al poder en 1831. El segundo se inauguró con el golpe de Estado de 1924, continuó con la dictadura del general Ibáñez, que comprometió al conjunto de las Fuerzas Armadas, y se le puso término con el nuevo gobierno del Presidente Alessandri (1933-1938). Grove e Ibáñez se redimen de sus responsabilidades con su reiterada participación en política por la vía democrática. Ambos fue ron senadores populares y el último presidente de la República (1953-1958), por segunda vez.

[49] Paul Drake, *ibidem*, pág. 79. Cita a! us. Dept. Of State, Archives, Santiago, 31 de octubre de 1932.

[50] *Idem.*

La lucha contra la corriente

Presencia del Partido Socialista de Chile

El pensamiento socialista se extendió por el país en el lapso transcurrido entre 1931 y 1933, sin un movimiento obrero unido y sin un partido poderoso, capaz de orientar y conducir a los trabajadores. Proliferaron diversos grupos que decidieron por fin fusionarse para fundar el Partido Socialista de Chile el 19 de abril de 1933, con el explícito propósito de resolver la crisis de dirección del movimiento popular. La República Socialista había dado un vigoroso empuje revolucionario a las multitudes desposeídas, arraigando en éstas su programa. Ello explica, a pesar de su derrota, el nacimiento y desarrollo del nuevo partido. Los fundadores fueron los mismos dirigentes del movimiento cívico-militar surgido en el año anterior, entre los cuales estaba Marmaduque Grove, quien había puesto a prueba su popularidad en la elección presidencial de 1932.

El claro sentido nacional de este partido, que singulariza a todo movimiento revolucionario, constituyó la fuente de su energía política, que lo capacitó para conquistar a gran parte del pueblo a través de una lucha sin tregua por su emancipación social. La revolución del 4 de junio de 1932 constituyó, pues, el punto de partida de nuevas contiendas sociales, que se desencadenaron durante el segundo gobierno de Alessandri, tanto en las ciudades como en el campo. El primer período en la historia del Partido Socialista (1933-1946) fue de crecimiento y aprendizaje. Producto de la unión del movimiento obrero con la teoría marxista, se caracterizó como un partido de clase, que asumió la organización y dirección de los trabajadores. Tuvo un rápido crecimiento e influencia en la oposición al gobierno oligárquico de Alessandri y en la lucha contra el nazismo, así como en la unidad y el desarrollo de la izquierda. Este período se subdivide a su vez en dos fases: la primera comprende cinco años (1933-1938) y la segunda, siete (1939-1946).

La primera fase de su historia estuvo marcada por la persecución y la clandestinidad. En un duro y sostenido esfuerzo de organización de las masas y conducción de sus luchas, contribuyó a la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile, en 1936, con lo que cimentó la unidad sindical, así como también a la formación del Frente Popular en 1937, que representó la unidad política de los sectores sociales más avanzados: la izquierda. Desde su fundación, el 19 de abril de 1933, hasta la victoria electoral del Frente Popular, el 25 de octubre de 1938, el Partido Socialista se caracterizó como un partido de masas. Aglutinó en sus cuadros militantes a un sector numeroso de trabajadores manuales e intelectuales, con la clara misión de inculcarles las ideas socialistas, elevar su conciencia política y conducir el movimiento revolucionario hacia la transformación de la sociedad.

El Partido Socialista, bajo la inspiración de la teoría marxista del desarrollo social, realizó grandes y decisivos avances. Incorporó en sus filas a vastos sectores de obreros, campesinos, empleados, estudiantes, profesionales, pequeños industriales, artesanos, pequeños agricultores. Sus dirigentes, obreros e intelectuales, se reclutaron entre los más destacados elementos de las generaciones de 1920 y 1930, de reconocida capacidad e idealismo. Esta fase fue de crecimiento y organización. En marzo de 1937 llegó a elegir 19 diputados y cuatro senadores, colocándose al nivel de las más importantes agrupaciones políticas históricas. Al mismo tiempo, con sus milicias socialistas combatió y contuvo al nazismo. Se hizo respetar por un gobierno dictatorial que estaba amparado por fuerzas civiles armadas de derecha, por las milicias republicanas, además de contar con facultades extraordinarias y estados de sitio, aplicados en la detención arbitraria de centenares de dirigentes del pueblo y en su relegación a lugares aislados e inhóspitos.

El presidente de la República, Arturo Alessandri, restableció el poder oligárquico en su segundo mandato constitucional (1933-1938). Para eso contó con el apoyo de la derecha política y económica y, en la primera parte de SÍ gobierno, hasta 1936, también tuvo el respaldo del Partido Radical. Dispuso, además, de las "milicias republicanas", fuerzas paramilitares organizadas y dirigidas, por connotados oligarcas, como Eulogio Sánchez Errázuriz, formadas para resistir a los sectores nacionalistas y de izquierda de las Fuerzas Armadas. Así pudo restablecer el "orden" capitalista, obligar a los militares a no participar en política, dar :ierta estabilidad al sistema, superar la crisis económica e impulsar el proceso de industrialización bajo el estímulo del Estado. La recuperación económica fue favorecida por el término de la crisis internacional del capitalismo y, sobre todo, por el sacrificio de los trabajadores, expresado en desempleo excesivo y salarios de hambre.

En el marco de este sistema de recuperación capitalista, el ministro de hacienda, Gustavo Ross, impulsó políticas de fomento de la industria de la construcción y las

exportaciones, con salarios reducidos. Su sometimiento a los intereses imperialistas era igualmente claro, como en la conversión de la Compañía de Salitre de Chile (COSACH) en la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo (COVENSA). Este nuevo convenio mantenía la mayor parte de la producción y ventas del consorcio en manos de los Guggenheim, de Nueva York, mientras el Estado chileno sostenía el funcionamiento de esta decadente actividad minera, percibiendo el 25% de las utilidades brutas, las que se destinaban a la amortización de la deuda externa. La misma política de concesiones se aplicaba en otras inversiones extranjeras, como la Compañía Chilena de Electricidad, de propiedad estadounidense, con una pequeña participación en las utilidades.

Durante la mitad de su mandato presidencial, Alessandri hizo uso de facultades extraordinarias aprobadas por mayorías congresistas dóciles, mediante las cuales suspendió las libertades y garantías constitucionales. En 1936 se promulgó, además, la Ley de Seguridad Interior del Estado, con cuya draconiana legislación represiva el gobierno controló a la oposición política y al movimiento obrero, persiguiendo sin tregua a los partidos de izquierda y a las organizaciones sindicales. No obstante, la fase iniciada con el segundo gobierno de este presidente representó una nueva estabilidad política, que superó el desorden desencadenado desde la caída de Ibáñez en 1931. La Constitución aprobada en 1925 no se había aplicado y, por lo mismo, nadie la respetaba, ni los civiles ni los militares. La legalidad era desafiada por la derecha y por la izquierda. Esta carta constituía la obra del primer mandatario recién elegido, por lo que se preocupó ahora de legitimarla para imponer el respeto de sus normas en el marco de la democracia representativa. En esta forma, se inauguró el sistema constitucional que se romperá en 1973 con la intervención castrense.

El propio gobierno dio el ejemplo realizando su programa en dicho marco institucional. La derecha participó en el gobierno y utilizó la constitución como instrumento para preservar el orden social, haciendo uso de manera reiterada de facultades extraordinarias contra partidos, sindicatos y prensa de oposición. La izquierda legitimó a su vez también la constitución, al actuar dentro de sus normas, tanto en la oposición como en la lucha por la conquista del gobierno. Esta institucionalidad democrática fue, por último, aceptada por las Fuerzas Armadas, dejando de intervenir en la política durante cuatro décadas. La crisis de la dominación oligárquica de los años veinte no hacía posible ahora configurar un gobierno "nacional", de acuerdo a las facultades privativas del presidente de la República, por lo que Alessandri tuvo que optar por la formación de una alianza política que le ofreciera base de sustentación a su gobierno. Elegido por una combinación de centro, ejerció el poder con la derecha (liberales y conservadores), que le aseguró mayoría

en el congreso, ampliando esta base política en el último tercio de su período con el Partido Radical, para terminar con la primitiva alianza con ocasión del retiro de este último partido en el camino hacia el Frente Popular.

El Partido Socialista fue la principal fuerza política de oposición al segundo gobierno de Alessandri (1933-1938). Al término de su primer año de vida tenía 50 mil militantes, resultado de múltiples factores, como su lucha contra el sistema capitalista, la resistencia al nazismo, su autonomía de las internacionales sus diversas políticas de reformas socio-económicas planteadas desde la Repúb ica Socialista. Su impulso revolucionario, que entre los años 1931 y 1933 representaba sólo un sentimiento de justicia social, pasó a constituir con el transcurso del tiempo un nítido proyecto de transformación de la sociedad, expresado en variados programas difundidos entre los trabajadores. El activismo político en torno a los contenidos programáticos repercutía en la organización, en el movimiento sindical y en los resultados electorales. Estos últimos avances se expresaban en más democracia, que a su vez abría cauces nuevos a las luchas y ascenso de las masas a la libertad y dignidad de los trabajadores.

En su oposición al gobierno derechista, el Partido Socialista cuestionó abiertamente el atraso económico del país. Éste descansaba, por una parte, en la explotación extensiva y con escaso rendimiento de grandes latifundios, con inquilinos, y, por la otra, en una industria todavía artesanal o técnicamente deficiente, que hacía necesaria la importación generalizada de productos indispensab es para la población. Las exportaciones consistían entonces fundamentalmente en materias primas (cobre, salitre, yodo y fierro), en manos de los inversionistas extranjeros, quienes dominaban también servicios de utilidad pública, como electricidad y teléfonos. Por eso, este partido planteaba la lucha por la segunda independencia. De la independencia política del siglo xix a la independencia económica del siglo xx. Entre 1920 y 1930 se produjeron algunos avances, tanto en el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, como en la modernización de la administración pública, de acuerdo a la nueva constitución.

La política de independencia económica formulada por el Partido Socialista se refería directamente al desarrollo del país, que partía de la reforma agraria y de la industrialización, considerando la nacionalización de las empresas básicas que condicionaban el desarrollo nacional. Esta concepción se basaba en el programa de acción inmediata (1933-1934), que tenía una orientación socialista. Planteaba convertir las explotaciones mineras, en ppder de consorcios extranjeros, en empresas del Estado; expandir la acción de éste en el aprovechamiento de los recursos naturales, en la alimentación, vestuario y vivienda. Postulaba vigilar las inversiones externas

y regular su funcionamiento. Además, controlar los precios de los artículos de primera necesidad, planificar el conjunto de la economía y mejorar los niveles de remuneraciones de los trabajadores en el marco de la redistribución del ingreso.

Este nuevo partido nació como un partido de trabajadores manuales e intelectuales, constituido por obreros de la minería, de la industria manufacturera, de la construcción, de los ferrocarriles, de los puertos, del comercio y de la agricultura, así como por profesionales universitarios, técnicos, profesores, periodistas y empleados públicos y privados. Por eso, su acción se hizo sentir, desde el comienzo, en el movimiento popular. En los primeros años de la década de los treinta, éste había experimentado un retroceso a raíz de la crisis económica y la represión aplicada por la dictadura de Ibáñez. No obstante, las luchas reivindicativas de los trabajadores, con la activa participación de los socialistas, se intensificaron de nuevo, debido a la política social del segundo gobierno de Arturo Alessandri, la que favoreció al sector empresarial con desmedro de los asalariados.

Este nuevo partido contó también con la simpatía de militares jóvenes surgidos durante las intervenciones de las Fuerzas Armadas en las actividades políticas (1924-1933), como se vio en el capítulo anterior. Esta simpatía era, por cierto, variada en sus propósitos políticos porque aquéllos desafiaban el sistema existente, pero no se definían con claridad si deseaban transformarlo o buscaban sólo mejorar su participación en él. En la juventud militar de los años veinte había simpatizantes del socialismo entre los que apoyaron a Grove e Ibáñez en el contragolpe que restableció al presidente Alessandri en el gobierno en 1925. También los hubo en la generación siguiente, entre los 5 mil marineros que tomaron posesión de la escuadra en 1931 y entre los oficiales y soldados que apoyaron a la República Socialista. Posteriormente, son muchos los que figuraron en direcciones locales y regionales del Partido Socialista hasta 1973.

La personalidad de Grove destacó, desde su juventud, como la de un rebelde y revolucionario. Por sus osadas actuaciones tanto en la juventud militar en los años veinte, como en la lucha contra la dictadura y por el socialismo en los años treinta, adquirió un carisma especial. A la ideología revolucionaria, Grove agregó su magnetismo personal, atrayendo a las multitudes hacia el nuevo partido. Era un idealista, que vinculó las ideas centrales del socialismo con el concepto nacional, y la lucha por el desarrollo económico con la búsqueda de la justicia social. La unión del socialismo con la figura de Grove explica en parte el crecimiento del partido en los años treinta. Por cierto, no lo hizo todo él, porque participaron también en la gran tarea notables intelectuales y destacados dirigentes obreros en el desarrollo del movimiento popular.

La influencia de Grove en la formación de las milicias socialistas fue decisiva. Él las inspiró, confiriéndoles una aureola militar que las movilizaba con gallardía en todo el país, con un espíritu festivo, que amenizaba sus acciones. Desbordaba asimismo un profundo sentido del humor. Entre las múltiples anécdotas de Grove, hay una relacionada con su personalidad militar. En 1938, en una reunión nacional de las milicias socialistas, en Quillota, Grove dictó una clase magistral sobre tácticas militares, en la cual los milicianos le formularon diversas consultas. Uno de ellos le planteó una situación por demás difícil, que consistía en que una brigada de estas fuerzas irregulares se encontraba cercada. Por el norte, fuerzas enemigas superiores, por el sur la misma situación, por el este la cordillera infranqueable y por el oeste, el mar. La pregunta era qué podían hacer los milicianos. Grove pensó un instante y repasó la situación, contestando por fin: "¡Esos camaradas están hasta las huevas! No tienen salvación".

Grove, como líder del Partido Socialista, recorrió el país, contribuyendo a la extensión de este movimiento a las diversas provincias. Así se convirtió éste en un partido nacional. Para eso, contaba con los principios generales de orden teórico y con los programas que se fueron formulando en el curso del tiempo, en los que se combinaban soluciones tanto para los problemas nacionales como regionales y locales. Por lo mismo, su influencia se hizo sentir en el norte, donde las explotaciones mineras eran por demás significativas, así como en el centro, donde estaban radicadas las áreas industriales. Se expandió igualmente en el sur, a lo menos en los principales lugares poblados, particularmente en la provincia de Magallanes, entre los obreros esquiladores, de frigoríficos y, más tarde, del petróleo. El liderazgo de Grove predominó durante toda la década de los treinta, para declinar en la de los cuarenta, hasta desaparecer con su muerte.

La Federación de la Juventud Socialista reclutó una numerosa militancia en los sectores medios, especialmente entre los estudiantes y obreros. Fundada en 1934, conquistó la Federación de Estudiantes de Chile en 1936. El crecimiento del Partido Socialista se produjo por el desplazamiento de los partidos populares más antiguos, como el Partido Demócrata, el Partido Comunista y los anarquistas, estos últimos nunca organizados en partido. Hacia el año 1935 ya tenía 60 mil militantes. No obstante ello, presentaba un desequilibrio notorio entre su influencia en la ciudad y el campo, en virtud de la contradicción en el desarrollo de ambos sectores productivos. Por su debilidad en las áreas rurales, el Partido Socialista no pudo realizar en sus primeros años una acción frontal contra el latifundio, pero contribuyó en la lenta formación de la conciencia de clase de los campesinos y de la demanda de

una reforma agraria. El propio Grove presentó el primer proyecto de reforma agraria en el Senado.

En sus primeros años de existencia, a pesar de su Declaración de Principios marxista, el Partido Socialista de Chile no tenía bien definido su pensamiento teórico, por lo que se realizaron en su interior diversas escaramuzas polémicas, promovidas por lo general por los trotskistas, provenientes del Partido Comunista. Esta tendencia política, que nunca fue capaz de construir un partido, desarrolló una táctica de penetración denominada "entrismo". Pero en el Partido Socialista, más adelante, cuando surgieron los primeros problemas divisionistas, se respondió con el "salismo", es decir, con la expulsión de sus filas de estos extraños pasajeros. En el año 1934, se produjo la primera disidencia, conocida como Oposición Socialista Revolucionaria, la que tenía vinculación con algunos personeros de la Izquierda Comunista. En el año siguiente fue expulsada, formando una pequeña organización, que en 1938 se unió a otro grupo trotskista, para constituir el Partido Obrero Revolucionario, adherido a la IV Internacional. La mayoría de la Izquierda Comunista se incorporó en 1936-1937 al Partido Socialista.

Frente Popular: un nuevo hito

En el año 1938 se abrió una nueva perspectiva, que marcó la lucha del movimiento popular y proyectó destellos de esperanza. Es el Frente Popular, que comprende desde el término del segundo gobierno de Arturo Alessandri (1933-1938) hasta el comienzo del segundo gobierno de Ibáñez (1953-1958). En esa etapa se realizó una estrategia más o menos coherente, que permitió al país superar la crisis internacional de los años treinta y enfrentar los nuevos problemas generados por la Segunda Guerra Mundial. Éste es también el punto de partida de la segunda fase del primer período de la historia del Partido Socialista, que comprende siete años (1939-1946). El signo distintivo del Frente Popular fue su interés por el desarrollo económico, que poco a poco se fue orientando hacia el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo del movimiento obrero, en un ámbito de mayor democracia.

En los comienzos del Frente Popular se presentaron cambios de posición significativos en los sectores de izquierda, particularmente en lo concerniente a las vías de acceso al poder, influyendo notoriamente la guerra civil española. Como es natural, la izquierda apoyó a los republicanos y la derecha a los fascistas. Los partidos comunista y socialista, de impulsores de la revolución social (impugnaban, además, la legalidad burguesa), se convirtieron en defensores de la constitucionalidad e im-

pugnadores del militarismo. Los conservadores y liberales evolucionaron, en cambio, en sentido inverso, haciéndose solidarios con la asonada castrense, impulsando la conspiración permanente en los cuarteles. Su sueño político giraba en torno de las "hazañas" de Mussolini y de Franco.

El Frente Popular representó, en síntesis, la respuesta de la burguesía industrial y de los sectores medios al predominio oligárquico. En 1938 se inauguró, en efecto, la colaboración de dicho sector con la pequeña burguesía y la clase obrera, bajo la hegemonía de aquél. Esta alianza de clases no constituyó, por lo mismo, una amenaza para el orden social existente, ya que su proyecto político planteó la integración económica y cultural de la sociedad sobre la base de la unidad de aquellos sectores. Por el contrario, la fracción industrial de la burguesía persiguió a través de la acción del Estado la generación de la base material dirigida a superar los efectos que todavía perduraban de la crisis del sistema capitalista. Esta nueva base material consistía en la industrialización, en su fase de sustitución de importaciones, la que suponía al mismo tiempo un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. He ahí el punto de unión de ambos sectores sociales.

El impacto catastrófico producido por la crisis de comienzos de la década de los treinta en la economía chilena agro-minera exportadora obligó a la burguesía interna a explorar nuevas formas de acumulación y reproducción de capital. El agotamiento de la economía tradicional representaba a su vez el término de la hegemonía mantenida durante más de un siglo por las fracciones oligárquicas agraria y comercial. En su reemplazo, se inició la hegemonía de la burguesía. industrial, la que a su vez buscó y aseguró el apoyo de la antigua oligarquía. En esta forma, las contradicciones surgidas en el interior de las clases dominantes no revestían el carácter agudo y conflictivo que asumieron en otros países. Esta suerte de compromiso, apoyado por el movimiento popular, explica en parte la estabilidad lograda durante más de treinta años por el nuevo sistema democrático representativo, conocido como "Estado de compromiso".

Desde el punto de vista político, esta alianza social fue favorecida por el cambio de la política del Partido Comunista de Chile. En efecto, el Frente Popular tuvo sus orígenes en el gran viraje formulado por la Unión Soviética a fines de la década de los treinta, para afrontar a la amenaza fascista contra la coexistencia pacífica. La Internacional Comunista impartió, en su VII congreso, celebrado en Moscú en 1935, la consigna ¡Frente Popular en todo el mundo! A través de ella se procuró unir a la burguesía "democrática" y al proletariado, a las representaciones políticas de estos sectores sociales. Sin embargo, el fascismo era sólo un fenómeno europeo, que no tenía expresión objetiva en América Latina. Fue necesario, por eso, complementar

aquellos propósitos políticos ajenos a nuestra realidad con otros, extraídos también de la estrategia mundial de la Unión Soviética. Se trata, en efecto, de la revolución democrático-burguesa, conducida por un modelo ideal de la burguesía interna, liberal y progresista, que debía ser apoyada por los obreros y campesinos, para desarrollar las fuerzas productivas del capitalismo que habrían de permitir, en una etapa posterior, la transformación socialista. Esta revolución *sui generis* tendría como objetivos, según los comunistas, industrializar el país, promover la reforma agraria y democratizar las instituciones políticas.

Este gran viraje de la Unión Soviética y la consigna de "frente popular en todo el mundo" correspondió, en el tiempo, a la alianza de la Unión Soviética con las democracias occidentales, si se olvida el interregno del pacto nazi-soviético, y culminó con la política de Teherán, que consagró la unidad de los tres grandes para liquidar la guerra y constituir la paz. En lo que atañe a las relaciones interamericanas, correspondió también a la política de buena vecindad, promovida por el presidente Franklin D. Roosevelt a fines de la década de los treinta y hasta su muerte en la década siguiente. Su fuente americana de inspiración fue el browderismo, que a su vez tradujo la ideología estalinista aplicada en dicha etapa por los partidos comunistas. Esta concepción descansaba en tres tesis fundamentales. Uno, la contradicción fundamental entre el campo socialista y el campo capitalista había perdido su carácter dominante. Dos, esta circunstancia abría un período de colaboración entre estados de diferente naturaleza política y social, que permitía un desarrollo distinto de las sociedades capitalistas. Tres, este desarrollo suponía a su vez una armónica colaboración entre el capital y el trabajo, entre la burguesía y el proletariado. Más tarde, Earl Browder, Secretario General del Partido Comunista de Estados Unidos, sería desautorizado, cuando la Unión Soviética ya no necesitó sus servicios.

En Chile no fue fácil, sin embargo, impulsar esta alianza por las profundas discrepancias existentes entre los dos partidos obreros. Desde la reciente República Socialista de 1932, separados por distintas concepciones ideológicas y estratégicas, disputaron la hegemonía en el movimiento popular. Fiel seguidor de la dirección soviética impartida por la Tercera Internacional, el Partido Comunista chileno sostuvo hasta el vII congreso de esta organización mundial una posición ultraizquierdista, sectaria y divisionista. El Partido Socialista, con un carácter nacional y sin sujeción a centro de dirección internacional alguno, impulsó un proyecto político más coherente y realista. Con todo, desde los inicios de la segunda administración de Arturo Alessandri, el Partido Socialista (recién fundado) había constituido el Bloque de Izquierda con los radical-socialistas, democráticos e Izquierda Comunista (sector trotskista, escindido del Partido Comunista), denotando con ello su vocación

unitaria. En un intento por ampliar esta alianza, invitó a incorporarse a ella, el 6 de febrero de 1936, al Partido Radical y al Partido Comunista. No obstante, las condiciones subjetivas no madurarán hasta abril del mismo año, fecha en que se firmó el acta de fundación del Frente Popular.

Esta amplia y sólida alianza de clases (burguesía industrial, pequeña burguesía y trabajadores), con sus representaciones políticas (partidos Radical, Socialista, Comunista, Radical-socialista y Democrático) y sindicales (Confederación de Trabajadores de Chile, recién formada), representó una convergencia de voluntades para asumir la responsabilidad de gobernar al país. Ella fue una respuesta defensiva ante la restauración oligárquica encarnada en la segunda administración alessandrista, en la cual cada uno de sus integrantes subordinó sus objetivos estratégicos a ciertos contenidos programáticos comunes enmarcados en los cauces legales. Este acuerdo se facilitó con la posición reformista adoptada por el Partido Radical en su convención de 1933. No obstante, la posición de este partido era indefiriida y, por lo tanto, se encontraba lejos de las aspiraciones de las masas, representadas de alguna manera por socialistas y comunistas. Había en este compromiso, más bien una voluntad dirigida a la modernización capitalista y la reafirmación democrática.

Este proceso de unidad de las izquierdas fue favorecido también por la evolución económica y social que había experimentado la nación en el período anterior. Ésta se reflejaba en el ascenso creciente de los sectores medios y de la pequeña burguesía, conjuntamente con el desarrollo igualmente notable del proletariado, que se expresaba en un mayor dinamismo en la lucha por sus reivindicaciones de clase. En esta etapa de auge popular, que cubrió catorce años de gobierno de aquella alianza, con altos y bajos, culminó la trayectoria ascendente de aquellcs sectores medios. Las nuevas tareas burguesas —el desarrollo del Estado democrático representativo— crearon el marco que los orientaría en el servicio de la reproducción del capitalismo.

Los antecedentes electorales, en el momento de fundarse el Frente Popular, establecían cierta equivalencia de fuerzas entre la derecha y la izquierda. Grove había representado un sólido apoyo en la elección presidencial de 1933. En 1934 había reiterado ese poder electoral, ganando el cargo de senador por Santiago, vacante por la muerte de Eugenio Matte. Pero la dirección del partido sabía que no más de 20% de sus adherentes estaban inscritos en los registros electorales y tampoco podían aumentar mucho más la inscripción por el analfabetismo predominante en la mayoría de aquéllos. Con todo, el Partido Socialista se esforzó en esos primeros años por mejorar sus resultados electorales.

En los comicios generales de parlamentarios de 1937, la derecha, con el apoyo del gobierno de Alessandri, obtuvo 48% de los votos, alcanzando mayoría en ambas ramas del congreso. El Frente Popular no proyectó todavía un resultado más favorable. El Partido Radical retrocedió con respecto a 1932, del primer lugar al tercero entre los grandes partidos históricos, con 18.6%, pero se mantuvo en el Frente Popular. Los partidos marxistas crecieron en las urnas. El socialismo, con sólo cuatro años de existencia, conquistó el 11% de los sufragios y el Partido Comunista un 4%, casi duplicando los resultados de 1932 (el Partido Socialista no se había fundado todavía). Como en 1932, parte del éxito obtenido se debió a la acción de Grove en todo el país. En Magallanes, el Partido Socialista obtuvo 57% del electorado, conservando su diputado en las elecciones siguientes. El segundo éxito notable se produjo en los tres departamentos urbanos de Santiago, con el 26%, eligiendo los diputados respectivos. Asimismo, recibió un considerable apoyo en las zonas mineras del norte y en grandes ciudades como Valparaíso y Concepción. Después de las elecciones de 1937, el Partido Socialista creció mucho más por el éxito obtenido en las urnas.

Este partido proclamó a Marmaduque Grove como su precandidato a la presidencia de la República, para competir con Pedro Aguirre Cerda en la convención de izquierda de abril de 1938, en la cual ninguno de los dos obtuvo la mayoría. Realizadas repetidas votaciones, el Frente Popular estaba a punto de romperse cuando el líder socialista, para salvar la unidad, retiró su candidatura y apoyó a Aguirre Cerda, el precandidato del Partido Radical. Designado este último, Grove asumió la presidencia del Frente Popular a fin de dirigir la campaña electoral. Estos hechos provocaron la crítica y el rechazo de muchos militantes jóvenes, que luchaban contra el sistema vigente, así como de personalidades políticas, lo que coincidía además con la primera escisión recientemente producida por la Unión Socialista, dirigida por intelectuales, entre los que se encontraba Ricardo A. Latcham. El Partido Socialista perdió entonces un sector de militantes de clase media, pero al mismo tiempo obtuvo la incorporación a sus filas de la Izquierda Comunista, que aportó cuadros obreros.

Poco después de la nominación del candidato de la izquierda, la derecha celebró su convención nacional, en la que proclamó a Gustavo Ross, quien se encontraba en Europa. Conocido como "el mago de las finanzas", durante el ejercicio del cargo de ministro de hacienda del presidente Arturo Alessandri, era un símbolo del gobernante despiadado, por lo que se le llamaba también el "ministro del hambre" y el "último pirata del Pacífico". Extraño a Chile, había pasado la mayor parte de su vida en el viejo continente. La derecha, como siempre, no tenía un programa for-

mal. El *leitmotiv* de su campaña fue: "Muchos los problemas; una la solución: Ross". Esta elección se efectuó cuando el cohecho era el factor decisivo para la reacción. Señala Paul Drake: "Cuando Ross volvía a Chile desde Europa, para aceptar su nominación, dijo al ministro de relaciones exteriores de Brasil que su principal estrategia electoral era comprar a los votantes".[1] Esta afirmación está registrada en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos en Río de Janeiro. La personalidad de Ross era tan reaccionaria que su candidatura provocó la huida de parte de la juventud conservadora, denominada Falange Nacional, conjuntamente con algunos liberales, que votaron por Aguirre Cerda o se abstuvieron.

El resultado de la elección presidencial del 25 de octubre de 1938 estuvo condicionado por el apoyo del ibañismo al candidato de la izquierda. Este apoyo se decidió después de la matanza ordenada por Alessandri el 5 de septiembre del mismo año, contra los jóvenes del Movimiento Nacional Socialista, que se habían levantado en apoyo de un golpe militar frustrado a favor de Ibáñez. En estas circunstancias, el apoyo de los simpatizantes de Ibáñez fue decisivo para alterar el favoritismo hacia Ross. En efecto, Aguirre Cerda obtuvo 50.3% de los votos contra 49.4% recibido por Ross. En esa fecha sólo el 12% de la población estiba inscrita en los registros electorales (las mujeres no tenían derecho a voto) y concurrió a las urnas el 88% de los inscritos, es decir, hubo una menor abstención que en 1932. Así, "octubre fue nuestro octubre", como lo anticipó Raúl Ampuero, entonces secretario general de la Federación de la Juventud Socialista.

La derecha trató de desconocer la victoria de Aguirre Cerda, discutiendo primero la legitimidad de los resultados electorales para exigir enseguida un recuento de los sufragios en el Congreso, donde tenía mayoría. Después **pidió** a los altos mandos militares, golpeando las puertas de los cuarteles, que se unieran a su táctica conspirativa. En todas esas maniobras participaba Ross, y Alessandri sólo observaba el juego. Después se fue apaciguando la situación por la accicn contraria de los sectores más moderados de la derecha, la Iglesia Católica y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden. La misma actitud adoptaron, tras algunas reservas, los inversionistas extranjeros, bajo la garantía del nuevo presidente de la República de que se respetarían sus legítimos intereses. Todos los partidos del Frente Popular ofrecían, por su parte, seguridades de un tránsito pacífico. Las Fuerzas Armadas llegaron por último a la conclusión de apoyar la transferencia legal del gobierno, derrumbándose la conspiración de Ross, quien regresó a Europa donde vivió sus últimos años.

[1] Paul Drake. *ibidem,* pág. 175.

El Frente Popular representó en Chile un hito muy importante en el proceso de institucionalización del movimiento popular. En los años veinte, después de la promulgación del Código del Trabajo, se había realizado este proceso en el movimiento sindical, en medio de una larga discusión sobre el paso de los sindicatos libres a los sindicatos legales. En los años treinta, después de la victoria electoral del Frente Popular, se produjo un proceso similar en el orden político, pasando los partidos populares de los métodos insurreccionales a los métodos electorales, con participación en gobiernos de coalición, con hegemonía burguesa. Los cambios cubrieron hechos que van desde la rebelión de la marinería de 1931, en el caso del Partido Comunista, y de la revolución de 1932, en el caso del Partido Socialista, al gobierno de Pedro Aguirre, de 1938. El Partido Comunista no ingresó al gabinete con ministros, pero asumió otros cargos menores, lo que facilitó su trabajo sindical conjuntamente con desestimular las conspiraciones reaccionarias. En el Partido Socialista se produjo una severa discusión sobre la participación en el gobierno. La minoría, formada por 30% de los delegados al congreso celebrado en diciembre de 1938, dio su apoyo al cumplimiento del programa, pero proponía, al igual que el Partido Comunista, no participar en el gabinete. La mayoría, con el 70%, se impuso, aceptando tres ministerios de poco relieve: Fomento, Salud y Tierras y Colonización.

No obstante la escasa participación e influencia en el gobierno, los partidos comunista y socialista experimentaron, con todo, un considerable crecimiento, tanto en el ámbito sindical como en el político. La CTCH, (Central de Trabajadores de Chile) en cuanto a organización de los trabajadores, duplicó sus miembros en breve tiempo y ambos partidos tuvieron una representación compartida. Esta situación permitió también pasar de un proceso de abierta confrontación con el sistema a otro de consenso. Esta moderación política se inició durante la formación del Frente Popular y se prolongó hasta la ruptura de las alianzas de izquierda, teniendo su expresión más visible en el gobierno de "don Pedro". Por lo mismo, la acción política de comunistas y socialistas, con su extensa e intensa movilización, no alteró el sistema económico-social. El triunfo del Frente abrió una brecha para ejercer un poder popular parcial, que promovía cambios graduales en la sociedad y el Estado, en el marco constitucional. No significó grandes transformaciones sociales, como ocurrirá con la Unidad Popular, 30 años después, pero sí implicó el desarrollo de un capitalismo de Estado, mediante la intervención de éste en la economía.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hizo sentir su influencia en la economía. Los factores fueron muchos y variados. La reducción de las importaciones de productos manufacturados trajo consigo el incremento de la industrialización, en tanto que la agricultura se mantenía estancada. La guerra generó dificultades, espe-

cialmente de las comunicaciones marítimas, que determinaron el cambio de las relaciones comerciales desde Europa a Estados Unidos. Esta potencia, en relación con Chile, casi duplicó sus exportaciones y triplicó sus importaciones. El conflicto militar generó una gran demanda de productos mineros chilenos, aunque las potencias compradoras impusieron precios bajos a nuestro país como contribución a la guerra: el cobre se adquirió a 22 centavos la libra. En este tiempo no se gravó debidamente el gran capital, nacional y extranjero, para financiar el crecimiento económico, sino que se prefirió principalmente los préstamos externos. El órgano central que promovió el desarrollo de la economía fue la Corporación de Fomento de la Producción, creada en 1939 con la oposición rabiosa de la derecha en el Congreso, aunque en los siguientes años esa fuerza política supo aprovecharla convenientemente.

La derecha con vista a los cuarteles

La derecha más recalcitrante, que había confiado su destino al "mago" Gustavo Ross, combatió violentamente, sin tregua alguna, al Frente Popular, incluso con la vieja táctica de conspiración con altos mandos militares, una de las cuales explotó con el intento de "golpe" del general Ariosto Herrera. Pero, después de su fracaso, los conspiradores civiles buscaron los consensos, para proteger sus intereses. Esta última posición fue consistente entre los dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura, bajo la dirección de Jaime Larraín, un hombre progresista que pudo afirmar: "Es imposible detener la evolución social. Debemos estar de parte de la evolución social para canalizarla". No cabe duda que fue un hombre inteligente. Más tarde, en la década de los cincuenta, participó en el Partido Agrario Laborista y luchó por la modernización de la agricultura. Colaboraron en esta misma política, desde la mencionada corporación, algunos latifundistas radicales, entre ellos, Cristóbal Sáenz, quien fue ministro del gobierno de Aguirre Cerda. No obstante, a influencia de estos grandes terratenientes impidió la reforma agraria y la sindicalización campesina.

Durante tres décadas, de 1930 a 1960, esta especié de acuerdo entre los gobernantes y los latifundistas condicionó el desarrollo social y político, sobre la base del equilibrio de fuerzas de los sectores rural y urbano, establecido después de la crisis de los años treinta. Los grandes agricultores invertían parte de sus utilidades en actividades industriales y financieras, con lo que mantenían el atraso rural, en medio de un régimen de tenencia de la tierra semi-feudal, con una explotación extensiva. El "pato de la boda" era el campesinado, principalmente los inquilinos y los obre-

ros agrícolas, con salarios miserables, pésimas viviendas, carentes de seguridad social y atención médica, sin derecho a sindicalizarse y educación atrasada y precaria. El analfabetismo era generalizado porque los niños que aprendían a leer y escribir, una vez adultos, lo olvidaban por la ley del desuso. Desde la dirección compartida de la CTCH, socialistas y comunistas habían impulsado la sindicalización, cuyas organizaciones luchaban por sus reivindicaciones sociales.

Los sectores industriales, representados a su vez por la Sociedad de Fomento Fabril, fueron aun más receptivos a la política general de impulso a esta actividad económica promovida por los gobiernos de Frente Popular. Por lo mismo, no compartieron los ataques virulentos de la derecha política, sino que por el contrario más bien colaboraron con algunos de los proyectos de fínanciamiento de la Corporación de Fomento a la Producción, aunque no compartían la planificación emprendida durante aquel tiempo por dicha institución. El propio Partido Radical afirmó, por eso, que era "innegable que la industria y el comercio nunca habían tenido más utilidades que durante el gobierno de la izquierda".[2] Estos mismos sectores estuvieron más abiertos a convenios con las organizaciones sindicales de sus trabajadores sobre mejoramientos económicos y sociales. Pero el crecimiento industrial se logró gradualmente, mediante ahorro forzado, protección arancelaria, precios altos a los consumidores y, sobre todo, con el sacrificio de los trabajadores por los salarios bajos.

Aunque los sectores medios venían experimentando desde 1920 un ascenso vertiginoso, durante el Frente Popular se ensanchó la brecha entre ellos y los obreros. Los primeros tuvieron un acceso mayor a trabajo en los servicios y organismos estatales, a la educación, a la medicina social, a la vivienda y a gratificaciones adicionales, que no tenían los obreros. Sus remuneraciones y previsión social eran igualmente superiores a los de este último sector, así como su acceso a los cargos políticos, generados dentro de la democracia, como los de parlamentarios, ministros y, en general, burócratas. La expansión de este sector, después de la crisis capitalista de los años treinta, hizo que la población activa en el aparato del Estado se duplicara, entre 1930 y 1940. De este modo, los empleados públicos pasaron a ofrecer a la izquierda una base de organización, como había sucedido antes con la derecha. En el caso del Partido Socialista, su base militante en todo el país estaba formada fundamentalmente por trabajadores de la educación, ferroviarios, del Servicio de Seguro Social, del salitre, del cobre, del hierro, del carbón, etcétera. Además, su influencia se expandía cada vez más a los obreros industriales y empleados bancarios y del comercio.

[2] Isauro Torres y Pedro Opitz, *Defensa de los gobiernos de izquierda,* Santiago, 1942, pág. 3.

La clase obrera es el sector social que menos beneficios obtuvo durante el Frente Popular. Según señaló Arturo Olavarría, destacado dirigente del Partido Radical, el propio presidente de la República Pedro Aguirre Cerda reconoció, en 1941, con verdadero pesar, que su gobierno no había cumplido su compromiso con aquélla. En efecto, los obreros urbanos y rurales obtuvieron muy poco de ese gobierno y menos todavía de los que lo sucedieron, bajo la hegemonía radical:

> El empleo en las industrias no logró mantener el ritmo de la urbanización. Desde 1940 a 1952, los habitantes de las ciudades aumentaron de un 53% a más de un 60%, equivalente a más del doble de la tasa de urbanización en la década de los treinta. La industrialización tampoco logró reducir radicalmente la dependencia del capital extranjero ni incrementar los salarios de acuerdo a la producción.[3]

La adhesión de los obreros al Frente Popular tenía otras causas. Se encontraba en la dignidad cívica conquistada con la victoria de 1938, que abrió las compuertas del sistema de dominación, reconociéndoles el derecho a la libertad, el acceso a las plazas y calles, el respeto a sus organizaciones políticas y sindicales, la ampliación de la educación, como atención preferente del Estado, el mejoramiento de la previsión social. Las elecciones dejaron de ser ferias comerciales para convertirse en contiendas políticas, en epopeyas populares. Este avance democrático, que culminó con el gobierno de Allende, tuvo un retroceso a la barbarie política y a la rapacidad económica, entre 1973 y 1988, por la acción de los militares más atrasados en el golpe de Estado y la dictadura consiguiente, durante la cual la dignidad de los trabajadores fue pisoteada por la bota militar. Este es el modelo de gobierno de la derecha.

En aquellos años del Frente Popular, el movimiento sindical experimentó un extraordinario crecimiento. Paul Drake hace un buen resumen:

> La cifra de sindicatos legales casi se triplicó. En los tres primeros meses de la administración del Frente Popular, se crearon más sindicatos industriales y profesionales que durante todos los gobiernos que hubo entre 1925 y 1938. Muchos anarcosindicalistas, tales como grabadores, pintores de brocha gorda y enlucidores, se unieron a la CTCH, a la cual habían menospreciado antes de la victoria del Frente. Entre 1941 y 1949, la cantidad total de miembros de los sindicatos aumentó más de un 40%.[4]

Este poder sindical, que tenía su representación en la CTCH, era dirigido principalmente por socialistas y comunistas, aunque también tenían cierta participación

[3] Paul Drake, *ibidem*, pág. 203.
[4] *ídem.*

los radicales y demócratas, particularmente entre los empleados públicos. Las asociaciones de empleados, profesionales y técnicos se unieron, por lo general, a la CTCH, la que alcanzó un notable desarrollo, llegando a agrupar 300 mil afiliados en 1941.

Pero no se avanzó en similares términos en el campo, porque los gobiernos ampararon los intereses de los grandes terratenientes, que se oponían a la sindicalización campesina para mantener las condiciones de explotación de la mano de obra. No obstante, en 1935 se habían constituido la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, de orientación socialista, y la Federación Nacional Agraria, de orientación comunista, las que se fusionaron en un congreso de unidad en 1939, convirtiéndose en Federación Nacional Campesina. Pero esta organización no logró ninguna de sus demandas principales en esos años, las cuales quedaron postergadas todavía por varias décadas más, a pesar que los partidos comunista y socialista continuaron luchando por la penetración en el campo, un baluarte de la reacción capitalista.

La Confederación de Trabajadores de Chile, que integraba el Frente Popular, contribuyó a moderar las demandas sindicales como una especie de autodisciplina, en apoyo del gobierno de Pedro Aguirre. Pero aún así hubo una actividad importante. En este sentido, anota Drake:

> Según la CTCH, en 1937, su primer año, se involucró en 204 huelgas y disputas entre trabajadores y empresarios (193 de ellas se resolvieron en beneficio de los trabajadores). En 1938, se involucró en 198 conflictos (los trabajadores resultaron favorecidos en 184) y, en 1939, en 207 conflictos de los cuales 195 fueron favorables a los trabajadores; estos correspondían principalmente a áreas urbanas.[5]

El comportamiento de la CTCH era, en suma, la culminación del proceso de institucionalización de los sindicatos iniciada en 1924, con la promulgación del Código del Trabajo.

La derecha política, formada por los partidos conservador y liberal, mantuvo, como ya se mencionó, una violenta oposición contra el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular, acusándolos, sin ningún fundamento, de ilegitimidad, tiranía, anarquía, incompetencia, corrupción. Además denunciaba supuestos y falsos atropellos a la libertad de prensa y de reunión, así como diseminaba rumores de colapso económico. Desde el Congreso Nacional, que trataba de controlar mediante el cohecho, discutía la legitimidad del gobierno y conspiraba abiertamente para

[5] *Ídem.*

derrocarlo, como lo hizo antes con otros gobiernos. En el caso de Aguirre Cerda, el militar traidor a su compromiso constitucional fue el General Ariosto Herrera, disfrazado de "anticomunista".

Este general, de mentalidad chata y atrasada, admirador de Mussolini, represor de la Navidad trágica de 1931, en Vallenar, encabezó el "golpe" de agosto de 1939. Éste, por fortuna, se frustró con la resistencia de los partidos de izquierda y los sindicatos de trabajadores, manteniéndose la estabilidad del gobierno y alejando el éxito del golpismo hasta 1973. Este factor, en su doble significado, negativo por sus intenciones y positivo por su fracaso, acentuó la conciliación entre gobierno y oposición, y entre la izquierda y la derecha. No obstante, la primera experimentó un considerable crecimiento, dentro del cual cada uno de los partidos populares tuvo una institucionalización en el marco de la constitución liberal de 1925.

Movilización e institucionalización

Desde 1938, tanto la carta fundamental como las leyes complementarias, que regulaban las elecciones y el funcionamiento de los partidos, tuvieron un perfeccionamiento constante. En el orden político, el Partido Radical fue el primer ganador, tanto en poder en el aparato del Estado como en los resultados electorales. Ocupó los principales cargos públicos, lo que le confirió mayor influencia política. De aproximadamente 18% en la década de los treinta pasó al 20% en la década de los cuarenta. Desde el punto de vista de su composición social, el Partido Radical estaba constituido, en su gran mayoría, de sectores de clase media, coi algunos grandes agricultores y también con elementos obreros. El Partido Comunista experimentó asimismo un importante desarrollo, a pesar de que no tuvo una participación significativa en el gobierno. Constituido por trabajadores mineros e industriales, extendió también su influencia hacia los sectores medios y campesinos, aumentando igualmente sus resultados electorales.

El Partido Socialista, oscilando entre la movilización y la institucionalización, se desarrolló en forma extraordinaria, tanto en el orden político general como en el sindical. Aumentó su militancia, proveniente de la clase obrera como de los sectores medios. Este crecimiento fue constante desde la década de los treinta y hasta comienzos de la década de los cuarenta, en que sufrió una caída, que duró diez años. Entre el Partido Radical, que concentraba su atención en la administración del Estado, y el Partido Comunista, que la concentraba en la movilización de los trabajadores por sus demandas sociales, el Partido Socialista equilibraba su atención en una y otra de estas tareas. Competía con los comunistas en la conduccion de las luchas

de los trabajadores y, al mismo tiempo, hacía uso de su influencia en el gobierno para solucionar reivindicaciones laborales y lograr apoyo popular en las elecciones.

Durante este tiempo se agudizaron las contradicciones internas a la luz de las discusiones teóricas y prácticas. Una y otra vez reapareció la lucha entre los que impusieron la institucionalización del partido y los que buscaban el retorno a la independencia política, fíeles al carácter de clase de la organización, entre la participación en el gobierno y la lucha abierta de clases. El punto fundamental de esra contradicción consistía en que los beneficios de la institucionalización y el mejoramiento de sus resultados electorales no incidían directamente en la situación socio-económica de los trabajadores. Estas contradicciones sucesivas provocaron gradualmente decadencia, pérdida de empuje revolucionario, hasta desencadenar divisiones, que perseguían de nuevo la movilización popular tras sus objetivos reales e inmediatos. El principal brote de rebelión se produjo a fines de 1939 con el movimiento inconformista, encabezado por el diputado César Godoy.

El inconformismo representó un profundo movimiento de recuperación socialista, basado en el marxismo, que luchaba contra la dependencia de la burguesía en el seno del gobierno y del Frente Popular. Derrotado en el interior del partido, este movimiento rompió con el Comité Central y constituyó el Partido Socialista de Trabajadores, con la participación de cinco de los 15 diputados del partido. Esta ruptura significó 10% de sus militantes y 2% de sus electores. El nuevo partido se alzó como una alternativa al Partido Socialista y al Frente Popular, repudiando las alianzas con partidos burgueses. Derrotado completamente en las elecciones generales de parlamentarios en 1941, se disgregó más tarde, retornando un sector al Partido Socialista e ingresando el otro al Partido Comunista, donde tuvieron después destacada figuración algunos de sus dirigentes, como el propio César Godoy, Orlando Millas y Carlos Rosales.

El Frente Popular se rompió a comienzos de 1941 por el retiro del Partido Socialista, aunque éste continuó en el gobierno. La causa de la ruptura fue la reanudación de la lucha entre socialistas y comunistas en torno a sus discrepancias ideológicas. La competencia política y sindical por atraer a los trabajadores, la división generada por el "inconformismo", el pacto nazi-soviético y, en general, concepciones distintas, muy polémicas, sobre las relaciones de Chile con Estados Unidos, habían creado esta situación. Cuando la Unión Soviética fue invadida por los ejércitos alemanes, los comunistas chilenos cambiaron su posición. De enemigos de Estados Unidos se convirtieron en solícitos aliados, justificando las políticas más entreguistas. Tales circunstancias explican la reconstrucción de la izquierda con el nombre de Alianza Democrática.

El Partido Socialista tenía en 1941 más de 70 mil militantes. Este crecimiento requiere una explicación. Desde el punto de vista geográfico, se extendió a todo el país, poniendo énfasis en las provincias alejadas del centro, como Tarapacá en el norte y Magallanes en el sur. Desde el punto de vista social, la tendencia general era la atracción preferente de los sectores urbanos de los trabajadores, aunque concentraba también su atención en los de la minería y la agricultura. En la primera de estas actividades obtuvo óptimos resultados, particularmente en el cobre, y en la segunda fueron más lentos y difíciles. El reclutamiento de nuevos militantes del partido estaba estrechamente relacionado con el impulso de la organización sindical, la que era casi imposible en el campo por la carencia de una legislación laboral específica.

Este nuevo partido trató, durante el Frente Popular, de conciliar sus principios revolucionarios, la utopía socialista, con la búsqueda de soluciones para los problemas del desarrollo nacional, en el marco de un mejoramiento general de los niveles de vida de los trabajadores. Tal perspectiva explica los cambios de las declaraciones programáticas de los años treinta, más bien de carácter teórica, a las propuestas concretas de los años cuarenta. Partidario entusiasta de la CORFO trató de impulsar a través de ella industrialización, reforma agraria, Banco del Estado, astilleros, exploración petrolera, acero, electricidad, turismo, pesca, etcétera. Todo ello dentro de la planificación. Pero, al mismo tiempo, no se olvidó entonces de las reivindicaciones sociales de los trabajadores, las que impulsaba desde el movimiento sindical y en el seno del gobierno.

No obstante, los resultados no fueron ciertamente exitosos, sino más bien desilusionantes. El Partido Socialista, a través de Grove, se hizo cargo de este balance, denunciando la pobreza existente a comienzos de la década de los cuarenta, sin poder superarla por el poder de la derecha económica y su predominio en el Congreso Nacional, eterno centro de la conspiración. Por eso, confió ingenuamente en revertir esta situación en las elecciones parlamentarias de 1941. Pero la derecha, haciendo uso de sus tácticas conspirativas, puso de nuevo la estabilidad al borde del derrumbe del sistema. No era un simple juego, sino el resultado del pavor por su segura derrota, dada la declinación que venía experimentando en las elecciones complementarias de 1939 y 1940.

La derecha amenazó, en efecto, con el boicot de las elecciónes parlamentarias, con el pretexto de que el Frente Popular no aseguraba "elecciones limpias". Las verdaderas razones eran otras. Presionar al gobierno para que influyera en los partidos obreros a fin de que detuvieran sus campañas orientadas a organizar y movilizar a los trabajadores. Frenar las huelgas, particularmente en su coto cerrado: el campo. Además, obligar al Partido Radical a romper con el Partido Comunista. Los más re-

accionarios y "golpistas" exigían también que los militares supervisaran las elecciones en defensa de sus intereses. El gobierno cedió ante estas demandas en casi todos sus aspectos, con lo cual aseguró que la derecha derrotada de antemano se sometiera a su vez a la democracia formal y, por lo tanto, al resultado de las urnas.

La izquierda, a pesar de todas aquellas concesiones, obtuvo una victoria electoral, aunque concurrió dividida a las elecciones, por la ruptura del Partido Socialista con el Frente Popular, manteniéndose firme la tendencia surgida durante la crisis capitalista de comienzos de los años treinta. Dentro de este resultado victorioso, el Partido Socialista sufrió leves perjuicios por presentarse en listas separadas, pero de todas maneras tuvo un crecimiento electoral destacado. La izquierda (ia suma del Frente Popular y el Partido Socialista) venció en 1941 con el 59% de la votación, es decir, obtuvo 8% de aumento respecto a la elección presidencial de 1938. La derecha (representada entonces por liberales, conservadores, demócratas, Falange Nacional, nazistas e ibañistas) obtuvo 41% del electorado. Así el Frente Popular y la izquierda conquistaron la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

El Partido Radical reunió 20.7% de los sufragios, ubicándose en el primer lugar, superando el porcentaje obtenido en 1937, el Partido Socialista aumentó de 11.2 a 17.9%, aunque sumados el 3% de los votos obtenidos por el Partido Socialista de Trabajadores y otros pequeños grupos de tendencia socialista, superó el 20%, y el Partido Comunista tuvo el más espectacular triunfo, pasando de 4 a casi 12%. Esta comparación de los resultados en las elecciones de parlamentarios de 1937 y 1941 refleja la expansión política de la izquierda en desmedro de la derecha. El Partido Socialista había acentuado su carácter de clase, de partido del pueblo a partido de trabajadores, pero todavía no había alcanzado una definición estrictamente revolucionaria. Pero su crecimiento electoral era claro. Grove conquistó en esta última elección la primera mayoría entre todos los candidatos a senadores del país.

La victoria de la izquierda apaciguó la resistencia conspirativa de la derecha, lo que hizo posible una política de "consensos" para enfrentar los problemas generados por la Segunda Guerra Mundial. El presidente Aguirre Cerda murió nueve meses después de las elecciones parlamentarias, en noviembre de 1941, rodeado del afecto popular, como quedó demostrado en sus funerales, con una despedida multitudinaria. El Frente Popular concluyó en Chile con el ascenso tanto social como político de las masas populares, pero a la vez con un poco de frustración colectiva. Con todo, los partidos obreros abrieron una brecha en la vieja estructura de la sociedad por donde pasaría el aire fresco del sueño revolucionario hasta 1973. El cambio social, lento y pacífico, de este tiempo adquirió posteriormente un paso más rápido y ardiente. Es el tránsito sucesivo entre el Frente Popular y la Unidad Popular, entre Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende.

Ocaso del Partido Socialista

En el curso de la década de los cuarenta se agotó el proceso del Frente Popular, aunque se configuraron entonces otras alianzas con patrones programáticos y confluencia de los mismos sectores sociales. Los problemas económicos generados durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra no pudieron resolverse de acuerdo a las demandas de los trabajadores, sino que éstos continuaron siendo los sacrificados, es decir, los "patos de la boda" de la burguesía con los sectores oportunistas de la izquierda. El Partido Radical buscó consensos con la derecha y se ubicó cada vez más en la órbita de Estados Unidos, provocando situaciones que influirían en las divisiones en el Partido Socialista y en la proscripción del Partido Comunista. El ocaso del socialismo chileno comenzó a partir del gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946), elegido por el 56% del electorado, pero que bajo la divisa de "gobernar es producir" puso énfasis especial en la unidad nacional, para aumentar la producción, promover el desarrollo y asegurar la estabilidad social. Pero su interés por los trabajadores era menos marcado que el de su antecesor.

El Partido Socialista había levantado la candidatura presidencial de Osear Schnake, quien tenía personalmente una buena imagen internacional, así como había conquistado simpatías entre sectores de centro por su desempeño como ministro. Pero éste, bajo la influencia de grupos oportunistas en el interior de su propio partido, retiró su candidatura a favor de Ríos, convirtiéndose después en el embajador de Chile en Francia. Por su parte, el Partido Socialista integró de nuevo el gabinete, en el que participaban algunos ministros liberales, del sector del ex presidente de la República Arturo Alessandri, con el carácter de "amigas personales" del primer mandatario. La hegemonía en este gobierno la tenía el Partido Radical, como en el anterior, y su orientación general se inclinó cada vez más hacia la derecha.

Esta colaboración ministerial no permitía, en definitiva, resolver las reivindicaciones sociales, por lo que el Partido Socialista se hundía cada vez más en el oportunismo. Los beneficiados se reducían a una pequeña capa dirigente. En 1938, la participación en el gobierno fue aprobada por 70% de los militantes en tanto que en 1942 se aprobó por 74 votos contra 58 en el congreso general del partido. La lucha interna por recuperar la independencia había recomenzado, esta vez encabezada por Raúl Ampuero, ex secretario general de la Federación de la Juventud Socialista, la que se enfrentó con Grove, que había asumido la Secretaría General del partido después de la incorporación de Schnake en el gabinete en 1939. Este conflicto trajo consigo la expulsión de Ampuero y de sus más directos seguidores, quienes se organizaron como "Jóvenes del Pueblo", hasta su retorno al partido.

La oposición de izquierda en el interior del Partido Socialista venció en el congreso general de 1943, derrotando a Grove y eligiendo a Salvador Allende como Secretario General, en virtud de la confluencia con el sector que orientaba Ampuero. El nuevo liderazgo retiró al partido del gobierno, contando con el apoyo de 80% de los militantes, que reclamaban la independencia política para recuperar el espíritu revolucionario. Desde una posición crítica hacia el gobierno continuó dándole un apoyo selectivo. Allende se definía entonces como marxista y sostenía algunas propuestas programáticas sobre las mismas temáticas de antes, relacionadas con el desarrollo económico y social, así como el uso de la planificación. Planteaba más justicia social en el marco de una democracia cada vez más participativa. Todavía no habían aflorado las grandes ideas revolucionarias, que se definirán a partir de 1946.

El retiro del Partido Socialista del gobierno del presidente Ríos provocó una nueva división. Los seguidores de Grove constituyeron el Partido Socialista Auténtico en 1944, el que siguió colaborando con el gobierno desde algunos cargos en el gabinete y la administración. Esta última escisión marcó el punto del inicio de la decadencia del socialismo, expresándose ésta en las elecciones parlamentarias de 1945. En ellas, ambas fracciones sumaron 12.8%, descenso notorio respecto de los resultados de las de 1941, donde el partido más la escisión de César Godoy (el inconformismo) había registrado 20.7% de la votación nacional. Fue un retroceso en términos absolutos y también en comparación al Partido Radical, que obtuvo 20%, es decir, un poco menos que en las de 1941, y al Partido Comunista, que registró 10.2%, o sea, un punto y fracción menos que en 1941.

En su decadencia, el Partido Socialista llegó al extremo de elegir Secretario General, en 1944, a Bernardo Ibáñez, un profesor primario que con anterioridad, en 1939, había ganado la jefatura de la CTCH. EX comunista, convertido en anticomunista. Viajero incansable, invitado por la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, visitaba continuamente Estados Unidos, hasta convertirse en agente de la política de mediatización del movimiento sindical latinoamericano. A fines de la década de los cuarenta desapareció de Chile y radicó en el extranjero, siempre al servicio de causas oscuras. Después del golpe militar de 1973, apoyó la dictadura y formuló declaraciones falsas y calumniosas en contra de Allende.

En este breve lapso de descomposición del Partido Socialista se desarrolló una política oportunista, denominada de Tercer Frente, que tenía cierta base teórica en la realidad internacional, que aparecía oscurecida por los comienzos de la Guerra Fría. Entre los "frentes" del imperialismo, hegemonizado por Estados Unidos, y del expansionismo de la Unión Soviética, se buscaba formar un tercer frente, no com-

prometido con los grandes competidores mundiales. En este proceso estaban actuando grandes partidos latinoamericanos y, sin duda, constituyó un anticipo del movimiento de los países no alineados que se generaría después. Pero, por encima de este fundamento internacional, la capa dirigente, encabezada por Bernardo Ibáñez, buscaba el retorno al gobierno por medio de la negociador. Éste se produjo por breve tiempo, durante la administración de Alfredo Duhalde, que había reemplazado, en el carácter de Vicepresidente, a Juan Antonio Ríos, que se encontraba enfermo y poco tiempo después moriría.

Con esta actuación, el Partido Socialista sólo consiguió un nuevo fracaso. No obstante, con cuatro ministros en un gobierno siempre dominado por los radicales, aseguró el respeto de Duhalde al movimiento obrero, después de una represión anterior, pero se comprometió en una maniobra destinada a convertir a dicho vicepresidente en candidato presidencial, a la muerte esperada de Ríos. La lucha socialista-comunista se entrelazó con la división de la CTCH en 1946, diez años después de su fundación. Esta escisión se producía al término de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la Guerra Fría. El sector dominado por los comunistas tenía el reconocimiento "oficial" de radicales, falangistas y otros grupos que apoyaban al gobierno de Ríos. En cambio, el sector que orientaban los socialistas actuaba con independencia del gobierno.

La abierta intervención extranjera fue decisiva en la división del movimiento sindical en los países latinoamericanos. Paralelamente a la utilización de los sindicatos por los comunistas en la Guerra Fría y en apoyo a la Unión Soviética, el gobierno de Estados Unidos, a través de la CÍA y de sus corporacione s sindicales, contribuyó con capacitación, organizadores y dinero. Los viajes a listados Unidos, a cursos operativos, se sucedieron en numerosas oportunidades, cor el apoyo del Departamento de Estado y de la AFL-CI' La lucha ideológica se planteaba entre las fuerzas "democráticas" y las fuerzas "totalitarias". El Partido Socialista nunca promovió esta falsa disyuntiva, pero tolere durante un breve tiempo la correspondiente consigna, hasta que el nuevo Comité Central, dirigido por Raúl Ampuero, prohibió, a partir de 1947, aquellos viajes y formuló una política clara al respecto. Esta política afirmaba la independencia de las centrales sindicales de carácter internacional y, por lo tanto, se opuso a la Conferencia Interamericana de Trabajadores (err) y a la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).

En octubre de 1946 se realizó la elección presidencial a cuatro bandas: Gabriel González Videla, por la alianza radical-comunista; Eduardo Cruz Coke, por los conservadores socialcristianos y apoyado también por los falangistas; Fernando Alessandri, por los liberales y conservadores tradicionalistas, y Bernardo Ibáñez, por los

socialistas. Este último partido estaba completamente desacreditado por las colaboraciones ministeriales y las divisiones. No obstante, desoyendo las invitaciones de las otras candidaturas, optó por un "saludo a la bandera", en el supremo esfuerzo por preservar lo que todavía quedaba de unidad. Pero esta decisión fue inútil, porque el electorado socialista votó, en su inmensa mayoría, por González Videla.

Esta elección presidencial merece algunos comentarios. Ella marcó, desde luego, un aumento de la abstención por la desilusión política. En 1938 había concurrido a votar el 88% de los inscritos, en 1942 lo había hecho sólo 80% y en 1946 el descenso había sido mayor, votando sólo 76%. La diferencia de votación entre la izquierda y la derecha se invirtió. González Videla venció con mayoría relativa de 40% y Bernardo Ibáñez sólo obtuvo 2.5% del electorado. La derecha, en cambio, sumó 29.7% con Cruz Coke más 27.3% con Fernando Alessandri, lo que totalizó 57%. En otras palabras, la izquierda se encontraba en franco retroceso y dentro de ella, el mayor perdedor era el Partido Socialista. Este fue, en efecto, el momento más bajo del socialismo identificado con este partido.

El año 1946 marcó el inicio de un segundo período en la historia del Partido Socialista que llega hasta 1967. Entonces estaba en el suelo, pisoteado por una generación de oportunistas, dirigentes políticos y sindicales, que sólo buscó la satisfacción de sus propias ambiciones, avergonzando a las bases populares, compuestas por trabajadores manuales e intelectuales que habían luchado por la utopía socialista. Contra aquella descomposición se alzó una nueva generación, representada por el liderazgo de Raúl Ampuero y la base no contaminada de todo el país. El congreso general ordinario, celebrado en octubre de ese mismo año, marcó el comienzo de la recuperación del Partido Socialista. En este torneo, Ampuero enfrentó a la corriente oficialista, responsable de la dirección partidaria durante la aventura en el gobierno de Duhalde. Fue elegido por primera vez secretario general, derrotando por escasos votos a Salvador Allende, tras cuyo nombre se había agrupado el "oficialismo", aunque él no había sido directo responsable de aquella política, pero la había tolerado, sin una crítica publica.

El Partido Socialista, bajo la dirección de Ampuero, enfrentó los hechos que configuraban la realidad política nacional. En este sentido, reconoció la victoria electoral de Gabriel González, le dio sus votos en el congreso pleno y declaró que actuaría en orden de ayudar al cumplimiento del programa de gobierno agitado durante su campaña. Asimismo, condenó a las organizaciones clandestinas de corte fascista que, bajo el pretexto de combatir al comunismo, preparaban la vuelta de regímenes reaccionarios, como la Acción Chilena Anticomunista (ACHA). Rechazo la invitación del presidente de la Republica a incorporarse a su gobierno y se dispuso

a recomponer su estrategia revolucionaria para la conquista del poder y la transición socialista.

En el mes de noviembre de 1947 se celebró la Conferencia Nacional de Programa, en la que se aprobó este instrumento estratégico que, uniendo la teoría y la práctica, se planteó la lucha por una República Democrática de Traba adores, en el marco de un mundo que era conmovido por el auge del estalinismo, el plan Marshall que promovía la reconstrucción de Europa, el asesinato de Mahatma Gandhi, los inicios de la Guerra Fría, la presencia del socialismo yugoslavo y el nacimiento de la República Popular China. El propio Ampuero destacó más tarde la importancia de esta iniciativa política. Ella puso de relieve ideas que se desarrollarían con posterioridad sobre la reducción del papel del Estado en el proceso de socialización de los medios de producción y la reivindicación humanista del trabajo como factor económico y supremo valor social, confiriéndole además a la democracia la función de ordenamiento institucional del socialismo. Aquella fue la primera y última Conferencia Nacional de Programa.

Término del ciclo radical

La situación económica del país no experimentó mayores cambios al finalizar la década de los cuarenta. Las tasas de crecimiento real de la producción y del ingreso real *per capita* disminuyeron en comparación con los de la primera mitad de la misma, alcanzando apenas los niveles previos a la crisis de los años treinta. Con todo, en el lapso del Frente Popular, la distribución del ingreso favoreció a los capitalistas en desmedro de los trabajadores, con excepción de algunos sectores de empleados. La economía continuó su lento desarrollo, con algunos cambios positivos y otros negativos. El cobre, que se había vendido a precios irrisorios, 22 centavos de dólar la libra, durante la Segunda Guerra Mundial, mejoró su precio, influyendo en los términos de intercambio. Estados Unidos era el primer comprador de este mineral, no sólo para satisfacer las necesidades de su economía, sino también para acumularlo a fin de controlar los precios. La inversión extranjera., en su mayor parte estadounidense, tuvo también un incremento, así como los préstamos otorgados por intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción contribuyeron al proceso de industrialización. La inflación aumente, manteniendo un índice ascendente, que desencadenaría trastornos sociales.

El gobierno de González tuvo, desde el comienzo, un espíritu de "unidad nacional", con la participación de radicales y comunistas, que habían sido los vencedo-

res en la elección presidencial y los liberales, por su apoyo en el Congreso Pleno. Pero este gobierno se inclinó cada vez más hacia la derecha y estableció relaciones internacionales serviles con Estados Unidos, convencido que era inevitable una Tercera Guerra Mundial. El presidente de la República sostenía la teoría de que Chile no aprovechó las ventajas de los "vencedores" por no haberse definido oportunamente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, decía, su gobierno lo haría ante la eventualidad de la Tercera Guerra Mundial, asumiendo así la filosofía del oportunismo, alimentada desde la cúspide del imperialismo: el gobierno de Washington.

La sociedad entretanto se conmovía cada vez más por los efectos de un capitalismo incipiente, que dependía de la inversión, insumos y tecnología del exterior, así como por los trastornos producidos por las fluctuaciones del mercado internacional. Como en años anteriores, los gobernantes promovían la estabilidad en vez de la movilización. Pero la explotación de la mano de obra y la pobreza demasiado generalizada imponían la reacción violenta de los trabajadores, a pesar de la debilidad de los sindicatos y los partidos obreros por la crisis que vivía la izquierda. El gobierno, a su vez, utilizaba la represión y, al final del mandato de Gabriel González, 60% de la población activa percibía ingresos inferiores al mínimo requerido para subsistir, signo revelador de la pobreza.

El Partido Comunista cooperó con la política general del gobierno en el lapso que participó en él, frenando las demandas obreras, como sucediera también en los comienzos del Frente Popular con la participación socialista. No obstante lo anterior, su crecimiento político y sindical fue espectacular, particularmente en el plano electoral. En efecto, de 10.2% obtenido en las elecciones parlamentarias de 1945 se elevó a 16.5% en las elecciones municipales de 1947, doblando al Partido Socialista. Los demás partidos, tanto de izquierda (el Partido Radical obtuvo 20%) como de derecha (al Partido Conservador alcanzó 20.2% y el Partido Liberal 13.3%) mantuvieron más o menos sus niveles electorales. Los grandes perdedores fueron, una vez más, los socialistas.

La presión del gobierno de Estados Unidos así como la amenaza conspirativa de la derecha interna indujeron al Presidente de la República Gabriel González Videla a romper su compromiso político con el Partido Comunista, eliminándolo de inmediato de su gabinete y de otros cargos públicos importantes. En el año siguiente, 1948, presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que proscribía a este partido de la vida pública, que fue aprobado por el Partido Radical y la derecha, convirtiéndose en la "Ley de Defensa Permanente de la Democracia". En virtud de ella los comunistas fueron borrados de los registros electorales y perseguidos tanto en las actividades políticas como sindicales, afectando gravemente al movimiento

obrero, que entonces se encontraba dividido. El presidente rompió asimismo las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y sus países satélites y contó con facultades extraordinarias y estados de sitio, además de ministros de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Estados Unidos pagó el "servicio", aumentando sus inversiones, préstamos y asistencia tecnológica, pero imponiendo, en cambio, el rechazo a las demandas por una mayor intervención estatal en la economía y por mejoramientos de los salarios en general. El Presidente González Videla, después de doblegar al Partido Comunista, viajó en 1950 a Estados Unidos y estableció con el gobierno de Washington acuerdos sobre las relaciones en las empresas del cobre, siempre favorables al imperialismo, obteniendo nuevos préstamos para el desarrollo industrial. Dos años después, en 1952, concertó un pacto de ayuda militar, que vinculó más a las Fuerzas Armadas con el Pentágono y los servicios de "inteligencia" de Estados Unidos, subordinando a las Fuerzas Armadas chilenas tanto en a provisión de armamentos como en el entrenamiento militar. El Partido Comunista optó por el repliegue y la clandestinidad, desmintiendo con esta táctica la falsa acusación presidencial de buscar la insurrección con el apoyo soviético. La situación de debilidad del movimiento popular, con la división de la CTCH y la violenta contradicción con el Partido Socialista no permitía concebir siquiera otra alternativa. Los comunistas, por eso, en vez de abstenerse en las elecciones parlamentarias de 1949 intervinieron marginalmente en listas con otros partidos, eligiendo tres diputados, con lo que burlaron la "ley maldita".

La izquierda estaba en franco retroceso. A la persecución del Partido Comunista se agregó la división del Partido Socialista en 1948. La política de principios aplicada por el Comité Central, dirigido por Raúl Ampuero, fue desafiada por la antigua camarilla oportunista, que se había unido a la campaña "articomunista" de la derecha y de González Videla. En esa posición estaban todas las figuras más conocidas, como Osear Schnake, Juan Bautista Rossetti, Bernardo Ibáñez y Manuel Hidalgo, el viejo trotskista proveniente del Partido Comunista. La ruptura fue inevitable cuando algunos de estos personeros, como el mismo Schnake, ingresaron a la Acción Chilena Anticomunista (ACHA). Pero, más allá de esta posición, lo que este grupo buscaba era el retorno al gobierno.

En el último pleno (reunión del Comité Central más los Secretarios Regionales), celebrado antes de la división, Ampuero los fustigó violentamente, sosteniendo que el Partido Socialista no sería, por la acción de ese sector de derecha, "mascarón de proa de un barco de piratas" (se refería a la ACHA). Las posiciones eran absolutamente contradictorias. El nuevo Comité Central tenía instrucciones de no incorpo-

rarse al gobierno, aunque el presidente González Videla lo había invitado al "banquete". La nueva política del Partido Socialista preconizaba la independencia de los gobiernos de turno y la apertura de la lucha por el poder. Por otra parte, el Comité Central de entonces rechazaba la persecución del Partido Comunista y del movimiento sindical, porque levantaba una crítica de izquierda a ese partido, contra las concepciones de "unidad nacional" y la incondicionalidad hacia el estalinismo demostradas por los comunistas.

El grupo divisionista arrastró a tres diputados, que habían sufrido una sanción por su abstención en la votación general de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, pero a ningún senador. Por decisión de la Dirección General del Registro Electoral, bajo inspiración de González Videla, dicho grupo obtuvo el nombre oficial del partido y se incorporó al gabinete con dos ministros: Juan B. Rossetti en Justicia y Armando Mallet en Educación. El sector de izquierda, dirigido por Ampuero, adoptó el nombre de Partido Socialista Popular y conservó la mayor parte de la militancia y de los sindicatos, así como de los intelectuales. Contó además con todos los secretarios regionales y los senadores, entre ellos Allende, y la mitad de los diputados. El Partido Socialista Popular rechazó una vez más las invitaciones a incorporarse al gobierno, manteniendo esta posición, durante 20 años (incluso una vez producida la reunificación, en 1957), con excepción de ocho meses de participación en la primera fase del gobierno del presidente Carlos Ibáñez, desde fines de 1952 a comienzos de 1953. La oposición a los gobiernos de turno se convirtió en oposición al sistema de dominación capitalista.

No obstante, este partido no logró superar su retraso en las elecciones parlamentarias del año 1949. En efecto, sumadas las votaciones recibidas por los tres grupos en que estaba dividido (PSP 4.8%, PS 3.4% y PSA 1.1%) obtuvieron en conjunto 9.3%, cifra significativamente inferior al 12.8% logrado en las elecciones parlamentarias de 1945. La derecha propiamente tal (conservadores y liberales) registró 42.1% en vez de 43.7%, conseguido en 1945; el Partido Radical, escindido también en tres sectores, elevó su votación de 20% en los comicios de 1945 a 27.7% en 1949. En estas elecciones de parlamentarios participaron por primera vez las mujeres en virtud de una ley promulgada poco antes. El año 1949 marcó, pues, todavía el descenso del Partido Socialista, para alcanzar enseguida un extraordinario repunte hasta 1973.

El presidente de la República Gabriel González Videla, después de eliminar a los comunistas de su gobierno, formó un ministerio llamado de concentración nacional, encabezado por el comandante en jefe de la Marina Inmanuel Holger, e integrado por radicales, liberales y conservadores. Se volvió así a las combinaciones favori-

tas del ex presidente Arturo Alessandri, de quien aquél se consideraba un discípulo aventajado. En la mitad de su mandato, González Videla ya estiba desacreditado, anunciando con ello la agonía del ciclo radical. En ese tiempo, el proceso de sustitución de importaciones tocaba fondo, el precio del cobre en el mercado mundial decrecía, la inflación deterioraba la economía y los conflictos sociales se agudizaban. La burocracia política del Partido Radical, convertida en usufructuaria de las influencias del poder, desde los bancos, industrias y administración pública, había llegado a la extrema descomposición. En estas condiciones, el pueblo proyectó su interés en una nueva perspectiva política.

Este presidente de la República, sin proponérselo, preparó la inhumación del prolongado ciclo de gobiernos de este signo político. Su grosero oportunismo, fiel reflejo de aquellos sectores de la burguesía dependiente, desarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial, el desprestigio de los partidos tradicionales, la ineficacia del propio gobierno y la persecución del movimiento obrero pusieron en las grandes masas nacionales un sello de desilusión y lo llevaron a repudiar al régimen imperante. Esta situación abrió las puertas a un sentimiento colectivo de independencia de los partidos, que se personificó en la carismática figura del general Carlos Ibáfiez, quien fue elegido presidente de la República, por segunda vez, el 4 de septiembre de 1952. La victoria electoral de Ibáñez representó la continuidad de las masas en el respeto a la institucionalidad y la democracia formal, que durante años los partidos populares le habían enseñado, sumadas al definitivo cansancio de los trabajadores respecto a las políticas sectarias y las pugnas de comunistas y socialistas.

Modernización del capitalismo

Los gobiernos de la izquierda, denominados de Frente Popular, trajeron consigo una nueva ola modernizadora del capitalismo y de la administración del Estado. En esta obra política tuvo destacada participación el Partido Socialista, tanto desde el gobierno como desde la oposición. El país extrajo sus propias y decisivas lecciones de la crisis de los años treinta, las que atravesaron las expectativas de las diversas clases y sus representaciones políticas, repercutiendo en definitiva en el papel que le atribuían al Estado en lo concerniente al proceso económico. Las posiciones adquirieron caracteres alternativos. Desde el punto de vista de la derecha, las clases dominantes reafirmaron su concepción liberal, basada en el *laissez faire* en el ámbito económico, pero con la intervención represiva del Estado en contra de las clases subordinadas; prescindencia del Estado en la economía, pero acción violenta en la

política. Desde el punto de vista de la izquierda, se planteó una concepción opuesta, que requería la intervención y regulación de la economía por parte del Estado y un sistema de libertad política y de término definitivo de la represión.

Ambas posiciones se planteaban entonces en los límites del desarrollo capitalista, aunque la estrategia del Frente Popular enarbolaba la bandera de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, la que en algunos países se inscribía en los movimientos de liberación nacional, perspectiva que no asumía en este período en Chile. Ella perseguía más bien objetivos de modernización de la economía capitalista, por medio de la incorporación de nuevas modalidades tecnológicas, proporcionadas por la colaboración externa, la que a su vez arraigaba aún más la dependencia, cómo se verá más adelante. Los gobiernos anteriores de Ibáñez (1927-1931) y de Alessandri (1933-1938) habían enfrentado la crisis mundial del capitalismo agudizando la sobreexplotación obrera y canalizando la inversión fiscal hacia la construcción de obras públicas, con lo que ampliaban la infraestructura en que se basaba la economía y se generaba empleo.

La crisis exigía una respuesta más de fondo, que comprendiera una nueva institucionalización para enfrentar las contradicciones de clase, que amortiguara la presión anticapitalista por reivindicaciones de mejores condiciones de vida y de trabajo, así como reformas sociales y políticas. Esta respuesta la ofreció, en efecto, el Frente Popular. Los gobiernos de este signo emprendieron, de acuerdo a las lecciones de la crisis económica vivida, un programa de modernización del capitalismo, orientado a disminuir la dependencia del desarrollo nacional de las contingencias externas. Para este efecto se utilizaron mecanismos e incentivos dirigidos a favorecer el proceso de sustitución de importaciones. Entre los primeros destacó la Corporación de Fomento a la Producción y, entre los segundos, créditos, avales, asistencia técnica, subvenciones, reducciones arancelarias, etcétera. El Frente Popular impulsó, pues, la acumulación capitalista y el correspondiente desarrollo industrial, asegurándoles a los inversionistas atrayentes tasas de ganancia. Este proceso comprendió dos fases, entre los años 1938 y 1952, que presentaron características diferentes.

La primera fase se realizó durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda (1938-1940), el que impulsó a través de la CORFO obras industriales, explotación de recursos naturales, fuentes de energía, siderurgia e infraestructura (carreteras, puentes y obras públicas). La producción industrial se concentró en bienes de consumo inmediato y ligeros (textiles, vestuario, bebidas, alimentos, muebles, etcétera), muchos de los cuales se importaban en el pasado reciente. Este proceso se desarrolló durante el lapso en que las economías industriales avanzadas se esforzaban por

salir de la crisis, al tiempo que sus inversiones en los países atrasados y dependientes se mantenían en el sector primario y de servicios. Por otra parte, su desarrollo industrial estaba condicionado por la estrechez del mercado interno, formado principalmente por la demanda de las propias clases altas y de los grupos medios altos, complementado con la ampliación de las exportaciones.

La segunda fase se inició con el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos (1942-1946) y culminó bajo el del presidente Gabriel González Videla (1946-1952). Las ramas industriales surgidas en la primera fase pasaron a requerir, para su expansión, el desarrollo de otras ramas productoras de bienes de capital (maquinarias, repuestos, etcétera), lo que a su vez suponía mayores niveles de inversión y de tecnología. En estos años, surgió pues la necesidad de dar impulso a la producción de bienes de capital, así como de bienes intermedios. Para eso, la burguesía interna descargó el peso principal de los nuevos costos sobre los trabajadores, reduciendo las remuneraciones reales, al tiempo que buscó la inversión extranjera. Así se apagaron los destellos nacionalistas y de progreso social del Frente Popular.

Este cambio esencial en el proceso de industrialización trajo consigo repercusiones tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. Él establecimiento de plantas industriales más complejas exigió inversiones mayores de capital. Éstas se extrajeron, en primer lugar, del trabajo de la clase obrera, mediante sobreexplotación, con lo que se rompió la alianza social entre dicha burguesía interna y el proletariado y, en segundo lugar, de la asociación con el capital extranjero. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ésta última fue favorecida por la disposición de la economía imperialista a invertir parte de los recursos financieros acumulados durante la economía de guerra, en el sector industrial de los países en desarrollo. De esta manera, se generaron las condiciones para la integración de la economía chilena en la economía mundial, y de la burguesía interna en la burguesía internacional.

La Corporación de Fomento de la Producción fue creada por una ley promulgada el 29 de abril de 1939, tras vencer la resistencia de los partidos de derecha en el Congreso. Esta oposición tenía un fundamento teórico en el ámbito del desarrollo. La derecha rechazaba el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones, mediante el desarrollo técnico-económico impulsado por el Estado. Este rechazo se fundaba en la creencia de que dicho proceso exigiría un aumento de los tributos y traería consigo más inflación. Para este sector político, la CORFO sólo significaría una mayor intervención burocrática. Más que eso, 1enía conciencia de que la asunción de un papel rector en la economía por parte del Estado significaría una redefinición de las esferas de poder.

La aprobación de esta iniciativa legal fue el resultado de una negociación entre las fuerzas de gobierno y de oposición en el Congreso, donde ésta última retenía la

representación mayoritaria. La derecha aceptó la nueva ley, que habría de permitir al gobierno impulsar su programa de desarrollo, comprometiéndose éste a su vez a suspender la sindicalización campesina, restringiéndose de este modo las demandas sociales de dicho sector asalariado. Redefínidas así las cosas, las fuerzas de gobierno (izquierda) consolidaron sus posiciones en el sector obrero industrial y las de oposición (derecha) en el sector campesino. Esta situación se superó sólo a fines de la década de los sesenta, cuando se legisló sobre sindicalización campesina y reforma agraria, desencadenándose un proceso de cambio del régimen de tenencia de la tierra.

La nueva entidad pública cumplió con creces sus objetivos. Consciente de la necesidad de impulso de la producción que pusiera en movimiento los recursos naturales y la capacidad industrial, abordó los graves problemas estructurales de la economía, tales como los de capitalización nacional, balanza de pagos, crecimiento agrícola, expansión del mercado interno y formación de cuadros técnico-profesionales. El gobierno emprendió este plan general de desarrollo, pero su motor estuvo constituido por dicha Corporación, si bien tuvieron significativa participación otras instituciones del Estado. Dentro de este marco general, fueron muchas las iniciativas impulsadas en el campo de la economía a través de la planificación y financiamiento público, entre las cuales destacaron los planes sectoriales y la creación de empresas públicas y mixtas.

De 1944 a 1952, la CORFO construyó las plantas hidroeléctricas de Pilmaiquén, Sauzal, Abanico y Los Molles conjuntamente con diversas plantas térmicas y con los proyectos sobre redes de interconexión de los sistemas regionales para la transferencia de excedentes de energía. En 1942 inició un programa de prospecciones petroleras que fructificó en 1945 al descubrirse el primer yacimiento, traspasándose estas actividades en 1950 a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). En 1946 se constituyó la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), organizada como sociedad anónima, pero con financiamiento estatal. Esta empresa entró en producción con la usina de Huachipato en 1950, con lo cual se superaban los primeros pasos dados en 1933 con los Altos Hornos de Corral. De este modo, Chile se incorporaba al campo de la producción de electricidad, combustibles y acero con el aprovechamiento de sus propios recursos naturales. Este proceso no fue obra de la "iniciativa" privada, sino del Estado, bajo la conducción de la izquierda, destacando en la dirección de la CORFO dos hombres notables: Guillermo del Pedregal, su primer vicepresidente ejecutivo (también ministro de hacienda y de otras carteras) y Pedro Vuskovic, el último (igualmente ministro de economía), en los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y de Salvador Allende, respectivamente.

La burguesía industrial y comercial se desarrolló de este modo a la sombra de la política de intervención estatal en la economía. El Estado se hizo cargo, en efecto, de cuantiosas inversiones en la construcción de la infraestructura y en la creación de poderosas actividades que pasaron a condicionar el crecimiento económico del país. Muchas de dichas actividades fueron transferidas posteriormente a los empresarios privados, generando un fuerte sector que se convirtió a su vez en grupo de presión sobre el Estado. La política económica del Frente Popular fortaleció así al capitalismo, modernizando a la clase dominante, sin desplazarla de los centros de decisiones en este ámbito y extendiendo su acción hacia nuevos rubros de inversión.

En el último gobierno radical, el de Gabriel González, el cobre: consolidó su importancia en la economía nacional, independientemente de la explotación extranjera. Entonces, representaba 70% del valor de las exportaciones y 60% del ingreso en divisas. La producción de las tres más grandes empresas (Chile Exploration Co., Andes Copper Mining Co. y Braden Copper Co.) equivalía a 95% del total. Ellas controlaban por lo mismo el mercado a través del monopolio de todas las fases del negocio: extracción, fundición, refinación y elaboración o industrialización. Además, fijaban arbitrariamente los precios, favoreciendo a sus subsidiarias en Estados Unidos, que consumían este producto, con cuya política burlaban al fisco chileno.

La influencia de los terratenientes, que militaban en el Partido Radical, excluyó del proyecto una reforma agraria, manteniendo la dicotomía económica: un desarrollo desigual entre la industria y la agricultura. La oligarquía agraria mantuvo, por eso, su poderío. Ella fue realmente fortalecida por la política de fomento a la agricultura, de respeto a la estructura de la tenencia de la tierra, de estímulo al espíritu de empresa y desestímulo a la organización sindical de los trabajadores del sector rural. No obstante, el capitalismo se extendió en el campo a través de la modernización de la agricultura. El llamado plan agrario, en el gobierno de Juan Antonio Ríos, se propuso cinco objetivos: proveer de alimentos a la población, constituir un mercado para la industria de transformación, proporcionar materias primas a ésta, contribuir a la obtención de divisas y conservar los recursos naturales. Para ello se incorporaron nuevas tierras regadas a la producción intensiva, se incrementó la mecanización y se extendió la energía eléctrica. Éste último es un *pa*so extraordinario en la vida de la población rural. Pero los esfuerzos realizados a favor de este desarrollo no fueron suficientes para superar la ya crónica crisis de la agricultura. El Estado impulsó el desarrollo de la fruticultura, la importación de ganado fino, la industrialización del cáñamo y de oleaginosas. La CORFO creó la Industria Azucarera Nacional, S.A. (IANSA) en 1952, con cuya producción se satisfizo parte de la demanda interna. No obstante, la agricultura no avanzó en relación al incremento de la po-

blación, así como fue muy leve el aumento de los rendimientos. Esta situación trajo consigo escasez de alimentos y el consiguiente aumento de precios, a la vez que exigió mayores importaciones de estos productos.

La crisis agrícola tenía entonces fundamentos en factores estructurales, toda vez que esta actividad descansaba en un arcaico régimen de tenencia de la tierra y también en atrasados sistemas de explotación. Esta situación era el resultado del comportamiento histórico de los terratenientes. El latifundista, que ejerció su influencia negativa hasta 1940, fue desplazado en el ámbito económico y político por el más fuerte dinamismo desarrollado por los nuevos actores industriales, públicos y privados, surgidos durante el período de Frente Popular, con la acción de la CORFO. Por lo mismo, el capital destinado hasta entonces a la agricultura se orientó en parte a la industria y, poco después, ambos asumieron la función financiera.

Caída y auge del movimiento sindical

La gran crisis mundial del capitalismo determinó la recesión económica en Chile a fines de los años veinte y comienzos de los treinta, la que trajo consigo la desactivación sindical. La crisis del salitre, primero, obligó al gobierno a aliviar la situación de los desocupados, pero el gobierno no pudo afrontar las demandas laborales cuando debió enfrentar además las repercusiones de la depresión proveniente de los países avanzados. En esos años, no sólo la producción del salitre experimentó una caída considerable, sino también la del cobre. La industria, a su vez, sufrió una disminución de 25,6% de sus índices de producción, entre 1929 y 1931, determinando una enorme cesantía, con sus repercusiones en el movimiento sindical. La crisis económica y su secuela en el ámbito social condicionaron el desequilibrio general del sistema político. Por ello, desde la renuncia del presidente Alessandri, en octubre de 1925, hasta la caída de Ibáñez, en julio de 1931, no se aplicó en los hechos la nueva legislación del trabajo.

Durante el período del Frente Popular, el movimiento obrero superó el fraccionalismo sindical y se cohesionó mucho más en una nueva central capaz de conducir sus luchas reivindicativas. Para este efecto, en diciembre de 1936, se realizó una convención en la que participaron delegados de la Federación Obrera de Chile, de la Confederación Nacional de Sindicatos legales y de la Confederación General de Trabajadores. En esta convención se fundó la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), la que contó desde entonces con el apoyo de los partidos comunista, socialista y de otros grupos políticos, en las luchas que emprendió a favor de sus de-

mandas sociales. Entonces comenzó el redoble de tambores. El proceso de industrialización y ampliación de las funciones intermediarias del Estado en la economía crearon nuevos empleos. El crecimiento de los servicios públicos, por otra parte, aceleró el clientelismo político de los partidos que apoyaban al gobierno, especialmente del Partido Radical.

En una primera etapa, que cubre particularmente el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el movimiento obrero se impuso una disciplina social, expresada en la moderación de sus demandas salariales y en el sometimiento de éstas a la legislación laboral vigente. La Confederación de Trabajadores de Chile alcanzó un notable desarrollo, pero la política de colaboración de clases promovida entonces por los partidos populares mediatizó sus perspectivas revolucionarias, conv rtiendo a muchos de sus cuadros dirigentes en burócratas sindicales y en empleados de la Administración Pública. En estos años, el Partido Socialista sometió a discusión en las masas el concepto de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Partiendo de este principio, los sindicatos y federaciones plantearon a su vez demandas orientadas a participar en las utilidades de las empresas, así como en su dirección, a fin de que las organizaciones obreras ejercieran control sobre la operación y la distribución de los beneficios de aquéllas.

Entre los años 1938 y 1945 se legisló sobre acuerdos colectivos, regímenes salariales e indemnización por años de servicios, así como se pudo aplicar totalmente el Código del Trabajo. No obstante, la derecha y los empresarios, aprovechando la ruptura del Frente Popular, impulsaron políticas orientadas a contener las reivindicaciones laborales, obteniendo que se suspendieran algunas de las conquistas más significativas de los trabajadores. En efecto, por ejemplo, se dejó de aplicar en 1947 el reajuste del sueldo vital en proporción al alza del costo de la vida que habían obtenido algunos sectores de empleados. Este reajuste se había aprobado en el segundo gobierno de Arturo Alessandri, pero sólo puesto en práctica con e1 Frente Popular.

La evolución nacional experimentada durante las décadas de los cuarenta y cincuenta en el orden económico y político tuvo su repercusión consiguiente en el campo sindical. De 1946 a 1952 se desarrolló una fase de escisión del movimiento obrero. La Guerra Fría y la división del mundo en dos bloques antagónicos trajeron aparejada una aguda lucha ideológica y política en la izquierda. A ella se añadieron las distintas formas de encarar la grave situación económica, la inflación y el desempleo, expuestas por socialistas y comunistas. Todos estos elementos negativos erosionaron la base unitaria del movimiento popular, produciéndose la división de la Confederación de Trabajadores de Chile. No obstante, este movimiento continuó su lucha, desarrollándose un poderoso avance sindical en los sectores de empleados

y, especialmente, en los bancarios. En el año 1948 se unificaron los sindicatos profesionales de empleados del sector privado, fundando la Confederación de Empleados Particulares de Chile, así como se integraron varias asociaciones nacionales de funcionarios del sector público, formando la Junta Nacional de Empleados de Chile, en cuyas direcciones predominaban los socialistas. Esta organización impulsó una ofensiva a favor de reajustes de sueldos y salarios y, además, el conjunto de sectores organizados del movimiento sindical y la Federación de Estudiantes de Chile constituyeron un Comando Nacional contra las Alzas, cuya directiva fue encabezada por Gotario Blest. Este comando realizó una gran movilización de masas.

En suma, el movimiento obrero, reprimido por el gobierno del presidente Gabriel González Videla, recuperó gradualmente su combatividad. Su principal objetivo era la lucha contra los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los salarios. En este sentido, realizó nuevas movilizaciones para obtener compensaciones económicas por el alza constante del costo de vida, culminando con la huelga general de febrero de 1950, que precipitó la más grave crisis en el gobierno. Fracasada la política del ministro de hacienda Jorge Alessandri, se constituyó un nuevo gabinete, llamado de sensibilidad social, con la participación de radicales, conservadores del sector socialcristiano y falangistas. El nuevo ministerio no logró éxito en su empeño y el gobierno cayó en el más profundo desprestigio y en el rechazo de la ciudadanía independiente. En estas circunstancias, el movimiento sindical experimentó un fortalecimiento considerable.

No obstante, fuera del control de esta organización se produjo un desbordamiento popular a fines de marzo de 1957, con participación de trabajadores y estudiantes, en lucha desesperada contra la carestía de la vida y la desocupación. Santiago se convirtió en el centro neurálgico de la agitación, la que culminó con violentas luchas en las calles durante los días 2 y 3 de abril, que dejaron un saldo de decenas de muertos por la represión. Estos hechos revistieron caracteres insurreccionales de los sectores marginales, de las poblaciones periféricas, sorprendiendo a los propios partidos populares por su inusitada violencia. La explicación, sin embargo, es simple. En este período, el proletariado había experimentado alteraciones determinadas por el proceso de industrialización. Por una parte, el desarrollo de un sector de trabajadores relacionados con dicho proceso y, por la otra, la emergencia de una capa de trabajadores pauperizados, concentrada en Santiago y otras ciudades importantes del país. El primero actuaba dentro de la disciplina de sus sindicatos y partidos y, el segundo, sin disciplina alguna, impulsado solamente por sus necesidades primordiales.

El mayor desarrollo alcanzado por los sectores medios en este período está relacionado con el ascenso creciente de la pequeña burguesía, que pasó a desempeñar

un papel crucial en la conciliación de intereses y conflictos sociales consiguientes entre la burguesía industrial y el proletariado. Los sectores medios se incrementaron con la extensión de los servicios públicos, de la educación en sus diversos niveles y, en general, de las empresas estatales y privadas. Esta expansión notoria de dicho sector social condujo a una interpretación que tiende a otorgar un carácter absoluto a aquella gravitación político-social, una tesis que me parece errónea. Los sectores medios de la sociedad chilena desempeñaron, en efecto, un papel destacado en la evolución de la sociedad en el curso del siglo xx, particularmente desde los años veinte. Ellos constituyen un segmento diferenciado de las otras clases sociales, que luchó por subvertir algunos valores éticos, religiosos, políticos, económicos y sociales provenientes del pasado colonial y causas directas del atraso y el subdesarrollo. Estos sectores sociales se presentaron como portadores de los propósitos de liberación nacional y de transformación sociopolítica, esto es, del nacionalismo y de la democracia. Esta caracterización constituye, con todo, una idealización que ha coincidido muchas veces con el comportamiento de aquéllos, pero que se ha quebrado en otras ocasiones, particularmente en los últimos años.

El fundamento de su actividad reside en su más elevado nivel de preparación, en su mayor calificación técnica, que le permite imponer sus condiciones en el mercado de trabajo, obtener remuneraciones más altas e influir en el sistema cultural, en sus manifestaciones sociales, económicas y políticas. Esta situación es clara. Pero no lo es tanto el carácter de estos sectores, es decir, si deben definirse como un elemento en tránsito o como un elemento estable, si se considera que, por lo general, provienen del proletariado y se encaminan hacia la burguesía, como señalara Alejandro Venegas. Las corrientes de pensamiento defensoras del papel de estos sectores medios sostienen que ellos son formaciones diferenciadas de la burguesía y del proletariado, que representan y formulan un proyecto independiente de dichas clases antagónicas, equidistante del capitalismo y del socialismo. En él su eje está representado por el poder intelectual de la tecnocracia y persigue la organización del capital y del trabajo en el marco de la equidad, producto de la razón y de la educación superior. Esta posición, que rechaza las posiciones extremas, plantea la modernización del país y procura, desde su ubicación en el centro político, someter a la izquierda y debilitar a la derecha.

Desde una posición marxista, se considera a estos sectores medios como una pequeña burguesía que, con intereses ambiguos, apoya los proyectos de modernización capitalista. Este papel fue desempeñado en los años veinte con Alessandri, en los treinta con Ibáñez y en los cuarenta con Aguirre Cerda, situación que se repetirá en los años sesenta con Frei y en los setenta y ochenta con Pinochet. En esta úl-

tima experiencia su comportamiento fue vacilante y contradictorio. La inmensa mayoría apoyó en general al golpe militar y los primeros años de dictadura, para volverse en contra de ésta en el plebiscito de 1988 y en las elecciones generales de 1989. Ese tipo de comportamiento es el que ha generado una suerte de incomprensión por los otros sectores sociales y sus representaciones políticas. Para la derecha, es el socialismo y para la izquierda, el oportunismo. Quizás la relativización de esa influencia sea la interpretación más correcta.

En este sentido, no debe olvidarse que las mencionadas capas sociales persiguen, a partir de la crisis capitalista de comienzos de la década de los treinta, no caer en la proletarización. Por el contrario, buscan escalar posiciones hacia la burguesía, utilizando para eso la educación, como medio de movilidad social, disputando ascensos en la economía, la política, la administración pública y las empresas. Su posición en la política adquirió un nuevo signo. Fernando E. Cardoso y Enzo Faletto sostienen que:

> El retorno de la clase media urbana a la administración del Estado adquirió entonces, otro signo; para asegurarse el poder es necesario crearse una base económica y el Estado puede ser la palanca de una economía industrial que administre la clase media, y también el medio de asociarse a la burguesía mercantil financiera, pero ahora no ya como fuerza electoral, sino también como floreciente burguesía.[6]

Este proceso presenta una doble fase, en la que se invierten las posiciones. En la primera, los sectores medios adoptaron posiciones izquierdistas, a través de los partidos populares que, con su participación, legitimaron los marcos institucionales del Estado burgués, democrático representativo. En la segunda, cuando ya habían conquistado posiciones de poder, abandonaron sus críticas al capitalismo y se convirtieron en defensores de este sistema. Tal metamorfosis política fue ostensible en Chile en la experiencia del Frente Popular, a través del Partido Radical, y en el período siguiente, la Nueva Frontera Burguesa, en el comportamiento del Partido Demócrata Cristiano. Esta relación dialéctica fue posible en nuestro país por la capacidad alcanzada por el sistema para asimilarlos, tanto desde el punto de vista productivo como institucional. En la década de los setenta, la mayor parte de estos sectores medios apoyaron el golpe militar y la dictadura, con todos sus crímenes y rapacidades, enriqueciéndose a través de las privatizaciones, conjuntamente con la burguesía financiera, o asumiendo la gerencia de algunos negocios de ésta.

[6] F. H. Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI Editores, decimoquinta edición, México, 1979.

Evolución del socialismo en el mundo

En la década de los años treinta, cuando se fundó y dio sus primeros pasos el Partido Socialista de Chile, el movimiento de este signo ideológico desarrollado en el mundo bajo la inspiración de Marx se encontraba dividido en dos grandes sectores: la socialdemocracia y el comunismo. Ambos ejercían el gobierno en algunos países. La primera integraba gobiernos constitucionales en tres países esc andinavos y el segundo ejercía el poder absoluto en la Unión Soviética. Ambos también habían sido aplastados en Italia, Alemania y España (después de la guerra civil de 1936-1939) y, en general, en los estados de Europa oriental por sistemas fascistas. La social-democracia y el comunismo existían como fuerzas importantes en Francia, Bélgica, Holanda, Suiza e Inglaterra, aunque en este último país el comunismo no creció. En Estados Unidos, el socialismo no logró constituirse en una fuerza significativa, menos aun el comunismo, aunque el movimiento sindical tuvo un gran desarrollo con la política de Nuevo Trato impulsada por el presidente Franklin I). Roosevelt. Este movimiento sindical se regía por los valores y principios de la socialdemocracia europea, por lo que exigía las mismas demandas sociales.

La perspectiva en el resto del mundo era similar. En Australia y Nueva Zelandia habían triunfado gobiernos laboristas; en la India había surgido el Partido Socialista al interior del Partido del Congreso; en Japón, el militarismo nacionalista había apagado el socialismo emergente, y en China, todavía bajo el dominio del Kuomintang y de Chiang Kai Shek, existían corrientes socialistas y comunistas, estas últimas lideradas por Mao Tse-Tung. Las posibilidades del socialismo no eran alentadoras en el mundo, toda vez que el comunismo soviético se cor centraba en construir el socialismo en un solo país y promovía los "frentes populares" en los demás países para proteger a la URSS de la agresión fascista. La socialdemocracia, a su vez, si bien en algunas naciones había arribado a gobiernos constitucionales, estaba lejos de impulsar objetivos socialistas.

En el caso de América Latina, el comunismo se había afianzado en casi todos los países de esta región como una minoría activa, si bien no lograba una gran significación, en tanto que la socialdemocracia no representaba en ninguno de aquéllos una fuerza política decisiva. No obstante, los partidos socialistas fundados en décadas anteriores, como los de Argentina y Uruguay, y otros surgidos más recientemente en Perú y Ecuador, mantenían su presencia en el escenario político. En Chile a comienzos de los años treinta emergió potente y vigoroso el Partido Socialista, disputando con el Partido Comunista la conducción del movimiento obrero, y proyectando su influencia en el continente. Este nuevo partido nació rechazando tanto

a la socialdemocracia como al comunismo, con una declarada posición de autonomía, en el marco del marxismo no dogmático.

No obstante, desde el punto de vista teórico, la socialdemocracia y el comunismo reconocían entonces un origen común: el marxismo. Hacían excepción en algunos países como Inglaterra, donde la teoría marxista pesaba poco. Además, es necesario señalar que a pesar de la similitud anterior, sus interpretaciones teóricas eran diferentes:

> Ambas escuelas —manifiesta GD.H.Cole— expresaban su creencia en las teorías marxistas del valor y la plusvalía, y coincidían al sostener que las clases propietarias explotaban al proletariado comprando la mercancía, fuerza de trabajo, a menos precio que el valor de su producto. Ambos creían en una interpretación económica de la historia, que ofrecía al proletariado la perspectiva de convertirse en la clase dominante de la sociedad y de utilizar su fuerza para suprimirse a sí mismo y a las demás clases, en la futura sociedad sin clases.[7]

La socialdemocracia y el comunismo sostenían además la superación del capitalismo por el socialismo, como único medio de suprimir la explotación del hombre por el hombre y de producir para satisfacer las necesidades sociales y no para el lucro individual.

Por sobre esas coincidencias, ambos movimientos presentaban diferencias notables. Los comunistas sostenían la necesidad de la revolución y la dictadura del proletariado en un Estado que terminaría por desaparecer, sustituyendo el gobierno de los hombres por la administración de las cosas. Los socialdemócratas, en cambio, preconizaban la transformación gradual del Estado existente, en un instrumento democrático para la construcción del socialismo. Los sistemas respectivos se proclamaban en países con distinta evolución política: Los primeros surgieron en países donde no existía la democracia representativa, por lo cual eran las clases revolucionarias las que asumían el poder, y los últimos, en cambio, se daban en países donde existía el sufragio universal y, por lo tanto, proclamaban la democracia política y el gobierno de la mayoría como bases para el socialismo. Este es un tema que se continuó discutiendo durante mucho tiempo, a través de las interpretaciones contrapuestas de la opinión de Marx, quien sólo "había contrastado la dictadura del proletariado con la de la burguesía, en el sentido de propugnar por el gobierno de la

[7] G. D. H. Cole, *Historia del pensamiento socialista,* págs. 269 y 270.

mayoría contra el de una minoría".[8] El proletariado, en un sentido amplio, constituía entonces la gran mayoría, obreros y campesinos, ambos explotados, situación que cambió en tiempos más recientes, con la evolución de la economía (crecimiento del sector servicios).

Las diferencias entre socialdemócratas y comunistas atraviesan el problema del imperialismo y del colonialismo. La socialdemocracia propugnaba, en general, ofrecer un mejor trato a los pueblos nativos, sujetos a la dominación de las grandes potencias coloniales, a la vez que promover instituciones de gradual autogobierno orientadas a la plena autonomía interna. Por su parte, el comunismo fomentaba la rebelión de los pueblos coloniales para obtener su independencia completa. Ambos movimientos tenían dificultades para definir una política clara para cada área geográfica y cada país, por su distinto grado de desarrollo y posición en el mundo. La situación de los países escandinavos e Inglaterra era diferente a la del imperio de Rusia al término de la Primera Guerra Mundial, en cuanto a conciencia democrática. Entre ambos extremos se ubicaban los demás países, tales como Alemania, Francia, Italia, etcétera, con lo que se configuraba un cuadro en el cual no podía aplicarse un solo camino, sino considerar las distintas opciones.

Entre las dos guerras mundiales, el acontecimiento más importante en la lucha por el socialismo fue el nacimiento y desarrollo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Este proceso contradijo, en alguna medica, las condiciones predichas por el marxismo, en un inmenso imperio multinacional, con un grado de desarrollo cultural, económico, social y político desigual entre las naciones que lo configuraban. Debido a la incapacidad del movimiento comunista de expandir la revolución hacia otros países más desarrollados como Alemania, o siquiera a países limítrofes como Polonia y Finlandia, la URSS tuvo que intentar la construcción del socialismo en un solo país, convirtiéndose en la "patria" del proletariado. Esta lucha se desarrolló, además, en un medio hostil que significó además de la guerra civil, la intervención militar de Estados Unidos y de Europa. Con todo, la Revolución rusa se proyectó como el nuevo mundo soñado por gran parte del proletariado internacional, a cuya decidida defensa se dedicaron los partidos comunistas, agrupados en la Tercera Internacional.

El punto de partida de este proceso histórico fue a todas luces c ontradictorio. Por una parte, la Revolución rusa se consolidó, derrotando a los ejércitos blancos y tropas de intervención extranjeras, pero, por otra, los movimientos revolucionarios fracasaron en el resto de Europa, como en los casos de la República de los Consejos

[8] *ídem.*

en Baviera, el gobierno de Bela Kun en Budapest y de los espartaquistas de Berlín, donde fueron asesinados Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht:

> En cualquier caso, el hecho está ahí: en todos los países industrializados de Europa occidental y central, la estructura capitalista de la sociedad se restablece sobre bases sólidas, aunque sí se habían visto obligados a democratizar sus sistemas de dominación política, y el movimiento obrero había obtenido importantes concesiones en materia de política social. En definitiva, la revolución socialista europea prevista por Lenin no se había producido.[9]

No obstante, surgieron los partidos comunistas en los países europeos y se extendieron en América Latina y también, en menor medida, en Estados Unidos, así como en los demás continentes.

Después de la muerte de Lenin, en 1924, la Tercera Internacional, bajo la manipulación de Stalin, utilizó a los partidos comunistas de todo el mundo como instrumentos de la política exterior rusa, de acuerdo a cambiantes consignas que van desde el "frente único proletario", de 1921, hasta el "frente popular contra el fascismo", de 1934, que correspondían a su vez a las diversas etapas de la política interior de la URSS. La férrea dictadura impuesta por Stalin eliminó mediante purgas sangrientas a todos los elementos disidentes, rodando las cabezas de los viejos bolcheviques, acusados de "oportunistas" (desviación de derecha) y "sectarios" (desviación de izquierda). De este modo se impusieron la burocracia, el culto a la personalidad, el mito de la infabilidad de la Unión Soviética y del genio indiscutible del dictador. El nuevo aparato de poder, ajeno al proletariado, suprimió toda forma de democratización e impuso una dirección central de la economía, con una rígida disciplina. Este proceso de descomposición de la Revolución de Octubre desencadenó la crítica tanto en el movimiento obrero como entre los intelectuales de Rusia y de todo el mundo, destacando León Trotsky, quien fundó la Cuarta Internacional y fue asesinado en México en 1940 por un agente de Stalin.

El movimiento socialista, que se mantuvo fiel a la tradición socialdemócrata, continuó su marcha, con avances por demás moderados, asumiendo el gobierno en algunos países. En Escandinavia, en los comienzos de los años treinta; en Inglaterra dos veces (1924 y 1929); en Alemania (República de Weimar, 1928-1931). Pero en ninguno de estos países se realizó avance alguno hacia el socialismo, convencidos como estaban de que la evolución del capitalismo conduciría al socialismo.

[9] Jacques Droz y otros, *Historia general del socialismo, de 1818 a 1945,* España, Ediciones Destino, 1985, págs. 14 y 15.

> El más eminente teórico socialista de la época de entreguerras, el austríaco Otto Bauer, consideraba que la revolución podía desarrollarse a partir de una socialización gradual de los medios de produccción, transformando insensiblemente la propiedad privada en propiedad regida por el Estado, y no aceptando el uso de la violencia más que como instrumento defensivo en el caso de que la burguesía atacase las libertades obreras.[10]

Los socialistas, al igual que los comunistas, no entendieron entonces el fascismo y por lo tanto no formularon oportunamente una política eficaz para enfrentarlo, primero en Italia (1922) y después en Alemania (1933).

El Frente Popular se abrió paso en 1936 en Francia y España., con distintos resultados. En el primero de estos países, después de un triunfo electoral, se constituyó el gobierno presidido por León Blum e integrado por socialistas, comunistas y radicales. Sus logros sociales fueron significativos, como la ley de las cuarenta horas, las vacaciones anuales pagadas, los convenios colectivos, etcétera. En España no fructificó porque la victoria electoral conquistada en aquel año y el gobierno presidido por Manuel Azaña fueron aplastados por el levantamiento militar de Francisco Franco, apoyado por el fascismo (gobiernos de Hitler, en Alemania y de Mussolini en Italia). El Frente Popular de Francia se dividió en cu;mto a su posición respecto a la guerra civil en España. Los comunistas y algunos socialistas eran partidarios de dar apoyo en armas, en tanto que Blum impuso la política de no intervención, presionado por el gobierno conservador de Inglaterra. Los estados fascistas, en cambio, actuaron abiertamente en la guerra civil, apoyando con armas y tropas a Franco.[11] La República sucumbió en 1939, después de tres años de lucha, con el solo apoyo de la Unión Soviética.

La Segunda Guerra Mundial

En ese mismo año se desencadenó la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), después de la celebración del pacto nazi-soviético entre Hitler y Stalin. Ella precipitó efectos revolucionarios, al igual que lo había hecho la Primera Guerra Mundial, que trajo consigo la Revolución rusa y el desmoronamiento de los imperios alemán y austro-húngaro, con convulsiones sociales en todo el mundo. La nueva conflagración desencadenó, a su vez, la revolución en un país de más de 1 300 millones de habitantes, como es China, y el derrumbe del colonialismo, con la independencia

[10] *Ibidem*, pág. 21.
[11] *Idem.*

de grandes países como la India. Este último país se dividió en una parte que asumió el nombre de India y Pakistán. La Segunda Guerra Mundial influyó además en la correlación de fuerzas entre el socialismo (socialdemocracia) y el comunismo. Éste último superó el rechazo en su contra, por su política oportunista respecto al fascismo, en virtud de su acción en la resistencia en la Europa dominada por los ejércitos de Hitler.

Al debilitamiento de las clases dominantes se impuso la voluntad de cambio de los conductores políticos en todas las naciones. Este espíritu repercutió en el seno del movimiento socialista, con la reconciliación de sus sectores contrapuestos, y en el comunismo, con el retorno a los métodos legales y pacíficos. En Alemania, desde los escombros de la derrota del nazismo, surgió la voluntad popular de reconstruir el Partido Socialdemocrata. En Francia, los socialistas y comunistas se unieron en torno al programa elaborado en la Resistencia, que por cierto no era revolucionario. En Italia sucedió lo mismo, con la unión de ambos partidos. Quizás fue en Inglaterra donde se produjo el mayor avance, al derrotar los laboristas a Churchill, con un programa de nacionalizaciones en la economía y de seguridad social.

En Europa oriental, bajo el peso del ejército soviético de ocupación, los comunistas, por intermedio de "frentes nacionales", asumieron el poder, estableciendo regímenes de apariencia democrática. En los años 1945 y 1946, estos gobiernos realizaron una obra de reconstrucción nacional. No obstante, Kurt Schumacher reorganizó el Partido Socialdemocrata en la zona ocupada por Inglaterra y se opuso a la fusión con el Partido Comunista alemán. Esta fusión sólo se logró en la zona ocupada por la Unión Soviética. Schumacher, como presidente del Partido Socialdemocrata, mantuvo su adhesión al marxismo y sostuvo la democratización de la sociedad y el Estado. Este partido superó al comunismo en las primeras elecciones en la zona occidental, terminando por hacerlo desaparecer en el escenario electoral. En Francia, el Partido Socialista, presidido por León Blum, se opuso también a la alianza con los comunistas, hasta que lo sustituyó Guy Mollet, quien sostenía posiciones más avanzadas.

En los últimos años de la década de los cuarenta, los comunistas fueron desplazados de los gobiernos de coalición constituidos después del fin de la guerra en Francia e Italia. Estos sucesos estaban condicionados por la política excluyente de Estados Unidos, la que se acentuó desde 1947, con el Plan Marshall. Este es el punto de partida de la Guerra Fría, que se definió en septiembre de dicho año, en la Conferencia de los Partidos Comunistas celebrada en Polonia. Allí se distinguió la existencia de dos campos y se creó la Kominform para coordinar las actividades de los partidos comunistas. La Guerra Fría influyó en el movimiento social de Eu-

ropa occidental y, en general, en todos los países capitalistas. Del freno de las luchas obreras, se pasó a la movilización tras sus demandas sociales. En los países dominados por los comunistas, se socializaron los medios de producción y se estalinizó el sistema político.

La Kominform condenó, en 1948, a Yugoeslavia, conducida por el mariscal Tito, bloqueando a este país a través de las "democracias populares", pero no se atrevió a promover una intervención militar. En 1949, Mao y el ejército popular chino derrotaron a Chiang Kai Shek, quien se refugió en Formosa bajo la protección estadounidense. La República Popular China, fundada entonces, mantuvo cordiales relaciones con la URSS durante varios años. En 1950, se produjo en Corea la guerra del norte contra el sur. El primero, comunista, era apoyado por el campo de esta ideología, y el segundo, capitalista, sostenido por Estados Unidos. Las tropas estadounidenses, comandadas por el general McArthur, fueron detenidas por el ejército de Corea del Norte, reforzado por "voluntarios" chinos. McArthur, que pretendió bombardear a China, fue reemplazado por el general Ridgway, iniciándose conversaciones de paz en 1951. El avance comunista en el extremo oriente fue más significativo aún con la victoria de Vietnam sobre los franceses en 1954, en Diem Bien Fu. No obstante, Estados Unidos impuso al campo comunista el cambio de la lucha revolucionaria por la coexistencia pacífica.

En la década de los cincuenta, Stalin dejó como herencia positiva, luego de su muerte en 1953, a la Unión Soviética convertida en una gran potencia. Por una parte, una industria pesada y un desarrollo atómico y espacial importantes, pero la industria ligera y la agricultura estaban atrasadas en comparación con los países capitalistas desarrollados. Por otra parte, la educación y la cultura habían experimentado un considerable desarrollo. Todo ello poco tenía que ver con la edificación del socialismo. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la destrucción material y la muerte de millones de soviéticos, permitió a la dictadura de Stalin mantener el sistema represivo, ya no sólo en la URSS sino también en las llamadas "democracias populares", es decir, los países satélites, donde fueron ejecutados numerosos dirigentes comunistas (Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania y otros países).

Generación del Sistema Interamericano

Es en este período que el imperialismo estadounidense hace sentir con mayor fuerza su acción en América Latina. Para entender este proceso, es necesario analizar el

nacimiento y desarrollo del Sistema Interamericano. La vida económica y política de los países de esta región estuvo marcada durante el siglo xx por la hegemonía estadounidense, a través de dos de sus tenazas de dominación. La primera, promovió las dictaduras militares, que hicieron tabla rasa de los derechos humanos, y la segunda garantizó a las empresas estadounidenses el usufructo de las riquezas naturales y de la explotación del trabajo humano. Todo esto será analizado en este libro, por lo que ahora es el momento de mencionar a los aparatos y agentes que unen ambas tenazas, utilizadas para apropiarse de los beneficios económicos (a través de utilidades excesivas) y para aplastar a los pueblos mediante la explotación y la represión. La Segunda Guerra Mundial constituyó la línea divisoria de aguas en la relación de los países latinoamericanos con Estados Unidos. La situación semi-colonial preexistente, que constituía un sometimiento de hecho, tiende a institucionalizarse en formas jurídicas, condicionadas por bases políticas e ideológicas. En este proceso, las Fuerzas Armadas fueron utilizadas por el poder imperial como instrumento de sus designios, por lo que el Partido Socialista de Chile formuló una crítica constante al Sistema Interamericano, a lo menos hasta comienzos de la década de los ochenta.

Estados Unidos desarrolló un enorme poderío militar durante la Segunda Guerra Mundial, y con posterioridad a ella, así como también alcanzó el predominio incontrarrestable de su economía en el mundo occidental. Esta posición lo convirtió a fines del siglo xx en el centro dominante del sistema capitalista mundial. En el período comprendido entre 1938, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y 1942, a dos años del término de este conflicto, se generó el llamado Sistema Interamericano. Raúl Ampuero hizo un resumen de los pasos principales en este proceso, correspondientes a las conferencias panamericanas. En 1938 (en Lima) se declaró que "los pueblos de América han alcanzado la unidad espiritual, fundada en principios republicanos, en sentimientos de humanidad y tolerancia, y en el respeto de la soberanía de los estados y de las libertades individuales". En 1939 (en Panamá) se adoptó una resolución para extirpar en las Américas "la propaganda de las doctrinas que tiendan a poner en peligro el común ideal democrático interamericano", ambiguamente orientada a combatir la difusión de las ideas nazis, y se emitió una solemne declaración colectiva de neutralidad ante el conflicto hasta entonces puramente europeo, definiéndose una zona de seguridad en torno al continente. Los estados que suscribieron el acuerdo se comprometen a "conservar sus aguas libres de todo acto hostil de parte de cualquier nación beligerante no americana".

Poco después, en 1940 (en La Habana) se declaró que "todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la so-

beranía o independencia política de un Estado americano, será considerado como un acto de agresión contra los estados que firmaron esta declaración". En 1942 (en Río de Janeiro), semanas después del ataque japonés a Pearl Harbor, los Estados Unidos lograron que se recomendara la ruptura de relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, "por haber el primero de esos estados agredido, y los otros dos, declarado la guerra a un país americano", y asimismo, que se adoptaran medidas legislativas "tendientes a prevenir penalmente actos contra las instituciones democráticas de los estados del continente", que se aprobaran diversas mociones para reforzar el esfuerzo bélico de los Estados Unidos, y, finalmente, que se convocara de inmediato a una reunión de técnicos navales o militares de cada país, en Washington, con la finalidad de "estudiar y sugerir a éstos (los gobiernos) las medidas necesarias a la defensa del continente".[12] Nace así la Junta Interamericana de Defensa, manipulada por el gobierno de Estados Unidos.

Después del término de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría, en agosto de 1947, se aprobó en Río de Janeiro el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), sobre cuya base jurídica se estableció la dependencia militar latinoamericana, instrumento en que se basan la ideología y la doctrina estratégica de sus Fuerzas Armadas:

> Los conceptos de seguridad colectiva y de la unidad de intereses de los países del Nuevo Mundo sirven para justificar la solidaridad incondicional de los firmantes con el Estado americano hipotéticamente agredido por una potencia de altramar, lo que obviamente significa hacer de las naciones latinoamericanas, aliados subalternos de los Estados Unidos, único país del área con intereses políticos de proyección mundial. Desde entonces, los enemigos de Estados Unidos son, sin alternativa, enemigos también de cada una de las naciones latinoamericanas.[13]

Éste es el segundo paso en el sometimiento jurídico al imperialismo.

La línea internacional 1930-1950

En este cuadro de la realidad objetiva del socialismo en el munc.o, se configuraron las raíces históricas de lo que sería la política internacional del Partido Socialista de Chile, la que se rigió por tres elementos fundamentales. El primero es la autonomía

[12] Raúl Ampuero, *La contrarrevolución militar en América Latina,* Milanc, La Pietra, 1976.
[13] *ídem.*

en la elaboración de su estrategia en el ámbito interno y externo y en la definición de sus relaciones con otros partidos, tanto de Chile como del mundo. El segundo es la reafirmación del internacionalismo, y, dentro de este concepto, de la unión de los pueblos latinoamericanos, orientada a la integración democrática del movimiento revolucionario mundial. El tercero es el antiimperialismo militante, que supone la denuncia de la penetración y dominio del capitalismo extranjero en la economía y la política del país, así como la lucha por la independencia nacional, basada en los principios de autodeterminación y no intervención.

De acuerdo a esos principios, conviene remarcar la permanente relación entre los brazos abiertos de sus luchas nacionales e internacionales y sus respectivas alianzas:

> En esta perspectiva, las raíces históricas de la política internacional del partido tienden a definir una clara intención de articular su línea política nacional con su acción latinoamericana y mundial y, además, un respeto por las decisiones democráticas tomadas en el seno de su política de alianzas, sea en las coaliciones en que participa o, más tarde, en los gobiernos de los que forma parte. El factor nacional y latinoamericano, la autonomía e independencia en la elaboración de sus políticas y el ejercicio democrático en la toma de decisiones, conforman un estilo propio de hacer política internacional, alejado de los "seguidismos" de los centros, las internacionales o partidos-guías, así como la opción asumida por reacción que da forma a la acción alternativa frente a las políticas de aliados o adversarios y los pragmatismos típicos de "gran partido" o potencia dominante.[14]

Ningún otro partido político ha tenido una orientación tan diáfana en Chile.

En el comienzo del análisis de la política internacional del socialismo chileno, conviene destacar su conciencia latinoamericana. En efecto, el Partido Socialista se ha singularizado siempre por su posición latinoamericanista, dentro de la concepción del internacionalismo revolucionario. En este sentido, ya en su Declaración de Principios de 1933, estableció:

> La doctrina socialista es de carácter internacional y exige una acción solidaria y coordinada de los trabajadores del mundo. Para iniciar la realización de este postulado, el Partido Socialista propugnará la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica, para llegar a la Federación de Repúblicas Socialistas del Continente y la creación de una economía antiimperialista.

[14] Jaime Ahumada, *Pensamiento y acción en la política internacional del Partido Socialista,* Santiago, 1987.

Dicho postulado tuvo su origen en la lucha por la independencia de España en el siglo xix, y fue formulado de manera explícita por el libertador Simón Bolívar.

Esta conciencia latinoamericana pasó a constituir una constante en la historia del partido, desde su primer congreso ordinario, de octubre de 1933, al vigésimo tercer congreso ordinario de enero de 1971, así como desde la República Socialista de Grove al Gobierno Popular de Salvador Allende. Su punto de partida se encuentra en el Programa de Acción Inmediata aprobado en su primer congreso, donde se reafirmó la unidad latinoamericana y la política antiimperialista, se condenó el panamericanismo y se echaron las bases de su autonomía al declararse independiente de la segunda y tercera internacionales. Partiendo del fracaso de las consignas impuestas durante mucho tiempo desde el exterior, a través de los centros de orientación política, el partido puso especial énfasis en la propia realidad chilena y latinoamericana. Ella tiene, como señalara el sexto congreso general, problemas que le son propios, como la lucha contra el latifundio y el imperialismo, el desarrollo de sus fuerzas económicas. Por lo mismo, necesita resolverlos a través de un proceso revolucionario de carácter continental, que a su vez exige como condición indispensable la unidad de los trabajadores y de los partidos que los representan. Esta continentalización de la lucha si bien requiere una estrategia común, supone el empleo de diversas tácticas.

En el congreso señalado, se planteó la necesidad de unir a los trabajadores latinoamericanos y de concertar la coordinación de los partidos socialistas y las organizaciones políticas afines del continente, generando una nueva agrupación internacional, que diera paso a su vez a la unidad mundial de los trabajadores. El programa de acción de esta nueva organización latinoamericana comprendía la lucha contra el fascismo, para implementar la cual se proponía una conferencia de partidos socialistas y afines. Desde entonces, el Partido Socialista sostuvo ciertos principios inalienables, en los cuales descansaba su autonomía política. Su posición antiimperialista se relacionó con el principio de la libre determinación de los pueblos coloniales y semi-coloniales, y el de igualdad y libertad que deben regir las relaciones entre las naciones, sean éstas grandes o pequeñas.

En este marco doctrinario, el Partido Socialista convocó al primer congreso de partidos democráticos y populares de América Latina, para examinar la situación de este continente en relación con la Segunda Guerra Mundial. Este evento se realizó en Santiago entre los días 3 y 8 de octubre de 1940. Abordó materias de tanta importancia como las repercusiones políticas y económicas de la guerra en nuestro continente, la expansión totalitaria y la soberanía de esta área; la coordinación de las fuerzas populares hacia una política unitaria permanente para la defensa de los

valores democráticos, y las relaciones equilibradas de América Latina con Estados Unidos. Este congreso cumplió sus objetivos, ya que condenó al fascismo y a todas las fuerzas totalitarias, dio su apoyo a los países democráticos en la guerra contra el fascismo y propuso la creación de una Confederación Latinoamericana de Partidos Democráticos y Populares. El congreso expresó "el ferviente anhelo de los partidos democráticos y populares de América Latina, de origen y raigambre nacional, de constituir una organización que los vincule permanentemente para intercambiar informaciones, uniformar ideas y propugnar una acción común".[15]

En este mismo período, el Partido Socialista se retiró del Frente Popular, por las profundas discrepancias que tenía con el Partido Comunista, agudizadas con el apoyo de esta fuerza política al pacto celebrado entre Hitler y Stalin. En realidad, el Frente Popular se había roto antes, cuando la Unión Soviética y sus agentes políticos destruyeron la alianza antifascista con su nueva alianza con el propio fascismo. No obstante, Oscar Schnake, el líder socialista, desahució la combinación de partidos con un discurso pronunciado el 15 de diciembre de 1940, en el que acusó a los comunistas de traición a la izquierda. Poco más tarde, el séptimo congreso general ordinario, celebrado en junio de 1941, volvió a reafirmar su decisión de promover la unidad latinoamericana, de acuerdo a sus tradiciones históricas comunes y de la lucha por ofrecer a Chile una política internacional antifascista y antiimperialista. En el terreno económico expresó que la coordinación de los países latinoamericanos era urgente, para obtener un mayor intercambio y consumo de sus propias producciones y condiciones justas, dignas y favorables en el intercambio y cooperación financiera interamericanas. El Partido Socialista continuó así la lucha por la integración regional.

De acuerdo a esta orientación, el congreso recomendó la celebración de una conferencia económica de los gobiernos latinoamericanos. Esta iniciativa ya había sido adoptada por el gobierno de Chile, sin despertar el interés de los demás países del continente. Reiterando principios consagrados anteriormente, declaró también que:

> los países latinoamericanos deben defender con toda energía su independencia política y soberanía económica de toda agresión o predominio imperialista de las grandes potencias. Las relaciones de nuestro país con los gobiernos extranjeros deben mantenerse en un pie de absoluta igualdad, dignidad y soberanía.[16]

[15] Julio C. Jobet, *Historia del Partido Socialista de Chile,* Santiago, Ediciones Documentas, 1987, pág. 144.

[16] *Ibidem,* pág. 152.

En el octavo congreso general, realizado en marzo de 1942, se reafirmó dicha posición. La persistente campaña por forjar una conciencia latinoamericanista, en la que destacó el socialismo chileno, ha influido en el desarrollo de un embrionario sistema latinoamericano de naciones. Se trata de unir a países hermanos, con intereses económicos comunes, para configurar una correlación de fuerzas más favorable en el intercambio con Estados Unidos y demás naciones desarrolladas, así como buscar la complementación de sus mercados regionales. Son múltiples las iniciativas puestas en marcha en los últimos años, desde la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC) al Sistema Económico Latinoamericano (SELA), pasando por el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino.[17]

En el séptimo congreso general, se aprobó una resolución orientada a promover una acción democrática y la unión de los países latinoamericanos para afrontar los efectos perjudiciales de la guerra y del imperialismo. Tal propósito no tuvo una respuesta condigna, debido a la dependencia de los gobiernos de dichos países de Estados Unidos. Como otras iniciativas del mismo carácter, ésta se perdió en la indiferencia y la irresponsabilidad históricas de las burguesías internas. El Partido Socialista volvió a referirse a la situación internacional en su cuarto congreso general extraordinario, celebrado en agosto de 1943. En esa oportunidad, teniendo en cuenta la proximidad del término de la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de las naciones unidas, se anticipó a plantear la necesidad de que los pueblos americanos organizaran una convivencia de posguerra, basada en principios de verdadera solidaridad y justicia social. El Partido Socialista sostuvo que, sil perjuicio de adherir a la Carta del Atlántico, Chile debía luchar por la elaboración y vigencia de una Carta de América, que estableciera los siguientes objetivos fundamentales: unidad continental y cooperación entre las Américas, de continente a continente; estructura, coordinación y planificación de la economía interameric ana; democratización total de los gobiernos americanos; defensa de los derechos inalienables de las clases trabajadoras del continente, tanto en lo económico-social como en lo político. Estos principios, formulados en plena Guerra Mundial, todavía tienen vigencia al finalizar el siglo xx.

Posición ante el conflicto mundial

Durante aquellos años, Chile se asomó a un escenario internacional en que sucedieron concatenados numerosos acontecimientos de la más elevada importancia

[17] En la década de los noventa, habría que agregar la del MERCOSUR, que comprende a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

histórica. De 1939 a 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Durante ella se registró la celebración del pacto nazi-soviético (entre Alemania y la Unión Soviética), la caída de gran parte de Europa bajo la férula de Hitler, la sorpresiva invasión de Alemania a la Unión Soviética, el ataque de Japón a Pearl Harbour, la incorporación de Estados Unidos a la Guerra y la derrota final del eje Berlín-Roma-Tokio. En esta forma, por segunda vez en el siglo xx, Alemania era derrotada por el mundo coaligado en un frente común. Todos estos hechos generaron una compleja problemática que tuvo influencia decisiva en la política internacional de Chile. Asimismo, ellos gravitaron en las relaciones socialista-comunista, debido a la línea del Partido Comunista, supeditada a las exigencias del centro directivo radicado en la Unión Soviética. El Partido Socialista adoptó una posición antiimperialista desde su fundación y tempranamente enfrentó la lucha contra el fascismo, que se había iniciado en Chile con el Movimiento Nacional Socialista dirigido por Jorge González von Marees.

La nueva ordenación de las fuerzas beligerantes en 1941, con la alianza entre Gran Bretaña, Francia (del general Charles de Gaulle), Estados Unidos y la Unión Soviética, colocó en desventaja a las potencias del Eje, así como determinó un nuevo viraje en los partidos comunistas de todo el mundo. En menos de dos décadas, estos partidos pasaron sucesivamente del ultraizquierdismo a los frentes populares, al apoyo del pacto nazi-soviético y a la unidad nacional contra el fascismo, para culminar con la disolución de la Tercera Internacional por Stalin, sin consulta a ninguno de los partidos integrantes. Todos estos virajes se justificaron exclusivamente por los intereses del Estado soviético. En política internacional, las líneas preconizadas por socialistas y comunistas en Chile fueron por lo general divergentes en materias esenciales. La más violenta ruptura entre ambos partidos se produjo precisamente a raíz del pacto de no agresión celebrado por la Unión Soviética y la Alemania nacista el 22 de agosto de 1939. No podía ser de otro modo si se considera que con este acto el Estado soviético echaba por tierra la política defensiva de frente popular promovida por los comunistas en nuestro país hacía apenas un año, no sin la resistencia del naciente Partido Socialista. Dicho pacto contenía un protocolo secreto por el cual ambos convenían el reparto de Europa oriental, el norte de Hungría y los Balcanes.

De este modo quedó sellado el destino de Polonia y se aseguró la retaguardia de Alemania, la que inició la guerra apenas ocho días después de suscrito el tratado. Mientras los ejércitos de Hitler ocupaban Polonia, los de Stalin avanzaban hasta la línea demarcatoria designada en el pacto, extendiendo sus fronteras hacia el occidente. Pero el pacto nazi-soviético fue aun más fructífero para Rusia. Aprovechándose del avance victorioso de los alemanes en Europa occidental, Stalin obligó a los

países del Báltico —Estonia, Letonia y Lituania— a convertirse en repúblicas de la URSS, se apoderó de la Besarabia y otros territorios de Rumania y trató, en una guerra infructuosa, de hacer otro tanto con Finlandia. Este último conflicto terminó en un tratado de convivencia pacífica.

Ante este abierto oportunismo de la Unión Soviética, el Partido Socialista formuló el 20 de septiembre de 1939 la siguiente declaración:

> ...Condena la provocación sangrienta del fascismo hitlerista al invadir Polonia, pues dicha política sienta el principio brutal de que las potencias imperialistas pueden apoderarse de los países más débiles, con el solo atributo de la fuerza. Repudia el pacto nazi-soviético y denuncia la actitud de Stalin como una traición a la política internacional de defensa de los países democráticos en la lucha contra el iascismo. Condena la política de reparto de los países adoptada por las potencias imperialistas y reafirma el principio de la libre determinación de los pueblos. Condena, por lo tanto, el reparto de Polonia, verificado de común acuerdo entre Hitler y Stalin. Reafirma su posición de enérgica lucha antifascista, tanto en el plano nacional como internacional. A este respecto, establece que la lucha antifascista debe ser entablada por todas las fuerzas socialistas y democráticas de América a fin de libertar a nuestro continente del peligro fascista. Reafirma su posición de lucha antiimperialista y señala la necesidad de coordinar la acción de todas las fuerzas socialistas y antiimperialistas de América, estableciendo como principio inamovible el de la plena soberanía económica y política de todos los pueblos, y el intercambio de las relaciones en un plano de perfecta igualdad.[18]

Esta es una posición clara de un partido nuevo, que entonces sólo tenía seis años de existencia.

El pacto nazi-soviético de agosto de 1939 demostró así que la prioridad de la Unión Soviética como "potencia tradicional" respecto a la Unión Soviética como "Estado socialista" se hizo indiscutible. Esta circunstancia destruyó a su vez la validez de la ecuación "defensa de la URSS = defensa del comunismo". Por otra parte, el pacto celebrado entre Hitler y Stalin, lejos de evitar la guerra en Europa, la desencadenó el 1° de septiembre del mismo año, pocos días después del acuerdo mencionado, con la invasión simultánea a Polonia por alemanes y rusos. Los gobiernos de Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania pero no a la Unión Soviética. Con esta potencia concertarían alianza una vez que fuera invadida por la Alemania hitlerista.

[18] *Ibidem,* págs. 133 y 134.

Desencadenada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Frente Popular, presidido por Pedro Aguirre Cerda, mantuvo la neutralidad de Chile. No obstante, el Partido Socialista planteó entonces la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje (Alemania, Italia y Japón). Muerto el presidente Aguirre en 1941, y ante las vacilaciones de su sucesor, Juan Antonio Ríos, el Partido Socialista presionó una y otra vez para que el gobierno chileno se alineara junto a las fuerzas antifascistas. El Partido Comunista apoyó esta posición sólo cuando Alemania invadió a la Unión Soviética, el 2 de junio de 1941. Por fin, el gobierno de Juan Antonio Ríos rompió las relaciones diplomáticas y comerciales con los países fascistas, en 1943, declarando además el estado de guerra con Japón.

El Partido Socialista rechazó igualmente la política de unidad nacional propuesta por los comunistas a partir de la extensión de la guerra a la Unión Soviética, así como la idealización hecha por éstos de la política estadounidense. En carta de su Comité Central al Partido Comunista, fechada el 1 de diciembre de 1943, analizó la política de "buena vecindad" del gobierno de los Estados Unidos y sus proyecciones en la posguerra:

> El reconocimiento de que la política de buena vecindad ha significado un evidente progreso con relación a la anterior política de Estados Unidos, no nos hace olvidar que en este país la influencia de los sectores plutocráticos es todavía demasiado grande; que el imperialismo de los círculos de Wall Street mantiene aún intactos sus apetitos; que él ha sido uno de los causantes de que no hayamos podido alcanzar en Chile el desarrollo industrial que nos es indispensable para subsistir y progresar. También nos asiste el temor de que al imperialismo de las grandes empresas vaya a suceder la opresión económica derivada de la política financiera que los estados económicamente más fuertes propugnan.[19]

El Partido Socialista mantuvo entonces su firme posición antiimperialista.

La disolución de la Tercera Internacional fue interpretada críticamente por el Partido Socialista. Éste consideró que dicha decisión suponía el reconocimiento de la validez de la autonomía sostenida desde su nacimiento, sin menoscabo de una política revolucionaria permanente, por lo que expresó su esperanza de que el Partido Comunista chileno y, en general, todo el comunismo mundial orientara sus luchas con mayor fidelidad a los intereses de sus propias clases trabajadoras y a los principios del internacionalismo revolucionario. Pero señaló también la desviación política crónica de su competidor en el movimiento obrero. "Mantenemos, pues, una firme lucha antiimperialista, en contraposición a los camaradas comunistas que han

[19] *Ibidem,* pág. 173.

pospuesto toda acción programática o popular ante la lucha antifascista". Esta carta fue firmada por Salvador Allende, como secretario general del Partido Socialista.

El Comité Central de este partido emitió entonces una declaración, a través de la cual expuso algunas orientaciones al respecto:

> 1º Que se complace en constatar la justeza de la posición del Partido Socialista al sostener que los partidos populares deben actuar conforme a sus propias directivas nacionales y a los intereses de sus respectivos países, sin perjuicio de la solidaridad que debe existir entre los pueblos y trabajadores del mundo. *2°* Que estima que este hecho refuerza las posibilidades de triunfo de las Naciones Unidas en su lucha contra el fascismo. 3º Que considera que, en esta forma, se facilita el entendimiento y la mayor unidad que son necesarias entre los partidos populares de Chile para destruir las fuerzas fascistas y para alcanzar la realización de las reivindicaciones económico-sociales *áz* las clases trabajadoras del país.[20]

Es la reafirmación, en suma, de su autonomía y de su firme posición revolucionaria.

El Partido Socialista hizo, en su octavo congreso general ordinario, realizado en marzo de 1942, un exhaustivo análisis de la situación internacional. La guerra ya se había extendido a todos los continentes, con la abierta participación de Estados Unidos y la Unión Soviética en el mismo frente. Su posición era igual a la de los congresos anteriores: democrática, antifascista, antiimperialista y revolucionaria. En su proyección inmediata, por una parte, ponía énfasis en la unidad latinoamericana como una forma de superar la debilidad de cada uno de estos países, principalmente productores de materias primas y supeditados a los intereses imperialistas. Por otra parte, propiciaba —ahora con mayor urgencia— la ruptura de relaciones con las potencias agresoras del eje fascista.

Las perspectivas de esta tesis eran clarividentes. En su visión internacional, el triunfo militar del fascismo, habría representado el aplastamiento definitivo, por todo un período histórico, del movimiento obrero y el retroceso social más espantoso. En cambio, la victoria de la nueva entente entre las democracias del capitalismo anglo-norteamericano y la Unión Soviética presentaba perspectivas más favorables para el progreso de la humanidad. Ante una Europa debilitada, se alzaría una Unión Soviética poderosa, que tendría que enfrentarse al imperialismo estadounidense. La tesis señalaba, sin embargo, las contradicciones que surgirían en el bloque victorioso,

[20] *Ibidem,* pág. 167.

las cuales contenían en su seno las perspectivas dialécticas de su desarrollo: la división del mundo en dos "campos" y dos "bloques", que desencadenaría la Guerra Fría durante 40 años.

No obstante las desviaciones del estalinismo, valorizaba la presencia y el papel de la Unión Soviética en el mundo de posguerra. Con razón, pues "pesa como factor decisivo en el desenvolvimiento de los futuros acontecimientos, la Rusia soviética que, a pesar de todos los retrocesos experimentados, es un aporte eficaz para el desarrollo de la revolución, debido al carácter social de su economía y de su organización política".[21] No debe perderse de vista al respecto que este partido, en una combinación de intuición y análisis crítico, siempre consideró a la Revolución de Octubre, más allá de la cruda condena de sus apostasías, como una revolución "inconclusa", en los términos que más tarde definiría Isaac Deutscher.

El Partido Socialista vio nítidamente también, entonces, la relevancia que adquirían los movimientos de liberación nacional. De la derrota del fascismo surgirían, en efecto, nuevas condiciones en la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos y la conquista de las reivindicaciones sociales, económicas y políticas de los trabajadores. Las apreciaciones de este congreso previeron, pues, el proceso de descolonización en Asia, África y América Latina, en el sentido anticipado por Lenin en la primera posguerra con sus tesis sobre la autonomía de los procesos revolucionarios en los países coloniales y semicoloniales. Estos procesos culminaron después del término de la Segunda Guerra Mundial, en el desmoronamiento del sistema colonial y el desarrollo del Estado de bienestar en los países más avanzados del mundo.

Este mismo partido percibió claramente los rasgos generales de la situación internacional surgida al término de la Segunda Guerra Mundial, los problemas y contradicciones, así como las articulaciones entre su política interna y externa. La muerte de 20 millones de seres humanos en la conflagración mundial no podía ser en vano. Raúl Ampuero expuso esta posición en el décimo primer congreso regional de Santiago, realizado en mayo de 1946, con una propuesta enfática: "Tal como lo previmos, la lucha de los trabajadores contra el fascismo en la guerra se ha transformado en el combate por el socialismo en la paz". Esta perspectiva de lucha está enmarcada en un cuadro que empieza por separar a las fuerzas victoriosas sobre el fascismo. Por un lado, el capitalismo que buscaba la perpetuación de un orden internacional en bancarrota y, por el otro, la Unión Soviética, que iniciaba su expansión mundial. Entre ambos poderes, el movimiento socialista y obrero proyecta una dimensión democrática de la revolución internacional.

[21] *Ibidem,* pág. 160.

Esta perspectiva de lucha socialista presentaba, por cierto, sus propias dificultades, que configurarían poco tiempo después la Guerra Fría. Ampuero lo señaló en 1946. Expresó entonces:

> No podemos ocultar, sin embargo, que se hace difícil trazar la estrategia de las tuerzas socialistas en este dramático instante. Colocadas como una cuña entre las aspiraciones de hegemonía de las potencias capitalistas vencedoras y los esfuerzos expansionistas de la Unión Soviética, se ven igualmente solicitadas por ambas tendencias. El capitalismo busca afanosamente la manera de hacer del socialismo una barrera *de* contención del comunismo y, a la vez, este último inicia una vigorosa política tendiente a colonizar el movimiento socialista, sumándolo a sus particulares pretensiones. No podemos permitir ni una ni otra cosa. Hay que buscar el camino que conduzca a los trabajadores a su propia liberación, sin compromisos con los defensores del viejo orden y sin caer en una concepción totalitaria del nuevo régimen, como lo propugnan y lo practican los comunistas.[22]

En ese momento de la historia del universo, el líder afirma que "si bien somos sólo una parte del movimiento socialista chileno y una fracción pequeña del socialismo mundial", es posible ofrecer esta contribución colectiva a a lucha común.

Definiciones políticas en la posguerra

El cambio en la orientación teórica y práctica del Partido Socialista, producido en el décimo primer congreso general ordinario de 1946, y en la primera y única conferencia nacional de programa de 1947, trajo consigo un desarrollo mayor de su política internacional. Este lapso cubre la década comprendida entre 1947 y 1957. Durante su curso, el partido tenía contacto permanente con todos los partidos y movimientos socialistas y revolucionarios de América Latina, los invitaba a sus congresos y apoyaba sus luchas contra las dictaduras militares y en favor de sus movimientos de liberación nacional y social. Desde la perspectiva latinoamericana, consideraba a su vez los acontecimientos del resto del mundo, que gravitaban en su estrategia revolucionaria.

El acontecimiento político que mayor repercusión tuvo en ese tiempo en el socialismo chileno fue la expulsión de Yugoslavia del Kominform, organismo de dirección de los partidos comunistas, que había sustituido al Komintern (Tercera Internacional). Esta ruptura se produjo el 28 de junio de 1948, esto es, en los días que

[22] Raúl Ampuero, "Informe ante el XI Congreso Regional de Santiago", mayo de 1946.

el socialismo chileno celebraba su décimo segundo congreso general ordinario, el cual sólo pudo tomar conocimiento de esta grave crisis, sin adoptar una posición definitiva. No obstante, poco después, estableció fraternales relaciones con la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, difundió la experiencia de este país en los medios obreros de Chile y la defendió en el plano internacional.

Este conflicto tuvo raíces más remotas. Sus orígenes se remontaban, en efecto, a la persistente acción del estalinismo, dirigida a supeditar los intereses de la revolución yugoslava a la extensión del poder soviético y la "defensa" de la URSS. Stalin trató en todo momento de mediatizar la revolución encabezada por Tito, pactando con Churchill la división de los Balcanes en 1944 e imponiendo, sin consulta con los comunistas de Yugoslavia, una coalición con la burguesía. Era la solución de la URSS para ese país. Pero el mariscal Tito y su partido, contrariando las decisiones del gobierno soviético, impulsaron una revolución autónoma que generó, como sucediera antes con la Revolución de Octubre y después con las revoluciones china, vietnamita y cubana, una gran tensión internacional, sin provocar una nueva guerra mundial como pronosticaban los soviéticos para justificar la entrega de Yugoslavia a las potencias occidentales. De este modo, la revolución socialista se impuso por encima de la camisa de fuerza de los acuerdos de Teherán y Yalta. Por eso, cuando Stalin rompió con Tito, el Partido Socialista de Chile brindó a éste su solidaridad revolucionaria. La Unión Soviética aceptó por fin, después de la muerte de Stalin, el hecho de una Yugoslavia socialista independiente, producto de la lucha de su propio pueblo y el liderazgo de un héroe nacional.

Dos bloques definieron en este período sus zonas de intereses y seguridad, así como chocaron estrepitosamente, provocando situaciones próximas a una Tercera Guerra Mundial. Pero ellos evolucionaron en definitiva hacia una verdadera paz armada. Nunca fue tan cierta la máxima latina: "Si quieres la paz, prepárate para la guerra." El bloque occidental, denominado "mundo libre", hegemonizado por Estados Unidos, defendía el sistema capitalista, con sus expresiones imperialistas y neocolonialistas. El bloque oriental, representado por el llamado "campo socialista", dirigido por la Unión Soviética, procuraba expandir en el mundo su propio sistema social y de poder hegemónico. Esta política de bloques generó a su vez las alianzas militares: el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que comprometía a la mayoría de los países de Europa occidental y a Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, que obligaba a los países de Europa oriental y a la Unión Soviética a participar en un frente común. De esta manera, se inició la más fantástica carrera armamentista. Ésta se caracterizaba por el alto desarrollo tecnológico y la producción en gran escala de armas nucleares sofisticadas y destructivas, que de ser usadas, desintegrarían a

la humanidad. La carrera armamentista significaba además el derroche de sumas siderales que, de ser destinadas a fines de paz, habrían podido crear las condiciones materiales para abatir las necesidades esenciales de esa parte del mundo que continúa hasta hoy sumergida en la pobreza.

La política de bloques no se detuvo en ese punto. Cada uno de ellos generó sus propios instrumentos de combate en la Guerra Fría. Al Consejo de la Paz se opuso el Congreso de la Libertad y la Cultura; a la Federación Sindical Mundial, que se divide, se opuso la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres; a la dirección soviética del movimiento comunista, se opuso la Internacional Socialista. Esta pugna mundial instrumentalizada por cada uno de los bloques repercutía en la política interna y externa de todos los países, incluso por cierto en la de Chile. El Partido Socialista, conforme a su política internacional de no alineación, rehusó adscribirse a estos instrumentos de las superpotencias. Para luchar por la paz y la libertad de la cultura no tuvo necesidad de aceptar los fetiches que respondieron siempre a los intereses de uno y otro campo o bloque. Para impulsar las luchas obreras, impuso la no afiliación de la Central Única de Trabajadores a ninguna de las organizaciones mundiales mediatizadas por ambas superpotencias. No consideró necesario incorporarse a centro de dirección mundial alguno para promover la lucha revolucionaria, confirmando una bien entendida autonomía internacional, que comprendía la coordinación de los partidos y movimientos de tendencias socialistas en América Latina.

En medio de esta Guerra Fría surgió multitudinariamente el "Tercer Mundo", sacudiendo la dominación extranjera. Decenas de países pasaron de su condición de colonias a la de estados independientes, y comenzaron la aventura de su reconstrucción y del gobierno propio. Algunos de ellos eligieron el socialismo. Otros, como las colonias portuguesas de África, tuvieron que esperar todavía para conquistar su independencia, la que lograrían sólo en la década de los setenta, tras cruentas luchas. Después de su independencia, se defendieron durante muchos años más de las agresiones imperialistas de Sudáfrica y Estados Unidos. El Partido Socialista dio su apoyo a esta lucha crucial por la descolonización y el gobierno propio. En esta perspectiva, constituyó también una preocupación del socialismo chileno crear y fortalecer contactos regulares con el socialismo asiático. La Primera Conferencia Socialista Asiática se realizó en Rangún, capital de Birmania, con la participación de este país e India, Ceilán, Indonesia, Israel, Líbano, Japón, Malaya, Nepal, Pakistán y Vietnam. En esta reunión, se consideró la mantención de la paz internacional, la creación de un nuevo camino para la edificación del soc alismo, el combate al colonialismo y la solidaridad internacional con los oprimidos. Los socialistas chi-

lenos se hicieron representar en la Segunda Conferencia Socialista Asiática, reunida en Bombay a fines de 1956, que continuó la lucha emprendida en la primera.

En el décimo sexto congreso general ordinario celebrado en julio de 1957, donde se formalizó la unidad del socialismo chileno, se aprobó una nueva resolución sobre política internacional. En ella se incorporaron algunos considerandos que contradecían la línea de autonomía respecto a las internacionales y los bloques sostenida en forma invariable, así como tampoco se conciliaban con las conclusiones de la misma resolución. Por eso, el segundo pleno nacional, celebrado en julio de 1958, ratificó la parte resolutiva del acuerdo pero sustituyó los considerandos 1 y 2, debido a las contradicciones contenidas en ellos, que atentaban contra la formación ideológica de la base partidaria y daban lugar a diferentes interpretaciones.

En plena Guerra Fría, dicho congreso dejó constancia que continuaba sin variaciones significativas la tensión entre los bloques encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso, si bien cada campo procuraba definir el conflicto en términos ideológicos, éste revestía para los movimientos revolucionarios un carácter cada vez más militar. Todos los días se percibía que la conducta, la estrategia, las posibilidades y la suerte de aquellas fuerzas que luchaban contra la explotación, sea de unas naciones sobre otras o de unas clases sobre otras, estaban sujetas a la influencia de factores ajenos a ellas mismas. Estos emanaban, por el contrario, del creciente poderío bélico, de las fricciones de los centros de poder que pretendían implantar su propia hegemonía sobre las más amplias áreas de la tierra, y del riesgo permanente de un nuevo conflicto bélico mundial. La política de bloques llegó a extremos absurdos en su desarrollo. Cada uno de éstos se atribuyó a sí mismo la defensa exclusiva de todos los grandes valores de la humanidad, negando al adversario y a su sistema, cualquiera significación positiva. Del mismo modo, se juzgó y condenó recíprocamente a las naciones, gobiernos, partidos y dirigentes situados en la órbita geográfica del adversario, con excepción de aquéllos que operaban como agentes incondicionales de cualquiera de las potencias en el campo enemigo.

El Partido Socialista definió así su política internacional en la década de los cincuenta. Condenó la política de bloques y la guerra como solución de los conflictos internacionales, y repudió al imperialismo y a cualquier forma de servidumbre nacional. Luchó contra el armamentismo y todo tipo de intimidación, así como por los derechos de autodeterminación de los pueblos y de elección de la ruta de su emancipación económica y política, con independencia. Rechazó la eventualidad de la conflagración nuclear y proclamó la paz como la más legítima aspiración humana, a cuya causa dedicó sus mejores esfuerzos nacionales e internacionales. De igual manera, destacó el surgimiento de estados que rompían la dominación colonial o afirmaban su independencia efectiva, y el carácter revolucionario de sus objetivos

y métodos. Este proceso ensanchaba el campo geográfico y humano para una política democrática de convivencia internacional, hostil a todo régimen de subordinación o vasallaje, y propiciaba, en cambio, la cooperación mundial, sobre bases igualitarias. Negó la homogeneidad económica, política y militar que se atribuían los bloques, ofreciendo por eso su apoyo a toda tendencia o acción encaminada a desintegrar los pactos militares. Asimismo, impulsó iniciativas dirigidas a resguardar la soberanía de los pueblos, a democratizar su vida pública, a romper los sistemas de explotación de clases sobre el conjunto de los trabajadores y a crear las bases de una convivencia internacional pacífica.

De otra parte, señaló las tendencias existentes en los pueblos del propio bloque soviético, que aspiraban a una democratización de la vida pública interna. Destacó asimismo la tendencia a una mayor autonomía de los movimientos populares de los diversos países del mundo en su marcha hacia el socialismo, en lucha contra las burocracias que se oponían a dicho proceso. Estas burocracias basaban las posibilidades de crecimiento del socialismo mundial en la política de bloques, que expresaban los intereses del stalinismo. El Partido Socialista expresó en todos los momentos críticos su solidaridad con aquellos movimientos. Para completar su visión del período, estableció por último que una característica fundamental de la situación política mundial de entonces, era el desarrollo de un vasto movimiento revolucionario en los países coloniales de Asia, África y América Latina. Ellos combatían por superar su atraso económico, alcanzar su independencia política y su integración nacional, así como por encauzar su esfuerzo productivo por la senda de la planificación económica democrática.

Esta posición concluyó en la reanimación de la voluntad partidaria de luchar por la paz y la solidaridad activa con todos los pueblos que trabajabar por conquistar su liberación nacional y desarrollo económico. Reiteró asimismo su decisión de contribuir a la unidad ideológica y orgánica del movimiento obrero en todo el mundo, sob^e la base del marxismo, el respeto a la democracia interna y el reconocimiento de la autonomía de los pueblos para escoger, de acuerdo a su propia realidad, el camino más adecuado hacia el socialismo. Esta línea de pensamiento y de acción se mantuvo constante en las décadas de los sesenta y setenta. Como resultado de la Guerra Fría, Estados Unidos impuso la alineación a los gobiernos latinoamericanos, conformando con siniestras dictaduras militares el "bloque democrático". A partir de ese momento, la contrarrevolución estableció sus instrumentos de dominación, que perduran hasta ahora. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de Río Janeiro, firmado en 1947, establece que un ataque armado a un país signatario es una agresión a los demás, delimitando una vasta zona de seguridad que com-

prende los confínes del imperio. La carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobada en 1948, confiere a ésta la función de instrumento de la política exterior norteamericana. Los Pactos de Ayuda Militar (PAM), aprobados en 1952, constituyen la supeditación militar al Pentágono.

El gobierno de Gabriel González suscribió todos estos convenios y comprometió al país con Estados Unidos en los avatares de la Guerra Fría. En las condiciones de dictadura legal impuesta a Chile por ese gobernante, el Partido Socialista Popular —denominación que asumió el sector de izquierda después de la división de 1948— se opuso tenazmente en el Congreso Nacional y en la calle a dichos convenios. Fue particularmente fuerte su resistencia al PAM, en la cual comprometió al general Carlos Ibáfíez, su candidato presidencial en 1952, quien rechazó dicho pacto militar en el Senado. Correlativamente a este repudio a la supeditación del país a los intereses del sistema de seguridad estadounidense, el socialismo chileno impulsó una política de reafirmación nacional y latinoamericana. Esta política comprendió la defensa de las aguas territoriales y las riquezas marítimas, la consolidación de los derechos en la Antártida, el desarrollo de la marina mercante nacional, la protección de los precios de las materias primas y la recuperación de los recursos naturales en manos del imperialismo. La nacionalización del cobre, llevada adelante posteriormente por el gobierno de Allende, es el mejor ejemplo hasta hoy. Propugnó además la independencia de los territorios coloniales en el continente y la reducción de los gastos militares. Todas estas medidas fueron propuestas en proyectos de leyes y programas electorales que contribuyeron a la formación de una conciencia latinoamericana.

Dando continuidad a su política de coordinación del movimiento popular de los países latinoamericanos, el Partido Socialista chileno convocó al Primer Congreso Americano de Partidos de Tendencias Socialistas, realizado en Santiago entre el 28 de abril y el 4 de mayo de 1946. En esta reunión internacional se aprobaron dos resoluciones relevantes. La primera se refiere a la formación de un Comité Coordinador de los Partidos Socialistas y Populares del Continente, y la segunda contiene la declaración de principios denominada Carta de América, que asimila el pensamiento partidario. Este último documento contiene propósitos expuestos en forma reiterada respecto a la situación surgida de la Segunda Guerra Mundial. En el primer punto expresa:

> Los trabajadores de todo el mundo y los pueblos coloniales y dependientes están empeñados en una lucha decisiva para eliminar las causas de la guerra, destruir el imperialismo y los regímenes totalitarios, conjurar las crisis económicas periódicas y abatir la miseria de las masas.

Es este postulado parte del pensamiento del socialismo chileno.[23]

Constituye igualmente parte de este pensamiento el contenido del punto 8 de la Carta de América: "La transformación y el progreso de América y su participación en una nueva organización mundial, requieren la unidad económica y política de las naciones que la integran para constituir una Confederación o Anfictonía" El documento corrobora asimismo su espíritu internacionalista a la vez que su autonomía política. Agrega luego: "Los partidos representados en este congreso declaran sus propósitos de mantener relaciones fraternales con toda organización política internacional que coincida con sus aspiraciones generales y respete la autonomía de los partidos y entidades regionales de América Latina".[24]

[23] Julio C. Jobet, *ibidem*, pág. 184.
[24] *ídem*.

Utopía y esperanza

El movimiento obrero y los intelectuales

Desde el surgimiento del marxismo como concepción teórico-práctica revolucionaria y hasta ahora, se ha planteado la relación del movimiento obrero y el socialismo con los intelectuales, así como también los dirigentes más lúcidos han buscado sus raíces ideológicas en los procesos históricos de su propio entorno cultural, descubriendo los precursores de los movimientos de que han formado parte. El comunismo ruso reconoció como tales a Chernichewsky y Hersen. El socialismo rioplatense, a Juan B. Justo; el aprismo del Perú, a Manuel González Prada; el socialismo de este mismo país, a José Carlos Mariátegui. La Revolución cubana se inspiró a su vez en José Martí; la nicaragüense, en Augusto César Sandino, y la salvadoreña en Farabundo Martí. Por su parte, el socialismo chileno, en una primera etapa, encontró en Luis Emilio Recabarren su punto de referencia y, más tarde, durante su desarrollo, emergieron notables intelectuales como Eugenio González y Julio César Jobet, y conductores políticos como Salvador Allende y Raúl Ampuero. Los movimientos políticos más vitales de América Latina son aquéllos que reconocen sus orígenes en las luchas de los trabajadores y de los intelectuales más fíeles a esas luchas, durante los dos siglos de vida independiente, y no aquéllos otros que parten de punto cero y se consideran en el "primer día" de la creación política, desconociendo los aportes de las generaciones anteriores.

Los trabajadores revolucionarios sienten la urgencia de la teoría marxista desde fines del siglo xix. Un hecho decisivo en la historia del socialismo puso de manifiesto esa urgencia de manera emocionante. El Comité Central de la Liga Comunista, residente en Londres, envió el 26 de enero de 1848 una advertencia enérgica al Comité Regional de Bruselas:

El Comité Central, por la presente, encarga al Comité Regional de Bruselas comunique al ciudadano Marx que si el manifiesto del Partido Comunista, de cuya redacción se encargó en el último congreso, no ha llegado a Londres antes del martes primero de febrero del año en curso, se tomará contra él las medidas consiguientes. En caso de que el ciudadano Marx no cumpliera su trabajo, el Comité Central pedirá la devolución inmediata de los documentos puestos a disposición de Marx.

Esta carta fue firmada por Carlos Shapper, cajista de imprenta, José Molí, relojero, y Enrique Bauer, zapatero, representantes históricos de los trabajadores europeos que, al finalizar la primera mitad del siglo xIx, con clara conciencia de clase, se preparaban para formular su llamado: "Proletarios del mundo unios", una consigna todavía vigente.

Este "conflicto" de los revolucionarios tiene una explicación.

El ciudadano Carlos Marx, justo es decirlo, estaba acostumbrado a escuchar esta especie de reclamos. Su profesor Bruno Bauer, primero; su camarada Arnoldo Ruge, después; su amigo Federico Engels, por fin, le habían reprochado más de una vez su desesperante lentitud en el trabajo. Con una clara conciencia de su responsabilidad, con un espíritu crítico de tal modo exigente que nunca lo dejaba satisfecho, Carlos Marx corregía y rehacía sus obras tantas veces que el tiempo se le iba insensiblemente entre las manos.[1]

Este reclamo del Comité Central de la Liga Comunista tenía su origen en el compromiso contraído por Marx en el congreso de Londres, celebrado en el verano de 1847, en el que las diversas corrientes del proletariado resolvieron fusionarse en aquella Liga, editar una revista y formular el "manifiesto" que constituiría la orientación del nuevo movimiento. Este congreso había encomendado, en realidad, a Marx, Engels y Hess la preparación de los proyectos, pero en el nuevo congreso de noviembre del mismo año, después de discutir las diversas tesis, se le encargó la tarea sólo a Marx.

Este era el manifiesto que se reclamaba "con una energía que podría parecer violenta si no se prefiere ver en ella la urgencia casi dolorosa de una clase oprimida que pugnaba por hallar en la prosa del filósofo el reflejo de su propia conciencia, la

[1] Aníbal Ponce, *El elogio del Manifiesto Comunista,* Obras Edición Casa de las Américas, La Habana, 1975, pág. 432.

tensión de su propia voluntad. No basta que el pensamiento busque la realización, había escrito Marx en otros tiempos, es necesario que la realidad sienta la apetencia de ese pensamiento. Dábanse ahora las dos corrientes que confluían: la historia ascendiendo hasta la filosofía, la filosofía poniéndose al servicio de la historia". Es un trance extraordinario. "Emocionante momento del drama humano que ha dejado como recuerdo memorable las 23 páginas *in octavo* de *El Manifiesto Comunista:* prodigioso portal levantado a mitad del siglo xIx para que pasara por él, rumoroso y pujante, el espíritu nuevo".[2] Ese espíritu sigue siendo nuevo al comenzar el siglo xxI.

Marx señaló, por eso, en la undécima tesis sobre Feuerbach que los filósofos hasta entonces sólo habían interpretado el mundo, por lo que ahora correspondía transformarlo. Con esta afirmación superó las ideologías que sólo se limitaban a explicar la realidad social, de acuerdo a los valores de la sociedad burguesa, y hacía presente la necesidad de contar con una praxis revolucionaria. De este modo, la teoría filosófica acerca de dicha realidad se une indisolublemente con la actividad concreta y la práctica política del proletariado, la cual alcanzará un carácter revolucionario cuando ese agente histórico adquiera una clara conciencia de sus intereses reales. En este sentido, el axioma leninista "sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria" reviste todo su valor. Lenin no se refiere, por cierto, sólo a la importancia que tiene la teoría general como instrumento para actuar sobre la realidad social, sino con aquella proposición desea destacar que para convertir la sociedad capitalista en una sociedad socialista, se requiere asimilar y aplicar la teoría marxista. Sin ella no podrá impulsarse ninguna práctica revolucionaria, independientemente del grado de condenación al sistema.

No obstante, los marxistas clásicos no se aferraron a la teoría como un dogma, sino como un método de interpretación de la realidad y una guía para la acción, capaz de reflejar en sí el cambio constante y a veces imperceptible de la vida social. La teoría es contrastada periódicamente por la historia. Lenin, en Carta sobre táctica, de abril de 1917, repitió la fórmula tan expresiva de Goethe: "...la teoría es seca, amigo mío, es gris, pero el árbol de la vida es eternamente verde". Así concibieron el socialismo revolucionario sus fundadores. El derrumbe de los sistemas "comunistas" de Europa del este y de la propia Unión Soviética es la mejor demostración de la fragilidad de los dogmas convertidos en fundamento de las instituciones sociales. Por esa relación de la teoría y de la historia, cabe distinguir entre la doctrina comunista y el modelo soviético (instrumentación del marxismo), así como también representan una dualidad contradictoria los evangelios y la Iglesia

[2] *Ibidem*, págs. 442 y 443.

Católica en cuanto institución, desde el siglo v, cuando el emperador romano Constantino la convirtió en instrumento del Estado. De esta importancia de la teoría se deriva la relación del movimiento obrero y el socialismo con los intelectuales.

En la actualidad, interesa poner el acento en esta relación porque han aparecido deformaciones políticas, que si bien estuvieron presentes en los partidos obreros del pasado, han llegado ahora al extremo de negar la esencia misma del socialismo. Este proceso deformante ha sido condicionado por dos factores. Por una parte, algunos países de Europa oriental, que habían establecido diversos sistemas no capitalistas de desarrollo, presentados durante más de medio siglo como "socialistas" por sus propios conductores, se derrumbaron y comenzaron a recorrer el camino del capitalismo. Por otra parte, de ese hecho histórico se procura inferir que el socialismo, como teoría marxista, ha fracasado, quedando los trabajadores sin teoría revolucionaria y, por lo tanto, sin acción revolucionaria. Estos dos factores, al ser llevados a términos absolutos, se convierten en premisas falsas. En efecto, más de mil millones de seres humanos viven en el "socialismo real" (China Popular, Vietnam, Corea del Norte y Cuba) y la historia ha demostrado que las revoluciones han tenido en todos los tiempos ascensos y caídas hasta lograr la implantación de principios y valores permanentes.

De esta constatación puede establecerse la relación del socialismo con los intelectuales, que arranca de la unidad del movimiento obrero con el marxismo en el siglo xix, en la que aquellos intelectuales desempeñaron tareas de investigación, educación y comunicación en el área política, conjuntamente con obligaciones similares en otros centros culturales, tales como las universidades, donde la teoría juega un papel importante. El punto de partida es claro. Cuando el desarrollo de los partidos obreros en Europa, en la segunda mitad del mencionado siglo, impulsó dicha fusión, surgió también el problema de la relación con los intelectuales. Tal cuestión presenta un doble sentido y, por consiguiente, concierne tanto a las re laciones políticas del movimiento socialista con los intelectuales como a la teoría del marxismo frente a otras corrientes culturales (filosóficas y científicas). El primer aspecto emerge del carácter amplio y complejo que adquiere la lucha revolucionaria, que obliga al movimiento obrero a definir objetivos propios, tanto de carácter estratégico como táctico, frente al Estado de la clase dominante. El segundo aspecto se plantea cuando el movimiento obrero, al asumir el marxismo, elabora una especie de contracultura desde el punto de vista dialéctico.

Esta compleja situación ha sido analizada por diversos pensadores marxistas, entre los cuales destacan Carlos Kautsky, Max Adler, Antonio Labriola y Antonio Gramsci, cuyas concepciones al respecto han sido explicadas por Giuseppe Vacca,

profesor de historia de las doctrinas políticas en la Universidad de Bari, Italia, en su libro *El marxismo y los intelectuales.* Este autor define el punto de partida o la necesidad del desarrollo de la teoría socialista:

> En todas partes, el movimiento obrero europeo comenzó a tener una doctrina compleja, que no se limitaba a servir de guía a sus luchas económicas y políticas, sino que constituía la trama de un verdadero y propio universo de valores, convicciones y maneras de proceder. Estos se referían a todos los aspectos de la experiencia colectiva e individual, y surgían de las condiciones históricas de neutralización y exclusión violenta en las que las clases trabajadoras se encontraban mantenidas y eran constreñidas a organizarse y a luchar por afirmar sus intereses propios, o sea, ser reconocidos y legitimados como sujetos de los sistemas políticos y sociales.[3]

Este es un decisivo punto de partida.

Esta forma de construcción política del movimiento obrero al exterior de los sistemas políticos vigentes y en agudo conflicto con la organización de las clases dominantes hizo del marxismo una teoría que se separaba cada vez más del movimiento global de los saberes, dando vida a una verdadera y propia cultura:

> De aquí nacía, para las elites políticas e intelectuales del movimiento socialista, el problema de definir de vez en vez las propias relaciones con el mundo de la cultura, de la filosofía y de la conciencia en general: en otras palabras, el problema de las relaciones entre el marxismo (que en su desarrollo se guiaba por el "espíritu de escisión") y el movimiento global de los saberes, que se desarrollaba en la docencia.[4]

Esta relación entre ambos sectores de la cultura se ha presentado también en el legado de intelectuales chilenos en su vida y su obra de políticos y maestros universitarios, así como en las de muchos otros de América Latina.

En este sentido, antes de referirme a la relación de intelectuales latinoamericanos con el socialismo, es de especial interés mencionar los planteamientos de los autores señalados. El primero —Kautsky— se refirió a dicha materia, formulando varias interrogantes decisivas para abordar el tema: uno, cuáles son las características de la inteligencia; dos, en qué medida sus intereses coinciden con los del proletariado; tres, en cuánto es de esperarse que ella ocupe su propio lugar en la lucha de

[3] Giuseppe Vacca, *El marxismo y los intelectuales,* Universidad Autónoma de Sinaloa, 1984, págs. 129 y 130.

* *Ibidem,* pág. 130.

clases, y cuatro, cuáles son sus estratos más fácilmente conquistables. En su respuesta a estas interrogantes se inserta en un ámbito que se refiere al papel de las clases medias en la sociedad capitalista, donde si bien se polarizan cada vez más la burguesía y el proletariado, las tareas intelectuales aumentan, con lo que las capas encargadas de ellas se expanden constantemente. En estas capas medias, se distingue entre las que viven de su propio trabajo y las "aristocracias de: la inteligencia".

De esta diferenciación surgen comportamientos distintos en cada uno de dichos sectores. En el primer caso, estas capas medias intelectuales son cada vez más dependientes y tienen condiciones de vida y problemas similares a los del proletariado, por lo que la socialdemocracia europea (que entonces era marxista), al actuar como representante político del proletariado, encuentra a los trabajadores intelectuales como aliados. Esta situación se acentuó con el transcurso del tiempo, con lo cual se abrió paso a la resolución del núcleo principal de la cuestión política de los intelectuales. En el segundo caso, la situación es distinta, porque ese sector se convierte en élites intelectuales restringidas y privilegiadas, que pasan a desempeñarse como dirigentes supriores, con lo que se comprometen con la mantención de la sociedad capitalista.[5] No obstante, este sector forma parte de las clases medias que en las formas de conciencia son capaces de superar más fácilmente el corporativismo de la propia posición en cuanto capas sociales. Su cultura les permite comprender las leyes del desarrollo histórico y social. Desde este punto de visita, las "aristocracias de la inteligencia" pueden separarse de las clases dominantes y ser, por lo tanto, conquistables por el socialismo y el partido representante de los obreros, resolviéndose la cuestión política de la relación entre inteligencia y socialismo.

Este esquema analítico es el que más ha influido hasta ahora en el planteamiento del problema durante la experiencia de los movimientos populares europeos y también latinoamericanos. En otras palabras, según el pensamiento de Kautsky, la cuestión política de los intelectuales se define, en síntesis, en la conquista de ellos por el movimiento obrero o, más precisamente, por el partido obrero:

> La conciencia del fin último, del ideal del socialismo, que anima y sostiene la figura del partido obrero y sus luchas, asume en este proceso un papel determinante. Esta figura se alimenta por la conciencia del derrumbe inevitable de la sociedad capitalista (causado por crisis recurrentes y contradicciones incurables), como por la conc iencia de lo inevi-

[5] Ambas situaciones se presentan en la historia del Partido Socialista de Chile. En el primer caso, actuaron como aliados de los obreros en la fundación de este partido (alianza de trabajadores manuales e intelectuales) y, en el segundo caso, al término de la dictadura, la mayoría de ellos (los especialistas o técnicos) se convirtieron en servidores del sistema de dominación (capitalismo).

> table de la transición al socialismo (la necesidad del socialismo como el punto de arribo al que tiende el desarrollo histórico). Para los intelectuales como masa, interviene la teoría de la proletarización, y para las relaciones con las elites intelectuales, opera el marxismo. La forma "partido" es, sin embargo, protagonista de ambos movimientos, ya sea porque en ella el conocimiento del proceso histórico y la conciencia de sus fines inevitables forman un todo, o bien porque el único problema político individualizado es el de la conquista de las capas intelectuales por la socialdemocracia.[6]

En este caso, la expresión socialdemocracia debe entenderse aquí como sinónimo de socialismo, tal como se entendía en ese tiempo.

El segundo analista de la temática en referencia fue Max Adler, que consideró la conquista de los sectores intelectuales por el socialismo como una tarea eminentemente cultural. Este planteamiento deriva de algunas diferencias condicionantes respecto al paradigma kautskiano en el análisis de la sociedad capitalista y su desarrollo. Adler acentúa mucho más que Kautsky las formas de conciencia que determinan las dinámicas de aquellos estratos sociales en modo mucho más relevante (menos corporativo) respecto de cualquier otro estrato social.

> Dado tal énfasis sobre lo específicamente cultural de estos estratos, la contradicción fundamental que puede separarlos en masa del capitalismo, se encuentra en la frustración que el "uso capitalista" impone al enorme potencial emancipativo de las ciencias y de la cultura.[7]

Desde este punto de vista, el socialismo en cuanto a partido puede y debe hacer conscientes a los intelectuales que "su valorización y su futuro proceden del movimiento de los trabajadores".

En esta última acción, el marxismo desempeña una función decisiva. Según Adler, dicho pensamiento puede y debe "confrontarse a fondo y continuamente con el desarrollo de los saberes contemporáneos, seguro de salir victorioso", con lo que este pensador se diferencia de Kautsky, al inferir que el marxismo es, más que "guía para la acción" política del movimiento del proletariado, un punto de arribo del desarrollo de las ciencias sociales modernas y constituye la forma más completa de conciencia de sus fundamentos, de su método, de sus contenidos y fines. Más todavía, para este autor, el marxismo es una teoría social que vive en permanente interacción con el desarrollo del intelecto científico y filosófico general y no un cuerpo

[6] *Ibidem*, págs. 131 y 132.
[7] *Ibidem*, pág. 133.

doctrinal concluido y separado. Esta concepción se fue consolidando en el curso del siglo xx por muchos otros pensadores marxistas:

> El mundo de la historia, lo define Adler, como mundo de la praxis, y lo entiende como mundo de la voluntad orientada hacia los valores, mundo del trabajo social guiado por fines individuales y colectivos determinados. Las ciencias naturales y sociales, no sólo son parte de su dominio, sino que se distinguen únicamente por el grado diverso de conciencia de ello y por la orientación diversa en cuanto a los valores prevalecientes en ellas.[8]

Hombre iluminado por las luces del siglo xIx, en que nació, Adler se anticipó a destacar el desarrollo científico y tecnológico que se abrirá paso de manera deslumbrante todavía en el siglo de las revoluciones: el siglo xx. Por eso mismo, destaca la importancia de los saberes.

> Las ciencias se constituyen, por consiguiente, según los puntos de vista diversos y contrastantes, reconducibles, en definitiva, a los protagonistas sociales del conflicto que domina la época presente. El punto de vista de clase no puede separarse de la constitución de las ciencias sin que esto melle su valor cognoscitivo que atañe a sus procedimientos, a su capacidad de construir leyes y a la eficacia y validez de estas últimas en el propio ámbito.

El marxismo es parte de la cultura y, por lo tanto, de las ciencias, por lo que este conocimiento es la conquista fundamental "en cuanto forma de conciencia de un movimiento histórico que no es únicamente el de los trabajadores, sino también el de las ciencias sociales modernas".[9] Este concepto superior desmiente y anula al marxismo vulgar.

La relación del socialismo con los intelectuales se convierte, en definitiva, en la conquista de éstos por el partido representativo de los trabajadores y del socialismo, es decir, aquella relación "se inscribe en el horizonte de una constitución política del movimiento obrero totalmente centrada en la figura del partido". Más claramente todavía, ellos identifican en el socialismo el único movimiento capaz de esto, ya que "configuran su imagen como la de una sociedad orgánica, en la que se restablecerá una relación de fusión romántica y áurea entre intelectuales y pueblo. Ven, por lo tanto, en el partido obrero a una figura salvadora, fundada precisamente

[8] *Ibidem*, pág. 134.
[9] *Ibidem*, pág. 135.

te sobre la identidad de la ciencia y la conciencia".[10] Esta es la concepción clásica del partido revolucionario: la fusión entre intelectuales y pueblo.

El tercer analista de la temática en referencia fue Antonio Labriola, quien esbozó —mejor que cualquier otro— una línea diversa de desarrollo del marxismo y de la relación de éste con los intelectuales. Preocupado de la concepción materialista de la historia, reflexionó y escribió sobre una recuperación decidida de la inspiración antifatalista de ella, pero reafirmó la necesidad del socialismo, entendido como proceso en el "conocimiento de la génesis del movimiento, de las condiciones históricas que hicieron inevitable su nacimiento y alimentaban su desarrollo".[11] La concepción teórica del marxismo y la identidad del movimiento socialista no son garantizados, según Labriola, por el fín último, sino por la criticidad del materialismo histórico.

> Que el materialismo histórico es una concepción crítica de la realidad significa, antes que nada, que él tiene como puntos de referencia y soportes la existencia y la acción del movimiento obrero. Este último se desarrolla como el principal antagonista del orden social existente.

En seguida, agrega una observación adicional y concluyente.

> El marxismo no es otra cosa que la indagación rigurosa de las condiciones a causa de las cuales esto sucede y no podría no suceder. En relación al movimiento obrero, el marxismo es el "hilo conductor" de sus análisis históricos y sociales y, por lo tanto, "guía de acción política".[12]

La teoría marxista, en síntesis, define aquellas condiciones y asimismo las posibilidades de la existencia y la acción del movimiento obrero, y éste puede conseguir sus objetivos sólo en la medida en que esté "capacitado para fundamentarlos analíticamente de modo riguroso y realista", por lo que el contenido del socialismo es la idea regulativa del autogobierno de los productores.

> Este último se configura como un proceso histórico muy complejo, que sigue la única ley de tendencia fundamental de la sociedad capitalista: los movimientos generados por el carácter antagónico de ella y de sus modos de desarrollo. Los contenidos de la concepción materialista de la historia, en cuanto "guía para la acción" del movimiento obrero, se precisan, por otra parte, a través de la interpretación concreta de las transforma-

[10] *Ibidem,* págs. 135 y 136.
[11] *Ibidem,* pág. 138.

ciones. Y para tal fin es necesario cernir y usar en lo concreto todcs los métodos, recorridos y enfoques de las disciplinas particulares.[13]

De este modo, la identidad del partido obrero se constituye en ese proceso mediante el conocimiento de la sociedad y su práctica política.

En este contexto se plantea precisamente la relación entre el socialismo y los intelectuales.

Aunque sirva de "hilo conductor" para la elaboración del programa y para la acción política del partido obrero, la concepción materialista no se agota con esto. En cuanto "inteligencia plena del conjunto de todas las relaciones de la vida social" y de sus dinámicas, ella entabla relaciones autónomas con el movimiento global del intelecto científico y filosófico: relaciones más culturales que políticas.

Sobre esta base de sustentación, Labriola puede, entonces, proponer por un lado "la indefínidad progresiva" del materialismo histórico, que resuelve el problema del conocimiento en oposición a cualquiera otra filosofía, y enuncia que no existe limitación fija alguna ni *a priori* ni *a posteriori* a la cognosicibilidad, porque en el indefinido proceso del trabajo, los hombres conocen todo lo que es necesario y útil conocer. Por otra parte, Labriola propone la filosofía de la praxis como conciencia del proceso en su totalidad. Ella no es otra cosa que la forma *de* comprensión unitaria del desarrollo histórico, al que tienden las disciplinas sociales particulares que, por ello y desde este punto de vista, encuentran en el marxismo una especie de cumplimiento y verificación.[14] Esta es, en suma, la importancia de la filosofía de la praxis.

El cuarto analista de esta temática fue Antonio Gramsci, quien enfrentó un proceso en el que marxismo y socialismo volvieron a separarse y el mismo movimiento obrero se quebró. Del socialismo de la Segunda Internacional surgieron los partidos comunistas, adherentes a la Tercera Internacional, fundada por el Partido Bolchevique, victorioso en la Revolución de Octubre de 1917. Ellos asumieron un marxismo propio, el llamado marxismo-leninismo (el marxismo soviético), que constituyó una especie de caricatura del marxismo clásico. Éste último se desarrolló entre tanto en Occidente, fuera de los partidos comunistas y de la socialdemocracia, como un movimiento cultural, expresado por diversas "escuelas" o "corrientes",

[12] *Ibidem.*
[13] *Ibidem,* pág. 139.
[14] *Ibidem,* págs. 140 y 141.

extendiéndose al resto del mundo en una interacción fecunda con los avances de las ciencias sociales.

> Por lo tanto, ya después de la Primera Guerra Mundial, el marxismo fue marginal en cuanto "hilo conductor" del análisis histórico-político ligado a la acción del movimiento obrero. En la década de los treinta, la tematización correcta de las transformaciones del sistema capitalista mundial y los avances del análisis diferenciado fueron el patrimonio peculiar y casi exclusivo de la reflexión gramsciana.[15]

Según Giuseppe Vacca, la teoría de la hegemonía sustentada por Antonio Gramsci sugiere articular el análisis del Estado según los modos por los que se especifican, Nación por Nación, las clases y funciones dirigentes. De estas últimas son protagonistas los intelectuales. Esto implica una definición funcional y, al mismo tiempo, históricamente determinada de las capas intelectuales. Es una noción de intelectual muy amplia. Afirma Gramsci: "Se podría decir que todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales". En seguida, se puede afirmar que "la relación entre los intelectuales y el mundo de la producción no es inmediata, como ocurre con los grupos sociales fundamentales, sino que es mediata, en distinto grado, por todo el tejido social, por el complejo de las superestructuras, cuyos 'funcionarios' son precisamente los intelectuales".[16] Este es un tema que tardíamente, con respecto a la vida de Gramsci, se puso de actualidad en las últimas tres décadas del siglo xx, es decir, después de su muerte.

El profesor Vacca lo explica con sencillez y claridad en su libro mencionado. De manera complementaria con lo anterior, expresa:

> Se pueden fijar dos grandes "planos" superestructurales. Aquel que llamaremos la "sociedad civil", es decir, el conjunto de organismos vulgarmente denominados "privados" y el de la "sociedad política o Estado", y que corresponden a la función de "hegemonía" que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y aquel de "dominio directo" o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno "jurídico". Estas funciones son específicamente organizativas y conectivas. Los intelectuales son los "empleados" del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político.[17]

[15] *Ibidem,* pág. 143.
[16] *Ibidem,* pág. 148.
[17] *Ibidem,* pág. 142.

Pero él no se detiene en esa constatación de la realidad objetiva que percibe en su tiempo, sino que avanza hacia la comprensión de la temática específica en referencia.

En Gramsci, la relación entre socialismo e intelectuales no se limita tan sólo al objetivo de lograr la "conquista" de éstos por el partido de la clase obrera, sino que supone, además, una dislocación de la teoría de éste.

> El partido de la clase obrera se define como el lugar de centralización de algunas funciones dirigentes fundamentales en la elaboración de la hegemonía, por parte de los productores directos. Pero no se le puede separar de los procesos diferer ciados y complejos de aquella elaboración. Es parte por demás decisiva de ella, ya que cumple con la tarea eminente de la definición de un programa.[18]

En el partido deben reagruparse las funciones dirigentes esenciales del proceso y producirse la elaboración de los núcleos fundamentales de un proyecto de hegemonía. "La historia de los partidos es parte de la historia de los grupos intelectuales, los estados y las funciones dirigentes".[19]

En términos más amplios y generales, la temática del partido debe ser incorporada a la de los intelectuales. Observa Gramsci:

> Todo grupo social, al nacer en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea además orgánicamente una o más :apas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función no sólo en el campo económico, sino también en el social y político.

Pero, prosigue Giuseppe Vacca:

> Cada grupo social "esencial" emergiendo de la historia de la precedente estructura económica y como expresión de un desarrollo (de esta estructura) ha encontrado, por lo menos en la historia que hasta ahora ha transcurrido, categorías sociales (intelectuales) preexistentes.[20]

[18] En el Partido Socialista, en un largo período, hubo conciencia sobre la importancia del programa. En su primer congreso general ordinario, celebrado en octubre de 1933 aprobó un programa de acción inmediata. En el segundo congreso general ordinario de 1935 se amplio y perfeccionó dicho programa. Después, en el período de colaboración gubernamental, hubo desinterés por el programa hasta 1947, año en el que aprobó el más completo de sus programas.

[19] *Ibidem.*

[20] *Ibidem.*

En este ámbito se presenta la relación entre los intelectuales orgánicos del partido obrero, que lucha por conquistar a los primeros a través de la acción principal de los segundos:

> Los partidos fundamentales, aquellos destinados a devenir históricamente "necesarios" en la vida de un país, se desarrollan según la manera en que los intelectuales orgánicos de un determinado grupo social se les unen y se caracterizan en vista de la elaboración de la hegemonía. En el partido se plantea, por lo tanto, el problema crucial que se presenta al respecto: la unión entre intelectuales orgánicos y tradicionales.[21]

Esta unión se proyecta a su vez en el Estado, donde se multiplican los aparatos y sus funciones, así como se produce un desarrollo orgánico que integra al personal especializado en diversas materias técnicas de actividades complejas de las sociedades modernas:

> Por lo tanto, el problema político decisivo en las democracias contemporáneas es el de la organización de las competencias. Con la concepción del intelectual "orgánico", iluminada por la teoría de la hegemonía, se aclaran en forma definitiva las razones de este problema. La concepción gramsciana del Estado-proceso, especifica concretamente a este último como un conjunto dinámico y antagónico de reglas, de funciones, de saberes y de prácticas, globalmente unido a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas, pero relativamente autónomo.[22]

En el marco de esta concepción, la lucha entre las hegemonías se presenta en el terreno de diversos aparatos, buscando la sustitución de un conjunto de procedimientos, prácticas, reglas y aparatos, por otro superior.

Por otra parte, la concepción subjetiva de los aparatos indica en ellos la sede eminente de la cuestión política de los intelectuales. Ellos son los que articulan en concreto los nexos entre intelectuales y Estado, y viceversa, a través de la organización de las competencias, que constituyen en concreto la vida estatal, las funciones hegemónicas se incorporan en las funciones técnicas, que caracterizan los papeles intelectuales. Estos últimos, en definitiva, resultan de la mezcla, de acuerdo a "proporciones definidas, de deberes especializados y funciones dirigentes, unidos molecularmente" y dispuestos como poros en el cuerpo entero de la sociedad y del Estado. "De esta manera, la relación entre socialismo e intelectuales se expresa y

[21] *Ibidem*, págs. 149 y 150.
[22] *Ibidem*, pág. 150.

resuelve por el modo en que el movimiento obrero elabora su propia hegemonía. Según Gramsci, el principio fundamental de ciencia política para el movimiento socialista debe ser el de no olvidar que existen gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte de la política se basan sobre este hecho primordial, irreductible (en ciertas condiciones)."

No obstante, al enfrentar los problemas que de aquí se derivan, hay una premisa fundamental en la formación de los dirigentes que debe definirse previamente: ¿se desea realmente que siempre existan gobernantes y gobernados o se prefiere crear las condiciones para que la existencia de esta división desaparezca? En otros términos, se parte de la premisa de la perpetua división del género humano o se cree que ésta es sólo un hecho histórico que responde a ciertas condiciones. En suma, se puede concluir que la relación entre socialismo e intelectuales se define, por consiguiente, en conexión a la formación de un nuevo tipo de Estado, en el que las funciones intelectuales (dirigentes) se singularizarían por la elaboración de un nuevo tipo de hegemonía:

> No es el Estado-plan el contenido distintivo del socialismo, sino la idea reguladora de la lucha política por realizar un tipo de sociedad caracterizada por formas integrales de autogobierno. No la conciencia del fin, sino la realización de los principios señalados, en la producción de la nueva hegemonía, constituye el criterio distintivo de la constitución política del movimiento obrero.[23]

En este proceso es precisamente donde los intelectuales "orgánicos" desempeñan un papel decisivo.

Corrientes de ideas que influyeron en Chile

En el desarrollo del socialismo latinoamericano, han tenido un papel fundamental algunos intelectuales en el siglo xx, hasta constituir un legado insustituible para el movimiento popular. El Partido Socialista de Chile recibió esta rica herencia, es decir, las corrientes teórico-políticas preexistentes en este continente, que orientaron las luchas de los trabajadores. Estas corrientes ideológicas provenían de tres fuentes conexas: el socialismo rioplatense, el leninismo (el pensamiento de Lenin, no el marxismo-leninismo, dogmatización de Stalin) y el ideario de Mariátegui, todas

[23] *Ibidem,* págs. 150 y 151.

ellas vinculadas a la historia del movimiento obrero continental. A comienzos de los años treinta, gravitaban fuertemente esas tendencias en América Latina, a través de las cuales numerosos intelectuales de esta parte del mundo recorrían un camino similar al de los europeos ya mencionados (Kautsky, Adler, Labriola y Gramsci) con matices que los diferenciaban de éstos, condicionados por su propia realidad.

El socialismo de inspiración marxista se difundió en los países del Río de la Plata a través de las clases obreras urbanas provenientes de la inmigración europea, principalmente italiana y española, abriéndose camino en pugna con la corriente anarquista, de origen metropolitano, hasta imponerse en definitiva. Los sectores más conscientes lucharon porque los trabajadores se dieran una organización política propia. Pero los partidos socialistas surgidos entonces en esos países no realizaron una verdadera acción revolucionaria, precisamente, por carecer de una teoría adecuada. El modelo de esta corriente reformista fue la socialdemocracia alemana anterior a la Primera Guerra Mundial.[24] No obstante, en Argentina surgió en aquellos años un pensador excepcional —el Dr. Juan B. Justo— en torno a quien se desarrolló el Partido Socialista de ese país. Figura importante en la Segunda Internacional, intentó fundar la acción socialista a partir de la lucha de clases y en la perspectiva de la democratización nacional. Por lo mismo, ese Partido Socialista se definía como la dirección política de la clase trabajadora, en cuanto debía asumir la hegemonía en la transformación de la sociedad. Pese a dicha definición básica, al igual que la socialdemocracia europea, no contó con una estrategia de poder. Recabarren militó en sus destierros en los partidos socialistas de Argentina y Uruguay, contribuyendo posteriormente a la creación de los partidos comunistas de esos mismos países, después de convertir al Partido Obrero Socialista en Partido Comunista en Chile.

La Revolución rusa de 1917 produjo, por su parte, un impacto deslumbrante en América Latina. Aun en el socialismo argentino hubo entonces hombres, como José Ingenieros, que vieron en ella, al revés de la socialdemocracia europea, a la "buena nueva" que se esperaba desde el tiempo de Marx, del mismo modo que, más tarde, otro viejo socialista, Alfredo L. Palacios, reconociera a la Revolución cubana como la avanzada de la revolución latinoamericana. La victoria de octubre había replanteado la conquista del poder como una tarea actual y previa a la transición socialista, superando una larga controversia desarrollada en la socialdemocracia. Así

[24] En Chile, ejercieron cierta influencia algunos socialdemócratas que llegaron al país con la inmigración alemana en la segunda mitad del siglo xIx, quienes fundaron o participaron en las primeras organizaciones de base de la Primera Internacional.

el leninismo, con su fuerte impronta, se proyectó en la fuerza subjetiva de las masas, conducidas por un partido de nuevo tipo.

El leninismo no sólo tuvo ese atractivo sino que además afirmó lo que en Marx fue únicamente un esbozo: el carácter específico de los procesos revolucionarios en los países atrasados, derivado de la naturaleza del desarrollo histórico de los mismos. Esta clara autonomía de la situación revolucionaria de dichos países estaba contenida en la tesis sobre la cuestión colonial, aprobada en la Internacional Comunista, bajo los auspicios del propio Lenin, y cancelaba la subordinación de la lucha cha en ellos al triunfo del proletariado en los paises centrales o metropolitanos como había sostenido la socialdemocracia europea desde fines del siglo xIx y hasta la Revolución de Octubre. No obstante, esta apertura del leninismo en el ámbito ideológico no permitió el desarrollo inmediato de una teoría y una práctica específicamente latinoamericanas en el marco del marxismo, por la supeditación del movimiento comunista mundial a los requerimientos de la política de la Unión Soviética impuesta por el estalinismo.

Aquella tarea le corresponderá a José Carlos Mariátegui, al margen de las internacionales y los partidos comunistas. Marx se había planteado al final de su rica vida intelectual, aunque sin resolverla plenamente, la duda acerca de si era posible aplicar los presupuestos fundamentales de su teoría a países europeos atrasados, como Rusia y Polonia. Por su parte, Lenin había superado la idea de que la revolución socialista sería el resultado de la maduración de la sociedad capitalista en cada uno de los países, por su hipótesis de que dicha maduración del capitalismo debía entenderse a nivel histórico-mundial. Mariátegui, por último, señaló que el socialismo realizará en los países atrasados las posibilidades históricas todavía vigentes del capitalismo, así como también que sólo el socialismo puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa, y oponer una valla definitiva al avance de la penetración económica e ideológica del imperialismo.

Muerto Lenin en 1924, su lúcida concepción de la autonomía de la situación revolucionaria en los países coloniales y semicoloniales del mundo fue desarrollada en Asia por Mao Tse Tung, extrayendo sus diversas consecuencias estratégicas. A la misma tarea decisiva dedicó a su vez su esfuerzo intelectual Mariátegui en América Latina, para cuyo efecto cuestionó los supuestos en que se basaba la visión tradicional del marxismo. Para ello puso en el debate nuevas temáticas, como el carácter del desarrollo económico de los países dependientes, su proceso de constitución como naciones, la imposibilidad histórica de una revolución democrático-burguesa por la supeditación de las burguesías internas al imperialismo, la nueva definición de las fuerzas motrices de la revolución y el carácter socialista de ésta. En 1923, Mariátegui afirmaba: "La revolución social necesita históricame la insurrección

de los pueblos coloniales. La sociedad capitalista tiende a restaurarse mediante una explotación más metódica y más intensa de sus variadas colonias políticas y económicas". Esta meta se alcanzaría sólo después de la Segunda Guerra Mundial, pero el imperialismo inventaría el instrumento de la "deuda externa", que le permite succionar la economía de los países atrasados y apoderarse de sus activos nacionales.

El desarrollo económico y social de esta región es, según el pensador peruano, diferente al del viejo continente, por lo que no existe entre ambos una relación entre atraso y avance, sino una dependencia deformada y conflictiva del primero respecto del segundo, que requería ser definida en su especificidad para extraer conclusiones estratégicas. La redefinición de la naturaleza de las formaciones económico-sociales implica a su vez un cambio en la caracterización de las clases y de los sujetos sociales de la revolución, extendiendo su énfasis particular hacia los temas de las masas, de los elementos ideológicos y culturales, de los factores subjetivos y todo ello en el marco de su interés por la formación del bloque histórico capaz de desarrollar la acción vinculada al proyecto socialista. Se trata de una variada temática, analizada por medio del método marxista, que abrió una nueva perspectiva a la lucha por el socialismo.

La muerte prematura de Mariátegui, a los 35 años de edad, detuvo este proceso teórico (el desarrollo del marxismo latinoamericano) que él inauguró con tanto brío, hasta que la Revolución cubana —treinta años después— replanteó a través de su práctica política algunos de los temas fundamentales esbozados por aquél. En este encuentro histórico, destacó la presencia de Che Guevara, quien retomó el hilo conductor del proceso teórico que viene del socialismo rioplatense, pasa por el leninismo y culmina con Mariátegui, en cuyo decurso puede considerarse también a Eugenio González, con la Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista de Chile, aprobada en 1947. Es la teorización de varias generaciones socialistas de América Latina, que lucharon también en su última etapa al margen de las internacionales.

Mariátegui agregó entonces que no existía en Perú, como no ha existido jamás, una burguesía progresista, con sensibilidad nacional, que se proclamara liberal y democrática y que inspirase su política en los postulados de su doctrina. De esta caracterización de la burguesía interna infiere la estrategia revolucionaria:

> La emancipación de la economía del país, expresa en el preámbulo del programa del Partido Socialista del Perú, en 1928, es posible únicamente por la acción de las masas proletarias, solidaria con la lucha antiimperialista mundial. Sólo la acción proletaria puede

estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir.[25]

Este juicio sobre la situación del Perú es naturalmente aplicable al conjunto de los países de América Latina, particularmente a Chile, a la luz del proceso de desnacionalización realizado por la dictadura burguesa de 1973 a 1989 y continuado por los gobiernos posteriores.

El pensamiento de Mariátegui es, en suma, un marxismo abierto, que no sólo integra corrientes diferenciadas, pero declaradas como marxistas, sino algunas otras que no son contradictorias con la doctrina científica del socialismo, como la de Sorel, de quien rescata la idea del mito, en cuanto utopía posible porque "la fantasía no tiene valor alguno sino cuando crea algo real", con cuyo concepto relaciona las luchas desde la independencia de España hasta sus días, con el heroísmo, en cuanto a la emoción de la época. Esta sensibilidad mariateguiana se funda en la voluntad humana y postula que "la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad". Esta idea del heroísmo es la que se ha manifestado en todas las luchas contemporáneas, desde la Revolución cubana, donde 12 sobrevivientes de un desastre, realizaron un prodigio social, hasta quienes han combatido en las sierras y ciudades de América Latina. Forma parte también de este proceso la rebelión de los estudiantes, que tanta gravitación ha tenido en las luchas populares. Esta confianza en la fe y la voluntad está presente, antes que él, en Lenin y en la Revolución de Octubre.

Este pensamiento del "amauta" es asimismo una creación en cuanto se aplica al estudio de las condiciones particulares que rigen el desarrollo de la región, como lo hizo Lenin en Rusia y Mao Tse Tung en China en la caracterización de las respectivas formaciones económicas y sociales. De esta lectura del marxismo de Mariátegui se extraen algunas conclusiones estratégicas asimiladas por el socialismo chileno, por intermedio de Eugenio González (Tesis sobre la Revolución Latinoamericana). Dicho en breve, como recapitulación, ellas consisten en la caracterización de la incapacidad de la burguesía interna para conducir la lucha por la liberación nacional (tareas de la revolución democrático-burguesa), el papel hegemónico de la clase obrera dentro de un frente más amplio de trabajadores, en el proceso de transformación social; la realización plena de la nación vinculada a un proyecto antiimperialista, y el carácter socialista de la revolución continental, en cuyo proceso se

[25] Citado por Michel Lowy, "El Marxismo en América", artículo en El Marxisrr o Contemporáneo, II, revista *Nueva Política* N° 8, México, pág. 346.

realizarán las tareas nacionales y democráticas. Estas ideas estuvieron contenidas también en los programas que se formularon en las campañas presidenciales de Salvador Allende por el pueblo chileno y sus partidos y organizaciones sociales, en los años comprendidos entre 1952 y 1973, es decir, durante 20 años.

El intelectual en el socialismo chileno

Esta fue también la posición, así como la función, de Eugenio González como intelectual. En tanto maestro se ocupó de los problemas de la sociedad y la cultura, comprendidas las ciencias y las artes, desde el punto de vista y la perspectiva del socialismo. Por lo mismo, concibió la universidad como un centro de estudios superiores, no sólo destinado a formar profesionales (especialistas) sino preocupado de todos los saberes, para formar también hombres cultos e influir en el mejoramiento de la sociedad. Conjuntamente con esta función educativa, se incorporó desde joven al socialismo, en cuanto partido de los trabajadores (manuales e intelectuales), con un proyecto de liberación social, en el que luchó durante su existencia. En ambos planos, fue crítico del sistema de dominación, bajo la hegemonía del capitalismo y combatiente de la nueva fuerza social emanada de las luchas de los trabajadores, es decir, intelectual orgánico del socialismo. ¿Existen hoy intelectuales de este tipo en Chile? Yo diría que son muy escasos porque hoy, más que nunca, los que marcan el rumbo son los expertos (técnicos y especialistas).

El propio Eugenio González planteó este problema el año 1928, cuando sólo tenía 25 años. Entonces se refirió a "la falacia de los expertos". Cualesquiera que sean las actividades humanas, el peligro de apreciaciones exclusivas y optimismos ligeros reside principalmente en los especialistas, quienes carecen por lo común de amplias perspectivas espirituales. El especialista "vive encerrado en un círculo de conceptos, de preocupaciones y de hábitos que lo privan de agilidad para una comprensión integral y profunda de los hechos circundantes". Agrega en seguida que "para el experto, la complejísima vida social con sus problemas, sus intereses y sus valores, gira en torno al ejercicio de su peculiar actividad y dependen, en su adelanto posible, de la eficiencia de la función que él ejecute. Así, el industrial, el educador, etcétera, cultivan la ingenua vanidad de creerse los dueños de una especie de palanca de Arquímides para sacudir la sociedad y fijarle la ruta de su porvenir". Esta falacia de los expertos se contrapone con las grandes reformas sociales, precisamente, por la parcialidad de la visión, por su falta de coherencia con la realidad

total.[26] Esta falacia se percibe al finalizar el siglo xx, cuando los economistas de derecha y de centroizquierda (los neoliberales) sostienen que el país está muy bien, por unos cuantos indicadores macroeconómicos, con desprecio de: otros sectores de la comunidad, como los sociales, políticos y culturales. Hablan piadosamente de la pobreza, pero no hacen nada por superarla, corrigiendo la injusta distribución del ingreso, la que se agrava por las sucesivas crisis de la economía, por causas internas y externas.

Además, él define lúcidamente esta relación entre la parte y el todo, que explica hoy también las "modernizaciones" de la dictadura (1973-1989) y de la Concertación (1990-2000), que enriquecen a sus impulsores pero agudizan la pobreza de la mayoría de la sociedad, de una economía que produce e importa para los sectores ricos, burguesia y clase media alta, pero que no satisface las necesidades básicas de la mayoría de la sociedad. Acota entonces:

> Una reforma de cualquier institución de alcance social no es fecunda sin una valorización previa, desapasionada y realista, de las posibilidades del ambiente y del momento. La sociedad es unidad orgánica en la que ninguna de las partes puede desarrollarse autónomamente. Cada una está condicionada por las demás, y, a su turno, las condiciona. Ningún problema puede, pues, ser resuelto eficazmente sin el estudio de las condiciones generales de la colectividad y de sus potencialidades de progreso. De otro modo, es posible resolver problemas locales, o gremiales, o individuales, pero se crean paralelamente problemas sociales de proyecciones lamentables.[27]

Es el caso de Chile moderno, en el que paradójicamente crece la economía, pero se agudizan la desigualdad y la injusticia, problemas generalizados en América Latina.

Las falacias de los expertos reaparecerán una y otra vez, cuando los defectos y factores negativos de la época no se abordan de manera integral por pensadores que analizan la realidad totalizadora, sino por especialistas. En el marco de este análisis por sectores, Eugenio González expresó en 1931, en otro ensayo, que:

> Los temperamentos religiosos imaginan que todo el malestar del mundo se debe a la pérdida de fe en las potencias cósmicas, sin reparar en que esa falla del alma contemporánea es un síntoma y no una causa de nuestra pobreza espiritual; el sconomista, por su parte, mira el problema a través de las formas del capitalismo, culpando de la trágica ten-

[26] Eugenio González R., "Algunos aspectos del problema educacional", revis:a *Atenea,* N° 8, Concepción, 10 de enero de 1928, pág. 271

[27] *Ibidem,* pág. 273.

> sión de las fuerzas históricas, a las imperfecciones del sistema de producción y reparto de la riqueza; a su turno, el político atribuirá los más complejos problemas a una simple cuestión de técnica administrativa y de organización de los poderes del Estado. Y así otros.[28]

Este maestro, que desde joven se ocupaba de los problemas educacionales, culminaría su carrera en la década de los sesenta, como rector de la Universidad de Chile.

Como teórico socialista, Eugenio González se puso al servicio de la apasionada búsqueda por el movimiento obrero de un camino para el desarrollo nacional y su liberación social, en cuyo esfuerzo recuperó la rica herencia dejada por el pensamiento democrático y positivista del siglo anterior, que condicionó en forma favorable la recepción del marxismo. Influido profundamente, además, por el pensamiento anarquista predominante en los años veinte, transmitió al Partido Socialista el sentido ético y el amor por la libertad, que pasará a constituir una constante en su horizonte político. Las concepciones teóricas de Eugenio González sobre la revolución latinoamericana encuentran, sin duda, sus raíces en aquellas fuentes del marxismo ya mencionadas, es decir, en el socialismo rioplatense, en el leninismo y particularmente en el pensamiento de Mariátegui.

La concepción de un partido de la clase trabajadora, que se propone realizar la revolución socialista en un área semicolonial y atrasada, con un capitalismo dependiente, donde las burguesías internas exhiben su incapacidad para impulsar una revolución democrático-burguesa, así como su inferencia de que sólo a través del socialismo es posible escapar del subdesarrollo, son asimiladas de dichas fuentes. Contrariando el concepto de la revolución democrático-burguesa, como etapa diferenciada, el "amauta" peruano sostuvo en los años veinte la relación de las tareas democráticas con las socialistas, como se planteará después por el socialismo chileno.

En la República Socialista de 1932, Eugenio González —que entonces tenía sólo 29 años— se desempeñó como ministro de educación, y al año siguiente intervino en la fundación del Partido Socialista, que tuvo lugar el 19 de abril de 1933, no ocupando cargos en su dirección nacional hasta octubre de 1946. Entonces se unió a la segunda generación socialista, y fue designado miembro del Comité Central por el decimoprimer congreso general realizado en Concepción, en cuya directiva se

[28] Eugenio González R., "Ortega y Gasset y la Universidad", revista *Atenea,* N° 72, febrero de 1931.

destacó por su sólida formación cultural. Este Comité Central, del cual formé parte, siendo el más joven, tenía como secretario general a Raúl Arrpuero, con sólo 28 años. El Comité Central encomendó al "ciudadano" González la tarea de elaborar el proyecto de Fundamentación Teórica del Programa, que fue ap robado en una conferencia nacional convocada para el efecto en 1947. En el período siguiente (1948-1949) se desempeñó como secretario general, por designación de décimo segundo congreso general, y en los años 1949 a 1957, lo representó en el Senado. En el curso de esta actividad política puso en evidencia su formación filosófica y social, conquistando el reconocimiento de sus compañeros y el respeto y admiración de sus adversarios. Su influencia teórica fue muy profunda, representando la relación entre los intelectuales y el socialismo, dentro del movimiento obrero.

En la última década del siglo xx, vuelve a tener una gran importancia el papel de los intelectuales en la reformulación del socialismo como proyec :o de liberación social de los trabajadores. En algunos países de Europa y de América Latina se levantan voces que se anticipan a anunciar la próxima crisis del iieoliberalismo y el resurgimiento del socialismo como movimiento revolucionario, particularmente en los países en vías de desarrollo. Con este repunte teórico-práctico comienzan también a reaparecer los intelectuales de izquierda, desplazando a los especialistas o expertos, servidores por sobre todas las cosas del Estado capitalista. El nuevo intelectual no sólo es una persona dedicada al cultivo de las ciencias y las artes, sino que se proyecta en el ámbito de la cultura como creador en sus distintos sectores, pero con preferencia en la política (uno de los sectores de la cultura) y en relación con los partidos de trabajadores que luchan por el socialismo, independientemente de sus medios de vida.

En otros términos, esa relación que se ha venido especificando, a la luz del marxismo, desde Kautsky a Gramsci, desde Justo a Mariátegui, recobra su validez:

> Sin duda, la figura más emblemática para la izquierda ha sido siempre la del intelectual como productor o articulador de ideologías: el que pone su capac dad racionalizadora —sintetizadora de ideales—, al servicio del programa de luchas sociales y enfrentamientos políticos, modelizado por el instrumento revolucionario del partido.[29]

Este tipo de relación entre los intelectuales y el socialismo es el que se ha analizado precedentemente, destacando la elevada y positiva función desempeñada por aquéllos:

[29] Nelly Richard, "A ver intelectuales, ¿en qué estamos?", revista *Página Abierta*, Año ni, N[c] 64, Santiago, 13 al 26 de abril de 1992, pág. 26.

La valorización del intelectual como figura que no interpreta los sistemas "cultura" y "sociedad", sino que también cuestiona sus razones, es parte de un dimensionamiento de la cultura que le reconozca capacidad para alterar o subvertir lo que las instituciones van persuasivamente modelando como regla o código.[30]

De acuerdo a la concepción gramsciana, los intelectuales pueden ser orgánicos o no orgánicos al sistema, sean éstos conscientes o no de su posición y su función. La situación es clara:

Como la función del intelectual consiste en ser mediador entre la hegemonía y su base social, o se es orgánico a la estrategia de poder de la clase dominante, quedando enlazado con el Estado del poder, o se es orgánico a la nueva fuerza social que brota desde la sociedad, en donde, en sociedades de carácter capitalista, la clase obrera juega un papel dirigente en esa alianza de clases, y es esto lo que determina su posición en esa fuerza social.[31]

En el proceso de "conquista" de los intelectuales que planteara Kautsky, sucede muchas veces que éstos comiencen un comportamiento crítico a la hegemonía burguesa, a partir de su relación con el movimiento social y el partido de los trabajadores, para concluir con la decisión de asumir la lucha por el socialismo. En Chile, surgen hoy algunos pocos intelectuales que proyectan, todavía muy tímidamente, una nueva luz en la línea clásica del socialismo.

La importancia de la teoría

El Partido Socialista de Chile desarrolló su pensamiento ideológico entre los años treinta y los cincuenta, al mismo tiempo que enfrentaba los problemas colectivos, cumpliendo con los requisitos de la teoría y la acción. En efecto, desde su fundación, comprendió la importancia de la teoría en la vida social, la razón por la que cada clase, en su proceso de ascenso, elabora su pensamiento para afrontar los problemas reales generados por el desarrollo de la sociedad en su respectivo tiempo. La burguesía formuló la suya a través de la afirmación individualista del hombre, el

[30] *Ibidem,* pág. 29.

31 Beba C. Balbé y Beatriz S. Balbé, "Crisis del reformismo como formación ideológica. La función y la posición de los intelectuales", ponencia presentada en el Encuentro Internacional de Latinoamericanistas, CELA, realizado en la ciudad de México, del 5 al 7 de septiembre de 1990.

derecho a la propiedad privada de los medios de producción y de cambio, el liberalismo económico y la explotación de los trabajadores y de las colonias, fundamentos de la acumulación capitalista primitiva. Henri Lefebre expresa:

> El individualismo trató de sustituir la teoría pesimista de la jerarquía (inmutable en su fundamento y cuya justificación se halla en un "más allá" puramente espiritual) por una teoría optimista de la armonía natural de los hombres y las funciones humanas.[32]

Supera así la concepción medieval, basada en una jerarquía estática que descansaba políticamente en el feudalismo y la monarquía de derecho divino, si bien esa misma burguesía vuelve, una y otra vez, hacia una concepción pesimista y autoritaria. Los ciclos de brutales dictaduras en América Latina comprueban esta aseveración, como la del "militarismo" de derecha representado por Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas Armadas en Chile.

Los trabajadores del mundo se armaron a su vez con una teoría revolucionaria: el marxismo. Esta concepción advierte y valoriza realidades que no comprendía el examen de conciencia individualista. Estas son "realidades naturales (la naturaleza, el mundo extenor); prácticas (el trabajo, la acción); sociales e históricas (la estructura económica de la sociedad, las clases sociales, etcétera)".[33] El marxismo surgió como la concepción del mundo que permite la comprensión de los. conflictos y problemas de la sociedad actual, así como su transformación para establecer la sociedad sin clases, emancipando a los trabajadores y, con ellos, a toda la humanidad. Esta concepción teórica ha servido de fundamento al socialismo chileno en cuanto proyecto de emancipación social, desde 1933 y hasta ahora, a lo menos en la conciencia de los trabajadores que respetan la identidad teórica y la continuidad histórica de este movimiento político.

Pero, si bien todas las clases requieren de un pensamiento político, no es igual la urgencia imperativa que tiene cada una de ellas de este instrumento teórico. La burguesía, movida sólo por la necesidad de preservar el orden establecido, no siente la inquietud de explicarse racionalmente las contradicciones que se presentan en la sociedad de clases, ni mucho menos la voluntad de buscar soluciones reales para ellas. Tiene en su favor el peso de los hábitos de obediencia y la violencia institucionalizada, fundamentos de la contrarrevolución. La clase trabajadora, en cambio, necesita una explicación racional de su explotación económica y sometimiento

[32] Henry Lefebre, *El marxismo,* Buenos Aires, EUDEBA, 1973, pág. 9.
[33] *Ibidem.*

político, ofreciéndole al mismo tiempo una perspectiva para su liberación integral, lo que pasa por la formación de su conciencia de clase.

En la Declaración de Principios aprobada en su primer congreso general, el Partido Socialista de Chile declaró que acepta como método de interpretación de la realidad al marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social. Constató la división de la sociedad en clases sociales y reconoció la lucha entre ellas. Definió al Estado como un órgano de opresión de la clase capitalista, carácter que desaparecerá una vez eliminadas las clases, limitándose a guiar, armonizar y proteger las actividades de la sociedad. Propuso la sustitución del sistema de producción capitalista, basado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos de producción, de cambio, de crédito y de transportes, por un sistema socialista, en que dicha propiedad se transforme en colectiva. Durante el período de transición consideró necesaria una dictadura de trabajadores organizados porque la transformación evolutiva no es posible por la represión armada de la burguesía. Proclamó el internacionalismo y el antiimperialismo, y la lucha por la unidad económica y política de los pueblos de América Latina para constituir una federación, el sueño del libertador Simón Bolívar, que hoy la Unión Europea demuestra que es posible también en América Latina.

De todos estos principios teóricos, el único que fue revisado en la Conferencia Nacional de Programa de 1947 es el que preconizaba una dictadura de los trabajadores organizados, reemplazando este concepto por el de una República Democrática de Trabajadores. Desde entonces, el conjunto del partido no alteró tampoco válidamente el pensamiento contenido en la Fundamentación Teórica del Programa aprobado en ese año hasta 1996. En dicho marco, se formularon las cuestiones esenciales de la lucha por el socialismo, por lo que en esta oportunidad examinaré aquellas que le confieren su carácter peculiar. Ellas se relacionan fundamentalmente con la manera como asumió el marxismo, con las tesis sobre la revolución latinoamericana, con el camino hacia el socialismo, con la definición de la fuerza hegemónica de la revolución, con la apreciación de la libertad y el humanismo socialista, con la concepción del Estado y la democracia y con el papel de la planificación democrática. Estas cuestiones constituyen las claves teóricas para entender al socialismo chileno, por lo que centraré en las mismas el presente análisis, teniendo en cuenta además que ellas estaban presentes, en esencia, en la Declaración de Principios aprobada en 1933, en el acto de fundación del partido.

El marxismo: un debate abierto

De acuerdo a lo anterior, el socialismo chileno, desde su nacimiento, asumió el marxismo como método de interpretación de los fenómenos sociales y como guía para la acción. De este concepto derivó la autonomía en el análisis de la realidad nacional e internacional y la elaboración de una estrategia de lucha, constituyendo el instrumental más valioso para la revolución. Como pensamiento creativo, el marxismo tiene que encarar constantemente problemas inéditos que plantea la historia, aportando también soluciones nuevas en las luchas de los hombres para satisfacer sus necesidades e ideales. Es, por eso, una concepción crítica y abierta; no un sistema cerrado, como lo definiera el estalinismo, que se derrumbó por la acción de *\a perestroika* en el mismo país donde tuvo su origen.

En este sentido asumió el Partido Socialista el marxismo, con una posición contraria al dogmatismo, considerándolo en todo instante como un pensamiento en constante discusión y sólido enriquecimiento. En sus elaboraciones teóricas coincidió con las nuevas corrientes interpretativas y, en algunos aspectos basicos, se anticipó intuitivamente en caracterizaciones sociales a las que, mucho más tarde, numerosas investigaciones sistemáticas darían una fundamentación científica. Como una parte integrante del movimiento revolucionario latinoamericano recogió las tendencias preexistentes en éste y proyectó orientaciones generales que fueron puestas a prueba, con distintos resultados, en el proceso histórico de nuestro continente. El mérito no es desdeñable si se tiene presente que, al fundarse este partido, el único marxismo difundido en América Latina era el de la Internacional Comunista.

En breves trazos procuraré demostrar esta interpretación, pero antes es preciso preguntarse ¿qué es hoy el marxismo?, una cuestión por demás controvertida. En el período finisecular, del siglo xix, era fácil definir esta concepción como el pensamiento de Marx, complementado por Engels y apenas interpretado o, más bien, difundido por la primera generación de seguidores del maestro. Mas, a partir de la Revolución rusa, la situación cambió radicalmente. El marxismo ya no era sólo una concepción teórica, sino que comprendía también- prácticas revolucionarias, no siempre coincidentes, que confrontaban la validez de aquélla con la experiencia histórica. Marx murió hace más de un siglo y, desde entonces, su pensamiento se ha utilizado muchas veces como justificación "ideológica" de estrategias y tácticas que no han conducido al socialismo, como sucedió en los países de Europa del Este. De la misma manera se usa hoy al liberalismo, en el mundo capitalista, es decir, como "ideología" de una economía transnacionalizada y administrada por el imperialis-

mo en su beneficio. Estas economías se manejan, muchas veces, en los países dependientes (como en Chile durante los años 1973-1988) por brutales dictaduras, que son la antítesis de los gobiernos liberales.

En esta perspectiva histórica cabe señalar, desde luego, que Marx no se ha petrificado ni es inmóvil sino que, por el contrario, sólo inauguró un movimiento que continúa su incesante desarrollo. Uno de sus intérpretes expresa:

> Aunque su proyecto haya sido en su mayor parte científico, no fue especulativo, no se encerró en sí mismo consumiéndose en la unidad de un sistema cerrado. Al contrario, ha dado nacimiento a una sucesión encadenada de prácticas y estrategias revolucionarias; ha engendrado productos que viven y se oponen a la sociedad actual; esos productos no son exclusivamente ideas y conocimientos, sino agrupaciones humanas que, invocando al marxismo, son capaces de poner en movimiento inmensas fuerzas materiales.[34]

En este sentido, el marxismo se distingue de las filosofías tradicionales en que está siempre inconcluso y rechaza toda clausura del sistema.

El surgimiento de las sociedades que proclamaron su transición socialista escindió, pues, al marxismo en dos grandes fases a tal punto que hoy, cuando se discute la existencia de una crisis del mismo, muchos se refieren al "socialismo realmente existente" y no al pensamiento de Marx. Éste es, por cierto, un tema que no examinaré ahora. Sin embargo, conviene señalar que existe heterogeneidad acerca de lo que debe entenderse por marxismo entre quienes enarbolan su bandera en la lucha por transformar a la sociedad burguesa, hasta el extremo que autores, como Wright Mills, hablan de los marxismos o de los marxistas, porque existen diferencias entre ellos tanto en las temáticas que tratan como en las alternativas revolucionarias que proponen.

El marxismo es un debate abierto, como lo señalara siempre el socialismo chileno. Este pensamiento esencialmente crítico, ha sido objeto de distintas interpretaciones en medio de continuos procesos revolucionarios en el siglo xx. El propio Marx ha estado en el centro de la controversia, distinguiéndose entre el joven Marx y el maduro, así como él mismo ha sido diferenciado de Engels. Muchos otros pensadores, definidos como marxistas, han exhibido a su vez diferencias respecto a ambos y entre sí. Similar situación se presenta en los procesos revolucionarios desarrollados bajo la bandera del marxismo, donde surgieron modelos no capitalistas de

[34] Jean Desanti, "Filosofía, del marxismo a la fenomenología de Foucault", *El marxismo,* Bilbao, Ediciones Mensajero, 1974, págs. 378 y 379.

desarrollo, pero que no generaron sociedades socialistas y que hoy retornan al capitalismo. En aquellos procesos encontraron en los propios trabajadores, la clase que fue protagonista de la revolución, la resistencia a sus deformaciones, lo que explica los juicios inquisitoriales, la represión constante y la dictadura. Es la historia de la Unión Soviética y de los países satélites.

Reconocer esta situación objetiva no constituye, sin embargo, una concesión revisionista. Sólo es la constatación de los límites de la teoría, porque Marx no dejó a sus seguidores una teoría acabada de una vez y para siempre. Lenin advirtió precisamente que Marx "sólo nos ha proporcionado las piedras angulares...". Entre los autores contemporáneos, Althusser agregó algo más categórico todavía:

> Lo que nos ha dado no es un sistema total, unificado y concluido, sino una obra que conlleva principios teóricos y analíticos sólidos y, junto a ellos, dificultades, contradicciones y lagunas. No hay por qué asombrarse. Si nos han dado el comienzo de una teoría de las condiciones y de las formas de la lucha de clases en las sociedades capitalistas, sería insensato creer que podría ser "pura" y completa desde sus orígenes".[35]

No hay en esta herencia marxista una verdadera teoría de las organizaciones de la lucha de clases y antes que nada del partido y del sindicato.

Preocupado del desarrollo histórico de la sociedad humana, tampoco Marx se dedicó a ofrecer recetas para los problemas inmediatos. En este sentido, Umberto Cerroni sostiene con razón que:

> Marx ha basado sus razonamientos sobre largos períodos de la historia, y no es menos cierto que las perspectivas de corto plazo están en Marx tan arraigadas en la crítica de lo existente que no anticipa casi ninguna indicación política concreta. Lo que nuevamente significa que las más graves responsabilidades deben ser atribuidas, tanto en el plano interpretativo como en el ejecutivo, a quienes (y son muchísimos entre los seguidores de Marx) han reducido, por así decirlo, las distancias entre la teoría y la práctica, entre la ciencia y la política.[36]

De modo que no hay otro camino que considerar por nuestros propios medios los problemas de hoy, sin otra ayuda de Marx que los fundamentos para la comprensión

[35] Louis Althusser, "Dos o tres palabras brutales sobre Marx y Lenin", revisita *Dialéctica*, año V, N° 8, Puebla, México, junio de 1980, pág. 101.

[ib] Umberto Cerroni, "Marx y Lenin", revista *Nueva Política*, pág. 226, volumen II, N° 7, México, 1979, pág. 226.

de la realidad que nos legó con su método. La conclusión anterior debe complementarse con la convicción de que una cosa es la teoría y otra la historia, por lo que nunca deben identificarse los modelos con la realidad, como lo hizo el estalinismo y lo hace hoy el neoliberalismo.

En dicho sentido, Lukács confirma esta conclusión ya que, en un momento en que se discutía sobre ortodoxia marxista, dice que ésta se refiere exclusivamente al método. En efecto, el filósofo húngaro expresó ya en 1919:

> Pues suponiendo, aunque no admitiendo, que la investigación reciente hubiera probado indiscutiblemente la falsedad material de todas las proposiciones sueltas de Marx, todo marxista "ortodoxo" serio podría reconocer sin reservas todos esos nuevos resultados y rechazar sin excepciones todas las tesis sueltas de Marx sin tener en cambio que abandonar ni por un minuto su ortodoxia marxista. Así pues marxismo ortodoxo no significa reconocimiento acrítico de los resultados de la investigación marxiana, ni "fe" en tal o cual tesis, ni interpretación de una escritura "sagrada". En cuestiones de marxismo, la ortodoxia se refiere exclusivamente al método.[37]

En un prólogo escrito en 1967, para su libro *Historia y conciencia de clases,* el viejo Lukacs reitera la validez de este juicio de su juventud. Ningún marxista debería incomodarse, pues, por la acción de los intelectuales curiosos que siguen buscando los errores de Marx, constituyendo inventarios de los mismos, porque son muchos y, por lo tanto, nunca los terminarán de reunir.

Esta es también la diáfana concepción del socialismo chileno, al asumir, desde su nacimiento, el marxismo con una posición crítica, contraria a todo dogmatismo. En su Declaración de Principios, aprobada en el acto de fundación el 19 de abril de 1933, expresa: "El Partido acepta como método de interpretación de la realidad al marxismo, rectificado y enriquecido por todos los aportes científicos del constante devenir social". Curiosamente, esta declaración, por una parte, coincide con la definición de Lukács pero, por otra, la contradice en apariencia, ya que el pensador húngaro agrega que ese método no puede continuarse, ampliarse, ni profundizarse más que en el sentido de sus fundadores, excluyendo de esta manera al parecer su rectificación.

Más tarde, el socialismo chileno expresó en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947:

[37] Georg Lukacs, *Historia y conciencia de clases,* México, Editorial Grijalbo, 1979, págs. 1 y 2.

> La doctrina socialista no es un conjunto de dogmas estáticos, sino una concepción viva, esencialmente dinámica, que expresa en el orden de las ideas políticas las tendencias creadoras del proletariado moderno. Producto de una situación histórica definida, ella se ha ceñido en su desarrollo al ritmo del movimiento social, enriqueciéndose de continuo con las experiencias de lucha de la clase trabajadora.

En este documento, ya no se habla de rectificación y, en cambio, se afirma en otra parte del mismo que "el marxismo proporciona un método fecundo de interpretación sociológica", hasta el punto que hoy se considera que el marxismo no suplanta a las ciencias sociales, pero éstas tampoco pueden prescindir de él en su desarrollo.

El mismo Lukács hace presente, por otra parte, que la mejor fonnación teórica no sirve absolutamente de nada, si se limita a lo general. Para ser eficaz en la práctica ha de expresarse en la solución de los problemas particulares, esto es, las realidades objetivas que debe confrontar la *praxis* revolucionaria. Esa es, precisamente, la mayor insuficiencia y, por lo tanto, debilidad del movimiento popular latinoamericano: no haber creado una teoría específica con raíces en su propia realidad. Como alguien ha expresado, Marx no pensó en Chile o en el conjunto de los países de nuestro continente, pero los socialistas tenemos el deber de hacerlo, como lo abordó José Carlos Mariátegui en los años veinte y Ernesto Guevara en los años sesenta, así como muchos otros intelectuales socialistas durante el siglo xx.

La elaboración teórica sobre la revolución en la vasta área latinoamericana ha dado lugar igualmente a un largo debate. Durante varias décadas chocaron con estrépito dos concepciones básicas. La tesis estalinista sobre la revolución por etapas, la primera de las cuales es la democrático-burguesa, que será la obra de una alianza de cuatro clases sociales —el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional— y la tesis alternativa que concibe a la revolución como un proceso continental ininterrumpido de carácter socialista, cuya fuerza motriz es un frente de trabajadores, que constituye la mayoría social en cada uno de nuestros países. Ésta última es la concepción del socialismo chileno, y encuentra su base en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947, así como en su concepción estratégica de Frente de Trabajadores.

Tesis sobre la Revolución latinoamericana

El programa de 1947 retomó, en su *Fundamentación Teórica,* los postulados de unidad latinoamericana contenidos en la Declaración de Principios de 1933. Para eso,

caracterizó la situación existente entonces en el continente, cuyos problemas económico-sociales tenían rasgos que no se daban en otras partes del mundo. Asimismo, reafirmó la voluntad partidaria de abordarlos, "sin subordinar nuestra posición revolucionaria a los fines políticos, económicos y estratégicos de ninguna de las grandes potencias que actualmente luchan por la hegemonía mundial". En este capítulo de la Fundamentación Teórica están contenidas las tesis sostenidas por los socialistas chilenos sobre la revolución latinoamericana, expresadas de manera esquemática, para desarrollarlas posteriormente en sus congresos generales.

La primera aludía al destino común de nuestros pueblos, expresando: "Para que América Latina pueda influir en la conservación de la paz y en el destino de la civilización es necesario que deje de ser una expresión geográfica y se convierta en una realidad política". Pero no se quedaba sólo en el postulado general, sino que ascendía al principio programático: la lucha por la unidad continental sobre la base de la formación de una economía orgánica antimperialista. Definía a continuación el contenido social y nacional de esta lucha. "La politica socialista en la América Latina tiene un doble significado: es el único medio eficaz para la emancipación de las masas obreras y campesinas y la única garantía cierta de nuestra independencia nacional y continental". Es el proyecto político unido al desarrollo e independencia de la gran nación, como hoy lo plantea para sí la Comunidad Económica Europea. De acuerdo a esta tesis, sería más importante para su progreso priorizar la integración económica y política de América Latina, a partir del MERCOSUR, en vez de continuar con la "fábula del tiburón y las sardinas", a que se refiriera el ex presidente de Guatemala Juan F. Arévalo y que hoy se reproduce con la llamada "iniciativa de las Améncas" o acuerdo de libre comercio, hasta ahora concertado sólo con México y Canadá, países fronterizos de Estados Unidos y últimamente con Chile.

La segunda caracterizaba con claridad el subdesarrollo y la dependencia de esta área del continente:

> Nuestra estructura económico-social presenta las contradicciones de fondo propias de los países semicoloniales y dependientes que dificultan la acción revolucionaria de los partidos populares: junto a formas de vida y de trabajo de tipo feudal, como las que existen en la agricultura bajo el régimen del latifundio, tenemos una fragmentaria producción industrial dependiente en sus principales rubros del control técnico y financiero del capitalismo internacional.

Esta realidad debía ser abordada y superada por la acción revolucionaria del socialismo, eliminando la subordinación y la dependencia del imperialismo. Esta formulación del socialismo chileno surgió más de 20 años antes del desarrollo de la

teoría de la dependencia en la década de los setenta en América Latina. De acuerdo a esta concepción, el Partido Socialista luchó incansablemente por la reforma agraria y el desarrollo industrial.

La tercera señalaba la incapacidad de la burguesía para cumplir sus objetivos históricos. Ella no ha desarrollado, ni en lo económico ni en lo político, la totalidad de sus posibilidades como clase dominante. Por otra parte, agrega:

> ...las clases dirigentes, tomadas en su conjunto, se encuentran psicológica y socialmente retrasadas en el campo de las rápidas transformaciones de la economía moderna. No están en condiciones de llevar a cabo la política constructiva de gran alcance que ha de colocar a nuestros países a la altura de las circunstancias históricas

No pueden realizar la revolución democrático-burguesa cumplida en los países desarrollados, por estar dominadas por el imperialismo, lo que se corrobora hoy por la desnacionalización de la economía, la deuda externa y la fuga de capitales, así como por su absoluto sometimiento a las políticas "neoliberales" impuestas por los grandes países capitalistas en su propio beneficio. La llamada 'revolución capitalista", encabezada por Pinochet, la impuso el imperialismo por la fuerza de las armas, acentuando la desigualdad social.

La cuarta establecía que las tareas no cumplidas por la burguesía serán realizadas por la clase trabajadora, la que actuará a través de partidos socialistas nacionales, coordinados entre sí:

> Las condiciones anormales y contradictorias en que nos debatimos, determinadas por el atraso de nuestra evolución económico-social en medio de una crisis, al parecer decisiva, del capitalismo, exigen una aceleración en el proceso de la vida colectiva: tenemos que acortar las etapas mediante esfuerzos nacionales solidarios para el aprovechamiento planificado del trabajo, de la técnica y del capital que tengamos a nuestra disposición.

Estas tareas sólo las realizará la clase trabajadora a través de la revolución socialista, porque todos los caminos del capitalismo dependiente han fracasado, hasta el punto que se ha agudizado más la pobreza en América Latina, en una dinámica de empobrecimiento creciente. Hoy día se destacan los indicadores macroeconómicos, con olvido de los hombres sobrexplotados, sobre cuyo sudor e incluso sangre se desarrollan los grandes grupos económicos, que dominan a la sociedad a su arbitrio.

La quinta, por último, definía la revolución latinoamericana como socialista. De acuerdo a los antecedentes expuestos sobre las condiciones objetivas del continente, no cabe otro curso probable para el desarrollo revolucionario.

> Por ineludible imperativo de las circunstancias históricas, las grandes transformaciones económicas de la revolución democrático-burguesa, —reforma agraria, industrialización, liberación nacional— se realizarán, en nuestros países latinoamericanos, a través de la revolución socialista.

La revolución es, pues, un proceso ininterrumpido de carácter socialista, que en la actualidad está bloqueado transitoriamente, pero no vencido de manera definitiva, en cuanto proyecto de emancipación social de los trabajadores. Por el contrario, existe una recuperación progresiva que reafirma los principios y valores socialistas en todo el mundo, así como mantiene la actualidad de los grandes objetivos históricos del gobierno popular de Salvador Allende.

Para arribar a las definiciones anteriores, el socialismo chileno se compenetró del desarrollo del debate marxista, desde la primera generación de seguidores de Marx hasta los contemporáneos, cuyas obras eran conocidas cuando se elaboró el programa socialista en 1947. Este debate puede dividirse en tres períodos. El primero, comprende desde la fundación de la Segunda Internacional a la Revolución rusa; el segundo, de este acontecimiento, que marca un corte, hasta la deformación stalinista y, el tercero, del surgimiento de la crítica a este proceso adelante, pasando por la revisión que se realiza hoy en los países que abandonaron el socialismo de su propia experiencia, a partir de la *perestroika* y la *glasnost* formuladas por Gorbachov. Hoy se podría decir que está planteada una revolución en el marxismo, reclamada desde la periferia del capitalismo, porque "la historia ha demostrado que el potencial revolucionario en el sistema capitalista, al menos hasta ahora y para el futuro inmediato, reside en la periferia y no en el centro como se suponía en el marxismo".[38]

El movimiento de la creación y la discusión teóricas se ha prolongado así por más de un siglo. La primera generación socialista centró su preocupación en el estudio del pasado en busca de una luz que la condujera al asalto del poder burgués, desencadenando resonantes polémicas entre revisionismo y ortodoxia. La generación siguiente, con Lenin a la cabeza, puso el énfasis en los análisis concretos de la nueva época histórica hasta culminar con la Revolución rusa, en abierta oposición

[38] Paul Zweezy, "Por una revolución en el marxismo", en *Marx a cien años*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, pág. 196.

a las concepciones socialdemócratas. Pero tampoco este proceso se detuvo ahí, sino que continuó su marcha con la última generación de teóricos marxistas, que asumió principalmente el estudio de los problemas del poder convertidos, en última instancia, en problemas políticos. Ella estableció, a su vez, sus diferencias críticas con las generaciones precedentes, constituyendo un paso más en la "escalera de la historia", que conduce al "asalto del cielo", una muy larga tarea que comprende toda una época, que todavía no termina.

El camino hacia el socialismo

El Partido Socialista de Chile tenía un concepto cabal sobre la necesidad y el contenido de un programa. Su reconstrucción, en 1947, constituía una tarea por demás difícil, que apenas se iniciaba entonces con los pasos ya dados para reagrupar los cuadros dispersos o estratificados en grupos. Su cabal cumplimiento requería, en efecto, el desarrollo de la capacidad teórica de sus militantes, unida a la persistente práctica organizativa, que diera satisfacción además a tres niveles fundamentales de elaboración política: el programa, la estrategia y la táctica. Estos tres elementos habían de configurar el nuevo proyecto histórico del partido. Todo proyecto revolucionario requiere de un programa que encarne los intereses reales de todas las clases por él representadas. El programa es, en efecto, el instrumento fundamental para la organización y conducción de la lucha de los trabajadores, tras la conquista del poder y la transformación de la sociedad.

Este partido tuvo conciencia de la importancia del programa desde su nacimiento. Más aún, antes de su fundación, quienes serían sus creadores ya habían caracterizado el estado de la economía del país y el carácter antinacional de la burguesía interna, al tiempo que afirmaron la conciencia antiimperialista en el Programa de Acción Económica Inmediata ofrecido al pueblo durante la Repíblica Socialista de 1932. "Todo ha sido entregado sistemáticamente al extranjero, señaló, a consecuencia de lo cual la administración del crédito, el ejercicio del comercio interno y externo, el control de los salarios y el mercado del trabajo se han escapado de nuestras manos". La situación era más grave todavía. Las empresas extranjeras se habían apoderado ya de todas las actividades productivas de materias primas y una gran parte de los servicios de utilidad social. He ahí el balance de una economía dependiente, caracterizada por el abismo abierto entre la prodigalidad burguesa y el pauperismo obrero.

Un año después, el Partido Socialista aprobó en su primer congreso general de octubre de 1933, un Programa de Acción Inmediata. Este programa planteó, en el orden nacional, una serie de transformaciones estructurales de la sociedad y medidas de carácter social. En el orden externo, definió la lucha contra el imperialismo, exigió el establecimiento de relaciones permanentes con la Unión Soviética, afirmó su autonomía de la Segunda y Tercera Internacionales, promovió la unidad de la clase trabajadora mundial, caracterizó la condición singular de la revolución latinoamericana y formuló el objetivo de la unidad de las futuras repúblicas socialistas del continente. En 1935 se amplió y perfeccionó dicho programa en su segundo congreso general ordinario. Posteriormente, el Partido Socialista proclamó la candidatura presidencial de Grove y dio a conocer un Programa Mínimo, que comprendía un balance de la administración oligárquica y las soluciones ofrecidas al movimiento popular, así como planteaba que sólo un cambio de régimen económico y social resolvería los problemas de los trabajadores y anunciaba el advenimiento del Estado socialista. Estas definiciones fueron adoptadas en su tercer congreso general ordinario.

Después vino la "charca". Una década sin preocupación por el programa, durante la cual las cúpulas dirigentes se sentaron en la mesa a participar en el festín de la colaboración ministerial, con olvido absoluto de los principios socialistas, hasta que una nueva generación, formada en la Federación de la Juventud Socialista y movilizada con la consigna "ahora o nunca", restableció el orden de los valores del socialismo, sustituyendo una política pragmática por una política de principios. Entonces renació el interés por el programa. En 1947, el Partido Socialista aprobó, en una conferencia nacional, un nuevo programa dentro de un riguroso marco teórico, cuya fundamentación fue elaborada por Eugenio González.

Este programa formuló dos líneas de acción en el marco de la lucha de los trabajadores por la conquista del poder. La primera preconizó la nacionalización de las industrias básicas y del sistema bancario, la reforma agraria, el manejo estatal de los servicios públicos, especialmente los de seguridad social, salubridad, vivienda y educación. La segunda, una activa industrialización, técnicamente planificada, contando para ello con las condiciones naturales del medio geográfico, como son las riquezas básicas (cobre, hierro, energéticos, etcétera) y las aptitudes y capacidades predominantes en la población, para producir con vistas a satisfacer las necesidades de consumo de los mercados interno y externo. La convergencia y movilización de las fuerzas sociales comprometidas con estos objetivos se orientaban hacia la conquista del actual Estado y su transformación en el sentido socialista. Posteriormente, el Partido Socialista compartió su programa, actualizando sus objetivos inme-

diatos, con los demás partidos de la izquierda, en sus campañas electorales hasta 1973.

La década comprendida entre 1947, en que se formuló el programa, y 1957, en que se elaboró la concepción estratégica de Frente de Trabajadores, es de intenso trabajo teórico. Agotada la experiencia populista, este partido, bajo la conducción principal de Raúl Ampuero, señaló un nuevo camino: la construcción del más amplio "Frente de Trabajadores", bajo la hegemonía de la clase obrera revolucionaria, la formulación de una plataforma común de la lucha para el período inmediato y la elaboración de un programa de construcción socialista. Este Frente de Trabajadores tiene su germen en la "alianza de trabajadores manuales e intelectuales" de 1933 y su cristalización en el "poder popular" de 1970-1973, el que supone poner fin a las políticas de conciliación con el frente de los capitalistas, o con una de sus fracciones, sobre la base del programa burgués de consolidación del capitalismo.

Este camino es un proceso de autonomización política de los trabajadores, por medio del cual desarrollan su capacidad para programar sus alternativas de acción en la lucha por el poder y la transición socialista. En este definido marco conceptual, la clase trabajadora adopta una política independiente de la política burguesa, superando de este modo la fase en que el movimiento obrero se limitó a la crítica de las alternativas capitalistas. Desde el punto de vista programático, en el Frente de Trabajadores, los intereses de las clases explotadas se proyectan a través de la radicalización del proceso revolucionario tras los objetivos socialistas. Tal fue la experiencia del gobierno de Allende. En los frentes populares, conducidos por fracciones burguesas, en cambio, sólo se consideran reducidas soluciones para los intereses de corto plazo de los trabajadores por intermedio de programas orientados hacia la consolidación del sistema capitalista. Tal es el camino de los gobiernos de la "Concertación".

El socialismo chileno puso de este modo la cuestión del poder en el centro de la preocupación de los trabajadores, fuerza motriz de la revolución La Fundamentación Teórica, siguiendo la orientación de la Declaración de Principios de 1933, definió por eso la vía revolucionaria a través de la caracterización del Estado burgués. Expresa este documento:

> Como órgano coercitivo, el Estado es un producto de la lucha de clases y su función consiste en defender, mediante la fuerza si es necesario, los privilegios de la clase dominante. Cuando los antagonismos de clase hayan desaparecido, el Estado en su actual carácter de aparato represivo carecerá de razón de ser.

Es la caracterización clásica del marxismo. Si alguna duda hubiera existido sobre la validez de esta definición, el golpe militar de 1973 y la dictadura consiguiente la disiparon completamente. La cruenta y brutal dictadura de Pinochet fue la expresión represora del Estado capitalista, en el que el alto mando de las Fuerzas Armadas, de filiación derechista, sirvió como instrumento de los intereses de la clase dominante.

Pero el socialismo chileno no se limitó a ella, sino que definió su objetivo estratégico. Así quedó patente en el documento aludido. "La conquista del actual Estado es, sin embargo, condición previa de la revolución socialista. No podrá realizarse la transformación radical de la estructura de la sociedad sin un desplazamiento del poder político desde la minoría capitalista a la clase trabajadora". Esta formulación excluye, pues, la posibilidad de transición socialista dentro de la institucionalidad burguesa, como lo postula la socialdemocracia, así como la colaboración en gobiernos hegemonizados por partidos que representan los intereses de esta clase dominante y constituyen, por lo mismo, una línea de defensa del imperialismo. La experiencia del gobierno popular de 1970-1973 confirma esta conclusión, en cuanto que éste fue derrocado por la acción conspirativa de la institucionalidad (mayoría del parlamento, Corte Suprema, Fuerzas Armadas, partidos tradicionales, gremios empresariales y colegios profesionales).

En el mismo documento se reafirmó, de manera categórica, dicha posición, al definir el carácter del Partido:

> El socialismo es revolucionario. La condición revolucionaria del socialismo radica en la naturaleza misma del impulso histórico que él representa. No depende, por lo tanto, de los medios que emplee para conseguir sus fines. Sean éstos cuales fueren, el socialismo siempre es revolucionario, porque se propone cambiar fundamentalmente las relaciones de propiedad y de trabajo como principio de una reconstrucción completa del orden social.

Las formas y medios de lucha para desplazar a la burguesía serán determinados por "la resistencia que ofrezcan los grupos privilegiados a las fuerzas en ascenso de la revolución socialista". Más que eso. Las condiciones objetivas y subjetivas determinarán en cada país los caracteres en los que se desenvolverá el proceso revolucionario. En esta última materia, el movimiento popular adquirió una experiencia, si bien dolorosa, de inobjetable valor en los años 1973-1989, acerca de cómo aprecia el poder del Estado la clase dominante.

Desde su fundación, el Partido Socialista señaló a la clase trabajadora como agente histórico de la Revolución, concepto en el cual comprende a capas sociales explotadas en la sociedad capitalista, que constituyen la mayoría social en el país.

Desde la primitiva "alianza de trabajadores manuales e intelectuales", formulada a partir de 1933, al "frente de trabajadores" hay una sola línea de pensamiento y acción. Esta afirmación tiene especial relevancia en el presente, cuando desde la burguesía se ha buscado la división del movimiento obrero a través de varias centrales sindicales y la ruptura del entendimiento socialista-comunista, condición impuesta por la Democracia Cristiana al Partido Socialista para una coalición con ella, convirtiéndolo en una fuerza subordinada.

En el apartado de la Fundamentación Teórica del Programa de 1947, titulado El socialismo y la clase trabajadora, se define dicho concepto:

> Para el socialismo, el concepto de clase trabajadora no está circunscr to a los sectores urbanos del proletariado industrial, sino que se extiende a todos aquéllos que, no siendo poseedores de instrumentos de producción de riqueza material, obti snen sus medios de subsistencia en forma de sueldos, salarios o remuneraciones directas, con el empleo de su capacidad personal de trabajo. La clase trabajadora es, en todos los países, la mayoría nacional.

Esta concepción formulada en 1947 se presentó en la década de los años setenta como un "descubrimiento" del eurocomunismo, por la terciarización de las economías desarrolladas, es decir, por el crecimiento de los servicios (tercer sector de la economía) y la disminución del proletariado. Este último sector, en efecto, se ha reducido, pero la clase trabajadora ha crecido.

El concepto de clase trabajadora es más amplio todavía que la alianza de obreros y campesinos definida por Lenin, pero no elude el papel hegemónico del proletariado señalado por Marx. La Fundamentación Teórica agrega:

> Así entendida, la clase trabajadora comprende desde los profesionales libres hasta los campesinos a jornal. Ello no obstante, es la clase obrera la que experimenta en sí, con mayor intensidad, su condición de explotada en la sociedad capitalista. Es ella, en consecuencia, también la que objetivamente representa el núcleo central del movimiento revolucionario de los trabajadores.

Por eso, en el marco de esta concepción del socialismo chileno, de nada sirve el esfuerzo de algunos analistas de hoy por mostrar la reducción del proletariado y el crecimiento de capas medias diferenciadas, que luchan con mayor agresividad por sus reivindicaciones sociales, porque unos y otros constituyen en conjunto a la clase trabajadora, que representa a la mayoría de la sociedad actual. En esta realidad inobjetable se basa el Frente de Trabajadores.

Constituyendo la clase trabajadora la mayoría social del país, puede desarrollar el proceso revolucionario, el cual requiere el impulso unitario y coherente de ella. Históricamente, la viabilidad de la revolución surge de la fusión del movimiento popular con el pensamiento socialista. Por eso, el socialismo chileno, después de definir su estrategia, puso su mayor empeño en unir a las masas tras dicha estrategia por medio de alianzas como el Frente de Acción Popular y la Unidad Popular. En la Fundamentación Teórica del Programa definía como uno de sus objetivos inmediatos:

> La unidad de la clase trabajadora es condición necesaria de la Revolución Socialista, tanto en el orden económico como en el orden político. El socialismo propicia, por lo tanto, la organización unitaria, nacional e internacional, de los trabajadores para la lucha por sus reivindicaciones específicas de clase. Esta unidad es más indispensable para la acción revolucionaria que deberá llevar, en un momento determinado, a los sindicatos y demás organismos obreros a la lucha directa contra la sociedad capitalista en su conjunto.

Esta última línea estuvo presente también en las declaraciones de principios de la Confederación de Trabajadores de Chile y de la Central Unica de Trabajadores. Tal es la línea tradicional del movimiento obrero, desde su nacimiento a fines del siglo xix hasta ahora, por lo que no ha prosperado la concepción de las centrales sindicales "ideológicas" importada para dividir al movimiento obrero, ni tampoco la apertura en este mismo sentido ofrecida por el "nuevo" Código del Trabajo, como parte del "plan laboral" elaborado por los empresarios e impuesto por la dictadura para dominar a los trabajadores y mantener la desigual distribución del ingreso.

La Revolución rusa y su regresión

En relación con el camino hacia el socialismo, cabe agregar que el Partido Socialista se alzó, desde su nacimiento, en contra del intento del comunismo de establecer una ideología oficial para el movimiento revolucionario mundial. No esperó, pues, las crudas revelaciones de Jruschev en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en 1957, para enjuiciar teóricamente a la reversión estalinista. Por el contrario, se anticipó diez años en la denuncia de la omnipotencia de la burocracia estatal que, lejos de erradicar la dominación del hombre por el hombre, la degradación de la persona humana y la alienación económica, política y espiritual, propias del capitalismo, mantuvo estos fenómenos. Más aún, el comunismo soviético tuvo que esperar más de 40 años para abrir el debate sobre la fal-

sificación historiográfíca de la Revolución de Octubre y arribar a conclusiones similares a las formuladas por la Fundamentación Teórica del Programa de 1947 del Partido Socialista de Chile y, en general, de la crítica de la izquierda mundial.

El socialismo chileno había afirmado, en efecto, en dicho documento:

> La Revolución de Octubre tiene, en la historia del movimiento proletario, una significación trascendental. Por primera vez, a través de ella, la clase obrera se apoderó del Estado y emprendió una política tendiente a crear las bases objetivas y subjetivas para la construcción ulterior del socialismo. Esto implicaba la acelerada transformación, a través del proceso revolucionario, de una sociedad todavía semifeudal en una sociedad democrática orientada hacia el desarrollo de una economía de tipo socialista.

Pero no sucedió así y, para constatar la desviación experimentada por este proceso revolucionario, no era necesario esperar la *perestroika,* que llegó demasiado tarde.

La Fundamentación Teórica se anticipó en más de cuatro décadas a señalarla:

> Sin embargo, la política inicial de socialización del poder económico, expresó, se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de capitalismo de Estado, dirigido por una burocracia que ejerce el poder en forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora. De este modo, los auténticos fines del socialismo, para servir a los cuales se realizó la Revolución de Octubre, se fueron desvirtuando cada vez más en función de una política de Estado que no tiene en cuenta los intereses de los trabajadores.

¿No es eso mismo lo que han planteado los obreros de la Union Soviética? Las grandes huelgas de mineros formularon reivindicaciones similares a las que se plantean en los países capitalistas, al comienzo de la década de los noventa del siglo xx, cuando se iniciaba la descomposición y el derrumbe de la obra social, económica y política que tuvo su origen en la Revolución de Octubre.

Libertad y humanismo

En oposición a la experiencia soviética, el socialismo chileno ratificó el sentido y valor de la libertad cuando los pueblos luchaban por ella en el periodo de entreguerras y en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Producto de la evolución económica y social de las sociedades modernas, el socialismo recoge las con-

quistas políticas de la burguesía más avanzada, las cuales fueron posibles con las luchas del proletariado, para darles la plenitud de su contenido humano:

> El sacrificio de las libertades en un régimen colectivista conduce inevitablemente a inéditas formas sociales de carácter clasista y antidemocrático del todo ajenas al sentido humanista y libertario del socialismo. Ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad.

He ahí la pedagogía de la libertad. Es de nuevo la Fundamentación Teórica del Programa de 1947 la que proclama estos principios reivindicados hoy en la Federación Rusa y demás países del llamado socialismo real de Europa del Este por los propios partidos comunistas y por sus sucesores, después de su cambio de nombre y de programa. Éste es un retorno al socialismo originario.

El socialismo chileno estuvo siempre en buena compañía en esta materia. No puedo mencionar a todos, pero corresponde citar algunos. Rosa Luxemburgo define la libertad como el único medio capaz de proporcionar una formación política consciente a las masas, aún frente al autoritarismo bolchevique. Adler sostiene que en una sociedad dividida en clases (habría que recordar que las sociedades en transición también lo están) la libertad es bandera de la clase obrera independientemente de la mejora de sus condiciones materiales. Karl Korsch, anticipándose a las deformaciones "comunistas", niega la posibilidad de que los obreros puedan influir en la producción de sus propias condiciones de vida con el ascenso al poder de déspotas que imponen su voluntad en contra de ellos. Herbert Marcuse, partidario en su juventud de Rosa Luxemburgo y miembro de la escuela de Frankfurt, vuelve a plantear el concepto de libertad en un sentido aún más amplio, continuando la tradición marxista. Podrían citarse a muchos teóricos más, como Lukács, Gramsci, Zweezy, Bloch, etcétera.

La exigencia de libertad se ha formulado, ya no sólo por los teóricos marxistas, sino por los propios trabajadores en los procesos revolucionarios que han dado lugar a las sociedades en transición. Yugoslavia en 1948, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968 y Polonia en 1981. Los sucesos producidos en estos países se inspiran en similares consideraciones a las contenidas en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947 del socialismo chileno. En Checoslovaquia se habló, en su hora, de un socialismo de rostro humano, como si pudiera existir otro de rostro inhumano o, dicho en términos del checo Kalivoda, "si es posible hablar de un modelo estaliniano del socialismo, sólo cabe hacerlo en el sentido de que es un modelo no marxista de socialismo". Esta cuestión básica está en el centro de la discusión

abierta por Gorbachov en el Unión Soviética, desde 1985, así como en la mayoría de los países del campo socialista, proceso que tuvo una expresión cruenta en China y trajo el derrumbe de los regímenes "comunistas" de Europa del este en 1989 y de la Unión Soviética en 1991.

Actualmente, constituye una verdad indiscutible que la clase trabajadora no puede desempeñar una real función política en un sistema sin libertades democráticas. La ausencia de éstas la recluye a su lugar de trabajo, condenándola a una especie de corporativismo. La democracia socialista o es integral o no es democracia. Ella descansa en la unión de la autonomía de los productores y la autodeterminación de los ciudadanos, de la gestión de las empresas con la participación de las organizaciones obreras y la dirección política por ellas mismas. Debe consistir, en suma, en la combinación de la democracia directa y la democracia representativa, con la hegemonía de la mayoría social: la clase trabajadora. La lucha actual de los revolucionarios en los países del este de Europa es por la redefinición de los socialismos reales y no por el retorno al capitalismo, aunque sí hay sectores que pretender aprovecharse del río revuelto para obtener una ganancia de "pescadores". No me refiero, por cierto, a los sectores capitalistas que asumieron el poder en algunos de esos países, sino a los que todavía luchan por recuperar los valores del socialismo.

Este sentido de libertad, consubstancial al socialismo, fue ratificado enfáticamente por el Partido Socialista de Chile en un momento histórico en que la humanidad expresaba su repugnancia por los crímenes masivos cometidos en campos de exterminio y de trabajo forzado por el hitlerismo y el estalinismo. En este sentido era fiel al pensamiento de los fundadores. En efecto, en 1842, escribió Marx: "El peligro mortal para cualquiera persona reside en perderse a sí misma. Por lo tanto, la pérdida de la libertad es un peligro mortal para el hombre". Es:e concepto es corroborado por Engels en 1847 al afirmar: "No tenemos deseos de comprar la igualdad al precio de la libertad". Por eso, el socialismo supone el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad.

La permanente crítica al proceso soviético facilitó el desarrollo de una concepción democrática del poder, que implica la socialización no sólo de la economía, sino también de las instituciones políticas. La experiencia rusa demuestra, precisamente, que no es posible edificar el socialismo sin una profunda revolución en la generación y el ejercicio del poder, que promueva y garantice la participación directa del pueblo, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por lo mismo, el socialismo chileno nunca se hizo solidario con la ausencia de libertad, con la arbitrariedad y con el terror que caracterizaron el proceso político en el este de Europa. Por el contrario, inspirado en el humanismo marxista, captó y promovió las

exigencias democráticas. La libertad es un valor permanente e irrenunciable en toda forma de organización social, que conlleva la capacidad real de decisión de todo el pueblo, pero no basta sostener estos principios en los textos jurídicos, sino que su práctica debe darles credibilidad política.

La caudalosa corriente histórica del socialismo chileno exhibe bien una preocupación constante por asegurar la facultad inalienable del pueblo a decidir su propio destino en un ambiente de libertad. Así lo ha demostrado en los momentos estelares de nuestra historia más reciente. En el período 1932-1933, al nacer, cuando enfrentó la gran crisis del sistema capitalista, y en el período 1970-1973, al ser aplastado por las armas, cuando trató de superar la quiebra definitiva del régimen demoliberal, ofreciendo a los trabajadores una conciencia de poder y haciéndolos sentir la experiencia de ser protagonistas principales de la historia. En ninguna otra época, el pueblo chileno fue más libre y se sintió más próximo al socialismo que en esos momentos de crisis revolucionaria, cuyos símbolos fueron Grove y Allende.

El análisis precedente conduce a otra cuestión controvertida que pasará a adquirir, en el debate marxista, una profunda repercusión muchos años después de la publicación del programa de 1947. Se trata de la polémica sobre marxismo y humanismo. La Fundamentación Teórica adoptó, en dicho año, una posición inequívoca al respecto. "El socialismo es, en su esencia, humanismo", expresa, precisando enseguida su contenido y alcance. "A la actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por las exigencias del utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del hombre integral, en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades creadoras". En este sentido, el hombre crea la historia, generando la estructura social que luego lo moldea, pero al mismo tiempo lucha por desarrollar las condiciones de su superación, con lo cual el hombre superará también su propia enajenación, porque es el creador de sí mismo.

El marxismo rechaza todas las formas de especulación metafísica acerca de la "esencia" del hombre, destacando que "semejantes conceptos siempre involucraban la aceptación injustificada de la veracidad absoluta de experiencias adquiridas por ciertas clases sociales en determinados períodos históricos", es decir, promovían estas experiencias "a la categoría de principios objetivos e invariables". Por el contrario, él proporcionó una interpretación científica del hombre activo:

> Al analizar las múltiples formas de actividad humana, Marx demostró cómo éstas crean un ámbito específico de vida humana, fundado sobre el medio natural y las necesidades biológicas del ser humano, pero que se eleva por encima de estas condiciones preliminares y crea una realidad separada que progresa junto con el desarrollo de las actividades materiales y sociales del hombre. En todo período de este desarrollo histórico, el

hombre es plasmado por dicha realidad y simultáneamente es creador de la misma: el hombre es el mundo del hombre".[39]

De esta manera, genera un destino superior a través del socialismo.

El socialismo chileno tampoco está solo en este terreno. Son muchos los teóricos marxistas, en efecto, que han destacado el contenido humanista del marxismo, incluso en la Unión Soviética, después del xx congreso del PCUS, pero hay quienes también trataron de rebajar esta connotación, como el filósofo comunista Louis Althusser. El inauguró la controversia sobre este asunto en 1964, es decir, diecisiete años después de la formulación de la Fundamentación Teórica del Programa de 1947, suscitando la intervención en el debate de varios pensadores comunistas y socialistas. Althusser señaló entonces la importancia de esta polémica como "un hecho sintomático de la coyuntura teórica e ideológica del marxismo contemporáneo".

En 1965 se publicó *Socialist Humanism. An International Symposium,* por Doubleday, Garden City, Nueva York, cuya primera reimpresión en España se hizo en 1980 por Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Barcelona, con el título Humanismo Socialista. Este libro fue coordinado por Erich Fromm, quien consiguió la colaboración de numerosos autores, de oriente y de occidente, muchos de ellos marxistas, junto a algunos liberales y católicos, para tratar una materia estrechamente relacionada con el socialismo. Los ensayos contenidos en este volumen tratan sobre el humanismo, el hombre, la libertad, la alienación y la práctica. Pero, en general, ponen el acento en el humanismo socialista, porque como expresa Fromm en la introducción, Marx "fue el primero que postuló la imposibilidad de separar la teoría de la práctica, el conocimiento de la acción, los fines espirituales de' sistema social".[40]

Por el mismo tiempo se realizó la gran polémica sobre el humanismo, desencadenada por Louis Althusser con la publicación de su artículo 1 itulado *Marxismo y humanismo en Cahiers de V I.S.E.A.,* en junio de 1964, en Francia, y después en la revista Crítica Marxista, en Italia. Este articulo fue escrito por Althusser, a petición de Erich Fromm, para la obra mencionada, pero no fue reproducido en ella, por ser "contrario a la línea general de su proyecto". A dicho trabajo dio respuesta en Clairité Jorge Semprum y, posteriormente, Nouvelle Critique publico ambos artículos, abriéndose una discusión en la que participaron los filósofos Michel Simón y Michel Verret. Estos trabajos fueron reproducidos en el libro *Polémica sobre marxismo y humanismo,* publicado por Siglo Veintiuno Editores, colección mínima, en

[39] B. Chuchodolski, "Humanismo renacentista y humanismo socialista", en *Humanismo Socialista,* Barcelona, Paidós, 1980, págs. 45 y 46.

[40] Erich Fromm, *Humanismo Socialista,* Barcelona, Paidós, 1980, págs. 45 y 46.

1968, en México, con numerosas reediciones. El interés de los lectores ratificó la afirmación con que Louis Althusser comenzó su escrito "El humanismo socialista está a la orden del día", así como confirmó también la previsión anterior de Eugenio González, cuando señaló en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947: "El socialismo es, en su esencia, humanismo".

En esta oportunidad, con todos los riesgos y las dificultades de los esquematismos, procuraré precisar, en forma por demás somera, los términos de la discusión. De acuerdo a la crítica y superación por Marx del mito filosófico de la "naturaleza humana", de la antropología especulativa, es posible distinguir en la palabra humanismo dos significados. Por una parte, un sentido filosófico, en cuanto concepción del mundo en la que la práctica humana es deducida de la esencia del hombre considerado como el fin supremo de la historia (opuesta a la teísta). Por otra parte, un sentido real, en cuanto concepción que afirma el valor del hombre y tiene por objeto, en los límites de una época histórica determinada, la satisfacción de sus necesidades vitales y aspiraciones de libertad, al tiempo que le atribuye la capacidad de construir la historia en persecución de sus propios fines.

Es esta última connotación la que tiene precisamente el humanismo socialista en la Fundamentación Teórica. No es éste, por lo tanto, un concepto idealista, que diga la relación con la supuesta naturaleza humana. El mismo documento despeja cualquiera duda al respecto. "Como socialistas, consideramos el concepto de *libertad* en relación con las condiciones de vida de la época. No se trata de la abstracta libertad de los filósofos ni de la libertad para la explotación de las masas preconizada por el liberalismo burgués". La abstracción del concepto de *libertad* lleva a algunos a confundir el liberalismo con el socialismo. El documento precisa enseguida que cada etapa del desarrollo histórico ofrece a los hombres determinadas posibilidades de libertad, dentro del conjunto de las relaciones objetivas que resultan fundamentalmente del régimen de propiedad y de producción.

La Fundamentación Teórica del Programa de 1947 diferencia explícitamente el humanismo socialista de aquellos que lo precedieron, desvirtuando otra objeción corriente. "El humanismo de la revolución burguesa ha tenido que limitarse a las formas políticas y jurídicas y, aun dentro de ellas, se ha manifestado más en las leyes que en los hechos. El humanismo de la revolución socialista, que ha de eliminar la división de la sociedad en clases de intereses contrapuestos, tiene en cambio un carácter total". No obstante, dentro de este marco de discontinuidad y contradicción, el humanismo socialista recoge los valores de protesta y de crítica sociales contenidos en el humanismo burgués, realizándolos plenamente en la perspectiva universal y liberadora del socialismo. Se trata de un proceso de integración similar

al que sucede con la democracia burguesa, que es superada por el socialismo, alcanzando su plena comprensión social.

Althusser, en la línea del escolasticismo soviético, no niega la existencia del humanismo socialista, sino que considera una ruptura en el pensamiento de Marx hacia 1845, que escinde una primera fase "ideológica" de una segunda fase "científica" (teórica). Desde este punto de vista, acuñó la infortunada caracterización del marxismo como un antihumanismo teórico, reconociéndole sí al humanismo socialista un carácter ideológico. Por otra parte, dentro de este última concepto, distingue entre el humanismo de clase, que según él se habría expresado en la Unión Soviética durante cuarenta años mediante la "dictadura del proletariado" (todo el período estalinista), y el humanismo de la persona vigente a partir de la transformación de aquélla en "Estado de todo el pueblo". Presenta así la mitología "científica", fundamento de la profunda deformación de la ideología estalinista que se redujo a escombros en el derrumbe de la Unión Soviética.

En esta materia, es auspiciosa la compañía de Ernest Bloch. Expresa este pensador marxista:

> Lo humano no se encuentra, por consiguiente, en cada sociedad como generalidad alguna existente, sino en el proceso laborioso, y se alcanza solamente a través del comunismo. El moderno punto de vista proletario no sólo no elimina el valor humanismo sino que lo posibilita. Y cuanto más científico es el socialismo, tanto mayor es su preocupación por el hombre y tiene más a la vista la superación real de su a ienación.

Esta interpretación explica, a mi juicio, el aforismo de Terencio a que alude Marx: "Soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno". Sólo así se logrará la emancipación humana. Al respecto, expresa Bloch: "Entonces nuestros semejantes ya no serán como en la faceta egoísta, burguesa, de los derechos humanos, frenos y obstáculos para nuestra libertad, sino que todos los hombres vivirán unidos en la comunidad de la libertad".[41] Es la nueva libertad que traerá consigo el socialismo.

Este humanismo socialista está relacionado con la vida y el pensamiento de Mariátegui, que se reproducen en el Che Guevara. Las concepciones de este revolucionario sobre el carácter dependiente del capitalismo en esta región del mundo y la incapacidad de las burguesías internas para hegemonizar una revolución nacional y democrática, como la que realizaron los países desarrollados de Europa, encuentra sus raíces latinoamericanas en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, y su

[41] Ernst Bloch, "El hombre y el ciudadano según Marx", en *Humanismo Socialista,* Barcelona, Paidós, 1980, pág. 248.

demostración evidente en la Revolución cubana. No puede pedirse mejor compañía, ni mayor grado de autenticidad. Es curioso el extraño paralelismo existente entre el "amauta" peruano y el "condotiero" argentino: ambos fueron dominados por la curiosidad científica y el anhelo de cambiar al hombre y al mundo, para lo cual universalizaron su pensamiento.

Mariátegui y Guevara, atraídos por la teoría, realizaron un formidable esfuerzo de voluntad destinado a complementarla con la acción, superando dolencias graves: parálisis en el primero y asma en el segundo. La existencia de ambos, por extraña paradoja, fue igualmente breve, por lo que presintiendo su destino trabajaron muy de prisa. En sus últimos días, cuando preparaba su viaje a Argentina, donde esperaba recibir una pierna ortopédica en reemplazo de la amputada, a Mariátegui se le oyó exclamar: "Ahora es cuando se me está haciendo sentir toda la magnitud y la orfandad de mi invalidez". En similares circunstancias, cuando preparaba su viaje para iniciar una nueva lucha, Guevara dice en carta a sus padres: "Ahora, una voluntad que he pulido con delectación de artista, sostendrá unas piernas nacidas y unos pulmones cansados. Lo haré". Ambos representan la afirmación del humanismo socialista.

Marxistas "confesos y convictos" afirmaron sus principios cuando muchos dudaban. El guerrillero heroico, como Mariátegui, tuvo siempre una confianza ilimitada en la fuerza subjetiva, en la fuerza moral del hombre, emanada del humanismo marxista. Esta fe en el hombre es la que llevó al Che a compararse con Don Quijote. En la última carta a sus padres les expresa en efecto: "Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo", a sabiendas de que, como dice Miguel de Unamuno, "una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de todo un pueblo, de todo el género humano acaso". Como héroe de la revolución, él es no sólo Quijote sino también Sancho, dos facetas indisolubles de la criatura humana, que vemos vivas y palpitantes en cada acto de esa aventura americana, porque, como agrega el pensador vasco, "Prueba más quijotismo seguir a un loco un cuerdo, como era Sancho, que seguir el loco sus propias locuras".

Tal es la eterna relación entre los grandes conductores, portadores de la fe en causas universales y generadores de voluntad de acción, y las multitudes formadas por hombres sencillos, de carne y hueso, apremiados por sus necesidades materiales secularmente insatisfechas, que los siguen y gracias a los cuales los ideales perduran más allá de la finitud de aquéllos. Por lo mismo que, en esa interrelación, Don Quijote muere cuerdo y Sancho, henchido de ideales, se vuelve "loco", dispuesto a continuar la obra que su señor había dado por terminada y, como lo recuerda don Miguel, le dice en su lecho de muerte: "¡Vuelva en sí! ¡Vuelva en sí y déjese de

cuentos!"[42] En el caso del Che no fue necesaria tal invocación, porque él, sintesis de ambos valores, fue capaz de fundir el sueño y la vida en su otra hasta la muerte, sin una duda ni un desfallecimiento. No pudo, por eso, proferir esa frase terrible del libertador Simón Bolívar, dominado por el escepticismo, al **final** de su vida: "He arado en el mar". Por el contrario, él murió convencido de que su obra se consolidaría, primero en Cuba y, tarde o temprano, en el resto de América Latina.

El Estado y la democracia

El Partido Socialista de Chile contribuyó igualmente, de manera lúcida, en el esclarecimiento de la relación del Estado con la democracia, durante su desarrollo, a partir de la afirmación inicial de éste sobre la necesidad de la democracia real. En sus primeros años y en plena lucha contra el fascismo, el nuevo partido sostuvo la defensa de las garantías democráticas, las libertades públicas y los derechos sociales y humanos por "todos los medios a su alcance", contra cualquiera tentativa de violencia reaccionaria. Pero esta "defensa de las instituciones democráticas no entraña la aceptación del corrompido sistema político puesto en práctica hasta ahora", toda vez que la "nueva democracia supone superar el sistema capitalista". De esta manera cruda y sin ambages, lo expresa a fines de la década de los años treinta, Luis Zúñiga, a la sazón jefe político de este partido, para agregar en seguida:

> La defensa de las normas democráticas no importa una abdicación para la lucha paralela por la conquista del socialismo. Los socialistas chilenos no abandonarán jamás esta finalidad, encarnada ya en el corazón de los trabajadores, porque no han organizado un partido socialdemócrata dentro del conglomerado de partidos exister.tes.[43]

Estas palabras revisten hoy plena actualidad.

Los dirigentes de esos años tenían una clara comprensión de este tema, lo que explica conceptualizaciones como la siguiente:

> Sólo la sustitución del régimen económico individualista por el orden económico socialista aportará el bienestar y la justicia a la colectividad. ¿La democracia por la democracia?

[42] Miguel de Unamuno, *Vida de Don Quijote y Sancho,* Barcelona, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, Renacimiento, 1928, pág. 277.

[43] Luis Zúñiga, "El Partido Socialista, Partido del Pueblo, 1938", reproducido en *Pensamiento Teórico y Político del Partido Socialista,* Santiago, Empresa Editora Nacional Quiinantú, 1972, pág. 18.

> No. Sería un criterio reaccionario y absurdo. Revelaría complicidad con las clases oligárquicas. En la trayectoria cumplida por los movimientos sociales del mundo no cabe más que una política admisible: la democracia al servicio del pueblo. Esta es la finalidad que no debemos perder nunca de vista.[44]

Entonces, ya se reconocía que es el socialismo el que califica a la democracia, dándole un contenido revolucionario, en cuanto constituye aquel un proceso hacia la conquista de la igualdad y la libertad.

El socialismo chileno ha expuesto, en múltiples ocasiones y documentos, que reconoce y aprecia las luchas populares por conquistar y hacer efectivos cada vez mayores derechos democráticos en el interior del sistema capitalista o recuperarlos cuando se han perdido, como sucediera en Chile en el período 1973-1989. Más aún, su mayor avance hacia el poder político lo logró tres años antes a través de un proceso electoral. Esta valoración y práctica no se confunde, sin embargo, con la concepción reformista de que la democracia, en las condiciones de dominación burguesa, se puede ampliar por sí sola hasta conducir al socialismo, sin que medie un cambio revolucionario en la hegemonía social, a partir de la cual los trabajadores pasen a dirigir el proceso de construcción socialista. No puede olvidarse tampoco que los "demócratas" de la burguesía prescinden o abjuran de ella cuando conviene a sus intereses, como sucedió entre 1973 y 1989 en Chile y hoy todavía tienen el descaro de justificar los crímenes de la dictadura y defender a los malhechores.

Eugenio González, presentado por algunos socialistas renovados como defensor de la democracia burguesa, es quien definió con mayor claridad la concepción del socialismo chileno sobre la democracia. En efecto, el carácter de permanencia que algunos pretenden conferir a la democracia burguesa, considerándola no como una categoría histórica y, por lo tanto, eminentemente cambiante con el desarrollo de la sociedad humana, sino como una categoría absoluta, fue refutada también tempranamente por el socialismo chileno.

> Por razones obvias, la clase dominante en un momento dado —la clase que ejercita el derecho de propiedad sobre las fuerzas materiales de producción— asigna al orden institucional que la favorece un carácter de permanencia que, por su naturaleza misma, él no puede tener ya que en su propio seno se van generando nuevas fuerzas sociales, representadas por una nueva clase, las que han de provocar, andando el tiempo, modificaciones revolucionarias en la estructura y el funcionamiento de la sociedad.

[44] *Ibidem*, pág. 20.

Es de nuevo la Fundamentación Teórica del Programa de 1947.

De manera complementaria con la caracterización anterior, el mismo documento básico rechaza ese neutralismo social o desclasamiento preconizado por una especie de socialismo burgués.

> El fenómeno de la lucha de clases, más virtual que explícito en las sociedades antiguas y medievales, es en la época moderna, fundamentalmente económica, el factor dinámico por excelencia de la vida histórica. De él resalta la progresiva inestabilidad de las sociedades modernas agitadas en su base misma por las fuerzas de antagónico sentido, irreductibles a cualquiera integración dentro de las actuales relaciones de producción.

Como una réplica también anticipada a ciertos esfuerzos orientados a conciliar los intereses sociales con los intereses individuales en una sociedad de clases, dicha Fundamentación Teórica agrega: "Los fines del individuo y los fines de la sociedad son, ciertamente, incompatibles sobre la base del dominio privado de los instrumentos de producción".

Rechaza de este modo, en efecto, la concepción abstracta, inc iferenciada desde el punto de vista de clases, de la democracia, considerándola en cambio como una categoría histórica. "Cada etapa del desenvolvimiento histórico, expresa, ofrece al hombre determinadas posibilidades de libertad, dentro del conjunto de relaciones objetivas que resultan fundamentalmente del régimen de propiedad y de producción." En este marco conceptual, es coherente la afirmación contenida en dicho documento: "Las libertades que proclamó la burguesía han sido, por eso, letra muerta para los que no disponen sino de su fuerza de trabajo". Esta afirmación no ha perdido su valor, por cierto, con el transcurso del tiempo y la experiencia que los chilenos hemos vivido en las últimas décadas sino que, por el contrario, se ha acrecentado.

Conforme a su filiación marxista, el Partido Socialista sostuvo igualmente una caracterización correcta del Estado burgués. "Como órgano coercitivo, el Estado es un producto de la lucha de clases y su función consiste en defender, mediante la fuerza si es necesario, los privilegios de la clase dominante. Cuando los antagonismos de clases hayan desaparecido, el Estado en su actual carácter de aparato represivo carecerá de razón de ser". Dicho de otra manera, en tanto existan clases existirá también Estado, el que siempre representará a la clase dominante, con lo que de paso rechaza las absurdas ideas de neutralidad o de autonomía del Estado, o no comprometido con el interés de la clase dominante en la sociedad vigente, como sostienen los socialdemócratas, con distintos matices. Pinochet nos dio una lección

brutal y dolorosa sobre esta materia, en el sentido de cómo el Estado practica el más criminal terrorismo.

La relación entre este Estado y la democracia es definida asimismo por el socialismo chileno:

> Expresión política de la burguesía y del capitalismo, el Estado democrático-liberal tiene órganos diferenciados de poder que expresan el juego de los intereses de clases dentro de un orden jurídico definido, pero carecen de una estructura que corresponda a la naturaleza de las fuerzas sociales que en él actúan, sobre todo en el plano de las actividades directamente productoras. La democracia concebida así, de una manera mecánica, tiene un alcance puramente formal y la libertad interpretada como una expresión abstracta de la soberanía no pasa de ser una ficción metafísica.

Esto lo escribió Eugenio González hace medio siglo, y antes que él lo sostuvo Marx, y no existe ninguna demostración de que ello hubiera cambiado.

Por el contrario, el golpe militar, la dictadura de la derecha y el restablecimiento de la "democracia", bajo la constitución de 1980 y las leyes políticas complementarias dictadas por la burguesía y aprobadas por el "parlamento" de los cuatro capos, comprueban las definiciones del Estado y de la democracia de la clase dominante expuestas en la Fundamentación Teórica tantas veces citada. La caricatura de democracia existente hoy en Chile, en la que un tercio del electorado (la derecha) vale igual que los dos tercios y por si esto fuera poco los que ejercieron la dictadura (las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema) eligen siete senadores y el ex dictador se convirtió en senador vitalicio, proyecta una especie de picaresca política como nuestra imagen visible en el mundo.

La concepción anterior llevó al socialismo chileno a plantearse, en 1947, la conquista del Estado burgués para sustituirlo por el Estado socialista durante la edificación de la nueva sociedad. Así lo señaló la Fundamentación Teórica:

> La conquista del actual Estado es, sin embargo, condición previa de la Revolución Socialista. No podrá realizarse la transformación radical de la estructura de la sociedad sin un desplazamiento del poder político desde la minoría a la clase trabajadora.

Esta afirmación supone la concepción estratégica del poder dual, que mantiene su vigencia por encima de las divagaciones incoherentes que postulan la realización del socialismo a través de la extensión de la democracia burguesa, como si esta clase dominante lo hubiera permitido en algún lugar del planeta. Mucho menos ahora con el sistema político heredado de la dictadura en 1989, que la "concertación" por

la democracia se comprometió a respetar, con la garantía de los mismos asaltantes del poder en 1973.

Retomando el análisis teórico, cabe agregar que el nuevo Estado ha sido definido por el socialismo chileno como una República Democrática de Trabajadores, que descansará en el cambio de las relaciones económicas y sociales de modo de establecer el control social de los medios de producción y el derecho de los trabajadores a participar en la dirección de la economía a través de un sistema de planificación democrática. Esta nueva forma de Estado desarrollará modalidades directas y representativas de la soberanía popular, generará una legalidad socialista que habrá de garantizar la plenitud de todos los derechos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales, así como respetará el libre funcionamiento de los sindicatos y demás organizaciones sociales. Esta concepción se basa en el pensamiento de Marx, en el que el socialismo y la democracia están indisolublemente unidos, principio que se rompe en la Revolución soviética por el acoso de las potencias capitalistas, durante la guerra civil. Posteriormente, José Stalin convirtió esta necesidad transitoria en una condición permanente, fundamento de las deformaciones del sistema.

El Partido Socialista de Chile así lo estableció en la mencionada Fundamentación Teórica:

> Resueltos los antagonismos de clase por la socialización del poder económico, la autoridad pública ha de ser la expresión superior de la interdependencia de las funciones colectivas. La desaparición paulatina de las formas estaduales de contro. político, correlativa al desarrollo planificado del trabajo social, hará posible una verdadera democracia, es decir, una democracia orgánica en la que los hombres, ciudadanos y productores, realizarán la integración de lo individual y lo colectivo, de la libertad y la necesidad.

El socialismo será así, como ya se ha dicho, un proceso hacia la conquista de la igualdad y de la libertad. En esta perspectiva, la República Democrática de Trabajadores no se ha propuesto, desde el comienzo, una estructura acabada, sino que sólo representa un proyecto indicativo que se irá configurando en la lucha misma por alcanzar sus modalidades definitivas en el marco de la democracia.

El poder popular, surgido en los años 1970-1973, en cuanto germen de poder dual, no alcanzó el desarrollo requerido hasta constituirse en la base orgánica del nuevo Estado, lo que sólo es posible a través del desplazamiento de la burguesía del poder. No obstante, fue el resultado de una actividad nacida desde la base social y de los requerimientos de la lucha de clases. Por no responder a un modelo preconcebido en detalle, la estrategia de poder dual es, pues, un proceso de creación de las masas revolucionarias. En este sentido, el poder popular constituyó, sin duda, un

ensayo de democracia socialista. Eugenio González fue testigo, en su vejez, de una experiencia en que el pueblo chileno procuró convertir la teoría desarrollada por él en práctica revolucionaria. La derrota por las armas de esta experiencia popular no significa, por último, su invalidez, porque ella permanece en la memoria colectiva como una importante experiencia.

La concepción de la *democracia* expuesta por Eugenio González y sostenida hasta 1973 por el Partido Socialista de Chile se basa en el pensamiento de Marx, quien consideró a la democracia burguesa como formal, porque ella reconoce ciertos derechos y libertades, así como también cierto tipo de representatividad, pero al mismo tiempo está limitada, en tales aspectos, por su carácter de clase y su sujeción a la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, el socialismo, entendido como la sociedad de transición al comunismo, asume las conquistas democráticas alcanzadas en la sociedad burguesa, confiriéndoles un contenido social que supera los límites que les impone ese carácter de clase, y los desarrolla hasta conjugar su sentido representativo y directo. Por su parte, el Estado de transición, aunque se sustenta, como todo poder estatal, en la fuerza, no puede dejar de ser democrático, en el proceso de edificación de la nueva sociedad. De este modo, una vez constituida la sociedad comunista se establecerá la democracia de la libertad, con lo que la democracia, de simple medio bajo la hegemonía burguesa, se convertirá en fin. Este pensamiento de Marx está expuesto en *La guerra civil en Francia* y en *Crítica del Programa de Gotha* y fluye coherentemente en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947 del Partido Socialista de Chile.

Socialismo y liberalismo

Conjuntamente con la Fundamentación Teórica del Programa de 1947, cabe señalar la claridad de uno de los discursos pronunciados por Eugenio González en el Senado sobre *El socialismo frente al liberalismo*, en el que establece las diferencias entre ambos movimientos, en el curso de una polémica con el senador Raúl Marín. Esta temática es importante porque hasta hoy tiene plena actualidad. Como buen marxista comenzó por fijar las diferencias de método entre ambos:

> El punto de vista de nuestro severo impugnador es dogmático, es decir, se basa en consideraciones abstractas, absolutas, acerca de la condición del hombre y la naturaleza de las cosas; el nuestro es histórico, o sea, se basa en consideraciones realistas, relativas,

inspiradas en la experiencia del continuo transcurrir de la vida humana y de las condiciones en que se desarrolla.[45]

He ahí las diferencias de método, base fundamental de las diferencias de contenido real.

En seguida ofreció una clase de cultura con brillo sin igual:

El sentido de la historicidad de lo humano, de su esencial temporalidad, tan característico del espíritu de nuestra época, lleva a una interpretación relativista de la cultura en todos sus órdenes: de las ideas y de las instituciones, de las formas de' arte y de las modalidades del Estado, de los sistemas filosóficos y de los regímenes políticos, de las creencias religiosas y de las categorías económicas.

Escuchado con atención y respeto, él prosiguió su disertación.

Toda ideología, bien lo han puesto de relieve Mannheim y Scheller, entre los contemporáneos, y, antes de ellos, Marx, es producto de una determinada situación histórico-social, como toda política es el resultado de una determinada correlación de las fuerzas y los intereses. Para juzgar, entonces, correctamente una doctrina y una política, hay que comprenderlas, penetrar en su intimidad viva, aprehender los valores que entrañan, lo que jamás puede conseguirse si se prescinde de las circunstancias en que ellas aparecen.[46]

Como diría José Ortega y Gasset, siempre hay que considerar al hombre y su circunstancia o las condiciones que lo rodean.

Este sólido e irrefutable discurso, de "concreto armado", combina armoniosamente, sin pedantería intelectual, una rica fundamentación filosófica e histórica:

La manera racionalista, abstracta, de juzgar las cosas históricas conduce a esas extrañas tergiversaciones a que alude Spengler, autor por el que nuestro colega manifiesta laudable devoción, cuando critica "el culto tributado por el club de los jacobinos a Bruto, millonario y usurero, que en nombre de una ideología oligárquica y con aplausos del senado patricio apuñaló al hombre de la democracia". Son frecuentes estas tergiversaciones derivadas de una falta de comprensión histórica. Los ideólogos de la Revolución Francesa y, en general, los representantes del racionalismo político, los políticos "metafísicos",

[45] Eugenio González R., "El socialismo frente al liberalismo", en *Pensamiento Teórico y Político de! Partido Socialista,* Santiago, Quimantú, 1972, pág. 95.
[46] *Ibidem,* pág. 96.

como diría Comte, incurren en ellas con atolondrada complacencia. Aplican sus esquemas lógicos y valorativos, que modestamente estiman de alcance universal y eterno, a las más disímiles circunstancias para equiparar, valgan los ejemplos por lo repetidos, la democracia antigua a la democracia moderna, con olvido de las bases reales de la una y la otra...[47]

Concepto este último que reviste plena actualidad cuando se habla de la democracia hoy como una categoría absoluta, ajena por completo a la lucha de clases.

González analiza a continuación, otra diferencia de enfoque del liberalismo y del socialismo, que la dictadura de Pinochet puso al rojo vivo: ¿Es inmutable la naturaleza humana?:

Para justificar su defensa del capitalismo, nuestro honorable colega ha incurrido, no obstante, a las características de la naturaleza humana, entre las cuales el afán de utilidad de ganancia, de lucro, el afán egoísta de bienestar individual serían el motor insustituible del progreso económico. ¿...Existe una "naturaleza humana" tan inmodificable en su primitivismo ético, ajena al devenir histórico, la misma sean cuales fueren las condiciones sociales y culturales? ¿Qué sentido tendría, entonces, el mensaje de superación moral del cristianismo, la voluntad de lucha contra el mal que se afirma en su fe militante?

Después de variadas consideraciones sociales, el senador socialista agrega como conclusión:

La tan mentada naturaleza humana no es una entidad intemporal, inmutable; es también, en gran medida al menos, una variable histórica. La historia entera, escribía Marx, en su conocida crítica a Proudhon, no es más que una constante transformación de la naturaleza humana.[48]

Definió también con propiedad el significado del liberalismo económico, que hoy tiene interés resaltar:

¿Qué puede aceptarse, a la luz de la experiencia social y del análisis científico, de las teorías del liberalismo económico? Juzgado desde el punto de vista nuestro, ellas fueron la expresión "ideológica" de una situación histórica: constituyeron, en el plano intelectual, una impostergable reacción contra las ya caducas concepciones mercantilistas que orientaban la política económica de los modernos estados nacionales. Eran fórmulas

47 *lbidem.*

« *lbidem,* pág. 98.

adecuadas para la expansión de las nuevas fuerzas de la economía capitalista y correspondían, además, a tendencias predominantes en el pensamiento científico.[49]

De acuerdo a este criterio, él señala que la sociedad, como la naturaleza, se rige por leyes de estructura y de funcionamiento, pero que no pueden reducirse a "esquemas mecánicos", como las que expresan las relaciones del árrbito físico.

En este sentido, la economía liberal formuló las "leyes" del capitalismo y estableció las bases de su desarrollo en una etapa inicial, pero que los ideólogos del neoliberalismo defienden hoy como permanentes. No han cambiado, en efecto, si se observa que de nuevo se reclama propiedad privada sobre los medios de producción, explotación de los trabajadores, libre manejo de las empresas, respeto a la iniciativa individual y a la competencia, flexibilidad laboral, el mercado convertido en regulador supremo de la vida humana, desrregulación de las economías, limitación de la actividad del Estado a la "seguridad pública". En este marco de hierro, "el bienestar colectivo surgiría como efecto natural del juego libre de los esfuerzos individuales; la armonía económica se lograría espontáneamente, suprimiendo cualquiera ingerencia perturbadora del poder político. Pronto, puede decirse que en cuanto comenzó a difundirse como doctrina y a practicarse como política, el liberalismo económico fue objeto de impugnaciones teóricas y de atacues concretos, en sus bases y en sus consecuencias".[50] Hasta hoy ello continúa a pesar de su predominio en los gobiernos y las empresas privadas, globalizadas por el imperialismo.

El rechazo surgió desde distintos ámbitos. Desde el punto de vista filosófico, la "escuela histórica" impugnó el carácter universal y eterno de las leyes de este capitalismo industrial, sosteniendo que ellas y las teorías en que se afirmaban debían cambiar en el tiempo con las "alteraciones históricas producidas en la constitución económica de la sociedad". El poder espiritual de las iglesias cristianas y otras expresiones del campo de las ideas modernas, el socialismo, remarcaron la contradicción de este capitalismo con la dignidad humana. Agrega entonces:

Pero la gran reacción contra los males del industrialismo capitalista tenía que producirse en las masas obreras que el nuevo régimen económico condenaba, en razón de las "inflexibles" leyes de la producción y del intercambio de la riqueza, a una situación en muchos aspectos más terribles que la del esclavo antiguo y la del siervo medieval. A lo largo

[49] *Ibidem,* pág. 100.
[50] *Ibidem,* pág. 102.

> del siglo xIx, sobre todo a partir de la revolución de 1848, se suceden los movimientos obreros, se constituyen grandes organizaciones sindicales y aparecen los partidos socialistas.[51]

Carlos Marx marcó un corte en este período con el *Manifiesto Comunista* de 1848, y el movimiento obrero combatió a un sistema que sustentaba su explotación de la mano de obra en la represión del Estado.

En discurso, pronunciado en el Senado, Eugenio González procuró, por último, explicar el sentido del socialismo chileno. Partió del reconocimiento del valor de la libertad en la vida social, a propósito de "una cita primorosa" del senador liberal:

> "El pájaro prefiere la libertad a la jaula de oro" ¿Quién, sin ser un retrógrado obtuso, de frágil conciencia moral o un sectario de místicas delirantes, podría estar en desacuerdo con el señor Marín en este punto? Los socialistas no tenemos, sin embargo, de la libertad un concepto metafísico como los ideólogos de la burguesía liberal, lamentablemente aficionados a suplantar las realidades de la historia por entidades de la razón.

Cita a la Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista de Chile, que ya se analizó en este mismo ensayo. Rechaza también la identificación de la política socialista con el intervencionismo estatal, con la burocratización de la economía y con la absorción del hombre por el Estado, expresando: "Ni en la teoría, ni en la práctica, ni como doctrina, ni como política, corresponde el auténtico socialismo a esta deformada imagen que de él propalan sus detractores".[52]

5' *Ibidem, pág.* 105.

52 *ídem.*

Teoría y práctica

Punto de intersección política

De 1938 a 1952 transcurrieron 14 años de gobiernos sucesivos de la izquierda, con hegemonía del Partido Radical, que en la hora de un balance general mostraba su incapacidad para alcanzar un desarrollo económico y social significativo, que diera satisfacción a las necesidades de una sociedad cada vez más exigente. Las grandes ilusiones de 1920, incrementadas en 1938, sufrieron una frustración, trayendo consigo el desencanto y el pesimismo. De la depresión de los años treinta, se había pasado a la de los años cincuenta. En este lapso, socialistas y comunistas tuvieron un ascenso y una caída, en medio de un sistema capitalista incipiente y de un régimen político hecho a la medida de su clase dominante. Ambos partidos se sometieron a las normas de ese sistema, por lo que su pérdida de influencia en el movimiento popular se debió a la subordinación a las prácticas tradicionales y a la ideologización de sus políticas, lo que dio lugar a prolongadas discusiones.

En el caso del Partido Socialista, este debate duró mucho tiempo. Durante los catorce años de alianzas de gobierno, este partido se desgastó en las competencias burocráticas, la pequeña contienda por los puestos públicos, la formación de las clientelas políticas. Ello finalmente repercutía en triunfos y derrotas electorales en torno a pequeños liderazgos carismáticos. En este proceso, algunos de los dirigentes se acomodaban económicamente, perdiendo su independencia política. Ellos hacían su propia "revolución". La crítica en ese período se concentraba en la incapacidad de cumplir sus objetivos en beneficio de los trabajadores, por las restricciones de las coaliciones, las presiones civiles y militares y la pérdida de apoyo de las multitudes. Estas condiciones se convertían en causas de las constantes divisiones, que contribuían a su decadencia.

La experiencia política y la discusión ideológica efectuada en torno a ella, llevaron al Partido Socialista hacia 1953 a una transformación de un partido de carácter populista y de masas, colaborador en alianzas de gobierno, a un partido de vanguardia, opositor al sistema económico y político dominante. Desde 1947, contó con un programa de lucha por el socialismo, que le permitió pasar del Frente Popular al Frente de Trabajadores, en un marco más acentuado de lucha de clases, y mostrarse más preocupado de una mayor justicia en la distribución del ingreso que del simple crecimiento, de la unión de los conceptos de crecimiento económico y desarrollo social. Esta nueva política, más radical desde el punto de vista ideológico y programático, hizo cambiar las alianzas partidarias, hasta lograr la unidad política y sindical de la clase trabajadora. Pasó así de la lucha por refomas dentro del sistema a la lucha por el poder y contra el sistema.

En los 20 años comprendidos entre la segunda mitad de la década de los cuarenta y la primera mitad de la década de los sesenta (1946-1966), el Partido Socialista experimentó un resurgimiento incesante sobre la base de la nueva estrategia de Frente de Trabajadores lograda en el congreso general celebrado en 1957, la alianza socialista-comunista y las campañas presidenciales de Allende. Contribuyó, por cierto, a este crecimiento el factor programático, es decir, la elabaración y difusión de programas más avanzados, que trajeron consigo la confrontación, en vez del consenso, con las fuerzas de la burguesía. No obstante la radicalización de los programas y plataformas de lucha, el partido utilizó los caminos democráticos. Las condiciones anteriores exigieron alianzas de clases no antagónicas dentro de los asalariados, obreros, campesinos, empleados, profesionales y técnicos, en las cuales la hegemonía correspondía a los partidos populares, es decir, a los partidos socialista y comunista. En estos años destacó la personalidad de Raúl Ampuero, con un liderazgo indiscutible.

En 1952, los socialistas estaban divididos en dos organizaciones, el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular, y con escaso apoyo electoral. El sector grovista (Partido Socialista Auténtico) ya se había extinguido. El radicalismo y los sectores que apoyaban a la combinación gubernativa enfrentaron la elección presidencial del año mencionado, con Pedro Enrique Alfonso. El Partido Socialista Popular apoyó a Carlos Ibáñez, que ya tenía en su favor a un amplio movimiento de masas, de corte populista. La derecha, constituida por liberales y conservadores, estaba representada por Arturo Matte. Por último, Salvador Allende, que se había retirado de su partido por no estar de acuerdo con el apoyo a CarloS Ibáñez, se convirtió en candidato del Frente del Pueblo, configurado por el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista. Ibáñez venció con 46.8% del electorado y fue con-

firmado en el Congreso Pleno como presidente de la República. Allende, en esta primera embestida, obtuvo sólo 5.5% de los votos.

Este cambio de posiciones entre las tendencias de izquierda y de derecha en los socialistas requiere una explicación. El Partido Socialista Popular tuvo el coraje político de incorporarse en el vigoroso movimiento de masas que se generó en torno a Ibáñez, procurando darle una orientación progresista y ganar influencia entre los trabajadores movilizados tras las banderas del "general de la esperanza". Recuperar el apoyo de las grandes multitudes para sus propios objetivos. Por su parte, el Partido Socialista de Chile, que durante años se había opuesto al Partido Comunista desde posiciones de derecha, pactaba ahora con él, sobre la base de la candidatura de Allende. Entre ambos sectores socialistas se movían los grupos sociales principales (obreros, campesinos y empleados), cansados de las alianzas ineficaces, desde el punto de vista de sus intereses reales, hacia un gobierno independiente de los partidos tradicionales. Ibáñez marcó el fin de los gobiernos del Partido Radical y la apertura hacia una nueva perspectiva política. En tanto, Allende procuró darle rostro a una visión revolucionaria de esa perspectiva, seis años después, con el socialismo unido y el comienzo de la alianza socialista-comunista. Los tiempos comenzaban a cambiar.

El populismo ibañista fue, desde el punto de vista de su base social de apoyo y de algunos de sus propósitos programáticos, la continuación del Frente Popular. Una vez más, se unieron el proletariado, la pequeña burguesía y los sectores medios con la esperanza de remontar la crisis económica, social y política en que se debatía la sociedad chilena por el aburguesamiento del viejo Partido Radical, agente hegemónico del ciclo comprendido entre 1938 y 1952. No obstante, el nuevo gobierno presidido por el general Carlos Ibáñez no podrá encarar esta tarea histórica debido a las limitaciones de la herencia que le transmitieron sus antecesores y a sus propios compromisos de clase. Este nuevo auge del populismo en Chile coincidió con la caída de esta misma especie de movimientos políticos en países como Guatemala (Arbens) y Argentina (Perón). La permanente intervención yanqui en los países latinoamericanos trajo consigo tales flujos y reflujos en el desarrollo político de éstos. Antes de la victoria electoral de Ibáñez, se produjo la Revolución boliviana de 1952, con Paz Estenssoro, y al término de su mandato, surgió la Revolución cubana en 1959, con Fidel Castro. Las periódicas rebeliones de las masas no dieron reposo al Pentágono y la CÍA, en sus labores de infiltración, corrupción y manipulación de los altos mandos militares y los grupos políticos oligárquicos del continente americano.

El Partido Socialista Popular, nombre que adoptó la corriente de izquierda del socialismo chileno a raíz de la escisión producida en 1948, interpretando el senti-

miento de las masas, se incorporó al caudaloso movimiento que eligió en las urnas a Carlos Ibáñez y participó durante los ocho primeros meses de su gobierno, etapa en la cual se pusieron en marcha todas las medidas avanzadas de política social. Se esforzó por conducir dicho movimiento, imprimiéndole una orientación revolucionaria, pero fracasó en este intento. En abierto conflicto con el presidente de la República, se retiró del gobierno y actuó en la oposición a la nueva política de derecha inaugurada en ese momento.

Es la primera fase de la administración de Carlos Ibáñez la que presentó un carácter progresista. Durante ella se puso en marcha una política orientada a reorganizar el aparato del Estado, mediante la aplicación de una ley por la cual el congreso le otorgó al gobierno facultades extraordinarias de orden económico y administrativo. Entonces, se dictaron varios decretos con fuerza de ley, por los que se crearon nuevos organismos públicos, como Ministerio de Minería, Banco del Estado, Instituto Nacional de Comercio y Empresa Nacional de Fundiciones, así como se reorganizaron algunos servicios de la administración pública centralizada y descentralizada, incluso el de comercio exterior. Además, se concedieron diversos beneficios sociales a los trabajadores, como el salario obrero agrícola, reajustado anualmente, la asignación familiar para los trabajadores urbanos y campesinos y la indemnización por años de servicio para los mismos. Estos nuevos derechos representaron, particularmente en el campo, un avance extraordinario

La economía marca el paso

El segundo gobierno de Ibáñez no encaró ninguna reforma en las estructuras económicas básicas. Su política en esta materia osciló de acuerdo a las variables del orden económico internacional y continuó las mismas prácticas aplicadas hasta entonces. Para comprender la política vacilante y contradictoria de este gobierno es necesario tener presente la estructura que tenía la economía nacional. Hay dos variables internamente relacionadas que influían de manera decisiva en ella: una era la llegada al límite del proceso de sustitución de importaciones y, la otra, la reincorporación más decisiva del país a los determinantes derivados de la dependencia, particularmente de Estados Unidos.

En el primer año del gobierno de Ibáñez, las exportaciones del principal producto de comercio exterior, el cobre, comenzaron a disminuir, perdiendo además la relativa capacidad de negociación que hasta entonces había podido sustentar el Estado. En la segunda fase del gobierno, iniciada en 1955, predominó por eso una po-

lítica de derecha, inspirada en las recomendaciones de la misión estadounidense Klein-Sacks, organización privada traída a Chile en virtud de negociaciones efectuadas solícitamente por Agustín Edwards. En ese momento, la situación económica nacional había experimentado un notable deterioro, con la caída del precio del cobre al término de la guerra de Corea. Esta situación trajo consigo el descenso de los valores retornados por la exportación de dicho producto, en el período 1953-1954, en 31.4%, afectando severamente a su comercio exterior. La inflación alcanzaba a su vez un índice alarmante: 83.8% anual.

La política de sustitución de importaciones mostraba ya su crisis en una economía dependiente, para enfrentar lo cual el gobierno de Ibáñez no consideró otra salida que la acentuación de esa dependencia por medio de las exportaciones. Esta definición fue el resultado final de las presiones del imperialismo y de la burguesía interna asociada a él. Estas perspectivas se fundaban en el desarrollo concentrado del proceso industrial, en el que algunas empresas se asociaron al capital extranjero, adquiriendo medios de producción relativamente evolucionados. Por otra parte, la irracional tenencia de la tierra no ofrecía posibilidades de mejorar la oferta agrícola tanto para el consumo interno como externo. La concentración del ingreso nacional trajo consigo la obligación del Estado de procurar a la población productos de consumo indispensables por medio de importaciones, lo que exigía mayor disposición de divisas.

En el curso de estos años se incrementó la desocupación por la desaceleración del proceso de industrialización, la disminución de la demanda externa de cobre y de otros productos mineros, la modernización de algunas empresas y la caída de la demanda de bienes alimenticios. La mayor desocupación repercutía finalmente en el Estado, que tendía a ofrecer empleos improductivos. De igual manera, se produjo un desfinanciamiento del Estado y el consiguiente endeudamiento interno y externo, particularmente durante los años 1950-1961, para atender obligaciones fiscales, en su mayor parte fueron contraídas en moneda nacional, pero a partir de dicho año predominaron los créditos en moneda extranjera (de origen externo e interno). Además, para contribuir al equilibrio fiscal se promovió la reducción de las remuneraciones reales y el aumento de los impuestos indirectos.

Para remontar la crisis, la llamada Misión Klein-Sacks formuló medidas reaccionarias conocidas, repetidas una y otra vez. Los "misioneros" sostuvieron que la base de la política antiinflacionista residía en la supresión de las modalidades del ajuste automático anual de las remuneraciones de los trabajadores y en el sometimiento de éste a ritmos inferiores al alza del costo de la vida del año precedente. Esta política se materializó en la congelación de las remuneraciones de los trabajado-

res, con efectos desastrosos para éstos. En tal sentido, cabe señalar que, entre los años 1953 y 1959, la participación de los obreros en la distribución del ingreso nacional descendió de 30 a 25%, la del sector medio de 26.4% a 25.2%, en tanto que la participación patronal había crecido de 43.6% a 49.3%.

Conjuntamente con lo anterior, la misión Klein-Sacks aconsejó la reducción del gasto público, comenzando con la disminución de las remuneraciones reales de los trabajadores del Estado en 40%, entre los años 1955 y 1958, extendiéndola a las inversiones públicas. Además, recomendó la restricción de determinadas industrias, como las productoras de bienes de consumo inmediato, con lo cual produjo mayor desempleo. La política de contraer la demanda para controlar la inflación no resolvió los problemas de la economía, más bien los agravó. Pero la "misión" del imperialismo alcanzaba su designio de desarticular el modelo de desarrollo económico impulsado por el Estado desde 1938.

Las empresas transnacionales exigieron también su parte en esa redistribución, para lo cual se promulgaron dos leyes, previa negociación con aquéllas: la ley de nuevo trato a las compañías de la gran minería de cobre y la ley *de* referendum salitrero. Por la primera, se redujo la tributación de dichas empresas con el pretexto de incentivar sus inversiones, particularmente en la explotación del yacimiento de El Salvador. La segunda no fue menos leonina. Ella liberó a las compañías explotadoras de yacimientos salitreros, chilenas y extranjeras, del pago de impuestos, aumentó el valor del dólar de retorno y autorizó a aquéllas para agregar a sus costos legales el 10% anual de amortización extraordinaria a sus nuevas inversiones en los primeros cinco años. Como se dijo irónicamente entonces, se concedió a Osvaldo de Castro Ortúzar, el "jeque" del salitre, una generosa "pensión de gracia".

Balance del populismo ibañista

No obstante los escasos resultados económicos en beneficio de los trabajadores alcanzados durante el período presidencial de Ibáñez, el movimiento popular tuvo avances muy significativos en el orden sindical y político. Como en 1936, en que la fundación de la CTCH contribuyó en el desarrollo de la izquierda, en 1953, la fundación de la CUT tuvo un efecto similar. Los socialistas y comunistas conquistaron su hegemonía en la nueva central obrera en virtud de su fuerza y trad ción en el movimiento sindical. Poco después, en las elecciones parlamentarias de 1953, el Partido Socialista Popular tuvo un repunte, que le hizo aumentar de 4.8% logrado en las mismas elecciones en 1949 a 8.3% en las de 1953, eligiendo 19 diputados y 4 se-

nadores, votación que sumada a la del otro sector, de 1.5%, alcanzó a 9.8%. La alta votación del movimiento ibañista, que se concentró en el Partido Agrario Laborista, redujo el porcentaje de la derecha a 10% para los conservadores y liberales respectivamente. El Partido Radical, el gran derrotado, sólo obtuvo 14%, en vez de 27% de las elecciones parlamentarias de 1949.

En las elecciones parlamentarias de 1957 el cuadro electoral presentó variaciones significativas. El retroceso del ibañismo propiamente tal, fundamentalmente el PAL, determinó el ascenso de la derecha, con el 18% de los conservadores y el 15% de los liberales, y también del Partido Radical, con el 22 %. Los socialistas, todavía separados, obtuvieron 11% de la votación, con 6.3% para el PSP y 4.4% para el PSCH. Los comunistas, a pesar de permanecer en la ilegalidad, eligieron tres diputados inscritos en partidos legales. El Partido Demócrata Cristiano, recién fundado, incrementó su votación de 3% en las elecciones parlamentarias de 1953 (entonces Falange Nacional) a 9% en las de 1957. El grupo de generales, casi sin soldados, como se les consideró antes, empezaba a organizar un ejército, que alcanzará más tarde un tercio del electorado nacional. En este mismo año, después de las elecciones mencionadas, se produjo la reunificación del Partido Socialista en el congreso general, celebrado en Santiago en julio de 1957. El FRAP se fortaleció, por último, con la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (la ley maldita), que proscribía al Partido Comunista.

El presidente Ibáñez dejó a los chilenos un legado democrático. En el balance general, cabe destacar la unidad de la clase trabajadora a través de la fundación de la Central Unica de Trabajadores en 1953, la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, poniendo término a la proscripción del Partido Comunista y a la represión sistemática al movimiento obrero, y la reforma electoral, que hizo posible doce años después la victoria en las urnas de Salvador Allende. Las dos últimas iniciativas políticas se realizaron a fines de su gobierno, en virtud de su propio auspicio legislativo y con el apoyo decisivo de un bloque de "saneamiento democrático", constituido por los partidos de la izquierda tradicional. La derecha, como siempre, se opuso tenazmente a la nueva legislación.

De conformidad a la carta fundamental promulgada en 1925, en Chile se generaban las autoridades políticas, presidente de la República, Congreso Nacional y municipalidades, mediante el sufragio universal. Hasta 1973, tenían derecho a voto todos los hombres y mujeres mayores de 18 años, supieran o no leer y escribir y que estuvieran inscritos en los registros electorales. Las elecciones daban, en esta forma, legitimidad formal al traspaso del poder político de acuerdo a la voluntad mayoritaria de la Nación. El presidente de la República duraba en su cargo seis años,

los senadores ocho, renovándose por mitades cada cuatro, los diputados cuatro años renovándose totalmente y los regidores, tres años. Para la elección de los senadores, el país se dividía en diez agrupaciones provinciales, designándose cinco en cada una de ellas, y para la elección de diputados en 31 circunscripciones departamentales, eligiéndose uno por cada 30 mil habitantes y por fracciones superiores a 15 mil.

La legistación electoral contemplaba el sistema de representación proporcional, de cifra repartidora, conocido como sistema D'Hont, nombre de su creador, con el objeto de asegurar la preeminencia de las grandes corrientes de opinión e impedir el multipartidismo. Este sistema permitió, en un primer período, que los poderosos partidos de derecha obtuvieran las más altas representaciones en el Congreso Nacional y en los municipios, pero en seguida, debido a la distribución irregular de las fuerzas de los partidos en las diversas agrupaciones y circunscripciones electorales, se empezó a producir sobrantes de votaciones para estos mismos partidos. Para impedir esta situación se introdujo, por intermedio de la legislación, el sistema de pactos electorales o declaración de listas conjuntas de candidatos *de* los partidos con afinidades políticas o programáticas, lo que permitió efectuar compensaciones en las distintas circunscripciones. Esta modificación en el sistema electoral trajo consigo vicios que permitieron sobrevivir a pequeños partidos y ser elegidos candidatos con escasos votos de preferencia.

En las postrimerías de la segunda administración del general Carlos Ibáñez y con el apoyo de los partidos de la izquierda se aprobó, como ya se indicó, una profunda reforma de la legislación electoral dirigida a sanear este proceso de generación de las autoridades democráticas. La nueva ley electoral introdujo la cédula única impresa por la Dirección del Registro Electoral y entregada al elector en la propia mesa receptora de sufragios, en vez de la cédula confeccionada por los partidos y distribuida por ellos, como sucedía antes. Además, se prohibió el funcionamiento de secretarías políticas a cargo de los partidos durante el día del acto eleccionario, que facilitaban el cohecho, y se eliminaron los pactos electorales. Esta última disposición determinó la reducción de los partidos políticos, los cuales habían alcanzado un número excesivamente alto en virtud del mecanismo de los pactos de compensación electoral. En 1962 se complementó dicha reforma electoral, estableciéndose la obligatoriedad de la inscripción en los registros electorales, para los que se dispuso el funcionamiento permanente de las juntas inscriptoras a cargo de los registros electorales. La educación popular y el desarrollo de la conciencia social de la ciudadanía, unidos al perfeccionamiento de la legislación electora1, permitieron una evolución de este proceso hasta el punto de alcanzar un alto grado de limpieza y re-

presentatividad. Vicios tradicionales, como el cohecho, el fraude, la intervención de las autoridades políticas, la presión y la violencia fueron reducidos.

Los gobiernos del período de Frente Popular extendieron la educación pública en todos sus niveles y ramas, pero cedieron también ante la presión de la educación privada. La separación de la Iglesia del Estado, resuelta en la constitución de 1925 puso término a un siglo de controversias teológicas y conflictos políticos-religiosos en Chile, si bien dejó pendiente el problema relativo a la enseñanza religiosa obligatoria en el sistema educativo, que continuó planteando la Iglesia Católica a través de partidos confesionales, como el Partido Conservador. Durante el gobierno más reaccionario del ciclo radical, el de Gabriel González Videla, dicho partido formuló la exigencia de imponer la obligatoriedad absoluta de la enseñanza de la religión en los establecimientos escolares en vez del carácter optativo existente. Pero, ante el fuerte espíritu laico del sistema educativo, transó esta exigencia por la subvención de los colegios particulares por parte del Estado, en todos sus grados, incluso el superior. De esta manera, se consolidó un sistema dual de educación, financiado en gran parte por el Estado.

Los empresarios al poder

En la mitad del siglo XX se produjo la maduración de las condiciones objetivas que generarán la crisis social en la década de los setenta. En el campo de la burguesía se agudizaron las pugnas entre sus fracciones, impidiendo un desarrollo conjunto, separándose en dos opciones políticas sucesivas, personificadas por Jorge Alessandri y Eduardo Frei. En el movimiento popular, por su parte, surgieron sectores sociales más abrumados por las políticas reaccionarias, tanto en la ciudad como en el campo, sin organización adecuada y disciplina política, que trajeron consigo una nueva agitación social, con distintas formas de lucha. Estos sectores fueron comprometiendo, poco a poco, al conjunto del movimiento obrero organizado en sindicatos, federaciones y confederaciones. Las profundas contradicciones de clase, entre la burguesía y el proletariado, desencadenaron una crisis crucial del Estado democrático representativo, generado en la tercera década del siglo XX.

Después del fracaso del gobierno de Ibáñez, ambos sectores sociales formularon sus propios proyectos, sometiéndolos a las urnas en 1958. La contienda política se presentó principalmente entre Alessandri y Allende, venciendo el primero por un estrecho margen. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) condicionó una mayor penetración del capital extranjero, particularmente estadounidense, en el proceso de

industrialización, con dos efectos correlativos. Por una parte, se impulsó la diversificación del aparato productivo, en bienes intermedios, de consumo duradero y de capital. Por la otra, se fortaleció la fracción de la burguesía industrial, la que entonces se expandió de acuerdo con las otras fracciones burguesas. Jorge Alessandri realizó un típico gobierno derechista, que persiguió la aceleración del proceso de acumulación de la burguesía industrial y financiera, con alta inflación y reajustes salariales por debajo del alza del costo de la vida, es decir, la misma política recomendada por la misión Klein-Salk. Son los pasos perdidos del movimiento popular.

Entrando en un mayor análisis, cabe señalar que la burguesía lecuperó, a partir de 1958, la totalidad del poder. Se trata de un sistema político concebido en la constitución de 1925 para una sociedad de clases, esto es, una burguesía homogénea, una clase trabajadora pujante y, entre ellas, un Estado proteccionista y represivo, pero a la vez de carácter redistributivo y demoliberal. Este sistema político comenzó su crisis final, al tiempo que maduraba el proceso de proletarización, debido al nuevo impulso alcanzado por el capitalismo, perfilándose desde ya los dos proyectos en pugna: el burgués monopólico y el socialista, como se demostrará en la década de los setenta. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) es el mejor ejemplo de cómo la burguesía chilena entiende la democracia. La legitimidad formal de ésta arranca desde el gobierno de Joaquín Prieto (1831-1841), a partir del cual el poder político se transmitió a través de las urnas, primero, por un sistema censitario reducido e indirecto y, más tarde, por el sufragio universal y directo, desvirtuado por la intervención, el cohecho y la fuerza. Este sistema duró siglo y medio, interrumpido por golpes de estado de las Fuerzas Armadas a través de ciclos de una generación aproximadamente.

La expresión concreta de este orden es la consagración de los profundos desniveles en los ingresos, el consumo, la salud, la cultura y la libertad entre las clases, para lo cual sirvió tanto cierta formalidad democrática cuanto alguna dosis de arbitrariedad. El derecho público se entretuvo en la búsqueda del huidizo equilibrio entre la autoridad y la libertad. La afirmación difundida en el sentido de que la continuidad democrática de Chile es el resultado de la lucidez de la burguesía interna no resiste el menor análisis. Ella es parte de la mitología política. Pronto veremos, en efecto, a Eduardo Frei batir palmas por el golpe militar y a Jorge Alessandri aprobar, en los artículos transitorios de la constitución consagrada en espurio plebiscito, la prórroga del "mandato" de Pinochet por ocho años y el derecho a postular, a su término, a uno nuevo de ocho años más mediante "plebiscito". Esta continuidad, con las intermitencias mencionadas, no puede explicarse por factores subjetivos, sino por determinadas correlaciones de fuerzas sociopolíticas que, en su desarrollo, no

habían llegado a un punto de fricción que hiciera imperativa su crisis. Es a partir de esta correlación estructural, cuyo basamento real son las fuerzas productivas, que se deben explicar las intencionalidades de los grupos sociales y no, a partir de estos últimos, querer explicar esas diversas correlaciones. Los repetidos pronunciamientos militares que tuvieron lugar durante el siglo xx constituyen una demostración de esta interpretación.

El ascenso de Jorge Alessandri a la presidencia de la República se produjo precisamente en una de esas coyunturas históricas. Durante la segunda administración de Ibáñez, la institucionalidad burguesa se mantuvo sobre el filo de la navaja. Sectores militares propugnaron el quiebre del régimen constitucional para facilitar la actuación del viejo general. Pero Ibáñez no quiso entonces la dictadura personal ni la irrupción institucional de las Fuerzas Armadas, por lo que cortó de raíz la conspiración en los cuarteles poco después de iniciado su gobierno. El sector oligárquico de la burguesía, derrotado por el Frente Popular en 1938, consideró por su parte que había llegado la hora tan ansiada del asalto definitivo del Estado, no a través de los militares esta vez, sino directamente por sus genuinos representantes. Así surgió la consigna silenciosa: ¡Los empresarios al poder! Para alcanzar dicho objetivo, se mimetizó por medio de modernas técnicas de comunicación de masas. Alessandri se exhibió como "apolítico" en un país saturado por la demagogia, en el hombre austero que tornaba la frugalidad y la soltería en virtudes ciudadanas. Una especie de Adán antes de comer la fruta prohibida.

Detrás de Jorge Alessandri estaba el sector más tradicional y reaccionario de la burguesía, el viejo núcleo agroexportador, las grandes empresas capitalistas nacionales y transnacionales, así como los intereses del gobierno estadounidense. Era el más auténtico intérprete y personero de la burguesía interna y externa. Su victoria fue precaria, ya que a penas obtuvo 31% de la votación nacional, superando a Salvador Allende por sólo 30 mil sufragios. Pero contó durante su administración con el apoyo de toda la burguesía y su institucionalidad, incluidos sus partidos, que le dieron una amplia mayoría parlamentaria para gobernar. En la década de los sesenta se inició la crisis definitiva del modelo de desarrollo sustitutivo en el país. El capitalismo requería de nuevas formas de explotación de sus áreas periféricas, es decir, aquéllas que le permitieran índices de reproducción acordes con las necesidades de las tendencias monopólicas del sistema. El interés de las transnacionales se contradecía con el estado conciliador en esta economía precaria y subdesarrollada. La política de Jorge Alessandri se correlacionaba en este sentido con la segunda etapa de su antecesor, que marcó el comienzo de una acción encaminada a reducir la intervención del Estado en la economía, la que había alcanzado su más alto nivel durante el ciclo de los gobiernos radicales y al mismo tiempo a intensificar las inver-

siones extranjeras, para consolidar la interrelación entre los sectores interno y externo, así como la dependencia estructural de la economía nacional.

Este proceso dirigido a reducir la acción estatal determinó la destrucción o absorción por el capital extranjero de aquellas empresas de reducido tamaño que habían proliferado en virtud del estímulo y apoyo del Estado. Además provocó graves trastornos en la producción y el empleo, aparte de la desnacionalización misma. Esta crisis tuvo su origen en las tendencias expansivas de la economía imperialista, las que dejaron sus huellas digitales en medio de una secuela de paralización de empresas, desempleo e inflación. En un proceso de continuidad, el gabierno de Jorge Alessandri asumió la responsabilidad de corregir dichos efectos negativos. Su política en este sentido, si bien se presentó en apariencia como adversa a la de su antecesor, fue sólo complementaria de ésta. El objetivo fundamental consistía en reconsolidar a la burguesía para lo cual procuró reactivar la producción, incrementando la productividad, y expandir las inversiones para acelerar la acumulación. Dada la semiparalización de muchas empresas, así como la imposibilidad e structural de promover la sustitución de importaciones, dicha acumulación sólo podía hacerse efectiva por la vía exterior. Se continuó, por eso, la política "liberal" iniciada en el gobierno anterior, pero en vez de realizarse en contra del Estado se hizo a través del mismo.

El segundo gobierno de Alessandri enfrentó, pues, la crisis del proceso de industrialización sustitutiva:

> **Hacia** 1957 **terminaba una etapa importante del desarrollo industria [...] El proceso de sustitución de importaciones ha terminado y a falta de un aumento significativo del poder adquisitivo de los grupos bajos, la ampliación de las industrias de bienes de consumo estaba limitada por el crecimiento de la población.**[1]

Para remontar esta crisis, el gobierno promovió el desarrollo de las industrias dinámicas, esto es, las de bienes de capital (automotrices, metalmeca.nicas, químicas), de bienes de consumo durable (línea blanca, televisores, aparatos electrónicos), así como de las industrias intermedias, es decir, aquéllas que producen insumos para otras empresas. Este proceso, considerando la tecnología e inversión que requería, trajo consigo la asociación de la burguesía interna con los inversionistas extranjeros, política que correspondía, por otra parte, a la tendencia imperialista a invertir entonces en la industria latinoamericana.

[1] Ricardo Lagos, *La industria en Chile*, Santiago, Ediciones Universidad de Chil:, 1966, págs. 57 y 67.

Las cifras sobre la inversión extranjera en la industria chilena no eran expresivas de la realidad, debido a que numerosas empresas aparecían legalmente como nacionales, pero eran subsidiarias o estaban controladas por el capital monopólico externo. Hacia 1957, como lo señaló Lagos, los activos de las agencias extranjeras eran más de la mitad de los activos de las sociedades anónimas nacionales, sin considerar bancos y compañías de seguros. Esta situación es tanto más grave si se tiene en cuenta que la inversión de las primeras se concentraba en 60 empresas mientras que la concerniente a las segundas se dispersaba en 1 300 empresas. La política de estabilización se orientaba a reactivar la economía mediante el estímulo a la construcción de obras públicas y viviendas. El gobierno controló la inflación en los tres primeros años, por medio de un aumento de la cesantía y la congelación de las remuneraciones, concediendo reajustes inferiores al aumento real del costo de la vida. No obstante, sucesivas devaluaciones de la moneda precipitaron de nuevo el proceso inflacionario. La balanza de pagos sufrió un grave desequilibrio por el incremento de las importaciones, especialmente de alimentos, y del servicio de la deuda externa, que llegó a absorber cerca de la mitad de los ingresos en divisas. En 1963, es decir, al término de su mandato, pesó como una espada de Damocles, un 44.3% de inflación.

El fracaso de los "magos"

En un balance general del gobierno de los gerentes no podría menos que afirmar su más completo fracaso. Así lo expresa Alan Angelí, un destacado investigador inglés:

> El énfasis de Alessandri en mejorar las condiciones de la actividad comercial nada tiene de sorprendente. La derecha lo había elegido precisamente para que cumpliera ese papel. Esto se reflejaba también en la composición de su gobierno, que formó con una abrumadora mayoría de miembros de la élite económica. Pero el éxito del proyecto de Alessandri a largo plazo dependía de que esa élite transformara el sector privado en una clase capitalista modernizadora, capaz de competir con las empresas extranjeras. Esa transformación no ocurrió.[2]

La política impulsada por Alessandri, con el sacrificio de los trabajadores, para que el sector privado desarrollara la economía sólo fue aprovechada vorazmente por la clase dominante, en supropio beneficio. Prefirió "la protección y las ganancias

[2] Alan Angelí, *Chile de Alessandri a Pinochet*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993, pág. 39.

monopólicas a los efectos vigorizantes de la competencia". La historia económica de Chile durante el siglo xx demuestra, como lo señalara Aníbal Pinto, que la fuerza impulsora de la modernización capitalista no salió del empresariado, sino de lo que él llamara "tecnoburocracia" del Estado. La CORFO tuvo un papel relevante en ese sentido.

El Partido Socialista trató, en 1958, de evitar el ascenso de Jorge Alessandri al gobierno con la candidatura presidencial de Allende, por lo que, al término de su mandato, realizó su balance. En efecto, Ampuero, entonces Secretario General del Partido Socialista, caracterizó muy bien el gobierno de los gerentes. Después de 26 años, en que el primer Alessandri, con apoyo de la derecha, ganó por segunda vez la Presidencia de la República, esta misma fuerza oligárquica recuperaba el poder político, con menos de un tercio del electorado, "Apoyado en una plataforma liberal y libre-empresista, en brazos de una fuerte corriente de opinión que soñaba con el feliz retorno a los mitos económicos y políticos predominantes en épocas anteriores al Frente Popular...". El Partido Socialista realizó una firme política de oposición al gobierno de Jorge Alessandri, por lo que Ampuero expresó:

> Antes de cinco años, en efecto, las ilusiones puestas en Alessandri se habían desplomado. Bajo la inspiración de la política manchesteriana agudizaron los problemas tradicionales de la economía chilena en todos los campos, mientras una ola de inmoralidades sacudía los venerables cimientos de las instituciones más caras a la oligarquía.

El destacado dirigente socialista puso de relieve, una y otra vez, el carácter antisocial de la política de la derecha. Envilecimiento de las remuneraciones por el violento ritmo inflacionario, incremento de la cesantía, déficit fiscal, aumento de la deuda externa, dependencia financiera del extranjero. En este sentido sostuvo: "Si el pan de mañana, dice él, depende del banquero o del prestamista, uno y otro subordinados a determinada política extranjera, no es nuestra volun;ad la que manda, sino la voluntad extranjera". Esta política explicaba la complicidad con la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos y la ruptura de las relaciones diplomáticas, así como la agresión armada sufrida por Panamá, impuestas por Estados Unidos con la complicidad del gobierno de Chile. Agrega el dirigente socialista:

> La pobreza colectiva que se pretende idealizar bajo el manto de la frugalidad, no ha sido obstáculo para que el alto mando financiero, vinculado por múltiples lazos al equipo gobernante, haya vivido un quinquenio de oro. Los felices poseedores de los papeles del gobierno, bonos y pagarés, y los poderosos negociantes asociados con altas autoridades

> aduaneras pueden, tal vez alabar el régimen de los gerentes, pero el pueblo tiene sobrados motivos para repudiarlo con todas sus fuerzas.[3]

En las nuevas elecciones parlamentarias de 1961 continuó reajustándose los resultados de los comicios, el voto ciudadano. La derecha siempre fue a la baja, con 11% de los conservadores y 16% de los liberales, los radicales mantuvieron 21%. Los demócrata cristianos continuaron creciendo, esta vez con el 15%, dejando lejos, en el pasado, el carácter marginal de la Falange Nacional. La alianza socialista-comunista se elevó sobre 22%, dividido este porcentaje por mitades (11% cada uno), notable resultado para el Partido Comunista, porque era la primera vez que participaba en elecciones parlamentarias después de la derogación de la "ley maldita". La derecha quedó de nuevo fuera de la competencia electoral para acceder al gobierno, por lo que a poco andar volvería a golpear las puertas de los cuarteles militares, en lo que es experta.

La otra cara de la derecha

Ante el avance significativo de las fuerzas de izquierda, la burguesía enfrentó la sucesión presidencial en 1964 con algunas ideas programáticas de cambios socioeconómicos, en el marco de la Alianza para el Progreso, formulada por el gobierno de Estados Unidos. La derecha suele enmascarar su programa central, adoptando divisas de la izquierda, como en 1933 con Arturo Alessandri, en 1946 con Eduardo Cruz-Coke, en 1964 con Eduardo Frei y en 1999 con Joaquín Lavín. En la campaña presidencial de 1964, toda la burguesía (la derecha y el centro) se unió en torno a la Democracia Cristiana, con un programa de cambios, que permitiera consolidar el sistema de dominación capitalista. Esta ilusión terminó por esfumarse, en parte, por el abandono de la ultraderecha de su apoyo al gobierno debido a los "excesos" de las reformas y, en parte también, por la percepción de la izquierda de los límites mezquinos de las mismas.

Las reformas planteadas por sectores de la burguesía obedecían a algunos intereses económicos conjugados con el impulso del imperialismo estadounidense de cambios en las estructuras económicas y políticas añejas de la región, para contener los efectos de la Revolución cubana en la conciencia colectiva de los pueblos latinoamericanos. No sólo eso. También ciertos proyectos que reclamaba la burguesía

[3] Raúl Ampuero, *1964: año de prueba para la revolución chilena,* Santiago, Prensa Latinoamericana, 1963.

interna industrial, desarrollada durante las décadas de los años treinta y cuarenta, respecto a la división de la tierra. En efecto, la burguesía dinámica vinculada al capital extranjero, necesitaba expandirse hacia las tierras improductivas o subutilizadas, persiguiendo el incremento de las exportaciones agrícolas y abaratar la fuerza de trabajo. La reforma agraria proyectada hacia el latifundio no afectaba a la burguesía agraria modernizada. No obstante, las políticas reformistas del gobierno de Frei provocaron la resistencia de los sectores burgueses afectados, así como de la pequeña burguesía también herida en sus intereses inmediatos.

El fracaso de los nuevos "magos" de las finanzas derrumbó la poderosa coalición de partidos en que se sustentó el gobierno de Alessandri, obligando a éstos a votar por el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, quien triunfó con el apoyo financiero de la CÍA y las empresas transnacionales, la campaña del terror psicológico y la demagogia más desenfrenada, frustrando el segundo intento viable de la izquierda por conquistar el gobierno con Salvador Allende en las urnas. Frei fue, pues, el protagonista principal en este proceso, pero el instrumento político de que se valió fue la Democracia Cristiana, cuyo ingreso a la escena es preciso explicar. La cruda crítica a los excesos del liberalismo y la condenación al marxismo formulada por León XIII en 1891, casi medio siglo después de publicado el *Manifiesto Comunista,* a través de la Encíclica *Rerum Novarum* y reafirmada por Pío XI en 1931 a través de la Encíclica Quadragesima Anno, prepararon los espíritus para asimilar la nueva ideología burguesa. Europa fue el crisol donde se fundieron sus elementos para extraer de ellos una política concreta para nuestro tiempo.

Al despuntar el siglo xx, algunos intelectuales católicos franceses expusieron sus ideas al respecto. Marc Sagnier y Emmanuel Mousier formularon las primeras teorizaciones, las cuales alcanzarán su cima por medio del neotomismo preconizado por Jacques Maritain. Este movimiento espiritual, afligido por el destino del hombre en este "valle de lágrimas", intentó el diseño de un Estado cristiano mediante un conjunto de reformas al sistema capitalista. Como instrumentos de esta concepción estratégica, surgieron los partidos socialcristianos, con un carácter no confesional, orientados a conquistar a las capas medias, a los intelectuales y a los sectores más pobres de la sociedad. Estos partidos accedieron a gobierno en diversos países de Europa, como Italia, Alemania, Bélgica y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, proceso que se extendió más tarde a oros países, particularmente de América Latina. En todas partes estos partidos se presentaron como propulsores del desarrollo capitalista, con un sesgo reformista en los países atrasados y dependientes.

La Democracia Cristiana chilena tiene sus antecedentes históricos en la Falange Nacional, rama desprendida en 1938 del viejo tronco del Partido Conservador. De

1938 a 1957 no creció aunque contó con un importante contingente de intelectuales que difundieron con entusiasmo sus propósitos políticos. Un grupo de generales sin soldados. En este último año, se fusionó con otro sector desprendido del Partido Conservador que, desde 1946, venía sosteniendo también su adhesión a los principios fundamentales del catolicismo social: el Partido Conservador Socialcristiano. Nació así la Democracia Cristiana, la que recibió el aporte de algunos grupos del movimiento generado en torno al general Ibáñez en 1952. Este partido, bajo la conducción de Eduardo Frei Montalva, logró un crecimiento extraordinario sólo un año después, en las elecciones presidenciales de 1958, ocupando el tercer lugar, a continuación de Alessandri y Allende, con cuya posición desplazó definitivamente al Partido Radical del centro político.

El ascenso de la Democracia Cristiana representó el comienzo de un nuevo ciclo político del predominio de la burguesía industrial y financiera, después del término del Frente Popular, hegemonizado por el Partido Radical, y del intento de rectificación del populismo ibañista. La etapa anterior había concluido con el desmoronamiento del sistema de partidos, tanto por la proscripción del Partido Comunista como por la división de la mayoría de las organizaciones políticas. Fue aquel punto de quiebre de las alianzas predominantes en la primera mitad del siglo XX y de la agudización de la lucha de clases. La Democracia Cristiana formuló un proyecto político, que tenía un fundamento ideológico. De las encíclicas sociales, tomó la crítica al socialismo y al capitalismo para hablar de una sociedad "comunitaria", concepción ambigua, que serviría a sus políticas indefinidas, y de la CEPAL, nuevo órgano de Naciones Unidas, el concepto de desarrollo económico que se vinculaba a los requerimientos de la "modernidad". Este había sido el objetivo frustrado en el gobierno anterior, de Jorge Alessandri.

El proyecto de poder de la Democracia Cristiana relacionó estrechamente el concepto de desarrollo económico con el desarrollo social, a través de una nueva estrategia de movilización popular. El teórico de esta concepción fue el jesuíta belga Roger Vekemans. Este sacerdote llegó a Chile en 1957 y desempeñó el cargo de director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica:

> El nudo de su teoría está en el rechazo de la lucha de clases como principio de descripción y explicación de la sociedad, y su reemplazo por la oposición entre "marginalidad" e "integración". De acuerdo a este concepto, existían grandes masas de individuos excluidos de toda participación y, teóricamente, según esta visión, no susceptibles de ser organizados ni de acceder a la participación social, económica y política, dentro de los

esquemas ideológicos y organizativos vigentes. Los grupos así definidos eran, fundamentalmente, los campesinos y los pobladores urbanos.[4]

Este pensamiento central lo recogen hoy algunos socialistas "renovados", provenientes precisamente de la Democracia Cristiana. Vekemans, según registró la prensa internacional, se dedicó durante el gobierno de la Unidad Popular a recolectar fondos para financiar la conspiración

En este marco sociológico, el proyecto político de la Democracia Cristiana preconizaba objetivos similares a los del Frente Popular. Un proceso de industrialización, que requería a su vez la provisión de materias primas y de una ampliación del mercado interno. Este proceso exigía una reforma agraria, no por la demanda de tierra por los campesinos, sino por la necesidad de adecuar la agricultura atrasada al desarrollo económico. Desde el punto de vista social, se perseguía la incorporación de los "sectores marginales" a la producción, así como un mejonmiento en la distribución del ingreso mediante políticas de salarios más justas. Este proyecto político buscaba un doble apoyo. Por una parte, los grupos de industriales más "modernos" y, por lo tanto, más dinámicos y, por la otra, los segmentos populares urbanos, que se beneficiarían con las políticas de desarrollo social, así como los campesinos, protagonistas de la reforma agraria.

La Democracia Cristiana ejercería el liderazgo colectivo de este proyecto. Conjuntamente con la dirección estratégica proporcionaría los cuadros políticos y técnicos que, a través del gobierno, aplicarían el proyecto, generando una clientela electoral que le aseguraría la conquista y mantención del gobierno. Este desafío afectaba a la derecha y a la izquierda. A la primera, porque el despertar de la conciencia de los campesinos, a través de la reforma agraria y la sindicalización rural, debilitaría el poder de los latifundistas, reduciendo su representación parlamentaria, por el control del voto de la "servidumbre" todavía existente y por el sistema de distribución geográfica de las circunscripciones y agrupaciones electorales. A la segunda entraba a disputarle su predominio en el movimiento sindical y político, oponiendo a la lucha de clases la "promoción popular", que buscaba integrar a los sectores definidos como "marginales" a formas de organización r o clasistas que establecieran una relación de clientela con el partido y, más tarde, con el gobierno, una vez que aquél hubiera alcanzado el poder.

[4] Ricardo Yocelewsky, *La Democracia Cristiana Chilena. Trayectoria de w proyecto,* versión original, mimeo, México, 1984.

El aspecto final del proyecto era el financiamiento. Desde este punto de vista, "los demócrata cristianos pensaban que era necesaria una mayor participación estatal en la capitalización". En un sentido más amplio, combinaban dos orientaciones centrales en su proyecto. Por una parte "las políticas de desarrollo inspiradas en las ideas de la CEPAL constituían una racionalización e intento de prolongación de las políticas que se habían aplicado en algunos países latinoamericanos, como paliativo a los efectos de la crisis de comienzos de los años treinta y de la Segunda Guerra Mundial". Por la otra parte:

> Una vez que esas condiciones habían cambiado, el proyecto social y político de los demócrata cristianos para Chile representaba una racionalización de los resultados del desarrollo chileno a partir del Frente Popular, que buscaba consolidar el tipo de alianza social que éste representaba, ampliándola al sector rural y expresándola en un partido único y no en una alianza de partidos.[5]

Carlos Altamirano, desde las filas socialistas "renovadas", y Edmundo Pérez Yoma, desde las filas demócrata cristianas, plantearán nuevamente este último objetivo en la década de los noventa, en el sentido de fusionar en un solo partido a socialistas y demócrata cristianos.

La campaña presidencial de Frei se dio en condiciones definidas, que determinaban en general sus posibilidades y límites, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el primero, el fracaso social del gobierno de la derecha tradicional había traído consigo el retroceso de las condiciones de vida de los trabajadores. En el segundo, Estados Unidos promovió, para neutralizar el ejemplo de la revolución cubana en América Latina, dos iniciativas programáticas. Por una parte, reforzar los instrumentos de "contrainsurgencia" con apoyo técnico y militar y, por la otra, apoyar el desarrollo económico, en los marcos de la Alianza para el Progreso, formulada a través de la Organización de Estados Americanos:

> El apoyo de la derecha tradicional, los Estados Unidos, la Democracia Cristiana europea (especialmente la alemana), la Iglesia Católica y, en general, todas las fuerzas anticomunistas, dieron a los demócrata cristianos la oportunidad de llegar con su propaganda y con sus programas "caritativos" de promoción social a todos los sectores de la sociedad.[6]

La victoria electoral fue espectacular.

[5] *ídem.*
[6] *ídem.*

Una "revolución en libertad"

El ascenso de Eduardo Frei Montalva al gobierno, con el apoyo de la derecha y el centro político en 1964 hizo de su partido el más poderoso del país. Aglutinaba entonces tanto a sectores burgueses, en sus diversas gradaciones, COMO a sectores obreros, provenientes especialmente de los grupos marginales de las grandes ciudades y de la llamada "aristocracia obrera", así como de los núcleos campesinos que empezaban a incorporarse al proceso de desarrollo de la economía y la cultura. Pero, por encima de su carácter policlasista, la Democracia Cristiana fue desde su nacimiento la principal agencia política del imperialismo en Chile. Su persistente campaña de penetración en los medios obreros fue financiada principalmente por los instrumentos de éste.

Como en el tiempo del Frente Popular, la burguesía trató de enfrentar esta nueva etapa con un proyecto de colaboración de clases similar. El pacto social propuesto por Frei descansaba, esta vez, en el sólido poder conquistado por la burguesía respecto a sectores marginales del proletariado y del campesinado, que se procuraba incorporar a esta fase de desarrollo del capitalismo dependiente como fuerza de apoyo. Los principales centros de poder de la burguesía se encontraban en la concentración monopólica de las industrias de intermediación campo-ciudad y en el manejo de los recursos financieros externos mediante reiterados compromisos con las empresas transnacionales que dominaban el enclave de la gran minería del cobre. Esta situación se superó durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), con la nacionalización del cobre, conservándose hasta ahora el "sueldo de Chile" en manos del Estado y al servicio de todos los habitantes del país. Aunque las Fuerzas Armadas conservan, como "botín de guerra", el 10% del valor de las exportaciones.

El fracaso estrepitoso de la "magia" alessandrista no ofrecía a la burguesía otra perspectiva que la de ensayar la recuperación del Estado burgués liberal, casi al borde del colapso. El gobierno de Frei pretendió, en este sentido, la reformulación de un proyecto populista para absorber, mediante su desviación, las demandas económicas y sociales del pueblo, en un vano propósito de conciliación con el interés de la burguesía monopólica. Para eso, promovió una política desarrollista en el marco de la democracia liberal. Ella es una maniobra desesperada para armonizar ésta con aquel capitalismo dependiente, reacondicionando la dominación de clases, por lo que ningún rasgo de esta política coincidía con los objetivos revolucionarios de los trabajadores. ¡Todo era simple manipulación política! Este desarrollismo no es otra cosa que la nueva versión de la alianza del capital financiero imperialista con el capital industrial interno, dirigida fundamentalmente a desplazar parte de las inver-

siones estadounidenses de la minería a la industria manufacturera. Esta tendencia, manifestada en esos años, perseguía tasas de beneficios más atractivas y la ampliación del mercado interno para los productos de las nuevas industrias mediante la reforma agraria, la organización de los campesinos y el mejoramiento del nivel de sus ingresos, así como el aumento de las exportaciones.

De acuerdo a una delegación de facultades del Congreso Nacional, este gobierno puso en marcha su política sobre chilenización del cobre, que denominó la "viga maestra" de su programa, la que consistió en la creación de sociedades mixtas entre el Estado chileno y las compañías estadounidenses. Para eso, el primero compró el 51% de las acciones de las empresas subsidiarias existentes en el país, pagándoles precios cuantiosos. Las cifras fueron concluyentes en esta materia. Por el 51% de sus acciones en las sociedades mixtas formadas con sus subsidiarias Chile Exploration Co. y Andes Mining Copper Co. la trasnacional Anaconda recibió pagarés del gobierno chileno por 197 millones de dólares en circunstancias que el valor libro de esas empresas era sólo de 181 millones de dólares, es decir, por 51% de las acciones se les pagó más que el valor total de las inversiones. A la Kennekott Copper Co. se le canceló por el 51% de las acciones de su subsidiaria Braden Copper Co., un total de 180 millones de dólares, aunque el valor libro de toda la empresa era inferior a esa cifra. El gobierno avaló, además, un crédito de 125 millones de dólares y le entregó a esta última subsidiaria la administración de la nueva empresa mixta, a pesar de haber pasado a ser socio minoritario en ella.

El gobierno de Frei convino asimismo con la Anaconda una opción por parte de Chile para adquirir 49% de las acciones pendientes, cuyo precio se determinaría en relación a las utilidades que obtuviera dicha compañía en los dos años anteriores a la compra, lo que significaría el pago de una suma muy elevada por el saldo mencionado. En cuanto a la Braden no se celebró convenio sobre opción, lo que le habría permitido después de los planes de expansión exigir por 49% de las acciones un valor considerable, de haber querido comprarlas el gobierno chileno. Estos convenios comprendían, además, los denominados "planes de inversión" dirigidos a incrementar la producción, cuyo financiamiento significó compromisos o deudas para las empresas mixtas con instituciones internacionales de crédito por la suma de 704 millones de dólares, garantizados con el aval del Estado.

La política sobre la gran minería del cobre del gobierno de Frei consistió, en suma, en la compra de una parte del "negocio" a las compañías estadounidenses, mediante un precio excesivo, ya que el lapso de recuperación de las inversiones por estas empresas era, según estudios efectuados por la Universidad de Chile, de ocho años. Ello significa que el capital de la Braden Copper Co., cuya mina El Teniente

empezó a operar en 1902, se había recuperado ocho veces en el momento de la "chilenización". El Estado se obligó, por otra parte, a través de los convenios de expansión de la producción a financiar mediante crédito externo, pera con su aval, las nuevas inversiones de las empresas mixtas. El gobierno de Frei consolidó, por otra parte, la hegemonía de la burguesía industrial en el bloque social dominante, favoreciendo el desarrollo de las industrias de exportación, política que se venía impulsando desde el gobierno anterior. Para ello se promovió la inversión extranjera, especialmente en los sectores automotriz, metalúrgico, electrónico y petroquímico, lo que permitió el control por parte del capital estadounidense de las industrias más dinámicas.

Esta política desarrollista de la burguesía interna asociada con el capitalismo transnacional promovió también la inversión directa del Estado y/o su asociación sucesiva con el capital privado, nacional y extranjero, en petroquímica, celulosa y papel, electrónica, maderas, metal-mecánicas, agroindustrias, computación, telecomunicaciones, etcétera. La mayoría de ellas producían para el mercado latinoamericano en desarrollo. El Estado dispuso para estos proyectos de más recursos financieros derivados del alto precio alcanzado por el cobre en el mercado europeo, de la inversión y crédito externo y de los resultados de una reforma tributaria. Este crecimiento industrial mostró más claramente las tendencias a la concentración de las empresas, la desnacionalización y la baja utilización de la capacidad instalada.

De acuerdo a la ley de reforma agraria promulgada en 1966, se impulsó la transformación capitalista en el campo, convirtiendo a la oligarquía terrateniente, dueña de numerosos latifundios explotados por lo general en forma ineficiente, en una moderna burguesía mediana, propietaria de unidades de producción más racionales. Para ello, la ley dispuso la expropiación de todos los predios de superficies superiores a 80 hectáreas de riego básico. De manera complementaria, la ley preconizó la organización de nuevas unidades de producción en cooperativas, las cuales recibirían líneas de crédito y asistencia técnica adecuadas de organismos del Estado. La reforma agraria ejecutada en el lapso 1964-1970 favoreció a menos de 10% de las familias campesinas en aptitud de recibir tierras y llegó a poco más de 20% de la meta que se fijara el propio gobierno, esto es, 100 mil familias. Si se considera que había 300 mil familias sin tierras, la aplicación de esta política expropiatoria en los años siguientes, afectando a la totalidad de la superficie agrícola contemplada en la ley, apenas habría dado satisfacción a menos de la mitad de las familias sin tierras que laboraban en la agricultura. No obstante, aquello no constituía problema alguno para dicho gobierno, porque buscaba deliberadamente el desplazamiento de parte de dicha población como asalariados de los propios beneficiarios del reparto de

tierras y mano de obra barata para la industria. Esto último constituyó un incentivo adicional para la inversión extranjera.

No está de más señalar que el simple reparto no constituía, ni con mucho, la solución del complejo de relaciones campo-ciudad. En ese momento, la descapitalización del primero, por la transferencia de capitales de los propios agricultores a la industria y otros negocios lucrativos urbanos, había llegado a su máximo límite, por la sencilla razón de que la tierra como fuente generadora de renta carecía entonces de la relevancia que tuvo en el pasado. Correlativamente, el desplazamiento de la población rural hacia las grandes ciudades, particularmente a la capital del país, había seguido un ritmo similar, con lo cual se evidenció que el problema de los campesinos era, más que de distribución y reparto de tierra, de empleo e ingreso. Encarar estos últimos problemas significaba entonces atacar el complejo de relaciones entre el campo y la ciudad y sus tasas de intercambio.

> Abordar las modificaciones de esas relaciones habría significado destruir las organizaciones monopólicas que controlaban la intermediación de los productos rurales; imponer el control en las operaciones bancarias; modificar drásticamente los regímenes salariales en el campo, eliminando la discriminación en la asistencia técnica; solucionar el problema del empleo para la mano de obra trashumante (afuerinos); mejorar en definitiva los términos del intercambio entre el campo y la ciudad.[7]

Una política de tan profunda proyección sobrepasaba naturalmente los objetivos del gobierno de Frei.

En suma, el proyecto de la Democracia Cristiana logró en una primera fase de su gobierno cierto desarrollo, pero tuvo que negociar cada una de sus principales iniciativas con la derecha y la izquierda, limitando sus expectativas. Por el lado de la burguesía, aisló el poder político de los terratenientes, para impulsar la reforma agraria, pero luego retrocedió para obtener el apoyo de los sectores dominantes, haciendo toda clase de concesiones, tanto para debilitar sus modificaciones económicas, en el régimen de tenencia de la tierra y la "chilenización" del cobre, como en la renuncia a otros objetivos de su programa, en las reformas de las empresas y de los bancos, que no se plantearon en los hechos. Por el lado de los trabajadores organizados, el apoyo recibido en el comienzo del gobierno, en los proyectos de leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina, no persistió por las contradicciones surgidas con posterioridad. Los partidos de izquierda impulsaron las

[7] Felipe Rodríguez, *Crítica de la Unidad Popular,* Barcelona, Editorial Fontamara, 1975, pág. 51.

legítimas exigencias de los sectores populares, con lo que se frustraron los intentos de generar un movimiento de masas al servicio de la Democracia Cristiana.

La política de la izquierda, particularmente del Partido Socialista, de crítica y oposición al gobierno, penetró en sectores de la propia Democracia Cristiana, desencadenando una lucha de tendencias en sus filas, que concluyó en sucesivas divisiones, porque el sector oficialista, encabezado por el propio presidente de la República, continuó deslizándose hacia la derecha. La explicación de este proceso es muy clara. "En presencia de un movimiento de masas influido por la izquierda y su ideología marxista, las proposiciones de reformas podían desenc adenar un conflicto incontrolable (éste fue el razonamiento que respaldó la no aplicación de la reforma de la empresa, propuesta contenida en el programa de 1964, que habría dado participación a los trabajadores en las decisiones y, eventualmente, en la propiedad de cada empresa)". Este razonamiento concluía con la afirmación de una nueva táctica:

> El camino a seguir, entonces, era ganar la confianza de la burguesía suspendiendo la aplicación de medidas reformistas y, ante la imposibilidad de satisfacer las demandas de los sectores populares, limitando las posibilidades de acción de estos últimos (por ejemplo, limitando el derecho de huelga.[8]

El Partido Socialista, a través de su Secretario General, Raúl Ampuero, caracterizó esta experiencia de manera cabal. "La natural simbiosis se proyecta, además, con una perfecta división del trabajo. Allí estaban, en maridaje estrecho, los que fabrican a los pobres, preparando el terreno para que después los otros, en piadosa misión cristiana, lleven hasta ellos la caridad". La revolución en libertad fue un simple truco semántico o una fabulosa superchería. Una "chilenización" del cobre de la gran minería, que favorecía sólo a las grandes empresas estadounidenses, en virtud de contratos-leyes, en los cuales "el Estado renuncia a ejercer su potestad soberana, compromete sus facultades de poder público, mutila su autonomía para calificar el interés de la nación, se rebaja, en síntesis, al nivel de un ente privado..." Era el seguro contra la nacionalización. La reforma agraria, por su parte, no era muy significativa desde el punto de sus metas. De cien mil nuevos propietarios en cinco años que proponía el programa no superaron el 10%. Gracias al concurso de la izquierda en el Congreso Nacional se aprobó una ley, más o menos, favorable, que a partir de 1970 aplicó plenamente el gobierno de Allende.

[8] Ricardo Yocelewsky, *ibidem.*

La revolución en libertad, agrega Ampuero, "concluyó con un fracaso estruendoso". El propio Radomiro Tomic estableció este resultado negativo, con las siguientes estadísticas estremecedoras: tasa de inflación para los últimos cuatro años, promedio anual, 23,2%; deuda pública externa de Chile casi 200 dólares por habitante, es decir, la segunda del mundo; índice de desarrollo económico por chileno, en 1967 y 1968, negativo, bajo cero. Además, la riqueza disponible por chileno era inferior en 1969 a la que era en 1966 y el desequilibrio entre la presión social y la escualidez de la economía se agudizaba. Todos estos hechos demostraban, según Tomic, "el agotamiento final del sistema capitalista y de las estructuras jurídico-políticas que le dan expresión en Chile".[9] La era demócrata cristiana, que el mismo Tomic había creído duraría 30 años, se reducía así sólo al sexenio de Frei, padre.

Alan Angelí, investigador inglés que se ha ocupado de la evolución económico-social de Chile en dos libros, ampliamente difundidos, comienza el capítulo 4 del último de ellos, sobre la revolución en libertad, con una cita de Radomiro Tomic, en la que insiste en el fracaso del proyecto de la Democracia Cristiana.

> Estoy convencido de que el fracaso de la revolución en libertad era inevitable, esto esencialmente debido a la contradicción entre su programa de desarrollo económico basado en el reforzamiento de la estructura capitalista de la economía chilena y su programa de desarrollo social. Este último movilizó a la gente en defensa de sus intereses, acentuando las muchas contradicciones de la sociedad chilena, particularmente aquellas relacionadas con el funcionamiento de la economía capitalista en un país subdesarrollado.[10]

Los juicios críticos de Tomic corrigen, por cierto, la mitología demócrata-cristiana tejida en torno al gobierno de Eduardo Frei Montalva, denominado el Kerensky chileno por la derecha tradicional.

Nuevos pasos del movimiento sindical

En los comienzos de la década de los años cincuenta, el movimiento sindical experimentó un nuevo impulso, de acuerdo con un relativo crecimiento económico,

[9] Raúl Ampuero, *La izquierda en punto muerto,* Santiago, Editorial Orbe, 1969, págs. 93 y 94.

[10] Radomiro Tomic, "Christian Democracy and Government of the Unidad Popular", en Federico Gil, *Chile at the Turning Point: Lessons on the Socialist Years 1970-1973,* Filadelfia, 1979. Citado por Alan Angelí, *Chile, de Alessandri a Pinochet,* Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993, pág. 47.

particularmente en la industria y en la minería del cobre. El sector público siguió expandiéndose también en los gobiernos de González Videla y de Ibáñez, aunque a un menor ritmo que en los años anteriores. Durante el lapso mencionado se generaron sucesivas federaciones de empleados y se promovió la fundación de la Central Única de Trabajadores en 1953. En los dos primeros años del segundo gobierno de Ibáñez se suspendió, en los hechos, la aplicación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, se estableció el salario mínimo para los obreros agrícolas y se mejoró la seguridad social, los beneficios de la maternidad, la invalidez y las pensiones. Además, se crearon el Servicio de Seguro Social, en sustitución de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, y el Servicio Nacional de Salud, por la fusión de diversos organismos encargados de la atención de esta necesidad.

Para superar la situación de debilidad del movimiento sindical, derivada de su división, socialistas y comunistas impulsaron la realización del congreso nacional de fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en febrero de 1953. Esta nueva organización representó un avance significativo desde el punto de vista teórico. En su Declaración de Principios preconizó, en efecto, la sustitución del sistema capitalista por el socialista, la independencia de los gobiernos y de los sectarismos partidistas, la recuperación de las riquezas básicas, la reforma agraria y la expropiación sin indemnización de las empresas en manos del imperialismo. La lucha sindical confirmó su posición como una de las formas de transformación de la sociedad, perseverando en una ya larga tradición revolucionaria.

El movimiento obrero, conducido ahora por la CUT, con la activa participación de los socialistas, realizó grandes jornadas en defensa del poder adquisitivo de los salarios y sueldos seriamente afectado por el proceso inflacionario, cuya expresión más notable fue la huelga general del 7 de julio de 1955. En medio de todas estas luchas la nueva central tuvo un desarrollo vertiginoso. Las amplias masas que apoyaron la postulación presidencial de Ibáñez encontraron en ella e1 cauce para sus reivindicaciones sociales. En la primera fase de la lucha del movimiento obrero, dirigida por la cur, destacó Clotano Blest, su primer presidente, quien sufrió la represión gubernativa en carne propia, a través de arrestos y relegaciones. La represión desencadenada por el gobierno para imponer las medidas del recetario Klein Sacks produjo un notorio deterioro en su capacidad de combate.

La clase trabajadora, dirigida por socialistas y comunistas, resistió firmemente la política reaccionaria del gobierno de Alessandri. Durante el período sexenal de este presidente de la República, el movimiento popular, político y sindical, experimentó, en efecto, un notorio ascenso a través de la reactividad de la lucha de clases, en la defensa de sus conquistas sociales y en contra de la represión. La lucha fue incesante, renovándose con nuevos bríos. El 7 de noviembre de 1960 se realizó una

huelga general en protesta por la represión gubernativa contra un acto público celebrado el 3 del mismo mes en la Plaza de Artesanos de Santiago, en el cual se asesinó a dos obreros. El 19 de noviembre de 1962 se produjo un nuevo paro general, igualmente reprimido con un saldo de ocho obreros muertos en la población José María Caro, por contingentes militares. En esta etapa, los trabajadores no lograron ningún avance significativo, pero impidieron todo retroceso.

Además, impulsaron la organización. A fines de mayo de 1961 se realizó el primer congreso nacional campesino. Entre sus acuerdos, se exigió una reforma agraria amplia y profunda, la aprobación de una ley sobre sindicalización campesina que permitiera este proceso, la extensión del sistema educativo, la asistencia médica y la previsión social de los campesinos. La madurez de su conciencia de clase les llevó a sostener entonces que la plenitud de sus derechos sólo sería lograda mediante la conquista del poder. Hacia la misma fecha se celebró una conferencia nacional de la CUT, en el sur del país, que abordó detenidamente la reforma agraria. Otro tema que venía escabullendo el gobierno de Alessandri, a pesar de las recomendaciones de Estados Unidos bajo el temor de las influencias de la Revolución cubana. La derecha chilena, profundamente dominada por los terratenientes, simuló cambios en el régimen de tenencia de la tierra, proceso que se conoció como una reforma agraria de "macetero", una verdadera burla de las aspiraciones de los campesinos.

Derrotado en las urnas en 1964, con la candidatura presidencial de Salvador Allende, el movimiento obrero organizado inició su recuperación a partir de 1966, expresado en sucesivas huelgas en los sectores medio, campesino y obrero. Entre los primeros destacaron los profesores y empleados bancarios en 1966, los trabajadores agrícolas en el mismo año y los obreros industriales y mineros en 1967. Este proceso culminó con un paro general el 23 de noviembre de ese año, con la presencia activa de los funcionarios del Estado, especialmente profesores y empleados de correos y telégrafos, que luchaban entonces por sus plataformas específicas de reivindicaciones.

En algunos de estos movimientos huelguísticos se ocuparon industrias y predios y, al mismo tiempo, se resistió la represión policial. Estas luchas continuaron en los años siguientes, y el ascenso de las masas alcanzó niveles desconocidos en el campo, adquiriendo la sindicalización un desarrollo extraordinario. En mayo de 1969 se realizó la primera huelga campesina general. La vida rural había experimentado un proceso de mejoramiento social por medio del establecimiento del salario mínimo para los obreros agrícolas, reajustado anualmente, la asignación familiar y la indemnización por años de servicios en 1953 y, al mismo tiempo, el proceso electoral había adquirido una mayor transparencia democrática por la reforma de 1958. Las dos modificaciones mencionadas fueron obras del gobierno de Ibáñez, y ellas

contaron con el decidido apoyo del socialismo, así como contribuyó también en la organización de los trabajadores del campo para la defensa de sus intereses de clase.

Después de una larga espera, la nueva ley sobre sindicalización campesina, discutida y aprobada en el Congreso Nacional con el apoyo decisivo de la izquierda y promulgada por el Presidente Frei Montalva en 1967, institucionalizó también las relaciones entre los empresarios y los trabajadores asalariados y pequeños productores del agro. Como sucediera en 1924, en virtud del Código del Trabajo, con los obreros, la legislación sobre sindicalización campesina reconoció el derecho a organizarse a estos trabajadores, reglamentó algunas formas de lucha, condicionó la huelga y prohibió las ocupaciones de tierra. Para asegurar el funcionamiento de las empresas agrícolas, se estableció que no se expropiarían ni se intervendrían los predios ocupados arbitrariamente. De esta manera se trató de conferirle un sello de "legalidad" al proceso de reforma agraria que se había iniciado bajo una fuerte presión de los campesinos organizados.

La sindicalización campesina representó, con todo, un paso positivo que desbordó los propósitos gubernativos. Hasta 1970 se organizaron cien mil trabajadores agrícolas en sindicatos y otros cien mil pequeños productores. La expansión de esta nueva estructura de poder campesino determinó una persistente presión por el aceleramiento de la reforma agraria e intensificó los conflictos colectivos, muchos de los cuales desembocaron en las primeras huelgas rurales de grandes proporciones. Así surgieron y se afianzaron también las confederaciones sindicales: Triunfo Campesino y Libertad, dirigidas desde el gobierno del presidente Frei; Ranquil, orientada por los partidos obreros, y Provincias Unidas, con escasa significación, patrocinada por los grandes terratenientes y la derecha.

La organización sindical campesina, que fue considerada por e1 freísmo como una forma de presión dentro del marco de la estructura agraria tradicional, se radicalizó bajo la orientación de los partidos socialista y comunista. Desde entonces planteó no sólo sus objetivos económicos inmediatos, sino también el reclamo de la tierra. De esta manera, los trabajadores del campo rompieron el aislamiento e ingresaron a la lucha política, desbordando el marco estrecho de la ley. En el período del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) se convirtió en el sector más combatiente por la reforma agraria y sus reivindicaciones sociales tantas veces postergadas. Por lo mismo, sufrió la más dura represión, después del derrocamiento del presidente Allende, por la dictadura de los militares de derecha.

El movimiento poblacional emergió potente en ese mismo tiempo, si bien su origen arrancaba de fines de la década de los cincuenta. El crecimiento acelerado de Santiago y otras ciudades, por el desplazamiento de habitantes de las zonas rurales,

provocó a la vez un aumento de la población que se instaló en áreas carentes de infraestructura urbana, equipamiento y servicios, formada por sectores de desocupados y subempleados. Los viejos "conventillos" existentes en el centro de Santiago fueron sustituidos por las nuevas poblaciones ubicadas en la periferia de la ciudad, que por surgir como los hongos, de la noche a la mañana, se denominaron poblaciones "callampas". Estas poblaciones se desarrollaron en los suburbios de las grandes ciudades, primero pacíficamente, mediante la simple agregación de una tras otra vivienda, de frágiles materiales de construcción en terrenos baldíos. Después, más violentamente a través de la ocupación o tomas de terrenos de esa misma especie. Este proceso adquirió cada vez mayor magnitud hasta convertirse en una nueva expresión del movimiento social que, al finalizar el gobierno del presidente Frei, representaba entre 10 y 15% de la población del gran Santiago. Este movimiento social reclamaba el apoyo del Partido Socialista y del Partido Comunista, de los cuales recibía naturalmente una respuesta positiva.

El gobierno de entonces promovió un plan habitacional con el que pretendió desestimular las tomas de terrenos y la proliferación de las llamadas poblaciones callampas. Simultáneamente impulsó un proyecto de organización territorial. Éste comprendió, por una parte, la creación de miles de juntas de vecinos, en las que se agruparon a los habitantes por barrios y poblaciones, para promover el mejoramiento urbanístico y el equipamiento comunitario. Por la otra, la generación de numerosos centros de madres, organismos en los cuales se desarrollaban las tareas tradicionales de éstas, con lo que se acentuó la dependencia de la mujer trabajadora respecto a la clase dominante. Eran animadoras de dichos organismos mujeres voluntarias de la clase alta y funcionarías del gobierno, bajo la dirección de la Consejería de Promoción Popular, con rango de ministerio.

Durante los dos últimos años del gobierno demócrata cristiano se desencadenó un nuevo proceso de luchas reivindicativas en las industrias metalúrgicas, con ocupación de fábricas, en la marina mercante nacional, en los ferrocarriles, en la administración pública y de nuevo en el campo. Se hizo presente también el movimiento de pobladores a través de la toma de terrenos en las principales ciudades, así como el movimiento de estudiantes, ocupando planteles en su lucha por la reforma del sistema educativo. Esta movilización de la juventud, que se inició en la Universidad Católica y continuó en la Universidad de Chile, coincidió con un proceso de rebelión inaugurado en Francia y que se extendió sucesivamente a otros países, con violentas manifestaciones represivas.

El gobierno del presidente Frei hizo frente a la movilización de los trabajadores a través de dos mecanismos: la división del movimiento obrero y la represión. Si-

mulando la defensa de la libertad sindical, trató de imponer el paralelismo sindical, mediante la creación de dos o más organizaciones en cada empresa, dividiendo de esta manera a los sindicatos, a las federaciones y a la propia Central Única de Trabajadores. Esta maniobra prosperó en el campo, pero fracasó en la industria. La represión, la otra arma utilizada, tuvo dolorosas expresiones en el mineral de El Salvador en 1966, en las calles de Santiago en 1967 y en la ciudad de Puerto Montt en 1969, con decenas de muertos, centenares de heridos y presos por razones sociales. Estos hechos represivos corresponden al período de "mano dura" del gobierno de la "revolución en libertad".

Por otra parte, constituyeron expresión detonante de la convulsión que se desarrolló en el seno de la sociedad y que abarcó todos los estratos, hechos de profunda significación política. Así sucedió con la primera huelga de los magistrados de los tribunales de justicia en demanda de mejores remuneraciones. La ocupación de la catedral metropolitana de Santiago por un grupo de cristianos para llamar la atención sobre el divorcio existente entre la Iglesia Católica y las demandas sociales de las masas trabajadoras. Por último, el acuartelamiento de un sector del ejército bajo el mando del General Roberto Viaux en el regimiento Tacna, en abierto desafío al gobierno demócrata cristiano. Es el preludio dramático del desenlace que tendrá en los años siguientes el proceso de la lucha de clases.

Sobrepasando la voluntad del gobierno demócrata cristiano, se expandió la organización del movimiento social.

> En los seis años de su gestión (se refiere al gobierno de Frei) se duplicó la sindicalización de la fuerza laboral urbana. Los sindicatos campesinos, que casi no existían antes de 1967, aumentaron rápidamente y llegaron a tener más de 120.000 miembros en 1970. En este período se organizaron los sectores marginales y aumentó su militancia. Las huelgas urbanas pasaron de 564 en 1964 a 977 en 1969[...]En el sector rural, las tres huelgas que hubo en 1960 aumentaron a 39 en 1964, a 648 en 1968 y a 1580 en 1970. También aumentó la confiscación de predios, industrias y sitios urbanos para viviendas. En 1969, 16 predios fueron tomados por sus trabajadores, y en 1970 el número alcanzó a 368. En el mismo período, el número de sitios urbanos confiscados subió de 15 a 352, y el de industrias confiscadas aumentó de 5 a 133.[11]

Bastante revelador el récord de movilización social, producida por el desencadenamiento de las fuerzas naturales que el aprendiz de hechicero no pudo controlar, con todo el poder del Estado.

[11] *ídem.*

En cada etapa del desarrollo económico de Chile durante el siglo xx se producen nudos conflictivos que deben resolverse. El capitalismo industrial no podía continuar su expansión, asegurando las necesidades de acumulación de todas las fracciones burguesas, por lo que el gobierno de Frei optó por el proyecto de la burguesía dinámica, asociada al imperialismo. El único que tenía viabilidad histórica entonces. Este proyecto acentuaba la producción suntuaria y el desarrollo de un estrecho mercado interno, por un lado, e incrementaba la explotación de los trabajadores, transfiriendo cada vez más ingresos de éstos hacia la burguesía dominante del mercado y despojándolos de derechos ganados en períodos anteriores, por el otro lado. Estas políticas se aplicaron en la segunda mitad del gobierno demócrata cristiano, mediante reducciones del gasto público, con las consiguientes repercusiones en la administración pública, fundamento de la ruptura social y política que redujo aún más la base de sustentación del Estado.

Esta ruptura puso fin a un ciclo de amplia base social del Estado construida por los gobiernos de Frente Popular, desde 1938 en adelante, que comprometieron a la clase obrera y a grandes sectores de la pequeña burguesía propietaria y asalariada. Este proceso de escisión se inició durante el gobierno de Gabriel González (1946-1953), con las políticas de mayor restricción económica y represión política a las organizaciones sindicales y a los partidos que las representaban. Ello trajo consigo el fortalecimiento del movimiento obrero y la independencia creciente de la pequeña burguesía. Expresiones de este proceso fueron, entre otras, a fines del gobierno de Frei, las divisiones en la Democracia Cristiana, los problemas surgidos en las Fuerzas Armadas (rebelión del general Viaux) y en el poder judicial (huelga de funcionarios) y la radicalización del movimiento estudiantil. Todos ellos fueron ingredientes de la crisis social desencadenada desde 1970.

Nuevas reflexiones sobre la Revolución

En la mitad de la década de los sesenta, el Partido Socialista dio un segundo paso importante en las definiciones teóricas del proceso revolucionario en Chile y, en general, en los países latinoamericanos. El principal analista de estas ideas fue Raúl Ampuero, quien desempeñó durante siete períodos seguidos e intermitentes la Secretaría General, primer cargo del partido (de 1946 a 1965).[12] El momento histórico

[12] Entre las numerosas intervenciones de Ampuero, cabe destacar "Reflexiones sobre la revolución y el socialismo" (revista *Arauco* N° 18, julio de 1961), "Los distintos caminos hacia el socialismo" (revista *Arauco* N° 40, mayo de 1963), *Socialismo y Comunismo* (Ediciones PLA, 1962), La controver-

no podía estar más cargado de acontecimientos internacionales decisivos. Jaime Ahumada, entonces Secretario General de la Federación de la Juventud Socialista, hizo una síntesis muy completa.

> El partido vive el clima que impera en América Latina con la Revolución Cubana, de la lucha por la elección de las vías para avanzar hacia el socialismo, de la revolución como proceso social o como expresión voluntarista de las fuerzas que el foco guerrillero puede movilizar, de la naturaleza de la revolución latinoamericana, de las deformaciones ideo-políticas del enfrentamiento de los bloques militares y de los primeros síntomas de la controversia chino-soviética y su posterior cisma.[13]

Esta síntesis comprende otros aspectos de mucha importancia en el mundo, como el hecho de que el presidente John F. Kennedy había asumido "la dirección del bloque político-militar imperialista, debutando con el fracaso de la invasión a Cuba por Bahía Cochinos (1961), que precipita la definición del carácter socialista de aquella revolución, y lanzado una ofensiva latinoamericana de contención del ejemplo cubano a través de la Alianza para el Progreso. Jruschov ha consolidado su poder en la URSS, avanza en sus definiciones sobre la política de coexistencia pacífica entre los bloques en pugna y se apresta a desafiar a Kennedy en su propia "zona de influencia" con la instalación de misiles nucleares en el nuevo país socialista, Cuba, a sólo noventa millas del territorio estadounidense".[14] Quizás ésta fue la mayor aproximación a la Tercera Guerra Mundial en el siglo xx, con un carácter demoledor tan grande por el empleo de las armas nucleares que habría 1' evado al mundo a su destrucción completa.

En su análisis sobre la revolución y el socialismo, Raúl Ampuero abordó la vieja y larga discusión realizada en Europa sobre reforma y revolución, que se había planteado también en América Latina y, por cierto, en Chile. Después de la Revolución rusa de 1917 se expresó esta disyuntiva entre el comunismo y el socialismo, en medio de los conflictos generados por el atraso y la opresión de los trabajadores.

> Dicho de otro modo, en otro lugar y en otro tiempo, pudo ser un problema meramente estratégico y aun académico el sostener si la reforma o la revolución era la vía más apro-

sia chino-soviética", (revista *Arauco* N° 42, julio de 1963), "1964: año de prueba para la revolución chilena" (revista Arauco N° 49, febrero de 1964) y "Conclusiones políticas del XX Congreso General Ordinario del Partido" (boletín del Comité Central, febrero de 1964).

[13] Jaime Ahumada, *Pensamiento y acción en la política internacional del Partido Socialista*, mimeo, Santiago, 1997.

[14] *Ibidem.*

piada para el socialismo. En América Latina, en cambio, presenciamos el espontáneo desarrollo de una situación intrínsicamente revolucionaria, extendida a todo el continente y consecuencia ineludible de violentas contradicciones, que no halla solución dentro del sistema. El problema que debemos plantearnos es de si el socialismo es capaz de intervenir como dirección consciente del proceso o si se resigna a permanecer al margen del acontecer histórico.[15]

Era un claro y objetivo punto de partida de su conferencia, que hasta hoy sigue vigente.

Jaime Ahumada, organizador de esa exposición, en 1961, hace más tarde una evaluación de este punto de partida:

Advierte (se refiere a Ampuero) que en la experiencia latinoamericana (México, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Cuba), aún en aquellos casos en donde ni siquiera la meta era socialista o donde la victoria revolucionaria se había dado por la vía electoral, la resistencia violenta de las oligarquías a los cambios había culminado en procesos insurreccionales y de desarrollo pacífico o armado. Sin embargo, consciente de las particularidades y de las condiciones propias de cada experiencia y, más aún, que la revolución es un proceso social de creación y síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo de una realidad.[16]

El propio Ampuero reitera una proyección estratégica y táctica, expresada otras veces en el Partido Socialista:

Cuando usemos los medios que ofrece la democracia tradicional, debemos emplearlos a fondo, con la mayor eficacia, sin admitir que las reservas mentales debiliten nuestra acción. Una contienda electoral, como un conflicto sindical cualquiera, es una batalla de gran valor táctico, y aun cuando en ella no se resuelva la lucha de fondo, en su desarrollo y desenlace reclutamos nuevas fuerzas, enseñamos y aprendemos, elevamos la moral y la conciencia política de los participantes.[17]

La experiencia de la Unidad Popular constituye la mejor demostración de dicho concepto.

Este dirigente socialista expuso, entonces, la contradicción entre los países capitalistas altamente desarrollados y los países rezagados. Mientras los primeros avanzan extraordinariamente, hasta límites inesperados, gracias a su cultura y tecnología, los segundos arrastran su pobreza generalizada, excepto sus clases gobernantes.

[15] Raúl Ampuero, *Reflexiones sobre la revolución y el socialismo,* Santiago, 1961.

[16] Jaime Ahumada, *ibidem.*

[17] Raúl Ampuero, *ibidem.*

> Los desniveles entre los estados imperialistas y los países vasallos o dependientes tienden a crecer, y el mundo subdesarrollado se enfrenta, por eso, a un dilema: o se resigna a esperar, infructuosamente por supuesto, que sus burguesías incipientes y parasitarias imiten el ejemplo y la trayectoria de las burguesías de los países adelantados, o entregan al proletariado industrial, a los campesinos, a la intelectualidad revolucionaria y a los técnicos, a las clases no comprometidas, en suma, la realización de un proceso destinado en sus orígenes a liquidar las formas pre capitalistas, pero irrevocablemente empujado, por su dinámica interior, a adoptar una progresiva orientación socialista en su desenvolvimiento.[18]

Esta última alternativa está representada en la trayectoria popular conducida por Allende en los años setenta.

Las revoluciones han sido siempre procesos creativos de los pueblos, como puede percibirse en los últimos cuatro siglos, desde las revoluciones burguesas, tanto en Inglaterra (siglo xvII) como en Francia (siglo xvIII) y sus repercusiones en numerosos países europeos, hasta las revoluciones populares (siglo xx), tanto en Rusia como en China, y sus repercusiones en todo el mundo. En este convulsionado mar de la acción revolucionaria, los partidos y movimientos han tenido que definirse.

> Para caracterizar una revolución y apreciar su valor histórico, los socialistas miramos primero los factores objetivos operantes en su seno, aislándolos al menos para un análisis inicial de toda noción de compromiso en el orden internacional. Puede haber, y de hecho existen, procesos progresistas, virtualmente valiosos para el adelanto de toda la humanidad, que en el orden diplomático y militar rehusen comprometerse con la política soviética. Pueden existir razones estratégicas, geográficas y económicas que aconsejen tal actitud, sin que por ello desmerezcan el carácter progresivo de la empresa iniciada.[19]

Todas las revoluciones nacionales pesan en su entorno externo, pero no pueden subordinar procesos similares en otros países, porque estos procesos están siempre condicionados por los factores internos.

Durante el siglo xx, hasta el derrumbe de la Revolución soviética, proliferaron en América Latina procesos, con alcances revolucionarios, pero heterodoxos.

> En unos casos son las clases trabajadoras, en todos sus estratos, quienes encabezan la acción para derrocar al régimen burgués-imperialista, en otros es la figura emblemática de

[18] *Ibidem.*
[19] *Ibidem.*

> un líder civil o militar el que abre los caminos del proceso de cambios, más allá de un contingente heterogéneo de estudiantes, trabajadores y profesionales, que son los que toman las armas para construir la guerrilla y el ejército rebelde triunfante o, en fin, son partidos de masas, nacional-revolucionarios, democráticos o socialistas, los que se ponen al frente del movimiento popular victorioso. No hay receta, no sirve el dogma, se impone la realidad.[20]

En Chile, estas especies de movimientos se realizaron en 1932 (la República Socialista) y en 1970 (el Gobierno Popular), con el protagonismo respectivo de Grove y Allende.

En esta experiencia revolucionaria, los socialistas aprenderán que las clases dominantes resisten siempre por todos los medios los cambios socioeconómicos. Así se constató en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947 y Raúl Ampuero lo reiteró en *Reflexiones sobre la Revolución y el Socialismo,* en 1961, y en su libro *La Izquierda en Punto Muerto,* en 1969:

> Los socialistas sabemos que antes, coetáneamente,o después de un proceso electoral, no estoy haciendo profecías, pero en algún instante, las clases privilegiadas de este país van a utilizar la fuerza para paralizar la ofensiva del pueblo sobre el poder, para desconocer los resultados electorales, para restringir su voluntad de decisión en los comicios. No sé cuando ni dónde, pero la experiencia de los últimos años demuestra que la oligarquía latinoamericana no titubeó nunca en romper la legalidad en la vana tentativa de conservar una sociedad condenada.[21]

En 1973 se produjo esta "muerte anunciada" del sistema democrático, en los términos señalados por Ampuero una década antes.

El proceso de desarrollo teórico y político del Partido Socialista, iniciado en 1946, culminó en 1965, es decir, 20 años después, bajo la conducción principal de Raúl Ampuero. En este último año se realizó el vigésimo primer congreso general ordinario en Linares, donde Ampuero y su equipo de dirección fueron derrotados por una conjuración de fuerzas abiertas al mundo del socialismo soviético.

> La derrota de Allende en la elección presidencial de 1964 y las convulsas repercusiones internas de la controversia chino-soviética y del cauce tomado por la Revolución Cubana a partir del alejamiento de la dirección del Partido Comunista Cubano del Comandante Ernesto Guevara, así como el desgaste propio de un grupo dirigente o hegemonía

[20] *Ibidem.*
[21] *Ibidem.*

> partidaria que habia reconstruido la organización nacionalmente y prestigiada por el desarrollo de una línea original y autónoma, explican el desplazamiento de Ampuero y su equipo de la dirección del partido en el vigésimo primer congreso general ordinario de Linares (junio-julio de 1965).[22]

Este es el punto de quiebre de una línea de pensamiento revolucionario, largamente elaborada.

Desde entonces se inició el acercamiento a lo que Carlos Altamirano denominara el eje Hanoi-La Habana. El camino hacia el alineamiento con el mundo comunista, en virtud de la definición marxista-leninista. El triunvirato que predominó en el nuevo comité central estuvo formado por Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda y Aniceto Rodríguez. Este cambio de línea de acción comienza, por una parte, con una apertura hacia el campo soviético, mediante viajes oficiales de sus dirigentes, que durante años estuvieron prohibidos (tanto a Rusia como a Estados Unidos).

Después del congreso general ordinario de 1965, se produjo la división de 1967 y la fundación de la Unión Socialista Popular (USP), así como la celebración de la conferencia nacional de organización, primero, y del vigésimo segundo congreso general ordinario, a continuación, en el año 1967, donde se adoptó el marxismo-leninismo y se proclamó la vía armada en la lucha por el poder.

> Los veinte años de hegemonía de Ampuero terminan, pero las posiciones políticas que dominan su período se articulan con la sensibilidad y la perspectiva histórica de Allende, quien termina asumiéndolas y transformándose en su principal intérprete. Allende plantea en el congreso de 1967 la continuación de una línea democrática de trabajadores y su corolario táctico, y asume el camino político-institucional para la conquista del gobierno y, a pesar de ser derrotado por una heterogénea alianza de tendencias reformistas y ultra revolucionarias, se lanzó a la conquista del partido, recorriendo el país y adquiriendo el apoyo de las bases socialistas y virtualmente haciendo viable su candidatura presidencial a un reticente Comité Central, que terminó apoyándolo con más abstenciones que votos a favor.[23]

Así debilitado por los "extremistas" de ayer, Allende enfrentó la elección presidencial de 1970 y conquistó, por fin, la presidencia de la República.

[22] Jaime Ahumada, *ibidem.*
[23] *Ibidem.*

Expansión del socialismo en la posguerra

Después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo se extendió a la mitad de la población del mundo y ejerció una significativa influencia en la otra mitad, tanto en los gobiernos socialdemócratas como en la oposición. El comunismo tuvo un extraordinario desarrollo, disminuyendo la persecución en su contra, hasta el punto que fuerzas poderosas, como la Iglesia Católica, entraron en un proceso de contemporización. En efecto, la encíclica Mater et Magistra, de 1961, admitió la atracción ejercida sobre los cristianos por las corrientes socialistas. No obstante, el socialismo en estricto sentido no existió realmente, manteniéndose sólo como una expectativa de redención humana. La experiencia vivida durante el siglo xx representó, además, una contradicción esencial entre el comunismo y el socialismo, entre el sistema soviético y la socialdemocracia, sin que ni el uno ni la otra hayan demostrado su identificación con el concepto teórico del socialismo.

Partiendo de la sólida base de que durante mucho tiempo esta contradicción se expresaba fundamentalmente tanto en las vías de acceso al poder como en la forma de edificación de la nueva sociedad, al comienzo de la segunda mitad del siglo xx se abrieron las perspectivas para un nuevo entendimiento. En efecto, este proceso, que combinaba el policentrismo del comunismo y la apertura de la izquierda socialista, superando en cierta medida la Guerra Fría, generó condiciones para forjar nuevas alianzas entre fuerzas que durante años fueron antagónicas. Esta discusión se desarrolló en medio de importantes cambios económicos y sociales desencadenados desde 1945. Desde los años cincuenta empezó a modificarse la Guerra Fría, repartiéndose las zonas de seguridad e influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en virtud de la coexistencia pacífica. Al mismo tiempo, surgió la prosperidad de los países capitalistas de Europa occidental, bajo el estímulo del Plan Marshall.

En esos años se avanzó en la descolonización en el Tercer Mundo, generándose nuevos movimientos revolucionarios que adoptaron el nombre de socialistas, y se dejó atrás la parte más repugnante del legado de Stalin, quien murió en 1953. Su herencia política se puso en evidencia en el informe secreto presentado en el XX Congreso del PCUS, lo que trajo consigo algún alivio en la situación de repudio universal a las perversiones del sistema soviético.

Entre los años 1953 y 1958, se desarrolló el proceso de desestalinización. Como sucedió a raíz de la muerte de Lenin, se formó también esta vez una *troika* entre Beria, Jefe de la Policía, Malenkov, Presidente del Consejo de Ministros, y Jruschov, Secretario General del PCUS. Eliminado después Beria, quien fue fusilado, el nuevo

gobierno inició el deshielo. En el ámbito interno se restauró la legalidad "socialista", con investigaciones sobre la represión del pasado; se establecieron garantías individuales y alguna libertad de opinión, al tiempo que se aplicó una distensión interna, con mayor oferta de bienes de consumo y otras políticas económicas y sociales. En el ámbito externo, se procuró mejorar las relaciones con los países satélites, aunque en 1953 se endurecieron las relaciones con la Repúlbica Democrática Alemana, con ocasión de protestas de los obreros en Berlín oriental; pero en 1955 se extendieron las manos a Yugoslavia cuando Jruschov viajó a Belgrado, emitiéndose una declaración conjunta con el mariscal Tito, en representación de ambos países. Entonces se reconoció el principio de no intervención y la pluralidad de las vías hacia el socialismo.

En medio de estos cambios, el acontecimiento más significativo fue el informe de Jruschov al XX Congreso del PCUS, presentado en febrero de 1956, en el que puso de relieve los "principios" que inspiraban su política: la coexistencia pacífica entre estados de regímenes diferentes, que permitiría evitar una Tercera Guerra Mundial, la dirección colegiada de la Unión Soviética y la necesic ad de barrer la ineficacia y la apatía burocrática. No obstante, el informe secreto dirigido a los delegados soviéticos iba mucho más lejos, criticando el culto a la personalidad, los numerosos errores y crímenes de los que se hizo responsable a Stalin, y echando por tierra las tesis oficiales sobre la historia soviética desde 1917.[24] Esta autocrítica trajo consigo en 1956 la disolución del Kominform y un proceso de levisión de sus políticas, tanto en los países satélites como en el resto del mundo, particularmente en los países europeos. El nuevo líder soviético consolidó su poder en el PCUS y en el gobierno de su país.

La Guerra Fría dividió al mundo en dos campos opuestos, con sus respectivos bloques militares: el campo socialista y el campo capitalista, con el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este proceso separó aún más al comunismo y la socialdemocracia, las fuerzas que luchaban por el socialismo, y produjo también la ruptura del movimiento obrero en los países del mundo occidental (unificado durante la guerra y la resistencia al fascismo). La socialdemocracia renunció al marxismo y, por lo tanto, a la lucha de clases, aceptando el sistema capitalista, llamado entonces economía de mercado, facilitando su ascenso a los gobiernos. Desde 1945, año en que el Partido Laborista triunfó en Inglaterra con Clemente Attlee, se promovieron reformas socioeconómicas en ese país, en materia

[24] Jacques Droz, "Introducción", en M. Debouzy y otros, *Historia General d?l Socialismo, de 1945 a nuestros días,* pág. 26.

de nacionalizaciones de empresas, así como en seguridad social, salud pública y educación, con lo que se extendió la democracia. Un proceso aún más intenso se desarrolló en los países escandinavos, especialmente en Suecia, donde la socialdemocracia ofreció un alto nivel de vida en la sociedad por medio de la redistribución del ingreso y un sistema tributario equitativo. En Alemania predominó la Unión Cristianodemócrata, por lo que en 1959, el Partido Socialdemócrata adoptó la economía de mercado y se transformó de partido de la clase trabajadora en partido de todo el pueblo, proceso que se extendió a otros países, como Austria y Suiza.

En Francia e Italia, la evolución de los partidos socialistas fue un tanto diferente, debido principalmente a la existencia de partidos comunistas muy fuertes, con poderosa influencia en el movimiento obrero. En el primero de estos países, el Partido Socialista participó en la "tercera fuerza" y realizó una acción contradictoria, hasta que con Guy Mollet, volvió al gobierno en 1956. En Italia, el Partido Socialista, escindido entre la izquierda de Pietro Nenni y la derecha de Giuseppe Saragat, se comprometió en una coalición de centro-izquierda con la Democracia Cristiana, en la que no jugó un papel significativo. Al finalizar la década de los cincuenta, en los grandes países europeos emergieron tendencias de izquierda, que trataron de rescatar el marxismo entre los inteletuales y dirigentes obreros.

En los primeros años de la década de los setenta fueron disminuyendo las resistencias recíprocas entre el comunismo y la socialdemocracia, en virtud de los éxitos del capitalismo y el descrédito del sistema soviético. En medio de estas condiciones, los partidos comunistas buscaron alianzas o acuerdos con los partidos socialistas, que a su vez se alejaban de los modelos capitalistas. La Unión Soviética se abría hacia el exterior y procuraba satisfacer mejor las necesidades de los trabajadores, atenuando los métodos represivos. Pero las políticas implantadas por Jruschov, con ciertos resultados positivos en los primeros años, no pudieron resolver los problemas colectivos ni tampoco aquellos otros emanados en el marco de la coexistencia pacífica. La desestalinizacion hizo crisis, por lo que Nikita se vio obligado a dejar el poder en 1964. Una nueva *troika* formada por Brezhnev, Kosygin y Podgorni se hizo cargo del partido y del gobierno, paralizando la desestalinizacion hasta que Brezhnev se consolidó en el poder. En esos años se reconocieron diversas vías de construcción del socialismo y se aplicó la coexistencia pacífica con Yugoslavia y China, pero se mantuvo el control de los países satélites.

En Europa se desarrolló el policentrismo, en atención a que la realidad de las sociedades de ese tiempo, diversa y compleja, exigía la revisión estratégica de los partidos comunistas, adecuando además sus tácticas de lucha. Este proceso se realizó especialmente en Italia y Francia, girando la discusión en torno a las vías de acceso al poder y la construcción del socialismo. En Italia, el Partido Comunista pro-

movió la unión con todos los sectores representativos del movimiento popular, por encima de las diferencias ideológicas y religiosas, hasta llegar a la acción común con las fuerzas de izquierda de la Democracia Cristiana. Es la búsqueda del "compromiso histórico". Un proceso similar se desarrolló en Francia, donde el Partido Comunista planteó en 1968 la transición al socialismo, en unión con el Partido Socialista. En esos mismos años, ante la crítica de los comunistas europeos al sistema soviético, emergió un movimiento autocrítico en los partidos socialistas, que generó las nuevas izquierdas, que rechazaron tanto al comunismo burocrático como al socialismo reformista. Este proceso culminó en Francia con la elección de Francois Miterrand como secretario general de su partido en 1971, quien asumió la tarea de convenir un programa común con el Partido Comunista, conquistando el gobierno. En otros países, como Inglaterra y la República Federal de Alemania, por el contrario, se impulsó más bien una desideologización de las masas y 11 captación de las clases medias.

En el año 1968 se produjo una explosión social en Europa y, i;n parte, en Estados Unidos, que interrumpió la aproximación de los partidos comunistas y socialistas, pero que no tuvo similares repercusiones en todos los países del viejo continente, aunque en general impactó en las sociedades respectivas. Repercutió también en América Latina, especialmente en México, donde el gobierno ejecutó una masacre en la capital, en la plaza de Tlatelolco, en 1968. El centro de este movimiento, fundamentalmente de carácter estudiantil e intelectual, estuvo en Francia.

> La revuelta izquierdista no tuvo, pues, de momento ninguna incidencia política y contribuyó en Francia a un reforzamiento provisional del gaullismo; los grupúsculos tuvieron que conformarse con dar a su revolución un carácter cultural, a menudo folklórico. Pero el izquierdismo había planteado problemas nuevos acerca de la vida, sobre la situación de la mujer en la sociedad, sobre la opresión racial, sobre la cuestión "colonial" de las minorías nacionales, sobre la degradación y la injusticia de los estudios escolares y universitarios, y generó una profunda toma de conciencia, creadora a su vez de contravalores que los partidos socialistas se vieron obligados a incorporar en sus programas en los años siguientes. A partir de los acontecimientos de 1968, ningún problema se planteó a la izquierda en los mismos términos que anteriormente.[25]

En suma, se produjo un cambio cultural, con repercuciones niotivadoras en la política general.

[25] *Ibidem*, págs. 51 y 52.

Victorias en Asia y América Latina

El socialismo se extendió, no sólo en Europa sino también en Asia y América Latina (incluso en África) pero en este marco internacional únicamente me voy a referir a los procesos triunfantes en China, Vietnam y Cuba. No es mi objetivo tratar la lucha revolucionaria en India, Japón, Corea, Indonesia, los países árabes y África, así como en otros de América Latina. En China y Vietnam, la revolución estuvo vinculada a la guerra por su independencia. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial dejó el campo abierto al Partido Comunista, conducido por Mao Tse Tung, para la conquista del poder. Fundada la República Popular China en 1949, la Unión Soviética rompió con Chiang Kai-Shek y reconoció de inmediato al nuevo gobierno, posición que adoptaron todos los países socialistas. La nueva alianza se proyectó durante cinco años, de 1955 a 1960. Jean Lacouture expresa:

> Moscú deseaba sin duda alguna atraer a China al campo socialista y asignarle en esta coalición un puesto importante pero subordinado a su dirección. Pekín necesitaba con urgencia el reconocimiento, la protección, el apoyo y la experiencia soviéticos; pero ante todo lo necesitaba para permitir el avance de la Revolución China, que no renunciaba ni a su independencia ni a sus futuras aspiraciones. Además, y esto se olvida a menudo, la alianza en pie de relativa igualdad con una gran potencia como la URSS era para la China histórica una experiencia sin precedentes.[26]

Así se evidenció en los primeros cinco años del nuevo sistema.

Pero en los años siguientes, la revolución china asumió la autonomía necesaria, aunque celebró diversos acuerdos de cooperación económica y cultural con la URSS, así como ambos estados se abrieron al entendimiento con los liderazgos de los nuevos estados nacionales, como Nehru en la India, Sukarno en Indonesia y U-Nu en Birmania, para contrarrestar al imperialismo estadounidense. La contribución de China en la guerra de Corea, mediante "voluntarios" en 1950, le confirió prestigio e influencia en el oriente. Muerto Stalin, la República Popular China confirmó su autonomía en el escenario internacional, aunque mantuvo la unidad política e ideológica con la Unión Soviética. No obstante, los comunistas chinos venían formulando una crítica constante a los métodos soviéticos de construcción del socialismo concretados en el "desarrollo simultáneo de la industria y la agricultura, de las ciudades y del campo, de los sectores socioeconómicos modernos y atrasados".

[26] Jean Lacouture, "Los comunistas en el mundo asiático", en M. Debouzy y otros, *Historia General del Socialismo, de 1945 a nuestros días,* Barcelona, Ediciones Destino, 1986, pág. 130.

Esta vía china "se confirmaría con las decisiones de 1955-1956 (colectivización acelerada) y de 1958 (comunas populares, gran salto adelante, 'línea del desarrollo simultáneo')".[27] En la década de los cincuenta se produjeron protestas en los medios universitarios que fueron aplastadas con fusilamiento de los promotores y enseguida con la depuración en el Partido Comunista y la erradicación de millones de personas hacia el campo.

Las contradicciones chino-soviéticas se hicieron ostensibles hacia 1956. Los comunistas chinos no aprobaron jubilosamente las acusaciones de Jruschov en el XX Congreso del PCUS.

> En la segunda mitad de 1956, los contragolpes de la desestalinización en Europa del este, que condujeron a los disturbios polacos y a la sublevación de Hungría, habrían de dar a los chinos ocasión de criticar a la URSS a causa de sus "errores" y de presionar sobre ella. Durante las visitas que por entonces hizo a Europa el primer ministro Chu-En-Lai, éste se expresó con una libertad sin precedentes a propósito de la política de la URSS, lo que exasperó a los dirigentes soviéticos.[28]

Jrushov convocó en 1957 a una conferencia de los partidos comunistas, para consolidar su dirección, pero en ella encontró la oposición china, representada por Mao, quien conjuntamente con atacar al imperialismo, rechazó la *vía* pacífica al socialismo, exigiendo además la igualdad de todos los partidos comunistas. Esta conferencia puso término a la dirección exclusiva del campo socialista por el PCUS y la URSS.

Estas diferencias entre Pekín y Moscú se acentuaron en los a ios 1958 y 1959, tanto en el ámbito de la estrategia mundial como en las relaciones entre los partidos y los estados en el campo socialista, para culminar en 1960 con el estallido público del conflicto ideológico chino-soviético. En la conferencia de los 81 partidos comunistas, celebrada en noviembre de 1960, no se pudo superar el cisma. De aquí hacia adelante, la evolución política en la República Popular China comprendió dos etapas sumamente diferenciadas.

La primera etapa se inició en 1960, trayendo consigo un proceso de discusión interna, después que Mao abandonó la Presidencia de la República, y terminó en 1965, año en que se desencadenó la revolución cultural. En esos años sucedió un cambio de la correlación de fuerzas en la "lucha entre las dos lineas", hasta que se impuso de nuevo el pensamiento central de Mao, que se difundió especialmente en

[27] *Ibidem,* pág. 140.
[28] *Ibidem,* pág. 145.

el movimiento revolucionario del mundo atrasado. La ruptura final entre la República Popular China y la Unión Soviética se produjo en 1963, con ocasión de la celebración de una conferencia bilateral, en Moscú.

La segunda etapa comprendió de 1965 a 1973, considerada como una nueva revolución. En este período China impulsó su desarrollo económico y produjo la bomba atómica, con lo que echó las bases de una nueva potencia mundial dispuesta a defender su autonomía tanto del campo capitalista como del campo soviético. En la guerra estadounidense-vietnamita, China dio su apoyo a su vecino, tanto en ayuda directa en soldados y armamento como en cuanto intermediario de la ayuda soviética. En la política interna, dominó la escena la gran revolución cultural proletaria, desde 1963 a 1970, dirigida al retorno de Mao al poder real, con sus ideas revolucionarias.

La Revolución vietnamita reviste mucha importancia porque derrotó a los imperialismos francés y estadounidense. Es un proceso comprendido entre 1945 y 1975, es decir, treinta años de lucha ejemplar por reconstruir una nación devastada por la explotación colonialista, a través de una lucha conducida por el Partido Comunista, en conexión primero con la Tercera Internacional y después con la URSS y la República Popular China. Desde la conquista de la Indochina por Francia entre 1859 y 1863, el pueblo vietnamita luchó por su independencia nacional.

> Cuando en agosto de 1945 estalla la revolución vietnamita, estaba ya preparado con mucho cuidado desde aquél día de 1925 en que un emigrado, que entonces se hacía llamar Nguyen Ai Quoc, antes de hacerse famoso con el nombre de Ho-Chi-Mmh, había fundado en Cantón el Tam Niem, asociación de la juventud revolucionaria, cuyas primeras publicaciones no pueden disimular su inspiración marxista bajo una fraseología nacionalista. Cinco años después, en 1930, era fundado el Partido Comunista Indochino (PCI).[29]

Este partido enfrentó en 1940 la ocupación militar japonesa, para continuar después la lucha por su independencia y el socialismo.

Ho Chi Minh, secundado por el general Giap, proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, y con gran realismo tendió la mano en el interior del país a todos los grupos que luchaban por el mismo objetivo central, y en elexterior, en busca de una amplia ayuda a su causa. Apoyado por China y la Unión Soviética, conjuntamente con el Partido Comunista de Francia, el movimiento revolucionario vietnamita realizó un avance incesante, hasta la derrota de los franceses

[29] *Ibidem,* pág. 198.

ses en Diem Bien Fu, obligando a la negociación de la paz y la independencia en la conferencia de Ginebra de 1954. En esta reunión se reconoció el gobierno propio en el norte de Vietnam y el principio de unidad de todo el país. No obstante, era visible la decisión de Estados Unidos de apoyar y mantener el gobierno provisional del sur como definitivo, dividiendo de este modo al país, como lo había hecho con Corea.

El nuevo gobierno comunista de Ho-Chi-Minh se propuso la construcción del socialismo en el norte, para plantearse después la liberación del sur. Estados Unidos, por su parte, intervino abiertamente en favor del gobierno provisional del sur, primero con asesores en el régimen reaccionario de Ngo Dinh Diem y, enseguida, con tropas hasta introducir un poderoso ejército. Ante esta realidad, desde 1958 los guerrilleros se reagruparon en Vietnam del Sur, generando un levantamiento campesino contra el gobierno de Saigón, bajo el mando del Frente de Liberación, conocido después con el nombre de *Vietcong*, que significa "comunistas vietnamitas", aunque entre sus jefes había liberales y progresistas. El nombre de *Vietcong* se lo puso el dictador Ngo Dinh Diem. Esta organización se propuso un programa flexible, de carácter nacional. En 1962, se fundó el Partido Popular Revolucionario, pasando a constituir la tendencia más radical del Frente Nacional de Liberación, a través del cual influía el gobierno de Vietnam del Norte (Hanoi). Los gobiernos corruptos de Vietnam de Sur se sucedieron en medio del fracaso, desde el de Diem, asesinado en 1963 por sus propios generales, hasta que el ejército estadounidense asumió prácticamente el poder en 1965.

Este ejército aumentó en un año de cien mil soldados a un millón y medio, al mando de! general Westmoreland, con un enorme poder de fuego y se propuso aplast?: toda resistencia atacando en el sur y el norte del país. Esta fue la guerra más injusta y desproporcionada de la historia, por cuya razón Vietnam atrajo la solidaridad mundial, particularmente del campo socialista, de la Unión Soviética y de la República Popular China, aun en medio de! período de mayor agudización de su crisis ideológica, entre 1965 y 1970. Vietnam trató de influir sin éxito en favor de la unidad del campo socialista. Ho-Chi-Minh murió en 1969 y su pueblo tuvo que combatir seis años más para conquistar la victoria en 1971, retirar do Estados Unidos sus tropas. El gobierno del sur se derrumbó por último en 1975, logrando el Partido Comunista el triunfo final, con la reunifícación y la independencia nacional.

La lucha cubana, iniciada en 1956 en la Sierra Maestra, demostró las posibilidades revolucionarias en América Latina, de acuerdo a la tesis de algunos teóricos del socialismo, como Paul Sweezy, que sostuvieron en la segunda mitad del siglo xx que las condiciones favorables de la revolución habían pasado de las metrópolis a las periferias. Esta tesis se relaciona a su vez con la formulación de la autonomía de

estos procesos en las colonias y semicolonias, en los países atrasados, planteada por Lenin. Vietnam es un claro ejemplo de paso de una colonia francesa a nación independiente, en lucha por el socialismo.

> La conquista del poder en Cuba no desemboca en la regresión, difiriéndose del México de 1910 y de Bolivia en 1952, sino en la vanguardia revolucionaria. Diez años después de la entrada en Pekín del Ejército Rojo, cinco años después de Dien Bien-Fu, mientras que todavía el futuro de Argelia no está decidido, se anuncia en La Habana una brillante victoria sobre el imperialismo.[30]

Ello abarcó desde el ataque al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, en Santiago de Cuba, a la lucha en la Sierra Maestra en 1956; de la acción en el llano al combate en la montaña, de la actividad política a la guerrilla. El Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario promovieron el encuentro de los jóvenes rebeldes de las ciudades con los campesinos pobres. Este movimiento no contó con el apoyo del Partido Comunista (PSP) hasta después de la entrada del ejército rebelde a La Habana el 2 de enero de 1959.

La Unión Soviética consideró siempre a América Latina como un área política absolutamente secundaria en la lucha por su expansión externa. Por eso, la revolución cubana no fue obra del Partido Comunista sino de un movimiento revolucionario pequeño que, optando por la guerrilla, derribó a la dictadura de Batista, ingresando en La Habana en enero de 1959. En abril de 1961 proclamó la Revolución Socialista. No era ésta el objetivo original del Movimiento 26 de julio, pero la abierta oposición de Estados Unidos lo obligó a tomar dicha determinación, lo que a su vez hizo necesario el apoyo de la Unión Soviética que, por cierto, no había intervenido durante los años de lucha armada. El líder de este proceso, Fidel Castro, formuló la concepción de lucha de un grupo armado, con decisión revolucionaria, con una conducción de vanguardia política y militar que conquistó el poder. Es la guerra de guerrillas descrita por Ernesto Guevara, que se abrió paso en el campo para atraer finalmente a los obreros urbanos.

En 1961 se desencadenó la crisis en el gobierno por la renuncia del presidente de la República, Manuel Urrutia, y otros altos funcionarios de carácter moderado, asumiendo Osvaldo Dorticós la jefatura de gobierno. Fidel Castro fue desginado primer ministro. Desde entonces se generó la conspiración contra el nuevo gobierno,

[30] *Ibidem*, "Socialismo y comunismo en América Latina", por Robert Paris y Madeleine Rebérioux.

formulada por la extrema derecha, que había emigrado a Miami apoyada por el gobierno estadounidense a través de la CÍA. El presidente Eisenhower prohibió la importación de azúcar de Cuba, lo que obligó al gobierno revolucionario a buscar ayuda en la Unión Soviética, celebrando los primeros acuerdos comerciales (trueque de azúcar por petróleo) los que se generalizaron en el campo socialista. La revolución nacionalizó las grandes empresas estadounidenses y cubanas como un acto de independencia nacional. No se demoró mucho la invasión a Cuba por playa Girón, derrotada apenas puso sus pies en tierra cubana un ejército reaccionario, armado y adiestrado por Estados Unidos. La invasión fue preparada a fines del gobierno de Eisenhower y puesta en marcha en los comienzos del gobierno de Kennedy. En ese mismo momento, Fidel Castro definió la Revolución como socialista, unificándose en seguida las organizaciones revolucionarias en el nuevo Partido Comunista.

Ante el abierto bloqueo económico que inició el gobierno de Estados Unidos, la Revolución cubana debió asegurar la independencia del imperialismo y la supervivencia de su pueblo, todo lo cual pasó por las alianzas con los países del campo socialista y las relaciones con los pueblos y movimientos de izquierda de América Latina. El gobierno estadounidense organizó la cruzada contra Cuba, acompañado por todos los regímenes reaccionarios de América Latina, llegando hasta la ruptura de relaciones diplomáticas acordada por la OEA. Sólo México conservó su territorio y cielos abiertos hacia Cuba, manteniendo las relaciones diplomáticas. El momento más difícil en la historia de la Revolución cubana fue la crisis de los misiles en 1962, en la que un acuerdo entre los gobiernos de la Unión Soviética y de Estados Unidos permitió el retiro de este armamento y la garantía de no invadir Cuba. Como sucediera con la lucha de Vietnam por su independencia y contra el imperialismo, la Revolución cubana atrajo la solidaridad del movimiento popular en todo el mundo y especialmente en América Latina.

Cuba se convirtió en el centro político del Tercer Mundo, en ucha abierta contra el imperialismo. En este carácter se convocó a la Reunión Tricontinental del 3 al 15 de enero de 1966 y a la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), del 31 de julio al 10 de agosto de 1967. En la prinera de estas reuniones se dio a conocer un mensaje de Ernesto Guevara, en el que llamaba a crear numerosos Vietnam.

Subordinación de las Fuerzas Armadas de América Latina

A partir del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca quedó establecido el control del Pentágono sobre las Fuerzas Armadas de los países de1 sur. Dicho con-

trol comprendía diversos medios. La transferencia de material de guerra en calidad de préstamos y donaciones, en virtud de convenios bilaterales, le permitía a Estados Unidos, por una parte, deshacerse de los excedentes de la última Guerra Mundial, recuperando a lo menos parte del valor de este material obsoleto y, por la otra, asegurar una mayor dependencia logística con la industria de guerra estadounidense de los países "beneficiados", a través de la provisión de municiones y repuestos. Para este efecto, desde 1952, se celebraron 17 pactos de asistencia militar entre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de los países de América Latina, estableciendo obligaciones para éstos en la defensa del "mundo libre". Entre 1950 y 1972, recibieron entrenamiento en las escuelas de Estados Unidos, dentro y fuera de su territorio, 61 332 militares, de los cuales 4 932 fueron chilenos.

En 1954 se aprobó la llamada Declaración de Caracas, que constituyó un avance más en la dominación imperialista en el hemisferio occidental, a través del Sistema Interamericano.

> El dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga por resultado la extensión hasta el continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituiría una amenaza a la soberanía y la independencia política de los estados americanos, que pondría en peligro la paz de América y exigiría una reunión de consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes, de acuerdo con los tratados existentes.

Así lo señala el dirigente socialista Raúl Ampuero, agregando:

> La atención de Washington se vuelve aquí al interior del continente, hacia los signos de rebelión que surgen desde las masas latinoamericanas frente a las condiciones generalizadas de miseria, tiranía, corrupción y sometimiento a los intereses extranjeros. Una agitación que amaga el predominio de las viejas clases dominantes, pero también la hegemonía estadounidense.[11]

El gobierno de Estados Unidos marcó el rumbo e impuso su dominio en la política de las naciones latinoamericanas.

Después de la década de los cincuenta, bajo el impacto de los acontecimientos internacionales, como la derrota del colonialismo francés en Vietnam y el triunfo de la Revolución cubana, conjuntamente con la paridad nuclear alcanzada por la Unión Soviética, Estados Unidos acomodó su estrategia global. De la "represión masiva"

[31] Raúl Ampuero, *La contrarrevolución militar en América Latina*, Milano, La Pietra, 1976.

pasó a una estrategia flexible, destinada a evitar el choque frontal clasificando los eventuales conflictos de acuerdo a su gravedad, situando la "guerra subversiva" en los más bajos límites, como era el caso de América Latina, sobre cuya concepción el Presidente John F. Kennedy formuló la defensa hemisférica sobre la seguridad y el desarrollo.

> Las Fuerzas Armadas latinoamericanas no se consideran ya un factor significativo en el hipotético enfrentamiento con la Unión Soviética y el bloque socialista; su rol se reduce al mantenimiento del orden interno, esto es, a garantizar la "segunda!" del continente y de cada una de sus unidades nacionales. Su complemento es el "desarrollo" —inspirador de la Alianza para el Progreso— destinado a atacar las causas de la inquietud social mediante la elevación de los niveles de las masas populares.[32]

En Chile, este proceso internacional correspondió a los gobiernos de Jorge Alessandri y de Eduardo Frei Montalva, que colaboraron dócilmente con la estrategia imperialista.

La nueva política proyectada por el presidente John F. Kennedy comprendió diversos aspectos. En el plano diplomático se impuso un explícito carácter antisocialista, como se proclamó en la resolución adoptada en la octava reunión de consulta de 1962, que excluyó a Cuba del Sistema Interamericano (OEA). Er sus fundamentos se declaró que "la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano". Dos años después, en 1964, se utilizó a la OEA como instrumento de acción, cuando la novena reunión de consulta acordó la ruptura colectiva de relaciones con Cuba, se inició el bloqueo comercial y se amenazó explícitamente con la fuerza armada. No obstante, el fracaso de la intervención, demostrado con el protocolo de reforma del TIAR en 1975, representó una victoria de la Revolución cubana, aunque no modificó el con:enido imperialista de dicho tratado.

En América Latina, esta misma política desestimuló en el terreno militar la adquisición de material de guerra, demasiado caro, y en cambio promovió la provisión de armamento y equipo aptos para la lucha contra la guerrilla. Para este efecto, el instrumento principal continuó siendo el Programa de Asistencia Militar, pero impulsando además el reforzamiento técnico y material de los cuerpos policiales.

> El nuevo papel asignado a los militares de los estados satélites exige dedicar una mayor atención al adiestramiento y formación de oficiales y suboficiales en las escuelas esta-

[32] *ídem.*

> dounidenses, tanto desde el punto de vista profesional como ideológico, y, asimismo, una asesoría estadounidense estrechamente ligada a los mandos nacionales de los ejércitos del sur.[33]

En el ámbito político, el gobierno estadounidense intervino contra Cuba en 1961 y contra Santo Domingo en 1965, aunque fracasó en su intento de crear una Fuerza Militar Interamericana, dependiente del Pentágono.

El sometimiento vergonzoso de los gobiernos de derecha y centroderecha a dicha política intervencionista consolidó una relación de dependencia, que repercutía en último término en el abastecimiento de las Fuerzas Armadas.

> Por largo tiempo los Estados Unidos fueron la fuente casi exclusiva del aprovisionamiento latinoamericano en armas y equipos, con lo que se aseguraba la fidelidad del aparato militar y principalmente de sus jefes. La renovación oportuna de material, los stocks de repuestos, las municiones, el adiestramiento de personal idóneo exigían mantener con la potencia protectora una relación regular de dependencia. La circunstancia de que los equilibrios internos del continente dependieran, en último término, del favor o de las preferencias de los administradores del programa, agregaba un decisivo factor de sometimiento de los altos mandos castrenses, temerosos de que cualquier manifestación de disidencia los privara de los apoyos logísticos estadounidenses y concediera ventajas a naciones potencialmente rivales.[34]

Este factor lo utilizaba el Pentágono como instrumento de control y dominio.

Desde comienzos de la década de los sesenta, las ventas sustituyeron a las donaciones y préstamos del Programa de Asistencia Militar. Para consolidar esa nueva tendencia, el gobierno estadounidense complementó dicho programa con la Ley de Ventas Militares al Exterior, con lo que se dio un impulso decisivo al comercio de armas, particularmente durante el gobierno republicano de Richard Nixon. Como consecuencia, las ventas militares a la América Latina se elevaron en 1974 a 309 millones de dólares, contra poco más de 21 millones proporcionados por conducto del PAM, de manera que a estas alturas las donaciones y préstamos representaron mucho menos del 10% del monto de las transacciones propiamente comerciales.[35] Al negocio de las armas se unió el aprovechamiento de la mano de obra barata en el trabajo sucio de la opresión popular.

[33] *ídem.*
[34] *ídem.*
[35] *ídem.*

El ex secretario de defensa, Robert Mc Namara señaló cómo el gobierno de Estados Unidos utilizaba a las tropas de los países latinoamericanos, aliados y subalternos, en operaciones represivas, cuando presentó el Programa de Asistencia para 1967:

> Los Estados Unidos no pueden estar en todos los lugares simultáneamente[...]La balanza de fuerzas y las alternativas variables que nos desafían en el cambiante mundo contemporáneo sólo pueden ser enfrentadas por amigos leales, bien equipados, y listos para llevar a cabo las tareas asignadas a ellos[...]El PAM ha sido ideado para conquistar tales fuerzas y alternativas, ya que ayuda a mantener fuerzas militares que complementan nuestras propias Fuerzas Armadas.

En esta forma se rebaja el papel de las Fuerzas Armadas de América Latina, convirtiéndolas en servidoras de los intereses imperialistas. El misrr.o Mc Namara calculó alguna vez que mientras el costo de un soldado estadounidense era de 4 400 dólares al año, el de un soldado encuadrado en formaciones locales no pasaba de 540 dólares en el mismo período.[36]

De manera complementaria, el gobierno estadounidense se ocupó de la formación profesional y política de oficiales y suboficiales de los ejércitos latinoamericanos, para incorporar una motivación ideológica a estos cuerpos armados, particularmente a sus jefes. Para eso, se utilizó una red de centros de instrucción, como Fort Bragg, en Carolina del Norte; Fort Sherman, en la Zona del Canal de Panamá, donde se encontraban también Fort Clayton, Fort Gulik, la Base: Aérea de Albrook y Quarry Height, donde funcionaba el Comando Sur de Estados Unidos.

> La Escuela de las Américas, el centro principal de este impresionante complejo, fue establecida en 1949 por el Pentágono, con la finalidad específica de entrenar oficiales latinoamericanos para aplastar los movimientos de liberación. Desde entonces ha preparado unos 30 000 oficiales que una vez egresados de sus aulas, mantienen una estrecha vinculación con los jefes militares estadounidenses y con las variadas dependencias y actividades del Departamento de Defensa.[37]

Esta relación se establece en los cursos de formación y no se corta mientras continúan en servicio activo.

[ib] Citado por Raúl Ampuerto. *Ibidem.*
" *ídem.*

Para apreciar debidamente el significado de la intervención estadounidense en los ejércitos de América Latina, en los años 1950-1969, cabe tener presente que aquellos recibieron del centro imperial armas, servicios y adiestramiento por valor de 1 357 millones de dólares, a través de cuya "ayuda" impusieron sus propias orientaciones estratégicas y operativas.

> La mentalidad de la mayoría abrumadora de los oficiales, moldeada en las nociones de seguridad interna y de contrainsurrección, es el fruto de veinte años de control consecutivo sobre el adiestramiento, la organización y el aprovisionamiento de armas y equipos bélicos de parte del Pentágono, establecido —es indispensable decirlo— con la absoluta complicidad de los dirigentes políticos nativos.[38]

Esta formación es la que aplicaron los militares durante sus dictaduras en América Latina.

Con anterioridad, me referí a la creación de la Junta Interamericana de Defensa, bajo la presión de los acontecimientos de entonces.

> Tres años más tarde (1945) en la Conferencia de Chapultepec, otra conferencia interamericana, replantea el asunto con vistas a darle un carácter permanente, integrarla con representantes directos de estados mayores —no de los gobiernos— y en general, fortalecer su autoridad en el sistema. Comienza así un largo y accidentado proceso destinado a institucionalizar la colaboración y coordinación militares a escala continental bajo la forma de un Consejo Militar, de un Estado Mayor Supranacional y, finalmente, de una Fuerza Interamericana de Paz. Los planes estadounidenses no llegaron nunca a prosperar, y la Junta Interamericana se mantiene hasta hoy, formalmente al menos, dentro de sus líneas iniciales.[39]

Ampuero se refiere a 1976. No obstante, una fuerza militar interamericana, bajo el control de la OEA, intervino en Santo Domingo en 1965, como disfraz del aplastamiento por los "marines" de las fuerzas constitucionalistas y el pueblo dominicano, comandados por el coronel Caamaño.

En años posteriores se insistió, en repetidas oportunidades, en desarrollar el sistema de "defensa hemisférica", procurando conferirle autoridad independiente al órgano supranacional de coordinación, la OEA. Al no prosperar tal iniciativa, se impulsaron procedimientos alternativos. En este sentido, destacan las Conferencias de

3» *Ídem.*

-« *Ídem.*

los Ejércitos Americanos, que fueron consolidando las relaciones políticas de los altos mandos continentales desde 1961, para comprometerlos en la acción contrarrevolucionaria. Reuniones del mismo carácter comenzaron también a celebrar los altos mandos de las marinas de guerra y las fuerzas aéreas, así como las Conferencias Americanas de Inteligencia Militar, realizadas, por lo general, a espaldas de los gobiernos latinoamericanos.

> Una última forma de integración progresiva se encuentra en las maniobras y ejercicios conjuntos de los cuales, la llamada "Operación Unitas" de carácter aéreonaval, constituye el mejor ejemplo. Por la vía del acceso al material y a las técnicas modernas, los altos oficiales hallan aquí una justificación profesional para incorporarse sin reservas a prácticas bélicas inspiradas en concepciones estratégicas foráneas *y* ejecutadas bajo el mando de oficiales extranjeros.[40]

Así se garantizó la hegemonía estadounidense en América Latina y se limitó la soberanía nacional de cada uno de los países de la región subordinada.

La línea internacional. 1950-1970

En respuesta a esta subordinación de América Latina al imperialismo, el socialismo chileno participó en la formación del Comité Consultivo Latinoarr ericano Socialista. En la reunión celebrada durante el mes de marzo del año 1956, en Montevideo, se acordó crear dicho organismo para promover el intercambio informativo entre todos los partidos socialistas de nuestro continente, sin la obligación de afiliarse a la Internacional Socialista. En una nueva reunión, realizada en diciembre del mismo año, se condenó a las dictaduras latinoamericanas y se rindió homenaje a un héroe inolvidable: Rigoberto López Pérez, quien ofrendó su vida para dar muerte al dictador Anastasio Somoza García. La declaración emitida en esa oportunidad revestía una clara definición, concordante con la posición política del Partido Socialista chileno. Ella expresaba, en efecto, su absoluto

> repudio a los regímenes dictatoriales de América Latina, condena al imperialismo que los sustenta, al sistema a que sirven de instrumento y a las clases sociales cuyos intereses defienden, y llama a los pueblos del continente a combatirlos por todos los medios, defendiendo y desarrollando las libertades democráticas, promoviendo un vasto movimiento

[40] *ídem.*

> popular encaminado a transformar nuestra estructura agraria, liberarnos del imperialismo, elevar su nivel cultural, promover la integración latinoamericana y planificar con sentido socialista nuestras economías nacionales.[41]

Es, en suma, el pensamiento del socialismo chileno compartido por otros pueblos de América Latina.

La tercera reunión del Comité Consultivo de Partidos Socialistas de América Latina se realizó en el mes de abril de 1958. En ella se examinó el imperialismo y sus graves repercusiones en el desarrollo histórico de los países latinoamericanos. La declaración final expresa: "El socialismo considera como imperialismo toda tendencia movida por el intento de anexión y subordinación de una nación por otra, lo cual significa un atentado contra el derecho de autodeterminación de los pueblos". Precisando aún más el concepto, continuó el documento: "El socialismo califica de imperialista no sólo la anexión física sino todos los actos que conduzcan a la subordinación militar, económica, política, cultural y religiosa de los pueblos por un poder extranjero".[42] Definido así, en términos amplios, el imperialismo constituye para los pueblos débiles un enemigo mortal.

En esta oportunidad se reiteró, una vez más, el postulado de unidad latinoamericana, conjuntamente con su adhesión a la causa de la paz.

> El socialismo lucha contra todas las guerras de agresión sin discriminar su origen, y contra todas las conspiraciones que afecten a la paz. El socialismo propugna la integración económica de América Latina y su entendimiento político tendiente a defender colectivamente su industrialización orgánica, su comercio exterior y el nivel de vida de sus pueblos. El socialismo considera como ofensivo para la libertad de América, el mantenimiento de residuos coloniales en su territorio.[43]

Entonces existían todavía éstos en el Caribe, los que se eliminaron en las décadas posteriores, manteniéndose todavía Guantánamo en Cuba. Simultáneamente con la tercera reunión del mencionado Comité Consultivo, se desarrolló la Primera Conferencia de Expertos Económicos Socialistas de América Latina. En ella se analizaron los problemas de fondo del continente, los proyectos de integración y sus repercusiones en el desarrollo.

Esta fue una iniciativa más del Partido Socialista chileno, orientada a abordar la situación latinoamericana desde el ángulo de una concepción internacional y espe-

[41] *ídem*, pág. 220.
[42] *Ídem*, pág. 238.
[43] *ídem*.

cíficamente continental de la lucha revolucionaria. Desde su posición antiimperialista y de afirmación de un nacionalismo latinoamericano, se preocupó desde el punto de vista teórico de la integración regional. La explotación imperialista, que trajo consigo la dependencia y el subdesarrollo, no sólo tenía su expresión en la lucha de clases sino también en la lucha entre Naciones o Estados. De esta sólida premisa surgió la idea-fuerza de la unidad de los países latinoamericanos, en cuanto son objetos de explotación, lo que a su vez le confiere a la lucha revolucionaría un definido carácter continental. En las condiciones existentes entonces, el socialismo chileno luchó por una pacífica y democrática convivencia internacional, ajena a toda forma de presión imperialista y opuesta a la existencia de regímenes dictatoriales y totalitarios. Para hacer posible este sistema de convivencia, se señaló que se hacía necesario que los países latinoamericanos trataran con Estados Unidos, en un plano de igualdad y dignidad, para lo cual se propugnaba la progresiva unificación, sobre bases progresistas y democráticas.

Este proceso, mirado con perspectiva socialista, implicaba el desarrollo concertado de nuestros recursos económicos con miras a la liberación del imperialismo. En este marco, el Partido Socialista saludó el advenimiento de la Revolución cubana, que irrumpió en 1959, con el derrocamiento de la dictadura de Batista y la instauración de un gobierno popular. Apoyó, desde sus primeros pasos, a la primera revolución socialista de América Latina, en la cual reconoció e1 tipo de proceso de cambio social definido en la Fundamentación Teórica de su programa de 1947 y en resoluciones posteriores de sus congresos. Para los socialistas chilenos, la Revolución cubana era el frente de trabajadores convertido en poder. Por eso, la alentó en el desarrollo y profundización de sus transformaciones sociales Promovió su defensa en América Latina, cuando Estados Unidos amenazó su existencia misma por medio del bloqueo económico, la invasión de Playa Girón y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Los socialistas chilenos convirtieron a la Revolución cubana en la bandera de la revolución latinoamericana.

Crítica a la política soviética

En Chile, más que en otros países, las resoluciones del XX Congreso del PCUS de 1956 alcanzaron profunda repercusión. No podía ser de otro modo, ya que contradecían las posiciones oficiales defendidas con fanatismo hasta entonces por el Partido Comunista chileno, uno de los más subordinados al centro directivo de Moscú. Esas resoluciones se conocieron en nuestro país en los mismos instantes en que se

fundaba el Frente de Acción Popular (FRAP), la nueva alianza socialista-comunista que había de perdurar y desarrollarse hasta convertirse en la Unidad Popular que, con Salvador Allende, conquistaría en 1970 el gobierno, por la vía electoral, el único método utilizado en toda su historia.

Los acuerdos de dicho congreso del PCUS pueden resumirse en cuatro tesis fundamentales:

- La primera afirmaba que la guerra no era inevitable, como se venía sosteniendo hasta entonces, y que la coexistencia pacífica era posible entre países de sistemas sociales diversos, gracias al poderío del campo socialista y el fortalecimiento de las "fuerzas de la paz".
- La segunda era la traslación de la anterior a la vida interna de las naciones, y preconizaba la vía pacífica para la conquista del poder, basada en las condiciones políticas contemporáneas que posibilitarían diferentes caminos, incluso la acción parlamentaria.
- La tercera proclamaba que las formas de edificación del socialismo, una vez conquistado el poder por las fuerzas revolucionarias, podían ser distintas en cada país o comunidad nacional, de acuerdo a las características peculiares de su desarrollo histórico.
- La cuarta condenaba el culto a la personalidad practicado durante la larga etapa estalimsta, considerado ahora como la causa de graves errores, abusos y desviaciones en la historia soviética, y que debería superarse en el futuro mediante el restablecimiento de la legalidad socialista quebrantada y la dirección colectiva, fundada en los principios leninistas.

El Partido Socialista de Chile discutió la nueva situación política creada con los diversos acuerdos de dicho Congreso del PCUS. SU Secretario General, Raúl Ampuero, presentó un informe en el Comité Central, en los días 25 y 26 de agosto de 1956, a través del cual expuso las proyecciones de aquellos acuerdos en nuestro propio medio. Su diagnóstico fue severo al señalar las graves deformaciones ideológicas del estalinismo.

> El Partido Comunista chileno acomodó siempre su itinerario al meridiano.de Moscú. Por una especie de deformación progresiva de su rol político, común a todos sus congéneres, comenzó venerando la revolución de octubre como un acontecimiento de trascendencia secular, en lo que estaba en la razón, continuó asignando a esa experiencia un valor universal, con prescindencia de los factores locales y temporales y terminó por someterse al dogma de que ningún impulso revolucionario lo era genuinamente, si no se

hallaba bajo la inspiración soviética o no se integraba funcionalmente en la estrategia mundial de la URSS.[44]

La posición del Partido Comunista era, en síntesis, la suma del dogmatismo y del seguidismo.

> Donde estaba la Unión Soviética estaba la verdad, la democracia, la paz. Si se mandaba al patíbulo a la vieja guardia bolchevique, era cierto que la constituía un hato de espías y traidores; si estaba con Hitler la guerra era un crimen inhumano de los imperialistas; si acorralaba a Tito, era para aplastar su nido de fascistas. Un partido de tales condiciones acaba por situar la consigna por encima del examen objetivo de la realidad, coloca sus prejuicios en el lugar de sus deberes de clase.[45]

En otra parte de esta obra, confrontaré éstos y otros juicios con la *glasnost* (transparencia) en la historiografía soviética actual. Aquí sólo me referiré a los efectos inmediatos de las decisiones del mencionado congreso del PCUS.

Estas decisiones produjeron efectos políticos en la URSS y en los países de Europa oriental. El año crítico fue 1956. En Georgia, el país natal de Stalin, surgieron reacciones contrarias a la degradación del dictador, pero Jruschov las controló y mantuvo en orden el vasto imperio soviético. La situación se tornó más grave en los otros países socialistas o "democracias populares", después de alguna forma de deshielo expresado en el mejoramiento de las relaciones con Yugoslavia y en la rehabilitación de algunos líderes comunistas, como el polaco Gomulka y los húngaros Nagy y Rajk, éste último ejecutado en 1949 en una de las "purgas" ordenadas por Stalin.

Enseguida, acontecimientos sorprendentes golpearon a la dictadura comunista en Polonia. En el mes de junio de 1956, jóvenes obreros y estudiantes de la ciudad de Poznam sometieron a un asedio al local del partido y a los cuarteles de la policía, ante el asombro de los concurrentes extranjeros a la feria comercial de esa ciudad. La lucha popular se trasladó a las instancias del Partido Comunista polaco. Gomulka, liberado secretamente hacía algún tiempo, se impuso a lo; rusos a través de furiosas discusiones con Jruschov, que viajó a Polonia a poner crden en este país, seguido del avance de fuerzas terrestres y marítimas. Esta revolución pacífica se consumó el 19 de octubre de 1956, pasando Gomulka a dirigir a su país, aunque todavía bajo el control soviético.

[44] *Boletín del Comité Ejecutivo del PS,* N° 9, agosto de 1958.

[45] *Ibidem.*

Después se desencadenó el huracán sobre Hungría, donde existía la más cruel e impopular de las dictaduras de Europa oriental. En julio, los rusos destituyeron a Rákosi y lo trasladaron a Moscú, sustituyéndolo por Geró, otro terrorista de estado. Con sus torpezas, a poco de asumir la jefatura de gobierno, éste precipitó el 24 de octubre la insurrección popular y la consiguiente guerra civil. No sólo el pueblo sino también el ejército y la policía tomaron parte en esta revolución nacional, democrática y popular, contra la dominación extranjera. Como era de esperar, las fuerzas armadas soviéticas invadieron Hungría y diezmaron al pueblo alzado en armas.

Sin embargo, para apaciguar la ola de odio contra el aparato dictatorial del Partido Comunista, Geró fue destituido por Mikoyan y Suslov, que viajaron a Budapest, y éstos dieron su apoyo a Nagy, que surgía como el líder de la revolución. En medio de la euforia popular, el nuevo jefe de Estado anunció un conjunto de reformas, el retiro de Hungría del Pacto de Varsovia y la neutralidad, con cuyo programa selló su trágico destino. La Unión Soviética decidió, en efecto, aplastar la revolución por la fuerza de las armas. El pueblo luchó heroicamente, pero Nagy fue sustituido por Kadar, en virtud de la nueva intervención soviética, y posteriormente fue arrestado desde el interior de la embajada de Yugoslavia, donde se había refugiado, y fusilado junto con el jefe del ejército húngaro, general Maléter. Así, el principio de la coexistencia pacífica proclamado en el XX Congreso del PCUS se burlaba en forma espectacular.

El Partido Socialista chileno condenó entonces con indignación la intervención soviética y el aplastamiento brutal de la revolución húngara. En el Senado, hablaron Raúl Ampuero y Salvador Allende, para exponer el pensamiento de cada uno de los sectores en que se encontraba entonces dividida la organización. Con diferentes matices, expusieron la línea permanente del socialismo, en cuanto a la autonomía que debe preservarse en la lucha revolucionaria en cada nación, y a la defensa de los principios de la política internacional de no intervención y libre determinación de los pueblos.[46]

[46] Después de 33 años, en febrero de 1989, el Partido Comunista y el gobierno de Hungría reconocieron el carácter popular y revolucionario de la insurrección de 1956 y autorizaron la inhumación de los restos de Nagy, que se encontraban depositados en una fosa común, con los honores correspondientes y la concurrencia de decenas de miles de sus compatriotas.

Controversia socialista-comunista de 1962

Entre 1962 y 1964, el Partido Socialista completó y perfeccionó la definición de su política internacional, destacando la controversia socialista comunista en 1962, que puso de relieve, una vez más, las diferencias principales entre ambos partidos en esta materia. En efecto, comunistas y socialistas discutieron en Chile una problemática que revistió interés mundial en ese tiempo, toda vez que fueron planteadas después por el eurocomunismo. Aparte los temas de la definición del carácter de la revolución chilena y de la libertad durante la edificación de la nueva sociedad, que ya fueron examinados, se discutieron entonces, entre otros, los relativos a los centros de dirección mundial, a los campos opuestos y a los bloques militares respectivos, a la guerra y la paz, a la coexistencia pacífica y las vías de acceso al poder. Por constituir estas definiciones elementos condicionantes de la politica internacional del Partido Socialista de Chile, considero pertinente su análisis.

La primera de las cuestiones señaladas se planteó por el Partido Comunista reconociendo que el movimiento internacional del que formaba parte tuvo siempre "un centro dirigente en el mejor sentido de la palabra, un centro ;omo vanguardia de las ideas avanzadas", y que "...hace ya mucho tiempo que este centro se encuentra allí (en la Unión Soviética)".[47] Son palabras textuales de la carta de Luis Corvalán, Secretario General de su partido, que parecen increíbles, ya que entonces los más grandes partidos del movimiento comunista europeo rechazaban esa dependencia y consolidaban cada vez más su autonomía, después de pasar un largo período de sometimiento al "centro".

El Partido Socialista de Chile, que nunca se había afiliado a ninguna de las internacionales ni dependido de centro directivo mundial alguno, precisó en esa controversia su pensamiento al respecto:

> Para situar bien las divergencias, es indispen sable convenir en que las palabras empleadas por nuestro Secretario General (se refiere a Raúl Ampuero) pudieron ser otras, pero significan, en todo caso, exactamente lo mismo que ustedes quieren decir cuando se refieren al "papel dirigente" de la Unión Soviética y del Partido Comunista Soviético o a su carácter de "centro" y "vanguardia" de las ideas avanzadas. Y, por lo que nosotros entendemos, no hay dirección sin subordinación, ni hay vanguardia s in retaguardia. Vale decir, de cualquier modo que se le designe, el reconocimiento de un "centro" con tales

[47] Raúl Ampuero, "Carta del Partido Socialista", *Historia documental del i'scu* tomo 18, págs. 294 a 311.

características implica una actitud de acatamiento a su conducta y a sus decisiones, pues, de otro modo, todo lo dicho tendría un mero sentido verbalista o simbólico. Si ése es el valor sustantivo de los conceptos reiteradamente empleados, confirmamos nuestra resistencia a aceptarlos como un principio de acción política, aunque se trate sólo de una supeditación puramente ideológica o intelectual.[48]

La posición comunista era la antítesis de la autonomía socialista.

En esa oportunidad, en la carta socialista se respondió a una suerte de emplazamiento formulado por el Partido Comunista acerca de si el Partido Socialista dudaba sobre la adopción de su línea política en Chile por su propia dirección. Raúl Ampuero expresó que no tenía dudas que dichas decisiones eran tomadas en Chile, por sus propios dirigentes. Pero sostuvo también que continuaban pesando sobre aquel partido, como sobre todos los partidos comunistas, "una gama de concepciones, prejuicios y apreciaciones teóricas equivocadas, cuya persistencia se explica únicamente por aquel reconocimiento de una autoridad especial del centro soviético". Era una dependencia indiscutible.

He aquí la prueba irrefutable de la historia. Para citar un ejemplo dramático y reciente, en cuya apreciación esperamos hoy estar de acuerdo, afirma Ampuero:

toda la etapa estaliniana fue aceptada en el campo comunista sin críticas de ninguna especie, cuando era evidente, para cualquier observador medianamente informado, cómo se sustituía allí la dictadura del proletariado por una tiranía burocrática y la democracia obrera por una autocracia repulsiva.

Agrega que fue, a continuación de proclamarse la constitución soviética de 1936, "la más democrática del mundo", según el lenguaje de la época, "cuando se dio comienzo a la etapa descrita por Jruschov como un período de terror sin precedentes, que comenzó haciendo sus víctimas entre los propios dirigentes comunistas de la URSS". Pocos casos ilustran mejor la manera como la subordinación a un centro, aún el más clarificado, obstaculiza el crecimiento sano y pujante del movimiento internacional y lo hace solidario en la arbitrariedad y el terror.[49]

La segunda cuestión importante discutida entonces fue la relativa a los campos. La carta del Partido Comunista parte afirmando que "el mundo está dividido, por decirlo así, en dos campos principales y opuestos entre sí, el campo capitalista y el campo socialista", para terminar sosteniendo que el primero tiende a la guerra y

[48] *Ídem.*
[49] *ídem.*

el segundo a la paz y, por lo mismo, no debe hablarse de "política de bloques militares" como forma común de acción de ambos sistemas, y mucho menos colocar en el mismo pie a la OTAN y al Pacto de Varsovia. ¿Por qué no? No da razones que justifiquen su posición, pero el tiempo demostró que podía suprimirse el Pacto de Varsovia sin afectar la seguridad internacional.

La respuesta socialista es sólida y concluyente en este sentido, no dejando lugar a ninguna duda respecto a su autonomía:

> Para un marxista consecuente, el mundo no está básicamente dividido en dos "campos", entendiéndose por ello dos áreas geográficas perfectamente definidas en el mapa, aunque ese hecho tenga un valor innegable en la realidad contemporánea. La afirmación del Manifiesto Comunista acerca de que "la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases" nos parece válida aún hoy. El mundo está dividido en una contienda que tiene a la tierra entera por escenario, entre las fuerzas de la burguesía y las del proletariado, más nítida y esquemática en algunas regiones, más primaria y compleja en otras, pero constituyendo siempre el factor decisivo de la pugna histórica de la cual somos actores y testigos.[50]

La lucha de clases, según la concepción marxista, es pues la línea demarcatoria de nuestro tiempo. Estas afirmaciones del socialismo chileno serán confirmadas 33 años después por el entonces jefe del PCUS y del Estado soviético, Mijai S. Gorbachov.

Pero eso no es todo. El Comité Central del Partido Socialista agregó:

> En otras palabras, el admitir que es el "campo", es decir, una coalición de estados, el elemento socialista por excelencia, y que la adhesión más o menos incondicional a su política y a su conducta determina el grado de socialismo de quienes luchan contra el sistema capitalista, implica entonces un enfoque erróneo y unilateral de trascendentales consecuencias prácticas, en especial si se recuerda que esos estados se hallan taxativamente enumerados en la Declaración de los 81 Partidos Comunistas, de 1960.[51]

Con posterioridad a esta última declaración, incluso la unidad y sometimiento de esos Estados a un solo centro de dirección se rompió, particularmente por el conflicto chino-soviético.

Por la relevancia que tiene el tema, el Partido Socialista agregó otras consideraciones que justificaban más aún su posición contraria a incorporarse al campo so-

[50] *ídem.*
[51] *ídem.*

viético, porque éste no representaba los intereses completos de todas las fuerzas comprometidas en la acción anticapitalista, sino sólo una parte de esos intereses. El documento socialista agrega que cualquier política diseñada sobre aquella premisa axiomática constituye una formulación incorrecta y parcial del problema, que lleva a posiciones de hegemonía incompatibles con una concepción auténtica y democrática del internacionalismo revolucionario. Sobre este fundamento inamovible, el socialismo chileno rehusó siempre adherir al llamado "campo socialista" y, por consiguiente, someterse a un "centro dirigente", reafirmando de este modo su autonomía política, si bien esta posición no fue aislacionista. Sostuvo en esa oportunidad, por eso, que propiciaba un intercambio multilateral, democrático y activo de ideas y experiencias entre todas las fuerzas, movimientos, partidos y estados anticapitalistas, sobre la base de la más estricta igualdad de derechos, a fin de que cada cual elija la vía más apropiada para establecer la sociedad socialista.[52]

La tercera cuestión básica se refiere al problema de la guerra y la paz. La discusión giró en torno a la competencia nuclear, planteada entonces como una sucesión de desafíos entre los dos principales miembros del club atómico. El Partido Comunista resumió, en su carta, su posición, y dice:

> En cuanto a su pronunciamiento y el de su partido respecto a la explosión de la bomba soviética de 50 megatones, usted afirma que sólo está inspirado en el deseo de salvar a la población de Chile y del mundo de los infernales efectos de la radiación atómica a la cual está expuesta la humanidad entera, sin que se haya inventado una bomba con el "adoctrinamiento suficiente" para hacer discriminaciones entre burgueses y proletarios.

A continuación el Partido Comunista justificó la explosión de la bomba de 50 megatones e invitó al Partido Socialista a una lucha conjunta por la paz.

Este Partido fijó su posición sobre tan decisivo y crucial problema:

> No podemos negar al bloque soviético su derecho a disponer de ejércitos poderosos, a organizar su defensa, a perfeccionar su equipo bélico. Lo que discutimos es la preeminencia práctica que tales recursos van adquiriendo en la política internacional del bloque y la gravitación de ese poderío en las relaciones internas de la alianza[...]Hay, pues, millones y millones de hombres y mujeres deseosos de abatir los factores belicistas, dispuestos a paralizar a los dementes que pretenden arrastrarnos a un conflicto nuclear. ¿Por

[52] Los "campos" y "bloques" desaparecieron a raíz del derrumbe de la Unión Soviética, hasta el punto de que hoy se busca la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, y la incorporación de los ex estados "comunistas" en la OTAN, así como se disolvió el Pacto de Varsovia.

> qué exigirles que se coloquen junto al bloque soviético para acepti irlos como sinceros combatientes de la paz? ¿Por qué, cuando sabemos que la historia trabaja para el socialismo en el corazón mismo del sistema imperialista?[53]

En esta forma reafirmó su posición de autonomía internacional, que le impide participar en el juego político de las grandes potencias.

El Partido Socialista explicó a continuación que las masas, al revés de lo que creen los comunistas, se han sentido desengañadas y confundidas con la autorización de Jrushov de la insensata explosión de la bomba de 50 megutones, después de haber afirmado en 1960: "Quien rompa la tregua que suspende ir definidamente las experiencias nucleares es un criminal que atenta contra toda la humanidad". La razón es clara. Estas masas aceptan como una imposición de las circunstancias la organización de la defensa nacional, pero rechazan las "jactancias atómicas de quien se proclama campeón de la paz y del socialismo". Ellas recuerdan, además, que los actos de la Unión Soviética y de sus aliados, independientemente de sus intenciones, no siempre han contribuido objetivamente a preservar la paz. El caso más notorio fue el pacto nazi-soviético de 1939, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial pocos días después de su celebración.

En esta misma controversia, se discutió el problema de la vía pacífica, que el aplastamiento por las armas del pueblo chileno en 1973, y la dira lucha contra la dictadura militar pusieron de actualidad posteriormente. En la carta de la Comisión Política del Partido Comunista, se expresó que la vía pacífica y el revisionismo no son conceptos sinónimos, que "la vía pacífica no tiene nada que ver con la pasividad, no es una vía reformista sino revolucionaria, no se basa en un amortiguamiento sino en la agudización de la lucha de clases", La vía pacífica es, por último, "un camino que conduce a la revolución en determinadas circunstancias y, lo que es más importante, ya no sólo nuestras palabras, sino nuestra labor práctica demuestra lo que afirmamos".[54]

La Comisión Política del Partido Socialista dejó constancia en su respuesta de que su Secretario General sólo había hecho una alusión parcial a la tesis relativa a la "vía pacífica" con el fin exclusivo de criticar escuetamente "el hábito de elevar a la categoría de revelaciones del marxismo, aquellas mismas tesis calificadas como 'desviaciones'cuando las pronuncian los adversarios políticos". A continuación, afirma:

[53] Raúl Ampuero, *Ídem.*
[54] *ídem.*

> Ahora ya sabemos que la "vía pacífica" no significa renunciar a las profundas transformaciones económicas y sociales, ni abandonar las metas revolucionarias. Sabemos, por tanto, que se trata únicamente de la manera de llegar al poder, de los procedimientos de lucha, de los métodos de acción. Hay, no obstante, otros puntos de la cuestión que permanecen oscuros[...]Cada vez que le ha sido posible, el movimiento popular ha utilizado los medios legales.[55]

Hasta entonces ello se hizo siempre, mientras estos medios estuvieron abiertos a los partidos populares, así como ahora también en la transición a la democracia, a pesar de la "legislación" heredada de la dictadura en materia constitucional, partidos políticos y sistema electoral que hacen de la democracia una burla.

No obstante, la insistente propuesta del Partido Comunista de entonces era distinta. Así la señala la Comisión Política del Partido Socialista:

> Pero el carácter pacífico de los medios que se recomiendan ahora parece ir más lejos que la pura decisión de enfrentarnos a una contienda electoral: tiende —aunque ustedes no lo quieran— a crear en las masas una falsa confianza en lo que pudiéramos llamar la "normalidad" de las instituciones democráticas, en el funcionamiento leal de los mecanismos representativos, mientras nosotros, por el contrario, estamos convencidos de que, por la propia profundidad de la crisis social que vivimos, toda la formalidad del sistema republicano tradicional está siendo dolosamente barrenada para perpetuar en el poder a las minorías oligárquicas[...]Si las bases mismas de la contienda democrática —incluso en los marcos estrechos de una sociedad de clases— se alteran deliberadamente para impedir una victoria del pueblo que aparece inevitable, no podríamos predicar la paz sino la resistencia. Tal vez nuestra interpretación de la conducta del Partido Comunista no sea enteramente compartida por ustedes, pero refleja sí las repercusiones prácticas de una consigna ambigua.

Es tan cierta y válida esta apreciación que el propio Partido Comunista proclamó en la década de los ochenta, la violencia aguda y la política de la rebelión contra la dictadura.

La controversia tiene otras expresiones entre ambos partidos. El secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, en su libro *Camino de Victoria* dice: "La revolución socialista por la vía pacífica ya no debe considerarse como algo muy excepcional, sino la forma más probable del tránsito del capitalismo al socialismo

[55] Comité Central del Partido Socialista, *Política Internacional: informe y conclusiones*, febrero de 1964.

en una serie de países". Desde entonces hasta ahora no se ha dado en ninguna parte de la tierra, salvo que él considere como un proceso de esta especie el desarrollo político chileno de 1938 en adelante, como se deduce de sus siguientes palabras: "El triunfo del Frente Popular en 1938 y el de la Alianza Democrática en 1946 demostraron la posibilidad de que la clase obrera y el pueblo de Chile pudieran conquistar el gobierno por una vía que no es la de la insurrección". Corvalán olvida que el "triunfo" de la Alianza Democrática significó la represión del movimiento obrero y la ¿legalización del propio Partido Comunista por el presidente González Videla, elegido por este partido. El derrocamiento del gobierno de Allende negaría posteriormente aquella vía pacífica.

La política soviética para América Latina hizo jugar a los partidos comunistas adictos a ella un papel de colaboración con las clases dominantes en cada uno de nuestros países. Esta colaboración perseguía objetivos internos reformistas y objetivos externos de apoyo a la "competencia pacífica" entre el campo socialista y el campo capitalista, dentro del marco de la coexistencia pacífica. Esta última concepción era sostenida para consolidar el sistema soviético al precio del sacrificio del movimiento revolucionario mundial. Para los comunistas, la coexistencia entre estados con distintos sistemas económicos y sociales se extendía a las relaciones entre las clases antagónicas. Esta situación se debía a la íntima e irdisoluble vinculación entre los intereses internacionales de la Unión Soviética y la política de cada uno de los partidos sujetos a la hegemonía del centro directivo radicado en ella. En el período de Stalin, su defensa incondicional de la URSS los llevo a dar su apoyo al pacto nazi-soviético y a confiar en que el tiempo demostraría que el desarrollo socialista era superior al capitalista. Para eso, el sistema de estados que encabeza la Unión Soviética requería paz internacional, la que sólo podía lograrse mediante la supeditación a dicho interés superior de la lucha de clases en los países capitalistas.

En Chile, los comunistas, como fieles seguidores de las orien;aciones del centro directivo soviético, definieron su política en dichos términos. En el informe titulado Chile y la coexistencia pacífica, presentado por Luis Corvalán a la X Conferencia Nacional del Partido Comunista, celebrada en octubre de 1960, se expresó al respecto:

> Cuando el ciudadano de la Unión Soviética disponga de más medios de consumo que el ciudadano estadounidense y la superioridad del régimen socialista pueda ser entonces comprendida hasta por el obrero más atrasado, decenas y centenas de millones de trabajadores de Estados Unidos, Inglaterra y otros países capitalistas, donde gran parte de la clase obrera continúa engañada y sometida a la influencia de la burguesía, se pasarán a

las filas de los luchadores por el socialismo, tanto más cuanto que para esa época se habrá implantado en la URSS la jornada de cinco horas de trabajo.

En la década de los años noventa del siglo xx, la ficción se desploma ante la realidad, con la disolución de la Unión Soviética y el predominio absoluto de Estados Unidos.

La coexistencia pacífica lleva así a la vía pacífica postulada por los comunistas como el medio más adecuado para promover el tránsito del capitalismo al comunismo. El mismo Corvalán afirmó en el citado informe, en efecto, que la coexistencia pacífica asegura "el desarme y la liquidación del colonialismo", así como "nuevos cambios en la correlación de fuerzas, el vuelco de la humanidad hacia el socialismo". Independientemente de que la experiencia histórica demuestre otra cosa, Corvalán insistió en esta concepción:

> La lucha por la paz y la coexistencia pacífica es la forma más elevada de la lucha de clases, de la lucha del proletariado por el socialismo, forma que permite, como hemos visto, comprobar cuál es el mejor sistema social y asegurar el desenvolvimiento acelerado de las fuerzas productivas. Además, dicha forma, toda vez que lleva envuelta la idea de evitar una guerra atómica, corresponde por entero a los intereses de la humanidad.

Tal es su fundamentación teórica.

La vía pacífica se reafirmó a partir del XX congreso general del PCUS. Por la ambigüedad de esta concepción, no todo el movimiento comunista le confería el mismo significado. Para los partidos comunistas de Europa occidental, dicha vía requería, para asegurar su viabilidad, una correlación de fuerzas tan abrumadora que impidieran, en los hechos, el empleo de la violencia por parte de la burguesía. Con tal objeto, buscaban alianzas con sectores de ésta. Expresiones concretas de dicha política fueron el "compromiso histórico" en Italia, el "pacto para la libertad" en España y la "unidad del pueblo", en Francia. En ese mismo sentido se orientaba el Partido Comunista en Chile con el "frente antifascista" después del golpe militar de 1973.

Por su parte, los comunistas soviéticos exhibían entonces algunos matices diferenciados. Para ellos, el éxito de la vía pacífica exigía no sólo una correlación de fuerzas favorable, sino también la disposición a modificar las formas de lucha en defensa del poder conquistado por medios legales y pacíficos. Tal es, al menos, lo que plantearon en algunas controversias con el eurocomunismo, independientemente del apoyo que proporcionaban a las políticas de alianza con la burguesía en los países latinoamericanos y otras áreas del mundo. En suma, la Unión Soviética

formulaba tácticas según su conveniencia, desde el ultraizquierdismo de los primeros años hasta la unidad nacional; de la insurrección a las elecciones "libres", que aplicaban los partidos comunistas.

De la disputa chino-soviética a la Primavera de Praga

En los inicios de la década de los sesenta irrumpió la disputa chino-soviética que, con los años, provocaría una ruptura en el campo socialista. Como sucediera con la crisis desencadenada tres décadas antes con la lucha por el poder entre Stalin y Trotsky, esta vez también se hicieron sentir sus efectos en el Parido Socialista de Chile. Sin embargo, el sólido arraigo del concepto de autonomía, le permitió rechazar la idea de sustituir una hegemonía por otra y las formulaciones simplistas de los chinos, como la tesis de los dos imperialismos y el supuesto antagonismo entre la lucha por el socialismo y la lucha por la paz. Este grave conflicto mas bien vino a representar el surgimiento de una nueva potencia que se negaba a subordinarse a la URSS, y luchaba por su propia supremacía.

La discusión interna fue definida por el Partido Socialista en un documento aprobado por su Comité Central en agosto de 1963, imponiéndose otra vez su concepción independiente. "La aceptación incondicional e irreflexiva de determinadas líneas dictadas por uno u otro Estado", expresó, supondría la permanencia de "hábitos nocivos en el movimiento obrero, de los cuales el Partido Socialista pudo salvarse siempre por sus estrechas raíces en la realidad chilena". Por esta consideración, concluyó que "incurriría en un error irreparable si tomara partido en una disputa que es la mejor comprobación de un instrumento caduco, cono es la estructura del movimiento comunista internacional". De esta forma, el socialismo chileno reafirmó su autonomía y crítica al mundo comunista, entonces ya dividido.

En el vigésimo primer congreso general ordinario, celebrado en junio de 1965, el Partido Socialista, junto con reafirmar su solidaridad combativa con las fuerzas que luchaban en diferentes partes del mundo por la liberación de los pueblos y por el socialismo, volvió a plantear la problemática revolucionaria de América Latina. Denunció la acción del imperialismo estadounidense, en escala mundial, contra los movimientos populares, particularmente en los países coloniales y semicoloniales y, dentro de éstos, Vietnam, Congo y Santo Domingo. En este congreso general, el Partido Socialista condenó la doctrina Johnson como expresión de la nueva política intervencionista de Estados Unidos; repudió una vez más a la OEA, en tanto instrumento de dicha política, y llamó a los pueblos del continente a resistir todas las formas de penetración yanqui en América Latina en los planos político, militar, eco-

nómico, ideológico y cultural. Rechazó especialmente la formación de la "Fuerza Interamericana de Paz", así como ratificó su solidaridad activa con el pueblo y el gobierno de Cuba, exigiendo la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales. A partir de dicho encuentro, impulsó diversas iniciativas orientadas a incrementar mucho más las relaciones con los movimientos revolucionarios de América Latina y de otras partes del mundo.

Preocupado de la situación mundial, el congreso general ordinario de este partido, realizado en noviembre de 1967, la examinó una vez más de manera clara y profunda. Este análisis reiteró el carácter internacional de la lucha por el socialismo, siendo por lo mismo la posición del partido en este ámbito el fundamento básico de su línea política. No se puede elaborar ésta sólo tomando en consideración los factores nacionales, porque el intento de construir el socialismo en un solo país genera, como se ha demostrado históricamente, deformaciones contrarias a dicho objetivo. El socialismo, en cuanto sistema superior de convivencia humana, sólo podrá realizarse plenamente si se universaliza, como demostró posteriormente con la caída de la Unión Soviética y la desintegración del imperio.

En este marco, reiteró la caracterización de la Revolución chilena como socialista, la que se proyecta como parte de la revolución mundial. Sus fuerzas motrices son las clases obrera y campesina, con la participación de los sectores medios bajos y los intelectuales de avanzada. Esta revolución cumple en un mismo proceso las tareas democrático-burguesas y las socialistas, en un tiempo en que se han cancelado las revoluciones inconclusas. En este marco teórico, expresó su solidaridad con todos los procesos de edificación socialista de Europa, Asia y América Latina, sin menoscabo del ejercicio permanente de la crítica. Destacó la dimensión distinta dada por la Revolución cubana a la lucha armada para conquistar el poder, así como había puesto en evidencia, de nuevo, la impotencia de la burguesía interna como fuerza progresiva y su papel contrarrevolucionario real. De manera categórica, rechazó la política de coexistencia pacífica en América Latina, entendida ésta en los términos en los que fue aplicada por los partidos comunistas.

El aplastamiento de la "primavera de Praga" por los tanques soviéticos el 21 de agosto de 1968 determinó un nuevo retroceso en las relaciones de socialistas y comunistas en Chile. Como sucediera en 1956, con la invasión a Hungría, el Partido Socialista condenó categóricamente este nuevo atentado a la autodeterminación de los pueblos y el respeto recíproco que se deben las naciones del llamado campo socialista. De esta forma, quedó demostrado que la coexistencia pacífica sólo regía entre las grandes potencias y cada una de éstas continuaba reprimiendo a los pequeños países adscritos a sus respectivas zonas de seguridad. Así, la continuidad de su política internacional se hizo patente una vez más.

Ninguna intervención de la Unión Soviética produjo una división tan profunda en el movimiento comunista como la ocurrida en Checoslovaquia Bajo la sarcástica denominación de "ayuda fraternal y solidaridad internacional para con un pueblo amigo", medio millón de soldados rusos, con el concurso simbólico de otros países del Pacto de Varsovia, 6 mil tanques y apoyo aéreo, ocuparon Checoslovaquia en contra de la voluntad del propio Partido Comunista de ese país. No sólo eso, el *presidium* primero y luego el décimo cuarto Congreso Extraordinario, convocado para el 9 de septiembre y reunido clandestinamente el día siguiente de a invasión con la asistencia de 1219 de los 1534 delegados electos, condenaron esta acción como contraria a los principios que deben regir las relaciones entre estados socialistas.

¿Qué sucedía en Checoslovaquia que la Unión Soviética no pudo aceptar? Nada menos que la democratización de todas las esferas de la sociedad y el Estado. Bajo la dirección de Alejandro Dubcek y la memoria de Slanky, ejecutado en las "purgas" de 1953, el Partido Comunista checo había adoptado un programa de acción el 5 de abril de 1968 que le daba "rostro humano al socialismo". Se proponía el funcionamiento real de los consejos obreros, democracia representativa, autogestión, libertades públicas, acceso a los medios de información, independencia de la justicia, control de la policía, autonomía sindical y derecho a huelga. El proyecto de nuevos estatutos del partido contenía el respeto a las corrientes de opinión y los derechos de la minoría. Era un movimiento desde arriba y desde abajo, que se desarrollaba con una gran velocidad.

No pudo producirse un acuerdo que evitara la intervención militar, porque la Unión Soviética exigía el restablecimiento del control absoluto de la burocracia sobre el pueblo cheocslovaco. Calificada la "Primavera de Praga" de contrarrevolucionaria, la superpotencia restauró su ley. Los consejos obreros fueron disueltos, los órganos políticos, sindicales y judiciales purgados, la censura restablecida, los medios de información controlados. Además, la dirección del partido fue sustituida y en 1970 Dubcek fue suspendido de su militancia comunista y sus colaboradores más importantes fueron expulsados. En suma, una nueva burocracia se enseñoreó sobre Checoslovaquia.[56]

La invasión de Hungría y el aplastamiento de la rebelión contra la dictadura comunista por el Ejército soviético, confirmaban la subordinación o dependencia de las llamadas "democracias populares" y el carácter antipopular de éstas. Del mismo modo, la invasión de Checoslovaquia y la deposición por los blindados del Pacto de

[56] Derrumbado el sistema comunista en Checoslovaquia, Dubcek fue designado en 1989 presidente del Congreso, y posteriormente falleció en un accidente carretero.

Varsovia del nuevo gobierno emanado de un congreso del propio Partido Comunista, agregaron nuevos elementos de convicción en el sentido de que la Unión Soviética actuaba movida por una lógica de potencia mundial, que no se diferenciaba en modo alguno de aquélla que inspira la política de las potencias capitalistas.

De acuerdo a la orientación de su política internacional ya examinada, el Partido Socialista de Chile condenó en 1965 la invasión yanqui a la República Dominicana para impedir la consolidación del movimiento revolucionario encabezado por el coronel Francisco Caamaño. Esta intervención militar, ejecutada con la complicidad de la OEA, marcó el comienzo de una nueva fase de creciente inestabilidad institucional y el colapso definitivo de la Alianza para el Progreso. A las dictaduras militares se opuso entre tanto la lucha armada, bajo el ejemplo de la Revolución cubana, que continuó siendo un foco de influencia política en América Latina. Desde entonces y hasta fines del siglo XX se desarrolló el movimiento guerrillero que todavía subsiste en Colombia y reaparece en otras naciones, como México, un país de más de cien millones de habitantes.

Ficciones y realidades

El marxismo-leninismo

Después de la exclusión del "ampuerismo" a fines de la década de los sesenta, el Partido Socialista de Chile comenzó a definirse como marxista-leninista, sin precisar qué contenidos teóricos comprendía tal definición. No obstante, el hecho de que dicha caracterización esté contenida en los estatutos aprobados en 1966, en la conferencia nacional de organización, denota la idea de que este partido quiso asimilar principalmente, al parecer, la concepción de la vanguardia revolucionaria de esa herencia y no todos los principios y prácticas del "marxismo soviético", acumulados en más de sesenta años de historia, de los cuales aquélla es sólo su fundamento precario. Sin embargo, el vigésimo segundo congreso ordinario de 1967, dicha definición, empezó a usarse de manera genérica. Este año marca el inicio de un tercer período el la historia del Partido Socialista. El esclarecimiento de esta cuestión reviste singular importancia, porque el marxismo-leninismo se convirtió en la suma del dogmatismo. Esta explicación es una deuda que los socialistas chilenos tienen con los trabajadores.

Entre los dirigentes más destacados de entonces, tuvieron una responsabilidad decisiva en esta definición Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda y Adonis Sepúlveda, todos los cuales participaron activamente en el vigésimo segundo congreso general, celebrado en 1967, en Chillán, donde se consagró esta posición. Similar responsabilidad le correspondió a Aniceto Rodríguez, quien si bien no participó en las elaboraciones teóricas, aceptó la elección como secretario general en dicho congreso, presidiendo un Comité Central en el que aquellos tres dirigentes fueron las figuras principales. Ninguno de ellos dio nunca una explicación sobre su seducción por ese tema puesto de moda por el estalinismo. Entre el congreso de Chillán y la división partidaria de 1978, asumieron esta posición ideológica con verdadero fa-

natismo los "elenos", encabezados por Rolando Calderón, y una generación de jóvenes dirigentes provenientes del Partido Comunista. Después de dicha división, el sector dirigido por Altamirano empezó a superar aquella moda, sustituyendo el guión por la "y" (denominándose marxistas y leninistas), asumiendo la ortodoxia de esta dogmática sólo el sector de Almeyda. ¿Qué significa el marxismo-leninismo? Enseguida, trataré de explicarlo.

Durante mucho tiempo se consideró en el mundo que para sor revolucionario bastaba con asumir esa concepción. Por lo general, se declaraban como tales quienes no habían conquistado el poder según sus principios, a manera de tributo por el apoyo ulterior de la Unión Soviética. Pero eso no es lo más grave. Como expresa Fernando Claudín, el calificativo "marxista-leninista" es un típico producto ideológico estaliniano, cuyo contenido histórico es extraño al marxismo de Marx y al leninismo de Lenin, para diferenciarlos de los otros marxismos y leninismos.[1] Por eso, desde la década de los setenta se inscribió en la orden del día de los principales partidos comunistas de Europa occidental la preocupación por el análisis de aquella definición a la luz de la práctica concreta, precisando los principios específicos del leninismo rescatados por cada uno de ellos.

Esta debió haber sido también la preocupación oficial de los socialistas chilenos, aunque son pocos los que han incursionado en esta materia, aparte de Ampuero. Toda la dirigencia "renovada", de sus distintos orígenes sean éstos estalinistas, trotskistas, "elenos", socialdemócratas o "mapus", (cuyo partido fue declarado marxista-leninista bajo la dirección de Rodrigo Ambrosio), ha guardado el más absoluto silencio, aún después de que el PCUS renunciara a esta definición poco antes del derrumbe de la URSS. Pero, a pesar de esta indiferencia intelectual, constituye una tarea histórica delimitar con la mayor precisión los princip os generales del pensamiento de Lenin que, por encima y más allá del "marxismo-leninismo", continúan teniendo validez hoy en América Latina. Para eso, nada es mejor que partir del contenido y alcance que dieron al término sus propios creadores, sin ocuparnos por ahora de la distinción entre falso marxismo-leninismo y verdadero marxismo-leninismo que formularon las diversas sectas.[2]

Según el *Diccionario Marxista de Filosofía*, editado en la Unión Soviética por un numeroso grupo de colaboradores, bajo la dirección de I. Blauberg, se distinguen dos etapas en el desarrollo del marxismo-leninismo.

[1] Fernando Claudín, "Las tesis del PCE", *El Gallo Ilustrado*, México DF, 6 de mayo de 1978, p. 13.

[2] Algunos sectarios llegaron al extremo de sostener como único y verdadero marxismo-leninismo el que se practicaba en la Albania de Enver Hoxha.

1. Durante la vida de Lenin. Dice el mencionado diccionario:

> Una nueva e importantísima etapa en el desarrollo del marxismo se halla ligada al nombre de Lenin, quien enriqueció en forma creadora todas sus partes integrantes en el período en que la revolución proletaria se convirtió en un problema de la práctica inmediata. Lenin elevó a un peldaño cualitativamente nuevo la filosofía marxista al generalizar los novísimos avances del pensamiento científico; desarrolló multifacéticamente la dialéctica materialista al aplicarla a las nuevas condiciones de la vida social. Lenin elaboró la teoría acerca del imperialismo como etapa superior y última del capitalismo; desarrolló la teoría de la Revolución Socialista, importantísima parte integrante de esta teoría es la conclusión relativa a la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. Habiendo dirigido la primera Revolución Socialista en el mundo, Lenin definió las vías concretas para edificar la nueva sociedad, para transformar todas las esferas de la vida social con base en principios socialistas.[3]

Esta parte de la definición, además de su delimitación histórica, contiene diversos elementos generales que sirvieron de fuente de inspiración a todos los partidos revolucionarios, pero que no tienen el valor absoluto señalado. Nadie puede ignorar, desde luego, los esfuerzos de Lenin por enriquecer el pensamiento socialista mediante la asimilación de los más recientes descubrimientos científicos, ya que muchos de los utilizados por los fundadores fueron superados por la expansión de la cultura. Desarrollado así el marxismo por múltiples teóricos, Lenin lo aplicó como método de interpretación de la realidad histórica, en la búsqueda de soluciones para los problemas de la revolución en su tiempo y su propia situación nacional. Este es uno de los aspectos más respetados del pensamiento de Lenin, quien afirmó al respecto: "El análisis concreto de la situación concreta es el alma viva, la esencia del marxismo".

Este método supone el estudio de los fenómenos sociales desde su globalidad, pero tomando en consideración la correlación de fuerzas y los objetivos estratégicos del partido revolucionario. El concepto de *correlación de fuerzas* no se refiere de manera exclusiva a los grupos políticos y sus magnitudes electorales, sino fundamentalmente a las correlaciones de clases. Gramsci anota valiosas reflexiones sobre este problema:

[3] Blauberg y otros, *Diccionario Marxista de la Filosofía,* Ediciones de Cultura Popular S.A., México D.F, segunda reimpresión, 1975, pág. 190.

> Los elementos de observación empírica que se acostumbraba exponer sin orden, confusamente, en los tratados de ciencia política[...] deberían incluirse, ei la medida que no sean cuestiones abstractas o gratuitas, en los diversos grados de coirelación de fuerzas internacionales[...] para pasar luego a las correlaciones sociales objetivas, es decir, al grado de desarrollo de las fuerzas políticas y de partido (sistemas begemónicos dentro del Estado) y las correlaciones políticas inmediatas, (o sea, potencialmente militares).[4]

La plena concordancia de esta observación gramsciana con el pensamiento leninista es clara. Lenin se caracterizó por su rechazo a la frase revolucionana vacía, que no se apoya en el reconocimiento de la situación objetiva. Por cierto, hay mucha distancia entre esta actitud y la sujeción empírica del oportunisrr o a la inmediatez de las apariencias, fundamento del pragmatismo político como elemento de conducción en el movimiento reformista desde el siglo xIx y hasta hoy, en que se reproduce con mayor fuerza esta misma corriente política. Entre los más característicos ejemplos de aquella metodología se encuentran los análisis concretos de la obra *El desarrollo del capitalismo en Rusia,* publicada en 1899, en la cual Lenin excluye a la burguesía liberal como aliada temporal del proletariado, así como el estudio expuesto en *El imperialismo, etapa superior y última del capitalismo,* editada en 1916. Estas manifestaciones creadoras del leninismo deben ser, por cierto, recogidas y aplicadas por los revolucionarios de todas las latitudes, de acuerdo a la propia realidad objetiva de su tiempo.

No obstante, lo dicho por el *Diccionario Marxista de Filosofía* contiene elementos que falsifican el significado real del aporte de Lenin. Desde luego él no fue un filósofo y, por lo tanto, no hizo aportes importantes a la filosofía marxista, ni fue tampoco el único que se ocupó, en su tiempo, del imperialismo. Las afirmaciones absolutas acerca de que Lenin enriqueció todas las partes del marxismo y definió las vías concretas para edificar la nueva sociedad tampoco resisten el análisis, en esos términos absolutos, mucho menos ante el derrumbe del sistema de la Unión Soviética. En este mismo sentido, la aseveración de que "desarrolló multifacéticamente la dialéctica materialista al aplicarla a las nuevas condiciones; de la vida social" denota, sin lugar a dudas, la idea que hace del marxismo un sistema cerrado y concluido. Esta es una concepción absolutamente errónea y descartada en el marxismo clásico.

El propio revolucionario ruso se encargó de contrastar la afirmación del mencionado diccionario en cuanto definió las vías concretas para edificar la nueva

[4] Antonio Gramsci, *La política y el Estado moderno,* Barcelona, Península, 1971, pág. 107.

sociedad, para transformar las esferas de la vida social con base en principios socialistas, con su propio pensamiento, al afirmar:

> Sería erróneo, asimismo, perder de vista que después de triunfar la revolución proletaria, aunque no sea más que en uno de los países avanzados, se producirá, probablemente, un cambio radical, es decir, Rusia se convertirá poco después de esto no en un país modelo, sino de nuevo en un país atrasado (en el sentido "soviético y socialista").[5]

Puede agregarse, actualmente, que la Revolución rusa no resultó ser la primera revolución socialista, ni tampoco su desarrollo confirmó la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. Por el contrario, su caída demostró la falsedad de ambas aseveraciones.

Lenin no formuló un sistema de doctrina sino que su pensamiento se desarrolló, durante su existencia, al calor de los grandes acontecimientos históricos. Por lo mismo, su pensamiento creció y se transformó en el marco de un extraordinario dinamismo. Es corriente distinguir, por eso, como períodos cruciales, 1905, 1917 y 1922. En la prolífica obra de Lenin, aparte del método, destacan entre otras grandes cuestiones la relación entre la vanguardia y las masas, el carácter de la Revolución rusa, con sus temas correlativos, las etapas y las alianzas, la insurrección armada y la dictadura del proletariado. Toda la trayectoria política de Lenin se relacionó, pues, con las características de la formación económico-social rusa, así como de la revolución que se promovía. Tales eran los temas más discutidos en su tiempo.

En este orden de ideas, desafió las concepciones de la Segunda Internacional cuando rechazó la defensa en abstracto de la democracia burguesa, aunque reconoció el valor dialéctico de las conquistas democráticas, así como cuando destacó el papel histórico de los obreros y campesinos en esa Revolución. La situación objetiva de Rusia, en 1905, le llevó a definir a su proceso de cambio como una "revolución popular" y al nuevo gobierno como "dictadura democrática de obreros y campesinos", en la perspectiva de una transformación radical mediante una correcta política de alianzas. Más tarde, en 1917, le conferirá el carácter socialista a la Revolución rusa, por los objetivos que se planteó este proceso.

En la obra titulada *El Estado y la revolución,* Lenin demolió con sistemático rigor las falsificaciones del revisionismo socialdemócrata a la teoría marxista del

[5] Lenin, "La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo", *Obras Escogidas, en 12 tomos,* tomo xI, Moscú, Progreso, pág. 2.

Estado. En páginas de permanente actualidad develó la incapacicad del parlamentarismo como vía de acceso al poder. En este orden de cosas expresó:

> Decidir una vez cada cierto número de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués, incluso en las repúblicas más democráticas.[6]

La dramática realidad de América Latina del pasado inmediato confirma esta caracterización de la democracia burguesa, sobre todo después de las experiencias vividas en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo xx. Sin embargo, la utilización de ese espacio político en la lucha revolucionaria es factor condicionante del desarrollo de la conciencia política real de la clase trabajadora.

Ajeno a todo verbalismo, sostuvo:

> ...aunque no fueran "millones" y "legiones", sino una simple minoría bastante considerable de obreros industriales la que siguiese a los curas católicos, y de obreros agrícolas la que siguiese a los terratenientes y campesinos ricos *(grossbauern),* podría asegurarse ya sin vacilar que el parlamentarismo en Alemania no ha caducado todavía políticamente. Por eso mismo, la vanguardia revolucionaria debe participar en elecciones parlamentarias y la lucha desde la tribuna parlamentaria es obligatoria precisamente para educar a los sectores atrasados de su clase.[7]

Este es el realismo leninista, centrado siempre en las necesidades políticas de los trabajadores, pero con una perspectiva orientada hacia la destrucción de ese Estado para levantar el nuevo que ha de conducir el proceso de transición socialista. Él nunca confundió el realismo con el pragmatismo, como lo hacen los oportunistas de ayer y de hoy.

Pero, en su hora, tendrá también la comprensión necesaria para definir la Revolución de Octubre como una revolución socialista. Desechando las tesis reformistas, en el sentido de que el tránsito del capitalismo al socialismo puede efectuarse sin una revolución política previa, formuló la táctica de la conquista del poder mediante la insurrección armada por los obreros y los campesinos, con la hegemonía de los primeros. De este modo, de la revolución burguesa de febrero promovió la revolución socialista de octubre de 1917; después de la conquista del poder, impulsó

[6] Lenin, "El Estado y la revolución", *Obras Escogidas en tres tomos,* tomo I, Moscú, Progreso,

[7] Lenin, "La enfermedad infantil del 'izquierdismo' en el comunismo", *Obras Escogidas, en 12 tomos,* tomo xI, Moscú, Progreso, pág. 39.

la transformación socialista de la sociedad del inmenso imperio de los zares, que se derrumbaba al finalizar la Primera Guerra Mundial.

Lenin no sólo inició este grandioso proceso y definió las formas para crear las bases materiales y técnicas sobre las cuales edificar la nueva sociedad.

> Ni Marx ni Engels tuvieron la alegría de asistir (a la Revolución Socialista). Pero un discípulo genial que sabía El manifiesto de memoria y que había ahondado en el marxismo como nadie lo había hecho antes que él, tuvo la dicha de dejar a medio hacer uno de sus libros más profundos, porque es más agradable y útil, dijo, vivir la experiencia de una revolución, que escribir acerca de ella.[8]

No hay que olvidar tampoco que Lenin, cuyo más portentoso mérito, al decir de Galbraith, es haber retenido y consolidado el poder soviético, frente a la formidable resistencia del antiguo régimen y a la intervención armada de las grandes potencias europeas y de Estados Unidos, no es responsable de la forma y los métodos empleados en el intento de construcción del socialismo en un solo país. Ni tampoco de la elucubración de un modelo pretendidamente universal para ello. Murió antes que otros malos discípulos formularan tales tesis para justificar su hegemonía sobre una gran parte del movimiento obrero mundial y la utilización de éste en la defensa y sostenimiento incondicional del proceso de cambio dirigido por ellos.

Más todavía. El máximo dirigente revolucionario abrió un camino al pensamiento concreto y con el mismo, censurado por Stalin, se avanzó mucho más en la falsificación, convirtiendo a Lenin en la vía "oficial" de acceso a Marx. Todas las interpretaciones que propusieron desmistificar dicha situación y establecer, con mayor rigor, un análisis de las contradicciones que la empresa estalinista contenía, fueron condenadas de inmediato. Para ello se utilizó el sofisma que indicaba, contradiciendo las dudas, que "el leninismo no era solamente la aplicación del marxismo a las condiciones particulares de la situación rusa, sino su desarrollo natural en la época del imperialismo y la revolución proletaria".[9] Es lo que examinaré, a continuación, del *Diccionario Marxista de Filosofía,* es decir, la obra de integración del marxismo y el leninismo realizada por Stalin y sus seguidores, tanto como gobernantes de la Unión Soviética cuanto como supremos orientadores del movimiento comunista mundial. A partir de este proceso se suprimió toda critica dirigida a separar a Marx, de acuerdo a sus concepciones e insuficiencias teóricas, de Lenin,

[8] Aníbal Ponce, *Obras,* La Habana, Casa de las Américas, 1975, pág. 448.

[9] Hernando Pacheco, "España y el marxismo-leninismo", periódico *El Día,* México, 25 de abril de 1978.

conforme a sus ideas de la organización revolucionaria, la conquista del poder y el inicio de la edificación de una nueva sociedad.

2. Después de la muerte de Lenin. El *Diccionario Marxista de Filosofía* agrega:

> En la época histórica contemporánea, el marxismo-leninismo es desarrollado creadoramente mediante los esfuerzos colectivos del PCUS y de los demás paridos comunistas y obreros. Gran importancia ha tenido la crítica del culto a la personalidad, iniciada en el XX Congreso (1956) y aplicada consecuentemente por el PCUS y los demás partidos comunistas, así como también del voluntarismo y el subjetivismo que causan daño a la edificación socialista y al movimiento obrero. Han dado un extraordinario aporte a la teoría marxista-leninista el programa del PCUS (1961) y las decisiones del XXIII Congreso del Partido (1966). Los partidos comunistas defienden el carácter creador del marxismo-leninismo en lucha contra la ideología burguesa y contra sus deformaciones revisionistas y dogmáticas. En la época actual la teoría marxista-leninista presta atención fundamental a los problemas de la edificación del socialismo y el comunismo, de la lucha de la clase obrera de los países capitalistas y del movimiento de liberación nacional. Toda la trayectoria del desarrollo social contemporáneo demuestra la fuerza y vitalidad del marxismo-leninismo, cuya encarnación material la constituye el sistema mundial del socialismo.[10]

Esta segunda etapa se inició con la consagración y ritualización del leninismo que mició Stalin a la muerte del máximo dirigente soviético y se prolongó, durante treinta años de dictadura burocrática. Este proceso llevó a identificar el marxismo-leninismo con el modelo soviético de construcción del socialismo y/o el sistema mundial que encabezaba la URSS. Si el Diccionario Marxista de Filosofía se refiere sólo hasta las decisiones del XXIII congreso del PCUS es por la fecha de su primera edición, pero se debe entender que la definición comprende también las resoluciones de los congresos posteriores.[11] La primera edición del *Diccionario Marxista de Filosofía* mencionado corresponde a 1968.

Para esclarecer el real significado del marxismo-leninismo es preciso distinguir previamente entre éste y la expresión "leninismo". Zinoviev señaló en su ensayo *El leninismo,* de 1925, que este último vocablo "fue empleado por primera vez por los adversarios de Lenin hacia 1903, al comienzo de las disensiones entre bolcheviques y mencheviques. Se empleaba el término con un propósito polémico, a fin de contraponer las ideas de Lenin a los principios de Marx. Se pretendía identificar el

[10] 1. Blauberg y otros, *ibidem,* págs. 190 y 191.
[11] *ídem.*

leninismo con el jacobinismo democrático burgués".[12] Los seguidores de la Segunda Internacional reformularon la oposición entre marxismo y leninismo una vez triunfante la Revolución de Octubre, con el mismo designio de diferenciación.

En el año 1923, cuando Lenin se encontraba postrado por la parálisis, sin poder hablar, renació la expresión leninismo en medio de la lucha de fracciones que se disputaban la sucesión. La emplearon todos los principales dirigentes comunistas: Trotsky y Stalin, así como Zinoviev, Kamenev y Bujarin. Todas las fracciones se declararon herederas del pensamiento leninista y éste se convirtió, a partir de entonces, en argumento de autoridad en el PCUS, así como había sucedido con el pensamiento de Marx, después de su muerte en 1884, entre sus seguidores en la socialdemocracia europea. Actualmente, se puede considerar el leninismo en estricto sentido como la expresión de la obra, pensamiento y acción, de Lenin, es decir, el leninismo de Lenin. Como dice Marcel Liebman, en su notable libro *La Conquista del Poder (El leninismo bajo Lenin, I):* "El leninismo de Lenin tiene una especificidad que debe ser preservada de las confusiones muchas veces provocadas por sus comentadores y deliberadamente mantenidas por sus herederos". Por eso, él examina el leninismo bajo Lenin, lo que estrictamente ha sido, y no lo que el leninismo ha pasado a ser.[13]

No obstante, el uso del término leninismo duró muy poco. La "victoria" de Stalin sobre sus adversarios le permitió imponer, como doctrina oficial de la Tercera Internacional, su personal interpretación del pensamiento de Lenin, esto es, el llamado marxismo-leninismo. En efecto, a escasos meses del fallecimiento de Lenin, se afirmó en el V congreso de la Internacional Comunista (1924) que era necesario implantar el marxismo-leninismo en todos los partidos comunistas. Pero el todopoderoso dictador ruso no se detuvo ahí, sino que inventó la fórmula mágica del marxismo-leninismo-estalinismo, en 1939, después de asesinar a los más destacados dirigentes bolcheviques, la que subsistió hasta el XX congreso del PCUS, celebrado en 1956. Después de este torneo, se volvió a sacralizar la cópula marxismo-leninismo, que no es otra cosa que una instrumentalización del marxismo, su uso para lograr, primero, la absolutización del modelo soviético, después la imposición de la hegemonía del PCUS en el movimiento comunista mundial, y, por último, la supeditación de éste a los intereses del Estado soviético. Todo esto es simplemente una

[12] Citado por Juan Trías "Vejaramo, Orígenes y significados del leninismo", *Nuestra Bandera* N° 92, Madrid, 1978, pág. 20.

[13] Marcel Liebman, *La conquista del poder (El leninismo bajo Lenin, I),* México, Editorial Grijalbo, 1978, pág. 18.

degeneración del marxismo, en la cual colaboraron los "teóricos" comunistas de los países europeos y los corifeos de todos los países del mundo.

El comunista español Manuel Azcárate señaló, con razón, que en la Unión Soviética tanto la teoría como la historia estuvieron completamente instrumentalizadas al servicio de la coyuntura política y de los intereses de su proceso nacional de desarrollo. Ello determinó a su vez en el movimiento comunista una contra-instrumentalización. Al marxismo-leninismo ruso se opuso el marxismo leninismo chino, para no citar otros (como el marxismo-leninismo albanés), convirtiéndose esta cópula tan manida en una expresión de las cambiantes posiciones ac optadas por cada uno de los estados "socialistas". Era un verdadero intríngulis, en que debatían sus diferencias las diversas sectas ideológicas, al igual que en la Iglesia Católica durante la Edad Media. De acuerdo a dicho criterio, concluye Azcáiate en su análisis que

> el Estado absorbe al partido. El concepto del partido se modifica con Stalin. Con Lenin, el partido era un instrumento para la revolución; por eso, el concepto revolucionario en condiciones de guerra por la aplicación de métodos de violencia, etcétera|...] Pero con Stalin, el partido se va convirtiendo en un instrumento del Estado. Esta absolutización del Estado está, en mi opinión, en el origen de las degeneraciones políticas y teóricas stalinianas. Que siguen, no en los métodos represivos, pero sí en las concepciones vigentes en la Unión Soviética hoy.[14]

Se refiere a 1978, es decir, diez años antes del derrumbe del "comunismo soviético".

Previendo este proceso, el propio Lenin advirtió en repetid is oportunidades: "No imitar a los rusos", porque si algo estaba determinado decisivamente por las condiciones históricas de Rusia de la época era la concepción del partido. Por eso, poco antes de su muerte, hizo presente en su informe ante el IV Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en noviembre de 1922, la conveniencia de superar la tendencia imitativa que había determinado la aprobación, en el III Congreso de dicho organismo, de las tesis sobre la estructura, los métodos y la acción de los partidos comunistas. Expresa entonces Lenin: "La resolución es magnífica, pero es rusa casi hasta la médula, es decir, se basa en las condiciones rusas. Este

[14] Manuel Azcárate, "El leninismo hoy", *Nuestra Bandera,* N° 92, Madrid, 1978, pág. 18.

es su lado bueno, pero también es su lado malo..."[15] El sentido de esta caracterización es obvio.

La práctica estalinista partió, en efecto, del leninismo, lo despojó de sus propósitos originales y organizó su culto como instrumento de su propia dictadura burocrática. Frustrada la revolución en Europa, José Stalin formuló su concepción de la construcción del socialismo en un solo país, falsificando la primitiva formulación bolchevique de la revolución mundial a partir de las sucesivas rupturas de la cadena imperialista a través de sus eslabones más débiles. Convirtió a la Unión Soviética en la "patria" del proletariado y supeditó el movimiento comunista internacional a la estrategia de supervivencia y desarrollo de aquélla. He ahí la fuente de todas las perversiones del comunismo soviético y la causa final de su extinción.

Este uso malicioso del marxismo-leninismo como instrumento de dominación explica la inseparabilidad del marxismo y el leninismo en la concepción estalinista. Por esta misma causa es indispensable comprender las raíces, no explicadas, cuando no confusas y arbitrarias, sobre la escisión del sistema. Conviene remarcar, en este punto, que la integración del marxismo y el leninismo como un todo —eslabón esencial de la cadena— se debió a Stalin, quien prescindiendo de su discrepancia abierta con Lenin en la última parte de su vida:

> Ocultó y deformó sus características esenciales para terminar eliminando del proceso no sólo las contradicciones, inevitables y siempre ricas de Lenin sino las interpretaciones que habían hecho de su pensamiento corrientes revolucionarias muy importantes. En ese nivel tendrían que considerarse aportaciones tan distintas, pero tan sugestivas, como las de Trostzky o Bujarin.[16]

Este pensamiento, especialmente el del primero, gravitó en forma constante en el movimiento revolucionario mundial.

En suma,.rechazar el marxismo-leninismo en cuanto es la dogmatización del pensamiento de Lenin, es decir, su conversión en un sistema de verdades universales, legitimador de los intereses del Estado soviético y de su modelo de desarrollo, no supone el cuestionamiento de las formulaciones políticas de Lenin. Esta posición significa, por el contrario, combatir el empobrecimiento de Lenin y la manipulación del marxismo, restableciendo la autonomía de éste. Significa también el reconocimiento de que el leninismo, puro y simple, es la aplicación creadora del método

[15] *ídem.*
[16] Hernando Pacheco, *ibidem.*

marxista en una época y una realidad determinadas, así como el erriquecimiento de la teoría marxista. Este es el mérito de Lenin, pero no de sus sucesores bajo la batuta del PCUS. Está de más decir, por último, que no todas las tesis de Lenin tienen vigencia hoy y en todas las partes del mundo, aunque muchas serán reformuladas en los años venideros.

Pero hay ciertos principios del leninismo que el socialismo chileno asimiló durante su historia, al margen de las trivialidades del Congreso de Chillan de 1967, algunos de los cuales se analizarán enseguida. En efecto, después de las precisiones generales expuestas cabe señalar que existen algunos principios e specíficos del leninismo que el socialismo chileno recogió como legado e incorporó, por lo tanto, a su acervo teórico. Ellos surgen de la realidad histórica que enfrentó la Revolución de Octubre, de la circunstancia en que ésta se produjo en un país que estaba lejos de tener un capitalismo maduro. Ello hizo necesario complementar la teoría marxista con nuevas formulaciones que, a poco andar, se sometieron a la prueba de la historia.

En este sentido, es interesante destacar la personal interpretación del leninismo formulada por el socialista italiano Lelio Basso. Para este pensador, ya muerto, la concepción de Lenin no corresponde de hecho a la de Marx, pero reconoce su originalidad al sentar las bases para construir una sociedad nueva, después de abatir el capitalismo en el inmenso imperio de los zares. El leninismo representa, de acuerdo a este razonamiento, la teoría y la estrategia de la revolución en el "eslabón más débil" de la cadena del imperialismo. Agrega Basso:

> No sólo esto, también el hecho de haber abierto esta posibilidad en un país de campesinos, que representaba, entonces, la "periferia" del capitalismo mundial, puso bien de manifiesto el enorme potencial revolucionario que había en esta periferia, abriendo la puerta a la revolución en otros países campesinos como China y Vietnan. Lenin descubrió no sólo a los campesinos, sino también a los movimientos de liberac: ón nacional y así el verdadero punto de referencia de los movimientos revolucionarios, de Asia, África y América Latina. Es el teórico y el estratega de la revolución en el "e slabón más débil" y justamente por eso no ha dado una contribución tan original y profunda a la estrategia revolucionaria de los países industrialmente desarrollados.[17]

No es solamente Lelio Basso quien plantea la insuficiencia del leninismo para encarar la situación revolucionaria en los países avanzados de Europa occidental,

[17] Lelio Basso, en la presentación de Problemas del socialismo, cuarta serie, N° 3, 1976, dedicado al leninismo. Citado por Ernesto García, "Las revisiones del leninismo y marxismo revolucionario de ayer y hoy", *Nuestra Palabra* N° 92, Madrid, 1978, pág. 11.

sino también Gramsci. Él había señalado ya, en sus *Cuadernos de la Cárcel* y con posterioridad a la ascensión del fascismo, las limitaciones del planteo estratégico bolchevique en las condiciones de esa región del mundo. En sus reflexiones de cautiverio, escribe: "Me parece que Ilich habría comprendido que era necesario pasar de la guerra de maniobra, aplicada victoriosamente en Oriente en 1917, a la guerra de posición que era la única posible en Occidente donde[...] los cuadros sociales eran de por sí capaces de transformarse en trincheras muy provistas".[18] Esta observación gramsciana, más allá de su lenguaje simbólico, tan característico en su discurso teórico, se sustenta en la distinción que traza entre las condiciones de Oriente y de Occidente. "En Oriente el Estado era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en Occidente, entre Estado y sociedad civil existía una justa relación y bajo el temblor del Estado se evidenciaba una robusta estructura de la sociedad civil".[19] En esta diferenciación entre el desarrollo de los países de una y otra área del mundo se podrían basar distintas tácticas para la revolución, así como estrategias diferentes.

Rescate de algunos principios básicos

Del leninismo, en suma, el Partido Socialista de Chile rescató algunos principios básicos. Quizás merezca el primer lugar, en la mención de dichos principios, el imperialismo, precisamente cuando se ha extinguido el siglo xx. La razón de esta prioridad se funda en la circunstancia de que, después de casi un siglo desde que Hobson en Inglaterra, Hilferding en Alemania y Lenin en Rusia, entre los principales, se ocuparon del proceso del imperialismo, se observa una tendencia a eludir el concepto, sustituyéndolo por el de transnacionalización, integración, asociación y otros, a través de una profusa literatura. El último grito de la "moda" intelectual es el de "globalización". En este esfuerzo concurren los analistas, los académicos, los hombres de gobierno y los simples políticos, comportamiento que tampoco es nuevo toda vez que surge con los orígenes de esa etapa del capitalismo.

Conviene recordar que el proceso del imperialismo constituía ya, con anterioridad a la Revolución Rusa, una preocupación de los teóricos marxistas, a lo menos respecto a uno de sus aspectos fundamentales: el de las relaciones económicas entre los países capitalistas desarrollados y los países que, aunque integrados al

[18] Juan Carlos Pontantierro, *Los usos de Gramsci,* México, Siglo xxi, Cuadernos del Pasado y Presente, 1977, pág. 539.

1[9] *Ibidem.*

mercado mundial capitalista, eran dominados por los primeros Esto es, los países coloniales y semicoloniales. El imperialismo fue discutido, en efecto, en los años comprendidos entre el congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional Socialista (1907) y la revolución soviética (1917), aunque antes se habían adoptado posiciones por los mismos actores. En Chile también, en el seno del movimiento obrero, como lo demostraron diversos historiadores, por ejemplo Ramírez Necochea, Julio César Jobet, Luis Vítale y muchos otros ensayistas.

No obstante, el congreso de Stuttgart dedicó una sesión especial al tema, la que se caracterizó por un debate apasionante en el que tomaron parte los dirigentes más importantes de aquellos partidos. Tal discusión asumió, en efecto, el carácter de un verdadero enfrentamiento conceptual. Por un lado, actuaron Van Kol, David, Bemstein y otros, que unieron a la teorización del revisionismo de ese tiempo la defensa abierta del imperialismo y del colonialismo. Por el otro, estuvieron Lebedour, Kautsky y Lenin, quienes impugnaron dichas posiciones, señalando los efectos negativos de esta "fase superior" del capitalismo para los países co oniales y semicoloniales. Está de más advertir que las concepciones de los dos primeros fueron diferentes a las de Lenin, si bien condenaron también el sistema.

Las posiciones de los revisionistas eran claras y cínicas. Afirma Van Kol, aludiendo a las colonias: "Debemos llegar allí con las armas en la mano, aunque Kautsky llame a esto imperialismo". Después de haber sostenido que "una cierta ganancia para la clase trabajadora de Holanda está efectivamente vinculada a las posesiones coloniales", pregunta polémicamente a Lebedour: "¿Quiere usted renunciar, aunque sea en el presente, a las riquezas incalculables de las colonias?". Lenin reconoce, en este debate, "que las riquezas extraídas de las colonias afluyen, al menos en parte, a la clase obrera de los países metropolitanos" y considera a este hecho como una de las fuentes del revisionismo y del reformismo.[23]

Sin embargo, los fundamentos para una teoría del imperialismo provinieron de otro socialista, de nacionalidad austríaca. En 1910, apareció, en efecto, el libro *Capital financiero,* de Rudolf Hilferding, el más destacado economista socialdemócrata de su tiempo. Este autor abordó el problema principalmente en el capítulo "La exportación del capital y la lucha por el espacio económico", después de examinar "la transformación de la política comercial" y, sobre todo, la función de los aranceles en la época del capitalismo financiero. "Son precisamente los aranceles los que inducen a exportar no sólo las mercancías, sino la misma producción de mercancías,

[20] Paolo Santi *et al, Teoría marxista del imperialismo,* Buenos Aires, Cuadernos de Pasado y Presente 10, tercera edición, 1973, pág. 13.

ya que uno de los primeros resultados de los aranceles proteccionistas es el de aumentar los beneficios extras, haciendo al mismo tiempo más fácil la acumulación y más necesaria la exportación de capital."[21]

Bujarin, con su *obraLa economía mundial y el imperialismo,* concluida en 1915, y Lenin, con su célebre libro *El imperialismo, fase superior y última del capitalismo,* compuesto un año después, cierran el período de elaboración de la teoría del imperialismo. Ambos trabajos de análisis tendrán una influencia considerable en el movimiento obrero en los años posteriores y darán una sistematización definitiva a esta concepción tal como es conocida entre los marxistas. La definición presentada por Lenin del imperialismo está basada, como es sabido, en una consideración estrictamente económica, y descansa sobre lo que él, con precisión, denomina los cinco rasgos fundamentales:

1. La concentración de la producción y del capital, llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica.
2. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera.
3. La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande.
4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo.
5. La finalización del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.

De las cinco particularidades del imperialismo, tal como las define Lenin, las tres últimas se refieren a problemas de economía internacional y, por lo tanto, al menos indirectamente, a las relaciones entre países capitalistas de más antiguo desarrollo y países "explotados, dominados y de economía deformada". El mecanismo que regula la exportación de capital, al igual que en Hilferding, es vinculado a la caída tendencial de la tasa de ganancia. En efecto, según Lenin, a fin de que no disminuya la tasa de ganancia en los países de composición orgánica más elevada, es necesario exportar el excedente de capital al extranjero, a los países atrasados. En estos últimos, la ganancia es de ordinario alta, pues los capitales son escasos, el precio

[21] *Ibidem,* pág.15.

de la tierra relativamente poco considerable, los salarios bajos y la:; materias primas baratas. Por eso, estos países, conjuntamente con las colonias, son fuentes fundamentales de la acumulación capitalista.

Esta es la forma y la dirección típica de la exportación de capital de los países de composición orgánica elevada a los que tienen composición orgiinica inferior. No obstante, ni Bujarin ni Lenin dejan de señalar que el capital se desplaza también en el interior del área de los países más industrializados como consecuencia y manifestación de la lucha entre los monopolios. Vinculada estrechamente a la exportación de capital existe, por otra parte, la tendencia a los acuerdos internacionales entre los monopolios y el nacimiento de los carteles mundiales.

No obstante, a la larga, surge como una consecuencia inevitable del enfrentamiento internacional de los monopolios la lucha por la repartición del mundo entre las grandes potencias que están detrás de los más poderosos monopolios. Escribe Bujarin:

> Si la presión del poder militar provoca concesiones y múltiples privilegios, la presencia ulterior del capital en el exterior requiere una "protección" específica. En un principio el centro de gravedad se encontraba en la exportación de mercancías, en la que los exportadores arriesgaban solamente éstas, es decir, su capital circulante. Ahora, la situación es completamente distinta[...] Los capitalistas de los países exportadores están materialmente interesados en la "protección de su riqueza", o sea, de todo el capital.

Esta "protección" ha adoptado diversas formas, tales como intervenciones militares, golpes de estado, convenios internacionales, seguros, etcétera.

Actualmente, la definición económica del imperialismo dada por Lenin sigue en pie, a lo menos la parte general referida al proceso creciente de concentración, mientras que los otros rasgos han experimentado algunas modificaciones, lo que no resta importancia al libro del gran revolucionario ruso para el tiempo que toma en consideración. El propio Lenin, en el prólogo a las ediciones francesa y alemana (1920) escribió:

> Este folleto, como queda dicho en el prólogo de la edición rusa, fue escrito en 1916, teniendo en cuenta la censura zarista. Actualmente, me es imposible rehacer todo el texto, trabajo que, por otra parte, puede que fuera inútil, ya que el fin principal del libro, hoy como ayer, consiste en ofrecerf...] un cuadro de conjunto de la economía mundial capitalista en sus relaciones internacionales a comienzos del siglo xx, en vísperas de la primera guerra internacional.

De acuerdo con los cinco rasgos mencionados, Lenin definió en general el imperialismo, en el séptimo capítulo de su libro:

> El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes.

Por esta definición, la posición antiimperialista del Partido Socialista de Chile le confirió un carácter socialista a la revolución en nuestro país como en el conjunto de América Latina pues, como decía Mariátegui, "somos antiimperialistas porque oponemos al capitalismo el socialismo como sistema antagónico".[22] Dos guerras mundiales y numerosas guerras de liberación confirman esta concepción en el siglo xx.[23]

Este concepto de imperialismo está relacionado con otro principio leninista que, en el pensamiento de Marx, sólo representó un esbozo. Se trata del carácter específico de los procesos revolucionarios en los países atrasados, derivado de la naturaleza del desarrollo histórico de los mismos. Esta autonomía de la situación revolucionaria de dichos países está contenida en las "tesis sobre la cuestión colonial", aprobadas en el II congreso de la Internacional Comunista, bajo el patrocinio del propio Lenin, y cancela la subordinación de la lucha en ellos a la victoria del proletariado en los países centrales o metropolitanos. La continuidad del pensamiento marxista es, pues, evidente. En las postrimerías de su existencia Marx se había planteado, aunque sin resolverla, la duda acerca de si era posible aplicar los presupuestos fundamentales de su teoría a países europeos atrasados, como Rusia y Polonia. Por su parte, Lenin había superado la idea de que la Revolución Socialista sería el resultado de la maduración de la sociedad capitalista nacional por su hipótesis de que dicha maduración debía entenderse a nivel histórico mundial del capitalismo.

En un tiempo cambiante en el cual los revolucionarios esperaban la transformación social que debía seguir a la desintegración del capitalismo agonizante, Lenin escribió: "El imperialismo anuncia el advenimiento de la revolución socialista". De

[22] José Carlos Mariátegui, *Obras completas,* tomo II, Empresa Editorial Amauta, Lima, 1976, pág. 190.

[23] Además de los primeros analistas del imperialismo mencionados, se agregaron nuevos autores, algunos políticos como Rosa Luxemburgo, Mao Tse Tung, Herbert Morrison y otros economistas como M.Barrat Brown, P.A. Barán, P.M. Swezy, M. Dobb, etcétera

acuerdo a esta perspectiva, el capitalismo de los monopolios avanzaba hacia los estertores de su crisis general, el imperialismo era la fase suprema de su evolución. Los movimientos de liberación nacional en los territorios coloniales constituían entretanto un factor importante del proceso revolucionario, ya que socavaban las posiciones del imperialismo y agravaban sus contradicciones. Dos guerras mundiales, con más de 50 millones de muertos, constituyen un testimon: o irrefutable, que puso en evidencia la presencia del imperialismo en el mundo y la. lucha mortal entre sus diversas expresiones nacionales.

Desde ese tiempo la lucha de los movimientos de liberación nacional en los numerosos territorios coloniales condujo a la conquista de la independencia, a lo menos de la independencia formal, y a la liquidación de la dominación directa. Al mismo tiempo, surgió un grupo de estados denominados socialistas, que se situó fuera de la órbita imperialista y participó en una competencia pacífica con el sistema capitalista, algunos de los cuales, encabezados por la Unión Soviética, se han derrumbado. No obstante, esta evolución significa el término de la dominación colonial directa, pero la crisis final que debía marcar también la muerte del capitalismo monopolista y anunciar la era del socialismo todavía no se ha verificado. Por el contrario, ha experimentado un extraordinario retroceso con el derrumbe de uno de los pilares del comunismo: la Unión Soviética y sus satélites. Pero se mantiene en pie el mayor de sus pilares, esto es, la Republica Popular de China.

En medio de aquella realidad apareció el Tercer Mundo, del que forman parte los nuevos estados surgidos del proceso de descolonización. Con ellos las potencias imperialistas establecieron relaciones propias del neocolonialismo o nuevo imperialismo, entre las cuales continúa destacándose la exportación de capitales para explotar las materias primas y la mano de obra a bajos precios de los países de ultramar. Al mismo tiempo, dichas potencias industriales concentran sus inversiones en los países metropolitanos mediante corporaciones transnacionales, con el fin de desarrollar la producción y dominar el mercado mundial, sobre el que afirman su poder por todos los medios. Las inversiones en los países del Tercer Mundo que supone este esquema de dominación son financiadas, en gran parte, por las reinversiones de las ganancias extraídas en el exterior. La salida neta de capital de los países metropolitanos está compensada con creces por la entrada de las ganancias obtenidas fuera de sus fronteras. En cuanto a la magnitud de este "tributo" las utilidades de las sucursales, filiales, etcétera, en el exterior no dan siquiera aproximadamente una medida de la cantidad de excedentes que se extrae realmente, porque la mayor parte de los mismos se traducen en los precios de monopolio de las mercancías vendidas, así como bajo la forma de royalties, comisiones, gastos de administración y

otros "servicios". En el último tercio del siglo xx pasó a tener una enorme importancia la deuda externa de los países atrasados como fuente de utilidades de los países avanzados.

Durante el siglo xx, la lucha política contra el neocolonialismo o nuevo imperialismo se hizo más dura y difícil a su vez en aquellos países, por la persistencia de las ilusiones acerca de la necesidad que tienen sus economías del capital extranjero y sobre la aparente generosidad de las potencias dominantes al conceder "ayuda" o asistencia financiera y militar. Pero, a medida que se desarrollan movimientos revolucionarios, por la transformación radical de la sociedad y por el avance hacia el socialismo, la posición del nuevo imperialismo se vuelve cada vez más definida e implacable y, por lo mismo, la lucha en su contra se convierte en parte integrante de la revolución socialista mundial. Esta situación se ha hecho presente con toda claridad en los últimos años.

De aquellos principios anteriores se infiere, en tercer lugar, el desplazamiento geográfico del potencial revolucionario de Occidente hacia Oriente. Lenin extrajo poco antes de morir las consecuencias de la derrota de la Revolución en Alemania. Dado el papel central que la relación entre capitalismo maduro y transición al socialismo desempeña en la teoría marxista, el fracaso de la revolución alemana, unido al rol dirigente cada vez mayor de Estados Unidos en la reconstrucción del mundo occidental, impuso la necesidad insoslayable de reconsiderar la situación internacional. Entonces todo indicaba, por una parte, que el potencial capitalista iba a ser, durante un largo período, más fuerte que el potencial revolucionario. Por la otra, que se mantenía la influencia del reformismo sobre el proletariado del "capitalismo maduro", a pesar del deterioro de la economía por la última conflagración mundial. De este hecho surgió el cambio del agente histórico de la revolución no sólo en un sentido social, sino también en un sentido geográfico, si bien ambos están interrelacionados.

Dicho de otro modo, si se producía una auténtica "estabilización capitalista", el Estado soviético no sólo tendría que coexistir, durante mucho tiempo, con un mundo capitalista más poderoso. Debería también considerar el naciente movimiento insurgente de los países coloniales y semicoloniales como algo más que una "reserva" del ejército revolucionario. Todo ello hacía necesario redefinir tanto la estrategia internacional como la edificación del socialismo. El crecimiento del potencial revolucionario en Oriente dio sus primeros frutos después de la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución china. Más adelante, se sucedieron procesos similares en Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Argelia, Mozambique, Angola y otros países, los cuales asumieron características distintas de la Revolución rusa y diferentes en-

tre sí. Todos estos procesos continuaron en pie, con cambios y adaptaciones, después de la caída y la desintegración de la Unión Soviética.

Todas estas revoluciones, incluida la rusa, no se produjeron como resultado directo y consecuente de un elevado desarrollo capitalista nacional, sino fundamentalmente por la acción de factores histórico-políticos. Derrotada en Europa occidental, la revolución triunfó en la periferia del capitalismo en medio del estrépito de guerras internacionales y del explosivo proceso de la descolonización. Tales factores histórico-políticos constituyeron una constante en las situaciones revolucionarias surgidas desde 1917 hasta ahora. En esto tampoco puede señalarse que haya una aportación exclusivamente original de Lenin. Con anterioridad, Kautsky, en *Los eslavos y la revolución,* publicado tres años antes de la revolución de 1905, había pronosticado que "el centro revolucionario se traslada de Occidente a Oriente", lo que muestra que ésta era una cuestión no ajena al horizonte marxista de comienzos de siglo. Pero la especificidad del aporte leninista consistió en transformar esa caracterización histórica global en un principio estratégico, en cuya tarea contribuirán Mao en Asia y Mariátegui en América Latina.

A diferencia de Kautsky, el gran revolucionario ruso sostuvo y apoyó la lucha del proletariado europeo, luego de la Primera Guerra Mundial, como sucedió en Alemania, Austria, Hungría, Italia, Finlandia y Estonia. Tras la derrota de estas revoluciones, Lenin advirtió que el flujo se había trasladado al Oriente (la Revolución china de 1925-1927 liquidada por el estalinismo, la proclamación de la república turca, el movimiento independentista hindú, etcétera). La penetración política de ese análisis le condujo a sugerir toda una reformulación estratégica clara para el naciente movimiento comunista internacional, sin perder de vista que la situación esencial que había de ser afrontada era el resoldamiento del sistema imperialista. El derrumbe del "comunismo soviético" acentúa aún más el proceso revolucionario hacia el Oriente, como quiera que la revolución prosiguió su marcha, con avances y retrocesos, en China, Vietnam y Corea del Norte.

El cuarto de los principios mencionados se refiere a la modificación del agente político revolucionario en los países de economía atrasada. Desde el tiempo de Marx se esperaba, en efecto, la revolución socialista en los países de capitalismo avanzado, cuyo sujeto histórico era el proletariado. La explicación es clara. Marx sostuvo que el socialismo advendría como resultado del desarrollo del capitalismo, de la maduración del modo de producción capitalista. Tal interpretación corresponde a la evolución de las formaciones sociales, que se hace particularmente explícita en el prólogo a *La contribución a la crítica de la economía política.* Expresa Marx:

> Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la sociedad antigua.[24]

Sin embargo, aquella interpretación tiene un sesgo economicista, que se hace más ostensible en las visiones que conciben la crisis del capitalismo como el derrumbe causado por una situación económica objetiva. En verdad, Marx señaló las condiciones históricas generales que posibilitan el tránsito al comunismo. En el mismo prólogo a *La contribución a la crítica de la economía política,* señaló:

> Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización.[25]

El pasaje transcrito nos coloca inequívocamente ante el problema de la desigualdad del desarrollo histórico de las formaciones sociales. En ellas se combinan el retraso objetivo de las condiciones materiales con la aprehensión de la teoría revolucionaria marxista, entendida como superación, en la acepción dialéctica del término, de la inmediatez de lo real. Para Marx, la historia es siempre producto de la actividad de los hombres, aunque éstos, como es obvio, no elijan las condiciones históricas que han de vivir y modificar, consciente e inconscientemente, por las características específicas que asumen las bases capitalistas de esa sociedad.

Lenin advirtió los rasgos particulares de esa situación nacional incorporando al campesino como fuerza fundamental en su diseño estratégico. Pero no acaba allí su aporte. Además redefinió las perspectivas del desarrollo capitalista y de las revoluciones en el tiempo del imperialismo. En el pensamiento leninista se perciben dos tendencias fundamentales, que tienen una estrecha relación entre sí. Ellas son la viabilidad del capitalismo avanzado y la persistente influencia del reformismo en el proletariado surgido en ese sistema. Tales tendencias imponen un desplazamiento del centro de interés marxista hacia los países atrasados, de economía predominantemente agrícola y cuyo débil sector capitalista ofrecía perspectivas más favorables a la revolución, como lo demostraba entonces la experiencia histórica.

[24] Carlos Marx, "Contribución a la crítica de la economía política", *Obras escogidas en 2 tomos,* tomo i, pág. 343.

[25] *Ibidem.*

Desde el comienzo, el pensamiento de Lenin se dirigió hacia la concepción de que la cadena capitalista se rompería por su "eslabón más débil", si bien ella tuvo su origen en Trotsky y fue destacada por Stalin después de la Revolución Bolchevique. Así, la revolución de los obreros se transformó en la revolución de los obreros y campesinos, no sólo porque ella triunfó en Rusia, sino también porque el potencial revolucionario del proletariado disminuyó en los países de capitalismo avanzado. Así emergió la alianza obrero-campesina como la fuerza motriz de la revolución socialista en los países atrasados, con la hegemonía proletaria. En este principio se basaba la concepción estratégica de Frente de Trabajadores formulada por el Partido Socialista de Chile, más amplia todavía, al comprender a todos quienes, no siendo dueños de medios de producción, viven de su capacidad de trabajo, dentro del régimen de salariado y de libre remuneración profesional.

El quinto principio leninista que ha asumido el movimiento revolucionario es la organización del partido. Desde la Revolución de Octubre se sabe que, si bien un proceso de esta naturaleza necesariamente es el resultado del agotamiento del modo de producción capitalista, requiere en todo caso la voluntad de poder de los trabajadores, agente histórico de este proceso, en una situación revolucionaria. En tal sentido, cabe destacar un aporte fundamental de Lenin: la conversión del proletariado, mediante su organización y lucha por el poder, en una fuerza revolucionaria, capaz de superar las etapas del proceso. Es el partido, la vanguardia del proletariado que, premunido de una teoría adecuada a la realidad, conquista, conserva y transforma el Estado, para conducir la transición socialista. En este proceso es fundamental la conciencia de clase.

No obstante, aquella vanguardia revolucionaria es una de las formulaciones leninistas que exige un análisis más cuidadoso, porque el estalinismo la deformó peligrosamente. La concepción de Lenin va, desde luego, más allá de una mera readecuación de la noción clásica del papel del proletariado. Su lucha contra el "economicismo" y la acción espontánea de las masas, así como su afirmación de que la conciencia de clase debe ser infundida al proletariado "desde fuera", sirven de fundamento a la transformación de hecho del proletariado de sujeto en objeto del proceso revolucionario.[26] Un aspecto generalmente subestimado es la manipulación que la burocracia soviética, en una primera fase, y más tarde todos los procesos triunfantes, siguiendo el modelo estalinista, hacen del marxismo-leninismo, convirtiéndolo en sustento de su respectiva razón de Estado. Con ello queda olvidado el fuerte sentido antiburocrático de los últimos escritos de Lenin.

[26] Los principales textos de Lenin sobre el partido son: *Qué hacer* (1902), *Un paso adelante y dos pasos atrás* (1904), *Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática* (1905).

La severa crítica de Rosa Luxemburgo al planteamiento bolchevique, independientemente de su significación como visión totalizadora, aparece todavía como el planteo más coherente contra el peligro de la burocratización y su ligazón con el centralismo propuesto por Lenin en *¿Qué hacer?* Gramsci, por su parte, afirma en sus notas y basado en su concepto del partido como "escuela de la vida estatal", que en el caso del proletariado, esta escuela es la del socialismo, y que la separación entre dirigentes y dirigidos no es otra cosa que la institucionalización de la desconfianza en la capacidad revolucionaria de los trabajadores. De acuerdo con las formulaciones de Lenin destinadas a impedir el triunfo reformista, se echan las bases para la construcción de la vanguardia revolucionaria. En ésta, la conciencia y los intereses auténticos del proletariado se radican en un grupo separado y distinto de la mayoría del proletariado. El problema no consiste tanto en organizar a los obreros cuanto en organizar a los revolucionarios. La estructura centralizada, justificada al comienzo por la "inmadurez" del proletariado ruso, se convierte posteriormente en un principio de estrategia internacional ante la persistente tendencia reformista del proletariado "maduro" de los países industrializados.

Conforme al principio marxista de que el ser social determina la conciencia, el proletariado individual, en las relaciones de producción capitalistas, desea mejorar, en forma inmediata y continua, su posición en el seno del sistema. A su vez, la política "economicista" de los sindicatos, al conseguir tales mejoras, contribuye a mantener, en forma permanente, la situación del proletariado como clase explotada, sosteniendo con ello a la sociedad capitalista. Al mismo tiempo, modifica la estructura social del sistema en cuanto proporciona una base para la paz de clases. Este cambio en la estructura social "desvía" al proletariado de su posición histórica objetiva de clase revolucionaria, que sólo puede liberarse mediante la abolición del sistema capitalista.

Esa posición histórica objetiva sólo puede ser "preservada" subordinando los intereses subjetivos inmediatos a los intereses reales de clase, a través de la transformación de la lucha económica en lucha política. Esta tarea compete a la vanguardia revolucionaria. El partido es, pues, el instrumento histórico por intermedio del cual la clase social en sí deviene en clase política para sí. Con el fin de contrarrestar la integración en el seno del sistema capitalista de un amplio sector del movimiento obrero, el "factor subjetivo" de la estrategia revolucionaria es representado por el partido, el que asume el carácter de una organización revolucionaria profesional que dirige al proletariado.[27]

[27] Para un análisis más completo de los principios mencionados, ver Herbert Marcuse, "El legado leninista", en *El marxismo soviético,* Madrid, Alianza Editorial S.A., 1971, pág. 43 y siguientes.

Georg Lukács, apoyándose en esta apreciación y en relación a la situación rusa prerrevolucionaria, llega a sostener:

> Si a los mencheviques les hubiera asistido la razón en su visión de la historia, si lo que nos hubiera aguardado fuera una época (relativamente) tranquila de prosperidad y extensión lenta y progresiva de la democracia, en la que los vestigios feudales hubieran sido barridos en los países atrasados por el "pueblo", por las clases "progresistas", los grupos de revolucionarios habrían terminado por perder toda agilidad, reducidos a sectas o simples círculos de propagandistas. El partido, en tanto que organización fuertemente centralizada de los elementos más conscientes del proletariado, y sólo de éstos, es concebido como el instrumento de la lucha de clases en un período revolucionario.[28]

He aquí la esencia de la concepción leninista del partido revolucionario.

Corrientemente tiende a identificarse la noción de revolucionario profesional con la de dirigente burocrático. Lukacs apunta a este aspecto cuando sostiene que "las enormes exigencias que la idea leninista de la organización impone a los revolucionarios no tienen en sí nada de utópico. Y, por supuesto, tampoco nada de carácter superficial de la vida cotidiana, de la factibilidad inmediata que acompaña lo empírico". En este caso no convierte, sin embargo, a los dirigentes burocráticos en cuadros revolucionarios que organicen férrea, consciente y consensualmente su actividad. No hay centralismo democrático a despecho de disposiciones estatutarias que lo establezcan.

No obstante, sobre la concepción del partido, cabe distinguir entre la definición leninista esencial y la deformación posterior experimentada por los partidos comunistas. Estos se proclamaron, en efecto, los únicos intérpretes de los intereses de la clase obrera, suplantaron a ésta como protagonista del proceso revolucionario y la convirtieron, en la medida de su influencia, en dócil instrumento de la política internacional del Estado soviético. El sectarismo llegó, en el período estalinista, al extremo de obligar a las víctimas de las purgas, entre ellas, los viejos bolcheviques, a reconocer delitos que nunca cometieron. Era el último acto de culto a la "infalibilidad" del partido que les exigía esta moderna inquisición. Tal deformación dogmática ha sido repudiada por el socialismo chileno siempre.

La más profunda y poderosa impugnación del pensamiento y la acción de Lenin proviene de la Iglesia Católica, aunque ésta ignora o silencia la similitud del líder bolchevique con Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. "Pocos son los hombres que en ninguna época histórica han llevado una idea a sus últimas

[28] Georg Lukacs, "Lenin", *ibidem*, pág. 37.

consecuencias con tal energía, realizado un pensamiento con tan extraordinaria tensión, influido en el conocimiento, el sentimiento y la conducta humana tan profundamente como Ignacio de Loyola".Quizás, nadie lo ha hecho mejor que Lenin. En efecto, éste trató de poner en práctica las ideas de que disponía "con tan gran vigor y tan poderosa energía como Ignacio. Sólo las enseñanzas de Lenin han logrado, de análoga manera que las de Loyola, remover tan profundamente a la Humanidad en Europa, Asia, África y América, igual en los medios intelectuales que en las capas más bajas de la sociedad, y levantar tales masas de partidarios incondicionales y de irreconciliables enemigos".[29] Este paralelo se presenta en dos procesos, de igual fanatismo, a tal punto que los tres elementos, que exigía la militancia bolchevique, a diferencia de los mencheviques, están tomados de la Iglesia Católica: asistir a reuniones (la misa de los católicos), pagar cotizaciones (el óbolo del culto), y cumplir las tareas que le encomiende la organización, como las marchas (peregrinaciones religiosas) y utilizar la guerra como método de lucha.

Volviendo a la comparación de René Fülop Miller, encontramos que "estos dos hombres, el creyente más grande del siglo xvII y el ateo más grande del siglo xx, se han adentrado con férrea resolución en el profundo problema de la naturaleza humana y no se han contentado con un ligero cambio en la superficie, sino que han modelado completamente, según su propio sentir, el entendimiento, las creencias, las nociones y la voluntad de la juventud sobre la que han actuado. Ambos conocían el secreto de la eficacia histórica que consiste en llevar la teoría a la práctica viva, en crear un conjunto de la fantasía, el conocimiento científico, la clara reflexión práctica y la poderosa voluntad, único medio de poder dominar plenamente al hombre". Ambos, separados por cuatro siglos, "han comprendido la importancia de esa fuerza, que es la sola capaz de sujetar a millares de seres en todas las partes del mundo a una organización de unidad y exacto funcionamiento: la importancia de la obediencia absoluta. Pero los dos han precisado tener el valor indomable de llevar los principios por ellos reconocidos como verdaderos a sus últimas consecuencias, frente a todas las dudas del resto de la Humanidad y sin miramiento a las protestas de significados adversarios".[30] Para evitar malos entendidos, es necesario dejar constancia que sus ideas y propósitos son distintos, pero jesuítas y comunistas tienen un parentesco, en cuanto a la fe y la voluntad, a la organización y la disciplina.

El Partido Socialista de Chile nunca aceptó una interpretación canónica del leninismo y esta experiencia deformada y deformante de la Unión Soviética, excepto

[29] Rene Fulop Miller, *El poder y los secretos de los jesuítas,* Viena, 1929, pág. 42.

[30] *Ibidem.* Por eso, el "comunismo" y el "jesuitismo" han perdurado, por encima de sus errores y

algunos "compañeros de ruta". Es su diferencia fundamental con el Partido Comunista. Esta diferenciación entre ambos partidos obreros chilenos fue parte de un proceso histórico que tuvo como escenario las luchas del proletariado del mundo a partir de la fundación de la Tercera Internacional. Toda la historia de ésta y, más allá de su extinción, la del centro directivo de Moscú constituyen, en efecto, un proceso de subordinación de los partidos comunistas al Estado soviético, que el socialismo chileno rechazó de la manera más categórica durante su existencia como organización política, independientemente de su lucha común por los objetivos del movimiento popular.

En suma, se puede afirmar que en sus definiciones ideológicas y políticas, dentro de éstas últimas también las orgánicas, el Partido Socialista de Chile aceptó el legado de los principios del leninismo aplicables a nuestra realidad nacional y continental. Algunos de éstos ya estaban comprendidos en su primitivo acervo ideológico y otros se incorporaron a él a través de un proceso de maduración política. La razón es simple. Ellos forman parte del marxismo y además correspondían específicamente a las características del desarrollo de esta región del mundo. Las raíces de este proceso de asimilación del pensamiento de Lenin y, por consiguiente, de su metodología de análisis tuvieron significados y contenidos muy concretos. El legado sirvió para definir y afirmar la fisonomía del socialismo chileno, marcando con entera claridad sus diferencias teóricas, estratégicas y programáticas, con el revisionismo socialdemócrata. Por el contrario, ello no constituyó una transferencia de todo el contexto del llamado marxismo-leninismo, entendido éste como las elucubraciones de la escolástica y las prácticas del proceso comunista, incluido el período estalinista, que comprende casi la mitad de la existencia del Estado soviético, y su correspondiente influencia negativa en el movimiento obrero mundial.

Segunda parte

La vía chilena al socialismo, golpe de Estado, su herencia y los desafíos del socialismo

La vía chilena al socialismo

El camino se hace al andar

Entre 1964 y 1967, el Partido Socialista de Chile experimentó dos escisiones orgánicas. A mediados de la década de los sesenta, numerosos jóvenes, inspirados fundamentalmente en la teoría y la práctica de la guerrilla latinoamericana, abandonaron el partido para fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Entre ellos destacaron los hermanos Miguel y Edgardo Enríquez y Bautista van Schowen, entre otros. Sólo a última hora esta organización llamó a votar en la elección presidencial de 1970, actuando en adelante como el tábano sobre el lomo del elefante (el movimiento popular), preparándose para la confrontación violenta que esperaban se produciría en el futuro inmediato. Poco después de la fundación del MIR, en 1967, el Partido Socialista sufrió una nueva escisión, por la ruptura producida en un pleno nacional en que se definían las condiciones orgánicas en las que se realizaría el congreso general de ese mismo año. Ampuero se retiró del pleno por no llegar a un acuerdo, por lo que fue sancionado con la expulsión. Fue una medida absolutamente injusta, por tratarse del dirigente que más había contribuido en el desarrollo del partido en los últimos 20 años. Este dirigente, conjuntamente con el senador Tomás Chadwick y los diputados Osorio, Naranjo, Silva Ulloa, Fierro y Gajardo formaron la Unión Socialista Popular (USOPO), la que tampoco participó directamente en la Unidad Popular.

El Partido Socialista de Chile había experimentado un desarrollo ascendente desde 1933 a 1966, con algunos retrocesos a fines de la década de los cuarenta, tanto en el ámbito electoral como en el sindical, en franca competencia con el Partido Comunista. Había nacido como un partido del pueblo, como alianza de trabajado-

res manuales e intelectuales, y al finalizar la década de los sesenta conservaba ese carácter de clase, militando en sus filas obreros urbanos y campesinos, estudiantes, profesores, técnicos, profesionales, militares en retiro y, en general, empleados. Su fuerza en el proletariado, en estricto sentido era, sin embargo, inferior a la del Partido Comunista. En el movimiento sindical, los socialistas predominaban en las empresas más tradicionales y en las minas del cobre, mientras los comunistas aumentaban su influencia en los sectores industriales más modernos, como el textil y de la construcción, aparte de su poderío en el carbón y el salitre. Ambos partidos competían también en el sector portuario y en el campesinado, en el que promovían la organización sindical. Penetraban además en las poblaciones "callampas" y en los ocupantes ilegales de terrenos para vivienda. Sobre esta base social, socialistas y comunistas crecían en el campo electoral, hasta el punto que Allende pasó del 5% en 1952 a 29% en 1958 y a 39% en 1964.

En este periodo, la figura más decisiva fue Raúl Ampuero. Su actuación se inició durante el primer período, el de crecimiento y aprendizaje, como secretario general de la Federación de la Juventud Socialista, pero su participación e influencia mayores se hicieron presentes en el segundo período, el de la lucha por el poder. Fue el más firme impulsor de esta política, a partir de la ubicación del partido en la oposición al sistema capitalista y a sus gobiernos de turno, desde 1946 a 1966, es decir, durante 20 años. Esta política encontraba su fundamento en la concepción estratégica de Frente de Trabajadores a partir del programa aprobado en 1947. Bajo su conducción, una generación formada en la FJS rescató al partido de la colaboración gobiernista y lo perfiló como una organización revolucionaria. El verdadero fundamento, la raíz profunda del movimiento popular de 1970-1973 se encuentra en esa trayectoria de lucha, aunque muchos no lo crean. La expulsión de Ampuero fue el acto más injusto y cobarde. Ninguno de los que votaron su expulsión tenía los méritos que él había conquistado en el partido.

En la primera década de ese periodo, 1946-1957, tuvo asimismo una participación muy significativa Eugenio González. Su personalidad fue miiltifacética, por lo que destacó en variadas actividades intelectuales, siempre al servicio de los intereses populares e interpretando los más altos valores culturales hasta alcanzar el rango de una de las figuras más ilustradas y brillantes del siglo xx en Chile. Fue un teórico del socialismo, novelista y maestro universitario. Fundador del Partido Socialista, fue crítico y opositor a la experiencia del Frente Popular, en cuanto alianza de gobierno, por lo que se unió a la segunda generación socialista, encabezada por Raúl Ampuero, en el vigésimo primer congreso general de 1946. A él se debe la Fundamentación Teórica del programa de 1947. Al término de su mandato de senador, re-

tornó a la Universidad de Chile, donde culminó su carrera docente como director del Instituto Pedagógico, decano de la Facultad de Filosofía y Educación y, por último, rector de la Universidad hasta 1968. Es la figura más completa del socialismo chileno en el orden de las ideas.

En las postrimerías de la segunda administración de Ibáñez, el Partido Socialista Popular elaboró su estrategia revolucionaria de "Frente de Trabajadores", opuesta a la del Partido Comunista, denominada "Frente de Liberación Nacional". Por la actitud obstinada del Socialismo se impuso su estrategia, como base de unidad, organizándose oficialmente el Frente de Acción Popular (FRAP) el 29 de febrero de 1956, sellándose con él la alianza de la clase trabajadora nacional, después de un largo lapso de división y polémica. Al mismo tiempo se impulsó la unidad socialista, conseguida en su décimo séptimo congreso general, realizado en Santiago, en julio de 1957. En esta forma se abrió un nuevo camino en la accidentada vida de este partido de los trabajadores, en el cual Salvador Allende recorrió sus cuatro etapas hacia la Presidencia de la República.

La primera fue la campaña presidencial de 1952. El no la buscó sino que se la ofrecieron y él, que nunca tuvo miedo al ridículo, la asumió valerosamente. Era la lucha contra la corriente. Llegó último en la carrera, con el 5 % aproximadamente de la votación nacional. El no estuvo de acuerdo con la decisión de su organización política, el Partido Socialista Popular, de dar su apoyo a la candidatura independiente de Carlos Ibáñez, por lo que optó por desafiliarse, haciendo el milagro de unir al otro sector del socialismo (la derecha) con el Partido Comunista en el Frente del Pueblo. Esta fue la simiente de una alianza superior que terminaría por constituir mayoría en Chile, sobre la base de la unidad socialista y de la alianza socialista-comunista, en las elecciones municipales de 1971.

Este fue el comienzo del encuentro de Allende con la historia. Recorrió el país, desde Arica a Magallanes, difundió su programa, forjando la conciencia colectiva del proyecto nacional propio de la clase trabajadora. Dejó una huella, sobre la que se construyó el camino que recorrería tres veces más, hasta conquistar la victoria democrática de 1970, como si él hubiera afirmado entonces: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...". Como los grandes luchadores, él sabía que su candidatura presidencial no tenía posibilidades de éxito en 1952, que era sólo una campaña testimonial, capaz de contribuir a la maduración de la conciencia social y política del pueblo de Chile. Así fue, sin duda, hasta forjar un movimiento popular que, en las elecciones municipales de 1971, recibiría el apoyo de la mayoría absoluta de la ciudadanía. En esta primera estación de su marcha hacia La Moneda, Allende tenía 44 años de edad.

La segunda estación fue la campaña de 1958, que tampoco la pidió, sino que se la endosaron, creyendo que era una campaña perdida. Esta designación era injusta, porque el marco teórico de Frente de Trabajadores, las propuestas programáticas y la alianza política correspondían al pensamiento de Ampuero y no de Allende. No obstante, la corriente ampuerista votó por Allende y ganó en el Comité Central por un voto, y la corriente independiente, en la cual se encontraban allendistas, votó por Ampuero. Ninguno de los dos estaba en Santiago en esa oportunidad. Al llegar Allende a la capital, una delegación de los independientes y simpatizantes de él le sugirió que no aceptara la candidatura presidencial, para obligar a Ampuero a asumir la responsabilidad consiguiente. Allende pidió la noche para reflexionar y al día siguiente concurrió al Comité Central y aceptó la designación. Nunca me pareció más cierta la afirmación de José Ortega y Gasset, en un discurso pronunciado en las constituyentes de España de 1931, en cita libre, porque no dispongo ahora del libro: "Con perdón de los señores marxistas, la política es el macho en la historia". Allende, político a carta cabal, casi triunfó en una elección que se daba por perdida.

En 1958 se presentaron cinco candidatos presidenciales: Jorge Alessandri por la derecha, Salvador Allende por la izquierda (el Frente de Acción Popular, FRAP), Eduardo Frei por la Democracia Cristiana, Luis Bossay por el Parado Radical y Antonio Zamorano, excura de Catapilco. Triunfó Alessandri, con 31.2% del electorado, siguiendo Allende en el segundo lugar con 28.6%, Frei con 20.5%, Bossay con 15.2% y Zamorano con 3.3%, cifra superior a la diferencia producida entre Alessandri y Allende, que fue sólo de 2.6%. El cura de Catapilco fue financiado por la derecha para restarle a Allende ese pequeño porcentaje. Pero, además, actuaron en su contra las mujeres, a las que tanto quiso el "Chicho", de las cuales recibió sólo 22.3% de sus votos, en tanto que contó con 32.4% de la votación de los hombres. ¡Qué decepción! El otro dato que debe remarcarse es que mientras los socialistas habían votado dos veces sucesivas a favor de candidatos radicales (Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos) e incluso, en la mayoría de su electorado, por Gabriel González, el Partido Radical negó su apoyo al candidato socialista en 1958 y también en 1964.

La tercera estación fue su campaña presidencial de 1964, en la que también tuvo posibilidades de ganar, a tres bandas: Frei, apoyado por la Democracia Cristiana, Duran, apoyado por el Partido Radical y los partidos de la derecha (conservadores y liberales) y Allende por la izquierda. Las campañas comenzaron parejas, con fuerzas equivalentes, pero a meses de la contienda presidencial se efectuó una elección complementaria de diputado en Curicó, donde el candidato socialista, Osear Naranjo (hijo), en reemplazo de su padre, del mismo nombre, que había falleci-

do, derrotó a los candidatos de las otras dos combinaciones, provocando el pánico político en la derecha, porque esa circunscripción no era propicia a la izquierda, sino a la derecha. Los partidos conservador y liberal retiraron su apoyo a Durán y se lo dieron a Frei, venciendo éste por un amplio margen (mayoría absoluta). Para asegurar dicho resultado se acordó mantener la candidatura de Durán, con el financiamiento respectivo, evitando de este modo que votos del candidato radical se transfirieran eventualmente a Allende. Este nuevo "cura de Catapilco" obtuvo menos de 5% de la votación nacional.

Esta nueva derrota de Allende planteó en el Partido Socialista una disyuntiva que siempre estuvo latente, desde la revolución de 1932: lucha electoral o lucha armada. Los fines revolucionarios del partido requerían la adecuación de los medios. Las viejas disputas surgidas después de la muerte de Marx reaparecían en Chile en la década de los sesenta del siglo xx: reforma o revolución, una y otra opción exigían diversos tácticas, que pasaban por la ortodoxia y el revisionismo. El Partido Socialista había asumido, con poca claridad, la doctrina de acción política formulada por Marx, que comprendía dos tesis. La primera, que el proletariado (en el caso de Chile, la clase trabajadora, un concepto más amplio) puede actuar como clase revolucionaria sólo constituyéndose como partido político diferenciado y opuesto a todos los partidos formados por la clase poseedora. La segunda, que la conquista del poder político por los trabajadores es una condición necesaria y previa para el triunfo de la revolución social. Esta concepción está contenida en la Fundamentación Teórica del Programa de 1947.

En su desarrollo teórico y práctica política, el Partido Socialista de Chile había asimilado también ciertas consideraciones tácticas, derivadas de aquellos principios generales. La primera expresa que un partido socialista puede competir con los otros partidos dentro de la estructura legal del Estado, participando en las elecciones, y la segunda indica que vencer en éstas es sólo una preparación, no una sustitución, en la conquista revolucionaria del poder. Esta doctrina de acción política subraya al mismo tiempo las oportunidades y las limitaciones de la democracia capitalista. Tales consideraciones tácticas quedaron en evidencia en la experiencia de 1970-1973, en la que se ganó una elección presidencial, pero no el poder, al tiempo que la clase dominante, por encima de la legitimidad y la legalidad del gobierno de Allende, lo derrocó y realizó una matanza colectiva de miles de personas.

Sin embargo, en la década de los sesenta, la discusión no fue totalmente clara, porque coexistían entonces formulaciones teóricas revolucionarias con prácticas reformistas. El fundamento de esta contradicción descansaba en las diferencias que persistían en el interior del partido entre un sector mayoritario, que había desarro-

liado la concepción estratégica de Frente de Trabajadores (programa socialista y alianza de las clases explotadas) y otro minoritario, que todavía sostenía posiciones atrasadas (programa capitalista y alianza de clases antagónicas). Uno y otro atribuían sus fracasos electorales a las limitaciones políticas de su contradictor. El sector de izquierda triunfó en la disputa teórica, reafirmando el Frente de Trabajadores, incluyendo conjuntamente con obreros y campesinos a intelectuales, profesionales, estudiantes y, en general, sectores de la clase media, que radicalizaron las bases programáticas y rechazaron la colaboración con la burguesía y sus partidos.

En este mismo período se sucedieron en el movimiento obrero cambios decisivos que alteraron su comportamiento en la lucha de clases. El más importante fue la consolidación del desarrollo de las nuevas capas obreras provenientes de la industrialización, con una práctica de lucha distinta a la del proletariado tradicional, desarrollado entre las décadas de los años treinta y cuarenta, por cuanto no había vivido la experiencia de colaboración de clases antagónicas y, por el contrario, enfrentaba entonces la ruptura del sistema de dominación. Este sector de los trabajadores mantendrá una relación orgánica e ideológica menos fuerte con las direcciones del movimiento obrero y más comprometida con las ideas revolucionarias provenientes de otros países latinoamericanos, especialmente de Cuba.

Esta mayor independencia ideológica y política del movimiento obrero preexistente hizo posible la concepción y promoción de nuevas modalidades de estructura y el desarrollo de otras formas de lucha. A esta capa de proletariado se unió otro sector pauperizado, proveniente de los desempleados y subempleados y de las migraciones campesinas hacia los centros urbanos. Esta nueva ola de trabajadores se proyectó en el ámbito político, pesando específicamente en el Partido Socialista y en otros grupos menores, como el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) y el MAPU, confiriéndole a la lucha popular una dinámica desconocida hasta entonces. Fue una lucha abierta y violenta, que desencadenó muchos de los conflictos que irrumpieron desde mediados del gobierno de Frei. Esta lucha se expandió, por último, al campesinado, condicionada por las propias políticas de la oligarquía industrial para la agricultura, iniciándose las tomas de tierras y las corridas de cercos.

En este marco de creciente radicalización del movimiento de masas, sin una adecuación de la conducción política, se fue desarrollando un desbordamiento social de las instituciones y cauces existentes para resolver los conflictos. La derrota electoral de la candidatura presidencial de Allende en 1964, con la asunción por la burguesía freísta de las demandas programáticas de la izquierda tradicional, precipitó la crisis de conducción en el movimiento popular. En este sentido, se produjeron cambios profundos en la orientación del Partido Socialista, a partir del congreso ge-

neral de 1967, celebrado en Chillan, y nuevos grupos políticos denominados "violentistas" por la derecha, como el MIR, el MAPU y otros surgidos posteriormente, desarrollaron una acción creciente en la clase obrera, el campesinado y el movimiento estudiantil, con nuevos y drásticos discursos y métodos de análisis extraídos del marxismo. La lucha revolucionaria ya no sólo se dio en las contiendas electorales y sindicales, sino que a través de acciones directas de masas, como la toma de fábricas; y de fundos, y la propaganda armada. Al término del gobierno de Frei el clima social y político era completamente distinto al que existía al comienzo de su mandato.

La oligarquía experimentaba entre tanto pugnas internas muy profundas, a través de las cuales el sector más dinámico del gran capital interno, asociado al capital norteamericano, había ganado la hegemonía en el aparato estatal, lo que favoreció la centralización económica en manos de los "pirañas", que devoraban a los otros sectores de la burguesía. Este proceso de disputa económica repercutió en el campo político, dividiéndose en dos bandos para la elección presidencial de 1970: Jorge Alessandri y Radomiro Tomic. Esta separación de aguas favoreció a la izquierda que, con Allende, la alianza de la Unidad Popular y un programa inusitadamente radical, venció por fin en las urnas. El movimiento popular alcanzó en esta campaña presidencial avances significativos en conciencia social, organización política y decisión de lucha, por la fuerza acumulada antes y durante aquella *performance.* La victoria de Allende el 4 de septiembre de 1970 representó la maduración de la crisis social y política que se venía desarrollando desde la década anterior, configurando un proceso prerevolucionario.

1970: una fecha para recordar

El año 1970 marcó el máximo ascenso del Partido Socialista, con la conquista del gobierno a través de una alianza social y política de la clase trabajadora. Era la culminación del proceso de redefinición teórica que se había iniciado en 1946. En la elección presidencial de aquel año, en efecto, se enfrentaron los dos extremos de la sociedad: la derecha oligárquica, de los patrones urbanos y rurales, los "dueños" del país, y la izquierda democrática, de los trabajadores, dueña sólo de sus sueños de libertad e igualdad. De nuevo se oponían, como en 1958, Alessandri (Jorge), envejecido, pero siempre dominante, y Allende, vigoroso y siempre con la voluntad de luchar por el socialismo. En el centro estaba Tomic, candidato de la Democracia Cristiana, ideólogo cristiano, de gran brillo oratorio, con un mensaje desacreditado

en el gobierno de Freí, padre, que estaba condenado a llegar último. Como éste no era el "juicio final", sus posibilidades de ser primero eran nulas, porque además socialistas y comunistas dijeron entonces "con Tomic ni a misa", porque él se había convertido en el profeta del "reinado" de la Democracia Cristiara por 30 años, es decir, hasta el año 2000.

Después de 32 años de la victoria del Frente Popular, se forjó una alianza, aparentemente semejante por sus integrantes, pero diferente por su programa de construcción del socialismo y la hegemonía de socialistas y comunistas. Estaba presente el Partido Radical, dividido y sin repercusión casi en la opinión de los sectores medios de la sociedad por su desgaste en el gobierno y la suplantación por la Democracia Cristiana. De este último partido de centro se había desprendido el MAPU antes de esta elección y la Izquierda Cristiana después de ella, integrando también la Unidad Popular. La fuerza principal, por su influencia sindical, política y electoral, la constituía la suma del Partido Socialista y del Partido Comunista. No obstante, Allende, que había sido ministro del gobierno de Pedro Aguirre, representaba, desde un punto de vista sentimental, el espíritu del Frente Popular, de las multitudes que invadieron las calles en aquellos jubilosos días de los años treinta. La Unidad Popular remeció más naturalmente el alma popular y la campaña presidencial de 1970 fue la última estación en el calvario de Allende.

La vocación política, el espíritu de lucha, la tenacidad incansable de este hombre lo condujeron al triunfo en su gallarda aventura. Era su último intento. En el caso de perder prometió ponerse overol y dedicarse a la jardinería por el resto de su vida, pero seguramente no lo habría cumplido, intentándolo hasta el fin de sus días. Algún socarrón había afirmado que él tenía preparado su epitafio aquí yace Salvador Allende, casi presidente de Chile, pero la historia cambió su destino, pues el 4 de septiembre de 1970 por fin venció. La concurrencia del electorado fue de 83.5% de los inscritos. Allende le cobró la cuenta de 1958 al "paleta" Alessandri con 36% de los votos contra 35%, y Tomic, como estaba previsto, llegó último, con 28%, en la carrera presidencial. La victoria electoral de Allende, esperada tantos años por el pueblo, desencadenó cambios profundos en el país, pero a la aurora deslumbrante de los trabajadores siguió la noche oscura de los gorilas.

Como había sucedido en 1938, con Pedro Aguirre, la derecha inició, la noche misma de la elección, la conspiración para desconocer el triunfo de Salvador Allende, burlar la voluntad popular y la tradición de proclamar en el Congreso Pleno como presidente electo al candidato que obtuviera la primera mayoría relativa y, por último, derrocarlo por las armas, a través de los altos mandos de derecha de las Fuerzas Armadas. Como era ya su costumbre, desde la batalla de Lircay en 1829,

se preparó para disputar el poder por las armas. El viejo símbolo de la oligarquía —el ex presidente de la República Jorge Alessandri— se sumó a la conspiración, a pesar de haber sostenido durante su campaña electoral que debería reconocerse como jefe del Estado al que obtuviera un voto más, es decir, mayoría relativa, creyendo que él ocuparía ese lugar y oponiéndose así a un eventual acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en torno al segundo. Conviene recordar también que él había sido consagrado en el Congreso Pleno habiendo obtenido sólo 31% del electorado en 1958.

La derecha económica y política, apoyada por el gobierno estadounidense, generó un clima de pánico financiero y conspiró abiertamente para impedir la proclamación de Allende como presidente de la República. La maniobra consistía en elegir a Jorge Alessandri en el Congreso Pleno, quien aceptó el proyecto, anunciando que renunciaría al cargo para convocar a nuevas elecciones, situación en la que se conectaba la aspiración de Frei de ser el nuevo candidato presidencial. Nixon ofreció sumas de siete cifras en dólares para financiar la negociación y todos los grupos operativos se movieron coordinadamente. El ministro de hacienda, Andrés Zaldívar, anunció el apocalipsis financiero para aterrorizar al país. Entonces, aparatos de ultraderecha, apoyados por militares, como el general Viaux, asesinaron al comandante en jefe del ejército, general Rene Schneider. La conspiración se detuvo por la decisión de las Fuerzas Armadas y de la Democracia Cristiana de respetar la tradición de elegir al que había obtenido la primera mayoría relativa, en este caso Salvador Allende. La CÍA economizó la parte no gastada todavía de la inversión "golpista", que se emplearía después.

En 1970, al conquistar la Presidencia de la República, el Partido Socialista afrontó un compromiso revolucionario sostenido durante muchos años, particularmente en las campañas electorales de Allende, desde la década de los cincuenta: la reconstrucción de la sociedad y de la economía de acuerdo a las normas constitucionales. Esta posición era el resultado de condiciones históricas, como la vocación democrática demostrada durante su existencia como partido y la conciencia lúcida de las reglas del juego impuestas por las instituciones políticas. Para conquistar los objetivos señalados, el Partido Socialista había constituido un sistema de alianzas con un conjunto de partidos, que representaban a los trabajadores y luchaban por objetivos programáticos comunes. Esta alianza era la Unidad Popular, mucho más avanzada que el Frente Popular de 1938, porque en 30 años había cambiado también la realidad, siempre innovadora e impredecible. El nuevo programa de la izquierda era, por eso, audaz y revolucionario.

El gobierno de la Unidad Popular obtuvo una resonante victoria en las elecciones municipales de 1971, alcanzando la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, lo

que desmiente la afirmación reiterada de ser una minoría. El proceso político demostraba el crecimiento de la izquierda y la posibilidad de alcanzar sus objetivos históricos. La derecha bajó sus resultados electorales de 1969, en tanto que la izquierda tuvo un desarrollo espectacular, con el 17% de los comunistas y el 22% de los socialistas. En el caso del Partido Socialista, aumentaron notoriamente sus militantes hasta el punto de que los 11 mil registrados orgánicamente en 1970, para el congreso general de enero de 1971, aumentaron a 18 mil, continuando este incremento hasta 100 mil en abril de 1973, según informe oficial del Departamento de Organización dado a conocer en el pleno del Comité Central de esa fecha.

La inestabilidad política generada por la victoria de Allende en las urnas retrocedió un poco con su consagración en el Congreso Pleno. La Democracia Cristiana, después de vacilar mucho sobre la conspiración impulsada por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon a través de la CÍA, exigió al candidato vencedor y a la Unidad Popular ciertas garantías de respeto institucional, que se establecieron mediante reformas constitucionales. La tradición democrática de Allende impidió en 1970, antes de asumir siquiera el nuevo gobierno, un golpe militar, al que no renunciaron definitivamente los personeros más rabiosos de la derecha y del centro político, como lo demostrarían en los siguientes años. Tuvieron que esperar todavía algún tiempo, porque el gobierno popular fue cuidadoso en el cumplimiento de su programa, dentro de las normas constitucionales. No obstante, Allende reconoció con valor desde el comienzo: "No soy presidente de todos los chilenos". No cabe duda que tenía la razón.

El gran obstáculo: la barrera militar

La prescindencia política de las Fuerzas Armadas constituyó en Chile una de las grandes mixtificaciones divulgadas durante mucho tiempo a través de la historiografía, la literatura, la oratoria parlamentaria y los medios de comunicación de masas. La derecha política ha sido la creadora de este mito y la izquierda, por ignorancia e ingenuidad, ha caído en la trampa. Las Fuerzas Armadas han estado en forma directa o indirecta, presentes desde la formación de la Nación, de 1810 hasta hoy, justificando cada uno de sus pronunciamiento y actos criminales por imperativos "patrióticos" superiores, confundiendo éstos con los intereses materiales de las clases poseedoras y de los consorcios extranjeros coaligados con ellos. Es la patria de los negocios, en los cuales participan también los altos mandos, que amasan fortunas, como sucedió con Pinochet y su familia.

Las Fuerzas Armadas han intervenido en forma directa en las actividades políticas, interrumpiendo el desarrollo normal de los gobiernos civiles, en ciclos de una generación aproximadamente. En 1831, el general Joaquín Prieto, después de vencer a los "pipiólos" o liberales en la batalla de Lircay (1829), inauguró los gobiernos "pelucones" o conservadores; en 1851, el general José María Cruz se levantó en armas contra el gobierno de Manuel Montt, pero fue derrotado, levantamiento militar que se repitió en 1859, con el mismo resultado. En 1891, el almirante Jorge Montt, al mando de las fuerzas insurrectas, derrotó al ejército constitucionalista en las batallas finales de Concón y Placilla, derrocando al presidente José Manuel Balmaceda, quien se suicidó en la legación diplomática de Argentina, donde se había asilado, cerrando el ciclo de los gobiernos liberales en el siglo xIx. En 1924, una junta militar, presidida por el general Altamirano, depuso al presidente Arturo Alessandri y abrió un período de predominio militar en la vida política que se prolongó hasta 1933.

Conjuntamente con las guerras civiles, las Fuerzas Armadas participaron en guerras internacionales. De 1810 a 1828 intervinieron en las luchas por la independencia de España, en la década siguiente efectuaron la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1839), en 1860 la guerra contra España y en 1879-1884 la guerra del Pacífico. En todas estas contiendas militares exitosas la nueva nación conquistó su independencia, consolidándola definitivamente, y extendió su frontera hacia el norte, si bien cedió su soberanía territorial en la Patagonia en beneficio de Argentina. Las guerras internacionales le confirieron a las Fuerzas Armadas una aureola de prestigio en la conciencia popular.

Bajo esta aureola, entre uno y otro ciclo de su intervención política directa, las Fuerzas Armadas gravitaron, durante todo el siglo xx, mediante conspiraciones abortadas o conatos, como asimismo a través de represiones brutales y sangrientas al movimiento obrero, en cuanto órganos del aparato del Estado. En este ámbito se pueden señalar también ciclos de represión, más continuos. Entre los más sangrientos, pueden señalarse la represión de la huelga de 1893, la masacre de la Escuela Santa María, de Iquique, en 1907, la de San Gregorio en 1921, la de La Coruña en 1925, la de Vallenar en 1931, la del Servicio de Seguro Social en 1938, la matanza de la población José María Caro en 1962, la masacre del mineral de El Salvador en 1968 y la de pampa Irigoin en 1969. En todas estas matanzas, las Fuerzas Armadas y de Carabineros intervinieron como el brazo armado de las clases propietarias. Cuando sectores de aquellas instituciones se apartaron de la línea de la derecha oligárquica, como en el caso de la República Socialista de 1932, dicha tendencia reaccionaria fundó las milicias republicanas.

Desde 1933 se produjo un rechazo generalizado a la intromisión militar en la política contingente y se procuró reducir el gasto militar en el presupuesto de la nación. Esto determinó un cambio en la mentalidad castrense, alejándose de la política para recuperar la confianza pública y asegurar el cumplimiento de sus funciones profesionales. Tal ha sido, al menos, la explicación reiterada que han dado algunos altos mandos sobre su prescindencia política durante 40 años (1933-1973). Éste es también el fundamento de la llamada doctrina Schneider, formulada durante la campaña presidencial de 1970 y difundida, con especial énfasis, después de la muerte de éste, por su sucesor en el cargo de comandante en jefe del ejército, General Carlos Prats. Por lo mismo, ellos fueron asesinados por sus pares, los generales de derecha, en complicidad con este sector político. Desde el punto de vista personal, sus casos son comparables con los de los generales Alzérrega y Barboza, asesinados brutalmente en Placilla, después de su derrota en la batalla en ese lugar, en la guerra civil de 1891.

No obstante, hay que precisar que aquella doctrina no surgió del vacío social, sino que advino y se desarrolló en el interior de la sociedad oligárquica, en el curso de cuatro décadas. Durante esos años, más allá de sus particulares motivaciones, se sucedieron gobiernos unidos por el compromiso esencial de preservar valores de dicha sociedad e impulsar un desarrollo capitalista dependiente del imperialismo estadounidense, que había consolidado su poderío en el país. Esta realidad fue reconocida por el propio general Prats al afirmar en carta publicaca en el diario *El Mercurio,* de Santiago de Chile, de 5 de noviembre de 1972: "Esta actitud no tuvo mayor repercusión pública durante el largo período de cuatro décadas en que la vida nacional se desenvolvió dentro del esquema internacional de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra fría y finalmente de la convivencia pacíf.ca bipolar". Las Fuerzas Armadas tuvieron en ese lapso, en otros términos, un comportamiento parecido al que han mantenido sus congéneres en otros países, de acatamiento al poder civil.

La doctrina Schneider es, pues, la afirmación del concepto de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, como sucede en todos los países que tienen un Estado de derecho. Esta era, por otra parte, una obligación emanada del precepto constitucional —Artículo 22 de la carta fundamental vigente en 1970— que establecía que las Fuerzas Armadas "son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes." Con anterioridad a la reforma constitucional, de enero de 1971, en virtud del estatuto de garantías concertado entre Salvador Allende y la Democracia Cristiana, esta disposición sólo expresaba que la fuerza pública no era deliberante, pero siempre se entendió en este concepto las otras calidades seña-

ladas. No obstante, dicha idea debe considerarse en armonía con el texto constitucional y las leyes complementarias en esta materia, para penetrar en su verdadero sentido democrático. El presidente de la República dispone, en efecto, de autoridad en lo concerniente a la mantención del orden público interior y la seguridad exterior del Estado. Para alcanzar estos objetivos está facultado para disponer de las Fuerzas Armadas, organizarías, distribuirlas y mandarlas personalmente, previo acuerdo del Senado (artículos 71 y 72). Por eso, tiene el carácter de generalísimo de aquéllas.

En 1970, los sectores más reaccionarios del país, unidos a altos mandos de las Fuerzas Armadas, pusieron en marcha un plan conspirativo para impedir el acceso de Salvador Allende al gobierno, después de que éste conquistara la victoria en las urnas. Con tal objeto se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso Pleno, de acuerdo a la constitución, o simplemente desencadenar el golpe de estado. Pero esta conspiración tuvo su mayor obstáculo en el comportamiento institucional del comandante en jefe del ejército general Rene Schneider. Éste había declarado, en efecto, el 7 de mayo de 1970, en plena campaña presidencial, que "el ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos... Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución política del Estado". Esta declaración representa la posición democrática de un sector del Ejército.

La oligarquía coaligada con el imperialismo realizó una intensa campaña a través de los medios de comunicación para crear el clima propicio para el golpe militar que se preparaba en secreto. Con esta campaña se procuraba atemorizar a la población con los supuestos peligros que conllevaba la instalación de un gobierno "marxista" en Chile. Las denuncias formuladas posteriormente por el periodista estadounidense Jack Anderson y la investigación efectuada por el Senado de Estados Unidos respecto a las actividades de la ITT en dicha fase de la conspiración demostraron la participación de ésta y otras empresas multinacionales en su desarrollo y fínanciamiento. El propio presidente Nixon ofreció el apoyo con una cantidad de siete cifras en dólares para la corrupción. "Si hubiera una oportunidad en diez de librarnos de Allende, dijo, deberíamos aprobarla, si Helms (el jefe de la CÍA) necesitaba los millones, él los aprobaría. El programa de ayuda a Chile sería interrumpido; su economía debía ser exprimida hasta que gritase".[1] Era un intento desembozado de corrupción política.

[1] Kissinger, *Mis memorias,* Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1979, pág. 468.

Quedó en evidencia también, en esa oportunidad, el papel desempeñado en aquella conspiración por el presidente de la República Eduardo Frei Montalva como quiera que él estuvo en conocimiento, según consta en los documentos confidenciales de la ITT, de todos los pasos de esta farsa que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército general Schneider. Este crimen, ejecutado fríamente por los conspiradores, demostró su resolución de impedir, por todos los medios, la asunción del gobierno popular, porque este militar, con su inconmovible posición constitucionalista, había reiterado la doctrina formulada durante la campaña presidencial: "Dije que iba a defender ese sistema constitucional y lo voy a hacer hasta el final. Porque aquí no se trata de que sólo íbamos a defender esto si ganaba el candidato que convenía a determinado sector".

Esta posición digna, de un militar honorable y democrático, la pagó con su vida. Una conspiración, alentada por sectores de derecha y por la CÍA, conocida en principio por el presidente Eduardo Frei Montalva, pretendía secuestrar al comandante en jefe del ejército, general Schneider, para precipitar un golpe de estado que impidiera la consagración de Allende en el Congreso Pleno como presidente de la República. El conspirador Viaux expresó: "Esta idea fue aprobada en forma Unánime, es decir, por nosotros cinco (el almirante Tirado, el general Valénzuela, del ejército, el general García, de la Fuerza Aérea, el general Huerta, de Carabineros, y el propio Viaux)". Secuestrado Schneider, el comando de la conspiración exigiría al Presidente Frei la designación de un gabinete militar a cambio de la liberación del comandante en jefe del Ejército. Frei accedería y, después, renunciaría, asumiendo el almirante Tirado, como ministro del interior, la Presidencia de la República y se convocaría a nuevas elecciones.[2] El 22 de octubre se cometió el magnicidio, quedando Schneider mortalmente herido por ocho impactos de bala, que le produjeron la muerte tres días después. Los autores directos fueron condenados a diversas penas por la Corte Marcial, el 16 de junio de 1971, durante el gobierno de Allende, pero recibieron el indulto de la dictadura de Pinochet.

La lucha por el poder

La vida pública del doctor Salvador Allende Gossens estuvo relacionada fundamentalmente con la lucha por el poder, pero como diputado y senador, y luego como

[2] James R. Wheelan, *Desde las cenizas,* Santiago, Empresa Editora Zig-Zag S.A., 1995, 2° edición, págs. 995 y 996.

ministro y presidente de la República él no entendió el concepto de poder como simple gusto por mandar y disfrutar de los bienes anexos al ejercicio de la autoridad, sino como instrumento para conquistar objetivos revolucionarios contenidos en sus programas de gobierno y de carácter legislativo. Mucho menos tuvo la mezquina pretensión de gozar de dieta y fuero después de dejar el cargo, como sucede hoy, por ley promulgada por el presidente Lagos. Nació en 1908, cuando la economía nacional se sostenía sobre dos pilares: la minería del salitre y del cobre, así como la agricultura latifundista y, por lo tanto, extensiva. Existía entonces además el régimen parlamentario, establecido de hecho, sin reformar la constitución de 1833, después de la guerra civil de 1891, donde los representantes de la clase dominante discutían sus diferencias.

En este medio socioeconómico, Allende inició su trayectoria política, destacándose como líder estudiantil en la lucha contra la dictadura del general Carlos Ibáñez. En 1933 se incorporó al Partido Socialista. Luchó siempre por la unidad de la clase trabajadora, tanto de los sindicatos como de los partidos. Fue el artífice de la organización política de la izquierda, de la alianza socialista-comunista, hasta constituirse en candidato a la Presidencia de la República en cuatro oportunidades sucesivas. Se pronunció en 1943 por un partido nuevo, mediante la fusión de comunistas y socialistas, después de la disolución de la Internacional Comunista, y en 1972 y 1973 por el Partido Federado de la Unidad Popular.

La militancia de Salvador Allende en el Partido Socialista fue de mucha fidelidad. Como el viejo caudillo liberal de los años veinte, Arturo Alessandri, reconoció el valor y la importancia de su partido. La concepción del socialismo que siempre tuvo Allende, fue eminentemente democrática, pero él no confirió a esta característica sólo un sentido político, sino que desde el comienzo de su actividad le atribuyó un alcance social y económico. En prueba de ello, están 20 tomos de escritos y discursos expuestos en sus campañas electorales, en el Congreso Nacional y en el Gobierno, durante 40 años de lucha por la libertad y la igualdad, por la libertad contra dictaduras y abusos de facultades extraordinarias para reprimir a los trabajadores y por la igualdad social, en contra de la injusta distribución del ingreso. Los contenidos del programa básico de gobierno acordados por la Unidad Popular en 1969 habían sido considerados antes por Allende.

Esta concepción del desarrollo nacional se relacionaba con la digna y ejemplar presencia de Chile en las relaciones internacionales, particularmente con los países latinoamericanos, así como con la seguridad interna y externa. El ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, que colaboró lealmente con el gobierno constitucional de Salvador Allende, dejó un testimonio elocuente sobre aquella materia:

> Cuando se escriban serenamente las páginas de la historia de Chile de los últimos 40 años [...] el gobierno que en dicho lapso tuvo una concepción más nítida de la seguridad nacional y demostró con hechos el mayor interés por los problemas de la defensa nacional fue justamente el gobierno de Allende [...]. Lo evidente es que el único Presidente de Chile que en 40 años abrió un camino de coherencia a los intereses de la seguridad nacional fue Salvador Allende [...]. Compartió e hizo suya la nueva concepción de soberanía geoeconómica.[3]

Es la opinión de una corriente nacionalista y progresista, contraria al "golpismo", que siempre ha existido en el seno de las Fuerzas Armadas.

Los homenajes a Salvador Allende se exponen muchas veces en términos puramente individuales, destacando sus cualidades personales, al margen del movimiento popular, como si él hubiera surgido por generación espontánea en nuestro medio cultural y no como producto de las luchas sociales. Esta errónea interpretación debe rectificarse. Allende representó las aspiraciones y los anhelos del pueblo expuestos, antes que él y simultáneamente con él, por los partidos populares, los sindicatos de trabajadores, los sectores más avanzados de las universidades y otros centros de enseñanza (profesores y alumnos), los científicos y artistas y las nuevas organizaciones sociales. De esta relación de Allende con el movimiento popular surgieron las ideas y fuerzas de la izquierda. Por esta valorización histórica, la conmemoración de la trayectoria de Allende es también para nosotros mismos, para quienes luchamos con él por idénticos objetivos, principalmente para aquellos que fueron abatidos en combate o asesinados por la dictadura, así como para los que continuamos esa misma lucha. Esta socialización del legado político de Allende no supone, por cierto, el desconocimiento de sus valores individuales. Por el contrario, su figura resplandece y conmueve la conciencia popular.

Es poco lo que sabe respecto a Salvador Allende la generación posterior a la década de los setenta por la desinformación persistente que predominó durante el triste período de la dictadura y aún subsiste en los años de la transición a la democracia, una larga transición que se proyecta por tanto tiempo como la dictadura, por los enclaves de ésta. La mentira se exhibe incluso en los textos de enseñanza de la historia, donde todavía se menciona el "Plan Zeta", inventado por la CÍA para justificar el golpe militar, como había sucedido en Indonesia en la década anterior. Por lo mismo, será necesario siempre, en honor a la verdad, restablecer ciertos hechos indesmentibles. Allende fue presidente de la República de Chile, elegido democráticamente por el pueblo y confirmado por el Congreso Pleno, de acuerdo a la Consti-

[3] Carlos Prats, *Memorias. Testimonio de un soldado,* Santiago, Pehuén, 1985, págs. 597 y 598.

tución vigente en 1970. Militante de una causa universal, combatiente revolucionario de América Latina, patriota ejemplar y personalidad señera de la lucha por el socialismo y contra el imperialismo en el siglo xx. Derrocado por los sectores "golpistas" de las Fuerzas Armadas y muerto en La Moneda defendiendo el poder legítimo, se convirtió en héroe nacional.

Esta transfiguración en héroe tiene una explicación que puede exponerse en breves palabras. Salvador Allende nació políticamente con el Partido Socialista y condujo a éste a la cima del gobierno. Fue siempre un hombre de partido. Ello lo llevaría a repetir, una y otra vez, "todo lo que soy y he sido se lo debo a mi partido y al pueblo chileno". Recogiendo la voluntad de poder de los románticos conductores de la revolución socialista de 1932, inició una lucha sin tregua por conducir a su partido y a su pueblo hacia la conquista de sus objetivos estratégicos. De manera no deliberada, se produjo una carrera a la Moneda entre Frei y Allende. El primero llegó en 1964; el segundo en 1970, si bien estuvo a punto de lograrlo en 1958. En medio de este patético proceso, el político se transfiguró en héroe, que difundió el nombre de Chile con dignidad representativa a todos los confines de la tierra, despertando el interés generalizado y la solidaridad con las luchas de su pueblo.

En el centro de esta preocupación mundial estaba la personalidad de Allende. Magnánimo por excelencia, su figura conmueve la conciencia de los pueblos y, entre ellos, la del propio Chile. José Ortega y Gasset distingue entre las virtudes de la magnanimidad y las virtudes de la pusilanimidad. Las primeras son aquellas que proyectan al hombre en la historia, que le conceden clarividencia para avizorar el porvenir, para transformar los ideales en realizaciones. Las segundas se refieren al sometimiento social, al acatamiento de las normas de urbanidad, al respeto de las reglas morales de catecismo, productos por lo general de convencionalismos sociales. De verdad se trata de una distinción significativa. Sostiene Ortega:

> El magnánimo es un hombre que tiene misión creadora: vivir y ser es para él hacer grandes cosas, producir obras de gran calibre. El pusilánime, en cambio, carece de misión: vivir es para él simplemente existir él, conservarse, estar entre las cosas que están ya ahí, hechas por otros, sean sistemas intelectuales, estilos artísticos, instituciones, normas tradicionales, situaciones de poder público.[4]

Allende poseía todas las virtudes de la magnanimidad y, en cambio, carecía de muchas de la pusilanimidad, tan apreciadas por la burguesía y por lo cual fue criticado.

[4] José Ortega y Gasset, *Mirabeau o el político,* Madrid, Ediciones Revista de Occidente, 1974, pág. 21.

Antes que él, Balmaceda fue un magnánimo en nuestra historia. Ambos representan políticamente la síntesis cabal entre el nacionalismo democrático y el socialismo revolucionario. Este sentido de la continuidad histórica está presente en el pensamiento y la acción de Allende. En el momento de su victoria electoral, el 4 de septiembre de 1970, expresó: "Yo sólo tomo en mis manos la antorcha que encendieron otros junto al pueblo, con el pueblo". La misma idea se repite como una constante. Cuando asumió la Presidencia de la República, reiteró: "Aquí estamos hoy, compañeros, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros". Recorre entonces en una emocionada síntesis nuestra historia, mencionando el legado continuo de Lautaro, Caupolicán, O'Higgins, Rodríguez, Balmaceda y Recabarren, todos protagonistas de nuestra historia.

El se presenta, pues, como continuador de un proceso popular que encarnaron en el pasado otros héroes que nos dieron libertad. Consciente de este legado, afirmará en la despedida a Fidel Castro en diciembre de 1971: "...defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir el programa del pueblo". Así sucedió el día 11 de septiembre de 1973, rompiendo todos los precedentes a que estábamos acostumbrados en América Latina en los golpes de los "gorilas". La antítesis del comportamiento de Allende es el de Belaúnde en Perú, quien se sometió a los militares, que lo sacaron de la cama descalzo para expulsarlo en un avión fuera del país. Triste destino de muchos gobernantes, derrocados y humillados por el poder castrense, siempre apoyados por las oligarquías.

No obstante, Salvador Allende ha sido sometido a las más severas críticas, comprendiendo algunas de ellas burdas simplificaciones. Desde el golpe militar ha proliferado entre quienes tuvieron responsabilidades individuales y colectivas en la conducción del proceso una suerte de filosofía a lo "pilatos", sin la elevación del romano para preguntarse siquiera ¿Qué es la verdad? Con ese dogmatismo es fácil sacudirse las responsabilidades propias. Allende no fue el reformista que se identificó con la política de la "vía pacífica", ni tampoco el único responsable del aplastamiento popular. Mucho menos un "camarada de ruta". Desde posiciones de derecha, una de las desfiguraciones más burdas del pensamiento de Allende se refiere a su posición frente al comunismo. Hay, en este sentido, una reiterada tendencia a mostrar al líder socialista más próximo a la política del Partido Comunista que a la de su propio partido. Nada más lejos de la realidad. Allende sostuvo siempre, en lo esencial, la política diferenciada del socialismo chileno, no sólo con su permanente militancia, sino a través de su discurso personal, aprovechando las más significativas coyunturas para hacer contar dicha congruencia.

En política internacional, las líneas preconizadas por socialistas y comunistas fueron por lo general divergentes. Es ésta una constante histórica. La más violenta ruptura entre ambos partidos se produjo precisamente, a raíz del pacto nazi-soviético celebrado el 22 de agosto de 1939, que fue denunciado por el Partido Socialista, como una traición de los comunistas a la lucha antifascista, condenando además el reparto de Polonia. Allende era entonces miembro del Comité Central y ministro del gobierno del Frente Popular. Este partido impugnó, en carta del 1 de diciembre de 1943 dirigida al Partido Comunista, la política de "unidad nacional" preconizada por éste. En ella analizó también la política de "buena vecindad" del gobierno de Franklin D. Roosevelt y sus proyecciones en la posguerra, rechazando la idealización hecha por los comunistas. Criticó la desviación política crónica de su competidor en el movimiento obrero, agregando: "Mantenemos, pues, una firme lucha antiimperialista, en contraposición a los camaradas comunistas que han pospuesto toda acción programática o popular a la lucha antifascista". Esta carta fue firmada por Salvador Allende, en su carácter de Secretario General del Partido Socialista.

En el período comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y 1973, este partido adoptó frente a la política internacional del comunismo posiciones definidas que contaron siempre con la opinión favorable de Allende. En este sentido, condenó la ruptura del Kominform con Yugoslavia en 1948, el aplastamiento de la revolución húngara en 1956 y la invasión de Checoslovaquia en 1968. Sostuvo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, válidos ante las grandes potencias de cualquier signo político, sean ellas capitalistas o comunistas.

Desde posiciones de izquierda se atribuye a Salvador Allende la superchería de la "vía pacífica" al socialismo. Es otra falsificación de su pensamiento y ejecutoria. El sostuvo con su ejemplo, ya no sólo con las palabras, la utilización de todas las vías: conquistó el gobierno por el sufragio y lo defendió con las armas hasta la muerte. Pero el peso de la evolución democrática era fuerte y prolongado en el país. El propio Allende recordó que el Congreso Nacional tenía hasta entonces 160 años de existencia, siendo uno de los tres más antiguos del mundo. Habría que agregar que el sufragio universal se estableció de hecho en 1884, con algunas limitaciones como el analfabetismo y la exclusión de las mujeres. Por esta singularidad pensó en algún momento que Chile parecía contar con las "instituciones políticas y sociales necesarias para materializar la transición del atraso y la dependencia al desarrollo y la autonomía, por la vía socialista". Así lo expresó el día en que asumió la Presidencia de la República.

Salvador Allende no tuvo nunca una confianza ciega en la institucionalidad burguesa, como algunos han tratado de presentarlo. No es en este medio, sino en el fin

que persigue, en lo que confía. Con orgullo pudo decir, por eso, en el discurso pronunciado en la Universidad de Guadalajara, México, el 2 de diciembre de 1972: "Yo tengo una experiencia que vale mucho. Yo soy amigo de Cuba; soy amigo hace diez años de Fidel Castro, fui amigo del comandante Ernesto "Che" Guevara. Me regaló el segundo tomo de su libro Guerra de guerrillas: el primero se lo dio a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió, y en la dedicatoria que me puso dice lo siguiente: A Salvador Allende que, por otros caminos, trata de obtener lo mismo".[5] Ni siquiera el "Che" discutía, pues, la existencia de variadas formas de lucha para la conquista del poder. Por lo demás, el mismo destino trágico de Guevara y de miles de mártires de la revolución latinoamericana constituye un testimonio irrebatible de que la vía en sí no asegura la victoria.

La trágica paradoja de Allende es que, habiendo comprendido las dificultades para avanzar dentro de la institucionalidad burguesa, no encontró la fuerza suficiente para cambiar de camino en el momento oportuno. En su segundo mensaje al Congreso Pleno, advirtió: "La gran cuestión que decidirá la suerte de Chile, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la transición al socialismo". Con profunda penetración y clarividencia, agregó en esa misma oportunidad: "No se puede descartar que la escalada contra el régimen institucional llegue a provocar las condiciones de ruptura violenta". De que Allende tenía conciencia de esta situación no cabe duda alguna, si bien traducía en sus opiniones una contradicción que hasta hoy la izquierda chilena no ha podido resolver. Se encontrarán muchas expresiones de adhesión hacia el camino del socialismo en democracia, libertad y pluralismo, que son reflejo de la resistencia de su propio partido al autoritarismo represivo del socialismo realmente existente. Pero tampoco dejó nunca de señalar la necesidad de solucionar el problema del poder. Dirá, por eso, en sus conversaciones con Regis Debray frases inequívocas como éstas: "En la actualidad, el pueblo está en el gobierno y desde él lucha por ganar el poder."[6]

Nada más condenable pues, que "una imagen de Allende que pareciera dibujada intencionalmente como para que absorba, sin más reflexión, el sueño imposible de la revolución pacífica, del tránsito a lo nuevo sin la destrucción de lo viejo, de la legalidad oligárquica capaz de disolverse mansamente en la institucionalidad socialista".[7] Su muerte, con las armas en sus manos, en el palacio presidencial, significa

[5] Salvador Allende, discurso pronunciado en la Universidad de Guadalajara, México, 2 de diciembre de 1972.

[6] Regis Debray, *Conversaciones con Allende,* México, Siglo XXI, 1973.

[7] Pedro Vuskovic, *Una sola lucha,* México, Editorial Nuestro Tiempo, 1978 pág. 70.

la recurrencia en el momento supremo a esa vía para la cual las fuerzas políticas que sustentaban la experiencia de cambio social no estaban preparadas. Ello explica también que mientras Allende resistía en La Moneda, el comité político de la Unidad Popular, reunido en una industria de Santiago, acordaba no combatir. Así él fue fiel a su compromiso revolucionario; muchos de sus críticos, no. El general Carlos Prats comprendió cabalmente este comportamiento de Allende, como una lucha suicida comparable a los más grandes gestos heroicos de la historia.[8] "La figura del presidente Salvador Allende, luchando hasta el último aliento, pasará a la historia". Es este episodio, sin lugar a dudas, la coronación del héroe, en contienda desigual, como Arturo Prat en el combate naval de Iquique, durante la Guerra del Pacífico.

Allende y Ampuero: una síntesis dialéctica

En la historia del Partido Socialista de Chile destacan dos figuras principales, representativas de la definición y crítica de una estrategia revolucionaria y de la lucha por el poder, tareas que si bien fueron ejercidas por el conjunto de los militantes de este movimiento político, tuvieron en ellos sus impulsores decisivos, asumiendo un liderazgo indiscutible. Estos hombres son Salvador Allende y Raúl Ampuero. El primero fue un médico que, por su notable sensibilidad social, cambió el ejercicio de su profesión por el de la política, debido a la convicción de que la morbilidad colectiva tenía como causa principal la pobreza. No obstante, fue presidente del Colegio Médico y luchó por políticas de salud preventiva y curativa, así como de protección de la madre y el niño. El segundo se tituló de abogado y siempre quiso dedicarse a la docencia universitaria, para la que estaba especialmente dotado, pero su vocación política postergó ese anhelo hasta su exilio en Italia, donde desempeñó esa esquiva ocupación. Ellos constituyeron una síntesis dialéctica.

Allende se incorporó al Partido Socialista en 1933, en el mismo año de su fundación, destacándose en Valparaíso en la constitución de esta organización política. Fue diputado y senador por varios períodos, ministro de Estado y, por último, presidente de la República. Miembro del Comité Central, subsecretario general y secretario general del partido, orador y ensayista. Nació en 1908, en Valparaíso, y murió en 1973 en La Moneda, Santiago. Ampuero ingresó a la Federación de la Juventud Socialista en 1934 y en el año siguiente fue elegido secretario general de esta Federación, primero, y del partido por varios períodos, después. Fue miembro del Comité Central, senador por dos períodos, orador brillante y autor de numerosos

[8] Carlos Prats, *Una vida por la legalidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pág. 87.

ensayos políticos. Nació en 1917, en Ancud, y murió en 1996, en Santiago, es decir, por ser más joven, fue el que más perduró tanto en la vida como en la política.

Cada uno de ellos representó preferentemente una de las más grandes temáticas centrales en la trayectoria del Partido Socialista de Chile. La definición de una nueva estrategia revolucionaria en una primera etapa, y la crítica en la última etapa de su vida correspondió a Ampuero. La lucha por el poder, con una constancia sin igual, por la vía democrática, en cuatro campañas presidenciales, singularizaron a Allende. No obstante, ésta no es una obra individual y exclusiva de ellos, sino creación colectiva, emanada de los anhelos e ideales de centenares de miles de militantes que lucharon por el socialismo en el siglo xx, de millones que votaron por sus programas, de miles de asesinados y torturados por la oligarquía, clesde la fundación del partido en 1933 y hasta el genocidio de 1973. Allende y Ampuero fueron, en suma, no sólo los intérpretes de las nobles ideas y aspiraciones de los socialistas, sino de todas las organizaciones del movimiento popular de Chile.

En los primeros diez años de existencia del Partido Socialista el liderazgo osciló entre Grove y Schnake, ambos dirigentes de la República Socialista de 1932 y fundadores del partido en 1933. Después, entre la década de los cuarenta y la de los sesenta, el liderazgo giró en torno a Allende y Ampuero, quienes hicieron frente a la descomposición interna y plantearon la autonomía partidaria clesde fuera de los gobiernos de coalición de clases antagónicas. Todo ello se presento desde posiciones más tenues en Allende, con compromisos latentes con los sectores colaboracionistas de gobierno, y desde posiciones más radicales en Ampuero, con compromisos más fieles con las bases que venían de regreso de las ilusiones reformistas.

Allende conquistó la Secretaría General en 1944, en el décimo congreso general celebrado en Rancagua, en virtud de un consenso con el sector de juventud que representaba Ampuero, ejecutando el acuerdo adoptado en ese congresó de retirar al partido del gobierno. Esta decisión, que satisfacía una aspiración sentida por la mayoría de los militantes, determinó una nueva división partidaria, alzándose Grove con la fundación del Partido Socialista Auténtico. Ampuero debió esperar dos años más, hasta el décimo primer congreso general efectuado en octubre de 1946, en Concepción, en el que derrotó a Allende por escasos votos, siendo elegido secretario general. Esta decisión trajo consigo, dos años después, una nueva división de derecha, en 1948, obligando al sector de izquierda a adoptar el nombre de Partido Socialista Popular, en el cual se mantuvieron Ampuero y Allende.

Durante 20 años, entre 1946 y 1966, ambos líderes gravitaron fuertemente en el interior del Partido Socialista. Ampuero ejerció una influencia indiscutible y fue el inspirador de la nueva estrategia diseñada en esos años, desde la conferencia nacional de programa de 1947 y hasta el congreso de Linares de 1966. Allende inte-

gró varios comités centrales, como oposición interna, manteniendo su lealtad en 1948 cuando se produjo la más grande división, permaneciendo en el sector de izquierda, dirigido por Ampuero. Desde 1958, la acción política de ambos adquirió una modalidad distinta. Ampuero conservó el liderazgo del partido y Allende volcó su actividad hacia el conjunto del movimiento popular. El primero debió enfrentar a sus opositores en el interior de la organización partidaria mientras el segundo recibió el constante aplauso, con "pañueiitos" blancos, en el teatro Caupolicán.

En verdad, ellos no fueron amigos. No podían serlo por sus diferentes personalidades y estilos de vida. Como los antiguos griegos, la vida de Allende se deslizaba entre el agora y el banquete, escenarios en los que proyectó su trayectoria política, sin olvidar los pórticos y el hogar. Ampuero, en cambio, giraba sólo entre el agora y el hogar. No sólo los separaban estos hábitos helenos, sino otras características psicológicas. Allende no tuvo amigos en el partido, sino compañeros y seguidores; quizá los tuvo fuera de sus filas, en tanto que Ampuero sí los tuvo, hasta la intimidad de su hogar. Estas diferencias arrancaban, al parecer, de sus orígenes geográficos. Allende dijo alguna vez que Ampuero tenía un espíritu isleño, por su nacimiento en Chiloé, aunque olvidó que hubo otros isleños, como Napoleón Bonaparte, que tuvieron un espíritu universal. Ampuero acusó, en cambio, a Allende de ambición y vanidad, aunque cabe recordar que de los sectores de la cultura (filosofía, ciencia, religión, arte y política) es en éste último donde destacan más estas tendencias, sobre todo la ambición.

Ambos tenían un profundo sentido del humor, que se expresó en anécdotas graciosas. Cuando se produjo la división partidaria de 1948, en una reunión del Comité Central tratábamos de buscar una denominación para nuestro sector, porque el grupo de derecha se había apropiado del nombre del partido. Allende propuso que adoptáramos el de Partido Socialista Allendista. Cuando se precipitó la crisis de 1967, Allende sugirió públicamente que ambos renunciaran a ser candidatos a la Presidencia de la República, a lo que contestó Ampuero que esa propuesta no era justa porque Allende había sido ya tres veces candidato y él ninguna. Naturalmente, en los dos casos se trataba sólo de bromas. Como autocrítica, se recordaba que Allende> encontrándose en su pequeña Secretaría en el Senado, fue saludado por un amigo que caminaba por un pasillo adyacente, de viva voz, sin que contestara el saludo, lo que hizo volver sobre sus pasos a su interlocutor para reprocharle su desatención, a lo que Allende contestó: perdona, al verte tan elegante, creí que era yo mismo el que pasaba. Ampuero, a su vez, cuando ejercía la cátedra de Historia de América Latina en la Universidad de Sassari, solía decir que él aprendió mucha historia y sus alumnos italianos mucho castellano,

Por encima de las diferencias y contiendas, entre Allende y Ampuero, se produjo una integración teórica y política en el transcurso del tiempo. La extensa hegemonía de Ampuero terminó con su expulsión del partido en 1967, pero su pensamiento político fue asumido por Allende, de acuerdo a su perspectiva histórica. En el vigésimo segundo congreso general celebrado en Chillan, después de la expulsión de Ampuero, Allende defendió la línea democrática de cambio político-institucional para la conquista del gobierno, siendo derrotado por una amplia y heterogénea alianza de tendencias reformistas y ultra revolucionarias, representada por Aniceto Rodríguez, Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda y Adonis Sepúlveda, la misma que había expulsado a Ampuero. Allende terminó conquistando la adhesión de las bases del partido, imponiendo su cuarta candidatura presidencial en el Comité Central con más abstenciones que votos a favor. No obstante, obtuvo la victoria en las urnas el 4 de septiembre de 1970. Ampuero y su grupo, la Unión Socialista Popular, le dieron su apoyo.

En una extraña ironía del destino, en algún momento de su militancia común en el Partido Socialista, en los comienzos de los años sesenta, Ampuero expresó que él era todo dentro del partido y nada fuera del mismo, en tanto Allende era todo fuera del partido y nada dentro de él, lo que entonces era cierto. Pero poco después Allende fue todo dentro y fuera del partido, mientras Ampuero, por el contrario, pasó a ser nada dentro y fuera del mismo, después de su expulsión. Pero el destino los unió nuevamente, tras del golpe militar y la muerte de Allende, en cuyo período Ampuero se convirtió en el mejor intérprete del proceso revolucionario, de 1970 a 1973, y el más fiel defensor de la línea estratégica generada en el Partido Socialista desde 1946, que culminara con el gobierno popular de 1970-1973. En ambos casos, se podría afirmar: ¡Genio y figura hasta la sepultura!

Autobiografía del gobierno popular

Quizás no existe otro proceso político más controvertido en la historia de Chile durante el siglo xx, que el de Salvador Allende como presidente de la República durante el gobierno de la Unidad Popular. No sólo es así por las contradictorias interpretaciones de adversarios y partidarios, sino por el apoyo y rechazo que obtuvo en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, después de tres años de desgaste provocado por una oposición conspirativa interna y externa. En vísperas del golpe militar, el gobierno popular recibió el apoyo de un 44% de la ciudadanía, es decir, un 7% más que el obtenido por Allende en la elección presidencial de septiembre

de 1970. Durante la dictadura militar (1973-1988) se realizó sistemáticamente una campaña de desinformación y mentiras sobre los hechos ocurridos en los mil días de predominio popular, seguida durante los 15 años de transición a la democracia (1988-2005) por otra campaña de adulteración de ese pasado reciente, presentando a Salvador Allende como un "buen samaritano" de la democracia burguesa, rodeado de un movimiento social totalitario. Es la vieja treta del ladrón detrás del juez.

Esta es la obra de la derecha, eterna golpista, que instrumentalizó entonces a las Fuerzas Armadas, se convirtió en defensora de la "constitución" impuesta por ella misma, y en discemidora de medallas al mérito entregadas a la izquierda "renovada". La situación descrita hace necesario presentar, a continuación, la epopeya social de la Unidad Popular, contada no por este autor, sino por el propio Allende a través de sus mensajes al Congreso Pleno, porque en esos discursos él expuso sus ideas, propósitos y reflexiones sobre dicho período histórico. Esta exposición permitirá distinguir la validez de un programa de gobierno de los comienzos de la década de los setenta y analizar lo que puede rescatarse en la perspectiva del siglo xxi, porque no cabe duda del retroceso experimentado por Chile en el ámbito social y político con el golpe de estado de 1973 y la dictadura de la derecha cívico-militar por 17 años. Hay que contrastar la experiencia del gobierno popular con la parodia de democracia y la sobreexplotación del trabajo humano que nos dejó como herencia la derecha golpista.

En el primer mensaje, pronunciado el 21 de mayo de 1971, Allende explicó la vía chilena hacia el socialismo, a partir de la realidad entonces existente, de "una sociedad agobiada por el atraso y la pobreza, propios de la dependencia y del subdesarrollo". La tarea inmediata es, por eso, romper con los factores causantes del retardo y, al mismo tiempo, edificar una nueva estructura socioeconómica capaz de proveer a la prosperidad colectiva. Su pensamiento es claro y positivo. "Las causas del atraso estuvieron —y están todavía— en el maridaje de las clases dominantes tradicionales, con la subordinación externa y con la explotación clasista interna. Ellas lucraban con la asociación a intereses extranjeros y con la apropiación de los excedentes producidos por los trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral."[9] Es la ley de bronce de los salarios, de David Ricardo, expuesta en el siglo XVII.

Ante esta brutal realidad, ¿Qué corresponde hacer? Allende lo señala de manera enfática. "Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constrictiva que sola-

[9] Salvador Allende, presidente de la República, Primer mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971.

mente genera un crecimiento deformado. Pero, al mismo tiempo, es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, sin crisis artificialmente elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios". Aquí estoy, dijo Allende a los miembros del Congreso Nacional, para incitarles a la hazaña de reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. "Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les suministra, por lo que comen. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer, encuentre cómo florecer, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos".[10] Es el humanismo socialista, preconizado por su partido durante tanto tiempo.

En esta perspectiva general de mejoramiento de las condiciones de vida de los chilenos, el presidente Allende caracterizó desde el comienzo la forma y los pasos de lo que él denominara "el camino hacia el socialismo". No era entonces, por cierto, una tarea fácil, por lo que afirmó: "La tarea es de complejidad extraordinaria, porque no hay precedentes en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas, particularmente al humanismo marxista, y teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más hondamente enraizados en el pueblo chileno".[11] En el marco de la concepción universal del socialismo, se planteaba un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, que asegurara la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de todos los chilenos, desde su infancia y hasta su vejez: trabajo bien remunerado, justa distribución del ingreso, alimentación, vivienda, salud, educación y libertad. Estos son derechos negados en el capitalismo a la inmensa mayoría de la sociedad.

Esta vía hacia el socialismo, que el Presidente Allende propuso al pueblo chileno, estaba condicionada por algunos elementos esenciales, que él definió en su primer mensaje al Congreso Pleno. Entre éstos está el principio de la legalidad, que ha sido impuesto por la lucha popular a través de muchas generaciones no sólo en Chi^ le, sino en el mundo entero, contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado, revestido durante siglos por un supuesto orig¡en divino o religioso. El socialismo no lucha contra este principio, sino contra una legalidad im-

'° *ídem.*
» *ídem.*

puesta por un sistema de opresión social. Por eso, Allende expresó: "Nuestra normativa jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad".[12] En esta forma dejó planteada la necesidad de modificar el sistema jurídico existente, porque "legalidad habrá", la que después la dictadura anuló, ejerciendo el poder arbitrariamente.

En relación con lo anterior, el Presidente Allende formuló su propuesta de desarrollo institucional, de conformidad con el programa básico de gobierno de la Unidad Popular. La apertura del sistema institucional vigente en el país le había permitido acceder al gobierno por la voluntad popular expresada en las urnas. Pero él, del mismo modo que la legalidad existente, requería su modificación para superar el capitalismo. "El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales".[13] Conforme a esta necesidad de adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad, anunció en su primer mensaje al Congreso Pleno que presentaría un proyecto para sustituir la constitución, de fundamento liberal, por una constitución de orientación socialista. Él presidente de la República tenía conciencia entonces de las dificultades, pero estimando que sería posible, actuó en consecuencia.

En esa oportunidad, destacó también su respeto por las libertades políticas, porque ellas son conquistas fundamentales del pueblo en el camino de su emancipación. Pero el gobierno de la Unidad Popular, que él presidió, no se limitó a mantenerlas y proclamarlas verbalmente, porque entonces eran frustraciones o burlas, sino que afirmó categóricamente que las haría reales, tangibles y concretas, posibles de ejercer, en la medida que se conquistara la libertad económica. "En consecuencia, el gobierno popular inspira su política en una premisa artificialmente negada por algunos: la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluy entes, y la existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector".[14] Aprovechó la ocasión para señalar el amplio bloque social de trabajadores, intelectuales, profesionales, técnicos, pequeños y medianos empresarios que apoyaron a su gobierno, pero reconoció también a toda la oposición las libertades políticas, porque ellas son conquistas del conjunto de la sociedad.

[12] *ídem.*
[13] *ídem.*
[14] *ídem.*

Como síntesis de estos elementos del camino al socialismo, el presidente Allende recordó que su gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente manifestada en las urnas, sin empleo de las armas, así como el pueblo aspira legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin recurrir a la violencia. Pero advirtió que esta responsabilidad no reside sólo en el gobierno y el movimiento popular, sino también en la clase poseedora, que siempre controló el poder. "Si la violencia, interna y externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social o política, llegara a amenazar nuestro normal desarrollo y las conquistas de los trabajadores, correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de derecho, las libertades políticas y el pluralismo".[15] Er. ese caso, el gobierno y el movimiento popular que le daba sustento tendrían que adoptar medios concordantes con los que se utilizaren en su contra.

En palabras de Allende, el camino al socialismo "es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado, porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias". Enseguida, agregaba: "Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años, los (tiempos) indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes, y ajustarías a las otras".[16] En prueba de su análisis, señaló en esa oportunidad la enseñanza de las revoluciones victoriosas, tras la intervención extranjera y la guerra civil, que tuvieron que acelerar los procesos de cambio social y económico para impedir la contrarrevolución cruenta y despiadada. Cada paso estaba contenido en el programa básico de gobierno, y la sincronización entre el pueblo, los partidos de la izquierda y el gobierno debía ser precisa y dinámica.

En este proceso revolucionario, lo primero que destaca es la socialización de los medios de producción. En su primer mensaje al Congreso Pleno, el presidente Allende expuso la obra realizada en seis meses de gobierno. Chile inició en este breve período la recuperación definitiva del cobre, la principal riqueza básica del país. Igual acción se realizó con el hierro, proyectándose de inmediato la constitución del complejo nacional del acero, en torno a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP). El Estado recuperó el carbón, en franca decadencia en manos de empresas privadas, asegurándole trabajo a los mineros de este enclave, así como el salitre, otrora fuente

[15] *ídem.*
[16] *ídem.*

de riquezas incalculables y en ese momento también en crisis productiva y comercial. Numerosas empresas industriales pasaron a integrar el área de propiedad social, con el apoyo decidido de los trabajadores, el aumento de la productividad y la participación activa de ellos en la administración.

En esos primeros seis meses se promovió la aceleración de la reforma agraria, con la expropiación de parte importante de los mil latifundios proyectados en el programa gubernativo. Esta decisiva reforma del régimen de tenencia de la tierra, perseguía impulsar una agricultura más vigorosa y productiva, que fuera capaz de satisfacer las necesidades alimenticias de la población y, al mismo tiempo, asegurara a los campesinos el beneficio equitativo de los frutos de su trabajo. Parecidos avances se lograron en la nacionalización del sistema financiero, mediante la estatización bancaria, con respeto de los derechos de los pequeños accionistas. En esta forma se aseguraba el manejo más justo y racional del crédito, particularmente al servicio del área socializada y de los pequeños y medianos industriales, comerciantes y agricultores, hasta entonces discriminados.

Conjuntamente con estas actuaciones para iniciar el cambio del sistema económico, el gobierno de Allende aplicó una política de corto plazo orientada a aumentar la disponibilidad de bienes materiales y servicios para el consumo popular. Al mismo tiempo, impulsó una política social dirigida a mejorar la alimentación de los niños, proporcionar atención médica expedita, cubrir las demandas educativas, construir más viviendas. Por sobre todas estas satisfacciones sociales, dio un gran impulso a la absorción del desempleo. En su primer mensaje al Congreso Pleno, afirmó Allende: "Hoy el hombre de nuestro pueblo tiene mayor poder de compra, consume más, siente que los frutos del esfuerzo conjunto se están repartiendo mejor. Y, al mismo tiempo, tiene el derecho a sentirse dueño de sus minas, de sus bancos, de sus industrias, de su tierra, de su futuro".[17] Agregaba que no establecía comparaciones con gobiernos anteriores porque el suyo era distinto. No obstante, pudo exhibir la tasa de inflación más baja de los últimos años, la redistribución de ingresos más justa y efectiva conocida hasta entonces y la construcción anual de un mayor número de casas que antes.

En la última parte de su exposición, el presidente de la República resumió el gran objetivo revolucionario de su gobierno, dentro del cual destaca la construcción del área de propiedad social, la incorporación a ella, como ya se había anunciado, de la mayor parte de las riquezas básicas, del sistema bancario, del latifundio, dividido en tamaños racionales, de sectores decisivos del comercio exterior, de los

i' *ídem.*

monopolios industriales y de distribución. En el plano económico, expresaba el presidente, instaurar el socialismo significa reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. No hay socialismo sin área de propiedad social. Explicaba entonces que la lucha de la clase trabajadora era por socializar los principales medios de producción, porque así se ponía fin a la explotación de que era objeto y se generaba la solidaridad necesaria. El trabajo de cada uno formaba parte del trabajo colectivo, que beneficia a todos por igual.

Este gran objetivo revolucionario requería de un sistema de planificación encargado de asignar los excedentes económicos a las diversas áreas de la producción. En ese año dio cuenta a la nación que se había comenzado a estructurar dicho sistema, con la creación de órganos asesores, como los Consejos Nacionales y Regionales de Desarrollo. Además se formuló el Plan Anual 1971, y en el resto del año se elaboraría el Plan de Economía Nacional 1971-76. En este primer mensaje, Allende precisó aún más sus propósitos de transición: "El establecimiento del área de propiedad social no significa crear un capitalismo de Estado, sino el verdadero comienzo de una estructura socialista. El área de propiedad social será dirigida conjuntamente por los trabajadores y los representantes del Estado, nexo de unión entre cada empresa y el conjunto de la economía nacional. No serán empresas burocráticas e ineficaces, sino unidades altamente productivas que encabezarán el desarrollo del país y conferirán una nueva dimensión a las relaciones laborales".[18] Conjuntamente con el apoyo a esta área social, el Estado debía ayudar a los pequeños y medianos empresarios y, al mismo tiempo, establecer los límites de los sectores privado, mixto y social.

La vía chilena hacia el socialismo definía autónomamente la política exterior del país, mirando el interés nacional y participando de manera solidaria con las grandes causas de la humanidad. Nunca Chile había sido tan digno y justo como ahora. "En conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, nuestro país apoya resueltamente la no intervención en los asuntos de los Estados, la igualdad jurídica entre ellos, el respeto de su soberanía y el ejercicio de su derecho de autodeterminación. La acción exterior de mi gobierno, en el plano bilateral como el multilateral, se orienta a la consolidación de la paz y a la cooperación internacional".[19] En el primer año del gobierno popular, Chile extendió sus relaciones diplomáticas con todos los países del campo socialista, empezando con Cuba, y relaciones comerciales con los países que habían sacudido el dominio colonial. Asimismo, colaboró en la declaración

[18] *Ídem.*
[19] *ídem.*

relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación de los pueblos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además de estas actuaciones bilaterales y multilaterales, Chile suscribió entonces el programa de actividades para aplicar la declaración sobre concesiones de independencia a los países y pueblos coloniales, así como intervino en la formulación de una estrategia internacional para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. Reafirmó también su decisión de incorporarse al grupo de naciones no alineadas, para luchar contra el retraso y la dependencia, conjuntamente con otros pueblos del Tercer Mundo y participar en sus deliberaciones y acuerdos. Con el mismo espíritu, votó favorablemente el reconocimiento de los derechos de la República Popular de China, condenó la guerra imperialista contra Vietnam y su extensión a Laos y Camboya. Colaboró en la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), cuya tercera conferencia mundial se celebró en Santiago en abril de 1972. Declaró que era propósito de su gobierno mantener con Estados Unidos relaciones amistosas y de cooperación.

El presidente Allende señaló, por último, el papel protagónico que desempeñaban los trabajadores en el proceso revolucionario que vivía Chile, porque éste no corresponde sólo a un hombre, ni sólo al gobierno, sino que era la empresa de todo el pueblo. Por el espíritu de justicia que empezaba a dominar en las relaciones laborales, se redujeron las huelgas a un mínimo. El trabajo voluntario se generalizó en las empresas estatizadas, realizándose masivamente, de Arica a Punta Arenas. "Soldados y sacerdotes, estudiantes y obreros, profesionales y comerciantes, ancianos y muchachas, libre y espontáneamente contribuyen a la tarea común con horas que le pertenecen. Manifestación creadora más allá de la concepción del trabajo mercancía".[20] La razón de todo esto reside en el hecho asombroso de que los que vivían de su trabajo, tenían entonces en sus manos la dirección política del Estado. En palabras de Allende, ello era una "suprema responsabilidad en la construcción del nuevo sistema social, que encuentra en la base, en el pueblo, su actor y juez. Al Estado corresponde sólo orientar, organizar y dirigir".

Los avances del movimiento popular

Un año después, el 21 de mayo de 1972, el presidente Allende expuso su segundo mensaje al Congreso Pleno, en el que analizó una serie de aspectos del proceso de

20 *ídem.*

cambio revolucionario que vivía Chile. Entre ellos, el gobierno popular y el régimen legal-institucional, el combate por la democracia económica, con la modificación de los pilares básicos del capitalismo, la liberación de la dependencia externa, la configuración del área de propiedad social, el papel del área privada de la producción, la expansión de la economía y la nueva orientación social de la capacidad de producción, el combate por las libertades sociales, el papel de los sectores medios, el desarrollo de la organización popular, la participación y poder de los trabajadores. En relación con las materias anteriores, examinó también la expansión de las relaciones internacionales, las dificultades económicas y políticas que enfrentaba el gobierno popular, y el valor de la democracia política. Todos los aspectos mencionados eran los problemas de la transición. En esa oportunidad, el presidente Salvador Allende destacó tres dimensiones fundamentales que entonces presentaba el proceso revolucionario.

En primer lugar, afirmó con orgullo que Chile había crecido en el año uno de su gobierno. Este crecimiento se proyectaba hacia adentro y hacia afuera. En el interior, porque había recuperado de manos ajenas riquezas y bienes nuestros, con lo que cobraban vida prolongadas aspiraciones, para convertirse en realidades concretas. En el exterior, porque por la acción de los trabajadores de nuestro país, el mundo percibía una nueva imagen de Chile y su pueblo. Expresó por ello: "¿Sería demasiado sostener que nosotros los chilenos tenemos en las manos antiguos y nobles anhelos de la humanidad, para encontrar soluciones nunca antes contempladas? Creo que no. Es lo menos que se puede admitir al evaluar nuestro intento, en germen todavía, pero más promisorio que cualquier otro, de crear una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad".[21] Este fin requería entonces acelerar la expansión económica, para atender las carencias materiales de la población, pero el crecimiento no bastaba si no procuraba solucionar primero las necesidades de las grandes mayorías, porque la prioridad consistía en la liberación social y en el bienestar de los trabajadores.

En segundo lugar, señaló también que su gobierno no sólo había definido sus metas, sino a su vez el camino que debía recorrerse, las etapas sucesivas y los medios para alcanzarlas. En este sentido, siempre fue absolutamente claro en su opción: "La función de las instituciones estatales es central en el combate revolucionario. Ponerlas al servicio de los trabajadores ha sido el fin principal de la lucha política durante varias generaciones, hasta conquistar la dirección del Poder Ejecutivo, con la misión de realizar los cambios estructurales que les permitan acceder a la

[21] Salvador Allende, presidente de la República, Segundo mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1972.

dirección del Estado".[22] Los organismos públicos bajo su control actuaban al servicio de los trabajadores y de la continuidad del proceso revolucionario, y no de la clase dominante. El poder de ésta se basaba en la compleja trama de relaciones sociales ligadas al sistema de propiedad capitalista.

El presidente de la República fue claro y preciso en su posición. La Unidad Popular y él mismo como su abanderado, habían sostenido siempre que para acabar con el sistema capitalista era necesario cambiar el contenido de clase del Estado y de la propia constitución política. Así lo establecía el programa de gobierno. Pero también habían afirmado su voluntad de realizarlo de acuerdo a los mecanismos constitucionales. "La gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario, y que decidirá la suerte de Chile, expresó, es si la institucionalidad actual puede abrir paso a la de transición al socialismo. La respuesta depende del grado en que aquélla se mantenga abierta al cambio, y de las fuerzas sociales que le den su contenido. Sólo si el aparato del Estado es franqueable por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las transformaciones estructurales sin desintegrarse".[23] Este problema, con carácter de disyuntiva, quedó planteado a partir del 4 de septiembre de 1970.

Esta no era una posición estática, de confianza ingenua en el funcionamiento legítimo de las instituciones estatales. Expuso entonces Allende: "No se puede descartar que la escalada contra el régimen institucional llegue a provocar las condiciones de la ruptura violenta. El gobierno y los trabajadores organizados están conscientes de ello, dispuestos a asumir el papel que les corresponde". La gran empresa que supone el compromiso revolucionario desbordaba en sus proyecciones los límites de Chile, de América Latina e incluso del conjunto de los países dependientes. "En todas partes están atentos a si seremos capaces de avanzar en la transformación revolucionaria del sistema capitalista con un régimen de pluralismo, de multipartidismo, sin paréntesis del principio de legalidad, sin que el ejercicio de las libertades públicas ponga en peligro la emancipación social de los trabajadores".[24] El presidente Allende reiteró, en ese instante, que la obligación básica común consistía en asegurar la continuidad del proceso revolucionario dentro de los cauces que el pueblo se había trazado.

En tercer lugar, señaló como otra dimensión del proyecto de gobierno, la creación de las bases económicas de una sociedad más justa, más igualitaria y más capaz

22 *Ídem.*
23 *ídem.*
2" *ídem.*

de progreso generalizable a todos los chilenos. Esta aspiración la afirmó otra vez categóricamente: "Una estructura económica caracterizada por la propiedad privada de los medios de producción fundamentales, concentrados en un grupo reducido de empresas en manos extranjeras, y de un número ínfimo de capitalistas nacionales, es la negación misma de la democracia. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes, lo que es incompatible con la apropiación por una pequeña minoría de los recursos económicos esenciales del país. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica".[25] Unos pocos son muy ricos, dice Allende, la abismante mayoría es pobre. Contra esta situación de irritante injusticia está el gobierno, precisamente, para terminar de raíz con los privilegios económicos, para reemplazar los pilares que sostienen el régimen capitalista y construir los fundamentos del régimen socialista, llegó él al gobierno, conjuntamente con el movimiento popular.

El combate por la democracia económica, al término del primer año de gobierno, comprendía la abolición del latifundio, mediante la reforma agraria. Esta es una gesta, que representaba entonces el fin de un ciclo histórico y el inicio de uno nuevo, el ocaso de la "aristocracia" agraria y la emergencia del campesinado libre y dueño de la tierra que produce. Los bancos comerciales, que estaban en manos de un pequeño grupo de "clanes" familiares, fueron nacionalizados. Allende dio cuenta en este mensaje que de los 26 bancos privados existentes al asumir el gobierno, 18 se encontraban bajo control de la nación; en otros dos el Estado poseía el número suficiente de acciones para dirigir sus directorios, en tanto que los seis restantes eran pequeñas instituciones regionales sin influencia. Respecto a los bancos extranjeros, el Estado los había adquirido en virtud de acuerdos directos. Expuso Allende: "El año 1972 marcará el fin de la hegemonía oligárquica que, a través de la propiedad de los instrumentos esenciales de dominio social —los latifundios, la banca y los monopolios— mantuvo en la subordinación económica a nuestro pueblo, se enriqueció cuanto pudo e hipotecó el país al extranjero".[26]

Este proceso de liberación nacional no limitó su perspectiva a aquellos escollos internos, sino que la proyectó al imperio de las grandes empresas extranjeras, que habían establecido un poder dominante en el país. Por su importancia estratégica, el gobierno popular inició a través de ellas la conquista de la independencia económica, única y exclusiva garantía de su real independencia política. Por eso, entre las

25 *ídem.*

26 *ídem.*

primeras iniciativas de gobierno, se nacionalizaron el cobre, el hierro, el salitre y el yodo, así como los bancos extranjeros, algunas empresas industriales, las empresas distribuidoras y, en ese tiempo, se abordaba la nacionalización de la Compañía de Teléfonos, filial de la ITT. No obstante estos avances, la economía nacional debía afrontar entonces dificultades muy graves, como la deuda externa heredada de los gobiernos anteriores.

Las nacionalizaciones mencionadas contribuyeron a configurar un área social, concebida en su estructura y orientación, como el embrión de la futura economía socialista. El excedente generado se empezó a destinar íntegramente a comprar más equipos y a ampliar la propia producción de la empresa o de otras empresas, así como también el crédito se dedicaba a favorecer el proceso productivo y no a propietarios particulares. Según el mensaje presidencial, el área social de la economía reunía entonces 43 empresas que eran de propiedad estatal antes de asumir el mando, más 55 que se habían incorporado por decisión gubernativa. A estas 93 se sumaban otras 83 que estaban bajo control público transitorio por infracciones legales que determinaron su intervención o requisición, con lo cual esta área de la economía tenía ya entonces una significativa importancia, dentro de una coexistencia con el área privada y mixta.

El presidente Allende señaló también en este mensaje que el proyecto de transición hacia el socialismo exigía que la revolución socioeconómica tuviera lugar simultáneamente con la expansión económica ininterrumpida. En este proceso, tenía la mayor relevancia la batalla de la producción, que hasta entonces había tenido los mejores resultados, con aumentos espectaculares en el producto interno bruto, en la producción agropecuaria, industrial, la construcción, etc. De acuerdo con informes de CEPAL, por la acción de los trabajadores, Chile ocupó el segundo lugar en el crecimiento económico entre los 23 países de América Latina. Estos resultados que mostraban la expansión de la economía nacional en 1971, continuaban en los primeros meses de 1972, a pesar de las muchas dificultades generadas tanto por el bloqueo "invisible" del imperialismo norteamericano, como por la resistencia interna del capitalismo. La economía exhibía entonces una nueva orientación social, que se expresaba en "trabajar más para que los más vivan mejor", como un imperativo de la democracia económica.

Este proceso de democratización había traído consigo la conquista de más libertades sociales, que por fin aseguraban una progresiva satisfacción de derechos consagrados en todos los países avanzados del mundo. En el año transcurrido, se habían creado más de 200 mil nuevos empleos, y en diciembre de 1971, los desocupados se redujeron a 3.5%, al mismo tiempo que se había limitado las huelgas a un míni-

mo. El derecho a la salud se mejoraba igualmente en forma notoria, a partir del programa de alimentación suplementaria para la población infantil y materna. El acceso a la cultura tuvo un incremento en todos sus niveles, con gratuidad en la enseñanza básica, congelamiento del valor de la matrícula en la enseñanza media y universitaria, con un extraordinario crecimiento de los ingresos. Fue ostensible también el mejoramiento y extensión de la previsión social y la nivelación hacia arriba de las asignaciones familiares, que en algunos sectores superó el 100%, y la elevación del monto de las pensiones mínimas de invalidez y vejez. En materia de vivienda, se hizo un esfuerzo muy grande, en sus distintos aspectos, como urbanización en campamentos, construcción de viviendas urbanas y campesinas, derogación de la reajustabilidad de los dividendos, etcétera.

El gobierno de Allende impulsó el desarrollo de la organización popular, así como la participación y el poder de los trabajadores. En su segundo mensaje al Congreso Pleno, el presidente Allende fue claro en su concepción de la. democracia, que hoy es necesario recordar. "Durante decenios hemos luchado contra una práctica y un entendimiento de la democracia puramente formales, en que el sufragio, símbolo externo de la manifestación del poder, ocultaba una realidad enajenante de la voluntad popular. La auténtica democracia exige la permanente presencia y participación del ciudadano en los asuntos comunes, la vivencia directa e inmediata de la problemática social de la que es sujeto, que no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales".[27] Agrega enseguida que el movimiento popular, convertido entonces en gobierno, había combatido siempre la concepción individualista de la democracia, vinculada al sistema capitalista, que permitía a una pequeña minoría, que concentraba los recursos económicos, usufructuar de los mecanismos políticos y representativos. Pero las grandes transformaciones realizadas en el año recién transcurrido para imponer la. democracia económica abrían las perspectivas a la democracia social.

Este gobierno también promovió desde el comienzo una amplia participación de los trabajadores en el proceso revolucionario. Para eso, suscribió un acta de acuerdo con la CUT el 7 de diciembre de 1970, en la que se expresaba: "Tanto el programa de la Unidad Popular como la Declaración de Principios y resoluciones de los congresos de la Central Única de Trabajadores coinciden en afirmar que la solución definitiva de los problemas de los trabajadores se alcanzará solamente a través de profundas transformaciones en la estructura económica y social del país, que se refieren

2' ***Ídem.***

a la nacionalización de las riquezas básicas, la realización de una efectiva reforma agraria, la eliminación de los monopolios industriales y comerciales, la nacionalización de los bancos y compañías de seguros, y el control del comercio exterior". Sobre esta base de sustentación programática, se estableció el compromiso de acción común, considerando que la participación activa de los propios trabajadores en la elaboración y realización de las transformaciones, sería la mejor garantía de su rápido cumplimiento. El gobierno popular se comprometió a asegurar dicha participación activa, a través de sus organizaciones sindicales, mediante las siguientes disposiciones:

a) Nombrando representantes de los trabajadores en los organismos de planificación y desarrollo económico y social.
b) Asegurando la participación de trabajadores en la dirección de las empresas estatales y del área mixta.[28]

De acuerdo a este compromiso, el gobierno promovió la creación de organizaciones comunitarias. En el campo se había organizado el Consejo Campesino Nacional, así como 20 consejos provinciales y numerosos consejos comunales. En esta organización, se comprendía a todos los asalariados, arrendatarios, medieros, pequeños propietarios, asentados, afuerinos, cesantes, cooperados, miembros de los centros de reforma agraria (CERA). La participación popular alcanzaba un nivel democrático nunca antes conocido en el país, ya que su competencia abarcaba la planificación, ejecución y control de las medidas agrarias e incluso aquellas materias políticas que de alguna manera los comprometía. Expresa el presidente:

> Las decisiones de los trabajadores en las empresas del área social, en el área reformada del campo y en otros centros, no se toman de modo anárquico, como desearían quienes buscan el fracaso de la revolución, sino ordenadamente, de acuerdo con criterios generales sancionados por la propia clase trabajadora, por sus representantes y por los partidos populares que integran el gobierno.[29]

De la misma manera, cabe destacar que en las empresas del área social y mixta, empezaban a funcionar entonces los mecanismos de participación, convenidos por el gobierno y la CUT, con representación igualitaria, con el pluralismo emanado de

[28] Memoria del Consejo Directivo del 6º Congreso Nacional de la CUT. Santiago, Ediciones CUT, 1972, pág. 57.
[29] Salvador Allende, *ibidem.*

la elección libre, secreta, uninominal y proporcional de sus miembros representantes de la Asamblea General de Trabajadores, así como con la amplitud que supone la incorporación conjunta de obreros, empleados, técnicos y proíésionales. El contenido de clase de esta participación estaba dado por el compromiso con la revolución socialista. Decía el presidente Allende: "Pluralismo, amplitud, contenido de clase y misión que hará de nuestro sistema de participación uno de los más auténticos y representativos del mundo en transición al socialismo, en la medida que opere regularmente".[30] Es una nueva vida la que se proyecta en las empresas, las que además de centros de trabajo, serán también centros de cultura y educación, como anticipo de la sociedad socialista. En ese primer año de gobierno, los representantes directos de los trabajadores estaban participando en las decisiones de todos los escalones del gobierno, desde el Consejo Nacional de Desarrollo hasta los comités sectoriales de la CORFO, así como en los consejos provinciales de desarrollo.

El movimiento sindical había experimentado también un extraordinario crecimiento, llegando a agrupar un millón de afiliados, personalidad jurídica, que los gobiernos anteriores le habían negado. Asimismo, adquirieron este reconocimiento legal la Agrupación Nacional de Trabajadores Semifiscales, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de Empleados de la Industria y el Comercio y la Confederación de Empleados Particulares. En el año 1971 adquirieron personalidad jurídica 599 sindicatos industriales, que agrupaban a 35 mil asociados, así como 122 sindicatos agrícolas, con 127 mil afiliados. Para enfrentar los nuevos problemas surgidos, generados por el capitalismo, se empezó a promover las juntas de abastecimientos y precios (JAP), las que organizaron la defensa contra el mercado negro, la mala distribución y el acaparamiento. Gobierno y consumidores cooperaban a su formación y funcionamiento.

El presidente de la República informó también sobre la expansión de las relaciones internacionales de Chile, tarea que no era fácil, sino más bien extremadamente difícil. "La voluntad de liberar nuestra economía de la entrega al capital extranjero, imponía exigencias especiales a la política internacional. Encarar frontalmente y con la dignidad de un pueblo libre, al poder económico establecido en nuestra patria, entraña riesgos equivalentes a la magnitud y el poderío de las fuerzas imperialistas".[31] Desde el comienzo, el gobierno popular tuvo que enfrentar el bloqueo "invisible" y diversas presiones, lo que exigió la búsqueda de la comprensión, amistad y ayuda, primero, de los pueblos y gobiernos latinoamericanos, con Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México y Cuba, con intercambio de visitas entre

so *ídem.*
[31] *ídem.*

sus gobernantes. El gobierno popular diversificó, en forma acelerada, sus relaciones comerciales con los países industriales de Europa occidental y Japón, así como inició un proceso de intercambio económico con los países socialistas.

El gobierno de Allende concertó las relaciones internacionales más amplias de la historia de Chile, reanudándolas con los países que no tenía, en diversas partes del mundo, así como reconociendo a los estados de reciente constitución. La comunidad internacional, con excepción de Estados Unidos, expresaba su amistad y simpatía por este Chile que revalorizaba la democracia. Este sentimiento colectivo se apreció con la aprobación de la invitación del gobierno popular para celebrar en Santiago la Tercera Reunión de la UNCTAD. En este y otros foros internacionales, planteó sus posiciones progresistas. Allende las precisó en su mensaje. Entre muchas otras materias, planteó la conveniencia de que el nuevo sistema monetario internacional fuera estructurado en consulta democrática con todos los países del mundo, superando la experiencia de Bretón Woods. Requirió la creación de un mecanismo automático de renegociación de la pesada deuda externa, que tenían que soportar los países pobres y reclamó el respeto por las grandes potencias de las decisiones que adoptaren los países pequeños sobre su propio destino.

Por último, se refirió a las dificultades que afrontaba el gobierno popular en su primer año de actividades, las que presentaban un doble carácter, esto es, económico y político. Las transformaciones estructurales realizadas en la economía, junto con reactivarla, habían traído consigo algunos desequilibrios, derivados tanto del sistema anémico y deformado existente hasta 1970 como de la intensidad de algunos aspectos de la política económica desarrollada en 1971. La política redistributiva con reactivación económica permitió un aumento excepcional de la producción, pero el aumento de los ingresos monetarios de la población fue aún mayor. "El exceso de liquidez no alcanzó a ser absorbido por el ahorro y las mayores necesidades de dinero que implicaba la circulación de los bienes. Parte del sector privado aumentó su preferencia por mantener saldos líquidos a fines de consumo o de inversión especulativa".[32] Los factores que contribuyeron a generar esta situación fueron varios.

Entre ellos, el presidente Allende señaló que las remuneraciones monetarias aumentaron en más de un 50% con respecto a 1970 y para 1972 se estimaba que lo harían entre 35 y 40%, lo que revela un mejoramiento de los ingresos reales de los asalariados, pero sus excesos cuestionaban lo obtenido. El déficit fiscal, que se había traducido en expansión monetaria, era posible de ser reducido de dos maneras: interrumpiendo el gasto o aumentando los ingresos. Lo primero habría significado

« *ídem.*

menos escuelas, hospitales, viviendas, empleos y detener la reforma agraria, esto es, no satisfacer importantes necesidades sociales. Lo segundo encontró la resistencia de la oposición conspirativa en el Parlamento, porque los nuevos tributos sólo podían pagarlos las grandes empresas, y, en general, el pequeño sector de más altas rentas. No se pudo tampoco terminar con la evasión tributaria ni la de los pagos al Servicio de Seguro Social, que era equivalente o mayor que el déficit, ni lograr la recuperación de los créditos otorgados por los bancos y otros organismos estatales, es decir, la cartera vencida.

Como parte de la conspiración económica, los empresarios contribuían a la presión sobre los bienes de consumo y al aumento de la cantidad de dinero, mediante el incremento de su consumo en 1971, destinando una gran cantidad de recursos financieros adicionales provenientes de liquidación de *stocks*, disminución de la inversión, reducción del mantenimiento de sus instalaciones, reducción drástica de los créditos comerciales, aumento de colocaciones y otros. "La gran cantidad de recursos líquidos en manos de los empresarios y sectores de altos ingresos que compiten con los sectores más pobres en la obtención de bienes, ha empujado las presiones de demanda y contribuido al desarrollo de la especulación".[33] Éste fue un proceso deliberadamente impulsado para provocar una crisis artificial, que contribuía a la conspiración.

Las dificultades económicas se acrecentaban por las acciones de bloqueo interno y externo que afrontaba el gobierno popular. La disminución de divisas impedía el servicio de la deuda externa acumulada y la importación de bier.es, cada vez más caros por la política monetaria internacional. Los organismos financieros internacionales, cediendo a las intensas presiones norteamericanas, negaban créditos solicitados regularmente. Las compañías norteamericanas Anaconda y Braden Copper Company obtuvieron en Nueva York órdenes de embargo sobre frenes chilenos en esa ciudad, entorpeciendo el comercio con Estados Unidos. Entonces, la derecha no defendía la soberanía jurisdiccional ni la territorialidad de la ley. Los créditos bancarios de esta potencia disminuyeron a valores insignificantes.

> Del mismo modo que la institucionalidad y las formas jurídicas del Estado deben, necesariamente, responder a la nueva realidad socioeconómica en génesis., la solución de los problemas crónicos de nuestra economía, como la inflación y los desequilibrios del comercio, no se puede alcanzar por el solo empleo de arbitrios tradicionales. Será el logro y consolidación de las transformaciones que estamos operando lo que, endefinitiva, permitirá superar aquellas dificultades.[34]

[33] *Idem.*
[34] *Idem.*

En ese sentido actuaba el gobierno incesantemente.

El presidente de la República afirmó, una vez más, que su gobierno se apoyaba en la fuerza social organizada de la Unidad Popular, movimiento político que representaba, por encima de sus diferencias ideológicas, los intereses objetivos de sectores medios y populares que no militaban en aquella alianza de partidos. Manteniendo con ellos las relaciones propias del debate político democrático, expresó su esperanza de que esta gran mayoría social, en conjunto, pudiera enfrentar a la oligarquía conspirativa, que a todas luces pretendía provocar un conflicto institucional. En el primer año del gobierno popular, la abierta y tenaz conspiración había ya forzado sucesivos enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado, al atentar contra la independencia política de los ministros, las facultades de colegislador del ejecutivo y la capacidad económica del gobierno, llegándose al extremo de pretender invalidar la competencia e independencia del tribunal constitucional. Son los pasos sucesivos hacia el golpe de estado.

En su segundo mensaje, el presidente Allende resumió, por último, el proceso revolucionario que se vivía en la sociedad chilena. Hace referencia en síntesis a lo que sucedía entonces en el país.

> Cada día, a cada minuto, se enfrentan dos mundos, dos concepciones de la ordenación social y de la convivencia humana. Uno de ellos es perfectamente conocido en sus valores y en sus realizaciones materiales. Es el mundo que ha existido, resquebrajado hoy en sus cimientos más hondos, y asediado por el ímpetu de un mundo que emerge de las profundidades donde estaba sumido, cuya realidad material podemos y debemos construir, porque es el Chile del futuro en que se impondrán los valores de fraternidad solidaria frente al egoísmo. Ese mundo sumergido hace sentir su fuerza, así como es palpable la desesperada resistencia de las estructuras, instituciones, clases y hombres amenazados en la continuidad de sus privilegios.[35]

Concluye categóricamente: "Nuestro país se encuentra inmerso en un ciclo de revolución social y económica".

La lucha contra la conspiración

En su tercer mensaje al Congreso Pleno, reunido el 21 de mayo de 1973, el presidente de la República presentó un balance de la situación nacional, en el que mostró

[35] *Ibidem.*

sus dimensiones negativas y positivas, en un momento en que, como muy pocas veces en Chile, "hay esperanzas y temores compartidos por la razón y las pasiones de nuestros ciudadanos". Esta vez, comenzó con el análisis de la presencia internacional de Chile, señalando, desde luego, que se había terminado la subordinación de la política exterior a las grandes líneas de la estrategia mundial del imperialismo estadounidense. "Si dentro de Chile nos hemos esforzado por hacer compatible el avance del proceso revolucionario con el pluralismo, más allá de nuestras fronteras nos hemos propuesto mantener relaciones con todos los pueblos del mundo, sin exclusivismo ideológico. Ello nos ha llevado a reconocer diplomáticamente la realidad de muchos países, estableciendo con ellos relaciones de amistad y cooperación".[36]

La política revolucionaria del gobierno había traído consigo en el campo exterior dos comportamientos diferentes: las manifestaciones más desembozadas de la codicia imperialista, por una parte, y la solidaridad de los países latinoamericanos y, en general, del Tercer Mundo, por la otra. Era notable entonces el apoyo de los trabajadores a la revolución en marcha, en particular en aquellos países donde ellos ejercían el gobierno o influían en ellos. Los éxitos y las dificultades eran considerados atentamente. El presidente de la República hacía presente esta situación:

> Hoy podemos comprobar el respeto, amistad y solidaridad de que gozamos en la gran mayoría de las naciones. En un período en que la distensión de las relaciones internacionales, el desarme y la coexistencia pacífica se abren camino entre los estados más poderosos, nuestra política internacional actúa dentro de ese contexto. Buscamos que la paz y la colaboración se extiendan a los pueblos de América Latina, Asia y África. Reclamamos que un nuevo tipo de relaciones económicas se establezca entre las naciones del capitalismo industrial y las no desarrolladas.[37]

Era, en suma, la ruptura de la camisa de fuerza impuesta por la guerra fría y el imperialismo.

Pasó revista, además, en ese marco internacional, a un conjunto de acontecimientos enfrentados entonces por su gobierno. Entre los más importantes, mencionó su mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1972, donde recibió el respaldo de la comunidad internacional a la causa popular de Chile, así como ocurrió en las visitas realizadas a México, Cuba, Venezuela, Arge-

[36] Salvador Allende, presidente de la República, Tercer mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1973.

[37] *ídem.*

lia, Marruecos y la Unión Soviética. De igual modo, señaló el repudio a la acción de las empresas multinacionales, expresado por la Asamblea Sindical Mundial, reunida en Santiago en abril de 1973, ya que en el propio Estados Unidos producían conmoción las nefastas actuaciones de la ITT en Chile, en colaboración con organismos del gobierno de dicho país. En este año, la Kennecott Copper Corporation había tratado de impedir la libre comercialización del cobre, provocando trastornos en las ventas, en tanto el Consejo Intergubemamental de Exportadores del Cobre (CIPEC) aprobaba medidas de solidaridad, protección y ayuda a Chile en su conferencia de ministros, celebrada en Santiago, entre el 29 de noviembre de 1971 y el 5 de diciembre de 1972.

En el período que cubre este mensaje al Congreso Pleno dio cuenta de otras acciones de política internacional impulsadas por el gobierno popular. Entre ellas estaba una nueva iniciativa sobre el mar para proteger sus recursos, que se pretendía canalizar hacia la Conferencia Mundial sobre Derechos del Mar, que se celebraría en el año 1974 en Chile, según acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último período de sesiones. Sobre la base de una crítica severa al papel jugado por la OEA, planteaba un avance en la constitución de un nuevo sistema institucional latinoamericano, que actuara como contraparte en el diálogo con Estados Unidos, superando el concepto ficticio de una *solidaridad hemisférica* que nunca existió. Señalaba el mensaje: El progreso en la integración latinoamericana, en especial el Pacto Andino[...]tiene gran significado y constituye un aporte de importancia a las nuevas tendencias que se consolidan en las relaciones de este continente." El peso de la deuda externa heredada era un problema agobiante. A pesar que durante 1972 Chile obtuvo la ampliación del plazo para el pago de sus deudas, de uno a ocho años, y de que se habían cumplido estrictamente las obligaciones de consumo corriente, señalaba el presidente Allende: "el total de vencimientos para 1973, asciende a 496 millones de dólares. Es decir, este año, casi la mitad del ingreso total de divisas corresponde destinarlo a servir la deuda externa.[38]

En este tercer mensaje, se reafirmó la continuidad del régimen democrático, dentro del cual fuera elegido el nuevo gobierno, a pesar de la conspiración sediciosa que impulsaba la derecha, en connivencia con el imperialismo. "Régimen democrático y paz civil se implican de manera recíproca y lo que atenta contra uno, atenta directamente contra el otro", afirmó el presidente de la República. Entonces adquiría mayor realismo lo que anticipara en su primer mensaje respecto del peligro que correrían la continuidad institucional y el Estado de derecho, las libertades políticas y el pluralismo, si la violencia amenazara el desarrollo del proceso revolu-

[38] *Idem.*

cionario.[39] En la medida que éste avanzaba crecía la resistencia, lo que se expresaba en el enfrentamiento diario entre reacción y revolución, acumulando una densa carga de violencia social. Expresó Allende: "El gobierno ha cumplido y cumplirá, su deber de preservar el orden público, al mismo tiempo que impulsa la transformación de la sociedad. Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, el orden público ha dejado de estar al servicio del sistema capitalista y es hoy un factor coadyuvante del avance del proceso revolucionario". Esta situación era inaceptable para la oligarquía.

Este proceso de cambios profundos, iniciado en 1970, se había ampliado y acelerado en los años siguientes, conforme al programa de gobierno. A la erradicación de las empresas imperialistas que controlaban las riquezas básicas siguió la profundización de la reforma agraria, así como la incorporación al área social de parte de las empresas monopólicas, el término de la nacionalización de los bancos y el control estatal de algunos consorcios de la distribución mayorista. En este cuadro de avances, el presidente hizo referencia específica a los logros en reforma agraria:

> En el curso del último año ha sido expropiada prácticamente la casi totalidad de los fundos de más de 80 hectáreas de riego básico, los que han pasado a manos de los campesinos. La ancestral oligarquía terrateniente ha perdido la base económica de su poder. En ese período, 1.192 predios expropiados se sumaron a los del año anterior, completándose un total de 3.570. Los campesinos han conquistado, de este modo, cinco millones de hectáreas, con lo que, considerando lo hecho antes de mi gobierno, el 35% de la superficie agrícola total del país está hoy en el sector reformado.[40]

Este proceso había traído consigo la duplicación de los asentamientos y la creación de nuevos centros de reforma agraria y de producción, así como más consejos campesinos, sindicatos y confederaciones.

El avance en el sector de la minería era también relevante para el desarrollo económico del país. Tanto la gran minería como la mediana, en sus principales yacimientos, se habían incorporado al área social, asumiendo el conjunto del país, a través del Estado, la responsabilidad de la explotación, procesamiento y comercio de sus recursos mineros. En cuanto a las empresas industriales estratégicas, la resistencia de los propietarios privados era cada vez más ostensible. No obstante, de apenas del 3% de la producción que controlaba en 1970 el Estado, 5e había pasado a más del 30% en 1973, perteneciendo al área social más de 200 empresas, incluidas las que eran de propiedad pública antes de su gobierno. En general, la constitución

[39] *Ídem.*
[40] *ídem.*

de este sector de la economía tuvo un valor significativo. En su intervención, el presidente Allende expresa que el ingreso al área social de un centro productivo representa un hecho absolutamente distinto a un simple cambio de patrón. Es el comienzo de una transformación radical en las relaciones de trabajo y en el modelo organizativo cuyo desarrollo va a ocupar durante muchos años a los trabajadores.

Estas sólidas expresiones de poder popular, de liberación de los trabajadores, fueron capaces de enfrentar los ataques implacables de los sectores sediciosos, encabezados por las organizaciones empresariales y los partidos de centroderecha.

> El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura de impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares. Pero, para el sector más obcecado que lo encabezaba, tuvo un objetivo concreto: derrocar al gobierno. Intento de quebrantamiento del régimen institucional que puso en peligro la paz interna, lo que fue evitado gracias a la voluntad revolucionaria de los trabajadores, a la conciencia patriótica de millones de ciudadanos de diversas ideologías y al sentido democrático de las Fuerzas Armadas y de Orden.[41]

El presidente de la República agregó que se refería a los acontecimientos de octubre como ejemplo de la "dinámica insurreccional" en que se encontraban empeñados los elementos más afectados por el desarrollo revolucionario, sin mencionar otras tantas manifestaciones de igual naturaleza que habían convulsionado al país.

Respecto al fondo de esta búsqueda de la crisis del Estado, señaló que eran muchos los factores que la condicionaban, pero concentró su atención en dos fundamentales: la parálisis del aparato público y el caos económico. Allende recordó que en su anterior mensaje presidencial había afirmado que el régimen institucional continuaba actuando regularmente porque las fuerzas populares dentro de él lo estaban sosteniendo; pero si las instituciones tenían su más sólido respaldo en los trabajadores era porque no se habían mostrado cerradas a su ascenso. Por eso, anticipó entonces que "pocos peligros más graves acechan al régimen que la rigidez o lentitud de los cambios jurídicos en medio del actual período de transformaciones profundas y aceleradas". Para alcanzar este fin, el gobierno popular impulsó la actividad legislativa, en algunas iniciativas apremiantes, como sobre delitos económicos, ministerios de la familia y el mar, la estructuración del área de propiedad social, participación de los trabajadores, el financiamiento a las corporaciones municipales, las empresas bajo régimen de autogestión y muchos otros, que fueron rechazados por la oposición.

[41] *Ídem,*

No sólo se expresaba en ese comportamiento un trabajo opositor conspirativo, sino que, con abuso de sus facultades de fiscalización de la gestión del gobierno, la mayoría de centro derecha de la Cámara de Diputados designó ocho comisiones investigadoras sucesivas sobre actuaciones de la administración pública en 1972. Dos intendentes fueron acusados y destituidos por el Senado, siete ministros fueron igualmente acusados y dos de ellos, destituidos. En todas estas oportunidades, el gobierno sostuvo criterios jurídico-constitucionales discrepantes de esa mayoría. El presidente de la República advirtió entonces que cuando, en el uso de sus facultades, el Poder Ejecutivo y el Legislativo diferían en torno del ámbito de sus atribuciones exclusivas, la constitución contemplaba dos instituciones específicamente destinadas a resolver los conflictos: el tribunal constitucional y la consulta plebiscitaria. En el primer caso, la oposición había tratado de inhabilitarlo, debido a su independencia y autonomía, y en el segundo caso, tampoco lo deseaba, no así el gobierno, que más tarde quiso recurrir a este medio, lo que se impidió por medio del golpe militar.

El presidente Salvador Allende destacó entonces especialmente los problemas económicos en el proceso de transformación social, a través de este tercer mensaje, aunque un proceso revolucionario no puede juzgarse por su resultado económico inmediato, porque la situación existente en ese momento estaba relacionada con la estructura económica y productiva heredada. "Quiero ser enfático en señalar, dijo, que uno de los procedimientos principales de la reacción interna y la externa para impedir nuestro camino hacia el socialismo, es la búsqueda deliberada de una crisis económica".[42] Conjuntamente con el cambio institucional, agregó, se requiere superar los problemas económicos que agobian a las grandes masas. Los problemas económicos se explicaban también por la reacción de los intereses nacionales y extranjeros afectados, pero en las conquistas político-sociales no podía haber retroceso. "No porque el gobierno sea minoría en el Parlamento, puede renunciar a formular y aplicar severamente un plan antiinflacionario, de desarrollo, de organización, de dirección económica y de democratización y participación popular. Si así no lo hiciera, no cumpliría con la obligación de dirigir la economía del país y de evitar el caos".[43] La voluntad de Allende y su gobierno eran admirables.

La responsabilidad de la situación económica era compartida por el gobierno y la oposición. "Tienen responsabilidad los que desfinancian los proyectos del ejecutivo, los que incitan a paros sediciosos, los que ayer fueron monopolistas, latifundistas

[42] *Idem.*
[43] *Idem.*

distas o banqueros y hoy, con oportunismo, prohijan reivindicaciones económicas de los trabajadores, los que desataron y mantienen una campaña destinada a sembrar la desconfianza en nuestra capacidad económica, los que promueven un mercado negro como política de resistencia al gobierno. Repito: todos ellos tienen responsabilidad".[44] Si el gobierno popular, hubiera continuado la política oligárquica habitual, si hubiera racionado los salarios, mantenido la desocupación, protegido los monopolios, conservado los latifundios y apoyado la explotación extranjera, el país no habría crecido ni mejorado el bienestar de la mayoría de la sociedad. Pero en tal situación, los mismos que entonces conspiraban, habrían sostenido que la economía estaba "sana". Pero Allende y el movimiento popular no querían una economía pretendidamente sana, como antes, con desocupación, explotación, injusticia, sometimiento al extranjero y desigualdad extrema en la distribución del ingreso. Esta para el gobierno popular habría sido una economía enferma.

En medio de las dificultades mencionadas, el presidente planteó nuevas tareas económicas, de acuerdo al programa de gobierno, como el término rápido del proceso de constitución del área de propiedad social. Este objetivo comprendía una nueva ley de reforma agraria que permitiera la expropiación de predios superiores a 40 hectáreas de riego básico, y asegurara condiciones para la reorganización del sector, la incorporación de las empresas incluidas en el proyecto enviado al Congreso, así como las del sector financiero, de los seguros, de la distribución mayorista y del comercio exterior. El paso a la propiedad social de las unidades productivas era una condición necesaria pero no suficiente. La meta definitiva era la socialización efectiva de los medios de producción fundamentales y su uso de acuerdo con los intereses concretos de los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo. Para organizar una nueva economía, era indispensable alcanzar tres grandes objetivos: 1. Establecer la dirección esencialmente democrática, orientada a asegurar la confluencia armónica de todos los aportes sociales, comenzando por la formación del comité económico de ministros y de los organismos intermedios de dirección. 2. Asegurar el funcionamiento planificado de la economía, lo que ya se había iniciado con la elaboración del plan de la economía nacional para 1974. 3. Aplicar la más amplia y democrática participación de los trabajadores.

El presidente de la República asumía con realismo la situación crítica por la que pasaba la economía, sosteniendo en este tercer mensaje que era indispensable el aumento sostenido y creciente de la producción y la productividad, con disminución

[44] *ídem.*

de los gastos materiales y financieros. Esta orientación tenia validez principalmente para los sectores más prioritarios de la economía, como eran la agricultura y la minería, no sólo en la perspectiva de largo plazo, sino también en la coyuntura de ese momento, porque ellos determinaban el abastecimiento de artículos de consumo esencial, de insumos y de equipos de capital. La agricultura se desarrolló normalmente, con un mejoramiento en el primer año y medio de gobierno, pero a partir de la segunda mitad de 1972, su perspectiva pasó a ser crítica. Las causas fueron varias. Las tensiones sociales provocadas por la resistencia de los antiguos propietarios, el invierno desfavorable, con exceso de lluvias, y el paro de la burguesía en octubre del mismo año, que afectó especialmente a viñedos y frutales, por dificultades en la aplicación de pesticidas, la distribución de semillas, fertilizantes, combustibles y demás insumos agrícolas.

En un orden más general de materias, en el mensaje se hizo referencia a los problemas que de manera más inmediata afectaban al pueblo, como la inflación, el bajo nivel de abastecimiento y la movilización colectiva, que el gobierno estaba abordando. No es posible presentar el detalle de las políticas de control inflacionario y de carácter fiscal. En el marco de su estrategia conspirativa, la oposición trataba de agravar más la situación. El Congreso ha despachado, decía Allende, las principales leyes económicas sin el debido financiamiento, situación que ha llegado a adquirir extraordinaria gravedad. "La contradicción real se plantea entre la gran mayoría del pueblo, productores o consumidores, industriales o agricultores, y los especuladores y agiotistas, forma principal de expresión de los intereses económicos inmediatos de la gran burguesía. De aquí la importancia política y el significado de la lucha contra la especulación y el mercado negro."[45] En esta materia, el gobierno popular impulsaba políticas orientadas a mejorar la distribución y el abastecimiento.

En el ámbito estrictamente político, el Presidente Allende destacó en su mensaje el significado de las elecciones parlamentarias celebradas recientemente, el 4 de marzo de 1973. Desde la victoria electoral de 1970 aumentó ampliamente la participación popular en las actividades políticas, toda vez que los ciudadanos fueron convocados a ejercer el sufragio universal en siete oportunidades, entre las cuales destacaron las elecciones municipales en 1971, en las que la Unidad Popular obtuvo la mayoría absoluta, y las parlamentarias de 1973, en las que registró el 44%, a pesar de la abierta conspiración de todas las fuerzas reaccionarias de la centro-derecha. La participación ciudadana había pasado de 2 millones 954 mil en 1970 a 3 millones 600 mil en 1973. Como expresión democrática, el pueblo participaba cada

[45] *ídem.*

día en numerosas elecciones sindicales, comunitarias, profesionales, estudiantiles, vecinales, etcétera, superándose la tradición oligárquica que aseguraba a una pequeña minoría la decisión de todos los problemas comunes. Entonces, el pueblo chileno experimentó realmente la democracia.

La oportunidad era, pues, propicia para plantear una vez más la necesidad de adaptar el régimen institucional a la nueva realidad. El gobierno popular había elaborado un anteproyecto de nueva Constitución Política, que el presidente de la República anunció sería sometido a una amplia discusión nacional en todo el país, para recoger las críticas y sugerencias antes de su presentación al Congreso Nacional. Este nuevo texto de carta fundamental comprendía la democratización del aparato judicial y previsiones contra el burocratismo, la ampliación de los derechos y deberes ciudadanos, estableciendo otros que reconocieran a todos libertad, propiedad personal y condiciones favorables al desarrollo integral de su personalidad y dignidad. La democratización de la administración territorial y la reconsideración profunda del régimen comunal, la democratización de la seguridad social, el desarrollo cultural y tecnológico. El presidente Allende se refirió también al papel de las Fuerzas Armadas y de Orden, destacando que sus mandos integraron, junto a los representantes de los partidos populares y la CUT, el gabinete designado para poner término al paro subversivo de octubre, destacando el papel democrático del General Carlos Prats.

Dialéctica del proceso

CODELCO: **un emblema popular**

La explotación imperialista tenía raíces profundas en la historia de Chile, especialmente en el siglo xx. Eduardo Novoa sostiene que alcanza niveles increíbles la carencia de información pública respecto del verdadero significado económico-social que ha tenido en nuestra patria la explotación de nuestras riquezas básicas por empresas extranjeras. En el mensaje del presidente de la República sobre el proyecto de Reforma Constitucional que modificó el artículo 10 de la Constitución se indica:

> La inversión norteamericana del cobre significó en su origen un aporte de capital foráneo de sólo 3.5 millones de dólares. Todo el resto ha salido de la misma operación. Idéntica situación se produjo en el hierro y en el salitre. Las cuatro grandes empresas que han explotado en Chile esas riquezas, han obtenido de ellas en los últimos 60 años, ingresos por la suma de 10 800 millones de dólares. Si consideramos que el patrimonio nacional logrado durante 400 años de esfuerzos asciende a 10 500 millones de dólares, podemos concluir que en poco más de medio siglo, estos monopolios norteamericanos sacaron de Chile el valor equivalente a todo lo creado por sus conciudadanos en industrias, caminos, puertos, viviendas, escuelas, hospitales, comercios, etc. a lo largo de toda su historia. Aquí está la raíz de nuestro subdesarrollo.[1]

Estas empresas imperialistas, que habían expropiado a Chile de esas inmensas riquezas, recibieron jugosas indemnizaciones en el gobierno de Frei Montalva.

[1] Eduardo Novoa Montreal, *La batalla por el cobre.* Ediciones Quimantú, Santiago, 1972, págs. 403 y 405.

> Fueron tan desmedidas las utilidades que percibieron las compañías extranjeras en los años siguientes a esta llamada chilenización, que el profesor de la Universidad de Harvard, T. H. Moral aludió a ellas diciendo que habían sido 'tan estupendas que eran prácticamente una vergüenza'. Las cifras oficiales indican que, entre 1965 y 1970, las compañías estadounidenses obtuvieron utilidades líquidas por 605 millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile.

Pero eso no es todo lo que puede decirse de la chilenización. " Según el *Hanson 's American Letter,* ningún gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas estadounidenses con la generosidad con que lo hizo el señor Frei[...]Su tratamiento excesivamente favorecedor fue tan falto de equilibrio y de juicio, y tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó la hilaridad en Washington".[2] Esto explica también la "ayuda" estadounidense a la campaña presidencial de Frei Montalva.

El gobierno de Salvador Allende, en un breve plazo, nacionalizó las riquezas básicas del país, entre ellas, el cobre, sin indemnización. Expropió en algunos casos, y en otros requisó e intervino las más importantes empresas industriales monopólicas y que condicionaban el desarrollo económico nacional, configurando con ellas una importante área de propiedad social. Desplazó a la oligarquía terrateniente, entregando la tierra a los campesinos. Incorporó plenamente a las masas al trabajo y al consumo, por medio de la absorción de la cesantía y la redistribución de la renta nacional, ampliando el mercado interno. Extendió además las libertades y derechos democráticos e incorporó a Chile al grupo de naciones "no alineadas".

La nacionalización del cobre y demás riquezas básicas, hierro y salitre, constituyó la principal bandera de la Unidad Popular, porque ella hería profundamente al imperialismo y a la vez recuperaba para Chile su más importante patrimonio minero. La minería del cobre generaba más del 80% de los ingresos de divisas del país, con una productividad enorme, toda vez que aproximadamente 20 mil trabajadores producían mas de un mil millones de dólares. La expropiación sin indemnización de este mineral constituía una medida revolucionaria, que castigaba a quienes habían obtenido utilidades abusivas, explotando la elevada productividad de dicho sector de la economía chilena y aprovechando las alternativas, unas veces naturales y otras manipuladas, del precio internacional de este producto.

Esta demanda nacional estaba vinculada al movimiento obrero chileno, que precisamente tuvo su origen principal en las zonas mineras del norte del país, por lo que los partidos populares, de orientación marxista, plantearon tempranamente la

[2] Diario *La Opinión,* Buenos Aires, enero 15 de 1972.

nacionalización de estas riquezas naturales. Así lo recordó el Presidente Allende en el discurso pronunciado en Rancagua el 11 de julio de 1971 para informar sobre la nacionalización. Entonces expresó que "la batalla del cobre dada por los partidos populares ha sido muy larga y permanente," recordando que los primeros proyectos de nacionalización del cobre fueron presentados por los socialistas y comunistas. Afirmó entonces Allende:

> Esta batalla ha sido larga, pero hay que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día[...]la inmensa mayoría de los chilenos esté junto a Chile y su futuro... al aprobar la idea modificatoria de la constitución para que nosotros podamos nacionalizar el cobre, (el país) ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el pueblo ha luchado y luchará por recuperar la riqueza de Chile, en manos del capital foráneo.

Allende se convirtió así en el ejecutor de esta voluntad nacional.

Como sucediera en México con la nacionalización del petróleo en 1938 por el recordado presidente Lázaro Cárdenas, los sectores reaccionarios introdujeron el miedo como elemento de disuasión. El debate se planteó en la campaña de 1964, cuando el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei exigió a Salvador Allende que explicara su proyecto de nacionalización total, considerándolo como irrealista. La respuesta fue categórica. El candidato socialista expresó:

> Estas campañas denotan que se trata de deslizar el germen del miedo en la conciencia colectiva de los chilenos, porque, en buen romance, lo que se infiere de esta pregunta son dos hechos: la posibilidad de una agresión económica estadounidense, que implique boicot, y, segundo, se insinúa por la vía de la sugestión capciosa, que en tal contingencia deberíamos sustituir a Estados Unidos por un abastecedor que no se nombra, pero que resulta obvio que sería el mundo socialista.

Es la típica reacción de la burguesía transnacionalizada.

Así lo señala Allende sin vacilaciones, cuando afirma que "los argumentos que esgrime el señor senador Eduardo Frei para rechazar la nacionalización, son los que tradicionalmente viene reiterando la típica derecha chilena, que pregona la fatalidad de nuestra subordinación a las empresas estadounidenses". Su posición es la conciencia que vela por el futuro de Chile ante una clase entreguista, preocupada sólo de sacar ventajas económicas de su subordinación al capital extranjero. Por eso, puede destacar la gran contradicción de clase:

> La filosofía de esta posición reaccionaria y también del señor senador, se concreta en su pregunta. A través de episodios que marcan época en los esfuerzos de liberación de los

> pueblos, los sectores económicos de la reacción, amalgamados con los intereses foráneos, han reiterado el mismo argumento con mayor o menor elocuencia. Igualmente los grupos representativos del progreso nacional han aseverado cuanto nosotros planteamos. La experiencia histórica es el gran juez.

Ésta ha demostrado, en efecto, las bondades de la nacionalización dado que ni la dictadura de Pinochet fue capaz de revertiría, ni tampoco los tres primeros gobiernos de transición a la democracia.

La campaña de Allende para convencer al país de la necesidad de la nacionalización completa del cobre fue larga y convincente. Las cifras en que se manifiesta la explotación imperialista de esta riqueza básica eran abrumadoras. Con inversiones iniciales de 50 a 80 millones de dólares, entre 1930 y 1970, aquellas empresas obtuvieron utilidades de 1 566 millones de dólares, y los valores no retornados alcanzaron a 2 663 millones de dólares. En el mismo período, las inversiones netas ascendían a 647 millones de dólares, pero en el momento de la nacionalización debían una suma superior al gobierno de Chile, sin contar otros compromisos con el comercio nacional e internacional, que tuvieron que asumir las empresas nacionalizadas.

En este sentido, el llamado "Plan de Inversiones" pactado con el gobierno de Frei fue un engaño, porque los 622 millones de dólares comprendidos en él correspondían a deudas de similar valor por los compromisos contraídos con los organismos de financiamiento externo, que tuvo que cumplir el propio gobierno a partir de la nacionalización. Allende afirmó el proyecto de la nacionalización integral "para que no vayan saliendo de la patria ingentes sumas, para que Chile; no siga siendo un país mendicante, que pide con la mano tendida unos cuantos millones de dólares, mientras salen de nuestras fronteras cifras siderales que van a ir a fortalecer a los grandes imperios internacionales del cobre". El precio del cobre era en 1970 de 48 centavos de dólar la libra en 1988 alcanzó a 1,80 y en el 2005 sobrepaso los 2 dolares y sigue subiendo.

Para esta nacionalización, el gobierno de Allende eligió el mecanismo de la reforma constitucional, por ser éste el único procedimiento que permitía deshacer la maraña jurídico-económica derivada de la teoría colonialista de los contratos-leyes, que obligan al Estado chileno respecto a las compañías norteamericanas, y liquidar la llamada "chilenización" o nacionalización pactada aprobada en el gobierno anterior. Esta reforma constitucional permitía fijar también el valor libro como precio de las inversiones de las empresas, establecer plazos para pagar las eventuales indemnizaciones y deducir de éstas las utilidades excesivas.

En el mensaje de diciembre del 70 del Poder Ejecutivo, por el cual se presentó el proyecto de reforma constitucional que modificaba el artículo 10, número 10, de la carta fundamental, se explica con precisión la elección de este procedimiento, al afirmar que "...la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada, con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente, quien expresa su voluntad". Pero había también otras consideraciones jurídicas que aconsejaban la decisión adoptada. Entre ellas, cabe señalar que el gobierno anterior había enajenado la soberanía nacional al celebrar, en ejercicio de facultades conferidas por la Ley N° 16.624, convenios con las empresas de la gran minería del cobre que fueron considerados por dicho gobierno como una especie de contratos-leyes.

La propia Corte Suprema, contrariando la doctrina que rechaza la existencia de contratos que pudieran significar una limitación de las facultades soberanas del Estado, "ha sentado reiteradamente la conclusión de que en Chile, cuando el legislador establece las bases o aprueba una forma de contratación determinada entre el Estado y los particulares, enajena sus poderes y no puede modificar unilateralmente los términos de la contratación". De esta manera, pues, para poder sortear cualquier obstáculo relacionado con problemas de interpretación o de formalismos jurídicos, se utilizó el mecanismo aludido. La nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y de la Compañía Minera Andina fue aprobada por la Ley N° 17.450, del 16 de julio de 1971.

Esta ley, a través de la disposición décimo séptima transitoria, letra *b*, de la Constitución, sancionó la facultad privativa del presidente de la República para ordenar que el Contralor General, al calcular la indemnización que debería pagarse a las empresas nacionalizadas "deduzca el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o sus antecesoras hubieren devengado anualmente a partir de la vigencia de la Ley N° 11 828, o sea, a partir del 5 de mayo de 1955". De acuerdo con esta facultad constitucional, el presidente Allende dictó el decreto supremo N° 92, de 28 de julio de 1971, por el cual se estableció el procedimiento para determinar las indemnizaciones en favor de las mencionadas sociedades, previa deducción de lo que corresponda, por concepto de rentabilidades excesivas, las que a su vez se desprenderían de los resultados económicos de tales empresas, reflejados en sus respectivos balances.

Las empresas Anaconda y Kennecott, que operaron en Chile hasta 1971, constituían sociedades que habían actuado transnacionalmente con variadas inversiones, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Si se comparan las renta-

bilidades de las empresas que operaron en nuestro país, calculacas como la razón entre las utilidades netas anuales y el valor de libro de ellas, con la rentabilidad de la matriz en el conjunto de sus operaciones internacionales, las obtenidas en Chile son mucho mayores. Este fenómeno se produce, ya sea que la comparación se haga con los resultados alcanzados por la respectiva sociedad en el conjunto de sus operaciones, incluidas sus filiales chilenas, o bien comparando, como es más pertinente, con los logrados en el conjunto de las operaciones de las compañías antes mencionadas, excluidas sus filiales chilenas.

En la decisión del gobierno popular se consideran, en definitiva, las rentabilidades obtenidas por Anaconda y Kennecott respecto de sus valores de libro en el conjunto de sus operaciones internacionales, la rentabilidad de otras empresas norteamericanas en Estados Unidos y Canadá, los casos límites de rentabilidad de libre disposición que el Estado chileno ha fijado para inversionistas extranjeros y otros casos de rentabilidad de inversiones en los países desarrollados y subdesarrollados.

De acuerdo a los antecedentes anteriores, el presidente Allende: determinó que la rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los respectivos valores de libro. Dispuso, por consiguiente, que el contralor general, al calcular la indemnización que correspondería pagar a las empresas de la gran minería del cobre, por la nacionalización, debía deducir las siguientes cantidades por concepto de rentabilidades excesivas devengadas a partir del 5 de mayo de 1955 y hasta el 31 de diciembre de 1970: 1. Para la Compañía de Cobre Chuquicamata S.A., la cantidad de trescientos millones de dólares, 2. Para la Compañía de Cobre Salvador, S.A., la cantidad de sesenta y cuatro millones de dólares, 3. Para la Sociedad Minera El Teniente, S.A., la cantidad de cuatrocientos diez millones de dólares.

Este proceso de nacionalización culminó con la resolución N° 529 de 11 de octubre de 1971, de la Contraloría General de la República, que fijó los montos de la indemnización que debía pagarse a las compañías mineras. El resultado fue altamente satisfactorio para Chile. La Compañía Chuquicamata S.A. tenía un capital, según valor de libros al 31 de diciembre de 1970, de 241.9 millones de dólares, a lo que se le dedujeron los 300 millones por rentabilidades excesivas, con un saldo negativo de 76.5 millones de dólares. La Compañía El Salvador S.A. tenía un capital, según valor de libros a la fecha indicada, de 68.3 millones de dólares, y se le descontaron 69.9 millones por el concepto ya señalado, arrojando también un saldo negativo de 1.6 millones. La Compañía El Teniente S.A. tenía un capital, según valor de libros a la fecha mencionada, de 318.8 millones de dólares, al que se le restaron 410 millones, quedando con un saldo negativo de 91.2 millones.

De acuerdo con lo anterior, aquellas grandes empresas norteamericanas explotadoras del cobre chileno fueron expropiadas sin indemnización por el gobierno popular, toda vez que las deducciones por concepto de rentabilidad excesiva sobrepasaron los montos de las indemnizaciones correspondientes según los criterios fijados por la reforma constitucional. En esta forma se puso término en Chile a tres decenios de explotación nacional por el imperialismo. Era tan grande la fuerza moral de este acto de reparación nacional que, anonadada por ella, la institucionalidad burguesa, que más tarde derrocaría al gobierno de Allende, guardó silencio esta vez. Sólo recibieron indemnización la Compañía Exótica S.A., que tenía un capital, según valor de libros, de 14.8 millones de dólares y se le descontaron 4.8 millones, correspondiéndole una indemnización de 10.0 millones, y la Compañía Andina S.A., a la cual se pagaron 18.2 millones por igual concepto.

El gobierno popular hizo frente a la campaña internacional emprendida por las empresas imperialistas, que denunciaban haber sido objeto de un despojo. Para eso, el gobierno señaló que el presidente de la República calculó los montos de rentabilidad excesiva sobre la base aproximada del 12% anual, en vez del 10% mencionado en el decreto supremo N° 92, porcentajes que eran superiores a la rentabilidad obtenida por ambas grandes compañías (Anaconda y Kennecott) en el conjunto de sus operaciones internacionales entre los años 1955 y 1970, así como eran superiores también a las tasas de rentabilidad obtenidas por inversiones norteamericanas en el sector minero, en países avanzados del mundo, tales como Canadá o los de Europa occidental. Por otra parte, las deducciones dispuestas por el presidente de la República correspondían a utilidades obtenidas por las empresas mixtas, en las que el Estado chileno tenía más del 50%, por lo que aquellas afectaban también al socio chileno, la Corporación del Cobre, en el porcentaje correspondiente. Me refiero a las empresas "chilenizadas" por el gobierno del presidente Frei Montalva.

La decisión soberana de Chile se basó en las disposiciones jurídicas internas, así como también en la resolución N° 1803 (xvII) de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas básicas. El derecho de Chile era indiscutible, a tal punto que el propio Kissinger lo reafirmó expresando en sus Memorias: "Nuestra preocupación por Allende estaba basada en la seguridad nacional. No en la economía". Para agregar enseguida: "La nacionalización de las propiedades de los norteamericanos no fue el problema. Nunca objetamos el principio de la ley internacional que permite la nacionalización por razones de interés público". En verdad, la causa por la cual el gobierno de Estados Unidos desestabilizó e intervino en el derrocamiento del presidente Allende no consistió sólo en la expropiación de

las empresas de la gran minería del cobre, sino que se fundó en la convicción de que la "vía chilena al socialismo" constituía un peligro político para esa gran potencia.

Conjuntamente con la expropiación de las empresas de la gran minería del cobre, el gobierno traspasó a la propiedad estatal el salitre y el hierro, hasta entonces en manos de empresas norteamericanas, mediante negociación directa. A ellas se agregó el carbón, que estaba en poder de capitalistas chilenos, con lo que se completó el proceso de nacionalización de las riquezas naturales, objetivo principal del programa básico de gobierno de la Unidad Popular. Con el proceso de integración de estos recursos naturales a la economía social, se daba término a una estrategia sostenida durante mucho tiempo, en el siglo xx, por el movimiento popular. Las más grandes y poderosas organizaciones obreras surgieron y se desarrollaron en la pampa minera del norte, primero en el salitre, y después en el cobre, así como en la cuenca carbonífera del sur, en las provincias de Concepción y Arauco. Salvador Allende ofrecía así la profunda satisfacción a las demandas de los trabajadores, que también eran las aspiraciones sentidas por el conjunto de la nación, por lo que siempre habían estado presentes en los programas del movimiento popular. La corporación del Cobre (CODELCO) es la herencia de Allende, cuyo valor se ha estimado en el año 2006 en 30 mil millones de dólares, aporta un excedente al fisco de 6 mil millones de dólares en ese mismo año, mucho más que el conjunto de la gran minería del cobre privada, cuya producción representa dos tercios del total de producción.

El marco de las relaciones exteriores

El programa básico del gobierno de Allende comprendía acciones, tanto en el contexto de las potencias centrales como de los países de la región. No obstante su diversidad, las trato conjuntamente por la unidad conceptual que ellas tienen, así como también en lo relativo a las relaciones multilaterales. El gobierno popular se propuso diversos objetivos en materia de política internacional. En este apartado es preciso limitar el análisis a las definiciones más generales, que parten con la afirmación de la independencia política de Chile, y se proyectan en el tiempo a establecer y consolidar relaciones diplomáticas, políticas y comerciales, con todos los países del mundo, independientemente de su posición ideológica, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses legítimos del pueblo chileno. Había una correspondencia entre las transformaciones estructurales que se proponía en el ámbito social y económico interno, para avanzar hacia el socialismo, y su posición de no alineamiento con ninguno de los bloques mundiales.

Desde esta posición de principios, el programa planteaba diversos objetivos, como establecer vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos dependientes o colonizados, en especial aquéllos que estaban desarrollando sus luchas de liberación e independencia; promover un fuerte sentido latinoamericanista y antiimperialista, por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías; defender la autodeterminación y la no intervención, rechazando todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas. Finalmente, el programa planteaba reforzar las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas y aquéllos que luchaban por la descolonización y la liberación nacional.

De acuerdo a dichos principios, el programa proponía denunciar a la OEA como agencia del imperialismo estadounidense y promover la creación común de un organismo realmente representativo de los países latinoamericanos. Se proponía revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados y convenios que significaran compromisos limitantes de la soberanía nacional (tratados de asistencia recíproca, pactos de ayuda mutua y otros celebrados con Estados Unidos). Asimismo, propugnaba rechazar imposiciones foráneas respecto al dominio, explotación y comercio de las materias primas, como el cobre, y también las trabas establecidas al libre comercio (relaciones comerciales con todos los países del mundo).

De estos objetivos se derivaba una clara política de solidaridad internacional que reconocía el eje de referencia sostenido permanentemente por el socialismo chileno. Sus directrices fundamentales eran claras. Apoyar las luchas que libraban los pueblos por la liberación y la edificación del socialismo; condenar el colonialismo y el neocolonialismo, así como reconocer el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a esos sistemas. Repudiar toda forma de agresión económica, política y militar promovida por las potencias imperialistas (casos de Vietnam y de Cuba). Solidarizar con la lucha antiimperialista de los pueblos del Medio Oriente, y rechazar a todos los regímenes reaccionarios que promovían o practicaban la segregación racial y el antisemitismo.

Conforme a este programa básico, el gobierno de la Unidad Popular puso en marcha su política exterior inserta en el sistema bipolar, la que debe evaluarse considerando que ambos bloques, el capitalista y el socialista, representados respectivamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, reconocían como zona de seguridad del primero a la América Latina. Ninguna de las dos superpotencias deseaba una segunda Cuba. Esta predisposición quedará en evidencia cuando el gobierno estadounidense decidió derrocar al Presidente Allende con la seguridad de que la Unión Soviética no intervendría en defensa de Chile. La división bipolar del mundo, que tuvo su máxima expresión en la Guerra Fría, ya tendía hacia la distensión.

Resultaba, por eso, una simplificación excesiva la idea de un enfrentamiento global entre capitalismo y socialismo. No existía entonces un grado comparable de homogeneidad al interior de una y otra de esas dos fuerzas como la que exhibían en el período inmediato a la posguerra, cuando Estados Unidos asumía la hegemonía absoluta del capitalismo internacional, y la Unión Soviética se presentaba a sí misma como el baluarte de la lucha por el socialismo.

La sustitución de la Guerra Fría por la distensión se expresaba en nuevas posiciones en torno a los que se reconocían como los grandes bloques mundiales y sus relaciones recíprocas. Entre Estados Unidos, como expresión de una hegemonía debilitada del mundo capitalista desarrollado, y la Unión Soviética, como representante de una parte de un movimiento comunista dividido, se insertaba China, sustentando políticas distintas de enfrentamiento y cooperación respecto a dichos polos. Así como se legitimaba la postura de la no alineación, que buscaba representar los intereses de un conjunto heterogéneo (y mayoritario) de naciones subdesarrolladas.

Relaciones con los países capitalistas avanzados

En este marco, el gobierno de Salvador Allende procuró desarrollar relaciones normales con Estados Unidos, pero esta superpotencia impidió desde el primer momento la promoción de tales relaciones con el nuevo régimen. Es historia conocida la determinación estadounidense de impedir la consolidación del gobierno de Allende. El propio Kissinger reveló, el 18 de septiembre de 1970, en declaraciones a la prensa estadounidense, la conspiración en marcha para imposibilitar la instauración de un sistema "comunista" en Chile, que constituiría un mal ejemplo para otros países críticos, como Argentina, Bolivia y Perú. Con posterioridad al golpe militar del 11 de septiembre de 1973, investigaciones realizadas por el Congreso de Estados Unidos pusieron en descubierto la conspiración "invisible" para desestabilizar y derrocar al gobierno popular.

El gobierno de Estados Unidos, como siempre, dio el más amplio apoyo económico a la campaña contra la candidatura presidencial de Allende, lo que explica la profunda frustración experimentada con la victoria del 4 de septiembre de 1970. Richard M. Nixon "estaba fuera de sí", según la descripción de Kissinger. "Por más de una década había criticado duramente las administraciones demócratas, dice éste, por permitir el establecimiento del poder comunista en Cuba. Y ahora, lo que él percibía —correctamente— como otra Cuba, había surgido a la vida durante su pro-

pia administración, sin que a él se le hubiera dado la oportunidad de tomar una decisión".[3]

Esto explica la virulencia de su reacción y su insistencia en hacer algo, cualquier cosa, que anulara la negligencia anterior. Según relato de Nathaniel Davis, ex embajador de Estados Unidos en Chile, Nixon gritó ante Kissinger y Edward Korry, embajador entonces en nuestro país, "pegando con el puño en la palma de la mano: '¡Ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta!', refiriéndose a Allende".[4] Esta es una expresión sin valor en boca de este gángster, obligado a renunciar más tarde del cargo de presidente de la República por el congreso norteamericano por sus felonías.

Tal era la política intervencionista de Estados Unidos desde la década de los sesenta, cuando triunfó y se consolidó la revolución cubana. Esta fue la política que tuvo que afrontar Allende a través de sus dos últimas campañas presidenciales, y que los representantes y voceros del imperialismo tampoco esconden. Los socialistas chilenos no pueden olvidar lo que reconoce Kissinger en sus memorias:

> Como ya hice notar, dos administraciones anteriores habían llegado a la conclusión de que Salvador Allende y las fuerzas que lo respaldaban constituían una amenaza suficiente a nuestros intereses para justificar nuestra oposición en la elección de 1964, con casi tres millones de dólares; ya en 1968, varios cientos de miles de dólares fueron destinados secretamente por nuestros predecesores para ayudar a vencer a las fuerzas de Allende en las elecciones legislativas chilenas de marzo de 1969. Nuestra ayuda oficial a Chile durante el gobierno de Frei totalizó mucho más de mil millones, el mayor programa *per capita* hasta entonces en América Latina, en parte para fortalecer las fuerzas democráticas contra Allende.[5]

No obstante, ese "maná" no pudo evitar la victoria electoral en 1970.

Kissinger relata también la participación de la alta burguesía chilena en la conspiración internacional para impedir que Allende asumiera la Presidencia conquistada en las urnas. Dice: "Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre por Agustín Edwards, el editor de *El Mercurio*, el periódico chileno más respetado, que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende". La derecha "defendía" así entonces la soberanía nacional. La voluntad imperial de Nixon era decisiva.

[3] Henry Kissinger, *Mis Memorias*, Buenos Aires, Atlántida, 1979, pág. 466.

[4] *Ibidem*, pág. 460.

[5] *Ibidem*, pág. 468.

El quería un esfuerzo mayor para evitar el acceso al poder de Allende, pero un hecho imprevisto salvó a Allende entonces: el asesinato del general Schneider se volvió en contra de los conspiradores y obligó al gobierno estadounidense a reconocer el cambio en la presidencia de la República. Este hecho de sangre producido por militares y civiles de derecha es el punto de partida de los crímenes más inicuos ejecutados después, entre 1973 y 1989, por las mismas fuerzas.

No obstante, desde entonces comenzó el bloqueo al gobierno popular. Dice Kissinger: "El Presidente ordenó que no se emitieran garantías para nuevas inversiones privadas, que las viejas, de ser posible, se dieran por terminadas, y que usáramos nuestra influencia en las instituciones financieras internacionales para limitar el crédito u otra ayuda financiera a Chile. Por el momento, no deberían llevarse a cabo más compromisos bilaterales de ayuda económica".[6] Los resultadas de esta política fueron demoledores, al reducirse a valores mínimos la cooperación de agencias del gobierno de Estados Unidos y de otros organismos internacionales donde esta superpotencia tenía poder e influencia. A todo ello se agregó la baja del precio del cobre, la caída de las importaciones desde ese país, con la decisiva repercusión en la reducción de las exportaciones, y las exigencias de pago de indemnizaciones a las empresas estadounidenses por la expropiación de que fueron objeto, y de amortizaciones de la deuda externa. Esta política intervencionista de Nixon fue repudiada en todas las naciones.

Las relaciones de Chile, bajo el gobierno popular, con los países capitalistas desarrollados de Europa y otros, con los que realizaba un amplio comercio internacional, se mantuvieron dentro de los marcos normales. Sus exportaciones a la República de Alemania Federal, Francia, Reino Unido, Italia, España, Suecia, Canadá, Japón y Australia se incrementaron, a pesar de la baja del precio del cobre, aumentando de 54% del total de sus exportaciones en 1970, a 60% en promedio, entre 1971 y 1973. En cuanto a sus importaciones, nuestro país casi duplicó su valor desde los mencionados países, aumentando su cuota de importaciones de 32% en 1970 a 36% en 1973, del total de sus importaciones. En general, esos mismos países no sólo elevaron sus ventas a Chile, a pesar de la campaña estadounidense de descrédito, sino que además le proporcionaron préstamos de corto plazo y ofrecieron condiciones favorables para renegociar la deuda externa que le habÍE. transferido el gobierno de Frei.[7]

[6] *Ibidem,* pág. 473.

[7] Gonzalo Martner, *El gobierno del Presidente Salvador Allende,* Santiago PHDMA, 1988, pág. 241.

Relaciones con los países socialistas

El gobierno del presidente Salvador Allende estableció en el acto relaciones diplomáticas y comerciales con los países socialistas, con quienes entonces Chile no tenía vínculos. En este sentido, además de Cuba, se extendieron dichas relaciones a la República Democrática Alemana, China Popular, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Vietcong y Camboya. Por las lecciones extraídas de la experiencia cubana, los gobernantes chilenos esperaban enfrentar las dificultades internas y externas derivadas de sus acciones de gobierno con el desarrollo de relaciones económicas con el campo socialista. En este sentido, el programa básico establecía, en efecto, que "se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas", lo que el gobierno popular trató de llevar a efecto de inmediato. En seguida, se analizarán sus resultados.

Al asumir Salvador Allende la Presidencia de la República, existían relaciones diplomáticas entre Chile y la Unión Soviética, restablecidas durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Como se esperaba, estas relaciones externas se ampliaron e intensificaron bajo el nuevo gobierno. Contribuyeron a este proceso las visitas de varias delegaciones chilenas y soviéticas a los respectivos países, destacándose en ellas las del ministro de relaciones exteriores Clodomiro Almeyda, en junio de 1971, y del presidente Salvador Allende, en diciembre de 1972, a Moscú. En el curso del período del gobierno popular, se celebraron numerosos acuerdos y compromisos de cooperación económica y técnica entre ambos países. Posteriormente, el ministro de defensa, general Carlos Prats, viajó también a la Unión Soviética para ver las posibilidades de comprar equipos militares conforme al propósito de las Fuerzas Armadas de diversificar sus fuentes de suministro.

La Unión Soviética, sin embargo, no tuvo interés en realizar operaciones económicas relevantes, por la reticencia a contraer obligaciones mayores con Chile que no fueran en virtud de un compromiso global en el marco del sistema de las naciones socialistas. Varias misiones chilenas precedieron al viaje del propio presidente Allende a dicha potencia, sin lograr acuerdos significativos en relación con los requerimientos chilenos. La Unión Soviética, de acuerdo con la distribución internacional socialista del trabajo, estaba más interesada en participar en el desarrollo de la industria ligera, que en considerar proyectos sobre industria pesada (incluida la minería). Tampoco tuvo mejores resultados el gobierno popular en sus gestiones ante otros países socialistas. En resumen, los proyectos industriales de mayor alcance no se concretaron, y el conjunto de créditos, que alcanzó a poco más de 400 millo-

nes de dólares nominales, no pudieron hacerse efectivos de inmediato, canalizándose la cooperación a la pesca y la agricultura.

Los créditos de los países socialistas se desglosan de la siguiente manera: Unión Soviética 234.9 millones de dólares, Checoeslovaquia 42.0, Hungría 20.0, Bulgaria 48.3, Rumania 44.0, Polonia 35.0, China Popular 5.2 y República Popular de Corea 5.0. Por su parte, el intercambio comercial se resume en que en 1971 las exportaciones de Chile a los países socialistas significaron el 1.6% del total de las exportaciones del país y en 1972 el 4.3%. Por su parte, las importaciones desde dichos países representaron el 0.4% y el 1.1% en los años mencionados, del total de las importaciones de Chile.[8] La conclusión de esta experiencia indica, por una parte, que el comercio y la cooperación económica fueron pequeños y, por la otra, que no hubo ninguna expresión de "solidaridad revolucionaria", porque el movimiento popular y el gobierno de Allende no formaban parte del llamado "campo socialista".

Las relaciones multilaterales

En sus relaciones multilaterales, el gobierno presidido por Allende marcó un rumbo progresista, coincidente con las posiciones más avanzadas que se planteaban, durante ese período, en el escenario mundial y en el marco jurídico de la Carta de Naciones Unidas. El pueblo chileno luchaba entonces por el respeto a su soberanía interna y externa, en el contexto de su proyecto de transformación social. No podía estar ajeno, por lo tanto, al gran debate sobre la paz mundial, el desarme y la no proliferación de las armas nucleares, que se cernían como una amenaza para toda la humanidad. Decidido partidario de la distensión entre las grandes potencias, planteó o apoyó diversas iniciativas que perseguían un Nuevo Orden Económico Internacional, y la aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, preconizada por el entonces presidente de México, Luis Echeverría.

De estas decisiones, tuvo especial relevancia la incorporación de Chile en el movimiento de países no alineados con ninguno de los bloques del sistema bipolar. Esta determinación se hizo pública en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre de 1971. Así se garantizó su autonomía y ibertad de acción en materia de relaciones internacionales, y se contrarrestó, además, la campaña maliciosa de la oposición conspirativa que trataba de presentar al gobierno popular como una base o satélite soviético. Colocado en esta posición no comprometida, el

[8] *Ibidem,* pág. 229.

gobierno se hizo representar en las reuniones de Georgetown, Guyana, y posteriormente en la Conferencia de Argel, celebrada en los primeros días de septiembre de 1973. A esta última reunión el presidente Allende se proponía asistir, no haciéndolo en definitiva por las condiciones de inestabilidad política existentes en Chile. No obstante, esta conferencia aprobó una resolución de apoyo al gobierno popular en su lucha denodada contra fuerzas reaccionarias internas y externas, con la asistencia del Canciller Clodomiro Almeyda.

La no alineación, adoptada y conducida consecuentemente como eje central de la política de relaciones internacionales de las fuerzas populares, se correspondía a la estrategia interna de Frente de Trabajadores. La no alineación tenía, de esta manera, tanto una dimensión nacional como de clase. Este movimiento comprendía un conjunto de países del Tercer Mundo, que se identificaban por la condición común del subdesarrollo y la dependencia, y una dimensión de clase referida a los partidos que, en su seno, luchaban por la liberación nacional y por la transformación profunda de sus sociedades. Desde esta perspectiva, cabe rechazar totalmente la afirmación, tan frecuente como intencionada, acerca de que, en esos años, no había un espacio de relaciones internacionales que no pasara por el compromiso de alineación con una u otra de las fuerzas polarizadas.

Chile se encontraba entonces desarrollando un decisivo proceso de recuperación de todos sus recursos naturales, por lo que revestía una gran importancia el planteamiento formulado por el gobierno popular, por intermedio de Gonzalo Martner, en la séptima reunión del CÍES, en Panamá, de septiembre de 1971, sobre respeto por los deberes y derechos de los estados.

> El Gobierno de Chile estima que si Estados Unidos desea mantener vigente su apoyo a los principios básicos de autodeterminación de los pueblos debería comprometerse a respetar el derecho soberano de los estados latinoamericanos para recuperar sus riquezas nacionales a través de nacionalizaciones, en la forma que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, procediendo al efecto a suprimir disposiciones como la llamada enmienda Hickelooper y otras de este carácter. No adoptar medidas tendientes a cerrar su mercado interno a las exportaciones latinoamericanas. Reconocer el derecho de los países a fijar el límite de 200 millas a su mar territorial. No condicionar su política de créditos a las políticas internas que desarrollen los países latinoamericanos.'[3]

Estos principios coinciden con los que más tarde contendría la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados.

[9] *Ibidem,* pág. 208.

El gobierno de Allende mostró un gran interés en el diálogo norte-sur. En abril de 1972, se celebró en Santiago la tercera conferencia de la UNCTAD, donde el propio presidente hizo oír su voz en defensa de los recursos naturales, los intereses del "Tercer Mundo" y un nuevo orden económico internacional. Per otra parte, la expansión de las relaciones a nuevos países como Guyana, Zambia, Nigeria, Guinea, República Popular del Congo, Madagascar y Tanzania, vino a materializar la persistente política del Partido Socialista, de aproximación solidaria con esas áreas del mundo. De igual manera, el Presidente Allende se ocupó de la cooperación norte-sur, lo que expuso resueltamente en un discurso pronunciado en si 140° período de sesiones de CEPAL, en Santiago, el 27 de abril de 1971.

Por último, hay dos preocupaciones planteadas en los años del gobierno popular por el presidente Allende, que hoy revisten mayor interés. La primera se refiere al control de las actividades de las empresas trasnacionales y, la segunda, a la deuda externa. Ambos problemas fueron formulados por él en la tercera UNCTAD, en Santiago, en 1972, donde expresó, en cuanto a las empresas trasnac ¡onales: "Consideremos además la acción expoliadora de estos consorcios y su poderosa influencia corruptora sobre las instituciones públicas, tanto de las naciones ricas como de las naciones pobres." Pidió entonces a la UNCTAD que estudie seriamente esta amenaza, que ya dos años antes se había hecho presente en Chile con las acciones de la ITT para impedir el acceso de Allende al gobierno.

Sobre la deuda externa, se adelantó a lo que sucedería en el futuro, al afirmar: "Los países en desarrollo ya debemos más de 70 mil millones de dólares, aunque hayamos contribuido a la prosperidad de los pueblos ricos desde siempre, y más todavía en las últimas décadas". Para dimensionar este problema Dresente ya entonces, expresó: "Chile ilustra en este momento la gravedad de la situación. El valor de nuestras exportaciones es de 1 200 millones de dólares al año. Este año nos correspondería pagar 408 millones. No es posible que un país deba dedicar a servir su deuda externa, 34 dólares de cada 100 que ingresan a sus arcas". Hoy este problema tiene una gravedad mayor que entonces. La deuda externa de Chile se elevó de 3 300 a 36 849 millones de dólares en el año 2 000, es decir, a más de la mitad de la que tenían la totalidad de los países en desarrollo en 1972.

La política latinoamericana

El programa básico de gobierno dedicó también un acápite especial para formular la política latinoamericana, que inicia con la afirmación de la personalidad regional en el contexto mundial. En este sentido, sostiene que la integración continental de-

be plantearse sobre la base de economías antiimperialistas, liberadas de la dependencia y explotación, sin perjuicio de una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias de interés para el desarrollo chileno. Allende abrió desde el gobierno un proceso a las relaciones de dependencia de los países latinoamericanos respecto de Estados Unidos. Expuso la crisis del Sistema Interamericano y su expresión institucional, la OEA, derivada del desequilibrio de poder existente entre el imperio del norte y sus vecinos, cada vez más debilitados por su división y dependencia.

Las relaciones con los países del contexto regional tuvieron caracteres positivos, a pesar de las agudas circunstancias políticas en que se desenvolvió todo el proceso de la Unidad Popular. En el análisis de las formulaciones, en materia de política internacional, contenidas en el programa básico de gobierno, se puso de relieve la importancia que se le confería al ámbito regional. Conviene advertir que en su oportunidad la izquierda había considerado con simpatía los ensayos de integración regional, pero el Partido Socialista tuvo siempre una posición crítica, debido a que veía en ellos "la perpetuación de los intereses comerciales y diplomáticos de Estados Unidos" en el marco de la trasnacionalización de la economía latinoamericana.

No obstante, el gobierno de Salvador Allende impulsó una política de desarrollo del acuerdo de Cartagena, procurando superar los escollos. En tal sentido, aprobó la Declaración 24, relativa al régimen común andino de tratamiento a los capitales extranjeros. Pero la grave situación económica por la que atravesó el gobierno en los últimos meses, lo obligó a recurrir a las cláusulas de salvaguardia para sustraerse temporalmente al régimen común en materia de comercio intrarregional. La dictadura de Pinochet, en su pretensión de atraer inversión extranjera a Chile, se retiró definitivamente del Pacto Andino, contribuyendo de esta manera al completo fracaso de ese intento de integración económica de una parte de América Latina.

Para contrarrestar la política de las "fronteras ideológicas", promovida por el imperialismo estadounidense, el gobierno popular planteó sus relaciones exteriores en el marco del "pluralismo ideológico". En la afirmación de esta doctrina fue realmente tenaz. Afirmó el Canciller Clodomiro Almeyda: "El gobierno chileno, se preocupó desde el comienzo por levantar la doctrina del 'pluralismo ideológico' como supuesto básico para regular una constructiva y pacífica convivencia en América Latina. La doctrina del 'pluralismo ideológico', fundada en el principio de autodeterminación, era también pragmáticamente eficaz para evitar la 'ideologización' de los conflictos en el continente, lo que conllevaba su muy probable agudización".[10]

i» *Ibidem,* pág. 189.

No sólo ese efecto negativo había exhibido dicho proceso, sino que ella —la ideologización— había servido siempre de fundamento político al imperialismo para intervenir, primero, en América Latina y, después, en el mundo entero. Entre los ejemplos, sólo basta señalar a Cuba, a través de la enmienda Platt a su constitución, y la ocupación de Guantánamo, así como a Vietnam, por medio de la fuerza bruta y criminal.

Chile, bajo el gobierno popular, conquistó una respuesta decidida de los países latinoamericanos, hasta el punto que en todas las declaraciones conjuntas suscritas con los gobiernos de Colombia, Argentina, Ecuador, México, Venezuela y Cuba, estuvo contenida la mención expresa de la doctrina del pluralismo ideológico. En este sentido, expresó Almeyda: "La circunstancia de que muchos de esos estados estuvieran gobernados por administraciones de orientación conservadora, le dio especial relevancia a estos acuerdos, que no constituyen, por otra parte, sino otra versión del principio de la no intervención que, como se deja dicho, fue norma invariable que Chile observó escrupulosamente".[11] Esta respuesta positiva a nivel latinoamericano, se debió también a la activa y directa participación del presidente Allende en las relaciones exteriores en la región.

En estricta conformidad con su programa básico de gobierno, Allende formuló críticas al Sistema Interamericano y propuestas para su reestructuración. El I° de octubre de 1971, el canciller planteó ante el 26° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas la necesidad de renovación de la OEA, a partir de la crisis por la que atravesaba, determinada por ficciones jurídicas que consideraban formalmente iguales a los estados miembros y con homogeneidad de intereses objetivos. Esta posición fue reafirmada por el subsecretario de relaciones exteriores, Aníbal Palma, en una intervención realizada el 14 de abril de 1972, en el segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Washington, DC. En esas oportunidades y otras, el gobierno popular expuso sin ambages su voluntad de convertir a ese organismo en una instancia de diálogo entre el conjunto de los países latinoamericanos y Estados Unidos.

Esta concepción buscaba la concertación latinoamericana y la cooperación entre estos países, a través de una estrategia de desarrollo común, el establecimiento de una organización de nuestra región y la creación de un sistema financiero de la misma. Todas estas iniciativas fueron planteadas, de manera reiterada, por el presidente Allende en diversas oportunidades y por los cancilleres Almeyda y Letelier,

ídem.

respectivamente, en la Asamblea General de la OEA (Washington, 5 de abril de 1973) y la Cuarta Reunión de Cancilleres del Pacto Andino (Lima, el I° de agosto de 1973). También las plantearon otros representantes del gobierno popular, como el ministro de economía, Pedro Vuskovic, en la Conferencia de la CEPAL (Santiago, marzo de 1971) y el ministro director de ODEPLAN, Gonzalo Martner en el 25° período de sesiones de CEPAL, efectuado en Quito, del 23 al 30 de marzo de 1973. Esta lucha no fue en vano, porque tanto la crítica como las propuestas demostraron más tarde su validez, fructificando en modificaciones al TIAR, en la creación del SELA, y dejando en evidencia la manipulación del Sistema Interamericano por Estados Unidos en la Guerra por las Malvinas.

Las relaciones con los países latinoamericanos fueron en general muy buenas, porque el gobierno popular persiguió con singular afán su fortalecimiento, para evitar el aislamiento de Chile y el bloqueo económico desencadenado por Estados Unidos. Así pudo aumentar sus importaciones y recibir créditos de corto plazo, con los cuales financiar la compra de productos necesarios para el funcionamiento de la economía y medicamentos. Además, en muchas materias, el gobierno popular adoptó posiciones comunes con los países andinos, especialmente con Venezuela y Colombia, así como con países ajenos al Acuerdo de Cartagena, como México y Cuba.

El gobierno popular confirió una considerable importancia a las relaciones con los países del Grupo Andino. El presidente Allende visitó Perú, Ecuador y Colombia, así como hizo una escala técnica en Caracas, Venezuela. En todos ellos se emitieron declaraciones conjuntas sobre intercambio comercial y cooperación. Se destacaron los principios de no intervención y los derechos de los estados a los recursos del mar adyacente a sus costas, o también se reafirmó la voluntad de impulsar el pacto de integración andina, al cual todavía no se incorporaba Venezuela. Pero con ocasión del paso del presidente de Chile, se comprometieron ambos gobernantes a trabajar juntos para dar término positivo a las negociaciones pertinentes.

Las relaciones con México fueron altamente cordiales y solidarias. Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1972, el presidente Allende visitó a ese país hermano. En esa oportunidad se concertaron acuerdos para mejorar el intercambio, la cooperación industrial y los transportes marítimos. México concedió a Chile créditos para la compra de bienes primarios y de capital, y le aseguró el suministro de fertilizantes combinados, que desde antes utilizaba la agricultura nacional. Entonces, en los años críticos de la reforma agraria, eran más necesarios y urgentes. En un sentido más amplio, se celebró también un acuerdo sobre cooperación científica y técnica entre ambos países.

Con Cuba se habían reanudado las relaciones diplomáticas el 11 de noviembre de 1970 y, a partir del año siguiente, se precisaron las áreas de cooperación econó-

mica, celebrándose diversos convenios sobre suministro de azúcar, cooperación técnica y científica y telecomunicaciones. El primer ministro Fidel Castro visitó a Chile entre noviembre y diciembre de 1971, y entonces ambos países dejaron constancia de su satisfacción por la cooperación establecida. En 1972, con ocasión del viaje del presidente Allende a Cuba, entre el 10 y el 14 de diciembre de ese año, se confirmaron estas relaciones tan fructíferas.

En el contexto fronterizo, el programa básico de gobierno de la Unidad Popular anticipó que éste actuaría de la manera más eficaz para resolver los problemas pendientes. Para eso, el gobierno popular estuvo dispuesto a participar en las negociaciones para prevenir las intrigas del imperialismo y los reaccionarios, considerando el interés nacional y el de los pueblos de los países limítrofes. Tales relaciones tenían una relevancia particular, considerando los conflictos latentes que se arrastraban con ellos desde el siglo pasado. Estos países son Argentina, con el cual tenía un litigio sobre el límite sur; Bolivia, con quien discutía la mediterraneidad de esta nación y su demanda de una salida al mar, y Perú, con el que no tenía problemas limítrofes pendientes, pero cuyas relaciones se ensombrecían por los resabios de la Guerra del Pacífico (1879-1884).

Las relaciones entre Argentina y Chile se rigieron por la concepción del pluralismo ideológico. Lanusse y Allende fomentaron sólidos vínculos de respeto recíproco, los que continuaron con Héctor Campora, a cuya ascensión al mando asistió el Presidente chileno. Ambos gobiernos entregaron al arbitraje de la Corona Británica la disputa sobre las islas del canal Beagle y establecieron una amplia cooperación económica entre estos países. Ni el incidente relacionado con la fuga de un grupo de guerrilleros argentinos desde el penal de Rawson hacia Chile, que no fueron devueltos a su país como solicitó el gobierno de Lanusse, sino enviados a Cuba, deterioró dichas relaciones. Las relaciones amistosas entre Chile y Argentina se consolidaron con la visita de Allende a Salta y de Lanusse a Aniofagasta en 1971. Posteriormente, la dictadura militar argentina desconoció el fallo favorable a Chile de la Corona Británica, obligando al tirano Pinochet y sus colaboradores a someterse cobardemente. La mediación del Papa impuso a Chile el reconocimiento de derechos que había negado a Argentina el fallo del árbitro británico.

Con Perú, gobernado por el general Juan Velasco Alvarado, las relaciones fueron igualmente satisfactorias, funcionando para abordar tanto materias relativas al Pacto Andino como las reformas del Sistema Interamericano el binomio Santiago-Lima. Allende visitó Perú en una de sus giras por países latinoamericanos y expresó honda preocupación cuando el Presidente Velasco sufrió una crisis en la enfermedad que lo llevaría más tarde a la muerte. Entre ellos existía, en realidad, una

gran comprensión y solidaridad ante los problemas continentales y los que afectaban de manera directa a sus respectivos países.

De la misma manera, las relaciones con Bolivia fueron normales mientras gobernó el general Torres. En el momento de su derrocamiento, estaban muy avanzadas las gestiones para reanudar las relaciones diplomáticas. Estas se habían roto en 1962 a raíz del conflicto surgido por el aprovechamiento de las aguas del río Lauca. A partir del ascenso del general Banzer al gobierno boliviano, se desmejoraron las relaciones entre ambos países, situación que se empeoraría aún más con el derrocamiento del presidente Allende y su reemplazo por el general Pinochet. Desde entonces las relaciones entre ambas naciones han sido malas a raíz de las reiteradas demandas por parte de Bolivia de una salida al mar, lo que ha impedido hasta ahora la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Mientras el movimiento popular buscaba con afán la unidad de los pueblos latinoamericanos, el imperialismo corrompía a las castas militares. En la década de los setenta, el Coronel William W. Nairm, director de la Escuela de las Américas, reveló en el *New York Times* que más de 170 graduados en ese establecimiento eran entonces jefes de gobiernos, ministros, comandantes en jefe, jefes de estado mayor y jefes de inteligencia. En Chile, entre los golpistas de 1973, eran egresados de dicha escuela el jefe de inteligencia, los comandantes de la segunda división de infantería y división de apoyo de Santiago, de la tercera división de Infantería de Concepción, de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y de la Escuela de Paracaidistas y Tropas Especiales.[12]

La experiencia chilena del intento de golpe de estado en 1970, que produjo el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, y del alzamiento militar tres años después, con la captura del poder por Pinochet y sus cómplices, demuestran no sólo los vínculos institucionales y políticos de la oligarquía interna y el imperialismo, sino también una directa y estrecha colaboración.

> Pocas dudas caben, por ejemplo, del apoyo logístico brindado por el Grupo de Tareas norteamericano de la Operación Unitas XVI a las unidades navales que ocuparon el puerto de Valparaíso en la madrugada del 11. Tres destructores (Richmond K. Turner, Vesole y Tattnall) y un submarino (Gamagove), al mando del contralmirante Robert R. Monroe, estaban en estrecho contacto desde los días anteriores con la Comandancia Naval chilena y los jefes de la sublevación en la base principal de la escuadra. Diversos antecedentes permiten suponer que se planeaba establecer un gobierno alternativo en

[12] Raúl Ampuero, *ibidem*.

Valparaíso, en caso de encontrar resistencia consistente de las fuerzas leales en el resto del territorio. En los días del alzamiento, la prensa sudamericana informó de la presencia de aviones estadounidenses de guerra en Mendoza, a diez minutos de vuelo de Santiago, y en Asunción, Paraguay."[13]

El destacado dirigente socialista Raúl Ampuero, el principal analista chileno de la gravitación política de las Fuerzas Armadas en la vida contemporánea de América Latina, hace un resumen cabal de este proceso:

"No se exagera cuando se dice que —en los términos latinoamericanos de hoy— 'el ejército es el partido que la nación arma y paga contra sí misma', pero en el fondo, la sustitución de los viejos procedimientos de sujeción y vasallaje, por el empleo brutal y desvergonzado de las armas; el paso de los métodos indirectos y sibilinos de opresión a aquellos abiertamente represivos; el reemplazo de la manipulación pacífica de las masas, a cargo de oligarquías serviles y de políticos venales, por tiranías que ni siquiera intentan esconder su condición colonial, prueban sólo dos cosas. En primer lugar, que una mayoría abrumadora y creciente de latinoamericanos se alista en las filas antiimperialistas; por eso, la vieja democracia liberal deja de ser útil como baluarte de los privilegios. En segundo lugar, que las estructuras institucionales e ideológicas de la dependencia militares son la última barricada del imperialismo.[14]

En este marco general de dominación imperialista, bajo el Sistema Interamericano, tuvo que actuar el gobierno popular de Salvador Allende.

El 13 de diciembre del año 2000 se publicó en el diario chileno *El Mercurio,* el anuncio del cierre de la Escuela de las Américas a contar del 15 de ese mismo mes y año, "por cuyas aulas pasaron algunos de los más implacables dictadores de América Latina", según calificación del despacho de la agencia ANSA. "Por la escuela de las Américas —fundada en 1946— pasaron, entre otros, el ex dictador panameño Manuel Noriega, los generales argentinos Roberto Viola y Leopoldo Galtieri y el actual Presidente boliviano Hugo Banzer." Además de aquéllos, múltiples oficiales de menor graduación, comprometidos en crímenes contra la humanidad en diversos países latinoamericanos, incluso por cierto Chile. "En julio del año pasado, continúa ANSA, bajo frases como 'una vergüenza para la imagen de Estados Unidos ante el pueblo de América Latina' y 'escuela de asesinos', la Escuela de las Américas vio como los integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron

[13] *ídem.*
[14] *ídem.*

un proyecto de ley que redujo su fínanciamiento". Esta escuela, según información oficial, dio entrenamiento en español, a más de 61 mil oficiales y suboficiales provenientes de 21 países, en aras de la "democracia" de las derechas latinoamericanas. Este contingente de asesinos y torturadores fue el que hizo el trabajo sucio en las dictaduras. Actualmente, este centro de formación de terroristas se ha reabierto.

Entre dos golpes militares

El gobierno de la Unidad Popular desarrolló su programa entre dos golpes militares promovidos por la centro-derecha: el primero, como ya se ha explicado, se frustró con el asesinato del comandante en jefe del ejército General René Schneider, en octubre de 1970, y el segundo derrocó de la manera más sangrienta, tres años después, al frágil gobierno popular, con la intervención de las mismas fuerzas sociales, económicas, políticas y militares que se movieron en el primero de ellos. En ambos golpes, ha quedado demostrada la inspiración, el fínanciamiento, la ejecución de parte de él y en todo caso el asesoramiento técnico de los órganos de acción del imperialismo estadounidense, como asimismo de la institucionalidad burguesa. En Chile se aplicó un estilo de conspiración distinto al que se conocía hasta entonces. En vez de la intervención súbita y directa experimentada en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961 y en República Dominicana en 1965, para referirme sólo a las experiencias más próximas, se inauguró un método más sibilino que confundió, por eso, el frente interno chileno y engañó por algún tiempo a la opinión pública nacional e internacional. Los estrategas estadounidenses en la subversión aprovechan sus propias experiencias para perfeccionar sus técnicas conspirativas, combinando la coacción con la corrupción.

La conspiración externa contra el gobierno popular se inició el mismo día de la victoria en las urnas, el 4 de septiembre de 1970, y se prolongó por los tres años siguientes. No fue, pues, un producto de los supuestos errores políticos, como sostienen sectores de izquierda hoy. Ella se proyectó, en una primera fase, en el campo económico, y fue planeada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, a través de la CÍA y las compañías multinacionales como la ITT. El imperialismo sabía que éste era el flanco más débil del nuevo régimen. Por eso, desde él inicio de la aplicación de su programa, el gobierno popular empezó a recibir las extorsiones económicas que, en principio, se manifestaron en la disminución de los préstamos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), del EXIMBANK, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta llegar a su supresión. To-

das estas instituciones de crédito internacional son manipuladas de una u otra manera por el gobierno de Estados Unidos.

Todas estas maniobras fueron coordinadas, sin tapujos, por una subcomisión especial del CIEP que dirigía entonces Henry Kissinger, con el claro propósito de provocar trastornos en el proceso productivo interno, las fuentes de suministro habituales de equipos e implementos industriales dificultaron mucho hasta paralizar totalmente las entregas correspondientes, maniobra que perjudicó gravemente las operaciones normales de la ENAP, los Ferrocarriles del Estado, la Compañía de Acero del Pacífico, la Línea Aérea Nacional, las empresas de la gran minería del cobre nacionalizadas y, en general, la industria y la agricultura. De este modo, el imperialismo dañó gravemente la economía, con la complicidad de la derecha civil y militar. Sin perjuicio de estas acciones demoledoras de la estabilidad y desarrollo de la Nación, el imperialismo colaboraba con el sector conspirativo interno en el desarrollo de la campaña mundial dirigida a exhibir al gobierno de Salvador Allende como una dictadura "marxista".

La contrarrevolución estuvo constituida en el interior del país por el Partido Nacional, representativo de la oligarquía terrateniente y financiera, la Democracia Cristiana, partido policlasista, dirigido por los sectores vinculados a las empresas extractivas y manufactureras asociadas al capital extranjero (principalmente de Estados Unidos) y otros partidos menores, de la mediana y pequeña burguesía, como la Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical, ramas desprendidas del viejo tronco del radicalismo. Todos aquellos partidos, en conjunto, constituían mayoría en el Congreso Nacional. Durante un breve tiempo, todos ellos desarrollaron su creciente oposición en los marcos constitucionales, pero al constatar los avances significativos del gobierno popular, impidieron el despacho de iniciativas legislativas importantes y desvirtuaron el régimen presidencial de gobierno, mediante sucesivas acusaciones constitucionales a ministros, sin fundamentos serios. Así fueron pasando velozmente de la obstrucción parlamentaria sistemática descrita a la abierta subversión.

El gobierno popular sólo disponía del poder ejecutivo, en tanto que la oposición predominaba en el legislativo y judicial, como también en la Contraloría General de la República y, en general, en la burocracia, que formaba parte del ejecutivo, pero que entonces gozaba de inamovilidad en virtud del "estatuto de garantías". Los medios de comunicación social (diarios, radios y televisión) estaban en su mayor parte en manos de la oposición y actuaban con libertinaje. El aumento del consumo trajo consigo una mayor demanda de artículos alimenticios y de otras mercancías, lo que obligó a incrementar las importaciones de productos agropecuarios de 140 mi-

llones de dólares, en 1969, a 380 millones en 1972, acrecentando el déficit de la balanza comercial. Pero aun así, se produjo desabastecimiento. Los empresarios no reinvertían sus utilidades, prefiriendo destinarlas a la especulación en el mercado negro. El precio del cobre cayó de 78 a 48 centavos de dólar por libra, disminuyendo por tanto el valor de las exportaciones de este mineral, no obstante lo cual debía atenderse la amortización y el pago de intereses de la deuda externa heredada del gobierno de Frei Montalva, que alcanzaba a 3 300 millones de dólares, cuyo servicio demandaba el 45% de las divisas obtenidas en el comercio exterior.

De acuerdo a la conspiración contra el gobierno de Allende, en octubre de 1970 se anunció desde Washington que en caso que Allende llegara a hacerse cargo de la Presidencia de la República "todas las fuentes de ayuda o préstamos para Chile serían cortados". La *North American Congress on Latín America* (ANCLA) describió el proyecto. Tanto la comunidad empresarial como el gobierno estadounidense comprendieron a principios de 1971 que Chile dependía de los dólares para importar los bienes que necesitaba. También podían predecir que Chile exportaría menos de lo que necesitaba para importar (principalmente debido a la baja del precio del cobre) y que tendría que pedir préstamos. Al no obtener en préstamos los dólares que necesitaba, Chile tendría que recurrir a sus reservas, empeorando mucho más su capacidad crediticia.

> Una vez que sus arcas estuvieran exhaustas, este país se enfrentaría a un proceso de ajuste interno que implicaría mayores reducciones en sus importaciones desde Estados Unidos, desgraciadamente muy necesarias. Esto, a su vez, causaría grandes penurias, especialmente a la clase media chilena, que era la que más se beneficiaba con las importaciones. Estos grupos retirarían entonces su apoyo al gobierno de Salvador Allende y provocarían una grave crisis en la cual los elementos más conservadores, particularmente los militares, tendrían que intervenir.[15]

Este era el fundamento del plan conspirativo desde el exterior.

La situación se agudizó con ocasión de la nacionalización del cobre. Antes, el EXIMBANK había negado un crédito solicitado por Chile para la adquisición de tres aviones comerciales destinados a la LAN. Al realizarse la nacionalización de la gran minería del cobre, el gobierno de Allende reconoció las deudas de las empresas mixtas de la gran minería, las que sumaban más de 700 millones de dólares. El bloqueo invisible se intensificó, uniéndose a las acciones del gobierno estadounidense

[15] Elizabeth Farnsworth, Richard Feinberg y Eric Leerson, *Chile: el bloqueo invisible*, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973, pág. 50.

las empresas imperialistas del mismo país. La Kennecott obtuvo en febrero de 1972 el embargo de cuentas de varias reparticiones oficiales chilenas en Nueva York, así como también algunos bienes de propiedad estatal. Igual comportamiento adoptó Anaconda. Después, la Kennecott obtuvo en un tribunal francés el bloqueo del pago a Chile de embarques de cobre de la mina El Teniente, obligando al gobierno a suspender varios de ellos. Las mismas dificultades encontró en la renegociación de la deuda externa en el Club de París.

Fidel Castro, en su vista a Chile de 22 días dio un apoyo político significativo al gobierno de la Unidad Popular. Su presencia reafirmó el carácter revolucionario del gobierno, tranquilizó a los ultraizquierdistas, aplacó las demandas obreras y fomentó la cohesión de la alianza de la Unidad Popular. Pero, a su vez, la oposición sacó provecho en su favor. En efecto, al finalizar la visita del Presidente de Cuba, la oposición desencadenó ruidosas manifestaciones públicas, con graves disturbios en el centro de Santiago, con la participación de miles de mujeres con "cacerolas vacías", procedentes en su inmensa mayoría del sector rico de la población, que reclamaban contra el desabastecimiento de productos de primera necesidad y la carestía de la vida. El gobierno se vio obligado a declarar zona de emergencia a la provincia de Santiago. En suma, mientras Allende se apoyaba en la legalidad, la oposición conspirativa la transgredía constantemente, armándose y real izando repetidos y constantes actos de terrorismo, por intermedio de la organización ultraderechista "Patria y Libertad" y otros grupos, apoyados por militares en retiro e incluso en actividad, que les pasaban armas.

La oposición tiende a cerrar un cerco en torno al proceso revolucionario. Se exacerbaba el auge de los atentados con despliegue de la violencia en las ciudades y campos, así como de la agresividad de los ataques, tanto de la prensa, como de sus bandas armadas. En este movimiento de oposición actuaban los sectores medios, bajo la conducción de la alta burguesía. "La extensión a amplios sectores de la clase media del sentimiento de inseguridad sobre su 'status' presente, de incertidumbre en cuanto a su futuro y hasta de temor ante lo desconocido, de su porvenir con los trabajadores como clase dominante, era lo que determinaba su conducta y retraimiento".[16] En otras palabras, no viendo perspectivas de triunfo y seguridad de parte de los defensores del gobierno, se movilizaba en contra de ellos, prefiriendo su situación de servidumbre ante la gran burguesía antes que su actual incertidumbre. Por eso, no obstante los beneficios obtenidos del gobierno de Allende, actuaron en

[16] Joan Garcés, *El Estado y los problemas básicos en el gobierno de Allende,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, pág. 144.

su contra. De la misma manera se comportaron los sectores medios durante el gobierno de Frei Montalva, toda vez que, a pesar de promover políticas en ambos casos para ganarlos en favor del proceso de cambio, no lo pudieron conseguir.

Precipitación de la crisis

La crisis del gobierno comenzó a precipitarse a partir del paro declarado por los comerciantes minoristas, con el pretexto del alza de los precios y del desabastecimiento de algunos artículos de primera necesidad. Ese paro se inició el 21 de agosto de 1972 y comprometió a más de 125 mil establecimientos en todo el país, con graves incidentes provocados por la oposición. Poco después, el 4 de septiembre, la Unidad Popular celebró el segundo aniversario de su victoria, con una extraordinaria concentración popular de 750 mil personas, pero la oposición continuaba generando desórdenes y provocaciones en las ciudades. En este proceso de lucha entre gobierno y oposición, se generaron dos tendencias en las Fuerzas Armadas: la profesionalista, que conforme a la doctrina Schneider respetaba y obedecía al gobierno democrático, y la conspirativa, que participaba en el complot por derrocarlo. El general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, respondía a la primera corriente, por lo que había expresado públicamente:

> La solución de fuerza es una solución sin destino en Chile, y conduciría a una dictadura. En tal caso, las Fuerzas Armadas tendrían que transformarse en una policía especializada y refinada. A la mañana siguiente de los aplausos al dictador, los partidos políticos de todos los bandos estarían gritando "gorilas" y pidiéndonos elecciones.[17]

La otra tendencia, unida a la oposición de derecha, sostenía que se debía "salvar al país del caos" y "detener la amenaza marxista".

La campaña de agitación continuó su curso tras el objetivo de derrocar el gobierno legítimo. El 11 de octubre de 1972, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones promovió una huelga total e indefinida, con el pretexto de que el gobierno se proponía estatizar los transportes en una región del país. El paro pretendía bloquear a Santiago, la capital de Chile, y cortar el territorio nacional en ocho o diez tramos administrativos, impidiendo el tránsito de carga. Este movimiento subversivo fue impulsado por el llamado "poder gremial", creado por la oposición y que incluía a la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril, la

[17] *La tragedia chilena, testimonios,* Buenos Aires, Menayo editor, 1973, pág. 19.

Cámara Chilena de la Construcción, la Confederación de Transportistas, la Confederación de Comercio y los Colegios de Profesionales. Desde el comienzo, esta paralización determinó graves dificultades en el abastecimiento y la locomoción, toda vez que adhirió a dicho movimiento la mayor parte del comercio. La huelga fue financiada por la CÍA, pagando a los camioneros y, en general, a los agitadores profesionales por mantenerse inactivos, es decir, sin trabajar, con el apoyo de los partidos de oposición.

Ante esta grave situación, el gobierno estableció el estado de emergencia en Santiago y otras 12 provincias. La respuesta de los trabajadores fue sensacional. La CUT y demás organizaciones obreras y campesinas llamaron a enfrentar la ofensiva patronal y de los gremios empresariales y profesionales, así como de los partidos de centro-derecha, estableciendo equipos de emergencia de los trabajadores para asegurar las comunicaciones y el transporte, hacer funcionar la economía y el consumo popular, reforzar la vigilancia y protección de las empresas, manteniendo turnos permanentes en ellas. Los trabajadores, organizados en comandos comunales y cordones industriales, tomaron posesión de las fábricas y sostuvieron la producción, sin la presencia de los patrones y sus capataces. Hicieron funcionar asimismo los organismos de base, a pesar de la violencia utilizada por los sectores en huelga y sus grupos de choque, con atentados terroristas en las líneas férreas y eléctricas, con piedras y disparos contra los vehículos de transporte de carga y pasajeros. Esta resistencia del "poder popular" permitió al gobierno de Allende poner término al paro insurreccional de la burguesía después de 27 días, con una pérdida estimada en 200 millones de dólares. Esta fue la llamada "batalla de octubre".

Esta lucha fortaleció los cordones industriales que se venían organizando desde antes del paro y dio origen a nuevos organismos de poder popular, como los comités coordinadores de cordones industriales, que estaban integrados por las representaciones sindicales de las empresas del mismo sector geográfico. Este poder popular comprendía también a los comités de protección y defensa de los sitios de trabajo del ataque de los aparatos paramilitares de los sectores reaccionarios, a los comandos comunales formados por representaciones de sindicatos, cordones industriales, consejos campesinos, juntas de abastecimiento y precios, juntas de vecinos y otras orientadas a atender los problemas sociales y de movilización. Es conveniente destacar la importancia de los cordones industriales, creados por la clase obrera, para enfrentar a la burguesía, como organismos independientes del gobierno, que tomaban sus propias decisiones para impulsar el proceso revolucionario. Los cordones industriales respetaban el papel de la Central Unica de Trabajadores, que sólo daba dirección a los sindicatos, en tanto que los cordones pretendían mo-

vilizar a sectores ajenos a ella, incorporándolos a la lucha de clases. De un contingente de 3 millones y medio de trabajadores, la CUT sólo tenía 650 mil afiliados.

El Partido Socialista apoyó decididamente al movimiento de generación del poder popular, destacando la participación que tuvo en la lucha contra el paro de la burguesía, destinado a derrocar al gobierno legítimo. El pleno del Comité Central de este partido, realizado entre el 10 y el 12 de noviembre, declaró sobre los hechos de octubre de 1972: "El pueblo aprendió en días lo que años de acción no pudieron enseñarle. La clase obrera ganó en conciencia de clase, ganó en capacidad revolucionaria, ganó en decisión de victoria y dio un salto hacia el futuro socialista de Chile." El Secretario General del partido, Carlos Altamirano, se refirió a "las exigencias de poder que las masas organizadas ejercieron de hecho a través de múltiples formas, entre ellas los cordones industriales, los comandos comunales, los frentes patrióticos, surgidos durante la crisis de octubre."[18]

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 constituyeron un factor decisivo en la precipitación del golpe militar. Ellas fueron, como se advirtió en los inicios de la campaña electoral, las más importantes en la historia política de Chile en el siglo xx, enfrentándose dos bloques absolutamente antagónicos. La izquierda las consideraba como el fundamento de la defensa del gobierno y la condición para avanzar. La derecha buscaba en ellas los dos tercios para destituir al presidente de la República. "Patria y Libertad", la fuerza de choque de la oposición conspirativa, declaró: "Si en marzo la Unidad Popular obtiene alrededor de 40% de los votos, no queda sino el derrocamiento armado". Así de claro, como siempre, ha actuado la derecha. Las elecciones se realizaron en las condiciones más desfavorables para la Unidad Popular. Neutralidad del gobierno, garantizada por el ministro del interior, comandante en jefe del ejército Carlos Prats; financiamiento millonario de la CÍA y las empresas imperialistas a la oposición; dominio de ésta de la inmensa mayoría de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Inflación, desabastecimiento, mercado negro, campañas de desprestigio en contra del gobierno. La consigna de la oposición era obtener los dos tercios de los parlamentos para acusar "constitucionalmente" al presidente de la República. La Unidad Popular sólo contaba con el apoyo de los trabajadores. El resultado final dio a ésta un 43.9% de la votación nacional, es decir, más de 7% sobre el resultado de 1970, superando todas las predicciones.

La derecha y la Democracia Cristiana decidieron derrocar el gobierno por la fuerza, ante el fracaso del camino electoral y parlamentario del golpe blanco. Susti-

[18] Carlos Altamirano, Entrevista, en suplemento de *Punto Final,* Santiago, febrero 13 de 1973.

tuido Renán Fuentealba en la presidencia de este último partido por Patricio Aylwin, hombre de confianza del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, comenzó la promoción abierta del golpe militar, mientras el gobierno de Estados Unidos había roto sus conversaciones respecto a la deuda externa e intensificaba el bloqueo económico. Para este efecto, se reanudaron los paros de profesionales y otros gremios, participantes en la conspiración, así como los actos de terrorismo se repetían noche tras noche. La prensa de derecha, por su parte, arreciaba en sus apelaciones a las Fuerzas Armadas. Por fin, explotó un alzamiento militar el 29 de junio de 1973, a cargo del grupo de tanques blindados N° 2, que se dirigió hacia el palacio presidencial bajo las órdenes del teniente coronel Roberto Souper. Fue el "tancazo". Hubo movilización popular en defensa del gobierno, pero el fracaso del intento de golpe se debió fundamentalmente a la resistencia militar, dirigida por el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats. Solamente el grupo fascista "Patria y Libertad" dio la cara y asumió su responsabilidad en el golpe frustrado, denunciando la traición de otros sectores comprometidos. No obstante la gravedad de la situación creada, la mayoría del congreso no aprobó el estado de sitio solicitado por el gobierno.

El presidente del Senado, Eduardo Frei habló por intermedio de la televisión, sosteniendo la inconstitucionalidad del gobierno de Allende y un tácito llamado a las Fuerzas Armadas a "restituir" la legalidad. El presidente de la DC, Patricio Aylwin, entretanto, respondiendo a una invitación al diálogo del Presidente de la República Salvador Allende, establecía tres condiciones: *1)* inmediato desarme de los grupos armados al margen de la ley, mediante la aplicación por las Fuerzas Armadas de la ley sobre control de armas; *2)* devolución sin dilaciones de las industrias y demás establecimientos ocupados en los últimos días y *3)* promulgación de la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba, aprobada recientemente, para liquidar el área social. Estas exigencias impedían el diálogo, porque quienes estaban armados no eran los partidarios de la Unidad Popular sino los de la derecha; las industrias y predios tomados por los trabajadores eran el resultado del reciente golpe intentado por la derecha con el "tancazo" y la "reforma constitucional" aludida se había aprobado al margen de la carta fundamental. Por eso, el diálogo ni siquiera se intentó.

Poco después, el 17 de julio de 1973, el cardenal Raúl Silva Henríquez formuló un llamado al diálogo para evitar la guerra civil. El presidente Allende acogió de inmediato este llamado. El 30 del mismo mes, se iniciaron las conversaciones con la dirección de la DC sobre la base de un plan de ocho puntos: *1)* afianzamiento de la autoridad del gobierno; *2)* rechazo de las fuerzas armadas paralelas y marginación de las Fuerzas Armadas institucionales de la pugna política; *3)* desarrollo de

las instituciones del poder popular, vinculado al gobierno y no antagónico del régimen constitucional; *4)* rechazo del camino antiinstitucional; *5)* definición y articulación de las competencias de los poderes del Estado; *6)* plena vigencia del Estado de derecho, fin del bloqueo legislativo y desarrollo del régimen legal; *7)* definición del régimen de propiedad de las empresas del área social, mixta y privada, estructuración de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas y 8) Adopción de medidas eficaces contra las causas de la inflación. El 7 de agosto de 1973, después de dos entrevistas de cinco horas, la dirección de la Democracia Cristiana, por intermedio de Patricio Aylwin, anunció que las conversaciones habían terminado, porque Allende "no aceptó las condiciones mínimas para iniciar los puntos de convergencia".

Ante este nuevo fracaso del diálogo, se precipitaron las huelgas de camioneros (pagadas por la CÍA) y otros gremios empresariales, acompañados de una ola de atentados terroristas que sumaron 253, con muertos y heridos, con la agudización del desabastecimiento y las amenazas de golpe de estado. El presidente Allende formó un nuevo gabinete, que denominó de seguridad nacional, en el que participaron los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de carabineros. Pero el plan conspirativo continuó. El 14 de agosto fue volado el puente entre Pucón y Villarrica, así como la torre de alta tensión que conectaba la planta hidroeléctrica Rapel con la Central Cerro de Santiago, dejando sin energía eléctrica a esa capital y a las provincias de O'Higgins, Aconcagua y Coquimbo. La Democracia Cristiana reafirmó sus acusaciones de ilegalidad al gobierno y dio su apoyo al paro golpista de los camioneros.

La centroderecha intensificó su campaña del terror, para generar miedo tanto en la población civil como en las Fuerzas Armadas, sosteniendo sin fundamento alguno que el movimiento popular organizaba un ejército paralelo y se armaba. El 1º de julio de 1973, Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado, denunció que los cordones industriales se estaban armando y exigía que se aplastara ese ejército paralelo antes que fuera tarde. *El Mercurio* presentaba al "poder popular" como el principal enemigo. Sostenía entonces:

> Ese poder popular armado está organizándose, cuenta con arsenales, dispone de técnicos, se vale de instrucción y literatura para distintos niveles de preparación, emplea los recursos del Estado y las empresas del área social o intervenidas, sigue modelos extranjeros probados en el terreno; en fin, es una organización facciosa con capacidad para llegar a un enfrentamiento y decidirlo a su favor si lucha con una ciudadanía democrática desarmada. De ahí que el esfuerzo por reducir el potencial ofensivo de ese "poder popular" sea un requerimiento mínimo para evitar un enfrentamiento grave y extenso.

Se llegó al extremo de decir que la Unidad Popular tenía un ejército paralelo de 11 mil extranjeros armados.

Todo eso era mentira envasada, para asustar a los incautos. Joan A. Garcés, asesor del presidente Allende, escribió después del golpe militar:

"No era posible concebir una acción insurreccional armada de los trabajadores. El movimiento obrero, por el camino que había llegado al gobierno, no podía materialmente poner en práctica una línea operativa que le llevara a enfrentar al conjunto de las Fuerzas Armadas... Algunos pensarán ahora, como pensaron en el paí:> unos pocos, que la Unidad Popular tuvo tiempo más que suficiente para distribuir armas entre los trabajadores y organizarlos en forma que el gobierno contara con su propio ejército de clase. Profundo error y craso desconocimiento de la realidad militar concreta de Chile bajo el gobierno de la UP. Una acción de esta naturaleza era imposible de tan sólo iniciar sin que de inmediato fuera conocida por las Fuerzas Armadas. Y ante ello, no había división interna posible. Como un solo todo, oficiales leales y oficiales sediciosos hubieran reaccionado en contra. El movimiento obrero se hubiera encontrado aislado frente al conjunto de las Fuerzas Armadas dispuestas a defender su único poder; el monopolio de las armas.[19]

Garcés remarca, con razón, que las circunstancias objetivas y subjetivas que condicionaron el proceso de la Unidad Popular entre 1970 y 1973, hacían imposible la organización de un ejército popular paralelo al profesional. Pero los falsificadores de la historia continuarán insistiendo en esta mentira.

Como parte de la conspiración por derrocar al Presidente de la República, los altos mandos de las Fuerzas Armadas prepararon y pusieron en ejecución un plan de allanamientos, de acuerdo a la Ley de Control de Armas, que comprendía los siguientes objetivos:

1) Conocer en el terreno al "enemigo" (leáse a los trabajadores). Cada allanamiento a una fábrica o industria permite a los oficiales que participan en él conocer a la perfección la distribución interna del inmueble, los lugares donde este "enemigo" podría hacerse fuerte, donde puede emboscar, etcétera. En suma: la oportunidad de elaborar con certeza un operativo futuro de toma de la industria en un mínimo de tiempo y de despliegue de fuerzas; 2) Aquilatar con precisión la fortaleza moral y psicológica de los trabajadores, básicas para saber su capacidad de resistencia y cómo quebrarla; 3) Preparar anímicamente a los soldados para enfrentar a los trabajadores. Crearles la sensación de

[19] Joan E. Garcés, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, pág. 43.

> que son invencibles, vale decir, sacar a la tropa del espíritu de paz y embeberla sistemáticamente en un ambiente bélico; 4) Definir en la práctica para los soldados, clases y suboficiales, quienes son los adversarios en un eventual conflicto y provocar una separación tajante entre éstos y los uniformados, ya que cada allanamiento deja una secuela de resentimiento entre los trabajadores contra los militares, y permite acerar el espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas; 5) Obtener los nombres, direcciones e identificar a los principales líderes sindicales y políticos de cada industria.[20]

Estos allanamientos fueron múltiples en Santiago y otras ciudades.

De acuerdo a dicho plan, comandos de las Fuerzas Armadas allanaron numerosas industrias de Santiago, Concepción, Valparaíso, Osorno, Punta Arenas y otras ciudades, locales sindicales, centrales hidroeléctricas, sedes de partidos de izquierda, escuelas, hospitales, el canal 9 de Televisión de la Universidad de Chile. Nunca encontraron armas, a pesar de la violencia empleada, siendo el más cobarde y sangriento el de la empresa Lanera Austral, de Punta Arenas, dirigido por el general Manuel Torres de la Cruz.

Esta situación, se había agravado desde la renuncia del general Prats quien, no teniendo el apoyo de la mayoría de los generales, abandonó las filas del ejército el 23 de agosto de 1973. Diversos colegios profesionales, tales como los de ingenieros y médicos, la Confederación de Colegios Universitarios y las Federaciones de Estudiantes de las universidades católicas de Chile, exigían la renuncia del presidente Allende. Por su parte, Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, demandaba también un gobierno de los militares, ocupando éstos no sólo los cargos de ministros, sino los de subsecretarios, intendentes, gobernadores y en general de los mandos medios. La Armada reprimía entre tanto a los marineros antigolpistas, iniciando procesos en contra del senador Carlos Altamirano y del diputado Osear Guillermo Garretón. El paro de los camioneros, que ya cumplía 40 días, continuaba, sin inmutarse con la presencia de militares en el gobierno. El 28 de agosto, el presidente Allende reestructuró su gabinete, con cuatro militares (ya no los comandantes en jefe), con Carlos Briones en el ministerio del interior, y representantes de los partidos de la Unidad Popular.

El 4 de septiembre de 1973 se conmemoró el tercer aniversario de la victoria popular que eligió a Salvador Allende presidente de la República, con la concurrencia de una inmensa multitud de más de 700 mil personas. Era la expresión colectiva de un recuerdo nostálgico, que no se acompañó de ninguna decisión de resistir el próximo

[20] Suplemento de *Punto Final*. Santiago, agosto 14 de 1973. 74. *Ibiclem*. 8 de octubre de 1976. págs. 87 a 89.

golpe militar. "Un multitudinario desfile pasó frente a la tribuna, donde los dirigentes no pronunciaron ningún discurso, porque ya nada tenían que decir a las masas. Algunas obreras y obreros lloraban, otros marchaban cabizbajos, había pocos gritos y consignas. La clase obrera se sentía derrotada siete días antes del golpe".[21] Ante estas multitudes inermes y expectantes seguían las paralizaciones patronales y de los sectores medios, los allanamientos militares a las industrias, poblaciones y locales obreros, los atentados terroristas de la derecha, afectando vías férreas, líneas eléctricas de alta tensión, dejando fuera de servicio al Canal 7 de la Televisión Estatal y la estación repetidora de la red de microondas de ENTEL y sin comunicación a todo el sur del país. El sábado 8 de septiembre, el Cuerpo de Carabineros, en cumplimiento de una orden judicial, desalojó el canal 9, de la Universidad de Chile, ocupado por sus trabajadores. La Democracia Cristiana no aceptaba diálogo alguno, sino exigía la renuncia del presidente Allende.

La coartada histórica del golpismo

En tales circunstancias, la contrarrevolución aceleró aún más una definición de este enfrentamiento latente, que explotaba cada vez más seguido y amenazaba convertirse en una guerra civil. Pero no sólo el presidente de la República y la Unidad Popular se oponían a la guerra civil, buscando afanosamente una "salida política" a la crisis. Tampoco la oligarquía la deseaba por las pérdidas de vidas y de bienes que implica para ella, por lo que promovió —al revés de las fuerzas que apoyaban al gobierno— una "salida militar", esto es, el golpe de estado con la sola intervención de las Fuerzas Armadas. Esta forma resultaba más fácil y económica para ella, ya que dejaba entregada la lucha entre esas últimas, con un enorme podsr de fuego, y los trabajadores inermes, llegando a santificar este designio con la explicación piadosa de que la intervención de los militares economizaría vidas humanas, porque morirían sólo trabajadores, como sucedió, y en ningún caso burgueses.

El papel de la derecha quedaba circunscrito así a preparar el clima social y político que ofreciera una coartada histórica al golpe militar. Con este propósito, la oligarquía desencadenó, a través de un comando real, pero invisible, el nuevo paro nacional de los dueños de camiones y de otros gremios empresariales y profesionales y una escalada terrorista, que provocó algunas muertes de defensores del gobierno.

[21] Helio Prieto. *Los gorilas estaban entre nosotros,* Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1973, pág. 42.

Superados los últimos escrúpulos, la Democracia Cristiana, presidida por Patricio Aylwin, cerró todas las puertas para una "salida política", como la que buscaba incesantemente Salvador Allende, apoyado por el propio cardenal de Santiago Alfredo Silva Henriquez. Entonces se hizo funcionar maquiavélicamente los órganos de la institucionalidad, dominados por la derecha, para provocar la ruptura definitiva del Estado de derecho, tan acariciada en su propaganda mixtificadora.

La institucionalidad precipitó, en efecto, el golpe militar. Entre el 4 de marzo de 1973, fecha de las elecciones generales de parlamentarios, y el 11 de septiembre del mismo año, fecha del golpe militar que derrocó al gobierno, se desarrolló la más grosera farsa en torno a la defensa del Estado de derecho, protagonizada por los mismos que ejercieron la más cruenta dictadura durante 17 años, sentándose sobre la constitución y las leyes. Pasos de esta farsa son los siguientes:

1. La Pontificia Universidad Católica de Chile denuncia un supuesto "fraude" electoral del gobierno. Abrumada por el masivo apoyo recibido por éste en las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, la dirección de la conspiración en marcha efectuó una falsa investigación sobre ese supuesto fraude. Para esta mascarada, se utilizó a la Facultad de Derecho de aquella universidad, a cargo de Jaime del Valle, que después sería ministro de la dictadura. Los "investigadores" llegaron a la conclusión a priori de que había existido una alteración masiva del veredicto popular. Para dar verosimilitud a esta afirmación no aportaron ningún antecedente serio.

Naturalmente no hubo fraude alguno, ni siquiera la más remota posibilidad de realizarlo, por la sencilla razón de que la Dirección del Registro Electoral, que tiene a su cargo la formación de los registros electorales, su control y depuración, como asimismo el Tribunal Calificador de Elecciones, integrado por tres miembros del Poder Judicial y dos ex presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, elegidos por sorteo, estaban dominados por los partidos de oposición. Tan ridículo fue este informe que el propio director del Registro Electoral, Andrés Rillon, demócrata cristiano, desechó esta denuncia por carecer de todo fundamento. Pero el documento de la "investigación del fraude electoral" inventado por la Universidad Católica fue ampliamente difundido, cumpliendo así su objetivo de incitación al golpe militar.

2. La Corte Suprema denunció la "perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país", de acuerdo con el reparto de papeles en la conspiración, con ocasión de un suceso baladí, consistente en la demora por parte del intendente de la provincia de O'Higgins de autorizar la fuerza pública para el desalojo de un predio ocu-

pado por campesinos, ordenado por el 2º juzgado del crimen de Rancagua. La misma conducta habían utilizado gobiernos anteriores, particularmente el de Frei Montalva. No obstante, por oficio de 16 de mayo de 1973, que se hizo público, la Corte Suprema representó al presidente de la República que este minúsculo hecho era "una abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes u omisiones producen en el orden jurídico, una crisis del Estado de derecho y, una perentoria e inminente quiebra *de* la juridicidad del país."

Posteriormente, por oficio de 26 de junio de 1973, en respuesta al presidente de la República, la Corte Suprema puso al desnudo su tartufismo cuando expresa solemnemente:

> Este tribunal quiere enterar a V.E. de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la constitución y las leyes. Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal de la carta política, jamás será abrogada su independencia.

Sin embargo, la usurpación del poder político por los altos mandos de las Fuerzas Armadas no sólo constituyó un desconocimiento de su "independencia", sino la supresión de la constitución, de donde emanaba la existencia misma del poder judicial. Para estos "jueces" era más importante la ocupación de un predio por campesinos centenariamente explotados que la usurpación del gobierne por los conspiradores, a quienes esos magistrados pasaron a servir, como cómplices y encubridores de sus crímenes.

3. La Contraloría General de la República, por su parte, rechaza la promulgación parcial de la reforma constitucional sobre las áreas de la economia, adheriendo por oficio N° 20 782 de 2 de julio de 1973, a la tesis de la oposición golpista del Congreso Nacional, en el sentido de que éste no requería el quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio para insistir en el texto de la reforma constitucional aprobada, al considerar las observaciones o veto del presidente de la República. De acuerdo a este predicamento, sostiene que la promulgación parcial del proyecto de reforma por el decreto del Poder Ejecutivo, no concuerda con las normas de la carta fundamental, acusando de "ilegitimidad" al decreto promulgatorio.

El mismo Contralor General, Héctor Humeres, demócrata cristiano, que había tomado razón de decretos de promulgación parcial de proyectos de reforma constitucional durante el gobierno precedente de Frei Montalva, rechazaba éste del presi-

dente Allende, agregando un elemento más a la cadena de supuesta ilegitimidad jurídica con que se pretende presentar al gobierno popular. El "respetable jurista" señor Humeres, profesor de la Universidad de Chile, continuó prestando sus solícitos servicios como Contralor General después del golpe de estado, aceptando dócilmente la promulgación del fárrago de decretos-leyes de la junta militar de gobierno al margen de todo fundamento constitucional y legal hasta que fue destituido.

4. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Frei Montalva y Luis Pareto, respectivamente, "denunciaron" la grave crisis que afectaba al país. Éste fue el llamado más hipócrita y sibilino a la intervención de las Fuerzas Armadas. En su texto están las huellas digitales de Frei. Con el lenguaje apocalíptico que empleara éste en su reciente campaña electoral, ambos destacaron el derrumbe de la economía, hambre, angustia, odio, violencia e injurias a los bueyes apis de la Magistratura, la Contraloría y el Congreso Nacional, proceso de descomposición que se había agudizado "hasta el extremo límite" en esos días. Esta declaración se formula después del fracaso del intento de golpe militar del 29 de junio de 1973, hecho en que aparecen rechazando esta acción una vez dominada, para aclamar cobardemente el golpe victorioso del 11 de septiembre, sólo dos meses más tarde.

Eduardo Frei Montalva, el nuevo Jeremías, continúa su novela de terror, agregando temblorosamente que "los sectores democráticos que representamos (los golpistas) no están armados", que confían en las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y en su tradición de respeto a la constitución "nunca quebrantada"; ataca el "poder popular" por constituir un ejército paralelo, en el cual estarían interviniendo extranjeros, acusa al gobierno de estar repartiendo armas y de arrastrar al país a un enfrentamiento. Para poner término de inmediato a estos "riesgos" exige que el gobierno se decida a normalizar la vida del país. "Nos anima, dicen, sólo el propósito de defender la libertad, la justicia y la paz entre los chilenos". Del "ejército paralelo" que llegó a decirse estaba formado por 11 mil extranjeros, después del golpe no apareció ninguno ni muerto ni prisionero. Los trabajadores e intelectuales extranjeros que estaban en el país, ya sea como exiliados o atraídos por el proceso revolucionario, fueron perseguidos, desaparecidos y ejecutados en el marco de esa campaña xenofóbica previa al golpe.

5. El Colegio de Abogados declaró también el "quebrantamiento del Estado de derecho y del ordenamiento institucional que ha sido orgullo de los chilenos", en un comunicado formulado el 8 de agosto de 1973. Siguiendo la línea de conformación de un clima de justificación jurídica para el golpe militar, reitera acusaciones falsas

en contra del gobierno popular sobre conflictos de éste con otros poderes o magistraturas del Estado:

> *a)* Desconocimiento de las facultades del Congreso Nacional; la práctica de nombrar en otros cargos de igual importancia a ministros e intendentes destituidos por el Congreso; el propósito de alterar el régimen económico y social mediante decretos de insistencia; *b)* Privación al poder judicial de su potestad fundamental de imperio para hacer cumplir sus resoluciones; *c)* Desacatos frecuentes a los dictámenes de la Cortraloría General, e incremento ilegítimo de la llamada área social de la economía.

Los hechos denunciados no constituían naturalmente alteraciones al régimen jurídico existente, ya que todos ellos, con excepción del decreto de promulgación parcial de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, se cursaron legalmente en la Contraloría.

Con una incalificable falsedad y abierto cinismo, el Colegio de Abogados, manipulado por demócrata cristianos y derechistas, reclamó también el "restablecimiento de la vigencia de los derechos que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República", entre los cuales señaló el despojo ilegítimo de bienes privados, las restricciones de hecho a la facultad de trasladarse de un punto a otro de la República y de salir de su territorio; las amenazas y persecuciones administrativas de que son objeto los funcionarios del sector público o controlado por el Estado, los comerciantes establecidos, los transportistas, los mineros, profesionales, agricultores y otros grupos ciudadanos. Exige asimismo el reconocimiento del derecho de huelga, de asociación, la libertad de expresión y sanciones —no podía faltar— del "fraude electoral". Todas estas acusaciones eran falsas, pero después del golpe de Estado pasaron a ser válidas sin que el Colegio de Abogados las combatiera, incluso el llamado fraude electoral que la junta militar nunca tomó en cuenta.

6. La Cámara de Diputados, con mayoría opositora, adoptó por último, como culminación de la campaña conspirativa destinada a persuadir a la opinión pública, la decisión de destruir las últimas resistencias al golpe de estado en sectores de la oposición y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como ofrecer a los altos mandos y oficiales golpistas una coartada histórica, un acuerdo incitando al pronunciamiento militar, el 22 de agosto de 1973. En este acuerdo se resumen todas las acusaciones falsas formuladas en contra del gobierno popular por la contrarrevolución, desde sus distintos órganos de poder ya mencionados. Este documento, cuyos considerandos sirvieron posteriormente de fundamento al bando N°5 de la junta militar de gobierno, de 11 de septiembre del mismo año, por medio del cual se derro-

có al presidente de la República Salvador Allende, es un modelo de refinamiento golpista.

De acuerdo a dichos considerandos, los mismos ya señalados en la campaña conspirativa, la mayoría de centro-derecha de la Cámara de Diputados acordó:

Primero: Representar al señor Presidente de la República y a los señores ministros de estado, miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos quinto a duodécimo precedentes.

Segundo: Representarles, asimismo, que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la constitución y a las leyes que han prestado, y en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de las que son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

Tercero: Declara que si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la república. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la constitución política y grave deterioro de su prestigio institucional.

Cuarto: Transmitir este acuerdo al señor Presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes, y Tierras y Colonización. (Los cuatro ministros mencionados pertenecían a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros).

El presidente Allende respondió el golpe faccioso de inmediato.

En el día de anteayer, los diputados de la oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a quebrantar su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinados por mandato de la Carta Fundamental, la derecha sabe que pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República, es promover el golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas y respalda de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil.

Este acuerdo sedicioso gravitaba en una situación crítica que vivía el país, determinada por la derecha conspirativa con la paralización de los camioneros, apoyada por comerciantes y profesionales, con el terrorismo patronal y las amenazas escritas en los muros de convertir a Santiago en Jakarta (Indonesia), donde se había ejecutado una masacre colectiva.

La oligarquía llevó a su culminación, en esta forma, la gigantesca campaña sicológica y política orientada a destruir gradualmente la doctrina constitucionalista, puntualizada por el comandante en jefe del ejército General René Schneider, durante el agitado período electoral de 1970, y reafirmada por su sucesor el general Carlos Prats en el curso del gobierno popular, para defender la cohesión institucional y resistir las presiones golpistas de la centro-derecha sobre los mandos militares. Ambos generales, los más brillantes del siglo xx, fueron asesinados por la confabulación de los sectores golpistas civiles y militares, entre 1970 y 1974. Aprovechando la absoluta impunidad que le aseguraba el débil gobierno popular, la conspiración puso en tensión su poderoso aparato de comunicaciones, encabezado por *El Mercurio y La Segunda*, de propiedad de Agustín Edwards, pero financiado por la CÍA, como posteriormente fuera reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos, para demoler las frágiles defensas gubernativas en las Fuerzas Armadas.

A la acción conspirativa descrita se agregó entonces una campaña pública avalada por profesores de derecho, incluido Patricio Aylwin, dirigida a demostrar la legitimidad de la intervención militar en el caso que un gobierno sobrepase la constitución, como pretendían que lo hacía Allende. Esta campaña culminó con el acuerdo aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, y encontró un terreno fértil en las Fuerzas Armadas porque la formación ideológica de los oficiales era, en general, adversa a la izquierda. En los inicios del gobierno de Allende era notoria la desconfianza de la mayoría del cuerpo de oficiales hacia el programa de transición al socialismo, tanto por el temor de ver afectado su estatus social, como por la formación, con clara influencia imperialista, que habían recibido en las academias de Estados Unidos.

Desde la iniciación de la posguerra se fue introduciendo en forma cada vez más intensa en las Fuerzas Armadas chilenas la ideología capitalista, a través de las escuelas militares estadounidenses. Los oficiales recibían en cursos especiales la formación antimarxista derivada de la "guerra fría", la concepción de la "solidaridad continental" frente a la subversión "comunista" interna. Por eso, a partir del 4 de septiembre de 1970, la doctrina constitucionalista empezó a perder su eficacia, porque toda la sociedad entraba en ebullición, no pudiendo escapar a este proceso las propias Fuerzas Armadas. En suma, puede decirse que la doctrina Schneider fue res-

pecto a éstas lo que la democracia representativa respecto a la burguesía: funcionó en tanto no se alteró el orden capitalista establecido.

El gobierno de Salvador Allende fue abatido el 11 de septiembre de 1973 por las instituciones del Estado oligárquico-capitalista: Congreso Nacional, Poder Judicial, partidos de oposición y cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. No por la unanimidad de ellos, sino por los sectores golpistas de derecha que constituían mayoría en aquéllas. Allende respetó siempre, durante todo su gobierno, la democracia, conforme a su propósito de ejecutar su programa dentro de la Constitución y la ley. Con razón, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, pudo expresar refiriéndose al derrocamiento y muerte de Salvador Allende:

> Fue siempre consecuente consigo mismo y esa fue su virtud más grande. Pero el destino le reservó la infrecuente y trágica grandeza de morir defendiendo con el arma en la mano, los anacrónicos ornamentos de derecho burgués; defendiendo una Corte Suprema de justicia que lo había repudiado, pero que iba a legitimar a sus asesinos; defendiendo a un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo pero que luego debió inclinarse, demostrando alegría, ante la voluntad de los usurpadores; defendiendo la libertad de los partidos de oposición que habían vendido su alma al fascismo; defendiendo toda una herencia carcomida por los mitos de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un solo tiro.

Es cierto este resultado, pero su lucha grandiosa fue el primer intento de construir el socialismo por la vía constitucional y de integrar la democracia con el socialismo.

Después de arrasar a sangre y fuego la resistencia popular, la junta militar de gobierno destituyó al presidente de la República mediante el bando N° 5, a través del cual hizo gala de esos "anacrónicos ornamentos del derecho burgués" a que se refiriera el notable escritor latinoamericano. En efecto, en 12 considerandos, los militares facciosos, asesorados por los "juristas" de la derecha, fundamentaron su decisión, por sí y ante sí, de destituir al presidente constitucional, que según este bando, "aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante." Pero ellos habían tratado de impedir su acceso al gobierno en 1970. Todos estos considerandos son simples reproducciones de los falsos argumentos ya dados en la preparación del clima adecuado para el golpe por los partidos opositores desde el interior de las instituciones. Por eso, se pueden leer en ese pedazo de papel los falsos quebrantamientos de derechos y libertades, los cargos mentirosos de haberse colocado el gobierno al margen de la constitución quebrantando el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado; de haberse extralimitado en sus atribuciones

y, en general, todas las demás acusaciones no probadas relativas £. la supuesta "ruina de la economía", "anarquía", que "asfixian las libertades", y el infaltable "desquiciamiento moral y económico", lo cual ponía en peligro la seguridad interna y externa del país. Toda esta letanía de libertades, derechos y valores estuvieron vigentes durante el gobierno popular y, en cambio, fueron suprimidos por la dictadura militar, convirtiendo el país en un estercolero y un mar de crímenes contra la humanidad.

La contrarrevolución de 1973 no fue producto exclusivo del designio de Pinochet y de la acción de las Fuerzas Armadas sino correspondió más bien a un profundo trastorno social, que puso en tensión a todos los elementos en que descansa la sociedad de clases. De la misma manera que en el derrocamiento del presidente Balmaceda en 1891, todos los partidos tradicionales, representativos de los distintos segmentos de la oligarquía, favorecieron el golpe militar que abatió al gobierno popular. Su papel en este drama histórico consistió en preparar el clima social y político que ofreciera una coartada a la conspiración, por medio de la más grotesca farsa en torno a la defensa del Estado de derecho. Esta ruptura también se expresó en las Fuerzas Armadas, a pesar de su organización jerarquizada y del verticalismo de sus mandos. Ciertamente, la unidad del pueblo y los sectores más conscientes de las Fuerzas Armadas, que encarnara Grove en 1932, se expresó, cuarenta años después, en la resistencia en los cuarteles o en la renuncia de muchos leales hombres de armas a sumarse al golpe. Pinochet y sus secuaces redujeron esa resistencia a cañonazos o con viles persecuciones, como es el caso del propio general Carlos Prats, asesinado por la DINA en Buenos Aires, y del general Bachelet, muerto en prisión por los malos tratos.

Lecciones de una derrota

Cada día que transcurre desde el drama colectivo del 11 de septiembre de 1973 se acrecienta en la memoria colectiva la importancia de la experiencia revolucionaria encarnada por Salvador Allende, independientemente de su derrota. Como es sabido, las revoluciones victoriosas proyectan como legado instituciones más avanzadas a las sociedades que remecen en sus estructuras. En cambio, las revoluciones transitoriamente abatidas dejan enseñanzas que, si se saben aprovechar, aseguraran su triunfo en el futuro, las cuales deben extraerse mediante un análisis crítico y autocrítico.

No obstante, para que este análisis sea fecundo, no debe realizarse desde un punto de vista dogmático, como ha sucedido por lo general en los medios de izquierda,

basado sólo en consideraciones absolutas acerca de la idea de la revolución. Por el contrario, con una posición como ésta, es difícil entender el proceso y, por lo tanto, asimilar las críticas a su desarrollo y desenlace. Ciertamente, dicho resultado se obtiene con el deliberado olvido de que este proceso no se inscribe en ningún arquetipo de aquellos que inflaman de entusiasmo, como la Comuna de París y la Revolución de Octubre, sino que corresponde a una experiencia singular y concordante con nuestro desarrollo nacional.

La única manera de analizar situaciones como la que vivió Chile entre 1970 y 1973 para extraer conclusiones útiles es, por lo mismo, desde un punto de vista histórico, esto es, fondado en consideraciones objetivas concernientes a la experiencia misma y las circunstancias en las que se desarrolló y por las cuales fue condicionada. En este sentido y en el marco de un bien entendido policentrismo, es correcto hablar de la experiencia de la Unidad Popular como una *vía chilena* al socialismo, sin confundirla por cierto con la vía pacífica en los términos en que fue formulada por el Partido Comunista.

El proceso revolucionario de 1970 a 1973 no fue, en efecto, el resultado de la casualidad, sino que tuvo sus antecedentes en un período de germinación. Toda revolución, expresa Deutscher, opera en el medio ambiente que la ha producido y sobre los materiales que encuentra en ese medio ambiente. "Estamos construyendo un nuevo orden", gustaba decir Lenin, "con los ladrillos que el antiguo orden nos ha dejado..." El pasado se refracta a través de la obra innovadora de la revolución, no importa cuan audaces sean las innovaciones. *(La revolución inconclusa).* En este sentido, cabe decir que el movimiento popular chileno actuó de la única manera que podía hacerlo, de acuerdo a su propio desarrollo histórico.

Por lo mismo, corresponde también considerar a Salvador Allende, en cuanto intérprete y conductor de dicho movimiento, como producto de un doble proceso que lo condiciona: el escenario histórico y el proyecto nacional de su partido. Cualquier análisis que prescinda de esta realidad objetiva no ayuda a extraer lecciones para el futuro. La vida política de Allende se enmarca, en efecto, en un período de ascenso vertiginoso de la lucha de los trabajadores, comprendido entre 1931 y 1973, que ya ha sido examinado, aunque de manera suscinta, en páginas anteriores.

Esta es la crisis social y política más grande de Chile en el siglo xx al tiempo que la mayor derrota popular, lo que la constituye en fuente inagotable de enseñanzas. Por ahora sólo puedo referirme a dos órdenes de problemas, en torno a los cuales han girado principalmente las críticas en la izquierda. Sin embargo, es preciso recordar que las revoluciones son procesos colectivos impulsados por agudas luchas de clases, que comprometen la acción de millones de seres humanos tras la con-

quista del poder. El éxito de estos procesos no depende, por lo tanto, de la voluntad de un solo hombre, sino de la conciencia y decisión de las multitudes en condiciones objetivas y subjetivas favorables.

La primera de las cuestiones por dilucidar es la viabilidad de la vía legal hacia el socialismo a la luz de la experiencia vivida en el período en referencia. Al respecto, cabe advertir, de una parte, que la izquierda no eligió entre varias opciones el camino de las urnas, sino que ése era el único abierto y posible entonces. Desde su lugar de oposición al sistema, con una fuerza electoral relativa, una clase trabajadora sin preparación para la lucha armada, ante un ejército profesional adiestrado en las tácticas contrainsurgentes, la izquierda no podía hacer otra cosa que iniciar el proceso revolucionario conforme a la institucionalidad vigente. Por otra parte, tampoco había vivido la experiencia como para desecharla sin intentarla, con la sola enseñanza extraída de la lucha revolucionaria en otras latitudes.

No obstante, los hechos —ya no los principios teóricos— comprobaron que los instrumentos institucionales y el ordenamiento jurídico burgueses no permiten dicho tránsito por la resistencia de la clase dominante. Ellos tienen por objeto la defensa, por todos los medios, del sistema capitalista. El gobierno popular, por consiguiente, al someter el desarrollo de su programa a dicha legalidad, se autolimitó y con ello selló su propia sentencia de muerte. Eduardo Novoa, lo demuestra en su libro *¿Vía legal hacia el socialismo?,* publicado en 1978. A los que todavía sueñan con una revolución desarmada, conviene recordarles que, a lo menos, la contrarrevolución nunca es pacífica ni legal. Su modelo es la dictadura de Pinochet y su banda.

La segunda de las cuestiones por despejar es la validez de las alternativas críticas que desde posiciones de derecha y de izquierda se formulan a la conducción del proceso. La primera reduce las causas de la derrota a una fundamental: la falta de una alianza centrista con la Democracia Cristiana, que habría podido consolidar al gobierno popular. La segunda resume también estas causas en una principal: la carencia de una política militar para neutralizar la acción conspirativa de las Fuerzas Armadas y, llegado el caso, enfrentarla con una fuerza armada popular. Los hechos históricos han dado respuesta a ambas eventualidades de manera categórica.

La alianza de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana fue imposible, por encima de los buenos deseos, porque los objetivos estratégicos de una y de otra eran antagónicos. Un compromiso táctico habría sido deseable, pero la directiva de esta última no sólo se opuso a ella, sino que impulsó la desestabilización del gobierno y el golpe final con todas sus consecuencias. Para viabilizar esa alianza habría sido necesario que la Unidad Popular paralizara el proceso de cambios comprendidos en su programa, renunciando a sus objetivos socialistas antes de resolver la cuestión

del poder, es decir, la rendición incondicional. El resultado, de seguro, había sido el mismo: la dictadura burguesa.

La izquierda, a su vez, no tenía comprensión cabal del problema militar, pasando a constituir hoy una de sus principales preocupaciones. Ahora, parece claro que si bien es posible acceder al gobierno a través de las urnas, la defensa de las posiciones de poder conquistadas y el avance hacia el socialismo exigirán siempre la utilización de los mismos medios que emplea la contrarrevolución. Ello supone preparar a las organizaciones políticas y al conjunto de las masas para sustituir, en un momento determinado, unas formas por otras. Tarea por demás difícil como quiera que se trata de enfrentar a un ejército profesional que, a medida que avanza el proceso revolucionario, se convierte en la última y más decisiva línea de resistencia de la oligarquía, aliada con el imperialismo.

En otro orden de ideas, cabe hacer presente que está permitido a quien analiza estos procesos oponer hipótesis al destino o formular preguntas a la historia. Actualmente, se sabe lo que realmente ocurrió en Chile en ese tiempo y no lo que pudo haber sucedido y no sucedió. En este sentido, se ha planteado por algunos políticos, como el senador Ricardo Núñez, que el golpe se hizo inevitable por el extremismo de izquierda, practicado por los marxistas-leninistas de entonces, tanto del Partido Socialista como del MAPU, hoy "renovados" y convertidos en revolucionarios fatigados. Pero olvida o no dice nada sobre la intervención culpable y criminal del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el Partido Comunista, de acuerdo a la filosofía del *Caballo de Troya*, responsabiliza al MIR por sus acciones irrealistas, a sabiendas que este pequeño partido no tuvo ninguna influencia en el proceso. Altamirano reveló alguna vez que él con Luis Corvalán y Volodia Teitelboim visitaron al general Prats en su casa, a sugerencia del presidente Allende, después de su renuncia al cargo de comandante en jefe del ejército. Entonces, ante una observación de Corvalán en orden a reprimir al MIR, Prats le contestó que las Fuerzas Armadas no tenían al MIR como "enemigo" principal, sino al Partido Comunista. Este hecho era cierto por la Guerra Fría.

Los historiadores, desde hace mucho tiempo, emplean los elementos condicionales contrafácticos, Jaurés sobre la revolución francesa y Hobsbawn sobre la revolución rusa. En el caso de Chile, cabe preguntarse, en este sentido, que habría pasado si el presidente Allende hubiera aceptado todas las exigencias de la Democracia Cristiana para una alianza de centro izquierda, o si hubiera renunciado como se lo pedían sus opositores, o hubiera solicitado un permiso constitucional para abandonar el gobierno y el país como se lo sugirió el general Prats, o si hubiera convocado un plebiscito sobre término o continuación de su mandato constitucional como pensó hacerlo en 1973, ganando o perdiendo. Quizá en todas estas alternativas,

el resultado final habría sido el mismo, porque la conspiración venía de Estados Unidos, desde el 4 de septiembre de 1970, desde antes que Allende empezara siquiera su gobierno. El Presidente Nixon impulsó y financió la conspiración y el golpe de Estado, definiendo las condiciones de funcionamiento de la dictadura. Por lo tanto, el golpe era efectivamente inevitable, no por las falsas razones señaladas por Núñez, sino porque el imperialismo estadounidense quería el retorno de Chile a su patio trasero, subordinando su economía y su política.

El origen y el financiamiento del golpe y la dictadura, mediante la corrupción, pertenecen al gobierno de Estados Unidos, de la más grande potencia mundial, la que desencadenó una tragedia en una de las pequeñas naciones de; América Latina. Es cierto que no invadió a Chile, como lo hizo antes y después en diversos países del mundo, sino que empleó métodos encubiertos. Por eso, el agregado naval de la embajada de Estados Unidos en Santiago, Patrick Ryan, al informar al Pentágono del golpe del 11 de septiembre de 1973, afirmó: "Nuestro día D fue casi perfecto". Esto revela la dependencia de Chile de la potencia del norte, la coirupción de los altos mandos militares, de la centro-derecha política y del empresariado que, en conjunto, devolvieron a nuestro país a la dependencia del centro mundial del imperialismo. En este centro se desarrollaron los equipos de espionaje y de inteligencia, con personeros propios y de los países vasallos. De acuerdo a esta concepción, realizaron acciones encubiertas, financiadas con aportes de enormes sumas de dinero, para impedir el triunfo de Allende en sus diversas campañas presidenciales, su proclamación en el congreso pleno en 1970 y, por último, su derrocamisnto en 1973.

Todo ello fue comprobado por la Comisión Church del Senado de Estados Unidos, por la desclasificación de documentos ordenada por el presidente Clinton a las agencias de seguridad, para aclarar los atentados a los derechos humanos y los actos de terrorismo ocurridos en Chile entre los años sesenta y ocho y noventa, aunque se tacharon muchas informaciones. No obstante, la CÍA, después de un cuarto de siglo del golpe militar, no aceptó abrir sus archivos secretos, con excepción de, más o menos, 300 documentos, que en gran parte ya había conocido la Comisión Church. Ante esta realidad, la Comisión de Inteligencia del Congreso investigó las acciones de la CÍA en Chile, resumiendo sus conclusiones en el Informe Hincley, quedando en descubierto más de 17 mil documentos, que los socialistas "renovados" pueden revisar en internet.

La Comisión Church reveló que en los años sesenta, la CÍA entregó, por cuenta del gobierno de Estados Unidos, más de 3 millones de dólares para la campaña presidencial de Eduardo Freí Montalva e impedir la victoria de Salvador Allende, con cuyos fondos se financió una propaganda de gran magnitud, con terrorismo inte-

lectual, "ayuda" que se repitió en las campañas parlamentarias de 1965 y 1969. Una colaboración menor se proporcionó a los demás partidos de centro-derecha. Desde entonces, la CÍA organizó una red de colaboradores en este país, con los que trabajó en los años posteriores en sus acciones encubiertas. Desde 1970, la CÍA realizó operaciones de sabotaje contra la candidatura presidencial de Allende, con un costo de aproximadamente 9 millones de dólares, que aprobaba el Comité 40, organismo de facto, que funcionó durante el gobierno de Richard Nixon, integrado por altos funcionarios civiles y militares y presidido por Henry Kissinger, Asistente de Seguridad Nacional. Este Comité tenía como función aprobar y ejercer control político sobre las acciones encubiertas.

Reconocidas por el presidente Ford en 1974 y condenadas por el Secretario de Estado Colín Powell en 2003, estas acciones encubiertas significaron diversos gastos, como compra de una radioemisora, subsidios para el diario *El Mercurio*, a las Asociaciones de Empresarios, a los partidos de centro-derecha y pagos a noticiarios, encuestas, comentaristas y periodistas, así como a actos de violencia. La CÍA hizo aportes por su cuenta, en combinación con la ITT, a la candidatura presidencial de Jorge Alessandri por 250 mil dólares y al Partido Nacional por cien mil dólares.

Victorioso Allende en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, concurrió a Washington Agustín Edwards, dueño de *El Mercurio* y de un poderoso grupo de empresas, a entrevistarse con el presidente Nixon, para pedirle que interviniera en Chile para impedir la proclamación de Allende en el congreso pleno. Esta audiencia se realizó el 15 de septiembre de 1970. Ese mismo día, Nixon se reunió con Kissinger, el fiscal Mitchell y el Director de la CÍA Richard Helms para programar la intervención en Chile, acordándose un plan de acción en 48 horas, poniendo a disposición 10 millones de dólares y más si fuere necesario, haciendo "aullar" la economía chilena. Se trataba de preparar un golpe de Estado inmediato, que partía con la designación de Alessandri en el congreso pleno, para lo cual se pretendía comprar parlamentarios. Este complot comprendía el secuestro del comandante en jefe del ejército Rene Schneider, lo que precipitaría la renuncia de Frei, quien sería candidato en una nueva elección presidencial. Alessandri anunció, en efecto, que aceptaba su designación, pero renunciaría y convocaría a una nueva elección.

En la conspiración estaban comprometidos los generales Camilo Valenzuela, del ejército, el almirante Hugo Tirado, el general de la Fuerza Aérea Joaquín Garcés, el general director de Carabineros Vicente Huerta y los generales en retiro Roberto Viaux y Alfredo Canales. El coronel norteamericano Paul Wimer entregó a Viaux 20 mil dólares el 13 de octubre de 1970 y 30 mil el 20 del mismo mes y, además, convino tomarle un seguro de vida por 250 mil dólares. Al general Valenzuela le en-

tregó 50 mil dólares, al almirante Tirado también la misma suma. La CÍA envió por la valija diplomática subametralladoras y municiones, que se entregaron a Viaux, que no se usaron en el asesinato de Schneider. La fuerza de apoyo estaba formada por experimentados agentes estadounidenses. Este complot significó el asesinato del comandante en jefe del ejército Rene Schneider. Un miembro del grupo de Viaux obtuvo de la CÍA 35 mil dólares como ayuda "humanitaria", después del crimen. Este fue el *Track One.*

Instalado el gobierno popular de Salvador Allende, Nixon tomó la decisión de hacer todo lo posible para derrocarlo, lo que se reveló en un documento secreto, suscrito por el Asistente de Seguridad Nacional, Henry Kissinger sobre Política hacia Chile, de 9 de noviembre de 1970. En un resumen posterior, de 17 de noviembre de 1970, para Nixon, el mismo Kissinger, definió cinco puntos de la nueva conspiración: *1)* Dividir y debilitar a la coalición de Allende; *2)* Mantener y ampliar contactos con militares chilenos; *3)* Ofrecer apoyo a grupos y partidos opositores; *4)* Ayudar a ciertos periódicos y utilizar otros medios de comunicación en Chile que puedan criticar al gobierno popular y *5)* Promover en medios externos la subversión del proceso democrático dirigido por Allende y denunciar una supuesta intervención de Cuba y de la Unión Soviética. De ahí recomenzaron las acciones encubiertas hasta su derrocamiento el 11 de septiembre de 1973. Éste fue el *Track Two.*

La compra de partidos de centro-derecha se hacía por intermedio de cinco cuentas que tenía a su nombre en el extranjero el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Orlando Sáenz, uno de los conspiradores, con dólares provenientes del Comité 40, la CÍA y las empresas trasnacionales. Desde ellas, según Sáenz, se repartía la torta entre el Partido Nacional, a través de Pedro Ibáñez. el Partido Demócrata Cristiano, a través de Felipe Amunátegui, el grupo Patria y Libertad, a través de Pablo Rodríguez; el Gremialismo, a través de Jaime Guzmán y la Federación de Dueños de Camiones, a través de León Villarín. Entre los aportes a la conspiración, la Comisión Church estableció que el Comité 40 entregó 100 mil dólares a organizaciones empresariales en la primera huelga de camioneros en octubre de 1972, suma que aumentó posteriormente la CÍA, la que entregó también más de uno y medio millones de dólares al diario *El Mercurio* y su cadena en el país;. Estos dólares se vendían al sector rico a precio del mercado negro.

En suma, la historia del golpe y la dictadura se escribió en Estados Unidos. El capítulo final se concibió después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que la Unidad Popular y Allende obtuvieron 7% más que en 1970, alcanzando el 44%. La conclusión de la Casa Blanca fue que había que dar el golpe definitivo, con una represión brutal, para consolidar una dictadura militar de extre-

ma derecha, refundar el capitalismo, más salvaje que antes, y hacer imposible un nuevo proyecto socialista. Esa concepción responde la pregunta ingenua tantas veces formulada: ¿Por qué se cometió la cantidad inconmensurables de crímenes contra la humanidad? Los militares hicieron el trabajo sucio y los Chicago Boys ejecutaron el proyecto económico, ambos sectores formados en las escuelas de Estados Unidos. El gobierno de Nixon, por fin, iba a recuperar su inversión en el golpismo, obteniendo desde luego más de 1 300 millones de dólares como indemnización por las empresas expropiadas, conforme a una reforma constitucional, de la gran minería del cobre, indemnización a que no tenía derecho alguno, concurriendo además en el "remate" de las empresas del área social. Para eso se dio el golpe y se instauró la dictadura. Los antecedentes completos de esta traición a Chile se encuentran, entre otros libros, en *Allende. Cómo la Casa Blanca provocó su muerte,* de Patricia Verdugo, cuya lectura recomiendo al senador Núñez.

Este proceso de *restauración* se ha prolongado a través de los gobiernos de la Concentración de Partidos por la Democracia, que se han convertido en administradores de la herencia de la dictadura, con excepción de la brutal represión política. ¿Cuánto más durará esta restauración? No lo sabemos. Pero después de la revolución francesa, este proceso se prolongó por más de treinta años, desde el ascenso de Napoleón a la caída de Luis XVIII. En efecto, cuando todo parecía tranquilo, bajo el amparo de la Santa Alianza, se desencadenaron los procesos revolucionarios de 1830 y 1848, que se prolongaron hasta la Comuna de París, en 1870 y las dos más grandes revoluciones en Rusia, en 1917, y en China, en 1949. Por eso, es posible pensar que todo no está perdido, ni con la caída del comunismo soviético, ni con la derrota de la izquierda chilena, porque las revoluciones no son sólo sucesos del pasado, como dijo Enrique Correa, sino procesos cíclicos, que se repiten en la historia, orientando el progreso universal.

Terrorismo de Estado

La estrategia del terror

Esta estrategia se basa en la doctrina de contrainsurgencia o de "seguridad nacional", aplicada en Chile de manera inflexible por las Fuerzas Armadas. Ella concibe la lucha de clases como una guerra total, que supone, por lo mismo, el empleo de métodos militares con los cuales no sólo se persigue vencer sino exterminar al "enemigo interno". Considerando el proceso revolucionario como una subversión determinada por la infiltración de un agente extraño a la sociedad dominada por la oligarquía, dicha doctrina justifica los crímenes contra la humanidad. Una vez cumplida su labor plena de "limpieza", la contrainsurgencia, en cuanto instrumento represivo, tiende a su institucionalización. Esta doctrina es producto de la Guerra Fría y fue aplicada en América Latina por el imperialismo estadounidense y las burguesías internas, mediante dictaduras militares.

De acuerdo a este mecanismo sociológico, los sectores más reaccionarios consideran que la revolución tiene que ser combatida y aniquilada. No debe olvidarse al respecto la insistencia con que los generales de derecha se referían, desde el golpe de Estado, a su voluntad implacable de extirpar el "cáncer" del marxismo. Para legitimar su violencia represiva, la contrarrevolución deforma la realidad social, convirtiendo a sus adversarios en subhombres o bestias.

En el caso chileno, nada expresa de manera más elocuente el desprecio de la oligarquía por la vida de la clase trabajadora que algunos encabezados de la llamada prensa "libre" para tratar los crímenes de la dictadura. El vespertino La Segunda, de la cadena de *El Mercurio*, decía en grandes titulares, manipulando "información" sobre la falsa muerte en el extranjero de 119 detenidos: "Exterminan como ratas a miristas". De nuevo, se utiliza el bestiario, es decir, la conversión de seres humanos en animales repugnantes. Este episodio no sucede sólo al comienzo de la dictadura,

cuando según algunos de sus defensores se cometieron muchos "excesos", sino en julio de 1975, y a sabiendas de que esos seres humanos, la mayoría jóvenes y algunos incluso adolescentes, habían sido arrestados por cuerpos policiales de la dictadura, secuestrados y no reconocidos como tales, porque los habían asesinado. El hijo mayor del dictador Pinochet, supuestamente el más inteligente de la familia, calificó también de "bestias" a las víctimas ultimadas por su padre. A su vez, el criminal sobreseído por "demencia" los trató de bandidos y Toribio, el "héroe" de la Armada, los consideró humanoides en medio de su dipsomanía.

Es la misma tendencia simbolista que se presentó durante la conquista del Nuevo Mundo. Algunos teólogos del siglo xvi, al igual que naturalisias y filósofos del siglo xvín sólo vieron en los salvajes americanos, objetos de dominio y explotación. Juan Ginés de Sepúlveda, entre los primeros, y Hume, entre los segundos, reformularon la teoría aristotélica de la esclavitud natural, negándose a reconocer como semejantes a los hombres "degradados" que poblaron originariamente este continente. Tales absurdas teorías colonialistas servirán, no obsitante, de antecedente al sistema de valores del imperialismo. Para los neocolonialistas, que explotan los recursos naturales y la mano de obra en América Latina, los trabajadores son, en efecto, esos mismos salvajes de hace cinco siglos, a los cuales no se les reconoce similares necesidades y mucho menos iguales derechos que a sus explotadores. Cómplices de estas políticas de dominación son las burguesías internas, partícipes y usufructuarias de la transnacionalización de la economía de América Latina.

En este marco filosófico, la dictadura asumió la totalidad del poder, actuando a través de dos ramas centrales, donde se tomaron las decisiones. La primera es la militar, que funcionaba de acuerdo con la estructura de este aparato del Estado, compuesta de un Consejo de Seguridad Nacional y de los servicios de inteligencia, en los cuales predominaban los militares. La segunda es la rama económica, constituida por los ministerios técnico-económicos y las empresas estatales, órganos que fueron atendidos tanto por civiles como por militares en su carácter de tecnócratas, que en todo caso representaban políticamente al gran capital.

El Estado burgués se revistió así de las formas más represivas imaginables, poniendo término a todas las expresiones de la democracia representativa existentes en el país hasta el 11 de septiembre de 1973. En este sentido, suprimió las libertades públicas y los derechos humanos, clausuró el Parlamento, asumió ella misma las atribuciones constituyente y legislativa, supeditó a su autoridad a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República e intervino a las universidades, cerrando escuelas y expulsando estudiantes y profesores. Asimismo, ilegalizó

a los partidos populares, incautándose de sus bienes y medios de comunicación social, disolvió a la Central Única de Trabajadores y a las federaciones obreras y campesinas, suspendiendo de hecho el funcionamiento de los sindicatos. Para eso contó con el apoyo de todos los medios de comunicación social (prensa, radio y televisión).

Desde el golpe y hasta el 15 de marzo de 1990, la dictadura mantuvo el terrorismo de Estado, con distintas modalidades, según las diversas fases que pueden distinguirse en ella. En los primeros tres años predominó la política de exterminio o aniquilamiento de los cuadros del movimiento popular, así como la práctica de la desaparición de los mismos, para evolucionar más tarde hacia una represión más selectiva, continuando los asesinatos en supuestos "enfrentamientos", y toda clase de atropellos, tales como arrestos masivos e intimidación, hasta el punto que, después de más de 16 años, no cesaron los atentados sistemáticos a los derechos humanos.

La primera de estas etapas (1973-1974) se inauguró con el golpe militar y tuvo como característica central su masividad, toda vez que la represión se dirigió al conjunto de las direcciones de la izquierda, así como a los simpatizantes de ella y del gobierno de la Unidad Popular. Estas acciones criminales se inspiraron, sobre todo, en el espíritu de venganza de la burguesía, lo que condicionó la colaboración de sectores civiles y la ausencia de procesos legales, pero asumió también un designio preventivo que perseguía la desarticulación del movimiento popular. Afirma una investigación: "Durante los primeros diecinueve meses del régimen, miles de chilenos fueron ejecutados y una de cada diez familias se vio afectada por arresto, detención o exilio". Esta situación se explica por el carácter masivo de la represión al movimiento popular.

Durante esta fase, la represión criminal se realizó por la acción directa de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y, en seguida, por la acción de la DINA, que generó una red operativa a través de todo el país. Este organismo inició sus "actividades" desde el mismo día del golpe militar, en la Escuela Militar, y aun antes, en el regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, hasta convertirse en la comisión DINA y ésta en la DINA propiamente tal, en 1974. Por decreto ley N° 5, de 12 de septiembre de 1973, se estableció que el estado de sitio se entiende como "estado en tiempo de guerra" y por otras disposiciones "legales" se constituyeron consejos de guerra. Estos instrumentos de exterminio de militantes de la izquierda funcionaron en las principales ciudades del país, desde Arica a Punta Arenas, con absoluta irregularidad, y sin las debidas garantías procesales. En estos casos, cabe señalar que las Fuerzas Armadas actuaron con crueldad y sin el debido proceso, no realizando juicios legítimos sino cobardes homicidios.

La segunda etapa (1974-1977) se inició con la creación oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), por decreto N° 521, de 14 de junio de 1974, la que pasó a asumir las funciones represivas como tareas "técnicas" y especiales, bajo la conducción de un coronel, después ascendido a general, Manuel Contreras, y el control personal del dictador Pinochet. Esta maquinaria de la muerte se sobrepuso a los aparatos de "inteligencia" de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas en las tareas represivas, aunque todas éstas continuaron actuando con absoluta impunidad, en la ejecución de asesinatos y secuestros masivos que, junto con eliminar a dirigentes y militantes de la izquierda, amedrentaron a la población. Sus miembros fueron reclutados en las mismas Fuerzas Armadas y policiales, así como en la hez de la sociedad, la que proviene no sólo de la clase más baja sino también de la clase alta. Colaboraron en esta acción represiva sistemática el Cuerpo de Carabineros y el Servicio de Investigaciones.

Desde fines de 1975 y hasta fines de 1976 intervino el Comando Conjunto, responsable de numerosos crímenes y desapariciones forzadas de detenidos. Esta organización estuvo integrada por agentes de la DINA, del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), del Servicio de Inteligencia de Carabineros. Desde 1974 la DINA realizó operaciones, en países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa, estableciéndose la coordinación de los organismos secretos de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Esta etapa se caracterizó por los asesinatos con desaparición de los restos de los detenidos y con los atentados en el exterior, como los homicidios **del** general Prats y su esposa, ea Argentina, de Orlando Letelier y su secretaria, en Estados Unidos, y el intento de homicidio de Bernardo Leighton y su esposa en Italia.

La tercera etapa (1977-1990) se abrió a partir de la sustitución de la DINA por la CNI, Central Nacional de Informaciones, creada por decreto ley K° 1878, de 13 de agosto de 1977, manteniendo muchos mandos y personal adiestrado de la DINA. La CNI, si bien se presentó como organismo sólo de "inteligencia" asumió en los hechos las mismas funciones de su antecesora. No obstante, cesaron en general los secuestros sistemáticos con desaparición de las víctimas. Esta nueva fase se singularizó por la exhibición de una cobertura "legal" que siempre fue sobrepasada, por medio de la cual se trató de mostrar la represión, ya no como actos de venganza o de simple exterminio, sino como reacciones contra las actividades de la resistencia popular. La represión fue, entonces, más selectiva, y buscó el amedrentamiento, si bien tampoco renunció a las ejecuciones, enmascaradas ahora como enfrentamientos. Su dirección estuvo a cargo sucesivamente de los generales Odlanier Mena, Humberto Gordon y otros.

En 1980, tras la muerte del teniente coronel de ejército Roger Vergara, jefe de inteligencia de la CNI, por un comando de la resistencia, se constituyó el denominado Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA) con miembros de la brigada de homicidios y de inteligencia policial de Investigaciones, del OS-7 de Carabineros y de la Brigada Metropolitana de la CNI. Este comando ejecutó varios asesinatos. En 1983 se formó la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), en la que participaron miembros del comando conjunto, que realizó numerosos secuestros, torturas y asesinatos.

En suma, en el curso de más de 16 años de dictadura, para ser sometida a la superexplotación, la clase trabajadora sufrió todo tipo de atentados, tales como genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, arrestos arbitrarios y exilio externo e interno (relegación).

Dimensiones del genocidio

La dictadura realizó en Chile un genocidio del cual la opinión pública no tomó conciencia plena por la desinformación sistemática mantenida por la institucionalidad y los medios de comunicación social, la supuesta "prensa libre". El peso moral de estos crímenes, por otra parte, condujo a muchos a negar esta sombría realidad, como en el caso del nazismo alemán, a pesar de la condena permanente de todos los organismos internacionales que se ocupan de los derechos humanos. El golpe de Estado de 1973 fue sin duda el más cruel y sangriento en la historia de Chile, ya que en el primer año fueron victimadas miles de personas en consideración a sus ideas políticas. ¡Macabro record de la oligarquía chilena!

Ante un pueblo aterrorizado, los escuadrones de la muerte surgidos de las propias Fuerzas Armadas y policiales no se dieron pausa en la faena de aniquilar dirigentes y militantes del movimiento popular. Algunos de estos asesinatos se revistieron de falsas formalidades, como sentencias dictadas por "consejos de guerra", con aplicación retroactiva de normas "legales" dictadas por ellos mismos después del golpe, si bien en la mayoría de los casos se simuló la aplicación de la ley de fuga, o se les ejecutó a sangre fría después de bárbaras torturas. Como en la época de Portales, en la tercera década del siglo xix, aquellos "consejos" aplicaron justicia de tiempo de guerra en que las penas se aumentaban y cuyos fallos no estaban sujetos a recurso alguno. Ellas fueron manifestaciones de cobardía y deshonor de los mandos que las dictaron y ejecutaron.

Todos estos sombríos actos delictivos constituyeron crímenes en contra de la humanidad, toda vez que se mató a personas inermes, prisioneros políticos carentes de

armas, sin mediar enfrentamiento alguno. Durante esta matanza maisiva, algunos cadáveres fueron entregados a sus familiares, pero la mayoría desapareció, sin encontrarse aun hasta hoy rastros de ejecutados por órdenes militares, tales como los de La Serena y Calama, cuyos restos mortales nunca se pusieron a disposición de sus deudos. Estos sólo fueron encontrados después de más de veinte años. Los cadáveres, al parecer incinerados, se arrojaron al mar o sepultaron en fosas comunes clandestinas, como las descubiertas en Lonquén y Yumbel, así como las del patio 29 del cementerio general de Santiago, que la dictadura no permitió investigar. El baño total de sangre, por estas circunstancias, no pudo cuantificarse nunca por el temor de muchos de los familiares a denunciar los crímenes cometidos durante la dictadura.

De esta manera, mediante el exterminio de miles de chilenos, la dictadura aplastó el descontento social y la resistencia popular. Para eso, utilizó todcs los medios, como la delación, el toque de queda, los arrestos masivos, los campos de concentración, el exilio, los juicios militares y las ejecuciones. Esta política represiva conllevó el desarrollo sin precedentes de los órganos policiales y de "inteligencia", así como la expulsión del territorio nacional de millares de seres humanos acosados por la persecución y el hambre. Emulando al dictador ecuatoriano del siglo xix, Gabriel García Moreno, llamado por su espíritu religioso el "santo del patíbulo", Pinochet dividió al pueblo chileno en tres partes, dedicando la primera a la muerte, la segunda al destierro y la última, a la servidumbre. Así lo corrobora C.G. Brown cuando afirma: "A los tres años del régimen, las protestas públicas eran raras y la mayoría de sus principales adversarios políticos estaban muertos, exiliados o desaparecidos".[1] Esta fue la "guerra" que Pinochet y la derecha, civil y militar, se ufanan todavía *ds* haber ganado.

En la primera fase de represión, la dictadura no se preocupó de esconder estos crímenes, toda vez que la prensa, enteramente adicta, publicaba listas de ejecutados y asesinados de acuerdo con la "ley de fuga", tratando de justificar el terror con supuestos y falsos enfrentamientos, depósitos de armas en poder de partidarios del gobierno derrocado. Se dijo entonces y se repitió después, hasta el año 2000 como lo afirmó la anciana ministra de la Corte de Apelaciones Raquel Campusano, al momento de jubilar, que las fuerzas armadas golpistas habían afrontado a once mil extranjeros armados. Pero ninguno de estos "insurgentes" fueron muertos ni tomados como prisioneros. Esta es una parte de la "historia oficial".

[1] C.G. Brown, "...10 años de atropellos a los Derechos Humanos", informe de America's Watch Committee, México, Casa de Chile, 1984, pág. 7.

En los primeros meses, numerosos presos políticos murieron mientras estaban detenidos, por tortura, tratos crueles y dudosos suicidios. La ferocidad inicial traumatizó al país, en medio de una matanza continua, que se prolongó hacia el exilio como sucediera con el general Carlos Prats y su esposa, y Orlando Letelier y su secretaria, que la dictadura mandó a matar.

Más tarde aquélla utilizó otros medios de control político, sin abandonar por eso el recurso terrorista de los asesinatos políticos, provocando nuevas muertes a causa del abuso del poder. Desde el año 1980, estas muertes se enmascararon con supuestas "confrontaciones", abuso de la fuerza (en las protestas nacionales), asesinatos políticos (como el de Tucapel Jiménez) y utilización de violencia innecesaria. Según los familiares de las víctimas "los que mueren en estos incidentes —presentados como confrontaciones— frecuentemente son detenidos al principio, permanecen incomunicados y luego, ya muertos o cerca de la muerte, son trasladados a una casa o a un vehículo y entonces ocurre el tiroteo". El tiroteo era una de las entretenciones de Pinochet y sus verdugos militares y civiles.

El poder judicial colaboró en asegurar la impunidad de estos crímenes, ya que los tribunales se limitaron, en los casos de homicidios políticos, a realizar un *show* en el que quedaran a la vista las apariencias de investigación judicial. Contribuyeron a esta impunidad tanto la pasividad de los tribunales como la intimidación a los testigos, cuando éstos existían. La responsabilidad de estos crímenes corresponde a miembros de la DINA-CNI, de la Dirección General de Investigaciones, del Cuerpo de Carabineros y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Todos estos asesinos por encargo andan sueltos, porque en su mayoría nunca fueron procesados con seriedad ni mucho menos condenados por la justicia de clase prevaleciente en el país. En muchos casos ni siquiera fueron interrogados, y algunos jueces conviven con ellos en la "vida social".

Durante la dictadura, aparte de los asesinatos individuales, las Fuerzas Armadas y Carabineros, a través de sus aparatos represivos, realizaron numerosas masacres colectivas, entre las cuales destacan por su crueldad algunas, como la de Chihuio, en la provincia de Valdivia. El regimiento de caballería N° 2 de cazadores, al mando del general Santiago Sinclair, hombre de confianza del dictador, ordenó que una caravana militar avanzara hacia Futrono y otros lugares como Chabanco, Currifle, Llifén y Chihuio, a cuyo paso ejecutó a numerosos campesinos, particularmente en el complejo maderero Panguipulli. A continuación otro grupo del mismo regimiento recogió los cadáveres para sepultarlos clandestinamente. Colaboró en esta faena uno de los dueños del fundo Chihuio en cuya casa fueron asesinados algunos de los campesinos. En esta oportunidad no se hizo funcionar los Consejos de Guerra, ni

tampoco las víctimas fueron fusiladas sino degolladas, con las manos y los testículos cercenados, según testigos que pudieron ver sus restos. Años después, a fines de 1978 o comienzos de 1979, agentes civiles retiraron los restos y los llevaron a un lugar desconocido. Esta fue la "batalla" del general Sinclair, quien ascendió hasta vicecomandante en jefe del Ejército y senador designado.

La misma suerte tuvieron once campesinos de Isla de Maipo, detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros, al mando del capitán Lautaro Castro, sin orden judicial, con la cooperación del dueño del fundo Naguayán, a los que se agregaron cuatro jóvenes arrestados en la plaza de Talagante. Todos fueron asesinados sin que se conociera el lugar de sepultación de sus restos hasta 1978, gracias a que un informante reveló que se habían depositado en los hornos de cal de Lonquén, próximo a Talagante. El ministro Adolfo Bañados, a cargo de la investigación, se declaró incompetente, pasando el proceso a la justicia militar, la que aplicó la "ley" de aministía. Lautaro Castro ascendió en el Cuerpo de Carabineros. Después de un año de encontrarse los restos de aquellas víctimas, fueron entregados a sus familiares, salvo el cuerpo de Sergio Maureira, que fue sepultado en una fosa común. Entre septiembre y octubre de 1973 fueron secuestrados y asesinados 26 campesinos en la localidad de Paine, cuyos cadáveres se hicieron desaparecer. Según testigos sobrevivientes, estas víctimas seleccionadas por los latifundistas de la zona, fueron mutiladas con las piernas y brazos quebrados, sin ojos, sin lengua, con balas entre las cejas. Antes de matarlos los sometieron a torturas brutales. Esta fue la respuesta a la lucha por la reforma agraria.

Lota, el centro minero del carbón, donde ejercía una gran influencia el Partido Comunista, sufrió una vengativa represión. El 22 de octubre de 1973 fueron ejecutados cuatro dirigentes obreros, militantes comunistas: Bernabé Cabrera, presidente del sindicato industrial de Celulosa de Concepción; Vladimir Araneda, dirigente del magisterio; Isidoro Carrillo, gerente general de ENACAR, y Danilo González, alcalde de Lota, todos símbolos de la soberanía popular. Ellos fueron condenados a la pena capital por un "consejo de guerra". Sus cuerpos fueron sepultados clandestinamente en el cementerio general de Concepción. Sólo en 1990 los familiares lograron ubicarlos, siendo exhumados por orden del Segundo Juzgado del Crimen de Concepción. Esos asesinatos, al igual que todos los demás, se cometieron sin consideraciones legales porque, como señaló el informe Rettig, entre otras irregularidades, el rechazo de la excepción de competencia del consejo de guerra, en tiempos de guerra, resulta inadmisible, ya que los reos estaban siendo juzgados por supuestos delitos que habrían cometido con anterioridad a la entrada en vigencia del estado de guerra, es decir, en tiempos de paz. Este fue el "debido proceso" que Pinochet y sus cómplices, civiles y militares, aplicaron a sus víctimas.

La masacre colectiva que mayor repercusión ha tenido en el país y en los últimos años, en los tribunales, ha sido la de la "caravana de la muerte". En octubre de 1973, una comisión especial, presidida por el General Sergio Arellano Stark, designada por Pinochet, con delegación de su mando, recorrió las ciudades de Cauquenes, con cuatro prisioneros políticos asesinados; La Serena, con 15; Copiapó, con 13; Antofagasta, con 14, y Calama, con 26. El brazo armado de Arellano comprendía a los coroneles Sergio Arredondo y Marcelo Moren, el capitán Patricio Díaz y el teniente Armando Fernández Larios. En la mayoría de los casos, los autores de estos crímenes hicieron desaparecer los cuerpos, por lo que los procesos son por secuestro calificado, sin posibilidad de aplicar ni la "amnistía" ni la prescripción. Por lo mismo, sólo en estos casos Pinochet fue desaforado y encargado reo, primero como autor y después como encubridor de estos crímenes inicuos. Por fin, la mano de la justicia chilena lo atrapó después de su detención en Londres, a petición del juez Garzón de España, para extraditarlo a este último país por delitos contra la humanidad. No obstante, fue sobreseído por demencia al término de una campaña lastimera y cobarde.

El régimen de Pinochet extendió sus garras en el exterior, a través de la Operación Cóndor, una organización generada por las dictaduras militares de países como Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Esta trasnacionalización del terrorismo de Estado dio muerte a numerosos líderes democráticos, civiles y militares, de aquellos países, destacando los chilenos Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército y su esposa Sofía Coutbert, en Buenos Aires, y Orlando Letelier, ex cancilller del gobierno de Allende y su secretaria Ronnie Moffitt, ciudadana estadounidense, en Washington, así como el atentado que hirió gravemente a Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno en Roma. En el caso Letelier se condenó en los tribunales chilenos a los jefes de la DINA, Contreras y Espinoza; en el caso Leighton, los tribunales italianos juzgaron a los mismos y los condenaron en ausencia. Por último, en el caso Prats se ha procesado a Pinochet y sus secuaces en Argentina, sin que haya terminado todavía el juicio, aunque se ha solicitado la extradición de Pinochet, Contreras y compañía.

El 22 de diciembre de 1992 fueron encontrados en Paraguay los "Archivos del Terror" que ponen en evidencia la colaboración estrecha de aquellas dictaduras en la promoción de actividades de "inteligencia", espionaje conjunto, intercambio de prisioneros políticos, falsificación de documentos, con licencia para matar. Este hallazgo permitió aclarar el destino de numerosos secuestrados y desaparecidos brasileños, argentinos, uruguayos y chilenos que cayeron en las redes de la Operación Cóndor. Esta coordinación de las policías políticas militarizadas tuvo su origen en

el viaje de Pinochet a Asunción en 1974. Más de mil chilenos aparecen en los archivos paraguayos incautados, lo que ha permitido aclarar algunos casos de personas "desaparecidas".

La desaparición forzada de presos políticos

Esta dramática situación empezó con el golpe de Estado mismo y se generalizó como método terrorista a partir de la creación de la DINA. De igual manera que con el número de muertos, no ha sido posible determinar con precisión la cantidad de personas afectadas por la desaparición forzada de presos políticos. Los organismos de la resistencia y las agrupaciones de familiares han coincidido no obstante en estimarlas entre 2 800 y 1 100. No debe olvidarse sin embargo que en el medio campesino, donde la represión alcanzó gran extensión, no se han formulado todas las denuncias por temor a represalias policiales. Tal reacción es natural si se considera que los aparatos represivos de la dictadura utilizaron permanentemente la intimidación como instrumento de silenciamiento de sus actuaciones, al extremo de sumar muchas veces nuevos crímenes a los ya cometidos, exterminando familias enteras.[2]

Hasta abril de 1974 rivalizaron en la cacería humana las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Carabineros y la policía civil. Pero a partir de esa fecha se centralizó la represión en la DINA, dependiente de la junta militar y dirigida por el general Manuel Contreras, si bien Pinochet mantuvo siempre un control personal de esta verdadera maquinaria de la muerte. Contreras no actuaba por su cuenta, sino que recibía órdenes de Pinochet, a quién informaba diariamente de sus crímenes (a la hora del desayuno). Desde ese momento se puso en marcha el proceso de desaparición forzada de detenidos, siendo víctimas personas de distinta condición social, especialmente jóvenes e incluso mujeres en estado de gravidez. Tampoco se ha sabido el paradero de esos hijos nacidos en prisión, aunque existen indicios de un tráfico internacional de niños, como lo revela el caso de los uruguayos secuestrados, de padres desaparecidos, adoptados por un matrimonio chileno de Valparaíso.

Sobre la detención de estas personas existen evidencias en todos los casos. Las más comunes se refieren al hecho de haberse practicado en los propios domicilios

[2] El Grupo de Trabajo Ad Hoc estimó en el Informe de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas de septiembre de 1977, que los desaparecidos eran entre mil y dos mil; la Comisión Chilena de Derechos Humanos los calculó entre 1 600 y 2 500, y Amnistía Internacional señaló cifras mayores.

de los afectados o en sus lugares de trabajo, o en la calle, por lo general en presencia de testigos. En los casos en que los arrestos no fueron presenciados por terceras personas, los secuestrados pasaron por centros de detención y de torturas donde fueron vistos por otros detenidos que sobrevivieron, o sus hogares fueron allanados, reconociendo los cuerpos represivos aquellas detenciones a los familiares en algunas oportunidades, aunque nunca les permitieron verlos. Así comenzó ese período de agonía que no ha concluido hasta ahora, por el compromiso de los asesinos de no revelar el destino de los desaparecidos.

Este proceso adquirió diversas modalidades con el transcurso del tiempo. Los secuestros registrados en 1973 abarcaron todo el espectro de la izquierda, afectando a grupos familiares, como es el caso de Isla de Maipo y a detenidos retirados desde cárceles y recintos hospitalarios, siendo practicados principalmente por militares y carabineros. Los arrestos y desapariciones producidos en 1974 y los primeros meses de 1975 afectaron a miristas, aunque también en menor medida a socialistas y comunistas, y fueron realizados por elementos de la DINA. LOS secuestros practicados en 1975 se refirieron principalmente a militantes del Partido Socialista, y los de 1976, al Partido Comunista, todos ellos también a cargo de la DINA. Desde 1977 decrecieron las "desapariciones" de detenidos a un mínimo.

¿Qué es un detenido-desaparecido? La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló en su informe de 1976 que este proceso comprendía las siguientes categorías: *a)* personas torturadas en lugares destinados al efecto y que a menudo no eran presentables en el mundo exterior, *b)* personas detenidas durante períodos ilimitados y *c)* personas asesinadas mientras se encontraban en manos de sus carceleros y torturadores en cuarteles militares y policiales, así como en recintos secretos de reclusión. Negada tenazmente su existencia por la dictadura, la verdad se abrió paso con el tiempo, si bien todavía no lo hace la justicia, hasta convertir aquella fantasmagoría en un infierno de la burguesía que superó la imaginación del Dante, producto del odio de la clase dominante.

El dolor y la angustia de los familiares fueron descritos apropiada y sentidamente por el Relator Especial de las Naciones Unidas, como "un tipo de tortura donde no hay torturador", agregando que aquéllos siempre temen que sus seres queridos siguen sufriendo cosas horribles, pero no se atreven a poner fin a esta penosa situación diciendo: "Bueno, tras tantos años debe estar ya muerto", porque sienten que de esta manera participarían sicológicamente en su asesinato". La dictadura dio siempre explicaciones falsas, negando la existencia de desaparecidos, pero en los tribunales se ha probado el arresto de muchos de ellos, sin que se apliquen sanciones a los criminales. Algunos de estos mentirosos se han burlado de sus víctimas en

el Senado, como Sergio Fernández y Sergio Diez, o los generales y almirantes que se han sucedido como "senadores designados" y en otros casos, han sido elegidos en votación por la derecha.

En el mes de julio de 1975 explotó uno de los más macabros escándalos políticos que afectó a la junta militar: el anuncio de la supuesta muerte en el exterior de 119 prisioneros políticos de la dictadura castrense. Se trata de la operación Colombo, la otra columna de la trasnacionalización del terrorismo de Estado, en el marco de la Operación Cóndor. Desde hacía muchos meses, la opinión internacional se venía preocupando de la situación de 270 prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet que figuraban como "desaparecidos" debido a que ésta no les reconocía aquella calidad, a pesar de existir evidencias de su detención y permanencia en diversos centros de reclusión y tortura. Numerosos organismos de solidaridad y protección de los derechos humanos habían intercedido en favor de ellos, y la propia comisión investigadora designada por las Naciones Unidas se proponía esclarecer esta situación. Por esta última circunstancia la junta militar no permitió su ingreso a nuestro país en 1974.

No pudiendo resistir más la presión interna de los familiares de los secuestrados y la exigencia reiterada de una explicación racional por parte de los organismos internacionales, la junta militar preparó una coartada para justificar la "desaparición" de esos 270 prisioneros. Agentes de la dictadura difundieron, en el curso del mes de junio dos "noticias" absolutamente falsas: *a)* que "extremistas" chilenos se estaban matando entre ellos mismos en diversos países de Europa y América Latina y *b)* que en Argentina existían campos de entrenamiento de guerrilleros chilenos, entre los cuales se encontraban algunos de los "desaparecidos". Con esta campaña de prensa se pretendía sostener que los secuestrados estaban fuera de Chile y su presunta muerte era el resultado de la acción de ellos mismos. La maniobra, aunque burda, no podía ser más siniestra.

Cumplida esta fase preparatoria destinada a distorsionar a la opinión pública nacional e internacional, dos revistas de Brasil y Argentina que fueron creadas para la ocasión y tuvieron solamente estas únicas ediciones, publicaron sendas "informaciones" el 19 y el 22 de julio, que completan la maniobra: en la primera se informa que 60 personas de ambos sexos habían muerto en diversos enfrentamientos producidos entre ellos mismos en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia. En la segunda se agrega el anuncio de la muerte de 59 personas más, en un supuesto enfrentamiento en Salta, Argentina. Los nombres de todos ellos corresponden a los que figuran en la lista de secuestrados por la dictadura chilena. El diario *El Mercurio,* de Santiago, colaboró en este montaje publicitario, reproduciendo

estas informaciones de acuerdo a despachos enviados desde Buenos Aires por la agencia noticiosa UPI. La "noticia" desató una clara indignación en Chile como en el extranjero, a pesar de que la información coincidía con el logo actual de la publicidad de esa empresa: *"El Mercurio* lo dice".

La perversión moral de la dictadura y sus agentes llegó a tales extremos en este caso que el diario *La Segunda,* de Santiago, en su edición de 24 de julio, publicó con carácter sensacionalista, como ya señalé, el titular "Exterminados como ratas los miristas", refiriéndose a los 119 seres humanos secuestrados por los sicarios de la tiranía chilena. Esta campaña, que debiera haber producido natural repugnancia hasta en los más indiferentes, contó con el respaldo de los voceros oficiales del gobierno de Pinochet, considerando como ciertos hechos falsos, desmentidos por los propios gobiernos de los países donde se atribuía su ocurrencia. Así creyó la dictadura dar por concluido el problema de la desaparición de 270 detenidos en las cárceles chilenas, con la colaboración de la prensa "libre", particularmente de la empresa de Agustín Edwards, el creador de la fundación "Paz Ciudadana".

Sin embargo, de inmediato se demostró en Chile que los 119 casos de presos estaban registrados en diferentes organismos, nacionales e internacionales, encargados de la defensa de los derechos humanos, y asesorados jurídicamente por el Comité de Cooperación para la Paz. 118 de ellos estaban incluidos en la nómina de 270 casos que los propíos familiares hicieron llegar a diversas instituciones; 20 correspondían a mujeres, contabilizándose así el 76% de las mujeres de la nómina de 270 casos señalados, y cinco correspondían a personas mayores de 40 años de edad. Pero eso no es todo. En efecto, en cuatro de los 119 casos, sus familiares habían recibido comunicación del gobierno directamente, o a través de embajadas extranjeras, certificando su detención. En 115 casos, sus familiares habían presentado ante la respectiva Corte de Apelaciones recursos de amparo o *hábeas corpus.* 86 de sus familiares habían formulado diferentes denuncias ante la justicia ordinaria. Además, 103 estaban incluidos en una petición masiva de designación de ministro en visita ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, lo que significa que sus familiares habían adjuntado una declaración jurada relatando los hechos y enumerando datos y testigos.

Por otra parte, 53 de ellos fueron detenidos en sus propios domicilios y ante sus familiares y vecinos, y un alto número de los restantes lo fue en sus lugares de trabajo o estudio, ante numerosos testigos. La mayoría de los detenidos sin testigos oculares fueron vistos posteriormente en diferentes centros de tortura o campos de incomunicados, por detenidos. Al conocer la publicación de esta falsa noticia, 96 prisioneros del campo de concentración de Puchuncaví iniciaron una huelga de

hambre para denunciar la maniobra de la dictadura y en los meses siguientes, ante los tribunales, muchos de ellos testificaron haber visto a la mayoría de los citados en las informaciones propaladas por la dictadura.

La falsedad de estas "noticias" fue denunciada formalmente por parte de los presos políticos del campamento Melinka, ubicado en Puchuncaví, en carta presentada a la consideración del Ministerio del Interior, del jefe de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Detenido y del comandante del mencionado campo, respaldada por esa huelga de hambre, la primera realizada en prisión desde el inicio de la dictadura. Esa denuncia se basa en el hecho de que 33 de los detenidos que figuran en las nóminas publicitadas por la DINA desde Argentina y Brasil habían estado presos con los huelguistas de Puchuncaví en diversas fechas y durante espacios variados de tiempo, en las casas de interrogatorio que ellos señalan en el comunicado dirigido a esos personeros de gobierno.

Esta fue una prueba concluyente, viva y humana. Exponiendo sus vidas o arriesgando su propia integridad física, los 96 detenidos de Puchuncaví, levantaron su voz desde el interior de un campo de prisioneros para hacer que la verdad prevaleciera, para dar luz en un problema caracterizado por la oscuridad criminal, para destruir esta muralla de silencio en que se estrellaban los lamentos de los familiares de los "desaparecidos", para dar a esposas, madres, padres, hijos y hermanos, un hálito de esperanza en tan prolongada angustia. Nunca será suficientemente destacada la actitud moral de este grupo de prisioneros de Puchuncaví, el elevado contenido de solidaridad humana que encierra su comportamiento. Si un detenido político ofrece su testimonio, arriesgando su vida o su integridad física, en mérito de prueba, es porque hay una verdad irrefutable que no puede ser desoída por la conciencia de una sociedad digna.

La mayoría de los casos señalados en el montaje publicitario mencionado se enumeraron además con los mismos errores de ortografía y trascripción, y de prelación (desorden alfabético) presentes en la nómina de 270 casos elaborada por los propios familiares para ser entregada a los organismos encargados de la defensa. En algunos de los 119 se agregan minuciosos y detallados datos de individualización, como el segundo nombre de pila. No es concebible que personas que supuestamente habrían estado operando simultánea y coordinadamente en Francia, Venezuela, México, Panamá, Colombia y Argentina, así como guerrilleros actuando en una supuesta clandestinidad, llevaran consigo documentación que permitiera su identificación con tal lujo de detalles. Es más, en la segunda lista se habla de "evadidos". ¿Cómo fue posible su identificación?

Es significativo que en un enfrentamiento armado —negado por la propia embajada argentina— en el que habrían participado chilenos conectados con argenti-

nos, bolivianos y uruguayos, no haya habido bajas entre guerrilleros de esos países o entre las fuerzas policiales argentinas. Es extraño asimismo que entre los supuestos intrépidos "guerrilleros" caídos en Salta hayan existido dos personas de 65 y 61 años de edad. Por último es también raro que habiendo en Chile, según organismos internacionales, más de 2 mil detenidos desaparecidos, en las publicaciones manipuladas por los agentes de la dictadura militar sólo aparezcan citados familiares de los "desaparecidos" registrados en la nómina de los 270 antes mencionada. Esta parece ser la siniestra respuesta dada a quienes tuvieron el valor de reclamar por sus familiares arrestados y desaparecidos.

Desde el mes de julio de 1975, en que se conoció la campaña destinada a borrar definitivamente la lista de los 270 "desaparecidos" —ya que conviene tener presente que, después de las dos listas con los 119 estaba preparada la publicación de una tercera nómina, suspendida por el escándalo político internacional provocado por las anteriores publicaciones— los familiares no cesaron de luchar por ellos. No obstante, la junta militar mantuvo el mayor mutismo, a pesar de sus primeras declaraciones en el sentido de que se haría una investigación en el interior y el exterior acerca del origen de las publicaciones, sobre todo a raíz de la huelga de los presos de Puchuncaví, la que terminó sólo cuando el ministro del interior, en representación de la dictadura, formuló esta promesa. Hasta ahora no se conocen las conclusiones de esta investigación, porque ellos mismos eran los autores de estos crímenes.

Tampoco los familiares de los detenidos desaparecidos ya mencionados obtuvieron ningún resultado en sus acciones ante los tribunales de justicia. Son muchos los magistrados que en privado reconocían que en Chile no había un Estado de derecho, como excusa ante su impotencia para hacer justicia a quienes reclamaban todavía ante ellos. Además de las denuncias hechas por "presunta desgracia", "secuestro", "homicidio" y otras, ellos presentaron oportunamente, con el patrocinio de diversos personeros de iglesias y abogados, peticiones para que se designaran ministros en visita. Tales peticiones se formularon ante la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de mayo de 1975 y ante la Corte Suprema el 8 de julio, el 4 de agosto y una vez más a fines de este mes. En todos los casos, sus solicitudes fueron rechazadas, demostrándose de esta manera que en Chile no existía justicia, porque los más altos magistrados eran servidores obsecuentes de la dictadura castrense y de la clase dominante. Esta es una justicia de clase.

En el curso de este doloroso año, si bien la junta militar continuó negando la detención de estos 270 "desaparecidos", militares encargados de las funciones de arresto, tortura y vigilancia de los prisioneros políticos informaron extraoficialmente ante algunos familiares de aquéllos, que conversaron con ellos gracias a relaciones comunes con terceras personas, que los 119 estarían vivos en lugares se-

cretos de reclusión, considerados para todos como recintos militares, donde estarían cumpliendo condenas también secretas de los tribunales militares. Son numerosos los familiares que recibieron esta clase de explicaciones que les hicieron vivir aferrados a esa esperanza. Estas falsas explicaciones revelaron que a la crueldad se agregó el sadismo hacia seres desesperados, que aspiraban a reencontrarse con sus hijos, padres, esposos, hermanos, compañeros y amigos.

Ni siquiera cuando los "desaparecidos" se levantaron de sus tumbas los tribunales aplicaron justicia alguna. Para eso estaba el decreto-ley de "amnistía" promulgado por los propios malhechores en 1978. Las respuestas, cuando llegaron, fueron horribles. En los años y décadas posteriores, se encontraron fosas comunes con cuerpos de presos políticos desparecidos en distintos lugares. Estos restos mortales se alzaron como una acusación macabra contra la dictadura y las fuerzas sociales y políticas que le dieron apoyo. Los asesinos materiales, a pesar de haber sido identificados en algunos casos, no fueron condenados y andan libres, como sus instigadores, la derecha, dueña del país, convertida en oposición a los gobiernos de transí-

La tortura: castigar y lisiar

La dictadura utilizó de manera permanente la tortura como forma de dominación desde el golpe de Estado hasta su fin, sin interrupción. Con infracción de las convenciones y leyes internacionales que prohiben la tortura y los tratos crueles e inhumanos, todas las ramas de las Fuerzas Armadas, la policía uniformada y civil y los llamados aparatos de "seguridad" como la DINA y la CNI, la aplicaron con refinada crueldad y medios sofisticados. Sus maestros estaban en las academias de "contrainsurgencia" de Estados Unidos. El grupo Ad Hoc de las Naciones Unidas informó en 1975 de la existencia de once centros de tortura, y en 1978, constató que diez de ellos continuaban funcionando. Además, sirvieron como medios de acción los regimientos, bases aéreas, naves de guerra y cuarteles de carabineros e investigaciones, en los cuales se torturó y asesinó.

La dictadura montó un enorme centro nacional de tortura. La policía secreta, según la Comisión Chilena de Derechos Humanos, "cuenta con un arsenal de instrumentos técnicos adquiridos por el Estado, personal adiestrado para la tortura que utiliza el apoyo técnico de médicos, administrativos y auxiliares, tales como camarógrafos de televisión, fotógrafos y maquilladores".[3] En una primera etapa, también

[3] *ídem.*

sacerdotes o quienes se hacían pasar por sacerdotes. Los maestros chilenos en la práctica de la tortura fueron los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía formados "técnicamente" en los numerosos centros especializados de la "democracia" estadounidense.

La tortura produce, por excepción, la muerte de sus víctimas, pero provoca, en cambio, siempre daños físicos que perduran por semanas, meses y aún pueden convertirse en permanentes, con grave menoscabo de la habilidad para el trabajo y la capacidad sexual. Produce también daños psíquicos, a menudo más difíciles de curar. Así lo han afirmado organismos internacionales como los de Naciones Unidas. "Esta experiencia muy extrema y brutal equivale a lo que en otros países llaman 'destrucción de personalidad'. La humillación a la que esta gente fue sometida la hace después muy difícil recobrar la identidad y, por ello, es una tarea enormemente difícil recuperarse... en un ambiente social que no respeta sus principios ni valores."[4] Los torturados no recibieron ninguna protección de los jueces y, en los casos de excepción, esos magistrados fueron castigados por la Corte Suprema. El juez de Santiago, Rene García Villegas fue suspendido de su cargo por 15 días, en septiembre de 1988, como sanción por declaraciones formuladas en relación a los casos de torturas que entonces investigaba. Posteriormente, el mismo tribunal superior acordó llamar la atención a los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señores Benquis, Hermosilla y Correa, por haber solidarizado públicamente con el mencionado juez.

Todas las personas arrestadas por motivos políticos fueron sometidas a este tormento, según informe de la Comisión Nacional Contra la Tortura. Ésta se aplicó por los militares y policías de manera sistemática, considerándola como un procedimiento normal en los interrogatorios, y también como castigo, aun en los casos de presos comunes. Señala la Comisión Chilena de Derechos Humanos: "Es posible advertir que la tortura no sólo es un método de represión política: ella se está usando en forma creciente como una técnica indagatoria policial, como un sistema punitivo extrajudicial y como sistema correctivo penitenciario".[5] El dictador expresó públicamente en una oportunidad que este instrumento era el único eficaz para obtener información.

Los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, condenaron reiteradamente esta práctica inhumana de los pro-

[4] Comisión Chilena de Derechos Humanos, "Informe Anual", 1982, pág. 66.

[5] Relator Especial sobre Chile, "Informe a la Comisión Económica y Social", Naciones Unidas, 21 de noviembre de 1979, pág. 82.

motores de la "civilización occidental y cristiana" como lo definió Pinochet, pero éste continuó aplicándola con refinada crueldad. El informe de America's Watch Commitee ya citado, destacó su gravedad. Expresa:

> "Las implicaciones de la tortura como se practica en Chile son inconmensurables, no sólo porque tantos han sufrido y siguen sufriendo, sino también porque las condiciones existentes permiten que la tortura se convierta en una ciencia y el verdugo sea un profesional frío: la aceptación oficial de abusos extremos como algo legítimo e irreprochable, la práctica dura y el estudio que convierte a un recluta de la CNI en un experto, las condiciones en que un detenido político sabe, con certeza casi total, que tendrá que soportar lo inimaginable. La participación de médicos en la aplicación de dolor es una desviación de la ética profesional y el abuso de las técnicas sicológicas permite pensar que el propósito no es solamente el de castigar, sino también el de lisiar".[6]

¿Qué más se puede agregar sobre esta práctica sádica? Sólo la repugnancia absoluta de la conciencia moral de los perseguidos, ya que los perseguidores carecen de ella.

Los arrestos arbitrarios

Estos procedimientos de intimidación y castigo se generalizaron en Chile hasta límites increíbles. No se dispone de cifras completas, pero las organizaciones políticas de la izquierda han estimado que en los dos primeros años de dictadura pasaron por centros de reclusión como cuarteles de carabineros, regimientos, bases aéreas y navales, naves de guerra, cárceles, estadios, campos de concentración, etcétera, por distintos períodos, más de 200 mil personas, es decir, casi el 2% de la población, incluyendo a los niños de pecho. Naciones Unidas estableció que hasta mediados de 1975, entre 40 mil y 50 mil personas habían sido arrestadas por lapsos mayores de 24 horas, lo que representa uno de cada 125 mayores laboralmente activos.[7] El país no conocía una forma tan extrema de represión. Al bombardeo aéreo del palacio de gobierno y la muerte del presidente Allende se agregaron las detenciones masivas, muchas de cuyas víctimas fueron ultimadas despiadadamente.

Durante días, meses y años se realizaron operativos "rastrillos" que constituían redadas de sectores o barriadas de las principales ciudades, con cuyos detenidos se

[6] Comisión Chilena de Derechos Humanos, "Informe Anual", 1982, pág. 66.
[7] C.G. Brown, *op. cit.*, pág. 62.

llenaron estadios y cuarteles. Las víctimas fueron sometidas a condiciones brutales y humillantes, en las que enseñoreaban la tortura y la inseguridad, en medio de completa incomunicación, sin que sus familiares pudieran obtener información sobre su destino. Los arrestados en los primeros dos años, período en que se ejecutó un verdadero genocidio, sufrieron mucho más que los posteriores, ya que un número considerable de aquellos fueron asesinados y "desaparecidos", y los demás vivieron la tenebrosa experiencia de no saber, durante una larga vigilia, qué sería de ellos.

La dictadura dio a los arrestados un tratamiento completamente arbitrario, manteniendo a muchos de ellos en prisiones y campos de concentración por tiempo indefinido, sin formularles cargos ni menos someterlos a procesos legales. No obstante, se formularon algunas regulaciones que poco se cumplían. Bajo el estado de sitio, se estableció primero un plazo de detención de 24 a 48 horas, el que se aumentó en 1975 a cinco días "en caso de delitos contra la seguridad del Estado" durante el estado de emergencia, según el decreto ley N° 2008, de 5 de marzo de 1975. La verdad es que ellas constituían una farsa, ya que casi todos los arrestados, en virtud del estado de sitio, pasaron hasta tres años en campos de concentración, sin proceso, aunque siempre maltratados y humillados.

Esta arbitrariedad se llevó al extremo de jugar con las vidas de miles de seres humanos. En efecto, antes de la extensión del plazo para someter a proceso o dejar en libertad a los detenidos, muchos de ellos fueron ultimados sin juicio alguno. En este mismo año, la tasa de "desapariciones" de presos políticos se elevó de modo que aquellos contra quienes no se formuló una acusación formal después de los cinco días, nunca aparecieron, sin que hasta ahora sus familiares y la opinión pública tuvieran una explicación del destino de estos chilenos, a pesar del reiterado reclamo judicial y extrajudicial, nacional e internacional. Algunos de aquellos arrestados fueron sometidos a "tribunales de guerra" que funcionaron hasta 1976, los que aplicaron graves penas, incluso la capital, basados en rumores y consideraciones políticas, por abuso de la Ley de Seguridad del Estado. Los presos debían esperar estos procesos sumarios durante largos períodos en centros de reclusión. Aparte de los asesinatos masivos y "desapariciones" sufrieron torturas y tratos crueles e inhumanos, comprobados por los organismos de las Naciones Unidas.[8]

Desde la vigencia de la nueva constitución en marzo de 1981 y en virtud del artículo 24 transitorio, hasta mayo de 1983, más de tres mil personas fueron detenidas por actividades "políticas" durante 20 días permitidos por dicha disposición y, muchas veces, por lapsos mayores. Posteriormente, a raíz de las protestas nacionales,

[8] Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Chile, Naciones Unidas, octubre de 1975, pág. 50.

se reanudaron los arrestos masivos, a través de operaciones rastrillos, incluso en 1986 y 1987, y sometidos en virtud del artículo 24 transitorio. Todos los arrestados individualmente fueron torturados en los centros secretos de la CMI en tanto que los detenidos en grupos, por lo general, permanecieron en instalaciones policiales, sometidos a las más denigrantes humillaciones. Todos estos resultados se derivan del "patriotismo" de las Fuerzas Armadas y de la "democracia" de los sectores civiles de la derecha.

Durante este tiempo de dictadura, centenares de miles de seres humanos fueron obligados a abandonar su país. Se habló en el momento más duro de un millón de exiliados. En realidad no se conocen las cifras exactas. No obstante, ellas fluctuaron entre los 11 mil, reconocidos por el gobierno militar y 400 mil, cifra que se dio a conocer en el exterior. La Comisión Chilena de Derechos Humanos la estimó en 200 mil, es decir, en un país de aproximadamente 11 millones de habitantes, dicha cifra suponía uno de cada 55 personas, lo que representa la más alta tasa de éxodo del mundo en esos años. Cualquiera que haya sido el número de exiliados, no refleja la realidad porque, primero, junto al jefe de familia se encontraban sus familiares y, segundo, la cantidad de éstos es cambiante con el tiempo, hasta el punto que muchos no volverán nunca a su "patria", otros regresaron clandestinamente y fueron aniquilados por la dictadura, y otros han continuado emigrando aún después del término del exilio en 1988, por razones de ocupación y dignidad personales.

Los orígenes del exilio externo son diversos, si bien su causa última responde al sistema de dominación establecido por la acción de las armas. En todos los casos, se configuró con los chilenos que salieron mediante el asilo diplomático, los prisioneros liberados y muchas veces forzados a abandonar el país, los expulsados desde las prisiones, los condenados a extrañamiento y, en general, los que huyeron por la persecución y el desempleo. En cada una de estas situaciones hay que agregar a los familiares más directos que tuvieron que asumir también el exilio para estar con sus seres queridos. En manos de la dictadura, esta modalidad de represión constituyó un arma poderosa para deshacerse de sus opositores. Las expulsiones por actividades políticas se mantuvieron hasta 1983, y las prohibiciones a regresar a numerosos desterrados siguieron en pie hasta el mes de agosto de 1988, en que se puso término al exilio.

Cuando se trató de exilios, como también en otras situaciones, la dictadura infringió sus propias normas o las modificó de acuerdo a sus conveniencias. No exis-

tió régimen de derecho. En efecto, a las personas condenadas por extrañamiento, en una primera fase no se les permitió regresar al cumplir su pena, como tampoco pudieron beneficiarse con la "amnistía" de 1978. La resistencia a autorizar durante tantos años el retorno de los desterrados más caracterizados o a tolerar a los disidentes en el país, significó la "legalización" del exilio o la exclusión como castigo por ideas y acciones políticas difusamente definidas, durante más de 15 años.

En el juego de artilugios de la "constitución de la libertad" de 1980 se institucionalizó lo que en los comienzos de la dictadura fue simple arbitrariedad. En efecto, el Artículo 19 permanente contiene la garantía de vivir, moverse libremente, entrar y salir de Chile, pero el Artículo 24 transitorio le permitió al dictador expulsar administrativamente del territorio nacional a aquéllos que propaguen las doctrinas enumeradas en el Artículo 8º de la constitución, a los que son o tienen la reputación de ser partidarios de estas doctrinas y también a los que "actúan" en contra de los intereses de Chile o "constituyen" un peligro para la paz interna. ¿Quién califica estas situaciones? El propio dictador, respecto a cuya decisión no existió recurso judicial alguno. Esta es la más brutal negación del principio de la tolerancia, conquistado en la aurora de la Época Moderna por las naciones civilizadas.

Desde 1982 se autorizó el retorno de diversos grupos por medio de listas publicadas por la dictadura, reduciéndose el exilio propiamente político, sin contar muchos miles más de chilenos que no teniendo impedimento legal para volver, no lo hacían por razones laborales o porque se habían insertado de manera permanente en sociedades donde encontraron un ambiente de libertad y de seguridad en el cual trabajar y desenvolver su vida, así como ofrecer educación a sus hijos.

En estos años de oprobio, los exiliados sufrieron la separación de sus padres, hermanos y otros familiares, de sus amigos y compañeros de luchas comunes, fueron violentamente desarraigados de sus raíces culturales, apartados de la lucha por la construcción de una sociedad mejor y condenados a la impotencia para ejercer el derecho a vivir en su propia patria por la minoría gobernante mediante la fuerza de las armas. Entre los más jóvenes, algunos eligieron el camino del retomo clandestino para combatir contra este estado de cosas tan intolerable, en cuyo intento la mayoría encontró la muerte. No obstante, en este país del absurdo, la pena por el retomo clandestino implantada según decretos leyes por los usufructuarios del poder, osciló entre la prisión y la pena capital. Parece mentira, pero así sucedió durante la dictadura, hasta el extremo de que hacia 1990, todavía había presos por el "delito" de regreso clandestino.

La relegación (exilio interno) complementó el exilio exteno o propiamente dicho como instrumento de represión. Consistía en el confinamiento en una aldea ais-

lada y desprovista de medios de trabajo y por lo tanto de vida, en las periferias del sur y del norte del país, donde la víctima estaba condenada a permanecer y presentarse diariamente ante la policía local. Los relegados sufrían aún más que los exiliados debido a que aquéllos no encontraban trabajo o medios de vida en lugares lejanos y atrasados. La relegación se estableció en 1980 por simple disposición del ministerio del interior y en seguida quedó consagrada por el Artículo 24 transitorio de la Constitución, que entró a regir en el siguiente año.

Esta modalidad represiva supone, en realidad, períodos de hasta tres meses, que pueden renovarse, de aislamiento y soledad en un ambiente hostil, sin trabajo y muchas veces sin albergue. La carencia de comunicación con sus familiares y la incapacidad para ayudarles a subsistir en condiciones mínimas de bienestar es peor que la de los presos políticos. Siendo la mayoría de los relegados extremadamente pobres, sufrieron toda clase de privaciones, que se extendían a sus grupos familiares. Por lo general los familiares eran informados de esta medida después de la partida de los relegados a sus lugares de confinamiento, y tampoco contaban con recursos económicos para visitarlos. La crueldad fue, de esta manera, la característica más acusada de este instrumento de represión.

¿Qué actividades de los chilenos fueron perseguidas con tanta saña? De acuerdo con la prohibición de los partidos populares y la limitación del funcionamiento de los sindicatos, cualquier actividad política que no fuera la del bloque social en el poder, constituía "delito" y por consiguiente sus actores fueron perseguidos. Más aún, como en la época de la Inquisición, las simples ideas fueron declaradas ilegales, por lo que los militantes de izquierda recibieron el rigor de la "ley" sin el requerimiento de que las ideas se convirtieran en acciones, por limitadas que éstas fueran.

Para eso se utilizaron los distintos niveles del estado de sitio, tres de los cuales fueron implementados por la dictadura antes de la promulgación de la constitución de 1980: *a)* el nivel del "estado de guerra", de septiembre de 1973 a septiembre del 74, que definía a los opositores como organizados, armados y combatientes; *b)* el nivel de la "defensa interna", de septiembre de 1974 a septiembre de 1975, que reconocía fuerzas rebeldes o sediciosas, organizadas o en proceso de organización, abierta o clandestinamente y *c)* el nivel de la "seguridad interna", de septiembre de 1975 a marzo de 1978 que actuaba frente a rebeldes que no estaban organizados. Estos diversos niveles fueron sistematizados por el decreto ley 640, de 2 de septiembre de 1974, modificado por el decreto ley 1009, de 5 de mayo de 1975.[9]

Por sobre los efectos materiales, el exilio representa un drama emocional. No es el infierno, como lo han caracterizado algunas de sus víctimas, sino que se parece

[9] *Ibidem.* 8 de octubre de 1976, págs. 87 a 89.

más al purgatorio, tanto por la intención con que lo administraban los usurpadores del derecho a vivir en la propia Patria, como por el carácter transitorio que tiene para la mayoría de los desterrados, con excepción de los que mueren antes de volver. No siendo tan grave como el genocidio, la desaparición forzada de presos políticos, los largos arrestos arbitrarios, la tortura sistemática que practican los dictadores y sus secuaces, el exilio, uno de los abusos en el ejercicio del poder, deja una huella profunda en sus víctimas. Esta marca se expresa tanto en el ámbito existencial como en el ámbito político en el momento del reencuentro entre los que se marcharon hacia el destierro y los que fueron aplastados por la represión.

El ámbito existencial está configurado por la lucha psicológica en el proceso de cambio y adaptación entre el medio de que proviene y el medio en que pasa a asentarse. Cuando el desterrado sale de su país experimenta una profunda nostalgia, como si hubiera sufrido la pérdida de una parte de sí mismo, por el abandono del clima en que vivía, el paisaje que lo rodeaba, el aire que respiraba, la cultura que lo nutría y la familia, amigos y camaradas con los que convivía, muchos de ellos muertos en la maraña tenebrosa de la dictadura. No obstante, lenta e imperceptiblemente, se va adaptando al nuevo hogar geográfico y cultural, en el que comienza a reorientar su vida. En el ámbito político, el exiliado asume los deberes emanados de su condición de desarraigado de su patria, pero unido siempre a la lucha del pueblo de que forma parte, por superar la dictadura y la explotación social hasta recuperar la democracia.

Para el exiliado, cuando llega la hora, es difícil dar el paso decisivo del regreso, que tampoco fue franqueado a todos, por la política de exclusión o por haberse extinguido su existencia antes de ver realizado ese sueño que le acompañaba desde el mismo día de la partida. Porque se parte para volver. El exilio está, por eso, profundamente vinculado al pasado y al futuro, pero impide vivir el presente en la tierra que los vio nacer. Las vidas de los exiliados se alimentan de los recuerdos de un tiempo ya ido y de los sueños de un mundo por nacer, pero están ausentes, paralizadas, lejos del escenario en que se presentaba cotidianamente ese motor de la historia, que es la lucha de clases. La nostalgia, entretanto, nunca termina por disiparse totalmente, a pesar de que en el nuevo hogar nacional crecen raíces y vínculos, penas y alegrías, amores y compromisos, así como estalla también una y otra vez la esperanza, como inspiración para seguir viviendo y luchando. Es la función del año decisivo. Entonces, ese presente huidizo, que en algún momento parece ajeno a su existencia, comienza a imponerse sobre el pasado y el futuro. Es la hora del retorno y de la batalla definitiva.

En esa fase decisiva adquiere su mayor profundidad el ámbito estrictamente político del exilio, es decir, cuando éste se aproxima a su fin por la lucha popular que

destruyó las condiciones que lo generaron. En este momento, cuando desaparecen los impedimentos para regresar, surgió la gran interrogante ¿Para qué regresamos? Esta pregunta se hace más acuciante si se tiene conciencia que se comenzará a vivir una suerte de exilio al revés, esto es, al retomar a Chile se sentirá la nostalgia del país que se deja, a no ser que se tenga capacidad de integrar en una nueva síntesis ambas experiencias en el marco de siempre: América Latina, un pueblo continente. Esta divisa es válida sólo en el caso del exilio en esta región del mundo.

El regreso supone, por consiguiente, deberes insoslayables, a partir también de la integración en una sola lucha, de las tareas de dentro y de fuera. Durante gran parte del tiempo de la dictadura, la mayoría de la política de la oposición, de la única existente, la oposición de izquierda y de la resistencia, se hizo en el exterior y por el exilio. Eran los días en que, como dijera Pinochet, no se movía una hoja si no hiciera él mismo ese movimiento. Después se invirtieron los términos, hasta el punto que el interior recuperó su centro de gravedad, convirtiéndose en el principal escenario de la resistencia. El fin del exilio significó políticamente, por eso, el reencuentro de dos partes del movimiento popular, escindidas durante un largo período. Ello implicará a su vez el mayor reforzamiento del proyecto histórico de la izquierda chilena, transitoriamente derrotado, pero no vencido, en constante reconstrucción. Después de más de 15 años, los exiliados volvieron más viejos, algunos con los mismos ideales de siempre, pero la mayoría de aquéllos rendidos a sus antiguos enemigos, limitándose más adelante a la administración del sistema legado por la dictadura.

Prontuario de la dictadura

La dictadura de Pinochet tiene un amplio prontuario confeccionado por los organismos internacionales. En el curso de su permanencia en el poder, fue condenada año tras año por los más importantes de ellos. Ningún otro país ha sido objeto de una preocupación tan extensa y constante como Chile lo fue durante este oprobioso período de nuestra historia. No voy a referirme, sin embargo, a las resoluciones adoptadas por todos ellos porque requeriría demasiado espacio y liempo, por lo que este prontuario sólo comprenderá las caracterizaciones y condenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Interparlamentaria Mundial. Este prontuario criminal fue confirmado, al término de la dictadura, por el informe emitido por la Comisión presidida por Raúl Rettig.

Dos comisiones de la Organización de las Naciones Unidas tomaron acuerdos, a fines de octubre de 1974, por abrumadora mayoría, pidiendo la restauración de las libertades y derechos humanos y civiles, así como la liberación de los prisioneros políticos. El 7 de noviembre del mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución por la cual expresó "su más profunda preocupación por las evidencias de constantes violaciones de los derechos humanos y de la libertad fundamental en Chile". Además solicitó a la dictadura la "liberación de los prisioneros políticos, el restablecimiento de los derechos humanos y la garantía de un salvoconducto de salida del país a quienes lo soliciten".

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU acordó en ese mismo año constituir un Grupo de Trabajo *ad hoc* integrado por cinco miembros de ella, para que investigara la situación de los derechos humanos en Chile sobre la base de las resoluciones adoptadas con anterioridad, efectuando una visita a este país para recoger pruebas orales y escritas de todas las fuentes pertinentes. Además, se le encargó que informara sobre los resultados de sus investigaciones a dicha Comisión y presentara un informe preliminar sobre sus averiguaciones al Secretario General, para que éste lo incluyera en el informe a la Asamblea General, en el siguiente período de sesiones.

En este período, el 9 de diciembre de 1975 la Asamblea General aprobó una resolución condenatoria a la dictadura, por la cual reafirmó su repudio a todas las formas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este sentido, expresó su profundo malestar ante las constantes y abiertas violaciones de los derechos humanos y civiles, incluso la práctica institucionalizada de la tortura, detenciones, encarcelamientos o destierros arbitrarios, acerca de todo lo cual el nuevo informe ofreció pruebas. Al mismo tiempo, instó a la dictadura a que adoptara sin demora todas las medidas necesarias para restablecer y salvaguardar los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, y a que respetara plenamente las disposiciones de los instrumentos internacionales suscritos por Chile.

Esta segunda resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue decisiva. En ella demandó que no se utilizara el estado de sitio o de emergencia para violar los derechos humanos y las libertades fundamentales, al tiempo que se adoptaran las medidas adecuadas para poner fin a la práctica institucionalizada de la tortura y otras formas de penas o tratos inhumanos o degradantes. Que se garantizara igualmente los derechos humanos de todas las personas, la libertad y seguridad personales, en especial de quienes habían sido detenidos sin acusación alguna o que estaban en prisión únicamente por motivos políticos, así como se adoptaran medidas para aclarar la situación de individuos cuya desaparición no se había esclarecido. Todo lo anterior, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ante los crímenes cometidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas advirtió también que nadie puede ser considerado culpable de ningún delito a causa de actos u omisiones que, en el momento que fueron cometidos, no constituyeran una figura delictiva en virtud del derecho nacional e internacional, (Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), así como nadie debe ser privado arbitrariamente de la nacionalidad chilena (Artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Demandó también el respeto de la libertad de asociación y de todas las libertades intelectuales. Por último, deploró la negativa de la dictadura a permitir que el Grupo de Trabajo *ad hoc* de la Comisión de Derechos Humanos visitara el país, e invitó a dicha Comisión a que extendiera el mandato al Grupo de Trabajo, para que éste pudiera informar a ambas sobre la evolución de la situación chilena.

La Organización de Naciones Unidas continuó ocupándose de la dictadura militar durante los 16 años de existencia de ésta, mediante la Comisión de Derechos Humanos a través del citado Grupo de Trabajo, convertido en Relator Especial desde 1978. Por la brutal conducta delictuosa de la dictadura, y como único caso en el mundo, la ONU mantuvo año a año su vigilancia y condena, sin cssar, hasta el último día del ejercicio del poder obtenido por la fuerza, insistiendo en su profunda indignación por el hecho, también constante, de que el pueblo chileno continuara sometido a violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta permanente condena a la dictadura convirtió a Chile en el país más atrasado y repugnante en el concierto internacional, hasta el punto de que el dictador no era recibido en ningún lugar del mundo, ni en las Filipinas del tirano Marcos ni en las islas Fuji siquiera.

Desde 1974 y hasta 1989, la ONU condenó el régimen de opresión y criminalidad subsistente en Chile, en que el pueblo careció de salvaguardas constitucionales y judiciales adecuadas a sus derechos y libertades, y sufrió atentados contra la libertad e integridad personales, en particular por métodos de intimidación sistemática, incluida la tortura, la desaparición de personas por motivos políticos, las detenciones, los encarcelamientos arbitrarios, la privación de la nacionalidad y la negativa a realizar investigaciones serias de los casos señalados por la propia organización mundial.

Las Naciones Unidas denunciaron también el nuevo sistema de intimidación que sustituyó en cierta medida a las detenciones en gran escala de adversarios políticos, mediante el cual la dictadura trató de controlar las actividades "políticas" de los sectores populares. Se trata de detenciones y torturas breves, a las que seguía el hostigamiento constante de las personas afectadas y sus familias. Destacó también la

incapacidad o renuencia del sistema judicial para proteger la libertad y la seguridad de las personas o para someter a juicio y castigar a los responsables de los crímenes. El poder judicial transfirió, en los hechos, sus atribuciones al poder ejecutivo ejercido por la dictadura, convirtiéndose los ministros de la Corte Suprema en simples agentes de aquélla.

Durante todos esos años, continuó denunciando la retención de personas en centros de detención controlados por los organismos de "seguridad", en virtud del estado de sitio y con arreglo a decretos del ministerio del interior. Asimismo, criticó la falta de respeto al derecho a un juicio imparcial a las personas detenidas, dado que incluso cuando se les acusa de un delito común, como el secuestro, las pueden juzgar tribunales militares de "tiempos de guerra", procedimiento en que no se protegían ni siquiera los derechos más elementales de los acusados. A ello se unía la negativa de la dictadura a procesar y castigar a los responsables de la "desaparición" y tortura de los detenidos políticos. El poder judicial, en suma, al servicio de la dictadura, amparó la impunidad de todos los crímenes del sistema de dominación burguesa.

Las Naciones Unidas pasaron revista a otros aspectos de este régimen de opresión. El sistema de enseñanza seguía sometido a un rígido control, modificándose los programas de estudio a fin de impedir la discusión de temas que podían contradecir la ideología del régimen vigente, al tiempo que se introducían nuevas asignaturas orientadas a fomentar el concepto de la *seguridad nacional* como cuestión primordial. El costo de la educación, que tradicionalmente soportaba en importante medida el Estado, se traspasó en gran parte a los propios estudiantes. El resultado final de este cambio, particularmente en un período de crisis económica, privaba de educación a los sectores de más bajos recursos, con infracción a una garantía constitucional más que centenaria. En un régimen sin libertad intelectual, con las ideas regimentadas, se limitaban las posibilidades de desarrollo nacional, en un sistema dentro del cual los jóvenes carecían de toda esperanza.

De igual manera, Naciones Unidas acusó a la dictadura de aplicar políticas y programas económico-sociales sucesivos que afectaban negativamente a los estratos más pobres de la sociedad. Las restricciones al ejercicio de los derechos sindicales y el control regresivo de los salarios en una situación de inflación creciente, llevó a una pobreza muy extendida. En sustitución de los representantes libremente elegidos en los sindicatos, las autoridades dictatoriales designaron a funcionarios que no reflejaban los intereses de la comunidad, a la que se suponía representaban. La reducción de los gastos públicos en servicios de salud y la reestructuración de los programas de atención en este ámbito, deterioraron los servicios médicos. Los

despidos y emigración de personal técnico, conjuntamente con la incapacidad económica de los estratos más pobres para proveerse una alimentación suficiente, habían agravado la situación.

La OEA se ocupó igualmente de la pavorosa situación chilena. La Comisión de Derechos Humanos de esa organización visitó Chile del 22 de julio al 2 de agosto de 1974, emitiendo a fines del mismo año un informe considerado en la Asamblea General de la entidad, celebrada en Washington entre el 8 y el 10 de mayo de 1975, acordando la prórroga de su examen hasta la asamblea de mayo de 1976. La Comisión, junto con tomar conocimiento de las más horribles torturas, especialmente en el caso de mujeres, llegó a conclusiones definitivas sobre atentados contra los siguientes derechos humanos básicos proclamados en documentos internacionales suscritos por el Estado chileno:

a) Derecho a la vida. Si bien habían cesado ya los fusilamientos sin juicio previo y la aplicación de la "ley de fuga", no estaba debidamente amparado el derecho a la vida ante la actuación de "consejos de guerra", sin garantías legales (véase el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

b) Derecho a la integridad personal. Este derecho había sido y era gravemente vulnerado por la práctica de apremios físicos y psicológicos, así como de tratos crueles e inhumanos (véanse los Artículos 1 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

c) Derecho a la libertad personal. A diez meses del golpe mlitar, había aun alrededor de 5 500 personas privadas de su libertad, según cifras suministradas por la propia dictadura. A muchas de ellas no se les había formulado cargos ni se les había puesto a disposición de la justicia, así como existían además muchas otras personas desaparecidas, sin saberse si estaban vivas o muertas (véanse Artículos 8 y 25 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

d) Recurso de amparo o *habeas corpus.* Carecía de toda eficacia ya que los tribunales daban por ciertas sin más explicaciones las respuestas de la dictadura en el sentido de que las personas estaban detenidas "en virtud de las atribuciones que confiere el estado de sitio" o que no estaban detenidas. No se exigía la presentación de los detenidos para verificar si estaban con vida o para saber dónde se cumplía su detención, etc. (véase Articulo 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

e) Garantías del debido proceso. En numerosos casos se habían violado y se violaba el derecho a ser juzgado por un tribunal establecido por ley anterior al

hecho de la causa y, en general, el derecho a un proceso regular. La aplicación retroactiva del "estado de guerra" ha constituido un flagrante atentado a derechos fundamentales, como también el funcionamiento de los "consejos de guerra" configuraba una violación masiva de las garantías del debido proceso (veáse Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

f) Libertad de expresión y comunicación. Ninguno de los medios de comunicación social gozaba de libertad para difundir el pensamiento ni para informar al pueblo, ya que ellos se movían entre los extremos de la censura oficial y la autocensura. En general, por esos medios, sólo podían circular las ideas y noticias aprobadas por las autoridades (véase Artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

g) Derecho de reunión. Este derecho estaba prácticamente suspendido en todos los casos, ya se tratara de reuniones políticas, sindicales o de cualquier otro orden, con excepción de las actividades de los militares y de los patrones (véase Artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

h) Libertad de asociación. Los partidos, entidades, organizaciones y movimientos políticos habían sido disueltos o declarados "en receso", lo que significaba la prohibición de toda forma de actividad política en sentido lato. A otras asociaciones, como por ejemplo, los sindicatos, se les impedía toda acción (véase Artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

i) Libertad de opinión e igualdad ante la ley. El marxismo, en conformidad con lo dispuesto en el decreto-ley N° 177, era considerado como una infracción penal. Todo individuo que profesaba esta ideología era, por lo tanto, un delincuente. Así, la comisión de un mismo acto, en igualdad de circunstancias, podía dar lugar a consecuencias jurídicas diferentes en razón de las personas que hubieran cumplido tal acto, o de su ideología política, sin que ninguna regla de justicia o racionalidad alcanzara para justificar esa disparidad de tratamientos (véanse Artículos 2, 4 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

j) Derechos políticos. Todos ellos estaban abolidos. La supresión de los órganos de carácter representativo se acompañó con la destrucción de los registros electorales, cuya reconstrucción sería obra de años, por lo cual no se vislumbraba la posibilidad de un retorno más o menos rápido a la normalidad institucional (véanse Artículos 20 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre).

La OEA volvió a ocuparse de la situación chilena. En el informe de su Comisión de Derechos Humanos presentado ante su Asamblea General realizada en La Paz en septiembre de 1979 se estableció que "la situación de otros derechos considerados en la Declaración Americana de Derechos del Hombre —principalmente los derechos a la libertad física, a la justicia y a un proceso regular, a la libertad de expresión del pensamiento y de información, al derecho de reunión y asociación y los derechos políticos— permanece estacionaria con respecto a los años anteriores, persistiendo las severas restricciones para el ejercicio de tales derechos."

Dejó constancia por otra parte que Chile seguía virtualmente bajo estado de sitio y que la autoamnistía aprobada por decreto ley N° 2.191 de 1978 "no varió fundamentalmente la situación de los disidentes del régimen militar", así como que la dictadura no cumplió su promesa de junio de ese mismo año de investigar "la suerte de cada una de las personas cuyo desaparecimiento ha sido acreditado ante organismos competentes". Señaló además, que todos los decretos que declararon en estado de emergencia al país cada seis meses, no guardaban ninguna relación con la causal de "calamidad pública" con la cual se justificaban, y anotaba que con todas las atribuciones conferidas a la autoridad "el estado de emergencia vigente presentaba una extraordinaria similitud con el estado de sitio que regía anteriormente".

Este informe formuló finalmente cuatro recomendaciones, a manera de conclusiones: adoptar las medidas necesarias para un pronto y definitivo esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos, posibilitar el regreso de todos los exiliados, derogar el estado de emergencia y modificar la legislación de excepción a fin de permitir un efectivo goce de los derechos a la libertad física, a la justicia y a un proceso regular, a la libertad de expresión del pensamiento y de información, y al derecho de reunión y de asociación, y dar los pasos necesarios para el restablecimiento del régimen democrático representativo. La OEA reiteró en informes y reuniones posteriores estas denuncias y demandas a la dictadura.

La Organización Internacional del Trabajo se ocupó también desde el primer momento del golpe militar, a través de su Comisión de Derechos Humanos presidida por el ex presidente del Perú José L. Bustamante y Rivero. Luego de una visita realizada a Chile entre el 28 de noviembre y el 19 de diciembre de 1974 y al conocer entonces las violaciones a los derechos sindicales cometidos por la dictadura, la citada comisión emitió un informe preliminar dirigido a la misma dictadura, por el cual confirmó todas las graves denuncias sobre atropello a los derechos humanos relacionados con el ejercicio de las actividades sindicales y, en particular, con la libertad, la vida y la integridad física de numerosos dirigentes sindicales. Entre los muertos, los condenados sumariamente a penas severas y las víctimas de malos tra-

tos durante los interrogatorios, figuraban muchos sindicalistas, por lo que el informe reclamaba la libertad, el sometimiento a juicio de acuerdo a garantías procesales ordinarias, así como el cese de los apremios ilegítimos.

Este documento destacó, además, la disolución de la Central Unica de Trabajadores por decreto ley, la restricción de la actividad sindical y las prohibiciones relativas a la presentación de pliegos de peticiones, la negociación colectiva y el derecho de huelga. En la mayoría de las organizaciones sindicales, continuaban antiguos dirigentes o sus direcciones estaban a cargo de tres miembros nombrados por regla entre los trabajadores más antiguos, en virtud del decreto ley N° 198. Asimismo, subsistían algunas federaciones y confederaciones con cambios más o menos importantes en sus directorios. No obstante, otras organizaciones, principalmente en el sector agrícola y docente, habían sido disueltas o ya no funcionaban.

La OIT planteó por último que el restablecimiento pleno de la libertad sindical requería, entre otras cosas, la revisión de las diversas restricciones mencionadas, así como la reanudación pronta de la práctica de la negociación colectiva, a fin de que las organizaciones sindicales pudieran representar eficazmente los intereses de los trabajadores.

El Consejo de Administración de la OIT hizo público el 31 de mayo de 1975, el informe final de su Comisión de Investigación en materia de libertad sindical, instituida para ocuparse del caso de Chile. En sus conclusiones, este informe estableció lo siguiente:

a) Disolución de la Central Única de Trabajadores. Esta decisión de la dictadura no estuvo conforme con los principios de la libertad sindical, en virtud de los cuales se había organizado en 1953 y funcionado desde entonces y hasta el golpe militar.

b) Muerte y ejecución de dirigentes. Numerosos dirigentes y ex dirigentes sindicales fueron asesinados a partir del 11 de septiembre de 1973. Estas muertes se produjeron ya sea por ejecución, con o sin proceso previo, por aplicación de la "ley de fuga" y como resultado de las torturas sufridas o en otras circunstancias.

c) Detención de dirigentes. De igual manera, fueron numerosos también los sindicalistas detenidos, interrogados y luego liberados, así como de nuevo arrestados. Muchos de ellos continuaron presos o fueron "desaparecidos", lo que equivale a ejecutarlos sin proceso alguno, generando un sentimiento de inseguridad y temor.

d) Despidos de dirigentes. La dictadura despidió a numerosos dirigentes sindicales de sus empleos, sufriendo otros tantos presión para que renunciaran al

ejercicio de sus funciones sindicales. El fuero sindical que protegía a los dirigentes de ciertas organizaciones del sector público fue suspendido, así como los del sector privado.

e) Dirección de las organizaciones. Más del 50% de un total de 35 mil cargos sindicales existentes en el país al 11 de septiembre de 1973 quedaron vacantes por muerte, ejecución, arresto, despido, renuncia al empleo o a sus cargos sindicales, prohibición de ejercerlos, exilio o desaparición (asesinato).

f) Actividades sindicales. Las actividades normales de las organizaciones sindicales, tanto en lo que se refiere a su gestión interna como las que conciernen a la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores, fueron restringidas. Entre estas restricciones cabe señalar la prohibición de elecciones, el control policial de las reuniones, la suspensión de la presentación de pliegos de peticiones y de la negociación colectiva, así como la prohibición del ejercicio del derecho de huelga.

Como resultado del informe anterior, la 60 Conferencia de la OIT aprobó el 24 de junio de 1975 una declaración en que expresó que se encontraba (gravemente preocupada por la situación existente en Chile y por el menoscabo de los derechos humanos y sindicales de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Esta conferencia solicitó a la dictadura poner fin a las torturas, liberar a los militantes sindicales y derogar una gran parte de la nueva legislación dictada. Esta resolución precipitó el retiro de la delegación oficial de la dictadura de la Asamblea. Pero los representantes de los trabajadores participantes invitaron a las organizaciones sindicales del mundo a concertar acciones para proseguir su esfuerzo de solidaridad y por lo mismo hacerlo más concreto y eficaz.

La 61 Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial se realizó en Tokio, del 2 al 11 de octubre de 1974, y aprobó una resolución por la cual reclamó "el restablecimiento de las instituciones representativas, de los derechos y libertades constitucionales y la libertad de los parlamentarios y otros detenidos en Chile". Dejó constancia de su preocupación por el derrocamiento del régimen constitucional, así como la supresión de los derechos y libertades de los ciudadanos, en flagrante contradicción con las normas y principios que figuran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Cívicos y Políticos, ratificados por la República de Chile en 1972. Posteriormerte, el Consejo de esta entidad aprobó, en su sesión 116, celebrada en Colombo el 5 de abril de 1975, una nueva resolución condenatoria de la dictadura chilena, y continuó haciéndolo en sus reuniones posteriores.

En su informe, aprobado en Ginebra durante los días 26 y 27 de febrero de 1975, el Comité *ad hoc* designado por la 61 Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial dejó constancia del rechazo de la dictadura a la visita proyectada, y expresó que "actualmente en Chile no existe ningún Estado de derecho y el gobierno continúa suprimiendo las libertades y derechos fundamentales, efectuando, para justificar sus acciones, modificaciones ilegales a la constitución, a través de decretos-leyes que hasta tienen efecto retroactivo, y usando otros métodos señalados en el análisis".

Este informe recomendó al Consejo Interparlamentario urgir a la dictadura para: *1)* poner término inmediatamente a los arrestos arbitrarios, a las torturas y a las ejecuciones; *2)* dejar en libertad de inmediato a los presos políticos, cumpliendo así con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; *3)* restaurar la vigencia de todos los principios de la Constitución Política de Chile, especialmente aquellos artículos que establecen un sistema judicial competente, un adecuado sistema de apelaciones, el derecho de amparo y el respeto del período máximo de incomunicación. El texto de la resolución aprobada por el Consejo en su sesión 116, celebrada en Colombo el 5 de abril de 1975, condenó una vez más a la dictadura chilena.

Dos años después, el Consejo de esta entidad, reunido en Canberra el 15 de abril de 1977, aprobó una nueva condena en contra del régimen tiránico establecido en Chile. En ella se sostuvo que la opresión no se había modificado fundamentalmente, sino incluso se había agravado con posterioridad al examen de esta cuestión por el Consejo Interparlamentario en 1975 y 1976. Esta resolución declaró nuevamente, que no existía un Estado de derecho en nuestro país y por lo tanto la población continuaba viviendo bajo el imperio del terror, caracterizado por las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los encarcelamientos en lugares secretos, la práctica de la tortura a través de métodos cada vez más refinados, los asesinatos y las expulsiones. Los derechos y libertades fundamentales de los sindicatos seguían violándose, no había libertad de opinión ni de expresión, y el nivel de vida de la población se había degradado más en detrimento de las clases más pobres.

Capitalismo salvaje

Nueva crisis económica

La estrategia de terror expuesta en las páginas anteriores no se concibió y llevó a cabo en vano, sino que estuvo dirigida a crear las condiciones objetivas y subjetivas para establecer y consolidar un capitalismo salvaje, propio e inherente a los países subdesarrollados. Es el sistema impuesto por el imperialismo en las áreas geográficas más atrasadas del mundo. Chile no podía escapar a esta política. Para analizar la situación económica, se requiere partir de la existencia de una dictadura que se prolongó por más de dieciséis años. A su vez, esa dictadura fue la salida militar que tuvo en 1973 una crisis anterior del Estado, motivada por la agudización de la lucha de clases, a través de la cual los trabajadores, en un avance continuo e incesante, desafiaron al capitalismo dependiente y a la institucionalidad burguesa. Desde entonces y hasta fines de la década de los ochenta, el país ingresa a un nuevo período caracterizado por los agudos procesos de centralización y concentración de la economía, así como de represión reaccionarias. En pocos países de América Latina fueron más evidentes los extremos de violencia y crueldad a que puede llegar el terrorismo de Estado. Como ya se ha dicho, el "trabajo sucio", es decir, la represión y el genocidio estuvieron a cargo de los militares, pero la gestión económica fue realizada por los empresarios. Fue el segundo gobierno de los "gerentes", después del de Jorge Alessandri (1958-1964), pero esta vez mediante las armas.

Por lo mismo, en el cuadro general de la crisis en América Latina, la de Chile exhibe sus propias peculiaridades, las que encuentran sus raíces en su evolución histórica, en un pasado que se remonta muchos años atrás. En la experiencia económica y política de varias décadas, en la que se combinó un apreciable impulso al desarrollo económico y social, tanto en el marco de la democracia como tam-

bien en la práctica de la dictadura. Por la esencia reaccionaria del sistema de dominación, sus políticas contribuyeron a la conversión de las sucesivas recesiones del capitalismo en una crisis social permanente. Por ello no existe perspectiva alguna de superación de la misma mientras persista el modelo económico basado en la sobreexplotación de los trabajadores, que sólo puede funcionar con un régimen represivo.

Desde este punto de vista, no interesa tanto orientar el análisis de la situación vivida entre 1973 y 1989 hacia los aspectos teóricos y los criterios técnicos con que se enfocaron los problemas concretos del capitalismo, sino centrarlo principalmente en las relaciones de clase, para poder discernir qué sectores sociales son los que se beneficiaron con las políticas y acciones de la dictadura y contra cuáles estuvieron dirigidas. No obstante ser inevitable referirse a determinadas orientaciones económicas y a cuestiones como el ahorro interno, la inversión, la deuda externa, las exportaciones e importaciones, etcétera. Lo que se plantea en Chile como el problema principal es la perpetuación del modelo económico, los medios para enfrentarla y las propuestas alternativas para el futuro inmediato.

En tal predicamento es necesario partir de una caracterización, por somera que sea, de la evolución económica durante dicho período. En efecto, luego del golpe militar y el subsecuente debilitamiento de las organizaciones políticas y sindicales del movimiento popular—precisamente por esas circunstancias— las pugnas interburguesas por el aprovechamiento de los excedentes económicos adquirieron ribetes de ferocidad inusitada. Chile estuvo lejos de ser el reino de la libre competencia que los apologistas del sistema de dominación se esforzaron durante mucho tiempo en mostrar. La llamada economía de mercado ha significado el paraíso para los sectores monopólicos y el infierno para los trabajadores, por lo que hablar de "sociedad libre" en medio del terror y la muerte es, a lo menos, un sarcasmo, si no se quiere presentar como lo que realmente es: una burla cruenta.

Por las características estructurales de la economía nacional y el débil desarrollo que históricamente permitió la estrechez de la base capitalista a las distintas fracciones burguesas, el control del aparato estatal, especialmente en condiciones de clausura del régimen democrático, y la creación de un nuevo sistema hegemónico en el interior del bloque social dominante fueron medios fundamentales para dirimir sus persistentes contradicciones. En esta perspectiva, el sector financiero de la oligarquía impuso *manu militan* un nuevo orden económico, sustentado en la sobreexplotación del trabajo asalariado, el empobrecimiento de las clases intermedias y la ruina incluso de una franja de la propia burguesía industrial. Con este proceso se comenzó a realizar, por medios bárbaros, la profundiziación de la base

capitalista de la sociedad y el Estado en torno a la centralización y concentración de la economía.

Para salvar la crisis de acumulación ya endémica, la dictadura promovió un profundo cambio en la estructura económica del país. Sus rasgos principales pueden sintetizarse en la apertura de las más amplias facilidades a las inversiones extranjeras, el desmantelamiento del Estado empresario, el traslado de las funciones económicas y de servicios públicos al área privada, la libertad absoluta de precios, el congelamiento de los salarios y el libre cambio en materia de comercio exterior. En suma, el más puro neoliberalismo económico. El conjunto de estos rasgos estructurales produjo, por eso, un vuelco en la orientación del Estado, reduciendo su intervención en la economía y transformando al mercado en el centro regulador de estas actividades y de sus beneficios, pero ampliando su acción en la esfera política mediante la represión.

La dictadura surgió entonces como la respuesta histórica del capital financiero a la crisis del antiguo padrón o modelo de acumulación en que se asentaba nuestra convivencia democrática de varias décadas. Por lo mismo, su orientación fue coherente con las exigencias generales de reestructuración del sistema de división internacional del trabajo, impuestas por las persistentes tendencias recesivas de la industria capitalista, los crecientes déficit comerciales de Estados Unidos y el deterioro del sistema monetario internacional basado en el dólar, ante el arrollador empuje de las exportaciones japonesas y germano-occidentales. Por lo anterior, las sucesivas crisis recesivas del capitalismo mundial repercutieron con fuerza en la economía chilena durante las décadas de los años setenta y ochenta.

Dicha respuesta surgió además en condiciones políticas muy concretas. El agotamiento de la base tradicional de reproducción ampliada del capital activó a los sectores populares, los que lucharon insistentemente desde 1967 por sus derechos, derrotando los proyectos del gobierno de Frei Montalva por hacer recaer sobre sus espaldas los efectos de la crisis capitalista nacional e internacional. Con su movilización abrieron paso a un gobierno de izquierda que no tenía por objeto volver a soldar institucionalmente la crisis en las alturas sino que debía cambiar las bases de la sociedad y, por consiguiente, construir un nuevo sistema bajo la hegemonía del movimiento popular.

La incapacidad de las clases dominantes para continuar viviendo a la antigua manera, bajo la presión de los trabajadores, produjo la crisis política del Estado chileno. Pero dada la carencia de una dirección adecuada, esa crisis no se tradujo en la maduración de una situación revolucionaria. Por el contrario, trajo consigo la derrota de los trabajadores y la instauración de un régimen dictatorial, que se dirigió

abiertamente a superar la situación mediante la liberación de las fuerzas económicas y sociales que sustituirán aquel padrón de reproducción capitalista ya agotado. Para eso, aquellas clases hicieron uso de las armas para aplastar toda resistencia popular.

El nuevo padrón de acumulación impuesto por la dictadura fue concentrador y excluyente. Lo primero, porque se basaba en el desarrollo de algunos sectores productivos en perjuicio de otros, al tiempo que promovía la reestructuración del mercado interno de modo que el consumo de los sectores de ingresos altos y medios pasó a ser determinante, privilegiando además la producción para la exportación, particularmente de bienes no tradicionales. Fue excluyente porque significó la sobreexplotación de los obreros mediante salarios bajos, extensión de la jornada laboral, incremento de la productividad del trabajo, desempleo y subempleo, así como por su marginación de la actividad política y sindical realizada en el pasado inmediato, esto es, hasta 1973.

En otra parte de este análisis se precisa el alto grado de empobrecimiento a que este modelo económico condujo a los trabajadores, degradando sus condiciones laborales, de consumo y, en general, de calidad de vida conquistadas hasta 1973. Por ahora, conjuntamente con registrar esta situación, es necesario agregar que algunos significativos sectores medios y empresariales fueron también excluidos de los beneficios del desarrollo puesto en práctica por la dictadura. Todo ello explica la reducción de la base social de apoyo y la ampliación del espectro opositor, hasta constituirse en mayoría electoral en el plebiscito de octubre de 1988.

El procedo social impulsado por la dictadura se parece en muchos aspectos a una tardía fase de acumulación originaria, imposible por lo demás de ser consumada nacionalmente, dadas las tendencias generales a la internacionalización del capital y de los procesos de producción y comercialización. La expoliación de ciertos sectores burgueses industriales y mercantiles constituyó por lo mismo una condición fundamental para operar la transferencia de recursos de capital a los consorcios financieros. Este proceso permitió que fueran ellos los beneficiarios de la centralización y concentración capitalistas, no sólo en cuanto a la masa disponible de capital interno sino como asociación subordinada con los intereses del capital imperialista. Este proceso explica la ola de quiebras de pequeñas y medianas empresas agrícolas e industriales en esos años.

Sólo este contexto económico y social hizo razonable en la lógica oligárquica el fin de los subsidios compensatorios a la industria y la agricultura, y su desprotección general por la vía de la rebaja de los aranceles y la desnacionalización generalizada de la economía. Porque se trató de operar una profunda y decisiva reorgani-

zación de las bases capitalistas de la sociedad chilena, íntimamente relacionada con la reformulación de las bases políticas de la dominación oligárquica, es decir, de la estructura institucional del Estado. Este proceso no constituyó en caso alguno un avance social, sino que representó sólo la readecuación de las clases dominantes a las nuevas condiciones generales del período, manteniendo su poderío económico y el control del Estado, desde el cual se sometió a sangre y fuego a la avanzada clase trabajadora chilena.

Diversas fases en la gestión económica

El modelo económico neoliberal ejecutado por la dictadura presentó tres fases, con características y modalidades diferentes, aunque integradas en los marcos generales que le dieron unidad interna y continuidad en el tiempo. Los objetivos generales y específicos y la Ímplementación de éstos en políticas no estuvieron sujetos sólo a los principios del neoliberalismo, sino que su conversión en acciones dependió, en cada fase, de las condiciones presentadas por las coyunturas interna y externa. Por eso, la gestión económica experimentó cambios y adaptaciones según la evolución de la economía mundial y las crisis recesivas que se desencadenaron sobre ésta.

La primera fase comprende los años 1973-1976, durante los cuales se atendieron diversos problemas relacionados con el ajuste de la situación preexistente y la puesta en marcha del nuevo modelo. Sobre la base de la confianza en que las fuerzas del mercado sanearían la economía, se estableció la libertad de precios y se congelaron los salarios, concediendo reducidos reajustes ante un brutal aumento de la inflación. El mercado negro y la escasez de productos de primera necesidad provocados artificialmente por la oligarquía conspiradora en el último año del gobierno de Allende desaparecieron de inmediato en el comercio con la libertad de precios, pero los trabajadores, con sus remuneraciones reducidas, no tuvieron acceso a ellos, aumentando la pobreza, que generó e incluso el hambre entre los desocupados.

La recuperación de la actividad productiva se obtuvo con facilidad si se tiene en cuenta que las fuentes de trabajo estaban en general sanas, sólo afectadas por el boicot interno y externo desatados por la oligarquía y el imperialismo, que en ese momento había cesado con ocasión del golpe militar. Se devaluó la moneda mediante la elevación del tipo de cambio y la aplicación de una política de devaluaciones constantes, con lo cual los asaltantes del poder obtuvieron nuevos préstamos externos y renegociaron en forma expedita la deuda externa, que entonces ascendía a po-

co más de 3 800 millones de dólares, resolviéndose los problemas más urgentes de divisas y balanza de pagos.

La dictadura preparó enseguida los cimientos para su proyecto económico de largo plazo por medio de numerosas medidas aplicadas rigurosamente. Entre las más importantes, cabe destacar el nuevo trato al capital extranjero, la reforma tributaria en favor de las empresas, la creación de un mercado de capitales, las facilidades para la exportación, la reversión de la reforma agraria, la devolución y venta de empresas públicas, la reestructuración de la administración pública con reducción del personal civil, etc. Tal fue sólo el comienzo del proyecto económico, porque ése se fue afinando durante todo el período de la dictadura.

Con la misma deshumanización con la que se empleaba la represión para controlar al movimiento popular, se aplicó el tratamiento de *shock* que aceleró el llamado programa de recuperación económica, que perseguía la eliminación del déficit fiscal a través de la reducción del gasto público y la solución de los problemas de balanza de pagos. Este programa trató de controlar también la inflación, que había alcanzado índices muy altos en los años 1974 y 1975. El producto geográfico bruto (PGB) había retrocedido casi 15%, correspondiendo al nivel de hacía quince años, la desocupación era superior a 20%, las remuneraciones reales equivalían a la mitad de las del período 1970-1973, el gasto social había caído a. niveles desconocidos en el pasado inmediato. En cambio, los ricos se hacían cada vez más ricos.

La segunda fase comprende los años 1977-1983, en los cuales la economía experimentó una recuperación para volver a sufrir una crisis al final del período. Este proceso fue una combinación de realidad y fantasía. Después de la profunda caída experimentada en la fase anterior, esta economía no podía menos que recuperarse, como lo demostraron las tasas de crecimiento que alcanzaron el 6% anual, llegando en el año 1979 al nivel del logrado hacía diez años (1970). Ertonces se empezó a hablar del "milagro chileno". Desde entonces se recorrió un proceso consumista conocido como el *boom,* que se prolongó hasta 1981, cuando fue abatido por una nueva crisis recesiva.

Durante esos años, el supuesto éxito se expresaba en algunos indicadores. La inflación había descendido de 100% en 1977, a un nivel oscilante entre 30 y 40% en los tres años siguientes. El déficit fiscal, que desde 1975 había experimentado reducciones apreciables, se convirtió en superávit entre los años 1979-1981. Una avalancha de créditos externos se dejó caer principalmente sobre el sector privado, alcanzando en ese último año a 4 326 millones de dólares, es decir, en un solo año se recibió una cifra superior a la deuda externa acumulada en toda la historia de Chile. El precio del cobre subió a 90 centavos de dólar la libra en 1979 y a 100 en 1980.

Tal fue la base material de la orgía especulativa de esos años, que el propio Pinochet calificó de economía de papel.

El derrumbe se produjo a partir de 1982 por una nueva crisis recesiva similar a la experimentada en 1975. De nuevo el producto tuvo un descenso de aproximadamente 15% en 1982, las tasas de desocupación que se habían estabilizado entre 17 y 19% ascendieron entonces a 30%, las remuneraciones reales de los asalariados, que también habían tenido una ligera recuperación, retrocedieron a los niveles de los años 1978-79. Por su parte, se sucedieron las quiebras de empresas y el aparato financiero, orgullo de la clase dominante, hizo explosión, por lo que el gobierno intervino para hacerse cargo de sus pasivos, con un espíritu de solidaridad que nunca tuvo con los trabajadores en los años de una mayor sobreexplotación y pobreza.

La gravedad de esta crisis hizo necesaria la revisión de diversas políticas y la revocación de muchas medida que configuraban el modelo económico. Entre ellas, hay que señalar la reconsideración de la reducción de aranceles de importación y de disposiciones de desamparo que afectaban a los sectores agrícola e industrial en virtud de los principios de "sana competencia" y de "ventajas comparativas". Asimismo se modificó el tipo de cambio, que se había mantenido fijo desde 1979, facilitando las maniobras especulativas del sector financiero. Como siempre, el peso de esta nueva crisis recayó sobre los trabajadores, al aumentar la desocupación y reducirse las remuneraciones reales.

La tercera fase comprende los años 1984-1990, a través de la cual se realizó una lenta recuperación de la crisis recesiva iniciada en 1982, de características similares a la crisis anterior. Este proceso puede apreciarse también a través de algunos indicadores. El producto geográfico bruto logró en 1987 igual nivel que en 1979, equivalente a más o menos al de 1970. El crédito externo neto se redujo en gran medida debido a que los nuevos préstamos se destinaron al pago de los intereses de la deuda externa, los cuales presentaron un valor anual equivalente a más del 50% del ingreso por concepto de exportaciones en igual período. De este modo, se consolidó el nuevo ciclo de importar capital y exportar utilidades.

El precio del cobre osciló de nuevo entre 60 y 70 centavos de dólar por libra, elevándose enormemente en 1988 hasta superar 1,50 dólar por libra, lo que vino a favorecer a la economía nacional. Particularmente, si se considera que el precio internacional del petróleo continuó descendiendo en un momento en que la producción nacional de este energético disminuyó la cobertura del consumo interno del 50 al 32% (en 1988). El índice de inflación se mantuvo bajo, entre 18 y 23%, descendiendo aún más este último año. La inversión extranjera cayó de un volumen anual aproximado a 400 millones de dólares en los años 1980-1982 a menos de la mitad en la fase situada entre 1987 y 1988.

En estos últimos años continuó la privatización de la economía, apoderándose de las más importantes empresas públicas los nuevos grupos nacionales y extranjeros que concentran en sus manos la riqueza. En orden financiero, después de una fuerte devaluación inicial, se continuó con la política de mini-devaluaciones semejantes a las de la fase 1974-78, se mantuvo el control de las tasas de interés, la orientación del crédito hacia actividades productivas y la concesión de facilidades para la recuperación de deudas. En la agricultura, además de los incentivos a la producción exportable, se establecieron precios mínimos para el trigo, se restableció la producción remolachera y se ofreció asistencia técnica subsidiada a la pequeña y mediana agricultura.

El robo de una herencia nacional

Karl Marx, como recuerda el profesor Joseph A. Schumpeter en su obra diez grandes economistas: de Marx a Keynes, "rechaza desdeñosamente la fábula infantil (kinderfíbel) de origen burgués que ve en la inteligencia superior, en el espíritu de trabajo y en el ahorro la causa de que algunos individuos, tanto en el pasado como en el presente, se hayan destacado de los demás, llegando a convertirse en capitalistas". Agrega el gran economista Schumpeter:

> La actitud burlona cumplió, sin embargo, su función y contribuyó a abrir el camino a la teoría alternativa de Marx sobre la acumulación primitiva[...] La fuerza, el robo, la subyugación de las masas que posibilita su expoliación y los resultados de pillaje que, a su vez, facilitan la subyugación: todo esto es, por supuesto, cierto y se acomoda además admirablemente a las ideas habituales entre los intelectuales de todo tipo, más aún en nuestro tiempo que en el del propio Marx.

Esta concepción la sostiene también Recabarren, el gran líder obrero chileno, en El Socialismo, un trabajo de difusión política de comienzos del siglo xx. En efecto, para explicar históricamente la transformación social, recurrió como ejemplo a los cambios sucedidos en el mundo moderno, a partir de la Revolución francesa, a través de la cual la burguesía abolió el derecho "divinó" de los reyes y expropió la propiedad feudal para imponer la propiedad individual, mediante la división de los feudos. Confirma este fundamento de las resoluciones, señalando que en América la propiedad oligárquica se constituyó por medio de la violencia y el despojo, en la conquista de los pueblos aborígenes. Las colonias se formaron por los "repartimientos" y "encomiendas" tanto de las tierras como de los pobladores originarios y, en la independencia de España, los criollos expropiaron a los peninsulares o realis-

tas. A lo anterior, habría que agregar que la extrema derecha, con apoyo militar, expropió a la nación de casi toda la capitalización pública en el siglo xx.

El Estado empresario asumió en Chile, en una primera etapa, funciones en la gestión directa de la economía y en la redistribución de ingresos, a fin de suplir y estabilizar la situación del empleo y del crecimiento económico en general, sin olvidar por cierto que él favorecía también a las empresas privadas. Antes de 1970, esta dinámica se insertaba en el marco de modelos de desarrollo en que se cuestionaba o el comportamiento estancado de las inversiones privadas o la penetración de capitales extranjeros. Bajo el gobierno de Allende se desarrolló una segunda etapa, donde la implantación de programas de socialización de la economía determinó una extensión cuantitativa y cualitativa de esta participación del Estado, conformando un área de propiedad social con empresas de todos los sectores (primario, secundario y terciario). Esta era la herencia nacional, conformada por la capitalización pública, producto de la acción política de la izquierda y el sacrificio de los trabajadores.

La dictadura formuló a su vez un modelo de desarrollo orientado, entre otros objetivos, a privatizar dichas empresas y desmantelar el Estado empresario. Este proceso se realizó bajo la exclusiva decisión de los grupos financieros más poderosos, sin plantearse una consulta popular para resolver un problema de tanta importancia social como es la transferencia de la capitalización pública de más de medio siglo a manos privadas. Sin fijar tampoco un marco regulatorio adecuado, lo que dio lugar después a negocios escandalosos. Este despojo nacional se decidió y ejecutó en la cúspide de la dictadura. La mención de este proceso no significa desconocer el papel del Estado en la reproducción del conjunto de la burguesía, sino que se propone destacar cómo la utilización de este instrumento alienta la concentración y centralización capitalistas, fracturando su unidad política e imprimiendo un nuevo carácter al papel del Estado en la organización capitalista de la producción.

La privatización de la economía constituyó uno de los procesos más oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalización alguna, por la falta de independencia de la Contraloría General de la República y de los tribunales de justicia. En su desarrollo, según el economista Gustavo Marín, se distinguen cuatro etapas:

La primera etapa (1973-75) comenzó con la devolución de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralización y el boicot de sus dueños, en su campaña por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. Entonces se pagaron también cuantiosas indemnizaciones a los consorcios estadounidenses, a los cuales se les había expropiado (gran minería del cobre, ITT y otras) que alcanzaron al 315.2 millones de dó-

lares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pagó cantidades superiores a las que estas compañías reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT, a pesar de que la nacionalización del cobre se había realizado constitucionalmente.

Bajo la conducción de la Corporación de Fomento de la Producción, se vendieron empresas que ella administraba en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y sólo en algunos casos rechazadas por sus primitivos dueños, encargándose entonces la misma Corporación de su liquidación o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefinió sus funciones sólo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificación y gestión de las empresas del área social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.

La Empresa Nacional de Minería empleó a su vez procedimientos similares a los definidos por CORFO. Las ventas comprendieron pequeñas y medianas empresas de explotación y procesamiento de minerales. Sólo conservó un porcentaje de la planta de procesamiento (fundición y refinería de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvió a constituirse en un poder ds compra sin operaciones de explotación directa. La Compañía de Acero del Pacífico vendió sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricación de acero y no en su procesamiento.

La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) transfirieron el dominio de todas las propiedades agrícolas bajo su control. En este caso se utilizaron también diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados, revocaciones, que se expresaron en devoluciones de terrenos expropiados, asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la CORA, la que terminó por d solverse. El INDAP se mantuvo, pero con una considerable reducción de sus actividades.

Con este desmantelan!iento de los activos públicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades económicas a no ser que éstas se consideraran necesarias desde el punto de vista estratégico. Sobre esta base, la privatización de la economía resultó, por sobre todas las cosas, en la centralización del poder económico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. Más que en la extensión y expansión del sector empresarial, esta centralización del poder económico se tradujo en el desplazamiento de sectores pequeños y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigi-

lo, sin fiscalización pública y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz pública. Al revés de la expropiación de las empresas de la gran minería por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libro, con la crítica de la derecha, ahora ella vendió las empresas públicas por lo general por debajo de dicho valor.

La extensión y acentuación extrema del proceso centralizador y concentrador de la economía aparece demostrada por la detección de control sobre sociedades anónimas y demás empresas. El simple cruzamiento de la información de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelan!iento del Estado, la privatización de la economía y la acentuación extraordinaria del poder oligopólico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron a partir de entonces en elementos centrales de todo análisis de la economía nacional.[1]

La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesión del primero de estos años y la crisis del segundo, período en el cual la CORFO vendió a través de subasta o propuesta pública sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfirió al sector privado su participación en 16 bancos comerciales. Además, la dictadura realizó más de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes raíces así como más de 3 mil operaciones por ventas de bienes muebles. Las privatizaciones continuaron extendiéndose hasta abarcar diversos sectores de la vida económica y social. La legislación minera, la reorganización de las municipalidades, la modificación de los sistemas de educación, de salud, de previsión social y el plan laboral abrieron paso a la más generalizada privatización de la sociedad.[2] La crisis de 1982 paralizó este proceso de enajenación total, en medio de la bancarrota de algunos de los más voraces grupos económicos, que más habían aprovechado el remate o liquidación de este pequeño país.

La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Como señala Gustavo Marín, durante esta crisis, se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervención estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los más destacados grupos económicos, la oposición de algunos empresarios a las políticas impuestas por la dictadura, la re-

[1] Thomas Dragger, "El desmantelamiento del pool de empresas estatales y la concentración ecnómica en Chile", mimeo. México. 1978.

[2] Gustavo Marín, "Trayectoria de las privatizaciones en Chile durante el régimen dictatorial (1973-1989)" Documento de trabajo N°35. Programa Regional de Investigaciones Económicas y Sociales del Cono Sur. Santiago, 1989.

nuncia transitoria de los Chicago Boys al gabinete, la devaluación de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, Rolf Luders, como biministro de hacienda y economía, y luego la prisión de ambos por sus "irregularidades", la constitución de la Comisión Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larraín, etcétera. La crisis desarticuló el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso: *a)* combinación de nueva estatización y posterior privatización de las actividades económicas, intervención del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatización de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su renegociación, administración de bancos y empresas, *b)* nueva privatización y trasnacionalización del sistema financiero cambiando los bancos de dueños, con incorporación de inversionistas extranjeros y *c)* privatización de las fuentes externas e internas de ahorro e inversión.

La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudación de las privatizaciones y la conversión de deudas en enajenación de activos nacionales, de acuerdo a "recomendaciones" del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Comité de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalización económica y política. Superado el lapso de administración de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la política económica y se realizó el último reparto del 'botín" de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapa, según Gustavo Marín, se emplearon diversos; mecanismos.

1. La privatización del área denominada por los técnicos de la dictadura como "rara". Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta área después de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisión Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudiéndose distinguir las siguientes situaciones: *a)* grandes empresas industriales (COPEC y sus filiales, ccu y sus filiales, INFORSA, INDIS, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial etcétera). Ellas pasaron a manos de grupos económicos locales, que habían sobrevivido a la crisis, y de consorcios trasnacionales a través de la asociación del grupo Angelini con el grupo neozelandés Cárter Holt Harvey (COPEC); de la asociación del grupo Luksic con el consorcio cervecero alemán Paulaner (ccu) y de la asociación del grupo Matte con Fletcher Challenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel), optando el primero por controlar INFORSA. Otros consorcios trasnacionales controlaron sin asociación importantes empresas como Hucke, McKay, Nestlé, Victric Vidrios y Aluminios Lirquén, etcétera, *b)* Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compañías

de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros estadounidenses, como Bankers Trust, Aetna y American International Group, *c)* Las grandes instituciones de crédito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizadas, diseminándose su propiedad.

2. La privatización de grandes empresas públicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Química Minera de Chile (SOQUIMÍCH), Industria Azucarera Nacional (IANSA), Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX), Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), Laboratorios Chile, Empresas Eléctricas Metropolitana, Quinta Región, Chilectra Generación, de Melipilla y de Coquimbo, Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), Telex Chile. Además, Empresa Nacional de Comunicaciones (ECOM), Empresas eléctricas de Tarapacá, del Norte, de Aysén, de Magallanes, Hidroeléctrica de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún-Machicura, Pehuenche, Línea Aérea Nacional (LAN Chile), Instituto de Seguros del Estado, Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), Carbonífera Schwager, Chile Films, Sociedad Chilena del Libro.

3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito del año 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de "capitalismo popular", con la cual se privatizaron algunas empresas energéticas en las regiones u otras en que participó personal de las Fuerzas Armadas, como la Compañía de Teléfonos de Chile y ENDESA. En agosto de 1989, un balance de la progresión de este proceso referido a las 29 empresas públicas "privatizables" a mediados de 1985, expresaba: *a)* al 30 de septiembre de 1988, 13 de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatización; *b)* después del plebiscito de octubre de 1988 se completó la privatización de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y EDELNOR; *C)* en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se habían traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas, fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado, privatizándose por partes (carga) y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como CODELCO O el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del régimen, tanto en aquellas como en ENAP, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.

María Olivia Monckeberg investigó un grupo de las últimas empresas privatizadas y tuvo el valor de desenmascarar esta operación en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Ella expresa:

> El último gabinete de Pinochet que asumió a fines de octubre de ese histórico año 1988, después del triunfo del "No" en el plebiscito, tuvo un carácter marcadamente economicista. Junto a Hernán Büchi, como jefe del equipo económico, a Sergio Melnick en ODEPLAN y a Juan Antonio Guzmán en educación, se sumaron otros hombres de la alianza Chicago-militares como Carlos Cáceres en interior, Pablo Barahona en economía y Hernán Felipe Errázuriz en relaciones exteriores. El objetivo estratégico de ese equipo estaba a la vista: asegurar la proyección de la "obra del régimen". Trasladar las empresas a manos de quienes habían detentado el poder en esos años fue su norte. Y para eso aplicaron el acelerador a fondo."[3]

Este último gabinete del "padrino" completó el programa de privatizaciones iniciado en la década anterior, aunque no alcanzó a extenderlo a otras presas mayores, como CODELCO, Empresa Nacional de Petróleo, Banco del Estado y TVN. Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante "sociedades de papel" como Pampa Calichera en SOQUIMICH y las Chispitas 1 y 2 de CHILECTRA. Para impedir la oposición de los sindicatos, se les vendió a los trabajadores de cada empresa una pequeña cantidad de acciones, operación calificada de capitalismo popular. Extraña paradoja: las empresas públicas las compraron, por lo general, los mismos vendedores.

La CAP fue fundada por CORFO en la década de los cuarenta. Aunque el Estado tuvo una determinación decisiva tanto en la formulación del proyecto como en el financiamiento, se le concedió mayoría al sector privado (53% contra 47%). Pero, en 1968 el Estado pasó a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenecía a él, a través de CORFO. En el proceso de privatización, se transfirió primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986 por un valor de venta de 40 millones de dólares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de dólares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despojó de esta enorme proporción al Estado. Estudios posteriores, entre otros, del Programa de Economía del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company calcularon una pérdida de 99 a 223 millones de dólares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de CAP favoreció a grupos de ejecutivos que usaron información privilegiada y se privatizaron con la empresa.[4] El caso más destacado

[3] María Olivia Monckeberg, *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno,* Santiago, Ediciones B. Chile S.A., 2001, pág. 61.

[4] *Ibidem,* pág. 63.

en esta privatización fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, quien recibió el apoyo de los ministros de hacienda, Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hernán Büchi sucesivamente. La privatización se completó en 1987.

La Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la CORFO y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorporó al área social y en la dictadura de Pinochet pasó a manos de su yerno Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no tenía capital alguno pero sí una audacia increíble. El proceso fue similar al de CAP. El suegro lo nombró presidente después de desempeñar otros cargos tanto en CORFO como en diversos organismos públicos en 1980, desempeñándose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesión, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou formó "sociedades de papel" como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de SOQUIMICH hasta 1988, año en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S. A. Como en el caso de CAP, la Contraloría emitió un informe sobre la enajenación de aquella empresa química y minera, entre 1983 y 1988, en el que establece las pérdidas de CORFO, la que "obtuvo un precio por acción inferior a los valores estimados ya que sólo registró ingresos equivalentes al 29 por ciento, 53 por ciento y 59% por ciento de la proyección de los años 1986, 1987 y 1988 respectivamente." Este despojo del patrimonio público fue espectacular. Así lo sostiene María Olivia Monckeberg: "La Contraloría agregó que CORFO vendió en los años 1983 a 1988 el total de su inversión en esta empresa (123 millones 490 mil acciones) en un monto de 119 982 594 dólares". Y señaló que "de mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del último año, obtendría por concepto de dividendos en 2.5 períodos aproximadamente ese valor". El subsidio público para Ponce Lerou y su grupo fue de 76.4% apoderándose además de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.[5]

La Industria Azucarera Nacional (IANSA) fue creada por la CORFO en 1952, con plantas en Los Angeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chillan, Rapaco y Curicó. La pivatización adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitación pública, a un precio 21% inferior al valor de la bolsa. En 1988 se acordó vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todavía poseía la CORFO y en seguida directamente el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: "De acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contraloría General de la República, las ventas directas de acciones de IANSA sumaron 33 659 106 dólares, lo que

[5] *Ibidem,* pág. 104.

significó pérdidas netas que alcanzaron a un monto de 47 628 514 dólares". La misma autora agrega que, según un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988 se vendieron 2 606 947 acciones, es decir, el 80.6% de la empresa, con un subsidio implícito de 186.7% en favor de quienes se quedaron con la empresa.[5]

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) fue fundada por la CORFO en 1943, para impulsar la producción de energía, tan necesaria para el desarrollo del país, obra de los gobiernos de izquierda. Ésta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los sectores privados hasta la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el año siguiente comenzó el saqueo. "Al momento de su privatización, ENDESA controlaba el 60% de la generación eléctrica del país, el 55% de la distribución y la casi totalidad de las mercedes de agua aprovechables para el sector hidroeléctrico. Su privatización implicó, además, el traspaso a los nuevos dueños de los derechos de agua que pertenecían a la empresa estatal". ¿Cuánto significó este robo? "Un informe de la Contraloría General de la República que se conoció en 1991 señaló que la privatización de la más importante empresa eléctrica del país le habría significado al Estado alrededor de mil millones de dólares de pérdidas".[6] Pero otro estudio ha representado que esta operación significó un subsidio implícito de 44 089 554 en pesos del año 2000, el que benefició directamente a los nuevos dueños, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiquén y Pehuenche).

La Compañía Chilena de Electricidad (CHILECTRA) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Tenía como función distribuir y comercializar la energía eléctrica en la región metropolitana y en Valparaíso. En el año 1981, la dictadura la dividió en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (después denominada ENERSIS), Chilectra Generación o Chilgener (hoy Gener) y Chilectra Quinta Región o Chilquinta, para ser privatizadas después de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por José Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de "inversiones": Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la razón social a seis de los socios, con plenos poderes de administración. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a los otros accionistas a incorporarse. Este fue el "Plan Chispazos". Si irregulares habían sido las anteriores privatizaciones, ésta batió todos los récords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los fundadores de

[6] *ídem.*

las Chispitas más las acciones de los trabajadores, obtuvieron un préstamo en el Banco del Estado por un monto diez veces la garantía, compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de bolsa. Así, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en préstamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa, revelando el "genio" de los economistas de mercado.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fue fundada por la CORFO en los comienzos de la década de los sesenta. Como las eléctricas ya mencionadas, ENTEL era considerada como una empresa estratégica que debía ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determinó que se había concedido un subsidio de 112% para los "compradores". Entre estos, el ejército adquirió el 10%, a través de FAMAE. El resto pasó a manos del Grupo Telefónico España y otros privatizadores chilenos que después vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicuña y Eduardo Fernández León.

En todas estas privatizaciones, como lo prueba María Olivia Monckeberg, se enriquecieron conjuntamente con el "gran dictador" los ministros y altos ejecutivos^ civiles y militares, y los "compradores". Entre los ministros y altos funcionarios que se proyectaron al mundo de los negocios a través de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Juan Antonio Guzmán, José Piñeira, Miguel Ángel Poduje, Sergio Melick, Máximo Silva Bayuy, Alvaro Donoso, Luis Larraín y otros. No menciono a los generales que se quedaron en los directorios de las empresas privatizadas. Entre los que aprovecharon la "piñata" no puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicuña, Julio Ponce Lerou, el yernísimo del dictador, seguramente casado bajo el régimen de sociedad conyugal, Alvaro Saieh, José Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto Délano, el inefable Alvaro Bardón y el "Cara de palo" de Herimógenes Pérez de Arce. Para penetrar en esta "corte de los milagros" hay que leer el libro citado.

Estos privatizadores convirtieron además en negocios rentables los servicios de utilidad pública como la electricidad, el gas, el agua potable, los teléfonos, los bancos y financieras que se han multiplicado y fusionado, que logran grandes utilidades, alimentan la ilusión de la inmensa mayoría de la población que compra toda clase de productos superfluos y de fantasía, perdidos posteriormente por los embargos y remates. Es la vida al "fiado", con deudas que nunca se terminan de pagar y llenan las páginas de DICOM. NO sólo eso. Los nuevos "inversionistas" controlan también la educación con la proliferación de las escuelas de enseñanza básica y me-

dia subvencionadas. Fundaron una cincuentena de universidades y centenares de centros e institutos superiores, que se compran y se venden en el mercado financiero. Igual cosa sucede con la salud, con la multiplicación y concentración de las ISAPRES, seguros médicos, clínicas y hospitales, laboratorios, farmacias y cementerios, es decir, controlan a los chilenos desde que nacen hasta que rrueren. Lo peor de todo, suprimieron la previsión social financiada con aportes de los empleadores y los trabajadores, para establecer el ahorro obligatorio de éstos últimos, liberando a los patrones o empresarios de aportes al fondo de jubilación, pero monopolizando la administración de estos fondos en sus manos, a través de las AFP. LOS ahorrantes pueden perder en las inversiones de sus fondos, pero la AFP, en cuanto instituciones privadas, siempre ganan, tanto en la colocación de sus acciones, que sus administradores eligen libremente, como en las comisiones que cobran por la administración de estos recursos, que aplican sobre la totalidad de las remuneraciones.

Estos nuevos dueños de Chile obtienen ingresos siderales, que rompen todas las tablas para contar y medir la distribución del ingreso. No habría que agruparlos en el 10% más rico, sino quizás en el 1% o menos y se tendría un ingreso asimilable a los "jeques" petroleros de Arabia, tanto por participación en las utilidades de sus empresas como por las dietas, indemnizaciones y otras regalías que perciben en los directorios en que participan, tanto ellos como sus familiares, mientras a sus trabajadores les pagan salarios mínimos mensuales equivalentes al valor de los cigarros (puros) que fuman gratuitamente en las sesiones de directorio. Este "éxito" económico no es sólo el producto del conocimiento y el talento, que no se podría negar, sino que influye decisivamente, a lo menos en su origen, el "valor agregado" del golpe militar y la dictadura. En realidad, ninguno de los hombres decisivos en las privatizaciones, de los ejecutivos y "consultores" tenía una fortuna significativa, comenzando por Pinochet, Ponce Leoru, Büchi, Cáceres, Saieh y otros cabecillas del saqueo al Estado, pero ahora son multimillonarios. Alguna vez se dijo que el camino más corto para hacerse rico era la lotería pero ahora resultó que, durante la dictadura, fue la privatización de las empresas públicas, la mayoría de las cuales se han trasnacionalizado posteriormente. Los privatizadores han vendido todo o parte de su botín a los inversores extranjeros. El caso más escandaloso es el de Yuraszeck, que vendió a ENDESA (España) en 500 millones de dólares las "Chispitas" y ahora ha invertido en otras empresas.

En esta materia, cabe por último una pregunta de fondo: ¿Por qué el gobierno popular de Salvador Allende no tenía derecho a socializar las empresas que condicionaban el desarrollo nacional, es decir, recuperarlas para todos los chilenos y, en cambio, la dictadura pudo privatizar casi toda la capitalización pública a un precio

muy bajo en beneficio de unos pocos grupos económicos? Esta pregunta no tiene respuesta política ni moral hasta ahora, pero se continuara insistiendo por la derecha tanto empresarial como política, a través de sus medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), que el movimiento popular atentó contra el derecho de propiedad, a pesar de haber realizado las nacionalizaciones de acuerdo al derecho internacional y la legislación interna, incluida una reforma constitucional en el caso del cobre. En suma, la dictadura, según una investigación de la cámara de diputados dad a conocer en el año 2005, subsidió a los privatizadores en 6 mil millones de dólares.

Entre las múltiples irregularidades en estos negocios, cabe mencionar la multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros a los directores de ENERSIS Carlos Cáceres, Sergio Gutiérrez, Felipe Montt, Leónidas Vial, Rodrigo Errrázuriz y Pedro Smith, por haber incumplido un requerimiento del organismo respecto a que el directorio de esa empresa se debía pronunciar sobre la esencialidad o no de las cláusulas de la alianza estratégica suscrita con ENDESA España. Determinación que se confirmó después del rechazo por la Corte Suprema de los recursos de casación que presentaron los condenados, ratificando las resoluciones de los tribunales de primera instancia y de la Corte de Apelaciones. La sentencia de la Corte Suprema no está relacionada con la legalidad o ilegalidad de la negociación que realizó José Yuraszeck con ENDESA España, materia que se está discutiendo en otros procesos, así como tampoco a otras multas aplicadas por la mencionada Superintendencia a ex ejecutivos de ENERSIS por conflictos de intereses, las que suman 50 millones de dólares.[7]

La concentración económica

Desde la década de los sesenta, existían en Chile grupos económicos que controlaban la propiedad y la gestión de las principales empresas privadas y de casi todos los medios de comunicación social, los cuales no fueron en general afectados por el proceso de nacionalización impulsado por el gobierno popular de Salvador Allende. Tales grupos se convirtieron en sostenedores y usufructuarios de las políticas de la dictadura y, por lo mismo, fueron ellos quienes formularon el modelo inspirado en el neoliberalismo económico, desde el propio gobierno, donde destacaron a sus representantes. Ellos nombraron a los principales ministros de la dictadura.

[7] Diario *El Mercurio*, 13 de julio de 2001.

En este período que se inauguró con la dictadura, la concentración económica alcanzó niveles extraordinarios, a partir de la "privatización" de la economía, esto es, la transferencia a precio vil de las empresas del Estado, de la capitalización pública de más de medio siglo, a los viejos y nuevos grupos. En dicha forma, éstos se apoderaron de empresas productivas y del sistema financiero, facilitando este último el proceso de concentración, ya que tal control les permitió el crecimiento de su patrimonio, al darles dominio sobre el mercado de capitales y la manipulación de la deuda externa.

Esta actividad fue favorecida por la apertura financiera externa, que les permitió a los grupos principales apreciables utilidades por la diferencia de tasas de interés existentes entre los mercados financieros interno y externo. Pero conjuntamente con este ámbito, contribuyeron a la concentración otros factores condicionantes del modelo económico, como la contracción del ingreso real de los asalariados y el incremento de la productividad de los mismos por el temor al despido y la desocupación. La cesantía constituyó en tal sentido un instrumento de dominación utilizado por los empresarios hasta hoy, donde la premisa es: o rindes más, sin mayor remuneración, o te despido.

El proceso de la concentración económica fue estudiado por Fernando Dahse en 1979, en el libro Mapa de la Extrema Riqueza, los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales, que suscitó interés dentro y fuera de Chile, del cual tomaré algunos antecedentes. Este autor señala, como base del mantenimiento en el largo plazo de las posiciones de poder político de los grupos económicos, los siguientes elementos: *a)* el patrimonio industrial, minero, agrícola y financiero que pasaron a controlar en estos últimos años; *b)* la influencia que ejercieron, sin contrapeso, sobre el Estado, lo que les aseguró el mantenimiento del orden social, *c)* la asociación subordinada con el capital extranjero, particularmente con el financiero, *d)* el control que tuvieron sobre la casi totalidad de los medios *de* comunicación de masas y *e)* la manifestación forzada de una participación política casi nula de los trabajadores.[8] Este poder era inmenso e incontrarrestable, garantizado por la influencia de las metralletas.

Como ya se mencionó, a fines de la década de los sesenta, había una veintena de grupos económicos nacionales, de los que destacaban tres por su tamaño y número e importancia de las empresas que controlaban: los de Agustín Edwards, de Eleodoro Marte y del Banco Hipotecario. Durante el período de la dictadura aumentaron

[8] Fernando Dahse. *Mapa de la extrema riqueza, los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales,* Santiago, Editorial Aconcagua, sexta edición, 1979.

aquellos grupos, haciéndose cada vez más poderosos, con desplazamientos entre ellos desde el punto de vista del control patrimonial de empresas. Hacia fines de la década de los setenta se colocaron en el primer plano los grupos Cruzat-Larraín, Vial, Matte y Angelini, en perjuicio del grupo de Agustín Edwards, que fue relegado al quinto lugar, aunque conservando su poderosa influencia política hasta ahora.

El grupo Cruzat-Larraín ocupaba el primer lugar en 1979 y controlaba las principales empresas, por lo que también es el que gravitó más, conjuntamente con el grupo Edwards, en el aparato del Estado. Constituido al comienzo de la dictadura (antes integraba un solo grupo con Javier Vial), convirtió a varios de sus ejecutivos y gestores en ministros, como Jorge Cauas José Pinera y Alfonso Márquez de la Plata. Al independizarse, este grupo inició sus actividades controlando diez empresas principales para alcanzar en breve tiempo, participación decisiva en 109, de las cuales tenía el control de la gestión en 85 de ellas.

El segundo lugar, en cuanto al número de empresas que controlaba y el patrimonio propio en ellas, era el grupo encabezado por Javier Vial Castillo. Formado a fines de la década de los sesenta, tuvo su centro de operaciones en el Banco Hipotecario de Chile. Al igual que el anterior, proporcionó también a la dictadura funcionarios, como es el caso de Rolf Lüders, quien ofició de ministro de hacienda y economía. El crecimiento de este grupo en los primeros seis años del régimen militar fue realmente meteórico, llegando a participar en 65 empresas, de las cuales controlaba 61 en 1979.

El tercer lugar en importancia correspondía al grupo Matte, aunque debe señalarse que esta no residía tanto en el número de empresas que controlaba sino en su patrimonio. Con anterioridad al surgimiento de la dictadura, tuvo su centro de operaciones en el Banco Sudamericano, bajo la dirección de Eleodoro Matte, alcanzando una considerable influencia, conjuntamente con el grupo Edwards, en el Estado, la que posteriormente declinó en beneficio de los grupos Cruzat-Larraín y Vial. Hacia fines de la década de los setenta, participaba en la propiedad de por lo menos 45 empresas, de las cuales controlaba 35, entre ellas algunas de las más importantes del país.

El grupo Angelini, conjuntamente con los de Edwards y Luksic, se disputaban el cuarto lugar, según los criterios ya mencionados. El primero de estos experimentó durante ese período un extraordinario crecimiento, pasando de cuatro empresas que controlaba en 1970, a 26 en las que tenía participación o control en 1979. El grupo Edwards, que ha ejercido una gran influencia política durante muchas décadas, desplazó su interés del control de empresas industriales al de sociedades de inversiones, con decisiva actuación en el mercado de capitales, participando en 1979 en al-

rededor de 40 sociedades, de las cuales controlaba 26. El grupo Luksic, por último, incrementó también su control sobre empresas con importante patrimonio, participando en 31 con el control de 29 de ellas en ese mismo año.

En seguida hay que considerar los tres grupos económicos que siguen en orden de importancia: el de Yarur Banna, el de Yarur Lolas y el de Mauricio Hochschild. El primero experimentó también un notorio crecimiento, hasta el punto que en 1979 participaba en la propiedad de 12 empresas, controlando 8 de ellas El grupo de Yarur Lolas es, al parecer, uno de los pocos que no se expandió pues controlaba a la fecha indicada las mismas empresas que en 1970. No sucedió igual en cambio con el grupo Hoschchild, el cual creció en forma significativa.

Los demás grupos económicos, considerados en conjunto, se desarrollaron a la sombra de la dictadura. Entre ellos destacan, por orden de importancia, el grupo Said, estrechamente relacionado con los de Agustín Edwards y Orlando Sáenz, y que experimentó un gran crecimiento en lo que respecta al número de sociedades que controlaba; el grupo Briones, que también se expandió y el grupo Puig que participaba en la propiedad de numerosas empresas. Además tienen una relativa significación los grupos Gálmez, Lepe, Piquer y Lehman, Sumar, Abalos y González, Mustakis, Schiess, Andina, Sáenz, Banco de Concepción, Menéndez Prendes, Hirmas, Yarur Asfura, Stein Morig, Ibáñez Ojeda y Furman, entre otros.[9]

Esta intensificación de la concentración económica (de capitales productivos y financieros) que realizaron los grupos económicos durante la dictadura, tiene una estrecha relación con la "privatización" de la banca, que había quedado bajo el control estatal en el gobierno de Salvador Allende. Los grupos económicos importantes se apoderaron, a través de dicho proceso, de bancos y otras instituciones de financiamiento, pasando de este modo a controlar el mercado de capitales y del crédito externo, situación que está estrechamente relacionada con el endeudamiento y la fuga de capitales, tanto en inversiones en el extranjero como en depósitos en los "paraísos financieros", por sumas desconocidas, como lo hiciera Pinochet y su familia.

Dahse señala que dichos grupos económicos se relacionaron por intermedio de las instituciones bancadas por ellos controladas, a diversas corporaciones financieras internacionales "canalizando un flujo cada vez más creciente de crédito externo a tasas de interés muy por debajo de las existentes en el mercado nacional". Este crédito fue utilizado, según el mismo autor, para: *a)* adquirir activos del Estado y privados; *b)* acumular capital financiero; *c)* hacer más eficiente el proceso productivo

[9] *Ídem.*

de sus empresas y *d)* marginalmente, para invertir productivamente. Además los grupos económicos utilizaron las bolsas de comercio y los fondos mutuos para operar en el mercado de capitales, así como las compañías de seguros.[10]

La desnacionalización de la economía

La política económica de la dictadura estuvo orientada desde el comienzo hacia la atracción del capital trasnacional, para lo cual ofreció las condiciones más favorables, de acuerdo al Estatuto de Inversión Extranjera y a la Ley de Cambios Internacionales. La respuesta no se hizo esperar, en el marco de los intereses de aquél, en términos de financiamiento del nuevo proyecto de dominación de la burguesía interna, principalmente a través de empréstitos de la banca internacional. De este modo, conforme al carácter del modelo económico, se alteró la composición del endeudamiento externo, pasando a tener la primacía el sector privado sobre el sector público, aunque en la hora de las renegociaciones de las deudas el Estado tuvo que asumir la corresponsabilidad de los compromisos empresariales por medio de la concesión de su aval.

Después de los sostenidos esfuerzos realizados durante décadas por desarrollar la industria nacional, la dictadura sometió al país a las viejas condiciones de inserción en la división capitalista internacional del trabajo. En este sentido, Chile volvió a poner el énfasis principalmente en las exportaciones de materias primas y en las importaciones de artículos manufacturados. Tal situación está relacionada con el destino de la inversión extranjera en este período que se dirigió a las actividades vinculadas a la exportación de productos primarios y sólo por excepción a las de carácter industrial. La concentración y centralización económicas trajeron consigo la desnacionalización de la economía en forma cada vez más creciente.

Los economistas chilenos Patricio Rozas y Gustavo Marín realizaron una investigación sobre estrategias de grupos multinacionales en situaciones recesivas, referidas específicamente a Chile en los años 1980-1986. Estas estrategias tienen como principales tendencias incorporar a la economía de este país, en forma creciente, al ciclo mundial de capital-dinero a través de los empréstitos, al tiempo que aprovechar las ventajas tributarias, salariales y financieras, para producir con fines de exportación. Sin renunciar por cierto a algunas actividades industriales cuya producción está destinada a satisfacer determinadas demandas del mercado interno,

[10] *ídem.*

correspondientes a los sectores de más altos ingresos y, en reducida escala, también a la exportación.[11]

En efecto, a partir de la crisis recesiva iniciada en el año 1981, el capital trasnacional modificó su relación con los sectores dominantes en el poder, aprovechando en su favor dicha depresión económica, lo que les permitió un mayor grado de compromiso con la dictadura. Este compromiso supuso la adquisición de empresas a los grupos económicos nacionales afectados por la crisis, así como acciones de empresas estatales estratégicas, ofrecidas en venta en la segunda etapa de las privatizaciones. Algunos conglomerados multinacionales fueron aún más lejos. Se comprometieron también a una diversifícación de sus inversiones por medio de la operación de grupos económicos de origen transnacional, que pasaron a administrar empresas internacionales de manera centralizada, a través de sociedades de inversión.

El estudio mencionado revela que este traspaso masivo de empresas y activos, producido principalmente en los años 1985 y 1986, representó una nueva fase de centralización del capital en la economía chilena. Beneficiarios principales de este proceso fueron algunas grandes corporaciones financieras multinacionales, conjuntamente con los grupos económicos nacionales que salieron indemnes de la crisis recesiva de los años 1981-1983. Esta centralización del capital trajo consigo una mayor desnacionalización de la economía y, por consiguiente, la acentuación de su dependencia, al tiempo que modificaciones en la correlación de fuerzas entre los componentes del bloque social en el poder y en su propia composición interna.[12]

Entre los grupos multinacionales industriales destacaron los siguientes:

El grupo British American Tobaco Co. Ltd (BAT), cuya operación en nuestro país se remonta a 1922, representaba en 1986 una de las mayores centralizaciones de capital industrial trasnacional, tras la diversifícación de sus inversiones a partir de 1981, convirtiéndose en beneficiario de la crisis recesiva que comenzó en ese mismo año. Al 31 de marzo de 1986, este grupo controlaba ocho empresas, con un patrimonio neto de 129 856 millones de dólares, que deben sumarse a las 18 empresas controladas en distintos países, sin considerar a Chile.

El grupo Swedish Match es un conglomerado de empresas suecas que también se expandió desde los años ochenta en Chile, participando en el proceso de centralización de capital industrial y en la diversifícación de actividades. Al 31 de marzo

[11] Patricio Rozas y Gustavo Marín, *Estrategias de grupos multinacionales en situaciones recesivas: el caso de Chile 1980-1986,* Buenos Aires, Programa Regional de Investigaciones Económicas y Sociales del Cono Sur, 1987.

[12] *Idem.*

de 1986, este grupo controlaba siete empresas, con un patrimonio neto total de 31 030 millones de dólares, capital que duplicaba al acumulado cinco años antes.

El grupo Cemento Melón comprende el conglomerado de empresas chilenas controladas por Cementos Overseas Holdings Ltd., filial de la firma multinacional inglesa Blue Circle Industries PLC. La empresa Cemento Melón S.A., nacionalizada por el gobierno de Allende, pasó posteriormente por dos privatizaciones sucesivas: primero, se traspasó al grupo Fluxá-Yaconi y después, a raíz de la quiebra de éste, a Blue Circle Industries PLC, a través de su filial Cementos Overseas Holdings Ltd. El crecimiento del grupo Cemento Melón, más que en la centralización se ha basado en dinámicas de concentración de capital, desarrollando una diversificación de sus inversiones poco significativa. Al 31 de marzo de 1986, este grupo comprendía cuatro empresas.

El grupo Bin Mahjouz, proveniente de países árabes exportadores de petróleo, constituía en cambio uno de los más importantes no sólo por la cantidad de empresas que controlaba sino también por la magnitud de su patrimonio, que se estimaba en más de 400 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 1986, este grupo controlaba 36 sociedades, en las que era el accionista mayoritario, si bien no ha formado ninguna nueva empresa, limitándose a constituir sociedades de inversión y a desplazar a grupos nacionales.[13]

Entre los grupos multinacionales financieros, a su vez, pueden señalarse los siguientes:

El grupo Bankers Trust (BT), séptimo en importancia en Estados Unidos y con el lugar 19 entre los 500 bancos con mayor capital accionario en el mundo. Se incorporó a la economía chilena en 1985, mediante la adquisición de la compañía de seguros de vida Consorcio Nacional de Seguros SA. y de la administradora de fondos de pensiones PRÓVIDA S.A. a través de su filial Bankers Trust (Pacific) Co. Ltd., empresas que habían formado parte del conglomerado Cruzat-Larraín. Al 31 de marzo de 1986, este grupo controlaba 29 empresas y sólo por intermedio de PRÓVIDA S.A. pasó a administrar fondos por valor de 459.1 millones de dólares.

El grupo AETNA inició sus actividades en Chile en 1981, aprovechando también la crisis recesiva y la privatización de empresas estatales, como parte del entrelazamiento trasnacional de capital financiero promovido por el grupo Banco Hipotecario encabezado por Javier Vial. Al 31 de marzo, el grupo AETNA ocupaba el tercer lugar en importancia en el mercado nacional de seguros de vida, con un patrimonio

[13] *Ídem.*

neto de 10.4 millones de dólares, representando el 15.8% del total patrimonial del negocio de seguros de vida. Además, se sitúa en el segundo lugar en la administración de fondos de pensiones, con un valor de 400 millones de dólares, equivalente a 22.8% de los fondos acumulados por este sistema. A la fecha señalada contaba con 12 sociedades.

American International Group accedió también a mediados de los ochenta a la economía chilena. De la misma manera que los anteriores, aprovechó la crisis recesiva y la privatización, así como el colapso de algunos grupos económicos nacionales, incorporándose en el negocio previsional. En conjunto, este grupo y los dos anteriores, llegaron a controlar durante 1986 el 61% de los fondos acunvilados por el nuevo sistema previsional, lo que equivalía entonces a 1 055 millones de dólares. Los mismos tres grupos han utilizado parte de esos fondos para controlar otras empresas.

El grupo CITICORP tiene una presencia de más largo tiempo en Chile, habiendo operado hasta 1970, a través del First National City Bank y de la Anaconda, lo que le permitió controlar entonces la principal fuente de ingreso de divisas al país: la gran minería del cobre. La nacionalización de la banca y de este mineral por el gobierno de Salvador Allende afectó los intereses de Rockefeller en Chile, pero CITICORP retornó con Pinochet. Este grupo es hoy la mayor organización de servicios financieros en el mundo, y actúa en nuestro país como uno de sus principales acreedores privados. Así, el First National City Bank se reincorporó al sistema bancario chileno bajo la nueva denominación de CITIBANK, N.A. (Chile). Este grupo realiza actividades de "banca de personas" y al 31 de marzo de 1986 controlaba 14 sociedades financieras y no financieras.[14]

La situación expuesta significa, en suma, que se produjo a contar de la crisis recesiva de la década de los ochenta, una rearticulación del bloque dominante en el poder, mediante el reemplazo de la hegemonía de los grupos locales o nacionales por los nuevos grupos trasnacionales. Los efectos de esta diversa correlación de fuerzas son por demás significativos. En el orden económico, implicó una creciente desnacionalización de la economía, lo que se expresa en algunos datos determinantes. En 1980, de las 10 empresas más importantes del país sólo dos eran controladas por capitales trasnacionales, mientras que en 1986 esto sucedía en cinco de ellas. En el orden político, la hegemonía de dichos capitales trajo consigo a su vez un mayor compromiso con la dictadura de algunos gobiernos de países capitalistas desarrollados, lo que se expresó principalmente en su decisivo respaldo en los or-

[14] *ídem.*

ganismos internacionales de crédito. Actualmente, se han realizado transferencias entre estos grupos trasnacionales, dominando la economía chilena.

Algunas comparaciones necesarias

Para apreciar los resultados del proyecto de la dictadura, conviene analizar la evolución de la economía en las décadas de los setenta y ochenta, estableciendo algunas comparaciones, particularmente entre el período de gobierno de Salvador Allende y el de Augusto Pinochet, de acuerdo a los principales indicadores macroeconómicos. Un paralelo imposible, pero que conviene realizar. Entre dichos indicadores cabe considerar el producto geográfico por habitante, las exportaciones e importaciones, la deuda externa, la inversión en capital fijo y el ahorro neto total y nacional, sobre los cuales se han elaborado las series estadísticas respectivas, según un trabajo dado a conocer en México.[15] En la segunda parte de este análisis, referido a la situación social, utilizaré distintos indicadores como los correspondientes a desempleo, distribución del ingreso, remuneraciones, consumo *per capita* y otros factores de bienestar de la población.

El producto geográfico bruto por habitante, que había presentado entre los años 1960 y 1973 un crecimiento moderado, pero más o menos constante, experimentó a partir del inicio de la dictadura un comportamiento cíclico, con dos caídas significativas, correspondientes a las crisis recesivas. En la primera registró su mayor descenso en 1975 (-14.4%), con una recuperación en los años siguientes y, en la segunda, su punto más bajo fue marcado en 1982 (-14.2%), comenzando en seguida su lenta recuperación en el marco de un descenso global en el período. Es interesante destacar que si se considera los períodos 1971-1973 (gobierno de Allende) y 1974-1986 (dictadura de Pinochet) el producto *per capita* fue en pesos constantes de 1977, de 30 988 y 29 161 en promedio, en los respectivos períodos.[16]

Esta "economía de papel", como alguna vez la llamó el propio Pinochet con ocasión de las quiebras de bancos y empresas en la segunda crisis mencionada, presenta una situación desastrosa en cuanto a su deuda externa. Ésta pasó, en efecto, de 4.043 millones de dólares en 1973 (deuda acumulada en toda la historia de Chile) a 22 000 millones de dólares en 1986. Para tener una idea de este monstruoso endeu-

[15] José Ibarra, "Principales indicadores macroeconómicos de la economía chilena", mesa redonda Casa de Chile, México, 1987.

[16] *ídem.*

damiento debe considerarse que durante el gobierno de Allende, cada chileno debía 300 dólares, lo que parecía exagerado, para aumentar ahora a 2 mil dólares, incluyendo los bebés. Este es el endeudamiento externo por habitante más alto del mundo después del de Israel, que se ha mantenido en guerra con los países árabes.

¿Qué se hizo con esta inmensa masa de dinero? Parte de la respuesta se encuentra en las importaciones de productos superfluos y de lujo para el consumo de las clases de mayores ingresos y los gastos militares, los que totalizan, de acuerdo a un cálculo moderado, un tercio del total de la deuda o la mitad del incremento de ella en el período de dictadura. Pero también en la fuga de capitales, la que supone la transferencia al extranjero no sólo de una parte de la deuda similar a la gastada en importaciones prescindibles sino también otra parte significativa dsl ahorro interno. Estos recursos no sólo se restaron a la inversión nacional, sino también con ellos se burló la tributación a que están obligados todos los chilenos.[17]

Para renegociar esta deuda externa, la dictadura se sometió a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Políticas de ajuste que hicieron recaer el peso de la crisis en los asalariados, con pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, reducción del gasto en servicios sociales, privatización de las empresas estatales y desnacionalización general de la economía. Asunción por parte del Estado de la corresponsabilidad por las deudas del sector privado, a través del otorgamiento de su aval, olvidando la máxima de los "Chicago boys" expuesta en los días del falso *boom*, de que "cuando se endeuda el sector privado, es éste quien responde". Reducción de las importaciones para destinar parte importante del excedente comercial a pagar los intereses de la deuda, y cambio de parte de ésta por la transferencia de propiedad de activos nacionales.

No obstante los cuantiosos recursos económicos recibidos a través de los empréstitos extranjeros, el coeficiente de inversión en capital fijo como porcentaje del producto bruto (maquinarias, edificios e instalaciones), que alcanzó, en el lapso 1971-1973 a un 15.9 %, por la retracción de la burguesía conspiradora, disminuyó aún más durante el período de la dictadura, toda vez que llegó en promedio a sólo un 15.2%. Este comportamiento de la clase dominante explica que el ahorro neto nacional promedio fue negativo durante estos años de régimen totalitario, habiendo la inversión neta total apenas recuperado el nivel absoluto del período 1960-1970, gracias al aprovechamiento en parte de los empréstitos y de la limitada inversión externa directa.[18]

[18] José Ibarra, *ibidem.*

El fracaso social de las estrategias neoliberales aplicadas en Chile se hace más evidente todavía si se compara sus resultados con los del conjunto de América Latina, utilizando algunos indicadores básicos. El producto interno bruto chileno, como porcentaje del producto latinoamericano, disminuyó de 6% en 1973 a 4.3% en 1986. El producto por habitante, medido en dólares constantes de 1985, aumentó apenas en Chile entre 1970 y 1986, de 1 870 a 1 875, mientras que en el conjunto de América Latina se elevó de 1 380 a 1 803 en el mismo período. La inversión total en Chile cayó entre 1970 y 1985, de 4 900 millones de dólares a 3 150 millones, descenso equivalente a un 23%, en tanto que en América Latina, en esos mismos años, aumentó de 83 600 millones de dólares a 122 800 millones, lo que representa un incremento de 47%. Aun en el área en que la dictadura muestra logros, como son las exportaciones, la participación chilena en el total de ellas en América Latina disminuyó de 4.5% en 1973 a menos de 4.0% en 1986.[19]

A pesar de la elocuencia de las cifras señaladas, la dictadura pretendió mostrar cierto auge económico, después de las crisis sufridas, sobre la base de algunos indicadores que registraron cierta recuperación. Pero para interpretarlos correctamente debe tenerse presente dos consideraciones. La primera es que se trata de recuperaciones alcanzadas después de grandes retrocesos, por lo que apenas redujeron el terreno perdido. La segunda es que, conforme a la orientación del conjunto de la política de la dictadura, esas recuperaciones en el ámbito estrictamente económico, no se tradujeron en ningún mejoramiento en las condiciones sociales, sino que por el contrario éstas continuaron deteriorándose.[20] En otras palabras, la burguesía empresarial ganó, pero los trabajadores continuaron como perdedores.

La situación resulta, por eso, aparentemente paradójica, porque es el resultado de la naturaleza intrínsecamente reaccionaria de la política oficial. En efecto, a un aumento de la producción no correspondió un descenso del desempleo, sino que éste continuó elevándose. El ascenso en el producto generado no significó un mejoramiento del poder adquisitivo de los salarios sino que estos continuaron por debajo de los existentes en septiembre de 1973. Por eso aunque se prolongara una bonanza en algunos aspectos económicos como los señalados, ello sólo beneficiará al sector social dominante, sin modificar la suerte de los trabajadores salvo para acentuar su explotación, por lo que tampoco se podrá superar la crisis.[21] Para mejorar las

[19] Eduardo González, "Chile y América Latina: las lecciones de la experiencia", mesa redonda. México, Casa de Chile, 1987.

[20] Pedro Vuskovic, "Las perspectivas de la economía chilena", mesa redonda. México. Casa Chile. 1987.

[21] *ídem.*

condiciones de vida de la inmensa mayoría de los chilenos, se deberá alterar el modelo económico, restablecer la libertad sindical y recrear el escenario democrático, poniendo término al poder de los clanes que dominan la economía hasta hoy.

Ricos y pobres en la sociedad

Reconocer aquella realidad en la economía implica considerar que también la estructura de clases de la sociedad fue modificada en el curso del proceso de reorganización capitalista vivido. El nuevo patrón de acumulación tendió a operar un proceso de diversificación entre las clases dominantes. De una parte, los sectores oligárquicos beneficiados por la monopolización de la economía, vinculados con el gran capital internacional y, de otra, los sectores industriales más relacionados al mundo interno, con empresas de baja composición orgánica capitalista. Esta situación creó diferencias coyunturales y también orgánicas.

Las primeras dicen relación con las medidas de corto plazo empleadas para superar los problemas de acumulación, las cuales se orientaron a la larga a estrechar y desarrollar su vinculación con el mercado mundial, realizando así la consolidación del proceso de internacionalización del capital en la economía chilena. Esto hizo que su comportamiento fuera muy poco sensible a las fluctuaciones de las dimensiones del mercado interno, obligando con ello al conjunto de los sectores oligárquicos a acentuar al máximo la explotación de la fuerza de trabajo, y creándole especialmente a los medianos y pequeños productores considerables problemas para la realización de sus mercancías. Los sectores así afectados optaron por retirar sus capitales de la producción para convertirlos en capital dinero.

Las segundas surgieron del mismo proceso, ya que en él se desarrollaron rasgos permanentes de estabilidad y de contradicción dentro del bloque dominante. Las diferenciaciones en el seno de la burguesía asumieron un carácter orgánico permanente, que las hizo difícilmente conciliables con las orientaciones coyunturales, pero que tendió a sustentar objetivamente la estabilidad del nuevo modelo de dominación, sobre la base del incremento de la centralización, en forma cada vez más creciente.

En la economía rural se observa un proceso relativamente correspondiente. Las tendencias a la reconstitución del latifundio de superficie sin límite, revitalizadas por los decretos leyes que hicieron tabla rasa de las disposiciones de la ley 16.640 sobre la reforma agraria, no volvieron sin embargo al punto de partida. El despojo de tierras a los campesinos no se hizo para reconstruir exclusivamente el latifundio

ausentista, sino además para operar una reorganización de las actividades agropecuarias que se asentó en bases capitalistas indiscutibles, con vistas a la producción exportable, como la fruticultura y la madera, con la tala de bosques y la reforestación.

Los propietarios minifundistas, por el contrario, vieron agravarse su situación. La disminución de los mecanismos de asistencia técnica y crediticia, proporcionados por el Estado, hizo que sus desgastados suelos, con escasos índices de productividad, les hundieran en la cotidiana situación de la pequeña propiedad campesina de la mayoría de los países capitalistas atrasados. La constante subdivisión de sus propiedades y la voracidad de las empresas comercializadoras de los productos agrícolas determinaron que la renta de la tierra de los pequeños agricultores quedara en su mayor parte en manos de intermediarios. No existía, por lo tanto, beneficio alguno en la práctica para esta masa de propietarios del aumento real de los precios agrícolas. Los campesinos sometidos a este régimen se convirtieron en una clase pauperizada. En este medio se agudizaron las condiciones de vida de los pueblos originarios de las provincias del sur, que continuaron perdiendo sus tierras hasta un límite extremo.

La enorme masa de campesinos sin tierras, afectados todos en sus esperanzas de acceder alguna vez a la propiedad por la devolución de latifundios, experimentó una situación todavía más grave. La reconversión industrial y la disminución de los servicios sociales en los centros de población urbanos desalentó la migración campo-ciudad, ante aquella inmensa masa de desempleados, que pasaron a constituir el ejército industrial de reserva más numeroso en la historia de Chile. Es posible incluso que se haya operado una contramigración, al menos en las fases más duras de las crisis económicas desencadenadas durante el período de la dictadura. Las condiciones de vida de los campesinos involucionaron de manera considerable. No cabe destacar la reconstitución gradual de relaciones semiserviles, pero el trabajo asalariado, especialmente temporal, es una tendencia inherente al desarrollo capitalista de la agricultura. Son enormes las facilidades para superexplotar a esta mano de obra desprotegida en el sentido más dramático de la palabra, sin leyes que le confirieran seguridad social. No es posible, en consecuencia, trazar alguna línea divisoria significativa entre estos asalariados rurales y los obreros de la industria, sometidos igualmente a la sobreexplotación, sin una legislación del trabajo realmente protectora, ni fiscalización alguna de parte del Estado.

Las clases medias experimentaron un proceso de diferenciación bastante significativo. Los sectores propietarios, es decir, aquellos que no utilizan casi mano de obra para la explotación de sus negocios o talleres, excepto la de su propia familia,

sufrieron indudablemente los efectos de la situación recesiva. Para enfrentarlos se vieron obligados a consumir sus ahorros, pero la reproducción de estos sectores, por la pequeña escala de sus haberes, fue una tendencia constante del sistema, que operaba como mecanismo compensatorio. En todo caso, no queda duda que el nivel de ingresos y de vida de extensos grupos de estas capas fue afectado por el modo de acumulación. Los trabajadores por cuenta propia, difícilmente distinguibles en muchos casos de la categoría social anterior, experimentaron una situación muy semejante. Los enormes niveles de desempleo registrados por la economía hicieron de esta condición un recurso permanente utilizado para sobrevivir. Muchos obreros calificados, perseguidos políticamente, pasaron a integrarse a la estructura productiva del capitalismo en dicha condición.

La clase media asalariada, al igual que la pequeña burguesía propietaria, experimentó notables diferenciaciones. Los sectores tecnócratas tuvieron un ascenso rápido en sus niveles de ingreso ante la instalación de empresas extranjeras o de grandes monopolios nacionales, que requirieron de su concurso organizativo y de programación del proceso productivo. Estos sectores, dentro del conjumo, representaron una minoría relativamente considerada. En contraposición a ellos, los trabajadores del Estado, cuando no fueron golpeados por la disminución del personal de la administración civil o por la rebaja de los gastos variables en el presupuesto de ministerios y servicios públicos, mantuvieron remuneraciones bajísirnas. En situaciones comparables se encontraban los empleados particulares que constituyeron en muchos casos sectores que recibían ingresos incluso menores que los de los propios obreros de empresas de punta o de sectores estratégicos de la economía.

La significativa masa de trabajadores intelectuales, cuya función ideológica fue muy importante en la historia nacional, sufrió un proceso similar cue, sin embargo, no puede medirse exclusivamente por las condiciones objetivas de vida. Tan importante como ello es la situación cultural del país. Ahogados por el oscurantismo, tendieron a reaccionar como oposición a la dictadura, pero en condiciones de ausencia de una fuerza revolucionaria con una propuesta programática y orgánica clara para el futuro. Estas circunstancias determinaron inclinación a constituirse en intelectuales orgánicos del recambio, la mayoría de las veces en estrecha consonancia con la Iglesia católica, con la parte progresista de esta institución.

La clase obrera también tuvo un proceso de diferenciación que es necesario reconocer y ubicar políticamente. El rasgo común fue la tendencia a la explotación, llevada al extremo durante los primeros años de la dictadura, mediante la eliminación de los mecanismos de negociación colectiva y del derecho de huelga. La introducción de pequeños cambios en esta materia por el llamado Plan Laboral,

merced a la acción combinada de la lucha sindical y el apoyo exterior, modificó dicha situación en términos relativos, potenciando las posibilidades de mejoramiento de los sectores más fuertes y organizados del movimiento obrero. Los sectores más débiles de la mediana y pequeña industrias enfrentaron, en cambio, escasas posibilidades de revertir su situación.

Este cuadro de las modificaciones en la composición de clases se completa con la consideración de los sectores subproletarios y marginales. Estos se ven acrecidos por los efectos de la reconversión industrial, además de su fuente generadora tradicional: la migración campo-ciudad. Su condición social, el modo no proletario de vida, particularmente en situaciones históricas como las existentes en el país, en este período, tendió a que muchos de ellos se transformaran objetivamente en un lumpenproletariado y en fuente de la delincuencia.

El incremento de la tasa de ganancia superó entre tanto las tendencias históricas de la economía chilena, configurando un verdadero despojo en todas las manifestaciones de vida y trabajo de los asalariados. Las remuneraciones reales, así como el ingreso mínimo familiar, descendieron considerablemente en tanto que creció la jornada de trabajo, porque para aumentar el ingreso había que laborar sobre tiempo. La tasa de desempleo llegó a niveles sin precedentes, influyendo el inmenso ejército industrial de reserva en la reducción de los salarios. La aguda sobreexplotación se llevó al extremo límite por medio del Programa de Empleo Mínimo (PEM) y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), que asignaron remuneraciones misérrimas a centenares de miles de trabajadores desocupados. El desarrollo de este sistema de explotación sólo fue posible por la clausura permanente del espacio democrático para las organizaciones políticas y sindicales representativas de los trabajadores.

No obstante, donde se presentaron con mayor crudeza las diferencias entre el gobierno popular y la dictadura es en el desempleo, otro de los indicadores básicos, toda vez que el primero de todos los satisfactores sociales es el derecho al trabajo. En este rubro, cabe señalar que en el período del gobierno de Allende se registró un promedio de desempleo insignificante, de sólo 4.7%. En cambio, durante la dictadura, considerando ocupados a los participantes en el PEM y el POJH, el promedio ascendió a 14.7%, porcentaje que se eleva hasta 19.7% en el caso que se estimen a aquellos como desocupados.

Pero eso no es todo en materia de ocupación. Los cambios que experimentó la economía chilena debido al proceso de reacomodo estructural del capitalismo dependiente, trajeron consigo efectos negativos en el empleo. Desde luego, aumentaron los ocupados por cuenta propia en un porcentaje de 6% de la fuerza de trabajo,

rebasando la tendencia histórica en dicha forma de ocupación. Un proceso semejante se generó respecto a las personas dedicadas al pequeño comercio, cuyo incremento puede calcularse en 3.3% de la fuerza de trabajo. Por último, si agregamos a los diversos segmentos de subocupados, que forman parte de la economía subterránea o informal, la desocupación habría llegado a 25%.[22]

La distribución del ingreso no pudo ser más regresiva durante la dictadura, lo que resulta del análisis de su evolución de 1970 a 1986. En efecto, en el primero de estos años, la participación de los sueldos y salarios fue de 52.3%, elevándose en 1971 a 61.7% y en 1972 a 62.8% (correspondientes al gobierno de Allende), para disminuir, con altibajos, en el curso del lapso de dictadura, y registrar un 45.1% en 1986, según datos del Banco Central. La regresión es tan acentuada en esta materia que el 20% más rico de la población pasó de 53% del total de los ingresos en 1959 a 61% en 1984. Tal descenso en la participación de los asalariados en el ingreso nacional revela el elevado grado de sobreexplotación de los mismos.

Este despojo de que fueron objeto los trabajadores queda en evidencia también a través de la evolución de las remuneraciones medias reales de 1970 a 1986. La comparación entre el promedio del período de gobierno de Salvador Allende y el de la dictadura de Augusto Pinochet, nuevamente favorece al primero, como quiera que en su caso el índice, con base en 1970, fue de 127.3 y en el segundo de 89.3, con una diferencia de -29.9%, según la información del Estudio Económico de América Latina, correspondiente a 1980, y la contenida en el Anuario Estadístico de CEPAL de 1986, para el período 1978-1986.[23]

La situación es más pronunciada todavía si se efectúa similar comparación en lo que concierne al consumo *per capita,* indicador muy importante por representar el nivel de vida de la población. Los resultados son, en efecto, reveladores de la distinta orientación social de ambos regímenes. En el gobierno popular, el consumo promedio per capita fue de 26 200 pesos constantes de 1977 en tanto que el mismo descendió durante la dictadura (hasta 1986) a 20 700, con lo que se comprueba que recién en ese último año se recuperó el promedio de su propio período.

[12] José Ibarra. *ibidem.*

[23] La serie de 1978 fue encadenada hacia atrás (hasta 1970) usando el índice de sueldos y salarios reales que aparece en el Estudio Económico de América Latina de 1980 (página 236). los que a su vez fueron calculados sobre la base del índice de sueldos y salarios nominales del Instituto Nacional de Estadísticas, deflactado para el período 1971-1973 por el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas.

Herencia de la dictadura

La nueva institucionalidad

Pinochet se propuso desde el comienzo la instauración de la dictadura perpetua, para lo cual contó con la colaboración de los juristas tradicionales del espectro centroderechista, así como de la judicatura del país, imbuida del mismo espíritu conservador. La tradición "legalista" del país se puso al servicio de la fuerza militar, a fin de exhibir una fachada completamente extraña a la realidad, codificando la suspensión de los derechos humanos, políticos, sociales y culturales. En ese marco, la dictadura promulgó un fárrago de decretos-leyes para ocultar su ilegitimidad y asegurar su dominación social sobre los trabajadores, teniendo como puntos de referencia la declaración de "guerra interior", a partir del golpe de Estado de 1973, y la promulgación de la "Constitución" de 1980, ocho años después.

Eista contradicción entre la fachada y la realidad fue ostensible para todos los que tenían ojos para ver. Así lo señaló ya en 1976 el Grupo de Trabajo *ad hoc* sobre Chile de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

> La impresión que el Grupo tuvo constantemente durante su trabajo era la de un contraste extremo entre las afirmaciones y los hechos, entre la fachada y la realidad. La fachada consiste en las leyes comentadas abundantemente. La fachada es la normalidad de la vida cotidiana en las calles de Santiago vistas por un visitante extranjero. La realidad desde el punto de vista de esta investigación es la existencia de otro mundo, el mundo de los arrestados, los desaparecidos, los hallados muertos o puestos en libertad sin realmente ninguna posibilidad de encontrar un trabajo remunerado.

El testimonio no puede ser más valioso por provenir de un organismo de Naciones Unidas.

La dictadura gobernó así al país de 1973 a 1988 mediante los estados de excepción, dictados por temporalidades, pero extendidos todos esos años a través de su constante prórroga, superponiendo unos a otros. Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978, rigió el estado de sitio, restableciéndose sn los años 1984, 1985 y 1986. Además, desde el golpe de estado hasta 1988, se aplicó el estado de emergencia. Posteriormente, hasta marzo de 1990, gobernó sobre la base de la propia legislación represiva dictada por su poder legislativo ("la banda de los cuatro" miembros de la junta militar).

Asimismo, desde el 11 de marzo de 1981 tuvo vigencia el estado de peligro de trastorno del orden público, prorrogable hasta 1989; por lo demás durante el primer año se estableció que el estado de sitio era equivalente a "tiempo de guerra". En ausencia del Congreso Nacional, la dictadura "legisló" por medio de decretos-leyes, prescribiendo en uno de ellos, el DL N° 788 de 1974, que cuando en algunos se infringiera la constitución de 1925, ésta debería considerarse modificada. Así se gobernaba entonces. Posteriormente, en la constitución de 1980, su modificación se hizo casi imposible en algunos aspectos esenciales, por los quorum, plazos y trámites exigidos. Como la Constitución de 1833, se esperaba que la de 1980 durara también 100 años.

Como en todos los procesos contrarrevolucionarios, la dictadura tendió lentamente hacia su "insiitucionalización", conjugando su deseo de prolongar el poder arbitrario con la necesidad de exhibir una voluntad de normalización, particularmente ante la opinión pública internacional, que ejercía presión en dicho sentido. Este proceso supone la alteración y reemplazo del principio de su legitimación: el paso Je la "guerra interna" al de la "reconstrucción social". Esto no significó ninguna alteración al rígido sistema de dominación de clase, pero pretendió mejorar su imagen mediante el perfeccionamiento "jurídico" de su fachada ante la comunidad internacional.

Al igual que lo sucedido con la represión, el proceso de institucionalización comprendió diversas fases y modalidades. Cada una de ellas respondió a las presiones internas y externas, así como a debates producidos al interior del bloque social dominante. Pinochet sometió la definición de reglas y la fijación de plazos al ejercicio de su "mandato", de acuerdo a la fórmula acuñada por el general argentino Juan Carlos Onganía, en el sentido de que las contrarrevoluciones tienen objetivos, pero no plazos ni regulaciones jurídicas reales. Para resolver ;sta contradicción trabajaron silenciosa y febrilmente los asesores jurídicos del *Opus Dei,* verdaderos artífices de la legislación de esta maquinaria de la muerte. Ellos eran, entre otros, Julio Phillipi, quien en los ratos libres que le dejaba su colaboración con la dicta-

dura, escribía un piadoso libro sobre los angelitos, publicado después de su muerte; Jaime Guzmán, el ángel de la guarda de Pinochet, quien rezaba, no sé por qué, antes de comenzar sus clases en la Universidad Católica, y Enrique Ortúzar, el incansable defensor de su obra magistral: ¡La "Constitución de la Libertad!" Éstos son los "héroes" de la mitología derechista.

En tal predicamento, la dictadura emitió su Declaración de Principios en marzo de 1974, en la que tras vagas formulaciones políticas lo único claro es el propósito de no hacer del régimen militar un nuevo tránsito entre dos momentos de una crisis política, el derrocamiento del gobierno constitucional del doctor Salvador Allende y el "retorno" a la democracia, sino fundar un nuevo orden económico, social, político y cultural, generando para ello un nuevo régimen político-jurídico. Ésa es, pues, la primera fase de su institucionalización, la que corresponde en el tiempo con la primera fase represiva.

Pero, preocupada por su legitimación, la dictadura intentó revestirse con un fundamento jurídico, en el momento de mayor criminalidad del proceso represivo, que corresponde a la segunda etapa de éste. Los instrumentos utilizados son las llamadas actas o leyes constitucionales, promulgadas en los años 1975 y 1976. Por la primera se estableció un Consejo de Estado, de carácter consultivo, para prestar asesoría al presidente de la República (al dictador) en casos y materias que éste determine. Por la segunda, se definió una base para la nueva "constitucionalidad": los decretos leyes concernientes a la autoridad del Estado. Por la tercera, se determinaron los derechos y deberes constitucionales, por la cuarta, se describieron los tipos de estados de emergencia que pueden imponerse (y renovarse) en condiciones de "guerra, conmoción interna, subversión latente y catástrofe pública". La subversión latente es un concepto desconocido con anterioridad en el derecho público chileno.

Las cuatro actas o leyes constitucionales sirvieron, en todo caso, para codificar las facultades arbitrarias que se venían ejerciendo desde el golpe militar. Este remedo de institucionalización, producido precisamente cuando arreciaban las condenas internacionales contra la dictadura, determinó la discusión acerca del modelo político del porvenir, al interior del bloque social dominante. Por consejo de sus asesores jurídicos, Pinochet anunció en junio de 1977, una especie de cronograma para el establecimiento de una democracia restringida y excluyente, en el discurso de Chacarillas. Este anuncio coincidió con la sustitución de la DINA por la CNI en agosto del mismo año, así como con la "amnistía" acordada por el decreto ley N° 2119, de 1978, para quienes habían cometido delitos bajo el estado de sitio desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978.

Dicha amnistía fue promulgada poco después de la sustitución del estado de sitio por el estado de emergencia, bajo el cual cesaron las funciones de los tribunales

de guerra y se transfirió a los tribunales ordinarios y militares el conocimiento de los delitos políticos. Esta maniobra sólo sirvió para paralizar los procesos por secuestro y desaparición forzada de personas, así como por asesinatos individuales y masivos producidos en ese período, liberando de responsabilidad penal y civil a sus autores, cómplices y encubridores, tanto en esos juicios como en los que se iniciaren en el futuro por delitos cometidos en dicho período. Fue una extraña "amnistía", dictada por los propios malhechores.

El círculo infernal se cerró con la promulgación del decreto ley N° 2621, de 1979, fundado en cuatro decretos leyes anteriores, y conocido como ley antiterrorista, por el que se consideró delito el ataque contra el orden social, la moralidad, las personas y la propiedad, enmendándose simultáneamente el Código Penal. El nuevo cuerpo normativo distorsionó el principio básico del derecho criminal, toda vez que según el ministro de justicia del régimen "desde ahora el juez no 'tendrá que comprobar la culpabilidad para sentenciar", así como se estableció la delación como una obligación legal. De este modo, los terroristas persiguen a sus víctimas hasta el fin de sus vidas.

La constitución de la "libertad"

En 1980, Pinochet decidió consagrar la dictadura perpetua por medio de una nueva Constitución, producto de la Comisión Ortúzar, del aggiornamento del Consejo de Estado, presidido por el ex presidente de la República Jorge Alessandri, y de las trampas impuestas por los asesores jurídicos del dictador. Así se dio gusto a todos los usufructuarios del sistema de dominación, con un régimen militar encabezado por Pinochet hasta marzo de 1990, que se podía prolongar hasta 1997, y democracia "protegida" hasta el infinito. Por fin los "constitucionalistas" habían fijado plazo al "mandato" de Pinochet: ¡Hasta que Dios lo llame a su santo reino!

Para esto se convocó un plebiscito, efectuado el 11 de septiembre de 1980 y que constituyó una verdadera farsa por los condicionamientos y vicios que marcaron su desarrollo. El "plebiscito" se realizó, en efecto, en un país sujeto a estado de emergencia y bajo control de una dictadura que, durante siete años, había suprimido todas las garantías constitucionales, impuesto el terrorismo de Estado, disuelto los partidos y destruido los registros electorales. Además, sometió a consulta un proyecto sin alternativa, un "paquete" que comprendía tres materias distintas, aunque conexas, lo que generó la mayor confusión: un proyecto de constitución que había de regir en una fecha diferida, lejana en el tiempo, un régimen de transición de 8 a

16 años y el nombramiento de Pinochet como presidente de la Repúbl ica por 8 años, pudiendo ser reelegido por un nuevo período. Para este conjunto de materias se admitió una sola respuesta: como en la época de las cavernas.

Resulta interesante recordar que los "constituyentes" de Pinochet reprodujeron la misma norma, corregida y aumentada, de la constitución de 1822, que dio por elegido a Bernardo O'Higgins por seis años más como Director Supremo (cargo equivalente al de presidente de la República) después de haber desempeñado el mismo cargo durante cuatro años, desde 1818, y con el derecho a ser reelegido por 4 años más. El hecho exhibe dramática y grotescamente a los hombres del pinochetismo como espíritus con la vista vuelta hacia el pasado, auténticas remoras que actúan en las postrimerías del siglo xx, con una mentalidad colonial, propia de los primeros años de nuestra vida independiente. Este proceso de involución fue llamado "modernización" por la picaresca jurídica de la derecha. El sistema binominal es otro ejemplo tomado de una reforma electoral de 1912.

Las condiciones prevalecientes en el país desde el cruento golpe militar de 1973 no permitieron una discusión libre e informada sobre el contenido de tan insólito plebiscito. Por el contrario, la dictadura hizo escarnio de la opinión pública, abusando de su poder y manejo de los medios de comunicación social y de los recursos del Estado para desinformar y ejercer presiones sobre la masa de eventuales electores, como fue denunciado en su oportunidad por una oposición declarada fuera de la ley. A este contexto público, cabe agregar el cúmulo de irregularidades del acto mismo de la consulta, como la carencia de registros electorales, con lo que se configuró un proceso fraudulento y, por lo mismo, sin valor moral alguno.

Como estaba previsto, Pinochet ganó su plebiscito entrando a regir el 11 de marzo de 1981 sólo las disposiciones transitorias, ya que las permanentes tendrían vigencia a partir de 1990. Parece mentira. Los usurpadores de la soberanía popular impusieron así el más burdo de los fraudes políticos, invirtiendo la relación entre las normas permanentes y las transitorias. En el texto constitucional aprobado, estas últimas no se subordinan a las primeras, como sucede en todo sistema jurídico, sino que adquieren autonomía, estableciendo un régimen transitorio de nueve años, es decir, por un período mayor que el anterior, llamado de emergencia, que duró siete años. Las disposiciones transitorias no facilitan, de este modo, la puesta en marcha de las normas permanentes, sino que por el contrario las contradicen. ¡Puro surrealismo dictatorial!

Esta forma tramposa de legislar no constituye novedad alguna. El acta constitucional N° 3, en la cual se especifican derechos y deberes constitucionales, contiene por lo menos 38 disposiciones que requerían de una mayor definición para su apli-

cación, mediante leyes que debían ser promulgadas ulteriormente, lo que por cierto nunca se hizo. Por su parte, el acta constitucional N° 4, sobre regímenes de emergencia, con la cual se pretendía aparentemente formalizar facultades del gobierno en circunstancias extraordinarias y establecer límites al ejercicio *de* estas facultades, señaló que entraría en vigor, con excepción de dos artículos, en la fecha en que se publicara la legislación complementaria, lo que tampoco se perfeccionó. Las únicas partes que sí entraron en vigencia el 11 de septiembre de 1976 constituyeron limitaciones al ejercicio de los recursos de amparo y de protección.

La carta política, denominada irónicamente por sus prohijadores "constitución de la libertad", consolidó el carácter militar del Estado. Para ello mantuvo en el poder a la junta militar con funciones constituyentes y legislativas, conservó la relación entre los cargos de presidente de la República y de comandante en jefe del Ejército, y creó un Consejo de Seguridad Nacional, con atribuciones de "inteligencia", presidido por el primer mandatario, e integrado por los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, así como por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros. Ello asegura la mayoría militar en el caso de que en el futuro el cargo de presidente de la República fuese desempeñado por un civil. Después se modificó esto incorporando al Contralor General, estableciendo un empate entre civiles y militares, considerando al Primer Mandatario como civil.

Como si todo lo anterior fuera poco, ese pedazo de papel estableció que las Fuerzas Armadas y de policía "garantizan el orden institucional de la República" y que, por último, serán ellas las que al término del período de transición, propondrán al nuevo presidente de la República, pudiendo ser designado otra vez el mismo Pinochet. Esta última propuesta debería ser sometida a plebiscito y en el caso de ser rechazada, el dictador prolongaría su mandato hasta marzo de 1990, convocando previamente a elecciones en diciembre de 1989. La transición a la democracia no pudo ser más perfecta para la clase dominante.

La concentración del poder en manos de este putativo mandatario se acentuó con relación a la situación prevaleciente en el período de "emergencia". En este sentido, cabe anotar que toda reforma constitucional sería aprobada por plebiscito convocado por aquél. La junta militar es integrada además por un "oficial general de armas" (ejército) el que puede ser sustituido por el dictador "en cualquier momento". Así, Pinochet mantuvo como comandante en jefe del ejército su influencia en la junta militar, al tiempo que adquirió nuevas atribuciones como jefe de Estado. Entre éstas, estaba disponer, sin acuerdo de la junta militar, por simple decreto, el estado de emergencia y de catástrofe. Así, el poder del dictador quedó libre de con-

trol, ya no sólo de la ciudadanía sino de cualquier institución del Estado, pasando a ser el único arbitro en la dirección del proceso nacional y el gran capataz de Chile.

Esta excesiva concentración del poder revistió además una característica complementaria: la acentuación de la discrecionalidad en el ejercicio del mismo. Ella dejó a la mayoría social del país en la desprotección absoluta, lo que contraría la más elemental noción de un Estado de derecho, superior a la que rigiera el período de "emergencia", como quedó de manifiesto con la supresión de todo recurso legal contra numerosos actos del dictador contrarios a los derechos humanos y la anulación definitiva del recurso de amparo durante el estado de sitio. El mismo carácter revistió la facultad conferida a la junta militar para dictar leyes interpretativas de la carta fundamental, así como el tribunal constitucional, integrado por tres ministros de la Corte Suprema y cuatro representantes de la propia dictadura, es decir, por los mismos que se habían "sentado" en la constitución.

En contraposición a esta dictadura legalizada, la constitución transitoria no contiene, por cierto, ningún mecanismo de representación, excluyendo todas las formas de organización y participación populares, como venía sucediendo en el llamado período de "emergencia". De manera deliberada, acentuó el desprecio por los derechos humanos, negando procedimientos eficaces para su protección. Además de la supresión definitiva del recurso de amparo durante la vigencia del estado de sitio y del estado de asamblea, se prohibió a los tribunales la calificación de los fundamentos de hecho de las medidas adoptadas por el gobierno en el examen de los mismos, como sucede con el Artículo 24 transitorio.

La constante negativa de la Corte Suprema durante el período de "emergencia" a revisar las resoluciones de los tribunales militares de "tiempos de guerra", con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 86 de la constitución de 1925, se consagró en el nuevo texto constitucional. Se suprimió todo recurso respecto al arresto de las personas, a la restricción de sus derechos de reunión e información, a la prohibición de su ingreso al territorio nacional, a su expulsión de éste y su relegación. Consciente de representar a una minoría social, la dictadura dictó una carta política que consagra un sistema represivo, dirigido a enfrentar a la creciente resistencia popular con la violencia institucionalizada y garantizar la dictadura perpetua.

Entre los 29 Artículos transitorios, destaca el número 24 por el cual se especifica que "donde puede haber riesgo de alteración del orden público" el dictador declarará el estado de excepción, prorrogable cada seis meses. En virtud de éste, las personas serán detenidas en sus casas o en sitios que no sean cárceles (ya sabemos cuáles eran éstos) por un período de hasta 20 días. Los derechos de reunión y de libre información serán restringidos y los opositores pueden ser expulsados definiti-

vamente del país y relegados a lugares inhóspitos hasta por tres meses. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Chile expresa:

> La existencia simultáneamente de dos estados de emergencia, limita los derechos individuales de la misma manera que lo hacía un estado de sitio en caso de una guerra civil o disturbios internos, y la protección judicial es prácticamente nula, ya que los jueces no tienen forma de verificar la necesidad de las medidas impuestas por las autoridades.

La dictadura declaró oficialmente que, con la promulgación de la "Constitución de la Libertad" en 1981, había restablecido el Estado de derecho, a pesar de que sólo entraron en vigencia los Artículos transitorios, los cuales prolongan el régimen tiránico hasta marzo de 1990 para que recién entonces entraran en vigor los Artículos permanentes. A esta fachada de institucionalización se agrega la generación, a menos de una semana de promulgada su constitución, de un decreto ley, de 17 de marzo de 1981, por el que se restablecieron los tribunales militares de "tiempo de guerra" para que se ocupasen de juzgar a las personas acusadas de atacar o de asesinar a cualquier alto oficial, general, juez, dignatario de la Iglesia o cualquier otra figura pública, miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía, si el atentado se debiera al cargo oficial de la víctima. Estos tribunales especiales podían dictar la pena capital y sus sentencias eran inapelables.

Hacia la consolidación de la autocracia militar

Tampoco podría afirmarse con propiedad que con la vigencia de las disposiciones permanentes se restablecería un Estado de derecho. Aparte de su origen espurio, de imposición por la fuerza y el fraude, este remedo de Constitución no regula el funcionamiento de una democracia sino que establece una autocracia, tutelada por las Fuerzas Armadas. Por la misma corriente de pensamiento que ha venido cohonestando los crímenes contra la humanidad, considerándolos cuando más como simples "excesos" de los órganos represivos, y que ha sustituido con insistencia el concepto de *dictadura* por el de *autoritarismo* y después ha presentado este texto seudo constitucional como "neopresidencialismo". Una caracterización general de dicho documento político comprobará lo anterior.

Ante todo, cabe destacar, como primera característica, que la constitución de Pinochet es excluyente, ya que en su Artículo 8 del Cap. I declara que es ilícito y contrario al ordenamiento constitucional todo acto de persona o grupo destinado a pro-

pagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado y del orden jurídico de carácter totalitario, o fundada en la lucha de clases. Agrega además que son inconstitucionales las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que, por sus fines o por la actividad de sus adherentes, tiendan a esos objetivos, correspondiendo al Tribunal Constitucional conocer de las infracciones a lo dispuesto en dicho Artículo. La lucha de clases, un proceso histórico reconocido en todo el mundo, es declarada "ilegal", retrotrayendo la intolerancia ideológica a las concepciones predominantes en la Edad Media.

Con esto no cabe duda que se pretendió la exclusión de los partidos marxistas que precisamente han representado históricamente, durante más de medio siglo, a la clase trabajadora, al margen de que no han sido ellos, sino los promotores de la dictadura quienes han practicado la violencia y el terrorismo, así como la concepción totalitaria de la sociedad, del Estado y del orden jurídico. En estricto sentido, quienes deberían ser sancionados son los victimarios y no las víctimas de la dictadura. Es la inversión de los valores: los asaltantes del poder condenan a los defensores de las libertades democráticas, los verdugos a sus víctimas. Este Artículo 8º fue derogado en la reforma constitucional de 1989 por vergüenza de sus autores.

Como segunda característica, el articulado permanente de la Constitución de Pinochet mantiene el predominio político del poder militar sobre el poder civil, tal como existió durante los siete años del llamado período de emergencia y los ocho del de transición. En esta forma se niega el principio esencial sobre el que descansa cualquier democracia y, más aún, un Estado de derecho: el control civil del poder militar es el pilar de la estabilidad política. Para eso, la constitución le concede una ingerencia política determinante a los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros en el Consejo de Seguridad Nacional y, a través de éste, en el Tribunal Constitucional y en el Senado. En el primero de estos órganos, cuatro son militares, constituyendo mayoría. El Tribunal Constitucional, a su vez, está compuesto de siete miembros, de los cuales tres son designados por la Corte Suprema y cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional, donde los militares constituyen mayoría o empatan con los civiles después de la reforma constitucional ya mencionada.

La tercera característica de esta autocracia es la concentración del poder político en manos del presidente de la República, en desmedro de los otros poderes del Estado. Todos los demás órganos constitucionales están supeditados al autócrata, generando un desequilibrio de potestades que contradice una concepción democrática. Se amplían o extienden las materias de ley cuya iniciativa corresponde exclu-

sivamente al presidente de la República, en perjuicio de los parlamentarios. La función fiscalizadora de la Cámara de Diputados casi se anula, así como las facultades para pronunciarse sobre los estados de excepción, toda vez que se requiere su conformidad sólo en el caso del estado de sitio, reservándose el primer mandatario la atribución de declarar los estados de asamblea, de emergencia y de catástrofe con la sola aprobación del Consejo de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo, reduce la inviolabilidad de los parlamentarios.

Esta concentración del poder en el autócrata se manifiesta en la. facultad que tiene de disolver la Cámara de Diputados por una vez durante su mandato, con la única excepción de no poderlo hacer en el último año de funcionamiento de aquella. Como se sabe, ésta es una atribución reconocida en los regímenes parlamentarios, pero es inconcebible en un sistema de "presidencialismo exacerbado", a menos que sea para eliminar toda posibilidad de oposición. No se extiende al Senado debido a la forma de designación de esta rama del Congreso, ajena por completo a cualquier procedimiento conocido por la democracia representativa. La facultad de disolver la cámara de diputados fue suprimida por la reforma constitucional de 1989.

Este remedo de Parlamento cuenta con un Senado que es elegido, en parte, por votación popular y, en parte, por la manipulación directa de la oligarquía dominante. En efecto, a los 26 miembros elegidos por sufragio universal se sumarán tres designados por la Corte Suprema, cuatro por el Consejo de Seguridad Nacional, dos por el primer mandatario y los ex presidentes de la República, de los cuales no había entonces ninguno con vida, por lo que en términos eventuales sólo podría hacer uso de este derecho Pinochet, al dejar de desempeñar el cargo que ocupaba entonces. Partiendo de la base que estos senadores que habrán de entrar por la ventana responderán a los intereses de la clase dominante, será imposible que una oposición democrática de "mayoría" pudiera lograr predominio en dicho cuerpo legislativo a no ser que obtuviera una votación abrumadora. A su vez, a esa misma clase dominante le bastaría con elegir sólo 9 de los 26 senadores "populares" para controlar el Senado. Como en la ruleta, gana la banca.

Así la institución castrense estará comprometida a participar activamente en la política nacional, por medio de sus altos mandos; actuará como un partido armado cuyas decisiones gravitarán permanentemente como una espada de Damocles. Sus líderes, los comandantes en jefe y el director general de la policía uniformada, intervendrán a través de los organismos señalados. En el Senado, pesarán con sus opiniones y votos; en el Tribunal Constitucional podrán contribuir a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y en el Consejo de Seguridad Nacional decidirán representar a cualquier autoridad su muy "armada" opinión sobre algún hecho, ac-

to y materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional. Este poder casi autónomo de las Fuerzas Armadas se fundamenta en que sus comandantes en jefes y el director general de Carabineros gozarán de inamovilidad en sus cargos durante cuatro años, con excepción de Pinochet, a quien le corresponderá por ocho años, en el caso que fuera derrotado en el plebiscito, como ocurrió.

En suma, desde 1980, el bloque social dominante pretendió prolongar el ejercicio pleno del poder (conquistado por la violencia en 1973) bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, mediante este instrumento de legitimación (la "Constitución de la Libertad") hasta fines del siglo xx. Tal designio supuso afrontar con éxito tres *test* políticos:

El primero fue el llamado período de transición (1981-1989), durante el cual se aplicaron las disposiciones transitorias, comenzando por la más aberrante de todas, que ordena que "durante el período indicado en la disposición anterior, continuará como presidente de la República el actual presidente, general de Ejército don Augusto Pinochet Ugarte" (Art. 14 transitorio, inciso primero).

El segundo fue la designación del mismo general Pinochet, al término del período de transición, por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, todos ellos dependientes del mencionado general, en su carácter de presidente de la República, cuya designación sería sometida a plebiscito. En el caso de perder el plebiscito, como sucedió el 5 de octubre de 1988, gobernará un año más, convocará a "elecciones libres" en diciembre de 1989 y entregará el cargo en marzo de 1990.

El tercer test es la vigencia de la democracia "protegida" por la aplicación de las disposiciones permanentes de la "constitución" hasta 1997, con un presidente que puede ser el mismo dictador, esta vez vestido de civil, según promesa de algunos miembros de la junta militar, u otro de recambio, según cuáles fueran los resultados del plebiscito de 1988 o de las "elecciones libres" en 1990, en su caso.

Por último, esta "Constitución de la Libertad" infringe con escándalo el segundo mandamiento de la ley de Dios, de no invocar su santo nombre en vano, ya que el decreto N° 1.150, de 21 de octubre de 1980, por el que promulga dicha carta, concluye con la frase: "Con el mérito de estos antecedentes e invocando el nombre de Dios todopoderoso, decreto: Téngase por aprobada la Constitución Política de la República de Chile..." y firma el "elegido del Señor", con el beneplácito de los heraldos del *Opus Dei*.

Exclusión política y social de los trabajadores

Para imponer sus políticas económicas y sociales, la dictadura se propuso desde el primer momento la desarticulación del movimiento sindical, por medio de una brutal represión. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) comprobó este estado de cosas a través de una comisión investigadora. El informe final de ésta denunció, entre otros actos de persecución al movimiento obrero, la disolución de la Central Única de Trabajadores y de diversas federaciones obreras y campesinas, los atropellos a las organizaciones sindicales, la muerte por tortura, ejecución y aplicación de la "ley de fuga" de numerosos dirigentes, los arrestos, despidos y exilio de miles de trabajadores.

El movimiento sindical fue así aplastado, no pudiendo funcionar libremente como lo hizo durante el gobierno popular de Salvador Allende. La acefalía por las causas señaladas, por prisión, "desaparición" forzada y exilio de los titulares de más de 50% de los 35 mil cargos sindicales existentes al momento del golpe militar, así como la restricción de las actividades de estas organizaciones por prohibición de elecciones, control policial de las reuniones, suspensión de la negociación colectiva y del ejercicio del derecho de huelga contribuyeron a dicha desarticulación. En igual sentido actuaron el modelo económico mismo y la desocupación generalizada que éste trajo consigo, así como la persecución a los partidos populares que, en el pasado reciente, habían proporcionado a los sindicatos constante orientación teórica y mediación política ante el Estado.

Como sucedió con los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura, tampoco es posible cuantificar por ahora los efectos de esa desarticulación. No obstante, puede señalarse que los trabajadores sindicalizados disminuyeron y limitaron sus acciones durante la mayor parte del período dictatorial a la simple defensa de las más mínimas condiciones económicas de sobrevida. Esta tarea fue asumida, en gran proporción, por una nueva generación de dirigentes que sustituyó a los antiguos líderes asesinados, presos, despedidos y obligados al exilio o dedicados a vender mote con huesillo en las calles de las ciudades de Chile.

La dictadura había así logrado sentar las bases de su modelo económico, que consistían en la creación de condiciones que permitiera la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, manteniendo los salarios al nivel de subsistencia, lo que permitió el enriquecimiento de los capitalistas. Estas condiciones revestían caracteres económicos, sociales y políticos, comprendían "alta tasa de desempleo, liquidación de las organizaciones sindicales y de las centrales de trabajadores, destrucción de las expresiones políticas de la clase obrera chilena o, en su caso, desnaturalización del

rol jugado hasta entonces por los sindicatos y los partidos populares en la vida nacional". Pero eso no era todo. Comprendían además la voluntad de "cortar de raíz el vínculo histórico existente entre la izquierda chilena y el movimiento obrero y reducir el sindicato a un débil aparato técnico, confinado a los estrechos límites de la empresa e incapaz de debatir los aspectos generales de la política económica..."

Las políticas económicas y laborales, así como la represión, comprometieron de este modo al movimiento sindical. Desarrollado éste al amparo del proceso de industrialización y en la lucha tanto por una mayor participación en sus resultados económicos y sociales como por influir en el cambio de la sociedad, se vio enfrentado violentamente a una lógica capitalista distinta, a la imposición de un nuevo modelo de acumulación y a la difusión de la ideología neoliberal. Constreñido de este modo, durante mucho tiempo, sólo se planteó la reconstrucción de su unidad y su redefínición ideológica cuando la dictadura misma inició su retroceso.

La recomposición del movimiento sindical pasó por diversas fases, superando lentamente su reflujo. Desde 1976 comenzó a rehabilitar sus organizaciones, adoptó posiciones de fuerza frente a la dictadura en demanda de mejoramientos salariales y propició la constitución de estructuras superiores de coordinación de sus luchas reivindicativas. No fue fácil, por cierto, poner de nuevo en marcha a la organización obrera. En estado de "guerra interior" primero y estado de sitio y de emergencia después, no era posible siquiera que los sindicatos se reuniesen para examinar los problemas de sus asociados. Cuando se les permitió hacerlo, con toda clase de limitaciones, como permiso previo y presencia policial, se encontraron con la penosa realidad de que era poco lo que se podía avanzar ya que el gobierno de facto había suspendido la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La dictadura mantuvo una política combinada de represión y negociación. Ante cada movilización obrera por sus reivindicaciones respondió con arrestos masivos que, en cada caso, sólo cesaron gracias a la presión sostenida de la opinión pública nacional y extranjera. Forzada a negociar por el anuncio de un boicot internacional a comienzos de 1979, la dictadura respondió con un "parto de los montes": el Plan Laboral. Esta legislación restableció aparentemente la negociación colectiva y el derecho de huelga, toda vez que los condiciona de tal modo que les resta eficacia. Fue el postrer intento de mediatizar el movimiento sindical, que se vio frustrado por la tradición de lucha que se remonta a más de un siglo, la misma que le permitió a los trabajadores enfrentar por medios pacíficos la fase más brutal de la ofensiva de los patrones en el siglo xx.

De este modo el desfase observado en los primeros años de tiranía entre su política económica y su política laboral se trató de superar, a partir de 1976, culmi-

nando este proceso de homogeneización con la expedición del "Plan Laboral" en 1978, que comprendía, entre otros, los decretos leyes N° 2.200 sobre contrato de trabajo, N° 2.256 sobre organizaciones sindicales, N° 2757 sobre organizaciones gremiales, N° 2758 sobre negociación colectiva y N° 2760 sobre defensa de la libre competencia. Esta legislación laboral, conjuntamente con otros textos legales del dictador, pasó a constituir, con algunas modificaciones, el Código del Trabajo promulgado en 1987, el que mantiene drásticas restricciones sobre las actividades sindicales. El reconocimiento de los sindicatos quedó sujeto, desde luego, al entero arbitrio de las autoridades y las federaciones y confederaciones perdieron las atribuciones efectivas que tuvieron en el pasado en la defensa de los intereses de los trabajadores.

Después de seis años de constante interdicción se restableció el procedimiento de negociación colectiva, restringida a los miembros del sindicato en el instante de efectuarse dicho procedimiento o al grupo de trabajadores que toman parte en ella. Esta nueva legislación desvirtuó completamente el derecho a huelga. Entre otras normas restrictivas, cabe destacar la que suspende los efectos del contrato de trabajo durante la huelga, pudiendo los patrones contratar nuevo personal en sustitución de los que han interrumpido sus labores, o permite declarar el *lock-out* hasta por 30 días. Concluido este plazo, los trabajadores pueden regresar individualmente a sus puestos, estipulándose un nuevo contrato. La huelga, por otra parte, no puede prolongarse por más de 60 días, al término de cuyo plazo los asalariados deben volver a sus labores, quedando los patrones en libertad de contratar nuevo personal si así no lo hicieren aquéllos. Es el restablecimiento "legal" del sistema de rompehuelgas o esquiroles de comienzos del siglo xx.

La misma legislación prohibe la huelga a los trabajadores de las empresas que prestan servicios de utilidad pública o cuya paralización causare grave daño a la salud, al abastecimiento, a la economía y a la defensa del país. Para este sector se estableció el arbitraje obligatorio en el caso de no arribar a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo. Los arbitros son designados por la dictadura y no tienen otra facultad que la de fallar en integridad por una u otra de las proposiciones de las partes. Conocido el carácter de clase del Estado, es fácil suponer a quiénes favorecerán estos arbitros en los casos de conflictos laborales.

Para hacer aún más precario el derecho de huelga, aquella legislación procura impedir que los trabajadores de una misma rama industrial coincidan en la presentación de sus demandas, mediante el establecimiento de nueve fases de negociación colectiva, así como por el ejercicio del derecho de los patrones para fijar 60 días al año en los que no se puede promover negociación colectiva. Maniatado de esta ma-

nera, el movimiento sindical no puede actuar dentro de la ley, toda vez que la nueva legislación del trabajo no protege a éste sino al capital, con lo que desfigura completamente la filosofía del derecho laboral, es decir, el sentido con el que nació.

La actividad sindical se había visto más limitada todavía por la presión del ejército industrial de reserva. Los índices de desocupación permanecieron demasiados elevados durante todo el período de la dictadura, disfrazándose, como se ha dicho, las cifras con el PEM y el POJH, en tanto se disminuía el ingreso real de estos desocupados. La experiencia de los sindicatos en materia de negociación colectiva y de huelga en los marcos del nuevo código del trabajo fue, en suma, absolutamente negativa, hasta el punto de formularse su modificación, de conformidad a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La dictadura se planteó, a través del nuevo Código del Trabajo, que tuvo como fundamento el llamado Plan Laboral, y mediante la constitución de 1980 y de las leyes políticas (ley de partidos políticos principalmente) una serie de objetivos estratégicos que complementan y aseguran el funcionamiento del modelo económico, presentado como "economía social de mercado". La que por cierto tampoco ha existido en Chile ya que ella funciona en Europa en el marco de la democracia representativa y de la libertad sindical, lo que permite a los sindicatos participar, a lo menos, en la distribución de los resultados económicos de la producción mediante la negociación con las empresas. Esta situación no se dio en este país por el terrorismo de Estado que aplastó al movimiento sindical y por la vigencia de los instrumentos jurídicos generados por la dictadura.

En el curso de más de dieciséis años de dictadura, el capitalismo dependiente chileno impuso, entre otras condiciones, las siguientes sobre el movimiento obrero:

> 1. Desorganizar a la clase obrera, como paso indispensable para la desorganización del conjunto de las clases dominadas; 2. atomizar el movimiento sindical, de manera de aparecer como permitiendo la existencia de los sindicatos, pero reduciendo a éstos a los confínes de la empresa individual; 3. restringir los derechos de los trabajadores y crear las condiciones económicas y extraeconómicas que permitan que el capital extranjero y nacional obtengan mayores ganancias a costa de la fuerza de trabajo; 4. impedir a toda costa la expresión política de los trabajadores chilenos, estableciendo lo que con gran acierto se ha denominado el "apartheid" político en Chile.[1]

La legislación laboral, que surgió en todo el mundo para proteger a los trabajadores, y cuyo espíritu estaba presente en el Código del ramo vigente hasta el golpe

[1] Wladimir Araneda, "Los trabajadores chilenos y la institucionalidad de la dictadura", mimeo, México, 1988.

militar de septiembre de 1973, se convirtió en una suerte de muro de contención de las demandas obreras, en defensa del sistema capitalista, por medio de la nueva legislación de la dictadura. Los patrones, revestidos a través de sus representantes en el gobierno, de los poderes propios del ejecutivo (presidente de la República, ministros y gestores del sector paraestatal de la economía) y del legislativo (junta de gobierno y sus asesores), dictan un constante rosario de normas "jurídicas" que amparan la sobreexplotación de los trabajadores y el enriquecimiento ilícito de los empresarios. La transferencia de recursos económicos de los trabajadores a los patrones es inconmensurable, como en el caso de la mano de obra esclava durante el nazismo en Alemania y por lo que merecen una indemnización como en ese país.

En dicha legislación, elaborada por los abogados de los patrones y aprobada por los "milicos" de la dictadura, se persigue la desarticulación, atomización y privatización de los sindicatos a través de dos líneas de limitación de los mismos. La primera se refiere a la demarcación de sus fines puramente "técnicos", con la prohibición absoluta de proyectarse hacia objetivos superiores, como son los de orden político. No existe esta limitación legal para los gremios de los empresarios de los distintos sectores de la economía. La segunda concierne a la prohibición establecida para los sindicatos interempresas y a las federaciones y confederaciones de sindicatos a realizar negociaciones colectivas, debiendo éstas celebrarse en cada sindicato por empresa, "privatización" de la relación laboral que casi anula la fuerza de la negociación.[2]

La misma legislación excluye a los trabajadores organizados de la actividad política, como una forma más de asegurar la perdurabilidad del modelo económico y de la dominación política de la burguesía. En este sentido, cabe mencionar el Artículo 8ª de la Constitución de 1980, de acuerdo al cual el Tribunal Constitucional declaró "inconstitucionales" a los partidos que integraron el Movimiento Democrático Popular (Partidos Comunista, Socialista (fracción Almeyda) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Posteriormente hizo lo mismo respecto a Clodomiro Almeyda, en cuanto representante de un partido de trabajadores, privándolo de sus derechos políticos por diez años. Es una especie de Inquisición moderna.

Contribuye a este mismo espíritu excluyente en el ámbito político el Artículo 23 de la mencionada Constitución, al establecer que "el cargo de dirigente gremial será incompatible con la militancia en un partido político, incurriendo en delito quien infrinja esta disposición". La ley establecerá, agrega, las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidis-

[2] *Ídem.*

tas y a los dirigentes políticos que interfieran el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale". Esta forma de exclusión de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, en el proceso político, donde se definen tanto los problemas nacionales como los que los afectan directamente a ellos, configura la naturaleza de clase de la dictadura de Pinochet y del sistema institucionalizado por la Constitución de 1980. Como ya se dijo, estas prohibiciones, delitos y sanciones no se aplican a los grandes gremios y corporaciones de los empresarios.

Está de más decir que esta legislación "laboral" dictada por la clase dominante burla e infringe el convenio colectivo de la OIT, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales y el Pacto de San José. Todos ellos son instrumentos jurídicos suscritos por Chile. De esta manera, sobre la base de sindicatos y partidos sin derechos ni medios de lucha legítima, desvinculados de sus bases sociales y sin la debida comunicación entre ellos, se ha pretendido asentar la democracia "protegida". Hasta hoy, año cinco del tercer milenio, no vale la pena examinar las reformas laborales aprobadas durante la transición a la democracia hasta fines del siglo xx por su carácter menor o poco significativo.

La justicia de clase

Durante la dictadura se puso en evidencia indiscutible la justicia de clase en Chile, la que se proyectó más sólidamente en el marco de la herencia de dicho proceso. No se trata de que no se hubiera practicado antes de 1973, sino que alcanzó su máximo desarrollo en el reinado de Pinochet. En efecto, en 1970, Eduardo Novoa Monreal publicó un ensayo titulado *Justicia de clase,* en el que desarrolló su pensamiento en torno al análisis de fallos relacionados con juicios del trabajo, arrendamientos, expropiaciones, derechos adquiridos, franquicias tributarias, garantías individuales y procesos criminales. En ese tiempo Novoa expresó: "Cada día se extiende más la imputación de que en Chile se administra una justicia de clase. Esto significa atribuir a los jueces (tribunales superiores y, en especial, Corte Suprema) una concepción unilateral de la justicia, puesto que la concebirían únicamente como aquello útil para el sostenimiento del status social vigente y a la vez coloca a los tribunales en abierto antagonismo con todos los sectores, cada vez más amplios, que creen indispensables profundos cambios sociales. En la práctica, esto conduciría además a sostener que la justicia actúa al servicio de la clase dominante y que interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen

económico-social vigente, en desmedro de los trabajadores, que constituyen en el país la más alta mayoría".[3] Se trata de un trabajo inédito, formulado por un notable abogado, el más cabal hombre de derecho.

Esta caracterización se encuentra confirmada, como señala el mismo Novoa, en una acusación constitucional presentada a fines de 1967 por diputados socialistas y comunistas en contra de miembros de la Corte Suprema, así como en una carta de Renán Fuentealba, dirigente de la Democracia Cristiana, de 10 de febrero de 1962, a Sergio Recabarren. Asimismo, la asumió en esos mismos años el movimiento obrero, a través de numerosas organizaciones de trabajadores. Pero la Corte Suprema la rechazaba de manera reiterada, sosteniendo que ella estaba en consonancia con el espíritu de su tiempo y aplicaba las leyes vigentes en el país. No puedo analizar ahora el pensamiento de Novoa, sino lo menciono sólo para tenerlo presente al considerar el comportamiento del poder judicial durante la dictadura, como parte de la herencia dejada por ésta.

No obstante, conviene dejar constancia de algunas causas que condicionan esta justicia de clase. Entre ellas, el poder judicial no ha logrado adaptarse a las circunstancias sociales que vive el país, desconociendo por lo tanto las nuevas aspiraciones sociales. Por el contrario, ha asumido, particularmente la Corte Suprema, la defensa de los intereses de los sectores dominantes, estableciendo sus miembros relaciones con los sectores más conservadores. Para pertenecer a ella se exige a sus ministros la adhesión a las posiciones tradicionalistas y, por lo general, provienen de esos mismos sectores. Según su criterio,

> la lucha de clases es un mito que debe ser desenmascarado; no existe separación tajante entre la clase trabajadora, por una parte, y los empresarios, los terratenientes, los monopolios y el gran capital nacional y extranjero por la otra: los poseedores de la riqueza reparten cada vez más sus utilidades entre los que concurren con ellos a la producción de los bienes; hablar de la lucha de masas para arrancar nuevas conquistas de los sectores privilegiados es despertar rencores censurables y emplear palabras que no reflejan la verdad; las diferencias sociales han desaparecido y en Chile hombres de modesto origen económico pueden alcanzar las más encumbradas posiciones políticas y sociales.[4]

Estos conceptos fueron extraídos de la respuesta de la Corte Suprema a la acusación constitucional presentada por diputados socialistas y comunistas en 1967. ¡Es increíble la mentalidad chata y reaccionaria de aquellos jueces!

[3] Eduardo Novoa M., *Una crítica al derecho tradicional,* Santiago, Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1993, pág. 305.

Ubidem, pág. 331.

Causa de este reiterado comportamiento de la Corte Suprema es también el desbordamiento de sus atribuciones, con las cuales dicta muchas de sus resoluciones que superan el marco de reglas procesales básicas.

> En la jerga judicial se acostumbra llamar 'supremazo' a esta clase de fallos. Mediante ellos se revisan sentencias de tribunal competente sin oír a todos los interesados, o se olvida la permanencia que la ley ha querido establecer para los fallos ejecutoriados. Frente a esta clase de decisiones, las reglas de derecho, especialmente las procesales, parecieran estar de más, y si la misma Corte no accede a reconsiderarlas, no hallan autoridad alguna a la cual reclamar.[5]

Relacionada con lo anterior, la situación de irresponsabilidad en que se han colocado los miembros de la Corte Suprema es causada también por la justicia de clases. Así lo sostiene Novoa:

> Pese a que la Constitución dispone expresamente que todos los magistrados (y no señala excepción) serán personalmente responsables de falta de observancia de las leyes y torcida administración de justicia, una ley especial (Art. 324 del Código Orgánico de Tribunales) ha excluido de esa responsabilidad a los miembros de la Corte Suprema.[6]

Ésta se ha negado a reconocer su inconstitucionalidad cada vez que se ha pedido o alegado.

Eduardo Novoa Monreal hace por fin un correcto resumen de la justicia.

> Hacer justicia es, antes que nada, procurar igualdad de trato para todos y proteger solícitamente a los más débiles. Para ello es preciso empinarse por sobre diversidades ideológicas, por sobre simpatías o antipatías personales o de grupo, por sobre los intereses propios o de los que están más próximos en la relación social, y mirar a todos los ciudadanos que la soliciten o que la necesiten, sin prevención, con gran amplitud de criterio, no enturbiada por ningún prejuicio o animadversión.[7]

La verdadera justicia, de acuerdo a la vida social, es la "más excelsa expresión de la juridicidad de una sociedad humana". No de gorilas, con o sin uniforme.

La Corte Suprema, como parte de la institucionalidad burguesa y cabeza del Poder Judicial, articuló una estrecha colaboración con la dictadura desde el mismo día

[5] *Ibidem,* pág. 332.

[6] *Ídem.*

[7] *Ibidem,* pág. 333.

del golpe militar. En efecto, el 12 de septiembre de 1973 el presidente de ese tribunal superior Enrique Urrutia (1973-1975) recibió a un representante de los asaltantes del gobierno constitucional y democrático para expresarle su aprobación al cuartelazo, lo que fue ratificado por el Pleno.[8] Dice Fernando Guzmán: "Curiosa magistratura ésta, que se jacta y complace de su independencia mientras cientos y miles de personas, cuya vida, libertad y seguridad es llamada a defender, yacen muertos en las calles, detenidas en estadios deportivos y sujetas a vejatorios interrogatorios".[9]

Mientras la sangre de los trabajadores se vertía a raudales, se sucedieron diversos cabildeos entre ambos cuerpos sediciosos. La Junta Militar visitó en pleno a la Corte Suprema, oportunidad en la que Pinochet reconoció el "respaldo moral" recibido de este alto tribunal, y Urrutia le impuso la banda presidencial, con oportunidad de la promulgación del decreto ley N° 527 sobre estatuto de la Junta de Gobierno, sin que esta actuación estuviera consagrada como prerrogativa de la Corte Suprema, ni en la constitución de 1925 ni en disposición legal alguna. De este modo, la superioridad del Poder Judicial se suma y participa también en el golpe de estado de 1973, como parte de la clase dominante.

La Corte Suprema fue aún más lejos en su esfuerzo por legitimar a la dictadura. Urrutia, en sus discursos de inauguración de las actividades judiciales en los años 1974 y 1975, calificó a ésta como "un movimiento regenerador", negó las denuncias sobre atentados a los derechos humanos y justificó las ejecuciones sumarias y arrestos arbitrarios, así como consideró legítimas las medidas de excepción y las suspensiones de las garantías constitucionales. Su cinismo lo llevó al extremo de condenar a los recurrentes de amparo en 1975, acusándolos de actuar "sugeridos por ese sistema morboso de insultar o molestar a los que administran..." La misma actitud deshumanizada tuvo para la grave situación de los detenicos desaparecidos, convirtiendo de hecho a los tribunales ordinarios de justicia en cómplices y encubridores de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Este comportamiento de complicidad de la Corte Suprema y todo el sistema judicial es la antítesis de la verdadera justicia.

Durante el período en que la dictadura trató de revestirse con cierta institucionalización, que comprende las actas constitucionales de 1976, la llamada consulta nacional y el anuncio de una nueva Constitución en enero de 1980, continuó la colaboración de la Corte Suprema, justificando los atropellos a los derechos humanos,

[8] Declaraciones publicadas en el diario *El Mercurio* (12 y 13 de septiembre de 1973).

[9] Fernando Guzmán, revista *Mensaje* N° 229, junio de 1984, Santiago de Chile.

sociales y políticos. En este tiempo la dictadura promulgó una especie de estatuto del terrorismo de Estado, cuyo fárrago de disposiciones, de una parte, otorgaba poderes ilimitados a los organismos represivos y, de otra, suprimía o limitaba los recursos de protección a las personas. Todo ello bajo la inspiración de los "filósofos" defensores de los derechos de las personas, como ellos se autodenominan ahora sin rubor.

El acta constitucional N° 4, de 1976, confirió a la dictadura facultades para detener a las personas durante el estado de sitio, estado de asamblea contra la subversión y estado de catástrofe hasta por diez días en caso de imputárseles delitos contra la seguridad del Estado, antes de ser puestas a disposición de los tribunales de justicia, plazo que se amplió a veinte días posteriormente. El decreto ley N° 1.684, de 1977, limitó aun más el recurso de protección durante el estado de sitio. De manera complementaria, por el decreto ley N° 1.877, de 1978, se concedió al dictador facultades para arrestar en estado de emergencia hasta por cinco días, caso en el cual ni siquiera era obligatorio poner al afectado a disposición del juez, ya que dicha atribución tenía carácter preventivo, similar a la del estado de sitio y, por lo mismo, no implicaba la acusación de delito alguno.

El recurso de amparo fue desvirtuado hasta convertirlo en una caricatura. En efecto, interpuesto este recurro, la DINA primero y la CNI después, informaban que por razones de "seguridad nacional" no podían dar a conocer el lugar del arresto, explicación que era aceptada por los tribunales como jurídicamente válida. Los ministros de las cortes no se constituían en el lugar de detención en los casos en que se conocía el paradero de los arrestados, ni tampoco resolvían el recurso en los plazos legales. La Corte Suprema, por su parte, renunció de hecho al ejercicio de sus funciones penales al conocer los recursos de amparo, los cuales se rechazaban en los pocos casos en que fueron puestos los detenidos a disposición de los tribunales por estimarse que las irregularidades cometidas quedaban saneadas por ese hecho. Así, se hacía tabla rasa del principio de que el recurso de amparo no sólo tenía por fin poner término a un arresto arbitrario, sino también denunciar las faltas cometidas y sancionar a los responsables.

El presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre (1975-1978) elogió, en su informe inaugural de 1976, el decreto ley N° 1.009, de 1975, y el decreto N° 187 del ministerio del interior, de 1976, los cuales contienen graves disposiciones represivas como la detención de personas por la DINA y el allanamiento de recintos privados por los organismos de "seguridad". Igualmente, en su informe inaugural de 1978, apoyó en forma pública a la llamada consulta nacional, que no tuvo otro designio que contrarrestar la crítica constante de la Organización de las Naciones

Unidas a la violación de los derechos humanos y a la comisión reincidente de crímenes contra la humanidad.

Para quienes todavía defienden el valor absoluto **del** derecho oligárquico, conviene recordar la concepción de clase de la ley y la justicia de Eyzaguirre sostenida en una entrevista de prensa. Consultado por un periodista acerca de si pensaría lo mismo en el caso que las atribuciones represivas autoconcedidas por la dictadura las hubiera ejercido el gobierno de Salvador Allende contestó que "todo depende de quién ejerce el poder" y que ése "era un gobierno dominado por partidos extremistas, así que habría sido un arma muy fuerte contra cualquier ciudadano".[10] La misma posición sostuvo respecto al uso futuro que pudiere hacerse de esa legislación por nuevos gobernantes, vulnerando "garantías esenciales". En otras palabras, para Eyzaguirre los trabajadores y estudiantes asesinados, torturados y perseguidos no eran "ciudadanos" y las "garantías esenciales" sólo rigen para los oligarcas. Por eso, los mismos que apoyaron a la dictadura reclaman por la falta de "seguridad ciudadana" expresada en el robo en pequeña escala que los afecta ahora, pero no lo hicieron durante el saqueo del país.

Para Eyzaguirre, como para su anciano antecesor en el cargo, no hubo detenidos desaparecidos en Chile. Entonces, él dio un juicio definitivo sobre este drama.

> Los ministros encargados de las visitas a los juzgados han expedido sus informes, y de ellos se desprende que en numerosos casos las personas cuya desaparición se investigaba se encuentran en libertad, otras han salido al extranjero, otras están detenidas en virtud del estado de sitio, otras procesadas por tribunales militares y finalmente, respecto de algunas, se trata de delincuentes de derecho común, cuyos procesos se tramitan."

Así, en esta forma escandalosa, el Poder Judicial encubrió el más doloroso y cobarde genocidio conocido en la historia de nuestro país, con las mismas explicaciones cínicas que había dado la dictadura a través de sus voceros internos y externos. Sergio Fernández desde el ministerio del interior y Sergio Diez desde la ONU negaron, faltando a la verdad, que existieron presos políticos "desaparecidos", sin reconocer tampoco que los habían asesinado.

Esta denegación de justicia por los tribunales durante la dictadura, se demuestra con cifras escalofriantes. De decenas de miles de violaciones a los derechos humanos conocidas por los tribunales, sólo en un caso se determinó responsables a través de sentencia ejecutoriada. De igual manera, de cinco mil recursos de amparo

[10] Citado por Fernando Guzmán, *ibidem*.
[11] *Idem.*

conocidos, entre 1973 y 1979, sólo cuatro fueron acogidos y de éstos uno todavía no se ha cumplido porque el arrestado está desaparecido. Entre estos miles de recursos de amparo rechazados, se encuentran todos los que favorecían a los detenidos desaparecidos. De acuerdo a este espíritu de justicia de clase, amparadora de la criminalidad, los tribunales inferiores disponían el sobreseimiento o el archivo de los procesos en la mayor parte de las denuncias y querellas presentadas por los familiares de las víctimas. Los jueces que cumplieron sus deberes se cuentan con los dedos de las manos, algunos de los cuales fueron castigados por la Corte Suprema.

Todas las peticiones de designación de ministros en visita extraordinaria formuladas en los años 1974, 1975 y 1976, en los cuales sucedieron precisamente la inmensa mayoría de las "desapariciones" de presos políticos, fueron rechazadas, excepto en un caso en este último año. Para la Corte Suprema, el secuestro y asesinato de miles de personas no constituyeron "alarma pública", fundamento legal para hacer dichas designaciones. Sólo más tarde, cuando la DINA había realizado el trabajo sucio, la Corte Suprema designó en abril de 1979 cinco ministros en visita para investigar el cúmulo de denuncias y querellas tantas veces reiteradas. Los ministros designados pronto se declararon incompetentes, pasando los antecedentes a la justicia militar sin agotar previamente las investigaciones, aún en los casos comprobados de genocidio como los de Lonquén, Yumbel y Mulchén. El círculo de la muerte se cerró con la aplicación por los tribunales militares del decreto-ley de autoamnistía dictado en 1978 por los golpistas y asaltantes del poder.

Durante la presidencia de Israel Bórquez en la Corte Suprema (1979-1983), período en que la dictadura militar se "institucionalizó", como ya se ha explicado, la complicidad fue aún mayor. Este "magistrado", con un incalificable cinismo, mantuvo un hermético silencio sobre el atropello a los derechos humanos, excepto cuando fue forzado en entrevistas de prensa, en una de las cuales expresó con una deshumanización brutal que los detenidos desaparecidos lo tenían "curco". Sin darse cuenta, lo único que reveló con esta declaración es el carácter retorcido de su conciencia, si puede hablarse de conciencia en este caso de miseria humana.

La Corte Suprema no se conmovió tampoco en este período ni siquiera con la "aparición", en el fondo de los hornos de una mina de cal en Lonquén, de los cadáveres mutilados de 33 de estos prisioneros secuestrados, ni con el cementerio de desaparecidos en Yumbel, todos casos de personas que habían sido arrestados y asesinados en septiembre de 1973 por los esbirros de la dictadura. Similar situación ocurrió en Cuesta Barriga, Laja y Mulchén. Por el contrario, a pesar del estremecimiento de la conciencia nacional, este Poder Judicial volvió a echar tierra sobre es-

tos crímenes en procesos simulados, dirigidos a blanquear la negra cara de los militares genocidas y sus cómplices y encubridores de la derecha política.

Desde entonces y hasta el término de la dictadura es poco o nada lo que cambió en el comportamiento de la Corte Suprema, a pesar de cierta "renovación" verbal durante el ejercicio de la presidencia de este tribunal por Rafael Retamal (1983-1988), cuya elección coincide con el llamado período de "apertura" y el surgimiento de las protestas nacionales. Este magistrado se convirtió, con el paso de los años, de tenaz conspirador en un abuelo sentencioso y humanitario. Di; su primera etapa hay, en efecto, testimonios serios de que él fue el redactor de los oficios de la Corte Suprema en los que, con fundamentos falsos, se acusó de ilegalidad al gobierno de Salvador Allende, la mayoría de las veces por sucesos nimios, que no merecieron observaciones en gobiernos anteriores, como la demora en otorgar la fuerza pública en juicios de desalojo, documentos que sólo firmaba Urrutia. Su contribución al golpe militar, como la de sus colegas, fue evidente, tanto durante la conspiración como después del golpe.

No se puede afirmar tampoco que se hubiera singularizado hasta la asunción de la presidencia de la Corte Suprema por la defensa del Estado de derecho. Su actitud cambió, sin embargo, a partir de esta designación. Como expresa Fernando Guzmán:

> Con todo, es preciso reconocer que, en una década, él fue el primer presidente de la Corte Suprema que se refirió con sentida reverencia al problema de los; derechos humanos en el país, asumiendo en ocasiones como propios los dolores que si trasgresión ha causado, e insinuando en otros, mecanismos para prevenir y evitar estas trasgresiones.[12]

Aunque tardíamente, Retamal reconoció también la inexistencia en Chile de un Estado de derecho pleno, sin haber logrado rectificar durante su mandato los rumbos contrarios a la justicia del tribunal que presidió, ni del conjunto del Poder Judicial. Como San Pablo, él recorrió también el "camino a Damasco", pero sin éxito, es decir, sin poder influir entre sus pares.

La perspicacia, agudeza e ironía exhibidas por Retamal durante el lapso comprendido entre 1983 y 1984 lo proyectaron como la principal figura pública en el proceso de lucha por la democratización, como lo fue el Cardenal Raúl Silva Henríquez, hasta que el pleno del alto tribunal lo refrenó, censurando su excesiva locuacidad, con lo que se apagaron sus destellos renovadores. Exorcizados de esta manera los "demonios" del alma de este magistrado, se reanudó la estrecha colabo-

[12] *ídem.*

ración de los "tres" poderes del Estado hasta culminar con nuevas sentencias que ofendieron la conciencia misma de la justicia, como la excarcelación a comienzos de 1986 de los jefes de carabineros que intervinieron en el degollamiento de tres militantes comunistas y la absolución de los militares que provocaron quemaduras y heridas mortales a dos jóvenes.

Esta perversión de la Corte Suprema obligó, después de más de doce años de dictadura, al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Fernando Volio, un hombre de ideas moderadas, a reclamar que "el Poder Judicial asuma sus papeles en una forma activa, vigorosa, ampliando e interpretando sus potestades". Ello porque, como dice este relator, "un poder judicial independiente es el instrumento más importante de tutela de los derechos humanos en todas partes del mundo democrático",[13] es decir, lo que no existió en Chile durante dieciséis años y medio de dictadura. Si se quiere tener la imagen de lo que es un sistema totalitario, no hay más que ver cómo estuvo organizada y funcionó la "democracia" de la derecha.

De acuerdo a su sentido de clase, la dictadura se ocupó en sus últimos días de asegurar una Corte Suprema fiel defensora de sus crímenes y peculados. Para eso, promovió la jubilación de los miembros más viejos, pagándoles altas indemnizaciones y llenando las vacantes con jueces incondicionales. Entre los ministros más adictos a la dictadura se contaban Hernán Cereceda, destituido posteriormente por el Senado en virtud de una acusación constitucional, Lionel Beraud, Efrén Araya, Germán Valenzuela, Emilio Ulloa, Servando Jordán, Osvaldo Faúndez y Enrique Zurita, senador designado después de su jubilación. Los ministros de justicia que se destacaron en la domesticación del poder judicial fueron Jaime del Valle, Mónica Madariaga, sobrina del dictador, y Hugo Rosende.

La Corte Suprema, al igual que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, rechazó el informe Rettig, con las excepciones de Rafael Retamal y Luis Maldonado. Herida por las revelaciones sobre su comportamiento durante la dictadura, calificó dicho informe como "apasionado, temerario y tendencioso", negando a la mencionada comisión toda atribución para juzgar al Poder Judicial, y justificando su actuación por las condiciones existentes en el país (el régimen militar). La misma opinión expresó en el año 2001 el presidente de la Corte Suprema Hernán Alvarez. Durante el período de transición a la democracia se fue renovando, en cierta medida, este alto tribunal, hasta que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle aceptó en una nueva ley de reforma procesal que los ministros de aquélla fueran aprobados,

[13] Cable publicado en el periódico *El Día*, de México, de 7 de marzo de 1986.

en última instancia, en el Senado con un quorum de dos tercios, lo que ha consagrado la negociación política en las designaciones. En el caso de Milton Juica, su primera propuesta fue rechazada por la derecha, siendo aprobada una segunda propuesta, varios años después, previa designación del ministro conservador Domingo Kokisch. El castigo del magistrado Juica se debió a haber condenado a los autores del caso de los degollados, pidiendo además a la Corte Suprema una investigación sobre la responsabilidad del entonces general director de Carabineros, Rodolfo Stange, que fue desechada por el tribunal superior. La renovación parcial tanto de la Corte de Apelaciones de Santiago como de la Corte Suprema se reflejó en el año 2000 en el desafuero y la encargatoria de reo de Pinochet en el caso de la "caravana de la muerte", con un retroceso posterior, en el sobreseimiento del dictador por "loco o demente".

No obstante los relativos avances producidos en los tribunales ordinarios de justicia, personificados en los ministros Juica, Guzmán, Muñoz, Solís, Cerda y otros, la impunidad absoluta ha prevalecido en los tribunales militares, los que bajo el amparo de la dictadura extendieron exageradamente su jurisdicción. Hasta 1973, ellos sólo atendían causas estrictamente castrenses. Pero a contar del golpe de Estado, el decreto ley N° 5 estableció que el estado de sitio se entendía como "estado o tiempo de guerra", lo que a su vez transfería los delitos considerados en la Ley de Seguridad Interior del Estado a la justicia militar. De esta manera se daba una aparente legalidad a las violaciones a los derechos humanos. La dictadura no se quedó en esta decisión, sino fue ampliando sucesivamente la jurisdicción de los tribunales militares por los decretos-leyes N° 11, 13 y 21. Éste último facultó al comandante en jefe del ejército para delegar sus atribuciones, como sucedió con la "caravana de la muerte". Después, la junta militar "legisló" ampliando la jurisdicción penal de aquellos tribunales, con un sentido político-represivo, que atrapaba en sus redes a más de un 80% de civiles, según lo señaló en 1989 el presidente de la Corte Suprema Luis Maldonado. El sostuvo entonces que debía modificarse dicha situación, sin que los gobiernos de la Concertación por la Democracia promovieran esas reformas.

En el marco de la "lógica de guerra", la justicia militar atropello los derechos humanos y bajo su complicidad, decenas de miles de civiles fueron detenidos, torturados y asesinados.

> Los delitos más frecuentes que los militares cometieron bajo el terrorismo de Estado fueron: actos de violencia grave en las personas, homicidio, infanticidio, torturas y malos tratos, secuestros (detenidos desaparecidos), violencia innecesaria con resultados que van desde lesiones leves hasta la muerte. Destierro, arresto o detención ilegal o arbitraria, incomunicación ilegal, aplicación de tormentos y detención en lugares no autoriza-

> dos, arrogación de facultades judiciales, allanamiento ilegal, expropiación ilegal, prevaricación. Todos los delitos contra la propiedad que contempla el Código Penal.[14]

Estos delitos están sancionados tanto por la legislación nacional como por la internacional, como la Convención de Ginebra y los tratados sobre derechos humanos, ratificados por el Estado de Chile. Por esta razón, en muchos casos de nada ha servido hasta fines del siglo xx la autoamnistía dictada por decreto-ley N° 2.191 de 1978.

Los órganos represivos de la dictadura cometieron toda clase de delitos de sangre, como homicidios individuales y masacres colectivas, directamente o por medio de tribunales militares.

> Las Fiscalías Militares violaron el principio constitucional de que -nadie puede ser juzgado por comisiones especiales-, transgrediendo normas básicas del debido proceso, abusando de la potestad de dictar órdenes amplias, trasladando a detenidos a recintos secretos o cambiándolos de lugar carcelario y aceptando declaraciones extrajudiciales de testigos con nombres supuestos, etcétera. El Artículo 162 del Código de Justicia Militar suprimió el plazo para dictar sentencia, prolongando indebidamente los procesos. Muchas causas por violaciones a los derechos humanos, que involucran a personal de las Fuerzas Armadas y carabineros, permanecen aún en tribunales militares, sin que se avance en su esclarecimiento o se dicten resoluciones y sentencias, lo que constituye un mecanismo de impunidad permanente.[15]

No obstante estas aberraciones, la justicia militar mantiene hasta hoy las amplias atribuciones concedidas por la dictadura para juzgar arbitrariamente a civiles.

Comercialización de la salud

Entre los satisfactores sociales básicos, la atención de la salud, que había alcanzado un alto grado de desarrollo hasta 1973, experimentó un retroceso extraordinario durante el período de la dictadura. En efecto, se desarticuló el Servicio Nacional de Salud, modelo en América Latina, y se le sustituyó por centros de salud regionales, sin la adecuada dotación de instalaciones, instrumentos y personal médico y

[14] Julio Oliva García. "Las intrincadas redes del poder", periódico *El Siglo*, N° 1042, del 29 de junio al 5 de julio de 2001, Santiago.

[15] Arnaldo Pérez Guerra, *ibidem.*

paramédico. De otra parte, la medicina socializada, existente por varias décadas, fue también reemplazada en gran parte por la medicina privada, generando una creciente desprotección de la población de más escasos recursos, por su alto costo. Las contribuciones que hacían antes los asalariados de más altos ingresos al Servicio Nacional de Salud se destinaron a los servicios privados. De esta manera, sólo se mantuvieron afectos al servicio público de la medicina los trabajadores de más bajos ingresos.

En relación con esta materia, cabe señalar que bajo el mismc signo negativo se modificó el sistema de seguridad social, entregando a empresas financieras privadas, algunas de ellas de origen extranjero, la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores, empobreciendo también este servicio al reducir su cobertura. Esta nueva "privatización" despojó al Estado de la obligación sccial de atender los riesgos de la población y lo convirtió en un negocio como cualquier otro. Prácticamente se sustituyó la previsión social por el ahorro obligatorio, dejando de imponer los empresarios privados y el fisco para la jubilación de sus trabajadores, con excepción de los militares, cuyas pensiones se financian en un 75% con cargo fiscal.

La política económica de la dictadura influyó negativamente en los niveles de vida y por lo tanto en la salud de la población. La desocupación llegó a afectar a la cuarta parte de la fuerza de trabajo y con efectos directos sobre la mitad o más de los chilenos, por la mayor cantidad de hijos de las familias de los trabajadores. Esta situación se manifestó en el descenso de su poder adquisitivo, con repercusiones en la nutrición de esa mitad de los habitantes del país que se incorporó a la extrema pobreza, con ingresos insuficientes para la adquisición de la carasta básica de alimentos.

De este modo, la disminución de los niveles de vida se reflejo en el aumento de la morbilidad por enfermedades infecciosas no prevenibles por vacunación y las parasitarias como hepatitis, fiebre tifoidea, enfermedades entéricas, sarna y pediculosis. Incremento de las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y bronquitis, exacerbación de las patologías asociadas a trastornos mentales y mayor desarrollo de las enfermedades del trabajo relacionadas con el sobre esfuerzo y la falta de medidas básicas de protección de los trabajadores. Todo ello es el resultado de las políticas de salud pública y la desigualdad profunda en la atención de los enfermos ricos y pobres.

Como en las demás áreas, es posible distinguir también varias fases en materia de salud.

Una primera fase se extendió de 1973 a 1974, durante la cual la dictadura estableció el control de los servicios y del personal de las instituciones públicas de sa-

lud, inició la contracción en la oferta de servicios a la población en el marco de la política de disminución del gasto público en esta materia y se impulsó el desprestigio de la concepción "estatista" y la promoción de los consorcios médicos privados.

En una segunda fase, que comprende los años 1974-1978, se proclamó la subsidiariedad del Estado en salud y se promovió con mayor énfasis la privatización. En esta forma se cuestionaron los principios médico sociales desarrollados en el país desde la década de los cincuenta, permitiendo la ingerencia de organismos privados en igualdad de condiciones que los del sector público, tanto en materia de financiamiento como en la ejecución de las acciones de atención médica. El Estado confirió validez a las fuerzas del mercado en el sector salud y destacó su carácter subsidiario, pero el sector privado no alcanzó nunca la preparación necesaria para hacerse cargo del libre mercado en salud para toda la población, aunque se le destinó, con cargo fiscal, el 2% a los aportes de los trabajadores de más bajos ingresos.

La tercera fase, que comprende los años 1979-1985, registró una serie de cambios estructurales en el sector salud, conformes a la tendencia privatizadora. Por el decreto ley N° 2763 se suprimió el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) trasladando sus funciones al Ministerio de Salud. Este generó a su vez un aparato operativo compuesto por 27 unidades ejecutoras de acciones en el territorio nacional, conjuntamente con los órganos centrales de Abastecimiento, Fondo Nacional de Salud (fínanciamiento) e Instituto de Salud Pública.

La reforma de la previsión, en la que se venía trabajando desde la fase anterior, se puso en marcha en 1980, y planteó la liberalización aparente del uso que cada trabajador puede hacer de su cotización en salud, si bien en los hechos esto último quedó sujeto al monto de los ingresos y a la permanencia en el trabajo. De acuerdo a lo anterior, en el año siguiente se fundaron los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) que canalizaron a ellas voluntariamente las imposiciones en salud de los trabajadores. Las ISAPRES son entidades privadas con fines de lucro, cuyo objetivo es captar el porcentaje destinado a la salud de la cotización de los estratos económicos altos. Por razones obvias no se interesan por los estratos bajos y, por el contrario, ofrecen planes de salud por valores superiores a la cotización del 7% de las remuneraciones.

El proceso de privatización quedó formalmente establecido por la nueva legislación sobre prestaciones de salud dictada en noviembre de 1985, la que estableció las condiciones de acceso a las prestaciones médicas —públicas y privadas— de acuerdo al nivel de ingreso económico de cada usuario. Esta ley dispone tres alternativas:

a) La modalidad institucional otorgada por los servicios del Fondo Nacional de Salud, que proporciona atención gratuita sólo a los indigentes y a quienes ten-

gan un ingreso mensual inferior a $16 000, en tanto que los demás deberán pagar entre 25 y 50% del costo señalado por el arancel establecido, en forma directa y por acto médico.

b) La modalidad de "libre elección" que estableció el pago directo en la consulta privada de una proporción del arancel, bonificando la otra parte el Fondo Nacional de Salud (FONASA), constituido con las cotizaciones de los propios usuarios.

c) Los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) en los cuales los afiliados cotizan el 7% mensual de sus ingresos para recibir los servicios previamente acordados a través de un contrato individual o un porcentaje mayor.

En esta forma se estructuró la atención médica y de salud conforme a los ingresos económicos de cada sector social, pudiéndose distinguir una medicina para ricos y otra para pobres. La reforma estableció además desde 1981 el traspaso de postas y consultorios de atención primaria a las administraciones municipales.

El gasto público en el sector salud tuvo un crecimiento sostenido en Chile hasta 1973 y desde el año siguiente se produjo por primera vez en 20 arios una reducción del mismo. La reducción de este gasto entre los años 1974 y 1984 es de 8.5%. Pero más grave todavía es esta situación si se considera que al descomponer el gasto público en salud entre los aportes propiamente fiscales y los no fiscales, provenientes de los usuarios, a través de los descuentos previsionales y los pagos directos por servicios médicos recibidos, resulta que estos últimos aportes aumentaron entre 1974 y 1983 en 46%.

De este gasto público, las reducciones mayores se produjeron en inversiones, que comprenden construcción y reparación de hospitales, consultorios y postas, adquisición y mantenimiento de instrumental y equipos. En el período mencionado (1974-1983) la caída en este rubro fue de 91%, situación que presentará graves repercusiones en el corto y mediano plazos, sobre la capacidad física y técnica para mantener la atención en salud. El financiamiento del sector en el inmediato porvenir no ofrece mejoramientos, porque tiene contraído un endeudamiento considerable, que crece cada vez más, lo que repercute en la calidad de los servicios.

La dictadura, con dicho programa de reducción del gasto público en salud y la transformación de la atención médica en un negocio privado, convirtió a Chile en un país enfermo. Como sucede en otros países con una estructura demográfica similar a la del nuestro, podía esperarse que la morbilidad reflejara la transición epidemiológica con un aumento en la incidencia de las enfermedades crónicas y una disminución de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Pero en Chile no sucedió así. Ambos tipos de patologías en efecto se incrementaron, con lo que se esta-

blece que las condiciones de vida experimentaron un deterioro con consecuencias en la higiene y el saneamiento ambiental, cuya atención corresponde al Estado.

La tendencia de la morbilidad por enfermedades infecciosas, que refleja problemas de saneamiento básico y control sanitario, presentó un crecimiento notorio entre 1970 y 1982, toda vez que en el primero de estos años, la tasa es de 85 por cien mil habitantes y en el último es de 191 por el mismo número de habitantes. Las enfermedades psíquicas, cuyas causas tienen una raíz social, también aumentaron considerablemente. La represión política, el desempleo elevado, la inestabilidad laboral, la caída de las remuneraciones reales, el deterioro de la calidad de vida, la ausencia de canales de participación son, entre otros, factores condicionantes de aquellos males. De igual manera se incrementó el alcoholismo, así como el consumo de drogas, los suicidios, el daño infantil (deserción escolar, aumento del trabajo de niños, vagancia, mendicidad, prostitución juvenil, desarticulación de familias por cesantía) y los cuadros de origen tensional y depresivo, generados por la represión política.

El fraude del nuevo sistema de previsión

El sistema de previsión social vigente en Chile hasta 1980 tuvo su origen en las leyes promulgadas en 1924, que se fueron complementando posteriormente, de acuerdo al principio de solidaridad y la participación del Estado. Este sistema cubría prestaciones por pensiones y montepíos, indemnizaciones, desahucios, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, asignaciones familiares y cesantía. Su fínanciamiento era tripartito, es decir, contaba con aportes de los trabajadores, empleadores y Estado, conforme con los convenios de la OIT. El Estado asumía, además, la responsabilidad de las instituciones administradoras del sistema, sin costo para los trabajadores afiliados. La cobertura era amplia, alcanzando a un 76% de la población activa. De acuerdo a las distintas actividades, existían regímenes previsionales diferenciados. Por encima de sus defectos, este sistema era más favorable a sus beneficiarios por basarse en la solidaridad y no dejar a ningún trabajador expuesto al desamparo social, por pocos que fueran sus aportes, ya que cubría incluso la cesantía con la continuidad de la previsión. Además, otorgaba préstamos a sus afiliados para compra de viviendas, construcción, ampliación y reparación.

Después de la privatización de la previsión social, el Estado tiene a su cargo, a través del llamado Instituto Nacional de Previsión (INP) a 360 mil cotizantes activos aproximadamente, que continúan afectos a este sistema; paga pensiones a poco menos de un millón de personas, prolongando la vigencia de su atención hasta la ter-

cera década del siglo xxI, con la muerte del último pensionado. Además, el Estado debe hacerse cargo de los compromisos del antiguo sistema y de ciertas obligaciones del nuevo que comprenden: el pago de pensiones a los actuales jubilados del antiguo sistema y a los que se acojan a este beneficio en el futuro de acuerdo al mismo; el pago de los bonos de reconocimiento a los trabajadores afiliados al nuevo sistema (AFP), el pago de pensiones mínimas legales a los afiliados de este mismo sistema que luego de pensionarse por edad, agoten el saldo de su cuenta de capitalización individual; el pago de las pensiones de los afiliados en caso de quiebra de la AFP O de las compañías de seguros respectivas; la compensación del beneficio de la asignación familiar y el pago de pensiones asistenciales de vejez, orfandad, subsidio único familiar para quienes están excluidos de toda protección social, al margen de todo sistema de previsión. El Estado debe, por último, financiar igualmente los gastos previsionales del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que se excluyeron del nuevo sistema: ¡Un privilegio otorgado por el dictador!

El nuevo régimen de previsión establecido por la dictadura por medio del decreto ley N° 3.500, de 12 de noviembre de 1980, no es original sino una copia de estructuras marginales existentes en Estados Unidos, donde el sistema central de previsión, como en los países de Europa, tiene un financiamiento tripartito e incluso en naciones como Alemania contribuye en su financiamiento el conjunto de la población, con impuestos generales. En Chile, bajo la dictadura de la derecha se establecieron salarios bajos y se liberó a los empresarios de hacer aportes a la salud y la previsión social de sus trabajadores, con el pretexto de "promover" la inversión privada, tanto interna como externa. Sólo algunas empresas, que generan serios riesgos para la salud de sus trabajadores, contribuyen al financiamiento de su atención con un pequeño aporte, entre 1.7 y 3.4% del monto de los salarios.

Este sistema suprimió la previsión o seguridad social en cuanto concepto de solidaridad, sustituyéndolo por el simple ahorro obligatorio personal en cuentas individuales, administradas por empresas privadas, con fines de lucro, subsidiadas por el Estado. La previsión de militares y carabineros se mantuvo conforme al antiguo sistema, con financiamiento estatal y beneficios más generosos que los que reciben los civiles. Tampoco rige para quienes optaron por permanecer en el antiguo sistema, pero es obligatorio para quienes se incorporan por primera vez al trabajo. El nuevo régimen cubre y financia sólo las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, separando en sistemas distintos la atención de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, las prestaciones de salud, las indemnizaciones y desahucios, las asignaciones familiares y el subsidio de cesantía.

Las cuentas individuales de ahorro obligatorio de los trabajadores son administradas por las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), sociedades anónimas de propiedad privada, con fines de lucro, las más importantes de las cuales pertenecen a capitales internos y externos que sólo responden con sus acciones en las sociedades. Estas empresas administradoras siempre ganan, aunque los imponentes pierdan en la inversión de sus fondos previsionales, porque fijan libremente sus comisiones, no sobre las utilidades, como sería lo justo, sino sobre los montos de los salarios imponibles, sin negociación alguna con los afiliados. Las comisiones oscilan entre 2.84 y 3.70% de aquellos ingresos mensuales imponibles, de las cuales destinan una parte a pagar la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia de los afiliados en las sociedades de seguros, que están relacionadas a su vez con las AFP. Como la comisión que se cobra no se aplica al 10% de las remuneraciones, que es el porcentaje imponible al Fondo de Pensiones, sino al 100% de ellas, las AFP reciben entre el 28.4 y el 37% de las imposiciones mensuales. Hay que recordar que en el antiguo sistema los trabajadores no pagaban nada. Por su parte, las compañías de seguros, cuyos dueños por lo general son los mismos de las AFP, se hacen cargo de los afiliados pasivos según contratos especiales, conviniendo pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia temporal diferida. Es un negocio redondo.

Si lo anterior configura en lo hechos un fraude comercial, esto se magnifica con la eliminación del aporte patronal. Todo este oscuro proceso es analizado, entre varios estudios publicados, en la obra *Mitos y Realidades del Sistema Privado de Fondos de Pensiones en Chile (AFP)* de Franco Zapata A., quien sostiene con razón:

> 1. La Reforma Previsional establecida en el DL 3 500 de 1980 es y sigue siendo funcional a la política económica vigente; se impone luego de la puesta en marcha del Plan Laboral de 1978, en aquellos aflos en que la dictadura aplastaba implacablemente cualquier intento de los trabajadores por defender sus conquistas logradas en más de cincuenta años de lucha social; 2. El DL 3 500, al eliminar el porcentaje de la cotización previsional, que durante años correspondió efectuar en nuestro país a la parte patronal, frena bruscamente el desarrollo de un sistema de seguridad social que históricamente se había iniciado en las sociedades europeas industrializadas en los últimos veinte años del siglo xix.[16]

Este sistema está desfinanciado y por lo tanto no resolverá la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores, por lo que se deberá reponer legalmente el aporte de los empresarios, que estos invierten en el extranjero, a veces en simples depósitos

[16] Franco Zapata A., *Mitos y Realidades del Sistema Privado de Fondos de Pensiones en Chile (AFP),* Santiago, LOM, 1997, pág. 47.

en los paraísos financieros, como las Islas Caimán o Estados Unidos, como lo hizo Pinochet y su familia en las cuentas secretas descubiertas en el aíío 2004.

Este proyecto comenzó en 1979 con el aumento de la edad para jubilar por vejez, en el caso de los hombres de 60 a 65 años y en el de las mujeres de 55 a 60 años, fundamento del nuevo sistema de pensiones, aprovechado después por las grandes empresas al utilizar el "crédito" barato de las AFP por mayor tiempo. Por otra parte, de acuerdo a esta "privatización" de los fondos de pensiones formados con el solo aporte de los trabajadores, se entregaron al llamado "mercado de capitales" 350 millones de dólares al año (moneda de 1980) hasta superar los 50 mil millones de dólares hasta hoy, aprovechados especialmente en las crisis recurrentes de las dos últimas décadas del siglo xx. De igual manera, dichos fondos se aprovecharon en las privatizaciones de bancos y empresas del Estado, como se explicó anteriormente, sin que los trabajadores tengan ninguna participación ni en la administración de las AFP ni tampoco en las empresas en las que se invierten los fondos, en cuyos directorios participan los mismos dueños de aquellas asociaciones y de las compañías de seguros o sus representantes, decidiendo el destino de los recursos de los trabajadores, y percibiendo millonadas "dietas" e indemnizaciones. En efecto, se incurre en la falacia de sostener que la compra de acciones realizada con los fondos previsionales de los trabajadores significa la participación de éstos en la propiedad de las empresas adquiridas, siendo conocido el hecho de que ellos no tienen participación en la administración de dichos fondos.

La legislación dictada por los mismos "privatizadores" permite y facilita la evasión del pago a las AFP y al INP de las cotizaciones descontadas a los trabajadores por sus empleadores, no sólo previsionales sino también de salud, declaradas o no. Cuando un trabajador se apropia de activos, comete delito de hurto o estafa, por lo que es despedido y procesado en los tribunales de justicia. En cambio, cuando el patrón se apropia de las imposiciones descontadas a sus trabajadores para el fondo de pensiones, no se le procesa ni castiga, sino que se le conceden plazos para cumplir con sus obligaciones de integrarlas a las AFP O el INP, que tampoco cumplen. Las cifras de estos hurtos y estafas son escalofriantes, estimándose en 500 millones de dólares. Algunas de ellas nunca se pagarán por las pequeñas y medianas empresas, las más pillas. Las AFP, en abierta complicidad con los patrones, no se esfuerzan por su cobro, con pérdida de miles de millones de pesos de los trabajadores por intereses y reajustes no percibidos. El sistema actual de pensiones infringe, por último, los convenios N° 35 y 36 de la OIT.

El sistema de previsión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros es privilegiado respecto a los civiles del sector público y privado. Después de la derrota de la

dictadura en el plebiscito de 1988 y a pocos días de asumir el gobierno civil presidido por Patricio Aylwin, se dictaron las leyes N° 18 948, Orgánica de las Fuerzas Armadas, y N° 18 961, Orgánica de Carabineros, destinadas a asegurar el mínimo a partir del cual la Ley de Presupuestos anualmente debe consignar como fínanciamiento de aquellas instituciones. En el primero de estos cuerpos legislativos se define el régimen de previsión y seguridad social de las Fuerzas Armadas, determinando el personal afecto a este régimen, correspondiendo al de planta, incluyendo a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación, el de reserva llamado al servicio activo y los alumnos de las escuelas matrices.

Este personal tiene derecho a pensión de retiro (jubilación) cuando acredite 20 o más años de servicios efectivos, considerándose como tales el primer año de estudios en las escuelas institucionales, los dos últimos en las mismas, que son numerosas, o el tiempo efectivo que los alumnos permanezcan o hayan permanecido en el respectivo establecimiento y el tiempo servido como conscripto y aprendiz en las Fuerzas Armadas. De igual manera, se considerarán como servicios efectivos los dos últimos años de estudios profesionales de los oficiales de justicia, sanidad, sanidad dental, de veterinaria y servicio religioso, del personal de la reserva llamado al servicio, los oficiales de los escalafones prácticos e inspectores de los servicios marítimos de la Armada tendrán derecho a computar los tiempos servidos en la Marina Mercante Nacional. La pensión de retiro del personal femenino, con 25 años de servicio o 20 de servicio y 55 años de edad, se calculará con un aumento de dos años si son viudas, y de un año por cada hijo. ¿Porqué este beneficio a éstas y no a las trabajadoras?

Las pensiones de retiro, en cuanto a su monto, también son privilegiadas, ya que una vez otorgadas y sin perjuicio de los mejoramientos especiales que se otorguen por ley, se reajustarán automáticamente en un 100% de la variación experimentada por el costo de vida. Estas pensiones se financian en un 25% con los aportes específicos del personal y en el 75% con aportes fiscales (en su carácter de patrón). De acuerdo a este sistema, la pensión mínima es equivalente a la remuneración imponible de un sargento 2º en actividad, y la pensión máxima corresponde a la de un mayor general en actividad. Los montepíos son del 100% de la pensión en retiro, y no pueden ser menores al sueldo de sargento 2º, y las indemnizaciones son de un mes de la última remuneración y hasta 30 mensualidades. En el caso de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, los montepíos son sólo de 50% de las pensiones y sin un límite mínimo, y respecto a las indemnizaciones están limitadas a un máximo entre 12 y 24 meses.

El personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa goza de numerosos otros beneficios, como trienios sobre los sueldos bases, bonificaciones profe-

sionales, asignaciones familiares, viáticos y gastos de movilización, pérdidas de caja, permanencia y feriados, permisos y licencias, asignación por cambio de residencia, gratificación de zona, asignación de máquina, asignación de casa y rancho, sobresueldos, gratificaciones especiales, de embarcado y de submarino (25% de sus remuneraciones imponibles) y gratificación Antartica (600%), gratificación a personal en comisiones de servicios al sur del Paralelo Sur (300%). En esta última materia gozan de otras múltiples asignaciones, como las de vuelo (25%) en todas las ramas de las Fuerzas Armadas, de servicios en unidades de paracaidistas, montaña, comando y fuerzas especiales (25%), de buceo, casas fiscales, vestuario y equipo, incluso a los alumnos que ingresan a las escuelas profesionales, gratificaciones extraordinarias para este efecto a subtenientes que egresan de allí. La Caja de Previsión de la Defensa Nacional otorga a sus beneficiarios préstamos habitacionales destinados a la compra, construcción, ampliación y reparación de inmuebles, así como préstamos de auxilio, derechos que también tenían los trabajadores en el sistema antiguo de previsión social, pero que la dictadura suprimió. Todos aquellos beneficios los perciben los criminales que operaron en las Fuerzas Armadas durante la dictadura.

El sistema de previsión social de Carabineros no presenta mayores diferencias. Por lo tanto, como conclusión, cito a Franco Zapata:

> Estamos en presencia de uno de los regímenes de previsión social más completo y mejor implementado que jamás haya existido en nuestro país, que cumple a cabalidad con los más importantes principios consagrados a nivel internacional, con los convenios de la OIT suscritos por el gobierno de Chile y a la altura de los sistemas previsionales vigentes en los países desarrollados.[17]

La administración de este sistema no tiene costo alguno para sus afiliados, a diferencia del de los trabajadores, ni le ofrece ventajas a las empresas privadas y a las compañías de seguro a partir de las AFP. Zapata compara ambos sistemas, estableciendo la desmedrada situación de los trabajadores, señalando que "existe una evidente discriminación de los civiles e incluso del personal a contrata de las FFAA y Carabineros, respecto a los uniformados de planta". En estos últimos "se trata de sistemas de previsión social en los cuales rigen plenamente los principios de solidaridad, de reparto y de plena protección estatal, tan vapuleados con motivo de la implementación del DL 3 500, y donde la individualidad y el egoísmo no existen, y mucho menos la idea de que cada afiliado forme su propio fondo en una cuenta de capitalización individual". Increíble, nadie dice nada sobre esto.

[17] *Ibidem.* págs. 153 y 154.

La degradación del sistema educativo

La educación es una de las necesidades básicas de la población, ya que ella en cuanto proceso de formación técnica y humanista constituye un factor decisivo en el empleo y la remuneración, así como en el desarrollo político y cultural del país. En el pasado reciente se le había asignado a la educación, entre otros fines, la formación para vivir en democracia. Hasta el 11 de septiembre de 1973, el sistema educativo nacional había logrado un elevado desarrollo en el que, bajo el concepto de *Estado docente,* se armonizaba el papel regulador, fiscalizador, sostenedor y ejecutor del proceso educativo, con la libertad de enseñanza garantizada a través del sostenimiento de la educación particular, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.

Este sistema educativo nacional, de indiscutible carácter democrático, fue destruido por la acción de la dictadura. Las nuevas políticas y prácticas excluyeron la participación de los sectores populares en este proceso de formación de los niños y jóvenes. Además, anularon su función social y convirtieron la flexibilidad del sistema que había permitido la convivencia de valores generados por diversas tendencias culturales en una rigidez propia del sistema de gobierno militar. Todos los avances conquistados en la evolución educativa en el siglo xx fueron arrasados para establecer un sistema concordante con la dictadura.

Durante este penoso período de reacción se hicieron presentes tres tendencias principales, representativas de sectores existentes al interior de aquélla, que trataron de sobreponerse a las diversas fases de este proceso. La primera tendencia está relacionada con la concepción desarrollista y modernizante proveniente de la década de los sesenta tanto en la economía como en la educación. La segunda corresponde a la estrategia de "seguridad nacional", que planteó el control total de la sociedad civil y, de acuerdo a este objetivo, ocupó militarmente el sistema educativo y trató de utilizarlo en función de sus fines nacionales. La tercera consideró a la educación en estrecha relación con el nuevo modelo de desarrollo capitalista, por lo que dirigió su atención hacia los sectores económicos predominantes en el país. Estas tres tendencias influyeron en el mismo orden en las distintas fases de la evolución del sistema educativo durante el período de la dictadura.

En este proceso llamado irónicamente de "modernización" se distinguen tres fases:

La primera comprende los años 1973-1975 y durante ésta se aplicó lo que se ha denominado una "lógica de guerra" dirigida a "depurar" el sistema educativo nacional. Ésta comprendió la ocupación de establecimientos superiores, el cambio de los equipos directivos por militares y personeros de derecha, y la expulsión de mi-

les de académicos, profesores, funcionarios y estudiantes, así como la imposición de criterios disciplinarios propios de los cuarteles. Además se reformaron los planes y programas de estudio en los distintos niveles educativos y se suprimieron algunas carreras. Pero no se limitaron a esto, sino que eliminaron los sindicatos de profesores y las organizaciones de estudiantes, así como sometieron a estricto control los centros de padres y apoderados. No más elecciones: todo lo nombraba "el gran dictador".

La dictadura definió las orientaciones de la educación en 1975 a través del documento titulado Objetivo Nacional del Gobierno de Chile. En él estableció que la educación, en apoyo al desarrollo de la inteligencia, el conocimiento de la verdad, la búsqueda del bien, el perfeccionamiento integral de la persona y otros valores, se desarrollará según cuatro orientaciones: 1. Nacionalismo, libertad, familia y progreso; 2. Derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y libertad de enseñanza "en función de los objetivos nacionales"; 3. Enseñanza básica obligatoria y gratuita y subsidiariedad del Estado para los demás niveles del sistema educativo; 4. Control del Estado respecto a las actividades educativas curriculares.

La oligarquía dominante prohibió las ideologías revolucionarias, como el marxismo, e impulsó en cambio las viejas tradiciones reaccionarias, caracterizadas como cristianas. En medio de muchas vacilaciones, enmascaradas en estudios sobre los problemas educativos, se impulsaron acciones que conllevaban confusiones y dispersiones en la reorientación del sistema educativo. A la centralización exagerada contenida en el Plan Operativo de 1975 se le opuso posteriormente un supuesto esquema de descentralización, fundado en unidades y agrupaciones educativas, coordinaciones provinciales y regionales, como el anticipo de lo que se implantaría más adelante: el antiguo sistema de la municipalización de la e enseñanza. No obstante, en esta fase lo que se destaca es la destrucción del sistema estructurado en los anteriores cincuenta años.

La segunda fase comprende los años 1976-1978 y en su desarrollo se percibe una especie de transición hacia las reformas inspiradas en el neoliberalismo y que se realizarán en la tercera fase. Ese fue el paso de la concepción calificada como desarrollista y estatizadora preexistente, a la concepción privatizadora que rige toda la acción política y económica de la clase dominante. De esta manera culmina el desplazamiento del Estado como regulador de la economía y la sociedad y su reemplazo por la "libre empresa". No obstante, todavía subsiste la tendencia del pasado inmediato a considerar la educación desde un enfoque desarrollista en sorda resistencia a la concepción de los usufructuarios del poder, de otorgar al Estado sólo una

función de subsidiariedad a la acción dominante de la iniciativa privada, lo que se trataba entonces de imponer también en la educación.

En el acta constitucional N° 3, de 1976, se reafirmaron estas orientaciones y se "perfila más nítidamente la concepción de un sistema educativo en el que se conjuga la acción subsidiaria del Estado y la del sector privado". ¿Qué entienden por *subsidiariedad?* Ella es, según el ministro de educación de turno, "el libre desenvolvimiento de los organismos naturales o intermedios de la estructura social", esto es, padres de familia y maestros. Esta es una etapa intermedia. Todavía no se impone una política de privatización de la educación, pero se avanza hacia esa meta cuando se traspasa la educación técnico profesional a corporaciones empresariales y se intenta que los postulantes a la enseñanza media paguen su costo.

Durante esta segunda fase se impulsaron políticas hacia la descentralización dentro de una perspectiva dirigida a la reestructuración del sistema educativo, aunque se continuó buscando su liberalización. Los resultados no fueron alentadores. Los militares, convertidos en educadores, percibieron la deficiente calidad de la educación impartida; se comenzó a hablar de una crisis o apagón cultural, y se abordó la modificación de las normas de evaluación y promoción escolar. Esta preocupación se extendió en 1978 a las autoridades universitarias por la constatación de la baja preparación de los estudiantes de primer ingreso, lo que obligó al ministro de educación a ofrecer una fácil explicación, atribuyendo las responsabilidades, como en todas las manifestaciones de la vida social y económica, al "estatismo" preexistente, que habría impedido el florecimiento de una genuina libertad de enseñanza.

En esta fase la educación tropezó con la crisis económica con todos sus efectos sociales, como restricción del gasto fiscal, desocupación, congelamiento de salarios y otros, que influyeron en todos los niveles educativos. Hay datos que comprueban esta situación. En este sentido, se puede señalar que entre los años 1974 y 1981, la población creció en 435 112 habitantes y la matrícula escolar descendió en 55 775 alumnos. Disminuyó también en términos reales el aporte fiscal en 1975, recuperándose en los años 1979 y 1980 hasta el nivel de 1974. El financiamiento educativo por parte del Estado descendió en todos los niveles desde 1976. Los estudiantes universitarios pasaron a pagar los servicios educacionales y, en el caso de los de enseñanza media, se suspendió este mismo pago en 1978 por la resistencia producida. Los resultados fueron, pues, alarmantes porque la educación adquirió un carácter selectivo que favorecía la segmentación del mercado del trabajo al disminuir la cobertura de la matrícula y elevarse el costo de la enseñanza para los estudiantes.

La tercera fase comprende desde 1979 adelante y se inauguró con las directivas presidenciales para la educación, dictadas en aquel año, las cuales imprimieron mayor claridad y coherencia en el marco de la neoliberalización y municipalización de

este proceso de formación de los niños y jóvenes. De acuerdo a la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno y con el objetivo nacional, las nuevas directivas postularon, desde el punto de vista ideológico, el respeto a los valores del humanismo cristiano y se expresó la intención de respetar la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y técnico-pedagógica. La libertad de enseñanza tiene así como únicas limitaciones el orden público y la seguridad nacional, y la educación tiende a formar el buen trabajador, buen ciudadano y buen patriota, para cuyo efecto se garantiza la educación básica por medio de directrices simples y flexibles, todo esto en el marco de los intereses de la clase dominante.

No sucedió lo mismo con la educación media y superior, dado que para ellas se estableció un alto nivel de exigencia y severidad, lo que se manifiesta textualmente en aquellas directivas presidenciales cuando se afirma que "...se intensificará enérgicamente el nivel de exigencia, en forma de desviar hacia otras alternativas educacionales a quienes no tengan la vocación ni la capacidad de trabajo compatibles con este nivel..."[18] Así se aseguraba una definición selectiva a través del incremento de los requisitos académicos y del pago del costo de dicha enseñanza, dedicando estos niveles educativos a los sectores más pudientes en la sociedad. Se trata del retorno a la herencia colonial, que muchos chilenos creían ya sepultada en el olvido.

Pero aquello no es todo. Las directivas presidenciales para la educación oficializaron la privatización de la enseñanza, si bien este proceso se venía imponiendo por medio de diversas acciones, entre las cuales es posible señalar el traspaso de las escuelas agrícolas e industriales del Estado a corporaciones de "desarrollo social" de empresarios privados, el aumento de las subvenciones a la educación particular, la entrega de funciones estatales a entidades privadas, como el perfeccionamiento del profesorado, la elaboración y distribución de alimentos, etcétera. Tal tendencia tenía su fundamento en el principio de subsidiariedad. No obstante, debe considerarse que el traspaso de las escuelas a las municipalidades correspondió a una política más amplia impulsada por la dictadura. Este último proceso experimentó una aceleración en 1981, deteniéndose en el año siguiente por restricciones presupuestarias para completarse por fin en 1983.

La dictadura impuso, por último, una remodelación de la educación superior en el curso de 1981, diversificando el sistema con la creación de institutos profesionales y centros de formación técnica, y reservando a las universidades las funciones tradicionales. Esta legislación autoriza la fundación de nuevos establecimientos de

[18] Ramón Iván Núñez *et al.*. *Las transformaciones de la educación bajo el régimen militar,* Santiago, 1984.

estas tres categorías y de carácter privado, manteniendo para las universidades preexistentes un doble financiamiento. Por una parte, el de carácter permanente, que se irá reduciendo gradualmente hasta llegar como máximo al 50% del presupuesto y, por la otra, uno de carácter variable relacionado con la competitividad, derivadas de la capacidad de captación de los mejores alumnos según los resultados de sus pruebas de aptitud académica. La no gratuidad y la competitividad en la enseñanza superior subordinan de este modo el desarrollo universitario a la lógica del mercado.

Todo el sistema educativo fue degradado. La educación superior adquirió un carácter elitista, no por su excelencia académica (que también se deterioró), sino por su encarecimiento. Hasta el gobierno de Allende, la enseñanza universitaria era gratuita, pero la dictadura estableció el principio de autosuficiencia financiera, con lo que se han cerrado las puertas de estos centros educativos a los hijos de los trabajadores. Los planteles además eran dirigidos por militares designados por el dictador. Por su parte, los niveles de enseñanza básica y secundaria se empobrecieron por la creciente falta de financiamiento apropiado y la persecución al magisterio.

La dictadura transfirió la administración de estos últimos niveles a las municipalidades, lo que representó un retroceso de más de un siglo en el desarrollo de la educación pública, considerada en la constitución de 1925 como una "atención preferente" del Estado. La municipalización de la enseñanza le permite a la clase dominante manipularla a través de los alcaldes, que eran designados por la dictadura, así como le sirvió para despedir de sus empleos a muchos profesores, con el consiguiente descenso de la calidad educativa. Por otra parte, la carencia de recursos de la inmensa mayoría de los municipios les impidió mantener escuelas eficientes, al tiempo que se produjo un descenso de la matrícula en la enseñanza básica y el aumento de la deserción escolar. Por último, los programas especiales de alimentación fueron drásticamente reducidos más o menos a la mitad.

En resumen, en todas las sociedades cultas y avanzadas contemporáneas, conjuntamente con el derecho al trabajo, constituyen satisfactores sociales básicos los derechos a la salud y la seguridad social, a la educación y a la vivienda. En los apartados anteriores ya se analizó el comportamiento de la dictadura respecto a todos ellos, a partir de la constatación del abandono por parte de aquélla de una política redistributiva que el Estado chileno venía realizando desde los años veinte hasta el gobierno popular, para corregir los desequilibrios sociales, sustituyéndola por la simple desprotección de los trabajadores. Tal política redistributiva se realizaba a través del gasto público, de carácter social, en ese período del pasado.

Es impresionante la forma como la dictadura redujo los gastos sociales por habitante. En efecto, éstos disminuyeron entre 1974 y 1982 (en millones de pesos de 1978): en salud, de 1 348 a 1 237; en educación, de 2 129 a 1 987; en vivienda, de

1815a 419, y en total (incluyendo otros rubros) de 5 345 a 4 268. En cuanto a inversión pública en el área social, la disminución es todavía más brutal: en salud, de 1 490 a 366, en educación, de 1 419 a 125, en vivienda, de 16 297 a 3 168; en otros de 1 014 a 125 y en total, de 19 220 a 3 663, también en millones de pesos de 1978.[19] Los Chicago boys no se interesaron en construir y mantener hospitales dotados, ni consultorios ni escuelas o viviendas populares, sino sólo en enriquecerse.

En apariencia, esta reducción del gasto público en dichas necesidades sociales podría entenderse que fue compensada por el sector privado, en atención a que algunas de las funciones ejercidas tradicionalmente por el Estado fueron trasferidas a aquél, así como a las municipalidades. Pero no hay tal compensación en este caso, porque esa trasferencia no sólo afectó de modo negativo el volumen y la calidad de dichos servicios básicos, sino que la mayoría de ellos perdieron su gratuidad, pasando a ser, en muchos casos, inalcanzables, por su costo, para gran parte de la clase trabajadora. La pequeña recuperación que se registró con posterioridad a la caída de 1982-1983 no revertió el deterioro de los niveles de bienestar general de los trabajadores.

Allende y Pinochet: un paralelo imposible

En poco más de dos décadas, el pueblo chileno inscribió dos experiencias históricas que, con sus respectivos y contrapuestos signos, sacudieron profundamente su vida social y motivaron una atención internacional de intensidad igualmente inusitada. No obstante su trascendencia o quizás precisamente por ella, esas dos fases, los mil días de democracia de Allende y los siguientes 16 años de dictadura de Pinochet, en lo que tuvo de esperanzador una y de oprobio la otra, han sido y siguen siendo objeto de intentos sistemáticos de ocultamiento o distorsión tanto de su significado histórico como de los hechos mismos. Enfrentado ahora a los grandes desafíos de su futuro próximo, el pueblo chileno necesita, sin embargc, retener en su memoria colectiva el conocimiento objetivo y completo de esa historia reciente, de sus enseñanzas y de sus consecuencias, que inexorablemente proyectan sobre este presente y ese futuro.

[19] Daniel Bitrán, "Notas sobre !a situación social de Chile durante la dictadura", mimeo, México, 1988.

La reconstrucción historiográfica, en estricto sentido, deberá esperar el necesario trascurso del tiempo. Pero hoy se puede fijar en la memoria colectiva, a lo menos, un recuerdo sistemático de lo que fue la acción de la dictadura. Los alcances de esa acción y el juicio correspondiente no podrían limitarse, sin embargo, a lo ocurrido en el período. Tendrá que responder igualmente por las consecuencias que se han proyectado largamente en el futuro de Chile y también por lo que la dictadura vino a interrumpir, por lo que significa haber detenido el proceso social entonces en marcha.

Esto último está exigiendo también una reivindicación de plena verdad histórica, de reconstitución objetiva de lo que fueron los años de Allende. Más aún desde que la disputa de otros proyectos políticos ha procurado diseminar la imagen de que ellos representaron una suerte de paréntesis ajeno en su esencia a la evolución de la sociedad chilena, una suerte de azar histórico del que no cabría recordar más que su responsabilidad por la dictadura siguiente. Por su parte, los voceros del gobierno militar propiciaron la difusión de una versión grotesca, burdamente falseada, de la historia de ese período para justificar así el golpe y seguir hasta ahora reclamando un mérito que sustente sus demandas de impunidad y reconocimiento. El homenaje anual que la burguesía rendía a Pinochet a través del Rotary Club, en opíparas y regadas comidas en el Club de la Unión, es la más cínica demostración de esa impunidad.

Los años de Allende inscribieron, sin embargo, una de las etapas más ricas de la lucha popular chilena, de profundo significado nacional. En medio de las convulsiones que inevitablemente acompañan a cualquier proyecto histórico de transformación social y de reivindicación de autonomía nacional, marcaba una dirección de avance hacia un nuevo patrón de desarrollo económico y social, con independencia y soberanía en sus relaciones externas, y hacia una sociedad chilena más justa, solidaria y participativa. Su condición de antecedente fundamental para los empeños y las luchas futuras del pueblo chileno no podría ser ignorada y, por lo mismo, tendrá que ser objeto de esa reconstitución de verdad histórica plena y rigurosa, en lo que fueron sus aciertos, debilidades y equivocaciones.

En la plena recuperación de esa historia, superando silencios interesados y rectificando tergiversaciones mañosas, se hará manifiesto sobre todo para las nuevas generaciones, porqué ese proyecto que simbolizó Allende llegó a tener tal arraigo interno y a cautivar en tal grado la opinión internacional, motivando más tarde la solidaridad brindada a los perseguidos. Destacará la visión de Allende, que anticipó la concepción de esa síntesis de socialismo y democracia, que aparece ahora como la gran esperanza: la propuesta de una sociedad plenamente participativa, con

respeto absoluto de los derechos humanos, individuales y sociales, y ello no en lugar de socialismo sino sustentado en una transformación inequívocamente socialista, definida en los términos propios y singulares de Chile y su tradición histórica.

La dirección política y administrativa de la Unidad Popular incurrió, sin duda, en errores en el curso de la realización del proyecto. Pero estos errores tampoco niegan, excepto para quienes se convirtieron en neoliberales, la validez del proyecto esencial, ni contrarrestan las realizaciones positivas que registraba hasta entonces. La misma brutalidad de la fuerza represiva descargada sobre el pueblo chileno, a partir de esa derrota y para revertir el proceso en marcha, es signo de lo hondo que había penetrado el proyecto de Allende en la conciencia de este pueblo. La razón es muy simple. La reconstrucción fiel de esta historia, contrastada con la de los años siguientes, explicará la diferencia enorme que se advierte en los rostros del Chile de 1973 y de 1989, en sus rasgos políticos, sociales y económicos.

Al revés de lo que ocurrió después con la dictadura militar, el gobierno de la Unidad Popular no representó un momento de ruptura con tradiciones históricas del país, ni una negación de valores y sentimientos profundamente arraigados en el pueblo chileno. Su mismo proyecto político, expresado en el programa, se sustentaba directamente en las experiencias que el pueblo había acumulado en el curso de gobiernos anteriores: tan diferenciados como los que representaron el populismo ¡bañista en el período 1952-1958; el conservadurismo extranjerizante de Alessandri en 1958-1964; el reformismo demócrata-cristiano, constituido en el exponente predilecto de la Alianza para el Progreso, en los años 1964-1970. Fue la constatación de la insuficiencia de esos proyectos, de la incapacidad de ellos para resolver problemas básicos de la población y asegurar la continuidad del desarrollo nacional, lo que inspiró el proyecto transformador conducido por Allende y lo justificó históricamente como culminación de un proceso de búsqueda de opciones nacionales. Por eso, a diferencia de los anteriores, no concluye en el fracaso de sus propuestas: fue ahogado por la fuerza, sin que ese desenlace de derrota cuestione su viabilidad o ponga en duda su legitimidad histórica.

Como quiera que sea, el Chile de 1973 mostraba el rostro de una sociedad que, en medio de severos problemas y convulsiones, luchaba por una imagen de futuro, de superación y esperanza. Por lo mismo, merece ser evocada como una fase muy propia y digna de nuestra historia. En cambio, los años de la dictadura serán recordados como la negación absoluta de todos aquellos valores, tradiciones y aspiraciones. Tendrá que reconocer esa reconstrucción de veracidad histórica que se reclama, lo que fue Allende en la defensa intransigente de los intereses nacionales. La recuperación para Chile de sus riquezas básicas, la nacionalización del cobre, el

condicionamiento de la inversión extranjera y la actividad de las trasnacionales, el manejo cuidadoso del endeudamiento externo, la protección de los recursos naturales. Con tal fuerza y razón que la reforma constitucional que propuso para nacionalizar el cobre fue aprobada por la unanimidad de un congreso mayoritariamente opositor. La historia demostró después que el propio gobierno militar se benefició con ingresos y ganancias de la exportación cuprífera que el gobierno de la UP rescató para Chile, en lugar de que siguieran incrementando los beneficios excesivos de las corporaciones trasnacionales.

Defendió el interés nacional frente a las empresas extranjeras que ocupaban otras posiciones claves en la economía chilena. Se nacionalizaron unas y se propuso a otras la constitución de empresas mixtas con participación cautelante del Estado chileno, alcanzando la capitalización pública a más de un tercio de la riqueza del país. La dictadura, en cambio, enajenó las empresas estatales a precios irrisorios. El gobierno popular incrementó moderadamente el endeudamiento externo, dejando una deuda total de alrededor de 4 mil millones de dólares, monto que fue más que quintuplicado en los años siguientes de dictadura, llegando a 18 mil millones de dólares. Se resguardaron igualmente los recursos naturales básicos del país, del subsuelo, del suelo y las aguas, impidiendo la explotación depredatoria de ellos que suelen hacer empresas internacionales. Nacionalizó el cobre sin indemnización, asegurando un "sueldo de Chile" de 28 mil millones de dólares hasta el año 2000.

Se ejerció plenamente la soberanía nacional. Se tuvo relaciones con todos los países y la experiencia del proceso popular chileno recibía la atención y simpatía de todos los pueblos. Incluso la afectación de importantes intereses extranjeros no impidió que se mantuvieran relaciones normales con los gobiernos correspondientes, por cierto con excepción de la agresividad del imperialismo estadounidense. Se llevaron a su mejor momento las relaciones con los países vecinos. Chile era acogido en todos los foros internacionales, incluido el Movimiento de Países No Alineados, con interés y respeto. Se propició y participó activamente en los empeños de integración económica latinoamericana, particularmente en el ámbito de los países andinos. Se procuró ampliar las relaciones económicas externas, pero sin buscar un acrecentamiento de exportaciones con salarios deprimidos, agotamiento de recursos naturales o sacrificio de consumos internos.

En contraste con lo ocurrido posteriormente es ostensible. Bajo la dictadura, Chile pasó a ser un país aislado del concierto internacional, sin relaciones diplomáticas con varios países, condenado una y otra vez en las Naciones Unidas y en otras instancias por la flagrante y constante violación de los derechos humanos. La simpatía y solidaridad internacionales se volcaron esta vez al pueblo castigado y per-

seguido, a través de los cientos de miles de exiliados que fueron acogidos prácticamente en todos los países del mundo. Para superar esa hostilidad, la dictadura tuvo que ofrecer ventajas en el plano específico de las relaciones económicas, que involucraron altos precios para los intereses nacionales. Pagó, sin fundamento legítimo, millones de dólares a las compañías estadounidense del cobre expropiadas por el gobierno de Allende. Acordó privilegios inusuales a la inversión extranjera, a costa del retiro de Chile de Pacto Andino. Modificó en términos inicuos las leyes que protegían las reservas del subsuelo. Promovió en gran escala las operaciones de conversión de deuda en inversión extranjera directa, llevando el proceso de extranjerización de la economía chilena a niveles sin precedentes. Subordinó al objetivo exportador el conjunto de la política económica, justificando las disminuciones de salarios como forma de sostener competitividad en los mercados internacionales, favoreciendo la reconversión del uso de tierras de cultivos para la alimentación interna a productos exportables. Aceptó la explotación incondicionada de los recursos naturales, forestales y del mar hasta su eventual agotamiento.

Las contradicciones en el plano social son igualmente elocuentes. Durante el gobierno presidido por Allende se llegó a configurar en tiempo extraordinariamente corto los rasgos de una sociedad en gran medida participativa. La organización sindical se expandió enormemente, con autonomía y respeto, alcanzando los más altos índices de crecimiento. La representación de los trabajadores tuvo acceso a las decisiones del máximo nivel nacional, en todas las instancias administrativas abiertas a los dirigentes de la CUT. Obreros y empleados pudieron hacerse presente en la dirección de las instituciones, todas ellas nacionales, en que quedaban depositados sus fondos previsionales, que se constituían con aportes tanto del sector asalariado como del sector patronal.

La constitución del área de propiedad social colocaba en manos de los trabajadores, técnicos, obreros y empleados, las empresas claves de la producción, comercio y servicios financieros (incluidos los bancos). Las normas de participación acordadas en conjunto con la CUT los incorporaba a la administración directa de esas empresas, a través de los "consejos de administración" y los "comités de producción". La propia iniciativa de los trabajadores extendía esa participación a otras modalidades y niveles, sectoriales y regionales, como los encuentros sectoriales y los cordones industriales, así como los "comités de vigilancia" legitimaban un rol nuevo de los trabajadores en el área privada. La erradicación completa del latifundio amplió el acceso a la tierra de los trabajadores rurales, generando instrumentos de participación como eran los "comandos campesinos" e instancias locales, comunales y regionales, a la vez que ponían en marcha nuevas formas de organización de la producción en el sector agrícola reformado.

De manera general, una nueva variedad de mecanismos y prácticas abrió la participación directa del pueblo en consejos de educación y de salud, comandos comunales y organizaciones vecinales. Las dueñas de casa, particularmente en los sectores obreros y capas medias, defendían la disposición y los precios de sus consumos básicos en las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), constituidas por ellas mismas. Surgían las más variadas formas de organización de mujeres, jóvenes, estudiantes y trabajadores. Éstos últimos tuvieron por primera vez acceso a balnearios populares, a disfrutar de la nieve y las playas, irrumpiendo con su presencia en el centro de la ciudad, en cines y teatros; se multiplicaron los conjuntos artísticos y culturales. Valoraron más que cualquier mejoramiento material lo que percibieron como conquista plena de su dignidad. En pocas experiencias históricas y en tiempo tan breve se llegó a insinuar tal potencialidad de participación popular en todos los ámbitos de la vida social. Resulta dramática la confrontación de ese proceso con los hechos que se destacan del golpe militar de septiembre de 1973, proclamado como parte de una "guerra interna" contra el propio pueblo.

Durante los años de Allende, la decisión de cambiar hacia una disminución efectiva de las diferencias sociales y económicas entre distintos estratos de la sociedad chilena se expresó igualmente en variados planos. Las políticas de salarios y precios permitieron que la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional pasara de menos de 50% a cerca de 65% en 1971 -72. La conformación del gasto público privilegió las asignaciones a la educación y a la salud, finalidades respecto de las. cuales los índices dan cuenta de su extensión y eficacia, con cifras sin precedentes. La construcción de vivienda popular llegó igualmente a niveles muy altos, no equiparados ni antes ni después, mucho menos en el gobierno militar, en el que la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso se redujo a 45% y la inversión pública en el ámbito social cayó estrepitosamente.

Hay que valorar el significado de esos logros a la luz de las circunstancias específicas de entonces. Una redefinición de las áreas de propiedad de los alcances planteados por el programa de la UP involucraba sustituir en buena parte el sistema económico a los tradicionales empresarios-administradores, que concentraban todo el poder económico, por nuevos mecanismos públicos de dirección y administración en los que los propios trabajadores, marginados hasta entonces de la administración de las empresas, pasaban a asumir responsabilidad decisiva, con el desafío consiguiente que ello representaba para sostener y expandir los niveles de producción. Por su parte, una redistribución del ingreso de la magnitud propuesta en favor de las capas sociales más pobres, cambiaba la composición de las demandas de consumo y planteaba inevitablemente problemas de abastecimiento. Ello suponía la exigencia de readecuar el flujo productivo de un sistema que, hasta entonces, se

orientaba hacia las demandas de los grupos minoritarios privilegiados por una distribución extremadamente injusta del ingreso. Desafíos, tanto uno como el otro, que comenzaron a ser encarados con éxito.

De hecho, los años 1971 y 1972 inscribieron algunos índices económicos excepcionalmente favorables en el conjunto de la evolución histórica de la economía chilena. Las cifras por persona de producción global, de producción industrial, de consumo privado, construcción de viviendas populares, consumo de calorías y proteínas crecieron notoriamente, a niveles que no pudieron ser recuperados en los siguientes 16 años de dictadura. Lo mismo ocurrió con la desocupación y el subempleo, con tasas de cesantía situadas entonces a los niveles más bajos conocidos desde que hay registro estadístico de ellas. Nunca pues, ni antes ni después del gobierno popular, se alcanzaron tales niveles.

La imagen de "caos económico" que se ha buscado identificar con el gobierno popular desde su inicio, resulta pues contradictoria con la estadística oficial, incluso la publicada durante la dictadura. Ello no significa desconoce!- las grandes dificultades y severos problemas económicos de entonces, particularmente en lo que concierne a los abastecimientos de productos básicos, pero situando debidamente sus orígenes y fuentes de responsabilidad. Los intereses afectados por los cambios y las decisiones en aplicación, así como la irradiación política de ellos, constituyeron a la economía en el escenario principal de su práctica opositora y obstruccionista. Impulsaron la especulación, el acaparamiento y ocultamiento de productos, la disminución deliberada de producciones, el cerco y el cierre de mercados externos. Los paros patronales y los intentos de descalabrar la economía, las maniobras en el Congreso para bloquear recursos y asignaciones presupuestarias, la evasión impositiva y la fuga de capitales, la contracción de inversiones. Sólo ciando esta ofensiva de desestabilización económica fue llevada a su máxima intensidad, con el respaldo abierto y encubierto del imperialismo estadounidense, se revirtieron aquellos índices positivos. Y aún así, en septiembre de 1973, se defendían las mejoras alcanzadas por los trabajadores y estaba en marcha un programa de inversiones encaminado a fortalecer la economía nacional, por ejemplo, llevando a un millón de toneladas la capacidad de producción de la siderurgia, a incrementar la capacidad exportadora y generar nuevas plantas de celulosa, entre otras iniciativas, y de producción de materiales de construcción. Nuevas planas de cemento, fábricas de vivienda prefabricada así como ampliar la capacidad productiva de bienes de consumo corriente, principalmente en el campo agroindustrial. En sume, una ampliación y readecuación del aparato productivo orientadas a afirmar un desarrollo nacional más autónomo y a satisfacer requerimientos del nivel de vida de la mayoría de la población.

La dictadura, por su parte, se jacta de haber dejado una economía próspera y dinámica, con resguardo de "equilibrios macroeconómicos" fundamentales, atribuyéndose el mérito de haber establecido el precedente de un "modelo económico" digno de imitarse. La estricta verdad es otra. Aunque efectivamente algunos indicadores globales de los últimos años son positivos (en perspectiva de corto plazo, ya que varios de ellos dejan de serlo en comparación, por ejemplo, con los años 1971 y 1972), esos índices se sustentan en una creciente desigualdad económica y social interna, en una extranjerización extrema de la economía chilena, en altísimos niveles de endeudamiento y, sobre todo, en tasas de superexplotación del trabajo y fuertes deterioros en la condición material de vida de la mayor parte de los trabajadores. En la acentuación de la desigualdad social de la población urbana y rural, sometidas por la represión, situación que no se ha logrado superar en la transición a la democracia.

Las dos experiencias marcan también un contraste absoluto en todos y cada uno de los componentes del plano político, fundamentalmente en la convivencia social, en las libertades políticas, individuales y colectivas, en los derechos humanos y sociales, en la institucionalidad y sus marcos legales. El proyecto popular que se simbolizó en Allende, en sus propósitos constructivos de una nueva sociedad y una nueva economía, requería como condición insoslayable transformaciones económicas y sociales muy profundas. En función de ellas, entre otras cosas, y referido principalmente al ámbito económico, se expropiaron fundos y repartieron tierras, se intervino grandes monopolios industriales y del comercio mayorista, para ejercer sobre ellos control público y constituir nuevas áreas de propiedad social, se estatizó el sistema bancario y los mecanismos de comercio exterior, como instrumentos claves para el funcionamiento de la nueva economía.

Esta obra revolucionaria se hizo con sujeción a las disposiciones legales vigentes y los cambios que se propiciaron bajo las formas previstas por ella misma y, sobre todo, sin atropellos personales, sin vulnerar los derechos humanos, respetando intereses legítimos, negociando trasferencias legales de propiedad y conviniendo indemnizaciones, protegiendo a los pequeños accionistas en la compra estatal de acciones. Se enfrentó en el curso de esos procesos una oposición implacable y se la encaró sin sembrar terror o aplicar violencia, sin asesinatos o desaparecidos, sin encarcelamientos o torturas, sin relegación o exilio, sin afectar las instituciones desde las que se ejercía oposición o los medios de comunicación con que contaban.

No se trata de levantar, frente a la deformación grotesca de la "historia" que se ha procurado hacer posteriormente, una imagen idealizada de lo que fue el gobierno de Allende, ni de esquivar el reconocimiento de los errores cometidos en su con-

ducción, de las insuficiencias y equivocaciones de la dirección política y administrativa, del peso del dogmatismo y el sectarismo, que no llegaron a erradicarse. Pero sí se trata de reivindicar la legitimidad histórica de esa experiencia y de recordar la fuerza que tuvo en la base de la sociedad chilena, expresada por ejemplo en el hecho de que todavía en marzo de 1973, en la fase crucial de las maniobras desestabilizadoras, la Unidad Popular tuvo un respaldo electoral superior al 7% de la votación alcanzada por Allende en la postulación presidencial de septiembre de 1970.

Se comprende así que para ese proceso en marcha tuviera que articularse una gigantesca conspiración de intereses y fuerzas. La intervención decisiva del imperialismo norteamericano ha sido abiertamente reconocida, así como las formas en que se combinó con poderosos agentes económicos nacionales, arrastrando a determinados grupos sociales influidos por campañas de demagogia y temor, incluso a pequeños empresarios que estaban siendo objetivamente beneficiados por el proceso popular y atrayendo a dirigentes políticos desplazados. El gobierno estadounidense entregó millones de dólares, cantidades de siete cifras como anunció Nixon en 1970, primero para impedir el ascenso de Allende al gobierno y después, para derrocarlo, "aportes" que la dictadura devolvió con creces extraordinarias al "indemnizar" a las empresas imperialistas por la nacionalización.

Fueron los protagonistas de esa conspiración los responsables de la violencia, el caos y el desorden que después se ha buscado atribuir a la responsabilidad del gobierno popular. Esta violencia la ejercieron en las fases sucesivas de su acción opositora, comenzando por los intentos entre septiembre y noviembre de 1970 de impedir que Allende asumiera la presidencia, incluso mediante el asesinato del comandante en jefe del ejército, General Rene Schneider, y luego siguiendo con las continuas maniobras de todo orden con las que buscaban romper la economía y revertir sus avances, mediante el cerco externo, la obstrucción, la especulación de precios, el acaparamiento y el ocultamiento de productos. A ello se sumaba la promoción constante de un clima de temor e inseguridad, con acciones que llegaron desde el asesinato del comandante Araya, edecán del presidente Allende, hasta culminar con su apelación a las Fuerzas Armadas y su convocatoria al golpe militar de septiembre de 1973.

En suma, en el período de Allende funcionó la democracia, bajo el imperio de la constitución de 1925, con la elección del presidente de la República en ias urnas, con la división e independencia de los poderes del Estado, sin uso de los estados de excepción, con el respeto de todas las libertades políticas y sindicales, sin asesinatos políticos, sin detenidos desaparecidos ni torturados, sin presos por ideas, sin exiliados, sin policía política y con respeto a las organizaciones sindicales y los derechos a la negociación colectiva y a la huelga. En cambio, en el período de Pinochet

se ejerció la dictadura, sin constitución alguna, el presidente de la República fue impuesto por las armas, sin Congreso Nacional y con un poder judicial subordinado, con uso y abuso de todos los estados de excepción, con la concentración dé todo el poder político en el dictador y la junta militar, con más de cuatro mil asesinatos políticos, con más de 1 300 detenidos desaparecidos, con 200 mil torturados, más de 500 mil exiliados, sin libertades políticas y sindicales, sin negociación colectiva ni derecho a huelga, con una policía política secreta, integrada por la DINA, la CNI, los organismos de "inteligencia" de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Carabineros y el Servicio de Investigaciones.

El Chile de 1970-1973 se proyectó así al futuro con signos exactamente opuestos al Chile de 1973-1989. Porque, como quiera que sea, los años de Allende representaron la fase más rica, inscrita por la larga lucha de los trabajadores chilenos y se constituye por lo mismo en un antecedente fundamental para la construcción del nuevo futuro que tiene derecho a esperar la sociedad chilena. Los años de la dictadura, en cambio, necesitan inscribir los hechos de su verdad histórica en la memoria colectiva del pueblo como expresión de lo que no deberá repetirse nunca más, como son los crímenes, la apropiación de bienes nacionales y los enriquecimientos ilícitos, que han quedado impunes por la amnistía decretada por sus propios autores, así como por la prohibición legal de investigar sus negociados durante ese tenebroso período. La herencia de la dictadura pesará como una lápida, por muchos años más, hasta que el pueblo chileno reconstituya sus fuerzas y reinicie su acción. Entonces, Allende, como el "Cid Campeador", ganará después de muerto las batallas por la vida contra la muerte, por la igualdad contra la pobreza, por la libertad contra la tiranía.

Crisis y renovación en el Partido Socialista

Interregno: cooptación y renegación

El Partido Socialista realizó un pleno nacional nueve días antes del golpe militar en Maipú, Santiago, con el fin de examinar la situación política nacional y discutir sobre la convocatoria al congreso general. En esa oportunidad, la comisión política adelantó su disposición a celebrar ese torneo, pero advirtió que tal evento era difícil de concretarlo por la inminencia del golpe militar. Por lo mismo, sostuvo que correspondía analizar, ante todo, la situación política de entonces y ver como enfrentar la crisis. Pero diversos comités regionales insistieron en considerar, como punto central del debate, la convocatoria al congreso y el pleno nacional fijó como fecha de realización el mes de enero de 1974. El 9 de septiembre, la Comisión Política se reunió con el ministro de defensa nacional Orlando Letelier para examinar en detalle los antecedentes sobre la conspiración golpista. que obraban en poder del Ejecutivo.

La situación era de absoluta debilidad del gobierno entre los generales, almirantes y oficialidad. Los sectores que podían considerarse "constitucionalistas" no tenían mando directo de tropas y su apoyo era muy bajo. En alguna medida, se confiaba en las posibilidades de lealtad de Carabineros, aunque para ello era necesario introducir algunos cambios importantes. En aquella ocasión se constató que el "golpe" podría efectuarse en los días inmediatos. El 10 de septiembre, la Comisión Política, después del análisis de los antecedentes recogidos, concluyó que la única salida era intentar una solución de resistencia, para lo cual se requería un acuerdo con el Partido Comunista y con el presidente Allende. No obstante, ésta no se concretó por los enfoques distintos que había sobre la perspectiva de defensa del gobierno.

El 11 de septiembre, en la mañana, se debía verificar una reunión entre ambos partidos para intentar, una vez más, un acuerdo sobre la salida de la crisis, pero ella

no se realizó por el estallido del golpe de Estado. Dicho día, a las siete de la mañana, se reunió la Comisión Política y se determinó que se debía luchar para detener la asonada militar, para cuyo objeto se acordó discutir con el presidente Allende a fin de adoptar una posición conjunta. De acuerdo a lo anterior, se envió a un miembro de dicha comisión —Hernán del Canto— a La Moneda, quien le formuló al primer mandatario tres puntos: 1. Ver la posibilidad de luchar en defensa del gobierno popular; 2. Conocer si había sectores militares leales y 3. Sugerirle que saliera de La Moneda. A tales consideraciones, el presidente Allende respondió que su decisión era mantenerse en la sede presidencial, por ser ella el símbolo de la legitimidad del poder, así como luchar en defensa del gobierno popular, por lo que el partido asumiera la responsabilidad que le correspondía, ya que él asumiría la suya.

En el curso del día 11, aproximadamente a mediodía, se realizó en la industria intervenida INDUMET una reunión entre las direcciones del Partido Socialista, del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria para coordinar las acciones de una eventual resistencia conjunta. En suma, no hubo acuerdo por la imposibilidad de alterar el curso de los acontecimientos y se optó por un repliegue ordenado. En definitiva, sólo Allende cumplió con su deber, muriendo en el palacio presidencial en una actuación heroica, concordante con el proceso histórico de que era principal protagonista, conjuntamente con un pequeño grupo de sus seguidores.

No obstante, el Partido Socialista sufrió el mayor impacto por la acción represiva del golpe de Estado y la consiguiente dictadura. Miles de sus militantes fueron asesinados o arrastrados a las cárceles y campos de concentración, numerosas direcciones locales y regionales fueron fusiladas. Cinco miembros del Comité Central, un diputado y un miembro del Comité Central de la Federación de la Juventud Socialista fueron también asesinados, 15 miembros del Comité Central del partido y 10 del Comité Central de la Juventud, todos los ministros y subsecretarios y 13 parlamentarios fueron encarcelados. Numerosos dirigentes seccionales, regionales y nacionales, así corno de frentes de masas, se vieron obligados a exiliarse. El partido sufrió la destrucción de su infraestructura y la pérdida por confiscación de todos sus bienes inmuebles, medios de comunicación, vehículos y bienes muebles, máquinas e instalaciones de Prensa Latinoamericana, sociedad anónima, y equipos de trabajo del partido.[1]

Durante la dictadura (1973-1989), la vida del Partido Socialista se rigió por la clandestinidad (interior) y el exilio (exterior). Un pequeño grupo fraccional del Co-

[1] Informe del Depto. de Organización del Partido Socialista de Chile en el pleno de La Habana.

mité Central elegido en el vigésimo tercer congreso general de enero de 1971 se erigió en dirección nacional, suspendiendo de sus cargos a quienes se habían exiliado o permanecido en el país, que no compartían su pensamiento político. Sólo a ellos. No obraron de la misma manera con otros, como Jaime Suárez y María Elena Carrera, que se asilaron en la embajada de Perú, a las 10 de la mañana del día 11 de septiembre, según información de radio y televisión, así como tampoco con el Secretario General Carlos Altamirano y los subsecretarios generales Rolando Calderón, Adonis Sepúlveda y el resto del Comité Central que seguía su orientación.

En estas circunstancias, el Comité Central se reconstituyó, en el interior, por medio de una supuesta cooptación hasta ser reemplazados todos o casi todos sus miembros en el curso de un corto tiempo. Este procedimiento, en estricto sentido, consiste en la sustitución de algunos de sus miembros, por diversas causas, por !a mayoría de los titulares. En el caso del Partido Socialista, dicho mecanismo, que no estaba considerado en sus estatutos, se convirtió en un vicio, ya que esta especie de cooptación continuó desarrollándose indefinidamente por los propios cooptados. En el exterior, se constituyó un Secretariado Ejecutivo, presidido por Carlos Altamirano, hasta que este último fue destituido y expulsado del partido en 1979, siendo reemplazado por Clodomiro Almeyda por decisión del "Comité Central" del interior.

La rigidez ideológica y falta de representatividad de ese Comité Central (cooptado), que no era otra cosa que un pequeño grupo, provocó la generación de otros sectores, alzados como direcciones nacionales, siendo el principal de ellos la Coordinadora Nacional de Regionales, que llegó a tener respuestas orgánicas en 27 países del mundo entre los exiliados. El sectarismo de todos aquellos grupos no permitió el desarrollo definitivo de ninguno de ellos, hasta el punto de que el sector oficial se dividió en 1979 en dos fracciones separadas. Una, el PS de Altamirano, y otra, el PS de Almeyda, sin mayores diferencias ideológicas, porque ambas se proclamaban todavía marxista-leninistas. En suma, el golpe de estado de 1973 marcó el inicio de un cuarto periodo en la historia del Partido Socialista —la llamada renovación del socialismo— que llega hasta hoy.

"Renovación": filosofía del oportunismo

Antes de la división de 1979, los órganos directivos (Comité Centra-I del interior y Secretariado Ejecutivo del Exterior) convocaron a diversos plenos de dirección, en los cuales se fue modificando la línea política del socialismo chileno. De todos ellos, el más importante fue el pleno de La Habana, celebrado en mayo de 1975, con

la asistencia de los miembros del Comité Central en el exilio y del representante del interior. Este dirigente cooptado tuvo en esa reunión el voto de la mayoría por representar al comité central en Chile.

En el pleno de La Habana se discutió, en primer lugar, el carácter de esta reunión: o consultiva (porque la dirección supuestamente estaba en el interior) o resolutiva (por el voto de mayoría de dicho representante). La discusión era absurda porque este individuo dominaba el pleno tanto por su voto de mayoría como por el apoyo que tenía de la mayor parte de los miembros del Comité Central en el exilio y del Secretariado Exterior. El acuerdo consistió en no abrir deba:e sobre el "documento de marzo" (que fue considerado de discusión interna) y, en cambio, el pleno elaboraría una resolución que definiría la línea política del partido. Para este efecto se designó una comisión redactora del proyecto formada por Clodomiro Almeyda, Adonis Sepúlveda y Jaime López, el representante del interior, quien fue denunciado posteriormente como agente de la dictadura. Más adelante analizaré los contenidos de ambos documentos.

Un año después, en un pleno realizado en Chile, en agosto de 1976, en la clandestinidad, la dirección del interior se declaró Comité Central y consideró al Secretariado Exterior como un organismo auxiliar y dependiente de esa "nueva directiva". En esta forma se desconocía al Comité Central elegido en el congreso general de 1971. La mayoría del Secretariado Exterior aprobó el documento del interior, con lo que tácitamente aceptaba su deslegitimación. En ese mismo tiempo, la dictadura liberó a algunos dirigentes apresados a fines de 1975 y principios de 1976. tanto por algunas delaciones ocurridas como por la acción directa de la DINA, algunos de los cuales eran "cooptados". Ellos viajaron a Berlín Oriental, con instrucciones del Comité Central (del interior) para ser incorporados a las tareas en el exterior. Éstos, según afirma Adonis Sepúlveda, no sólo confirman que la dirección del interior clandestina es el Comité Central, sino que son además defensores del "documento de marzo".

Como ya se ha indicado, después del golpe de Estado, se constituyó una dirección interior clandestina compuesta por algunos miembros de la Comisión Política existente hasta el 11 de septiembre de 1973. Esta dirección se fue desmoronando por el asesinato de sus miembros por la dictadura. Los tres principales dirigentes, Exequiel Ponce, Ricardo Lagos y Carlos Lorca, fueron detenidos y asesinados en junio de 1975 por la supuesta delación de uno de los cooptados, que también habría delatado al equipo de reemplazo. Así, después de sucesivas capturas, se generó una tercera dirección interior que pasó a denominarse Comité Central. Con esta dirección negoció, una vez más, la mayoría del Secretariado Exterior, compuesta por

Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Rolando Calderón, María Elena Carrera y Hernán del Canto.

De esta negociación surgió el acuerdo de realizar un pleno que tuviera el carácter de congreso en el exilio, en el cual los integrantes del Comité Central elegido en el vigésimo tercer congreso general, celebrado en La Serena, en enero de 1971, abandonarían sus cargos y ratificarían en bloque al nuevo Comité Central autogenerado en el interior, sin conocer siquiera la identidad de aquéllos. Este extraño compromiso comprendía, además, el reconocimiento a los cuatro representantes del interior del 60% de la votación del pleno, a lo que se sumaban los miembros del Comité Central elegido en el congreso general de La Serena, que eran sus partidarios, con los que los "cooptados" tenían el dominio absoluto. Sobre estas bases se realizó a comienzos de 1978 el pleno-congreso de Argel, que tampoco se hizo en esta ciudad, sino en París.

En el pleno-congreso, el grupo de cooptados asumió el control absoluto del Comité Central con una apariencia de legalidad. Esta reunión dejó planteada, sin embargo, la división del sector "oficial" del partido. Adonis Sepúlveda escribió:

> Estábamos en desacuerdo en el fondo y en la forma con la celebración de ese evento, tanto por la ninguna participación de la militancia ni del interior ni del exterior en su gestación y realización, como por estar ajeno a todas las normas partidarias de todos los tiempos en la vida del partido, ilegalidad e ilegitimidad que no justificaba, ni siquiera la situación de clandestinidad creada por la dictadura. La celebración de este extraño "pleno-congreso" era producto del entendimiento entre el Comité Central autogenerado en el interior y la mayoría del Secretariado Exterior.[2]

El juego de cesiones y concesiones en el control del poder de los escombros del partido continuó, como había sucedido desde el golpe militar.

En este pleno-congreso se aprobó un documento político que traían los delegados del interior, que sólo les fue leído a los concurrentes y del cual no se proporcionó copia a nadie. Por último, se designó un nuevo Secretariado Exterior. De este organismo y del Comité Central se excluyó a los calificados de "ultristas", como Adonis Sepúlveda y Laura Allende, al tiempo que se incoporó a él a algunos jóvenes desconocidos, de corta militancia, que formaban parte de los "comandantes", por su adhesión a la lucha armada. Carlos Altamirano continuó como secretario general, aunque por corto tiempo. El pequeño Comité Central terminó expulsándolo del "partido", designando en su reemplazo a Clodomiro Almeyda, que los había

[2] Adonis Sepúlveda, *Problemas del Partido Socialista de Chile, posteriores al golpe militar, 1974-1981,* México. 1988.

apoyado desde el comienzo. Después, la mayoría de los "comandantes" hizo lo propio con "Cloro". Los nuevos dueños del partido continuaron haciendo flamear como bandera el "documento de marzo", con el liderazgo de Almeyda.

Esta fue la "solución" a la crisis política y orgánica que vivía el Partido Socialista, convenida por un grupo de dirigentes conocidos del exterior y otro grupo desconocido del interior. Para un partido destruido por la dictadura era un "arreglo" orgánico, direccional, pero dejaba sin resolución el problema de orientación política. Adonis Sepúlveda lo explica con claridad.

> Tan feble fue la solución que la militancia del interior y del exterior nunca llegó a conocer el documento político aprobado en el pleno, que nos fue leído, pero cuyo texto los integrantes del pleno no tuvimos en nuestras manos. El Secretario General y otros nuevos dirigentes nos hablaron de un proyecto socialista que nunca vic la luz ni adentro ni afuera. Sólo en un elemento de orden político orgánico estuvieron *de* acuerdo y fue profusamente explicitado: en el pleno se había logrado una gran "homogeneización política" al excluir de la dirección a los partidarios del ultraizquierdismo y de la derecha.[3]

Un proceso típicamente estalinista, impuesto por los defensores del "documento de marzo".

La presencia de elementos contrarios al pensamiento histórico del Partido Socialista data de fines de la década de los años sesenta, en que se incorporó una generación formada a la sombra del estalinismo, tanto en sus ideas políticas como en sus métodos organizativos. Son los llamados marxista-leninistas Este grupo se organizó como fracción interna y procuró multiplicarse en la década siguiente, sosteniendo posiciones muy persistentes durante el gobierno de la Unidad Popular. Las deformaciones ideológicas provinieron de las repercusiones de la guerrilla latinoamericana que, a imagen y semejanza de la Revolución cubana, postularon la revolución a partir del foco armado. Para sus preconizadores, poco importaban las tradiciones de lucha de los partidos y sindicatos, sino el valor de los combatientes, que era lo más importante. Esta concepción general triunfó en dos países, Cuba y Nicaragua, derrotando a ejércitos corruptos y camarillas dictatoriales, Batista y Somoza, extendiéndose a otros países del continente sin lograr el éxito.

Las guerras por la independencia de España (1810-1830), según el historiador mexicano Carlos Pereyra, costaron 2 millones de muertos. En el gran intento de luchas, desde la Revolución Cubana (1959) hasta la mitad de la década de los ochenta,

[i] *Ibidem*, pág. 54.

murieron aproximadamente 500 mil, el mayor sacrificio humano colectivo, después de la Revolución mexicana, en el siglo xx de América Latina. Todos ellos merecen respeto y admiración. Pero los que llegaron al Partido Socialista en la década de los sesenta bajo esa inspiración no participaron en esta lucha heroica. La participación chilena en nuevos campos de batalla provino del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La victoria electoral de Salvador Allende y de la Unidad Popular en 1970 cambió la perspectiva inmediata del proceso, lo que impulsó a la fracción interna mencionada a reinterpretar la nueva situación con los principios asimilados del Partido Comunista.

Durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular chocaron en el Comité Central y la Comisión Política los defensores del pensamiento revolucionario del Partido Socialista (izquierda) y los "elenos" (derecha). Estos últimos tuvieron el dominio total de los aparatos de organización y de defensa, sobre cuya actuación sólo tenían información completa el secretario general Carlos Altamirano y los subsecretarios generales Adonis Sepúlveda, Rolando Calderón, Exequiel Ponce y Erich Schnake. El resto de la dirección, en sus niveles nacional, regional y local, no lo tenían. Esto explica que sólo un pequeño grupo de la dirigencia tuvo conocimiento oportuno de la inminencia del golpe militar, desde el día 10 de septiembre, tomó contacto con el presidente Allende, asumió la clandestinidad y, algunos, optaron por el asilo inmediato, con el apoyo de los "aparatos". Los demás quedaron aislados y sin posibilidad alguna de actuar en cualquier sentido. Así queda en evidencia en los escritos de Adonis Sepúlveda.

Este dirigente señala con claridad la situación interna en el Partido Socialista durante los años 1970-1973, en forma por demás somera:

> ...la mayoría del Comité Central sostenía que el haber llegado al gobierno y estar instalado allí, con un programa revolucionario y asentados en un poderoso y creciente movimiento de masas, de una u otra manera, nos permitía, buscando caminos, avanzar hasta consumar la revolución, llevando totalmente al pueblo al poder. Esta fue la línea de la mayoría del Comité Central independientemente de que no la hayamos implementado bien o que hayamos cometido errores o que no pudiéramos por múltiples y complejos factores aplicarla cabalmente. Pero la línea central, aquella que sostenía que triunfaba la revolución o se imponía la contrarrevolución y, por lo tanto, había que avanzar para consolidar el proceso revolucionario, la sostenía todo el partido y las masas en ese momento.[4]

[4] *¡bidem.* págs. 56 y 57.

Esta interpretación es, en general, correcta y refleja la realidad del partido entonces.

La violenta y arrasadora derrota militar del proceso revolucionario y el entronizamiento de la dictadura trajeron consigo, por otra parte, la crisis y dispersión del Partido Socialista. Este proceso comenzó con su ¡legalización, la muerte del presidente Allende en La Moneda, donde luchó con las armas, el asesinato de millares de sus cuadros, la prisión, la tortura y la resistencia de los militantes del interior en la clandestinidad y el exilio. Los militantes del interior y el exilio se esforzaron durante 16 años por reconstruir su organización, pero tal intento tuvo su mayor obstáculo en la crisis ideológica que abatió al partido. La experiencia de otros pueblos ya nos había enseñado estos deplorables resultados. Toda derrota de dichas proporciones trae consigo, en efecto, la frustración de los proyectos colectivos, la confusión de ideas, la negación de los postulados antes compartidos, la inculpación recíproca, el oportunismo político, la repulsión del pasado y la búsqueda de nuevos caminos. La caída de 1973 provocó esas mismas reacciones, agravadas por la conciencia de que los desacuerdos estratégicos en el seno de la Unidad Popular y del gobierno paralizaron la acción ante un enemigo implacable.

Estas contradicciones preexistían, pues, a dicha experiencia, se manifestaron en forma ostensible durante ella e hicieron eclosión violenta a partir del golpe de Estado. Desafortunadamente, nunca se abrió un debate franco y serio destinado a realizar un balance crítico y autocrítico de la acción partidaria. Ello favoreció el desarrollo de tendencias liquidacionistas, que no se interesaban por corregir errores e insuficiencias, siempre presentes, sino que formularon concepciones teóricas y orgánicas ajenas al socialismo. Tales tendencias destructivas inauguraron una competencia por "renovar" sus principios, "repensar" su teoría, "refundar" el partido e, incluso, "converger" con otros supuestos destacamentos hacia la formación de un partido nuevo, destinado a sustituir al viejo partido. En tanto, otras tendencias trataron de convertir al partido en una organización de "nuevo tipo", de corte marxista-ieninista, centralista, vertical y antidemocrática en su vida interna. En el río revuelto, algunos pescadores cuestionaron su adhesión al marxismo, su visión internacional, su concepción de la revolución chilena y latinoamericana, la estrategia del frente de trabajadores, el carácter de clase del partido y sus métodos de lucha, entre otros aspectos esenciales. El Partido Socialista se dividió en diversos grupos a partir del golpe militar y el sector oficial se rompió en 1979, configurando una historia oscura y contradictoria, que no se ha escrito todavía y de lo cual yo sólo puedo por ahora presentar algunos antecedentes.

En un partido que siempre practicó la democracia interna no se puede negar a ninguno de sus militantes el derecho a formular sus opiniones en cualquier sentido.

No obstante, no es admisible que algunos de ellos utilicen el nombre, la tradición y los símbolos del partido para presentar sus particulares puntos de vista como el "nuevo" pensamiento colectivo, sin confrontarlos antes en una discusión interna que culmine en un congreso general de "todo" el partido (no de grupos o fracciones convocados para este efecto), única instancia que puede alterar su marco teórico-político. Este es el producto de la discusión y los acuerdos de sus congresos a través de más de medio siglo, el cual no sólo sirve a quienes fueron sus militantes, sino también a las nuevas generaciones que se aproximan a él, en medio de la lucha contra la dictadura y la transición a la democracia. No se trata, por lo tanto, del manejo de un archivo muerto, sino de la conjugación del pasado y del presente a través de un pensamiento crítico, que permita la reorientación de la lucha por el socialismo.

En el proceso de desviación teórica del Partido Socialista se distinguen dos etapas: la primera provino del interior, inmediatamente después del golpe de estado, y la segunda tuvo su origen en el exterior, en la década de los ochenta. En ambas etapas los impulsores de ellas vinieron de fuera del partido, aprovechando la crisis y dispersión que lo abatía entonces.

Supeditación al Partido Comunista

El aplastamiento militar del gobierno de Allende fue tan brutal que durante casi dos décadas los partidos de la Unidad Popular vivieron una pesadilla que los llevó, primero, a la inacción y, después, los sometió gradualmente a un desvarío político, como un eterno retorno a sus propias políticas erróneas. Desde el comienzo, los partidos derrotados por la contrarrevolución fueron renuentes a la autocrítica, a pesar de las exigencias de muchos de sus militantes y también de partidos y movimientos afines de América Latina. Como es sabido, una experiencia histórica debe ser evaluada tanto en sus aspectos positivos como negativos, particularmente en éstos últimos, porque en ellos es donde se pueden extraer las mejores enseñanzas, para no tropezar con las mismas piedras.

El Partido Comunista formuló una declaración, en la que expresó: "El golpe militar del 11 de septiembre ha sumido al país en un clima de terror y brutalidad sin precedentes... Sin embargo, éste no es el momento preciso para discutir los errores cometidos por el gobierno de la Unidad Popular en su conjunto o por cada sector político en particular".[5] El Partido Socialista expuso a su vez su primera opinión:

[5] "Declaración del Partido Comunista", publicada en *Nuestra Palabra,* Buenos Aires, 24 de octubre de 1973.

> La reacción nacional e internacional ha mostrado una vez más su verdadero rostro... Éste fue tal vez el más grave error de la UP, SU error fatal: creer en los sentimientos democráticos y legalistas de la burguesía, en la obediencia secular de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a la Constitución y a las leyes y en la neutralidad del imperialismo. Pero no es la hora de mirar hacia el pasado, porque eso puede causar división, y el momento es de mirar al futuro con espíritu unitario.[6]

El horror al pasado, con olvido de que el futuro se convierte en pasado, con el transcurso del tiempo, los dominará hasta hoy.

La dirección de este partido consideró que era necesario sacrificar el análisis en aras de la "unidad", postergando aquél para cuando haya "elementos de juicio y perspectivas suficientes"'. La cuestión que hay implícita en esta negativa a encarar el análisis es otra. Plantearse, en realidad, un análisis crítico respecto al proceso político de 1970-1973 implicaba hacer aflorar hasta la conciencia de los trabajadores y, por lo tanto, plantearse las diferencias entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, así como la existencia de corrientes internas en el seno de éste último, tanto socialdemócratas como estalinistas. En las superestructuras burocráticas de ambos partidos no se quiso promover este debate en virtud de un malentendido concepto de *unidad,* de una idea de *unidad* que no es dialéctica, en la medida en que no parte de un punto de vista esencial. Las diferencias en el seno del pueblo también son contradictorias y, por lo mismo, se impondrá una posición u otra o la síntesis de ambas, a través de una franca confrontación ante los trabajadores.

El Partido Socialista sostuvo con decisión sus propias concepciones, dentro de la alianza con el Partido Comunista, en el pasado. La abdicación de sus principios fundamentales es un fenómeno nuevo, que se observa a partir de 1970 y que culmina con la adopción por el Comité Central del interior, en 1974, de las tesis del PC ("documento de marzo"). La tendencia a sacrificar posiciones en aras de la unidad convierte fatalmente al primero en un apéndice del segundo hasta desaparecer como alternativa revolucionaria. El documento de marzo de 1974 del Comité Central del interior anunció prematuramente este triste fin para el partido creado en 1933. Es necesario, pues, señalar las líneas generales de la política del comunismo, en la década de los setenta, para entender mejor las contradicciones existentes entonces en el socialismo, dado que un sector de éste profesaba abiertamente dicha política.

En el período que se inició con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el Partido Comunista reafirmó sus concepciones políticas sostenidas, en el pasado in-

[6] Carlos Altamirano. "'Conferencia de Prensa en La Habana", *En Lucha.* Buenos Aires, febrero de 1974.

mediato, sin rectificación alguna. Esto es, la vieja concepción de unidad con la burguesía, que confluye, en ei mediano plazo, con la línea de la Democracia Cristiana. Caracterizada la dictadura como fascista, se propone constituir un frente de la mayoría nacional en oposición a la dictadura y capaz de generar un "nuevo Estado de derecho, democrático, antifascista, nacional, pluralista, popular, que garantice la renovación democrática y la erradicación total del fascismo, impulsor de los cambios revolucionarios". No le importa su carácter preciso, en esas circunstancias, porque este "sera el resultado de la opinión común de todo el frente", como dice en el manifiesto de diciembre de 1974.

En este frente podrá participar cualquiera estructura democrática, aunque en ésta predominen los intereses de la burguesía "con iguales derechos y deberes". Se considerará asimismo en el frente antifascista la opinión y la presencia de las iglesias, sobre todo de la católica, "con las que se tendrá una actitud abierta y receptiva". En plena dictadura militar, cuando arreciaba más la represión criminal de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el Partido Comunista insiste en sus viejas y fracasadas tesis de alianza con la burguesía, para constituir gobierno, a través de sus órganos políticos, dentro de la cual reserva también un lugar destacado para los militares "patriotas".

Este partido llevó al extremo sus concesiones hacia el militarismo al expresar qué "...Ellos mismos (los uniformados), estamos seguros, adoptarán las medidas correspondientes para contener primero el crimen y la tortura, y para juzgar y sancionar enseguida a los que deben responder por todos los crímenes cometidos contra el pueblo... en las filas de los propios uniformados debe abrirse paso la decisión de contener a los jefes fascistas". Esta posición marcó un retroceso con respecto al documento emitido el 1 de mayo de 1974, a nombre de la Unidad Popular, en el cual se expresa sobre esta misma materia: "...El pueblo debe saber que dentro de las propias Fuerzas Armadas encontrará aliados. Los promotores de la barbarie fascista deberán asumir sus responsabilidades. El pueblo hará pagar con justicia cada crimen cometido". Después del asesinato del excomandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, en noviembre de 1974, desapareció dicha perspectiva. Nadie se atrevió en las Fuerzas Armadas a desafiar a Pinochet y su guardia pretoriana. El asesinato del general Prats tuvo por objeto, en efecto, silenciar la conciencia de honor en los militares.

El grupo de cooptados, en torno a los restos del Comité Central elegido en el congreso de La Serena, de enero de 1971, inició el proceso de desviación del pensamiento teórico y político del Partido Socialista. Para eso, formuló un documento en el que se alteró completamente esa concepción central. Este pequeño grupo res-

pondía a los contingentes de los "elenos", sigla derivada del "ejército de liberación nacional", denominación de la guerrilla de papel formada por quienes pretendieron dar apoyo al movimiento encabezado por Ernesto Guevara en Bolivia, pero que en definitiva no aportaron nada. Esta exposición se denominó el "documento de marzo" (por haberse dado a conocer en ese mes de 1974), cuyas ideas centrales se inspiraban en la alternativa estratégica desarrollada por el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo forma parte hoy del sector "renovado" del Partido Socialista.

Las tesis principales del llamado documento de marzo son las siguientes:

Lo primero que cabe destacar es la filosofía antipartido, que niega todo el pensamiento creado por el socialismo en sus primeros 40 años de existencia, que ya he resumido. Señala Adonis Sepúlveda:

> No se trata sólo de la orientación, sino del destino mismo del partido de su razón de ser. En el documento elaborado (el documento de marzo) fluye una filosofía más antipartido que todas las tendencias que puedan haber existido en su seno: se trata de una tendencia que no le da objetivo histórico al partido, que la define como un instrumento pequeño burgués para agrupar a esos sectores y sumarlos a la dirección proletaria, que obviamente, no sería el Partido Socialista. Si se califica al Partido Comunista como un partido obrero revolucionario, marxista-leninista y se define la tarea esencial del PS como la de agrupar a la pequeña burguesía revolucionaria ¿No estamos siendo solamente un partido adjunto a la vanguardia?[7]

No cabe duda de que era eso lo que decía.

El mismo Sepúlveda se encarga de señalar que esa crítica se refiere a una afirmación que aparece en el texto original que él recibió oficialmente, pero que posteriormente fue eliminada por instrucciones de la "dirección interior" en una nueva edición hecha por el Secretariado Exterior, ubicado en Berlín (oriental):

> En particular (el partido) ha canalizado las aspiraciones de transformación social de la pequeña burguesía revolucionaria y de parte de la clase obrera, que por razones históricas, ideológicas y políticas no encontró su conducto natural de expresión en el Partido Comunista... La contribución esencial del partido al desarrollo del proceso histórico revolucionario que conduce al socialismo, es hacer suya la ideología científica del prole-

[7] Adonis Sepúlveda, *ibidem.*

tariado y poner al vasto sector de la pequeña burguesía revolucionaria que representa bajo la conducción proletaria".[8]

Esta conducción, según el mencionado documento, estaría en el Partido Comunista, afirmando algo que negó la historia, es decir, la corrección de la línea política de dicho partido, que se derrumbó con la caída de la Unión Soviética.

La dictadura militar, sostiene el documento de marzo, ha creado en Chile un nuevo tipo de Estado (el "Estado fascista"), que asegura la dominación de la burguesía monopólica sobre las demás capas sociales. La liberación del proletariado pasa, por consiguiente, no contra el Estado burgués en tanto instrumento de dominación capitalista, sino en contra de ese Estado fascista y sus excesos antidemocráticos. La Revolución chilena es definida como democrática, antiimperialista y avanzada, en razón del carácter del núcleo central de la dominación capitalista en el país, constituida por la burguesía monopólica y agraria fuertemente ligado a los intereses imperialistas. En la misma línea de pensamiento, se expresa que la vía chilena para la construcción del socialismo fue y sigue siendo correcta, que no hubo una cabal comprensión de las amplias potencialidades revolucionarias de la Ínstitucionalidad burguesa. Como consecuencia de todo lo anterior, las desviaciones de izquierda impidieron concertar la alianza de clases, que era básica para el cumplimiento del programa de la Unidad Popular. Se refiere naturalmente a la vieja concepción de unidad nacional preconizada por el Partido Comunista.

El objetivo táctico de la etapa de la lucha de clases en Chile es, entonces, el derrocamiento de la dictadura fascista y su reemplazo por un gobierno democrático y popular, que represente a todas las clases sociales no directamente ligadas a la junta militar. Para ello debe formarse un Frente Antifascista que agrupe, en torno al proletariado, a la pequeña burguesía y a las fracciones no monopólicas de la burguesía. Dicho frente tendría hegemonía proletaria en la medida en que las vanguardias políticas sean capaces de estructurar una dirección homogénea. La homogeneidad se entiende por la línea del PC. En todo caso, queda establecido que la construcción del socialismo corresponde a una segunda etapa de la lucha de clases, la que no se define ni precisa.

El Estado que surgiría de lo que el documento de marzo llama "Revolución antifascista" sería un "Estado de nueva democracia", que debería construir la nueva Ínstitucionalidad. Esta aseguraría el control del Estado por parte de la "mayoría del pueblo" y desterraría para siempre el fascismo del país. El nuevo gobierno debería

8 *Ídem.*

destruir la institucionalidad fascista y convertiría a las Fuerzas Armadas en instrumento al servicio del pueblo. El Frente Antifascista, que promovería dicho tipo sui generis de Estado, sería constituido por la UP, el MIR y la DC, sobre la base del sector democrático y progresista de este último partido, alentando la esperanza de que el desarrollo del proceso unitario conducirá a la derrota del sector de derecha del PDC, encabezado por Frei Montalva.

El programa inmediato comprendía la defensa y garantía de los derechos humanos atropellados por la dictadura y fin del "estado de guerra interno". Restitución de las libertades públicas y derechos políticos cancelados por la junta militar. Mejoramiento del nivel de vida de las masas, con reajustes de remuneraciones. Defensa de la independencia y soberanía nacionales. Todo ello dentro de una economía de transición, con un área social dominante, un área de autogestión y un área privada. Garantías para la pequeña y mediana propiedad, control popular organizado sobre la producción y la distribución, y planificación de la economía.

En lo que concierne a la vía que debería emplearse para derrocar la dictadura (lo que el documento llama "la vía de nuestra revolución") se establecía que, aunque en importante período de ella se emplearían métodos de lucha armada y lucha política y de masas, en la fase final la lucha armada tendría una influencia decisiva. La forma más probable del derrocamiento de la dictadura sería la insurrección armada, lo que suponía, junto a las condiciones políticas de aislamiento de la junta militar, gran movilización de masas, etc. además del desarrollo de la capacidad militar del proletariado y la existencia de una fracción de las Fuerzas Armadas dispuesta a combatir a la dictadura.

E! documento de marzo es una elucubración de personas que ro tenían afinidad con el Partido Socialista, algunos de los cuales provenían de sectores jóvenes que tampoco registraban una militancia significativa desde el punto de vista del tiempo, con simple vinculación marginal con algunos dirigentes, también jóvenes. Por esa circunstancia "es un documento que encierra una filosofía negativa con respecto al partido", como expresa Sepúlveda. "En su conjunto, está impregnado de conceptos y estimaciones que descalifican al Partido Socialista en su pasado, en su actuación durante el proceso generado por la Unidad Popular, en sus concepciones teóricas, en su concepción sobre la revolución chilena, en su práctica revo ucionaria".[9] Formulan afirmaciones falsas, que nunca probaron en discusión alguna, como la falta de homogeneidad y deficiencias ideológicas del partido, que han exigido revisar problemas teóricos no aclarados o definidos en forma no científica. El documento

* *ídem.*

de marzo fue una crítica desde el punto de vista comunista, hecha por un pequeño grupo fraccional. El principal redactor del documento de marzo fue Félix Huerta, hoy alejado del Partido Socialista, uno de los teorizadores de los "elenos".

Las formulaciones políticas del "documento de marzo" fueron complementadas con las resoluciones del pleno celebrado en La Habana, en mayo de 1975. Este nuevo documento comprende cuatro capítulos que abordan la coyuntura internacional, la coyuntura nacional, la línea política y el partido. En el primer capítulo se describe la situación internacional de coyuntura, de modo de facilitar la definición del contexto en el que los trabajadores chilenos desarrollan sus luchas. En esta parte se inician las desviaciones que condicionan enseguida las definiciones de la línea política. Desde luego, se analizan los conflictos interimperialistas y la lucha de los pueblos por las libertades democráticas, pero se detienen inexplicablemente al borde mismo de las fronteras del mundo socialista, el cual también requería cambios en el orden político, como se demostró, con el desastre, en la década siguiente.

En la parte titulada Una nueva correlación mundial de fuerzas: el socialismo fuerza principal, se afirma:

> El socialismo —actor determinante de nuestra era— se convierte en la fuerza principal e impone la vigencia de los principios de coexistencia pacífica entre regímenes sociales opuestos y de la política de distensión en las relaciones internacionales, sin que signifique morigeraciones de la lucha de clases en sus diferentes formas... Las fuerzas del socialismo en nuestros días se expresan en la existencia, desarrollo y expansión del campo socialista, en el desarrollo de las luchas de liberación nacional que adquieren una clara perspectiva socialista y en el avance del movimiento obrero a escala internacional.

No es por casualidad que se formulan tales afirmaciones, que constituyen una desviación de la posición del Partido Socialista sobre esta materia, sino que ellas sirven de fundamento a las definiciones estratégicas y tácticas que se exponen en este mismo documento.

Este partido había expuesto con anterioridad una correcta valoración sobre la política de coexistencia pacífica y de distensión, pero advirtiendo acerca de la incorrecta interpretación de estas materias. El significado positivo de la posición socialista se puso de relieve cuando los partidos comunistas identificaron la política de coexistencia pacífica con la llamada vía pacífica al socialismo, rechazando algunas formas de lucha revolucionaria para no crear "focos de tensión internacional". Conviene señalar asimismo que el Partido Socialista consideró también que el principio de coexistencia pacífica rigió sólo entre las grandes potencias, bajo cuya sombra éstas consolidaron sus respectivas áreas estratégicas y de seguridad. La política de

distensión en las relaciones internacionales fue a su vez un corolario de la coexistencia pacífica entre las grandes potencias. Ella funcionó mediante una suerte de equilibrio político sustentado en el poderío nuclear y la constante negociación al más alto nivel.

La clara adhesión a las tesis comunistas sobre orientación de la lucha mundial por el socialismo queda en evidencia en este documento, como la definición acerca de la "perspectiva socialista" que adquirirían los movimientos de liberación nacional, adoptada por los partidos comunistas y obreros reunidos en Moscú en junio de 1969. De esta manera se alteraba la posición del Partido Socialista en el sentido que las luchas de liberación nacional no tenían sólo una "perspectiva" socialista, sino que un "contenido" socialista, señalando además la imposibilidad de diferenciar la lucha antiimperialista de la lucha anticapitalista, como también lo había sostenido Mariátegui. La diferencia es clara entre ambas posiciones alternativas, entre un proceso continuo de lucha por objetivos estratégicos socialistas (carácter socialista de la revolución) y un proceso por etapas, empezando por objetivos democráticos y populares (carácter democrático-burgués de la revolución).

Este problema se había planteado en diversas oportunidades en el marco de la alianza socialista-comunista en Chile, así como en todo el movimiento revolucionario internacional. La última vez había sido al constituirse la Unidad Popular. En el programa básico de gobierno se impuso la concepción del Partido Socialista al incluirse el objetivo central de "iniciar la construcción del socialismo" como una tarea para el período 1970-1976, y no para otro posterior o indefinido. Esta alteración del pensamiento socialista constituye un antecedente de los cambios en la línea política adoptados en el pleno de La Habana. El mismo sentido tiene el escaso análisis de la situación de nuestro continente, sin siquiera formular las posibles articulaciones de fuerzas en las que se inscribe su vocación latinoamericanista.

En este documento se percibe también la tendencia a sobrevalorar a la socialdemocracia agrupada en la Segunda Internacional, por una gradual política de mayor diálogo con los países del socialismo real y, en algunos casos, con los partidos comunistas, sin perder su espíritu capitalista. Pero se olvida señalar, como un factor recíproco igualmente positivo, la condenación hecha por el vigésimo congreso del PCUS de la generación burocrática y totalitaria del estalinismo. Los cambios producidos en los partidos comunistas a partir de este hecho histórico explican el entendimiento socialista-comunista en Chile, iniciado inmediatamente después del mencionado congreso del PCUS. ES el proceso de deshielo del estalinismo.

El pleno de La Habana examinó enseguida la coyuntura nacional, dividida en dos partes, que tratan la situación económica y la situación social y política. En los

hechos presenta una síntesis de la política de la dictadura y sus efectos en el ámbito económico de la sociedad, indicando la forma en que ellos inciden en los distintos sectores sociales. Muestra, en efecto, las contradicciones objetivas que enfrentan a la dictadura con fracciones de la burguesía, pero sin efectuar un análisis de sus propias alternativas políticas. Los sectores de la burguesía, representados por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional coincidieron en el derrocamiento del gobierno popular. Pero el primero tendía hacia un cambio de gobierno, deseaba sólo una etapa transitoria de régimen militar, para asumir enseguida el poder, a través de un "gobierno de recambio", de carácter cívico-militar. El segundo, en cambio, se autodisolvió y dio su apoyo a la permanencia indefinida de la dictadura.

En la formulación de la línea política, el pleno parte de las consideraciones estratégicas y tácticas. El capitalismo, expresa, se ha desarrollado hasta alcanzar grados elevados de concentración económica y dependencia del capital imperialista en los sectores más dinámicos de la economía. Este desarrollo se combina con el retraso que paralelamente subsiste en el resto de la economía y, en su interrelación con el capitalismo mundial, convierte el sistema económico nacional en una prolongación subsidiaria del sistema imperialista. Estas condiciones imponen una transformación del sistema sobre las bases de formas socialistas de producción y cambio, único camino para superar el atraso impuesto por la situación de entonces.

Este documento establece que, por las misma razones señaladas, la contradicción fundamental existente en la sociedad chilena es entre el proletariado y sus aliados naturales, por un lado, y el imperialismo y la burguesía, por el otro. Las contradicciones existentes entre fracciones de ésta última tienen un carácter secundario, pero deben ser aprovechadas. El golpe de estado, afirma, no ha modificado el carácter del sistema económico chileno. Por el contrario, al representar la dictadura los intereses de la alta burguesía y el imperialismo, ha puesto en evidencia con mayor fuerza su naturaleza. Son estos elementos objetivos los que determinan el carácter socialista de la revolución chilena, es decir, la toma del poder por los partidos de la clase obrera y sus aliados, para destruir el capitalismo y su superestructura jurídico-política e ideológica y construir una nueva sociedad socialista, con sus correspondientes formas de poder y de conciencia social. Este objetivo es contrapuesto al de la burguesía interna.

Después de estas definiciones estratégicas, se exponen las consideraciones tácticas. El objetivo inmediato para el movimiento popular es, dice el documento, el derrocamiento de la dictadura. La consecución de este propósito es condición necesaria, pero no suficiente para la continuidad del proceso revolucionario. Es un objetivo parcial de esta fase de la lucha de clases, en relación con la meta estratégica

de instaurar el socialismo. En esta lucha inmediata hay que tener en cuenta que la dictadura no sólo entra en contradicción con la clase obrera y sus objetivos históricos, sino que oprime en diversas formas a sectores de las capas medias, acentúa la explotación del subproletariado y lesiona los intereses de la burguesía mediana y pequeña.

Sobre esta base, el documento plantea la constitución del Frente Antifascista.

> El Frente debe plantear la lucha por una nueva institucionalidad democrático-popular que haga imposible el renacimiento del fascismo y erradique sus gérmenes de todo el cuerpo social, a la vez que constituya el marco adecuado para retomar el curso socialista de la revolución chilena... Las nuevas formas de poder, en la medida que impidan por la fuerza el renacimiento del fascismo y reemplacen las instituciones que lo sostienen, significan el establecimiento de una democracia revolucionaria... Esta nueva institucionalidad debe asegurar el control efectivo de la dirección del Estado por parte de la mayoría del pueblo. Será necesario destruir las instituciones que el fascismo ha desarrollado y, sobre todo, convertir a las Fuerzas Armadas y policiales en instrumentos del pueblo.

En términos generales, esta es la concreción de su táctica para esa etapa, en la que se percibe una reducción de su estrategia, presentando una desviación reformista.

El Partido Socialista sostiene, desde los primeros años de la dictadura, la conveniencia de que la Democracia Cristiana integre el Frente Antifascista, como ya lo había planteado también el comunismo, aunque en el primero de estos partidos dicha concepción es ambigua, porque la DC recién se separaba de la dictadura, a la cual apoyó decididamente en los primeros dos años, con participación de sus militantes en las actividades de gobierno. Convocada la Unidad Popular a una reunión en Berlín, a fines de julio de 1975, acordó propugnar, sin perjuicio de mantener su vigencia, una alianza "popular y democrática... mucho más amplia política, social e ideológicamente", que se agrupe "sobre nuevas bases programáticas en un frente... para derribar a la junta, erradicar definitivamente el fascismo e iniciar el camino de la construcción de una sociedad democrática y socialista".

En esta declaración de Berlín se deja constancia que se han desarrollado posiciones favorables a la acción conjunta en el interior de la Democracia Cristiana y se señala que "nuestra política se orienta a crear las condiciones que hagan posible la acción conjunta". Pero no se encuentra en ella referencia alguna al carácter de clase de ese partido, ni a su responsabilidad en el golpe de estado, ni a sus relaciones con la dictadura, ni a sus contradicciones internas, ni al predominio que ejerce en su dirección el sector freísta vinculado al gran capital y proimperialista. El sentido

de esta alusión es obvio como quiera que se trata de promover la "acción conjunta" con dicho partido sin discriminación alguna, no sólo en busca del derrocamiento de la dictadura, sino de un proyecto de gobierno de larga duración. En suma, lo que se postula es un proyecto reformista, de unidad nacional. En la elaboración de este documento participó la mayoría de los intelectuales y técnicos hoy convertidos en "renovados", usufructuarios de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Esta amable oferta de la Unidad Popular fue rechazada por la Democracia Cristiana, entonces como después, en reiteradas oportunidades, porque ella patrocinaba otra alternativa. Patricio Aylwin, en esa fecha, presidente de su partido, expresa a Renán Fuentealba, concurrente a la reunión-seminario de Colonia Tovar, Venezuela, la posición oficial:

> Aún a riesgo de parecer majadero, debo recordarte que el partido definió su meta: la reconstrucción de la democracia en Chile y, a la vez, precisó el camino: procurar un entendimiento de las fuerzas políticas y sociales democráticas con las Fuerzas Armadas para la restitución de la democracia... Reiteradamente hemos expuesto a ustedes las poderosas razones por las cuales rechazamos cualquiera alianza, pacto, concertación o entendimiento con la antigua UP, como incompatible con las decisiones de nuestro partido y perjudicial para el éxito del camino acordado.[10]

En la década de los noventa, el desvarío "socialista", por boca de Altamirano, plantea la fusión con la Democracia Cristiana, como expresión de la política de mercado.

El Partido Demócrata Cristiano tenía entonces una política clara. Contribuyó al golpe de estado, pensando que los militares le iban a entregar el poder a Frei, padre, en breve plazo. Aylwin consideró que la dictadura, con muertos, desaparecidos, torturados y exiliados, era buena y positiva por dos, tres y hasta cinco años, pero supo esperar hasta 16 años, seguro del oportunismo de "izquierda", que en su hora le daría su apoyo. Agregó en su carta a Fuentealba:

> "Por nuestra parte, si bien estamos conscientes de que la consolidación en Chile de un régimen democrático estable requerirá en su hora la más amplia base de sustentación social y política, pensamos que ello no ha de conseguirse mediante acuerdos superestructurales entre fuerzas antagónicas, adoptados en el exterior al margen de la realidad que

[10] Patricio Aylwin, "Carta a Renán Fuentealba", publicada en el diario *El Cronista*, Santiago, 24 de septiembre de 1975.

> estamos viviendo... Como insistentemente lo hemos señalado, es indispensable que todos comprendamos que nuestras posiciones, actitudes, acciones, planteamientos o silencios deben ser decididos aquí en Chile, y no afuera.

Pasarán años, comunistas y socialistas tras las huellas de la Democracia Cristiana para obtener siquiera una declaración conjunta sin lograrla nunca.

En suma, de la sola lectura de los documentos de marzo y de La Habana se infiere que no hay entre ellos diferencias de fondo en la línea política planteada, aparte de que existen muchos párrafos copiados textualmente, lo que denota hasta falta de cuidado en quienes intentaron hacer aparecer el informe como una rectificación del anterior proveniente del Comité Central del interior. No era posible implementar una línea que propugnaba reorganizar a los trabajadores, armarlos ideológica y materialmente, prepararlos militarmente en las rigurosas condiciones de la clandestinidad, conducirlos a una lucha a muerte en contra de la dictadura de la burguesía y derrotarla. Para compartir finalmente responsabilidades en un gobierno que restablecería la democracia, aseguraría reglas estables a la economía privada y crearía una nueva "institucionalidad", que sería sólo la institucionalidad burguesa. La única novedad en esta línea estratégica es la evaporación de la fantasía del fascismo, creada sin base alguna por los comunistas y sus "compañeros de ruta".

Hay, por lo tanto, una evidente contradicción entre la vía planteada para derrocar la dictadura y los objetivos limitados que deberá cumplir el gobierno que seguiría a su caída, sobre cuya naturaleza el documento de La Habana no dice nada. Nadie puede pensar seriamente que un proletariado que emerge victorioso y armado, después de derrotar a las fuerzas militares de la burguesía, no se planteara la conquista inmediata del poder. Sin embargo, esa era la táctica señalada en los informes políticos analizados. Lo ocurrido en La Habana parece más una maniobra de sectores interesados en ganar tiempo en la lucha exclusivamente partidaria que un intento serio por entregar una correcta dirección política. Si realmente se creía que la vía armada era la única que permitiría el derrocamiento de la dictadura, con la hegemonía de los trabajadores, no se divisa razón alguna para apresurarse en auto imponerse limitaciones estratégicas.

Diferente es la situación si se piensa realmente que la dictadura puede ser derrocada a través de la lucha política de masas. Confluyendo además factores como las contradicciones secundarias interburguesas, la presión hipotética del imperialismo por cambiarle el rostro a la dominación, el aislamiento de la dictadura, el quiebre interno de las Fuerzas Armadas, etcétera. Parecía posible entonces que en tal caso la Democracia Cristiana pudiera intentar aparecer como la salvadora de la "democracia" en Chile y del capitalismo. El documento de La Habana, aún cuando nie-

ga tal posibilidad, parte de esa premisa básica para diseñar su línea política, pensando en la hegemonía de la burguesía, expresada a través de dicho partido en tal situación. El desarrollo de los acontecimientos posteriores comprobó esta hipótesis, en el enfrentamiento del plebiscito de 1988 y los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, con la exclusión del Partido Comunista.

Esta primera desviación posgolpe militar fue combatida en el interior de Chile por numerosas grupos socialistas, surgidos en la resistencia a la dictadura, así como en el exterior del país por los sectores representativos de aquellos grupos internos y otros generados independientemente. Destacaron en esta posición crítica numerosos compañeros, quienes contribuyeron con reiterados análisis. Las propias ideas contenidas en este capítulo son el producto de nuestras discusiones de entonces, algunas publicadas en revistas y boletines y otras conservadas en nuestra memoria política. En mi caso, expuse esta misma crítica en reuniones y seminarios en América Latina y Europa, así como en libros y revistas.

Supeditación a la Democracia Cristiana

De la convergencia y renovación a la unidad e integración. Estas son dos consignas diversiónistas que enmarcan la segunda desviación posgolpe militar: la abierta supeditación a la Democracia Cristiana. El Partido Socialista de Chile ha sufrido el agobio permanente de fuerzas sociales y políticas ajenas a su carácter de clase y al desarrollo de su teoría y práctica revolucionarias. Este agobio ha sido particularmente intenso en la década de los ochenta, en directa relación con el crecimiento de la oposición a la dictadura y, por consiguiente, con la viabilidad de proyectos sustitutivos. Entonces fue, pues, evidente la acción de fuerzas centrífugas, nutridas desde fuera de sus filas, que niegan su patrimonio teórico y desvirtúan su autonomía, para justificar políticas dirigidas a insertarlo en estrategias hegemonizadas por clases sociales de signo antagónico a los intereses de los trabajadores.

Este incesante asedio fue absolutamente desembozado por las tendencias liquidacionistas que se movieron en algunos de los grupos en que estaba escindido este partido. Para llegar a la situación actual se generaron diversas líneas de acción, implementadas a partir del proceso de convergencia, convertido en bloque socialista desde 1983. Estas líneas de acción apuntaban a la generación de un nuevo partido y, por lo tanto, a la sustitución del Partido Socialista en la perspectiva de una alianza estratégica con la Democracia Cristiana, que se consumó al final en la Concer-

tación de Partidos por la Democracia, que pasó a administrar la herencia de la dictadura.

Antes de analizar este proceso, es necesario recordar que la convergencia pasó por dos fases, que correspondían a su vez a dos enfoques y perspectivas diferentes. La primera corresponde a la iniciativa promovida por Raúl Ampuero a través de los seminarios de Ariccia, Italia, de 1979 y 1980. Ésta se planteó a partir del reconocimiento de dos vertientes históricas del movimiento popular (el comunismo y el socialismo), la necesidad de fortalecer esta última, en un instante de dispersión y confusión, para contribuir, desde una posición de homogeneidad ideológica y vitalidad política, a la reconstitución de la alianza de la izquierda. La segunda surge con el Secretariado de Convergencia, en 1981, el que se propone la capitalización de la idea en beneficio de pequeños grupos políticos, sobre la base de consolidar la división del Partido Socialista y de la izquierda. El Bloque Socialista fundado en 1983, contiene en apariencia ambas formulaciones, si bien la hegemónica es la del Secretariado de Convergencia. Las cúpulas de los grupos que integran este bloque tienen en vista la formación de un partido nuevo, en el que aspiran a crear un espacio donde puedan coexistir marxistas y cristianos o, como lo expresara Víctor Molina, marxistas "democráticos" y cristianos "socialistas".[11] Esta formulación de sincretismo ideológico lo plantean, en nombre de estos últimos, principalmente quienes, habiendo nacido a la vida política al amparo de la doctrina social de; la Iglesia Católica en el interior de la Democracia Cristiana, abjuraron de ella en los comienzos de la década de los setenta y se incorporaron a la Unidad Popular.

Es el caso del MAPU, entonces unido, que se caracterizó a sí mismo en su primer congreso reunido en noviembre de 1970 como una "vanguardia marxista-leninista". En ese tiempo, Rodrigo Ambrosio, fundamentando dicha posición afirmó: "Al MAPU, por razones históricas, llega una alta proporción de cristianos revolucionarios. Sin embargo, los cristianos revolucionarios, no sólo en Chile, sino en toda América Latina, entienden que para militar en la revolución no se requieren partidos, ideologías o símbolos cristianos. Entienden que su lugar está en los partidos revolucionarios y que su ideología para hacer la revolución es la del proletariado".[12] Parece obvio que Ambrosio reconoció en tales declaraciones al marxismo como esa ideología revolucionaria y no reclamó, por cierto, una integración de ésta ni con la teología ni con la doctrina social de la Iglesia Católica.

[11] Víctor Molina, "Algunas ideas sobre la convergencia que deben preocupar a los socialistas", mimeo, Londres, 1980.

[12] *Primer año de Gobierno Popular,* Santiago, Ediciones Unidad Proletaria 1974, pág. 111.

La radicalización del MAPU se puso en evidencia en su segundo congreso general, celebrado en diciembre de 1972, en el que se designó Secretario General a Osear Guillermo Garretón. Si, el mismo que se desempeñó como presidente de la compañía trasnacional telefónica, CTC Chile y entusiasta defensor de la empresa privada en la década de los noventa. En el documento que sirvió de base programática, titulado "Por un partido realmente proletario", se expresó:

> El MAPU ha jugado hasta hoy un rol importante, aunque secundario en el desarrollo de las luchas obreras y de las masas. Ello ha sido así, principalmente, por las debilidades e insuficiencias ideológicas de su Dirección, por la ausencia de una línea estratégica coherente y proletaria... El MAPU debe constituirse, a breve plazo, en el destacamento más decisivo y fundamental del proletariado chileno. En el destacamento marxista-leninista más consciente.[13]

Jacques Chonchol, Rafael Gumucio y otros dirigentes se retiraron del MAPU, por no compartir esta ideología, incorporándose a la Izquierda Cristiana, cuando este sector se alejó de la Democracia Cristiana. Luis Maira explicó: "El MAPU (consideró) que para poder tener un destino en el movimiento popular chileno, era indispensable adoptar la ideología del proletariado, es decir, el marxismo-leninismo. Nosotros nos situamos en otra perspectiva".[14]

Entre los más entusiastas marxistas-leninistas del MAPU destacaban el exsenador Antonio Viera Gallo, el "asesor" del grupo económico Luksic, Enrique Correa y el tantas veces ministro, José Miguel Insulza, hoy convertido en secretario general de la OEA. El MAPU es la matriz más prolífica de la política chilena, de ahí han salido senadores, diputados, ministros, embajadores, alcaldes, candidatos presidenciales. Agotados todos estos cargos, están destacando como lobbistas, nacionales e internacionales, la nueva actividad para hacerse ricos, más segura que la lotería. Estos son hoy los personajes mas destacados en la política chilena, defensores del neoliberalismo y "Hombres de Estado".

La posición de Rodrigo Ambrosio de renunciar al pensamiento católico es legítima y siempre fue sustentada por el Partido Socialista, lo que explica que hayan militado en sus organizaciones de base más cristianos revolucionarios que todos los que lo han hecho en el conjunto de los grupos que se autoproclaman como tales. Es igualmente legítima la posición de quienes, asumiendo plenamente las concepciones del catolicismo, teológicas y sociales, se plantean sólo la acción común en

[13] Suplemento de *Punto Final,* Santiago, 27 de marzo de 1973.

[14] Luis Maira, *Chile. Dos años de unidad popular,* Ediciones Quimantú, Santiago, 1973, pág. 162

tareas prácticas. En cambio, no es correcto el planteamiento generalizado en el Bloque Socialista de promover la coexistencia de dos ideologías diferentes en un mismo partido hasta lograr un sincretismo de ambas paradójicamerte a través de un proceso de desideologización. Éste no es, ni puede ser, un proyecto aceptable ni para cristianos ni para marxistas verdaderos.

El tema no es nuevo como quiera que ha sido analizado, particularmente por los pensadores y políticos cristianos, a partir del surgimiento de los partidos inspirados en la doctrina social de la Iglesia Católica. Entre ellos, destaca Jacques Maritain, quien preconizara un pluralismo, que algunos dirigentes de la Izquierda Cristiana replantearon como un "pluripartidismo convergente" durante los años 1970-1973 y sobre cuya base se justificó la participación de los grupos de raíz cristiana en la Unidad Popular, su apoyo al proyecto político de ésta y su concurrencia al gobierno presidido por Salvador Allende.

Víctor Molina resume cabalmente la formulación maritaineana,

> El pluralismo planteado por Maritain fundamenta una colaboración de cristianos y no cristianos, pero sobre una base muy precisa: no se trata de una colaboración fundada en acuerdos doctrinales sino de una colaboración restringida al logro de objetivos prácticos comunes. Por ello es que Maritain argumenta que cristianos y no cristianos sólo pueden aspirar a construir una convergencia práctica en la que inevitablemente confluyen ideologías teóricas y tradiciones espirituales muy diferentes. La convergencia entre cristianos y no cristianos no implica pues, según Maritain, su fusión en una organización necesariamente híbrida en cuanto a sus concepciones filosóficas y políticas, sino sólo la convergencia pluralista en torno a un proyecto práctico común.[15]

Esta última condición se dio en el proceso popular de 1970-1973 y, en cambio, no se presentaba en los años ochenta, como quiera que el Bloque Socialista fue incapaz de proponer un programa propio, distinto al de la Alianza Democrática.

En 1971, Bosco Parra interpretaba correctamente un pluralismo político legítimo o, mejor dicho, un "pluripartidismo convergente" sobre la base del reconocimiento de la posibilidad de esta convergencia entre cristianos y marxistas cuando la definía como "...la concertación de cristianos y marxistas en una acción común. Afianzado en la base del pluripartidismo convergente, este proceso podrá rendir en Chile frutos más interesantes que en ningún país". De acuerdo a estos criterios, Parra agregaba que "el máximo desarrollo socialista será explicado por el máximo desenvolvimiento de cada una de estas familias culturales", para concluir que dicho

[15] Víctor Molina, *ibidem.*

proceso no requerirá, en alguna de sus fases avanzadas, la fusión de los partidos que sustenten ese programa común.'[6]

La colaboración de cristianos y marxistas se plantea así desde el punto de vista de un pluripartidismo en el interior del movimiento popular. Es la posición de algunos cristianos consecuentes. "Sin embargo, la concepción de pluralismo que se desprende de la argumentación de Garretón es muy diferente. Lo que allí se defiende no es un pluralismo de partidos afínes (aquel 'pluripartidismo convergente' de que hablara Bosco Parra). Se trataría, por el contrario, de una convergencia de tendencias (cristianas y marxistas) al interior de un partido único".[17] Hoy podría preguntarse, a la luz del pensamiento de Garretón, ¿Para qué?; no desde luego para sostener ninguna de esas tendencias, sino para asumir el neoliberalismo y la gerencia del sistema capitalista.

Este último proyecto no sólo contradice la concepción maritaineana de la convergencia práctica en torno a una acción común, sino también la concepción marxista del partido revolucionario, salvo que estos "cristianos" y "marxistas" no sean ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como expresaba una obra teatral representada en Santiago. Conviene recordar en este sentido que el partido marxista fue considerado, en sus orígenes, como uno de los partidos que podía constituir la clase obrera, en el marco de cierto pluripartidismo, si bien el más avanzado, precisamente, por su identidad teórica. En la socialdemocracia europea de entonces, no así en la de ahora, coexistieron, sin embargo, sectores con diferenciaciones teóricas dentro de una adhesión general al marxismo, situación que se reprodujo en el Partido Socialista de Chile desde su fundación.

Convergencia y renovación

La tesis del partido nuevo se relaciona estrechamente con la de sustitución del Partido Socialista por una especie de acto de prestidigitación política. El mismo Garretón plantea esta operación, que él llama de superación política, por estimar que aquella organización partidaria carecía entonces de vigencia histórica y, por lo tanto, no tenía otro destino que concurrir con diversos "destacamentos" a un proceso

[16] Bosco Parra, *Socialismo, democracia y descentralización en Chile: búsqueda de un nuevo socialismo,* págs. 62 y 63, citado por Víctor Molina.

[17] Víctor Molina, *ibidem.*

de convergencia en el que había de forjarse "una nueva organizac ion política superior".[18] El concepto de convergencia del MAPU es, pues, de sustitución del Partido Socialista, como se encarga de señalar explícitamente el mismo dirigente cuando afirma que "... el problema del espacio socialista hoy día no es la refundación del Partido Socialista histórico sino la creación de una nueva fuerza socialista".[19] Esta iniciativa se planteaba en 1980.

Para alcanzar este objetivo se diseñó una táctica de infiltración, con la complacencia de algunos de los grupos en que se encontraba escindido el Partido Socialista, que consistía en una suerte de renovación forzada. Dicho elemento adicional se desarrolló fuera de este partido para influir y presionar hacia su interior debido al peso específico que la teoría marxista tenía entre sus militantes. Por eso, Garretón dice: "El propio Partido Socialista en su interior no se renovará si al exterior de él no existe otra fuerza renovadora con la capacidad, coherencia y envergadura para gravitar en el Partido Socialista [...] Por tanto, [...] nos requiere plantear simultáneamente la convergencia para desarrollar un referente renovador al exterior del Partido Socialista que avance en dialéctica relación con el proceso de renovación en el Partido Socialista".[20] He aquí el sentido de la consigna convergencia y renovación.

No hay duda alguna, pues, que tanto dentro de algunos de los grupos en que estaba dividido el Partido Socialista como fuera de ellos (entre sus aliados privilegiados) existían quienes no se interesaban realmente por la reconstrucción de esta organización política, por estar ella condenada a su reemplazo por el nuevo partido surgido de la convergencia, pero se preocupaban, en cambio, de su "renovación" para incorporarse a ese nuevo partido. Esta tesis explica la división de abril de 1984 de un proceso de unidad, aunque parcial, auspicioso, provocado deliberadamente para deshacerse de incómodos compañeros de ruta por su impermeabilidad a la purificación. Sólo el repudio producido entre los militantes socialistas por este acto de división postergó un paso programado: la integración de todos los "renovados" externos en el nuevo Partido Socialista.

Tal era este proyecto de convergencia y renovación. Su objetivo de fondo inmediato, el que también se trasluce de los documentos políticos conocidos, consistía en la búsqueda de una alianza estratégica entre la fuerza socialista renovada en construcción y la Democracia Cristiana, a la cual no se le exigía una similar renovación, sino más bien se interpretaba benévolamente su esencia política. Para ello

[18] Osear Garretón, "Sobre la propuesta de Convergencia Socialista para el Movimiento Popular", revista *Fragua,* N° 1, marzo de 1980, pág. 92.

[19] *Ibidem,* Entrevista en la revista *Convergencia,* N° 5-6, México, 1981, pág. 96.

[20] *Ibidem,* "Punteo de su intervención en el primer seminario de Anecia", revista *Fragua,* pág. 25.

se define una política de independencia y de convocatoria hacia dicho partido. "Independencia de proyecto, de desarrollo de fuerza para poder atraer y convocatoria amplia, unitaria, no sectaria para construir la confluencia de ese centro político y, eventualmente, de la Democracia Cristiana hacia un proyecto socialista, son elementos complementarios de nuestra política".[21] Nunca se ha explicado el contenido programático de ese proyecto socialista.

Esta visión interesada que atribuye una falsa "vocación progresista y revolucionaria" a la Democracia Cristiana se reafirma con la esperanza de "consenso democrático anticapitalista", sobre la base de las coincidencias programáticas que ya se habrían hecho presentes en la elección presidencial de 1970. Expresa Javier Ossandón:

> En Chile se hace hoy día posible avanzar hacia un nuevo consenso democrático anticapitalista. Nuestro objetivo es no sólo lograr una síntesis orgánica superior sino también en contenidos en torno a una convocatoria a las mayorías que en 1970 se pronunciaron por profundas transformaciones de la sociedad chilena. Los programas de la Unidad Popular y de la candidatura demócrata cristiana de Tomic recogieron un consenso anticapitalista que se vino forjando en Chile aceleradamente en la década anterior.[22]

Como en el lecho de Procusto, se recortan las extremidades de la Unidad Popular y se estiran las de la Democracia Cristiana hasta lograr su coincidencia. Víctor Molina resume muy bien esta operación: "...Decir que la Democracia Cristiana representó en 1970 un proyecto anticapitalista significa exagerar su intencionalidad meramente "modernizante" respecto al capitalismo. Por otro lado, caracterizar a la Unidad Popular como mera expresión de un anticapitalismo posible de ser comparado con el proyecto de la Democracia Cristiana del año 70, significa disminuir la intencionalidad verdaderamente socialista y revolucionaria, de sus reales objetivos estratégicos. Hablar de un consenso anticapitalista del que habrían participado tanto la Unidad Popular como la Democracia Cristiana desfigura a ambas instituciones".[23] La historia niega, en efecto, esta hipótesis no sólo por el contenido de los programas sino por el comportamiento político posterior de ambas fuerzas, tanto en el gobierno de Allende como en la oposición y el golpe de Estado.

Para comprender este planteamiento es preciso tener presente el concepto abstracto de democracia que postulan los "renovados", el que prescinde de toda conno-

[21] *Ibidem,* "Sobre la propuesta de Convergencia Socialista para el Movimiento Popular", *ibidem,* pág. 101.

[22] Javier Ossandón, "Hacia una estrategia para derrocar a la dictadura y democratizar e! país", revista *Fragua,* pág. 141.

[23] Víctor Molina, *ibidem.*

tación de clase y, por lo mismo, constituye un canal abierto hacia el socialismo mediante su simple profundización. Por eso, piensan en la viabilidad de esta alianza estratégica y pueden afirmar que "para la Democracia Cristiana y otras fuerzas democráticas eludir el desafío representa una sospechosa muestra de inconsecuencia y aceptarlo es su oportunidad práctica de demostrar la justeza de sus posiciones"[24] En el marco de este razonamiento es pertinente preguntarse acerca de qué clase de socialismo hablan los "renovados" cuando esperan que la Democracia Cristiana se convierta en uno de sus pilares por la sola circunstancia de ser consecuente consigo misma. La respuesta la ofrecen los renovados "internos".

La renovación forzada impuesta desde el exterior del Partido Socialista confirió una fisonomía peculiar al grupo que participó en la Alianza Democrática, que se alejó cada vez más del pensamiento rector de dicho partido. Esta nueva imagen corporativa surge del rastreo de algunos documentos oficiales, en los que se percibe una revisión completa de las concepciones estratégicas y tácticas del socialismo chileno al tiempo que una aproximación a los lincamientos tradicionales de la Democracia Cristiana. En esta forma, se crearon bases de entendimiento para un gobierno de larga duración, administrador de la herencia económica, social y política de la dictadura de Pinochet y completamente ajeno a la trayectoria del gobierno de Salvador Allende.

Hacia el "fatalismo geográfico"

Este grupo recogió en el plano internacional la idea del fatalismo geográfico desarrollada en los años sesenta por la Democracia Cristiana y que la condujo a la búsqueda de un compromiso con el gobierno estadounidense al amparo de la "Alianza para el Progreso". Este compromiso se basaba en la aceptación de la premisa de que Chile y, en general, América Latina, forman parte de su órbita de influencia, intereses y seguridad conforme al equilibrio de poder entre las grandes potencias surgido de la Segunda Guerra Mundial. Las definiciones de los "renovados" son claras al respecto. Como la Democracia Cristiana de los años sesenta, consideran que "una mera actitud de antiimperialismo" no resuelve los problemas, por lo que insinúan y practican una línea de aproximación hacia Estados Unidos, en la década de los ochenta.

[24] Oscar Carretón, *ibidem.*

No se trata todavía de una política internacional afinada, sino de un diseño primario que lo identifica con su aliado principal. No denotan otra cosa apreciaciones tan aventuradas como las siguientes: "Dada la presencia ineludible de Estados Unidos en la región, el Partido Socialista considera a dicha potencia como una preocupación prioritaria de su política internacional, lo que implica desarrollar una estrategia de vinculación coherente, pragmática y bien coordinada".[25] ¿Qué significa dicha caracterización? Como éstos "renovados" son en su mayoría dentistas sociales habrá que suponer que emplean las palabras en su correcta acepción.

El objetivo coherente connota la idea de que tienen coherencia y ésta significa "conexión, relación o unión de unas cosas con otras". Pragmática es un adjetivo relativo al pragmatismo, el que "es un método filosófico, divulgado principalmente por el psicólogo estadounidense William James, según el cual, el único criterio válido para juzgar de la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa, se ha de fundar en sus efectos prácticos". Coordinada es, por último, un adjetivo inherente a la acción de coordinar, que significa "cooperación armónica" entre diversas instituciones, personas y cosas o entre partes de ellas.[26] Esta posición se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la tesis sostenida por Eduardo Frei en 1964, constituyendo un concierto que desconcierta. Esta política fue la que justificó la intervención de Estados Unidos, desde la década de los sesenta, en la vida política y militar en Chile, según consta en los documentos desclasificados en el año 2000.

Esta "vinculación" con el corazón del capitalismo mundial implica el abandono de una de las constantes del socialismo chileno, el antiimperialismo, basado en una interpretación equivocada de la evolución de dicho sistema de dominación. "En este sentido, dicen, debemos tomar en cuenta los cambios que han ocurrido en la propia sociedad estadounidense (experiencia de Vietnam y Watergate, complejización burocrática de las decisiones en política exterior, emergencia de nuevos actores no gubernamentales progresistas e influyentes, etcétera) que han tendido a crear mayores márgenes de maniobras para los países latinoamericanos".[27] Los hechos mencionados suceden en la década de los setenta, la que se singularizó, a pesar de ellos, por la más brutal emergencia de dictaduras apoyadas por Estados Unidos, entre las cuales destaca la de Pinochet y la derecha chilena.

No obstante, la ingenua interpretación de los "renovados" pudo tener alguna atingencia antes del ascenso de Reagan como resultado, precisamente, de un vuelco

[25] Documento al Pleno de Constitución del Comité Central, de 1 de octubre de 1983.

[26] *Diccionario Enciclopédico,* Madrid, Espasa-Calpe, S.A, 1979.

[27] Documento al Pleno de Constitución del Comité Central, *ibidem.*

en la opinión pública estadounidense de signo contrario al señalado por aquéllos. Pero no tenía ninguna en la década de los ochenta, cuando la política imperial se tornaba más intervencionista en América Latina, como se demostró en Cuba, con el bloqueo económico, en Granada con desembarco de "marines", en Honduras con una verdadera ocupación militar, en Nicaragua con el minado de puertos y bloqueo económico, y en El Salvador con su apoyo a gobiernos genocidas. No se trata, pues, del pasado sino de la historia reciente. Entonces, en efecto, toda la política internacional de Estados Unidos se encontraba dominada por los monopolios trasnacionales y el Pentágono, sin otra consideración que la emanada de sus intereses hegemónicos mundiales en el marco de una política de guerra y de una cultura de muerte. Esta política se remarcaría más todavía con la invasión a Panamá en 1989, para apresar a Noriega, produciendo varios miles de muertos.

Pero los "renovados" no se detienen en esta beatificación sospechosa de la política estadounidense, sino que la combinan con una satanización del papel de la Unión Soviética en América Latina que, de conocerla, haría palidecer a la Kirkpatrick. En una caricatura en blanco y negro, de puro corte maniqueísta, hacen en efecto una interpretación increíble de los hechos revolucionarios en el subcontinente. Afirman: "Para el Partido Comunista chileno, la lucha contra la dictadura militar debe darse por el camino que posibilite contribuir al cumplimiento de la estrategia del PCUS, en orden a ir creando focos de conflictos armados a través de América que necesariamente distraigan la atención y esfuerzos en el terreno político y militar de Estados Unidos".[28] No es fácil discernir en qué se diferencia esta apreciación de las opiniones de Reagan y Pinochet, pero además se olvidan que ellos mismos plantearon la lucha armada en los documentos de marzo de 1974 y de La Habana de 1975.

Por si esto fuera poco, conviene recordar también que el 18 de septiembre de 1981, todos los partidos de la Unidad Popular, conjuntamente cotí el MIR, formularon un llamado al pueblo de Chile a la lucha armada.

> El implacable empeño de la dictadura por consolidar su dominación mediante la institucionalización del terror, expresaron en su declaración dada a conocer en la ciudad de México, legitima plenamente el derecho del pueblo a la rebelión, consagrado por la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con profundo sentido de nuestra responsabilidad reinvindicamos el ejercicio del derecho inalienable del pueblo chileno, en la actual situación, a rebelarse contra la tiranía.

[28] *Ídem,*

Entre las diversas formas de lucha más adecuadas, este dramático llamado de los partidos populares comprende "expresiones de desobediencia civil, acciones directas y de propaganda armada" que también "se inscriben en el cuadro de estrategia rupturista con perspectiva insurreccional". [29] Entre los firmantes, se cuentan José Miguel Insulza y Gabriel Gaspar, en representación del MAPU Obrero Campesino, hoy secretario general de la OEA y subsecretario de guerra, y convertidos en militantes del Partido Socialista de Chile.

De acuerdo a aquel arbitrario concepto, la Unión Soviética estaría moviendo como títeres a los pueblos latinoamericanos, a través de los dedos de los partidos comunistas, para "distraer" a Estados Unidos y promover la subversión mundial. ¿No existen causas históricas, económicas, sociales y políticas que expliquen y justifiquen la rebelión (palabra que los asusta) de estos pueblos como en todas las revoluciones? Entre otras, la extracción de sus riquezas naturales, la superexplotación de los trabajadores, el genocidio, la represión de ejércitos mercenarios y la intervención militar estadounidense son manifestaciones de la asociación de las burguesías internas con las trasnacionales que todos quienes tienen la conciencia alerta pueden percibir. Pero, los "renovados" yerran en su interpretación de la política internacional comunista de la misma manera que de la imperialista, porque la Unión Soviética dio pruebas suficientes de su voluntad de negociación con Estados Unidos para preservar la paz, y los gobiernos de Cuba y Nicaragua, así como el movimiento revolucionario salvadoreño, buscaban igualmente la negociación política, pero no la entrega y el sometimiento.

La confusión es parte del juego

Esta visión internacional se proyecta a una política nacional de aproximación a la Democracia Cristiana, mediante la renuncia al desarrollo estratégico y programático de este grupo "renovado" en la perspectiva del acervo teórico y político del socialismo chileno, para asumir una posición ambigua, limitada a luchar por la "recuperación y consolidación de la democracia". Todos sus documentos oficiales conocidos preconizan la tesis de coalición con la Democracia Cristiana, convirtiéndose en el "campeón" de la Alianza Democrática en tanto concentración de fuerzas sociales y políticas de centro-derecha. Para eso, provoca la división de la izquierda

[29] "Al pueblo de Chile", publicado en la revista *Chile-América*, N° 274-75, 1981, Roma, pág. 25.

y mediatiza al propio Bloque Socialista. Es el precio que cobra la Democracia Cristiana por aceptar la alianza.

Partiendo de una concepción que entiende a la democracia como un simple sistema de representación, por encima de los conflictos de clases, postulan la conformación de una alianza de "mayoría", de la cual ellos quieren formar parte. Su fundamento es muy frágil porque no descansa ni en la identidad de intereses sociales o de objetivos programáticos (o en ambos factores), sino que sólo busca, según su declarado propósito, romper el supuesto equilibrio de fuerzas políticas existentes en Chile, de acuerdo al razonamiento de que "un sistema político que reproduzca el esquema tradicional chileno de tres tercios prácticamente de igual peso (izquierda, centro y derecha) lleva siempre a un sistema sin mayor a", situación que les preocupa porque si lo que se busca es un régimen democrático "es evidente que una democracia no puede funcionar sin mayorías".[30] Esta última conclusión parece obvia, en cierto sentido, pero no dicen que las mayorías deben ser homogéneas y no espurias. De aquí a los consensos hay sólo un paso, así como la aceptación de los enclaves autoritarios, que desvirtúan las mayorías populares, como el sistema binominal y los senadores designados.

Este planteamiento es la repetición mecánica del que expusiera el ex presidente Eduardo Frei después del "plebiscito" de 1980, y su fundamento es por demás discutible. En efecto, si se razona de acuerdo a las cifras electorales anteriores al golpe militar, no es cierto que el país se haya dividido en tercios de igual peso, toda vez que la izquierda obtuvo el 40 por ciento de los votos en la elección presidencial de 1964, el 37 por ciento en la de 1970, la mayoría absoluta (más del 50%) en la elección municipal de 1971 y el 44% en la parlamentaria de 1973. La izquierda unida no representaba, pues, un tercio, sino bastante más y, por otra parte, tampoco es cierto que el electorado no se haya pronunciado en esos años por mayoría absoluta, como quiera que lo hizo por la Democracia Cristiana en 1964 y 1965 y por la Unidad Popular en 1971.

En la década de los ochenta, después de doce años de dictadura oligárquica, no era fácil predecir cuál sería el eventual comportamiento de la ciudadanía, todavía bajo interdicción. Pero tampoco existían razones fundadas de carácter social que permitieran abonar la hipótesis de la mantención de los supuestos tres tercios, sino por el contrario más bien podría esperarse una mayoría de la izquierda unida en condiciones de normalidad política. Estas realidades objetivas ponen en duda la necesidad de este papel de guardián del sistema de representación de la democracia burguesa.

[30] Documento al Pleno del Comité Central, *ibidem.*

La lógica política de aquella formulación es, por otra parte, falsa como quiera que en muchos países del mundo funciona la democracia formal con un multipartidismo y específicamente a tres bandas en el Reino Unido, cuna de aquélla, en Perú y Uruguay, entre otros, y en ninguno las mayorías son perpetuas. En el caso de Estados Unidos, es corriente que un partido gane la Presidencia de la República y el otro la mayoría en el Congreso. Ahora, sí lo que se quiere denotar es que un gobierno fundado en una alianza partidaria de amplia mayoría preserva mejor su estabilidad frente a los golpes militares, conviene recordar que éstos no distinguen tales sutilezas, como quedó en evidencia con el derrocamiento de los gobiernos de Salvador Allende (de minoría) y de Isabel Perón (de mayoría), en la década de los setenta.

La madre del cordero es otra. Se trataba de forjar un compromiso político con la Democracia Cristiana, para facilitar lo cual se redujeron los objetivos políticos al solo restablecimiento de la democracia formal sin afectar al sistema capitalista y las exigencias externas sobre administración de la crisis económica, sin devolver al pueblo y a la nación lo que le fue arrebatado por un sistema de pillaje armado y sin juzgar los crímenes contra la humanidad y los enriquecimientos ilícitos de los asaltantes del poder y sus cómplices, aunque de vez en cuando se diga otra cosa. Este propósito se rodeó de ambigüedad y, como se vio antes, se expuso casi en los mismos términos utilizados por el MAPU. "Nuestra política de concertación se orienta más bien a generar en la sociedad chilena un nuevo bloque histórico por los cambios en la perspectiva democrática y socialista. Sabemos que en las fuerzas políticas de centro existen amplios sectores populares que están en condiciones, hoy más que nunca, de integrar ese bloque histórico".[31] ¿A qué fuerzas de centro se refieren? Por el contexto de su discurso, se deduce que se trata principalmente de la Democracia Cristiana.

Este entusiasmo febril se enfría, sin embargo, ante la terca posición de clase de este último partido, que no exhibe la más mínima modificación de su política tradicional de defensa del capitalismo y de la alianza con el gobierno estadounidense, lo que lleva a los "renovados" a reiterar, una y otra vez, su plañidera demanda. Desesperadamente dicen: "Ese partido (la Democracia Cristiana) no entiende que la profundidad de la catástrofe a la que fue conducido el país por la dictadura exige crear condiciones para conglomerar a la mayoría de la sociedad civil en un acuerdo histórico por los cambios, que rompa los entrampamientos clásicos del sistema político".[32] Los que no entienden son los "renovados", respecto de que con la Democracia

[31] *Ídem.*

32 *ídem.*

Cristiana no pueden forjarse cambios en la perspectiva socialista, no sólo por su práctica política del pasado (incluida su complicidad con el golpe militar y la fase más cruenta de la dictadura), sino porque en 1984 se dio un programa de reconstrucción capitalista, en el que persevera sin concesiones en similares lineamientos a los de su proyecto de veinte años antes, es decir, de la década de los sesenta.

Los "renovados" tienen conciencia clara de la ambigüedad de su política de alianzas, lo que reconocen expresamente en uno de sus documentos oficiales. "En lo que dice relación con muestra política de alianzas, las opiniones suelen presentar peligrosos niveles de heterogeneidad, los que se expresan en particulares visiones que orientan a veces contradictoriamente la conducta individual de los militantes y dirigentes". Hay pues, una verdadera competencia de oportunismo, con la cual confunden a la buena conciencia de los compañeros de base que los siguen, lo cual "los llevan a incorporarse indiscriminadamente en los referentes propios de nuestra actual participación o en aquéllos que surgen de otros ámbitos opositores, como el MDP".[33]

La confusa caracterización que hace dicho grupo de sus objetivos estratégicos y tácticos llevan a la honesta conclusión de que buscan su participación en un gobierno de larga duración con la Democracia Cristiana al precio de dividir al movimiento popular y a la izquierda. El documento mencionado es una pieza de antología al respecto.

> El carácter táctico que para los socialistas tiene la Alianza Democrática y la categórica reiteración de que no es una alianza para constituir un gobierno es otro elemento que aparece no suficientemente claro ni para los militantes ni para la opinión pública. La formulación de que los socialistas estamos por un pacto de gobernabilidad de la democracia o pacto constitucional aparece como un planteamiento ambiguo, que es entendido por algunos y por otros interesadamente, como una disposición de nuestra parte para establecer un pacto de gobierno democrático.[34]

La ambigüedad ya no es, pues, sólo patrimonio de la Democracia Cristiana, y tampoco basta con lamentarse de ella, sino que deben esclarecerse mediante la definición de un programa alternativo al programa de aquel partido burgués. No hay otro camino para ganar credibilidad, pero tampoco se hizo entonces ni después.

Pero los "renovados" no lo recorrerán y, si lo hacen alguna vez, será para dejar al descubierto todo su juego, identificándose también desde el punto de vista

[33] Documento para la discusión en el pleno del Comité Central, de 29 de marzo de 1984.
[34] *ídem.*

programático con su aliado principal. Esta disposición se percibe a través de su indisimulado apoyo a la negociación buscada por la Alianza Democrática con la dictadura. En este aspecto, tampoco basta con rasgarse las vestiduras ante un diálogo fracasado, mucho menos después de la carta enviada por dicha coalición, durante la presidencia de Ricardo Lagos, a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, en un acto humillante a través del cual estos sedicentes socialistas superaron las "razones éticas" que le impidieron conversar con Jarpa para hacerlo después, por escrito, con los responsables directos del genocidio, en el que sucumbieron Salvador Allende y miles de dirigentes y militantes socialistas y del movimiento popular. Ahora, no se consideraron siquiera razones estéticas para oponerse a un acto tan ordinario, en el que renunció a los objetivos contenidos en la plataforma inicial de la Alianza Democrática. ¿Tal es la forma renovada de hacer política?

La confusión es, pues, parte del juego. Se aceptan estas negociaciones así como las reiteradas declaraciones públicas de personeros de la Alianza Democrática que señalan a porfía que ésta es una coalición que aspira a gobernar a Chile, porque ese es el objetivo central de la política de los "renovados". Si no fuera así, no se divisa el sentido de la siguiente declaración:

> El partido, en todo caso, más allá de los problemas y carencias que objetivamente tiene la Alianza Democrática, debe valorizarla en el marco de su política de entendimiento con el centro político del país, cuestión esencial para poner término al régimen de Pinochet, refundar la democracia sobre bases sólidas y estables, y de constituir un bloque social y político por los cambios, que logre la transformación integral que el país requiere para salir de la postración presente.[35]

Estos objetivos no pueden lograrse sino desde el gobierno. Para ello, se busca a través de permanentes cabildeos con el embajador y los emisarios de Reagan el beneplácito de Estados Unidos, potencia imperialista que seguía apoyando a la dictadura, hasta el plebiscito de 1988.

Después de conocer las declaraciones del entonces secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Lanhorme Motley, uno se pregunta con verdadero asombro de qué hablan los "renovados" con estos mensajeros del imperialismo. Este gringo insolente hizo públicas, al finalizar un viaje a nuestro país, opiniones ofensivas para el pueblo chileno, la memoria de sus héroes y la dignidad de los partidos que sustentaron el gobierno popular. Expresó: "En 1973, el pueblo chileno rechazó una forma de gobierno que es ajena a nuestro hemisferio" (la más avanzada democracia

[35] *ídem.*

conocida en el país, que fue sustituida por una dictadura genocida), agregando que "el destino de Chile está en buenas manos", para concluir que "las democracias del mundo occidental tienen con el gobierno de Chile (con Pinochet) una deuda de gratitud por lo que hicieron en 1973", sin importarle para nada que la Asamblea de las Naciones Unidas condenara año tras año a la dictadura por sus crímenes sistemáticos.

Unidad e integración

Definida la Alianza Democrática como un acuerdo táctico, pero con todas las apariencias de un compromiso de gobierno, los renovados caracterizan al Bloque Socialista como una alianza estratégica. Si esta última coalición tuviera ese carácter, debería darse ante todo un programa, pero no lo hizo. Por el contrario, sus esquemáticos pronunciamientos son más confusos todavía que los del grupo mencionado. No hay, pues, en el Bloque Socialista ningún desarrollo de estrategia, ni siquiera de una política general clara, desde el momento en que algunos de sus sectores participan simultáneamente en la Alianza Democrática y el Bloque Socialista como si fueran la misma cosa.

Esta política carente de principios entró en franca bancarrota hasta el punto de que quienes la presentaron como la gran panacea en la lucha contra la dictadura se vieron obligados por la dura realidad a reconocer su fracaso. En un documento de comienzos de 1985 se afirma: "La política y el pacto de la Alianza Democrática (AD) tienden a agotarse. Crecientemente, un grupo de sus partidos miembros (PR, PSD, quizás la DC), tiende a abandonar los contenidos básicos de su constitución (renuncia de Pinochet, gobierno provisional, asamblea constituyente) y a aceptar la idea de una salida pactada dentro del marco constitucional de 1980".[36] Así se lavan las manos como Pilatos, sin explicar su colaboración con esa política que se "agota", como la carta a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

Colocados definitivamente en el "centro político", no se les ocurre nada más inteligente que avanzar hacia la derecha. Dice uno de sus dirigentes: "El partido planteará al resto de la oposición una nueva propuesta unitaria, en reemplazo del pacto constitucional, que queda por el momento congelado. Esta propuesta es la del Frente Civil, acuerdo que agruparía a toda la oposición en torno a objetivos mínimos e inmediatos (término del estado de sitio, libertad de prensa, retorno de exiliados, reconstrucción posterremoto, etcétera). Se considera esta propuesta como la más

[36] Documento presentado al Pleno del Interior, de abril de 1985.

realista para avanzar hacia superiores formas de unidad".[37] Estas demandas las recoge el acuerdo suscrito en el mes de agosto de 1985 por once grupos políticos, con exclusión de la izquierda.

Coherentemente con dicha perspectiva, este pequeño grupo plantea, de manera reiterativa, lo que llama "la siembra de semillas del bloque por los cambios" en dos direcciones: "impulso a los contenidos de renovación del socialismo" y "estímulo de la constitución del referente político de la derecha económica con intereses contrarios a la política económica del régimen, a fin de que su presencia y acción desplace a la Democracia Cristiana hacia la representación de su carácter de partido popular y, por lo tanto, proclive a acuerdos con el socialismo". Conforme a este último objetivo se propone, "tomando como base inicial el desarrollo del Bloque Socialista y del área social y política en que éste influye, constituir a nivel local, regional y de frentes específicos, instancias de acción común y diálogo con la Democracia Cristiana y, sí es funcional a lo anterior, con la izquierda o sectores de ella..."[38] He aquí un ejemplo de maquiavelismo vulgar.

Para realizar esta política postulan un nuevo partido robotizado, pero que ellos denominan renovado. "Lo que anhelamos es un instrumento renovado, moderno, racional, tecnificado, flexible, idóneo, conductor, combativo y que, informado en su quehacer por un profundo sentido ético, sea capaz de resolver con rapidez, eficiencia y honestidad el conjunto de los problemas políticos tanto en su interior como en el plano nacional".[39] En la era espacial, es una especie de combinación de taylorismo y cibernética. Este partido ideal se pretende alcanzar a través de la propuesta de unidad e integración, consigna que ha venido a sustituir a la de convergencia y renovación. Unidad de los socialistas "renovados" e integración de las fuerzas del Bloque Socialista en un solo partido, el nuevo Partido Socialista. Dos consignas diversionistas de una política sin destino, que tampoco fue compartida por la totalidad de sus militantes, todavía divididos en diversos grupos o sectores.

En este proceso de desfiguración ideológica del Partido Socialista de Chile participaron numerosos dirigentes, algunos de ellos de larga trayectoria y otros de reciente participación, ayudados por los remeros del MAPU. SU trabajo intelectual y orgánico se realizó en la década de los ochenta, hasta convertir al viejo partido, marxista y revolucionario, portaestandarte de la república socialista de Grove y el

[37] "Partido Socialista de Chile"', en *Italia,* Boletín N° 85. El Pleno del partido en el interior. 10-11 de abril. Milán, 20 de abril de 1985.

[38] Documento presentado al Pleno del Interior, *ibidem.*

[39] *Carta a los socialistas acerca de la unidad e integración del Socialismo Chileno.* Santiago. 1984.

gobierno popular de Allende, en un partido de colaboración burocrática en la nueva coalición de centro denominada Concertación por la Democracia. Escribieron y publicaron centenares de trabajos periodísticos, en los cuales diseñaron su pensamiento, recopilados en un libro, en dos tomos, titulado *Socialismo: 10 Años de Renovación.* En el primer volumen se cubre los años de la convergencia a la unidad socialista y en el segundo el adiós al marxismo-leninismo, como autodespedida. En esta obra de propaganda se incluyen indebidamente textos de Eugenio González y Raúl Ampuero, que no coinciden con el espíritu de la "renovación", pero se excluye a Salvador Allende, porque no encontraron nada en sus discursos y escritos que favorecieran aquel revisionismo teórico y político. En el interior del partido surgieron diversos grupos que asumieron la crítica a este revisionismo, algunos de los cuales abandonaron la organización y otros han permanecido en sus filas.

De las protestas nacionales al plebiscito

Mientras los mencionados grupos del socialismo chileno experimentaban estas contradicciones y cambios, el pueblo chileno luchaba en el interior del país. Las protestas nacionales surgieron a partir de 1982, año en el que las políticas de todo tipo de la dictadura golpearon severamente a los trabajadores, las que al acumularse sobre el sufrimiento ya experimentado por ellos, generó una nueva fuerza social. La resistencia de esta fuerza ya no se limitó a determinadas reivindicaciones, sino que alcanzó a la destrucción del sistema de dominación. Así lo expresó la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) en 1983, que dice: "Nuestro problema no es una ley más o menos, de una modificación de la existente. Se trata de un sistema completo, económico, social, cultural y político que nos tiene envueltos y comprimidos, que se contradice con nuestra idiosincracia de chilenos y de trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con armas como el terror y la represión para cada vez envolvernos más, porque nos fue impuesto a la fuerza y con engaño".[40] El movimiento de protestas nacionales fue la nueva forma de acción contra la dictadura y por la democracia, contra el modelo neoliberal fracasado y por uno nuevo que mejorara la situación de los trabajadores, que unió la lucha económica con la lucha política. El pueblo perdió el miedo y fortaleció su fuerza. El proceso duró tres años, abriendo las puertas a la negociación, en medio de las movilizaciones que

[40] Patrick Guillaude-Pierre Moutarde, *Los movimientos sociales en Chile, J973-1993,* Santiago. LOM Ediciones, 1998, pág. 140.

enfrentaron a carabineros, soldados y bandas armadas de derecha, con nuevas pérdidas en vidas.

Las protestas nacionales se promovieron a través de cortos períodos, convocadas sucesivamente por las direcciones sindicales y políticas, distinguiéndose dos etapas:

La primera comprende los años 1983-1984, durante la cual se realizaron 11 protestas nacionales. Expresa Graciela Alejandra Lúnecke: "Durante la primera etapa, las once protestas que se desarrollaron, aún cuando mostraron diferencias significativas en cuanto a su convocatoria, organización, formas de lucha y de expresión, tuvieron un denominador común: se basaban en la visión del inminente término del régimen y en la idea de su fracaso si se mantenía persistentemente la continuidad de las presiones y movilizaciones".[41] Esta etapa terminó con la paralización del 30 de octubre de 1984, que llevó a la dictadura a imponer de nuevo el estado de sitio en el mes de noviembre de 1984.

La segunda etapa de las protestas nacionales comenzó el 5 de noviembre de 1985, haciéndose más violentas, replegadas en las periferias de las ciudades, pero perdiendo asimismo su potencialidad por el abandono de los sectores medios, por lo general, de centro, que participaban en la oposición. Las jornadas de protestas, no obstante la represión, debilitaron a la dictadura y generaron diálogo entre el gobierno y la oposición, representada por la Alianza Democrática, integrada por partidos de centro-izquierda, pero dicho diálogo terminó en el fracaso.

En este mismo momento también se consolidó la separación de los caminos de la Alianza Democrática, hegemonizada por la Democracia Cristiana, y del Movimiento Democrático Popular, hegemonizado por el Partido Comunista, que preconizaba la lucha insurreccional. Entre ambas posiciones se dividían los socialistas. El sector de Altamirano, representado sucesivamente por Ricardo Nuñez y por Jorge Arrate, actuaba en la Alianza Democrática y el sector de Almeyda lo hacía en el Movimiento Democrático Popular.

Dividida así la oposición a la dictadura militar, entre la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, la primera siguió negociando con la derecha en el poder y el segundo abrió paso a la lucha armada. Para éste último, 1986 fue el año decisivo, pero esta percepción se desmoronó con la intercepción del ingreso de armas por Carrizal Bajo y el fracaso del atentado contra Pinochet. Por estas causas

[41] Graciela Alejandra Lanecke, *Violencia política en Chile 1983-1988,* Santiago, LOM Ediciones. 2000, pág. 45.

se consolidó la tesis impulsada por los negociadores de centro-izquierda de someterse a los plazos establecidos en la "constitución de la libertad", es decir, plebiscito en 1988 y, según el resultado, elecciones de presidente de la República y del Congreso Nacional en 1989.

> En síntesis, la explosión social que se produjo tras el descalabro económico llevó al régimen a captar una liberación de facto del orden político, abriendo espacio para la acción de los partidos, el que éstos aprovecharon para convertirse en poco tiempo en conductores de la disidencia. A su vez, en el mismo gobierno se produjo una ruptura del consenso interno respecto a las políticas pertinentes para enfrentar la crisis, por lo que si bien éste pudo superarla no fue inmune a la estrecha relación que se configuraba entre lo político, lo económico y social.[42]

De aquí al plebiscito de 1988, sólo hubo un camino entre la fe y el escepticismo, en el que confluyeron ambos sectores socialistas, participando en la consulta popular.

La herencia de la dictadura se transfirió al conjunto de la sociedad, debido a la derrota de aquélla en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Aquella herencia es la lápida que pesa sobre la clase trabajadora del presente y del futuro, que no se pudo superar hasta ahora. Los "dueños" de Chile trataron de burlar la voluntad popular, desconociendo los resultados electorales. El subsecretario del interior Alberto Cardemil manipuló la información del plebiscito en espera a que Pinochet alineara a la junta de los cuatro capos, pero esto no fue posible porque el gobierno estadounidense les había advertido que no los apoyaría, es decir, el "imperio" había derrocado la democracia en 1973 y la restablecía en 1988. Sin embargo, esto sólo significaría la posibilidad de elegir un presidente, ya que era una democracia muy restringida con respecto a la que llegó a desarrollarse en 1973. El dictador estaba furioso porque sus sirvientes, militares y civiles, no consolidaban el fraude previsto. Por eso, acusó a todos de traidores, después de tratar en vano de comprometer a los comandantes en jefe en el desconocimiento de la victoria popular. Pidió la renuncia a su gabinete y, enseguida, trató de obtener la firma de los miembros de la junta a un decreto, preparado por juristas asesores de la derecha, que concedía al dictador facultades amplias para gobernar, al margen de su constitución, que no fue aceptado por aquellos. Después de que se fueron los comandantes en jefe y el general director de carabineros, el "valiente" general Sinclair volvió a la oficina presidencial, se cuadró y le dijo a Pinochet: ¡Su ejército está listo! Pero el dictador no podía dar un nuevo golpe, conformándose con mantener el mando por un año más,

[42] *Ibidem.* pág. 56.

según la "Constitución de la Libertad", cubriéndose con la medalla acuñada con la inscripción: "Misión cumplida".

Después del plebiscito, los dos principales sectores en los que se encontraba dividido el Partido Socialista se fusionaron, integrándose también los grupos del MAPU, uniéndose posteriormente la Izquierda Cristiana, presidida por Luis Maira. La posición del sector de Arrate, en el momento de la refundación del Partido Socialista, era clara y había sido elaborada conjuntamente con el MAPU durante mucho tiempo. Puede caracterizarse como la asimilación del pensamiento de la socialdemocracia actual, pero con la insuficiencia de fuerza necesaria para constituir una alternativa en el juego político, como sucede en muchos países de Europa y en algunos de América Latina. Esta insuficiencia de fuerza se basa en dos razones principales: la presencia de una poderosa Democracia Cristiana, que le cierra el paso a su expansión hacia el centro y la existencia de una izquierda, hoy todavía débil, pero que interpreta una larga lucha del movimiento popular. La posición que no era clara en el proceso de "refundación" es la del sector representado por Almeyda, ya que hasta hacía poco tiempo era el defensor del marxismo-leninismo (el marxismo soviético) y condenaba abiertamente el proceso de redefinición del sector "renovado".

En resumen, el nuevo Partido Socialista es un "frente" de grupos, con distintos y contradictorios pensamientos teóricos e intereses fracciónales, unidos entre sí por un pacto de gobierno de larga duración con la Democracia Cristiana, en el que actúa como su ala más moderada. En el interior de este "frente" existen legiones de distintas procedencias e idearios, pero también existe una corriente, no muy homogénea, que rescata la continuidad histórica del socialismo chileno, aunque no define con claridad sus diferencias con el sector dominante. Fuera del Partido Socialista unificado hay otras corrientes, que rechazan las concepciones de dicho frente, que tampoco son homogéneas y tienden a configurarse en dos tendencias: una que desea construir un partido nuevo y otra que todavía espera reconstruir el Partido Socialista de Chile sobre la base de su acervo histórico. En una posterior Conferencia Nacional de Organización, el partido resolvió paradójicamente sus contradicciones con el principio de que él no tiene pensamiento propio (teoría), pudiendo sus militantes sostener cualquiera, desde el liberalismo, pasando por la doctrina social de la Iglesia Católica y hasta el marxismo. La solución es original. No existe en Chile, ni en ninguna parte del mundo, otro partido que carezca de un pensamiento central que oriente su práctica política.

La presencia de católicos, provenientes de la Democracia Cristiana, en la conducción del Partido Socialista en la década de los noventa, merece unas palabras en esta breve lectura de su historia. Esta influencia católica, particularmente de la doctrina social de la Iglesia, se hizo manifiesta con motivo de la publicación de la en-

cíclica del Papa Juan Pablo Segundo, titulada *Centesimus Annus,* saludada en todo el mundo capitalista con el mismo entusiasmo de los socialistas "renovados" de Chile. Nunca un documento de la Iglesia se había expresado con el mismo lenguaje e ideología del sistema dominante. Es la glorificación del capitalismo, en un mensaje para quien "triunfó", que ordena a los demás seguir aquel ejemplo. La culpa de la pobreza es del pobre y no del rico. La encíclica reafirma la propiedad privada de los poderosos (porque los pobres no la poseen) y vuelve a elogiar al mercado como regulador de la economía. Ignora totalmente la posición manifestada por Pablo VI: "... El capitalismo es perverso porque tiene el lucro como motor..." La Iglesia piensa y actúa como centro-derecha y hace alianzas con las potencias. Bendice una situación injusta e ignora la realidad de los pueblos explotados.

Los primeros cuatro capítulos fueron escritos por la "Iglesia triunfalista" europea, basados en los principios del capitalismo que consolidó el sistema de mercado. El documento moraliza al capitalismo por la coyuntura de la crisis del socialismo y de la victoria de la "guerra justa" de Bush contra Irak (con miles de muertos en una semana). Con la derrota del socialismo, dice la encíclica, resalta el capitalismo, no el capitalismo salvaje, que es practicado fuera de Europa, en los países subordinados, sino el capitalismo disciplinado (desarrollado). Sin embargo, frente a la situación de capitalismo salvaje existe otra alternativa: el propio capitalismo domesticado, humanizado (que también ha sido recomendado en Chile). En la parte final (las últimas cinco páginas), el Papa reproduce el "sueño cristiano", es decir, lo que debería ser una sociedad más justa. Todo lo anterior no lo digo yo, sino Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, en el momento de abandonar los hábitos religiosos, después de sufrir el castigo más grave y cruel para un predicador: la pena del silencio.

Por mi parte, quiero recordar a los socialistas que esta posición no es nueva en la Iglesia Católica. Hace más de cien años, después de medio siglo de publicado el *Manifiesto Comunista* en 1848, se dio a conocer por el Papa León XIII la encíclica *Rerum Novarum* (1891), que ahora se conmemora, en la que se refirió a los obreros, reiterando además su ataque contra el socialismo, del que ya se había ocupado en la encíclica *Quod Apostilice Numeris* (1878). Esta iglesia, que desde el siglo v de la era cristiana fue adoptada por el Imperio Romano, siempre ha estado a favor de los que detentan el poder y la riqueza, aunque de su seno han surgido movimientos revolucionarios, como "Cristianos por el socialismo" y las "comunidades cristianas de base", en las últimas décadas de este siglo xx. El más reciente es la Teología de la Liberación, que reconoce al marxismo como método científico de interpretación de la realidad.

El fin de la historia, sin embargo, no ha llegado. El resultado de ella depende exclusivamente de los socialistas: o nos sometemos a una ruptura artificial de esa historia o rescatamos el legado teórico-político de más de medio siglo de lucha popular y la memoria de nuestros mártires. La decisión es clara y nuestra. El pasado es lo único cierto hoy, porque el país continúa rigiéndose por la herencia de la dictadura. No se puede comprender el presente ignorando el pasado. El pasado no sólo forma parte del presente, sino también del futuro. Por eso, carece de lógica la afirmación de un ministro (Enrique Correa) de que la revolución pertenece al pasado, dando a entender, a contrario sensu, que la contrarrevolución es dueña del presente, porque la historia comprende todos los tiempos, naturalmente a través de largos períodos o épocas enteras. La renuncia a ese pasado que "se quiere olvidar" ha aplastado al Partido Socialista hasta el punto de que, con todo el poder que ejercen sus cúpulas, apenas logró superar el 8% del voto popular en las elecciones municipales de 1992, estagnándose en los siguientes comicios en torno al 10%, después de haber representado el "viejo" partido más del 22% en las elecciones municipales de 1971 y más del 18% en las parlamentarias de 1973, con todo el desgaste de su lucha contra la conspiración.

Los principios y valores del socialismo chileno superan al Partido Socialista (renovado) y están vivos en la conciencia colectiva porque pertenecen al pueblo. Ellos deben ser revisados, a la luz de los acontecimientos que ha vivido el mundo en los últimos años. No cabe duda. Para eso, los fundadores del Partido Socialista fueron realmente clarividentes cuando establecieron en la Declaración de Principios de 1933 que el nuevo partido aceptaba el marxismo como método de interpretación de la realidad, enriquecido y rectificado por los aportes del constante devenir social. La verdadera renovación no la inventaron, pues, los llamados "renovados", que se inspiran en los principios del cristianismo, que datan de hace dos mil años, sino que la previeron los fundadores del socialismo chileno. Esta renovación significa determinar por los socialistas (no por los católicos y liberales) qué sigue teniendo valor y qué ha resultado falso en la teoría social del marxismo y sobre esa base redefínir el programa del Partido Socialista, para ponerse al día respecto a la problemática que afecta a los trabajadores. La burguesía tiene sus propios partidos, ¿Por qué no deben hacer lo mismo los asalariados? En esta tarea nada tienen que hacer los "barones", cada uno en su feudo, que predominan en este partido de gobierno.

Síntesis y conclusiones

Los actuales dueños de Chile

Desde el golpe militar de 1973 y la dictadura consiguiente, se han generado diversos grupos económicos, a partir de los existentes con anterioridad, todos los cuales están asociados con el capital extranjero, y son los dueños de Chile. El economista Hugo Fazio publicó en 1997 un libro titulado *Mapa actual de la extrema riqueza.* Esta obra, dice Jacobo Shatán en el prólogo, ofrece el conocimiento actualizado sobre "quiénes son los dueños de la mayor parte del patrimonio de Chile, cómo llegaron a serlo y cuáles han sido las características del proceso que les permitió alcanzar una posición de control casi absoluto sobre los recursos nacionales y sobre los mecanismos de funcionamiento de una economía en la que se autorreproduce dicho control casi a perpetuidad". En ese libro se presentan los cambios producidos en el dominio de la economía, después de los 20 años transcurridos desde que Fernando Dahse publicara su Mapa de la extrema riqueza, "cómo han crecido los principales grupos económicos nacionales, sus imbricaciones con el capital extranjero, las interconexiones entre empresas, holdings y grupos". Se anticipa en señalar las inmensas utilidades que logran las grandes empresas sin repartir nada entre sus trabajadores.

Este enorme poder económico presenta una maraña de relaciones entre los detentores del gran capital, es un mundo oculto, con "un laberinto de cavernas subterráneas que se entrecruzan nuevamente, encerrando entre sus innumerables brazos la esencia del poder real que domina en Chile en esta era del capitalismo neoliberal". El más claro ejemplo de este mundo oculto es el reciente caso de INVERLINK, (empresa financiera privada) en el que el empresario Monasterio robó cien millones de dólares a la CORFO, (Corporación de Fomento de la Producción) presidida por el

yerno del presidente de la República, y hoy se encuentra libre, con lo robado fuera del país y sin que la CORFO haya recuperado un peso.

En este mundo oscuro de los negocios, han surgido los nuevos "señores de empresas", que influyen en los gobiernos, no sólo de derecha, sino también de centro-izquierda; que contratan gestores, denominados ahora asesores, que actúan ante los gobiernos y los congresos a favor de sus empleadores. Algunos de aquellos señores aparecen, según deja constancia Fazio, en el listado de los multimillonarios de la revista *Forbes* del año 1996. "Anacleto Angelini ocupó el primer lugar entre los chilenos, con una fortuna ascendente a 2 300 millones de dólares, superando a Andrónico Luksic, Eliodoro Matte y a los primos José Said Safie y Jaime Said Demaría, cabezas de los mayores grupos constituidos al interior del país, quienes se ubicaron en los lugares séptimo, decimocuarto y vigésimo del ranking de la mencionada revista".[1] En el *ranking* de Forbes, correspondiente al año 2001, los miembros de Chile bajaron de cinco a sólo dos: las familias Luksic y Matte, saliendo de la nómina Anacleto Angelini y los primos José y Jaime Said, presentes en el ranking de 1996, no porque se empobrecieran, sino porque fueron superados por otros más ricos del mundo. Por último, Luksic aparece en el 2005 con 4 500 millones de dólares, lo que demuestra el enriquecimiento de los empresarios durante el período de transición a la democracia.

Fazio compara la situación existente en Chile, en la década de los setenta, cuando Dahse escribió su *Mapa de la extrema riqueza,* con la actual, en cuyos 20 años se sucedieron numerosos hechos que contribuyeron a la concentración económica, entre los cuales señala:

> La crisis de comienzos de los años ochenta, que significó el derrumbe de los mayores grupos existentes a ese momento, encabezados por Manuel Cruzat, Fernando Larraín y Javier Vial. La recomposición posterior de los grupos que sobrepasaron la crisis, contando con un activo apoyo estatal. El nacimiento de nuevos grupos ds: poder en los años de la dictadura. Los elevados subsidios de diferente tipo entregados a grandes intereses económicos, tanto en tiempos de Pinochet como en la década de los noventa. Los fuertes traspasos patrimoniales del sector público al privado vía privatizaciones y diferentes sistemas de subsidio. La acentuada penetración desde los ochenta del capital transnacional, preferentemente radicándose en el sector exportador y ante todo en la minería. La aplicación sistemática del modelo económico neoliberal, una de cuyas características

[1] Hugo Fazio, *Mapa actual de la extrema riqueza en Chile.* Santiago, LOM-ARCIS, primera edición, 1997, pág. 5.

> reside precisamente en su carácter fuertemente concentrador y en la desigual distribución del ingreso y de la riqueza.[2]

Todos estos hechos son expresiones del despojo de los bienes de la comunidad nacional por los asaltantes del poder.

La relación de acontecimientos es mayor, y todos ellos revisten suma importancia, por lo que no puedo dejar de reproducirlos:

> El inicio, junto con la década de los noventa, de una nueva fase de incorporación de elevados recursos externos a la economía chilena. El acceso del gran capital interno a los mercados financieros internacionales, contando con una amplia base de financiamiento extraordinariamente favorable en sus condiciones (tasas de interés, plazos y montos), que los distancia todavía más del resto del sector empresarial interno. La expansión regional de un número considerable de grupos económicos chilenos, utilizando en no pequeña medida financiamiento de los mercados internacionales y utilizando además la fuerte acumulación efectuada al interior del país. La alianza de los grupos económicos internos con capitales transnacionales y en los nuevos países en donde han penetrado su entendimiento también con intereses económicos locales. La globalización de la economía y particularmente del mercado de capitales que empuja el proceso de concentración. La nueva realidad que significa la formación de bloques regionales y las formas que adquiere la inserción de Chile en los mercados internacionales.[3]

En medio de este cúmulo de hechos sucedidos en el curso de dos décadas, se configuraron los nuevos grupos económicos y se consolidaron los más antiguos.

En su obra, Fazio ha establecido un nivel de concentración a partir de las sociedades anónimas abiertas que registraban, al finalizar 1996, los montos patrimoniales más elevados. Desde allí, determinó sus grupos controladores y sus mecanismos de expansión. En seguida, en la primera parte, destaca algunos grandes procesos presentes en la economía chilena y que influyen en la concentración de la riqueza. En la segunda parte, analiza los cinco mayores grupos económicos internos, resultantes de su investigación. En la tercera parte, se presentan los grupos controladores y las restantes empresas con patrimonios superiores a los cien mil millones de pesos, considerados medianos. En una cuarta parte, se remarca la presencia transnacional a través de empresas importantes extranjeras, que no están conformadas como sociedades anónimas abiertas, si bien esta presencia se advierte, en las partes

[2] *Ibidem*, págs. 8 y 9.
[3] *Ibidem*, pág. 9.

anteriores, en asociación con los grupos económicos internos. De este análisis se infiere, desde luego, que los grupos económicos internos, a fines de la década de los noventa, son extraordinariamente más grandes que los de la década de los setenta. "Los mayores grupos económicos han pasado en ese lapso, de patrimonios contabilizados en centenares de millones de dólares, como se registra en el libro de Dahse, a otros por miles de millones de dólares.[4]

En esta materia, Gustavo Marín y Patricio Rozas habían hecho un importante aporte en los años ochenta, en su obra 1988: *El Mapa de la extrema riqueza.* 10 años después, al remarcar la presencia de los grupos económicos multinacionales en la economía chilena en esos años. Esta situación se desarrolló, al término de la dictadura, expandiéndose en la década siguiente, con los gobiernos de la Concertación por la Democracia. El estudio de los autores mencionados mostró la mayor presencia del capital transnacional respecto a la investigación de Dahse, proceso que se intensificó en los años noventa, como los casos del Banco Santander, Nestlé y los traspasos de Bin Mahfornz, Security, Chicago Continental, Bond y Baresto, y el cambio de los intereses controladores fuera de Chile (Cárter Holt Harvey, que pasó a International Paper). Estas anotaciones las establece Fazio en su libro en referencia, a lo que debe agregarse que este proceso ha continuado hasta hoy con nuevos traspasos de empresas o asociaciones.

Por último este mismo autor señala cuáles son los cinco grupos económicos más importantes a fines del siglo xx.

> En la década de los noventa, si el análisis se efectúa sectorialmente, e grupo Angelini es el dominante en dos sectores exportadores fundamentales, la industria forestal (ante todo, la producción de celulosa) y en la de harina de pescado, además de encabezar la distribución de combustibles; el grupo Matte, también contó con una activa presencia en el negocio de la celulosa, es el más grande en la industria del papel; el grupo Luksic controla —asociado con capitales españoles— el mayor banco y se ha transformado lejos en el de mayor presencia en el sector minero, situación que se refomará al entrar en explotación, asociado con capitales japoneses, el yacimiento cuprífero Los Pelambres; el grupo Said tiene una presencia dominante en el mercado de bebidas gaseosas, asociado con Coca Cola, y en los malls; finalmente, el grupo Yuraszeck era hegemónico en el sector eléctrico, donde también hay presencia de los grupos Angelini y Matte, este último asociado con capitales transnacionales.[5]

[4] *Ibidem.*
[5] *Ibidem,* pág. 14.

Después de estos cinco grandes grupos económicos, vienen los grupos medianos, a los que no me voy a referir ahora, pero que son tratados en libro de Fazio.

Para determinar quiénes son los dueños de Chile hay que relacionar esta concentración de la propiedad y la riqueza en los grupos nacionales, con la extranjerización de la economía. En el *Mapa actual de la extrema riqueza en Chile,* al revés de los anteriores (los de los años setenta y ochenta), tienen una considerable ingerencia los capitales transnacionales, la que se ha estimado en aproximadamente 57 mil millones de dólares. Estos capitales han provenido, por orden de importancia, de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y otros países y se han concentrado especialmente en los sectores minero (cuprífero), forestal, bancario, telecomunicaciones y otros servicios. En el caso de la inversión en la minería del cobre, se han desarrollado empresas privadas que representan hoy más del 60% de la producción, reduciendo a CODELCO a poco más de un tercio de la misma. No obstante, los aportes al fisco de esta empresa del Estado son mucho mayores que los de las empresas privadas. Afirma Fazio:

> La información exacta de las ganancias e impuestos pagados por las empresas transnacionales continúa siendo, en la mayoría de los casos, un secreto celosamente guardado tanto por las empresas respectivas como, lo que es particularmente grave, por organismos oficiales, que están en condiciones de entregar, a los menos, cifras generales sobre la materia.[6]

De eso no se informa al grueso público.

Por fin, el diario El Mercurio, de Santiago, de 20 octubre del año 2004, comentó que la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) había establecido que las diez principales compañías privadas del cobre del país tendrán una rentabilidad promedio sobre su patrimonio (ROE) de 25% en el período 2004-2010, ubicándose entre los sectores más rentables de Chile, considerando la variación del precio del cobre en ese período. De acuerdo a dicho cálculo, las utilidades de la minería privada, en el lapso mencionado, alcanzarán a 22.000 millones de dólares y los ingresos por ventas aproximadamente a 56 000 millones de la misma moneda. Por su parte, el Congreso Minero (la patronal de esta industria) cuestionó la oportunidad en que se entregó aquella información, es decir, cuando está por plantearse de nuevo la discusión sobre el *royalty* minero, después del rechazo del respectivo proyecto de ley en el senado en el mes de agosto de 2004.

[6] *¡bidem,* pág. 308

El informe de COCHILCO establece, además, que estas empresas privadas pagaron en el año 2003 la suma de 262 millones de dólares, en impuestos, los que se elevarán entre 800 y 900 millones de esa moneda en el 2004, lo que se explica tanto por los altos precios alcanzados por este mineral como también porque está llegando a su fin el período de depreciación acelerada de que disfruta la mayoría de estas empresas, que les ha permitido postergan el pago de impuestos, a pesar de tener utilidades contables. De acuerdo a lo anterior, COCHILCO considera que, entre 2004 y 2010, dichas empresas pagarán 800 millones de dólares anuales.

Al respecto, conviene recordar la doctrina Allende aplicada en el proceso de nacionalización del cobre que dedujo de las indemnizaciones las rentabilidades excesivas obtenidas por las grandes empresas desde 1955. Éstas eran el resultado de la comparación entre la rentabilidad de la matriz en el conjunto de sus operaciones internacionales con las obtenidas en Chile que, igual que ahora, eran mucho mayores. El gobierno popular determinó entonces, de acuerdo a la reforma constitucional, que la rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los valores libros y, por lo tanto, el Contralor General, al calcular las indemnizaciones, debió deducir las utilidades excesivas, con lo que legalmente no les correspondió pago alguno por quedar con un saldo negativo, excepto la Compañía Exótica, S.A. y la Compañía Andina, S.A.

Todo lo anterior fue revertido por la dictadura militar, a pesar de haber sido un proceso absolutamente constitucional, pagándoles millonadas indemnizaciones a las empresas de la gran minería del cobre. Además, generó condiciones "jurídicas", mediante decretos-leyes, para que de nuevo capitales privados transnacionales desplacen a CODELCO, que había pasado a controlar toda la gran minería del cobre, convirtiéndolo sólo en el dueño de un tercio de la producción, apoderándose como "botín de guerra" del 10 % del valor de sus exportaciones anuales para gastos militares. La nueva gran minería privada de cobre es la que logrará una rentabilidad excesiva de 25% anual, no habiendo pagado impuestos significativos. Este retroceso colonial se ha promovido por la derecha y las Fuerzas Armadas, sin que la Concertación de Partidos por la Democracia, durante 15 años de gobierno, haya introducido el menor cambio.

Desde la segunda mitad de los años noventa se registra una alta concentración de la propiedad territorial en manos de capitales radicados en el sector minero y forestal preferentemente. El patrimonio forestal, por ejemplo, de as cuatro principales empresas que tienen recursos boscosos propios alcanzan un valor aproximado de 2 940 millones de dólares (valoración de las propias empresas). Además, estas sociedades concentran, en conjunto, dos tercios de las plantaciones forestales exis-

tentes en el país. Ellas son Celulosa Arauco y Forestal Cholguán, controladas por el grupo Angelini, la primera en sociedad en partes iguales con International Paper CMPC, el principal conglomerado del grupo Matte, y Forestal Terranova, perteneciente al grupo suizo Schmidheiny. Un porcentaje apreciable del territorio nacional está en los hechos en manos de capitales extranjeros, habiéndose desplazado precisamente a muchos pequeños propietarios de pueblos originarios y a beneficiarios de la reforma agraria, cuyas parcelas han sido dedicadas a la plantación de bosques en vez de la producción de alimentos, porque la primera es más rentable para sus propietarios.

Con la derogación de la legislación sobre reforma agraria, durante la dictadura, la propiedad territorial ya no tiene límites en Chile, ni para nacionales ni para extranjeros. Algunos de estos últimos han comprado enormes extensiones de tierra, que cubren comunas enteras y gran parte de provincias, en Chiloé, Palena, Aysén y Magallanes, que ahora preocupa a las Fuerzas Armadas y a ciertos sectores de la derecha por poner límites racionales a la propiedad territorial, después de haber sido ellos quienes generaron esta situación. Douglas Tompkin y su esposa han adquirido más de 400 mil hectáreas de bosques nativos en el sur de Chile, para preservarlas como parque natural, lo que ha provocado una larga discusión pública, con la crítica de las propias Fuerzas Armadas y la presentación de un proyecto de ley para limitar la propiedad territorial por partes de comunas y de provincias, no por hectáreas. No es ésta una iniciativa del gobierno, sino de algunos parlamentarios.

En el año 2004, se puso en descubierto una nueva operación de esta misma naturaleza. En el gobierno de las Fuerzas Armadas se vendió a precio irrisorio una enorme extensión de tierras, la hacienda fiscal de Río Cóndor, en Tierra del Fuego, de 272 000 hectáreas, a la firma Forestal Trillium, que trató de explotar sus maderas, pero que después quebró, pasando dichas tierras a Goldman Sacks. Ésta a su vez las traspasó a la agencia conservacionista mundial Wildlife Conservation Society del Zoo de Bronx, Nueva York. Esta empresa está comprometida en otras operaciones en la Patagonia desde los años sesenta, lo que se observa con sospecha, tanto en Argentina como en Chile, por la intervención de la mano de personajes de origen judío, que ya tienen aquí más tierras que la del Estado de Israel.

Por último, el infatigable empresario y político chileno Sebastián Piñera compró al norteamericano Jeremías Henderson una propiedad de 120 mil hectáreas, ubicada en Quellón, que representa el 15% de la superficie de la Isla Grande de Chiloé. ¿Cuánto pagó el estadounidense por esas tierras? No lo sé, pero no realizó inversiones para preservarlas, mejorarlas y aprovecharlas económicamente, en bien del país. Piñera, ha anunciado que construirá senderos de acceso, preservará la natura-

leza en este paraíso con bosques milenarios de alerces, cipreses y otras maderas nobles, reforestará con bosque nativo para reemplazar el destruido hasta ahora, y convertirlo en un parque abierto al turismo aventura, exploraciones y *camping* de sus visitantes. Ésta es, por lo menos, una iniciativa de un chileno que ha revelado un espíritu emprendedor notable, que lo ha convertido, como Henry Ford, en un nuevo multimillonario en pocos años.

Son dueños de Chile también los acreedores de la deuda externa. En los últimos 27 años, la deuda experimentó un aumento exorbitante hasta el punto que ésta, que en 1973 alcanzaba a 3 300 millones de dólares (deuda de toda la historia de Chile), se elevó a 18 242 millones en 1992. De esta suma, considerada entonces exagerada, se dio un salto gigantesco en ocho años, pasando a 36 846 millones de dólares en el 2000. De este valor, el 74%, es decir, 27 297 millones, corresponde al sector privado no financiero. Lo único positivo es que la deuda pública se redujo, en el último período, de 9 623 millones de dólares a 5 522 millones de igual moneda. El economista Felipe Larraín advierte: "El que el origen de la deuda sea privado y no público, podría tenernos más tranquilos, pero ese mismo argumento se usaba antes de la crisis de 1982".[7] En ese entonces, no obstante el carácter privado de la deuda, en los momentos de las renegociaciones, los acreedores exigieron el aval del Estado, lo que la dictadura, por cierto, otorgó. La deuda de corto plazo asciende a 6 547 millones de dólares, lo que corresponde aproximadamente a 45% de las reservas internacionales. ¿Cuánto se paga anualmente en intereses y amortización? Ese es otro dato que no se hace público.

En este reparto de Chile, la concentración económica en los medios de comunicación es también notable.

> Los grandes consorcios controladores de periódicos son sólo dos: el grupo económico Edwards, cuya presencia se produce en los diarios de la cadena El Mercurio, y COPESA, hegemonizada por el grupo ECSA, encabezado por el ex ministro de hacienda de Pinochet, Sergio de Castro. En la televisión por cable hay sólo dos oligopolios: el grupo Claro (asociado con capitales transnacionales) y Telefónica de España, por un lado, y el grupo Luksic, en alianza también con consorcios estadounidenses, por el otro. En la televisión abierta, a los tradicionales canales del Estado y universitarios se han agregado otros, hegemonizados por grandes intereses privados internos y regionales. Megavisión es controlado por el grupo Claro y el consorcio mexicano Televisa; Chilevisión lo es por el grupo venezolano Cisneros, como resultado de la privatización de ese canal por la

[7] Diario *El Mercurio.* Santiago. 23 de octubre de 2001.

> Universidad de Chile; la Red, a su turno, lo es por los grupos Copesa e Infisa y, finalmente, Rock & Pop, por la radio Cooperativa, vinculada a la Democracia Cristiana... En la radio el grado de diversificación es mayor, destacando la presencia de radio Cooperativa.[8]

Estos dueños de Chile son lo que "informan" lo que quieren o conviene a sus intereses. Al finalizar el año 2004, Sebastián Pinera compró Chilevisión al grupo venezolano Cisneros.

Las empresas multinacionales con inversiones en Chile han aumentado considerablemente su participación en el mercado nacional, pasando de 15% de las ventas que tenían en 1991 a 35% en el año 2001, según lo informó la consultora Booz, Alien & Hamilton. Para calcular esos porcentajes se consideraron las 500 empresas más grandes en términos de ventas y a partir de ahí se vio el ingreso que estaba en manos de las empresas multinacionales. Mayor es aún la participación en los mercados de Argentina y Brasil. El diario chileno El Mercurio informa:

> Estas cifras fueron entregadas en el marco de un seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibánez titulado "¿Quién dominará a Latinoamérica?", en que se analizaron las perspectivas que tienen las trasnacionales en el mercado latinoamericano, así como también las posibilidades de las empresas locales ante el nuevo escenario mundial.

En este último caso, la consultora señaló que las empresas locales tienen tres vías o caminos: la internacionalización de sus actividades, la venta de sus inversiones y el desarrollo sólo en el ámbito local.[9]

El apoderamiento de las "joyas estratégicas"

Los países latinoamericanos sufren periódicamente crisis financieras, por causas externas e internas, siendo las más graves después de 1930, las experimentadas entre 1994 y 2001, en México, Brasil y Argentina. La economía chilena tuvo sus peores caídas en 1975 y 1982, durante la dictadura, y en menor medida entre los años 1999 y 2001, con alto desempleo. Jalife-Rahme, integrante de la Academia de Ciencias de Nueva York, explica que existe un común denominador en las recientes crisis financieras y sus efectos, llámense vodka, dragón o samba, a las que habría que

[8] *Ibidem.* pág. 427.
[9] Diario *El Mercurio,* Santiago. 22 de noviembre de 2001.

agregar las crisis tequila y tango. Según este analista, los ganadores son siempre las transnacionales, que siguen seis pasos sucesivos para apropiarse de las "joyas estratégicas" (las riquezas naturales y el trabajo de su de los países subdesarrollados):

1. Las firmas calificadoras, como Standard and Poor's y Moody's lanzan la voz de alerta sobre la desestabilización de los mercados.
2. Los megaespeculadores como George Soros y otros empiezan a operar desde los paraísos fiscales para crear incertidumbre y caos financiero.
3. Fuga masiva de capitales, devaluación y pérdida de liquidez.
4. Rescate del Fondo Monetario Internacional, que impone al país afectado medidas que profundizan la crisis y lo llevan a privatizar sus empresas estratégicas.
5. Privatización general y el posterior traslado de dominio de empresas privadas nacionales a trasnacionales.
6. Reingreso de capitales especulativos que compran a precio de remate los activos tecnoindustriales y las materias primas estratégicas del país rescatado.[10]
   Los hilos de este juego de títeres los mueve la mano invisible del "mercado". ¿No es acaso ésta una fotografía de la economía chilena a partir del 11 de septiembre de 1973 o de la situación de Argentina en el año 2001?

No va a faltar quien discuta el poder de los megaespeculadores financieros, pero el diario *El Mercurio,* de Santiago, se encarga, sin quererlo, de confirmar ese poder en una entrevista a uno de ellos, en visita a Chile. "Soros, dice este diario, el gran especulador, convertido en un 'mito viviente', hace y deshace en los mercados mundiales con sólo dar una orden". Con la misma soltura con que critica el modelo capitalista actual, asegura que no invertiría en acciones de compañías chilenas ni en las de ningún otro país emergente. "Pero lo hace en períodos de crisis, como en Argentina, donde ha hecho 'inversiones ventajosas', compradas con 'un interesante descuento'". Este "genio" del capitalismo internacional expresa en la mencionada entrevista: "La globalización tiene un gran potencial positivo, porque ha acelerado la creación de riqueza a través del mundo, pero también ha incrementado las desigualdades entre las personas (más correcto sería decir las clases) y entre los países ricos y pobres".[11]

[10] Jalife-Rahme, entrevista en el diario *La Jornada.* México. 24 de Octubre de 2000.
[11] George Soros, entrevista en el diario *El Mercurio,* Santiago, 31 de Diciembre de 2000.

Según Jalife-Rahme, "los derivados y los fondos de cobertura *(hedge funds)* son las principales armas de la guerra financiera emprendida por los países ricos para apoderarse de las riquezas estratégicas de las naciones en desarrollo". Menciona un estudio de la CEPAL, "según el cual, a raíz del efecto tequila, 62% de las acciones de empresas mexicanas pasaron a manos extranjeras, principalmente estadounidenses, y si a eso se agrega la paulatina desnacionalización de activos de la banca, la proporción podría llegar a 75 por ciento". Jalife-Rahme sostiene que no es lo mismo ser globalizador que estar globalizado. "La globalización, sostiene, sólo ha beneficiado al Grupo de los Siete países más industrializados (G-7), que junto con el Grupo de Basilea (Holanda, Suiza, Suecia y Bélgica) concentran 92% de las 500 transnacionales que cada año aparecen en la lista de la revista *Fortune..."''* ¿Quiénes son ios perdedores? Los trabajadores, la clase obrera. No obstante, él está convencido de que la globalización no es irreversible ni inevitable, sino más bien que va en retirada, ya no se pueden reunir en Seattle, en Praga, en Washington, en Davos ni en Seúl, (ni tampoco en Genova), porque el 90% de los habitantes del mundo están en contra del modelo.[12] Aquellos son, en suma, los secretos de la globalización, de lo que nunca hablan sus cómplices y encubridores.

En el caso de Chile sucedió lo mismo a través de la dictadura de la derecha, durante la cual se privatizaron casi todas las grandes empresas del Estado, es decir, de la inversión pública lograda durante el siglo XX. Este traspaso se hizo de manera irregular, en sigilo y sin fiscalización alguna, porque se había suprimido el Congreso Nacional y tanto la Contraloría General de la República como los tribunales de justicia habían perdido su independencia. Los precios de venta fueron irrisorios, de menos de la mitad de sus valores reales, y los beneficiarios principales, el dictador y sus familiares, los ministros del gobierno y los altos ejecutivos de las empresas estatales, es decir, éstos se privatizaron conjuntamente con ellas. Después del saqueo de aquellos grupos del patrimonio público, lo enajenaron en parte o, a veces, totalmente a los inversionistas extranjeros, obteniendo grandes utilidades. Éstos últimos se apoderaron también, posteriormente, de otros activos nacionales con cargo a la deuda externa.

Estrategia contra pobreza y desigualdad

Desde el punto de vista socialista, el economista Pedro Vuskovic Bravo se interesó durante muchos años por el estudio del problema de la pobreza. Antes de su muerte

[12] Jalife-Rahme, *ibidem.*

publicó un libro titulado *Pobreza y desigualdad en América Latina,* en 1993, y dejó inédito otro sobre el mismo tema en Chile. En el primero, parte de la interrelación entre pobreza y desigualdad, sobre cuya base procura encontrar un diagnóstico idóneo que viabilizara las estrategias más eficaces para afrontar este problema social, signo degradante del capitalismo. Expresa Vuskovic:

> Entre los grandes desafíos que marcaron en América Latina los inicios de la última década del siglo, el más trascendente corresponde a las altas proporciones de la población en situaciones de pobreza o franca indigencia, con grave déficit en la atención de necesidades básicas que definen su nivel esencial de vida, y la relación de ellos con los grados de desigualdad económica y social entre distintos estratos sociales.

Él mismo destacó la magnitud de este problema, señalando que la CEPAL había informado que, en el año 1989, existían más de 180 millones de latinoamericanos en condiciones de pobreza —70 millones más que en 1970— equivalentes a 44% de la población total, y de ellos 88 millones en condiciones de franca indigencia.[13] Estas cifras son dramáticas.

En el marco de América Latina, Chile destacaba por el alto nivel de pobreza, a pesar de ser uno de los países de mayor desarrollo relativo en la región, con 5.5 millones de personas pobres, equivalente al 45% de su población, en tanto que el 25% estaba en condiciones de indigencia. "Los niveles y las formas de vida, dice, se diferencian a tal grado entre el 'mundo de los ricos' y el 'mundo de los pobres', que se reconoce a la sociedad chilena como escindida, con una desintegración social interna que constituye uno de los mayores desafíos del futuro". La pobreza, tanto en Chile como en los demás países latinoamericanos, proyectaba consecuencias sociales y políticas de graves repercusiones en la mantención de la democracia, por sus efectos en la convivencia nacional y la reacción de los sectores desprotegidos.

No obstante, en la década de los ochenta del siglo xx, duran:e los gobiernos de Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos, la propaganda de derecha difundió en Chile un discurso triunfalista. Gabriel Salazar lo define muy bien.

> Se ha dado como un hecho definitivo el triunfo mundial del modelo liberal, el abandono del sistema fordista de relaciones industriales, la crisis de la socialdemocracia, el fracaso del Estado Benefactor, el colapso de los "grandes relatos de liberación", el desgaste caótico de los sueños populistas del pasado y, aún, el fin de la historia. Que, por todo

[13] Pedro Vuskovic. *Pobreza y desigualdad en América Latina,* México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pág. 11.

> ello, el modelo liberal no sólo ha derrotado al socialismo real, sino que —más relevantemente— ha impuesto la "regulación automática del mercado" por sobre todo otro tipo de regulación de la sociedad, incluso sobre la misma política y el mismo Estado. Con lo cual podría decirse que los pobres del mundo se han quedado sin ningún proyecto histórico ni viable ni propio. Ni siquiera con el proyecto de algún aliado.[14]

Esos años constituyen la década perdida de los pobres. El presidente de Francia Francois Mitterrand fue categórico en su crítica al sistema, al sostener en la Cumbre Social de Copenhague, en 1995, que "todo el credo (liberal) se resume en pocas palabras: desregulación, desmantelamiento de las conquistas sociales, olvido del papel del Estado... Está de moda criticar al Estado. Sin embargo, olvidan que éste es el cimiento de las sociedades democráticas".[15]

En este marco mundial, de dominio absoluto del neoliberalismo, la situación social de los países latinoamericanos continuó su retroceso durante la década de los noventa. "Chile aparece, aún para organismos tan conservadores como el Banco Mundial, como uno de los países con peor distribución del ingreso entre 65 países estudiados por el Banco. Chile se encuentra entre los 7 países con peor distribución del ingreso de estos 65, junto con Brasil, Guatemala, África del Sur, Kenia, Zimbawe y Panamá. El informe del Banco Mundial destacó que el 20% de la población de mayores ingresos capta en Chile el 61% del ingreso nacional. En los hechos el modelo se ha desarrollado en beneficio de una pequeña minoría que no excede el 10% de la población y que absorbe por sí sola el 42% del ingreso y esto a pesar de la fuerte tasa de crecimiento de la economía durante un período prolongado".[16] Esta situación social no ha mejorado hasta ahora, por encima de las incorrectas mediciones de los organismos estatales.

Una particular influencia tuvo en la pobreza la "deuda social", generada durante el período de ajuste a la crisis de la deuda externa en la década de los ochenta. El concepto de deuda social fue expuesto por primera vez por el presidente de Brasil, Tancredo Neves, en noviembre de 1984, quien destacó entonces el significado, la cuantía y la manera de enfrentarla en su país. Expresó entonces:

[14] Gabriel Salazar, *Los pobres, los intelectuales y el poder Chile 1989-95,* Santiago, PAS, 1995, pág. 31.

[15] Francois Mitterrand citado por Gabriel Salazar, *¡bidem.*

[16] Jaques Chonchol, *¿Hacia dónde nos lleva la globalización?,* Santiago, LOM Ediciones, 1999, pág. 88.

> Las políticas aplicadas profundizaron el problema de la pobreza que afecta a un 40 por ciento de los latinoamericanos, y deterioraron la situación del empleo y de los ingresos del trabajo. Con ello, al rezago histórico se suma una deuda social que se contrae en estos años con los pobres y con aquellos que dependen fundamentalmente de su propio trabajo para obtener ingresos. Así, a la deuda social de largo plazo se agrega el deterioro reciente, lo que hace impostergable enfrentarla. Dada la magnitud de la misma y las restricciones económicas por la que atraviesa la región, se ha optado en este trabajo por abordar solamente el aumento de la deuda social durante esta década.[17]

Por eso, se pone especial énfasis en el concepto de deuda social de corto plazo, originada en el exceso de recursos captados por determinados "deudores sociales" en detrimento del resto de la sociedad o "acreedores sociales" durante aquella década.

La deuda externa, que constituyó fuente de enriquecimiento para un pequeño sector de la sociedad latinoamericana por la utilización de ella en juegos financieros, se convirtió al mismo tiempo en un instrumento de explotación de los países endeudados por los países ricos, situación que hizo crisis en los años ochenta. El Estado tuvo que aceptar el papel de aval de los grandes deudores privados, cuando llegó la hora de las renegociaciones, a pesar de que aquéllos y los gobiernos, particularmente las dictaduras, habían sostenido con anterioridad que les únicos responsables de sus deudas eran los sectores privados. Pero el Estado no se limitó a esa función, sino que aplicó políticas de "ajustes", consistentes en severas restricciones en el gasto publico, especialmente en el área social, así como en materia salarial. Estas políticas de corte recesivo gravitaron drásticamente en los trabajadores, reduciendo su nivel de vida.

La crisis de la deuda externa acentuó, por las políticas de ajuste, la deuda social. ¿Cuánto significa ésta?

> "La deuda social corresponde a la cantidad de recursos necesarios para superar la pobreza y para alcanzar un grado de equidad distributiva socialmente aceptable. Se considera en situación de pobreza a aquellos grupos familiares que no cuentan con un ingreso mayor o igual a la línea de pobreza." Tal es la definición de PREAL. Este mismo estudio precisa aún más este concepto. "Para facilitar la definición de po íticas factibles de ser implementadas y sus resultados evaluados en el corto plazo, se distingue entre dos partes de la deuda social: la de largo plazo y la de corto plazo. Esta última deuda se

[17] PREAL. *Deuda social* Santiago, tercera edición, 1989. pág. vn.

> refiere al incremento que ella ha experimentado en un período reciente (la crisis de la deuda externa, por ejemplo), cuyos efectos se quiera contrarrestar en el corto o mediano plazo, (un periodo gubernamental o el resto de él, por ejemplo)."[18]

Pero llegaron los críticos de la deuda social al gobierno, como en Chile, y no hicieron nada por corregir esta situación, ni siquiera por el Presidente Lagos, quien trabajó en el PREAL.

Un mundo sin redistribución de ingresos

Al finalizar el siglo xx, la situación de los pobres, lejos de mejorar, empeoró notoriamente. En efecto, el panorama social de 1999-2000, presentado por la CEPAL sobre esta región no puede ser más negativo. El documento anual establece que los nuevos estratos de ocupación, proyectados a partir de la década de los noventa, no han favorecido ni la movilidad social ni la distribución del ingreso; la precariedad en el empleo se ha generalizado más, así como ha crecido la vulnerabilidad social. A esta situación habría que agregar las desigualdades sociales y la consiguiente pobreza, en el marco de una débil democracia participativa, señalada por el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En Chile, el capitalismo presenta, en el año 2000, dentro de una tasa de desocupación de dos dígitos, un aumento de la precariedad de empleo, lo que se expresa en el incremento del porcentaje de asalariados con ocupaciones temporales, sin contrato de trabajo y carentes de un nivel adecuado de seguridad social. Éstas son las formas de explotación del trabajo humano en la "nueva economía", que es el nuevo disfraz del capitalismo, que exige cada vez menos regulaciones y más flexibilidad en las empresas y el trabajo, respectivamente.

Chile muestra, en el contexto de América Latina, estas formas de precariedad del empleo con notoriedad. Cada vez más, aumentó el porcentaje, en relación con la totalidad de los asalariados, de los que carecen de trabajo, los que no tienen contrato y los que no disponen de seguridad social. Esta precariedad se manifiesta también en los sectores medios y medios bajos que se vieron obligados a cubrir con sus propios ingresos total o parcialmente su acceso a los servicios sociales, debido a la supresión o disminución de la cobertura y calidad de las atenciones que prestaba el

[18] *Ibidem.*

sector público. De otra parte, la reestructuración productiva, derivada particularmente de las privatizaciones de las empresas públicas determinó la cesantía de muchos trabajadores adultos. Este proceso desvalorizó el capital humano, porque los desplazados, con experiencia laboral, no fueron ocupados en otras actividades de productividad equivalente, sino que oscilaron entre el desempleo abierto y la incorporación en sectores de baja productividad, por el fracaso de las políticas gubernativas de capacitación y reubicación.

En América Latina y el Caribe existían, según la CEPAL, en el año 2000, 220 millones de seres humanos que vivían en la pobreza, es decir, 45% de la población total, de los cuales 117 millones de ellos eran niños y adolescentes menores de 20 años. La desocupación, por su parte, oscilaba de acuerdo a las recesiones periódicas de la economía latinoamericana. En Chile se produjeron crisis profundas en los años setenta y ochenta (1975 y 1982) y en los noventa (1998 y 1999), con un aumento enorme del desempleo, de 20% y 12% respectivamente. El estudio de la CEPAL sostiene que la nueva estrategia ocupacional de fines de los noventa no ha favorecido la movilidad social, ni tampoco ha mejorado la distribución del ingreso. Este organismo de Naciones Unidas clasifica a la población de América Latina y, por lo tanto, de Chile entre categorías, según los ingresos originados en el trabajo, comparados con la línea de pobreza. Esta corresponde al umbral de ingreso, bajo el cual una persona es considerada pobre, que se calcula de acuerdo al costo de una canasta básica de bienes y servicios. En Chile, esta canasta para una persona correspondía en noviembre de 1998 a 38 mil pesos. Estas tres categorías son las siguientes:

1. El estrato superior, constituido por directores, gerentes, altos funcionarios públicos y privados, profesionales de mayor nivel de calificación, comprende aproximadamente 10% de la totalidad de la ocupación, con un ingreso medio equivalente a 14 líneas de pobreza.
2. El estrato intermedio, formado por profesionales de menor nivel educacional, técnicos y empleados administrativos, representa 14% de los ocupados, con ingresos laborales de aproximadamente 5 líneas de pobreza.
3. El estrato inferior, que comprende una variedad de ocupaciones, del cual forman parte tres de cada cuatro trabajadores. El ingreso medio en este segmento es menor a 4 líneas de pobreza, el que es estimado como insuficiente para mantener fuera de la pobreza a una familia de tamaño y composición típicas.
4. Esta estructura ocupacional se ha consolidado en los países de América Latina y el Caribe, manteniendo la desigualdad en la distribución de ingresos,

agravada por las recesiones económicas y por las limitaciones del acceso a los servicios sociales.[19]

Esta misma realidad social de América Latina fue analizada en el Informe sobre Desarrollo Humano del año 2000, de las Naciones Unidas; de 28 de junio de ese año, en el que se expuso que las desigualdades socioeconómicas, la pobreza y la precariedad de la democracia participativa constituyen el "talón de Aquiles" de esta región del mundo. Por lo mismo, los desafíos en el siglo xxi, para avanzar en el respeto de los derechos humanos, son la superación de las desigualdades y la pobreza, así como la promoción de la democracia. El índice de desarrollo humano (IDH) se elabora tomando en consideración, entre otros factores, la expectativa de vida al nacer, la tasa de alfabetización entre adultos, las inscripciones combinadas en ios niveles de primaria, secundaria y terciaria de la enseñanza y el producto bruto por habitante. Los países de América Latina —entre ellos Chile— tienen como exigencia la reducción de los altos niveles de desigualdad y el mejoramiento del sistema democrático, hoy débil e imperfecto. En el caso de Chile, vergonzoso por la constitución de 1980.

Estos países están lejos de una verdadera erradicación de la pobreza, que afecta a casi la mitad de los 450 millones de habitantes y que incide tanto en el desarrollo humano como en los derechos humanos. Los países mejor evaluados son Argentina, Chile y Uruguay. Chile presenta 75.1 años de expectativa de vida al nacer, 95.4% de tasa de alfabetización de adultos y el PIB *per cápita* de 4 800 dólares. Este estudio concluye que los mencionados índices "no pueden reflejar ¡a complejidad total del concepto de desarrollo humano, pero sí brindan un cuadro poderoso de las condiciones básicas de vida de los pueblos. De esta manera pueden informar al público, generar debates y concentrar las políticas en los problemas".[20] Si la pobreza constituye el problema más grave en América Latina, éste acentúa su gravedad en el campo; si se compara a sus habitantes con los de las áreas urbanas.

La pobreza ha aumentado entre 10 y 20% en la población rural de nuestra región, en los últimos años del siglo xx, alcanzando a 90 millones. Esta conclusión la estableció Informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En efecto, entre 1998 y 1999, empeoraron las condiciones sociales y económicas de las personas que viven en la llamada "pobreza dura" o estructural, así como también las de aquellas personas que sólo algunas veces son catalogadas bajo los ingresos mínimos para asegurar su subsistencia. En el campo, "los más pobres entre los pobres del

[19] CEPAL, 'informe anual (1999-200)". en *Diario El Mercurio,* Santiago, 18 de agosto de 2000.
[20] 'informe sobre Desarrollo Humano'", en *Diario El Mercurio.* Santiago. 29 de junio de 2000.

mundo" son los grupos indígenas, las mujeres y los sectores marginales. Este informe destaca que, entre 1990 y 1997, la población campesina que vivía en condiciones de pobreza o extrema pobreza se ha mantenido casi constante en América Latina, "independiente de los niveles de crecimiento económico ocurrido en los países de la región durante la década pasada". La crisis de los años 1998-2000 agravó el problema, tanto en las ciudades como en el campo, aumentando la pobreza.

La pobreza campesina es más acuciante en países centroamericanos, como Guatemala, Honduras y Nicaragua, en los cuales casi siete de cada diez hogares tienen ingresos y condiciones de vida que no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Condiciones parecidas se registran en Bolivia, Salvador, Paraguay y Perú, donde la pobreza se concentra principalmente en el campo, situación que se contrapone a lo que sucede en Argentina, Uruguay y Chile, países donde la pobreza es mayoritariamente urbana. En efecto, según la CEPAL, menos de 30% de las familias del campo de aquellos países del Cono Sur se encuentran bajo la línea de la pobreza. En América Latina, 33% de los pobres rurales son indígenas, 27% pequeños agricultores y el resto agricultores de subsistencia y campesinos sin tierra, que laboran en tareas estacionales. Ellos viven en regiones como el nordeste de Brasil, el norte de México y las regiones montañosas de este país, el noroeste de Venezuela, las costas del Pacífico y áreas centrales de Honduras y Nicaragua, el norte (Je Chile y Perú, el altiplano boliviano y peruano.[21]

La situación social en América Latina descrita de la manera más somera es el producto del capitalismo, como quiera que ella marca la brecha de la equidad, que se expresa también en otros términos en los países desarrollados. En efecto, José Antonio Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, se ha referido a esta temática.

> De hecho, como lo prueba un conjunto cada vez más amplio de investigaciones, durante el último cuarto del siglo xx se ampliaron las desigualdades económicas a nivel mundial a un ritmo quizás sin antecedentes. Esto ha ocurrido tanto entre países industrializados como en vías de desarrollo, que concentran el 57% de la población mundial, en tanto que sólo ha mejorado para el 16% de la población del mundo y para el resto se ha mantenido inalterada. Esta desigualdad es quizás la mejor comprobación de que el mercado por sí solo, no garantiza que los beneficios de su desarrollo dinámico lleguen a todos.[22]

[21] "Informe dei Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)", en *Dicrio El Mercurio.* Santiago. 29 de noviembre de 2000.

[22] José Antonio Ocampo. Secretario Ejecutivo de la CEPAL. "La Brecha de la Equidad". *Diario El Mercurio.* Santiago, 29 de mayo de 2000.

Nadie podría hacer un balance más objetivo sobre esta materia que el secretario ejecutivo de la CEPAL.

En la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague, celebrada en 1995, se consideró que la equidad sólo se puede alcanzar cuando se aborda como resultado de propósitos colectivos, dirigidos a asegurar una distribución equitativa del producto del desarrollo, así como atender los riesgos y tensiones que enfrenta la mayoría social de la población. Los riesgos negativos (desempleo, volatilidad de los ingresos, enfermedades, vejez) y los riesgos positivos (cambios tecnológicos y oportunidades que generan los mercados globales). El informe dado a conocer por la CEPAL a la Segunda Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre Social, efectuada en Santiago, del 15 al 17 de mayo del 2000, expuso que en los tres temas centrales de la mencionada cumbre (pobreza, empleo e integración social) los resultados en nuestra región no fueron, en general, positivos. "La proporción de hogares pobres se redujo de 41% en 1990 a 36% en 1997, aunque sin una disminución absoluta del número de pobres, que se mantuvo en torno a 200 millones de personas."[23] Pero este proceso de mejoramiento se detuvo y retrocedió, por la crisis reciente, de 1998 a 1999, creciendo el número de pobres a 224 millones al finalizar el siglo XX.

Dentro de este marco general, en la mayoría de los países de la región, incluso Chile, se produjo un aumento del desempleo abierto, un deterioro de la calidad de los empleos y una combinación de ambos. Así lo afirma José Antonio Ocampo.

> De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, siete de cada diez puestos de trabajo se han generado en ocupaciones informales. El aumento de la brecha entre las remuneraciones de los trabajadores con educación universitaria y el resto, que ha sido generalizado en la región, ha agregado tensiones en el marco de una tendencia distributiva adversa de largo plazo en muchos países.[24]

Esta conclusión tiene, por cierto, un valor relativo. En materia de integración social, los resultados no son, por cierto, muy positivos, como lo señala el alto funcionario de la CEPAL, cuando expresa que:

> no son alentadores los resultados que siguen revelando serios problemas de integración social, especialmente la persistencia de los núcleos de pobreza dura, los fenómenos de discriminación étnica, la segregación residencial y el incremento de diversas manifestaciones de violencia.

23 *ídem.*
24 *ídem.*

El informe de la CEPAL es categórico en señalar la necesidad urgente de solucionar los problemas derivados de la profunda división de las sociedades latinoamericanas en clases desiguales y antagónicas.

> La superación de las abrumadoras condiciones de inequidad que nos ubican como la región más desigual del mundo, es un imperativo ético, político y económico. En este sentido, el primer objetivo debe seguir siendo la superación de las amplias, insostenibles e indeseables condiciones de pobreza en las que hoy sigue viviendo casi el 40% de los latinoamericanos y caribeños.[25]

Todo esto es el resultado del sistema capitalista y no tiene otra solución que el cambio del modelo neoliberal imperante en el poder. De otro modo, continuará concentrándose la riqueza en pocas manos y extendiéndose la pobreza en la inmensa mayoría de la sociedad.

Las desigualdades sociales y la pobreza consiguiente han traído consigo el hambre, como un problema vigente, afectando a un inmenso sector de la humanidad. En efecto, el siglo XX ha concluido, según Informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sobre el estado de inseguridad alimenticia en el mundo, con el récord de que sufren hambre 792 millones de personas en países en desarrollo y otros 34 millones en naciones industrializadas. En términos absolutos, la mayor parte de los que sufren hambre se encuentran en el sur de Asia, en tanto que en términos relativos y de crecimiento de este flagelo el punto más crítico es el África subsahariana. América Latina y el Caribe no salen tampoco bien parados, particularmente países con problemas graves, como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bolivia. En los demás países de esta región, el hambre se presenta en áreas interiores. En el caso de Chile, puede señalarse que está por encima de la media, en virtud de los avances producidos después del término de la dictadura de la derecha.

Nuevo marco interpretativo

Para afrontar el problema de la pobreza, Pedro Vuskovic definió un nuevo marco interpretativo a través de diversas proposiciones interrelacionadas que, a su vez, contradicen el sentido profundo del capitalismo, concentrador de la riqueza en los dueños del gran capital.

25 *ídem.*

a) La primera se inserta en la relación de desarrollo y pobreza, concluyendo que América Latina tiene actualmente la potencialidad económica suficiente como para erradicar la extrema pobreza y asegurar a todos los trabajadores un nivel básico de vida.

> Las causas de que esa potencialidad no esté aprovechándose plenamente se originan en los propios patrones de desarrollo económico prevalecientes, en la subordinación de los intereses generales a los de determinadas fracciones del capital y, en medida muy grande, a las transferencias de ingresos al exterior de cuotas considerables del esfuerzo productivo interno, no sólo por la vía de remesas de ganancias e intereses, sino también por las relaciones de precios del intercambio, subvaloración de los productos primarios y de exportación en general.[26]

Este primer criterio supone, en consecuencia, el cambio de las políticas que condicionan el desarrollo, para hacer que éste gravite en la reducción de una pobreza tan extendida.

b) La segunda proposición sostiene que la pobreza actual en la región no es sólo producto de una herencia no superada en un largo tiempo, sino aquella se reproduce y amplifica en un proceso de mayor empobrecimiento.

> Estos antecedentes Sugieren la importancia de registrar no sólo las situaciones actuales de pobreza, sino también las de empobrecimiento, ya que esta última condición, agrega en la percepción y en el significado de la pobreza, factores adicionales de orden económico y social. En efecto, es posible que los "empobrecidos" —sin duda es el caso de países como Argentina y Chile— hereden de ese pasado algunas formas de aliviar su pobreza actual (por ejemplo, al disponer de equipamiento domiciliario adquirido con anterioridad); pero su descenso a la condición de pobres puede afectarlos más en el plano subjetivo, e incluso significar mayores daños psicológicos que a quienes no han podido superar una pobreza de siempre.[27]

Es la situación de los explotados, sin esperanza, que no perciben como superar su situación de menor valía y de subordinación social, adquiriendo la psicología del esclavo, del sometido, que vota por su patrón esclavista y se acostumbra a sobrevivir de la caridad pública o privada.

c) La tercera proposición se refiere a la relación entre pobreza y desigualdad, que se origina en la brecha que separa a una pequeña minoría de la socie-

:<1 Pedro Vuskovic. *ibidem*. págs. 22 y 23.

27 *Ibidem*. págs. 23 y 24.

dad, que tiene un alto nivel de vida, de la inmensa mayoría que vive en la pobreza e, incluso, en la indigencia.

> La desigualdad se constituye así en el principal factor determinante de la pobreza, y la superación de ésta no depende sólo del crecimiento global, sino también de los términos de la distribución del ingreso y los cambios que ellos registren.[28]

Vuskovic cita al sociólogo Alain Tourenne, quien sostiene que "la principal característica de Iberoamérica es la de constituir el continente de las mayores desigualdades sociales", así como a la CEPAL, que ha sosten ido que

> las tendencias concentradoras y excluyentes del proceso económico han dado lugar en algunos países a una desigualdad tan profunda entre grupos sociales que la misma se manifiesta no sólo en el consumo (coexistencia del consumo privilegiado con el infraconsumo), sino en todas las dimensiones de la vida, dando la impresión de constituir dos mundos diferentes y superpuestos.[29]

Para remarcar esta situación, conviene señalar que el cree miento en países asiáticos, como Corea del Sur y Taiwán, no presentan estas desigualdades exageradas, porque se ha distribuido en forma más justa el ingreso, con salarios muchos más altos que en América Latina.

d) La cuarta proposición constata que los problemas de la pobreza y la desigualdad no configuran situaciones propiamente nuevas, sirio que han adquirido una intensidad y una urgencia extrema a través de las; crisis periódicas que han experimentado las economías latinoamericanas. Las crisis y las políticas aplicadas para encararlas han agravado las desigualdades y la pobreza, al tiempo que han revertido las relaciones que se dieron en fases anteriores del desarrollo entre la concentración del ingreso y la dinámica del crecimiento.

> La experiencia desembocó, sin embargo, en la constatación de que la desigualdad, así exacerbada, constituye a su vez un obstáculo adicional para la superación de la crisis, pues genera una dinámica recesiva que no llega a ser contrarrestada por el empeño puesto en la búsqueda de nuevas fuentes de dinamismo a través de las exportaciones. Una cuestión clave para una comprensión cabal de la naturaleza misma de la crisis, que vendría a representar además, en esta fase histórica, un cambio sustancial en el signo de las relaciones entre crecimiento y distribución.[30]

[28] *Ibidem,* pág. 23
[29] *Ibidem,* pág. 24
[30] *Ibidem,* págs. 25 y 26.

En las crisis experimentadas en los países latinoamericanos en las décadas de los ochenta y noventa, si bien los factores desencadenantes fueron externos, la naturaleza esencial de ellas y sus causas de fondo, tienen que ver con aquellos límites que se estrechan, en términos de que la desigualdad, que pudo ser en una fase, condición y motor de crecimiento, pasa a constituirse en escollo fundamental para la continuidad del mismo.

e) La quinta proposición expresa que la evolución de largo plazo enseña que el tiempo, el crecimiento económico y la modernización no tienden automáticamente a resolver la pobreza ni a atenuar la desigualdad, sino más bien pueden contribuir a agudizarlas, como ha sucedido en América Latina. De acuerdo al patrón de crecimiento económico de esta región, definido por la CEPAL como concentrador y excluyente,

> las décadas de los sesenta y de los setenta registraron índices de crecimiento del producto bruto *per capita*, en muchas partes de América Latina, sustantiva y rápidamente incrementados en relación a períodos anteriores. Sin embargo, algunas de sus características determinaron que este crecimiento no fuera capaz de disminuir las desigualdades económicas y sociales. En algunos casos el dinamismo económico trajo aparejada una creciente desigualdad; los modelos tradicionales de crecimiento no pudieron disminuir la pobreza extrema, y el contingente de sectores que no acceden a la satisfacción de sus necesidades mínimas ha crecido en términos absolutos[31]

Esta experiencia ha demostrado la invalidez de la vieja concepción de primero crecer y después repartir o la política del "chorreo", sino más bien ha convencido de que se debe crecer con justicia distributiva, como lo hacen los países desarrollados y algunos emergentes.

j) La sexta proposición llama la atención acerca de las decisiones neoliberales para enfrentar las crisis en torno a la búsqueda de nuevos impulsos para retomar alguna dinámica de crecimiento y la necesidad de recuperar y preservar los "equilibrios macroeconómicos". En términos generales, en su contenido estrictamente económico, los ejes básicos de referencia de la concepción neoliberal los resume Vuskovic de la siguiente manera:

> /) constituir las exportaciones en la base fundamental de una nueva estrategia de crecimiento económico; 2) reducir drásticamente el ámbito de acción de Estado y propiciar la privatización de toda suerte de actividades productivas y servicios, entregando al mercado la función casi exclusiva de asignación de los re-

[31] *Ibidem,* págs. 26 y 27.

> cursos, y *3)* con referencia a la política económica de corto plazo, jerarquizar por encima de todo el mantenimiento de los "equilibrios macroeconómicos", según se expresan en las cuentas fiscales y externas y en las tasas de inflación.

El mismo Vuskovic agrega que no son líneas estratégicas nuevas:

> Estuvieron presentes en las propuestas estabilizadores que periódicamente se preconizaban en relación con esa especie de círculo maligno de fases sucesivas de crecimiento-desequilibrios financieros-estancamiento-reactivación-nuevos desequilibrios, que ha marcado a largo plazo la evolución del capitalismo latinoamericano. Y, por cierto, lo estuvieron también en los "programas de ajuste" puestos en práctica a partir de los ochenta.[12]

Lo nuevo es la exageración con que se impusieron, sin considerar los costos sociales y la pérdida de autonomía nacional.

g) La séptima proposición se proyecta hacia la realización de nuevos análisis sobre el desarrollo en todas sus dimensiones, no sometiéndose dócilmente a las explicaciones interesadas y simples de que el crecimiento traerá consigo la solución de la pobreza:

> No se puede seguir dando la espalda a una realidad en la que las estrategias y las políticas en práctica han aumentado el desempleo, deteriorando gravemente los salarios reales y empujando cuotas crecientes de población activa a situaciones de supervivencia precaria en la economía "informal". Como lo ha escrito la CE PAL, a lo largo de los años ochenta, la región "deshizo parte de lo andado por la senda del desarrollo" al transferir mano de obra desde actividades de mayor productividad e ingreso a otras de productividad e ingresos más bajos.[13]

Todo ello en el marco, por una parte, de la reducción de la actividad del Estado, desamparando a una importante esfera de la actividad productiva nacional y limitando el acceso a la salud, la educación y la vivienda y, por la otra, de la privatización que ha acelerado los procesos de 'extranjerización" de las economías nacionales, llevados al límite con las operaciones de conversión de deuda externa en inversiones extranjeras directas, que no han representado nuevas fuentes de trabajo, sino sólo la transferencia de empresas ya existentes.

[12] *Ibiclcin.* págs. 29 \ 30.
[13] *Ibidein.* págs. 32.

En suma, sobre un nuevo marco interpretativo, Pedro Vuskovic expresa:

> En efecto, la presencia inocultable de la intensidad y extensión de la pobreza en América Latina está abriendo reconsideraciones muy profundas del pensamiento predominante con respecto a la esencia misma del desarrollo económico y social, al futuro de la región, al significado y requisitos de la aspiración democrática, de las relaciones entre economía y política, de las opciones estratégicas del desarrollo económico, de la relación entre crecimiento y distribución, de los términos de la "inserción exterior" de las economías latinoamericanas; en última instancia, de la viabilidad misma—económica y política— de la continuidad del modo de desarrollo capitalista que la viene caracterizando desde largo tiempo atrás. Una discusión latente, que no consigue acallar el avasallamiento ideológico del "neoliberalismo" hasta hace poco supuestamente triunfante.[34]

Hoy está más claro que es falsa la premisa de que la pobreza es una condición "natural" propia del subdesarrollo y que no tiene solución sino en crecimiento económico, acompañado de algunas medidas específicas destinadas a mitigar sus efectos más extremos. Por el contrario, una concepción más justa considera la estrecha relación entre pobreza y desigualdad y, por lo tanto, debe atacarse a ésta última mediante propuestas de acción, tanto en perspectiva estratégica como en políticas de aplicación inmediata. Tal es, desde el punto de vista teórico, la misión del socialismo como quiera que tiene su origen en esta exigencia.

Cuando algunos socialistas chilenos "renovados" destacan el portentoso desarrollo alcanzado por el capitalismo, generalizan sus méritos como si se hubieran diseminado a todo el mundo, ignorando la desigualdad social y la pobreza que trae consigo, como signo central el sistema. Pero ellos, en una combinación de ignorancia y silenciamiento cómplice, proyectan la imagen de un mundo feliz, en vez de señalar cómo un sector pequeño de la sociedad concentra en sus manos la riqueza generada por una inmensa mayoría, sea que se mire como regiones atrasadas (coloniales y semicoloniales) o como clases explotadas en cada una de ellas. Sobran los estudios al respecto. Entre muchos, uno muy reciente señala que

> no ha existido en la historia, ni siquiera en la época colonial, una bipolaridad tan extrema del mundo... no ha existido en la historia de la humanidad un período en que se dé tanta concentración, centralización e intensidad del capital en tan pocas naciones y en tan minoritaria población. El Grupo de los Siete, más Rusia que está siendo considerada como parte de este grupo, y el capitalismo central, con unos 800 millones de habitantes, controlan y hegemonizan más poder económico, tecnológico, informático y militar, que

[34] *ídem.*

> el resto de los aproximadamente 4 mil millones viviendo en Asia, África, Europa oriental y América Latina, donde también una exclusiva minoría participa de las relaciones y estándar de vida del Norte [...] Los países subdesarrollados, con un 75% de la población mundial, apenas alcanzan al 19% del PIB mundial, habiendo reducido su participación del 23% hace una década...[35]

Es esta concentración de la riqueza en pocas manos, en una clase dominante, la que explica la lucha de clases asi como fundamenta el origen y desarrollo del socialismo, como proyecto de reconstrucción social.

No es el propósito de este libro entrar en el análisis de las raíces históricas de la desigualdad. Sólo puede señalar que "en América Latina el desarrollo capitalista y su modernización no favorecieron cambios positivos en las paulas de distribución de los frutos del crecimiento económico; por el contrario, generaron y se apoyaron en una suerte de 'dinámica de desigualdad', que la acentúa constantemente y tiende a preservarla y reproducirla". La desigualdad, según Vuskovic, tiene en América Latina las siguientes fuentes:

1. La concentración del ingreso y las tendencias regresivas en su distribución, han sido parte y resultado de la concentración y las alteraciones en la distribución del capital y en la propiedad de los medios de producción.
2. El aumento de las tasas de desempleo abierto y la traslación masiva de fuentes de trabajo desde el empleo "formal" al empleo "informal".
3. Las grandes disparidades en la dotación de capital por persona ocupada en las actividades productivas, que a su vez determinan diferenc aciones muy marcadas en la productividad y el ingreso entre distintos estratos y segmentos del sistema económico.

Vuskovic concluye: "En suma, la extrema inequidad en la distribución del ingreso que caracteriza a las sociedades latinoamericanas es expresión de este complejo de fuentes de desigualdad". He aquí uno de los aportes de Pedro Vuskovic en el estudio de la pobreza en nuestra región.

[35] Xavier Gorostiaga. *América Latina Frente a los desafios globales, Cuadernos de Nuestra América,* vol. III, No. 17, La Habana, Centro de Estudios de América, julio-diciembre, 1991.

Urbanización y miseria

La pobreza y la desigualdad tienen relación con el proceso de urbanización, que afecta a las sociedades contemporáneas, cuyo impacto repercute en mayor medida en aquellas que se encuentran en vías de desarrollo. En efecto, mientras disminuye su ritmo en las naciones avanzadas, aumenta su velocidad en los países en vías de desarrollo, que representan la inmensa mayoría de la población de la tierra. A la cabeza de este vasto movimiento de reacomodo de la población se encuentra América Latina. Este proceso comprende la concentración masiva de la población y de las actividades socioeconómicas en las ciudades, trayendo consigo profundas transformaciones en la vida colectiva. Éstas generan a su vez muchos y variados problemas que afectan a todos los seres humanos, si bien con mayor intensidad a los sectores de más bajos ingresos, tanto del campo como de la ciudad, dentro del desarrollo capitalista.

El proceso de urbanización comenzó con la migración masiva del ámbito rural al ámbito urbano, pero como expresión del desarrollo de la economía, trajo asociados numerosos fenómenos que constituyen una dramática realidad en nuestro tiempo: desempleo, ignorancia, insalubridad, explosión demográfica, subalimentación o hambre. Comprende, además, otros fenómenos que, no obstante ser desencadenados por ella, adquieren su propia dinámica. Los más notorios son la proliferación de cinturones de miseria, las posesiones ilegales, la generación de viviendas insalubres, la contaminación ambiental, la especulación con la tierra, el encarecimiento e insuficiencia de los servicios públicos, la deformación cultural, el incremento de la criminalidad. En suma, la degradación de la convivencia humana.

La toma de conciencia de este proceso, con sus implicaciones en el desarrollo de las sociedades, ha sido lenta en América Latina, pero cada día adquiere mayor extensión y profundidad. La primera reacción surgió en el campo de los estudios académicos especializados, habiéndose desarrollado, a partir de la década de los cincuenta del siglo xx, centros de investigación y docencia. Esta proliferación de estudios permitió recopilar una gran cantidad de información, realizar análisis generales y particularizados e intentar interpretaciones globales del proceso. Las publicaciones de estos centros, así como la preocupación sobre los mismos fenómenos por los organismos especializados de las Naciones Unidas, durante varias décadas, influyeron a su vez en la determinación de una segunda reacción: la de los gobiernos de los países de esta área geográfica.[16]

[36] Luis Unikel y Andrés Necochea. *Desarrollo urbano y regional en América Latina, selección de trabajos,* México. Fondo de Cultura Económica, 1975.

Las raíces sociales y sus implicaciones políticas han acentuado hoy la búsqueda de soluciones a dicho proceso, por encima de la concepción puramente técnica, predominante en sociedades industriales con un alto desarrollo. De este modo, empezó a ponerse el énfasis en las peculiaridades de los países subdesarrollados, enfocando los problemas de la urbanización con una orientación distinta, que fundamentalmente indagó las causas más profundas subyacentes en el subsuelo de cada sociedad. No obstante, esta interpretación tiene presente la estrecha interrelación existente entre ambos tipos de sociedades. En este marco, América Latina no es una entidad aislada sino que, por el contrario, su desarrollo histórico arranca de relaciones de dependencia surgidas con el proceso de colonización en el siglo xvI y se prolongó con la transnacionalización de su economía en el siglo xx. La urbanización se concibe así como parte de un proceso de dimensión mundial.

Esta relación se presenta en el contexto de países ricos y países pobres que cobra, por la acción de la economía contemporánea, las característ cas de países hegemónicos y países dependientes. Se empezó a superar así la tendencia a exhibir las relaciones entre campo y ciudad con abstracción de las relaciones de clase o con la simulación de dos sistemas, uno urbano y otro rural, que se contraponen. Esta última concepción no permite visualizar la dominación de clase que explica las diversas formas asumidas por las relaciones entre la ciudad y el campo.[37] El desarrollo económico repercute en el plano social de distintos modos. Desde el punto de vista de este análisis lo hace en forma de transformaciones demográficas, que se expresan en aceleración del crecimiento de la población y en migraciones internas. Éstas trajeron consigo la "marginalidad", que supone la no integración a la economía capitalista, así como la no participación en organizaciones sociales y en el usufructo de ciertos servicios urbanos.

En América Latina, las corrientes migratorias del medio rural empobrecido buscan en las ciudades, como centros de empleo, una alternativa de subsistencia física. Esto no es fácil en economías dependientes y atrasadas, sujetas a la explotación, en forma parecida a la que sufrieron los países coloniales del pasado y en que se fundó el desarrollo de las naciones hoy avanzadas. La urbanización es, por eso, en nuestra región un movimiento desesperado de las masas campesinas tras una solución, por precaria que sea, a su existencia golpeada por el desempleo y carente de los mínimos de bienestar social. Durante el siglo xx, la primacía urbana está íntimamente relacionada con el desarrollo económico. El crecimiento de ciudades prin-

[17] Paul Singer, *Economía política de la urbanización.* México. Siglo XXI, 1975.

cipales se ha debido a ventajas de localización de actividades económicas—industriales y comerciales— como de disponibilidad de infraestructura y servicios, abundancia de mano de obra, mercado de bienes, comunicaciones adecuadas y proximidad al centro del sistema político-administrativo. Esta situación tiende a revertirse a través de la aplicación de programas nacionales de desarrollo regional, con el objeto de lograr, entre otros fines, la desconcentración de población y de actividades económicas.

La capacidad de las grandes ciudades en cuanto a acomodar en su núcleo central o próximo la nueva población alcanzó sus límites hace ya tiempo. Sus áreas urbanas se expanden, por lo general, más rápidamente que su propia población, pues las zonas periféricas tienen una densidad relativamente baja y manchas de tierra todavía no ocupada. En este sentido, la redistribución de su población adquiere diversas formas según el estrato social de que se trate, pudiéndose distinguir dos grandes sectores:

1. Los grupos de mayores ingresos, situados en las partes centrales de las ciudades, se desplazan a lo largo de los ejes circulatorios principales que recorren en dirección radial, buscando ventajas climáticas o de paisaje, así como innovaciones modernistas.
2. Los grupos de ingresos medios y bajos, situados en áreas densamente pobladas y no lejos del centro de las ciudades, emprenden el camino hacia la periferia al crecer por la acción de los migrantes.

La situación de los grupos de menores ingresos es particularmente crítica. Ello se debe a varias causas, entre las cuales cabe señalar la pobreza y bajos niveles de vivienda que sufren, las características geográficas de las ciudades y la limitada capacidad de los gobiernos para proporcionales habitaciones a bajo costo. Estas circunstancias los han impulsado a levantar diversos tipos de poblaciones precarias en zonas periféricas, con distintos orígenes:

a) Ocupación de terrenos baldíos, ubicados por lo general junto a las vías férreas, a márgenes de ríos, a laderas de colinas o cerros, muchas veces unidos a basurales, donde viven los estratos más pobres.
b) Ocupación como cuidadores de terrenos de propiedades de grupos de altos ingresos, durante el tiempo que éstos se demoran en construir sus propias viviendas.

c) Ocupación organizada de terrenos de propiedad pública o privada, con la decisión de luchar por obtener el reconocimiento legal de ella, así como servicios urbanos.
d) Ocupación por compra de lotes de propiedad privada, previa subdivisión, en las cuales las construcciones provisorias serán sustituidas más tarde por definitivas.
e) Ocupación a través de programas públicos que procuran aliviar la escasez de viviendas o erradicar poblaciones marginales, mediante la entrega de casas "mínimas" o de terrenos y de ayuda para a autoconstrucción.[38]

La mayoría de estas grandes ciudades han adoptado planes reguladores centrados en los aspectos espaciales del crecimiento urbano. Por lo general, presentan como defectos sus excesivas preocupaciones arquitectónicas estáticas, con olvido de los factores determinantes del proceso global de desarrollo urbano, como son los niveles de ingreso y las características sociales de los grupos familiares, la propiedad, los precios del suelo urbano y la estructura del poder político. Han sido, por eso, ineficaces para ordenar la expansión de los asentamientos humanos y asegurar la satisfacción de las necesidades en infraestructura, equipamiento, transporte público y servicios sociales. El desarrollo de las ciudades determina nuevas necesidades y a la vez limita su capacidad para atenderlas, lo que genera movimientos sociales urbanos, que pueden clasificarse en cuatro tipos:

a) Movimientos generados por el deterioro de las condiciones de vida.
b) Movimientos generados por la amenaza que representa la acción urbanística.
c) Movimientos generados por el déficit constante de vivienda o servicios.
d) Movimientos de oposición a la política urbana del gobierna.[39]

Los conflictos urbanos constituyen la respuesta de la comunidad a las contradicciones generadas por el propio desarrollo urbano. Ellos tienen una capacidad desigual de inducir sobre la correlación de fuerzas entre las clases y, por consiguiente, de modificar la estructura urbana. Esta se entiende como la forma específica de organización social del territorio en tanto unidad que asegura la concentración de las actividades productivas y los medios de consumo colectivo. La falta de

vivienda continúa siendo el principal problema con que se enfrentan los sectores obreros, en tanto que los sectores medios se ven relativamente más afectados por cuestiones del "entorno urbano" de la vivienda y los servicios. Pero si se consideran otros mínimos de bienestar, como los medios de transporte urbano, la atención de la salud, los servicios educacionales, etcétera, se pueden extraer algunas conclusiones adicionales, entre las cuales cabe destacar:

a) El desfase entre las necesidades y el equipamiento tiende a crecer.
b) La relación de este equipamiento reproduce la estructura urbana y aumenta la desigualdad social.
c) La presión social consigue el aumento del nivel cuantitativo del equipamiento.

La planificación como respuesta

El proceso de urbanización y su secuela interminable de problemas ha recibido como respuesta fundamental de parte de los gobiernos la planificación. Hacia fines de los años cincuenta y comienzos de la década siguiente del siglo xx, la mayoría de los países latinoamericanos experimentaban ya un fuerte y sostenido crecimiento demográfico que, para el periodo de 1950-1960, representaba una tasa media anual de 2.8%, considerada la mayor del mundo. Este crecimiento demográfico, como ya se ha visto, iba acompañado del éxodo rural, surgido en períodos anteriores y prolongados hasta el presente, que exhibía también cifras alarmantes. Este proceso, de causas complejas, trajo consigo consecuencias variadas sobre la situación económica de la región. Entre otras, destaca la necesidad de asignar ingentes recursos al mejoramiento de la infraestructura urbana, el equipamiento y los servicios sociales. Por la magnitud de las inversiones requeridas, este propósito no se logró en la medida deseada, incrementándose los déficit en viviendas urbanas, electrificación, agua potable, alcantarillado, drenaje y otros servicios. Esta misma población requiere, ante todo, la disminución del desempleo que, en las áreas urbanas, cobra caracteres críticos en lo que concierne a la capacidad de consumo de las masas y a la generación de tensiones sociales.

En este contexto económico-social emergió la planificación como respuesta del Estado. No obstante, ella es también una exigencia de los organismos internacionales, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Esta exigencia se hace perentoria con la formulación del programa general de desarrollo económico de América Latina, conocido como Alianza para el Progreso. Esta planificación formal pasó a ser así como un trámite más o menos obligatorio, para acceder al crédito externo y,

por consiguiente, corresponde inicialmente a los objetivos de dicho programa. De acuerdo a este marco de planificación macroeconómica y disgregada en sectores, los asentamientos humanos son objeto de preocupación desde la estructura administrativa tradicional, con una clara tendencia a limitar su campo de acción a la vivienda y sus elementos conexos de infraestructura, equipamiento y servicios. Esta modalidad de planificación resulta ineficaz ante la magnitud de las demandas sociales, especialmente por la insuficiencia de inversiones.

Es en la década de los setenta cuando la problemática de los asentamientos humanos recibe una más completa atención a nivel mundial. En efecto, a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, celebrada en Vancouver, en 1976, fue establecido dos años después el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH) o Centro Hábitat. con sede en Nairobi. Simultáneamente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) formó en su subsede de México, un programa destinado a apoyar a los gobiernos latinoamericanos y caribeños en materia de asentamientos humanos. La urgencia de esta problemática obligó a la CEPAL con anterioridad a la formulación del aludido programa, a preocuparse de su estudio. En esta actividad, se ha contado con la colaboración de los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente (PNUD y PNUMA), así corno de algunos gobiernos, particularmente el de México, y con la participación del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

Los gobiernos se deciden, por fin, a delimitar con claridad el concepto de los asentamientos humanos, ubicándolos definitivamente como parte inseparable del proceso de desarrollo global de cada una de las naciones. La relación existente entre los problemas abordados, así como los resultados conseguidos en los países latinoamericanos, sitúa la preocupación por dichos problemas en el ámbito político. La propia CEPAL así lo ha reconocido. "El más importante desafío está constituido, expresa, por este conjunto de problemas sociales relacionados entre sí que afectan a considerables sectores de la población nacional"'. Estos problemas son, entre otros:

> la inequitativa distribución del ingreso, la pobreza crítica, el subempleo y las malas condiciones laborales, la baja marginalización de vastos sectores urbanos y rurales, el analfabetismo y el semianalfabetismo generalizado, que inciden negativamente en la capacidad de la fuerza de trabajo y la limitada participación de la mayoría de la población en

la toma de decisiones a todos los niveles en el proceso de desarrollo económico, social y humano.[40]

Debe recordarse que América Latina estuvo sometida entonces a dictaduras criminales del gran capital.

Como ya se ha dicho, existe una relación de causa a efecto entre el subdesarrollo, o el desarrollo insuficiente, y los problemas de los asentamientos humanos, situación a cuya solución ha procurado contribuir la planificación. En este contexto, según lo señala Sergio Soza, hay tres factores generales que, en la región latinoamericana, generan los graves problemas mencionados. El primero es la extensión de la pobreza. Desde los años setenta se estimaba que la pobreza afectaba a no menos del 40% de la población. Como esta situación ha tendido a acentuarse en las últimas décadas, puede considerarse que ella significa que cuatro de cada diez familias no pueden resolver sus necesidades de habitación ni contribuir a atender los requerimientos comunitarios, tanto en el campo como en la ciudad. La planificación resultará, por eso, un instrumento inútil si no se encara la erradicación de la pobreza. El segundo es la urbanización acelerada. Las altas y sostenidas tasas de urbanización forman parte de las características destacadas del subdesarrollo latinoamericano. Este proceso se explica principalmente por los fuertes incrementos poblacionales ocurridos en el curso del siglo xx y por los constantes y crecientes flujos de población rural hacia las ciudades, sin haber dispuesto de recursos financieros suficientes para su atención. El tercero es la estructura urbana concentrada, proceso conformador de pocas grandes ciudades, con la acentuación progresiva del divorcio entre la localización de los recursos naturales y de la población, y entre ésta y los centros de producción.[41]

Lucha por la protección del medio ambiente

En el curso del último tercio del siglo xx, las sociedades humanas se han ocupado del medio ambiente en que viven y promueven su desarrollo económico y social. Como se ha repetido tantas veces, el medio ambiente es el habitat de los seres humanos, por lo que éstos influyen en su conservación como en su deterioro en el marco

[40] CEPAL. Programa de Acción Regional para América Latina en los años ochenta, aprobado en mayo de 1981. en Montevideo.

•" *ídem.*

del desarrollo económico y social. El sistema capitalista determina, conjuntamente con la explotación de la clase trabajadora, la destrucción sistemática del medio ambiente.

> El correlato directo de este modo de producción se refleja en los daños excesivos de las industrias contaminantes al volcar productos tóxicos y desechos no biodegradables al suelo, al aire, a los ríos y al alcantarillado, al desequilibrar el medio (la flora y la fauna), al manipular centrales nucleares como fuentes de energía, al ser los causantes de la contaminación ambiental. El crecimiento de las macro ciudades, el empobrecimiento del campo y de los campesinos, el uso irracional de abonos y pesticidas por las grandes empresas. La pobreza a la que está sometida una gran parte de la población, causada por la sobreexplotación del hombre, la cesantía, en definitiva la excesiva concentración del poder económico en muy pocas manos y la injusta distribución de los ingresos.[42]

Éste es un cuadro revelador de la relación de la clase dominante con el medio ambiente y la clase trabajadora.

Dentro de la defensa del medio ambiente, se ha desarrollado el concepto de ecología social, que tiene por objeto una nueva organización de la sociedad, que combine la participación social, la equidad en la distribución del ingreso, la igualdad de oportunidades y el acceso seguro al trabajo, a la educación, a la atención de la salud y la vivienda, con la protección y conservación de la naturaleza. Todos estos son objetivos que persigue el socialismo. Esta lucha ha tenido que enfrentar la devastación y degradación del medio ambiente en Chile realizada por el poder concentrado en manos de unos pocos grupos, que dominan las grandes empresas de la minería del cobre, la harina de pescado, las plantaciones forestales, los cultivos de exportación y los servicios de utilidad social, como la electricidad y el agua potable. Estos grandes poderes se han adueñado del agua, están exterminando los recursos pesqueros de las costas (fauna y flora marina), han destruido el bosque nativo y explotan sin medida los recursos mineros no renovables como el cobre. Son estos mismos poderes los que pagan en sus países de origen por los productos que extraen pero se resisten a hacerlo en América Latina.

Desde el punto de vista de la contaminación, la situación de las grandes ciudades de Chile es, por demás, crecientemente grave, encontrándose la población completamente desprotegida, por ejemplo, de la contaminación del aire, de Norte a Sur, producida por los procesos mineros, por la combustión de vehículos motorizados,

[42] Anna L'Homme. "Medio ambiente". *Libro Naranja*, Santiago, Virtual Ediciones. 1998. págs. 82 y 83.

el polvo que arrastran los vehículos y las empresas, por los olores de las plantas de celulosa y las fábricas pesqueras. La capital de Chile, Santiago, ocupa el tercer lugar en contaminación, después de ciudad de México y Sao Paulo. La contaminación de las aguas es igualmente importante, tanto de los ríos como de las napas subterráneas, así como casi no existen las plantas de tratamiento. Las descargas de origen doméstico principales están en la Región Metropolitana, la Quinta y la Séptima Regiones. Las descargas industriales más significativas corresponden a la minería del cobre, fábricas de celulosa y papel y las industrias pesqueras. La contaminación de los suelos está relacionada con la basura domiciliaria, que tiene una inmensa importancia en la Región Metropolitana, así como con los residuos industriales. En materia de contaminación es poco lo que se ha avanzado en la búsqueda de soluciones.

El proceso de urbanización se ha complicado a fines del siglo XX. En efecto, la concentración de la población en el medio urbano ha seguido creciendo, especialmente en los países en vías de desarrollo, toda vez que dicho proceso alcanzó en los países desarrollados al 70%. El historiador Gabriel Salazar, entre otros cientistas sociales, ha incursionado en esta materia.

> El crecimiento de la población en las ciudades de los países atrasados, —señala—, alterará progresivamente el medio ambiente, produciendo una disgregación social, con una cifra alarmante de niños abandonados (100 millones o más) y una urbanización incesante por la ruptura de los viejos equilibrios del campo, por el uso excesivo de elementos químicos y pesticidas, que ha producido la erosión de los terrenos, la desaparición de 25 000 millones de toneladas de suelo fértil, que son arrastrados por el agua y los vientos. Además, hay que sumar el avance de los desiertos, que crecen 6 millones de hectáreas al año, debido a una agricultura agresiva, de una deforestación que quema entre 11 y 20 millones de hectáreas de verde en el año y de un pastoreo devastador. De una población de 6 mil millones de personas, casi 5 mil millones viven en los países atrasados.[43]

En una población siempre creciente en nuestro planeta, la migración tradicional, del campo a la ciudad, se ha extendido por sobre las fronteras. Del Sur al Norte, de los países más atrasados a los países más avanzados, así como también entre países y regiones del Tercer Mundo, en busca de mayores posibilidades de trabajo, constituyendo nuevos centros de pobreza, condicionados por la explotación en las ciudades más importantes. Éste es uno de los resultados de la llamada globalización, que junto con la trasnacionalización y regionalización es variable clave

[43] Gabriel Salazar, "Los pobres, los intelectuales y el poder", *ibidem*.

del proceso de mundialización de la economía. Algunos expertos definen estas tres variables como megatendencias.[44] Como ya se ha mencionado, la economía mundial se integra cada vez más y se desarrolla, pero con una distribución desigual de la riqueza.

> Este crecimiento desigual de la prosperidad mundial ha tenido lugar al mismo tiempo que surgían grandes empresas multinacionales, cada vez más ligadas a los valores y los intereses particulares de sus países de origen. La competencia con empresas rivales para apoderarse de partes crecientes del mercado mundial las ha hecho desarrollar una estrategia de inversión directa de un extremo a otro del planeta, apoyada en tecnologías financieras y de comunicación revolucionarias que han creado un mercado planetario para los bienes y servicios. Esta globalización favorece sólo al capital, con el simple tránsito entre los países, pero no a la población del mundo subdesarrollado, la que hoy se pretende detener en Estados Unidos con una muralla de más de 2 000 kilómetros en su frontera con México. Siendo ya importantes en el mundo actual, probablemente lo serán en el mundo de mañana, cuando las barreras comerciales de la Guerra Fría están desapareciendo y la economía planetaria se integra cada vez más.[4s]

Es la opinión fundada de Jacques Chonchol, doctor de Estado en Ciencias Sociales de la Universidad de París y destacado profesor y ex ministro de agricultura del gobierno de Salvador Allende.

No es propósito de este libro incursionar en una interpretación histórica sobre la supervivencia de los pueblos originarios de Chile, sino sólo referirme a la situación actual de las comunidades aborígenes, particularmente al último tercio del siglo xx.

> Durante el régimen de Pinochet se detuvo, se hizo desaparecer y se ejecutó, entre otros, a más de 300 dirigentes mapuches, los que en su mayoría eran dirigentes rurales. De esta manera se descabezó el movimiento mapuche y su dirigencia, como una forma de imponer una institucionalidad que, a la postre y en la actualidad, tiene por objeto la destrucción de las formas ancestrales de vida indígena.[4'1]

[44] Luis lnastroza F.. *Privatizaciones megatendencias y empresas públicas. M*éxico. Ediciones UAM Unidad Azcapotzalaco. 1997.

[45] .lacques Chonchol. *¿Hacia dónde nos lleva la globalización?, Reflexiones pura Chile.* Santiago. LOM adiciones. 1999. pág. II.

[40].Gloría Mujica Asan'. "Pueblos originarios". *Libro Sanmju.* Santiago. Virtual Ediciones. 1998. pág. 321.

A la violenta expropiación de los territorios ocupados por los pueblos originarios a través de las guerras de "pacificación" de la Araucanía, realizadas en la segunda mitad del siglo xIx, se agregó la usurpación establecida por el decreto-ley No. 2.568, "que dividió y parceló la casi totalidad de las comunidades y, en la práctica, permitió el traspaso de dichas tierras, tanto por vías legales como por fraudes y vías de hecho, a lo que actualmente son las grandes empresas forestales que han rodeado y asfixiado a las comunidades, corriendo, en la actualidad serio peligro de exterminio de las mismas.[47] Ésta es una historia de robo con violencia, sobre la cual poco se han preocupado los historiadores.

Desde entonces, las comunidades indígenas mantienen conflictos con las empresas madereras, que se apropiaron de sus tierras, y las empresas hidroeléctricas, que también pretenden desplazarlas de sus lugares ancestrales de vida y trabajo. Gloria Mujica destaca:

> En ese período, la empresa Bosques Arauco inicia la tala de los bosques originarios, y luego planta pinos y eucaliptos, por su capacidad de rápido crecimiento, sin considerar que estas especies consumen demasiada agua y erosionan la tierra, absorben la humedad de las napas subterráneas a unos 400 o 500 metros a su alrededor, lo que evidentemente perjudica a las comunidades del sector. A esto se suma que los pesticidas utilizados por estas empresas son altamente venenosos, lo que afecta irremediablemente la salud de las poblaciones del sector, e incluso genera la muerte de niños, como ha sido el caso del deceso reciente de niños en Purén.[48]

Las comunidades se han defendido por diversos medios, como la denuncia pública, la querella judicial, la búsqueda de la solidaridad, el apoyo político, exigiendo en todos los casos la devolución de sus tierras. Esta lucha lleva muchos años, desde el término de la dictadura.

Las comunidades aborígenes no sólo luchan por recuperar sus tierras, sino también proyectan sus demandas en términos culturales, económicos, sociales y políticos. No sólo de pan vive el hombre. Por eso, el pueblo mapuche se ha organizado en un movimiento nacional. '"Se trata de un movimiento en desarrollo que ha ido cambiando su lenguaje de asimilación cultural, de límites geográficos (el complejo de Bio-Bío al sur deja afuera a mucha gente), e incluso de pueblos originarios en busca de una nueva identidad. En este sentido el Movimiento Mapuche, formado por varias organizaciones y comunidades... plantea la existencia de la Nación Ma-

[47] *ídem*

48 *Ibidem.* pág. 322.

puche, que busca su autonomía, su autodeterminación y que la lucha por la recuperación real de sus tierras y de espacios para recrear su cultura; también se habla de un Parlamento Plurinacional, puesto que en esta concepción existe más de una nación en Chile." ¿De qué población se trata? Considerando sólo a los mapuches, su población es de 1 millón seiscientos mil, distribuidos de la siguiente manera: 500 mil en la Región Metropolitana, 300 mil en la Novena Región, 200 mil en la Octava Región y 600 mil en el resto del país. En general, se ha configurado una conciencia social que está dispuesta a devolverle sus tierras, respetar su derecho a la auto determinación sin separarse de la nación chilena, destinarles recursos especiales para su atención de educación, salud, vivienda, fomento de su desarrollo económico, apoyo a su cultura específica.

La democracia: una mágica palabra

De la democracia se habla continuamente en el curso del relato de la lucha por el socialismo durante el siglo xx en Chile. Por ahora sólo me propongo precisar algunas cuestiones de principios relacionadas con la discusión entre liberales y socialistas desde el siglo xix. Identificada con anterioridad la democracia propiamente dicha, sin otra especificación, con su modalidad directa, que fue luego el ideal rousseauniano, se afirmó por intermedio de escritores como Constant, Tocqueville y Stuart Mili la idea de que la única forma compatible con el Estado capitalista liberal era la democracia representativa o parlamentaria. Esta última concepción se funda en el reconocimiento del principio de la soberanía popular, esto es, el derecho a elegir y ser elegido, arrancado tras cruentas luchas al Estado absoluto. Esta forma de democracia liberal se orienta históricamente en dos direcciones fundamentales:

a) En la gradual ampliación del derecho a voto, limitado al comienzo a una exigua parte de los ciudadanos por criterios basados en la renta, la cultura, el sexo, la edad y la raza, hasta convertirse en sufragio universal.
b) En la multiplicación de los órganos representativos, desde una sola asamblea nacional hasta numerosos entes de poder local, como los municipios y las regiones.

La democracia es entendida de otra manera por el socialismo, como quiera que él se planteó no sólo la transformación de las relaciones políticas, como lo hizo el liberalismo, sino también las relaciones económicas, no sólo la emancipación ciu-

dadana de los hombres sino su emancipación social. El socialismo parte de la crítica a la democracia liberal y desarrolla la participación popular, estableciendo el control del poder desde la base social, de modo de extender el ejercicio de la democracia de los órganos de decisión política a los de decisión económica. De algunos centros del aparato estatal a las empresas, de la sociedad política a la sociedad civil. En suma, reclama tanto el autogobierno político como la autogestión económica y social, combinando la representación directa a través de las organizaciones de la clase trabajadora en la producción y la representación indirecta de la misma clase a través de las organizaciones políticas en el Estado. La democracia socialista, formulada por el marxismo, encuentra sus raíces teóricas en la crítica a la propiedad privada y en los principios de igualdad, soberanía popular y democracia directa de Rousseau. La tradición liberal, en cambio, siguió fiel en lo esencial al pensamiento de Locke en cuanto a la preservación de dicha propiedad, hasta llegar a ciertas versiones contemporáneas que reducen la democracia a un problema de representación, a un simple procedimiento de constitución de los gobiernos y de búsqueda de una adecuada conciliación entre la autoridad y la libertad dentro del sistema capitalista.

Para avanzar en este análisis es preciso desmitificar el uso y abuso que se hace hoy en Chile de esta mágica palabra, distinguiendo para dicho efecto entre la democracia como igualdad y la democracia como gobierno del pueblo y para el pueblo. La primera acepción cae por su propio peso. Ella no puede darse, en efecto, en una sociedad de clases a no ser que esta igualdad sea concebida sólo como formal, superpuesta en un ámbito real de desigualdades.

> La democracia se expresa en el derecho de igualdad que. como hiciera notar Marx en su polémica con Lasalle, es la aplicación de un mismo estándar a individuos desiguales. El supuesto del derecho de igualdad son las desigualdades, puesto que de otro modo no tendría sentido hablar de "derechos". La democracia aparece, pues, como un cascarón de la sociedad que presenta las relaciones reales en forma invertida.[49]

La libertad y la igualdad formales de la democracia burguesa reflejan, en el nivel de las instituciones políticas, la libertad y la igualdad formales en el intercambio de mercancías.

En la sociedad capitalista, los trabajadores, precisamente por dicho carácter de la libertad y la igualdad de contratación reconocidas en los textos legales, tienen que

[49] Víctor Figueroa. "lüirocomunisino en Chile", mimeo. Londres. 1981.

someterse a la voluntad de los patrones porque no pueden optar entre trabajar y no hacerlo, sirviendo esos derechos formales de manera eficaz a los fines de la competencia y la explotación capitalistas. Dicho de otro modo, la esclavitud y la desigualdad reales que caracterizan las relaciones entre capitalistas y proletarios en la producción se esconden detrás de la libertad y la igualdad formales que singularizan las relaciones de compradores y vendedores en el cambio. La democracia burguesa tiene, sin embargo, cierto contenido real o substancial para el desarrollo de los individuos de la clase dominante, porque el aprovechamiento de las oportunidades requiere recursos y tiempo que sólo ellos disponen. Pero no tiene ninguno para la clase trabajadora, aunque las leyes se los reconozcan como derecho por carecer precisamente de dichos medios. Esta democracia es, por eso, sólo formal para ella, constituyendo por consiguiente una burla proyectar las condiciones de vida de la clase en el poder como válidas para toda la sociedad.

Si la democracia como igualdad es una falacia en el marco del sistema capitalista, igualmente lo es como gobierno del pueblo y para el pueblo, porque en una sociedad dividida en clases no puede darse tampoco éste, entendido como representación de los intereses del conjunto de la comunidad, sino sólo gobierno de y para una clase. Quizás, con toda su imprecisión, esta democracia podría considerarse más bien como un gobierno (ejecutivo y legislativo) elegido por una mayoría, aunque actúe a favor de una minoría. Esta mayoría se constituye hoy por medio del sufragio universal, aunque se desvirtúa completamente, primero, por el sistema binominal (un tercio más uno es igual a dos tercios menos uno) y, segundo, por el financiamiento del empresariado a los sectores de derecha en las campañas electorales. No me voy a referir a la evolución del sistema democrático en Chile hasta su retroceso, como herencia de la dictadura, sino que sólo deseo subrayar que las opciones no son libres e ilimitadas en ella, sino que están supeditadas al carácter de clase de la sociedad. No se trata que aquella modalidad de democracia prohiba o impida formalmente alguna opción, aunque sí quiso hacerlo el artículo 8º de la Constitución de 1980, sino que la victoria de un movimiento revolucionario conlleva a la burguesía a abandonar la democracia, como sucedió en 1973.

No es necesario recurrir a argumentos de autoridad para demostrar esa realidad objetiva, porque los dolorosos hechos vividos por el movimiento popular, entre 1973 y 1990, así la corroboran. Estas duras lecciones actuales han sido extraídas y sistematizadas por quienes analizan esos "porfiados" hechos con honestidad. Por ejemplo, Eduardo Novoa Monreal expresa:

> Esta experiencia contradice la tesis de políticos y juristas que sostienen que los regímenes jurídicos liberales permiten una evolución de su contenido conforme a sus propias

reglas. La verdad es que esos cambios solamente pueden prosperar por esos caminos en los casos en que ellos no resulten excesivamente incómodos para las clases dominantes o contrarios a sus intereses más esenciales.

Pocas experiencias políticas son tan ricas en enseñanzas como la chilena, por lo que Novoa puede agregar esta conclusión quemante:

> Los mismos políticos y juristas que alaban las ventajas de la democracia, que exaltan las posibilidades que conceden pacíficamente las vías de derecho, serán los primeros en elaborar descaradamente fórmulas, interpretaciones y argumentos destinados a cerrarle el paso.[50]

Esto lo afirma quien fuera presidente del Consejo de Defensa del Estado y brillante profesor de la Universidad de Chile.

La democracia, en cuanto mecanismo de representación y régimen de libertades, se extinguió por el golpe de Estado para los trabajadores, pero no así para la burguesía, como quiera que ella tuvo durante aquellos largos años pleno acceso a las oportunidades en el desarrollo individual y prescindió de toda limitación en los ámbitos de decisión política y económica frente a un movimiento obrero sometido a su férrea voluntad por la acción del terrorismo de Estado. La renuncia voluntaria a los procedimientos de representación formal no le impidió decidir en el gobierno militar a través de sus personeros, tanto en el ejecutivo (ministros) como en el legislativo (comisiones de trabajo). El Estado burgués se convirtió así, desde el punto de vista político, en ese monstruo del libro de Job que inspirara a Thomas Hobbes cuando escribió su *Leviathan.* Este absolutismo político, combinado con el liberalismo económico, que en la aurora del capitalismo permitió la acumulación originaria, se presentó en Chile durante más de década y media como una panacea que sólo sirvió, en último término, para saquear al país por los viejos y nuevos clanes económicos.

> Es innegable, —dice Atilio Borón, intelectual argentino- , el parecido entre la visión aterrorizada que Hobbes tenía de la Inglaterra que acababa de decapitar a Carlos I y la que surge cuando se contempla la escena contemporánea del Cono Sur, con su desoladora contabilidad de muertos, desaparecidos, secuestrados y torturados.'[1]

[50] Eduardo Novoa Montreal. *¿ Ha legal hacia el socialismo'.' El caso de Chile. I9'O-1973.* Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.. 1978. pág. 6.

[51] Atilio Borón. "Entre Hobbes \ Eriedman. liberalismo económico \ despotismo burgués en América Latina", revista *Cuadernos Políticos* No. 23. enero-maivo. 19X0. pág. 46.

Ni siquiera Friedman, el mentor de los Chicago Boys, pudo escapar al horror de los crímenes de la dictadura, encabezada por Pinochet, por lo que tomó distancia de ésta después de alentar el "modelo" económico.

Las grandes revoluciones burguesas generaron los estados capitalistas y liberales, pero no la democracia, ya que ésta, con sus limitaciones de clase, se fue configurando a través de las luchas populares, impulsadas por sus partidos y sindicatos. No obstante, la clase dominante se ve obligada, en períodos de crisis en que el conflicto social se hace más agudo, a ceder el propio poder político directo, que ejerce a través del parlamento, a un solo individuo, que se presenta en apariencia por encima de las clases, como sucedió en Chile, sin que se altere la naturaleza del Estado, ni pase a ser independiente de la sociedad civil, como quiera que este "despotismo individual" se apoya en determinada clase. La burguesía chilena, por ejemplo, apoyó a Pinochet porque éste le aseguraba su dominio en la sociedad civil, porque como dice Marx "para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político" o, dicho de un modo más brutal, que "para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona".[52]

Agotada la dictadura, se sometió a plebiscito en 1988 la continuación de Pinochet en el poder, en el marco de la constitución impuesta en 1980, o la convocatoria a nuevas elecciones de presidente de la República. El plebiscito lo perdió la derecha, pero impuso la sucesión política bajo sus condiciones, basadas en una irrisoria constitución y las leyes complementarias de partidos políticos y del sistema electoral binominal aprobadas por decretos-leyes. No se restableció la democracia existente hasta 1973, sino que una transición que poco o nada ha avanzado en quince años, supervigilada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, es decir, por las mismas fuerzas golpistas. En este período de transición a la democracia destaca una iniciativa, que vino a dignificar la lucha por la defensa de los derechos humanos y ¡as campañas de condenación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura, encabezada por Pinochet. Esta iniciativa es la designación de la comisión investigadora presidida por Raúl Rettig.

Dignificación de las víctimas de la dictadura

El primer gobierno de la Concertación por la Democracia, presidido por Patricio Aylwin, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el fin de con-

[52] Carlos Marx y Federico Engels. *Obras Escogidas I.* pág. 447.

tribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos y colaborar a la reconciliación, sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que pudiera dar lugar. Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, sólo se consideraron como objetivos de dicha comisión, los casos de los detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte en que compareciera comprometida la responsabilidad del Estado y los atentados contra la vida cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Sus tareas estaban orientadas a establecer un cuadro lo más completo sobre los graves hechos referidos, individualizar a sus víctimas y determinar su destino o paradero, recomendar las medidas legales y administrativas para prevenir o prever situaciones similares y definir las medidas de reparación, para todo lo cual tenía atribuciones diversas, hasta la elaboración de un informe sobre la base de los antecedentes que reuniera, en el que debía expresar sus conclusiones. Esta comisión fue integrada por nueve miembros de diversas tendencias políticas, incluso de colaboradores de la dictadura, con cierta independencia de juicio, y presidida por Raúl Rettig.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tenía, en cuanto a sus objetivos, dos limitaciones significativas:

1) Identificación del terrorismo de Estado, con miles de víctimas, con la violencia en la lucha política, con escasas víctimas.
2) Conjunto restringido de violaciones a los derechos humanos, dejando fuera de su conocimiento las situaciones de los ejecutados en falsos enfrentamientos, de los torturados, sin resultado de muerte, de las personas arrestadas, procesadas, condenadas por razones políticas, en ese momento en prisión y las personas privadas de empleos y cargos por razones políticas. La derecha, que dio su apoyo a la dictadura, rechazó esta iniciativa, así como también los altos tribunales de justicia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, responsables de aquellos delitos y abusos de autoridad.

En el mes de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dio a conocer su informe, en el que se confirmaron todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos (dentro de los márgenes o limitaciones a sus objetivos que tenía la comisión), que ya habían registrado la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, los partidos de izquierda, las organizaciones sindicales y las asociaciones de familiares de las víctimas, así como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Inter-

nacional del Trabajo y otras instituciones internacionales. La Comisión amplió la investigación y reunió nuevos antecedentes de prueba. En la última parte de su informe, la Comisión formuló algunas propuestas de reparación, como la reivindicación pública de la dignidad de las víctimas, reparaciones simbólicas y restablecimiento solemne del buen nombre de las víctimas. Además, se formularon recomendaciones relativas a bienestar social, incluida una pequeña pensión de reparación a los familiares de las víctimas. Por último, se recomendó la creación de una fundación de derecho público, destinada a la colaboración en la búsqueda de las víctimas, recopilación de antecedentes y calificación de los mismos, centralización de la información acumulada por la comisión, asistencia a los familiares y elaboración de propuestas educacionales. Este informe fue rechazado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y también por la Corte Suprema.

La Izquierda, que fue la víctima colectiva principal, valoró la contribución a la verdad del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Pero al mismo tiempo reclamó la acción de la justicia, la que exige la derogación del decreto-ley de amnistía dictado por la propia junta militar, la reforma del Poder Judicial y la remoción de los ministros de la Corte Suprema, que actuaron al servicio de la dictadura. Señaló también la insuficiencia del informe por cuanto no estableció el destino y paradero de los detenidos desaparecidos ni tampoco se ocupó de los otros atentados a los derechos humanos, que afectaron a centenares de miles de personas. La exigencia de justicia puso en descubierto las responsabilidades por los crímenes cometidos, tanto de las instituciones militares como de los autores individuales. Los sectores de izquierda dejaron constancia de las responsabilidades históricas y políticas que tienen la clase dominante y los partidos que prepararon el golpe militar, participaron en la dictadura y se beneficiaron de su acción política y económico-social. Los atentados a los derechos humanos no se realizaron sólo por perversidad de sus autores, sino como una operación para aplastar a un pueblo, que fue sometido a la más inicua sobreexplotación y a la expropiación de su patrimonio colectivo, esto es, la capitalización pública, que fue privatizada.

La lucha por la democratización de la sociedad chilena impiba no sólo el desmantelamiento de las estructuras represivas del Estado desarrolladas por la dictadura, sino también la erradicación de las modalidades de acumulación sustentadas en la sobreexplotación de los trabajadores. La herencia de la dictadura ha pesado hasta ahora, sin duda, en los proyectos sustitutivos, con su secuela de años de retroceso político, de destrucción de capacidades productivas, de enajenación de patrimonios nacionales, de hipoteca del país a los intereses extranj;ros, de acumulación de desempleo, de extensión de la pobreza, de degradación de la cultura y de crímenes contra la humanidad. En estos quince años de transición a la democracia

ha perdurado también la justicia de clase, que ha impedido los juicios en materia de derechos humanos, con limitadas excepciones, hasta el punto de que Pinochet sólo pudo ser juzgado en un proceso —el de la caravana de la muerte— por la presión externa, derivada de la detención en Londres, requerida por extradición del juez Garzón, de España, aunque fue sobreseído por "loco o demente". Igualmente, en el caso de los generales Contreras y Espinoza, éstos sólo fueron condenados por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en virtud de la presión del gobierno de Estados Unidos. ¡Porque el crimen se cometió en Washington! Posteriormente, se ha procesado a Pinochet en otras causas, pero va siendo sobreseído por razones de salud, así como a otros militares, algunos de los cuales, incluso Contreras, han sido condenados nuevamente.

Los procesos sobre crímenes políticos

El ex dictador Augusto Pinochet, al término de "su mandato", se atrincheró en su fortaleza inexpugnable —el ejército— como su comandante en jefe hasta 1998, totalizando 24 años en el cargo. Para eso, contó con el comité asesor político-estratégico (CAS) del comandante en jefe, dirigido por el General Jorge Ballerino, quien se entendía con los representantes del gobierno, particularmente con el ministro Enrique Correa, entonces militante del Partido Socialista, de quien dijo Pinochet en ese tiempo que ambos se entendían tan bien que, de haberlo conocido, durante su dictadura, lo habría nombrado en el mismo cargo. Pinochet expresó también entonces: "Voy a seguir siendo comandante en jefe para tener a mi gente protegida[...] Mi gen*te no va a ser tocada".* Para eso, continuó con la Corte Suprema, que aplicaba la llamada ley de amnistía, sin siquiera investigar para configurar los delitos e identificar a los culpables, a quienes exonerar de responsabilidad penal.

En los procesos por derechos humanos se produjo un cambio en 1992, cuando la Corte Suprema, ya algo renovada, estableció la jurisprudencia de que los detenidos desaparecidos eran secuestrados, delito permanente y, por lo tanto, imprescriptible y no sujeto a amnistía, salvo que aparecieran los cadáveres, convirtiéndose en homicidios. De todos los procesos por derechos humanos de ese tiempo, el más complicado fue el que se siguió en contra del General Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, y del General Pedro Espinoza, subjefe, por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington, debido a la severa presión del gobierno estadounidense. En noviembre de 1993, el ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados condenó a ambos por homicidio a siete y seis años de presidio, respectivamente. Pe-

ro sería hasta el siguiente gobierno, presidido por Eduardo Frei Ruiz Tagle, que se haría cumplir las sentencias, con la resistencia de ambos criminales y la solidaridad de sus pares.

Durante el gobierno de Aylwin se sucedieron numerosos episodios sobre desencuentros entre el poder legítimo, que representaba el presidente de la República, y el poder de hecho, que continuaba ejerciendo Pinochet como ex dictador y comandante en jefe del ejército. Entre otros, el "desfile" de los militares por los tribunales de justicia, el destino final de la ex casa presidencial de Lo Curro, el pago de los ex CNI con cargo fiscal, la continuación del espionaje de "inteligencia" militar contra algunos políticos, un contrabando de armas, desde FAMAE, hacia Yugoslavia, los ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas. No obstante, el mayor problema fue la explosión del escándalo conocido por los "pinocheques", derivado de la compra por el Comando de la Industria Militar e Ingeniería del 51% de las acciones de Proyectos Integrados a la Producción, una industria paralizada, que no valía nada, representada por el hijo mayor del dictador, Augusto Pinochet Hiriart, por un valor equivalente a 3 millones de dólares.

Pinochet, presionado por este escándalo a renunciar a su cargo de comandante en jefe, ordenó el acuartelamiento, grado 1, del ejército, con la denominación de "ejercicio de enlace", con lo que paralizó tanto la presión del gobierno como el funcionamiento de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. La negociación se realizó entre el ministro Enrique Correa y el General Ballerino. El *affaire* de los "pinocheques" sólo se paralizó hasta 1993, cuando el Consejo de Defensa del Estado optó por iniciar nuevas acciones judiciales. Entonces, Pinochet, respondió con el "boinazo", consistente en una reunión del cuerpo de generales y tropas, con uniforme de guerra, incluida la tradicional boina negra, como una amenaza contra el gobierno, encontrándose en el extranjero el presidente Aylwin. De nuevo, el ministro Correa y el general Ballerino resolvieron la "crisis" mediante comisiones de trabajo que acordaron las soluciones adecuadas de los problemas existentes, entre ellos el cambio del proceso de los "pinocheques" de un juzgado más duro a uno más blando.

En el segundo gobierno de la Concertación por la Democracia, presidido por Eduardo Frei Ruiz Tagle, se mantuvo el ex dictador como comandante en jefe del ejército, aunque esta carga no fue tan complicada como la de su antecesor. Pinochet, más viejo y enfermo, continuó defendiéndose de sus propias responsabilidades y de su "gente" en los crímenes contra la humanidad, aunque ya no pudo contar con la absoluta complicidad de la Corte Suprema, por la renovación de sus miembros por muerte y jubilación de algunos de ellos. Hasta el punto que, en general, empezaron

a progresar algunos procesos, sobre la base de la doctrina Aylwin, de investigar antes de amnistiar, y de la doctrina de la propia Corte Suprema de tratar como secuestro permanente los casos de los detenidos desaparecidos. En estas condiciones, continuó el "desfile" de los militares por los tribunales de justicia, reactivándose la acción judicial. El principal problema del Presidente Frei fue el de hacer cumplir !a sentencia de presidio contra los capos de la DINA, ante la cual Contreras había declarado que él no iría a prisión.

El trámite de la detención fue prolongado y lleno de dificultades, con verdaderos pasos de comedia. El gobierno construyó , primero, una cárcel especial para criminales de las Fuerzas Militares en Punta Peuco, en la comuna de Colina. Contreras eludió a la policía, refugiándose en un regimiento, después en el hospital naval de Talcahuano, donde se sometió a una cirugía diagnosticada como de cáncer, hasta que después de meses se entregó, junto con Espinoza, quien antes fue dado de baja, por estar en servicio activo. Ambos presos, un millar de oficiales y sus familiares realizaron un mitin de "desagravio" a los condenados en Punta Peuco. Pinochet, en cambio, en vez de salvar a los ejecutores de sus crímenes, se ocupó de liquidar el proceso que lo afectaba por los "pinocheques". En efecto, bajo presión militar, el presidente Frei Ruiz Tagle solicitó al Consejo de Defensa del Estado no insistir en sus acciones judiciales "por razones de Estado", las que no se dieron a conocer públicamente. Por este acto de cobardía, el país perdió mil millones de pesos más (aproximadamente 3 millones de dólares), que quedaron en los bolsillos sin fondo del clan Pinochet.

El ex dictador, ya más tranquilo, negoció por último la sucesión en el cargo de comandante en jefe del ejército, en 1998, recayendo el nombramiento en el general Ricardo Izurieta. El 10 de marzo de 1998 se realizó el cambio de mando y el 11 asumió Pinochet, declarado previamente por el cuerpo de generales comandante en jefe "benemérito" del ejército, el nuevo cargo de senador vitalicio, con el repudio generalizado dentro y fuera del Senado. La tragicomedia terminó. La dictadura había dictado una "Ley Orgánica Constitucional" sobre funcionamiento del Congreso Nacional, que prohibía a éste someterlo a juicio o a investigaciones por su responsabilidad política. Pero, al abandonar su cargo en el ejército se sucedieron más de un centenar de querellas criminales en su contra, para atender a las cuales se nombró ministro en visita a Juan Guzmán Tapia, quien acumularía las causas posteriores.

Después de desafiar al país, asumiendo la senaduría vitalicia, quien había gobernado sin Congreso Nacional durante 17 años, desafió también al mundo exterior, viajando a Londres en septiembre de 1998,con pasaporte diplomático, por motivos obscuros y confusos (se dijo que lo hizo para cobrar comisiones que le "adeudaban" por compras de armas), desoyendo advertencias para que no lo hiciera tanto del

ejército como del gobierno. En Londres, resolvió operarse de una hernia en una clínica privada, ingresando a ella el 8 de octubre del año mencionado. Por fin, lo que no se pudo hacer en Chile, el ex dictador, comandante en jefe "beremérito" del ejército de Chile y senador vitalicio, fue arrestado en la misma clínica, en virtud de la extradición solicitada por el juez Garzón, desde España, en un proceso iniciado en ese país sobre crímenes contra la humanidad. En suma, Pinochel era aprehendido, como cualquier delincuente, y sometido a proceso, aprobándose la extradición después de meses de tramitación judicial.

No obstante, el gobierno de Eduardo Frei Ruíz Tagle, bajo presión de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como de la derecha política y económica, gestionó la libertad y el regreso de Pinochet, a través de las vías diplomáticas, asegurando que sería juzgado en Chile, conforme a la legislación local. Hasta que el secretario del interior inglés Jack Straw, de acuerdo a sus atribuciones legales, en esta materia, le concedió la libertad, previo exámenes médicos, alegando razones humanitarias, el 2 de marzo del año 2000. Un avión de la FACH, especialmente habilitado, que esperaba en Londres, trajo de regreso a Chile, al "valiente soldado". Los principales servidores de esta política piadosa del gobierno de Frei Ruiz Tagle fueron los socialistas José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, a cargo sucesivamente de la cancillería.

Una vez Pinochet en Chile, se reactivaron las querellas en su contra, que en el año 2001 sumaban 1 80 y en el 2002 llegaron a 250. En el proceso de la "caravana de la muerte'", que estaba más avanzado, el ministro Juan Guzmán solicitó el desafuero en tanto senador vitalicio. Esta masacre se había ejecutado por el General Héctor Arel laño Stark y un grupo de oficiales asesinos, por encargo y delegación del mando por Pinochet, en octubre de 1973. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero en mayo del año 2000, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en agosto del mismo año. aunque ésta acordó el sobreseimiento por demencia enjulio del 2002. Para facilitar su renuncia al cargo de senador vitalicio se le aprobó una ley especial, patrocinada, entre otros, por el senado" socialista Viera-Gallo y promulgada por el presidente Ricardo Lagos, por la que se le concedió fuero y "dieta" como ex presidente de la República, equivalente a la de senador vitalicio, compatible además con la pensión de ex capitán general.

Desde fines del gobierno de Frei Ruiz Tagle se buscó el término de los procesos sobre derechos humanos, particularmente respecto a detenidos desaparecidos, mediante una Mesa de Diálogo. El objetivo consistía en conseguir ccn las Fuerzas Armadas y de Orden la información necesaria sobre el destino de sus restos, porque mientras no aparezcan éstos, los procesos continuarán caratulándose como secues-

tros, que constituyen delitos permanentes y no armistiables. Esta Mesa se formó con representantes del gobierno de Ricardo Lagos, de las Fuerzas Aarmadas y de Orden, de las iglesias, de la masonería y de algunos juristas, intelectuales y científicos. No participaron los dirigentes de las agrupaciones de familiares de las víctimas ni de los partidos políticos. Esta instancia, inaugurada a fines del gobierno de Frei Ruiz Tagle, presidida por el ministro de defensa Edmundo Pérez Yoma, en junio de 1999, funcionó a comienzos del gobierno de Lagos, presidida por el nuevo ministro de Defensa Mario Fernández.

El regreso de Pinochet de Londres produjo un breve receso, pero el presidente Lagos gestionó una declaración común de la aludida Mesa de Diálogo, de acuerdo a la cual las Fuerzas Armadas y de Orden reconocieron, por primera vez, sus responsabilidades en la desaparición de detenidos, comprometiéndose a "investigar" el paradero de sus restos. Este acuerdo constituyó una burla, porque la información entregada, en el plazo de seis meses, era incompleta o simplemente falsa. La única medida que tuvo algún resultado en el avance de los procesos fue el nombramiento de jueces especiales, obteniéndose sentencias condenatorias en algunos pocos juicios.

El gobierno de Lagos no cumplió el deber que tenía, por provenir del Partido Socialista, que es una organización política que tuvo centenares de víctimas durante la dictadura, a partir de la muerte del propio presidente Salvador Allende. Estos crímenes contra la humanidad no son responsabilidad sólo de los uniformados, sino también de la oligarquía que, como dijo el General Juan Emilio Cheyre, "instigó" y "avaló" el golpe de Estado y la dictadura, sino que compartió el gobierno y se apoderó de los bienes nacionales mediante privatizaciones fraudulentas. Por lo mismo, se debe exigir, como lo han hecho presente diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, profesionales y estudiantiles, verdad, justicia y reparación al tiempo que rescatar la memoria de nuestros héroes y mártires.

En el año 2004 explotó un nuevo escándalo, al descubrir el Senado norteamericano cuentas secretas en dólares tanto en el Banco Riggs, de Nueva York, como en otros bancos de Estados Unidos, de Europa y de Bahamas, a nombre de Pinochet y su esposa como también bajo nombres falsos, para lo cual usó pasaportes con seudónimos o alias, como los *gangsters.* Según el diario *El Mercurio,* de Santiago de Chile, de 9 de enero de 2005, el ministro de la Corte de Apelaciones, de Santiago, Sergio Muñoz, "tiene sospechas fundadas de la participación de Pinoehet en tres delitos: malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles e infracción al Artículo 97, N° 4, del Código Tributario, es decir, que el ex senador vitalicio incurrió reiteradamente en 'declaraciones maliciosamente incompletas' al evadir impuestos al fisco". Además, agrega este diario que el ministro Muñoz estaba investi-

gando otros delitos derivados de este mismo proceso, todo lo cual se suma a la Operación Cóndor, donde ha sido encargado reo, previo su desafuero, y el proceso por el asesinato del General Prats, que también ha experimentado avances. Por último, nuevamente desaforado, ha sido encargado reo en el caso Riggs *y* en la operación Colombo en el año 2005 y en el de Villa Grimaldi en 2006.

No son sólo éstas las tareas pendientes en la materia, sino que hay también la obligación de desbaratar los enclaves de la herencia de la dictadura. Entre éstos, sustituir la constitución impuesta en 1980 por otra que represente el pensamiento de la mayoría del país, derogar el decreto-ley 2.191, de 1978, de autoamnistía, ratificar los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre la Desaparición Forzada, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y del delito de Genocidio y la Convención sobre el Tribunal Penal Internacional, que están pendientes en el Congreso Nacional. Por otra parte, deben derogarse también las competencias de la justicia militar, impuestas por la dictadura, limitándolas sólo a los delitos específicamente militares, excluyendo además al auditor general del ejército de la Corte Suprema. Sin estas modificaciones, no será posible aplicar el "nunca más" pronunciado por el General Cheyre, ni detener la mano criminal de la derecha.

Hay que poner término, asimismo, a la doctrina de "Seguridad Nacional", introducida por el gobierno de Estados Unidos, durante la Guerra Fría, dejando de ser las Fuerzas Armadas y de Orden el "partido que la propia nación arma y paga contra sí misma". Mientras no se hagan estas transformaciones persistirá el militarismo como la gran amenaza contra el pueblo de Chile. Esta posición está relacionada con las reformas indispensables a la legislación penal, como la configuración del delito de genocidio, el perfeccionamiento del delito de tortura, extendiéndolo a la presión síquica a los familiares, y creando la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y de guerra, entre otras.

En ninguno de estos temas se ha logrado avances significativos. sino que por el contrario se ha retrocedido, como en el caso de la nueva teoría penal del Consejo de Defensa del Estado de convertir los delitos de secuestro permanente en homicidios, probados por presunciones, para aplicar en seguida la "ley" de amnistía. En esta teoría está la mano oculta del presidente de la República Ricardo Lagos, quien quizo liquidar esta parte siniestra de la herencia de la dictadura al menor costo posible. En este mismo sentido se orienta su resistencia a pagar indemnizaciones justas a los familiares de las víctimas, queriendo cubrir estos derechos legítimos con la asignación de pensiones mínimas. El sabe que en Europa se pagaron indemnizaciones a los familiares de los judíos y a la mano de obra esclava establecica por Hitler y en

países de América Latina, como Brasil y Argentina, se hizo lo mismo con los familiares de las víctimas de la represión. Pero, para su espíritu neoliberal, estas inversiones no son "rentables" y, por lo tanto, no cuentan con la aprobación del Fondo Monetario Internacional y de la secuela de asesores a sueldo y sobresueldos.

La última burla a los derechos de las víctimas de prisión y de tortura, que investigó la Comisión Valech es el proyecto de ley propuesto por Lagos y aprobado en el Congreso Nacional de pagar una pensión mínima de 112 mil pesos a las 28 mil personas registradas en el mencionado informe y establecer el secreto de la información por 50 años, para impedir que se pueda utilizar como prueba en demandas ante los tribunales, las que ya se han iniciado, sumándose a los centenares de procesos por crímenes contra la humanidad, que el gobierno de Lagos pretende resolver políticamente antes del término de su mandato. Mientras tanto Pinochet continúa con el título de Comandante en Jefe benemérito defensor del Ejército durante cuya dictadura se cometieron más homicidios que los de la común en dos siglos de vida independiente.

La corrupción

La corrupción es un proceso generalizado en América Latina, que ha traído consigo profundos trastornos en la vida y economía de estos países. El Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio realizado últimamente, estableció que la corrupción determina pérdidas cercanas al 10% del producto interno bruto latinoamericano cada año, equivalente a 184 mil millones de dólares. Por su parte, El Banco Mundial ha estimado que la corrupción puede reducir el crecimiento de un país entre 0.5 y 1% al año. El Fondo Monetario Internacional señala, a su vez, que los flujos de capital en los países corruptos son casi 5% menores que en las naciones con bajos niveles de este flagelo. A todo esto habría que agregar que la corrupción es también una de las variables consideradas por las instituciones de crédito, que encarecen sus operaciones. (Ver mayores antecedentes en la crónica de Jocelyn Bay-Schmith y Daniela Santelices, en Sección Economía y Negocios, del diario El Mercurio, de Santiago, de 20 de junio de 2005).

Para definir la condición de un país o de un gobierno se ha discutido que se entiende por corrupción. Según el *Diccionario de la Lengua Española,* el verbo *corromper* significa, en términos generales, "alterar o trastrocar la forma de algo" y la acepción en derecho es: "en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho,

económico y de otra índole, de sus gestores" . Esta forma de corrupción puede o no comprender delitos específicos, definidos en la legislación penal o connotar sólo infracciones a ciertas inhabilidades morales. Pero, en todo caso, tiene múltiples alcances, como pago de recompensas por adjudicaciones de contratos, distracción de recursos públicos para fines político-electorales o privados, trafico de influencias, compra y venta, mediante pago con recursos públicos, de serv cios de asesoría falsos o inútiles, de funcionarios públicos o privados, de parientes y amigos del presidente de la República, de ministros de Estado y de autoridades superiores de servicios u organismos estatales

En Chile, a pesar de ser hoy uno de los países menos corruptos, la acción política se ha desprestigiado por este flagelo, deteriorándose la conciencia ciudadana, a tal punto que la juventud no se inscribe, en un alto porcentaje, en los registros electorales y, por lo tanto, no vota en los comicios democráticos. Desde la cúspide del gobierno, el ejemplo no es edificante, como el fuero y las dobles jubilaciones que favorecen a los ex presidentes de la República, por una ley promilgada por Lagos, para "facilitar" la renuncia de Pinochet como senador vitalicio, después de ser sobreseído por loco o demente, en el proceso de "la caravana de la muerte", que benefició también a sus sucesores. Esta ley hizo compatible la nueva pensión de jubilación como ex primer mandatario con cualquiera otra que percibiera en el presente o el futuro. Dicha situación es particularmente crítica en el caso de Pinochet, quien habría acumulado una fortuna de más de 100 millones de dólares durante su "mandato", mediante la corrupción. Este último proceso se ha expendido a la clase política, con múltiples episodios de corrupción desde pagos de contratos, de "asesorías" es el casode Chile Deportes por miles de millones de pesos.

Como se verá en el resumen y conclusiones de este libro, el eminente socialista Italiano Lelio Basso, sostuvo en 1965 que "la socialdemocracia acaba por ser la antítesis del socialismo" por la corrupción. Lo mismo sucede con la democracia cristiana, para afirmar lo cual hay que recordar el gobierno de Helmuth Kohl en Alemania, en el que este flagelo contradice sus objetivos programáticos. En Chile, familias enteras ocupan cargos directivos en la administración pública, con altas remuneraciones, sin concurso, por la sola voluntad del Presidente de la República y sus ministros, con sueldos y sobresueldos (contratos especiales), como miembros de la nueva "nobleza" de la Concertación de Partidos por la Democracia. El *lobby,* importado de Estados Unidos, es puro trafico de influencias, como quedó en evidencia con el rechazo en el senado del proyecto de ley sobre *royalty* a la gran minería del cobre en el año 2004. El proceso por coimas en el ministerio de obras públicas. que comprometió a un subsecretario de ese ministerio y a cuatro diputados y los que

siguen investigándose sobre MOP-GATES y el caso INVERLINC, referido al robo de 100 millones de dólares en papeles o títulos de la CORFO, que se vendieron en el mercado de valores, son entre otras actividades de corrupción

Las asesorías por consultoras de "papel", que en su mayoría no tributan, con percepción de miles de millones de pesos de organismos públicos y empresas del estado, el pago de indemnizaciones millonarias en algunas de ellas por breves periodos de trabajo de personajes políticos, las coimas en compras de armas, como en el caso de la FACH, que nunca se han aclarado, la triangulación de fondos fiscales que se transfieren a organismos de fachada, los que son destinados, según denuncias públicas, a pagar remuneraciones complementarias a jefes de servicios y "asesores"' y, en parte, a gastos electorales en las campañas presidenciales y parlamentarias. Sectores "selectos"' de clase media de la Concertación de Partidos por la Democracia, con cierta calificación profesional y tecnológica, igual que en la dictadura de la derecha, se enriquecen y viven en la opulencia, mientras parte importante del pueblo, de la clase obrera y campesina, se debate en la pobreza y la cesantía, así como a los familiares de las victimas de la represión de la dictadura y a las victimas mismas de prisión y tortura se les otorga pensiones mínimas.

En suma, con los 184 mil millones de dólares que comprende la corrupción en América Latina, se podrían .mandar muchos programas de asistencia social, para superar la pobreza. Pero para qué seguir razonando en este sentido sino mas bien hay que enfrentar el problema, denunciándolo y poniendo término a esta otra forma de impunidad. No se puede aceptar que la Concertación de Partidos por la Democracia continúe el camino de la dictadura de apropiación de los bienes nacionales por pequeños grupos políticos, que algunos cínicos pretenden justificar con su generalización en otros países, llegando a comparar a las cortes de las monarquías europeas con las elites políticas chilenas, con olvido de que Bernardo O'Higgins suprimió a comienzos del siglo xIx, los títulos de nobleza.

De este resumen surgen los temas principales de nuestro tiempo, que deben convocar hoy a los trabajadores chilenos como continuación de la lucha de ayer, integrando democracia y socialismo en un solo proyecto, con vistas al segundo centenario de la independencia nacional.

Epílogo
Nuevos desafíos del socialismo

La lucha por la sobrevivencia

En la década de los setenta del siglo xx se desarrolló un proceso que comenzó por superar los rígidos modelos generados en el campo socialista y diseminados a los demás países del mundo, para abrir paso al policentrismo. Desde Europa occidental, los partidos comunistas, particularmente de Francia e Italia, promovieron al unísono la unión de izquierda y el compromiso histórico, respectivamente, procurando impedir que la socialdemocracia continuara sólo administrando el sistema capitalista. En los propios sistemas comunistas se buscaba también solucionar las contradicciones chino-soviéticas y promover los movimientos críticos en el seno de la URSS y de las "democracias populares". En la Unión Soviética se "intenta mantener un equilibrio, o quizás es incapaz de tomar una opción clara, entre la política de fuerza y el modus vivendi, entre el subjetivismo jruschoviano y los métodos estalinistas, entre el esfuerzo favorable a los bienes de consumo y la prioridad dada a la industria pesada: estas dudas se pusieron de manifiesto durante el XXIV congreso del PCUS en marzo de 1971. y son la prueba de que el gobierno teme una opción política".[1] Desde fuera del gobierno, destacaron Andrei Sajarov y Roy Medveded en la crítica al sistema y en la promoción de la convergencia del este y el oeste, aunque no pudieron influir en la burocracia dominante.

Esta misma burocracia, bajo la conducción de Brezhnev, se esforzó por mantener el control en los países satélites, por encima de las tendencias nacionales exis-

[1] M. Debouzy et al. *Historia general del socialismo, ele 1945 a nuestros días.* Destino (Vol. 235). Introducción de Jacques Droz. pág. 55.

tentes en los propios partidos comunistas. Se trata de la soberanía limitada impuesta por el ¡efe del gobierno soviético. Fin el inmenso Partido Comunista de China, superando la revolución cultural, se retomó el control del gobierno, en un proceso de realismo político, bajo la inspiración de Chu En Lai. Después de la muerte de este líder, se produjo un acercamiento mayor al campo del capitalismo, hasta el punto de invitar al presidente de Estados Unidos Richard Nixon, quien visitó, en 1972, a la República Popular China. En este proceso se afirmó el interés lacional por sobre la solidaridad revolucionaria, que se expresa, en menor escala, con la mantención de las relaciones diplomáticas y comerciales con Chile, bajo la bota militar, todo lo cual causó su descrédito en los países del Tercer Mundo.

En esos años, la capa dirigente de la República Popular China tenía conciencia de su atraso económico, en comparación con el mundo occidental y con algunos países del Extremo Oriente, como Japón. Así lo expresó entonces Deng Xiaoping.

> La clave para alcanzar la modernidad es el desarrollo de la ciencia y la tecnología[...] Las discusiones vacías no llevarán nuestro programa de modernización a ninguna parte; debemos tener los conocimientos y el personal especializado necesirios[...] Ahora parece que China lleva veinte años de retraso con respecto a los países desarrollados en ciencia, tecnología y educación)...] Ya desde la restauración Meiji los japoneses realizaron grandes inversiones en ciencia, tecnología y educación. La restauración Meiji fue una especie de impulso modernizador llevado a cabo por la burguesía japonesa. Como proletarios debemos y podemos hacerlo mejor.[7]

China creció económicamente en el período de Mao, aunque en menor medida que otros países capitalistas de la misma región, como Japón, Hong kong. Singapur, etcétera. A su muerte en 1976, no persistió su influencia, con el arresto de la "banda de los cuatro", encabezada por su viuda Jiang Quing, pasando el control del poder a Deng Xiaoping. "El nuevo rumbo de Deng en China significaba un franco reconocimiento público de que eran necesarios cambios radicales en la estructura del socialismo realmente existente, pero con el advenimiento de los años ochenta se hizo cada vez más evidente que algo andaba mal en todos los sistemas que se proclamaban socialistas".'

En este mundo retrasado se desarrolló también un proceso de cambio social, marcado entre otras experiencias por el fracaso y la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia. y por la búsqueda del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de

[2] Deng Xiaoping. "Respect Knowledge. Respect Trained Pcrsonnel. 1977" Citado por Eric Hobsbawn en *Historia del Siglo* \v, Barcelona Grijalbo Mondadori. 1997. pág. 459

[3] *ídem.*

Cuba con los países del continente, bajo la dirección de Fidel Castro. Estas relaciones se habían interrumpido en 1964, por resolución de la Organización de Estados Americanos, impuesta por Estados Unidos. En el sudeste asiático, Vietnam del Norte enfrentó la guerra con Vietnam del Sur, este último apoyado por Estados Unidos, escenario en el que el poderoso ejército de este país fue derrotado y obligado a su evacuación. Enseguida cayó Saigón. la capital del sur, reunificándose Vietnam como nación, de acuerdo con el sueño de Ho Chi Minh, fallecido en 1969. Entre 1970 y 1973 se desarrolló el proceso democrático, promovido por la Unidad Popular en Chile, encabezado por Salvador Allende, que fue abatido por un golpe militar, apoyado por el gobierno estadounidense de Richard Nixon, estableciéndose una cruenta dictadura por casi 17 años.

Durante los años setenta, los partidos comunistas de Francia, España e Italia, bajo la dirección de Marcháis, Carrillo y Berlinguer, respectivamente, y con la inspiración del policentrismo, impulsaron sus propias vías hacia el socialismo, con alianzas mayoritarias. Este era el sustento estratégico del eurocomunismo, que "exige un previo y radical rechazo de las supervivencias del fenómeno estalinista, la organización pluralista de los partidos, la apertura a las nuevas formas democráticas y progresistas, socialistas y cristianas, el rechazo de la coexistencia pacífica, que no tendría más objetivo que frenar el desarrollo de la lucha de clases y los cambios democráticos en la Europa".[1] Al mismo tiempo, también en la socialdemocracia europea, se reafirmó la voluntad de continuar administrando una sociedad que tiene como fundamento la economía capitalista. Sus líderes principales. Brand (alemán), Kreisky (austríaco) y Palme (sueco) reconocieron que sus partidos ya no representaban sólo los intereses de los trabajadores. No obstante, surgieron en el interior de estos partidos tendencias de izquierda más fieles a sus principios históricos. El único país en el que se produjo un vuelco hacia la izquierda en el Partido Socialista fue Francia, aprobándose un programa común con el Partido Comunista, en 1972. bajo la dirección de Francois Mitterrand, obteniendo en el año 1981, en la elección presidencial, la victoria con el 52% de la votación.

Crisis y derrumbe del comunismo soviético

Desde 1985, en que asumió el poder en la URSS Mijail Gorbachov. hasta 1991, en que se desmoronó el sistema soviético, se produjo la crisis terminal del comunismo

[4] M. Debouzx y otros, *ilmlem.* p;m. 59.

de la Revolución de Octubre de 1917. El nuevo jefe de gobierno se propuso, desde el comienzo, un doble programa de reformas, que comprendía, por una parte, una restructuración del sistema, con descentralización y un limitado mercado libre *{perestroika)* y, por la otra, una apertura en la política, la cultura y la historiografía *(glasnost).* El nuevo líder soviético repudió el terrorismo estalinista y el estancamiento de Brezhnev, destituyó a los miembros de la línea tradicional del politburó y otorgó libertad a presos políticos. Con esta revolución desde arriba se ofreció una nueva esperanza al comunismo, de dentro y de fuera, sin sospechar que este proceso escaparía en pocos años a su control. En efecto, en 1989, estallaron los nuevos movimientos anticomunistas en Europa central y del este, los qus pusieron término a las dictaduras burocráticas.

La crisis era profunda e irreversible en la URSS, convertida en superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial, como lo señalara Eric Hobsbawn.

> La relenización de la economía soviética era palpable. La tasa de crecimiento de casi todo lo que se contaba y se podía contar caía de manera constante de quinquenio en quinquenio desde 1970 en vez de convertirse en uno de los gigantes del comercio mundial, la Unión Soviética parecía estar en regresión a escala internacional, de hecho, hacia los años setenta estaba claro que no sólo se estancaba el crecimiento económico, sino que incluso los indicadores sociales básicos, como la mortalidad, dejaban de mejorar.[5]

Estos cambios en la economía y la vida de la población en el "socialismo realmente existente" terminaron por minar la credibilidad en el sistema. En la decadencia y el desmoronamiento final del comunismo soviético influyeron otros factores. Desde dentro, la descomposición de la organización política y económica proveniente del partido-Estado, que actuó como causa y efecto, generando una difundida corrupción de los cuadros dirigentes, convertidos en la nomenklatura, conocida en 1980. Desde fuera, las crisis económicas del sistema capitalista repercutieron, durante las últimas décadas, en la Unión Soviética, por su mayor relación con la economía mundial, lo que no sucedía antes. En este marco, aquella gran potencia debía atender simultáneamente sus problemas internos, propios del sistema, y los emanados de la economía mundial, que repercutían en ella.

La URSS presentaba su principal debilidad en los países satelizados de Europa oriental, donde se desencadenó una sucesión de crisis, que culm naron en la década de los ochenta con la destrucción del sistema. En el interior de la URSS, había transcurrido el estancamiento, durante el decenio de Brezhnev, que dio paso al ascenso

[5] Eric Hobsbawn. *ibidem,* pág. 469.

de Gorbachov en 1985, quien denunció dicho proceso desde una posición reformista. Pero debe tenerse presente que fue, precisamente, en ese período de estancamiento que se produjo una maduración crítica tanto en el pequeño grupo que formaba la cúpula dirigente cuanto en un ámbito más grande, integrado por las capas con capacidad intelectual y alta calificación técnica, que hacían funcionar la sociedad y el Estado, de donde provenía entonces el liderazgo, que pasaba por la universidad, el trabajo y el partido. Esa fermentación en los días de Brezhnev facilitó la giasnost.

Gorbachov, ante el asombro del mundo, puso término a la guerra en Afganistán, apaciguando la Guerra Fría y trayendo consigo una considerable popularidad en occidente. Abordó los cambios en los sistemas político y económico a través de la *giasnost* y la *perestroika.* Por la primera de éstas se estableció un nuevo sistema político, regulado constitucionalmente, que suponía la transferencia del centro de gobierno del partido al Estado, el fin del partido único y de su función dirigente. Creaba asambleas representativas, que culminaban en una asamblea legislativa central, que controlaría a un poder ejecutivo fuerte. Por la segunda sólo alcanzó a esbozarse el nuevo sistema económico a través de pequeñas empresas privadas (cooperativas), dejando que las empresas estatales, que funcionaban con pérdidas, quebraran. Los resultados fueron fatales.

> Lo que condujo a la Unión Soviética con creciente velocidad hacia el abismo fue la combinación de giasnost, que significaba la desintegración de la autoridad, con una perestroika, que conllevó la destrucción de los viejos mecanismos que hacían funcionar la economía, sin proporcionar ninguna alternativa, y provocó en consecuencia el creciente deterioro del nivel de vida de los ciudadanos. El país se movió hacia una política electoral pluralista en el mismo instante en que se hundía en la anarquía económica. Por primera vez, desde el inicio de la planificación, Rusia no tenía, en 1989, un plan quinquenal.[6]

Este era un hecho muy significativo si se considera la importancia de la planificación en la historia de la URSS.

Entre los escombros del campo socialista, la Guerra Fría llegó a su fin, pero Gorbachov no salió victorioso, sino que sintió el vacío en sus pies. Durante cinco años, promovió una política exterior de entendimiento con las grandes naciones, particularmente con Estados Unidos, puso en ejecución reformas substanciales en el orden económico y social, controló a los integrantes del politburó que se oponían a los cambios y resistió la división de la URSS. Disolvió el Pacto de Varsovia y sembró las semillas de la democracia, retiró las Fuerzas Armadas soviéticas de Europa cen-

[b] *Ibidem*. págs. 479 y 480.

tral y oriental, decidiendo el fin de la Guerra Fría. Fin ese momento se precipitó la culminación de la crisis. Gorbachov estaba solo frente a una mayoría de dirigentes del partido que pretendían deshacerse de él para evitar el derrumbe del imperio. En agosto de 1991 se intentó el golpe de Estado, pero esta acción fracasó. El factor decisivo de este resultado fue, al parecer, la intervención del presidente de la República Rusa, Boris Yeltsin, quien acaudilló la resistencia contra el golpe; pero él también fue quien precipitó, desde posiciones de derecha, la fragmentación de la URSS y la caída de Gorbachov. Este renunció al cargo que desempeñaba en un Estado que había sido destruido, en diciembre de 1991.

Durante el gobierno de Mijail Gorbachov, a fines de los años ochenta, se rehabilitó a la mayoría de los oponentes a Stalin, entre ellos a Lev Karnenev, Grigori Zimoviev y Nicolai Bujarin. En el año 2000, la justicia rusa había rehabilitado a más de 515 mil víctimas de la represión bajo el régimen soviético; a partir de 1991, había revisado los antecedentes de 700 mil personas en los últimos nueve años. En 1999 se revisó, a título postumo, el proceso de un hijo de Stalin, fallecido en 1962, quien había sido condenado en 1955, dos años después de la muerte de su padre, a ocho años de prisión por '"propaganda y agitación antisoviética", cargo con que se encarceló a millones de personas. En el año 2000, la Asociación Defensora de los Derechos Humanos Memorial estimó en 18 millones la cifra de muertos por la represión durante el régimen soviético. A ellos han rendido público homenaje los sobrevivientes de los "gulags" cerca de la Lubianka, sede de los servicios de seguridad rusos.[7]

En suma, en la década de los ochenta. Gorbachov puso en el tablero la discusión sobre el stalinismo, porque muchas de las consecuencias materiales y morales de su prolongado predominio no habían sido finiquitadas. Las modificaciones que se operaron en la sociedad soviética no podían ser consideradas ya en la vieja e improcedente perspectiva, esto es, como un movimiento lineal e inexorable hacia las metas trazadas y por las que lucharon Lenin y los bolcheviques, como el "único camino justo" por disposición de la "preclara vanguardia". Ni mucho menos como la continuación de "la sabia política aplicada por Stalin". Todas esas perversiones de la teoría marxista fueron aventadas al estercolero de la historia, tanto por los cambios experimentados en los partidos comunistas de occidente como en los de la propia Unión Soviética y sus países satélites.

La historia siempre depara sorpresas en los acontecimientos del porvenir. ¿Quién hubiera pensado que el 26 de julio de 1988, el doctor Yuri Alfanasiev hiciera la siguiente afirmación en el diario *Proveía*[1]*?:* "No considero que la sociedad que he-

[7] Diario *El Mercurio.* I de no\ iemhre de 2000. Santiago.

mos creado sea socialista, incluso deformada (pues)[...] la 'deformación' concierne a las bases vitales, al sistema político y, decididamente, a todos los demás". Para entender aquella afirmación, hay que determinar los rasgos fundamentales del socialismo. Desde luego, la cuestión de la propiedad sobre los medios de producción, la liquidación de la enajenación del pueblo respecto al poder y a la propiedad, el desarrollo económico y la justicia social, las libertades civiles, los derechos humanos y la democracia, todo ello integrado en una nueva sociedad.

Este notable hombre de ciencia soviético así lo estableció y agrega: "Estoy convencido por el análisis histórico que he realizado, que no solamente no existe la propiedad del pueblo sino ni siquiera la propiedad estatal. La propiedad en la URSS se encuentra en manos del aparato del Estado. A pesar de los enormes esfuerzos que hemos realizado no ha podido liquidar la enajenación del pueblo respecto al poder y a la propiedad. Entonces, afirmar que la sociedad soviética es socialista y no ha liquidado la enajenación es, por lo menos, paradójico".[8] Estas afirmaciones se formularon en Moscú y se reprodujeron en el extranjero. Quienes conocen a Yuri Alfanasiev afirman que invariablemente éste mantuvo una postura cívica y profesional, honrada y valiente. Es un prominente historiador y promotor de la perestroika que tuvo lugar en la URSS. Fue rector del Instituto de Archivos Históricos de Moscú, así como enjundioso y mordaz crítico de Stalin, el stalinismo y sus secuaces. Por último, renunció a su militancia en el PCUS antes del XXVIII congreso general celebrado en 1990. He querido reproducir estas opiniones de un destacado comunista ruso para dejar constancia de la validez del juicio contenido en la Fundamentación Teórica del Programa del Partido Socialista de Chile de 1947, es decir, un documento escrito 42 años antes, que he analizado en la primera parte de este libro.

Europa: la tercera vía

En 1999, la socialdemocracia europea, que ejerce el gobierno en los principales países de ese continente, propuso un conjunto de ideas esquemáticas como orientación de sus políticas hacia el siglo XXI. Estas ideas han emanado del llamado nuevo centro del Partido Socialdemócrata de Alemania, representado por el canciller Gerhard Schroeder, y la tercera vía. definida por el Partido Laborista de Inglaterra, repre-

[8] Jorge Ramírez, de *Novostt,* Moscú. 19 de enero de 1989. reproducido en *Excelsior,* México, de 20 del mismo mes y año.

sentado por el primer ministro Tony Blair. No se trata de un modelo europeo ni la transformación de la Unión Europea en un super Estado, sino apunas la aproximación a una nueva política socialdemócrata en el camino de la integración, dirigida a favor del desarrollo social y el empleo, así como contra la destrucción del medio ambiente y la delincuencia. Europa exige una reforma que modifique las políticas obsoletas y ponga término al derroche y el fraude, generando instituciones más eficaces y transparentes. Para eso, se auspiciarán reuniones ministeriales, conversaciones con sus dirigentes políticos, con expertos, pensadores de amplias miras, foros políticos y, en general, reuniones de discusión para impulsar la modernización con vistas al siglo xxi.

El documento "Europa: la tercera vía" se dio a conocer en castellano en junio de 1999. Con posterioridad, en noviembre del mismo año se realizo el vigésimo primer congreso de la Internacional Socialista en París, con la concurrencia de 1.200 delegados de numerosos países, entre los cuales destacaron personalidades como Tony Blair, primer ministro de Inglaterra, Gerard Scliroeder, canciller de Alemania, Massimo D'Alema, primer ministro de Italia, Lionel Jospin, primer ministro de Francia, Antonio Gutiérrez, primer ministro de Portugal, Ehud Barak, primer ministro de Israel, Yasser Arafat, líder de Palestina, Fernando de la Rúa, presidente electo de la Argentina. En suma, estuvieron presentes 11 jefes de gobierno y también ex gobernantes, como Felipe González, de España, y Jaime Paz Zamora, de Bolivia. El debate exhibió las diferentes posiciones de los partidos integrantes de la Internacional Socialista. La más notoria fue la oposición franco-británico, entre los defensores de la intervención del Estado en la economía de los primeros y los defensores del liberalismo de los últimos.

Dicho documento sirvió como instrumento de trabajo, obligando a la delegación francesa a presentar su propia propuesta, conocida como "Hacia un mundo más justo". Al mismo tiempo, se analizó un documento de los italianos y el informe de la comisión presidida por Felipe González con c! nombre de "Progreso global". De todas estas propuestas se obtuvo una síntesis aprobada como Declaración de París. Ésta establece una "relación crítica" con el capitalismo, desde un punte de vista "plural", tratando de conferir "una dimensión .ocial a la mundialización", pero promoviendo al mismo tiempo "el espíritu de empresa", defendiendo "un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades" y diferenciando "el mercado y la democracia". Por encima de las diferencias existentes se confirmaron los consensos sobre los valores comunes: la democracia, la libertad, la justicia social y la solidaridad.

Desde la izquierda, Jospin puso el énfasis en la necesidad de regular el mercado, definiendo como objetivo el pleno empleo dentro de la cohesión social y la re-

ducción de las desigualdades. Definió muy bien el objetivo central. Dijo: "Si cambiar de sociedad ya no *está* en la orden del día, cambiar la sociedad debe seguir estándolo". Este es el viejo ideal de la socialdemocracia, entendido como reformismo. Blair, por su parte, criticó las resistencias al cambio de los "conservadores" de la izquierda, que "defienden intereses corporativistas y siguen atados a la burocracia y a viejos métodos de trabajo". Gerard Schroeder destacó, a su vez, "los valores eternos de la socialdemocracia que no abandonaremos jamás", conjuntamente con "los enfoques nacionales diferentes". En suma, la Internacional Socialista asumió su pluralidad y se abrió hacia el Partido Demócrata de Estados Unidos, al que invitó al diálogo. La socialdemocracia tiene conciencia que no podrá, por sí sola, aunque preside los gobiernos de casi toda Europa, lograr el cumplimiento de su agenda modernizadora, por lo que abre el diálogo y el trabajo conjunto con las fuerzas del progreso de todo el mundo.

La socialdemocracia europea de hoy representa valores comunes de siempre, de toda su historia. Ellos son, entre otros, equidad y justicia social, libertad e igualdad de oportunidades, solidaridad y responsabilidad hacia los demás. Hacia los más pobres. Es cierto que éstos son principios genéricos y abstractos, que se cristalizan en políticas realistas, que enfrentan al futuro, a las exigencias del siglo xxI. Estas políticas forman parte del proceso de modernización, a la adaptación del Estado y la economía a los cambios objetivos de la sociedad. En un concepto de *economía social de mercado,* nueva modalidad del capitalismo con alto desarrollo, los gobiernos deben regular y complementar, por medio de la acción política, la función esencial de los mercados. En la comunidad europea, la socialdemocracia comparte un destino común, por lo que promueve el empleo y la prosperidad, ofrece a todos los individuos la oportunidad de desarrollar sus potencialidades, a combatir la exclusión social y la pobreza, a reconciliar el progreso material con un desarrollo sostenible del medio ambiente y con su responsabilidad hacia las generaciones futuras, a enfrentar la delincuencia y las drogas. Busca hacer de Europa una fuerza superior de civilización en el mundo.

La experiencia es, para la socialdemocracia europea, fuente de aprendizaje, según lo señala en el documento mencionado. Parte de sus logros históricos al tiempo que desarrolla respuestas realistas para los nuevos problemas que se presentan en el mundo de hoy en las sociedades y las economías. Para eso, mantiene sus principios teóricos fundamentales, pero afirma su voluntad de cambiar sus instrumentos políticos tradicionales. En este sentido, formula críticas a sus prácticas del pasado. Entre ellas, la promoción de la justicia social se confundía, en ocasiones, con la imposición de la igualdad de salarios, sin valorar apropiadamente la importancia

de premiar el esfuerzo y la responsabilidad. El objetivo de conquistar la justicia social se identificaba con niveles cada vez más altos de gasto público, en circunstancias que la prueba para la sociedad es el grado de eficacia en la utilización de ese gasto y la medida en que las personas se ayudan a sí mismas. Ésta crítica se profundiza, al reconocer que la idea de considerar al Estado como rectificador de las fallas del mercado condujo, muchas veces, a la intervención exagerada de los gobiernos. Este comportamiento subordinaba excesivamente valores individuales, como los logros personales, el espíritu emprendedor, la responsabilidad individual y el sentido comunitario a los requerimientos de bienestar colectivo o social.

La socialdemocracia se plantea hoy un nuevo plan de trabajo para la izquierda europea, que conjuntamente con enfrentar la economía global mantenga la cohesión social ante la incertidumbre que perciben los ciudadanos. En esta tarea contribuyen la diseminación del paro y la extensión de las oportunidades laborales, al término de las dos últimas décadas del siglo xx, en las que predominó el *laisser-faire* neoliberal. Pero no pueden surgir naturalmente, en su lugar, la reformulación de políticas de los años setenta, fundadas en el intervencionismo estatal pesado y el déficit público. Los cambios experimentados por las economías europeas y las relaciones económicas internacionales exigen la reevaluación de las antiguas políticas y la formulación de las nuevas. Los desafíos son muchos. El alto desempleo hace necesario un nuevo programa de gobierno; la apertura del mercado y la competitividad son esenciales para estimular la productividad y el crecimiento, condiciones indispensables para impulsar el empleo, lo que supone a su vez liberalizar el comercio mundial. La política tributaria debe ser equilibrada, porque ella puede desempeñar un papel decisivo en la obtención de objetivos sociales, luchando contra la evasión tributaria.

Esta tendencia europea sostiene, al finalizar el siglo xx, que la demanda y las políticas laborales son concordantes, es decir, que van juntas, no como en el pasado que eran alternativas. Ahora, muchas decisiones políticas tienen impacto sobre las condiciones de aquéllas. Incorporar el bienestar a los programas laborales incrementa los ingresos de los que se encuentran desocupados y mejora asimismo el suministro de fuerza de trabajo del que disponen los empresarios. Las nuevas políticas económicas de la socialdemocracia europea combinan el incremento de los ingresos de los trabajadores, después del pago de impuestos, con la reducción de los costos laborales, no sala.iales. por medio de reformas de los sistemas de seguridad social y de la estructura contributiva más favorable con el empleo. Las economías buscan la flexibilidad para obtener niveles más altos de crecimiento y más trabajos, evitar los vaivenes y asegurar un crecimiento estable. Éste es un proceso

de transición desde la producción industrial a la economía del futuro, basada en el servicio y en los conocimientos, que ofrece a Europa la oportunidad de alcanzar a Estados Unidos, con una expectativa más satisfactoria.

Este proceso compromete, primero, a todos los países avanzados, pero también, en el marco de la globalización, a los países en vías de desarrollo. La socialdemocracia actual declara no ser neoliberal, sino que promueve, por el contrario, un Estado activo, con un rol de nuevo tipo, con un papel clave en el desarrollo económico, cuya prioridad más importante debe ser la inversión en capital social y humano. Esta última perspectiva tiene relación con la educación, cuyo marco de cualificación permita a los trabajadores alcanzar todo su potencial. Para eso, deben tener la oportunidad de acceder al trabajo por medio de un entrenamiento vocacional cualificado. El Estado, conjuntamente con los empresarios, los sindicatos y otros agentes sociales, deben asegurar una educación suficiente y la formación para alcanzar los requisitos del mercado laboral. En Europa, particularmente en Alemania e Inglaterra, se han realizado programas de capacitación para el trabajo, los que también se han reproducido en varios países latinoamericanos. Sin perjuicio de lo anterior, debe promoverse una reforma de la educación, en todos sus niveles, de modo que estos guarden una mayor relación con el trabajo, así como los programas de capacitación deben llevarse a los desempleados y a las familias sin trabajo.

La socialdemocracia defiende especialmente a la pequeña y mediana empresas, porque en ellas descansa el mayor potencial para el crecimiento económico y nuevos trabajos en la sociedad del futuro. En este sentido, estimula a los trabajadores por cuenta ajena como a los que lo hacen por cuenta propia, a los profesionales, artesanos, expertos en informática, en la cultura y en el deporte, para emprender iniciativas económicas. Los anima a correr riesgos, reduciendo las tasas impositivas y, en general, facilitando sus actividades. En un ámbito más amplio, promueve la apertura de mercados de capital para que las empresas puedan acceder con facilidad al financiamiento. Asimismo, fortalece la relación entre las empresas y la ciencia para asegurar que la investigación sirva para desarrollar y crear nuevas industrias de alta tecnología.

Contrariando errores del pasado, la socialdemocracia se propone también asegurar, desde el gobierno, finanzas públicas sensatas, aunque no descarta los déficit gubernamentales en períodos de baja de la economía y el endeudamiento para financiar una mayor inversión pública, a fin de reforzar el sector de suministros, dejando en todo caso que funcionen los estabilizadores automáticos. No obstante, considera que no es aconsejable utilizar el gasto deficitario para superar debilidades estructurales en la economía, que dificultan el crecimiento más rápido y el aumento

del empleo. Tampoco debe tolerar niveles excesivos de deuda pública, porque ellos constituyen compromisos obligatorios para las nuevas generaciones y podrían tener efectos redistributivos indeseables. La amortización de estas deudas, como porcentaje del ingreso nacional, limita la inversión en otras prioridades, como gasto social e infraestructura.

El Estado, según la socialdemocracia, no puede ser sólo el receptor pasivo de las víctimas del fracaso económico, sino que debe constituirse en agente de empleo activo. En un sistema, el capitalismo, que genera cesantía, se desencadenan efectos negativos en el campo del trabajo. En efecto, quienes no han trabajado nunca o que están desempleados mucho tiempo pierden las habilidades necesarias para competir en el mercado laboral. El desempleo prolongado es fuente de pobreza y termina por marginar de la sociedad a los que lo sufren, por cuya razón es necesario reformar el sistema estableciendo instrumentos de ayuda, con espíritu solidario. Por ejemplo, los seguros de cesantía, en un marco de integración de la seguridad social con la responsabilidad personal. Un verdadero sistema de seguridad social debe comprender la ampliación de la igualdad de oportunidades, por encima de la raza, la edad y las discapacidades, y debe luchar contra la exclusión social y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Todos los instrumentos de política social deben mejorar las oportunidades de vida, estimular la autoayuda y la responsabilidad personal.

Las grandes conquistas sociales logradas por los trabajadores durante el siglo xx, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), están experimentando modificaciones, ajustando su financiamiento, para adaptarse a los cambios producidos en el modelo de empleo y la expectativa de mayor vida, sin sacrificar por supuesto el principio de solidaridad. Dichas modificaciones afectan a los sistemas de salud, de pensiones y de subsidios por incapacidad. La flexibilidad en el empleo, que reclaman las empresas, se compensa con seguros de cesantía, vigentes desde mucho tiempo en Europa. La socialdemocracia enfrenta los períodos de desempleo producido en las empresas con cualificaciones y la promoción del desarrollo personal, mediante programas especiales de capacitación, empleos a tiempo parcial, con menores remuneraciones, como transición de la cesantía al trabajo normal, de tiempo completo. Estas políticas se complementan con la regulación de los impuestos y cotizaciones para sus servicios sociales de largo plazo, de modo de promover el interés por trabajar constantemente.

En realidad, la tercera vía, rectificando la tradición socialdernócrata, pretende desde una posición crítica alimentar a la corriente de centro-izquierda más moderada de Europa y de algunos otros países del mundo. Esta posición supone el aban-

dono de las anteriores posiciones de la izquierda que ponían una excesiva confianza en la acción del estado y de la derecha que dejaban todo entregado al "libre mercado". Esta nueva concepción política ha sido defendida, no solo por algunos gobiernos de países desarrollados, sino también por destacados teóricos como Anthony Giddens. Por el contrario, el notable socialista Perry Anderson apunta que: "...adaptando la máxima de Lenin según la cual 'la república democrática es la armazón ideal del capitalismo'. Podríamos decir que la tercera vía es, hoy en día, el mejor armazón ideológico del neoliberalismo". En este sentido, Tony Blair trató de convencer en 1999 a la Internacional Socialista de que se cambiara el nombre por el de Internacional de Centro-izquierda para conseguir la incorporación del Partido Demócrata de Estados Unidos. Este mismo dirigente del nuevo laborismo sostuvo también que la tercera vía debe "reafirmarse como un partido de valor[...] la creencia en la comunidad, la oportunidad y la responsabilidad".

Por lo tanto, si la idea del socialismo sobrevive en la ideología de la tercera vía, como alude Alex Callinicos, sólo lo hace como un socialismo ético, que confiere prioridad a la comunidad, agregando que de hecho "parece que hay tres líneas principales en la ética de la tercera vía: primero, la comunidad, el concepto que lo engloba todo; segundo, la igualdad, y en tercer lugar la extensión de la idea de comunidad a la esfera internacional a través de una política exterior 'ética' y de la doctrina humanitaria". La invasión de Irak confirma este principio. En este marco se da prioridad al deber por encima de los derechos y se pasa a las políticas represivas sobre la base del afianzamiento institucional, tanto de la economía neoliberal como del autoritarismo "moral", así como de la justificación del desempleo por fallas morales individuales y por la "cultura de la pobreza". La tercera vía, por último, rechaza la crítica socialista del capitalismo y acepta plenamente el mercado. "No se nos tiene que ver nunca más, dijo en 1999 el ministro de hacienda laborista de Inglaterra, Gordon Brown, como contrarios al éxito, a la competitividad, al lucro o a los mercados".

De acuerdo a este neoliberalismo, sostenido por la tercera vía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionan a los gobiernos para que cambien la carga fiscal de impuestos directos a indirectos. Esta política se combina con la sucesiva restricción de los gastos públicos, determinando la crisis de los servicios de seguridad social. Por eso, las aspiraciones igualitarias no se podrán obtener en economías neoliberales y la armonía "empresa y justicia" constituye un espejismo como también lo es la mantención de presupuestos de superávit, que fatalmente se convierten en deficitarios. Se trata en este caso de la negación artificial de la insta-

bilidad constitutiva de las economías capitalistas, sostenida por Marx y Keynes, Schumpeter y Hayek, como lo señala Alex Callinicos en su obra *Contra ¡a tercera vía*.

Chile: un debate en las cúpulas

En los últimos años del siglo xx, las cúpulas del Partido Socialista de Chile se ocuparon en revisar la fundamentación teórica de un programa, con el cual se proponen enfrentar el nuevo siglo. Un programa, como se sabe, comprende una parte teórica, como base de principios, y una parte concreta sobre propuestas en cada área de la realidad nacional e internacional. Así se formuló el último de los programas, que data de 1947. Con anterioridad al congreso ideológico, celebrado en 1997, se difundieron diversas reflexiones de personeros del partido y autores extranjeros como base de un debate interno, que se reprodujo en los cuadernos del boletín oficial del partido *El avión rojo*, en dos ediciones. Esta discusión se refirió exclusivamente a la parte teórica, sin avance alguno en la parte concreta. De dichos análisis comentaré los aportes de las tres figuras más importantes, como son Raúl Ampuero, Clodomiro Almeyda y Carlos Altamirano, utilizando sus propias palabras para asegurar la fidelidad de su pensamiento. En este intento de síntesis, procuraré presentar sus diferencias ideológicas. Ampuero y Almeyda fallecieron en 1996 y 1998 respectivamente.

En el debate sobre el nuevo programa participó Raúl Ampuero. el más destacado dirigente del Partido Socialista hasta fines de la década de los sesenta. En su análisis denota desde el título la afirmación de continuidad, y no ruptura, pero sin negar la necesidad de cambios, para sostener lo cual pasa revista al desarrollo teórico del Partido. Deja constancia de que el programa de 1947 se formuló después de 14 años de su fundación, en medio de numerosos y profundos cambios surgidos entre las guerras mundiales del siglo xx. La alteración del mapa r Utico de Europa, la guerra civil española, el comienzo de la descolonización en el tercer mundo, la consolidación de la dictadura estalinista en la Unión Soviética, el ascenso y caída del fascismo, la consagración del marxismo-leninismo en la Tercera Internacional, entre otros. El Partido Socialista de Chile ejerció siempre un enjuiciamiento crítico a las experiencias comunistas.

Revaloriza su autonomía política y destaca la ¡dea de la democracia como una radical socialización del poder en todas sus formas. Como substancial extensión del campo de decisiones del pueblo y del autogobierno, que busca la superación de los privilegios de clase y contribuye a emancipar las fuerzas del trabajo, asegurando el

advenimiento de los cambios necesarios en la sociedad. Esta concepción de la democracia subraya el carácter anticapitalista del Partido Socialista. Dentro de este marco compatibiliza la planificación y el mercado, sin los dogmatismos conocidos, hasta alcanzar un régimen socialista de autogestión, donde la empresa privada estuviese sustituida por la empresa autoadministrada por sus trabajadores. En el proceso por esta democratización no pueden olvidarse los antagonismos de clase, como sucede hoy entre los "renovados".

Ampuero plantea que, como en la década de los cuarenta, debe tenerse presente también ahora los cambios inusitados en el escenario internacional, que coinciden con el restablecimiento de una democracia formal en Chile, después de largos años de dictadura. El colapso de los sistemas existentes en la mayoría de los países de Europa del este constata el fracaso histórico del "comunismo" y modifica las relaciones políticas en el mundo. Se derrumban las relaciones bipolares surgidas después de la Segunda Guerra Mundial y el bloque soviético se fragmenta, con desgarramientos sangrientos provocados por agresivos nacionalismos. Todo este cuadro daña la autoridad política de todas las tendencias socialistas, incluso de aquéllas que, como el socialismo chileno y otras, mantuvieron siempre una inquebrantable oposición al sistema soviético.

No obstante, la caída de los regímenes comunistas no ha traído consigo ni la paz ni la democracia. En el orden internacional ha emergido el dominio sin contrapeso de Estados Unidos, tanto en el orden económico como en los ámbitos político y militar. Por su parte, en los estados multinacionales del comunismo, como la Unión Soviética y Yugoeslavia, a la fragmentación ha seguido la guerra, encendida por viejas tendencias reaccionarias y añejos integrismos religiosos. En este cuadro de hegemonía mundial del capitalismo se agravan los fenómenos más alarmantes, como la contaminación del aire y del mar, la destrucción de la capa de ozono, la desaparición de especies, la desertificación de partes de la tierra, por una producción inspirada sólo en la persecución de la ganancia, con desprecio del equilibrio ecológico.

Esta realidad del mundo y. particularmente, de América Latina, es la que debe interpretarse con el método marxista, dice Ampuero, para formular un nuevo programa. Entender su dinámica sería ya un progreso, en cuanto permitiría anunciar una estrategia política capaz de conciliar el desarrollo científico-tecnológico con una nueva sociedad y una economía para todos. El prodigioso impulso dado a la producción por el avance del conocimiento científico se ha construido sobre la base del hambre y la degradación material y espiritual de gran parte de la población mundial, como fruto del modelo de consumo generado por el capitalismo. Esta situación

nos impone la tarea de diseñar de nuevo un programa alternativo inspirado en el socialismo, que coordine nuestra acción con la de otros pueblos, principalmente con los de América Latina.

No obstante, al emprender esa tarea, hay que tener presente que, cuando un partido revolucionario se propone identificar de nuevo sus fuentes y recomendar medidas concretas, irrumpen las resistencias de los intereses empresariales en el interior del país y de la diplomacia del mundo industrializado en resguardo de su propio crecimiento y el de las grandes corporaciones multinacionales. La respuesta correcta no vendrá del capitalismo "real", a través del falso enriquecimiento de toda la población (la política del "chorreo"), el mismo que en Chile y en toda América Latina ha traído consigo una pobreza creciente. La inmensa masa de pobres existente en nuestro país es el resultado de una política que premia la codicia e ignora la justicia social y la preservación del ambiente. Ampuero concluye afirmando que es necesaria la acción de un partido que estimule la presencia de los trabajadores en el campo político, como clase protagonista de la historia, y no como "gente" anónima, desclasada, carente de voluntad colectiva, inerte destinatar a de la filantropía privada o fiscal.

Al finalizar el siglo xx se derrumbó una mitología política y se cuestiona aquellas certezas sobre las cuales se fundamenta el pensamiento de la izquierda y su principal fuente: el marxismo. Tal es el meollo de la crisis de la izquierda en el mundo y, por cierto, en Chile. Este es también el punto de partida del análisis de Clodomiro Almeyda, destacado dirigente del Partido Socialista durante la década de los ochenta del siglo anterior, y marxista-leninista como Altamirano hasta fines de dicha década. En medio de esta crisis, Almeyda plantea que existe un vacío ideológico que dificulta la formulación de una alternativa frente al neoliberalismo y al neopopulismo. Ante esta situación de debilidad política formula la necesidad de levantar un proyecto de izquierda que retome, por una parte, el camino hacia formas más justas y humanas de convivencia social y que trascienda, por la otra, el simple reivindicacionismo sectorial.

Para comprender esta crisis es necesario visualizarla en el marco de la situación que vive el mundo. Es un período de reflujo en el desarrollo de \e. humanidad, en el que las fuerzas reaccionarias han tomado la ofensiva para sostener el orden establecido, intentando desprestigiar a los movimientos de izquierda, calificando sus ideas de arcaicas y fracasadas. Es un período de restauración, de 1997 hasta ahora, similar en su intención, al que vivió Europa tras la Revolución francesa, durante 30 años. Entre sus causas, Almeyda destaca el fracaso de las experiencias del socialismo "real", por su generación en escenarios caracterizados por el retraso económico y cultural, así

como en condiciones de un cerrado aislamiento internacional. Este fracaso anonadó la conciencia de los hombres de izquierda por la campaña reaccionaria de presentarlo como la caducidad del marxismo, aunque más bien confirma las tesis marxistas acerca de las precondiciones necesarias para la victoria del socialismo.

De otra parte, el desarrollo capitalista en los países avanzados o industrializados reveló en medio de crecientes y repetidas crisis estructurales, una sorprendente capacidad de adaptación a las nuevas condiciones generadas por los avances científico-tecnológicos de la posguerra, lo que le permitió incrementar a ritmo insospechable la productividad del trabajo. Desaparecería así la esperanza de la crisis terminal del capitalismo. La socialdemocracia europea, artífice del Estado de bienestar, contribuyó a hacer compartir por las clases trabajadoras los frutos del incremento de la productividad, aunque en los años setenta comenzó su agotamiento. Este debilitamiento del poder de la socialdemocracia sirvió al neoliberalismo como pretexto para proclamar la bancarrota del intervencionismo, de los proteccionismos (de los países dependientes) y de la asistencia social. Este fue otro golpe a la confiabilidad del socialismo [en su variante reformista].

La historia de los países de América Latina, durante esos mismos años, fue más trágica aún. Por una parte, se produjo la pérdida de las potencialidades progresivas del modelo desarrollista "cepalino", llamado también de desarrollo "hacia adentro" o "sustitutivo de importaciones", en medio de luchas violentas que terminaron en brutales dictaduras de derecha sustentadas en los mandos reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Fueron verdaderas contrarrevoluciones, como la que sufrió Chile desde 1973 con Pinochet. Estas desilusionantes experiencias dejaron a la izquierda latinoamericana desconcertada y sin proyecto claro, a pesar de que el neoliberalismo comienza a agotarse y la pobreza se extiende en forma creciente.

Para emprender esa tarea histórica hay que tener presente las enseñanzas del pasado inmediato. Almeyda las señala. La primera dice relación con la inviabilidad de la construcción de sociedades socialistas a corto plazo en países subdesarrollados (Mariátegui lo había advertido hacía medio siglo) y en el marco del aislamiento internacional. La segunda se refiere a que para lograr ese objetivo se requiere todo un período histórico y la lucha es más compleja y difícil de lo que se imaginaba antes. Por eso mismo, el movimiento de izquierda debe favorecer la generación de las condiciones económicas, tecnológicas y culturales para que pueda realizarse la utopía libertaria y justiciera del socialismo. Lo anterior no supone, por cierto, un socialismo "realista" y "renovado"', que sólo plantea la corrección de los excesos del capitalismo salvaje, sin afectar los parámetros fundamentales del sistema. Por el contrario, luchará en el corto plazo por los intereses reales de los trabajadores.

Almeyda resume algunas bases sobre las cuales construir un programa socialista y de nueva izquierda. El socialismo continúa vigente para él. No es efectivo que el capitalismo sea el mejor sistema económico, como lo sostienen ahora desde los neoliberales, pasando por el papa Juan Pablo II, hasta los socialistas "renovados". Por el contrario, el socialismo es la única respuesta válida para resolver los problemas de la sociedad contemporánea, insolubles en los marcos capitalistas. Se trata nada menos que la creciente brecha que separa cada vez más a los países desarrollados de los pueblos subdesarrollados, que concentra la mayor parte de la riqueza en un quinto de la población de la tierra y la pobreza en las otras cuatro quintas partes de ella. Esta relación se reproduce en términos similares entre la clase capitalista y la clase trabajadora en los países atrasados, como Chile.

La planificación progresiva de la actividad social y económica es el instrumento más idóneo para lograr los objetivos del socialismo. No es efectivo que sea el mercado el único medio para una asignación racional de recursos y la condición imprescindible para la creatividad de los hombres. Actualmente, en el "libre" mercado es la demanda efectiva la que determina lo que se produce. Pero ésta no refleja las necesidades reales, sino la capacidad adquisitiva de los dueños del dinero. El libre juego de las leyes del mercado conduce necesariamente a generar desigualdades e injusticias de todo tipo. La libre competencia favorece siempre al más fuerte, acumulando la riqueza, el conocimiento, la atención de la salud, el prestigio y el bienestar en un sector minoritario. En cambio, la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, los disvalores y las privaciones se concentran en la mayoría de la sociedad. Para superar esta realidad, el Estado debe promover, mediante la planificación, el bienestar general.

El Estado debe desempeñar, según Almeyda, un papel decisivo en dicho sentido. No es efectivo que deba cumplir sólo un papel subsidiario de la actividad privada. Por el contrario, le compete fijar las metas estratégicas, corregir los desequilibrios sociales, promover la justicia y la racionalidad y asegurar el desarrollo democrático. No puede aceptarse como definitiva la caricatura de democracia existente en Chile (herencia de la dictadura), considerada por los "golpistas" como institución terminal. Hay que luchar por la desalienaeión de la conciencia de los sectores populares, sometidos hoy a la clase dominante. El Estado requiere cambios para enfrentar el presente y el futuro, en la perspectiva histórica de América Latina.

En esta proyección histórica y conforme a la reiterada posición internacional del Partido Socialista, considera que la forma actual de los estados nacionales de América Latina no puede ni debe permanecer intocada en el tiempo. La crisis de este tipo de Estado afecta a todo el mundo. Pero más todavía en los países de la región,

donde esta división política contradice la trasnacionalización económica, política e ideológica que caracteriza a la sociedad contemporánea. El ideal bolivariano de unidad latinoamericana ha dejado de ser una utopía romántica, para convertirse en una exigencia de nuestros pueblos para subsistir con identidad en el siglo xxi. Este espíritu de integración no sólo representa ahorro de recursos en la mantención de costosos aparatos militares, sino superar también una de las peores amenazas para la paz y la democracia, como lo es el militarismo y el chauvinismo pseudo nacionalista.

La racionalización de las relaciones internacionales es otra de las necesidades surgidas del término de la Guerra Fría y la tendencia estadounidense a monopolizar el poder mundial. No es efectivo que el ideal de un mundo de paz, sin guerras, solidario y unido, que pueda disponer racionalmente en beneficio humano de los recursos del planeta, sea un sueño trasnochado y carente de viabilidad. En realidad, la humanidad avanza en aquella dirección. El socialismo, para desplegarse a nivel universal o, al menos, en términos continentales, debe levantar en alto la bandera del internacionalismo y de la solidaridad de los pueblos. Sin esta condición no se alcanzará la victoria. Los imperios, como el de Estados Unidos, tienen fatalmente su fin.

Carlos Altamirano rompe frontalmente con el pasado del Partido Socialista y, particularmente, con el extremismo preconizado por él mismo. Proclama su admiración por el portentoso desarrollo del capitalismo, válido por cierto en la quinta parte del mundo, el grupo de los siete, profetiza con entusiasmo que este sistema predominará, a los menos, durante todo el siglo xxI. Destaca que nacimos en el mundo del colonialismo y del imperialismo, donde el enemigo era Estados Unidos, pero que durante la década de los noventa del siglo xx el gobierno chileno (con su apoyo personal) imploró la incorporación de Chile al Tratado de Libre Comercio hasta lograr tan ansiada aspiración. Con alegre simplicidad, se pregunta qué ha sucedido para que dicha potencia, de enemigo principal se convierta en socio preferido. Al parecer cree que Chile resolverá sus problemas esenciales con este acuerdo de "integración", sin considerar para nada la experiencia. Es la misma ilusión del Presidente Frei Ruiz Tagle. que anunció su aspiración a la asociación con la Comunidad Económica Europea, como si el colonialismo y el imperialismo hubieran desaparecido.

La ruptura con el pensamiento central del socialismo chileno se confirma cuando sostiene además que las categorías marxistas han perdido gran parte de su valor y capacidad explicativa, lo que no sería un problema transitorio, sino definitivo. Destaca que las sociedades contemporáneas se encuentran en una mutación histórica que afecta a todos los dominios de la vida y a todas las latitudes de la Tierra. Es

la modernidad que se expresa en dos procesos fundamentales que cruzan toda la geografía del planeta. El proceso de posmodernización euro-norteamericano-japonés y el proceso de simple modernización del Tercer Mundo. El tema de la "modernidad", habría que agregar, encubre hoy los conceptos de desarrollo y atraso, que se usaban hace poco tiempo. La derecha lo emplea con fines propagandísticos de sus objetivos, como reducción del Estado en el orden económico, no así un el militar y policial, privatización de las empresas públicas, desregulación de la economía, dominio absoluto del mercado, riguroso mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos. Para ella, ésa es la modernización.

Altamirano reconoce esta manipulación de la derecha en los términos expuestos, pero le confiere al tema una gran relevancia, como si fuera el descubrimiento del siglo. Para él, la relación de avance y retraso, transformación y conservación, que representaba la izquierda y la derecha en el pasado, se ha revertido. La apropiación ideológica del término "modernidad" le ha servido bien a la derecha para justificar la dictadura. La democracia representaría el atraso (gobierno de Allende) y la dictadura la modernización (gobierno de Pinochet). En su hora se dijo, en efecto, que Chile se había modernizado completamente, sin mencionar la pobreza y los crímenes contra la humanidad. En honor a la verdad, debo reconocer que Altamirano es quien ha definido mejor el concepto de "modernidad", referida a toda una época, señalando las principales "cristalizaciones" de este período de la historia del occidente del mundo.

Estas "cristalizaciones" son la construcción de grandes estados y economías nacionales, la invención democrática, el modo de producción capitalista industrial, el método científico experimental, la secularización de la sociedad fundada en el nuevo modo de pensar racionalista instrumental y el conjunto de nuevas "idealidades" surgidas durante una época que comprende cinco siglos. Éstas últimas significan nación, libertad, igualdad, progreso, tolerancia, soberanía del pueblo, etcétera. Todos estos descubrimientos surgieron y cristalizaron durante la llamada Época Moderna, de matriz burguesa ilustrada, reconocimiento que Marx ya había hecho en la segunda mitad del siglo xix, pero que Altamirano no señala. De acuerdo a estos nuevos conceptos, es moderna la sociedad que reúna algunos requisitos fundamentales, como haberse industrializado, tener un sistema democrático consolidado, ser racional y secularizada, disponer de capacidad científico-técnica y haber internalizado los valores modernos señalados. Chile no es, por lo tanto, un país moderno porque no cumple a cabalidad con ninguno de estos logros de la "modernidad". Las sociedades que se encuentran en la "posmodemidad" están sustituyendo los estados nacionales por el Estado universal, las economías nacionales por la economía mun-

dial. Actualmente, lo local pierde autonomía ante lo global, pasando a destacarse la globalización, nuevo término de moda que disimula al imperialismo.

Como Alicia en el "país de las maravillas", el nuevo Altamirano, que viviera su exilio en Europa, describe deslumhrado las características de la vida en los países "posmodernos" o posindustriales. La modificación de la idea del trabajo por la del ocio, la reducción de la jornada de trabajo de 48 horas a 35 horas, de cinco a cuatro días (para absorber el desempleo, con pérdida de salario, que él no señala), la mayor producción de bienes y servicios por aumento de las fuerzas productivas. El mundo decimonónico, expresa, en que el hombre trabajaba 3 200 horas al año, que vivía 40 años y donde el 50% de la población activa laboraba en la tierra es radicalmente diverso del mundo de hoy en que el hombre trabaja 1 700 horas al año, vive 80 años promedio y donde sólo 3 a 4% de su población es agrícola. Un mundo feliz que nada tiene que ver con la inmensa mayoría de la población de la tierra y, particularmente, con Chile, que es uno de los países del mundo que tiene jornadas más largas de trabajo y peor distribución del ingreso.

En medio de este universo de fantasía, Altamirano se refiere, por último, al socialismo. Apuesta, desde luego, al capitalismo por todo el siglo xxI, por lo que considera que debe asumirse esta realidad. La ruptura con el capitalismo le parece una irrealidad. El socialismo deberá luchar por sus objetivos (los que no define ni precisa) en las actuales condiciones históricas. El nuevo proyecto socialista tiene que reafirmar el compromiso con la democracia. En su exposición reconoce los aportes del marxismo a la cultura y al desarrollo de la lucha de los pueblos, pero pone en duda su actualidad y vigencia, sin dar razones. Declara explícitamente que el Partido Socialista no debe definirse como marxista en las nuevas condiciones históricas. En su discurso analiza todos los desarrollos "maravillosos" que ha traído consigo el capitalismo, pero no menciona la pobreza, el signo degradante del capitalismo, tanto en los países avanzados (sociedades "posmodemas") como en los países atrasados (sociedades en modernización). Por lo mismo tampoco se refiere a la situación de América Latina ni de África, Asia y, al menos, algunas regiones retrasadas de Europa, es decir, a los países que componen más de las cuatro quintas partes del mundo, que viven en la pobreza, que fueron explotados durante siglos por el capitalismo imperialista y hoy por un nuevo colonialismo.

Por eso, Altamirano no percibe el destino del socialismo en el presente y el futuro, que precisamente se propone suprimir de raíz la pobreza. Con todo, es el más honesto de los "renovados" al sugerir el cambio de nombre del Partido Socialista e, incluso, su fusión con la Democracia Cristiana. ¿Por qué no? Nada, al parecer, los diferencia.

El "nuevo horizonte socialista"

En 1996, el Partido Socialista de Chile celebró su vigésimo quinto congreso general, en el que aprobó un documento político, que se ha presentado como una especie de réplica a la Fundamentación Teórica del programa de 1947. No es un documento programático, pero puede considerarse el llamado Nuevo Horizonte del Socialismo como la fundamentación teórica de un programa, que no se ha dado a conocer todavía, pero que se ha aplicado desde el gobierno durante más de 15 años. En un solo aspecto formal se parecen. En la breve referencia al marxismo, si bien en la Fundamentación Teórica del programa de 1947 se explica porque no anuló la Declaración de Principios de la fundación del partido, en 1933, en la que se reconoció al marxismo como método de interpretación y guía para la acción. Por encima de esta coincidencia aparente, quizá intencional, estos dos documentos son diametralmente distintos. La Fundamentación Teórica de 1947 es una interpretación marxista de la realidad nacional e internacional, al mismo tiempo que la definición de sus objetivos estratégicos y tácticos. El Nuevo Horizonte del Socialismo es, en cambio, una interpretación liberal, sin definición clara de dichos objetivos.

El Nuevo Horizonte del Socialismo se divide en cinco capítulos. El primero de ellos, titulado "Vigencia y sentido del socialismo'" afirma que este movimiento lucha por la libertad, la igualdad y la justicia, señalando además que estos valores expresan su radical compromiso con la democracia. Así a secas, en forma axiomática. La libertad del individuo sustentada como valor inalienable sólo está sujeta al respeto a sus congéneres, a las necesidades comunes de solidaridad, de justicia, de igualdad social y convivencia pacífica entre las personas y los pueblos. Prescinde completamente de la división de la sociedad en clases sociales y la lucha entre ellas, así como del Estado en tanto órgano de opresión de la clase capitalista, pretendiendo que aquellas idealidades que condicionan a la libertad se impondrán por la buena voluntad de los seres humanos.

La Fundamentación Teórica del programa de 1947 sostuvo, por el contrario, "como socialistas consideramos el concepto de libertad en relación con las condiciones de vida de la época. No se trata de la abstracta libertad de los filósofos ni de la libertad para la explotación de las masas preconizada por el liberalismo burgués". Continúa enseguida precisando que cada etapa del desarrollo histórico ofrece a los hombres determinadas posibilidades de libertad, dentro del amplio conjunto de relaciones objetivas que resultan fundamentalmente del régimen de propiedad y de producción. En este marco conceptual, es coherente la afirmación contenida en el tantas veces mencionado documento programático: "Las libertades que proclamó la

burguesía han sido, por eso, letra muerta para los que no disponen sino de su fuerza de trabajo". Esta afirmación no ha perdido su valor, por cierto, con el transcurso del tiempo y la experiencia vivida en las últimas décadas del siglo xx sino que, por el contrario, se ha acrecentado. Por último, la libertad y sus condicionamientos no basta sostenerlos en el papel e incluso en los textos jurídicos (como la constitución de Pinochet), sino que su práctica debe darle credibilidad política.

El documento del congreso general de 1996 complementa su vaga definición anterior con la afirmación de que el socialismo (preconizado por ellos) pretende alcanzar una organización social de pleno respeto a dichos valores. Prescindiendo de las repeticiones de las mismas ideas generales, como fines del proceso, habría que agregar que esa lucha tiene permanencia por la persistencia de las desigualdades que caracterizan al sistema capitalista, discriminando las oportunidades de los individuos en su inserción en la sociedad. ¿Nada más que eso? No. "Por ello, agrega, el humanismo que compromete nuestra razón de ser es aquel que arranca de un compromiso por la justicia, que abomina de las desigualdades existentes y que se funde en la reivindicación de una vida más bella y digna". Más adelante me voy a referir al humanismo que se menciona tan ligeramente en esta parte del documento.

No existe, según este documento, un curso lineal de la historia ni tampoco el futuro se programa de acuerdo a un plan preconcebido. Este es otro método de confundir las ideas. Es cierta la primera afirmación, pero es falsa la segunda como quiera que la planificación ha existido siempre, en menor o mayor escala, alcanzando un gran desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto en el capitalismo como en el socialismo realmente existente. En la guerra y la paz. ¿Por qué se sostiene esta falsedad? Para dar gusto al neoliberalismo, aunque en otro párrafo procura describir el "proyecto" socialista, quizás porque sus autores no quieren hablar del futuro, que supone "plan" y se quedan en el presente, que supone sólo "proyecto". Desclasados completamente, sostienen que "son los hombres y mujeres los que forjan su propio destino y el de la sociedad en que viven". Cada hombre y cada mujer y sin plan, aunque más adelante afirma que el proyecto socialista asume la lucha de los explotados, los oprimidos, los excluidos y los dominados. Pero además pretende representar al conjunto de la sociedad, en el vano intento de representar a todos sin lograr representar a nadie.

De acuerdo a su concepción social totalizadora en cuanto a que "su propuesta es también liberalizadora de todos aquellos que fundan su vida en la acumulación de riquezas materiales y en la demanda incesante de bienes de consumo suntuario", reconocen como fuentes de su pensamiento un conjunto de corrientes políticas muy amplio. Este pensamiento "socialista democrático", dice el documento, "se ha vis-

to enriquecido no sólo por su experiencia práctica, a nivel local y mundial, sino por la valoración de distintas corrientes que se incorporan a su cuerpo doctrinario". Su amplitud y heterogeneidad es mayor todavía al sostener que "el patrimonio y la propuesta socialista no se limitan a estas corrientes doctrinarias, reconociendo el aporte de cada una y el espacio para todas ellas en la conformación de un movimiento plural, que tiene como horizonte los principios de la igualdad, la libertad, la solidaridad y la autorrealización de los seres humanos". Estas fuentes explícitas son las siguientes:

1. El marxismo: sólo su crítica al capitalismo. Siguiendo la corriente de la socialdemocracia europea actual, se pretende renunciar al marxismo, reconociéndole por el momento sólo su crítica al capitalismo. "Desde luego seguimos asumiendo, dice, la crítica al sistema capitalista proveniente del marxismo". Nada más. El marxismo es, en la época contemporánea, mucho más que eso. El Partido Socialista de Chile asumió, desde su fundación en 1933, el marxismo como método de interpretación de los fenómenos sociales y como guía para la acción revolucionaria, de cuyo concepto derivó la autonomía en el análisis de la realidad nacional e internacional y en la elaboración de una estrategia de lucha, con una posición contraria al dogmatismo, considerando esta teoría como un pensamiento en constante discusión y enriquecimiento.

La caracterización precedente es una cuestión decisiva, vinculada con un problema fundamental de la lucha revolucionaria, que se refiere a las relaciones entre la teoría de clase y la conciencia de clase. Dicho de la manera más breve, si esa concepción estratégica no se convierte, en efecto, en la conciencia política de la clase trabajadora no lograría eficacia alguna en la lucha por el socialismo. Sólo un gran bloque de trabajadores educado en este sentido cumplirá su papel de fuerza motriz de la revolución socialista. Esta consideración es tan cierta que induce a la burguesía internacional a contribuir en la campaña interna de desinformación y tergiversación políticas que se realiza en Chile, con montañas de papel impreso, conjuntamente con las emisiones de radio y televisión, hasta llegar al "terrorismo intelectual", condenando a muerte al marxismo, olvidando la afirmación de Sarmiento: ¡Las ideas no se degüellan!

2. Todo el liberalismo político. Con el reconocimiento como fuente al liberalismo condiciona aún más la crítica marxista al capitalismo. En efecto, el documento expresa: "pero recogemos, con la misma fuerza, toda la tradición del liberalismo político". En el rescate de esta fuente ideológica no se limita, como se hizo con el marxismo, que se reconoció sólo su crítica al capitalismo, sino que se asumió todo el liberalismo político, como si se pudiera separar esta fuente del liberalismo eco-

nómico. Nada más lejos de las definiciones del Partido Socialista contenidas tanto en la Declaración de Principios de 1933 como en la Fundamentación Teórica del programa de 1947.

Para empezar, la palabra tradición significa, en su sentido natural y obvio, la transmisión, de generación en generación, de hechos históricos, doctrinas, leyes, costumbres, etcétera. Ahora bien, el liberalismo político, como fenómeno histórico, presenta dificultades para asumir una definición común, porque suele distinguirse diversas modalidades en el concepto. El liberalismo político surgió en los distintos países en diversos tiempos de acuerdo a sus desarrollos institucionales: en Inglaterra en el siglo xvn, en Francia y Estados Unidos en el siglo xvIII, en la mayoría de los países del continente europeo en el siglo xIx, en América Latina en ese mismo tiempo, a partir de la independencia de España, y en Rusia en el siglo xx (1905). Actualmente, el liberalismo político es el signo distintivo de la democracia representativa, en el mundo del capitalismo, de otras formas de democracia, como la directa, que preconiza el socialismo. De la democracia política, como la que existe hoy en Chile, de otras como la democracia económica y social que postuló Allende hasta su muerte.

Esta denominación tiene, por último, cierta indeterminación toda vez que el liberalismo puede connotar unas veces un partido político o un movimiento de este mismo carácter y otras veces una ideología o una simple meta (política o ética), como también una estructura institucional o la reflexión en torno a un orden estatal. En Chile, el liberalismo político ha estado siempre unido al liberalismo económico y se ha ubicado en la derecha, participando una y otra vez en los golpes militares, con excepciones individuales. En relación con este tema, véase en este libro el pensamiento de Valentín Letelier y Eugenio González, ambos rectores de la Universidad de Chile y los más cultos y brillantes del siglo xx en nuestro país. ¿Qué quiso decir el Partido Socialista con esta invocación al liberalismo como fuente doctrinaria? No lo sé, pero si sé que este término es antinómico con el socialismo, en su fundamento filosófico, toda vez que, en un sentido lato, el socialismo privilegia el interés social y solidario mientras el liberalismo privilegia el interés individual y egoísta en el hombre.

3. El humanismo laico. El documento agrega, como fuente, también, "... así como las concepciones del humanismo laico", contradiciendo al parecer al humanismo cristiano. Huele a las ideas abstractas de la masonería. Aquí también eludieron la referencia directa al humanismo que asume el socialismo chileno, a partir de 1947, en el que la Fundamentación Teórica de su programa adoptó una posición inequívoca al respecto. "El socialismo es, en su esencia, humanismo", expresa, preci-

sando enseguida su contenido y alcance. "A la actual realidad del hombre, mecanizado como simple elemento productor por las exigencias del utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción del hombre integral, en la plenitud de sus atributos morales y de sus capacidades creadoras". En este sentido, el hombre crea la historia, generando la estructura social que luego lo moldea, pero al mismo tiempo lucha por desarrollar las condiciones de su superación, con lo cual el hombre solucionará también su propia enajenación, porque es el creador de sí mismo. Como ya se expuso en la primera parte de este libro, el marxismo rechaza todas las formas de especulación metafísica acerca de la "esencia" del hombre, destacando que semejantes conceptos siempre suponen la aceptación injustificada de la veracidad absoluta de experiencias adquiridas por ciertas clases sociales en determinados períodos históricos, es decir, promovían estas experiencias a la categoría de principios objetivos e invariables. Por el contrario, proporcionó una interpretación científica del hombre activo en la sociedad.

Conviene remarcar ahora que, de acuerdo a la crítica y superación por Marx del mito filosófico de la "naturaleza humana", de la antropología especulativa, es posible distinguir en la palabra humanismo dos significados. Por una parte, un sentido filosófico, en cuanto concepción del mundo en la que la práctica humana es deducida de la esencia del hombre considerado como el fin supremo de la historia, opuesta a la teísta. Por otra parte, un sentido real, en cuanto concepción que afirma el valor del hombre y tiene por objeto, en los límites de una época histórica determinada, la satisfacción de sus necesidades vitales y aspiraciones de libertad, al tiempo que le atribuye la capacidad de construir la historia en persecución de sus propios fines. Es esta última connotación la que tiene precisamente el humanismo socialista en la Fundamentación Teórica del programa de 1947. Este documento diferencia explícitamente el humanismo socialista de aquellos que lo precedieron. "El humanismo de la revolución burguesa, señala, ha tenido que limitarse a las formas políticas y jurídicas y. aún dentro de ellas, se ha manifestado las en las leyes que en los hechos. El humanismo de la revolución socialista, que ha de eliminar la división de la sociedad en clases de intereses contrapuestos, tiene en cambio un carácter total".

Desde Protágoras, el sofista griego, que sostuvo que "el hombre es la medida de todas las cosas", hasta Marx, que afirmó "soy un hombre y nada de lo humano me es ajeno", se desarrolló una meditación sobre la naturaleza del hombre. "Hay un nuevo sentido, más categorial y sistemático del humanismo, que espira a una concepción del hombre liberado de la alienación a que está sometido. Inspirado en el viejo socialismo, Carlos Marx forjó una teoría de este nuevo humanismo. Esta teo-

ría forma parte importante del modelo socialista. En toda la obra de Marx se encuentra presente este supuesto de una revolución que cambiará cualitativamente la situación del hombre alienado. Pero en los *Manuscritos de 1844* esboza una teoría más específica. Nos habla allí Marx de tres fases del nuevo humanismo: el humanismo teórico, el práctico y el positivo. El humanismo teórico consiste en la superación de la fase teológica de la humanidad; el centro de gravitación del hombre no será Dios, sino la propia naturaleza humana. Esta superación de la teología había sido iniciada por Ludwig Feuerbach en sus aforismos sobre la filosofía del futuro, y Marx se inspira en él, pero superándolo a su vez. Esta superación tiene lugar en lo que Marx denomina el humanismo práctico. Este humanismo se corresponde con lo que antes veíamos que debe ser el comunismo... Una de las características del humanismo positivo es el desarrollo pleno de los individuos y de su conciencia a través de la satisfacción de todas sus necesidades y más allá de la sujeción al salario y al dinero".[9]

4. El cristianismo: ética y práctica política. En esta mixtura de fuentes no podía faltar el cristianismo, como quiera que en la dirección del partido se encuentra una generación de ex demócratacristianos. Por eso, en el documento en referencia se destacan "... los principios éticos provenientes de la tradición cristiana y la vocación transformadora del cristianismo popular". Planteada en esta forma tan genérica, no creo que contribuya a esclarecer los elementos que el Partido Socialista recoge y asimila del cristianismo. Actualmente está de moda hablar de ética, incluso por todos los criminales de la dictadura, por lo que conviene discurrir un poco sobre su contenido. Según el *Diccionario de Filosofía*, de Nicola Abbagnaro, la ética es considerada como la ciencia de la conducta, de la cual existen dos concepciones fundamentales: una que la concibe como ciencia del *fin* al que debe dirigirse la conducta de los hombres y de los medios para lograr *tal fin*, derivando tanto *el fin* como los medios de la naturaleza del hombre, y otra que la considera como la ciencia del impulso de la conducta humana e intenta determinarlo con vistas a dirigir o disciplinar la conducta misma.

Estas dos concepciones filosóficas, que se han entrelazado en forma diferente tanto en la Antigüedad como en la Época Moderna emplean lenguajes distintos. En el caso de la primera, se habla el lenguaje del ideal, al que el hombre se dirige a su naturaleza, esencia o substancia. En el caso de la segunda, se habla de los motivos o de las causas de la conducta humana o también de las diversas fuerzas que la

[9] **Ludovico Silva,** *Humanismo Clásico y Humanismo Marxista,* Caracas. **Monte Avila Editores, 1982, págs. 228 y 229.**

determinan y pretende atenerse al reconocimiento de los hechos, listos dos puntos de vista han traído consigo la confusión por el hecho de que ambos se presentan por lo común en forma aparentemente idéntica de una definición del bien, pero el examen de esta noción denota de inmediato la ambigüedad que contiene, ya que puede significar tanto lo que es (por el hecho de ser) como lo que supone deseo o aspiración. Estos dos significados corresponden a su vez a las dos concepciones de la ética ya mencionadas. En suma, la primera aserción significa que "la felicidad es el fin de la conducta humana, deducible de la naturaleza racional del hombre", en tanto que la segunda aserción significa que "el placer es el móvil habitual y constante de la conducta humana", estando siempre presente la distinción entre ética del fin y ética del móvil.

Herbert Marcuse se refiere al concepto de ética occidental, caracterizándolo con algunos rasgos especiales. Éstos son los siguientes: *a)* Predominio de la idea de la libertad en la acción y conducta del hombre; *b)* Legitimación por esta libertad de las normas éticas universales, por encima de cualquiera otra situación accidental, y *c)* Los objetivos éticamente legítimos del hombre son aquellos que implican el mejor desarrollo y satisfacción posibles de sus facultades. No obstante, la autorrealización individual está subordinada a las normas umversalmente válidas de la ética cristiana y de su secularización humanística y a las normas más específicas de la comunidad social y política en la que se vive. En la actualidad, los sectores dominantes sostienen que las relaciones básicas están organizadas de tal manera que los objetivos del individuo y su "esencia" pueden alcanzarse o, al menos, pueden razonablemente aspirarse a ello, en el marco de las instituciones de la sociedad establecida, las que pueden y deben ser mejoradas. Pero este perfeccionamiento, que puede implicar cambios a gran escala, no supone la negación de la sociedad establecida, sino sólo su expansión y crecimiento.[10] Este alcance de la ética fue consagrado por la Iglesia católica desde su unión con el poder del Estado, desde el siglo v de la era cristiana.

Desde entonces, toda filosofía que no acepte este supuesto previo es, desde el punto de vista de la ética occidental representativa, no sólo herética, en sentido estricto, sino también amoral. En otras palabras, desde que la ética cristiana, al ser adoptada por el Estado, dejó de ser una ética "oposicionista", y condenó como herejía a toda concepción que sostuviera la oposición irreconciliable entre las institucionalidades establecidas y la lucha por su transformación. S ¡n embargo, las filosofías "heréticas" han sobrevivido bajo formas diferentes, desde las escuelas

[10] Herbert Marcuse. *El marxismo soviético.* Madrid. Alianza Editorial. 1971. pág. 204.

gnósticas de los primeros siglos de la era cristiana, pasando por los cátaros y otras sectas espirituales radicales, hasta las filosofías sociales revolucionarias de la Época Moderna, entre las cuales destaca el socialismo. Estas últimas corrientes de pensamiento promueven la destrucción de las viejas instituciones para reconstruir la sociedad, para asegurar el auténtico destino del hombre, superando las contradicciones de clase, la explotación de los trabajadores y la opresión de los mismos. Ésta es la concepción del socialismo revolucionario.

Marcuse precisa con extraordinaria claridad esta ruptura en la ética occidental. "En la Época Moderna, la oposición, cada vez más secularizada, continúa en el interior de la tradición humanista. Los grandes materialistas y escépticos del siglo xvi, la extrema izquierda de la Ilustración y sus herederos socialistas y comunistas justifican su filosofía "subversiva" en términos del ideal humanista. El marxismo constituye una parte integral de tal tradición. El que Marx y Engels se consideraran a sí mismos como los herederos de la Ilustración, de la Revolución francesa y de la filosofía idealista alemana, era algo más que una expresión retórica. La *Libertad*, la *Igualdad* y la *Justicia* son términos claves en *El Capital* de Marx, y no es casual que su teoría económica esté precedida (en un sentido más que cronológico) por la filosofía humanista de la Ideología Alemana (1846) y de los Manuscritos Económico-Filosóficos (1844), a la que a su vez completa".[11] Después de estos comentarios, cabe preguntarse a que ética cristiana se refiere el Partido Socialista en sus fuentes doctrinarias: a la que surge de la voluntad de Dios, comprometida con el sistema capitalista, o a la que promueve el hombre, organizado socialmente, para transformar la sociedad.

Me voy a referir más específicamente a la segunda parte de esta fuente. Hay dos maneras de asumir "la vocación transformadora del cristianismo popular" en Chile. La primera, representada por Rodrigo Ambrosio, que sostuvo que para militar en la revolución no se requieren partidos, ideologías o símbolos cristianos, porque su lugar está en los partidos revolucionarios y que su ideología para hacer la revolución es la del proletariado. Parece obvio que Ambrosio reconoció entonces al marxismo como esa ideología revolucionaria y no reclamó, por cierto, una integración de ésta ni con la teología, ni con la doctrina social de la Iglesia católica.

Pero también es legítima la posición de quienes, como Bosco Parra, asumiendo plenamente las concepciones del catolicismo, teológicas y sociales, se plantean sólo la acción común en tareas prácticas. El tema no es nuevo toda vez que ha sido analizado, particularmente por los pensadores y políticos cristianos, a partir del sur-

[11] *Ibidem,* pág. 206.

gimiento de los partidos inspirados en la doctrina social de la Iglesia Católica. Entre ellos, destaca Jacques Maritain, quien preconizó un pluralismo, que algunos dirigentes de la izquierda cristiana replantearon como un pluripartidismo convergente, durante los años 1970-1973. La colaboración de cristianos y marxistas se plantea así desde el punto de vista de un pluripartidismo en el interior del movimiento popular (de la alianza de la izquierda). Sin embargo, la concepción de pluralismo sostenida por los católicos que predominan en la dirección del Partido Socialista es diferente, en cuanto no se postula el pluralismo de partidos, con programas afines, sino que se trata, por el contrario, de una convergencia de corrientes de pensamiento, cristiana y marxista, al interior de un solo partido, lo que ha sucedido en el Partido Socialista, donde se ha agregado a su pluriclasismo la pluralidad ideológica.

En el segundo capítulo, el documento define la posición del Partido Socialista sobre la democracia. Para eso, parte de una concepción neutral cesde el punto de vista social del Estado, de un descasamiento del poder. Prescinde de la definición clásica del Estado, así como de la lucha de clases, como lo señalara la Fundamentación Teórica del programa de 1947, cuando afirmó:

> Como órgano coercitivo, el Estado es un producto de la lucha de clases y su función consiste en defender, mediante la fuerza si es necesario, los privilegios de la clase dominante. Cuando los antagonismos de clase hayan desaparecido, el Estado en su actual carácter de aparato represivo carecerá de razón de ser.

Si alguna duda hubiera existido sobre la validez de esta definición, el golpe militar de 1973 y la dictadura consiguiente la disiparon completamente. En el "nuevo horizonte del socialismo" se define a la democracia como un valor absoluto y se caracteriza en sus rasgos generales, que por cierto no se dan hoy en Chile, por la sencilla razón de que la democracia no es una voz unívoca, indiferenciada desde el punto de vista de clases, sino que es una categoría histórica que guarda relación con las condiciones de vida y la organización social de cada época, desde la antigua Grecia esclavista hasta la moderna Europa capitalista, desde Aristóteles a Rousseau. Por último, Marx revaloriza la democracia.

Como ya lo señalé, la concepción de la democracia expuesta en el programa de 1947 y sostenida en la teoría y la práctica hasta 1973 se basa en el pensamiento de Marx, quien consideró a la democracia burguesa como formal poique ella reconoce ciertos derechos y libertades, así como cierto tipo de representación. Pero al mismo tiempo está limitada, en tales aspectos, por su carácter de clase y su sujeción a la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. El socialismo asume las conquistas democráticas alcanzadas en la sociedad burguesa, confiriéndoles

un contenido social que supera los límites que les impone ese carácter de clase, *y* desarrolla la representatividad hasta conjugarla con su sentido libertario. En un ámbito más amplio defiende todas las libertades y derechos en el marco del humanismo socialista. En la construcción del socialismo se considera también como instrumento apropiado a la planificación, hoy negada por el neoliberalismo. El "Nuevo Horizonte del Socialismo", aprobado en 1996, ha pretendido rechazar todo este planteamiento de la herencia yacente del Partido Socialista de Chile.

En el capítulo tercero del documento aprobado en el congreso socialista de 1996 se procura destacar en un breve resumen, la contribución del socialismo a la historia de Chile. En tal sentido, se describe este legado, de las luchas del pueblo chileno, mencionando un conjunto de personalidades, que culmina con Allende. Una de las pocas veces que menciona a los trabajadores es cuando destaca que el Partido Socialista les ofreció desde su fundación un instrumento político para transformar al país en beneficio de las grandes mayorías. Todo ello es cierto, así como también lo es el carácter democrático de la victoria de Allende en las urnas en 1970, aunque es por demás pobre, casi confuso y dudoso, el juicio sobre su gobierno, limitado sólo a que dio lugar "a un proceso inédito, que abrió paso a nuevas reflexiones en la izquierda progresista".

Por cierto que su gobierr,., es mucho más que eso. Fue un intento revolucionario que pretendió transformar a Chile en una democracia socialista, con el protagonismo de los trabajadores manuales e intelectuales, como el Partido Socialista lo venía afirmando desde hacía años, a lo menos desde 20 años, en que se había convertido en oposición al sistema dominante. Por otra parte, es falso lo que se sostiene en cuanto a que el gobierno de la Unidad Popular no fue un proyecto viable. El hecho de haber sido aplastado por las armas, como muchos procesos revolucionarios en el mundo, no le resta su viabilidad, aunque sí demuestra que él no pudo, ni puede, consolidarse pacíficamente, porque la contrarrevolución es siempre violenta. Ésta es una lección que debe aprenderse para enfrentar el porvenir.

En el capítulo cuarto, titulado "El cambio de época'", se discurre sobre esta materia. En el estudio de la historia se consideran las épocas como largos períodos en el tiempo como quiera que 4 mil o 5 mil años de historia se dividen en Antigüedad, Edad Media y Época Moderna, agregándose incluso la Época Contemporánea, cada una de las cuales comprende centenares de años, en los cuales las civilizaciones experimentan constantes cambios que afectan a los seres humanos, particularmente a los trabajadores. Por eso. ellos han tenido que enfrentar diversos desafíos que, en el orden social, significaron esclavitud, servidumbre y salariado respectivamente, entrecruzándose en el tiempo. Pero el "Nuevo Horizonte del Socialismo" define las

épocas como períodos más cortos, procurando ajustar sus políticas a los hechos que consideran "cambio de épocas". La Declaración de Principios de 1933 y la Fundamentación Teórica del programa de 1947, según el documento en referencia, acompañaron las luchas del pueblo chileno por décadas, respondiendo a una época de auge nacional y popular en el mundo y a la división de éste en dos bloques.

Los documentos citados tuvieron valor, según este razonamiento, sólo durante estas pequeñas épocas. Se agrega así: "La emergencia de los gobiernos de Reagan y de Thatcher en el capitalismo anglosajón, así como la debacle del socialismo real, simbolizan dramáticamente el inicio de un nuevo período histórico (¿Nueva época?) para la humanidad, que plantea a los socialistas nuevos desafíos". En una extensión de su análisis, señala además que "la caída del socialismo real, a fines de los ochenta, representa la culminación del fracaso histórico de una economía y un sistema político", aunque olvida que no ha caído todo el socialismo real, como la República Popular China, con más de 1 300 millones de habitantes, y otros países menores. Independientemente de la crítica al sistema soviético, el propio Partido Comunista es la principal fuerza política en Rusia, así como en otros países europeos del ex campo socialista.

Por otra parte, el capitalismo se ha mantenido en pie. Es cierto. La crisis del capitalismo pudo ser enfrentada mediante la redefinición de sus patrones productivos sobre la base de nuevas tecnologías y mediante la restricción fiscal y al ajuste radical del Estado de bienestar. Ello cuestionó las diversas variantes de este sistema, incluidas las experiencias socialdemócratas europeas. Pero estas afirmaciones tienen valor relativo, porque las crisis del capitalismo continúan siendo recurrentes y los trabajadores, a pesar de las políticas de ajuste aplicadas por la fuerza, conservan e incluso aumentan su participación en la distribución del ingrese, tanto a través de salarios como de la seguridad social, excepto en América Latina.

El capitalismo se ha mantenido en pie, pero no ha resuelto el problema de la pobreza, ni en los países desarrollados y mucho menos en los países subdesarrollados, porque este sistema se sustenta en la explotación de los trabajadores. En los países latinoamericanos, en los dos últimos años del siglo xx se ha incrementado la pobreza, de 200 millones a 224 millones, según la CEPAL, concluyendo que "En términos absolutos, el número de latinoamericanos y caribeños en siluación de pobreza es hoy más alto que nunca". (Segunda Conferencia Regional de Seguimiento de la Cumbre sobre Desarrollo Social). En estas circunstancias no puede afirmarse, como lo hace el Nuevo Horizonte del Socialismo "sólo nos encontramos ante un nuevo período del capitalismo: sólido en lo económico y con iniciativa en lo ideológico", agregando al parecer con secreta alegría el mayor peso del conocimiento en la

vida económica y social, la disminución de la gravitación de la clase obrera en los procesos productivos, el crecimiento de los servicios y una menor capacidad negociadora de los sindicatos. Todo este proceso, es cierto, se ha venido desencadenando desde la última posguerra, pero no tiene un valor absoluto, sino relativo, lo que obliga a los trabajadores a mantener su lucha permanente.

En el cambio de época anunciado "el rasgo principal que define esta mutación histórica en desarrollo es la globalización de la vida en el planeta en sus múltiples dimensiones: sociales, económicas, políticas y culturales". En el fondo, a través de esta concepción se esconde el fenómeno del imperialismo o de un nuevo colonialismo. La verdadera globalización se presenta en el grupo de los siete países más industrializados, desde los cuales se proyecta su dominación sobre el resto del mundo. No se puede percibir la globalización en estricto sentido en los países africanos y otros del mundo sumergido en la miseria, muchos de ellos todavía divididos en tribus y rivalidades por fundamentalismos religiosos, que luchan entre sí, dominados en todo caso por grupos de clase. Lo que sí hace el predominio del capitalismo es borrar las fronteras nacionales a favor de las grandes corporaciones o empresas trasnacionales, que aprovechan la apertura de los mercados del mundo y la absoluta libertad de movimiento del capital financiero. Las relaciones de intercambio comercial continúan produciéndose entre los países latinoamericanos, como Chile, productores principales de materias primas y algunos alimentos, y los países industrializados, productores de manufacturas y servicios de creciente importancia. Los tratados de libre comercio celebrados por Chile son meros instrumentos del funcionamiento de este sistema, sustentado en el viejo libre cambio.

La más grosera mixtificación, que sostiene el "'Nuevo Horizonte del Socialismo", es la afirmación de que en las sociedades del capitalismo del centro desarrollado del mundo (el grupo de los siete), el poder ya no radica exclusiva y ni siquiera principalmente en la propiedad de los medios de producción y de cambio, sino en la capacidad de prever y modificar opiniones, actitudes, conductas y patrones de consumo, es decir, en modelar la personalidad y la cultura. Este es un instrumento de dominación, pero su base de sustentación sigue siendo el poder de la riqueza, de la propiedad privada de las grandes corporaciones trasnacionales. De aquella afirmación se deriva otra igualmente falsa en orden de que el conflicto social y la lucha de clases han sido sustituidos por el poder del conocimiento, sin considerar este como la manipulación de éste contribuye a consolidar el dominio del capital y de las empresas, pero manteniendo la división de la sociedad en clases antagónicas. En este sistema capitalista el poder del conocimiento depende de esta división. En Chile, los profesionales universitarios, con iguales conocimientos, tienen asignado un

papel distinto en la sociedad, según la clase a que pertenecen y. además, experimentan un alto grado de desocupación los provenientes de los sectores sociales más bajos, a excepción de los que tienen un "'valor agregado" por su militancia en los partidos que, desde el gobierno, administran el sistema de dominación.

Esta confusa elucubración fue el producto de la fantasía de cien intelectuales orgánicos del capitalismo, entre los cuales el que menos ganaba, con cargo fiscal, era un millón de pesos mensuales. La elaboración de este documento se demoró un año, con un costo económico enorme. En cambio, la Fundamentaciór Teórica del programa de 1947 fue la obra de un solo militante, Eugenio González, intelectual orgánico del socialismo, realizada en un mes, con un sueldo bajísimo en esos años en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En este caso, reafirma su valor la expresión cervantina: "¡Más discurre un hambriento que cien letrados!"

Raúl Ampuero, a sólo meses de su muerte, en una mezcla de penetración psicológica e ironía, había enfrentado en su patético llamado al vigésimo quinto congreso general la vieja treta capitalista. Expresó entonces: "Algunos de nuestros intelectuales han acogido dócilmente la tesis de la muerte de las ideologías, a comenzar por la que sirvió de constante marco a la postulaciones del socialismo chileno. Sobre esta premisa se fundamentó el llamado a construir un partido "pluralista", de "ciudadanos", cruzado de tendencias o fracciones, donde el pragmatismo sería la fórmula rectora de la acción inspirada a su vez en un conjunto de "ideales" (o valores) genéricos y abstractos, sin apoyo en la vida real. Con este rumbo el partido derivaría fatalmente en un club de debates, en un ente benéfico, a mitad de camino entre la Sociedad Fabiana y el Ejército de Salvación". Una previsión cumplida en el mencionado congreso.

Por su parte, Clodomiro Almeyda. quien presidió el vigésimo quinto congreso general, no estuvo de acuerdo con todo el documento, como se dio a conocer públicamente. En carta dirigida al presidente de su partido, Camilo Escalona, hizo un balance de los aciertos y las debilidades de la posición aprobada.

En lo positivo (que él llamó activo) señaló la "articulación dialéctica" entre algunas ideas fundamentales, como democracia con socialismo, libertad con igualdad y desarrollo con justicia social. Según él, ese es el "nudo conceptual" con el que el Partido Socialista se ha hecho presente en la base social de la Concertación por la Democracia, en el parlamento y el gobierno, después de la unificación en 1989. En segundo lugar, aprueba la separación de aguas del pensamiento dogmático, que en el pasado él mismo había compartido, en cuanto a concebir la historia como un proceso lineal, y el socialismo como un intento de imponer desde arriba un determinado modelo de sociedad. Por último, le parece bien una mayor flexibilidad del

partido, que permita un nuevo tipo de relación con las masas, que no las manipule, sino que tienda a orientarlas y servirlas en sus luchas.

En lo negativo (que él llamó pasivo) señaló el bajo perfil de lo específicamente socialista, en la identificación del ideario y del proyecto partidarios. Por la simple razón de que el documento carece de una revisión adecuada de las contradicciones del capitalismo de hoy, que son insolubles dentro de este sistema, lo que confirma la vigencia del socialismo. Rechaza, por otra parte, la aceptación del liberalismo político como fuente del pensamiento socialista sin señalar cómo lo más valioso del ideario liberal y humanista se limita y deforma en el interior de una sociedad capitalista dominada por las leyes del mercado. Esta caracterización del documento envuelve también, agrega, una omisión de lo distintivo en el criterio socialista para enjuiciar lo absoluto y lo relativo que se anida en el liberalismo burgués. Objeta asimismo la abstracción del concepto de libertad (yo agregaría de igualdad y justicia) sin referirse a las condiciones que pueden hacerlas posible, sin aludir a lo que ocurre en los planos económico, social y político. Esta crítica se basa en el pensamiento de Eugenio González, expuesta medio siglo antes.

La crítica de Almeyda comprendió otros aspectos, igualmente significativos, como el débil enfoque internacional, cuando avanza la "globalización" en el mundo y progresa la integración económica y política en América Latina, la falta de articulación de la promoción de los derechos humanos a escala internacional con los principios de autodeterminación de los pueblos y de respeto a la soberanía nacional (un ejemplo claro es el bloqueo a Cuba por Estados Unidos y la ley Helms-Burton), la ausencia de juicio sobre las Fuerzas Armadas y sobre las indispensables transformaciones democratizadoras que el país necesita. No se articulan tampoco ideas de planificación y libre competencia, ni se precisa el papel reguiador del Estado, ni de las formas posibles de propiedad. Tampoco se menciona la protección del medio ambiente y, entre otras cosas, indica que el documento identifica "por los siglos de los siglos" al libre mercado como "'normalidad económica". Su carta, así como la de Ampuero, fueron al archivo de su partido.

Una actual lectura del marxismo

En medio de este movimiento se ha buscado también una nueva lectura del marxismo. Como todo proceso histórico, el desarrollo del marxismo ha experimentado diversas y sucesivas crisis, pero la de hoy es la más compleja y difícil de explicar, hasta el punto que muchos de ios exponentes de la "'renovación" del socialismo no

tengan, ante el acoso de los periodistas, otra respuesta, sobre qué rescatan del socialismo hoy, que la democracia y la libertad. La razón de esta confusión, más allá del oportunismo político, radica en el derrumbe de una parte del "socialismo real", del cual hacía cabeza la Unión Soviética. Un razonamiento simple identifica esa descomposición con el supuesto fracaso del marxismo, basado en el uso de este pensamiento como "ideología" sustentadora de aquellos sistemas sociales y políticos. Pero esta asimilación del marxismo clásico con la Revolución rusa es falsa, porque dicho proceso se desarrolló en forma diferente al pensamiento de Marx, como lo señaló oportunamente el socialismo chileno hasta 1973. Después del golpe militar de ese año, esta misma concepción ha sido sostenida por algunas de sus fracciones o tendencias.

El marxismo ha desempeñado en el movimiento obrero chilena una función decisiva. Por eso, si ahora se aspira a constituir una nueva izquierda, es necesario precisar previamente qué entendemos por marxismo, después de más de un siglo de la muerte de Marx, qué continúa vigente de esta teoría social y qué se puede dar por superado por la historia. El planteamiento de esta cuestión requiere una explicación a la luz de las leyes científicas. En efecto, si el marxismo es una expresión de las ciencias sociales debe experimentar cambios determinados por la evolución de los conocimientos científicos y de la realidad objetiva sobre la cual actúan. Este comportamiento es aplicable no sólo al marxismo, sino a todas las filosofías sociales, por lo que el socialismo chileno lo remarcó en su primera Declaración de Principios, al sostener que aceptaba el marxismo como método de interpretación de la realidad y guía para la acción, enriquecido y rectificado por el aporte del constante devenir social. Esta afirmación data de 1933 y, por lo tanto, no la inventaron los "renovadores" de hoy.

De acuerdo a lo anterior, somos socialistas al finalizar el siglo xx, es decir, más de sesenta años después de ftindado el Partido Socialista, en la medida que reconocemos que el marxismo mantiene su vigencia como una teoría científica, un instrumento de las ciencias sociales en el análisis de la realidad y una orientación en la lucha de la izquierda por transformar la sociedad o de la revolución social. Esta vigencia del marxismo no se contradice con el reconocimiento de la superación por la historia de algunas de sus tesis y conclusiones. Me refiero naturalmente al marxismo clásico y, por lo tanto, excluyo al marxismo-leninismo, considerado como la interpretación estalinista del marxismo, que trato separadamente en otro capítulo de este libro.

En relación con esta materia, cabe tener presente un notable ensayo del pensador marxista polaco Adam Schaff, titulado *¿Qué ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo?*, en el que plantea una nueva lectura de esta teoría social. Como él mismo lo señala, no se trata de una "defensa" ante los ataques contra el marxismo, si-

no de una nueva comprensión del mismo, en cuanto teoría social, separándola de su esfera filosófica, que también conserva su valor, pero que no analiza en el mencionado ensayo. Por el interés que contiene esta lectura del marxismo, lo sintetizaré y compararé con el pensamiento del socialismo chileno para ver cuánta sabiduría ofrece esta última elaboración teórica de los años treinta.

En suma, Adam Schaff presenta las tesis principales del marxismo que conservan su validez, es decir, que continúan teniendo un carácter creativo e innovador, tanto en las investigaciones científicas como en la labor práctica de los movimientos sociales de la izquierda. Expresa el filósofo polaco:

> Precisamente, por eso, no trato de crear una estructura del sistema del marxismo, porque a mi modo de ver ese sistema como tal no existe y Marx fue el primero en protestar ante los intentos de adjudicarle esa creación. Lo que pretendo hacer es reconstruir (o descubrir de nuevo) las tesis de Marx que responden a los retos de los tiempos modernos y que, por consiguiente, a pesar de tener una edad de siglo y medio, siguen conservando su juventud, frescor y carácter innovador.[13]

No se trata pues de un dogmático, sino del más libre intérprete, de un verdadero renovador, ajeno como el que más, del oportunismo político.

He aquí esas tesis marxistas plenamente válidas en la actualidad, según Schaff:

1. La teoría marxista de la alienación. Esta teoría es la base de todo el pensamiento marxista y reviste una notable originalidad, la que se aplicó a cuestiones sociales amplias, distinguiendo la alienación objetiva y la alienación subjetiva, "lo que hace de ella un instrumento cómodo en la investigación y en el análisis de distintos fenómenos de la explotación del hombre por el hombre"', así como es indispensable en la elaboración de la lucha práctica por la superación de esa explotación. De manera por demás sintética, se puede decir que la alienación objetiva consiste, según esa teoría, "en el hecho de que todos los productos del hombre, es decir, no solamente los bienes materiales que crea, sino también las relaciones sociales o los bienes espirituales, funcionan en un mecanismo social determinado que les impone una existencia determinada"'. De acuerdo a lo anterior, "aunque el hombre crea esos productos con fines concretos y con la intención de alcanzar de esa manera determinados resultados, sus productos pueden actuar en el sentido social de manera independiente de la voluntad del hombre, e incluso en su contra, convirtiéndose en casos extremos, en una amenaza para la propia existencia del hombre".[11]

[12] Adam SchafY. "¿Que ha muerto y qué sigue vivo en el marxismo?", en re\ ista *El socialismo del futuro,* N°4 Madrid. 1991. pág.13.

[11] *Ibidem.* pág. 19.

La importancia de la alienación objetiva es tan significativa porque el socialismo supone una sociedad que supera la explotación del hombre por el hombre o, dicho en términos inversos, toda explotación de ese tipo es una específica forma de alienación (en su sentido objetivo). Por su parte, en la alienación subjetiva se trata "del hombre en sí mismo, que en condiciones concretas no puede realizar sus objetivos relacionados con el desarrollo de su propia personalidad y empieza a percibir su vida como algo "extraño' (algo no deseado), ya que sus formas están determinadas por las condiciones sociales"'. Esta percepción lleva al hombre a desinteresarse por el funcionamiento de lo que determina esa vida y especialmente de la política, sin cuya actividad humana en este sector de la cultura será imposible construir una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre. Es la autoalienación, que adquiere una importancia significativa en la política, aunque no siempre se aprecia en todo su valor.

2. La concepción marxista del individuo. Esta concepción específica es una contribución al desarrollo del pensamiento social, porque el punto de partida es el hombre. En este caso no existe ninguna alteración del marxismo, ya que se trata sólo de un nuevo descubrimiento de los viejos contenidos de esta corriente de pensamiento. Se trata, en definitiva, de "tesis importantes tanto para la teoría como para la práctica". Esta concepción comprende algunos elementos fundamentales, a partir del enfoque del individuo humano en tanto que un organismo vivo único, y sus relaciones y condicionamientos sociales que lo convierten en individuo social. Este enriquecimiento del hombre con el factor social pasa inadvertido para otras escuelas filosóficas o es relegado a un plano secundario.

La génesis del hombre, como individuo social, es explicada por el marxismo como producto de sí mismo, cuando entendemos por creación un p"oceso histórico y social al mismo tiempo. La historia es creada por el hombre y, conjuntamente con las condiciones sociales de su existencia, el hombre se crea así mismo, como producto de las relaciones sociales. Este hecho de la historia influye sobre la concepción del humanismo, en el sentido de la teoría general del lugar del hombre en el desarrollo de la sociedad y la búsqueda de su felicidad a través de la creación de las condiciones para conformar su vida de manera que ésta responda plenamente a sus necesidades y aspiraciones.[14]

3. La teoría marxista de la sociedad. El individuo y la sociedad, con sus elementos, como las clases sociales, son los puntos de partida y la perspectiva que nos ofrece el marxismo con su análisis de la vida social. Toda esta teoría conserva su

[14] *Ibidem.* págs. 23 y 2-1.

valor científico, es una teoría viva y siempre innovadora en las ciencias, es la mejor de las que se aplican en la literatura especializada, por lo que es aceptada y citada por los autores más serios, como Max Weber, Karl Mannheim y otros, que se consideran deudores ideológicos del marxismo. Por lo mismo, no puede ser impugnada ni mucho menos desplazada por corrientes que se basan formalmente en la ciencia, pero que tienen como soporte real la fe o hacen referencia directamente a la religión, o parte de una posición idealista basada en la religión, y no puede ser verificada empíricamente, porque pertenece a una categoría distinta a la del pensamiento realmente científico.

Esta teoría marxista del desarrollo de la sociedad es combatida por la clase dominante y sus servidores, negándole su valor y utilidad en las investigaciones de las ciencias sociales y en la práctica política. Entre sus elementos fundamentales, los demoledores concentran sus fuegos sobre el materialismo histórico, en tanto teoría y método, entendido naturalmente no como concepción deformada o primitivo "economicismo"; sobre la teoría de las clases y de la lucha de clases, que el propio Marx reconoció que no fue su autor, sino es obra de algunos historiadores burgueses franceses de su tiempo. En todos estos casos, las ciencias sociales y, particularmente, la historiografía, así como la política, no pueden prescindir de ellas.[15]

4. La teoría marxista de la revolución. No obstante que constituyen elementos que forman parte de la teoría marxista del desarrollo de la sociedad, es conveniente presentar ahora separadamente las concepciones marxistas sobre el Estado, sobre la revolución social y sobre la revolución socialista. La razón es muy simple: ellas han sido siempre las más impugnadas por la burguesía. Estas concepciones están, por cierto, vivas aunque requieran, como casi todas las teorías científicas, adecuaciones. La teoría del Estado y su doble función social, en cuyo marco se anunció la desaparición de ese aparato en el socialismo, en tanto que institución que impone la voluntad de una clase, pero asegurando la continuidad de estructuras sociales para la "dominación sobre los objetos" o la gestión de los asuntos de la comunidad. La teoría de la revolución social, en su esencia y forma, como se analiza en el marxismo, supera a todas las concepciones que han tratado el tema, porque concentra sus objetivos en la liberación del hombre. Por último, está la teoría de la revolución socialista, ;on los requisitos que deben cumplirse para que tenga éxito, que no se identifica con los procesos de los "socialismos reales".[16]

[n] *Ibidem.* págs. 26 y 27.
[16] *Ibidem,* pág. 28.

Entre otras cuestiones relacionadas con la temática anterior destaca la función del Estado en el contexto de la polémica actual sobre la economía de libre mercado y la planificación de la economía. La trato separadamente por la importancia que hoy tiene. En el mundo actual, el postulado de Marx sobre la econamía planificada continúa en pie, quizás hoy más necesaria que nunca por la globalización de las relaciones económicas que rebasan las fronteras y por un desarrollo excepcional de las posibilidades tecnológicas de control de ese caos aparente por medio de la debida programación. No existe hoy ni el "mercado libre" ni la "planificación central" en la economía, excepto en la mente de los propagandistas de uno y otro método, tras lo cual se esconden sistemas de dominación en diversas áreas del universo.

5. Las controversias sobre planificación y mercado. El mercado, dice Schaff, funciona, pero no es libre, porque está dominado por 400 a 500 corporaciones internacionales (multinacionales o supranacionales), que se dedican a la planificación, en el sentido más estricto de la palabra. Estas corporaciones gobiernan en la práctica al mundo, en el sentido económico. Por cierto, funciona también el capitalismo internacional financiero (sólo los muy iniciados saben cuántas organizaciones bancarias de este tipo funcionan hoy en el mundo), que se encuentra en la cumbre de la pirámide. ¿De la pirámide del mercado libre? Absolutamente no. Se trata de la pirámide de una economía planificada, perfectamente organizada, que funciona como un monopolio, dejando el "mercado libre" para los pequeños mercaderes en aquellos lugares donde todavía puede existir. Tal es la realidad oculta por una campaña publicitaria para persuadir a los ingenuos.

¿Existe alguna duda entre personas inteligentes, que no sirven a aquella vasta red de dominación? Expresa Schaff: "Actualmente, la planificación es una operación a la que se dedican no solamente las grandes corporaciones, en comparación con las cuales los carteles y los *trusts* del período de *El capital financiero,* de Hilferding (principios del siglo xx), obra en la que Lenin basó sus reflexiones plasmadas en *El imperialismo,* eran auténticos enanos. También planifican sus economías los grandes estados. Más aún: hoy, en los países altamente desarrollados, ya no existe el capitalismo de mercado libre, tan característico para el siglo xIx y con el que los neoliberales obligan a soñar a los países atrasados... Lo que existe: hoy es un capitalismo monopolista y neocolonial".[17] En este monstruoso engranaje, ¿Qué papel desempeña el Chile "moderno"?: es una pequeña parte de ese engranaje, sin perder su condición de país subdesarrollado.

[17] *lbidem.* pág. 30.

6. La gran mentira de nuestro tiempo. Hay algo más todavía. "Hoy podemos decir una cosa: si alguien propone la ideología neoliberal, como solución para la crisis económica de los países del antiguo socialismo real, engaña, al menos de manera objetiva (el aspecto subjetivo no nos interesa). Esta afirmación formulada en 1991 ha sido confirmada en los años siguientes en todos los países mencionados, particularmente en Polonia. La presentación de los países altamente desarrollados del capitalismo monopolista (encabezados por Estados Unidos) como modelo de la economía de 'mercado libre' es una estafa". No es, por cierto, la única estafa. "En segundo lugar, es una estafa adicional la afirmación de que esos países del 'mercado libre' inexistente propugnan la fórmula de un desarrollo económico espontáneo, dirigido por la 'mano invisible' del mercado. Sin embargo, esos países planifican de una manera muy escrupulosa y eficaz su desarrollo y aprovechan para ello los métodos más refinados de la previsión de las corrientes del desarrollo, y no solamente económico, sino también, quizás en primer término, tecnológico, y dan a la cuestión un tratamiento moderno, es decir, global".[18]

¿Por qué se falsea la realidad? Los que difunden esta "ideología" lo hacen como una "manipulación política que trata de encubrir un objetivo muy concreto: desacreditar el socialismo y el marxismo, en tanto que teoría e ideología de esa formación. De paso se busca otro objetivo más: el fortalecimiento del neocolonialismo mediante la destrucción de la economía de los países que caen en la trampa de la ideología del 'mercado libre'".[19] Los instrumentos de esta difusión son los intelectuales orgánicos del capitalismo y los expertos a su servicio, desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y muchos otros organismos dominados por las corporaciones transnacionales. En Chile, en el pasado inmediato, los Chicago Boys, después los equipos de CIEPLAN y hoy los funcionarios del FMI, convertidos en gobernantes, ejecutan las mismas políticas con pequeñas variantes. Son ellos los verdaderos ideólogos de la gran mentira de nuestro tiempo: la economía de "libre mercado". Los ministros de hacienda provenían antes de las grandes empresas nacionales (durante la dictadura de Pinochet) y ahora vienen del Fondo Monetario Internacional y retornan a él después de cumplida su misión.

En suma, el pensamiento de Marx no está muerto como lo proclaman los reaccionarios y revisionistas del mundo, sino que sobrevive y resplandece en los comienzos del siglo XXI como parte de la cultura universal. La BBC de Londres realizó en septiembre de 1999, con vistas al nuevo siglo, una encuesta entre sus lectores en

[18] *Ibidem,* pág. 31.
[19] *Ibidem.*

Internet, sobre los pensadores más importantes del último milenio, siendo elegido Karl Marx en el primer lugar, siguiéndole, Albert Einstein, Isaac Newton y Charles Darwin.

Marx no sólo ejerció una enorme influencia en su tiempo, sino que gravita hasta hoy como filósofo, cientista social, historiador y revolucionario, tanto en el movimiento socialista mundial como entre los académicos, por encima de las distorsiones del comunismo soviético en el siglo xx. Es la opinión de los lectores de la BBC de Londres, un público más culto que el senador José Antonio Viera Gallo, de Chile, quien publicó hace algunos años en el diario *La Época*, de Santiago, un artículo en el que expresaba que había expurgado su biblioteca, eliminando todos los libros sobre Marx porque éstos ya no tenían valor cultural. Contra esta barbarie integrista de algunos católicos, como este ex marxista-leninista, hay que reiterar que Marx dejó a la posteridad una obra intelectual gigantesca, la que lo ha hecho merecedor de la mayor cantidad de escritos sobre su personalidad y pensamiento hasta el punto que todavía hoy, según *The Economist*, se siguen publicando estudios al respecto, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos. A manera de ejemplo, indica que en Amazon.com y otros centros de venta de libros, la proporción de títulos sobre Marx es de hasta diez veces superior que los libros referidos a Adam Smith.[20]

A propósito de este hecho cabe insistir que Marx, además de las áreas de saber ya señaladas, fue un brillante economista. Para fundar esta afirmación parto del principio señalado por el profesor John Galbraith: "Es cosa admitida en el mundo académico que no se puede entender la economía sin conocimiento de su historia.[21] Este mismo autor agrega que la Revolución industrial modeló profundamente el desarrollo económico, en cuyo contexto "surgen las dos figuras más célebres de la historia de esta disciplina, a saber, Adam Smith y, tres cuartos de siglo más tarde, Karl Marx. El primero fue el profeta de sus realizaciones y el autor de sus reglas orientadoras, el segundo fue el crítico del poder que ese proceso otorgó a los dueños de ¡os que habrían de llamarse "medios de producción" y, al mismo tiempo, el crítico de la pobreza y la opresión que el proceso conllevó a los trabajadores.[2]-

[20] "Marx after comunism". 19 de diciembre. 2002. *The Economist.* edición impresa. http://vvww.economist.com

[21] John K. Galbraith. *Historia de la economía.* Barcelona. Kditorial Ariel S.A. 1989. pág. 1 1.

[22] *Ibidem.*

Resumen y conclusiones

Como se acostumbra en este tipo de análisis, es necesario extraer algunas conclusiones generales al término del siglo xx y el inicio del siglo xix. Estas conclusiones deben referirse, primero, al centro del desarrollo del pensamiento socialista y el movimiento obrero, que fue Europa, para extenderse después a Chile, en el marco de América Latina. Sus raíces se encuentran en Inglaterra, donde emergió con mucho vigor el movimiento obrero, en las primeras décadas del siglo xix, condicionado por la revolución industrial, y en Francia, donde explotaron las múltiples ideas que lo fecundan socialmente. En ambos países influyeron fundamentalmente los pensamiento de Marx y Engels, llegando éste a culminar en la socialdemocracia de Alemania, que fue el partido que más gravitó en la Segunda Internacional. Incapaz ésta de enfrentar con sus principios la Primera Guerra Mundial, el centro de la lucha se desplazó a Rusia, con la Revolución de Octubre, conducida por Lenin. Pero este centro tampoco se mantuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, por las desviaciones del estalinismo y la victoria del comunismo en China, esta vez dirigida por Mao. Este inmenso país pasó a ser la esperanza de la revolución mundial, particularmente en el Tercer Mundo, que representa dos tercios de la población del planeta.

Sin embargo, en el último tercio del siglo xx, especialmente durante el estancamiento y la crisis terminal de la Unión Soviética, la corriente del cambio social volvió a Europa, primero, con el eurocomunismo y, por último, con el ascenso generalizado de la socialdemocracia en los gobiernos de casi todos los países del viejo continente. Este extraordinario carrusel histórico del socialismo ha demostrado que dicho movimiento ha experimentado avances y retrocesos, victorias y derrotas, sin lograr una consolidación tanto teórica como práctica. No obstante esta situación, el socialismo se ha sobrepuesto, adaptándose a las condiciones del presente, formulando nuevas perspectivas de lucha por sus objetivos esenciales, confirmando por encima de sus proyectos de cambio social, el principio básico de utopía y esperanza.

De acuerdo con Jacques Droz, profesor de la Universidad de París, se puede señalar que la causa principal del fracaso del socialismo, el signo de su destino, ha sido la división. En efecto, desde su nacimiento, ha luchado en su interior, escindido en facciones, en vez de enfrentar al enemigo común, al adversario de clase. El socialismo científico embestía contra el socialismo utópico, Marx contra Proudhon. Enseguida, Kautsky contra Bernstein, comunistas contra socialistas en el interior de la socialdemocracia, hasta separarse en dos partidos opuestos, la Tercera In-

ternacional contra la Segunda y la Cuarta, y el comunismo chino contra el comunismo ruso.

> Las excomuniones que, en el curso de un siglo de historia, se lanzaron mutuamente las diversas sectas, que se reclamaban de Marx, no bastan, sin embargo, para explicar la crisis del socialismo. La verdad es que, frente a una sociedad en profunda mutación, el marxismo pudo resultar por algunos como un dogmatismo petrificado y anticuado. Las críticas dirigidas contra el autor de *El Capital* hace ya cincuenta años' por Henri de Man, que elaboró una nueva teoría sobre los móviles del socialismo, y luego la de Burnham, para quien la sociedad capitalista no desemboca en la revolución proletaria sino en el imperio de los managers, ¿no parece justificar la constatación de que el marxismo ya no es hoy capaz de explicar la realidad y de que constituye un elemento de bloqueo para la sociedad?.[23]

Así lo estiman hoy quienes han renunciado al socialismo y vueltos sus ojos hacia el reinado del capitalismo. El ya viejo pensamiento de Burnham lo presentan como nuevo los socialistas "renovados" en Chile.

El mismo Droz explica la tendencia expectante expuesta, entre otros, por Kautsky y Bauer en el sentido de que la evolución natural del capitalismo llevaría al socialismo, por la maduración de las condiciones que favorecían a éste, en el marco de la democracia, concepción desmovilizadora de la clase trabajadora, la que debía sólo esperar para recoger la herencia de la burguesía, de acuerdo con el cumplimiento de leyes históricas, con lo que se sustituía la acción de las masas por la acción de las burocracias partidistas. "Esta nueva casta vivía más del movimiento obrero que para él, y miraba la organización de este como un fin en sí mismo y no únicamente una palanca para la acción militante".[24] Esta concepción fue criticada en la socialdemocracia alemana, antes de la Primera Guerra Mundial, por Rosa Luxemburgo. Para ella, "la acción consciente del proletariado era la principal fuerza operativa de la transformación revolucionaria". El hecho burocrático, en tanto que generaba una "élite" privilegiada de políticos profesionales y de funcionarios del partido y del Estado, apareció rápidamente como uno de los rasgos del nuevo Estado soviético, cuyo carácter pernicioso denunciaron desde 1920 algunos socialistas radicales, partidarios del sistema de consejos, como Pannekaek, Cíorter y Gramsci, quienes llegaron en ocasiones a negar incluso la necesidad de la existencia de un partido dirigente.[25] Esta crítica se ha repetido una y otra vez hasta ahora en el mundo.

[23] M. Debouzy y otros, *ibidem*, pág.918.
[24] *Ibidem.*
[25] M Debouzy y otros, *ibidem.*

La existencia de estas "castas" es notoria en la Concertación por la Democracia en Chile, donde hay familias que ganan sumas elevadas con cargo al presupuesto fiscal.

Esta lucha continua por el socialismo presentó, durante el siglo xx, dos estrategias distintas. Una revolucionaria y otra reformista, "no separadas por ningún abismo, rara vez se encuentran en estado puro, con tendencia a acercarse en caso de peligro, pero que distancia la práctica del poder. La primera, representada por las revoluciones comunistas de Rusia y China, en medio de extensas guerras civiles, así como las demás victoriosas o frustradas, con todas sus desviaciones. La segunda, representada por los gobiernos socialdemócratas, que promovieron el Estado de bienestar, de acuerdo con el principio formulado por Bernstein que "el movimiento es todo, el objetivo es nada". Este reformismo renunció al marxismo y se desentendió del imperialismo y del colonialismo asumiendo la gerencia del capitalismo. Rechazó la lucha de clases y proclamó el socialismo como "cosa de todo el pueblo", reconociendo como fuentes la ética cristiana y el humanismo general. Este revisionismo lo adoptó, en 1996, el Partido Socialista de Chile, como culminación de un proceso de "renovación" y sometimiento al neoliberalismo.

La corriente reformista, de la socialdemocracia, predominó en Europa, en los términos claramente definidos por Lelio Basso en 1965.

> La socialdemocracia acaba por ser la antítesis del socialismo. Si en los tiempos de los viejos reformistas podía hablarse de unidad, argumentando que entre el ala revolucionaria y el ala reformista no había más diferencia que la de la elección de los medios para llegar a un objetivo común, el socialismo hoy, frente a la transformación de la sociedad y a la evolución de la socialdemocracia, debería tener el valor de reconocer que la oposición entre los objetivos perseguidos es radical. Una vez más, el movimiento socialista de Europa debe partir de la toma de conciencia de esta nueva situación, en la que el movimiento obrero corre el peligro de tener en sus filas al propio enemigo, el apoyo principal del régimen capitalista.[26]

Una observación crítica en términos absolutos puede hacerse al comunismo, que ejerció el poder en la Unión Soviética y sus países satélites, donde se aplicó un sistema no capitalista de desarrollo, que fracasó completamente, al cabo de 70 años, tanto por sus métodos terroristas como por su atraso económico y tecnológico. En este combate singular venció el capitalismo, sin resolver el problema de la pobreza y la explotación del hombre por el hombre.

[26] Lelio Basso, citado por Jacques Droz; *ibidem* (col. 236), págs. 938 y 939.

Al concluir el siglo xx, se abrió paso una conclusión indiscutible, en el sentido de que el socialismo no es inevitable, como se sostuvo durante muchos años.

El movimiento popular no cuenta con la fuerza y poderío suficiente para imponerse por ninguna de las dos estrategias y aunque la tuviera, se encontraría con la resistencia armada de la burguesía y el imperialismo, como ha sucedido una y otra vez en el mundo. En el caso de la vía electoral, el aplastamiento del gobierno de Allende por el golpe militar es un ejemplo. La victoria del socialismo es, pues, por demás problemática, pero tampoco es imposible y, por lo mismo, se proyecta como una perspectiva histórica en el siglo xxi, tomando en cuenta las experiencias del siglo anterior. En esta nueva lucha ya no existe una sola vía (infalible) ni puede confiar sólo en el partido de vanguardia, ni en las alianzas de clase clásicas, obrero-campesina, sino en un nuevo bloque histórico, que no se someta a la hegemonía burguesa. En las fuerzas provenientes del comunismo se ha recorocido la relación entre el socialismo y la democracia, de las fuerzas del trabajo y la cultura.

El derrumbe de la Unión Soviética a comienzos de la década de los noventa del siglo xx trajo consigo la culminación de una crisis en la izquierda. No pudo ser menor el impacto si se tiene en cuenta que esa potencia, conjuntamente con sus satélites de Europa del este, era una de las dos columnas en que descansaba el '"comunismo". La otra columna era la República Popular China, que se mantiene en pie y se fortalece asombrosamente. Muchos socialistas de Chile no percibieron los síntomas de esta crisis a pesar que una tendencia mayoritaria del Partido Socialista venía denunciándola desde el nacimiento mismo de este partido. Desde el punto de vista internacional, esta crisis tuvo su punto de partida con la división de la socialdemocracia europea en 1918 y el surgimiento desde su seno de los partidos comunistas, dependientes de la Tercera Internacional. En un ciclo de 70 años, estos últimos partidos modificaron su orientación y reasumieron el espíritu de sus orígenes, cambiando incluso de nombre. Algunos de estos nuevos partidos están reconquistando el gobierno por la vía electoral y con otro programa en algunos países del mundo del ex comunismo.

Esta crisis tiene su historia a la luz del marxismo-leninismo. La rígida dictadura impuesta por las necesidades de la guerra civil pasó a ser un sistema de terror permanente de gobierno, ya no sólo dirigido contra la burguesía levantada en armas, sino también contra los propios trabajadores. Aprovechando los llamados de Lenin a la disciplina, Stalin consideró cualquiera forma de disidencia cono una traición y un crimen de derecho común. He aquí el origen de los procesos inquisitoriales de Moscú (1937-1938) contra la vieja guardia bolchevique, la ruptura con Tito (1948), ios juicios en las llamadas democracias populares (1949-1950) y. en general, el ex-

terminio de centenares de miles de "honestos comunistas", según la denuncia de Jruschov en el XX Congreso del PCUS. Conviene tener presente que entre estos centenares de miles de honestos comunistas no estaban comprendidos los trotskistas, no rehabilitados por el XX Congreso ni por los posteriores.

Esta es una historia dramática que no puede olvidarse. Después de aquellos procesos inquisitoriales, los comunistas de todo el mundo y sus compañeros de ruta aceptaron todavía nuevas apostasías del centro directivo soviético, sin alterar sustancialmente su relación de dependencia. Tal es, entre otros, el pacto nazi-soviético de agosto de 1939, que vino a demostrar que la prioridad de la Unión Soviética como "potencia tradicional" respecto a la Unión Soviética como "estado socialista" se había hecho indiscutible. Esta circunstancia destruyó a su vez la validez de la ecuación "defensa de la URSS = defensa del comunismo". La invasión de Hungría y el aplastamiento de la revolución popular contra la dictadura comunista en 1946 por el ejército soviético, confirmaron la subordinación o dependencia de las llamadas democracias populares y su carácter antipopular. Del mismo modo, la invasión de Checoslovaquia en 1968 y la deposición del nuevo gobierno, emanado de un congreso del propio Partido Comunista, por los blindados del Pacto de Varsovia, agregaron un elemento más de convicción en el sentido que la Unión Soviética actuaba movida por una lógica de potencia mundial.

En dicho sentido, no existe en efecto ninguna distinción esencial entre la invasión a Checoslovaquia y la invasión a Santo Domingo. En el primer caso, la Unión Soviética invocó el Pacto de Varsovia e hizo actuar a las tropas de este bloque militar. En el segundo caso, Estados Unidos invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca e hizo actuar a tropas de la fuerza militar interamericana. La similitud es, pues, absoluta. En 1979, la Unión Soviética puso una vez más en evidencia su lógica de potencia mundial con la ocupación militar de Afganistán, "a solicitud" del Partido Comunista de ese país asiático, la que trajo consigo una guerra interminable, con la "asistencia" financiera y militar de Estados Unidos al país agredido, que obligó a la URSS a retirar sus tropas después de algunos años.

Estos dramáticos hechos desencadenaron una verdadera crisis en la izquierda de todo el mundo, que terminó por gravitar también en los principales partidos comunistas de Europa. El proceso en dichos partidos, lento e imperceptible al comienzo, culminó por fin con el surgimiento del eurocomunismo, cuyos integrantes pasaron a criticar ya abiertamente a la Unión Soviética. Tal es, por ejemplo, el caso del Partido Comunista francés, en lo que concierne al atropello de los derechos humanos. El mismo sentido tiene la crítica del Partido Comunista italiano respecto a la doctrina Brezhnev que justificó las intervenciones militares soviéticas en los países del

pacto de Varsovia. La autonomía de los partidos comunistas de Europa occidental se abrió paso lentamente, sin una ruptura violenta con la URSS.

Este rasgo histórico condicionó y limitó las posibilidades del eurocomunismo para superar la honda crisis que afectaba al movimiento revolucionario mundial. La Unión Soviética, en cierto sentido, garantizaba a la clase obrera europea que no sería aplastada por las permanentes tendencias fascistizadoras de la burguesía. Pero a la vez ej eurocomunismo apostaba por el mantenimiento de un freno atlantista a una eventual e.xpansión soviética. En esta posición, es consecuente con su burguesía interna. Esta tendencia se consolidó y extendió después de la disolución del comunismo, con la incorporación de los ex países satélites de la URSS a. la OTAN y a la Comunidad Económica Europea. La propia URSS planteó la configuración de un gran "hogar común europeo" y, posteriormente, la Federación Rusa buscó la cooperación con la OTAN, después de la disolución del Pacto de Varsovia. Cierta forma de "asociación" con Estados Unidos puso fin a la Guerra Fría.

En este sentido son pasos graduales en esta crisis de conciencia en la izquierda, los siguientes: *a)* Reconocimiento de que la Unión Soviética no es identificable con la revolución socialista mundial (crisis anterior a la guerra de 1939-1944); *b)* Reconocimiento de que la Unión Soviética no es siquiera identificable siempre y específicamente como una contradicción antagonista con el imperialismo (crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años sesenta), y *c)* Reconocimiento, particularmente por los chinos, de que, en vez de la diversidad de la Unión Soviética respecto al capitalismo, existía solamente entre ambos sistemas una contradicción interimperialista", es decir, entre el capitalismo imperialista y el socialimperialismo.[27]

Tres años después de la muerte de Stalin, Jruschov, mediante un informe secreto, formuló una denuncia contra Stalin en el XX Congreso del PCUS celebrado en 1956, escondiendo sin embargo el enriquecimiento de la burocracia y enfatizando las violaciones de la legalidad socialista. El surgimiento de la desviación estalinista fue explicado no por la deformación del sistema social, sino por el subjetivismo del dictador o del grupo "antipartido" y, por lo tanto, el aparato que éstos formaron. En otras palabras, todo el régimen despótico y totalitario que durante treinta años convirtió a la Revolución de Octubre en un gran campo de trabajo forzado y de muerte, se presentó como un asunto que se desarrolló enteramente en la esfera "política", en el estricto sentido del vocablo. Por lo mismo, podía ser ajustado mediante

[27] Rossana Rossanda, "Reflexiones sobre el Socialismo", *Cuadernos Políticos,* N°4. pág. 43 y siguientes, México, Editorial Era, 1975.

la modificación de los mecanismos políticos o formales de poder. La restitución de la "legalidad" socialista, el retorno a la "colegialidad" en la dirección y la "democratización del Estado" eran estos mecanismos.[28] Pero todo esto, que supone una revolución política, tampoco se realizó entonces, aunque 30 años después Gorvachov lo planteó de nuevo a través de la *perestroika.* Esta misma crisis produjo la caída de los regímenes comunistas en los países de Europa del este en 1989, y la disolución de la URSS un año después, con el término del "comunismo" oficial. Era una muerte anunciada.

No obstante el análisis crítico de la descomposición política de la Revolución rusa, no es mi propósito proyectar una idea simplemente negativa de ella. Por el contrario, fue la más grande revolución de todos los tiempos. Ningún acontecimiento histórico del siglo XX fue tan significativo como éste. Los trabajadores, obreros y campesinos, dirigidos por el PCUS, derrotaron al zarismo, pusieron término a la primera guerra mundial, defendieron a su patria de la invasión extranjera —de Estados Unidos y de las grandes naciones europeas— coligadas con las fuerzas de la nobleza y la burguesía interna. Los mismos trabajadores construyeron las bases de una nueva sociedad, generando las condiciones materiales y técnicas, y antes de 20 años, tuvieron que enfrentar de nuevo la gran guerra patria contra el nazismo alemán. Las pérdidas de este período de guerras le significaron 40 millones de muertos (cifra escondida por Stalin) y la destrucción de sus ciudades e infraestructura, así como del conjunto de su economía.

Más allá de las distintas maneras de entender el gran debate de entonces, interesa destacar una opinión generalizada en la Unión Soviética en el sentido de que el socialismo que soñó Lenin no se plasmó en la vida. En su visión, el régimen que se impuso como alternativa no tuvo carácter socialista. Para quienes así conciben las cosas, lo que sucedió en los años ochenta expresa apenas el renacimiento de las esperanzas en el socialismo, en el trabajo libre y creador, en el bienestar colectivo y en la democracia. De ahí surge la necesidad de una nueva revolución, para lo cual no hay que perder la esperanza ni renunciar a la utopía, porque ése ha sido el curso de todas las revoluciones, particularmente de la burguesía de 1789 en Francia, que cumplió 200 años en 1989, y después de muchos ascensos y caídas dejó como legado a la humanidad algunos principios y derechos válidos hasta hoy.

En su notable obra *Historia socialista de la Revolución francesa,* Jean Jaurés expresa precisamente esta opinión.

[28] *ídem.*

"Está siempre permitido al historiador oponer hipótesis al destino. Le está permitido decir: He aquí las faltas de los hombres, he aquí las faltas de los paridos e imaginar que sin estas faltas los acontecimientos habrían tenido otro curso. He dicho cuáles fueron, sobre todo después del 31 de mayo, los servicios inmensos de Robespierre organizando el poder revolucionario, salvando a Francia de la guerra civil, de la anarquía y de la derrota. He dicho asimismo de qué modo, después de haber aplastado al hebertismo y al dantonismo, invadióle la duda, la ceguera y el vértigo".[29]

No obstante, no hay que olvidar nunca cuando se juzga a estos hombres que el problema impuesto por el destino era superior a las fuerzas humanas de algunos de ellos o de una sola generación, conclusión aplicable también a Salvador Allende y al movimiento popular de Chile.

La historia señala que tales procesos tienen un desarrollo largo, en el que intervienen varias generaciones, para "derribar el antiguo régimen, crear un nuevo derecho, suscitar de las profundidades de la ignorancia, de la pobreza y de la miseria un pueblo ilustrado y fiero, hacerle luchar contra el mundo coligado de los tiranos y de los esclavos, tender y exasperar en este combate todas las pasiones y todas las fuerzas y asegurar al mismo tiempo la evolución del país enardecido hacia el orden normal de la libertad reglamentada". Los resultados de las revoluciones no se pueden apreciar a través de años o décadas, sino por una época entera. A comienzos del siglo xx dice Jaurés: "Un siglo ha sido necesario a la Francia de la Revolución y pasar por innumerables pruebas, recaídas de monarquías, despertares de república, invasiones, desmembramientos, golpes de Estado y guerras civiles para llegar al fin a la organización de la república y al establecimiento de la libertad por el sufragio universal".[30] Esta conclusión es aplicable hoy a la crisis que enfrenta la Revolución rusa, en la cual no todo está perdido.

Jaurés había anunciado la revolución socialista en su obra publicada antes de 1917, como continuación de la revolución burguesa de 1789, que no fue un proceso terminado, de una vez y para siempre, sino abierto a la fecundación de la historia. Desde el 9 de Termidor, afirma, "el movimiento economice y político, la gran industria, el crecimiento de la clase obrera que aumenta en número y en ambición, el malestar del campesino, abrumado por la concurrencia y dominado por el feudalismo industrial y comercial, la turbación moral de la burguesía intelectual, a la cual ofende en todas sus delicadezas una sociedad grosera y mercantil, van preparando

[29] Jean Jaurés, *Historia socialista de la Revolución francesa.* Buenos Aires, Poseidón. 1946, vol. vin. pág. 390.

[30] *Ídem.*

lentamente una nueva crisis social, una nueva y más profunda revolución..." Es la Revolución rusa que encenderá la mecha en 1917 y se extenderá, al igual que la Revolución francesa, a otros países del mundo, en el curso del siglo XX.

Ante el colapso de la URSS, el historiador Eric Hobsbawn plantea la pregunta de que si es posible volver a realizar un experimento semejante, respondiendo él mismo que no. Explica:

> Ello se debe a que el experimento soviético se diseñó no como una alternativa global al capitalismo, sino como un conjunto específico de respuestas a la situación concreta de un país muy vasto y muy atrasado, en una coyuntura histórica particular e irrepetible. El fracaso de la revolución en todos los demás lugares dejó sola a la Unión Soviética con un compromiso de construir el socialismo en un país donde, según el consenso universal de los marxistas en 1917 (incluyendo a los rusos), las condiciones para hacerlo no existían en absoluto. El intento hizo posible, con todo, logros harto notables (entre ellos, la capacidad para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial), aunque con un coste humano intolerable, sin contar con el coste de lo que, al final, demostraron ser una economía sin salida y un sistema político que no tenía respuestas para ella. (¿No había predicho acaso Georgi Plejanov, el padre del marxismo ruso, que la Revolución de Octubre llevaría en el mejor de los casos a un imperio chino teñido de rojo?). El otro socialismo realmente existente, el que surgió bajo la protección de la Unión Soviética, sufrió las mismas desventajas, aunque en menor medida y, en comparación con la URSS, con mucho menos sufrimiento humano. Un nuevo resurgimiento o renacimiento de este modelo de socialismo no es posible, deseable ni, aun suponiendo que las condiciones le fueran favorables, necesario".[31]

Pero esta respuesta, que es completamente justa, no invalida la realización de otros tipos de socialismo, que han definido pensadores y economistas de diversas partes del mundo en consonancia con el marxismo clásico. Esta conclusión es válida también para Chile, donde puede rescatarse muchos valores y principios de la herencia yacente del socialismo histórico de este país, sobre cuya base puede reconstituirse el movimiento popular para impulsar, de nuevo, la lucha revolucionaria.

No obstante, el camino más seguro no es, al parecer incorporarse a los partidos tradicionalmente de la centro-izquierda, donde todos quieren ser millonarios, sino ser capaces de generar un nuevo movimiento con la integración de los sectores sociales y políticos que no comparten las prácticas gubernamentales de la Concertación de Partidos por la Democracia. Existen ejemplos virtuosos en otros países de

[31] Eric Hobsbawn. *ibidem.* pág. 493.

América Latina, como el Partido de la Revolución Democrática en México, el Partido de Trabajadores en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay. Sólo un camino como éste puede atraer a esa inmensa multitud de jóvenes que no *se* interesan por la política, convertida hoy en servicio al gran capital, que no permite distinguir las diferencias entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición, porque los programas de unos y otros son iguales. Su disputa se refiere sólo a quien administra la herencia de la dictadura. Hay que abrir una brecha en esta "muralla china", para reiniciar el camino hacia la tierra prometida, el camino que la izquierda chilena inició en la década de los años treinta del siglo xx. No hay otra alternativa.

Anexo
Significado de algunos términos

Acumulación primitiva

Conocida también como acumulación originaria, este proceso, muy complejo, en el que intervienen numerosos factores, desde la formación del mercado mundial del comercio, que se inicia a gran escala a fines del siglo xv, al desarrollo del sistema de la deuda pública y del crédito internacional, tiene como fundamento "la expropiación de los productores rurales, de los campesinos y su expulsión de las tierras" y, en general, "[...] la acumulación originaria del capital significa solamente la expropiación de los productores inmediatos, es decir, la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo personal". (Carlos Marx, *El Capital,* libro i). De hecho el modo de producción caracterizado por la existencia de trabajadores que tienen la propiedad privada de sus condiciones de trabajo como eran por ejemplo en Inglaterra a fines del siglo xv la mayor parte de los campesinos y de los artesanos, se caracterizan necesariamente por la extrema subdivisión de la propiedad del suelo y de los otros medios de producción. "[...] Excluye, al igual que la concentración de éstos, también la cooperación, la división del trabajo dentro de unos mismos procesos de producción, el dominio y la regulación sociales de la naturaleza, el libre despliegue de las fuerzas productivas sociales. Sólo es compatible con estrechas limitaciones espontáneas de la producción y de la sociedad" *(ibidem).*

Alienación

Es un concepto muy amplio, que fue desarrollado, antes de Marx, por diversos pensadores, como Rousseau, Hegel, Feuerbach y Hess. En base a estos estudios consi-

derados críticamente, Marx elaboró su propio concepto de alienación que comprendía las distintas formas del fenómeno en la esfera del trabajo, en el ámbito de las relaciones humanas y en la imagen que los hombres construyen de sí mismos; en cada caso el término de alienación mantiene su significado general de separación del hombre de lo que material y espiritual le pertenece para provecho de algo que se encuentra fuera del hombre mismo. La alienación del trabajo es la forma más importante de alienación en la cual se fundamentan y se conectan todas las otras formas. En el trabajo alienado se eliminan inteligencia y capacidad de decisión, el trabajador cumple mecánicamente los actos necesarios para la producción de objetos que no le pertenecen y cuyas características y destino se han decidido en otro lugar sin su participación y para fines que le son desconocidos. El fin de la naturaleza humana aparece invertido: el trabajo no es ya un medio a través del cual los hombres se realizan mejorando las condiciones materiales y espirituales de su existencia, sino un puro medio de supervivencia; paradójicamente "el trabajador sólo vive para ganarse la vida".

Anarquismo

Se conoce con este nombre la doctrina que sostiene la lucha por abolir todo orden y autoridad política y sustituirlos por la libertad del individuo; se contrapone particularmente a la idea de Estado, destacando entre sus teóricos Proudhon (francés), Stirner (alemán) y Bakunín (ruso). Marx polemizó con Bakunín, acusándolo de ignorar las causas de las transformaciones sociales, de las condiciones económicas de la revolución. Engels precisaba en 1872 las diferencias entre el socialismo y el anarquismo:

> Mientras la gran masa de obreros socialdemócratas comparte nuestro punto de vista de que el poder del Estado no es más que una organización adoptada por las clases dominantes —los terratenientes y los capitalistas— para proteger sus privilegios sociales, Bakunín afirma que el Estado es el creador del capital, que el capitalista posee su capital únicamente por obra y gracia del Estado. Y puesto que el Estado es, por lo tanto, el mal principal, hay que acabar ante todo con él, y entonces el capital hincará el pico por sí solo. Nosotros, en cambio, sostenemos lo contrario: acabad con el capitalismo, que es la concentración de todos los medios de producción de unos pocos, y el Estado se derrumbará por sí solo.

Actualmente, el anarquismo tiene escasa significación ideológica y social.

Capitalismo

Desde el punto de vista marxista, el capitalismo es el período histórico en el que se desarrolla el modo de producción capitalista. El concepto de capitalismo se refiere en general a toda la sociedad y, más que otros, ha tenido una difusión grande en la cultura no marxista y ha asumido diversas significaciones, que por lo general modifican y contradicen el concepto marxista, como "sociedad industrial", y "sociedad de consumo" o "economía de mercado". El marxismo interpreta el capitalismo desde el punto de vista del análisis científico del modo de producción capitalista, ya que según el concepto materialista de la historia, cada sociedad puede conocerse por lo que es él analizando sólo el fundamento real en que se desarrolla. El capitalismo es, por lo tanto, el resultado de un proceso histórico que ha determinado, por un lado, la constitución de una clase de propietarios de medios de producción y, por el otro, de una clase de "vendedores de fuerza de trabajo". El ulterior desarrollo del proceso de acumulación, el generalizarse y el extenderse de este "modo de producir", de la "libre competencia" entre los poseedores de mercancías y la consiguiente concentración de las riquezas en pocas manos, han modificado todas las relaciones sociales, influyendo y en cierto sentido determinando también las actividades de los hombres que están insertos en estas relaciones de producción.

Composición orgánica del capital

Según Marx, es "[...] la composición del valor del capital en cuanto está determinada por su composición técnica y en cuanto refleja las variaciones de ésta". La composición del valor del capital es la proporción entre capital constante (valor de los medios de producción) y capital variable (valor de la fuerza de trabajo, suma total de los salarios). La composición orgánica es la relación entre la masa de los medios de producción utilizados y la cantidad de trabajo necesaria para su uso. La composición técnica está en estrecha relación con el proceso material de producción en el que el capital está empleado, y la relación que la expresa aumenta proporcionalmente al desarrollo de las técnicas de producción. Marx analizó uno de los fenómenos característicos del modo de producción capitalista, el uso de maquinarias cada vez más costosas y refinadas y la tendencia a la utilización de una menor cantidad de fuerza de trabajo para producir la misma cantidad de mercancías, en relación al índice de beneficio del capital, que está estrechamente ligado a la composición orgánica.

Conciencia de clase

El concepto está relacionado con la noción de clase y lucha de clase, debido a la centralidad del nexo teoría-praxis en el pensamiento marxista y su desarrollo posterior. Los elementos que contribuyen a la formación de una clase, primero la situación económica como dato de la clase en sí, luego la organización política y el conocimiento de la propia función histórica, como datos de la *clase per se,* pueden ser puestos en relación con fases formativas de la conciencia de clase, lo que no indica un desarrollo gradual de ésta en el tiempo, aunque algunas veces esto puede suceder, sino el modo de colocarse la conciencia en la historia. Ni por otro lado esta conciencia es reducible al simple dato de una psicología colectiva; no se trata, en el caso del proletariado, de la suma de las ideas que cada uno de los trabajadores desarrollan sobre sus condiciones específicas, sino del conocimiento que el contraste de intereses en el plano económico y, por lo tanto, en el plano social, es lucha política, lucha de clases organizada por la presión de las actuales relaciones de dominio. Según Lenin, la conciencia política socialista no puede ser conseguida directamente por la clase obrera, sino que se desarrolla con la aportación de la teoría revolución (el marxismo). El intermediario entre la teoría y el movimiento es el partido.

Contrarrevolución

Es toda actividad que tiende a sofocar un proceso revolucionario. La experiencia histórica y política indica cómo la lucha de la clase obrera y el avance del proceso revolucionario siempre están acompañados de avances opuestos por parte de la burguesía y de las fuerzas reaccionarias. Particularmente en aquellos países donde la lucha por el socialismo ha llevado a la clase obrera al poder, las tentativas contrarrevolucionarias operadas por los sectores de la vencida burguesía y de las fuerzas imperialistas constituyen la más grave amenaza, como ya indicó Lenin, para la construcción del socialismo y para el desarrollo de una democracia proletaria real. La enseñanza de que en el socialismo continúan existiendo las clases y la lucha de clases, y que de ello deriva la necesidad de promover la lucha de clases, en cada campo y dentro del mismo partido, individualizando las nuevas formas a través de las cuales se desarrolla, constituye la más válida indicación para la derrota de cada amenaza contrarrevolucionaria. Un ejemplo histórico de tentativE. contrarrevolucionaria es el realizado en Rusia en 1917, a través de la guerra civil durante varios años, como también el golpe de Estado contra el gobierno popular de Allende en Chile en 1973.

Dialéctica

El significado de este término en el marxismo se relaciona directamente con el que el filósofo Hegel le atribuyó definiéndolo sintéticamente como el "espíritu de contradicción organizado". Con esta concisa síntesis del propio modo de entender la dialéctica, Hegel quería subrayar sobre todo la conciencia de la multitud de contradicciones y su incesante movimiento que anima a una realidad en perenne transformación. De esta manera la dialéctica parece tanto el modo de ser de la realidad como una exigencia del pensamiento que quiera comprenderla adecuadamente. Es el concepto de la realidad el que Hegel profesó dentro de una filosofía idealista que constituyó el límite de su procedimiento dialéctico y la necesidad por parte de Marx y de Engels de superarlo. Marx dice que en él, la dialéctica es invertida, puesta de cabeza: era necesario ponerla en pie para liberar el núcleo nacional del revestimiento místico; era necesario, en otras palabras, pasar de una dialéctica idealista a una dialéctica materialista.

Democracia

Este sistema de gobierno ha tenido y tiene distintos significados, según la época de que se trate. Desde la Grecia antigua, donde la ciudadanía correspondía a una pequeña parte de la población, toda vez que no regía para los esclavos, hasta la época moderna, en que su nuevo significado tiene su origen en la Revolución francesa, en la que se amplía la ciudadanía progresivamente hasta llegar al sufragio universal. Es la democracia burguesa, que ha sido la primera realización histórica de la libertad política y de la igualdad jurídica entre los hombres. No obstante, la burguesía , una vez en el poder, impidió la realización completa de dichos principios por ser ellos incompatibles con sus propios intereses. Con todo, la democracia presenta para el proletariado algunas ventajas, toda vez que afirma las libertades políticas que permiten su propio desarrollo, al tiempo que pone en evidencia sus contradicciones con el dominio de la clase dominante, pasando la libertad a tener para la gran mayoría de los ciudadanos un carácter puramente formal. La democracia real y completa para todos los ciudadanos se podrá tener en la sociedad comunista, cuando no exista ya la explotación y la opresión de clase.

Estado

Es la institución jurídico-política surgida, de acuerdo a la concepción materialista de la historia, para el control de los antagonismos de clases que se presente como instrumento de poder de la clase dominante, de la que es expresión. Tal es el papel que desempeñó el Estado antiguo con el fin de someter a los campesinos o siervos y el Estado moderno representativo para explotar a los trabajadores asalariados. Esta institución se constituyó con la aparición de la propiedad privada y de las clases y su forma sigue la evolución de las relaciones de producción, por lo que sólo dejará de existir en la sociedad comunista, es decir, cuando la estructura económico-social en que se basa sea eliminada. En la actual sociedad capitalista, el Estado tiende cada vez más a afirmarse como una entidad destacada y superpuesta a aquélla y a acentuar su carácter de una máquina opresiva, fuertemente centralizado.

Estrategia y táctica

Estos términos tan usados en la lucha revolucionaria han sido extraídos del lenguaje militar e indican las formas a través de las que se realiza la dirección global de la lucha de clases. En este sentido, son elementos vitales para la estrategia y la táctica el análisis de las condiciones históricas en todos sus aspectos y de las posibilidades de acción del proletariado frente a ellas, la agitación de los problemas y de los objetivos y la propaganda de la línea del partido con el fin de unir a ello, a través de la defensa y la lucha por sus reivindicaciones, a las masas de trabajadores. La estrategia determina, en una fase histórica dada, la dirección del objetivo principal del proletariado, es decir fija, la prospectiva general y el relativo plan global de la disposición de las fuerzas. Por lo tanto, es relativa a toda una época histórica, de la que traza la tendencia y las evoluciones en sentido revolucionario. La táctica, en cambio, tiene por objeto la línea de acción en las distintas situaciones concretas que se pueden presentar. La dirección táctica tiene por función poner en primer plano aquellos objetivos intermedios de lucha, aquellas fórmulas organizativas, aquella política de alianzas que mejor responden a las condiciones concretas de la lucha de clases, a la determinada manera con que una tendencia general se realiza en los distintos países, en los distintos períodos, dentro de los diferentes estratos sociales.

Fuerzas productivas

Este concepto comprende a todos los elementos necesarios en el proceso de producción: los medios de producción, la investigación científica y el avance tecnológico que mejoran sus cualidades y usos, la organización del trabajo en la fábrica y en cada uno de los sectores productivos, y naturalmente la fuerza de trabajo, sin la cual no se tendría ninguna producción. Entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción existen interferencias recíprocas de gran complejidad y de decisiva importancia. Sin embargo, en el curso de su desarrollo las primeras determinan nuevas situaciones fuera de su campo específico que pueden concernir en gran medida a las relaciones de producción hasta el punto de disponerse antagónicamente respecto a aquéllas.

Hegemonía

Esta expresión denota la función ejercida por la clase o grupo social que es, o puede convertirse en el núcleo dirigente de toda una sociedad. Ella se manifiesta como capacidad de orientación y de aglutinamiento de otros grupos sociales, que desarrollan papeles no tan decisivos dentro de las relaciones de producción. Además, como dirección política, intelectual y moral en amplios sectores que no pertenecen al grupo social hegemónico en estricto sentido. Sin embargo, aún siendo un fenómeno de dirección esencialmente cultural y moral, una "valorización del hecho cultural", las capacidades hegemónicas de un grupo social son una emanación orgánica de necesidades económicas. El problema de la hegemonía está estrechamente ligado al del "bloque histórico", es decir, al problema de la transformación del grupo subordinado en dominante.

Liberalismo

El pensamiento liberal es la expresión política y cultural de la lucha llevada a cabo por la burguesía contra los residuos económicos y sociales del feudalismo y el absolutismo monárquico. Por tanto, expresa en el campo de las relaciones políticas y de la concepción del Estado, los principios del libre cambio económico y de la libre competencia sobre la base de los valores de la libertad individual en las relaciones entre el Estado y el ciudadano y entre las diversas fuerzas que concurren en

el conjunto de las actividades de gobierno. Esta concepción, que reivindicó un Estado constitucional regido por un sistema parlamentario, para asegurar el desarrollo de las exigencias productivas y comerciales de la naciente sociedad burguesa, experimentó un cambio sustancial con el transcurso del tiempo. Con la crisis de la libre competencia y la transformación de la economía capitalista en el sentido monopólico e imperialista, el patrimonio progresista del liberalismo fue abandonado, asumiendo posiciones autoritarias, hasta el fascismo, fase que coincide con el desarrollo del movimiento obrero. En el caso de América Latina ha apoyado las dictaduras militares.

Modo de producción

Toda formación social puede ser comprendida en sus esenciales características sólo si se analizan los presupuestos materiales sobre los que se desarrolla. En este sentido, el modo de producción de los bienes materiales, el modo con que se obtienen los medios de subsistencia necesarios al hombre para reproducir sus propias condiciones de vida, constituye para el marxismo la fuerza principal que determina los caracteres de una sociedad, su desarrollo, las condiciones y los modos del paso de una formación económico-social a otra. Este aspecto material del paso de la vida humana es el que condiciona a todos los otros indicando en el desarrollo de la producción material la base para la transformación del pensamiento y de sus productos. Desde este punto de vista la historia del desarrollo de la soc edad se convierte en la historia del desarrollo de la producción y en particular la historia de los modos de producción, cuyos cambios son condición para el cambio del régimen social y de las instituciones políticas correspondientes. Este movimiento es determinado por la contradicción fundamental entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que tomadas en su relación completa forman la estructura de un modo de producción. Si el estado de las fuerzas productivas indica con qué instrumentos de producción los hombres producen los bienes materiales que necesitan, el tipo de relaciones de producción determina la posesión de los medios de producción y en particular su carácter colectivo o privado. En base a este análisis, Marx determinó, a partir del examen histórico del modo de producción capitalista, las principales formas económicas que lo habían precedido.

Plusvalía

Este concepto corresponde al valor de la fuerza de trabajo no retribuida de la que se apropia el capitalista en el proceso de producción. La fuerza de trabajo que el obrero y el empleado venden como mercancía tiene la característica de producir valor, pero el valor de la fuerza de trabajo está determinada esencialmente por la cantidad de trabajo necesario para su conservación y reproducción, además de otros factores que dependen de las situaciones históricas concretas. Si este valor se reproduce, por ejemplo, en cuatro horas de trabajo diario, pero el empleo de la fuerza de trabajo se prolonga por un total de ocho horas al día, se tendrán cuatro horas de plusvalía, que se traducen en una mayor cantidad de producto (plusproducto o superproducto) y por lo tanto en plusvalía. Ésta es entonces el valor del plustrabajo, es decir, del trabajo realizado de más por el trabajador además del que corresponde al valor del salario. La distinción entre capital constante y capital variable permite calcular el índice de plusvalía y, además, permite comprender mejor lo que es la jornada laboral. De hecho es sobre su duración y la intensidad de su explotación que se ejerce concretamente el poder político del capitalismo a través del Estado, es decir, mediante la legislación del trabajo.

Praxis *o práctica*

Esta expresión denota la actividad material de transformación de la realidad, como separada de la actividad intelectual y particularmente de la teoría. Marx desarrolló una concepción de las relaciones que median entre *praxis* y teoría y de la función de la *praxis.* Según su análisis, el origen de la separación entre actividad manual, práctica, y actividad intelectual, teórica, hay que buscar no exclusivamente en una diferencia natural entre estos dos aspectos de la actividad humana, sino en el proceso histórico que, a través de la división del trabajo, ha profundizado la distinción entre el papel de la teoría y aquél, opuesto, de la *praxis,* que así aparece privado de cualquier función de conocimiento. En la sociedad capitalista esta separación se presenta en su profundización máxima. *Praxis* es sólo apropiación y transformación de los objetos materiales y teoría es sólo comprensión y razonamiento; la teoría parece tener en si misma su plenitud y origen, y la *praxis* aparentemente no tiene ninguna relación con ella. La concepción materialista y dialéctica de la *praxis* y de su función tiene origen en la negación de esta separación abstracta y esquemática, y afirma la necesidad histórica de una reunificación de *praxis* y teoría, sea tanto co-

mo actividad humana en general que como trabajo manual y comprensión teórica. Esta concepción de la práctica asume como fundamento la realidad material e histórica en que los hombres están insertos.

Relaciones de producción

Estas encuentran su expresión jurídica en las relaciones de propiedad. Por ejemplo, a las relaciones capitalistas de producción corresponde la propiedad privada de los medios de producción y de las "condiciones de trabajo". Sin embargo, las relaciones de producción son esencialmente relaciones sociales, esto es, que por un lado condicionan a toda la sociedad en que son "relaciones dominantes" y, por el otro, están influidas a su vez, en distinta medida, por todas las otras manifestaciones de la vida social, comprendidas las que Marx llama superestructuras j urídicas, políticas, morales, etcétera. Según la concepción materialista de la historia, las distintas épocas o fases de desarrollo de la humanidad deben analizarse estudiando la relación que media entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción correspondientes. De hecho, de la única manera en que puede realizarse concretamente el trabajo y, por lo tanto, el "cambio orgánico entre el hombre y la naturaleza" consiste en el hecho de que el trabajo mismo se lleva a cabo dentro de determinadas relaciones de producción y de una división social (del trabajo). Sin embargo, según Marx, en determinadas condiciones históricas "estas relaciones de formas de desarrollo de las fuerzas productivas se convierten en sus cadenas: entonces aparece una época de revolución social".

Socialismo

Como el comunismo, también el socialismo ha sido teorizado muchas veces en distintas épocas. Las primeras teorías socialistas, elaboradas de manera relativamente orgánica y coherente, se remontan al siglo xvIII y sobre todo a los primeros decenios del siglo xix. De hecho, es sólo a partir de este período que el proletariado empieza a asumir las características de una clase autónoma, capaz de elaborar, a través de los intelectuales orgánicamente ligados a sus intereses, una nueva concepción de la sociedad y una verdadera doctrina del socialismo. Marx y Engels distinguieron entre el socialismo utópico y el socialismo científico. El primero, denominado también socialismo crítico-utópico, que precedió al marxismo, estuvo representado por

Saint-Simón, Fourier, Cabet y Owen. El segundo, formulado por aquéllos mismos, no está fundado sobre consideraciones de carácter exclusivamente moral e ideológico, sino que sobre la base del análisis de las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista, realizado en forma científica. El proletariado, y de manera particular la clase obrera, puede mediante su hegemonía generar las bases para la superación de la división en clases de la sociedad, para convertirse en clase dominante, abolir la propiedad privada de los medios de producción, suprimir también los antagonismos de clase y las clases en general y, por lo tanto, su propio dominio de clase.

Teoría

La teoría es entendida como cuerpo orgánico de conocimientos del desarrollo histórico, social y económico, a cuyo avance y difusión los marxistas le han atribuido siempre una importancia decisiva. De hecho es a la cualidad misma de su mecanismo teórico que el marxismo debe las diferencias sustanciales con otras teorías inspiradas con propósitos de justicia social, pero unilateralmente alejadas de la realidad, incapaces de suministrar explicaciones convincentes y sobre todo sin el conocimiento de la relación existente entre el momento teórico y la *praxis.* La crítica más áspera de la sociedad burguesa y de sus injusticias no explica por qué las cosas son así y no de otra manera, no dice nada sobre el modo en que funciona el capitalismo, no lleva a ningún conocimiento de los motivos de su aparición y de su consolidación. Esto sucedía con el socialismo premarxista. Sólo una teoría sólidamente anclada en la realidad podía apartar de la confusión y de la impotencia las fuerzas que gravitaban en torno a este "socialismo de invectivas". El abandono, tácito y declarado, del interés teórico corre paralelo a la renuncia de los principios esenciales del marxismo.

Utopía

La utopía, que quiere decir "que no está en ningún lugar" se considera de dos maneras en el marxismo, una negativa y otra positiva. La primera se refiere al rechazo de una corriente del pensamiento de Tomás Moro, contenido en su obra *De la mejor constitución de un Estado y de la nueva isla de Utopía* (1516), corriente que fue reproducida por diferentes ideólogos, como Fourier, Saint-Simón y otros. A este so-

cialismo critico-utópico, sin desconocer sus méritos, se opone el socialismo científico. El segundo modo de entender la utopía se funda en la consideración de una sociedad futura donde desaparecen las clases, la explotación del trabajo humano y del Estado. De aquí se afirma que la utopía, entendida como resultado lejano, pero no imaginario, como objetivo histórico general indicado por el conocimiento científico del desarrollo de la sociedad, tiene en el marxismo una función de estímulo a la actividad revolucionaria. Ernest Bloch, por ejemplo, ha llamado "utopía concreta" a la fuerza latente pero operante "de una realidad última que influye concretamente sobre la actual".

(Resumen basado en el *Diccionario de Términos Marxistas,* de E. Mascitelli, ed.)

El socialismo en Chile durante el siglo xx.
Experiencias de ayer para la construcción del futuro
se terminó de imprimir en junio de 2007.
Tiraje: mil ejemplares.